

# UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE DERECHO  
Departamento de Derecho Penal



## TESIS DOCTORAL

**El ruido: morfología medioambiental desde una perspectiva penal y  
criminológica**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

PRESENTADA POR

**Ascensión García Ruiz**

Directores

Antonio García-Pablos de Molina  
Fernando Santa Cecilia García

**Madrid, 2016**

**UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID**

**FACULTAD DE DERECHO**

**DEPARTAMENTO DE DERECHO PENAL**



**TESIS DOCTORAL**

**EL RUIDO –MORFOLOGÍA MEDIOAMBIENTAL DESDE UNA  
PERSPECTIVA PENAL Y CRIMINOLÓGICA**

DOCTORANDA

ASCENSIÓN GARCÍA RUIZ

DIRECTORES

ANTONIO GARCÍA-PABLOS DE MOLINA

FERNANDO SANTA CECILIA GARCÍA

**Madrid, julio 2015**



A mi padre

A Ruth

*In memoriam*

*And I keep on, `cause I can't sleep at night*

*Until the daylight comes through*

*And I just, and I just, have to sing*

*Sing my hymns to the silence*

(VAN MORRISON)



# ÍNDICE

<b>MEMORANDUM TO OBTAIN THE TITLE OF PhD .....</b>	<b>5</b>
<b>MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR.....</b>	<b>19</b>
<b>ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS Y SÍMBOLOS .....</b>	<b>25</b>
 <b>PRIMERA PARTE .....</b>	 <b>33</b>
 <b>I.- PRECEDENTES HISTÓRICOS DEL MEDIO AMBIENTE .....</b>	 <b>35</b>
1.- Griegos y Romanos ante el fenómeno medio ambiental.....	35
1.1.- Ecología y antigüedad clásica .....	35
1.1.1.- Etimología.....	35
1.1.2.- El ruido como molestia específica y preocupación cívica en el Imperio Romano .....	44
 <b>II.- ECOLOGÍA Y EDAD MEDIA. PERIODO CARENTE DE EVOLUCIÓN EN CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES.....</b>	 <b>55</b>
2.- El papel del ruido en el Derecho medieval español.....	60
 <b>III.- CONCEPTO MEDIOAMBIENTAL DE “RUIDO”: EVOLUCIÓN, CONEXIONES Y DIFERENCIAS CON OTRAS ESTRUCTURAS AMBIENTALES .....</b>	 <b>67</b>
3.1.- Acepciones y definiciones de “ruido” .....	67
3.2.- Características intrínsecas del subconcepto “ruido” y diferencias relevantes con otras formas contaminantes .....	71
3.3.- Elementos subjetivos y objetivos del “ruido” .....	96
3.4.- La contaminación lumínica y el paisaje como segmentos complementarios de la protección contra el ruido. Argumentos a favor de su integración.....	109
 <b>IV.- TRAYECTORIA JURÍDICO-PENAL DEL RUIDO E INFLUENCIA DE OTRAS JURISDICCIONES.....</b>	 <b>133</b>
4.1.- Formulación en los diferentes Códigos Penales de España .....	133
4.1.1.- Modificación del sistema de faltas y derogación del Libro III. Breve alusión a la serie de faltas aplicables al “ruido” .....	140

4.1.1.1.- Antecedentes .....	140
4.1.1.2.- Sistema de faltas vigente en relación a conductas ruidosas hasta el Proyecto de Reforma de 2012 .....	141
4.1.1.3.- La definitiva supresión del Libro III y su incidencia en la regulación penal del ruido .....	143
4.2.- Hacia una nueva concepción pluridireccional y multidisciplinar de la materia.....	146
4.2.1.- La determinante experiencia del “ruido” en el contexto europeo: posicionamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos .....	146
4.2.2.- Recepción de la doctrina europea por el Tribunal Constitucional .....	152
4.2.3.- Pronunciamientos del Tribunal Supremo en el orden penal .....	157
4.2.4.- Posiciones del Tribunal Supremo en el orden de lo contencioso-administrativo.....	161
4.3.- Repercusión de las últimas reformas del Código Penal en materia de medio ambiente.....	164
4.3.1.- Incidencia de la LO 5/2010, de 22 de junio en la regulación de los delitos medioambientales; la esperada apertura a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.....	166
4.3.2.- La transformadora reforma de 2015 y su inacción para la equívoca figura del ruido como delito ecológico .....	171
4.3.2.1.- Excurso: el delito ecológico en su modalidad de “ruido” como núcleo de responsabilidad penal en las personas jurídicas .....	179
<b>SEGUNDA PARTE.....</b>	<b>207</b>
<b>I.- NATURALEZA DEL BIEN JURÍDICO MEDIO AMBIENTE .....</b>	<b>209</b>
1.- Modernos paradigmas ambientales y su implicación en la teoría del bien jurídico .....	209
1.1.- Introducción.....	209
1.2.- Los llamados derechos emergentes de carácter colectivo .....	211
1.2.1.- Las ONGs internacionales de ámbito ecológico y su aportación al sistema jurídico ambiental.....	213
1.2.2.- Una sucinta muestra sobre la capacidad de participación pública no organizada relacionada con objetivos ambientales .....	222
1.2.3.- Repercusión de la figura asociativa en el contexto del ruido.....	225
1.3.- Especial consideración del neo-constitucionalismo biocéntrico en Derecho comparado latinoamericano: Ecuador y Bolivia .....	229

1.3.1.- El modelo Ecuatoriano .....	230
1.3.2.- El modelo Boliviano .....	233
<b>II.- SINGULARIDAD DEL BIEN JURÍDICO MEDIO AMBIENTE .....</b>	<b>237</b>
2.1.- Introducción.....	237
2.2.- Interpretaciones de la justificación del objeto de protección: ¿principios o bien jurídico protegido?.....	240
2.3.- Postulados del antropocentrismo radical y moderado frente al progresivo concepto holístico del bien jurídico medio ambiente .....	252
2.4.- Concepción ecocéntrica y biocéntrica del bien jurídico medio ambiente ....	263
2.4.1.- Premisas holísticas de la teoría de Paul Taylor: el valor inherente ..	278
2.4.2.- ¿Aplicación en materia acústica?.....	281
2.4.2.1.- Efectos del ruido antropogénico en otras especies animales y vegetales .....	283
2.5.- Alcance penal de la figura de la acumulación en conductas contaminantes genéricas vs. concretas emisiones de ruido.....	289
2.6.- Recapitulación de los apartados I y II .....	298
<b>III.- CONFIGURACIÓN DEL BIEN JURÍDICO MEDIO AMBIENTE EN EL ART. 45 CE .....</b>	<b>301</b>
3.1.- Introducción.....	301
3.2.- El mandato constitucional: binomio derecho-deber .....	305
3.2.1.- ¿Procede aplicar la cláusula <i>todos</i> a una exégesis del sistema holístico natural? .....	314
3.3.- Problemática de la distribución de competencias entre Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales.....	317
3.3.1.- El controvertido papel de las corporaciones locales en la protección medioambiental .....	325
3.3.1.1.- Diversidad de policías ambientales y sus limitaciones en la aportación de prueba sobre emisiones ruidosas en el ámbito local ..	332
<b>IV.- MEDIO AMBIENTE Y CRIMINOLOGÍA .....</b>	<b>337</b>
4.1.- <i>Green Criminology</i> : presupuestos de la Teoría criminológica medioambiental.....	337
4.2.- Tratamiento del delito, víctima y procesos de victimización en la criminología del Medio Ambiente: <i>Green Victimology</i> .....	343



4.2.1.- Valoración de los procesos de victimización relacionados con el ruido.....	350
4.3.- Omisión del rol del ruido como materia de estudio específica en la disciplina criminológica .....	355
<b>V.- DERECHO A LA CIUDAD Y DERECHO EN LA CIUDAD.....</b>	<b>357</b>
5.1.- Impronta del “ruido” como elemento en ambas facetas del mismo derecho.....	358
5.1.1.- Derecho al silencio y Derecho al ruido. Incidencia del turismo y otros factores de carácter cultural, económico y regulatorio.....	365
5.1.2.- El ruido como fundamento de la reordenación urbana en el modelo de ecópolis .....	370
5.2.- Las ciudades europeas y el déficit de uniformidad de los criterios ambientales aplicados el ámbito del ruido.....	375
5.2.1.- <i>Green Cultural Criminology</i> y su aplicación al fenómeno del ruido ciudadano: una inexplorada ruta de acción y un fresco enfoque inclusivo...	382
5.2.2.- Estudio de caso descriptivo: impacto acústico ambiental de la tamborrada en la ciudad de Hellín .....	387
5.2.2.1.- Introducción y genealogía.....	388
5.2.2.2.- Informe preliminar y metodología.....	390
5.2.2.3.- Gráficos y conclusión del caso.....	392
<b>VI.- EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO POR EL ART. 325 CP .....</b>	<b>397</b>
6.1.- Sistemática de la protección otorgada al medio ambiente: estructura opuesta a una interpretación holística .....	397
6.2.- Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente .....	403
6.2.1.- El tipo autónomo y de resultado del art. 330: un caso de <i>rara avis</i> en la estructura general de los delitos de peligro abstracto .....	410
6.3.- Evolución de las posiciones en la doctrina penal española en relación a la naturaleza jurídica del medio ambiente .....	415
6.3.1.- Propuestas en la configuración de su protección jurídico-pública conexas a la emisión de ruidos .....	416
6.3.1.1.- Particular atención al ruido en el tipo consagrado al delito ecológico .....	422
6.3.2.- Excurso: el eterno dilema “sanciones administrativas frente a sanciones penales” en materia medioambiental.....	424
6.3.3.- Sobre la cuestión, una muestra en Derecho comparado continental.....	434
a) Alemania.....	434

b) Italia.....	438
c) Francia .....	440
6.3.3.1.- El ruido en el modelo anglosajón del Reino Unido .....	443
6.3.4.- ¿Necesidad o carácter simbólico de la ampliación de delitos y penas medioambientales frente al diseño de infracciones y sanciones administrativas y su efectiva aplicación en materia de ruido?.....	446
6.3.5.- El oscuro tránsito de la infracción administrativa muy grave al ilícito penal por emisión de ruidos: el requisito de “gravedad” .....	450
6.3.6.- Excurso: el carácter ambivalente del ruido como circunstancia modificativa o eximente de la responsabilidad criminal .....	459
<b>VII.- TOMA DE POSTURA .....</b>	<b>471</b>
<b>CONCLUSIONES.....</b>	<b>477</b>
<b>CONCLUSIONS.....</b>	<b>493</b>
<b>EPÍLOGO .....</b>	<b>507</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA.....</b>	<b>509</b>
<b>ANEXO 1. LEGISLACIÓN ABREVIADA.....</b>	<b>585</b>
<b>ANEXO 2. JURISPRUDENCIA.....</b>	<b>591</b>
<b>ANEXO 3. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL.....</b>	<b>603</b>
<b>ANEXO 4. RECURSOS ELECTRÓNICOS DESTACADOS .....</b>	<b>609</b>
<b>ANEXO 5. DETALLE DE VALORES DE LAS MEDICIONES.....</b>	<b>615</b>



## **MEMORANDUM TO OBTAIN THE TITLE OF PhD**

**TITLE: NOISE –ITS ENVIRONMENTAL MORPHOLOGY FROM A  
PENAL AND CRIMINOLOGICAL PERSPECTIVE**



**THIS THESIS HAS BEEN DIRECTED BY ANTONIO GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, PROFESSOR OF CRIMINAL LAW AND DIRECTOR OF THE INSTITUTE OF CRIMINOLOGY AT THE COMPLUTENSE UNIVERSITY OF MADRID, AND CO-DIRECTED BY FERNANDO SANTA CECILIA GARCÍA, CONTRACTED LECTURER OF CRIMINAL LAW AT THE COMPLUTENSE UNIVERSITY OF MADRID.**

**PHD CANDIDATE: ASCENSIÓN GARCÍA RUIZ**

**DEPARTMENT OF CRIMINAL LAW. FACULTY OF LAW**

**COMPLUTENSE UNIVERSITY OF MADRID**

**AVDA. COMPLUTENSE S/N 28040 MADRID (SPAIN)**

**CONTACT: [ascensiongarcia@ucm.es](mailto:ascensiongarcia@ucm.es)**

**Madrid, July 2015**

## **PREFACE AND PURPOSES**

Nowadays, the polluter effect of noise increasingly holds the attention of numerous regulations, mass media, citizen associations, environmental organizations, sociologists, politicians and lawyers. Nonetheless, none of them firmly believe that noise is in a similar condition to impair the environment with regard to other pollution forms.

The objectives of this work are to unearth an interconnection between the matter of noise and its possible implications to the environment and establish performance criteria in the field of study of the current criminal law.

Most countries in the world share the same standards in relation to environmental protection in general, whereas the theme of noise displays a wide range of factors which restrict this global interpretation. Indeed, the different countries in their respective cultures, societies, lifestyles and laws determine these deeply unorthodox standpoints.

## **METHODOLOGY**

The original thesis is written in Spanish and consists of approximately 500 pages and further 1,000 footnotes. It contains quotations and up-to-date bibliography from national and international handbooks, scientific papers, journals, databases, including numerous official reports, archives, extended jurisprudence dictated by the Spanish Courts on the matter as well as the European and International Courts. The text has been updated regarding the following recent amendments of the Spanish Penal Code: concerning criminal environmental liability of legal entities enacted in 2010 and the modification of 2015 with regard to art. 325 -the so-called basic environmental crime along with several connected issues to the environmental regulation.

## TABLE OF CONTENTS

<b>MEMORANDUM TO OBTAIN THE TITLE OF PhD.....</b>	<b>5</b>
<b>MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR.....</b>	<b>19</b>
<b>ABBREVIATIONS, ACRONYMS AND SYMBOLS.....</b>	<b>25</b>
 <b>PART ONE .....</b>	 <b>33</b>
 <b>I.- THE HISTORICAL PRECEDENTS OF THE ENVIRONMENT .....</b>	 <b>35</b>
1.- The Greeks` and Romans` perception of the environment.....	35
1.1.- The Ecology of Classical Antiquity .....	35
1.1.1.- The etymology of noise.....	35
1.1.2.- Noise as a specific nuisance and civic concern in the Roman Empire .....	44
 <b>II.- ECOLOGY AND THE MIDDLE AGES. A SCANT ERA REGARDING MODIFICATION OF ENVIRONMENTAL CRITERIA.....</b>	 <b>55</b>
2.- The role of noise in medieval Spanish law .....	60
 <b>III.- THE ENVIRONMENTAL CONCEPT OF ‘NOISE’: EVOLUTION, CONNECTIONS AND DIFFERENCES WITH OTHER ENVIRONMENTAL STRUCTURES.....</b>	 <b>67</b>
3.1.- Meanings and definitions of ‘noise’ .....	67
3.2.- The intrinsic features of the subconcept of noise and significant differences with other polluting forms .....	71
3.3.- Subjective and objective constituents of noise.....	96
3.4.- Light pollution and landscape as complementary segments of noise protection. Arguments on behalf of their integration .....	109
 <b>IV.- THE LEGAL-CRIMINAL PATH OF NOISE AND THE SWAY OF OTHER JURISDICTIONS.....</b>	 <b>133</b>
4.1.- Formulation by the latest versions of the Spanish Criminal Code .....	133
4.1.1.- The modification of the offence system and repeal of the third part. A brief to the series of criminal offences enforced on noise.....	140

4.1.1.1.- Precedents .....	140
4.1.1.2.- The existing offence system related to noisy behaviour until the Reform Project 2012.....	141
4.1.1.3.- The definitive elimination of the third part and its impact on the criminal regulation of noise .....	143
4.2.- Towards a new multi-directional and multi-disciplinary conception of the matter .....	146
4.2.1.- The decisive experience of ‘noise’ in the European context: standpoint of the European Court of Human Rights .....	146
4.2.2.- The espousal of the European doctrine by the Spanish Constitutional Court.....	152
4.2.3.- Pronouncements of the Spanish Supreme Court in the criminal jurisdiction.....	157
4.2.4.- Positions of the Spanish Supreme Court in the administrative contentious jurisdiction .....	161
4.3.- Repercussion of the latest reformations of the Penal Code regarding the environment.....	164
4.3.1.- Influence of the Organic Act 5/2010 of June 22 <sup>nd</sup> upon the environmental offences on noise regulation and the expected advent of the criminal liability of legal persons .....	166
4.3.2.- The metamorphic ammendment of the Organic Act 1/2015 of March 30 <sup>th</sup> and its ineffectiveness concerning the equivocal role of noise as ecological crime .....	171
4.3.2.1.- Excursus: the noise modality of environmental crime as the core of criminal liability of legal entities.....	179
<b>PART TWO .....</b>	<b>207</b>
<b>I.- THE NATURE OF ENVIRONMENTAL PROTECTED LEGAL RIGHT .....</b>	<b>209</b>
<b>1.- Modern environmental paradigms and their connections to the legal right theory. 209</b>	
1.1.- Preface.....	209
1.2.- The so-called emerging ‘collective rights’ .....	211
1.2.1.- International NGOs of the ecological movement and their contribution to the environmental legal system.....	213
1.2.2.- A brief sample of the ability on non-organized public participation related to environmental objectives .....	222

1.2.3.- The civil associative outline and its repercussion in the context of noise.....	225
1.3.- Special consideration of the biocentric neo-constitutionalism in Latin American Comparative law: Ecuador and Bolivia .....	229
1.3.1.- The Ecuatorian model .....	230
1.3.2.- The Bolivian model.....	233
<b>II.- THE UNIQUENESS OF THE ENVIRONMENTAL PROTECTED LEGAL RIGHT.....</b>	<b>237</b>
2.1.- Preface.....	237
2.2.- Interpretations of the protective justification: principles instead of protected legal right?.....	240
2.3.- The postulates of the radical and moderate anthropocentrism vs. the progressive holistic concept of the environmental protected legal right .....	252
2.4.- The ecocentric and biocentric conceptions of the environmental protected legal right .....	263
2.4.1.- The holistic premise of Paul Taylor's theory: the inherent value ....	278
2.4.2.- Is it suitable for the acoustic issue? .....	281
2.4.2.1.- Effects of the anthropogenic noise in animal and plant species .....	283
2.5.- The scope of the role of the accumulation pollutant figure from a general point of view vs. noise emission behaviours in particular .....	289
2.6.- A recap of the previous epigraphs I and II.....	298
<b>III.- THE FRAMEWORK OF THE ENVIRONMENTAL PROTECTED LEGAL RIGHT IN ARTICLE 45 OF THE SPANISH CONSTITUTION .....</b>	<b>301</b>
3.1.- Preface.....	301
3.2.- The constitutional commandment: the right-duty binomial .....	305
3.2.1.- Is the establishment of the general clause -everybody appropriate for a holistic system exegesis?.....	314
3.3.- Several problems related to the distribution of competences between the Spanish State, the Autonomous Communities and the Local Governments.....	317
3.3.1.- The controversial role of the local authorities concerning environmental protection .....	325



3.3.1.1.- The diversity of environmental police forces and their limitations to provide evidences in the municipal areas .....	332
<b>IV.- THE ENVIRONMENT AND CRIMINOLOGY.....</b>	<b>337</b>
4.1.- Green Criminology: the main basis of the environmental criminology theory .....	337
4.2.- Green Victimology: treatment of crimes, victims and the victimisation process in environmental criminology.....	343
4.2.1.- Assessment of the victimisation processes related to noise.....	350
4.3.- The absence of the theme of noise pollution as a specific matter of study by the criminological discipline.....	355
<b>V.- THE RIGHT TO THE CITY AND THE RIGHT IN THE CITY .....</b>	<b>357</b>
5.1.- The trace of noise as an element in both facets of the same right .....	358
5.1.1.- The right to silence and the right to noise: repercussion of tourism and other cultural, economic and regulatory factors .....	365
5.1.2.- Noise as the foundation of the urban renewal by the Ecopolis model	370
5.2.- European cities and the shortage of uniformity in the environmental standards applied to the topic of noise .....	375
5.2.1.- Green Cultural Criminology and its application to the citizen noise phenomenon: an unexplored action path and a refreshing conciliatory focus .....	382
5.2.2.- A descriptive case study: the impact of environmental noise of the drums festival throughout the Holy Week in the town of Hellín .....	387
5.2.2.1.- Introduction and genealogy.....	388
5.2.2.2.- Preliminary report and methodology .....	390
5.2.2.3.- Graphics and conclusion of the case.....	392
<b>VI.- THE PROTECTED LEGAL RIGHT BY ART. 325 OF THE SPANISH PENAL CODE .....</b>	<b>397</b>
6.1.- Systematization of the protection granted to the environment: a structure in opposition to the holistic interpretation.....	397
6.2.- Crimes against the environment and natural resources.....	403
6.2.1.- The standalone resulting type of art. 330: A <i>rara avis</i> case within the general structure of abstract dangerous crimes .....	410

6.3.- Evolution and positions of the Spanish criminal doctrine regarding the legal nature of the environment .....	415
6.3.1.- An advance proposal of setting up its legal-public protection connected to the noise emissions.....	416
6.3.1.1.- Particular attention to noise in the venerable ecological crime by the penal article.....	422
6.3.2.- Excursus: the eternal dilemma –administrative penalties instead of criminal sanctions on the environmental issue .....	424
6.3.3.- A fragment of continental comparative law: .....	434
a) Germany.....	434
b) Italy .....	438
c) France .....	440
6.3.3.1.- Noise: the Anglo-Saxon model of the United Kingdom ...	443
6.3.4.- Necessity or symbolism related to the extension of the environmental crimes? Imprisonment or design of infractions and administrative sanctions towards a high effectiveness implementation on noise?.....	446
6.3.5.- The obscure transition from the grievous administrative offence to the criminal law on noise emissions: the gravity requirement.....	450
6.3.6.- Excursus: the ambivalent character of noise as a circumstance that amends or exonerates criminal liability .....	459
 <b>VII.- MY STANDING ON THE MATTER.....</b>	<b>471</b>
 <b>CONCLUSIONES.....</b>	<b>477</b>
<b>CONCLUSIONS.....</b>	<b>493</b>
<b>EPILOGUE.....</b>	<b>507</b>
<b>BIBLIOGRAPHY .....</b>	<b>509</b>
<b>APPENDIX 1. ABRIDGED LEGISLATION.....</b>	<b>585</b>
<b>APPENDIX 2. CASE LAW .....</b>	<b>591</b>
<b>APPENDIX 3. ADDITIONAL DOCUMENTATION .....</b>	<b>603</b>
<b>APPENDIX 4. DATABASE .....</b>	<b>609</b>
<b>APPENDIX 5. DETAILED MEASUREMENT VALUES -CASE STUDY.....</b>	<b>615</b>

## SUMMARY OF THE THESIS

The theme of noise has always been present in the history of human beings in spite of until recently it has not been considered a polluter factor. What is more, to the survival of various civilizations the surrounding noises epitomized an important alerting signal through which they were able to plan ahead their reactions in the face of hypothetical or imminent attacks by wild animals, by their fellows, or the threat of any type of adverse weather conditions, and so on. On the other hand, from time immemorial in the first Greek and Roman cities, noise was likewise a significant factor of confrontation for citizen coexistence. In recent decades, noise has taken a prominent role in the public life of a country such as Spain. This topic is considered a subtype of the environmental crime, punishable under the art.325 -Spanish Criminal Code. In contrast, its legal interest is protected by many other countries such as Finland, inter alia, in a different trend, for instance, linking the noise phenomenon to the right to privacy.

In Spain, that regulation also constitutes a specific criminal statute, thus the municipal bylaws maintain a considerable relevance. In developing these regulations, the increased position of various civic associations affected in several neighborhoods of distinct cities is observed, which could be a possible path for their improvement. These actors, through their own experiences often assimilated as genuine victimization processes, propose several measures that, in many cases, could be taken into consideration by the legislator.

On the contrary, the characteristic activities of INGOs -International non-governmental organizations focused on the environment had never been interested in this phenomenon; therefore, there should be a new favourable approach for joint action, mainly through the pressure exerted on the development of environmental regulations, especially by the European Union. In addition, it must be born in mind that there are many sectors as well as rights closely related to the environment, for example, town planning, tourism, citizen security, the right to demonstrate, etc.

Therefore, victims may be affected to a greater or lesser extent by positions and actions taken. The activities carried out by the INGOs focused on the environment have resulted, in a lot of cases, unquestionable successes, particularly in the jurisdiction of the ECHR -European Court of Human Rights which is usually not reflected in its full extension by the jurisprudence of the Spanish Constitutional Court. Nevertheless, the Spanish Criminal Courts have recently dictated very severe and exemplary verdicts in relation to noise emissions, that are often not well understood by the rest of society because they simply do not fit the conditions for the application to other illustrations of environmental pollution, and of course for the stigma resulting from whichever criminal prosecution since there are additional possible solutions to solve conflicts that can fulfil those objectives in a more proper manner. Art. 325 of the Spanish Penal Code defines basic environmental crime as any breach of Acts or general legislation protecting the environment that directly or indirectly involves emissions, discharges, radiation, extractions, excavations, dumps, noises, vibrations, injections or landfills in the atmosphere, soil, subsoil, marine, inland or underground waters -even whether cross-boundary spaces are affected.

The imprisonment period estimated is from two to five years, but could be increased by the interaction of many other articles that belong to the same Chapter of the Penal Code. We should meditate on the fact that this prison term is similar to the imprisonment in the case of a serious reckless homicide –from one to four years according to the current Penal Code enacted in 2015.

This work aims to clarify the role of noise within the general structure of Spanish environmental crime. We wonder if the legislator should continue to maintain this particular issue as an environmental attack or whether it would be more appropriate to change its location pointing to other types of crime, for instance, bodily harm crimes, crimes against the right to domestic privacy, the right to rest, and so forth. If the first option is approved, the different types of official agencies should take into account the absence of homogenization within international context, even European Union rules, due to the fact that there are no valid decrees which run properly in this matter.

However, a practical development of these hopes comes up against the dynamic and elastic nature of city life as well as to the lack of precision in some regulations or an over-regulation in others cases, given that the use of public space is a substantial part of the two citizen's rights, that is, the right to the city and the right in the city. Apart from the disruptive noise, this matter affects especially the regulation of some subjects, i.e. landscape protection, environmental noise management, air pollution, light pollution, waste collection services or public transport services. It must be taken into account the conjunction between public and private interests as well as sociological and cultural factors, since the regulation on this topic is specifically affected by a constituent which is the free approval of sound standards by some individuals and at the same time the absence of obligation to accept them by others.

Another paradigm would be represented by the phenomenon of *botellón*<sup>1</sup> - youngsters meetings for drinking in the street at weekends that represents a habitual source of various type of pollution -noise, reek, dirt, as well as visual degradation of the landscape, especially fierce at weekends. In addition, this signifies a form of torment for most inhabitants who live in these affected areas and precisely in that period of weekend rest. They feel how these aggressions against their right to enjoy quietness and to delight in green or urbanized areas of their surroundings are constant.

A high social awareness of groups that threaten those rights would encourage some modifications of their behaviour patterns, without that being incompatible with the possibility of continuing to exercise their respective rights to the peaceful assembly and leisure in the context of the public space.

---

<sup>1</sup> “*botellón*” in the original Spanish.

Noise is a phenomenon particularly obvious regarding local areas. Municipal bylaws have a very outstanding position because they decide, through high technical standards, if a noise transmission above the permitted limits will become an administrative procedure or a criminal one, although these ordinances are subordinated for their development to the State Law, and this Act is less exhaustive and much more general.

In Spain, the main and general administrative statute on noise is the Noise Act 37/2003, of November 17<sup>th</sup> 2003. As if that were not enough, there are other many different regulations enacted by Autonomous Communities and City Councils. These administrative sanctions cannot involve imprisonment penalties, according to art. 25.3 of the Spanish Constitution.

Administrative infringements are classified as trivial, serious and very serious. If we consider that Spain has more than 8,000 local councils, depending on where someone lives the safeguard of the legal security for their respective inhabitants is problematic due to the lack of harmonization. Actually, it will be quite likely that most citizens are not aware of which kind of punishment they face, given that it will depend on the context in which the same behaviour takes place.

All of this not forgetting that in those rural areas with no specific municipal bylaws the corresponding law of the autonomous community of that zone shall be applicable. At the present time, Spain has 17 autonomous communities. We must also include the autonomous cities of Ceuta and Melilla, both located on the Mediterranean coast of the African continent.

On the other hand, animal and plant species rights are not covered by this wide range in which environmental crimes are set. The current scientific research on this matter claims the extreme importance that the high level emissions of noise have for other non-human species. Thus, the real goal might be unify the distinct effects of noise on human as well as non-human species and establish several action parameters from a legal outlook.

Although it seems the opposite, the truth is that it will be extremely difficult, almost impossible, to initiate any criminal procedure involving noise because it cannot be proved according to the State law in relation to the damage caused to animals or plants. Consequently, the first paragraph of Article 325 –Spanish Penal Code does not make much sense in this particular matter.

It is precisely why another part of this work focuses on the study of two constitutions of Latin America in which, for the first time in comparative law Nature is considered in its entirety. In these constitutional texts, environmental rights acquire the same status as human beings. Correlation to this is the analysis of the controversial theory suggested by Paul Taylor, who basically asserts that each component of Nature possesses an inherent or intrinsic value. Thus, the variation that occurs in relation to the legal interest protected in the environmental framework might affect the configuration for criminal offenses against the environment.

Unless we take another path, the first stage of new punishable subjects as legal entities -since the amendment of the Spanish Penal Code in 2010 will be totally ineffective if we are not be able to get effective laws in a global context because most of those activities incur enormous cross-border effects.

It is already clear enough –though some governments and official agencies claim the contrary that the projection of companies and multinationals activities in such sensitive areas as deforestation, climate change, marine pollution, water pollution, etc., is intense. Nowadays, this point is beyond any doubt as well as the fact that humans lead the destruction of the environment. Hence, we reaffirm the exclusive prevalence of human beings for such degradation of natural resources and the depletion of non-renewable resources.

All of this data leads me towards a deep consideration with regard to whether the noise factor is an element capable of contaminating in a similar way to the rest of polluter agents or not. If so, this should encourage an interesting and lively debate because it could change the figure of noise in the complex mesh surrounding global environmental protection.

Therefore, there are various options albeit quite compatible with an improvement of the rules that manage noise, mainly citizen noise. These include new criminological theories such as green criminology and particularly, the green cultural criminology approach. One of the basic reasons is because noise pollution holds a characteristic element which is the combination between its local production and the limitation of its propagation (at least regarding the atmosphere), and this represents the greatest distinction regarding the rest of forms of pollution.

Nonetheless, noise is also presided by another differentiating factor which is its enormous subjectivity and means that people can or cannot feel affected themselves depending on their respective ages, state of health, housing characteristics, working times, sleeping habits and a multiplicity of personal circumstances.

## RESULTS

In conclusion, the most relevant contributions and aspects reported by this thesis are the following:

- Presentation of the Green Criminology theory connected with noise pollution as well as the Green Cultural Criminology and the Green Victimology outlook. These perspectives are thoroughly tied in with the right in the city and the right to the city which seem similar although each of them involves very different rights and pretensions.
- An unprecedented scientific case study about the repercussion of the drum festival in a Spanish city in which the profusion of noise generated in the public agencies framework is also sufficiently demonstrated with respect to traffic noise or waste collecting services. This report was made possible by the cooperation of the following official authorities: Town Hall of Hellín, Department of Environment of the Town Hall of Hellín, and Local Police Headquarters of Hellín.



- The incorporation of studies in relation to the effects of anthropogenic noise on animals and plants specially focused on maritime pollution caused by the increase in ship traffic which is interconnected with Western lifestyles and consumer goods.
- The nexus between noise pollution and light pollution, not forgetting that noise possesses a strong capacity for the modification of landscape in the same manner concerning rural and urban landscapes.
- The hypothesis of the ambivalent character of noise regarding those circumstances that could amend or exonerate criminal liability for those who commit whatever crime as a direct response to the stimulus of the noise infringement suffered for a prolonged period of time or recurrently.
- Last but not least, several proposals of lege ferenda which aim to discover new alternatives for the distinct legal solutions without resorting to criminal law, whose basic principles, that is -minimal intervention, ultima ratio and subsidiarity- are depleted at present.

## **MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR**

### **INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS**

El fenómeno del ruido ha estado presente de manera invariable en la historia de los seres humanos, a pesar de que hasta tiempos muy recientes no ha sido considerado un factor contaminante. Es más, para la supervivencia de varias civilizaciones los ruidos circundantes personificaron una importante señal de alerta a través de la cual fueron capaces de planificar el futuro de sus reacciones frente a ataques hipotéticos o inminentes de animales salvajes, por parte de sus semejantes, ante amenazas de cualquier tipo por condiciones meteorológicas adversas. Por otra parte, desde tiempos inmemoriales en las primeras ciudades griegas y romanas, el ruido también era un factor importante de confrontación para la convivencia ciudadana. En las últimas décadas, el ruido ostenta un destacado papel en la vida pública de un país como España. Forma parte del delito ambiental, punible con arreglo al art.325 del Código Penal. Por el contrario, su interés jurídico sufre una tendencia diferente en otros países, vinculando la emisión de ruidos al derecho a la intimidad. En España, su configuración de norma penal en blanco constituye una ley penal específica, por lo que las ordenanzas municipales mantienen una relevancia formidable.

En la actualidad, el efecto contaminador del ruido cuenta con una vigorosa presencia en medios de comunicación, asociaciones ciudadanas, organizaciones ambientales, y es foco de atención compartido por sociólogos, políticos y juristas. No obstante, no tenemos la certeza suficiente para acreditar que el ruido posee una condición natural de peligrosidad para el medio ambiente similar a la que adquieren otras formas de contaminación. Gran parte de países en el mundo comparten normas mucho más homogéneas en materia de protección general del medio ambiente, mientras que la temática del ruido muestra una amplia gama de factores que restringen esta interpretación global.

La multitud de países con sus respectivas culturas, sociedades, estilos de vida y leyes, determinan estos puntos de vista profundamente heterodoxos. Dicha peculiaridad se muestra especialmente activa en nuestro derecho interno, por la profusión de normativa de carácter local y autonómico. Aparte del ruido que perturba, molesta, o daña, este asunto afecta especialmente a la regulación sobre protección paisajística, gestión del ruido ambiental, contaminación atmosférica y lumínica. Otro factor a tener en cuenta es el estrecho vínculo que preside la relación entre intereses públicos y privados, así como una multiplicidad de factores sociológicos y culturales.

En efecto, a la formulación normativa de esta materia le atañe especialmente una faceta subjetiva históricamente conocida, como es la aprobación de determinadas pautas conductuales de naturaleza consuetudinaria por parte de un sector de la población al tiempo que la ausencia de obligación en cuanto a la aceptación de las mismas por el resto; todo ello confluye en espacios de conflicto en los que la actuación contundente del Derecho penal consigue desvirtuar su correcta aplicación, infravalora la importancia de sus grandes principios generales y cumple en muchos casos una función meramente simbólica.

Sin duda se avecina un alentador debate por razones básicas. Uno de los argumentos es el elemento característico que define la combinación entre su producción local y la limitación de su propagación. Consideramos que existen opciones bastante compatibles con una mejora de las reglas penales que configuran la sanción penal para conductas ruidosas, sobre todo las relativas al ruido ciudadano. Éstas incluyen nuevas teorías criminológicas vinculadas al ambientalismo, la criminología cultural, o el avance del modelo sancionador administrativo. Cabe citar por último, no obstante su predominio en este elenco, precisamente por la trascendencia que comporta, una adecuación del bien jurídico protegido que permita ponderar la variedad de elementos naturales que conforman el “medio ambiente”.

Desde otra vertiente, el hecho de que la característica por antonomasia del delito medioambiental viene representada por la imagen de la acumulación, del cúmulo indeterminado de conductas idénticas, que si bien de manera singular son inocuas, globalmente consideradas son destructivas.

Por otra parte, la primera etapa de las personas jurídicas como nuevos sujetos punibles en materia de medio ambiente, será un abono en terreno baldío si no somos capaces de conseguir leyes eficaces en un contexto universal, pues la mayoría de las actividades que llevan a cabo pueden confluir en enormes efectos transfronterizos, así la determinación en la persecución de los delitos contra el medio ambiente aislada por parte de las legislaciones nacionales será escasamente productiva. Es suficientemente claro -aunque algunos gobiernos y organismos oficiales afirmen lo contrario, que la proyección de las empresas y actividades de multinacionales en áreas tan sensibles como la deforestación, el cambio climático, la contaminación marina, la contaminación del agua, etc., es particularmente intensa. Este punto queda fuera de toda duda, así como la circunstancia de que los seres humanos ostentan el liderazgo en la destrucción del medio ambiente, en un alto porcentaje a causa de actividades cotidianas. Por tanto, reafirmamos la prevalencia exclusiva de los seres humanos en dicha degradación de los recursos naturales y el agotamiento de aquellos recursos no renovables.

Los objetivos de este trabajo son descifrar la supuesta conexión entre la materia de ruido y sus posibles consecuencias para el medio ambiente, así como el establecimiento de criterios de actuación en el campo del estudio de la ley penal vigente. Por otra parte, aclarar el rol que ostenta dentro de la estructura general de los delitos medioambientales. Nos preguntamos si el legislador debería mantener esta modalidad delictiva en particular como una forma de ataque al medio ambiente o si sería más apropiado optar por una sistemática distinta, establecida conforme a los criterios formulados en otros tipos del ordenamiento penal, como los delitos de lesiones o la vulneración del derecho a la intimidad.

Si damos por válida la primera opción, esto es, la persistencia de la emisión de ruidos dentro del tipo básico del delito ecológico, debemos tener en cuenta la ausencia de analogía dentro del contexto internacional, incluso en torno a las reglas marcadas y lideradas por la Unión Europea, debido al hecho de que no existe normativa vigente que sea efectiva en espacios ultranacionales. Además, las características físicas propias del sonido varían sustancialmente dependiendo de la situación en que se encuentre el foco emisor, por lo que los patrones reglamentarios utilizados por el legislador en la regulación de la emisión de ruidos, estrictamente adosados a los rangos de decibelios, son inválidos en su aplicación a otros elementos naturales, como por ejemplo la fauna y flora marina, o medios, como el marino.

## **METODOLOGÍA**

La investigación se ha llevado a cabo a través de la consulta de fondos bibliográficos, archivos, guías nacionales e internacionales, artículos científicos, revistas especializadas, bases de datos, informes oficiales, así como la jurisprudencia dictada por tribunales españoles, europeos e internacionales. Contiene un estudio de caso descriptivo de naturaleza inédita, y numerosa bibliografía internacional, especialmente anglosajona. Se han realizado las modificaciones oportunas a efectos de actualizar el texto en base a las recientes reformas del CP por la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas efectuada en 2010, y la transformación del art. 325, tipo básico del denominado delito ecológico y otras cuestiones conexas, en 2015.

## RESULTADOS

En suma, las contribuciones y aspectos más relevantes aportados por esta tesis son:

- Presentación en la doctrina penal española de la teoría de la *Green Criminology* relacionada con la emisión de ruidos, así como de las ramas diferenciadas que encarnan tanto la *Green Cultural Criminology* como la *Green Victimology*. Esta perspectiva enlaza de manera profunda con el derecho en la ciudad y el derecho a la ciudad, que si bien parecen muy similares, respectivamente implican diferentes derechos y pretensiones.
- La elaboración de un caso de estudio sin precedentes acerca de la repercusión de la fiesta del tambor en una ciudad española en la que la mayor profusión de ruido generado en el marco de la gestión pública queda suficientemente demostrada, en especial con respecto a la gestión del ruido del tráfico o de los servicios de recogida de residuos.
- La incorporación de un análisis en relación con los efectos del ruido antropogénico sobre animales y plantas, especialmente centrado en la contaminación marina causada por el aumento del tráfico marítimo interconectado con el estilo de vida occidental y los bienes de consumo.
- Aportación de razonamientos que demuestran el nexo entre la eufemística expresión “contaminación acústica” y la llamada contaminación lumínica, sin olvidar el aspecto paisajístico, donde el ruido despliega una fuerte capacidad de modificación, tanto del paisaje rural como del urbano.

- La hipótesis del carácter ambivalente del ruido con respecto a aquellas circunstancias que pudieran modificar o exonerar de responsabilidad penal a los sujetos activos del cualquier delito, que actúen en respuesta directa a los estímulos negativos sufridos por la emisión de ruido durante períodos prolongados, o de manera recurrente.
- Varias propuestas de *lege ferenda* que tienen como objetivo descubrir nuevas alternativas para otorgar soluciones jurídicas distintas, en unos casos sin tener que recurrir al impacto del Derecho penal, y en aquellos otros que posean la gravedad suficiente, su posible adhesión a delitos ya tipificados.

## ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS Y SÍMBOLOS

AAP	Auto Audiencia Provincial
AA.VV.	Autores Varios
a.C.	Antes de Cristo
ACUMAR	Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
ADN	Ácido Desoxirribonucleico
ADPCP	Anuario de Derecho penal y Ciencias penales
AMM	Asociación Médica Mundial
&	<i>Ampersand</i> / Y
AP	Audiencia Provincial
Art.	Artículo
ATC	Auto Tribunal Constitucional
ATCA	<i>Alien Tort Claims Act</i>
ATS	Auto Tribunal Supremo
BauGB	<i>Baugesetzbuch</i> / Código Federal Alemán de la Edificación
Bel	Belio
BImSchG	<i>Bundes-Immissionsschutzgesetz</i> / Ley de protección contra los efectos nocivos de la contaminación atmosférica, el ruido, las vibraciones y fenómenos similares
BImSchV	<i>Bundes-Immissionsschutzverordnungen</i> / Ley Federal de Control de la Contaminación
BMJ	<i>British Medical Journal</i>
BNatSchG	<i>Bundesnaturschutzgesetz</i> / Ley Federal de Protección de la Naturaleza
BOCG	Boletín Oficial de las Cortes Generales
BOE	Boletín Oficial del Estado
BOG	Boletín Oficial de Guipuzkoa
BOIB	Boletín Oficial de las Islas Baleares
BOP	Boletín Oficial de la Provincia
BOPZ	Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza
BORM	Boletín Oficial de la Región de Murcia

---



°C - c/	Grado Celsius - Calle
CA	Casco Antiguo
CAHA	Centro Astronómico Hispano Alemán
CBCM	Centro Budista de la Ciudad de México
CC	Código Civil
CCAA	Comunidades Autónomas
CE	Constitución Española
CEDH	Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Públicas
CEE	Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea
CENDOJ	Centro de Documentación Judicial
Cfr.	Confrontar
CGPJ	Consejo General del Poder Judicial
CIE-10	Clasificación Internacional de Enfermedades
CIE	<i>International Commission on Illumination</i>
CIEMAT	Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
CIPMA	Centro de Investigación y Planificación del Medio Ambiente
CITES	<i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i>
CN	Condiciones de normalidad
CO	Monóxido de carbono
CO <sub>2</sub>	Dióxido de carbono
comps.	Compiladores
CONACYT	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
CONAMA	Congreso Nacional de Medio Ambiente
coord. / coords.	Coordinador / Coordinadores
CP	Código Penal
CSIC	Centro Superior de Investigaciones Científicas
dB	Decibelio lineal
dBA	Decibelio A ponderado
DB-HR	Documento Básico de Protección frente al Ruido
d.C.	Después de Cristo

---

D.C.	Distrito de Columbia
DDT	Diclorodifeniltricloroetano
D.F.	Distrito Federal
Dig.	Digesto
dir. / dirs.	Director / Directores
DOCE	Diario Oficial de la Unión Europea
DOGC	Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
DRAE	Diccionario de la Real Academia Española
DSM	<i>Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders</i>
DTEDH	Decision Tribunal Europeo de Derechos Humanos
ECHR	<i>European Court of Human Rights</i>
ECOSOC	<i>United Nations Economic and Social Council</i>
ECPR	<i>European Consortium for Political Research</i>
ed. / eds.	Edición / Editores
Ed.	Editorial
ed. lit.	Editor literario
EE. UU.	Estados Unidos
EEA	<i>European Environment Agency</i>
EEG	Electroencefalografía
ELCI	<i>Environment Liaison Centre International</i>
ESA	<i>Endangered Species Act</i>
et. al.	Y otros
etc.	Etcétera
ETNs	Empresas Transnacionales
EWCA Crim	<i>Court of Appeal Criminal Division</i> / Tribunal de Apelaciones Sala de lo Penal
EWHC (Admin)	<i>High Court (Administrative Court)</i> / Tribunal Superior Administrativo)
Excmo.	Excelentísimo
Fasc.	Fascíml
FEMP	Federación Española de Municipios y Provincias
FJ / FF JJ	Fundamento Jurídico / Fundamentos Jurídicos
FCSE	Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

FGE	Fiscalía General del Estado
FIAB	Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas
FIPA	Federación Internacional de Periodistas Ambientales
Fís.	Física
H <sub>2</sub> S	Sulfuro de hidrógeno
Hz	Hertzio
I+D	Investigación y Desarrollo
IDAE	Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía
IEO	Instituto Español de Oceanografía
IGME	Instituto Geológico y Minero de España
IMO	<i>International Maritime Organization</i>
INAP	Instituto Nacional de Administración Pública
Infojus	Sistema Argentino de Información Jurídica
INGO	<i>International Non-governmental Organization</i>
IPC	Índice de Precios de Consumo
IUCN	<i>International Union for Conservation of Nature</i>
IVAP	Instituto Vasco de Administración Pública
IWC	<i>International Whaling Commission</i>
Kms	Kilómetros
Kw/h	Kilovatio-hora
Lat.	Latín
L <sub>den</sub>	<i>Day-evening-night equivalent level</i>
LEC	Ley de Enjuiciamiento Civil
LECrím	Ley de Enjuiciamiento Criminal
LED	<i>Light-emitting Diode</i>
L.G.D.J.	<i>Librairie générale de droit et de jurisprudence</i>
LIC	Lugares de Importancia Comunitaria
LIDO	<i>Listening to the Deep Ocean Environment</i>
Ling.	Lingüística
LJCA	Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
L <sub>night</sub>	<i>Night equivalent level</i>
LO	Ley Orgánica
LOFAGE	Ley de Organización y Funcionamiento Administración General del Estado

LOPJ	Ley Orgánica del Poder Judicial
LOTG	Ley Orgánica del Tribunal Constitucional
LRAD	<i>Long Range Acoustic Device</i>
LRBRL	Ley Reguladora de Bases del Régimen Local
LRJPAC	Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
LRSAL	Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local
LT	<i>Level-Time</i>
m/seg	Metro por segundo
m <sup>2</sup>	Metro cuadrado
ml	Metro lineal
Mp3	<i>Moving Picture Experts Group (MPEG)-1 Audio Layer III</i>
NEPA	<i>Nacional Environmental Policy Act</i>
NGO	<i>Non-governmental Organization</i>
NO <sub>2</sub>	Dióxido de nitrógeno
NSQ	Núcleo Supraquiasmático del Hipotálamo
nº. / núm.	Número
OCDE	Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos
OMC	Organización Médica Colegial
OMS	Organización Mundial de la Salud
ONG	Organización no Gubernamental
ONU	Organización de las Naciones Unidas
op. cit.	Obra citada
OSE	Observatorio de la Sostenibilidad en España
OSG	<i>Organizational sentencing Guidelines</i>
OWiG	<i>Ordnungswidrigkeitengesetz</i> / Ley General de Infracciones Administrativas
Pa	Pascal
pág. / págs.	Página / Páginas
§	Párrafo / Sección
PAH	<i>Polycyclic Aromatic Hydrocarbon</i> / Hidrocarburo Aromático Policíclico

Pb	Plomo
p.ej.	Por ejemplo
PEACRAM	Plataforma Estatal de Asociaciones Contra el Ruido y las Actividades Molestas
P.E.N.	Poder Ejecutivo Nacional –Argentina–
pH	Potencial de Hidrógeno
Plza.	Plaza
p.m.	<i>Post merídiem</i>
PIB	Producto Interior Bruto
PICC	Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático
PM10	<i>Particulate Matter</i>
PNUMA	Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
PORN	Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
pW	Picowatio
R2P	<i>Responsibility to Protect</i>
RD	Real Decreto
RDL <sub>eg</sub>	Real Decreto Legislativo
REDA	Revista Española de Derecho Administrativo
Rec. Electr.	Recurso Electrónico
reimp.	Reimpresión
REM	<i>Rapid Eye Movements Sleep</i>
RNA	Registro Nacional de Asociaciones
s.	Siglo
SAN	Sentencia Audiencia Nacional
SAP	Sentencia Audiencia Provincial
Sec.	Sección
SEPRONA	Servicio de Protección de la Naturaleza
[sic]	<i>Sic erat scriptum</i> / Así fue escrito
Sign.	Signatura
SIP	Sistema de Información Penitenciaria
SJCA	Sentencia Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
SO <sub>2</sub>	Dióxido de azufre

ss.	Siguientes
SSTC	Sentencias Tribunal Constitucional
SSTS	Sentencias Tribunal Supremo
STC	Sentencia Tribunal Constitucional
STEDH	Sentencia Tribunal Europeo de Derechos Humanos
StGB	<i>Strafgesetzbuch</i> / Código Penal Alemán
STS	Sentencia Tribunal Supremo
STSJ	Sentencia Tribunal Superior de Justicia
>	Superior a
TC	Tribunal Constitucional
TEDH	Tribunal Europeo de Derechos Humanos
TFUE	Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
TJCE	Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
TJUE	Tribunal de Justicia de la Unión Europea
ToP	<i>Treadmill of Production</i>
TR	Texto Refundido
tr. / tr. pr. / trs.	Traductor / Traducción propia / Traductores
TS	Tribunal Supremo
UCM	Universidad Complutense de Madrid
UE	Unión Europea
UICN	Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
UK	<i>United Kingdom</i>
UKG	<i>Umweltkriminalität</i> / Ley contra la Criminalidad Ambiental
UNAM	Universidad Nacional Autónoma de México
UNCTAD	<i>United Nations Conference on Trade and Development</i>
UNCLOS	<i>United Nations Convention on the Law of the Sea</i>
UNED	Universidad Nacional de Educación a Distancia
UNEP	<i>United Nations Environment Program</i>
UNESCO	Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UTHEA	Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana
v. / vs.	Versus
v. g.	Verbigracia

Vid.	Véase
Vol.	Volumen
W	Vatio
WWF	<i>World Wildlife Foundation</i>
ZAS	Zona Acústicamente Saturada
ZEC	Zonas Especiales de Conservación
ZPAE	Zona de Protección Acústica Especial

## PRIMERA PARTE

**SUMARIO: I.- PRECEDENTES HISTÓRICOS DEL MEDIO AMBIENTE. 1.- GRIEGOS Y ROMANOS ANTE EL FENÓMENO MEDIO AMBIENTAL.** 1.1.- Ecología y Antigüedad Clásica. 1.1.1.- Etimología. 1.1.2.- El ruido como molestia específica y preocupación cívica en el Imperio Romano. **II.- ECOLOGÍA Y EDAD MEDIA. PERIODO CARENTE DE EVOLUCIÓN EN CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES.** 2.- El papel del ruido en el Derecho medieval español. **III.-CONCEPTO MEDIOAMBIENTAL DE “RUIDO”: EVOLUCIÓN, CONEXIONES Y DIFERENCIAS CON OTRAS ESTRUCTURAS AMBIENTALES.** 3.1.- Aceptaciones y definiciones de “ruido”. 3.2.- Características intrínsecas del subconcepto “ruido” y diferencias relevantes con otras formas contaminantes. 3.3.- Elementos subjetivos y objetivos del “ruido”. 3.4.- La contaminación lumínica y el paisaje como segmentos complementarios de la protección contra el ruido. Argumentos a favor de su integración. **IV.- TRAYECTORIA JURÍDICO-PENAL DEL RUIDO E INFLUENCIA DE OTRAS JURISDICCIONES.** 4.1.- Formulación en los diferentes Códigos Penales de España. 4.1.1.- Modificación del sistema de faltas y derogación del Libro III. Breve alusión a la serie de faltas aplicables al “ruido”. 4.1.1.1.- Antecedentes. 4.1.1.2.- Sistema de faltas vigente en relación a conductas ruidosas hasta el Proyecto de reforma de 2012. 4.1.1.3.- La definitiva supresión del Libro III y su incidencia en la regulación penal del ruido. 4.2.- Hacia una nueva concepción pluridireccional y multidisciplinar de la materia. 4.2.1.- La determinante experiencia del “ruido” en el contexto europeo: posicionamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 4.2.2.- Recepción de la doctrina europea por el Tribunal Constitucional. 4.2.3.- Pronunciamientos del Tribunal Supremo en el orden penal. 4.2.4.- Posiciones del Tribunal Supremo en el orden de lo contencioso-administrativo. 4.3.- Repercusión de las últimas reformas del Código Penal en materia de medio ambiente. 4.3.1.- Incidencia de la LO 5/2010, de 22 de junio en la regulación de los delitos medioambientales; la esperada apertura a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 4.3.2.- La transformadora reforma de 2015 y su inacción para la equívoca figura del ruido como delito ecológico. 4.3.2.1.- Excurso: el delito ecológico en su modalidad de “ruido” como núcleo de responsabilidad penal en las personas jurídicas.





# I.- PRECEDENTES HISTÓRICOS DEL MEDIO AMBIENTE

## 1.- GRIEGOS Y ROMANOS ANTE EL FENÓMENO MEDIO AMBIENTAL

### 1.1.- Ecología y antigüedad clásica

#### 1.1.1.- Etimología

El término *–ecología–*, disciplina que estudia la relación de los organismos vivos entre sí y con su medio, no se utilizó hasta mediados del siglo XIX, cuando fue acuñado por el biólogo y médico alemán HAECKEL en 1866, en su obra *Morfología general de los seres vivos*; aunque sus raíces griegas *–oikos–*: casa, hábitat, medio o ambiente y *–logos–*: ciencia, estudio, tratado, indiquen un uso muy anterior o incluso su procedencia grecorromana. Comparte su raíz con economía, es decir, ecología significa el estudio de la economía de la Naturaleza.<sup>2</sup> Posteriormente, el ecólogo

---

<sup>2</sup> Vid. HAECKEL, E. H. <<Por Ecología entendemos la totalidad de la ciencia de las relaciones del organismo con el medio ambiente, comprendidas, en sentido amplio, todas las condiciones de existencia>>. *Generelle Morphologie der Organismen: allgemeine Grundzüge der organischen Formen-Wissenschaft, mechanisch begründet durch die von Charles Darwin reformirte Descendenz-Theorie*, Vol. II. Ed. Walter de Gruyter. Berlín, 1866, pág. 286. Vid. JAQUENOD DE ZSÖGÖN, S. Haeckel introdujo también un tercer reino en el concepto de seres vivos, el Protista, que hasta entonces se dividía en dos: el animal y el vegetal, con el fin de integrar a los organismos unicelulares que presentan características intermedias entre plantas y animales. En *Derecho Ambiental. Sistemas naturales y jurídicos*. Ed. Dykinson. Madrid, 2008, pág. 30. Vid. RODRÍGUEZ NEILA, J F. Por extensión, se refiere a la Tierra como <<la gran casa de la Humanidad>>, si bien el término “ecología” sólo comenzó a utilizarse desde el siglo XIX. En *Ecología en la Antigüedad clásica*. Cuadernos de Historia, Vol. 25. Ed. Arco Libros. Madrid, 1996, pág. 9; HUGHES, D. J. Para el autor, las raíces griegas del término indican una preocupación temprana de la humanidad por sus interrelaciones con la tierra, suelo, clima, tiempo atmosférico y la energía procedente del Sol. A pesar de que los griegos no inventaron la palabra “ecología” conscientemente, se preguntaban sobre las relaciones entre el hombre y su medio. <<... los filósofos se hacían preguntas sobre las relaciones entre los seres vivientes, incluyendo al hombre; y entre ellos y su medio. Estas preguntas podrían ser llamadas ecológicas y, al contestarlas, llegaron a reconocer algunos principios ecológicos>>. *Ecology in Ancient Civilations*. Ed. University of New México Press. Albuquerque, 1975. Versión en castellano: *La ecología de las Civilizaciones Antiguas*. Sara Cordero de Quintanilla (tr.) Ed. Fondo de Cultura Económica. Méjico, 1981. págs. 18 y 101. Por su parte, MOREIRA NETO, D, también cita la famosa obra de Haeckel, en la que se menciona por primera vez el término. “De la ecología a la ecoideología. De la prevención a la precaución”. En *Revista de Administración Pública*, núm. 186 (septiembre-diciembre). Madrid, 2011, págs. 481-490. Vid. SANZ LÓPEZ, C. / SÁNCHEZ ALHAMA, J. Haeckel fue el primero que otorgó a la “ecología” una posición central como ciencia, que comprendía un amplio pero a la vez acotado campo de investigación y estudio, atendiendo como pilar básico a las relaciones <<... intra e inter especies animales y vegetales, y entre estas con su medio orgánico e inorgánico>>. Posición recuperada en la actualidad por la ciencia ecológica, que comprende el análisis y estudio global a través de las aportaciones de cada submateria, entroncada, a su vez, con diferenciados territorios científicos. En *Medio ambiente y sociedad. De la*

británico Arthur TANSLEY delimitó el término *–ecosistema–*, incorporando en su definición tanto a los organismos vivos (biocenosis) como a los factores físicos que participan y actúan en el entorno (biotopo).<sup>3</sup> La aportación española se debe a MARGALEF, que además de glosar la definición original <<La Ecología se ocupa de los organismos y su entorno, incluido el hombre>>, elabora la Teoría de la Información aplicada a la ecología, con el objeto de cuantificar las poblaciones de seres vivos creando modelos matemáticos para su estudio. Demostró que la cantidad de información de una población es proporcional a su biodiversidad.<sup>4</sup>

Sin embargo, y a pesar de lo relativamente reciente que resulta su estudio, los datos revelan que tanto griegos como romanos tuvieron preocupaciones medioambientales, que se derivan del profundo interés que demostraron por el ecosistema del área mediterránea en que se desarrollaron sus respectivas civilizaciones.<sup>5</sup>

---

*metáfora organicista a la preservación ecológica* (2ª ed.) Ed. Comares. Granada, 1998, págs. 1-4. Vid. DE LA MATA BARRANCO, N. J. Alude a la falta de consenso actual sobre la delimitación de su contenido, si bien parte de la idea de que ha de entenderse incluido todo lo que se refiera al ambiente y los recursos naturales que se encuentran en él. En *Protección Penal del Ambiente y Accesoriedad Administrativa. Tratamiento penal de comportamientos perjudiciales para el ambiente amparados en una autorización administrativa ilícita*. Ed. Cedecs. Barcelona, 1996, pág. 26. Por su parte, MARTÍN MATEO, R. se refiere a <<... la disociación de dos enfoques que deberían ser coincidentes: el económico y el ambiental>>. Por tanto, como la reparación y la represión caminan por procedimientos estrictamente jurídicos, sin converger de forma integradora con otras disciplinas, en este caso la economía, a los encargados de aplicar las normas les resulta sumamente complicado extraer una medición exacta de los daños y perjuicios, por el propio desconocimiento de los expertos en medio ambiente sobre los costos reales de las agresiones ambientales y la incapacidad de los economistas de realizar una traslación a cifras exactas. A ello se añade el carácter transgeneracional, indudable cuando hablamos de medio ambiente, porque si ya resulta harto difícil contar con datos económicos actuales, conocer datos en generaciones futuras o aproximarse a cálculos estadísticos está fuera de nuestras posibilidades. *Tratado de Derecho Ambiental*. Tomo IV (Actualización). Ed. Edisofer. Madrid, 2003. págs. 29-31. Vid. HAYEK, FRIEDRICH A, en relación a la problemática de la conservación de los recursos naturales a través del control estatal de la actividad privada. En *Los Fundamentos de la Libertad* (6ª ed.). José Vicente Torrente (tr.) Ed. Unión Editorial. Madrid, 1998, págs. 465 y ss. Vid. TERRADILLOS BASOCO, J. Prólogo a la obra colectiva *El delito ecológico*. Juan Terradillos Basoco (ed. lit.) Ed. Trotta. Madrid, 1992, pág. 9.

<sup>3</sup> Por todos, vid. JAQUENOD DE ZSÖGÖN, S. El término fue acuñado en 1935 por Tansley, imponiéndose a otros vocablos que surgieron de forma paralela, tales como “holocenobio”, “microcosmos” o “biosistema”. En “Derecho Ambiental. Sistemas naturales y jurídicos”, op. cit., pág. 35.

<sup>4</sup> Considerado el primer ecólogo español, su extensa obra es internacionalmente reconocida. Vid., por todas MARGALEF LÓPEZ, R. *Ecología* (8ª ed.) Ed. Omega. Barcelona, 1998.

<sup>5</sup> Vid. MOREIRA NETO, D. Subraya cómo surge una rama especializada del Derecho Administrativo, inicialmente llamada <<Derecho ecológico>> y posteriormente rebautizada como <<Derecho ambiental>>. Al considerarse que la ecología acogía disciplinas variadas, el tratamiento jurídico también sufrió esta ampliación de miras y, por ello, la variación del término. En “De la ecología a la ecoideología. De la prevención a la precaución”, op. cit., pág. 483. Vid. RODRÍGUEZ DEVESA, J. M. / SERRANO GÓMEZ, A., sobre los <<pretendidos derechos penales>> de nuevo cuño (económico, comercial, bursátil, laboral, tributario o fiscal, corporativo, etc.), independientes del núcleo básico del

Además tuvieron que sufrir desajustes climáticos mucho más fuertes, intensos y destructivos que los actuales.<sup>6</sup>

La mayoría de las cuestiones que se plantean en la actualidad sobre el medio ambiente ya fueron diagnosticadas por griegos y romanos, cuyas actividades militares, agrícolas, comerciales y urbanizadoras tuvieron un papel desarrollado en la merma ecológica de su entorno, y cuya trascendencia todavía se desconoce en términos históricos.<sup>7</sup>

Los cambios traumáticos de clima, sobre los que se discute en la actualidad, a veces con rasgos apocalípticos, siempre han estado presentes, y cada generación los ha vivido con máximo recelo e interés.<sup>8</sup>

---

Derecho penal, que se corresponde con el “derecho penal criminal”. En *Derecho Penal español. Parte General* (18ª ed.) Ed. Dykinson. Madrid, 1995, págs. 27-33.

<sup>6</sup> En este sentido, RODRÍGUEZ NEILA, J. F. Asegura que se han comprobado severas modificaciones climáticas en tiempos históricos. <<El ciclo de las estaciones nunca ha sido idéntico en dos años diferentes, y las fuentes antiguas señalan períodos de calor o frío inusuales, lo mismo que sequías o inundaciones [...] Quizás períodos de sequía en Asia pudieron provocar una huida en oleadas de poblaciones nómadas hacia el oeste, cuyas últimas consecuencias se hicieron sentir en las mismas fronteras del imperio romano, las invasiones bárbaras. También una prolongada situación de tal tipo pudo ocasionar el abandono de muchas obras hidráulicas romanas hoy perdidas en los desiertos norteafricanos>>. En “Ecología en la Antigüedad clásica”, op. cit., págs. 24 y 25; HUGHES, D. J., indica que existen evidencias de que el nivel del mar interior se elevó y hundió en el pasado, así como que el cambio climático al final de la Edad de Hielo jugó un papel muy importante en la extinción de muchos animales del período del Pleistoceno. En “Ecology in Ancient Civilizations”, op. cit., págs. 27 y 45; OLCINA CANTOS, J. / MARTÍN VIDE, J. Realizan un estudio monográfico sobre la influencia del clima a lo largo de la historia, en el que afirman que poco ha cambiado en relación a la percepción de los cambios climáticos por parte de todas las civilizaciones, ya que el clima es por definición variable, los ciclos fríos y cálidos se repiten sucesivamente. Señalan un relato de los sueños del Faraón del libro de José, incluido en el Génesis, donde se describe la sucesión de años húmedos y años secos que afectaban al pueblo egipcio, y que se correspondían obviamente con años de abundancia y de hambruna. En *La influencia del clima en la historia*. Cuadernos de Historia, Vol. 68. Ed. Arco Libros. Madrid, 1999, pág. 25.

<sup>7</sup> Soportaban los efectos perniciosos de una ocupación humana en desequilibrio. Vid. RODRÍGUEZ NEILA, J.F. Relata la impronta que dejaban las actividades agrícolas incontroladas, talas de árboles que degradaban el suelo (deforestación), minería u otras labores artesanas que contaminaban cauces fluviales, cacerías de animales salvajes que provocaron la disminución e incluso la extinción de muchas especies y la masificación en núcleos urbanos, que provocaba fuentes de ruido, de residuos, etc. En “Ecología en la Antigüedad clásica”, op. cit., pág. 10. Vid. HOMO, L. Centra su estudio en los diferentes elementos e influencias en la topografía romana, que sufrió mutaciones varias de importancia, tanto por causas naturales como accidentales. Alude a la deformación del terreno, su elevación y aplanamiento, citando la acción producida por grandes agentes naturales como la lluvia (inundaciones) o los terremotos, resaltando además la complejidad de determinar causas artificiales tales como incendios, hundimiento de edificios, superposición de monumentos, medidas de higiene y acontecimientos bélicos. En *La Roma Imperial y el urbanismo en la antigüedad*. La evolución de la humanidad. José Almoína (tr.) Ed. UTEHA (Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana). Tomo XX. México D.F., 1956, págs. 21-31.

<sup>8</sup> Vid. OLCINA CANTOS, J. / MARTÍN VIDE, J. La repercusión de unas condiciones a veces extremas y otras benignas en la historia, se traduce en que su propio curso nos hubiera podido relatar determinados acontecimientos decisivos de forma muy distinta. <<No es aventurado pensar que la historia del mundo pudo ser distinta si la Armada Invencible [...] no sufriera su práctica destrucción por una gran tempestad en ruta hacia las Islas Británicas. Lo mismo podría decirse del fracaso de la campaña de Hitler durante el invierno de 1941-1942 en las estepas rusas, en parte por causa de una crudísima ola de frío>>. En “La influencia del clima en la historia”, op. cit., págs. 10, 13, 24 y 25.

De igual manera, los criterios de urbanización en torno a la *polis* tenían en cuenta la salubridad de la población, apoyándose en una naciente medicina científica. Sin embargo, los griegos no mostraron especial preocupación por la construcción de viviendas, ocupándose más de la planificación de la ciudad como conjunto que de las residencias privadas, dotándose por ejemplo de un sistema de alcantarillado con el fin de recoger el agua de la lluvia y practicar el desagüe de las casas, extendiéndose desde el siglo IV a todas las calles en algunas ciudades.<sup>9</sup>

La relación de los pueblos de la Antigüedad con la *urbs* era muy estrecha y, al mismo tiempo, su relación con la Naturaleza era especial, de carácter puramente mitológico, rasgo éste que se fue disipando progresivamente a medida que se instauraban nuevos movimientos seculares de dicha dependencia.<sup>10</sup>

El aspecto mitológico tiene trascendencia por cuanto griegos y romanos cuidaban o descuidaban la relación con su entorno en la medida en que sus declaraciones de intenciones hacia las diferentes deidades implicaban distintas actitudes y comportamientos. Aunque su tecnología era muy primaria, el acometer ciertas obras suponía retar a los dioses, por lo que generalmente resultaban castigados; uno de los ejemplos se encuentra en la orden de limpiar los establos de Augías, de fuerte impacto ecológico al tener que desviar el curso de los ríos Alfeo y Peneo.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Vid. KOLB, F. Relata cómo Aristóteles, conocedor de los escritos de Hipócrates e hijo de un médico, formuló con mucho más detalle que Platón las condiciones de orientación, higiene y abastecimiento de agua que debían presidir la urbanización de las ciudades, apoyándose también en las teorías de Hipódamo de Mileto (padre de la urbanística según la tradición antigua). <<...una orientación de la ciudad al Este es la más recomendable; le sigue la orientación Norte [...] Es preferible recoger el agua de manantiales que la de la lluvia de cisternas, etc.>>. Tanto Platón como Aristóteles postulan la separación del puerto, el mercado y el barrio artesano, con su correspondiente vigilancia, en la periferia de los asentamientos, en el cruce de las vías interiores con las marítimas. Naturalmente, la necesidad de protegerse de un posible ataque por mar era una de las principales razones para optar por la separación del puerto, pero no podemos olvidar que, en lo relativo a talleres de toda clase, éstos se mezclaban con las viviendas en la Corinto arcaica. En *La ciudad en la Antigüedad*. Elena Bombín (tr.) Ed. Gredos. Madrid, 1992, págs. 95 y ss. Ello hace suponer la enjundia y molestia que debía provocar en los habitantes. Al respecto, HUGHES, D. J. "Ecology in Ancient Civilations", op. cit., págs. 129-130. Vid. MUNTAÑOLA THORNBURG, J. También cita a Aristóteles como precursor de las relaciones entre urbanismo, arquitectura y psicología, aunque dicha relación produce –antes y ahora– una general desconfianza sobre cualquier ciencia que pretenda definir la forma de una ciudad o de sus edificios. "Psicología y arquitectura: notas breves". En *Introducción a la psicología ambiental*. Florencio Jiménez Burillo / Juan Ignacio Aragonés (comps.) Ed. Alianza Editorial. Madrid, 1986, págs. 33-49.

<sup>10</sup> Vid. OLCINA CANTOS, J. / MARTÍN VIDE, J. El primer atisbo de interpretación no mitológica se encuentra en los escritos de los presocráticos, a partir del siglo VI a.C. La idea de relacionar las modificaciones en el medio natural con los ciclos climáticos se mantendrá hasta el siglo XIX. En "La influencia del clima en la historia", op. cit., pág. 26. Vid. HUGHES, D. J., para quien las creencias griegas en torno a la mitología impidieron la ausencia de efectos contaminantes por múltiples focos, precisamente por los tabúes que propugnaban castigos al que transgrediera el orden natural. En "Ecology in Ancient Civilations", op. cit., pág. 89.

<sup>11</sup> Una lectura íntegra de los llamados doce trabajos de Hércules en CÁTEDRA, P. M. / CHERCHI, P. En la mitología griega, Áugeas o Augias era un rey de Élide, hijo del dios-Sol y de Naupidame, que

Esta percepción de la Naturaleza como espacio protegido por los dioses condujo a su sacralización, no por consideraciones medioambientales de carácter pseudo-científico, sino como símbolo de las señales enviadas por los dioses; aún así, los griegos percibían que existían ciertos ámbitos que necesitaban ser más protegidos que otros: las altas montañas y parajes de gran belleza en los que habitaban diversos dioses menores (ríos, fuentes y bosques); así, por ejemplo, en los bosques considerados templos, sus árboles eran consagrados a los dioses.<sup>12</sup>

En la ciudad griega de Sibaris, durante el siglo VI a.C., la perturbación del sueño de los habitantes por el ruido que producían los gallos, provocó que se prohibiera el cuidado de estas aves, así como actividades de los artesanos con oficios susceptibles de causar ruido, que debían ejercerlas fuera de la ciudad.<sup>13</sup>

Asimismo, causa sorpresa que las respuestas a cuestiones relativas a la naturaleza en los pueblos de la antigüedad se vean satisfechas con una interpretación natural-religiosa de los fenómenos atmosféricos, sumándose la incidencia tan profunda que tenían en la vida de estos pueblos, puesto que dependían en gran medida de su situación geográfica.<sup>14</sup>

---

poseía grandes cantidades de ganado. La limpieza de sus establos fue uno de los trabajos del semidiós Heracles (el Hércules romano). *Los doce trabajos de Hércules*. (Zamora, por Antón de Centenera, 1483). Ed. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria. Santander, 2007. Alude al mismo episodio, RODRÍGUEZ NEILA, J. F. En “Ecología en la Antigüedad clásica”, op. cit., pág. 9.

<sup>12</sup> Vid. RODRÍGUEZ NEILA, J. F. <<El roble a Zeus, el laurel a Apolo, el sauce a Hera, etc. En ellos moraban espíritus que podían perecer si se talaban. Similares tabúes protegían a los animales que allí vivían. El pecado de Agamenón, matar un ciervo en un espacio sagrado, debía ser evitado por los cazadores. Por idénticas razones no se podía pescar en las aguas de muchos santuarios [...] Entre todas las divinidades la mayor protectora de la Naturaleza era Artemis, la Diana de los romanos, una diosa – ecologista–>>. El autor explica que, por otra parte, los griegos se llegaron a plantear cuestiones que hoy serían puramente ecológicas a través del análisis filosófico, no mediante la interpretación mítica; cita para sustentar tal teoría a Anaximandro, que percibió los peligros de un medio ambiente hostil para la especie humana, más débil que otras para adaptarse a situaciones extremas, lo que revela un incipiente interés por las relaciones entre los diferentes seres vivos entre sí y de éstos con su entorno natural. En “Ecología en la Antigüedad clásica”, op. cit., pág.12; HUGHES, D. J. En “Ecology in Ancient Civilizations”, op. cit., págs. 101 y 102.

<sup>13</sup> Sibaris era una colonia griega que ocupaba parte de lo que actualmente es una localidad perteneciente a la región de Calabria (Italia). Vid. HERRERA DEL REY, J. J. Aporta el dato mencionado, así como referencias de la época romana, citando palabras de Schopenhauer en relación al fenómeno del ruido: <<... solía decir, coloquialmente, que el nivel de inteligencia de un individuo es inversamente proporcional al ruido que soporta>>. En *La defensa jurídica contra la contaminación acústica*. Ed. La Ley. Madrid, 2008, pág. 25; RUIZ DE APODACA ESPINOSA, A. Recoge la misma cita del filósofo, añadiendo que es inversamente proporcional a la educación de los sujetos. “Instrumentos de prevención y corrección de la contaminación acústica”. En *Régimen jurídico del ruido: una perspectiva integral y comparada*. Estanislao Arana García / M<sup>a</sup> Asunción Torres López (coords.) Ed. Comares. Granada, 2004, págs. 85-123, en especial 123; SÁNCHEZ SAHORÍ, F. “Apuntes para una filosofía del ruido”. En *El ruido en las ciudades. Análisis jurídico-práctico*. Jorge Pinedo Hay (coord.) Ed. Bosch. Barcelona, 2009, págs. 17-50, en especial 20.

<sup>14</sup> Vid. OLCINA CANTOS, J. / MARTÍN VIDE, J. Destacan dos características esenciales en la relación relatos-mitos-elementos climáticos. La primera se refiere a la gran cantidad de referencias a los cuatro

Como afirma BRAÑES, la visión histórica del desarrollo del Derecho ambiental pasa por entender que ya las comunidades primitivas otorgaban un papel primordial a la norma jurídica ambiental, que nació precisamente en su seno.<sup>15</sup>

Se podría nombrar a la escuela pitagórica (500 a.C.) como la primera con fuertes connotaciones ecológicas, de corte antropocéntrico moderado, pues consideraban que todas las especies, incluida la humana, tenían orígenes y lazos comunes, gozaban de alma y de cierta forma de inteligencia, resaltando la necesaria armonía del hombre con la Naturaleza.<sup>16</sup>

También la doctrina de Empédocles, en esta misma línea, consideraba al mundo como un sistema biológico en el que los organismos vivos se interrelacionaban y renovaban de manera cíclica.<sup>17</sup>

Aparte de los filósofos, Hipócrates (s. V a.C. - s. IV a.C.), padre de la medicina, señaló la importancia del medio ambiente en el desarrollo, diagnosis y tratamiento de las enfermedades en su trabajo *Sobre aires, aguas y lugares*, en el que sustentó la teoría

---

elementos de la naturaleza en la mitología (fuego, aire, agua y tierra), que a su vez se relacionan de forma directa con los elementos atmosféricos; la segunda es la prevalencia de la deidad que representa al Sol, astro del que dependen todos los demás elementos, y que suele coronar los panteones, acompañado de las que representan a la tormenta, el trueno, la lluvia, la sequía, el granizo y los vientos, de jerarquía inferior. En “La influencia del clima en la historia”, op. cit., pág. 47.

<sup>15</sup> Vid. BRAÑES, R. En *Manual de Derecho Ambiental Mexicano* (2ª ed., 2ª reimp.) Ed. Fondo de Cultura Económica. México D.F., 2010, pág. 38. En el mismo sentido, JAQUENOD DE ZSÖGÖN, S, alude al Código de Hammurabi (1700 a.C.), en el que una de sus disposiciones prohibía la sobreexplotación de animales, no en el sentido de su protección como miembros de la Naturaleza, sino como merma de las capacidades productivas del dueño de un animal dañado. En *El derecho ambiental y sus principios rectores* (3ª ed.) Ed. Dykinson. Madrid, 1991, págs. 15 y ss.

<sup>16</sup> Vid. MACÉ, F. Pitágoras resultó ser un gran “reformador” que, inspirándose en las leyes de la Naturaleza, acuñó un novedoso orden de vida racional y científico, practicando numerosas ciencias como las matemáticas, la biología, la física o los arcanos de la Naturaleza. <<... sabía también que una doctrina religiosa, para no ser arrastrada por las supersticiones que muy a menudo provoca, debe fundarse sobre una concepción racional y científica del universo>>. Asimismo, se le puede considerar uno de los primeros vegetarianos, pues opinaba que comer carne era algo impuro, e inició a sus discípulos en las virtudes curativas de las plantas a través de sus enseñanzas. Una de sus famosas sentencias recoge este pensamiento: <<No gastes más tiempo en preparar tus alimentos que en consumirlos>>. Sus teorías influyeron de forma acusada a Hipócrates, que vivió 200 años después que él. En *La sabiduría pitagórica. Más de 200 sentencias pitagóricas escogidas, con dos hermosas versiones de los celeberrimos versos de oro precedidas de comentarios sobre la vida de Pitágoras y su escuela filosófica*. Ed. Marsay. Sevilla, 2001, págs. 12, 14, 29 y 80; RODRÍGUEZ NEILA, J.F. En “Ecología en la Antigüedad clásica”, op. cit., págs. 13 y 14. Pitágoras también influyó en el pensamiento de Platón respecto a la idea de una Naturaleza viva, de una Tierra madre y señora que gobierna la totalidad y es sólo a ella a la que todo lo demás obedece ciegamente. Vid. JAQUENOD DE ZSÖGÖN, S. “Iniciación al Derecho Ambiental”, op. cit., pág. 20.

<sup>17</sup> Empédocles de Agrigento, filósofo y político griego. Postuló la “teoría de las cuatro raíces”, a las que Aristóteles más tarde llamó elementos, uniendo el agua de Tales de Mileto, el fuego de Heráclito, el aire de Anaxímenes y la tierra de Jenófanes, las cuales se mezclan en los distintos entes sobre la Tierra. Vid. KINGSLEY, P., que refleja la originalidad de Empédocles en reducir toda la existencia a cuatro elementos fundamentales a los que da el nombre de “raíces”. En *Filosofía antigua, misterios y magia. Empédocles y la tradición pitagórica*. Alejandro Coroleu (tr.) Ed. Atalanta. Girona, 2008, págs. 21-26; HUGHES, D. J. En “Ecology in Ancient Civilations”, op. cit., pág. 102.

de que el medio ambiente influye de forma importante en la configuración física y espiritual de los seres humanos. Así se expresa en una de sus más frases más citadas: <<Ni la sociedad, ni el hombre, ni ninguna otra cosa deben sobrepasar para ser buenos los límites establecidos por la Naturaleza>>.<sup>18</sup>

Igualmente, Platón se interesó de forma tímida por las causas que llevaron a la deforestación de un Ática que en el siglo IV a.C. se encontraba ecológicamente destrozada, en contraposición a una Atlántida exuberante, en su diálogo inacabado *Critias o la Atlántida* (110e -111d). Platón era plenamente consciente de que la erosión de los suelos, la deforestación y las alteraciones microclimáticas habían tenido lugar en tiempos históricos pero no remotos; si trasladamos su descripción de la degradación del medio a la actualidad, sorprende su similitud.<sup>19</sup>

No obstante, la primera exposición de visiones antitéticas sobre el entorno natural se dio con Aristóteles y Teofrasto (discípulo del primero). Para Aristóteles, la Naturaleza estaba por completo al servicio del hombre, así que se puede considerar su enfoque como antropocéntrico puro, otorgándole por ende al ser humano una supremacía jerárquica sobre las demás especies. Pero su aventajado discípulo, que además era botánico, preconizó algunos de los postulados de la moderna ecología, de corte no-utilitarista y visión ecocéntrica, resaltando que la Naturaleza era autónoma respecto de la especie humana, aunque interrelacionada con ella, teorizando sobre este aspecto, pero apoyándose además en investigaciones empíricas.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Vid. HUGHES, D. J. En “Ecology in Ancient Civilations”, op. cit., pág. 97; RODRÍGUEZ NEILA, J.F. En “Ecología en la Antigüedad clásica”, op. cit., pág. 14; OLCINA CANTOS, J. / MARTÍN VIDE, J. Las enseñanzas de Hipócrates sobre cómo el clima y los vientos influyen en la fisiología del hombre sugieren que existe una relación directa entre las reacciones del cuerpo humano y el ambiente. <<Hipócrates [...] añade que las fechas más importantes y peligrosas son las siguientes: ambos solsticios, especialmente el de verano, y los dos llamados equinoccios, en particular, el de otoño>>. En “La influencia del clima en la historia”, op. cit., págs. 64 y 65. Para corroborar la tesis de Hipócrates y al hilo de la actualidad, basta referirse a desastres medioambientales de diverso alcance producidos en nuestro país por la peligrosa y generalizada práctica de ocupar los cauces secos de los ríos por ejemplo, que consiguen inundar algunos centros de poblaciones cuando llueve intensamente. Vid. JAQUENOD DE ZSÖGÖN, S. Recoge la enorme influencia que Hipócrates tuvo en la obra de Claudio Galeno (médico personal de Marco Aurelio), que examinó más de 400 remedios de origen vegetal, mineral y animal. En “Derecho Ambiental. Sistemas naturales y jurídicos”, op. cit., pág. 26.

<sup>19</sup> Vid. DE AZCÁRATE, P. *Obras completas de Platón* (Tomo VI) Ed. Medina y Navarro. Madrid, 1872, págs. 265-293; RODRÍGUEZ NEILA, J.F. En “Ecología en la Antigüedad clásica”, op. cit., pág. 15; HUGHES, D. J. En “Ecology in Ancient Civilations”, op. cit., pág. 99; FEDELI, P. *La Natura Violata. Ecologia e mondo romano*. Ed. Sellerio. Palermo, 1990, págs. 81 y 82.

<sup>20</sup> Se hace eco de esta primera pugna de teorías RODRÍGUEZ NEILA, J.F. Teofrasto estudió las plantas en ecosistemas vírgenes y en zonas previamente cultivadas por el hombre. <<Su percepción ecológica más interesante fue comprobar que ciertas labores humanas (drenaje o deforestación de tierras) pueden generar cambios climáticos locales, afectando a lo que hoy llamaríamos microclimas [...] comprobó que en Creta los bosques montañosos habían sido asolados, permitiendo a los vientos soplar sin ningún obstáculo con perniciosos resultados para la agricultura, al perderse el efecto protector de los árboles y



Estas primeras aportaciones tuvieron continuidad a través de las sucesivas contribuciones de poetas como Virgilio, Horacio, Marcial o Juvenal, geógrafos como Estrabón, filósofos como Anaxágoras, Sófocles, Séneca, tratadistas como Plinio el Viejo, historiadores como Tácito, agrónomos como Varrón, Catón o Columela, arquitectos como Vitruvio<sup>21</sup>; todos ellos, desde sus respectivas disciplinas se preocuparon por la relación del hombre con su entorno, relacionando dos ideas fundamentales.

El medio ambiente es un componente que influye en la disposición del temperamento humano, y esta idea se contrapone a la de que los hombres, a su vez, pueden transformar la Naturaleza, corrigiendo sus fallas o lagunas, sin olvidar nunca los criterios utilitaristas que primaban en esta época, ya que si el medio ambiente era capaz de influir de esa forma tan decisiva en los pueblos, la supremacía en las posiciones geográficas se traducían invariablemente en la dominación o imposición sobre los demás.<sup>22</sup>

---

*erosionarse el suelo cultivable>>.* En “Ecología en la Antigüedad clásica”, op. cit., págs. 16-18; HUGHES, D. J. Teofrasto merece el título de “padre de la ecología” porque sus estudios no se pueden considerar pasajes aislados, sino un punto de vista o teoría solvente y consistente, que se puede encontrar en dos de sus obras: *Investigación en las plantas*, y *Metafísica*. En “Ecology in Ancient Civilizations”, op. cit., págs. 103-106; OLCINA CANTOS, J. / MARTÍN VIDE, J. También aluden a Teofrasto como estudioso de la climatología en relación a la botánica. <<Teofrasto [...], nos transmite la percepción del cambio climático ocurrido en los alrededores de Larissa, en Tesalia, a consecuencia de unos trabajos de avenamiento [...] los olivos que antes eran más gruesos y bellos han desaparecido y las viñas se ven muy dañadas por el frío y las heladas [...] Por último, señala que en las cercanías de Filipos helaba más antes que ahora, debido a que la puesta en cultivo de superficies forestales permite la acción directa del sol, consiguiendo un clima más cálido>>. En “La influencia del clima en la historia”, op. cit., págs. 26 y 27.

<sup>21</sup> Vitruvio era conocedor del peligro que entrañaba para la salud la utilización de tuberías de plomo. Vid. RODRÍGUEZ NEILA, J.F. Así, propugnaba que debían fabricarse con terracota y que los alimentos ácidos podían producir envenenamiento si se cocinaban y servían en recipientes de plomo y plata. <<El examen de restos óseos romanos ha mostrado altos niveles de concentración de plomo en los huesos>>. En “Ecología en la Antigüedad clásica”, op. cit., pág. 51. Un ejemplo de la excelente contribución de Vitruvio al urbanismo en HOMO, L. “La Roma Imperial y el urbanismo en la antigüedad”, op. cit., págs. 4-10. Según OLCINA CANTOS, J. / MARTÍN VIDE, J., Columela (s. I d.C.) era partidario de la teoría del clima como algo cambiante a lo largo de las épocas, resaltando que por ejemplo, el cultivo de vid y olivo había sido posible en latitudes septentrionales cuando los inviernos no habían sido especialmente fríos, ya que este tipo de plantaciones se adaptan mal a las bajas temperaturas. En “La influencia del clima en la historia”, op. cit., pág. 27; HUGHES, D. J., describe varias anotaciones de la literatura romana en su gran época, cuando Roma estaba altamente urbanizada, en las que se celebra la belleza de la Naturaleza. Desde Plinio el joven, Catón, Columela, Varrón, Cicerón, Virgilio, Horacio, Juvenal o Lucrecio. Asimismo, lo expresado por Vitruvio en relación a las tuberías de plomo y sus efectos perjudiciales. En “Ecology in Ancient Civilizations”, op. cit., págs. 143 y ss.

<sup>22</sup> Vid. RODRÍGUEZ NEILA, J.F. <<La aplastante imposición de Roma sobre el mundo mediterráneo tenía también una explicación ecológica. Su superioridad era resultado, precisamente, del mejor hábitat en que los romanos vivían, Italia, la mejor tierra por todos los conceptos, incluidos los factores climáticos y medioambientales>>. En “Ecología en la Antigüedad clásica”, op. cit., págs. 18 y ss.

El legado cultural de la Antigüedad grecorromana por tanto, alcanza también la degradación del medio ambiente y la poco armónica relación entre la especie humana y la Naturaleza, las civilizaciones que en la historia de la humanidad se han sucedido no siempre se han limitado a inocuos cambios del paisaje ambiental. Al contrario, el hombre se ha convertido en el auténtico responsable del grave estado de degradación en el que actualmente se encuentra el entorno, por su mera existencia en la Tierra.<sup>23</sup>

Esta inmersión del ser humano en la Naturaleza desde una concepción holística, se vuelve especialmente trágica cuando se trata de proteger bienes de propiedad común, porque los instrumentos que históricamente se han utilizado para conseguir su acotamiento, como la propiedad privada o similares fórmulas, resultan inviables.

Así pues, la prevención debe nacer de técnicas diferentes, de normas coactivas que hagan que resulte menos costoso en términos económicos depurar los contaminantes que produce una determinada actividad, antes que dejarlos sin tratamiento y abandonarlos a su suerte.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> En este sentido, *vid.* VERCHER NOGUERA, A. Cita una investigación realizada por científicos de las Universidades de Berna, Kiev y Copenhague en la que se ha comprobado la concentración de plomo acumulado en capas de turba de un antiguo pantanal suizo desde hace 14.000 años, lo que revela que este fenómeno superaba ya los niveles considerados naturales hace seis mil años, a consecuencia de la erosión del suelo producido por los primeros agricultores europeos. “La evolución del delito contra el medio ambiente a través de la jurisprudencia”. En *Derecho y Medio Ambiente: Revista jurídica para el desarrollo sostenible*, Vol. II, núm. 8 (octubre-diciembre) 2001, págs. 37-70. Cfr. FEDELI, P. Tras estudiar el mundo romano en su relación con el ambiente, concluye: <<La inevitable ósmosis entre el hombre y la naturaleza ha sido siempre causa de perturbaciones, algunas veces definitivas, del entorno ecológico, comenzando por el agotamiento de algunos recursos naturales. Desde los estadios iniciales, estas perturbaciones han mostrado cómo la actividad del hombre y su misma existencia se muestran de una forma singularmente ambivalente: el hombre, por un lado, ha mostrado enorme capacidad de crear y realizar un entorno mejor y mejores condiciones de vida, y por otro ha mostrado su tendencia a destruir aquello que había sido capaz de crear o a usar sus capacidades verdaderamente para cambiar a peor el entorno y las condiciones naturales>>. En “La natura violata”, op. cit., pág. 149. También alude al enorme impacto medioambiental causado por las civilizaciones antiguas RODRÍGUEZ NEILA, J.F., acerca de las secuelas que dejaron las confrontaciones bélicas en tierras mediterráneas; desde una profunda deforestación por el uso incontrolado de madera para equipar a las flotas, pasando por la devastación de campos agrícolas y bosques por la destrucción de cosechas e instalaciones rurales. En “Ecología en la Antigüedad clásica”, op. cit., págs. 32-35 y 64-66.

<sup>24</sup> *Vid.* HARDIN, G. Las opciones planteadas para obligar a un uso moderado a través de la legislación, como aumentar leyes de derecho administrativo no convencen por una razón antigua, pues ¿quién controla a los que nos controlan? ¿Cómo podemos legislar de forma efectiva la “moderación”? <<La prohibición es fácil de legislar (pero no necesariamente fácil de imponer); pero ¿cómo legislar la moderación? La experiencia indica que ésta puede ser alcanzada mejor a través de la acción de la ley administrativa [...] Debemos encontrar maneras de legitimar la necesaria autoridad tanto para los custodios como para las retroalimentaciones correctivas>>. Este clarificador y estimulante artículo comienza con la siguiente afirmación, en lo que respecta a la tragedia que conlleva la libertad sobre los recursos comunes, y que comparto plenamente: <<El problema de la población no tiene una solución técnica, sino que requiere una extensión fundamental en la moral>>. “The Tragedy of the Commons”. En *Science Journal*. Vol. 162. December, 1968, págs. 1243-1248.

### 1.1.2.- El ruido como molestia específica y preocupación cívica en el Imperio Romano

Algunos textos muestran que la existencia de ruido molesto o perturbador era un hecho en la antigüedad clásica. Se ignora, no obstante, su intensidad en decibelios, sobre la que sólo se podría especular basándonos en la mención de los efectos que han llegado hasta nosotros.

El problema del “ruido” [del latín *rugitus*: rugido] en la sociedad, cuenta con presencia desde el inicio de las civilizaciones, aunque en una primera aproximación al fenómeno pueda creerse que se trata de una cuestión propia de las sociedades industrializadas.

Un precedente singular se encuentra en un epigrama perteneciente al Libro XII, de los 15 que componen la obra de Marco Valerio Marcial (s. I), quien, después de haber pasado la mayor parte de su vida en Roma, aunque oriundo de *Bilbilis* (Calatayud), se muestra sumamente crítico con el exceso de ruido en la ciudad, hecho al que también se refieren otros autores coetáneos.<sup>25</sup>

Del mismo modo, alude a la desquiciante vida cotidiana en Roma Lucio Anneo Séneca (Córdoba, 4 a.C. - Roma, 65 d.C.).<sup>26</sup> Lejos de parecer un hecho anacrónico, la

---

<sup>25</sup> Cita literalmente el texto de Marcial referente al epigrama 57, Libro XII, MARTÍN MATEO, R. *Derecho Ambiental*. Ed. Instituto de Estudios de Administración Local. Madrid, 1977, pág. 566; *Tratado de Derecho Ambiental*, Vol. II (1ª ed.) Ed. Trivium. Madrid, 1992, pág. 601, nota 1; GARCÍA Y BELLIDO, A. *Urbanística en las Grandes Ciudades del Mundo Antiguo*. Ed. CSIC. Madrid, 2009, pág. 194; MACÍAS CASTILLO, A. *El daño causado por el ruido y otras inmisiones*. Ed. La Ley. Madrid, 2004, pág. 47. El poeta, utilizando un tono satírico, nos relata la ruidosa vida de Roma. Así, FEDELI, P. Se reproduce tan sólo un extracto: <<En Roma el pobre no puede ni pensar ni dormir. Pues ¿cómo dormir con los maestros de escuela por la mañana, los panaderos por la noche y el martillo del calderero durante todo el día? [...] A todas horas se oye gritar a los fanáticos de Bellona [sic] (diosa romana de la guerra), al náufrago charlatán que lleva del cuello colgada su historia, al judío adoctrinado por su madre en la mendicidad o al mercader que vende pajuelas para las lucernas... >>. En “La natura violata”, op. cit., págs. 96 y 97. La misma referencia al epigrama 57, pero citando otra parte del texto en RODRÍGUEZ NEILA, J. F. “Ecología en la Antigüedad clásica”, op. cit., pág. 56; GARCÍA RODRÍGUEZ, A. *La contaminación acústica. Fuentes, Evaluación, Efectos y Control*. Ed. Sociedad Española de Acústica. Madrid, 2006, pág. 14.

<sup>26</sup> Vid. GARCÍA Y BELLIDO, A. Se refiere a una parte de una epístola de Séneca (Sen., *Epist.* IV 2-4): <<... Séneca, por ejemplo, buena parte de una de sus epístolas a Lucillius la dedica a catalogar los múltiples ruidos que le llegan del establecimiento de baños que el filósofo cordobés tenía bajo su domicilio... >>. En “Urbanística en las Grandes Ciudades del Mundo Antiguo”, op. cit., pág. 193; FEDELI, P. Recoge el mismo lamento de Séneca. En “La Natura violata”, op. cit., pág. 95; HERRERA DEL REY, J. J., apunta otra bella cita de Séneca que bien podría ser un artículo de opinión dirigido a algún periódico de nuestros tiempos: <<... a mí gozar de sueño no dejan las risotadas de la turba transeúnte, y toda Roma se halla próxima a mi cabecera>>. En “La defensa jurídica contra la contaminación acústica”, op. cit., pág. 25. Vid. HENDY, D. Anota otra de las vívidas descripciones del poeta: <<Podría llevarme a mí mismo sólo escuchando la variedad de gritos entre las personas que venden bebidas, salchichas, pasteles; cada restaurante o bar tiene su propio vendedor ambulante con su

molestia y desasosiego que produce el ruido era ya objeto de enormes críticas en el entorno de la ciudad de Roma; aunque se asocia la susceptibilidad excesiva al ruido a personas poco tolerantes con los demás y, si se quiere, a pueblos, sociedades o personas de acusada sensibilidad, lo cierto es que los romanos iniciaron una serie de medidas, aunque escasas, con el fin de mitigar o disminuir la enorme clasificación de ruidos que se podían encontrar en el seno de una ciudad con saturación de habitantes, estructuras de edificación muy pobres y labores en su mayor parte artesanales ubicadas en los focos de población (talleres de toda índole, mercados, obras), así como el tráfico de los carruajes que circulaban por sus calles, las concurridas termas y la muchedumbre que inundaba las calles durante la noche.

Es claro que la literatura que ha llegado hasta nosotros sobre este aspecto proviene de poetas y filósofos, lo que no quiere decir que la mayoría de la población no lo sufriera, aunque debemos suponer que sus intereses de vida cotidiana en un entorno de supervivencia pura obstaculizaran su denuncia pública.<sup>27</sup>

El hecho de contar con testimonios sobre el efecto del ruido en ciudades como Roma, Pompeya o Nápoles durante el Imperio Romano nos permite constatar que, aún siendo este tipo de contaminación una de las más invisibles para la moderna ecología, lleva manteniendo su potencial dañino desde las primeras civilizaciones. Uno de sus

---

*propio soniquete reconocido>>.* (Sen., *Epist.* 56. 1-2). En *Noise. A Human History of Sound & Listening*. Ed. Profile Books Ltd. London, 2014, pág. 74.

<sup>27</sup> Algunas reflexiones de Juvenal acerca del ruido en la ciudad en HUGHES, D. J. “Ecology in Ancient Civilisations”, op. cit., págs. 145, 183 y 208; KAVALER, L., se remite al mismo texto de Juvenal, que reza así: << ¿Cuánto se puede dormir, os pregunto, en un alojamiento semejante? [...] El traqueteo de las carretas que pasan por esas calles estrechas y tortuosas, los juramentos de los carreteros atrapados en la congestión del tránsito [...] Solamente eso bastaría para que la más soñolienta de las vacas sagradas de un emperador se agitate en permanente insomnio>>. En *Ruido. La nueva amenaza*. Luis Coco (tr.) Ed. Tres Tiempos. Buenos Aires, 1977, pág. 21. En el mismo sentido, RODRÍGUEZ NEILA, J.F., quien reproduce escritos de Horacio, Juvenal, Séneca y Marcial. <<En época imperial Horacio (*Carm.*, 3, 29, 12) deploraba el humo, la riqueza y el ruido de Roma y Juvenal (3, 243-250) se lamentaba amargamente del trepidante y agotador bullicio de aquella megalópolis: “En Roma muchos enfermos mueren de insomnio [...] ¿En qué apartamento alquilado se puede conciliar el sueño? En Roma dormir cuesta un ojo de la cara” [...] Una colorista y variopinta catalogación de ruidos urbanos nos la ofrece Séneca (*Epist.*, 2, 2, 65-80), quien habitó un tiempo en Bayas, cerca de Nápoles, residiendo encima de un establecimiento público de baños, uno de los sitios más concurridos por los romanos [...] Marcial, después de haber descrito en uno de sus epigramas (12, 57) todos los tipos de sonidos que podían oírse en Roma e impedían dormir [...] acababa su reflexión con estas palabras: “Me despiertan las risas de la multitud que pasa, y tengo a Roma junto a mi cama. Aburrido con tanto fastidio, cuando quiero dormir me escapo al campo”>>. En “Ecología en la Antigüedad clásica”, op. cit., págs. 56 y 57. La cita íntegra, en CARCOPINO, J. *La vida cotidiana en Roma en el apogeo del Imperio*. Mercedes Fernández Cuesta (tr.) Ed. Temas de Hoy. Madrid, 1989, pág. 74; KOLB, F., quien describe otra acertada y satírica alusión al ruido del poeta Juvenal: << ¿A quién permite dormir la vivienda de alquiler? ¡Mucho dinero cuesta el sueño en la capital, ese es el meollo / del mal! Toda la noche ruedan los carruajes por el laberinto de callejuelas, donde se amontonan los hogares y resuenan los juramentos de los conductores>>. En “La ciudad en la Antigüedad”, op. cit., pág. 162. Estos testimonios demuestran que el discurso es plenamente actual, y constata que la presión del ruido en los ciudadanos no ha perdido vigencia.

principales problemas es que, al contrario que en otras clases de menoscabo medioambiental, en el que los resultados se revelan a largo plazo, o bien su visualización es evidente, cuando hablamos de *ruido* sólo podemos asociarlo a momentos determinados en aquellos núcleos concretos donde se produzca actividad humana. El ataque es tan directo y a la vez tan escaso su alcance geográfico, que resulta lógico que siempre hayan sido las administraciones locales las encargadas de su ordenación y regulación.<sup>28</sup>

Esa es una de las razones por las que, en relación al tratamiento histórico de la protección medioambiental, los referentes más remotos los encontremos vinculados a las entidades locales, de forma concreta a las medidas de higiene o salubridad del conjunto de la población con objeto de prevenir enfermedades colectivas.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Vid. “El Amigo del Pueblo”, año II, núm. 60. Hellín (Albacete), 21-4-1889. Publicación dominical de carácter semanal editada entre los años 1888-1895. Las actividades de ocio patrocinadas o, al menos permitidas por los Ayuntamientos, de carácter cultural, religioso o simplemente festivo, y que forman parte de la cultura ancestral de muchas ciudades, también han sido objeto de duras críticas ya en el s. XIX, por el *ruido* producido. Como ejemplo, este artículo [sin firma, como la gran mayoría de escritos en estos medios locales], publicado con objeto de denunciar las molestias que causaban los tambores durante la Semana Santa en la población de Hellín (Albacete) y del que, por expresivo, se reproduce un extracto: <<*Nadie como nosotros para respetar las prácticas y costumbres de un pueblo, sobre todo cuando tienen su asiento en la conciencia de sus individuos; pero nadie, como nosotros, para señalar los errores de la ignorancia y los dislates de la credulidad, por generalizados que se hallen [...] Pues bien, tachamos de bárbara la costumbre incomprensible de celebrar la Semana Santa, en este pueblo, con el atronador estrépito de centenares de tambores, que divididos en grupos más o menos numerosos recorren las calles, produciendo tal estruendo, que solo las personas dotadas de un organismo privilegiado pueden soportar sin molestia*>>. Continúa proponiendo las medidas que podrían adoptarse: <<*Comprendemos que hoy ya ningún alcalde quiera tomar a su cargo la corrección de este abuso; pero creemos que sin oponerse abiertamente a la corriente, (por más que al presente carece ya de fuerza), sería cosa fácil irla contrarrestando, obligando al pago de una cuota que iría aumentando cada año, a todo el que quisiera salir con el tambor y reduciendo las horas de permiso, sobre todo en la madrugada del viernes. Con esta simple medida se conseguiría en pocos años extirpar [sic] totalmente una costumbre que no nos honra, ó por lo menos reduciría hasta el punto de hacerla soportable*>>.

<sup>29</sup> Vid. LOPERENA ROTA, D. I. Las civilizaciones griega y romana prestaron importancia a las medidas higiénicas, principalmente para evitar plagas como la peste, fomentando la proliferación de baños termales, así como la construcción de acueductos y otras figuras urbanísticas. Durante la Edad Media, dicha defensa sufrió un gran retroceso, ya en la Edad Moderna la sanidad pública se focaliza hacia la tutela del medio ambiente con diferentes medidas para la prevención de la contaminación biológica, dirigida de forma exclusiva a prevenir patologías infecciosas. “La protección de la salud y el medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona en la Constitución”. En *Estudios sobre la Constitución Española. Homenaje al profesor Eduardo García de Enterría*, Vol. II. Ed. Civitas. Madrid, 1991, págs. 1455-1484, en especial 1458 y ss; LOZANO CUTANDA, B. Como ejemplo de la importancia en Derecho romano de la -salubritas-, que comprendía lo que hoy conocemos como “medio ambiente urbano”, la disposición del Digesto (D. 47.11.1); se considera merecedor de un severo castigo a <<*quien echara estiércol a alguien o le manchara con cieno o lodo, o ensuciara las aguas y contaminara las cañerías y depósitos u otra cosa en perjuicio público*>>. “Introducción al Derecho Ambiental y a la intervención administrativa para la protección del Medio Ambiente”. En LOZANO CUTANDA, B. / ALLI TURRILLAS, J-C. *Administración y legislación Ambiental*. (6ª ed.) Ed. Dykinson. Madrid, 2011, págs. 125 y 126; HOMO, L. La *Lex Iulia Municipalis* (año 45 a.C.) define las diversas funciones de los ediles en cuanto al mantenimiento de los servicios en las vías urbanas, que comprendían la limpieza, reparación del pavimento y recogida de basuras procedentes de las casas, mercados, etc. En “La Roma Imperial y el urbanismo en la antigüedad”, op. cit., pág. 179; MANGAS MAJARRÉS, J. <<*Todos los*

Para nuestros antepasados era impensable que dicho progreso provocase un agotamiento irreversible de los recursos, hecho que hoy resulta incontestable debido a los numerosos y rigurosos estudios científicos, así como que resultara altamente peligroso en relación al propio hábitat humano y al equilibrio psicosomático de los individuos.<sup>30</sup>

En general, se puede afirmar que no es característica del ruido la acumulación y persistencia de efectos que se incorporan a los distintos ciclos ecológicos, ni su trascendencia es tan palpable u objetivable como la que se produce en otras formas de contaminación.<sup>31</sup>

Además, no implica necesariamente una disminución o agotamiento de recursos naturales que puedan derivar en su completa desaparición, es decir, no se puede proclamar su finitud, si lo comparamos con otros tipos de entornos ambientales, como el suelo (en el que se puede producir erosión y degradación de la cobertura vegetal), el agua (que puede resultar perjudicial por partículas contaminantes, al tiempo que se trata de un medio claramente agotable), o la atmósfera (en la que las emisiones de diferentes gases contaminantes merman su calidad y dificultan la función respiratoria).

---

*usos semánticos del término policía se encontraban como competencias de los ediles: vigilancia del orden público, supervisión de obras públicas y públicas de la ciudad, limpieza de la ciudad, control sobre pesos y medidas, etc. Las leyes conservadas permiten comprender que, para la mayor eficacia de su gestión, se repartían zonas geográficas o de funciones al llegar al cargo>>.* En *Aldea y ciudad en la Antigüedad urbana*. Cuadernos de Historia. Vol. 7. Ed. Arco Libros. Madrid, 1996, págs. 73 y 74; HOMO, L. Se refiere de forma expresa al elevado nivel de contaminación atmosférica en la Roma imperial, producido en parte por el escaso espacio existente en las calles, que describe como <<angostas, tortuosas, incapaces de contener la intensa circulación que se agolpa en ellas>>. Mal congénito que nunca fue solucionado, ni siquiera por las obras emprendidas por Augusto (27 a.C. - 14 d.C.), Nerón (54-68), o Trajano (98-117). En “La Roma imperial y el urbanismo en la antigüedad”, op. cit., págs. 453 y 458.

<sup>30</sup> Los nuevos parámetros médicos entienden que una gran parte de enfermedades se encuentran relacionadas directamente con el entorno del individuo; huelga decir que los niveles de ruido de las grandes ciudades, por ejemplo, repercuten seriamente en el sueño. También se ha producido en los últimos 30 años un aumento de alergias provocadas directamente por la contaminación y sus efectos en el cuerpo humano, desconocidas hasta ahora, por no citar los innumerables e inexplorados virus que plagan las consultas médicas. Según informes de la ONU, la presencia de elementos tóxicos en los ríos y en la atmósfera provoca un promedio de 12.000 muertes por año sólo en América Latina, a la vez que interfiere en la salud de un incalculable número de personas, muchas de ellas niños, que se encuentran aún en fase de formación física y mental. Recientemente la Organización Médica Colegial (OMC), como miembro de la Asociación Médica Mundial (AMM), ha reclamado a los gobiernos y a la comunidad internacional que se otorgue mayor importancia a las consecuencias que para la salud tiene el cambio climático. Vid. *Revista Oficial del Consejo General de Colegios Médicos de España*, núm. 6, junio 2008. pág. 38. <https://www.cgcom.es/files/cgcom/files/RevistaOMC6.pdf> (último acceso 12/07/2015).

<sup>31</sup> Vid. MARTÍN MATEO, R. Sin embargo, alude al factor de distorsión ecológico, que resulta importante al relacionarlo directamente con la fisiología humana, proyectada para habitar un medio relativamente tranquilo en el que los niveles de ruido no superen excesivas intensidades. En “Derecho Ambiental”, op. cit., pág. 566.

Desde un ámbito estrictamente jurídico, una inicial legislación *anti-ruídos* por tráfico de vehículos la encontramos en disposiciones de época cesariana, que prohibían la circulación de carros y otros vehículos en la ciudad de Roma entre la salida del sol y la hora décima, excepto los vehículos dedicados a servicios públicos, lo que trasladaba a la noche el grueso de la emisión de ruidos.<sup>32</sup>

Los versos 55-67 de la *Lex Iulia Municipalis* recogen esta prohibición, exceptuando de la misma la circulación de carros y literas de vestales, del *rex sacrorum* y de los flamines, con ocasión de las ceremonias a las que acudían. Se extiende además a los carros que transportaban materiales destinados a edificios de culto, a obras públicas, y a los que formaban parte de la comitiva del triunfo y de los cortejos circenses.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Al intervalo entre la salida del sol y dos horas antes del ocaso alude RODRÍGUEZ NEILA, J.F. En “Ecología en la Antigüedad clásica”, op. cit., pág. 57. Vid. CANO CAMPOS, T. Recoge legislación romana sobre redes viarias, así como la preocupación del Derecho Romano por el fenómeno del tráfico y la circulación, calificando determinados bienes (vías por las que se circula) como *res publica*. En *El régimen jurídico-administrativo del tráfico. Bases históricas y constitucionales, técnicas de intervención y sanciones* (1ª ed.) Ed. Civitas. Madrid, 1999, págs. 54-58. Según CARCOPINO, J., si bien la necesidad de limitar la circulación en las ciudades se debió a los problemas de inseguridad y congestión que provocaban los vehículos, otras finalidades como la tutela y conservación de las vías públicas se fueron imponiendo a través de diferentes interdictos. Menciona también la *Lex Iulia Municipalis* refiriéndose a ella como -*La Ley póstuma de César*-, en refrendo a la opinión de que gracias a ella los habitantes de Roma sufrían durante la noche el incesante ruido de los carros: <<*Sin embargo, al llegar la noche comenzaba un incesante trasiego de carros que llenaba la ciudad con su estruendo*>>. En “La vida cotidiana en Roma en el apogeo del Imperio”, op. cit., pág. 75; HOMO, L. Menciona el contenido de esta importante ley municipal en cuanto a las funciones de los ediles y sus subordinados en materia de vialidad (limpieza de calles, pavimentado y reparación, ordenar la recogida de basura y despojos que provenían de casas y mercados, y otras labores de asistencia pública, como distribuciones o servicios médico-sanitarios. En relación a la circulación de vehículos, otro extracto incluido en los versos 56-68, tras reproducirse la prohibición a la que nos venimos refiriendo: <<*Los carros que durante la noche entren en la ciudad, siempre que estén vacíos o para ser empleados en la recogida de basuras, tendrán derecho, como anteriormente, a circular arrastrados por bueyes o por otras bestias de tiro, dentro de la ciudad de Roma o en los mil pasos a contar desde la ciudad de Roma, después de la salida del Sol durante las diez primeras horas del día. La presente ley no establece derogación alguna a este respecto*>>. Este principio, aunque después aumentaron los destinatarios y actividades sujetas a excepción, se mantuvo hasta los últimos tiempos del Imperio. En “La Roma imperial y el urbanismo en la antigüedad”, op. cit., págs. 163, 179, 323 y 333.

<sup>33</sup> Vid. ROTONDI, G. Realiza un resumen de la *Lex Iulia Municipalis* (*Tabula Heracleensis*) 709/45, conservada sobre dos tablas de bronce y descubiertas en 1732 en Heraclea (actual Nápoles); recuerda su carácter heterogéneo, ya que contiene diversas disposiciones (sobre los oficios municipales, censo local, distribución del grano, policía del tráfico en Roma, etc.). En *Leges Publicae populi Romani*. Ed. Societá Editrice Libreria. Milano, 1912, pág. 413. El texto completo original de esta disposición se encuentra en *Fontes Iuris Romani Antiqui*. Pars Prior Leges et Negocia (7ª ed.) Karl Georg Bruns (ed. lit.) Ed. Scientia. Aalen, 1969. págs. 102-110; PONTE ARREBOLA, V. <<*A través de los pasajes que componen la Lex Iulia Municipalis se detecta que viene consagrado todo un elenco de principios destinados a asegurar la inviolabilidad de las áreas públicas y, muy en especial, de las calles; a garantizar la conservación de las mismas. En general se busca su correcto estado para el fin al que vienen creadas: el uso por parte de todos*>>. La autora también aclara y subraya que esta disposición sobre el tránsito de vehículos, junto a otras particularidades de la *Lex* (pavimentado de aceras, prohibición de estorbar con construcciones), no aparecen reflejadas con exhaustividad en el título X del Digesto, que versa en su totalidad sobre las funciones de los ediles en las calles de Roma. “La búsqueda de la seguridad y el orden

Resulta acertado confirmar que no era la preocupación acústica de forma aislada la que llevó al emperador a dictar estas prohibiciones, eso es evidente, sino más bien descongestionar las angostas, sinuosas y destrozadas calles de Roma e intentar controlar la criminalidad.<sup>34</sup> Pero de algún modo, al atraer el máximo nivel de ruidos soportables a la tarde y la noche, el ruido comenzó a ser algo más que una perturbación momentánea.<sup>35</sup>

Este conjunto de disposiciones dictadas por el emperador Julio César permanecieron en vigor en los siglos posteriores, extendiéndose a otras ciudades del Imperio, al tiempo que fueron adecuándose a las necesidades cambiantes de los diferentes núcleos de población.<sup>36</sup>

---

en las calles de Roma”. En *Anuario da Faculdade de Direito da Universidade da Coruña*, Vol. 9. Ed. Universidade da Coruña, Servicio de Publicacións. La Coruña, 2005, págs. 723-738.

<sup>34</sup> Vid. CARCOPINO, J. Se refiere a las condiciones viarias de la antigua Roma, que hasta el final del Imperio <<constituyeron un amasijo informe antes que un sistema racional de comunicaciones>>. Las calles se dividían en *–itinera–* (camino peatonales), *–actus–* (camino por donde sólo cabía un carro) y *–viae–* (vías propiamente dichas, donde podían circular dos carros a la par o cruzarse). En “La vida cotidiana en Roma en el apogeo del Imperio”, op. cit., págs. 70-77; KOLB, F. Realiza una comparación en términos económicos entre las ciudades romanas y las de la Edad Media y principios de la Edad Moderna, asegurando que, aunque en principio la Antigüedad jugaba en desventaja en cuestión de transporte de mercancías (pues no conocían el tiro de caballos, sino de bueyes, que son más lentos), sin embargo las vías romanas eran mejores que las del siglo XVIII, estimándose la longitud vial romana en 90.000 kms. aproximadamente, concluyendo que <<... sería comparable la relación de los costes de viajes marítimos y terrestres en la Antigüedad y en la Europa de la tardía Edad Media/principios de la Edad Moderna>>. En “La ciudad en la Antigüedad”, op. cit., págs. 245 y 246.

<sup>35</sup> La interpretación de que el factor del ruido formaba parte de dicha disposición es seguida por CIPRIOTTI, P. <<Para evitar la congestión del tráfico y el estruendo Julio César prohibió en Roma en las horas diurnas –y precisamente desde la salida del sol hasta la hora décima (correspondiente a las 18), la circulación de carros, exceptuando aquellos necesarios al culto, a los trabajos públicos, a los espectáculos, a la limpieza urbana>>. “Contributo allo studio della disciplina della circolazione stradale nell’antichità: Roma e Pompei”. En *Revista Giuridica della circolazione e dei trasporti*. Vol. XV. Ed. L’Editrice dell’Automobile. Roma, 1961, págs. 262-277; HUGHES, D. J., cita la misma disposición cesariana (que si bien no fue derogada, cayó en desuso durante el siglo III), agregando el dato de que el tráfico debía ser muy denso entre las 16 y las 18 horas, ya que las calles carecían de iluminación nocturna. <<Juvenal y otros escritores comentaron duramente el nivel de la contaminación auditiva generada por el tráfico, las actividades industriales, la construcción y la demolición, los gritos de conductores y vendedores, y hasta de los niños de las escuelas recitando sus lecciones al unísono en alta voz>>. En “Ecology in Ancient Civilations”, op. cit., pág. 183.

<sup>36</sup> Claudio (41-54 d.C.) extendió la prohibición de circulación a los vehículos de transporte de personas en todas las ciudades italianas. Adriano (117-138 d.C.) limitó el peso de la carga que portaban los carros dentro de la ciudad de Roma, y Marco Aurelio (161-180 d.C.) extendió las prohibiciones a todas las ciudades del imperio, con independencia de cuál fuera su estatuto municipal. Aproximadamente un siglo y medio después de la publicación de las leyes de Julio César, bajo el poder de los emperadores Flavios (69-96) y de Trajano (98-117), sólo circulaban por Roma los vehículos de los constructores. Vid. CARCOPINO, J. En “La vida cotidiana en Roma en el apogeo del Imperio”, op. cit., págs. 76 y 77; CIPRIOTTI, P. Refiere las mismas citas a los emperadores posteriores a César, añadiendo que quizá las limitaciones de carga de vehículos, como las prohibiciones de andar a caballo se siguieron para impedir daños excesivos a la pavimentación y alcantarillado de las calles. En “Contributo allo studio della disciplina della circolazione stradale nell’antichità: Roma e Pompei”, op. cit., pág. 265.



Existía también un poderoso ruido diurno y vespertino, y una novedosa función de orden cívico, competencia de los ediles, que consistía en mantener el orden en las actividades que llevaban a cabo las numerosas y distintivas clases de tiendas, comercios y talleres, que irremediablemente inundaban las comprimidas calles de ruidos, y, por ende, las casas, en su mayoría construidas con materiales muy débiles, sumándose a estos factores la intensidad del tráfico.<sup>37</sup>

Hay que tener en cuenta además el factor de vida pública que se daba en la Roma imperial, con diversos espectáculos celebrados en anfiteatros y otros edificios públicos, en los que la población participaba activamente.<sup>38</sup>

En relación a las acciones que podían alegar los particulares para limitar determinadas inmisiones en el marco de las relaciones de vecindad (*alterum non laedere*), las fuentes revelan que no existía una acción específica para impedir tales

---

<sup>37</sup> Vid. KOLB, F. La anchura media de las calles era de 4'5 metros y sólo en el caso de arterias principales rozaba los 7 metros. El número de habitantes en Roma se puede situar de forma aproximada entre 600.000 y 1.000.000, si bien se supone que disminuyó de forma considerable a partir del siglo III. Teniendo en cuenta la altura de los edificios de viviendas, que Augusto cifró en 70 pies romanos (equivalentes a unos 18 ó 20 metros y, por tanto, a unas 6 ó 7 plantas) y la ruina que amenazaba a sus muros, las conclusiones son que el ruido soportado en las calles de Roma era insufrible. En "La ciudad en la Antigüedad", op. cit., págs. 161 y ss. Vid. CIPRIOTTI, P. Acerca de la cruda intensidad del tráfico en Pompeya (ciudad de dimensiones mucho más reducidas que Roma), probada por los profundos surcos que las ruedas de los carros (con medidas entre 1'48 y 1'35 metros) han dejado en la pavimentación de algunas calles. En "Contributo allo studio della disciplina della circolazione stradale nell'antichità: Roma e Pompei", op. cit., pág. 269; MALAVÉ OSUNA, B. Resalta la construcción de las llamadas –*tabernae*– (en origen cualquier habitáculo apto para vivienda), con tablonés de madera, y que paulatinamente fueron traduciendo por "tienda" (en las que se desarrollaban tanto actividades diarias de mercado o abastecimiento como educativas, ya que también en ellas se instalaban escuelas donde los maestros ejercían la enseñanza; un sinnúmero de actividades que dio lugar a la especialización del término: –*taberna vinaria*–, –*taberna sutoria*–). Eran desmontables y se colocaban en las galerías porticadas del foro, después por todas las calles e incluso junto a las murallas, por lo que la cercanía a las casas debido al escaso espacio de las calles, debía ser extrema. En *Legislación urbanística en la Roma Imperial. A propósito de una Constitución de Zenón*. Ed. Servicio de Publicaciones. Universidad de Málaga. Málaga, 2000, págs. 245, 246 y 264-270. Si además tenemos en cuenta que una norma de la Constitución de Zenón (C. 8, 10, 12, 6) obligaba a que los que quisieran instalar una *taberna* en los pórticos de la zona urbana a adornar su exterior con mármoles, por razones de estética urbana, es fácil imaginar que la escala de ruidos como mínimo era variopinta.

<sup>38</sup> En lo que atañe a actividades ruidosas, vid. PONTE ARREBOLA, V. Fragmentos del Título X del Digesto así lo atestiguan, en especial el que corresponde al D. 43. 10.1.4 (*Ex libro singulari Papiniani de officio aedilium*): <<Ya que entre las calles se abrían tiendas de herreros, barberos, zapateros, laneros, peñadoras, bataneros, carniceros, tintoreros, etc., que no dudaban en reclamar la atención de los paseantes de la manera más "ruidosa" e incluso incómoda para la circulación, también debían los ediles vigilar que no fueran arrojados objetos a la calle, o colocados fuera de estos establecimientos>>. En "La búsqueda de la seguridad y el orden en las calles de Roma", op. cit., pág. 729. Ulpiano alude al papel de policía que ejercían los ediles desde la época de la República hasta la de Nerón y Vespasiano. Vid. HOMO, L. Dice Ulpiano en un fragmento recogido en el Dig., I, 12 (*De officio praefecti Urbi*), 12: <<Debe (el prefecto de la ciudad) tener retenes dispuestos a velar por el sosiego de la población y darle cuenta de lo que suceda>>. En otra parte de la obra se alude a la vida sumamente ruidosa en Roma, a causa de la superpoblación que soportaba, cuya noticia nos ha llegado por la obra de escritores contemporáneos. En "La Roma Imperial y el urbanismo en la antigüedad", op. cit., pág. 115, nota 22 y pág. 304.

agresiones. Cabe recordar aquí que para el Derecho Romano la acción era condición primaria e inexcusable del derecho que se reclamaba o pretendía.<sup>39</sup>

Así, existe casuística desde un punto de vista procesal, aunque escasa, sobre el papel que desempeñó la *Lex Aquilia* como fuente de obligaciones, si bien, a pesar de su extensión, sólo se podría encauzar este tipo de daños de carácter privado a través del concepto de la *iniuria* y su acción correspondiente, la *actio iniuriarum*.<sup>40</sup>

En materia de ruidos, probablemente sean las relaciones de vecindad las que poseen más virtualidad de proyección y contenido, dentro del concepto amplio de ambiente que se maneja en nuestro ordenamiento jurídico. De hecho, el ambiente ha sido siempre centro de atención para el Derecho civil, vinculado a figuras propias de relaciones de vecindad, aunque el papel preponderante en cuanto a su protección lo haya ejercido históricamente el Derecho administrativo, uniéndose el Derecho penal al triplete de jurisdicciones a partir de la primera inclusión del denominado delito ecológico. Hasta que por primera vez nuestro Código Penal acogió la regulación de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente en 1983, la ordenación

---

<sup>39</sup> Precisamente ha sido el término *inmissio* el que ha configurado el régimen de las relaciones de vecindad desde Roma, y no a la inversa. Vid. MACÍAS CASTILLO, A. <<En este sentido, la “*inmissio*” significó, [...] la existencia de una fricción vecinal, de una disputa que debía saldarse con la concreción necesaria de aquellos límites dentro de los cuales la injerencia debía ser tolerada o, por el contrario, tornarse ilícita>>. Se incluyen en el concepto de *inmissio* los desagües de los tejados, servidumbres de luces, cloacas, intromisión de animales domésticos en el fundo ajeno, inmisiones producidas en la vía o lugares públicos, pero en todo caso las más frecuentes son las que hacen referencia al derecho de propiedad, servidumbres en general y otros derechos reales. Asimismo, la evolución de las acciones penales condujo al origen de la idea de reparación, ya que la propia aplicación de una acción penal no correspondía necesariamente a lo que hoy conocemos por delito, sino a la imposición de una multa pecuniaria que sobrepasaba el valor de una simple indemnización. En “El daño causado por el ruido y otras inmisiones”, op. cit., págs. 36-42.

<sup>40</sup> Sobre la influencia de la *Lex Aquilia* en la protección contra las inmisiones, vid. MACÍAS CASTILLO, A. Realiza un estudio evolutivo acerca de la verdadera aplicación de esta ley en el tema que nos concierne, ley concebida por los romanos dentro de un sistema de delitos privados en el derecho romano arcaico. Tres supuestos se contemplaban ya en las XII Tablas: el *membrum ruptum*, el *os fractum* y las llamadas *iniuriae* menores. El desarrollo jurisprudencial de la *actio iniuriarum* desembocó en una acción que servía a cualquier ofensa proferida contra los derechos de personalidad, pero el autor considera que su aplicación fue ocasional y, en todo caso, sometida al requisito del daño causado por las inmisiones. Otras soluciones jurídicas de defensa contra las inmisiones, que tampoco son específicamente diseñadas para evitar este tipo de agresiones, sino que se proyectan hacia la defensa de la propiedad en sentido estricto, las encontramos en una serie de interdictos usados por el Pretor, como el interdicto *de cloacis* (limpieza o reparación de cloacas privadas); el interdicto *ne quid in loco publico vel itinere fiat* (que nada se haga en lugar público); el interdicto *quod vi aut clam* (construcciones en suelo ajeno). Amén de otros institutos procesales como la *actio pluviae arcendae* (modificación del cauce natural de agua de lluvia), o bien de carácter extraprocesal, como la *cautio damni infecti* (promesa ante el Pretor de resarcir los daños que pudiera ocasionar una obra sobre una finca ajena). En “El daño causado por el ruido y otras inmisiones”, op. cit., págs. 40-66. Vid. JORDANO FRAGA, J., que cita básicamente los mecanismos jurídicos de reacción frente a las actividades consideradas lesivas en el Dig. En *La protección del derecho a un medio ambiente adecuado*. Ed. Bosch. Barcelona, 1995, págs. 17-22.

ofrecida por nuestro sistema jurídico era rudimentaria, escasa y fragmentaria, lo que se correspondía con el escaso interés que suscitaba todo lo relacionado con el ambiente.<sup>41</sup>

Por supuesto, *Hispania* no fue una excepción dentro del Imperio Romano y así, en la *Lex Irnitana* (descubierta en el municipio de El Saucejo (Sevilla) y que reflejaba las leyes municipales del periodo de los emperadores Flavios (69-96 d.C.), se encuentran disposiciones sobre las funciones de los ediles que reproducen lo contenido en las leyes municipales de finales de la República.<sup>42</sup> También en lo que a urbanismo se refiere, algunas ciudades privilegiadas como Osuna (Sevilla) o Malaca (Málaga) reprodujeron el modelo romano, buscando unas óptimas condiciones urbanísticas, que permitieran unos usos mínimamente salubres y ordenados.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Como expresan SILVA SÁNCHEZ, J. M. / MONTANER FERNÁNDEZ, R. Que desde 1983 la tipificación de conductas atentatorias contra el medio ambiente fuera un hecho en nuestro ordenamiento penal, responde a la toma de conciencia que nuestra sociedad ha ido aprehendiendo en relación a la importancia del <<... mantenimiento y protección de las condiciones del entorno ambiental>>. En *Los delitos contra el medio ambiente. Reforma legal y aplicación judicial*. Ed. Atelier. Barcelona, 2012, pág. 15. Por LO 8/1983, de 25 de junio, de Reforma Parcial y Urgente del CP se incorporó el art. 347 bis: <<Será castigado con la pena de arresto mayor y multa de de 175.000 a 5.000.000 de pesetas, el que contraviniendo las Leyes o Reglamentos protectores del medio ambiente, provocare o realizare directa o indirectamente emisiones o vertidos de cualquier clase, en la atmósfera, el suelo o las aguas territoriales o marítimas, que pongan en grave peligro la salud de las personas o puedan perjudicar gravemente las condiciones de vida animal, bosques, estaciones naturales o plantaciones útiles. Se impondrá la pena superior en grado si la industria funcionara clandestinamente sin haber obtenido la previa autorización o aprobación administrativa de corrección o suspensión de la actividad contaminante, o se hubiere aportado información falsa sobre los aspectos ambientales de la misma o se hubiere obstaculizado la actividad inspectora de la Administración. También se impondrá la pena superior en grado si los actos anteriormente descritos originaren un riesgo de deterioro irreversible o catastrófico. En todos los casos previstos en este artículo podrá acordarse la clausura temporal o definitiva del establecimiento, pudiendo el Tribunal proponer a la Administración que disponga la intervención de la empresa para salvaguardar los derechos de los trabajadores>>. Vid. JORDANO FRAGA, J. Hasta fechas muy recientes, la intervención del Derecho, en sus diversas aplicaciones, y en lo que respecta al medio ambiente no se ha producido desde una <<ratio estrictamente ambiental>>, ya que siempre han prevalecido otro tipo de motivaciones, como las de carácter religioso, conservacionista, higiénico-sanitarias, económicas y de seguridad nacional. En “La protección del derecho a un medio ambiente adecuado”, op. cit., pág. 16.

<sup>42</sup> Vid. MANGAS MANJARRÉS, J. El Capítulo 19 de la *Lex Irnitana* se refiere a las competencias y funciones de los ediles, magistrados de segundo rango por detrás de los *dunviros*: <<Los que han sido nombrados ediles en ese municipio (antes de la presente ley) en virtud del edicto del emperador [...] sean ediles del municipio Flavio Irnitano. Tengan éstos derecho y potestad de exigir y repartir suministro, templos, lugares sagrados y religiosos, villa, calles, barrios, cloacas, baños, mercado, pesas y medidas,...>>. En *Leyes coloniales y municipales de la Hispania romana*. Cuadernos de Historia. Vol. 86. Ed. Arco Libros. Madrid, 2001, pág. 38.

<sup>43</sup> La Ley colonial de *Urso* (*Lex Ursonensis*) o las leyes de *Malaca* (*Lex Malacitana*) e *Irni* (*Lex Irnitana*) reproducen normas antiguas municipales. Vid. MANGAS MANJARRÉS, J. Se incluye normativa específica sobre el mantenimiento de caminos y calles, el control de agua, sepulturas y hornos crematorios, producción industrial de tejas dentro del núcleo urbano o construcción y reedificación de edificios. <<... se especifica que, para que se pueda conceder permiso para destejear, destruir o demoler un edificio, se precisa el compromiso de “reedificarlo dentro del año próximo”. Tal medida no iba dirigida a coartar la libertad del propietario en el manejo de sus propios bienes, sino a evitar que el deseo de especulación pudiera derivar en la conversión del interior de la ciudad en un conjunto de

La civilización romana, a la vez que influyó negativamente sobre el entorno natural a través de sus múltiples actividades (agrarias, bélicas, industriales, urbanísticas, de esparcimiento, etc.) fue también capaz de percibir el trastorno que se ocasionaba a la Naturaleza como ente singular y unitario.<sup>44</sup> Ésta se revelaba contra el hombre una y otra vez y además, contaban con la experiencia griega, aunque ésta fuese de escasa entidad debido a su profunda idiosincrasia mitológica. Por tanto, no resulta descabellado afirmar que, al igual que existía la contaminación atmosférica o acuífera en Roma y otros núcleos importantes de población a lo largo del Imperio, los romanos soportaron niveles de ruido en algunos casos mayores que los actuales, sopesando y considerando, claro está, las diferencias en cuanto a la tecnología productora de ruidos, los medios técnicos con los que cuenta la sociedad actual para minimizarlos, y la evolución del umbral sonoro-auditivo por el ruido emitido en los seres humanos.<sup>45</sup> Si realizamos una comparativa entre las dos sociedades en toda su extensión y dimensión, el ínfimo interés en su regulación probablemente se explique por la cualidad de finitud del fenómeno del ruido (que se inicia y finaliza en el preciso momento de su emisión), que precisamente es una de las características que lo diferencia del resto de ataques al medio ambiente, porque no produce alteraciones visibles o perceptibles, mucho menos a medio o largo plazo de tiempo; al contrario que fenómenos naturales como incendios, inundaciones, los gases emanados a la atmósfera, la erosión del suelo, o los cambios de color, olor y sabor de los cauces acuíferos, por citar tan sólo unos ejemplos.<sup>46</sup>

---

*solares*>>. En “Leyes coloniales y municipales de la Hispania romana”, op. cit., págs. 52-57; HOMO, L. Sobre las mismas disposiciones acerca de los requisitos en cuanto a la construcción y demolición de edificios en leyes de la Hispania romana. En “La Roma imperial y el urbanismo en la antigüedad”, op. cit., págs. 420 y 421. En este sentido RODRÍGUEZ NEILA, J.F., comenta los efectos beneficiosos de estas normativas sobre la higiene urbana, evitando la proliferación de solares que podían convertirse en auténticos basureros, provocando suciedad y contaminación. En “Ecología en la antigüedad clásica”, op. cit., pág. 49.

<sup>44</sup> Vid. SANZ LÓPEZ, C. / SÁNCHEZ ALHAMA, J. Sugieren la idea de que el Imperio Romano no sólo causó estragos ecológicos en zonas occidentales, sino que trasladó la degradación ecológica a otras áreas del mediterráneo, como el norte de África, por la expansión de sistemas de cultivo de cereales, convirtiendo tierras muy fértiles en auténticos desiertos. En “Medio ambiente y sociedad. De la metáfora organicista a la preservación ecológica”, op. cit., págs. 53 y 54.

<sup>45</sup> Como acertadamente indica CUADRADO PÉREZ, C., a la vez que las viviendas se dotan de aparatos de gran potencia sonora inimaginables en tiempos no muy remotos, es demasiado habitual que las construcciones carezcan de un correcto aislamiento acústico, así que la situación no dista mucho de la vivida por nuestros antepasados. <<*No obstante este incremento de las situaciones conflictivas, la esencia de las relaciones de vecindad continúa siendo idéntica, pues existe un deber genérico, cuyo incumplimiento provoca el surgimiento de responsabilidad: “alterum non laedere”*>>. En *Ruido, inmisiones y edificación*. Colección Urbanismo y Derecho. Carlos Rigel Vide / Martín Bassols Coma (dirs.) Ed. Reus. Madrid, 2002, págs. 20 y 21.

<sup>46</sup> No obstante, sus efectos en los seres humanos y en la fauna sí son acumulables. De esta opinión, MARTÍN MATEO, R., si bien acotando tan sólo los efectos adversos en el hombre y diferenciando este

No obstante, es preciso subrayar que un pueblo tan preocupado por el aspecto urbano y por el ejercicio de la ciudadanía, no se ocupó en exceso de solventar un problema que se detecta como molesto, irritante, en algunos casos insoportable, según las noticias que han llegado hasta nosotros, y que hemos examinado a lo largo de este epígrafe.<sup>47</sup>

---

tipo de contaminante de otras manifestaciones contra el ambiente. En *Tratado de Derecho Ambiental*, Vol. II, op. cit., págs. 603 y 604.

<sup>47</sup> Vid. RAMS ALBESA, J. Critica los instrumentos con que cuenta el Derecho civil para la protección contra el ruido porque considera que no están dotados de la ductilidad necesaria para adecuarse, por ejemplo, a determinadas actividades que no tienen porqué dejar de existir, pero que irremediamente deben ser revisadas para dejar de perjudicar a personas o bienes próximos o vecinos. <<... *es claro que los instrumentos propios del Derecho civil para defenderse de las inmisiones contaminantes resultan ser los mismos que se ofrecían a los ciudadanos de la antigua Roma, que no contaba con más contaminación que la generada por la actividad artesanal de elaboración de alimentos [...]; los derivados de la estabulación de ganado de carne y de fuerza motriz; y poco más, ya que el sistema romano de alcantarillado y limpieza públicas fueron modélicos*>>. Además, tiene en cuenta que una gran concentración de actividades ruidosas en las ciudades, cae en el seno de actividades producidas por las administraciones públicas. Prólogo a la obra de Carlos Cuadrado Pérez. *Ruido, inmisiones y edificación*. Colección Urbanismo y Derecho. Carlos Rigel Vide / Martín Bassols Coma (dirs.) Ed. Reus. Madrid, 2002, pág. 11.

## II.- ECOLOGÍA Y EDAD MEDIA. PERIODO CARENTE DE EVOLUCIÓN EN CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES

La crisis económica sufrida por el Imperio Romano a partir del siglo III afectó irremediablemente a lo urbano, produciendo una creciente ruralización y, en consecuencia, la desaparición de muchas ciudades como centros de consumo. Posteriormente, con la influencia del cristianismo, las ciudades como núcleos urbanos fueron recuperando su posición desde finales del siglo IV hasta que, de nuevo se vio frenada por las invasiones de escandinavos, sarracenos y húngaros, en los siglos IX y X. Pero es en el periodo que comprende los siglos XI-XIII cuando se produce el mayor esplendor en el desarrollo del fenómeno urbano de Occidente.<sup>48</sup>

Uno de los mayores problemas medioambientales en la Edad Media era el provocado por la quema de carbón, sobre todo en ciudades localizadas en regiones frías con una primaria y rudimentaria industrialización, no así en regiones de clima mediterráneo o seco.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Vid. PINON, P. Establece una única diferencia urbanizadora entre ambos universos, oriental y occidental; apunta que en éste último, desde la Baja Edad Media, se produce una reconquista del espacio público, <<... por las reglas edilicias y las prácticas de alineamiento, de localización y de urbanización regulares, lo que ha otorgado parcialmente de nuevo a las ciudades occidentales una nueva ordenación, mientras que en Oriente ha sido necesario esperar al siglo XIX para que tal concepción comience a ser adoptada, bajo la influencia europea... >>. “La transición desde la ciudad antigua a la ciudad medieval. Permanencia y transformación de los tejidos urbanos en el mediterráneo oriental”. En *La ciudad medieval: de la casa al tejido urbano*. Actas del primer Curso de Historia y Urbanismo Medieval organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha. Jean Passini (coord.) Ed. Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenca, 2001, págs. 179-213. Vid. ASENJO GONZÁLEZ, M. En esta época renacieron o se construyeron la mayoría de ciudades que en la actualidad componen la red urbana de Europa Occidental. En *Las ciudades en el occidente medieval*. Cuadernos de Historia, Vol. 14. Ed. Arco Libros. Madrid, 1996, págs. 9-12. Desde el punto de vista de la climatología urbana, OLCINA CANTOS, J. / MARTÍN VIDE, J., interpretan que si bien esta especialidad nace en los inicios del siglo XX, tanto el mundo clásico como el medieval conocían los procesos urbanos que modifican el clima, entre ellos la contaminación atmosférica. En “La influencia del clima en la historia”, op. cit., pág. 73. Vid. FUMAGALLI, V., que acentúa el crecimiento espectacular de las ciudades en dimensiones y número a partir del siglo XI, sobre todo en Italia, donde no se produjo una ruptura entre campo y ciudad. En *Las piedras vivas. Ciudad y naturaleza en la Edad Media*. Carlos Alonso (tr.) Ed. Nerea. Madrid, 1989, págs. 35 y 36.

<sup>49</sup> A los problemas de contaminación atmosférica en este extenso periodo se refieren OLCINA CANTOS, J. / MARTÍN VIDE, J. Londres era una ciudad con niveles de contaminación alarmantes y por ello hubo que recurrir a la promulgación de bandos que prohibían la quema de carbón en la ciudad; citan el año 1306, durante el reinado de Eduardo I y también durante el reinado de Isabel I. Pero los antecedentes documentados se remontan a 1257: <<El caso más antiguo y curioso sobre contaminación del aire [...] ocurrió en el castillo de Nottingham [...] donde, en una estancia allí, la reina Leonor de Provenza se quejó del hedor procedente del humo del carbón, que le obligó incluso a trasladarse al castillo de Tutbury para preservar su salud>>. Sin embargo, en las regiones de clima mediterráneo o

Pero sin duda, uno de los focos ambientales más devastador fue el ocurrido a consecuencia de la catastrófica epidemia de la peste [conocida como la Peste Negra (1348-1351)] en un contexto urbano, donde se dejó sentir con especial crudeza debido a que la propagación de la enfermedad sucedió de manera muy rápida, coincidente con una etapa designada como la “pequeña edad del hielo”.<sup>50</sup>

Los contagios masivos precisamente se produjeron por las pésimas condiciones de higiene, salubridad, carestía y hambruna en las que se encontraban las ciudades de la primera mitad del siglo XIV, que arrastraban una crisis económica y social iniciada en el mundo rural durante la segunda mitad del siglo anterior.<sup>51</sup>

El tránsito del paganismo grecorromano al cristianismo en la ecología medieval, convirtió al pensamiento ecológico en antropocéntrico, doctrina ya nunca abandonada y sustentadora de las legislaciones ambientales desde sus inicios. Para la doctrina cristiana del medievo, el hombre domina a la Naturaleza y ésta existe en la medida en que pueda ayudar al hombre a conseguir un progreso indefinido; por tanto, se adopta un

---

seco, proliferaron las técnicas de construcción árabes como las *medinas*, con sus calles estrechas para protegerse del sol y el calor, o el uso de juegos de agua para refrescar el ambiente de viviendas oficiales y civiles, etc. En “La influencia del clima en la historia”, op. cit., págs. 75 y ss. Vid. WHITE, L., que alude también a la contaminación de Londres en 1285 por la combustión del carbón ligero (turba seca utilizada como combustible), así como a fenómenos de erosión del suelo y deforestación con motivo del uso de los primeros cañones en el siglo XIV, que afectaron a la ecología al tener que enviar hombres a las regiones donde había potasio, azufre, hierro o carbón. “The historical Roots of Our Ecological Crisis”. José Tomás Ibarra, Francisca Massardo y Ricardo Rozzi (trads.) En *Revista Ambiente y Desarrollo de CIPMA*, núm. 23 (I). Santiago de Chile, 2007, págs. 78-86. La situación se repitió transcurridos unos cuantos siglos. Al respecto vid. SOUTH, N. / WHITE, R. En 1898, Sir William Blake Richmond fundó en Londres *The Coal Smoke Abatement Society* como una obra de caridad (más tarde *The National Society for Clean Air*, rebautizada de nuevo en 2007 como *Environmental Protection UK*), con la misión de fomentar una campaña para ofrecer una respuesta a la fuerte contaminación del aire en esos momentos y dibujar alternativas apropiadas al uso del carbón en el debate científico. La controversia sobre las alternativas al carbón continúa presente hoy en día, especialmente en aquellas economías dependientes de minerales, como el caso de Australia. “The Antecedents and Emergence of a “Green” Criminology”. Conference Paper: American Society of Criminology. En *Annual Meeting Presidential Papers. Selected Papers from the Presidential Panels: Expanding the Core –Neglected Crimes, Groups, Causes and Policy Approaches–*. Atlanta (USA), November 2013. Disponible en: [https://asc41.com/Annual\\_Meeting/2013/Presidential%20Papers/South,%20Nigel-White,%20Rob.pdf](https://asc41.com/Annual_Meeting/2013/Presidential%20Papers/South,%20Nigel-White,%20Rob.pdf) (último acceso 12/07/2015).

<sup>50</sup> En este sentido MORALES MUÑIZ, A. / MORALES MUÑIZ, D. <<La climatología relativamente benigna de los siglos pleno medievales (XI-XIII) se deterioró a partir de la mitad del XIV, en lo que ha venido a llamarse pequeña edad del hielo, coincidiendo con una etapa de crisis cuya imagen más paradigmática es la peste negra y sus terribles consecuencias en la demografía y en los paisajes ibéricos>>. “¿De quién es este ciervo?: Algunas consideraciones en torno a la fauna cinegética de la España medieval”. En *El medio natural en la España medieval*. Actas del I Congreso sobre ecohistoria e historia medieval. Julián Clemente Ramos (ed.) Ed. Universidad de Extremadura. Cáceres, 2001, págs. 383-406; FUMAGALLI, V. “Las piedras vivas. Ciudad y naturaleza en la Edad Media”, op. cit., págs. 80 y ss.

<sup>51</sup> Vid. ASENJO GONZÁLEZ, M. Cuantifica las muertes entre un 30% y un 50% en la mayoría de las ciudades. Milán, Génova, Florencia o Nápoles se quedaron con una población inferior a 100.000 habitantes, mientras que Roma, Bolonia o Palermo la vieron reducida a una cantidad que oscila entre los 30.000 y 50.000, al igual que lo estimado en la Península Ibérica (Barcelona, Córdoba, Sevilla, Granada) o en la ciudad lusitana de Lisboa. En “Las ciudades en el occidente medieval”, op. cit., pág. 61.

modelo antropocéntrico puro.<sup>52</sup> A la vez, la Edad Media en Occidente supuso una verdadera revolución industrial y científica ya vislumbrada de forma tenue varios siglos atrás, refrendada por numerosos datos históricos<sup>53</sup>, pero en cualquier caso su concepción filosófica y religiosa de la ciencia no hizo posible una revolución del mismo rango en la protección del ambiente, precisamente por la sujeción de la Naturaleza a los deseos humanos.<sup>54</sup>

Una de las razones que nos pueden hacer pensar en la ausencia de normas reguladoras del ruido en las ciudades, sobre todo en relación a los sujetos, se debe a la incorporación de los gremios de artesanos y comerciantes a la vida de las ciudades (s. XI), ya que tenían sobrada capacidad para intervenir en cuestiones municipales de su

---

<sup>52</sup> Vid. WHITE, L. Dibuja lo que el cristianismo comunicó al hombre sobre sus relaciones con el ambiente: <<El cristianismo es la religión más antropocéntrica que el mundo ha conocido, especialmente en su forma occidental [...] El hombre comparte, en gran medida, la superioridad de Dios sobre la naturaleza. El cristianismo, en contraste absoluto con el paganismo antiguo y las religiones asiáticas (exceptuando quizás, al zoroastrismo), no solo estableció un dualismo entre el hombre y la naturaleza, sino que también insistió en que era la voluntad de Dios que el hombre explotara la naturaleza para su propio beneficio>>. Para el autor, poco ha cambiado al respecto y el hecho de que las religiones influyan tanto en la filosofía ecológica se debe a que las personas se ocupan de la ecología dependiendo de cómo se ven a ellas mismas en relación al mundo que las rodea; por ello <<La ecología humana está profundamente condicionada por las creencias acerca de nuestra naturaleza y destino, es decir, por la religión. Para los occidentales esto es evidente en la India o Ceilán. Esto es igualmente cierto para nosotros y nuestros ancestros medievales>>. En “The historical Roots of Our Ecological Crisis”, op. cit., págs. 82 y 83.

<sup>53</sup> Vid. ACIÉN ALMANSA, M. Muestra abundantes datos sobre la actividad comercial e industrial en ciudades como Córdoba, Granada, Ronda, Sevilla, Almería o Alicante, ciudad donde se ha documentado la existencia de una zona industrial anterior al siglo XI. “La formación del tejido urbano en al-Andalus”. En *La ciudad medieval: de la casa al tejido urbano*. Actas del primer Curso de Historia y Urbanismo Medieval organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha. Jean Passini (coord.) Ed. Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenca, 2001, págs. 11-32.

<sup>54</sup> Cfr. MATELLANES MERCHÁN, J. V., que observa en los Fueros del siglo XIII la primera respuesta ecológica ante la explotación del medio natural, mencionando incluso esta época como la primera en legislar sobre cuestiones de contaminación ambiental e incluso acústica. Pero desde un análisis integrador, concluye que la relación entre el hombre medieval y su entorno está mediatizada por la defensa de unos bienes vitales para la supervivencia, no por cuestiones conservacionistas, sino por la necesidad de proteger el equilibrio que haga posible la economía de subsistencia. “Aproximación a la política ecológica y cinegética en los Fueros del siglo XIII”. En *El medio natural en la España medieval*. Actas del I Congreso sobre ecohistoria e historia medieval. Julián Clemente Ramos (ed. lit.) Ed. Universidad de Extremadura. Cáceres, 2001, págs. 335-356. Vid. WHITE, L. Cuestiona la influencia que la teología pudo tener en científicos como Galileo, Newton o Leibnitz, hasta que a finales del siglo XVIII se desechó por muchos científicos la <<... hipótesis de Dios>>. En “The historical Roots of Our Ecological Crisis”, op. cit., pág. 84; CLEMENTE RAMOS, J. Interpreta la fase de la Edad Media como gran transformadora en términos generales, pero el terreno ecológico aparece como condicionante negativo de la actividad económica. Tal hipótesis se sustenta con una ausencia casi total de parajes vírgenes a finales de la Edad Media. “La evolución del medio natural en Extremadura (c. 1142-c.1525)”. En *El medio natural en la España medieval*. Actas del I Congreso sobre ecohistoria e historia medieval. Julián Clemente Ramos (ed. lit.) Ed. Universidad de Extremadura. Cáceres, 2001, págs. 15-56. Vid. JORDANO FRAGA, J. Considera que esta etapa histórica no presenta un enfoque ambiental en sus normas, sino que se enmarcan en la esfera de protección de derechos e intereses particulares, aunque sin proponérselo surgiera a través de las mismas un <<primigenio derecho de los recursos naturales>>. En “La protección del derecho a un medio ambiente adecuado”, op. cit., págs. 23-25.



interés, como lo relacionado a normas o sanciones que afectarían a sus respectivos oficios y negocios, llegando incluso a distribuirse calles enteras en las que se instalaban por sectores específicos (alfareros, curtidores, cuchilleros, tejedores, zapateros, cerrajeros, etc.) Fijaban unas minuciosas ordenanzas en las que se indicaban las técnicas de trabajo, instrumentos que debían utilizarse, número de empleados o días considerados festivos, así como cuestiones de muy diversa índole.<sup>55</sup>

El umbral de ruido tenía por fuerza que ser superior al soportado por la civilización greco-romana, porque además de producirse un aumento considerable de población, la profusión de iglesias, templos y monasterios generaba un constante y diario toque de campanas como forma de comunicación, con diferentes tonalidades propias y distintivas de cada ciudad y situación, que alertaban acerca de posibles amenazas, desgracias, o simplemente invitaban a la calma y la quietud.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Vid. TORQUEMADA SÁNCHEZ, M<sup>a</sup> J. Las cuestiones municipales en materia de medio ambiente del entorno rural (conservación de aguas públicas, conservación de árboles y plantas, protección de fauna autóctona) y medio ambiente urbano o local (limpieza y salubridad, polución urbana producida por carnicerías, pescaderías, fábricas de curtidos, etc. por los vertidos que depositaban, abandono de cadáveres de animales y otras acciones como defecar en la calle o lavar ropa en fuentes o arroyos que atravesaran la población) eran sancionadas con multas (en maravedíes) por los almotacenes (figura similar a la del edil romano), que a su vez eran designados por los concejos y sólo ante ellos rendían cuentas. Es más, cuando los organismos centrales de poder (las Cortes o el Monarca) intervenían en la vida urbana de la Edad Media lo hacían gracias a los concejos, o con el fin de dotar a determinadas ciudades de privilegios de índole local. <<... dado el espíritu que dominaba durante la etapa medieval y en tanto no se vino a poner orden en la prelación de las fuentes jurídicas castellanas, cosa que sucedería ya bien entrado el siglo XIV, prevalecerían las disposiciones locales... >>. Se encuentran numerosas y heterogéneas disposiciones que afectan al ambiente rural en distintas fuentes, como el Fuero de Madrid, de Cáceres, Ordenanzas de Loja (Granada), Ordenanzas de Chinchilla (Albacete), Fueros de Sepúlveda, Fueros de Santiago, Fuero de Plasencia, Fuero de Alcalá de Henares, Fuero de Soria, Fuero de Úbeda, Fuero de Baeza, , Ordenanzas de Ávila, etc., que, si bien a veces eran abordadas por las leyes de las Cortes castellanas en lo concerniente al agua o a flora y fauna (con independencia del concejo a que estuviese adscrito), en lo relativo a preservación de higiene y salubridad de los centros urbanos eran las normas incluidas en los fueros locales las que se encargaban de proceder a su promulgación. <<... el Monarca castellano nunca reclamó para sí la potestad legislativa en estas materias, sino que se entendían como naturalmente atribuidas a los órganos de gobierno municipal... >>. En *Derecho y medio ambiente en la Baja Edad Media castellana*. Ed. Dykinson. Madrid, 2009, págs. 17-68.

<sup>56</sup> Vid. MATELLANES MERCHÁN, J. V. Uniéndose a la posición de RÖSENER, sugiere que, a comienzos del siglo XIV gran parte de Europa había alcanzado un nivel de población tan alto que los recursos naturales y el ecosistema se veían amenazados, fruto también del desarrollo económico y técnico producido entre los siglos XI y XIV. <<Las grandes roturaciones en los bosques y el desecado de amplias zonas pantanosas, para ponerlas en explotación, llevaron a una situación crítica entre el hombre y el medio>>. “Aproximación a la política ecológica y cinegética en los Fueros del siglo XIII”, op. cit., pág. 336. En relación a la implicación del toque de campanas en el Medievo vid. HENDY, D. “Noise. A Human History of Sound & Listening”, op. cit., págs. 105-114.

Sucesivamente, se diversificaron las formas de vida, de comportamiento y relaciones. No obstante, se produce una nueva visión urbanizadora, abandonando definitivamente el modelo romano de ciudad, en el que imperaba la separación de grupos de viviendas con una apariencia desorganizada, para dejar paso a la apertura de grandes arterias y vías en las que se alineaban las viviendas, aún permaneciendo muchísimas calles secundarias como acceso a diferentes puntos de la ciudad.<sup>57</sup>

Menos aún podemos olvidar el derecho musulmán, presente en los paisajes urbanos de las ciudades peninsulares del al-Andalus, que, en cuestión de usos sociales en los centros urbanos, se enmarca dentro de una disminuida protección del derecho del vecino en pos de la propiedad privada.<sup>58</sup> Un hecho relevante en materia de ruido fue que en aquellos lugares donde confluyeron Islam y Cristianismo, como la ciudad de Constantinopla, centro del Cristianismo ortodoxo (posteriormente llamada Estambul) sobrevino un impacto inmediato en el paisaje sonoro de la urbe. Las campanas habían sonado en la mayoría de las iglesias cristianas bajo el Imperio Romano, pero un consejo islámico decretó en el año 630 d.C. que llamar a los fieles a la oración sólo debía hacerse por medio de la voz humana. Este fallo permitió una rica variedad de tonos y estilos vocales que florecieron en el mundo musulmán, pero fue relevante para los cristianos en otro sentido, pues se les permitía sonar campanas dentro de sus propios edificios con sobriedad, sin embargo al aire libre, el ruido era anatema.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> No sigue la interpretación de la influencia de los gremios en la ausencia de datos sobre ruido ASENJO GONZÁLEZ, M., pero destaca la gran innovación urbanística de la época y el aumento espectacular del comercio y la artesanía, cuyos centros de trabajo se localizaban casi por completo en el interior de las ciudades. Se refiere también a las consecuencias negativas que tuvo para la producción la inestabilidad social que se manifestó durante el siglo XV en forma de revueltas urbanas. En “Las ciudades en el occidente medieval”, op. cit., págs. 61-65.

<sup>58</sup> Vid. VAN STAËVEL, J. P. Realiza un magnífico estudio de lo que supuso la obra del jurista de Tudela Ibn al-Imam, en el s. X. Se trata de un conjunto de normas, decisiones judiciales ejemplares y opiniones jurídicas, que se ocupa fundamentalmente de las relaciones vecinales privadas, derechos y obligaciones entre propietarios de casas vecinas, y eso es precisamente lo que le otorga un carácter especial. Parece que la Tudela donde nació y se formó (aunque posteriormente completó sus estudios en Córdoba) experimentó un fuerte crecimiento urbano y demográfico. “Influencia de lo jurídico sobre la construcción. Análisis D’Ibn al-Iman al-Tutîlî (Tudela, final del siglo X)”. En *La ciudad medieval: de la casa al tejido urbano*. Actas del primer Curso de Historia y Urbanismo Medieval organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha. Jean Passini (coord.) Ed. Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenca, 2001, págs. 215-239.

<sup>59</sup> Vid. HENDY, D. En Europa occidental, las casas benedictinas, por ejemplo, eran increíblemente precisas en sus prácticas. Directrices, formuladas originalmente por la Iglesia de Cristo en Canterbury en el s. XI, como la llamada para despertar a los monjes benedictinos a su principal acto religioso del día, por una pequeña campana llamada el *signum parvulum*. También era común en la antigua China anunciar periodos de adoración golpeando una campana; el toque de queda que cayó sobre la vieja Beijing en los días de la dinastía mongol, por ejemplo, suceso descrito por Marco Polo. En “Noise. A Human History of Sound & Listening”, op. cit., págs. 107-111.

## 2.- El papel del ruido en el Derecho medieval español

En cuanto a la exigua legislación en nuestro país, una de las pocas disposiciones en las que el ruido encuentra un papel protagonista la encontramos en el Fuero de Tudela [conjunto de leyes recopilado en la segunda mitad del siglo XIII, conocido tradicionalmente como Fuero de Sobrarbe; no se conoce con exactitud su origen y fecha de promulgación, pero se otorgó como Fuero a Tudela y a una treintena de pueblos más de su ribera].<sup>60</sup> Igualmente en el Fuero Reducido [aunque este conjunto normativo fue aprobado por las Cortes de Sangüesa en 1530 para la comarca de Navarra, nunca alcanzó la sanción real, si bien es un hecho constatado que fue muy utilizado en la práctica por los juristas].<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Obsérvese, no obstante, la sutileza de las disposiciones. Concretamente en el Capítulo 125, Libro 4º, según MACÍAS CASTILLO, A. “El daño causado por el ruido y otras inmisiones”, op. cit., págs. 73 y 74. Sin embargo, MARÍN ROYO, L. M., cita el Libro 4º, § 125, Capítulo XIX, refiriéndose a la misma norma, de donde se toma la traducción. La disposición se refiere a los talleres de los herreros, que debían apartar la forja del lugar si causaban ruido en las casas de los vecinos, aunque tuviese allí el herrero ubicado su propio domicilio. “De forja que hace ruido”. <<Si cerca de la bodega de alguno, con calle en medio o no, tuviese algún herrero su forja y se teme que el ruido de los golpes haga daño a su vecino, por fuero debe coger un vaso de vino o de agua y ponerlo sobre la tapa de la cuba y golpee con el martillo mayor cuanto más pueda en el yunque y si temblase el vino o el agua en el vaso debe de ser apartada la forja de allí, a pesar de que sea la casa del herrero, porque no debe hacer mal a su vecino de ninguna manera>>. A continuación se dispone la prohibición de causar daño a los vinos guardados en bodegas por el ruido provocado por cualquiera que emprenda obras en su casa, y para obtener la prueba, se dicta un protocolo singular, similar a la obtención de la prueba contra el herrero; se otorga un papel principal y predominante a las vibraciones causadas en los líquidos, puesto que el sonido no se podía medir con los cánones actuales. Libro 4º, § 126, Capítulo XX. “De hacer obras en casa sin hacer daño al vecino”. <<Si alguno por hacer o deshacer su casa de cuaresma en adelante hace ruido en bodegas [de vino] o a bodegas de sidra, pues comienzan a sufrir, el dueño de la bodega o de la bodega de sidra, se lo debe hacer saber al dueño de las casas, cada tres días hasta nueve y al cabo del tercer día debe testificar su vino con dos de sus vecinos y si se hubiese empeorado al tercer día o de los primeros días en adelante y no quiere el otro dejar de hacer ruido y se dañare su vino, pudiéndolo probar como se ha dicho, débele compensar, por juicio de alcalde todo el daño del vino que tendrá por su ruido. Esto mismo debe de compensar en las bodegas de sidra, probándolo como se ha dicho>>. En *El Fuero de Tudela. Unas normas de convivencia en la Tudela Medieval para cristianos, musulmanes y judíos*. Luis María Marín Royo (ed.) Tudela, 2006, pág. 139.

<sup>61</sup> Vid. OSTOLAZA ELIZONDO, I. En el Libro Sexto, Título VI (De injurias, daños, colonias y penas), Capítulo 33, se reproduce una norma similar a la recogida en el Fuero de Tudela sobre los herreros: “Que experiencia se requiere para aquel que se teme que por el ruido de la forja se le pierda el vino”. <<Cualquiera ferrero que tuviere forja o fragua cerca de la bodega de su vezino o habitante, tenga carrera en medio o no tenga la carrera, si el señor de la bodega o cellero se teme que del ruido de la forja o fragua se pierda su vino, es fuero que tomen un vaso de vino o de agua, y pongan el dicho vaso debajo la cuba en el combo, y fieran con el mazo mayor en la yunque. Y si por ventura así feriendo, temblare el vino o el agua que esta en el vaso, en tal caso debe ser redrada y apartada la forja o fragua de aquel lugar ahora sea casa suya, o el lugar donde esta no sea suya, porque no debe haçer ningun hombre mal ni daño a su vezino en ninguna manera>>. Seguidamente, en el Capítulo 34 se recoge otra disposición sobre el daño que provoca el ruido en los vinos, si bien en esta ocasión, el ruido puede ser provocado por cualquier vecino, no sólo por el herrero: “Como si alguno haçe daño al vino de su vezino o a sirganos por el ruido que haçe, debe enmendar el daño”. <<Si algun vezino haçe ruido cabe la bodega o cellero de su vezino, haçiendo casa o derribando aquella de la quaresma en adelante, o haçe ruido a los sirganos que son dichos gusanos de seda, después que comienza a subir los dichos gusanos,

A distancia de estas leyes de carácter municipal, la mayor parte de antecedentes relativos a normas que incidan en el ambiente y de forma accidental aborden el problema del ruido, se relacionan con disposiciones sobre salubridad e higiene públicas; se localizan en algunas Ordenanzas Locales y en las Partidas.<sup>62</sup> En la Europa medieval algunas ciudades prohibieron el tránsito de carruajes de caballos por las calles durante la noche o cubrían el pavimento de piedra con paja para reducir el ruido y asegurar un sueño tranquilo a los residentes.<sup>63</sup>

El Derecho medieval español hereda la concepción de los elementos que conforman la Naturaleza como bienes comunes, que los romanos plasmaron en diversas prescripciones recogidas en el Digesto (acciones interdictales, reclamaciones por daños en el patrimonio, acciones negatorias, etc.), en términos relativos a la tutela de la *salubritas*.

---

*el señor de la bodega o cellero, o de los sirganos, debe haçer saber a aquel que haçe el dicho ruido de tres dias hasta diez dias, y debe tasar y probar su vino cada terçero dia con dos vezinos. Y si fuere hallado que el vino se haya apeorado y mostrandole el dicho vino al que haçe el dicho ruido no se quiere dexar de haçer ruido y se dañara el vino, y fuere conoçido por juizio de alcalde o juez el dicho vino ser apeorado y deteriorado mas que el primero dia, el tal que haçe o a hecho el dicho ruido debe enmendar y pagar todo el daño de aquel vino al señor de la bodega o del vino. Este mismo fuero de los sirganos, es a saber que el que haçe ruido a los dichos sirganos o gusanos de seda como dicho es, después que comiençan a subir, y reçiben daño por el dicho ruido, el que haçe el ruido debe enmendar y pagar todo el daño al señor de los sirganos porque ningun hombre debe haçer mal ni daño a sus vezinos>>.* “El Fuero Reducido de Navarra: Edición crítica”. En *El Fuero Reducido de Navarra*, Vol. II. Ismael Sánchez Bella (ed. lit.) Ed. Gobierno de Navarra. Departamento de Presidencia e Interior. Pamplona, 1989, págs. 109-520. Como vemos, el daño que produce el ruido (por la vibración) en la maduración de los caldos (vinos, cava, etc.) se tomaba muy en cuenta y era conocido por los ciudadanos del medievo. Posteriormente, en zonas de importante producción vinícola como La Rioja se encuentran disposiciones relativas a este asunto, como por ejemplo, que en 1635, el alcalde de Logroño prohibió el paso de carruajes por las calles contiguas a las bodegas por temor de que la vibración de estos vehículos pudiese alterar los mostos y así influir en la maduración de los caldos.

<sup>62</sup> Vid. MACÍAS CASTILLO, A., quien a través del estudio histórico de los fenómenos inmisivos, concluye que éstos constituyen el contenido del actual art. 590 del Código Civil. En “El daño causado por el ruido y otras inmisiones”, op. cit., págs. 73, 93 y ss. En materia de servidumbres de distancias y obras intermedias, según el art. 590 de nuestro Código Civil: <<Nadie podrá construir cerca de una pared ajena o medianera pozos, cloacas, acueductos, hornos, fraguas, chimeneas, establos, depósitos de materias corrosivas, artefactos que se muevan por el vapor, o fábricas que por si mismas o por sus productos sean peligrosas o nocivas, si guardan las distancias prescritas por los reglamentos y usos del lugar, y sin ejecutar las obras de resguardo necesarias, con sujeción, en el modo, a las condiciones que los mismos reglamentos prescriban>>. Vid. HERRERA DEL REY, J. J., que acentúa la complejidad de definir y delimitar el concepto de inmisión: <<Se acostumbra a definir la inmisión, como “toda intromisión física que un propietario realiza en la finca vecina” [...] Esta definición resulta, sin embargo, excesivamente amplia en un aspecto: la introducción de objetos no es propiamente inmisión; y excesivamente limitada en otro: en determinadas circunstancias no puede hablarse de desplazamiento de materias, sino de repercusiones (los ruidos no son más que ondas)>>. En “La defensa jurídica contra la contaminación acústica”, op. cit., págs. 55 y ss.

<sup>63</sup> Vid. GOINES, L. / HAGLER, L. “Noise Pollution: A Modern Plague”. En *Southern Medical Journal*, Vol. 100, Issue 3. March, 2007, págs. 287-294, en especial 288. DOI: 10.1097/SMJ.0b013e3180318be5.

Sin embargo, y como excepción ante la poca influencia que ejerció la legislación de este periodo en materia ambiental, la doctrina de los actos emulativos, precedente inmediato de la teoría del abuso del derecho, fue concebida en los siglos intermedios del Derecho común como una cláusula general prohibitoria de los fenómenos inmisivos en las relaciones de vecindad.<sup>64</sup> Las Partidas recogen dichas influencias en varias leyes, instaurando definitivamente en la historia del Derecho ambiental la concepción antropocéntrica y patrimonial del mismo, ya que los elementos naturales se consideran inagotables, y las limitaciones a su apropiación o uso se conectan de manera automática a la protección de derechos e intereses patrimoniales.<sup>65</sup>

El cambio de pensamiento en esta disciplina no se dará hasta la Edad Moderna (1492-1789), cuando a causa de los diversos dislates madereros y ganaderos a lo largo de los reinados de los Reyes Católicos y los Austrias, se produce una gran deforestación del país y comienzan a aparecer normas estatales más preocupadas por considerar al entorno natural como un bien autónomo, digno de protección, que se lleva a cabo con leyes que hablan expresamente de la gestión y conservación de los montes, así como de la regulación de industrias con potencial contaminante, todas ellas

---

<sup>64</sup> El art. 7.2 del Código Civil recoge en nuestro ordenamiento la prohibición de abuso del derecho: <<La Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso>>. Vid. CASTÁN TOBEÑAS, J., sobre las limitaciones al ejercicio del dominio que, a través de la teoría del abuso del derecho, prohíbe los actos que impliquen el ejercicio del derecho de propiedad <<anormal o contrario a los fines económicos o sociales del mismo, o aquellos que obedezcan tan sólo al deseo de dañar, sin verdadero interés para el propietario (actos de emulación)>>. Refiriéndose a la posturas de la doctrina y la jurisprudencia, especialmente francesa, indica que puede reputarse como abuso jurídico por parte del propietario: <<Producir ruidos en la casa, especialmente durante la noche, sin utilidad propia y con propósito de molestar al vecindario; o bien formar ruido en su terreno, contiguo a un coto de caza, para espantar ésta, sin que la misma le causara perjuicio>>. En *Derecho civil español común y foral*. Tomo 2, Vol. I (14ª ed.) Ed. Reus. Madrid, 1992, págs. 231-235. Vid. Díez-Picazo, L. / Gullón, A., que abogan por la estrechez del dogma medieval de que <<el que usa de su derecho no causa daño a nadie (nominen laedit qui suo iure utitur)>>, ya que precisamente para salvar la hipótesis de que el propietario sí quiera causar daño, la doctrina jurídica medieval construyó la figura de los actos de emulación, de carácter puramente subjetivo, que cristalizó con posterioridad en la doctrina del abuso del derecho, de marcado acento objetivo. En *Sistema de Derecho civil*, Vol. I (11ª ed.) Ed. Tecnos. Madrid, 2005, págs. 435-439.

<sup>65</sup> Vid. LOZANO CUTANDA, B. Distintas normas de las Partidas (redactadas en 1290) reproducen estas líneas de pensamiento. Partida III, Título XXVIII, Ley III: <<las cosas que comunalmente pertenecen a todas las criaturas que viven en este mundo son estas: el aire, las aguas de las lluvias, el mar, y su ribera. Cualquier criatura que viva, puede usar de cada una de estas cosas, según cual fuera menester>>; Partida VII, Título XV, Ley XXVIII, establece penas para los que cortasen árboles o viñas de forma intencionada y en el Título XXXII, Ley VII, se establece la obligatoriedad de reparar y mantener en buen estado las acequias y cañerías, tanto de casas como de heredades, en relación a la calidad del agua. En *Derecho ambiental administrativo* (11ª ed.) Ed. La Ley. Madrid, 2010, págs. 40 y 41.

recogidas en la Novísima Recopilación de leyes de España, editada en 1806, y que se mantuvo parcialmente vigente hasta finales del siglo XIX, siendo derogada de forma paulatina a medida que se fueron promulgando las primeras constituciones y los diferentes códigos.<sup>66</sup>

Con posterioridad, a la par que la Revolución industrial transformaba las formas de vida y el tratamiento de los recursos naturales en los países más avanzados, en España, con la salvedad del País Vasco, Cataluña y en menor medida Madrid, los problemas primordiales no resultaban propiamente ambientales, sino que se referían a aspectos de salubridad pública y, en concreto, al uso y aprovechamiento del agua a través de la Ley de Aguas de 1879.<sup>67</sup> Paralelamente, en algunos países de Europa se promulgaron leyes para la protección ambiental, obviamente y al igual que en nuestro país, el foco de atención era la contaminación hídrica y sus consecuencias sobre la salud pública.<sup>68</sup> También es posible extraer mandatos explícitos a las entidades locales de la Constitución española de 1812, en relación a los bienes comunes.<sup>69</sup>

Pero no será hasta principios del siglo XX cuando la limitación, se podría decir cuantitativa o fijada de manera más o menos medible (ya hemos reflejado que los antecedentes históricos son numerosos), acerca de determinadas actividades contaminantes, y en suma, del control de la contaminación, se introducen en nuestro

---

<sup>66</sup> Vid. JORDANO FRAGA, J., que ofrece una panorámica del Derecho ambiental recogido por el Fuero Juzgo, el Fuero Real, las Partidas y el Fuero Viejo de Castilla, clarificando la innovación que supuso en relación al derecho inmediatamente anterior, puesto que a través de dichos textos se reconoce a la salud pública como un interés público, lo que supone la incorporación de la autoridad administrativa en la relación jurídica, en posición de supremacía, y en contraposición a la relación entre particulares. También realiza un estudio aproximativo a los precedentes ambientales en el siglo XIX (montes, minería, aguas, caza y pesca). En “La protección del derecho a un medio ambiente adecuado”, op. cit., págs. 23-42.

<sup>67</sup> Vid. VERCHER NOGUERA, A. Recoge lo ilustrativas que fueron las Instrucciones españolas de Régimen Local de 1813 y 1823, herederas directas de la Constitución de 1812, cuyo art. 321 atribuía competencias a los municipios en el ámbito de la policía de salubridad. Voz “Delito Ecológico”. En *Diccionario de Derecho Ambiental*. Enrique Alonso García / Blanca Lozano Cutanda (dirs.) Ed. Iustel. Madrid, 2006, págs. 443-454.

<sup>68</sup> Vid. PÉREZ DE GREGORIO CAPELLA, J. J. Así, el Código Industrial Alemán de 1845, la Ley de *Waterworks Clauses* de Gran Bretaña de 1845, o la Ley de Actividades Comerciales e Industrias Peligrosas francesa de 1917, se suman a estos tímidos precedentes, teniendo en cuenta que es Francia, a partir de 1858, el país que inicia la utilización del Derecho penal como instrumento de protección, aplicando la Ley de Pesca Fluvial de 1829. *El proceso penal medioambiental*. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces. Madrid, 1999, págs. 9-13

<sup>69</sup> Constitución política de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812. Título VI, Capítulo I -*De los Ayuntamientos*-, art. 321. Séptimo: <<Estará a cargo de los ayuntamientos: Cuidar de la construcción y reparación de caminos, calzadas, puentes y cárceles, de los montes y plantíos del común, y de todas las obras públicas de necesidad, utilidad y ornato>>.

ordenamiento jurídico, alcanzando cierta evolución con la promulgación del Reglamento de sanidad municipal, de 9 de febrero de 1925, así como el Reglamento de establecimientos clasificados, de 17 de noviembre del mismo año.

La técnica jurídica empleada en estos precedentes se traspa al primer texto legal que en nuestro país acoge el término <<*medio ambiente*>>; el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961, vigente hasta el 17 de noviembre de 2007. Unos años más tarde, en 1968, el Decreto 2017/1968 de 16 de agosto sobre el régimen de poblaciones con alto nivel de contaminación atmosférica o perturbaciones por ruidos y vibraciones, se revela como la primera norma sectorial con una acusada impronta en el desarrollo del Derecho ambiental.<sup>70</sup>

El interés por la normatización de los problemas ambientales en Europa sufre una rápida evolución a partir de la década de los 70, aunque existen destacados precedentes anteriores, sobre todo en Estados Unidos, que impregnan y conforman una nueva ideología basada tanto en la aportación de informes de organismos internacionales, como de pensadores o científicos, así como la pura y simple evidencia de los terribles daños producidos por determinadas catástrofes.<sup>71</sup>

La diferencia básica entre los modelos adoptados en Europa y EE.UU. radica en que éste último país se decantó, desde sus inicios, por un modelo puramente reparador

---

<sup>70</sup> Vid. JORDANO FRAGA, J. En “La protección del derecho a un medio ambiente adecuado”, op. cit., págs. 45-47.

<sup>71</sup> Vid. FERNÁNDEZ DE GATTA SÁNCHEZ, D. Informes del Club de Roma, como el titulado “Los límites del crecimiento”, de 1972 o “La humanidad en la encrucijada” de 1975, las aportaciones de Rusell, Hardin, Carson o Commoner, y el impacto de accidentes ambientales como los accidentes nucleares en ciudades de la antigua Unión Soviética. <<*Posteriormente hasta la actualidad (p. ej., los sucesos de Seveso, Harrisburg, Bhopal, Rin, Valdez-Alaska, Chernobil, Tokaimura, Erika, Doñana, Prestige, Ibiza, Gibraltar, vertido en Ajka (Hungría), hasta por ahora el accidente en la central nuclear japonesa de Fukushima, en 2011)*>>. En *Sistema jurídico-administrativo de protección del medio ambiente*. Ed. Ratio Legis. Salamanca, 2012, págs. 20 y 21. Vid. BRAÑES, R. Recoge la importancia y alcance que EE.UU. alcanzó en el posterior desarrollo normativo de la materia en países industrializados, subrayando la enorme confusión de principios entre capitalismo y Derecho ambiental, encabezado precisamente por América del Norte, a raíz de la promulgación de la Ley sobre Política Nacional del Ambiente de 1969 (*Nacional Environmental Policy Act* –NEPA–), como un instrumento ambiental de primer orden y germen del conocido mecanismo de Evaluación de Impacto Ambiental. En “Manual de Derecho Ambiental Mexicano”, op. cit., págs. 41-45; LOZANO CUTANDA, B. <<*... los más importantes instrumentos de protección ambiental, como es el caso de la evaluación de impacto ambiental, provienen de las reformas introducidas en el Derecho norteamericano durante la época de la Administración Nixon*>>. En *Administración y legislación Ambiental*, op. cit., pág. 126.

frente al modelo sancionador, predominantemente europeo, con Alemania como referente principal. Con la significativa excepción del Reino Unido, que gradualmente ha ido variando su originaria concepción reparadora, pero que no obstante, continúa siendo uno de los países con menor definición normativa en cuestiones medioambientales.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Vid. SARMIENTO RAMÍREZ-ESCUADERO, D. Una prueba de que el Reino Unido apuesta por introducir figuras administrativas sancionadoras diferentes a las penales, y desconocidas hasta ahora en su ordenamiento, es la Ley del Ruido de 1996 -*Noise Act*-, en la que se prevé la competencia municipal para imponer sanciones de 100 libras a quienes causen ruidos molestos en horario nocturno, y cuyo incumplimiento transcurrido el plazo pertinente, puede acarrear la apertura de un proceso penal (arts. 8 y 9). “La responsabilidad ambiental en perspectiva comparada”. En *Incidencia medioambiental y derecho sancionador*. Dmitry Berberoff Ayuda (dir.) Cuadernos de Derecho Judicial (VIII-2006) Ed. CGPJ. Madrid, 2007, págs. 231-263.





### III.- CONCEPTO MEDIOAMBIENTAL DE “RUIDO”: EVOLUCIÓN, CONEXIONES Y DIFERENCIAS CON OTRAS ESTRUCTURAS AMBIENTALES

#### 3.1.- Acepciones y definiciones de “ruido”

El término “ruido” -del lat. *rugitus*- puede ser definido desde diversos enfoques, aunque de forma axiomática va unido al concepto de “vibración”. Antes de calificar a un sonido como ruido (objetiva o subjetivamente), en sí mismo es un arquetipo de sonido y éste, al emitirse, produce una vibración, por muy escasa que sea su intensidad.<sup>73</sup>

Según el Diccionario de la Real Academia Española, la definición de “ruido” es: 1. <<Sonido inarticulado, por lo general desagradable>>; 5. Ling. <<En semiología, interferencia que afecta a un proceso de comunicación>>. La de “vibración” -del lat. *vibratio*, -*ōnis*-. 1. <<Acción y efecto de vibrar>>; 2. <<Cada movimiento vibratorio, o doble oscilación de las moléculas o del cuerpo vibrante>>.

Por su parte, “sonido” -del lat. *sonitus*-, por analogía prosódica con ruido, chirrido, rugido, etc., se define como: 1. <<Sensación producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de los cuerpos, transmitido por un medio elástico, como el aire>>; 4. Fís. <<Vibración mecánica transmitida por un medio elástico>>.<sup>74</sup>

De dichas definiciones se extrae que ambos conceptos, *ruido* y *vibración*, aún siendo diferentes, son simultáneos en cuanto a los fenómenos físicos a que aluden respectivamente. Asimismo, resulta interesante apuntar la precisión de los antecedentes etimológicos de la palabra *–noise–* [ruido, en inglés]; *–lärm–* [ruido, en alemán], que a su vez proviene del italiano *–all’arma–* [alarma] para describir la enorme y heterogénea gama de sensaciones que puede producir.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Vid. URIARTE RICOTE, M. Ambos fenómenos (ruido y vibración) no se comprenden si no se definen bajo una única realidad, que es el sonido, aunque el oído humano no lo capte, en cuyo caso hablamos de vibración. Voz “Ruido y vibraciones”. En *Diccionario de Derecho Ambiental*. Enrique Alonso García / Blanca Lozano Cutanda (dirs.) Ed. Iustel. Madrid, 2006, págs. 1157-1173.

<sup>74</sup> Así, DRAE (23ª ed.).

<sup>75</sup> Vid. KAVALER, L. En la 2ª edición del Webster’s Dictionary, de 1934, se hace referencia a la cuna del término; del sánscrito *–nau–* se convierte en *–naus–* para los griegos, que significa nave, barco y que

La errónea pero generalizada utilización del término “contaminación acústica” uniéndolo al de “vibración” del que hace gala la actual Ley del Ruido<sup>76</sup>, se refiere a <<la presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que las origine, que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente>>.<sup>77</sup> Sin embargo, la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre evaluación y gestión del ruido ambiental excluye, en su art. 2.2, a las actividades domésticas, las relaciones de vecindad y el interior de medios de transporte como productores de ruido.<sup>78</sup>

---

ellos mismos derivaron a *–nausia–*, para llegar al término latino *–nausea–* y al francés antiguo *–noise–*, que quiere decir querella o pelea, de donde llega al moderno inglés sin variaciones. Con ello se quiere notar que <<... el ruido es capaz de producir una perturbación (náusea) tanto física como psicológica>>. En “Ruido. La nueva amenaza”, op. cit., pág. 55. Vid. MORALES DELGADO, F. Subraya la concordancia entre el término latino *rugitus* y el alemán *lärm*, ya que ambos denotan la aparición de algo inesperado, que causa sobresalto. “Sobre la cuantificación del ruido”. En *El ruido en las ciudades. Análisis jurídico-práctico*. Jorge Pinedo Hay (coord.) Ed. Bosch. Barcelona, 2009, págs. 465-484, en especial pág. 470, nota 63.

<sup>76</sup> Como tendremos ocasión de señalar y argumentar, el “ruido” carece de muchos aspectos que resultan intrínsecos al concepto de contaminación, tratándose dicha expresión de un eufemismo. Vid. SÁNCHEZ SAHORÍ, F. Se refiere a esta distorsión terminológica, como tantas otras que imperan en un lenguaje políticamente correcto, que se ha ido imponiendo al tratar de no ofender a determinadas minorías, pero que ha traspasado sus iniciales propósitos. <<Y es que suena extraño que tu vivienda esté “acústicamente contaminada” por la discoteca de debajo, pero no lo esté el resto del edificio o de la calle, que a las seis de la mañana haya “contaminación acústica” y que diez minutos después, cuando el disc-jockey apaga los amplificadores, no quede ni rastro de ella en el ambiente –la vivienda– aunque, desgraciadamente, sus efectos se han quedado en tu organismo. En “Apuntes para una filosofía del ruido”, op. cit., pág. 28. Vid. DEFENSOR DEL PUEBLO. La diferencia entre ambos conceptos no afecta a los receptores afectados, es decir, carece de importancia en cuanto a la molestia causada, pero sí es relevante para el personal técnico que se encargue de su estudio, ya que las magnitudes y unidades de medición son distintas. Sin embargo, en la Ley del Ruido quedan incluidos ambos en el concepto de <<contaminación acústica>>. En *Informes, Estudios y Documentos. Contaminación acústica*. Ed. Defensor del pueblo. Madrid, 2005. págs. 342 y 343. Vid. MARTÍ MARTÍ, J. Se muestra partidario del estudio conceptual diferenciado de ambos fenómenos, ya que el emisor de la vibración no tiene por qué ser exclusivamente acústico. <<De hecho la peor vibración es la “sorda”, aquella que causa una maquinaria por la vibración de sus elementos... >>. En *La defensa frente a la contaminación acústica y otras inmisiones*. Ed. Bosch. Barcelona, 2008, págs. 45-48.

<sup>77</sup> Ley 37/2003, de 17 de noviembre, Ley del Ruido, art. 3 d). Un aspecto a destacar de la definición es que el término <<vibración>> se circunscribe a las generadas directamente por los emisores acústicos; no se contempla como categoría individualizada y autónoma. En este sentido, MARTÍNEZ VÁZQUEZ, F. / DE MIGUEL PERALES, C. “Leyes administrativas generales sobre contaminación atmosférica”. AA.VV. En *Nuevas formas de contaminación atmosférica. Un análisis jurídico multidisciplinar*. Ed. Dykinson / Universidad Pontificia Comillas. Madrid, 2010, págs. 33-83, en especial 73.

<sup>78</sup> La Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002 sobre evaluación y gestión del ruido ambiental define el ruido ambiental en su art. 3 a) como: <<sonido exterior no deseado o nocivo generado por las actividades humanas, incluido el ruido emitido por los medios de transporte, por el tráfico rodado, ferroviario y aéreo y por emplazamientos de actividades industriales como los descritos en el Anexo I de la Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación>>. En relación al ámbito de aplicación de la Directiva, vid. MARTÍN MATEO, R. Opina que se elude el lógico contenido que debe presidir la normativa que tutela el medio natural, porque se prescinde, por ejemplo, de ruidos que resulten inocuos aunque no sean queridos, y que tiene presente efectos básicamente sanitarios. En “Tratado de Derecho Ambiental” Vol. IV, op. cit., págs. 149 y ss. Se da una verdadera asincronía entre la

Otras definiciones jurídicas de ruido y vibración son las aportadas por parte de la doctrina, como URIARTE RICOTE, MARTÍN MATEO, ALONSO GARCÍA o HERRERA DEL REY.<sup>79</sup> Diferentes a la recogida en el último Informe sobre Contaminación Acústica del Defensor del Pueblo, que se refiere al ruido excesivo, o la apuntada en el Protocolo de vigilancia sanitaria específica para los/as trabajadores/as expuestos a ruido.<sup>80</sup> Una definición técnica, incidiendo en el concepto binario ruido-vibración por parte de ADAMS y McMANUS, así como la expresada por ALAN BELL, en un exhaustivo informe encargado por la Organización Mundial de la Salud

---

rúbrica de la Directiva y su alcance real, en un asunto tan íntimamente relacionado con las relaciones de vecindad como es el ruido. El art. 2 del texto dice en su apartado 1: <<La presente Directiva se aplicará al ruido ambiental al que estén expuestos los seres humanos en particular en zonas urbanizadas, en parques públicos u otras zonas tranquilas en una aglomeración, en zonas tranquilas en campo abierto, en las proximidades de centros escolares y en los alrededores de hospitales, y en otros edificios y lugares vulnerables al ruido>>. El apartado 2 excluye los siguientes ámbitos de aplicación: <<La presente Directiva no se aplicará al ruido producido por la propia persona expuesta, por las actividades domésticas, por los vecinos, en el lugar de trabajo ni en el interior de medios de transporte, así como tampoco a los ruidos debidos a las actividades militares en zonas militares>>. Vid. MARTÍN MORALES, M<sup>a</sup> L. El problema del ruido producido por aglomeraciones de personas en la vía pública se deja en manos de las administraciones locales de cada uno de los países miembros. “Incidencia del ruido”. En *Medioambiente urbano*. Faustino Gutiérrez-Alviz Conradi (dir.) Estudios de Derecho Judicial 82-2005. Ed. Consejo General del Poder Judicial. Madrid, 2006, págs. 49-71.

<sup>79</sup> Vid. URIARTE RICOTE, M. <<El ruido y las vibraciones constituyen dos fenómenos que surgen y se definen en torno a una misma realidad: el sonido. Por sonido entendemos un fenómeno vibratorio que se transmite a través del ambiente y se propaga en forma de onda, constituyendo la vibración la oscilación que se encuentra en la base de este fenómeno. El sonido resulta perceptible para el oído humano a partir de determinados parámetros, en cuyo caso hablamos de “ruido”, pero incluso cuando no podemos captarlo produce vibraciones>>. Voz “Ruido y vibraciones”. En *Diccionario de Derecho Ambiental*, op. cit., pág. 1157; MARTÍN MATEO, R. <<El ruido es en primer lugar desde el punto de vista físico un sonido o un conjunto de sonidos, el sonido por su parte consiste en un desplazamiento de ondas a través de un medio, en nuestro caso el atmosférico, cuyas moléculas comprime con mayor o menor intensidad y mayor o menor frecuencia según sus características. No es, por tanto el aire el que se mueve, sino las ondas que circulan a través de él [...] En términos generales se caracteriza como ruido un sonido no deseado, un sonido que produce molestia... >>. El autor lo define en términos físicos y en términos generales, subrayando el factor psíquico del concepto: <<El ruido es un sonido que se presenta como molesto, desagradable, incómodo, perturbador, fastidioso o insalubre para alguien, por lo que las condiciones psíquicas son esenciales en la determinación del concepto>>. En “Derecho Ambiental”, op. cit., pág. 567-568; ALONSO GARCÍA, M<sup>a</sup> C. Menciona el factor psíquico del concepto. <<El ruido es un sonido que se presenta como molesto, desagradable, incómodo, perturbador, fastidioso o insalubre para alguien, por lo que las condiciones psíquicas son esenciales en la determinación del concepto>>. En *El régimen jurídico de la contaminación atmosférica y acústica*. Ed. Marcial Pons. Madrid, 1995, pág. 27; HERRERA DEL REY, J. J. <<El ruido por tanto es un sonido. Pero es un sonido que no se desea, por ser perturbador, dañino o molesto>>. En “La defensa jurídica contra la contaminación acústica”, op. cit., pág. 33.

<sup>80</sup> Vid. DEFENSOR DEL PUEBLO. <<La contaminación acústica tratada en este informe es la del ruido excesivo considerado como una agresión continuada a la calidad de vida, uno de los conceptos centrales del derecho al ambiente adecuado que proclama el artículo 45 de la Constitución>>. En “Informes, Estudios y Documentos. Contaminación acústica”, op. cit., pág. 11; “Protocolo de vigilancia sanitaria específica para los/as trabajadores/as expuestos a ruido”. <<Los términos ruido y sonido se han utilizado indistintamente y la diferencia entre ellos no es de naturaleza física, sino más bien cultural y subjetiva, llamando ruido al sonido que no nos agrada>>. Ed. Ministerio de Sanidad y Consumo. Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Madrid, 2000, pág. 17.

en 1969 sobre el ruido, en el que se define sonido y ruido de forma complementaria.<sup>81</sup>

Otra más es la otorgada por la propia OMS, en la que se afirma que no existe distinción entre sonido y ruido desde los parámetros de las ciencias físicas, o la reseñada por LAMARQUE, desde una perspectiva de lucha contra los daños que produce.<sup>82</sup> Resulta interesante también la aportación de BURROWS, que lo trata como información excedente en lo que respecta a la realización de tareas.<sup>83</sup>

También la psicología y el estudio de los procesos cognitivos se han ocupado de brindar diferentes definiciones de ruido, denominándolo como fluctuaciones que distorsionan las observaciones, como banda ancha de energía sin periodicidad, o como cualquier sonido no deseado<sup>84</sup>; terminante definición que asume la mayoría de la doctrina jurídica que ha estudiado el fenómeno, a la que, no obstante, se han formulado acertadas críticas por sus escollos conceptuales.<sup>85</sup>

---

<sup>81</sup> Vid. ADAMS, M. S. / McMANUS, F. Definen el sonido como la transmisión de energía a través de medios gaseosos, líquidos o sólidos mediante rápidas fluctuaciones en la presión del medio. Las fluctuaciones de presión se originan en algunos objetos que vibran, por ejemplo, la voz humana, altavoces de diafragma, herramientas de máquinas, etc. En *Noise and noise law. A Practical Approach*. Ed. Chancery Law. Publishing Ltd. Chichester, 1994, pág. 5. Vid. BELL, A. <<La palabra “sonido” significa una alteración mecánica de los gases, los líquidos o los sólidos producida por vibración molecular. Al transmitirse el sonido por el aire, el movimiento vibratorio de las moléculas de los gases de la atmósfera produce variaciones de presión atmosféricas conocidas como “presión acústica”. Esta se puede expresar en microbases o en dinas por centímetro cuadrado. Se dice del ruido que es un sonido carente de cualidades musicales agradables o un sonido que no es deseable>>. En *Noise. An Occupational Hazard and Public Nuisance*. Public Health Papers, núm. 30. World Health Organization. Geneva, 1966, págs. 9 y 10.

<sup>82</sup> Vid. “Guías para el ruido urbano”. <<El sonido es una percepción sensorial y el complejo patrón de ondas sonoras se denomina ruido, música, habla, etc. Generalmente, el ruido se define como un sonido no deseado>> Birgitta Berghund / Thomas Lindvall / Dietrich H. Schwela (eds. lit.) Londres, abril 1999. Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (tr.), basado en el documento “Community Noise”. Ed. Stockholm University / Karolinska Institute. Ginebra, 1995, pág. 5; LAMARQUE, J. <<El ruido se puede definir como un sonido o conjunto de sonidos desagradables o molestos. Pero esta definición nos introduce en el ámbito de lo subjetivo>>. En *Le droit contre le bruit*. Ed. L.G.D.J. París, 1975, pág. 13.

<sup>83</sup> Vid. BECHTEL, R. B., en relación al aporte de Burrows (1960). En *Environment and Behavior. An Introduction*. Ed. Sage Publications. Thousand Oaks (California), 1997, pág. 396.

<sup>84</sup> Siguiendo ésta última definición, GLASS, D. C. / SINGER, J. E. Consideran que la misma <<implica que ruido es cualquier sonido que es fisiológicamente perjudicial, subjetivamente molesto, o disruptivo de rendimiento>>, formulada en 1964 por Anatasi. En *Urban Stress. Experiments on Noise and Social Stressors*. Ed. Academia Press. New York / London, 1972, pág. 15.

<sup>85</sup> Vid. MORALES DELGADO, F. Dos de las cuestiones a debatir son; en primer lugar, la parte subjetiva de tal definición –no deseado– y, en segundo lugar, cómo podemos sostener la antijuricidad de determinados sonidos, que aún siendo deseados, o al menos consentidos, resulten perjudiciales y dañinos. No existen sonidos “no deseados” por todo el mundo o por una pluralidad mayoritaria de personas, desde un punto de vista físico, y ello comporta que no es posible otorgar una definición objetiva de ruido; precisamente porque el punto de vista físico, desde el único que podría definirse con total objetividad, tampoco nos permite hacerlo. Uno de los errores en los que habitualmente descansa la definición es que la fijación de valores máximos en dB en las normas reguladoras, hacen entender el sonido no deseado básica y exclusivamente como un sonido demasiado intenso, sin tener en cuenta otras características significativas (un sonido no sólo es más o menos fuerte, sino que también puede ser más o menos agudo, chirriante, sordo, súbito, armonioso, rítmico, etc.). El autor plantea una definición alternativa, según la cual el ruido es: <<todo aquello que perturbe la función comunicativa del

### 3.2.- Características intrínsecas del subconcepto “ruido” y diferencias relevantes con otras formas contaminantes

Antes de trazar una panorámica de los múltiples conceptos que confluyen de forma sincronizada en la sensación que produce el ruido, es necesario clarificar las diferencias existentes entre unidades de frecuencia de sonido [tono] y unidades de intensidad [volumen]. Las primeras se miden en hertzios [Hz] y las segundas en decibelios [dB].<sup>86</sup>

Hay que puntualizar que cuando nos referimos a una fuente sonora como potente, capaz de desplegar “X” vatios de sonido [W], se está expresando, en términos físicos, que la energía consumida será lanzada a la atmósfera al mismo ritmo “X”; ésta se irá modificando dependiendo de los obstáculos que vaya encontrando en su

---

*sonido*>>. En “Sobre la cuantificación del ruido”, op. cit., pág. 467. Vid. HENDY, D. Si el ruido es, como la mayoría de las definiciones sostienen, un sonido no deseado, a continuación, para conocer su impacto en la experiencia vivida de manera correcta, tenemos que averiguar quién considera exactamente un sonido dado como querido y quién exactamente lo considera no deseado, en cualquier momento y en lugar determinado, y por qué. En “Noise. A Human History of Sound & Listening”, op. cit., pág. 326. En este mismo sentido, vid. KEIZER, G. *The Unwanted Sound of Everything We Want: A Book about Noise*. Ed. Public Affairs. New York, 2010, pág. 34. Abunda en el fracaso de una definición legal objetiva de “ruido”, HUGHES, D. La ley no ha logrado producir una definición objetiva de ruido, junto con las técnicas de medición y evaluación. La ley no puede tener en cuenta todos los ruidos no deseados, pero la regulación legal no puede limitarse únicamente a los ruidos que son objetivamente fuertes en términos de decibelios o tonos, -un zumbido continuo de tono bajo y silencioso puede ser tan molesto como un fuerte estruendo ocasional-. La ley es pragmática respecto al ruido sólo si, en este contexto, el sonido se vuelve excesivo, innecesario o no razonable. En *Environmental Law* (4<sup>th</sup> ed.) Ed. Butterworths LexisNexis. London, 2002, pág. 580.

<sup>86</sup> Cada hercio se traduce en un ciclo por cada segundo, el ciclo representa la repetición del sonido emitido, correspondiéndose las frecuencias <<altas>> a los sonidos <<agudos>> -vibraciones rápidas- y las frecuencias <<bajas>> a los sonidos <<graves>> -vibraciones lentas-. El dominio audible de frecuencias se sitúa aproximadamente en el intervalo 20-20.000 Hz [las frecuencias inferiores a 20 Hz se denominan “vibraciones” y las superiores a 20.000, “ultrasonidos”; éstos últimos imperceptibles para el oído humano]. Los decibelios expresan la relación entre dos magnitudes: la magnitud que se estudia y una magnitud de referencia; se usan normalmente para relacionar magnitudes acústicas, pero podemos encontrar medidas en decibelios de otras magnitudes, por ejemplo las eléctricas o las lumínicas. Se utiliza el logaritmo Bel (un dB es la décima parte de un Belio) para evitar manejar números muy grandes o muy pequeños, que darían demasiados errores en los cálculos. Puesto que el decibelio expresa una medida lineal y el órgano auditivo no reacciona de la misma manera ante idénticos niveles de presión en diferentes frecuencias, resultaba necesario realizar una ponderación entre los datos que aportan las mediciones en decibelios y la percepción que se tiene de los mismos, por lo que se establece la tabla de ponderación “A”; es decir, se utiliza la medida dBA para representar los decibelios ya ponderados, y dB para los lineales. Vid. SAENZ, A. L. “Physics of Noise”. En *Noise Pollution: Effects and Control*. A. Lara Sáenz / R.W.B. Stephens (eds.) Ed. John Wiley & Sons. Scientific Committee on Problems of the Environment (Scope 24) Great Britain, 1986, págs. 45-94, en especial 64. Vid. HERRERA DEL REY, J. J. Explica las diferencias físicas y la clasificación del ruido según la intensidad (ruido continuo, fluctuante, impulsivo) y la frecuencia (ruido blanco, rosa, marrón). En “La defensa jurídica contra la contaminación acústica”, op. cit., págs. 36-41.

trayectoria, no permanece íntegra, y de ahí que la relación entre intensidad y distancia no sea tan sencilla de representar.<sup>87</sup>

Necesariamente hay que sumar a estos factores la duración de la exposición al ruido, como parte integrante de la ponderación, y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos así lo entendió al establecer un nivel de sonido equivalente, que se corresponde con los dB de un ruido constante en el tiempo.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> El umbral mínimo de la sensación sonora en una persona se cifra en la millonésima parte de la millonésima parte de un picowatio [pW]. Precisamente, el argumento de que el “ruido” se puede considerar un fenómeno energético se maneja en la STC (Sala Primera) 16/2004 de 23 febrero [RTC 2004\16]. <<En una configuración de la contaminación atmosférica que podemos calificar de «tradicional», el ruido puede encajar en alguna de las expresiones citadas, no tanto como «partículas» como más bien en el término «formas» en general –se habla en el lenguaje común de «contaminación acústica»– o en el de «formas de energía». El ruido en cuanto provoca determinadas ondas que se expanden en el aire, puede incluirse en esta expresión, «formas de energía»>>. (FJ 8) Sin embargo, el voto particular emitido por tres Magistrados opone: <<Pues bien, el ruido no puede ser calificado como «materias o formas de energía» por más que sus ondas se expandan en el aire>>, lo que pone de manifiesto la tremenda complejidad que alcanza a la valoración de determinadas conductas en relación con el ruido, sobre lo que se profundizará a lo largo de este trabajo, contando con que se muestra especialmente sensible en relación a la prueba.

<sup>88</sup> Desde los años 70 la Environmental Protection Agency –EPA– ha desarrollado un destacado papel en la regulación del ruido en Estados Unidos, aunque sus competencias finalizaron en 1982, ya que fueron transferidas a las autoridades estatales y locales. Sin embargo, dos Actas anteriores a esta fecha siguen en vigor: la *Noise Control Act of 1972* (Ley del Control de Ruido) y la *Quiet Communities Act of 1978* (Ley de Comunidades silenciosas). Consultar: <http://www.epa.gov/aboutepa/history/topics/noise/> (último acceso 12/07/2015). Vid. SWINBURN, T. K. / HAMMER, M. S. / NEITZEL, R. L. En 1974, la EPA recomendó un límite promedio de exposición de 55 dBA de ruido ambiental para proteger al público de los efectos perjudiciales para la salud y el bienestar en las zonas residenciales. “Valuing Quiet. An Economic Assessment of U.S. Environmental Noise as a Cardiovascular Health Hazard”. En *American Journal of Preventive Medicine*. Ed. Elsevier (In Press) (Available online 26 May 2015), págs. 1-9. <http://dx.doi.org/10.1016/j.amepre.2015.02.016> (último acceso 12/07/2015). Vid. GARDNER, R. C. En 1906, la demanda presentada por un particular contra una factoría que emitía ruidos que interferían en su descanso nocturno, prosperó porque la corte entendió que los niveles de ruido aceptables durante el día pueden no serlo durante la noche, y dictó un mandamiento judicial que limitaba sus horas de actividad –*Seligman contra la empresa de Victor Talking*–. “Regulación de la contaminación acústica en los Estados Unidos”. Juan Gutiérrez Alonso (trad.) En *Régimen jurídico del ruido. Una perspectiva integral y comparada*. Estanislao Arana García / M<sup>a</sup> Asunción Torres López (coords.) Ed. Comares. Granada, 2004, págs. 463-479. Vid. MORAL SORIANO, L. En Europa, los indicadores de ruido debían ser armonizados en orden a la estrategia comunitaria de protección contra el ruido y así, se adoptaron en la Directiva 2002/49/CE, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, diferenciándose en el Anexo I indicadores diurnos, vespertinos y nocturnos. “La Directiva de ruido ambiental: el nuevo marco para la actuación comunitaria”. En *Régimen jurídico del ruido. Una perspectiva integral y comparada*. Estanislao Arana García / M<sup>a</sup> Asunción Torres López (coords.) Ed. Comares. Granada, 2004, págs. 1-51, en especial 27 y ss. Vid. BECHTEL, R. B. La mayor parte de las frecuencias audibles para los seres humanos se sitúan por debajo de los 1,000 Hz, pero somos más sensibles a las frecuencias altas que a las bajas, de modo que un tono de alta frecuencia (sonidos agudos) sonará subjetivamente más que una frecuencia baja (sonidos graves). Las mediciones de sonido se ponderan por frecuencia y la EPA ha establecido un estándar para intentar aproximar la sensibilidad del oído humano, siendo los dB una medida del volumen. Esto puede llegar a ser muy complejo, ya que una medida de 1,000 Hz de 40 dB es igual que un tono de 50 Hz a 40 dB, lo que ilustra que las frecuencias altas son muy parecidas a las más bajas, en volumen subjetivo. Para tener una idea del nivel de sonido, una conversación normal está alrededor de 30 dB, mientras que cualquier sonido que interfiere en ella se considera perjudicial. La mayoría de pérdida de audición se produce con exposiciones largas y se inicia con rangos superiores (4,000 Hz). En “Environment and Behavior. An Introduction”, op. cit., págs. 396 y 397.

El ruido, por tanto, puede ser fijado desde puntos de vista multidisciplinarios: técnicos, médicos, filosóficos, jurídicos, físicos, sociales y por supuesto económicos, pero presenta unas características concretas que lo diferencian de otros contaminantes, entre las cuales podemos incluir las que siguen a continuación, sin que ello comprometa la existencia de un catálogo exclusivo y excluyente de otros factores diferenciales:

- ✓ Es el elemento “contaminante” más barato de producir y necesita muy poca energía para ser emitido. Pensemos simplemente en una persona gritando durante unos minutos, o los ladridos de un perro en mitad de la noche.<sup>89</sup>
- ✓ En sentido jurídico, sólo es ruido el generado por la presencia o con intervención del hombre, pues los sonidos naturales no pueden constituir ruido a efectos jurídicos, aún con superación de los niveles permitidos.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Los niveles sonoros medios de una conversación se cifran entre 70dBA y 76dBA cuando se fuerza la voz, pudiendo llegar hasta los 100dBA si existen gritos. *Vid.* MARTÍN MONROY, M. *Manual del Ruido*. Manuales de diseño ICARO de Calidad Ambiental en la Edificación, Vol. IV. Ed. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 2006, pág. 61. Se podrían añadir innumerables tipos de focos de ruido en la sociedad actual, debido en parte al aumento y uso generalizado de la tecnología por parte de los ciudadanos, sumándose así a los producidos por los distintos servicios de carácter público. Sin duda, cada vez más, se generan heterogéneos grupos de sonidos que están presentes en el ambiente, algunos necesarios por cuestiones de seguridad ciudadana (semáforos acústicos para invidentes, alarmas de vehículos contra incendios, policía, etc.), y otros simplemente integrados en la vida cotidiana (sonidos de llamadas de móviles en el interior de medios de transporte, conversaciones telefónicas a gran volumen en el interior de recintos, hilo musical en centros comerciales, consultas médicas, restaurantes, etc.) *Vid.* MARTÍN MATEO, R., que aporta el siguiente dato ilustrativo: <<Se ha observado por ejemplo que un motorista que circula en la madrugada a lo largo de los Campos Elíseos parisinos con una moto de gran potencia, puede despertar a 300.000 personas>>. En “Tratado de Derecho Ambiental” Vol. IV, op. cit., pág. 158. El autor vuelve a reproducir el apunte en “El ruido una problemática social básicamente interdisciplinar”. En *La responsabilidad civil y su problemática actual*. Juan Antonio Moreno Martínez (coord.) Ed. Dykinson. Madrid, 2007, págs. 519-535, en especial pág. 522. Por ejemplo, según la nueva Ordenanza municipal sobre la protección, la tenencia responsable y la venta de animales de Zaragoza [Publicada en BOPZ núm. 290 de 19 de diciembre de 2013], los ladridos de los perros y los maullidos de los gatos que se consideren más molestos podrán ser objeto de sanción; sus dueños se enfrentarán a la imposición de multa por infracción leve en relación a la Ordenanza de Ruidos y Vibraciones, que oscila entre 50 y 250€ en su grado máximo [art. 37.3 m)], si bien puede alcanzar la suma de 1.500€ por de infracción muy grave, en aquellos casos en los que la entidad del incumplimiento de las prescripciones de dicha Ordenanza comporte un perjuicio muy grave o irreversible para la seguridad o salubridad públicas [art. 37.5 a)]. La Ordenanza municipal para la protección contra ruidos y vibraciones [borrador de 14 de abril de 2015], se encuentra en su última fase legislativa. Disponible en: <http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/ruido2010/Borrador-Ordenanza-Ruido-2015.pdf> (último acceso 12/07/2015).

<sup>90</sup> Creemos muy acertada la clasificación de las diferentes clases de ruido realizada por ALENZA GARCÍA, J. F. Por su origen: ruidos de la naturaleza y ruidos generados por las actividades humanas. Por el lugar de emisión y el de recepción: ruidos de origen interior y ruidos de origen exterior. Por el momento de producción: ruidos diurnos, vespertinos o nocturnos. Por su duración o frecuencia: ruido continuo, ruido fluctuante, ruido transitorio. Por sus efectos: afectación, lesión o vulneración de bienes y



- ✓ Su vínculo y conexión con el derecho a la intimidad personal y familiar e inviolabilidad del domicilio, proclamados en el art.18 (apartados 1 y 2) CE, no es ni mucho menos aparente. Como tampoco lo es su invasión en el derecho a la salud proclamado por el art. 43 del mismo texto. El ruido contiene una virulencia desconocida en otras formas de polución en este específico contexto, ya que penetra directamente tanto en la intimidad en sentido estricto como en el entorno domiciliario, si atendemos al criterio de la prohibición de entradas arbitrarias en el espacio geográfico, físico, de reducto íntimo e interior de las personas, aspecto que las instancias nacionales e internacionales no han eludido.<sup>91</sup>
- ✓ Es finito e infinito a la vez. Finito porque se agota en el preciso momento en que deja de emitirse, es decir, sus coordenadas “espacio y tiempo” se encuentran extremadamente determinadas. Infinito respecto a la capacidad global de ser emitido por incontables fuentes, en principio inagotables, o sustituibles por otras desconocidas en la actualidad.<sup>92</sup>

---

derechos. “Las estrategias jurídicas contra el ruido”. En *El derecho contra el ruido*. José Francisco Alenza García (dir.) Ed. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2013, págs. 51-106, en especial 56.

<sup>91</sup> Parte de la doctrina se decanta por esta interpretación. Vid. MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, L., que ya en los años 80 apelaba a esta íntima relación entre el ruido y la intimidad-inviolabilidad domiciliaria, alegando a favor de la misma que la cláusula general “el domicilio es inviolable” bastaría por sí sola para dotar de virtualidad al argumento, sin necesidad de aplicar la cualificada “prohibición de entradas”: <<La aplicación específica es una consecuencia obvia de la regla general. Pero no es la única: si sólo se hubiera querido conseguir el efecto de prohibir las entradas arbitrarias hubiera bastado con la segunda frase, ninguna falta hacía proclamar la regla general>>. “La defensa frente al ruido ante el Tribunal Constitucional (Auto de 13 de octubre de 1987, en relación con la clausura de un bar en Sevilla)”. En *Revista de Administración Pública*, núm. 115 (enero-abril). Ed. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1988, págs. 205-231; SOSA WAGNER, F. “La lucha contra el ruido”. En *Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica*, núm. 249 (enero-marzo) Ed. INAP. Madrid, 1991, págs. 11-31. A nivel nacional, el TS se ha pronunciado a favor de esta apreciación en varias resoluciones, entre otras la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª), de 26 de noviembre de 2007 [RJ/2007/8552], que considera vulnerado el derecho a la intimidad e inviolabilidad del domicilio por parte de los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Bilbao por los ruidos provocados en horario nocturno, desestimando por completo el recurso planteado por el órgano local. En el mismo sentido, la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª), de 13 de octubre de 2008 [RJ 2008\7142], sobre el ruido procedente de la tercera pista del aeropuerto de Barajas, que afectaba a los residentes en la urbanización Ciudad de Santo Domingo, declarando violado el derecho fundamental de los recurrentes a la intimidad domiciliaria por parte de la Administración, considerándose adecuado continuar la estela jurisprudencial proporcionada por el TEDH. El estudio de diversas sentencias dictadas por el TEDH en base al Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos (Roma, 1950), cuyo art. 8 se refiere al derecho al respeto a la vida privada y familiar, se desarrolla *infra*, epígrafe 4.2.1.

<sup>92</sup> Algunos autores apuestan por la inclusión de sus efectos dañinos en “generaciones futuras”, que se derivarían directamente de los modelos actuales de desarrollo urbano, que de forma necesaria afectarán a los futuros habitantes en las ciudades. En este sentido, DÍAZ-ROMERAL GÓMEZ, A. “La protección del medio ambiente urbano: la contaminación por el ruido en las ciudades y la sostenibilidad en el desarrollo urbano”. En *Desarrollo sostenible y protección del medio ambiente*. José Luis Piñar Mañas (dir.) Ed. Civitas. Madrid, 2002, págs. 255-309. Esta tesis, si nos atenemos a las continuas y en muchos casos arbitrarias modificaciones urbanísticas, así como a los estudios demográficos, que prevén una

- ✓ Es complejo de medir y cuantificar. En realidad será posible cuantificarlo, pero no medirlo, ya que sólo se pueden calcular magnitudes físicas, por lo que tan sólo se podrán evaluar magnitudes asociadas al sonido, no el sonido en sí mismo.<sup>93</sup> Las escalas de ruido fijadas por los especialistas tomando como base el decibelio, componen meras aproximaciones y varían en cuanto a su aumento o disminución de forma notoria, de forma generalizada y estandarizada se considera que la zona de molestia se inicia aproximadamente con 65dB, el umbral de alerta con 85dB, el de peligro con 90dB y el límite de inicio del dolor auditivo con 120dB.<sup>94</sup>

disminución de población si las condiciones actuales permanecen, no se puede compartir plenamente, si bien la vocación de permanencia que preside la ordenación del territorio es indiscutible. Como ejemplo de criterios urbanísticos caprichosos y en cierta medida injustificados, la actuación del Ayuntamiento de Huarte (Navarra), que en 2011 procedió a empedrar la Avenida Ugarrandía, lo que ha provocado las quejas de los vecinos por el ruido que produce el tráfico rodado en la vía, teniendo en cuenta además que el estudio sonométrico se realizó en el exterior, y no en el interior de las viviendas que podían resultar afectadas. Sobre el asunto, el Defensor del pueblo de Navarra se pronunció en la Resolución 141/2011, de 30 de agosto, recordando al ente local su deber de ejercer las competencias y responsabilidades que le atribuye la legislación en cuanto a contaminación acústica, y tomar medidas precisas para minimizar el ruido. Documento disponible en: <http://www.defensornavarra.com/index.php/es/Resoluciones/2007-2011/2011/Resolucion-141-2011-del-Defensor-del-Pueblo-de-Navarra-por-la-que-se-resuelve-la-queja-formulada-por-dona-en-representacion-de-un-grupo-de-vecinos-residentes-en-la-avenida-en-Huarte> (último acceso 12/07/2015). Sin embargo, en sentido opuesto, también hay que mencionar la tendencia de varias ciudades españolas hacia la adaptación de criterios urbanísticos que hagan posible el desarrollo de las llamadas *smart cities*, como los casos de Vitoria-Gasteiz y Barcelona.

<sup>93</sup> Vid. MORALES DELGADO, F. “Sobre la cuantificación del ruido”, op. cit., pág. 466; GARCÍA SANZ, B. / GARRIDO, FRANCISCO J. <<Los parámetros meramente acústicos no sirven por sí solos para evaluar el impacto del ruido, pues la medición de una energía acústica no significa casi nada si no se pone en relación con su traducción biológica y psicológica en las personas>>. En *La contaminación acústica en nuestras ciudades*. Colección Estudios Sociales, núm. 12. Ed. Fundación La Caixa. Barcelona, 2003, pág. 23.

<sup>94</sup> Vid. LAMARQUE, J. Según la *Guía del ruido de las carreteras urbanas*, a pesar de haber sido elaborada en 1972, el índice de actividades que recoge y la percepción por parte de un sujeto resultan igual de esclarecedores en la actualidad. A continuación se detallan algunos de ellos, de mayor a menor intensidad:

ACTIVIDADES	RUIDO PERCIBIDO
Reactor de un avión a 100 metros	120dB Doloroso
Fabricación de objetos de hierro forjado	110dB Ensordecedor
Orquesta de 75 miembros (músicos) a 25 metros	100dB Intenso*
Máquinas neumáticas a algunos metros	90dB Muy ruidoso
Automóvil en aceleración a 10 metros	85dB Ruidoso
Interior de tren o coche	75dB Bastante fuerte
Aspirador a 3 metros	70dB Muy molesto
Restaurante animado/oficina	65dB Bastante molesto
Conversación animada, voz media	60dB Molesto

- ✓ La prueba física que refleje una mayor o menor intensidad del ruido en determinados ambientes o situaciones no siempre va a revelar el grado de incomodidad, molestia o daño sufrido por el receptor, cuando sin embargo, el dato resulta determinante para su inclusión en la categoría de infracción administrativa o delito respectivamente.<sup>95</sup> La suma de distintos niveles de presiones sonoras emitidas al unísono no da como resultado su progresión aritmética natural, es decir,  $80 + 80$  no suman 160dB, sino 83dB (se trata de una serie geométrica). Por lo tanto, la respuesta sensitiva nunca es lineal, y de ahí surge la necesidad de ponderarlo.<sup>96</sup>

Sala de estudios, oficina o despacho	50dB Bastante moderado
Conversación tranquila	45dB Muy moderado
Estudio de grabación	20dB Muy débil
Crujido de hojas	10dB Silencioso

\*pero el espectro de frecuencia puede ser agradable.

Se añaden algunos niveles de ruido generalmente aceptados, como una calle con tráfico intenso: 80dB; motocicleta en plena aceleración a 7 metros: 100dB; banda de música pop: 110dB; radio a volumen alto: 85dB; radio a volumen discreto: 60-70dB; dormitorio silencioso: 30dB. En “Le droit contre le bruit”, op. cit., pág. 13, nota 10; GLASS, D. C. / SINGER, J. E. <<Es generalmente aceptado que la respuesta psicológica negativa no se producirá con ruidos muy por debajo de los 60-65 dB. A partir de ese nivel, aparecen claros efectos negativos, y a niveles que excedan los 130 dB, empezamos a observar dolor y estimulación cutánea de la oreja>>. Realizaron un experimento utilizando grabaciones de diferentes sonidos superpuestos (dos personas hablando en español, una en armenio, una multcopiadora, una calculadora de mesa y una máquina de escribir, por analogía con el espectro de sonidos complejos presentes en el entorno urbano), y el análisis fonométrico mostró que la energía desarrollada se movía entre 150 y 7000 ciclos por segundo (Hz), pero la moda estadística (número más frecuente en un conjunto) rondaba los 700 Hz. En “Urban Stress. Experiments on Noise and Social Stressors”, op. cit., pág. 25. Más antigua es la clasificación que realiza BELL, A. Diferencia entre ruido no industrial [susurro -20 dB-, tic-tac de reloj a 1 metro -30 dB-, conversación -60 dB-, ruido de la calle -40 a 70 dB-, coche deportivo - 80 a 95 dB-], y ruido industrial [torno -85 a 95 dB-, prensa de punzonado -95 a 105 dB-, sierra circular (madera) -100 a 110 dB-, chorro de arena -118 dB-, remachado y astillado en placas de acero -130 dB-]. En “Noise. An Occupational Hazard and Public Nuisance”, op. cit., pág. 12. Obsérvese que no se interpreta el umbral 0 dB en la mayoría de guías o mediciones; la razón es que, aunque la búsqueda de un nivel 0 se asocia al silencio absoluto, éste no resulta, en contra de lo que cabe pensar, el ideal a perseguir [vid. *infra*, nota 150].

<sup>95</sup> Vid. MARTÍ MARTÍ, J. No obstante, en el orden civil, la jurisprudencia se decanta por considerar que se produce la inmisión cuando se puede acreditar la molestia que se causa a alguien que no está obligado a soportarla, con independencia de que se haya producido una contravención de la norma administrativa, o se hayan superado o no un determinado número de decibelios. En “La defensa frente a la contaminación acústica y otras inmisiones”, op. cit., págs. 93 y 94.

<sup>96</sup> Al aplicarse una escala logarítmica, el valor se incrementará en 3dB siempre que los valores sean iguales o muy semejantes. Si la diferencia supera los 20dB, el resultado será igual al sumando mayor; por ejemplo, si sumamos el ruido producido por cualquier artefacto (70dB) a otro que le supere en 20 unidades de presión (95dB), el resultado de la medición conjunta será 95dB, lo que no quiere decir que la sensación acústica de dicha medida sea proporcional a lo que expresa, ya que un pequeño incremento en decibelios representa un gran incremento de energía sonora. Vid. PIERCY, J.E. / EMBLETON, T.F.W. / SUTHERLAND, L.C. “Review of Noise Propagation in the Atmosphere”. En *Noise Pollution: Effects and Control*. A. Lara Saenz / R.W.B. Stephens (eds.) Ed. John Wiley & Sons, Scientific Committee on Problems of the Environment (Scope 24) Great Britain, 1986, págs. 95- 132, en especial 96. Vid. MATEO FLORÍA, P. Expone la Ley de Weber y Fechner (s. XIX) que, tras diferentes ensayos clínicos

- ✓ Normalmente será más habitual un escenario ruidoso en el que confluyan diferentes valores que uno en el que todos emitan al mismo nivel.<sup>97</sup> Sin embargo, la mayoría de mediciones de partículas contaminantes en otros medios (principalmente aguas continentales, residuos o atmósfera) se resuelven siguiendo otros protocolos, incluido el propio análisis organoléptico por parte de los agentes encargados de levantar el acta correspondiente.<sup>98</sup>
- ✓ Los criterios que permiten diferenciar una infracción administrativa de un delito aparecen, por una parte, altamente normatizados, aunque esto implica veladamente una paradoja, que es considerar que las delimitaciones horarias en compartimentos estancos o la ponderación del ruido (promedio), son capaces de revelar los datos reales sobre el verdadero daño. También es ingenuo declarar que estos indicadores son permeables, en la medida en que deban responder ante situaciones diversas.<sup>99</sup>
- ✓ Por otra parte, las propias normas carecen de la suficiente inteligibilidad (al estar colmadas de términos físico-matemáticos por las características y circunstancias físicas del sonido), lo que produce que su ejecución o aplicación sea de difícil concreción, ya que dicho obstáculo afecta tanto a profesionales como profanos que intervienen en un

---

sobre la relación cuantitativa entre la magnitud de un estímulo físico y cómo es percibido por el ser humano, concluyen: <<Cuando el valor del estímulo enviado a la persona ensayada se aumentaba al doble, la sensación percibida no era del doble, sino considerablemente inferior>>. En *La prevención del ruido en la empresa*. Ed. Fundación Confermetal. Madrid, 1999, págs. 48-50.

<sup>97</sup> Con independencia de este factor asociativo o sumatorio, ¿cómo podemos asegurar que una persona es capaz de tolerar mientras duerme 30dB (objetivo de calidad acústica) y no 32dB, en cuyo caso se habrá superado la cifra impuesta para valores de ruido nocturno en dormitorios de viviendas? RD 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. Anexo II. Tabla B. Se produce por tanto una concepción ideal y absoluta del decibelio, a todas luces utópica y extremadamente ingenua.

<sup>98</sup> La primera discriminación la lleva a cabo el propio agente, el acta dará lugar a un procedimiento administrativo o penal, tras las mediciones *in situ*, si es posible. En caso contrario, las muestras se envían, o bien a laboratorios de criminalística de la Guardia Civil o al Instituto de Toxicología. En aguas continentales por ejemplo, se verifica el pH, temperatura de la muestra y ambiente, conductividad, total de sólidos y oxígeno disueltos. El modelo de acta para recoger estas actuaciones se corresponde con el dictado por el Ministerio de Medio Ambiente, en la Orden Ministerial 85/2008, de 16 de enero [vigente hasta el 22 de septiembre de 2013].

<sup>99</sup> En el mismo sentido, *vid.* MARTÍ MARTÍ, J. Respecto a la generalización del ruido a través de un promedio, considera que así se ocultan los excesos del ruido. <<La plasmación de la imposibilidad de promediar la constató el autor de este artículo cuando encargó medición sonométrica sobre los ruidos de la tercera pista del aeropuerto de El Prat, en Barcelona. Efectuada medición acústica y promediada ésta, resultaba que los aviones pasaban cada seis minutos y durante 20 segundos. El resto de los 5'40'' el nivel acústico era calmado. El promedio resultaba francamente favorable al emisor sonoro. Pero visto de otra forma, los vecinos soportaban casi 85 decibelios durante 20 segundos cada seis minutos, esto es, diez veces a la hora, ochenta veces durante la noche. ¿Alguien duda de la enorme inmisión sonora que produce esa fuente emisora?>>. En "La defensa frente a la contaminación acústica y otras inmisiones", *op. cit.*, pág. 25.

proceso jurídico (jueces, peritos, agentes de policía, afectados, etc.)<sup>100</sup>, desvirtuando y descontextualizando los hechos; en suma, favorece una fecundidad normativa e interpretativa que no alcanza a encontrar soluciones (ni dogmáticas ni pragmáticas) a la verdadera incógnita.<sup>101</sup>

- ✓ Uno de los mayores productores de ruidos en las sociedades actuales es la Administración Pública, en el caso español, Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, por lo que tradicionalmente, la prueba directa del ruido para los ciudadanos es costosa y perversa: costosa de realizar, tanto en términos económicos como materiales (hay que tener en cuenta que se necesitarán varias actas de mediciones realizadas mediante un equipo debidamente homologado). Perversa porque en un alto porcentaje de casos, ésta se neutraliza sin demasiados obstáculos si se recurre a la simple inactividad material (no realización de inspecciones preceptivas) o formal (silencio administrativo) por parte de los órganos encargados de la vigilancia y control del ruido.<sup>102</sup>
- ✓ Es posible plantear la hipótesis de que la prueba obtenida en tiempo anterior al inicio del proceso, en la fase de investigación previa -Ministerio Fiscal o Policía Judicial-,

---

<sup>100</sup> Un ejemplo de la dicotomía entre conocimiento y aplicación lo hallamos en la STS (Sala de lo Penal) 52/2003 de 24 de febrero [RJ 2003\950], en la que se ofrece un argumento erróneo desde el punto de vista científico-matemático. <<Se dice que la sentencia incurre en error cuando afirma que la discoteca emitía por encima de los 90 decibelios generando más de 30 decibelios en las viviendas cuando consta al folio 13 (reverso) del acta del juicio que el representante legal de AUDIOTECT (ingeniero) manifestó que para que los niveles de ruido procedentes de la Sala de Fiestas y percibido pasara de 30 a 33 sería necesario que en interior de la Sala de Fiestas se duplicara el ruido, es decir que se pasara de 90 a 180 decibelios lo cual es imposible por no soportarlo el oído humano>> (FJ 3.9), al hilo de lo explicado *supra*, nota 86.

<sup>101</sup> En este sentido, *vid.* BLANQUER CRIADO, D. Se refiere a uno de los problemas a los que se enfrenta actualmente el Derecho administrativo, fascinado ante la interpretación de las normas, pero olvidando que lo fáctico, es decir, el descubrimiento, comprobación y valoración de los hechos, debiera provocar el mismo interés. <<Ocurre que la lucha contra la contaminación acústica es terreno propicio para poner de manifiesto la extraordinaria importancia de los hechos; de los hechos depende el éxito o el fracaso en la batalla contra el ruido>>. En *Contaminación acústica y calidad de vida. Un entorno de calidad para el turismo urbano*. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2005, págs. 416 y ss., en especial 418. Obviamente, la existencia de ruido que contravenga las leyes requiere de una prueba determinante, debido básicamente al tecnicismo propio de la disciplina y las escalas que fijan los niveles mínimos y máximos; por tanto, los hechos adquieren aquí una especial relevancia.

<sup>102</sup> *Vid.* NIETO, A. Realiza un acertadísimo estudio de diversas situaciones paradójicas que se producen al amparo de lo que el autor denomina “hipocresía” o “esquizofrenia del Estado”. <<El “Estado bueno” se encuentra seriamente preocupado por la contaminación acústica, de la que se ocupan miles de funcionarios y expertos, organiza costosas campañas de concienciación ciudadana y, sobre todo, legisla sin pausa [...] Al mismo tiempo, sin embargo, el “Estado malo”, mister Hyde, la cara maligna del Estado, no sólo permite todas las actividades ruidosas privadas –por ilegales, molestas y nocivas que sean– sino que es él mismo quien las produce>>. En *Balada de la justicia y la ley*. Ed Trotta. Madrid, 2002, págs. 213-243, en especial pág. 215.

pueda considerarse prueba preconstituida<sup>103</sup>, siempre y cuando sea introducida posteriormente en el mismo por vía del art. 730 LECrim<sup>104</sup>, si se tiene en cuenta la escasa y fragmentada normativa en cuanto a admisión y valoración probatoria de dictámenes periciales, de especial calado en procesos ambientales, ya que los diversos informes técnicos pueden contener contradicciones (formales y sustantivas).<sup>105</sup> Como

---

<sup>103</sup> Vid. LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, J. El autor alude a Bentham como el introductor del término “prueba preconstituida”, a la que llamaba “semipreconstituida” cuando se ha preconstituido sólo por una de las partes. Ahora bien, en todo caso se trata de un acto de investigación, no de prueba, ya que, al desarrollarse antes del proceso y fuera del mismo, no constituye en sentido jurídico “prueba”, diferenciándolo así de la prueba anticipada, que se practica con anterioridad a la celebración del juicio oral. En *Tratado de Derecho Procesal Penal* (4ª ed.) Ed. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2010, págs. 821-825. Vid. PÉREZ DE GREGORIO CAPELLA, J. J. Otorga a determinadas actuaciones el valor de prueba preconstituida, como las pruebas documentales que consisten en actas de inspección ocular, actas de toma de muestras de aguas residuales o emisiones sólidas o gaseosas, los informes técnico-fotográficos de Policía Judicial, etc. <<*Tales medios de prueba preconstituida (tanto aportados por el Ministerio Fiscal y la Policía Judicial, como por las partes acusadoras y defensoras en el proceso o por el Juez de Instrucción de oficio) sólo serán prueba preconstituida válida cuando sean ratificadas y sometidas a contradicción en el acto del juicio oral. Sólo las pruebas periciales preconstituidas se exceptúan de dicha regla general, por interpretación jurisprudencial de los arts. 726, 730 y 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, permitiéndose su lectura en dicho acto, conjunta o alternativamente a su ratificación*>>. “La prueba en el proceso penal por delitos contra el medio ambiente”. En *Revista Jurídica Española La Ley*, Tomo III. Ed. La Ley. Madrid, 1994, págs. 937-943. Del mismo autor, vid. “El proceso penal medioambiental”, op. cit., págs. 114-124. En general, la doctrina entiende que se deben dar una serie de garantías, tales como: Garantía jurisdiccional, de la información, de contradicción y publicidad, de las formalidades legales, de la fiabilidad de la recogida, y de la cadena de custodia. Por todos, vid. RIVERA MORALES, R. Se añade que el término “preconstitución de prueba” es erróneo, al menos en el ámbito penal, pues lo que realmente conforma es <<*fuentes u órganos de prueba*>>, al ocurrir en fase de investigación; al mismo tiempo puede que todavía no se haya cometido ningún delito. En *La prueba: Un análisis racional y práctico*. Ed. Marcial Pons. Madrid, 2011, págs. 170 y ss; GRANADOS PÉREZ, C. “La contaminación acústica como modalidad de delito contra el medio ambiente”. En *Dogmática y Ley Penal. Libro Homenaje a Enrique Bacigalupo*, Tomo II. Jacobo López Barja de Quiroga / José Miguel Zugaldía Espinar (coords.) Ed. Marcial Pons. Madrid, 2004, págs. 969-991, en especial 987 y ss.

<sup>104</sup> Vid. DOLZ LAGO, M. J. et al. *La prueba pericial científica*. Manuel Jesús Dolz Lago (dir.) Carmen Figueroa Navarro (coord.) Ed. Edisofer. Madrid, 2012, págs. 110-125, en especial 114.

<sup>105</sup> Respecto a la prueba preconstituida en relación a grabaciones de video-vigilancia, vid. GIMENO SENDRA, V. Dentro de las diligencias policiales de prevención, previa autorización administrativa, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pueden instalar cámaras estáticas y móviles con fines preventivos. <<*La jurisprudencia del TS ha otorgado naturaleza de prueba preconstituida a tales cintas o soportes magnéticos y electrónicos, grabados de oficio por la propia policía o incluso por establecimientos privados..., siempre y cuando la grabación se efectúe en las vías o espacios públicos, debiendo requerir la autorización judicial, cuando se trate de captación clandestina de imágenes o sonidos en domicilios o lugares privados*>>, aportando referencias a varias resoluciones. En *Derecho Procesal Penal*. Ed. Aranzadi. Pamplona, 2012, págs. 423 y ss. La LO 4/1997 de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos [desarrollada por RD 596/1999, de 16 de abril], cuyo art. 1.1 expresa: <<*La presente Ley regula la utilización por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de videocámaras para grabar imágenes y sonidos en lugares públicos, abiertos o cerrados, y su posterior tratamiento, a fin de contribuir a asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como de prevenir la comisión de delitos, faltas e infracciones relacionados con la seguridad pública. Asimismo, esta norma establece específicamente el régimen de garantías de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos que habrá de respetarse ineludiblemente en las sucesivas fases de autorización, grabación y uso de las imágenes y sonidos obtenidos conjuntamente por las videocámaras*>>. No se encuentra obstáculo material que impida aportar dichas grabaciones, ya que pueden reflejar también el nivel de ruido existente en la zona, puesto

refrendo de esta opinión, la excepción contenida en una Sentencia del TC respecto a una consolidada jurisprudencia que sostiene que las “diligencias policiales” no pueden ser prueba preconstituida, y de la que ésta se aleja, específicamente en relación a las “actas policiales”, objetando que las mismas pueden alcanzar el valor de prueba cuando la policía judicial haya intervenido por razones de urgencia y necesidad.<sup>106</sup> Habría que

---

que el audio se encuentra incorporado a las mismas. Vid. DE LA OLIVA SANTOS, A. / ARAGONESES MARTÍNEZ, S. et. al. Consideran que este tipo de diligencia de investigación, como las que se realizan en trámite de “Sumario” (art. 730 LECrim), tienen en común que durante su práctica se pueden interesar derechos fundamentales de la persona. En *Derecho Procesal Penal* (8ª ed.) Ed. Centro de Estudios Ramón Areces. Madrid, 2007, págs. 390 y 391. Vid. NIEVA FENOLL, J. / VIVES REGO, J. / CORCOY BIDASOLO, M. Las periciales ambientales pueden llegar a ser muy complejas. <<Todo ello hace aún más imperiosa la necesidad de establecer criterios de admisibilidad claros y precisos, que eviten que informes de baja calidad, cuando no directamente fraudulentos, dificulten o bloqueen la práctica de la prueba [...] Los tres solitarios artículos dedicados a la prueba pericial (arts. 723 a 725 LECrim) dejan lugar a todo tipo de improvisaciones en los juicios orales,...>>. “Eficacia y admisibilidad de la prueba pericial en el enjuiciamiento de delitos contra el medio ambiente”. En *Diario La Ley*. Año XXVII, núm. 6551. Lunes, 18 de septiembre de 2006, págs. 1-5. Así, la STS (Sala de lo Penal) 52/2003 de 24 de febrero [RJ 2003\950] sostiene que: <<Como dijimos en la STS 2184/2001, de 23 de noviembre (RJ 2002, 618), «la recogida previa de las muestras o vestigios del delito constituye una diligencia policial que no tiene la naturaleza de prueba preconstituida y que, en la medida que constituye un antecedente necesario del dictamen pericial emitido en el juicio, necesita ser incorporado al mismo mediante la comparecencia y declaración de los agentes que la practicaron, sin que le sean aplicables a estas actuaciones policiales las exigencias propias de la prueba preconstituida, pues no tienen dicha naturaleza, sin perjuicio de someterse a los principios de legalidad, proporcionalidad e interdicción de la indefensión». Las diligencias efectuadas por la policía judicial, en el curso de la investigación que constitucionalmente tiene atribuida, no constituyen pruebas sino cuando sus contenidos son expuestos, vía testifical, en el juicio oral [...] Cuestión distinta es la valoración que deba darse a las mencionadas diligencias policiales, pues como tales diligencias del atestado no tienen naturaleza de prueba, sin perjuicio de su valoración como testifical en el juicio oral sujeta a las exigencias de la prueba testifical>>. (FJ Segundo, 1). Con carácter general, vid. GÓMEZ ORBANEJA, E. / HERCE QUEMADA, V. Inciden en cómo aplica el juez el principio de valoración de la prueba, que no consiste en que se muestre libre de basar su convencimiento en <<medios probatorios que no hayan sido producidos y examinados en el juicio [...] El acarreo de pruebas materiales en el sumario prepara, en relación a determinados medios de prueba, la actividad probatoria del juicio, pero ni la suple ni la adelanta>>. En *Derecho Procesal Penal* (10ª ed.) Ed. Artes Gráficas y Ediciones. Madrid, 1986, págs. 264 y ss.

<sup>106</sup> STC (Sala 1ª) 303/1993 de 25 de octubre [RTC 1993\303] <<Ahora bien, de esta última doctrina general hay que exceptuar los supuestos de prueba sumarial preconstituida y anticipada que también se manifiestan aptos para fundamentar una sentencia de condena siempre y cuando se observe el cumplimiento de determinados requisitos materiales (su imposibilidad de reproducción en el momento del juicio oral: art. 730 LECrim), subjetivos (la necesaria intervención del Juez de Instrucción), objetivos (la posibilidad de contradicción, para la cual se le debe proveer de Abogado al imputado -cfr. arts. 448.1.º y 333.1.º) y formales (la introducción en el juicio oral a través de la lectura de documentos requerida por el art. 730)>>. <<En concreto, y en lo que a tales actos de constancia se refiere, este Tribunal ha otorgado el valor de prueba preconstituida a todas aquellas diligencias que, como las fotografías, croquis, resultados de las pruebas alcoholimétricas, etc., se limiten a reflejar fielmente determinados datos o elementos fácticos de la realidad externa [SSTC 107/1983 (RTC 1983\107), 201/1989 (RTC 1989\201), 138/1992 (RTC 1992\138), ATC 636/1987 (RTC 1987\636)]. Pero que la Policía judicial pueda o, mejor dicho, esté obligada a custodiar las fuentes de prueba no significa que tales diligencias participen, en cualquier caso, de la naturaleza de los actos de prueba. Para que tales actos de investigación posean esta última naturaleza se hace preciso que la policía judicial haya de intervenir en ellos por estrictas razones de urgencia o de necesidad, pues, no en vano la Policía judicial actúa en tales diligencias «a prevención» de la Autoridad judicial (art. 284). Una vez desaparecidas dichas razones de urgencia, ha de ser el Juez de Instrucción, quien, previo el cumplimiento de los requisitos de la prueba sumarial anticipada, pueda dotar al acto de investigación

preguntarse: ¿la indeterminación que domina a estos dos adjetivos haría posible alegar que es urgente que cesen los ruidos, o que no obstante es necesario? ¿Para quién lo es y para quién no, cuándo, en qué contexto, y sobre todo, como asegurarse una mínima objetividad en un terreno (el ruido) donde prima lo subjetivo, ya que resulta imposible determinar con exactitud cuándo un ambiente *está animado* o es *ruidoso*? Por otra parte, el informe de Detective Privado o bien el acta notarial<sup>107</sup> pueden contener elementos aptos para que el órgano instructor incoe las oportunas diligencias de investigación, con independencia de que se haya utilizado o no un equipo de medición; si se aplican las máximas de la experiencia, el juzgador tendrá la ocasión de verificar la idoneidad de la prueba.<sup>108</sup> Ésta, a su vez, puede contener imágenes, testimonios o cualquier otro medio / formato válido en Derecho, que determinen los elementos fácticos de la realidad externa, debidamente expresados en el correspondiente informe o acta. Además, se unen a este doblete en cuanto al origen de la filmación (imágenes o sonidos) otras posibilidades, tanto por parte de las FCSE como por actividades

---

*sumarial del carácter jurisdiccional (art. 117.3 CE) de acto probatorio, susceptible por sí solo para poder fundamentar posteriormente una sentencia de condena>>. (FF JJ 3 y 4).*

<sup>107</sup> En el supuesto de emisión de informes por Detectives Privados, según el art.101.1 del Reglamento de Seguridad Privada [RD 2363/1994, de 9 de diciembre, BOE del 10 de enero de 1.995], en espera del Reglamento de desarrollo de la nueva Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada. <<Los detectives privados, a solicitud de personas físicas o jurídicas, se encargarán: a) De obtener y aportar información y pruebas sobre conductas o hechos privados>>. Nada se dice de forma explícita sobre la inclusión de grabaciones videográficas, tan sólo en sentido negativo se menciona una prohibición en la que se podría subsumir dicho supuesto, en el art. 102.2: <<En ningún caso podrán utilizar para sus investigaciones medios personales o técnicos que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar, a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones>>. Cfr. ARZOZ SANTIESTEBAN, X. Considera discutible la interpretación de otra parte de doctrina, cuyo postulado es que existe habilitación suficiente en la normativa de seguridad privada para el uso de estas técnicas (seguimientos, grabaciones videográficas, fotografías, etc.), negándole el anclaje normativo necesario, tanto en la legislación específica como en el sistema constitucional y de derechos humanos. En *Videovigilancia, Seguridad Ciudadana y Derechos Fundamentales*. Ed. Civitas. Cizur Menor (Navarra), 2014, págs. 252-255. Por otra parte, el art. 17.1 de Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado define el concepto y contenido de las actas: <<Las actas notariales tienen como contenido la constatación de hechos o la percepción que de los mismos tenga el Notario, siempre que por su índole no puedan calificarse de actos y contratos, así como sus juicios o calificaciones>>. El Reglamento Notarial [Decreto de 2 de junio de 1944] les otorga naturaleza y efectos de instrumento público (art. 144). De los diferentes tipos de actas, tanto las denominadas actas de presencia, como las actas de notoriedad poseen la validez requerida. Las primeras se distinguen por acreditar una realidad o la veracidad de un hecho, según lo que el Notario presencie o perciba por sus propios sentidos, en los detalles que interesen al requirente, si bien no podrá extenderse a hechos cuya constancia requieran conocimientos periciales (art.199). Y las segundas se caracterizan por expresar la comprobación y fijación de hechos notorios sobre los cuales puedan ser fundados y declarados derechos y legitimadas situaciones personales o patrimoniales, con trascendencia jurídica (art. 209).

<sup>108</sup> Vid. SUBIJANA ZUNZUNEGUI, I. J. En la motivación de la sentencia, se sigue una metodología que permite dotar de validez a los argumentos utilizados, que en el caso de la prueba se pueden concretar en tres aspectos: descripción del cuadro probatorio, mención a los criterios de valoración utilizados y explicación del rendimiento probatorio asignado a cada medio de prueba. “La prueba video-gráfica en el proceso penal”. En *Videovigilancia. Ámbito de aplicación y derechos fundamentales afectados. En particular la protección de los datos personales*. José Ignacio Etxeberría Guridi / Ixusko Ordeñana Gezuraga (coords.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2011, págs. 17-43.



espontáneas realizadas por particulares, si bien los requisitos que deben cumplir para fundar una convicción judicial son diferentes.<sup>109</sup>

- ✓ En otras ocasiones, será posible aducir la notoriedad de los hechos (sin necesidad estricta de probarlos), cuando la evidencia fáctica sea absoluta y generalizada (por ejemplo, zonas “saturadamente” ruidosas, sucesos o eventos que se repitan con habitualidad periódica, etc.), siempre y cuando se justifique de forma fehaciente de dónde proviene dicha notoriedad.<sup>110</sup>

<sup>109</sup> Vid. SUBIJANA ZUNZUNEGUI, I. J. En “La prueba video-gráfica en el proceso penal”, op. cit., pág. 33. Respecto a grabaciones realizadas en lugares públicos por las FCSE, rige la LO 4/1997 y su reglamento de desarrollo y ejecución, aprobado por RD 596/1999 de 16 de abril, respondiendo a una labor de prevención y disuasión. En este caso, si la grabación capta hechos que puedan ser constitutivos de delito o infracción administrativa relacionada con la seguridad ciudadana, la entrega de la misma al órgano competente está prevista en el art. 7 de la LO 4/1997, y si las mismas carecen de relevancia la conservación se prolonga 1 mes, tras el cual deberán ser destruidas (art. 8.1). En cuanto a grabaciones inmersas en el marco de una investigación, art. 282.1 LECrim y art. 11.1g) LO 2/86, de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Vid. CEREZO DOMÍNGUEZ, A. I. / Díez RIPOLLÉS, J. L. En cuanto a la excepción contenida en la obligación de destrucción de imágenes, es decir, que las grabaciones se relacionen con delitos o infracciones administrativas graves (o muy graves) en materia de seguridad ciudadana y que, además, sean objeto de investigación policial o procedimiento (penal o administrativo) abierto, realizan una serie de observaciones. Por ejemplo, quedan fuera de la excepción las relacionadas con infracciones leves, así como las que no tengan que ver con la seguridad pública aunque sí que se vinculen a infracciones penales o administrativas. Este último aspecto resulta problemático, por las connotaciones político criminales en la interpretación de lo que se entienda por seguridad pública. En *Videocámaras y prevención de la delincuencia en lugares públicos. Análisis jurídico y criminológico*. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2011, págs. 86 y 87, nota 230. Vid. IGLESIAS MACHADO, S. El autor augura un papel decisivo a la tecnología avanzada en la seguridad urbana de las ciudades del futuro. “La seguridad en las ciudades y los entornos urbanos”. En *Seguridad Urbana, Urbanismo y Entornos Urbanos*. Cuadernos de Seguridad y Policía, núm. 6. Ed. Dykinson. Madrid, 2011, págs. 43-69.

<sup>110</sup> Según el art. 281.4 LEC <<no será necesario probar los hechos que gocen de notoriedad absoluta y general>>. Vid. BONET NAVARRO, J. <<Cuando este precepto exige el carácter de absoluto y general del hecho notorio se excede lingüísticamente [...] No es necesario que la notoriedad sea universal, pues podrá tener ámbitos territoriales inferiores, incluso regionales o locales. Tampoco es exigible que se conozca por todas las personas, basta con que se considere de conocimiento general o incluso que pueda ser conocido por quienes tengan una cultura media>>. “Algunos problemas concretos sobre aspectos generales de la prueba en el proceso civil”. En *Diario La Ley*. Año XXX, núm. 7256. Martes, 6 de octubre de 2009, págs. 1-10. En sede penal, la doctrina se inclina por entender que es necesario probarlos, puesto que la LECrim nada dice al respecto, pero otro sector doctrinal opina que, precisamente por la ausencia en el texto del proceso penal, hay que aplicar supletoriamente la LEC, según dispone el art. 4 del mismo texto legal. En este último sentido, vid. BANACLOCHE PALAO, J. / ZARZALEJOS NIETO, J. *Aspectos fundamentales del derecho procesal penal* (2ª ed.) Ed. La Ley. Madrid, 2011, pág. 271. A esta cuestión se refiere la STS (Sala de lo Penal) 2201/1994 de 15 de diciembre [RJ 1994\10575]: <<La prueba pretende hacer conocido un hecho desconocido, pero siempre están exonerados de prueba los hechos notorios, debiendo entenderse por tales los hechos conocidos que forman parte de la cultura de un grupo social determinado y no obstante su relatividad, los hechos notorios son por propia definición conocidos, por ello están exonerados de la *necessitas probandi*. El Tribunal de instancia ha declarado por notoriedad el valor superior a las treinta mil pesetas y hay que darle razón, sin que ello afecte -como pretende el motivo- a la presunción de inocencia del acusado>> (FJ 5). Idéntica situación se plantea en el orden de lo contencioso-administrativo, puesto que la Ley RJAP/PAC tampoco se pronuncia, y la supletoriedad dictada por el referido art. 4 se extiende también a ésta jurisdicción, así que la jurisprudencia entiende que cabe admitirlos, por aproximación a los procedimientos administrativos en derecho comparado. Así lo refleja la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª) de 8 de octubre de 1999 [RJ 1999\8665]. <<... en cuanto al rechazo de la

- ✓ Materialmente el ruido no deja residuos, ni posee efecto acumulativo en el medio, aunque sí puede desarrollar secuelas de carácter sumatorio en el hombre (déficit de atención, falta de sueño, trastornos cardiovasculares, digestivos, irritabilidad, diferentes cuadros relacionados con la salud psíquica, etc.), así como en otras especies. Dicho efecto cumulativo se percibe con claridad y simpleza en entornos especialmente ruidosos; por ello, existe una normativa más consolidada y estudiada en el ámbito de la seguridad en el trabajo (teniendo en cuenta la extensión de la etapa laboral de un individuo a lo largo de su vida, así como los antecedentes relacionados con la Revolución Industrial), dentro del disperso marco regulador de la protección frente al ruido, que se ha ido desarrollando de forma paulatina a medida que la sociedad tecnificada se implantaba.<sup>111</sup>
- ✓ Lo afirmado con anterioridad quiere diferenciar la teoría de la acumulación, que como veremos al estudiar su naturaleza jurídica, otorga la mayor parte de la doctrina a la materia ambiental. El particular estatus del ruido, a pesar de contener todos los ingredientes de un delito de acumulación, no produce efectos que se concentren en ningún caso en el medio, sino en el hombre y otros seres vivos.
- ✓ La emisión de ruidos es un problema en el que el carácter eminentemente urbano y nocturno ha alcanzado las primeras posiciones (al menos en cuanto a nuestro país se refiere), respecto a la industrialización del ocio nocturno, con zonas saturadas de focos emisores de distinta naturaleza, porque la mayoría de situaciones que anteriormente generaban ruidos indeseables se pueden considerar, o en franca minoría, o corregidas en gran parte, no así el ruido del tráfico rodado o de instalaciones aeroportuarias.<sup>112</sup>

---

*apreciación de notoriedad del hecho que formula el abogado del Estado, hay que recordar que, si bien en el Derecho Procesal Administrativo español no se contempla expresamente la notoriedad como medio de prueba, el derecho comparado sobre procedimiento administrativo viene admitiéndola, de manera que es un elemento del que puede servirse el Juez al hacer uso de su libertad estimativa para la valoración de los hechos>> (FJ 3).*

<sup>111</sup> Sobre el marco normativo regulador, responsabilidad del empresario causante de los ruidos en lugares de trabajo, y jurisprudencia más representativa, *vid.* MARCOS GONZÁLEZ, J. I. / GONZÁLEZ PÉREZ, B. “Un emergente ámbito de protección medioambiental: la responsabilidad del empresario como causante del ruido en los lugares de trabajo”. En *El derecho a una vida sin ruidos insalubres. Protección social, civil, contencioso-administrativa y penal*. Juan Ignacio Marcos González / Cristóbal Molina Navarrete (coords.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2010, págs. 49-94; FERNÁNDEZ AVILÉS, J. A. “La tutela jurídica del trabajador frente al ruido”. En *Régimen jurídico del ruido: una perspectiva integral y comparada*. Estanislao Arana García / M<sup>a</sup> Asunción Torres López (coords.) Ed. Comares. Granada, 2004, págs. 287-337.

<sup>112</sup> Es un problema al que tarde o temprano habrá que atender, porque lo cierto es que han aumentado los colectivos de residentes en diferentes zonas de múltiples ciudades, que se quejan amargamente y se

- ✓ Otro de los aspectos controvertidos es el que representa el estudio del sujeto activo del delito ecológico en su modalidad de “ruido”, previsto por el art. 325 CP. La indeterminación del causante de los mismos en situaciones de sonoridad molesta, provocada por grupos heterogéneos de personas o focos de ruido en diferentes horarios y situaciones es muy acusada. Dicha faceta entronca directamente con el denominado *Derecho a la ciudad*, adoptado por los urbanistas en los últimos tiempos, aunque su formulación se remonta a la década de los 60, y sus múltiples condicionantes, como el discutido concepto, funciones y sinergias de la ciudad informal o las teorías del Buen Vivir.<sup>113</sup>
- ✓ Posee un radio de acción mucho menor que otros contaminantes, es decir, se localiza en espacios muy concretos, y ello se traduce en que el carácter transnacional o transfronterizo, que por otra parte es nota definitoria de una gran mayoría de problemas ambientales, sufre un fuerte detrimento cuando hablamos de ruido.<sup>114</sup> No se conoce hasta la fecha ningún desastre ambiental originado por el ruido, sin embargo son numerosos los ocasionados por otras formas de contaminación o por efectos desencadenantes de fenómenos naturales, que desembocan a su vez en catástrofes de grandes dimensiones, como terremotos, maremotos, lluvias torrenciales, accidentes nucleares, desertificación del suelo, etc. Además, para lograr una intensidad que pueda resultar desagradable o dañina siempre es necesaria la intervención del hombre (directa o indirectamente).<sup>115</sup>

---

muestran impotentes para paliar estas situaciones, en muchas ocasiones perpetuándose en el tiempo y generando estados de verdadera tortura psicológica. Pero por otra parte no podemos obviar un derecho al “ruido”, adquirido por así decirlo a través del derecho al ocio, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho de manifestación, la libertad de movimientos, o las tradiciones culturales y lúdico-festivas.

<sup>113</sup> Teorías que desarrollaremos al tratar los nuevos criterios constitucionales de carácter ecocéntrico, iniciados fundamentalmente en países de América Latina, y su vinculación con el bien jurídico protegido.

<sup>114</sup> En este sentido, *vid.* VALCÁRCEL FERNÁNDEZ, P. Percibe las diferencias con otros contaminantes como una ventaja para que las medidas normativas de contención de ruidos posean efectividad, frente al caso de la contaminación atmosférica por ejemplo, en la que, aún prohibiéndose cierto volumen de emisiones por parte de un Estado, no se corresponde con un descenso de efectos perjudiciales si otros Estados no actúan con la misma vehemencia. “Contaminación acústica y desarrollo sostenible en el marco de la actividad aeroportuaria. Algunas soluciones. En particular: ¿Servidumbres acústicas en la lucha contra el ruido?”. En *Desarrollo sostenible y protección del medio ambiente*. José Luis Piñar Mañas (dir.) Ed. Civitas. Madrid, 2002, págs. 207-254.

<sup>115</sup> *Vid.* KAVALER, L. Es anecdótico que en la Naturaleza existan fenómenos capaces de alcanzar los 100dB, excepto el trueno, que llega hasta los 120dB. “Ruido. La nueva amenaza”, *op. cit.*, pág. 18. En este mismo sentido, CENJOR ESPAÑOL, C. / VILLACAMPA AUBA, J. M. “Efectos patológicos del ruido”. *Revista Ambienta*, núm. 59 (octubre) Ed. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Madrid, 2006, págs. 30-36.

- ✓ Carece de la misma capacidad de propagación a través de los sistemas naturales que otros fenómenos, como el aire contaminado trasladado por el viento, o el agua con partículas contaminantes en el recorrido natural de cauces fluviales y marítimos, por ejemplo.
- ✓ Tampoco se encuentra inmerso en las dinámicas del fenómeno de la “transferencia geográfica“, que sin embargo, es una peculiaridad establecida y asociada a la mayoría de las restantes formas de contaminación ambiental, a través de diferentes conductos tales como: tráfico marítimo, industria del reciclaje, actividades antropocéntricas que contribuyen al calentamiento global, quema de carbón, petróleo y otros combustibles fósiles, rutas de tránsito internacionales, industria de la falsificación, industria farmacéutica, empresas agrícolas corporativas, y un extenso etc.<sup>116</sup>
- ✓ Podemos sostener que la búsqueda y consecución de un estado de silencio absoluto es categóricamente ficticia, pues el sonido, tanto en su faceta antropogénica como biótica no siempre puede ser considerado como perturbador, sino que en muchas ocasiones será necesario, útil o beneficioso, según la naturaleza del estado al que nos refiramos, y su entidad (ser humano, no humano, o elemento natural). Por lo tanto, la eliminación del ruido en sentido omnímodo no es compatible con la supresión de la contaminación en el agua, atmósfera, suelo, etc., propósito éste que sí parece factible desde perspectivas físicas, químicas, o moleculares, por más que resulte incierto y complejo.
- ✓ El efecto adverso que ocasiona en la salud se disocia y reparte en múltiples categorías: secuelas en la audición, alteración del sueño, modificación de las funciones fisiológicas y del rendimiento físico e intelectual, impacto en la salud mental, transformación del entorno social, modelos de conducta, y combinados del ruido de fuentes mixtas.<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup> Vid. HECKENBERG, D. “The global transference of toxic harms”. En *Global Environmental Harm. Criminological Perspectives*. Rob White (ed.) Ed. Willan Publishing. Devon (UK), 2010, págs. 37-61.

<sup>117</sup> Vid. Informe “Ruido y Salud”, sobre la evidencia científica de diferentes daños en la salud. Observatorio de Salud y Medio Ambiente de Andalucía, 2010. págs. 16-37. Disponible en: [http://www.osman.es/contenido/profesionales/ruido\\_salud\\_osman.pdf](http://www.osman.es/contenido/profesionales/ruido_salud_osman.pdf) (último acceso 12/07/2015). Vid. “Guías para el ruido urbano”. Se detallan por secciones los efectos específicos. Por ejemplo, uno de los efectos sociales sobre la audición, que resulta preocupante, es la incapacidad para escuchar una simple conversación cotidiana, que genera problemas personales y cambios conductuales, sobre todo en ancianos y niños. Respecto a las funciones fisiológicas, se pueden producir cuadros de hipertensión y cardiopatías. No origina enfermedades mentales, pero intensifica y acelera las latentes. También se ve afectado el rendimiento de los procesos cognitivos, así como un incremento de la susceptibilidad y de

- ✓ Las consecuencias de la exposición al ruido prolongada en el tiempo, adquieren una inmediatez y virulencia en la salud física (sorderas precoces e irreversibles, cardiopatías, trastornos del sistema inmune, por citar algunos ejemplos) y mental (cambios conductuales, irritabilidad, cuadros de ansiedad y neurosis, trastornos depresivos, etc.) de marcado acento.<sup>118</sup>
- ✓ A menudo se relega y desatiende la idea de que determinados menoscabos graves sobre la salud se manifiestan a medio y largo plazo y que, al pasar desapercibidos en fases iniciales, cuando se repara en ellos son irreversibles y a menudo pueden llegar a desembocar en otros procesos derivados del originario. Por ejemplo, las fases correctas del “sueño”, que se suceden escalonadamente desde el sueño superficial a la fase de sueño profundo [descanso físico] y finaliza con la fase REM (*Rapid Eye Movements Sleep*) [descanso intelectual] se desajustan con el ruido, porque los denominados “micro-despertares”, que suceden de forma natural durante el sueño en 5 o 6 ocasiones,

---

niveles de agresividad cuando se superan de 80 dB, op. cit. págs. 10 y ss. *Cfr.* BECHTEL, R. B., que relata un experimento llevado a cabo por la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo [Occupational Safety and Health Administration (OSHA)] en el que se estudia la influencia del ruido en los trabajadores, llegando a la conclusión general de que el efecto del ruido sobre la ejecución de tareas es mínimo, excepto en casos extremos (Sanders and McCormick, 1993). Broadbent (1976) había tratado de explicar estas diferencias antes de su hipótesis de la “canalización de la atención”: a altos niveles de ruido, el trabajador se centra sólo en los aspectos más importantes de una tarea. Si la información relevante se pierde por escasez de concentración, el rendimiento se resiente, pero para tareas simples, un estrechamiento del enfoque puede mejorar el rendimiento. En “Environment and Behavior. An Introduction”, op. cit., págs. 396 y 397.

<sup>118</sup> *Vid.* CUADRADO PÉREZ, C. Como ejemplos, enumera los cambios producidos en la composición química sanguínea, isquemias cardíacas, ansiedad, manía, náuseas, neurosis y psicosis en personas con predisposición a estas enfermedades, o comportamientos antisociales como hostilidad, intolerancia, agresividad y aislamiento social. En “Ruido, inmisiones y edificación”, op. cit., pág. 15. El Tribunal Constitucional, en lo que respecta a los efectos del ruido, destaca su importancia en STC (Sala Primera), núm. 16/2004, de 23 de febrero [RTC 2004\16], que sigue lo manifestado previamente en STC 119/2001 (Sala Pleno), de 24 de mayo [RTC 2001\119], afirmando que <<El ruido, en la sociedad de nuestros días, puede llegar a representar un factor psicopatógeno y una fuente permanente de perturbación de la calidad de vida de los ciudadanos. Así lo acreditan, en particular, las directrices marcadas por la Organización Mundial de la Salud sobre el ruido ambiental, cuyo valor como referencia científica no es preciso resaltar. En ellas se ponen de manifiesto las consecuencias que la exposición prolongada a un nivel elevado de ruidos tienen sobre la salud de las personas (v. gr. deficiencias auditivas, apariciones de dificultades de comprensión oral, perturbación del sueño, neurosis, hipertensión e isquemia), así como sobre su conducta social (en particular, reducción de los comportamientos solidarios e incremento de las tendencias agresivas)>> (FJ 3). *Vid.* CENJOR ESPAÑOL, C. / VILLACAMPA AUBA, J. M. Describen un amplio cuadro de efectos del ruido a nivel sistémico: Sistema Nervioso Central (hiperreflexia y alteraciones en el EEG); Sistema Nervioso Autónomo (dilatación pupilar); Aparato Cardiovascular (alteraciones de la frecuencia cardíaca e hipertensión arterial aguda); Aparato Digestivo (alteraciones de la secreción gastrointestinal); Sistema Endocrino (aumento del cortisol y otros efectos hormonales); Aparato Respiratorio (alteraciones del ritmo); Aparato Reproductor-Gestación (alteraciones menstruales, bajo peso al nacer, prematuridad, riesgos auditivos en el feto); Órgano de la Visión (estrechamiento del campo visual y problemas de acomodación); Aparato Vestibular (vértigos y nistagmus). En “Efectos patológicos del ruido”, op. cit., pág. 35.

aumentan en un 20%, lo que supone que el organismo pasa gran parte del tiempo en fase de sueño superficial. Estas etapas se suceden en ciclos repetidos.<sup>119</sup>

- ✓ Se percibe únicamente por un sentido: el oído, lo cual hace subestimar su efecto. La razón es que existen infrasonidos y ultrasonidos (cuya frecuencia de vibraciones es inferior y superior respectivamente a los límites perceptibles por el oído humano), lo que no quiere decir que sus efectos no sean altamente perniciosos.<sup>120</sup> Esto no sucede con el agua, medio en el cual la “contaminación” se puede percibir por su aspecto, color, olor y sabor, ni con la polución atmosférica, que se manifiesta a través de dificultades respiratorias, irritaciones oculares, de la piel o alergias de manera casi inmediata. No obstante, recientes investigaciones detectan su vinculación directa con el sentido de la vista, por lo que se puede relacionar directamente en numerosos casos con la llamada “contaminación lumínica”, de cuya cuestión nos ocupamos en otro epígrafe.<sup>121</sup>

---

<sup>119</sup> Respecto a los trastornos del sueño causados por el ruido y sus consecuencias, *vid.* “Night Noise Guidelines for Europe”. Además de diferentes recomendaciones y valores guía de exposición al ruido durante la noche, se manejan suficientes datos demostrativos de la influencia del ruido, tanto en diferentes fases del sueño como en la calidad de vida, incluyéndose en el estudio la repercusión del mismo en animales. Se establece como valor límite deseable de ruido nocturno exterior, 30 dB. World Health Organization. Regional Office for Europe, 2009. Consulta del documento completo en: [http://www.euro.who.int/\\_data/assets/pdf\\_file/0017/43316/E92845.pdf](http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0017/43316/E92845.pdf) (último acceso 12/07/2015). *Vid.* Informe “Ruido y Salud”. La pérdida progresiva de audición, hipoacusia o sordera desemboca en una pobre o nula interacción del sujeto con el entorno que le rodea, es decir, aislamiento y trastornos depresivos; hay que tener en cuenta que para que un mensaje oral se entienda en un 80% debe superar en 12 dBA el ruido de fondo existente. El 90% de personas con pérdida de audición sufre en algún momento acúfenos o tinnitus de forma concomitante (se trata de la percepción de un sonido que no procede de ninguna fuente externa y que percibe exclusivamente el afectado). Pero también pueden ser experimentados por personas expuestas al ruido sin pérdida de audición medible. Ed. Observatorio DKV de Salud y Medio Ambiente en España, 2011-2012. Disponible en: <http://www.ecodes.org/salud-y-medio-ambiente-ecodes/observatorio-dkv-salud-y-medio-ambiente-2011-2012> (último acceso 12/07/2015). *Vid.* ESTIVILL SANCHO, E. “Los trastornos del sueño” (parte I). En *Revista Clínica Rural*, núm. 426, 1994, págs. 52-54. *Vid.* GARCÍA RODRÍGUEZ, A. Un dato a tener en cuenta es la edad, un factor determinante. Por ejemplo, a partir de los 60 años, la etapa 4 y la etapa REM del sueño desaparecen casi completamente. Otros estudios (Berglund et al., 1995) afirman que los valores del umbral de niveles sonoros para despertar del sueño son más bajos durante la fase REM, tanto por ruidos impulsivos como no impulsivos. En “La Contaminación Acústica. Fuentes, Evaluación, Efectos y Control”, op. cit., págs. 130 y 131. *Vid.* GRIEFAHN, B. “Noise Pollution during the Night -A Possible Risk Factor for Health”. En *Noise Pollution: Effects and Control*. A. Lara Saenz / R.W.B. Stephens (eds.) Ed. John Wiley & Sons, Scientific Committee on Problems of the Environment, Scope 24. Great Britain, 1986, págs. 265-282.

<sup>120</sup> *Vid.* VALCÁRCEL FERNÁNDEZ, P. Los ultrasonidos (de baja y alta frecuencia) pueden llegar a desencadenar la muerte si superan los 180 decibelios. En “Contaminación acústica y desarrollo sostenible en el marco de la actividad aeroportuaria. Algunas soluciones. En particular: ¿Servidumbres acústicas en la lucha contra el ruido?”, op. cit., pág. 213.

<sup>121</sup> *Cfr.* MARTÍN MATEO, R. No considera al ruido una agresión prototípica ambiental equiparable a las agresiones ordinariamente tratadas en los códigos ambientales, por sus características físicas ya que, teóricamente no se produce por sus efectos una disminución o menoscabo general de un sistema o de alguno de sus componentes, lo que sí ocurre en el caso del agua, suelo, atmósfera o biodiversidad. Alude

- ✓ El sonido musical también ha sido analizado desde un punto de vista semántico, de procesamiento léxico, conceptual y proposicional del lenguaje.<sup>122</sup>
- ✓ Es tan sólido e intenso el componente subjetivo del ruido que, incluso tratándose de una misma persona, el grado de afectación por similares categorías de ruido puede variar de forma considerable, dependiendo del espacio en que se desarrolle (contexto laboral, lúdico, privado), la cronología (mañana, tarde, noche), la época (primavera, verano, otoño e invierno), las propias condiciones psicológicas (humor óptimo, depresión) y fisiológicas (edad, fisiología auditiva, cardíaca, etc.), así como situacional, respecto de la actividad en que el sujeto se halle inmerso en el preciso instante de la emisión (mecánica, intelectual, de ocio, fase de sueño, etc.).<sup>123</sup>

---

también al hecho de que tan solo resulta nocivo para el ser humano, aunque en términos generales acepta que no se cuentan con suficientes investigaciones sobre los efectos en la flora y fauna. <<Las perturbaciones sonoras más que por su virtualidad de alterar las constantes de la biosfera, pueden ser sustantivizadas por analogía con otros trastornos menores que igualmente se producen en el medio, por lo que incorrectamente también se alude a contaminación, pese a que no supone ni a corto ni a largo plazo una amenaza para la vida... >>. El planteamiento no nos parece del todo correcto en ésta última apreciación del autor, pues es un hecho tradicionalmente aceptado que una persona privada de las fases correctas de sueño durante tiempo indeterminado sufre episodios de distinta índole, que acarrear enormes trastornos en su salud física y mental, por lo que hay que considerarlo como un menoscabo de la calidad de vida en el entorno del individuo, de la misma entidad que los efectos que se pueden producir por otro tipo de contaminación, de las aguas, atmosférica, etc. No obstante, el acierto del argumento es innegable en lo que respecta a la mayor o menor disminución de las propiedades físicas de algún componente, o de todo un sistema. En “Tratado de Derecho Ambiental” Vol. IV, op. cit., págs. 149-150.

<sup>122</sup> Vid. ROHRMEIER, M. A. / KOELSCH, S. Existen estudios que revelan dos correlaciones neuronales de procesamiento del significado, la N400 y la N5 (que son los dos componentes del potencial cerebral relacionado con el evento eléctrico). Se sostiene que la N400 puede ser provocada por estímulos musicales debido al tratamiento extra-musical del significado, mientras que la N5 puede ser obtenida debido al tratamiento intra-musical del significado. Cabe destacar que, mientras que la N400 puede ser provocada por los estímulos lingüísticos y musicales, la N5 hasta ahora sólo ha sido observada para el procesamiento del sentido en la música. “Predictive information processing in music cognition. A critical review”. En *Internacional Journal of Psychophysiology*, núm. 83, 2012, págs. 164-175; STEINBEIS, N. / KOELSCH, S. “Affective Priming Effects of Musical Sounds on the Processing of Word Meaning”. En *Journal of Cognitive Neuroscience*, Vol. 23, núm. 3. Marzo, 2011, págs. 604-621. Disponible en: <http://www.mitpressjournals.org/toc/jocn/23/3> (último acceso 12/07/2015).

<sup>123</sup> Vid. BARRIGÓN MORILLAS, J. M. / VÍLCHEZ GÓMEZ, R. / GÓMEZ ESCOBAR, V. et. al. Reiteran la opinión de que la evaluación del ruido y sus efectos sobre las personas no se puede realizar teniendo en cuenta solamente los aparatos de medición, sino que <<Las molestias del ruido varían fuertemente de persona a persona en función de varios aspectos: estado de ánimo del receptor, nivel económico, vivencias personales, actitud hacia la fuente del ruido, bagaje cultural, etc.>>. La encuesta efectuada se ha construido en torno a varias coordenadas, tales como la ubicación de la vivienda, datos del encuestado sobre aspectos que puedan incidir en la forma en que percibe el ruido, características del entorno, diferencia entre molestia y perturbación, enumeración de 25 fuentes de ruido exteriores y 16 interiores, se incluyen posibles molestias asociadas a las vibraciones, efectos del ruido (sueño nocturno, actividad intelectual, conversación, alteraciones en la personalidad o en el estado físico y psicológico), medidas tomadas individualmente contra el ruido, etc. “Presentación de una encuesta para la realización de estudios sociales sobre el impacto del ruido urbano”. En *Revista de Acústica*, vol. 33, núm. 1-2 (abril) Ed. Sociedad Acústica Española. Madrid, 2002, págs. 27-33. Vid. MULERO MENDIGORRI, A. Otro dato interesante es que la población, como receptora, tolera mejor los ruidos que proceden de fuentes que se consideran útiles socialmente, como los transportes públicos, obras públicas, sirenas de servicios

- ✓ Desde un punto de vista socio-económico, provoca que las zonas saturadas de ruido de los centros urbanos vean mermado el precio del suelo, relacionándose por tanto el incremento de ruido con la depreciación de inmuebles, valorado como una externalidad económica directa.<sup>124</sup> Otros efectos, de carácter indirecto, son el aumento en costes sanitarios derivados, menor productividad laboral y escolar, así como un aumento del absentismo laboral.<sup>125</sup>

---

médicos y policiales, etc., que aquellos que en principio carecen de esa consideración, como las discotecas, pubs, transportes privados, etc. *Introducción al medio ambiente en España*. Ed. Ariel. Barcelona, 1999, pág. 95.

<sup>124</sup> No existen datos contrastados que permitan conocer cómo actúan en los inmuebles las vibraciones prolongadas en el tiempo (por ejemplo, a causa del tráfico rodado intenso), pero es indudable que pueden afectar a la estructura. Así, en la STEDH (Sección 2ª), *Dees contra Hungría* de 9 de noviembre de 2010 [JUR/2010/367178], se afirma por el demandante que las paredes de su casa fueron dañadas y agrietadas por el volumen de tráfico de camiones pesados que transitaban por su calle con el fin de evitar un tramo de peaje de una autopista cercana, presentando un informe de un experto privado en el que se concluye que el daño fue provocado por las vibraciones que causaba el tráfico pesado (§ 8).

<sup>125</sup> La protección medioambiental se caracteriza por haber sido una cuestión propia del Derecho público, pero lo cierto es que el “ruido” posee un componente privado muy fuerte por cuanto invade directamente el círculo íntimo y privado de cualquier persona (domicilio personal, laboral, asistencial, etc.). A la vez, esto genera consecuencias económicas bastante acusadas, puesto que se traduce casi de forma automática en alteraciones del precio del suelo, principalmente el de uso residencial. *Vid.* HERNÁNDEZ PAIZ, E., que aboga por añadir los datos sobre contaminación acústica en las fincas inscritas en el Registro de la Propiedad dentro de la función de publicidad que cumple el Registro, extendiéndose también al campo del Derecho ambiental. <<La colaboración de la Institución Registral y el sistema de Bases Gráficas Registrales, con todas las Administraciones Territoriales en materia urbanística y tributaria [...] puede extenderse [...] a las inmisiones ruidosas [...] Que el ruido es un agente problemático y perjudicial [...], por tanto, la información que sobre el mismo pueda quedar plasmada en el Registro de la Propiedad interesa, no sólo al titular de la finca inscrita, sino a toda la comunidad en general, que obtendría una información mucho más completa que la proporcionada hasta ahora sobre la misma>>. “Contaminación acústica y Registro de la Propiedad”. En *La Información territorial en el Registro de la Propiedad*. Actas/Comunicaciones Congreso Internacional. Tenerife, diciembre, 2011, págs. 86-94. En este mismo sentido, PAU, A. Considera procedente la inclusión de los mapas de ruido previstos por la Ley del Ruido, puesto que la información que contienen se dirige tanto a la propia Administración como a todos los ciudadanos, al usar la expresión “presentación al público” en el apartado 3 de su art. 15. La previsión se incumple posteriormente en su Reglamento de desarrollo, que no prevé nada al respecto dentro del Capítulo VI, dedicado a los mapas de ruido. *El ruido y su publicación registral*. Comunicación presentada al Pleno de Académicos de Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación el día 28 de febrero de 2011. Ed. Real Academia de Jurisprudencia y Legislación / Dykinson. Madrid, 2011, págs. 331-354, en especial 343. En relación a la actividad laboral, *vid.* CENJOR ESPAÑOL, C. / VILLACAMPA AUBA, J. M. <<La pérdida de audición inducida por el ruido en el lugar de trabajo, es la segunda enfermedad laboral más frecuente [...] Se estiman inmensos los costes en compensaciones económicas y jubilaciones anticipadas a causa del ruido. Por ejemplo, EE.UU. gasta 300 millones de dólares cada año en tratamientos y compensaciones para este tipo de afectación, siendo esta patología la que más dinero gasta por sí sola en esta administración>>. En “Efectos patológicos del ruido”, op. cit., pág. 30. Una de las últimas investigaciones desarrolladas en torno al ruido y sus costes económicos en términos sanitarios se llevó a cabo sobre la población de EE.UU., país que experimenta en la actualidad un incremento de niveles de ruido preocupante. *Vid.* SWINBURN, T. K. / HAMMER, M. S. / NEITZEL, R. L. Afirman que 100 millones de americanos están expuestos a niveles de ruidos que comportan graves riesgos de pérdida de audición, estrés, disrupción del sueño, y enfermedades cardiovasculares; con la reducción de exposición entre 5 y 10 dB, se lograría una disminución del riesgo de sufrir algún tipo de enfermedad cardiovascular entre 7% y 17%. El impacto económico estimado del escenario de reducción supera los 3.9 mil millones de dólares al año. “Valuing Quiet. An Economic Assessment of U.S. Environmental Noise as a Cardiovascular Health Hazard”, op. cit., pág. 6.



- ✓ Si realizamos un estudio estrictamente económico del ruido, tratándolo como un bien ambiental de efecto externo negativo, encontramos serias dificultades para proceder a su valoración, ya que, al carecer de un mercado donde pueda ser objeto de intercambio, se desconoce su precio.<sup>126</sup> No existe mecanismo de regulación o de mercado y esto se traduce en que la sociedad no interioriza la externalidad negativa que produce.<sup>127</sup> Además, los modernos sistemas de programas de cumplimiento -*Corporate Compliance*-, como categoría propia en el ámbito empresarial, concretamente en el campo del actual Derecho penal del medio ambiente<sup>128</sup>, no alcanzan de forma tan significativa a la faceta del ruido, porque éste no se produce normalmente en grandes

<sup>126</sup> Un estudio realizado en 2012 asegura que Madrid es actualmente la ciudad española más sostenible, pero paradójicamente no se incluye en el índice de indicadores el “ruido ambiental”. Vid. “25 ciudades sostenibles”. Estudio elaborado por el Instituto Análisis e Investigación, 2012. Disponible en: <https://s3.amazonaws.com/25CiudadesSostenibles/25+ciudades+espan%CC%83olas+sostenibles.pdf> (último acceso 12/07/2015). Vid. GARCÍA SANZ, B. / GARRIDO, F. J. Algunas estimaciones señalan que las inversiones necesarias para reducir el número de personas expuestas a ruido pueden resultar hasta un 10% más baratas que los costes sociales producidos por el mismo, que supondrían hasta un 0,1% del PIB. En “La contaminación acústica en nuestras ciudades”, op. cit., pág. 43.

<sup>127</sup> Vid. DEL SAZ SALAZAR, S. El autor realiza un estudio económico del ruido por tráfico rodado utilizando el Método de Valoración Contingente (para valorar bienes que carecen de mercado), que permite conocer cuáles serían los beneficios sociales derivados de una política de reducción del ruido en varios municipios de la Comunidad Valenciana afectados por el paso de la Autopista AP7. Los resultados obtenidos muestran que la mayor parte de los encuestados estarían dispuestos a pagar para reducir los niveles de ruido con la utilización de asfaltos especiales o la instalación de pantallas acústicas, a través de una contribución especial a la Administración. “Tráfico rodado y efectos externos: valoración económica del ruido”. En *Ekonomiaz (Revista Vasca de Economía)*, núm. 57, cuatrimestre 3º. Ed. Gobierno Vasco, 2004, págs. 46-67. Vid. VERCHER NOGUERA, A., en relación al nulo interés de la sociedad española por la “degradación ecológica” hace casi tres décadas. En *Comentarios al delito ecológico. Breve estudio de Derecho comparado entre España y los Estados Unidos*. Ed. Centro de Publicaciones del Ministerio de Justicia. Madrid, 1986, págs. 17 y ss. Situación que evidentemente ha mejorado, pero que en materia de ruidos continúa siendo deficitaria en la conciencia social y empresarial. Vid. “Sostenibilidad en España 2009”, en cuanto a la inversión de empresas en protección ambiental, que maneja los siguientes datos respecto a ruido y vibraciones: tan sólo el 2% del total de las inversiones realizadas, tanto en lo referente a equipos e instalaciones independientes como a equipos integrados. Pero quizás lo relevante es que no se haya producido una evolución significativa en el periodo que comprende el estudio (2003-2009), si además lo comparamos con el producido en el resto de apartados, entre los que las emisiones al aire, y otros ámbitos (radiaciones, I+D) han sufrido la mayor atención. En *Observatorio de la Sostenibilidad en España* (OSE). Disponible en: <http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0637069.pdf> (último acceso 12/07/2015).

<sup>128</sup> Se trata de programas para la prevención de responsabilidades penales y administrativas de las empresas, no sólo en el sentido de cumplir con los mandatos jurídicos a los que estén sujetos, sino también el estudio sistemático de los riesgos jurídicos que se asumen por el ejercicio de la actividad, así como el descubrimiento de irregularidades, cuyas bases legales en derecho español se encuentran en la Ley del Mercado de Valores [art. 116.4 d)] y en el Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas [recomendación núm. 49]. Vid. BACIGALUPO ZAPATER, E. Alude a la importancia que el Derecho del medio ambiente ha desarrollado en el debate sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, cuya implantación se ha visto fuertemente vinculada al desarrollo del mismo y también del derecho económico. Por ejemplo, la fuga de partículas radioactivas producida en la central nuclear de Ascó en 2007, en la que la información facilitada a la autoridad reguladora competente fue deficiente e incompleta, hace que ésta se pueda enfrentar a una sanción de unos 22’5 millones de euros, por parte del Ministerio de Industria, a propuesta del Consejo de Energía Nuclear. En *Compliance y Derecho Penal*. Ed. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2011, págs. 28, 78 y ss. Finalmente, la sanción impuesta a Endesa, titular de la planta, no ha superado los 15’4 millones de euros.

volúmenes corporativos, por así decirlo, a diferencia de otros parámetros ambientales susceptibles de ser evaluados con una cierta periodicidad, y cuyos costes, ambientales y económicos resultan en cualquier caso, mucho más elevados.<sup>129</sup> Cabe apuntar que en el orden penal, estos programas, desarrollados correctamente, poseen virtualidad propia, ya que pueden fundamentar una atenuación de la pena en supuestos de responsabilidad criminal de personas jurídicas, según el art. 31 bis 4 b) y d), posibilidad existente desde la reforma del CP llevada a cabo por LO 5/2010, de 22 de junio, actualmente ubicada en el art. 31 quater d).<sup>130</sup>

- ✓ Otro factor diferenciador es el relativo a las instituciones implicadas en la gestión, valoración y, sobre todo, neutralización de efectos o, si éstos finalmente se producen, las encargadas de su sanción o de imponer medidas correctoras de cualquier tipo, ya que en el caso del “ruido”, la instancia mayoritariamente competente es la Administración local.<sup>131</sup> El ruido carece de ese componente globalizador que suele

---

<sup>129</sup> Vid. BURROWS, P. / RICHARDSON, G. / OGUS, A. Describen la situación, respecto a las políticas llevadas a cabo en el Reino Unido sobre el control de la contaminación atmosférica, examinando en particular los fallos del mercado, lo que ha llevado a los gobiernos a intervenir en el ejercicio de la actividad económica. En relación con el control de la contaminación, se argumenta que puede llegar a ser muy complejo, sobre todo cuando se tienen en cuenta, por ejemplo, las variaciones en la capacidad de asimilación del medio receptor y las preferencias de las generaciones futuras. Cualquiera que sea la razón económica que haya detrás, el uso de normas impuestas legalmente implica un proceso de aplicación que da lugar al ejercicio de la discrecionalidad, y que efectivamente da forma a la naturaleza de los controles. El alcance y la ubicación de este criterio, tanto formal como informal, argumentan, variará según el carácter preciso del sistema legislativo. Aunque la presencia de discrecionalidad puede proporcionar un elemento deseable de flexibilidad y ayudar a evitar el problema del legalismo, puede, por el contrario, dar lugar a la incertidumbre. Por lo tanto, un problema para el legislador es encontrar el compromiso adecuado entre el legalismo y la discrecionalidad incontrolada. Respecto a la sanciones penales, opinan que mientras que la noción de culpabilidad, que suele ser esencial para la imposición de la responsabilidad penal, es a menudo difícil de establecer en relación con los delitos reglamentarios, la alternativa de la responsabilidad objetiva plantea problemas relativos a la justificación para el castigo penal: prevención o castigo (justo merecido). En *Policing Pollution. A Study of Regulation and Enforcement*. Ed. Oxford University Press. New York, 1982.

<sup>130</sup> Tanto el apartado b) como el d) se refieren a la posibilidad de aportar datos sobre medidas eficaces que permitan entender la colaboración en el descubrimiento y prevención de, o bien nuevos delitos *ad futurum* bajo la cobertura o con los medios de la persona jurídica, o bien la aportación de pruebas nuevas y decisivas que permitan esclarecer la responsabilidad en los hechos causantes del procedimiento en curso, siempre que las primeras se establezcan y las segundas se presenten antes del comienzo del juicio oral. Se sigue aquí la tesis de la aplicación de la atenuante por cumplimiento de programas corporativos de BACIGALUPO ZAPATER, E. Según el autor, la aplicación la circunstancia atenuante del anterior art. 31 bis 4 d) –art. 31 bis quater d) tras la reforma de 2015– a los programas de *compliance* para el futuro, no impide que tengan la misma consideración los programas que se hayan implantado con anterioridad a la comisión del delito, respecto a los cuales se entiende que pueden excluir la culpabilidad de organización. En “Compliance y Derecho Penal”, op. cit., págs. 110 y ss. El estudio específico de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en relación a la materia medioambiental se lleva a cabo *infra*, en el epígrafe 4.3.2.1.

<sup>131</sup> Con independencia de las características físicas del “ruido” y su “no propagación por cauces naturales”, si nos atenemos a la mayor parte de denuncias efectuadas por particulares, éstas se refieren a sus consecuencias en ámbitos domiciliarios y por tanto, la adecuación del urbanismo y las técnicas de

acompañar a otras manifestaciones dañinas para el medio, lo que desemboca necesariamente en unidades de actuación a escalas más restringidas, aunque en determinados sectores sea necesario ampliar la esfera, tanto normativa como ejecutiva, como en el caso de los usos urbanísticos y las competencias autonómicas sobre los distintos tipos de planeamientos, que obligatoriamente influyen sobre los criterios de edificación residencial.<sup>132</sup>

- ✓ En consonancia con lo defendido en el punto anterior, una total armonización europea en cuanto a la duración de penas privativas de libertad que se impongan a personas físicas, y penas de otra naturaleza establecidas para personas jurídicas, resulta una excelente solución en varios tipos delictuales contra el medio ambiente, tesis apoyada por parte de la doctrina, pero no resulta acertado defender este planteamiento político-criminal en la materia que estudiamos, por su marcado carácter localista. La necesidad de aludir a razones soberanistas para apoyar dicha tesis desaparece en este supuesto y, tan sólo atendiendo al acervo cultural e histórico de cada Estado, que influye notablemente en el vínculo que cada sociedad concibe y establece con el ruido que soporta, el argumento se sostiene plenamente.<sup>133</sup>

---

planeamiento deberían asociarse de forma indisoluble, consolidándose en orden a un uso reiterado y de efectivo cumplimiento, para ayudar a paliar este fenómeno tan perturbador en las sociedades actuales; no logro descubrir nada nuevo con este argumento, porque de obvio pasa a ser casi insultante y obsceno la necesidad de pronunciarse, pero lo cierto es que la doctrina siempre ha acentuado el profundo valor de dicha ecuación. Vid. SOSA WAGNER, F. <<Dicho de otra forma, el esfuerzo de una política de protección medioambiental destinada a la prevención de ruidos sin el soporte de una ordenación acertada de los usos urbanísticos tiene algo de esfuerzo de Sísifo>>. En “La lucha contra el ruido”, op. cit., pág. 16.

<sup>132</sup> Relativo a la habitabilidad como requisito básico de la edificación, el art. 3 .1.c.2) de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación: <<Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades>>. BOE 21567/1999 núm. 266. Vid. CUADRADO PÉREZ, C. Considera, al margen de la responsabilidad personal e individualizada del sujeto a quien sea imputable el insuficiente aislamiento acústico (normalmente el promotor o constructor), la existencia de un vicio oculto y, consecuentemente, la obligación de saneamiento por parte de cualquier vendedor, según el art. 17.2 y 9 de la ley mencionada (este último apartado remite a los arts. 1.484 y ss. del Código Civil y demás legislación aplicable a la compraventa). En “Ruido, inmisiones y edificación”, op. cit., págs. 153 y ss.

<sup>133</sup> Cfr. BAUCCELLS LLADÓS, J. Se muestra partidario de conseguir la armonización total en los países comunitarios en materia ambiental, hito no alcanzado todavía por numerosas razones, aunque avanzado en sus propósitos, gracias a la actividad del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, importante en lo que atañe a la definición de límites en los derechos penales nacionales. *Nuevas perspectivas de la política criminal europea en materia ambiental*. Ed. Atelier. Barcelona, 2007.

Considerando todas y cada una de las premisas expuestas, no resulta banal preguntarnos si el ruido ocupa sistemáticamente el lugar que le corresponde en nuestro ordenamiento penal, dado que el art. 325 recoge una amalgama de comportamientos contra el medio ambiente que comparten acusadas similitudes, pero de las que en su gran mayoría el ruido se aleja sustancialmente, como hemos tenido ocasión de plasmar. El contrasentido es evidente si nos detenemos a reflexionar sobre la acusada desconexión que el legislador impone al ambiente, urbanismo y patrimonio histórico en nuestro Código Penal, configurando estas categorías en Capítulos separados, cuando al mismo tiempo, reúne en la configuración del tipo básico del delito ecológico un concepto indeterminado de medio ambiente.<sup>134</sup>

Actualmente, el problema que ocasiona la exposición a determinados niveles de ruido, es una de las mayores preocupaciones ciudadanas en las áreas urbanas de los países industrializados. Existe, de hecho, una nítida dependencia entre el crecimiento de la actividad económica y los niveles de ruido que soporta la población. Es obvio que ha crecido desproporcionadamente en las últimas décadas y sólo en España se calcula que al menos 9 millones de personas soportan niveles superiores a 65 decibelios, tanto en horarios diurnos como nocturnos.<sup>135</sup> Éste es el límite aceptado por la OMS en periodos de exposición prolongada, lo que nos situaba hace décadas en la segunda posición a nivel mundial como uno de los países más ruidosos en relación a la población expuesta al ruido provocado por los transportes (tráfico rodado), tras Japón, que ocupaba el primer puesto, según un Informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), apunte que afortunadamente ha variado de forma sensible en años posteriores, o cuanto menos ha dejado de ser fiable

---

<sup>134</sup> De esta opinión, SANTA-CECILIA GARCÍA, F. “Accesoriedad y bien jurídico en delitos medioambientales”. En *Religión, Matrimonio y Derecho ante el siglo XXI. Estudios en homenaje al Profesor Rafael Navarro-Valls*, Vol. II. Javier Martínez-Torrón et al. (coord.) Ed. Iustel. Madrid, 2013, págs. 3675-3703.

<sup>135</sup> Vid. MARTOS NÚÑEZ, J. A. *El delito de contaminación acústica*. Ed. Iustel. Madrid, 2010, pág. 11. El valor de 65dB coincide con el nivel medio de una conversación entre dos personas a 1 metro de distancia. Vid. *Libro verde de medio ambiente urbano*, Tomo II. Salvador Rueda Palenzuela (dir.) Ed. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Madrid, junio 2009. pág. 145; KAVALER, L. Son necesarios al menos 80dB (reloj-despertador) para despertar a una persona en fase de sueño. Y la cifra más alta capaz de soportarse equivale a 10 billones de veces cero decibel. “Ruido. La nueva amenaza”, op. cit., pág. 18. Vid. CUADRADO PÉREZ, C. “Ruido, inmisiones y edificación”, op. cit., pág. 14; CENJOR ESPAÑOL, C. / VILLACAMPA AUBA, J. M. “Efectos patológicos del ruido”, op. cit., pág. 30.

porque no ha sido de nuevo evaluado en los mismos términos; no obstante continúa reproduciéndose hasta la saciedad en la literatura que se ocupa de esta materia.<sup>136</sup>

Además, la *huella ecológica* de nuestro país es deficitaria desde hace años, incrementándose en los últimos 15 en un 50%. Esto significa que si hipotéticamente todos los habitantes del planeta tuvieran unos patrones de consumo parecidos a los nuestros, serían necesarios el equivalente a los recursos naturales de tres planetas y medio, teniendo en cuenta el reparto global de la biocapacidad mundial.<sup>137</sup>

En España, el medio ambiente a nivel urbano, en lo que al ruido respecta, se ha visto claramente atacado por una serie de factores, entre los que destacan los postulados propios de la civilización técnico-industrial (localización y deslocalización industrial), prácticas urbanísticas sin controles exhaustivos, expansión del tráfico

---

<sup>136</sup> Vid. “Contra le bruit. Renforcer la politique de lutte contre le bruit”. Ed. Organization de Coopération et de Développement Économiques. París, 1986. pág. 50. La versión inglesa en “Fighting Noise. Strengthening Noise Abatement Policies”. Ed. Organisation for Economic Co-Operation and Development. París, 1986. págs. 8 y 9. En relación al porcentaje de población que sufría los ruidos del tráfico rodado, España ostentaba el 23%, tras Japón con un 31%, con valores superiores a 65 dBA. Los Países Bajos y Estados Unidos aparecen en las últimas posiciones, con un 6% y 7% respectivamente. El dato se ha ido perpetuando en una prolífica sucesión de textos y autores que incluyen dicha reseña, pero en nuestro país fue MARTÍN MATEO, R. el primero en citarlo: “Tratado de Derecho Ambiental” Vol. II, op. cit., pág. 612, nota 29. Sin embargo, el documento data de 1986, no ha sido posteriormente revisado en los mismos términos y, por tanto, no parece ser en la actualidad un indicador válido. Según cifras de 2006, España ha mejorado su posición, aunque continúa soportando un alto nivel de ruidos respecto a la UE. Holanda e Italia encabezan ahora el ranking de población afectada por ruidos molestos, siendo Irlanda y Dinamarca los que menor porcentaje de quejas reciben, sin despreciarse el aspecto de la capacidad de denuncia subjetiva de los ciudadanos de cada país. A nivel autonómico, Valencia, Madrid, Cataluña y Murcia son las que obtienen porcentajes más elevados de población afectada por ruido en la península; destaca el alto nivel registrado por las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Dentro de los focos ruidosos que más afectan a los hogares se encuentran bares, pubs, discotecas o salas con música (35%), seguidos por aeropuertos (10%) y el ruido en las calles (8%). En cuanto a las administraciones implicadas, el mayor porcentaje con diferencia lo alcanza la Administración local (43%) frente a la Administración General del Estado (29%). Vid. Informe “Sostenibilidad en España 2006”. *Observatorio de la Sostenibilidad en España* (OSE). Disponible en: [http://www.urv.cat/media/upload/arxius/W-Catedra\\_DOW\\_URV/Informes%20VIP/ose\\_-\\_informe\\_2006.pdf](http://www.urv.cat/media/upload/arxius/W-Catedra_DOW_URV/Informes%20VIP/ose_-_informe_2006.pdf) (último acceso 12/07/2015).

<sup>137</sup> La “huella ecológica” es un indicador del impacto ambiental generado por la demanda humana sobre los recursos existentes en los ecosistemas del planeta, en relación a la capacidad ecológica de la Tierra para regenerar sus recursos. Vid. “Análisis de la huella ecológica de España”. En el informe se asegura que la huella ecológica de todas las Comunidades Autónomas supera de manera amplia la biocapacidad media del planeta. Ed. Centro de Publicaciones. Secretaría General Técnica. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Madrid, 2008. págs. 57 y 59. En relación a la transformación del suelo rural en urbano en nuestro país, vid. MARRERO MELÉNDEZ, M. / FREIRE GUERRERO, A. / SOLÍS-GUZMAN, J. et. al. “Estudio de la huella ecológica de la transformación del uso del suelo”. En *Seguridad y Medio Ambiente*. Año 34, núm. 136. Ed. Fundación Mapfre. Madrid, cuarto trimestre 2014, págs. 6-14. En relación a la huella hídrica de nuestro país a escala nacional y regional, vid. SOTELO NAVALPOTRO, J. A. et. al. “Huella hídrica de España y su diversidad territorial”. En *Estudios Geográficos*, Vol. LXXIII, 272, enero-junio 2012, págs. 239-272. Asimismo, vid. WHITE, R. Basándose en los datos de referencia disponibles que permiten medir el impacto de la actividad humana en todo tipo de vida en el planeta, afirma que la huella ecológica humana es demasiado grande para sostenernos por mucho más tiempo en el futuro previsible. “Globalisation and environmental harm”. En *Global Environmental Harm. Criminological Perspectives*. Rob White (ed.) Ed. Willan Publishing. Devon (UK), 2010, págs. 3-19, en especial 3 y 4.

rodado y actuaciones preventivas en materia de política ambiental demasiado rígidas y sectoriales, sin canales internos de comunicación y relación, habiéndose traspasado, al igual que en la protección de otros sistemas naturales, la barrera de la prevención en pos de un amplio dispositivo sancionador, que no es precisamente el objetivo fundamental, sino todo lo contrario.<sup>138</sup>

Por otra parte, situándonos en un contexto global, el trinomio *-nivel de vida, condiciones de vida y medio ambiente-*, a través del cual se ha desarrollado la tesis del denominado eco-desarrollo, integra en los estudios económicos valores biológicos, científicos e incluso estéticos de la Naturaleza, y plantea que las soluciones deben basarse especificando los distintos hechos ecológicos, culturales y necesidades en cada país o región.<sup>139</sup>

---

<sup>138</sup> Con falta de “sustratum ecológico”, expresión utilizada por MARTÍN MATEO, R., para referirse a uno de los caracteres que conforman en la actualidad el Derecho ambiental, frente a la normativa sectorial (en el ámbito sanitario, o paisajístico, o regulador de actividades industriales, etc.). En *Tratado de Derecho Ambiental*, Vol. I Ed. Trivium. Madrid, 1991, pág. 92. Vid. MULERO MENDIGORRI, A. Este geógrafo realiza un estudio sobre las claves de la degradación ambiental en los espacios urbanos españoles, cuyos postulados no han variado sustancialmente en la actualidad. Cabe destacar, sin duda, otro aspecto de sumo interés en el tema que aquí tratamos; se trata de la actitud del habitante en las ciudades, cuyo desconocimiento respecto de su entorno y la insolidaridad o falta de empatía con otros habitantes resulta vital para una mejor comprensión de este fenómeno. En “Introducción al medio ambiente en España”, op. cit., págs. 18 y ss.

<sup>139</sup> Vid. JAQUENOD DE ZSÖGÖN, S. Sobre la importancia del desarrollo económico en la protección ambiental, el concepto de escasez y la socialización de la Naturaleza, se refiere al pensamiento de Saint Marc, quien ya se preguntaba en la década de los 70, si un aumento del nivel de vida que propicia una demanda de satisfacciones, a su vez disminuidas e incluso anuladas por el deterioro ambiental, no cae en el más absoluto de los absurdos. <<... cuando una parte importante de la capacidad adquisitiva suplementaria ha de emplearse en gastos médicos causados por la fatiga y las enfermedades que provocan la contaminación del aire y el ruido, cuando el equilibrio físico-síquico de cada cual está peligrosamente dañado por una atmósfera cada vez más opresiva?>>. En “El derecho ambiental y sus principios rectores”, op. cit., págs. 53 y ss, en especial 55.

### 3.3.- Elementos subjetivos y objetivos del “ruido”

MARTÍN MATEO define el ruido en contraposición a otras manifestaciones sonoras como la música, de marcado carácter subjetivo. Así, determinados sonidos se verán sometidos a la calificación de “ruido” y otros no, dependiendo de las personas que los reciban.<sup>140</sup> Desde un punto de vista acústico, cuando las vibraciones son más regulares, producen más placer al oído y viceversa, y aún los sonidos que son simples “ruidos” tienen la facultad de constituir en conjunto un sonido musical si se repiten de forma rápida y regular.<sup>141</sup>

En el ámbito musical, históricamente se han considerado “ruidos” aquellos sonidos que no tenían una proporción acústica determinada, sólo poseída por los instrumentos de cuerda o viento, pero no por los de percusión; de ahí que éstos últimos pasaran a formar parte estable de la composición musical tan sólo a finales del siglo XIX, y se citaban en las partituras con el nombre genérico de “ruido” o “batería” (tambores, platos, triángulo, bombo, etc.), no exento de cierto aire despectivo.<sup>142</sup>

---

<sup>140</sup> Vid. MARTÍN MATEO, R. En “Tratado de Derecho Ambiental”, Vol. IV, op. cit., pág. 147. Para LAMARQUE, J., <<... lo que es ruidoso e insoportable para una persona no lo es necesariamente para otra [...] De ahí surgen las dificultades de evaluación que se deducen de las molestias del ruido, puesto que intervienen numerosos factores psico-sociológicos, de los cuales el menor no es el del ruido vivido como un fenómeno de contagio, aunque objetivamente no constituya un perjuicio particular>>. En “Le droit contre le bruit”, op. cit., pág. 13. Vid. AURIOL, B. Las personas afectadas por un síndrome psicofisiológico llamado hiperacusia o algiaacusia experimentan algunos ruidos como muy insoportables, mientras que otros sonidos más intensos los toleran mejor. Algunas patologías parecen predisponer a esta hiperacusia (autismo, paranoia, etc.), que puede manifestarse también en el plano neurofisiológico. *El ruido y la salud mental*. Disponible en: <http://auriol.free.fr/psychosonique/ruido.htm> (último acceso 12/07/2015).

<sup>141</sup> Vid. Diccionario Oxford de la Música. <<El desorden de las vibraciones que producen el “ruido” es de dos clases. Para empezar, las variaciones principales sucesivas varían de un momento a otro, de tal modo que, al cambiar la frecuencia constantemente, no se oye ninguna nota fundamental, es decir ninguna que el oído pueda captar. Por otra parte, las vibraciones simultáneas o hipertonos no tienen, probablemente, relación matemática alguna las unas con las otras, puesto que se originan en fundamentales distintas. Éste último detalle establece una relación obvia entre el asunto “ruido” versus “sonido musical” y el de “calidad” (o timbre)>>. Percy A. Scholes (ed. lit.) Ed. Oxford University Press. Oxford, 1938. Ed. Edhasa (ed. en castellano). Barcelona, 1984, pág. 53.

<sup>142</sup> Vid. MICHELS, U. Cuando hablamos de “ruido”, las vibraciones se consideran aperiódicas y la sucesión de tonos es inarmónica, de gran densidad, hasta llegar a un continuo de tonos parciales. La altura de los ruidos sólo se puede determinar de forma aproximada, a causa de ámbitos de formantes que se ponen en relieve. El denominado “ruido blanco” se extiende de forma uniforme a lo largo de todo el ámbito audible. *Atlas de Música*, Vol. I. León Mames (tr.) Ed. Alianza Atlas. Madrid, 1982, pág. 17.

La sensación producida por ciertas variaciones de presión en el oído (sonoridad) es un fenómeno de extrema subjetividad, nadie duda de ello, pero el ruido también posee características claramente objetivas.<sup>143</sup>

Si sólo y exclusivamente tuviéramos en cuenta los datos físicos y objetivos que nos aportan las mediciones en decibelios, se podría concluir que es igual de dañino soportar 100 dB de un motor de avión que 100 dB de una sinfonía de Gustav MAHLER, Anton BRUCKNER o Carl ORFF, paradigmas de la música postromántica y neoclásica más sonora, lo que resulta más que controvertido.<sup>144</sup>

Las magnitudes sonoras, la resonancia, el sonido en el espacio, la percepción de la altura del sonido, la percepción de intensidad sonora, la propia fisiología del oído, o la transmisión del sonido al cerebro formarían parte del carácter objetivo del “sonido” y del “ruido”, ya que las vibraciones que producen un ruido simple pueden llegar a convertirse en sonido.<sup>145</sup>

---

<sup>143</sup> Vid. BECHTEL, R. B. Certifica que la comprensión semántica de material escrito resulta afectada por el ruido y cita a Smith (1989), que detectó que la comprensión de los materiales verbales disminuyen con el ruido. También se refiere a la investigación llevada a cabo por Weinstein (1974), que utilizó una tarea de corrección de pruebas para medir el efecto del ruido y descubrió que afectaba a la ubicación de los errores gramaticales, pero no, sin embargo, a la capacidad de detectar errores de ortografía. Y al descubrimiento de Smith y Stansfield (1986), que constataron la incapacidad de conservar el sentido de material leído en personas situadas en zonas de ruido intenso de aeronaves. En “Environment and Behavior. An Introduction”, op. cit., págs. 396 y 397. Una visión general de lo que comporta en su vertiente subjetiva en la obra de KAVALER, L., que realiza un exhaustivo estudio avalado por estadísticas e innumerables ejemplos tomados en su mayor parte de informes oficiales. En uno de ellos se alude a cierto huésped que, estando alojado en un hotel se quejó del ruido que llegaba a su habitación procedente de un piano en la habitación contigua, pero cuando el ofendido se enteró de que el causante de su desasosiego era el gran pianista Arturo Rubinstein, que se encontraba esos días preparando un concierto, invitó a varias personas a su cuarto para que pudieran tener el privilegio de escuchar al maestro. En “Ruido. La nueva amenaza”, op. cit., págs. 16 y ss; DEFENSOR DEL PUEBLO. El punto de vista que se adopta en el informe es el del receptor del ruido, resaltándose variables subjetivas tales como la edad del sujeto, constitución y estado físico y psíquico, sin olvidar datos objetivos como las medidas en decibelios (presión sonora), fonios (sonoridad), hora del día, semana o estación en que se produce el ruido, y conforme a qué patrones, usos y costumbres. En “Informes, Estudios y Documentos. Contaminación acústica”, op. cit., págs. 24 y 25.

<sup>144</sup> El ideal sonoro concebido para interpretar obras de estos autores de finales del siglo XIX y principios del XX resulta de la combinación de numerosísimos músicos con una nutrida composición de metales y percusión y así, claramente, el binomio comparativo resulta como mínimo desproporcionado desde una vertiente subjetiva. En relación al estruendo que causan los metales, en el Antiguo Testamento se relata el episodio de las murallas de Jericó, que fueron derribadas tan sólo con el sonido de las trompetas. Quizás a este último dato histórico-mitológico se refiere MARTÍN MATEO, R., cuando menciona a la ciudad de Jericó como uno de los antecedentes históricos del ruido. “El ruido una problemática social básicamente interdisciplinar”, op. cit., pág. 524. Vid. LÓPEZ BARRIO, I. No le falta razón cuando asegura que estudiar los efectos del ruido no sólo implica consideraciones de tipo físico u objetivo, sino que además se deben incluir <<aspectos humanos individuales y colectivos>>. “Efectos sociopsicológicos del ruido”. En *Introducción a la psicología ambiental*. Florencio Jiménez Burillo / Juan Ignacio Aragonés (comps.) Ed. Alianza Editorial. Madrid, 1986, págs. 127-146.

<sup>145</sup> Algo tan sencillo como el zumbido de una sierra en un aserradero posee esta naturaleza. <<Cada impacto de un diente de la sierra contra la madera es un simple ruido, pero cuando esos impactos se repiten rápida y regularmente se transforman en “sonido” y varían en altura de acuerdo con los



La peligrosidad del ruido también alcanza la frecuencia (velocidad a la que vibra una fuente de sonido), duración, repetición e intensidad (sonoridad que corresponde a su característica subjetiva).<sup>146</sup>

Se puede añadir que la intensidad en decibelios representa un factor de suma importancia, pero no determinante por sí solo, ya que la diferencia entre los sonidos que suelen ser considerados como ruido y los que poseen dicha consideración, estriba básicamente en la cantidad de información que contienen.<sup>147</sup>

Por todo ello, la teoría más generalizada y extendida es entender como “ruido” el sonido no deseado, independientemente de su frecuencia, volumen o duración.<sup>148</sup> La complejidad que encierra esta definición, en apariencia sencilla, se descubre a la perfección cuando aceptamos que no es fácil hallar algo que supere la subjetividad de aquello que pueda ser deseable para un sujeto, o desagradable, pernicioso, etc.<sup>149</sup>

---

*cambios de velocidad de la sierra, es decir con el distinto índice de vibraciones>>.* En “Diccionario Oxford de la Música”, op. cit., pág. 53.

<sup>146</sup> Vid. LAMARQUE, J. En cuanto a la frecuencia, los sonidos graves y los ruidos complejos son menos perjudiciales que los sonidos agudos y puros, por su duración se convierten en nocivos si la exposición se prolonga un cierto número de horas al día y en cuanto a la repetición, un ruido continuo es menos molesto que uno discontinuo. En “Le droit contre le bruit”, op. cit., pág. 13.

<sup>147</sup> Vid. Semanario “Gente nueva”. Los vecinos de la zona próxima a la Parroquia de la Asunción expresan sus quejas por el ruido que producen los que visitan la iglesia de madrugada, en un claro paralelismo situacional con el actual fenómeno del denominado “botellón” o cualquier otro tipo de concentración masiva de personas en núcleos residenciales, pero sin duda también hay que tener en cuenta la evolución que, respecto al umbral de ruido, se ha producido a lo largo del s. XX, que claramente difiere del patrón de usos utilizado a principios de siglo. <<Noticias. Los vecinos de la calle de la Reina y sitios cercanos a la Iglesia, se quejan amargamente de los continuados alborotos que en las primeras horas de la mañana producen los fieles y las fielas [sic] que en masas compactas acuden a las tradicionales Misas del Alba que allí se vienen celebrando. Entendemos que la autoridad local debiera prohibir estos espectáculos en horas tan intempestivas, puesto que molestan grandemente a los pacíficos contribuyentes de la ciudad. Pues que el ministro Lacierva / quiere que nos acostemos / Que no nos hagan las misas / ¡redios! [sic] / que nos levantamos>>. Periódico independiente de publicación dominical. Redacción y administración, calle General Cassola 4, 22 de diciembre de 1907 (II-89), Hellín (Albacete). [Fondos Archivo privado D. Mariano Andújar Tomás].

<sup>148</sup> Vid. “Libro verde de medio ambiente urbano”. <<Sonidos ricos en información como la música o la palabra difícilmente serán catalogados como ruido. Otra cuestión es el deseo que cada individuo pueda tener de la información transmitida por un determinado sonido, pues si no existe deseo alguno de esa información solo producirá molestia. Por ejemplo, la música del vecino o las conversaciones ajenas pueden producir molestia y ser consideradas como ruido. De la misma forma, el sonido de un motor permite a un mecánico hacer un diagnóstico sobre su funcionamiento y para él no se trata de ruido sino de un sonido lleno de información muy valiosa. Por lo tanto, no existe ningún sonido totalmente desprovisto de información ya que al menos da información sobre la existencia y la situación de la fuente que lo produce, es decir, que ningún sonido merece por sí mismo (por sí solo) la denominación de ruido>>, op. cit., pág. 129, nota 53.

<sup>149</sup> Por ejemplo, recientes estudios muestran cómo el gimoteo se acopla a las características acústicas del habla. Se suele clasificar como molestia, y se distingue fácilmente de otras vocalizaciones. Los gemidos, de forma similar a los gritos o lloros, suscitan la excitación en los adultos, como muestra el aumento de la conductancia de la piel, aunque ningún estudio ha confirmado cambios en otras medidas fisiológicas. El método utilizado compara el poder de estas tres vocalizaciones para distraer a los adultos de tareas relacionadas con el desapego. Este método fue iniciado por Morsbach, McCulloch y Clark (1986) en una demostración del poder relativo del llanto infantil para distraer a los oyentes de una tarea rutinaria en comparación con un sonido irritante, como el ruido de maquinaria. Las pruebas realizadas

Por ejemplo, las ondas sonoras se absorben o reflejan. Así, la interferencia de las ondas sonoras es la responsable de que la audición en el espacio dependa del lugar en que se produce y, debido al carácter sumamente complejo de la acústica ambiental, los experimentos se suceden sin que existan conclusiones definitivas.<sup>150</sup> A esto habría que incorporar la cantidad de personas que se encuentren en el emplazamiento, ya que una persona corresponde a  $\frac{1}{2} \text{ m}^2$  de superficie de absorción del sonido.<sup>151</sup>

---

revelaron que los participantes completaron menos pruebas matemáticas cuando escuchaban gemidos, o lloros infantiles que cuando había silencio, pero no así respecto del sonido de maquinaria, de diálogos neutros o del sub-código lingüístico que emplean los adultos y niños mayores de 5 años cuando se comunican con niños más pequeños (*motherese, baby talk*). No hubo ninguna diferencia entre cualquier tipo de diálogo neutro o ruido de maquinaria, y la condición de silencio. No hubo diferencias en función del sexo o del estatus parental de los participantes. Así, el gimoteo de los bebés y niños de entre dos y cuatro años es el sonido más perturbador para los oyentes. *Vid.* SOKOL CHANG, R. / THOMPSON, N. S. “Whines, cries and motherese: their relative power to distract”. En *Journal of Social, Evolutionary, and Cultural Psychology*. Vol. 5, Issue 2:131, May 2011. Ed. NorthEastern Evolutionary Psychology Society. United States of America, págs. 10-20.

<sup>150</sup> Además de los factores ya señalados, en la propagación de las ondas sonoras intervienen otras variables como los efectos meteorológicos, o el suelo. Al respecto, *vid.* MONESTER MORALES, J-L. El viento aparece como factor importante, ya que puede provocar un aumento de 5 a 10dB en relación a una medición efectuada con viento contrario a más de 400 metros. Por otra parte, entre un suelo pavimentado y otro cubierto de vegetación se puede apreciar una diferencia de 5dB. En *Defensa frente al Ruido. Jurisprudencia y Formularios* (2ª ed.) Ed. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2014, pág. 313; STEPHENS, R. W. B. “Noise Pollution-Basic Introductory Survey”. En *Noise Pollution: Effects and Control*. A. Lara Saenz / R.W.B. Stephens (eds.) Ed. John Wiley & Sons, Scientific Committee on Problems of the Environment, Scope 24. Great Britain, 1986. págs. 1-42.

<sup>151</sup> Para una visión particularizada de diferentes variables, véase MICHELS, U. <<La potencia, la intensidad y la presión sonoras varían mucho y se indican en potencias de diez. De ahí que se escogiese como medida el decibel (dB) logarítmico para la diferencia de intensidad sonora [...] entre dos intensidades... >>. En cuanto al factor de la resonancia, hay que tener en cuenta que <<La velocidad del sonido está determinada por el medio y la temperatura. A 20 °C asciende, en corcho, a 500 m/seg; en agua, a 1.480 m/seg; en madera, hasta a 5.500 m/seg; en hierro, a 5.800 m/seg; y en el aire, a 340 m/seg>>. En “Atlas de Música”, op. cit. págs. 17-21. También “Protocolo de vigilancia sanitaria específica para los/as trabajadores/as expuestos a ruido”. Resulta relevante la anatomía y morfología del oído [oído externo: con el pabellón auricular y el conducto auditivo, que recoge y conduce las ondas sonoras hasta el tímpano]; [oído medio: cavidad o caja del tímpano, que contiene una cadena de pequeños huesos (martillo, yunque y estribo), la cual transmite las vibraciones de la membrana del tímpano a la ventana oval, que las transmite al oído interno]; [oído interno: o laberinto, que aloja el órgano del equilibrio y el aparato auditivo, formado por el caracol o cóclea, donde se hallan las células auditivas ciliadas del órgano de Corti, las cuales generan los impulsos transmitidos al córtex auditivo por el nervio estato-acústico (células sensoriales)]. Op. cit., pág. 19; ZWICKER, E. “Psychophysics of Hearing”; SHAW, E.A.G. “Aural Reception”. En *Noise Pollution: Effects and Control*. A. Lara Saenz / R.W.B. Stephens (eds.) Ed. John Wiley & Sons. Scientific Committee on Problems of the Environment, Scope 24. Great Britain, 1986, págs. 147-167 y 169-182 respectivamente. *Vid.* “Boletín de difusión de la educación ambiental en Castilla y León”. <<0 dB: La ausencia de ruido no puede ser considerada como una característica de una situación sonora perfecta; tan negativamente valorado puede ser un ambiente saturado de ruido como un ambiente carente de estimulación sonora, ya que ambos se asocian con angustia e inseguridad. (ej. pasos subterráneos o calles peatonales durante la noche). 10 dB: El silencio surge cuando no hay sonidos que escuchar, pero en realidad es un estado mental, porque siempre hay algo perceptible por el oído. En los años 50, el músico John Cage hizo una prueba que consistió en encerrarse varias horas en una cámara cerrada y aislada de todos los ruidos exteriores. Al salir comentó que había escuchado dos ruidos, uno agudo y otro grave. Los técnicos le explicaron que el agudo era su tensión nerviosa, y el grave la circulación de su sangre por el oído. 10 a 30 dB: Responde a lo que se escucha en una iglesia antigua vacía o en un bosque. Los ambientes en los que prevalecen los sonidos sociales y naturales se asocian con tranquilidad, compañía, etc. Este intervalo constituye el

La evolución del sentido auditivo desde el punto de vista de la antropología y la biología nos revela que la alerta necesaria para la capacidad de respuesta ante inminentes peligros, como ser atacado o huir de un hecho sorpresivo que no esperamos, por ejemplo, está en el origen del perfeccionamiento progresivo del órgano auditivo, que ha alcanzado una corrección y delicadeza dignas de desafiar a la tecnología más moderna, con un elevado nivel de habilidad para ejercer su función, que no es otra que formar un órgano complejo capaz de percibir y analizar las presiones acústicas.<sup>152</sup>

---

*nivel adecuado para el descanso. 40 dB: Este es el nivel de ruido que sugiere la OMS para colegios y centros docentes. Estudios realizados con población escolar han demostrado que la exposición continuada de los niños a elevados niveles de ruido incide de manera significativa en su atención, capacidad de aprendizaje y comprensión lectora. 50 a 60 dB: Podemos mantener una conversación sosegada. Es el nivel de ruido de la lluvia o el que encontramos en un comercio o en un restaurante. O el que genera un lavavajillas certificado con la Etiqueta Ecológica Europea. En el hogar estamos expuestos a un sinfín de ruidos generados por los electrodomésticos que utilizamos, que en ocasiones pueden alcanzar los 80 dB. Una buena idea para reducir este nivel de ruido es comprar electrodomésticos certificados con esta etiqueta, en la que aparece la potencia acústica del aparato y que responde a una determinada limitación. 65 dB: A partir de este nivel el ruido se vuelve molesto o insoportable y produce efectos nocivos sobre nuestra salud: irritabilidad, insomnio, dolor de cabeza, estrés, aumento del riesgo cardiovascular, hipertensión, etc. 70 a 80 dB: Estos niveles los alcanzan una televisión a un volumen elevado, un secador de pelo y una calle con tráfico intenso. Y si se utiliza el claxon o una sirena los niveles de decibelios pueden llegar a los 90 - 100 dB. 110 dB: A ellos estamos expuestos si escuchamos un reproductor de Mp3 a un volumen elevado, estamos en una discoteca o tenemos un bebé cerca llorando. En los últimos años están aumentando en España los casos de lesiones del oído en menores de 30 años provocadas por escuchar música alta, tanto a través de auriculares como en bares y discotecas. Además éstos jóvenes tendrán problemas de pérdida de audición a los 50 años, frente a los 70 años en los que suelen aparecer. 120 dB: Las autoridades del famoso Museo del Hermitage de San Petersburgo, Rusia, están muy preocupadas por la moda de organizar conciertos de rock a sus puertas, en la Plaza del Palacio, hacia la que dan las ventanas de salas con valiosas pinturas. De ahí que estén estudiando el posible daño que el ruido puede causar en las obras de arte. Sus primeros resultados indican que, incluso con un mínimo de 10 conciertos al año, cada cuadro envejecerá en un año adicional a causa de los perjudiciales decibelios. 130 dB: Se supera el umbral del dolor y las lesiones producidas sobre la audición son irreversibles>>. Núm. Extraordinario. Ed. Junta de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente. Valladolid, 2010, págs. 21-24.*

<sup>152</sup> Un magnífico estudio de la función auditiva y su evolución, tomando como parte central de la obra el lenguaje, en TOMATIS, A. La ontogénesis u ontogenia (desarrollo del individuo, referido en especial al período embrionario) y la filogénesis o filogenia (como parte de la biología que se ocupa de las relaciones de parentesco entre los distintos grupos de seres vivos, así como el origen y desarrollo evolutivo de las especies, y en general, de las estirpes de seres vivos), se ofrecían como dos caminos diferenciados para el estudio de esta evolución, de apariencia antagónica, cuando en realidad se complementan. Y, fuera ya de este cometido primario, el órgano auditivo ha llegado a tener una verdadera capacidad de análisis: <<... un simple aparato concebido para detectar las variaciones de presión, sin embargo, en el curso de su evolución, ha demostrado que había algo mejor que percibirlas: se ha puesto, en efecto, a analizarlas. Ha podido desde entonces disociar los diferentes parámetros que componen el sonido, y con ello apreciar su altura, el timbre, es decir, el color, la duración y la intensidad>>. En *El oído y el lenguaje*. Juan Godo (tr.) Ed. Martínez Roca. Barcelona, 1969, págs. 45 y ss. Otro examen de la acústica y los parámetros del sonido en relación a la percepción de la altura, la intensidad sonora y cómo se transmiten al cerebro en MICHELS, U. <<La sensación de altura del sonido depende, [...] del lugar en que se hallen situadas las células sensoriales máximamente excitadas sobre la membrana basilar, que vibra en su totalidad>>. Se sitúa el ámbito de audición entre 16 y 20.000 Hz. Por ejemplo, el hercio se aplica en física a la medición de la cantidad de veces por un segundo que se repite una onda (ya sea sonora o electromagnética) o puede aplicarse también, entre otros usos, a las olas de mar que llegan a la playa por segundo o a las vibraciones de un sólido. La magnitud que mide el hercio se denominada frecuencia y es, en este sentido, la inversa del período. Un hercio es la frecuencia de una partícula que sufre una oscilación en un período de un segundo. En “Atlas de Música”,

Distintas investigaciones revelan la envergadura e interés que tiene la interpretación cerebral de los sonidos, y esto comporta también el valor que tiene el componente subjetivo en la sensación de la persona que sufre el ruido: desde el daño más profundo, pasando por una molestia eventual, mera incomodidad tolerable o la impasibilidad más absoluta en casos extremos (por ejemplo personas con síndromes autistas tipo Asperger, con afasia u otras disociaciones del lenguaje, personas de avanzada edad, personas con trastornos auditivos o sordera, etc., que interactúan con el ruido a distintos niveles).

De forma conjunta, hay que valorar otros aspectos, como el factor sorpresa<sup>153</sup>, el de la costumbre o habituación<sup>154</sup>, y los efectos adversos que pudieran influir en el comportamiento a medio y largo plazo.<sup>155</sup>

De ahí que, lo que determinadas personas puedan calificar como un sonido maravilloso, poético o incluso que llama a la introspección, para otras sea intolerable, como en el caso de las tonadas producidas por los campanarios y el sonido de los carillones de los relojes de las catedrales o parroquias en diferentes núcleos de población.<sup>156</sup> Las campanas, como instrumentos de percusión, emiten ruidos y éstos se

---

op. cit., pág. 19; KAVALER, L. Los ruidos de frecuencia alta, por ejemplo, al ser más agudos y penetrantes, influyen más en la respuesta nerviosa, aún desvaneciéndose con mayor rapidez que los de baja frecuencia. “Ruido. La nueva amenaza”, op. cit., pág. 19.

<sup>153</sup> En el caso de ruidos inesperados o producidos de forma súbita, el sistema de alarma fisiológico inherente a los seres vivos se manifiesta cuando resulta necesario, es decir, cuando interviene ante un peligro, pero se da la paradoja de que en muchas ciudades se han invertido las situaciones. En este sentido, *vid.* MORALES DELGADO, F. Alerta sobre la perversión que supone la *relación de señal a ruido* y el incremento de accidentes de circulación, porque el ruido de fondo impide que los implicados se percaten de lo que está a punto de suceder cuando se produce el accidente. En “Sobre la cuantificación del ruido”, op. cit., pág. 470.

<sup>154</sup> *Vid.* GARCÍA SANZ, B. / GARRIDO, F. J. Respecto a la discutida habituación al ruido durante el sueño, afirman que el organismo se habitúa al ruido, pero nunca se adapta naturalmente al mismo. En “La contaminación acústica en las ciudades”, op. cit., págs. 32 y 33.

<sup>155</sup> *Vid.* LAMARQUE, J. La complejidad del fenómeno de ruido se incrementa si se tiene en cuenta la “sorpresa” y la “costumbre”. <<*Se podría incluso decir que el ruido en sí mismo, en tanto que perjuicio sonoro y perjuicio cierto no existe (al contrario de la contaminación atmosférica o de la contaminación de aguas) y que sólo existen ruidos*>>. En “Le droit contre le bruit”, op. cit., pág. 13. *Vid.* GLASS, D. C. / SINGER, J. E., quienes, a través de una exhaustiva investigación en laboratorio, aseveran que: <<*Los efectos negativos del ruido intermitente probablemente reflejan el hecho de que tal ruido es a menudo aperiódico, y factores de estrés impredecibles tienen un mayor impacto aversivo en el comportamiento que factores estresantes predecibles. En efecto, se ha sugerido que mientras el sonido es aperiódico o inesperado, el hecho de no saber con precisión cuando anticipar el estímulo produce un aumento de sus efectos desagradables*>>. En “Urban Stress. Experiments on Noise and Social Stressors”, op. cit., págs. 19 y ss.

<sup>156</sup> Como apunta MARTÍN MATEO, R., la cuestión ya fue objeto de graves disputas entre católicos y librepensadores en Francia, si bien sobre una base ideológica. Prólogo a la obra colectiva *Régimen jurídico del ruido. Una perspectiva integral y comparada*. Arana García, Estanislao / Torres López, M<sup>a</sup> Asunción (coords.) Ed. Comares. Granada, 1994, págs. XIX-XXI. *Vid.* SÁINZ ROMERO, F. Comenta una sentencia del TS, de 5 de julio de 1976 en la que, ante las quejas del recurrente por los ruidos que emite el carrillón del reloj de la iglesia del pueblo gallego de Oleiros (La Coruña), y la inactividad de la

regularon con un impuesto por su uso en las parroquias, desde finales del s. XIX y principios del s. XX.<sup>157</sup> No obstante, esta cuestión continúa vigente en distintas partes de la geografía española, con un sinfín de reclamaciones de vecinos, que de forma particular, plantean sus pretensiones ante los órganos jurisdiccionales, con desiguales desenlaces.<sup>158</sup>

---

administración local, el Alto Tribunal desestima sus pretensiones por considerar que el sonido emitido no poseía la suficiente intensidad, pero indudablemente sienta unas bases sólidas al entender que existe la obligación de intervenir, y no sólo la mera facultad. “Sobre el ruido y la policía de la tranquilidad. (STS, de 5 de julio de 1976. Ponente: Excmo. Sr. José Gabaldón)”. En *Revista Española de Derecho Administrativo*, núm. 15 (octubre-diciembre), 1997, págs. 664-668. En relación a este fallo, *vid.* SOSA WAGNER, F., sobre el nulo alcance de la prueba presentada por el recurrente. Al hilo de la misma, el autor menciona la existencia en otros países europeos de <<jurados de sonidos-encargados de hacer, con imparcialidad, las mediciones>>. En “La lucha contra el ruido”, *op. cit.*, pág. 20.

<sup>157</sup> “Actas de Plenos Municipales del año 1.933 (Sign. A 323 / 5) 12-1-1933”. En Archivo Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Hellín. [*Se procede a la discusión de los presupuestos para este año, y se han: “formulado en su contra dos reclamaciones, una suscrita por el Sr. Cura Ecónomo de la Iglesia de la Asunción de esta ciudad solicitando la supresión de la consignación que el capítulo diez artículo octavo de la sección de ingresos, señala por el impuesto de nueva creación sobre el toque de las campanas de las parroquias e iglesias de este término municipal, por considerarlo ilegal [...] Conocidas las reclamaciones de que se ha dado lectura, la presidencia abre debate sobre las mismas, lamentando, por lo que se refiere a la del Sr. Cura Ecónomo, que se haga en ella una manifestación extemporánea, que califica de extralimitación, al afirmar que el impuesto sobre el que se reclama, hiere los sentimientos religiosos de los habitantes de Hellín, católicos en su mayoría y que si esta afirmación resultara punible, a su arbitrio quedaba exigir se impusiera la sanción correspondiente [...] El Sr. Navarro se pronuncia en el mismo sentido y hace suyas las manifestaciones del Sr. Muñoz Fernández, añadiendo que si quedara al arbitrio de los Ayuntamientos la imposición de arbitrios y exacciones, llegaría a establecerse de modo caprichoso una fuente de ingresos por cualquier concepto, esto aparte de que, aun considerando el Ayuntamiento procedente el referido impuesto, el Sr. Delegado de Hacienda devolvería el presupuesto sin su aprobación, con los reparos consiguientes, toda vez que no lo autoriza ninguna ley ni disposición vigente [...] El Sr. Marín, por el contrario, estima que debe acordarse la creación e implantación de dicho impuesto por considerarlo legal y por tanto dentro de las facultades del Ayuntamiento [...] La Presidencia considera suficientemente discutido el asunto y en vista de las diferentes apreciaciones expuestas por los Sres. Concejales, lo somete a votación, resultando estimada la reclamación del Sr. Cura Ecónomo, por los votos de los Sres. Muñoz Fernández, Izquierdo, Valverde, Espinosa, Muñoz Martínez, Catalán, Lorenzo García, Silvestre García, Precioso, Navarro, Villalobos y Roche; contra los de los Sres. Andújar, Marín, García Torres y Presidencia”.*]

<sup>158</sup> La Audiencia Provincial de Girona (Sección 3ª), en Auto núm. 434/2000 de 10 de noviembre [JUR 2001\61278], desestima un recurso frente al Auto de 1/06/2000 de inadmisión de querrela dictado por el Juzgado de Instrucción núm.1 de La Bisbal (acertadamente según mi opinión). El recurrente había presentado una querrela contra el párroco de Calella de Palafrugell y su Alcalde por presunto delito contra el medio ambiente por excesivo toque indiscriminado y excesivos decibelios, en las campanadas horarias de forma duplicada y cada cuarto de hora, por parte del campanario de la única iglesia de Calella. La Audiencia Provincial, en los Fundamentos de Derecho expresa la inadecuación del procedimiento penal frente a la vía contencioso-administrativa y la respuesta administrativa del Ayuntamiento, que estaba pendiente (FJ 1). También incide en el carácter de <<extrema ratio y subsidiariedad del Derecho Penal>>, alegando que es curioso que, pese al importante número de personas que veranean en la localidad, <<solo una estime exorbitado y desproporcionado el uso de los instrumentos que la Iglesia Católica emplea para comunicarse con sus feligreses en la mentada población>> (FJ 2). Asimismo, entiende que no queda suficientemente acreditada la existencia de licencia de actividad necesaria para comprobar si ésta se ha otorgado lícitamente y, por tanto, no se puede entender vulnerado el art.325 y mucho menos el art.329 del Código Penal, de exclusiva aplicación a funcionarios públicos y autoridad, no cumpliendo esta cualidad el cura-párroco y destacando además que <<la vía penal no está prevista para que los peritos digan si el ruido emitido por las campanas de una iglesia afectan o no al impacto ambiental ni para que se averigüe las consecuencias físico-psíquicas que dichos ruidos pueden llegar a producir en las personas>> (FJ 3). Sin embargo, el Tribunal de

El problema es cómo incardinar la actividad propia de culto o religiosa de una iglesia en las actividades que los Ayuntamientos deben supervisar; al hilo de lo expuesto, si deben o no estar sometidas a licencia municipal, y en qué términos. Cuando se denuncia una perturbación del orden público, en este caso, la tranquilidad, corresponde al Ayuntamiento comprobar su existencia porque es indiferente a estos efectos que la actividad generadora de ruidos tenga o no carácter mercantil o industrial.

El Ayuntamiento no puede desentenderse de las quejas de los vecinos porque, al igual que la libertad de empresa o cualquier otra relación jurídica análoga no constituyen título suficiente para producir ruido sin sometimiento a límites, la libertad religiosa tampoco. Es decir, si el Ayuntamiento decide exigir licencia, comprobar los niveles de ruido u obligar a adecuarse a la normativa vigente sobre contaminación acústica a los templos religiosos, no está obstaculizando el ejercicio de la libertad religiosa o de empresa, sino la producción de ruidos con carácter ilimitado.<sup>159</sup>

---

Justicia de Andalucía, Granada (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª), en Sentencia núm. 634/2007, de 1 de octubre [JUR 2008\59631] considera que los ruidos derivados del repique de campanas de la Catedral de Jaén son suficientes para motivar la incoación de un procedimiento de comprobación sobre el nivel acústico de las campanas y su adecuación a las Ordenanzas Municipales ante el injustificado silencio del Ayuntamiento frente a las reclamaciones del actor. <<Es obvio que tal inactividad es susceptible de provocar una vulneración de los derechos fundamentales de la persona y, en particular, del consagrado en el art.18 de la CE>> (FJ 6).

<sup>159</sup> Vid. DEFENSOR DEL PUEBLO. Tras una serie de observaciones, se muestra partidario de exigir a los Ayuntamientos una verdadera actividad supervisora, independientemente de que se trate de un “templo”, ya que el hecho de invocar la libertad religiosa (arts. 16.1 CE y 2.1 de la LO 7/1980 de 5 de julio, de libertad religiosa) puede desembocar en un burdo pretexto para no afrontar el problema de fondo. En “Informes, Estudios y Documentos. Contaminación acústica”, op. cit., págs. 232-236. El art. 16.1 CE dice que: <<Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley>>; el art. 3.1 de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa: <<El ejercicio de los derechos dimanantes de la Libertad Religiosa y de Culto tiene como único límite la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguardia de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública, elementos constitutivos del orden público protegido por la Ley en el ámbito de una sociedad democrática>>. El Reglamento de actividades clasificadas de 1961 [Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre], por el que se aprueba el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, que en sus artículos 2 y 3 dice: 2. <<Quedan sometidas a las prescripciones de este Reglamento, en la medida que a cada una corresponda, todas aquellas “actividades” que a los efectos del mismo sean calificadas como modestas, insalubres, nocivas o peligrosas, de acuerdo con las definiciones que figuran en los artículos siguientes e independientemente de que consten o no en el nomenclátor anejo, que no tiene carácter limitativo>>. 3. <<Serán calificadas como “molestas” las actividades que constituyan una incomodidad por los ruidos o vibraciones que produzcan o por los humos, gases, olores, nieblas, polvos en suspensión o sustancias que eliminen. Se calificarán como “insalubres” las que den lugar a desprendimiento o evacuación de productos que puedan resultar directa o indirectamente perjudiciales para la salud humana. Se aplicará la calificación de “nocivas” a las que, por las mismas causas, puedan ocasionar daños a la riqueza agrícola, forestal, pecuaria o piscícola. Se consideran “peligrosas” las que tengan por objeto fabricar, manipular, expender o almacenar productos susceptibles de originar riesgos graves por explosiones, combustiones, radiaciones u otros de análoga importancia para las personas o los bienes>>; demás normativa autonómica sobre ruido y vibraciones, así como jurisprudencia constitucional y ordinaria.

En el caso particular del toque de campanas y relojes de iglesia en los núcleos urbanos cabe hacer una serie de observaciones. En primer lugar, hay tener en cuenta el componente cultural, ya que este tipo de sonidos forman parte del paisaje o lenguaje sonoro de nuestro entorno, pero también es cierto que las funciones propias que históricamente lo han sustentado hoy en día son residuales (tradicionalmente se usaban para difundir entre los vecinos noticias tales como la muerte de algún ciudadano, incendios en la zona, avisos relacionados directamente con el culto o noticias de otra índole que los ciudadanos debían conocer). En segundo lugar, esto no es óbice para tratar de minimizar los riesgos, pues no quiere decir que los efectos contaminantes en determinadas circunstancias no sean los mismos que los generados por otros hechos culturalmente aceptados, como por ejemplo el ruido por tráfico rodado en vías o zonas de ocio en diferentes localidades, que, sin embargo, se encuentran perfectamente reglados y limitados por la legislación correspondiente en cada caso. En tercer lugar, el ruido provocado por las campanas no es sólo cuestión de los decibelios que alcancen, sino que debe relacionarse con el entorno en el que el templo se ubique. Y por último, volver a destacar la variable subjetiva, teniendo en cuenta el grado de susceptibilidad del denunciante que, a su vez, no excluye *per se* la presencia real de dicha emisión sonora.<sup>160</sup>

Ponderar en cada caso las reacciones de un ser humano sin afecciones psicológicas o psiquiátricas, sometido a determinados ruidos, sobre todo durante el sueño, continúa siendo una tarea muy complicada, si bien se conoce que los psicóticos sufren una perturbación elevada cuando son sometidos a niveles elevados de ruido y los esquizofrénicos nunca se acostumbran al ruido, al igual que los niños con lesiones cerebrales (hiperkinéticos), personas que padecen algún tipo de demencia senil o personas con hiperacusia, que sufren una intolerancia mayor que la media hacia el ruido.<sup>161</sup>

---

<sup>160</sup> Vid. DEFENSOR DEL PUEBLO. El Informe plantea que los Ayuntamientos actuarán con eficacia si tienen en cuenta todos estos factores. <<Un alto nivel de decibelios puede no bastar para calificar el caso como de contaminación acústica grave, sobre todo si se trata de ruido ocasional (por ejemplo, sólo domingos y festivos, dos o tres toques de uno o dos minutos cada uno a intervalos de 15 minutos desde las 11:00 u 11:30 horas de la mañana hasta las 14:00). No puede siempre hablarse de contaminación acústica sólo porque determinada fuente de ruido supere cierto nivel de decibelios, pues los parámetros físicos y fisiológicos del ruido son muchos más... >>. En “Informes, Estudios y Documentos. Contaminación acústica”, op. cit., pág. 236.

<sup>161</sup> Vid. KAVALER, L. En el caso de personas con trastornos psicóticos, se ha demostrado mediante pruebas bioquímicas, que los niveles de hormonas en la orina son los mismos que se observan durante episodios de agresividad extrema, cuando se les somete a la audición de grabaciones con sonidos superiores a 90 decibelios. A tenor de la importancia del sueño y sus fases, describe un homicidio

De igual manera, tampoco existen datos concluyentes y consolidados acerca de cómo y por qué influye el ruido en el comportamiento del ser humano, en la realización de tareas diferentes o en reacciones autónomas, teniendo en cuenta el importante factor de la adaptación psicológica al sonido, sobre el que la comunidad científica no alcanza un serio consenso.<sup>162</sup>

Una novedad científica añadida a los efectos de la falta de sueño o descanso inadecuado, factor en alza asociado de manera muy particular al ruido en la sociedad, es la estrecha relación que une a la escasez de sueño con la alteración profunda del sistema circadiano y lo que en expresión médica se denomina el reloj molecular, cuyos desajustes pueden desencadenar obesidad, diabetes, alteración de niveles hormonales, envejecimiento acelerado, alteraciones cognitivas de la memoria, afectivas (depresión, insomnio crónico), o del sistema inmunológico.<sup>163</sup>

No podemos olvidar que el ruido que puede afectar a los ciudadanos crece desmesuradamente en relación a sus posibles emisores y actividades, cada vez más

---

cometido por un hombre en la ciudad de Nueva York: <<... cuatro niños jugaban frente a un edificio en el Bronx [...] De pronto apareció el caño de un revólver en una ventana del segundo piso y se oyeron varios disparos [...] cuando el asesino confesó pudo saberse que se trataba de un hombre que trabajaba por la noche y necesitaba dormir de día. El ruido que hacían los chicos jugando en la calle no le permitía conciliar el sueño y terminó perdiendo el control de sí>>. En “Ruido. La nueva amenaza”, op. cit., págs. 21-33.

<sup>162</sup> Se asegura que el ruido, por sí mismo, no tiene efectos adversos en el comportamiento. Cfr. GLASS, D. C. / SINGER, J. E. Desde la consideración del ruido como factor de estrés, opinan que: <<Más importante, quizás, que la respuesta psicológica al ruido es el fenómeno generalizado de la adaptación al sonido. Todos los exámenes de laboratorio muestran que la adaptación autónoma o habituación invariablemente ocurre con presentaciones repetidas de ruido. Esto no significa, sin embargo, que la gente experimente el ruido como aceptable. Los datos sobre reacciones molestas citados arriba son un ejemplo típico, pues las personas continúan quejándose del sonido intenso incluso aunque muestren adaptación psicológica al mismo. También hay algunas evidencias de que las reacciones autónomas no siempre disminuyen con presentaciones repetidas de ruido>>. Y además otros datos muestran que si el ruido ocurre en un contexto cognitivo particular, la adaptación psicológica puede que no ocurra. <<Por ejemplo, Davis and Berry (1964) encontraron que sujetos que podían evitar un tono fuerte pulsando un interruptor en el momento correcto mostraban mayor movilidad (motilidad) gastrointestinal durante el tono (por ejemplo, cuando fallaban al pulsar el interruptor) que aquellos sujetos que no tenían medios de evitar el mismo tono. El ruido se convierte en un estímulo más aversivo porque se asociaba a un comportamiento incorrecto>>. En “Urban Stress. Experiments on Noise and Social Stressors”, op. cit., pág. 19. Vid. MARTÍN MATEO, R. Las conclusiones de distintos fisiólogos afirman que no existe adaptación al ruido en cuanto a reacciones vegetativas. En “Tratado de Derecho Ambiental” Vol. II, op. cit., pág. 615.

<sup>163</sup> Vid. “La importancia de poner el reloj molecular en hora”. En *Seguridad y Medio Ambiente*. Especial Salud y Prevención. Ed. Fundación Mapfre. Madrid, 2014. págs. 55-57. Una investigación de seguimiento realizada entre 2002 y 2006 dentro del Programa de Prevención de Diabetes de Estocolmo y sugiere que la exposición al ruido del tráfico aumenta el riesgo de obesidad abdominal y que la exposición combinada a diferentes fuentes de ruido puede generar un riesgo particularmente alto. Vid. PYKO, A. / ERIKSSON, C. / OFTEDAL, B. et. al. “Exposure to traffic noise and markers of obesity”. En *Occupational and Environmental Medicine* –BMJ–. Ed. British Medical Association. Published Online First 25 May 2015. Disponible en: <http://oem.bmj.com/content/early/2015/04/28/oemed-2014-102516.full.pdf+html?sid=2849b4a3-898f-434e-ae2b-822a8f76bb51> (último acceso 12/07/2015).



diferenciadas, específicas y heterogéneas, que provienen de núcleos diversificados (aumento de artefactos ruidosos que llegan a afectar a todos los espacios, tráfico rodado, tráfico aéreo en zonas urbanas próximas a los aeropuertos, maquinaria de obras, maquinaria de ventilación y aire acondicionado, actividades lúdicas, deficiencias en los protocolos de edificación, etc.).<sup>164</sup>

El físico y otorrinolaringólogo TOMATIS descubrió a partir de 1947 algo que la neurociencia actual constata; la percepción del sonido es selectiva y además se procesa de forma simultánea con la percepción visual. Esto determina que incluso podemos llegar a bloquear la escucha de una frecuencia (la causa, según TOMATIS, se asocia a un trauma psicológico o un conflicto anímico). Ideó un método basado en la audiopsicofonología, para tratar a sus pacientes con sesiones de escucha de determinado registro con el fin de activar los enlaces neuronales inhibidos. El paciente, entonces, volvía a escuchar bien el mundo porque el oído puede variar la percepción de lo real.<sup>165</sup>

---

<sup>164</sup> Desde hace más de dos décadas se constata esta característica heterogénea del problema, y en este sentido MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, L., analiza tres sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria sobre lo que el autor denomina “ruidos evitables”. Los tres casos pivotan entre el ruido producido por una señora que criaba perros, a la que se le ordena la clausura de la actividad (meramente privada), declaración de nulidad de una licencia de apertura concedida a un bar musical de Laredo por no haberse seguido el procedimiento previsto para las industrias molestas y la confirmación de una resolución municipal que acordaba retirar de manera temporal la licencia de apertura a una panadería en Santillán hasta que no se adoptasen las oportunas medidas correctoras que rebajasen los ruidos molestos. “Tres Sentencias interesantes sobre el ruido”. En *Revista Vasca de Administración Pública*, núm.41 (enero-abril) Ed. IVAP. Bilbao, 1995, págs. 661-677. En este mismo sentido *vid.* “Libro verde de medio ambiente urbano”. Se afirma que todavía existe una importante carencia de herramientas para analizar cualitativamente los escenarios sonoros, no solo en nuestro país, sino en general. *Op. cit.*, págs. 129 y ss.

<sup>165</sup> *Vid.* TOMATIS, A. Llegó a descubrir que los profesionales del canto tienden a destruir su propia audición por medio de los sonidos que ellos emiten y, en consecuencia, se producía una degradación progresiva de su voz, ya que las cifras registradas por un sonómetro a un metro de distancia de la persona marcaban 100, 110, 120 y 130 dB (lo denomina “sordera profesional del cantor”). En la terapia se utiliza la voz de la madre en recién nacidos y también la música, en especial obras de Mozart y de canto gregoriano. La razón en el caso de las composiciones de Mozart es que los compases de su música coinciden con el ritmo neurológico humano y en el caso de la música gregoriana, que se acompasa con un correcto *tempo* fisiológico respiratorio. En “El oído y el lenguaje”, *op. cit.*, págs. 87 y ss. El carácter selectivo del sonido es perfectamente constatable por cualquier persona. Cuando nos encontramos en una sala de espera en la que continuamente van avisando por nombre o número a las personas que aguardan para ser atendidas, tan sólo prestamos atención cuando reconocemos y escuchamos nuestro nombre. O en el aeropuerto a la espera de nuestro vuelo; estamos atentos, pero sólo escuchamos de verdad cuando oímos nuestro número de vuelo, por tanto se produce una selección en la forma de escuchar.

Los procesos mentales mediante los que se elaboran las reacciones conductuales en los seres humanos también se pueden ver alterados por la exposición al ruido.<sup>166</sup> El sonido que excede de 80 dB afecta a la secreción de muchas hormonas, el complicado sistema cerebral permite la posibilidad de abundantes interacciones entre diversos estímulos, de modo que incluso si el sonido sólo tiene una influencia directa sobre alguno de ellos, puede provocar mutaciones en un gran número de sistemas a través de las interacciones.<sup>167</sup>

Sin embargo, investigaciones que desde los años 70 vienen reputándose como consolidadas y fiables, encuentran extraordinario que el ruido, por sí mismo, tenga capacidad para producir efectos diferidos una vez que su emisión finaliza. Los estudios que establecen los fenómenos de los efectos diferidos, no obstante, no aportan una comprensión teórica precisa que permita entender por qué ocurren. No resulta suficiente para asumir que el ruido impredecible sea más aversivo que un ruido de igual intensidad, pero de carácter predecible.<sup>168</sup>

Situándonos ahora en un plano estrictamente jurídico, el planteamiento defendido para dotar a la materia de una eficaz protección se debería basar y sustentar en diferentes cuestiones. Desde los títulos de intervención pública en el control de las actividades ruidosas, pasando por la propia actividad supervisora de las numerosas administraciones públicas implicadas, los daños producidos, que sea ineludible o no la intervención del Derecho penal, la reparación del daño causado al ofendido cuando, en

---

<sup>166</sup> Vid. CHERULNIK, P. D. Describe 13 proyectos basados en la influencia del ambiente sobre el comportamiento social, a través de teorías arquitectónicas, planeamiento de ciudades y factores psicológicos relevantes encontrados. Por ejemplo, se ha observado que altos niveles de ruido de fondo y espacios con gran reverberación en edificios previamente remodelados causaban inadaptación social en los residentes que, en consecuencia, se reflejaba en sus comportamientos individuales como una carencia del sentido de alerta, acciones repetitivas estereotipadas y deficiencias en los comportamientos sociales. En otro interesante estudio, concluye, refiriéndose al diseño interno arquitectónico de los dormitorios en centros residenciales universitarios, que la disposición de las habitaciones en el campus y el ruido de la calle que les afecta puede ser responsable de un nivel más bajo de satisfacción que, erróneamente, se venía atribuyendo a la falta de privacidad. En *Applications of environment-behavior research. Case studies and analysis* (1ª ed.) (Environment and behavior series) Ed. Cambridge University Press. Cambridge, 1993, págs. 19, 64-90.

<sup>167</sup> Vid. STEPHENS, R. W. B. En "Noise Pollution-Basic Introductory Survey", op. cit., págs. 16 y 17.

<sup>168</sup> Vid. GLASS, D. C. / SINGER, J. E. En "Urban Stress. Experiments on Noise and Social Stressors", op. cit., pág. 58. Vid. LÓPEZ BARRIO, I. Las investigaciones llevadas a cabo por Glass en los 70, determinan que es fácil entender los efectos más nocivos de la impredecibilidad del ruido (mayor estrés, evaluado como más amenazante que un ruido predecible, requiere mayor atención, es extremadamente difícil la adaptación a ruidos impredecibles porque poseen cualidades "insólitas" en cada una de sus presentaciones). En "Efectos sociopsicológicos del ruido", op. cit., págs. 136 y 137.

la mayor parte de casos, lo único que desea con vehemencia es el cese inmediato de la actividad causante de los ruidos, así como la búsqueda de soluciones de *lege ferenda* en orden a una efectiva protección del medio ambiente en la categoría de “ruido”.

Si atendemos a otras especialidades conexas, el estudio de las relaciones de vecindad desde un punto de vista ético, los distintos parámetros de valoración técnica y científica, los nuevos datos neurocientíficos sobre las modificaciones conductuales que puede acarrear la exposición al ruido<sup>169</sup>, tanto en humanos como en otras especies<sup>170</sup>, así como sus efectos en los materiales, básicamente resonancia (que puede producir aumentos de amplitud de las oscilaciones y en casos extremos, rotura) y fatiga (que puede desencadenar la rotura si la variable del ruido se aplica durante un tiempo determinado).

---

<sup>169</sup> De ahí el interés de la psicología por el efecto del ambiente en la conducta. ¿Por qué si no se crean tendencias de estímulo en los centros comerciales, por ejemplo? Una de las últimas consiste en destinar una gran sala silenciosa e iluminada de forma que induzca al descanso a los compradores, mientras en el área estrictamente comercial la música y el barullo no cesan. La propuesta se denomina *No Noise* y se desarrolló en febrero de 2013 en Londres, Birmingham y Manchester por parte de los almacenes británicos Selfridges. Disponible en: <http://smoda.elpais.com/articulos/silencio-se-compra/2958> último acceso 12/07/2015).

<sup>170</sup> Respecto al mundo animal, si nos decantamos por una concepción ecocéntrica, necesariamente tendremos que considerar los daños que el ruido provoca en mamíferos, de forma similar a lo que ocurre con los seres humanos, estudios que no son ni mucho menos recientes, ya que parte de la doctrina que se ha venido ocupando del fenómeno del ruido, así lo refleja. *Vid.* SEOANEZ CALVO, M. / RODRÍGUEZ RAMOS, L. Citan algunos casos y ejemplos particularizados al respecto, añadiendo la causación de daños en la flora, teoría sobre la que existen contradicciones entre los científicos, pues unos aseguran que existen interacciones entre la temperatura, el sonido y el crecimiento y otros lo niegan. En *La contaminación ambiental. Nuevos planteamientos técnicos y jurídicos*. Ed. Publicaciones del Instituto de Criminología de la Universidad Complutense de Madrid. Madrid, 1978, pág. 356. *Vid.* LÓPEZ BARRIO, I. Estudios en la década de los 70 (Welch y Welch, 1970), ya manifestaban la impronta de niveles elevados de ruido en animales, generando problemas en sus funciones reproductoras y sexuales, y presentando menor resistencia a enfermedades víricas. En “Efectos sociopsicológicos del ruido”, op. cit., pág. 135.

### **3.4.- La contaminación lumínica y el paisaje como segmentos complementarios de la protección contra el ruido.**

#### **Argumentos a favor de su integración**

El Derecho del medio ambiente, desde sus orígenes, se ha visto paulatina y sucesivamente incrementado con la aportación de nuevas facetas o situaciones que proteger y resolver, así como por la incorporación de aspectos que no se consideraban parte del mismo. Pero se da la paradoja de que el paisaje, como valor estético general, fue uno de los primeros valores que cimentaron el ahora vasto y multidisciplinar Derecho ambiental.<sup>171</sup>

---

<sup>171</sup> Como en multitud de cuestiones jurídicas, la mente preclara de los romanos ya concibió el derecho de los habitantes a no ser privados de disfrutar de las vistas al mar desde sus respectivas viviendas. Un extenso estudio al respecto en MALAVÉ OSUNA, B. En él se aborda la legislación contenida en la Constitución de Zenón (Emperador de Oriente y máximo dirigente de Constantinopla entre los años 474 y 491), según la cual se podía edificar de nueva planta o reconstruir sin limitaciones de altura, siempre que se respetase una separación de doce pies romanos entre edificaciones (distancia que equivale en nuestro sistema métrico a unos 3 metros aproximadamente). Ahora bien, la única limitación a esta norma urbanística es que la construcción no obstaculizara las vistas al mar de los vecinos. Así se recoge en el fragmento segundo: <<... *Neque tamen licere ex hoc spatio auferre vicini in mare prospectum directum nec impeditum ex quacumque aedium parte, quam vicinus habet stans intus in suis aedibus vel etiam sedens, non se detorquens, ut in obliquum despiciat et invito corpore in mare prospiciat...* >> C. 8, 10, 12, 2. Obsérvese la especialísima atención que se presta al hecho de no obstaculizar al vecino la vista al mar de forma directa desde cualquier parte del edificio, de pie o sentado dentro de su casa, y sin que tenga que girarse para ver el mar. En “Legislación urbanística en la Roma Imperia. A propósito de una Constitución de Zenón”, op. cit., págs. 106 y ss. Destacado papel juega también la minería, en el medio ambiente en general, y de forma particular en el paisaje. Vid. RODRÍGUEZ NEILA, J.F. Describe las anotaciones de Plinio y Vitruvio acerca de las transformaciones paisajísticas que sufrieron diversas comarcas, entre ellas Las Médulas, en León, así como la desviación de corrientes de agua cercanas a manantiales montañosos, que provocaron que muchos cauces se secaran definitivamente. A ello se añade que los cauces vivos se encontraban a menudo contaminados por sustancias con alto potencial letal, como plomo, mercurio o arsénico, que provenía de los vertidos de la minería hidráulica y de las aguas extraídas al drenar las galerías. Además, los emperadores romanos vislumbraron la necesidad de dotar a la gente de espacios verdes. En “Ecología en la Antigüedad clásica”, op. cit., págs. 55 y 59. También en época cesariana se aborda un problema urbanístico desde un punto de vista paisajístico. Vid. HOMO, L. Para encontrar el espacio necesario en el centro de Roma, ciudad que sufría de aglomeraciones y congestión, César tenía dos opciones; o bien parcelar la zona de parques y jardines o aprovechar las llanuras periféricas, que no fue tenida en cuenta por el problema que suponía el alejamiento del centro urbano sin medios de transporte. La primera solución también tenía serios inconvenientes, por motivos de higiene era conveniente que la capital conservara su <<circuito de verdes arbolados y con ellos su aire puro>>. Cita igualmente la Ley de Zenón en lo referente a los doce pies de distancia y altura de los edificios, si bien la califica de ineficaz, ya que no consiguió extinguir la práctica de los muros medianeros en Roma. Se refiere a Roma y no a Constantinopla porque Justiniano se encargó de extender esta normativa a todo el Imperio y, por tanto, a la Roma reconquistada. En “La Roma Imperial y el urbanismo en la antigüedad”, op. cit., págs. 46 y 435.

No en vano, en las culturas orientales, el elemento paisajístico se considera milenario, a través de la construcción de jardines como parte integrante, por ejemplo, de las técnicas del *Feng Shui*, en especial de la escuela San He.<sup>172</sup>

En un contexto occidental, parte de la doctrina italiana siempre se ha mostrado dispuesta a aceptar la inclusión del fenómeno paisajístico, haciendo coincidir ambos conceptos en una mentalidad ambiental integradora y compacta.<sup>173</sup> Al igual que el ordenamiento alemán, en el que convive un sistema de ordenación paisajística y urbanística integrados de manera recíproca.<sup>174</sup>

Por el contrario, la protección del entorno limitando y regulando la emisión de luz excesiva nocturna es una de las últimas incorporaciones en este campo, obviamente por razones de índole tecnológico.<sup>175</sup>

---

<sup>172</sup> “Fen Shui” es el término utilizado actualmente para denominar una ciencia natural que formaba parte de un sistema científico y filosófico desarrollado por los taoístas, con origen cronológico incierto (entre 5.000 y 15.000 años). Vid. DE SOROA, R. El nombre original del sistema era Kan (configuración del cielo) Yu (formación de la Tierra). Shan He significa tres combinaciones: esta escuela se basa en enseñanzas que trabajan con direcciones cardinales, cálculos matemáticos y análisis paisajísticos; éstos últimos para conocer qué influencia ejercen en las construcciones, a través de sus formas, tamaños, vegetación, viento y la presencia del agua en forma de ríos y lagos. En *Manual del auténtico Fen Shui*. Ed. CBCM. México, 2002, págs. 20, 80 y ss. Naturalmente, la finalidad última era conservar la salud humana y crear ambientes de prosperidad y éxito, pero lo cierto es que su principio básico es el efecto del campo magnético terrestre, que influye sobre todos los seres vivos.

<sup>173</sup> Por todos, vid. GIANNINI, M. S. Atiende a la legislación vigente en Italia sobre el paisaje, que contenía previsiones para conciliar los problemas que suscitaba el dogma de que <<unos derechos públicos no excluyen a otros intereses públicos>>. En “Ambiente: Saggio sui diversi aspetti giuridici”. *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico*, Fasc. 1, 1973. págs. 15-53.

<sup>174</sup> Vid. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C. “Algunas consideraciones sobre el actual panorama del paisaje urbano en nuestro ordenamiento: desde su originaria y exclusiva protección por el ordenamiento urbanístico al incipiente ordenamiento paisajístico”. En *Revista de Derecho urbanístico y medio ambiente*, núm. 277. Madrid, noviembre 2012, págs. 187-215, en especial 195 y 196.

<sup>175</sup> La escasa atención legislativa estatal sobre la materia se inicia con la Ley 31/1988, de 31 de octubre, de Protección de la Calidad Astronómica de los Observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias, desarrollada por el RD 243/1992, de 13 de marzo. Con posterioridad se dicta la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, que recoge la definición de “contaminación lumínica” en su art. 3 f): <<El resplandor luminoso nocturno o brillo producido por la difusión y reflexión de la luz en los gases, aerosoles y partículas en suspensión en la atmósfera, que altera las condiciones naturales de las horas nocturnas y dificultan las observaciones astronómicas de los objetos celestes, debiendo distinguirse el brillo natural, atribuible a la radiación de fuentes u objetos celestes y a la luminiscencia de las capas altas de la atmósfera, del resplandor luminoso debido a las fuentes de luz instaladas en el alumbrado exterior>>. Además, legislación de carácter específico como el RD 1890/2008, de 14 de noviembre, del Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-2012. A nivel comunitario sobresale Cataluña, como pionera en la regulación (Ley 6/2001, de 31 de mayo, de Ordenación Ambiental del Alumbrado para la Protección del Medio Nocturno), Islas Baleares (Ley 3/2005, de 20 de abril, de Protección del Medio Nocturno), Navarra (Ley Foral 10/2005, de 9 de noviembre, de Ordenación del Alumbrado para la Protección del Medio Nocturno), Canarias (Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias), Cantabria (Ley 6/2006, de 9 de junio, de Prevención de la Contaminación Lumínica), Andalucía (Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental) y Castilla-León (Ley 15/2010, de 10 de diciembre, de prevención de contaminación lumínica y del fomento del ahorro y eficacia energéticos derivados de instalaciones de iluminación). Por último, en cuanto a la

La definición más generalizada de lo que entendemos por “contaminación lumínica” es: <<polución de la luz>>, que engloba la totalidad de efectos adversos de la luz artificial, según el CIE.<sup>176</sup>

Por parte de la doctrina, se define como <<el resplandor producido por la luz artificial que se pierde y se escapa hacia el cielo procedente, principalmente, del alumbrado –público y privado– ineficiente, iluminando las partículas de agua y polvo que el aire contiene en suspensión, formando un inmenso globo de luz dirigido hacia el firmamento>>.<sup>177</sup>

---

legislación local, la competencia de los Ayuntamientos deriva del art.25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, existiendo desde 2002 un modelo de Ordenanza elaborado por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE): <<Modelo de ordenanza de alumbrado exterior para la protección del medio ambiente mediante la mejora de la eficiencia energética>>, que sirve a los entes locales que quieran incrementar la protección otorgada por sus leyes autonómicas o bien, si carecen de ellas, legislar por sí mismas. Vid. CANO MURCIA, A. / CANO MUÑOZ, A. “Medio Ambiente 2009-2010”. *Memento Práctico Francis Lefebvre*. Ed. Francis Lefebvre. Madrid, 2010, págs. 274-286; SORIANO GARCÍA, J. E. / BRUFAO CURIEL, P. *Claves de Derecho Ambiental I*. Ed. Iustel. Madrid, 2010, págs. 42-45; CALVO CHARRO, M. “El Derecho a ver las estrellas. Análisis de la contaminación lumínica desde una perspectiva jurídica”. En *Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente*, núm. 187 (julio-agosto). Madrid, 2001, págs. 131-181; “La contaminación lumínica. La protección del cielo oscuro”. En *Escritos de Derecho Ambiental*. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2003, págs. 23-78, en especial pág. 24; LÓPEZ SAKO, M. J. “Algunos problemas de la regulación de la contaminación lumínica”. En *Derecho, Globalización, Riesgo y Medio Ambiente*. Esteban Pérez Alonso / Estanislao Arana García et. al. (eds.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2012, págs. 599-617; GONZÁLEZ RÍOS, I. “La contaminación lumínica: implicaciones urbanísticas, demaniales y de eficiencia energética”. En *Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica*, núm. 307 (mayo-agosto), 2008, págs. 27-66; MARTÍNEZ VÁZQUEZ, F. “La intervención administrativa frente a las nuevas formas de contaminación atmosférica”. En AA.VV. *Nuevas formas de contaminación atmosférica. Un análisis jurídico multidisciplinar*. Ed. Dykinson / Universidad Pontificia Comillas. Madrid, 2010, págs. 117-147, en especial 135 y ss; ESTEVE PARDO, J. *Derecho del medio ambiente* (3ª ed.) Ed. Marcial Pons. Madrid, 2014, págs. 239 y 240.

<sup>176</sup> El organismo CIE (*International Commission on Illumination*) con sede en Viena (Austria), es la autoridad internacional en luz, iluminación, color y espacios de color. La definición de “contaminación lumínica” se encuentra en la publicación de la CIE núm.126 sobre Directrices para minimizar el resplandor del cielo <<Guidelines for Minimizing Sky Glow>>, de 1997. La contaminación lumínica se suele ubicar sistemáticamente dentro de la protección del aire en la mayoría de compendios medioambientales. Vid. CANO MURCIA, A. / CANO MUÑOZ, A. Así, se define, en sentido estricto como <<la emisión de flujo luminoso de fuentes artificiales nocturnas en intensidades, direcciones o rangos espectrales innecesarios para la realización de las actividades previstas en la zona en que se han instalado las luminarias>>, y en sentido amplio como <<el resplandor luminoso nocturno o brillo producido por la difusión y reflexión de la luz en los gases, aerosoles y partículas en suspensión en la atmósfera, que altera las condiciones naturales de las horas nocturnas y dificulta las observaciones astronómicas de los objetos celestes, debiendo distinguirse el brillo natural, atribuible a la radiación de fuentes u objetos celestes y a la luminiscencia de las capas altas de la atmósfera, del resplandor luminoso debido a las fuentes de luz instaladas en el alumbrado exterior>>. En “Memento Práctico Francis Lefebvre. Medio Ambiente 2009-2010”, op. cit., pág. 274 [núm. marginal 1816].

<sup>177</sup> Vid. CALVO CHARRO, M. El concepto de medio ambiente incluye definida y definitivamente el paisaje, y esta evolución también se muestra en el ámbito internacional. Voz “Contaminación Lumínica”. En *Diccionario de Derecho Ambiental*. Enrique Alonso García / Blanca Lozano Cutanda (dirs.) Ed. Iustel. Madrid, 2006, págs. 382-393. Vid. ALGARRA PRATS, E. Apunta definiciones similares desde puntos de vista científicos y legales, citando en éste último sentido la Ley catalana y la cántabra, que la definen como <<La emisión de flujo luminoso de fuentes artificiales nocturnas en intensidades, direcciones o rangos espectrales innecesarios para la realización de las actividades previstas en la zona en que se han instalado las luminarias>>. La autora, en contra de la doctrina mayoritaria, opina que, si

España, no obstante, cuenta con el mejor centro europeo dedicado a la astronomía observacional e implicado en la protección del cielo oscuro y en el combate contra la contaminación lumínica, a través de un urbanismo respetuoso con el medio ambiente que contemple un alumbrado público sostenible.<sup>178</sup>

Existen originales investigaciones en la actualidad que demuestran el daño producido al ecosistema por medio de animales que ven reducido su ciclo de vida debido a la luz nocturna, con el consiguiente peligro de su mutación e incluso desaparición o extinción.<sup>179</sup> Así como en la fauna microscópica marina; estos seres

---

bien el TEDH puede en un futuro decidir que se le aplique a éste fenómeno la jurisprudencia mantenida en relación al ruido como factor de intromisión en los derechos a la intimidad personal y familiar y la inviolabilidad del domicilio, no lo considera una vía jurídica adecuada. Alude también a la ausencia total de jurisprudencia específica sobre la materia. “Contaminación lumínica, intrusión lumínica y Derecho civil”. En *La responsabilidad civil y su problemática actual*. Juan Antonio Moreno Martínez (coord.) Ed. Dykinson. Madrid, 2007, págs. 1109-1123. Vid. ESTEVE PARDO, J. Ofrece una breve definición: <<modalidad de contaminación por radiaciones ópticas>>. En “Derecho del medio ambiente”, op. cit., pág. 239.

<sup>178</sup> El Centro Astronómico Hispano Alemán (CAHA) es un observatorio situado en Calar Alto (Almería), principal instalación astronómica del continente europeo que se ubica en la Sierra de los Fibrales, a más de 2.000 metros de altitud, contando con tres telescopios. A través de sus estudios se alerta sobre la necesidad de divulgación científica, colaborando con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en la elaboración de normativa contra la contaminación lumínica. Vid. CRUZ SÁNCHEZ, T. / GALADÍ-ENRÍQUEZ, D. <<La aplicación de medidas que afectan a un aspecto del urbanismo tan sensible como el alumbrado debe ir precedida de una información rigurosa que predisponga a su favor a la población [...] Nadie defiende lo que no valora, y nadie valora lo que no conoce [...] No podemos olvidar el impacto de la contaminación lumínica sobre la cultura, el paisaje y las tradiciones. Ocultar el cielo a las generaciones nuevas nos aleja del paisaje de nuestros antepasados, de sus tradiciones y de parte de nuestra cultura>>. “Observatorio de Calar Alto. Urbanismo y protección del paisaje celeste nocturno”. En *Uciencia. Revista de divulgación científica de la Universidad de Málaga*, núm. 8 noviembre, 2011, págs. 54-56.

<sup>179</sup> Investigadores alemanes han descubierto efectos nuevos que proceden de la iluminación urbana. KYBA, C. C. M. / RUHTZ, T. / FISCHER, J. et al. La contaminación lumínica urbana, además de no permitir observar el cielo, origina estragos entre los animales nocturnos que dependen de la «brújula» que supone un patrón de luz polarizada. Se advierte el riesgo de merma en la capacidad evolutiva de animales nocturnos como arañas, polillas, grillos o escarabajos, lo que a su vez puede causar desequilibrio a ecosistemas completos. “Lunar skylight polarization signal polluted by urban lighting”. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, Vol. 116, D24106, doi:10.1029/2011 JD 016698, 17 December 2011, págs. 1-7. Disponible en: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2011JD016698/full> (último acceso 14/07/2015). Vid. DOMINGO CALABUIG, J. / BAIXERAS ALMELA, J. Definen la medición del coste ambiental de la contaminación lumínica como una “asignatura pendiente”; este fenómeno se encuentra íntimamente ligado al factor económico. <<... la contaminación lumínica para muchos pasa a ser grave desde el momento en que las inversiones realizadas en costosísimos aparatos de observación se tiran por la borda [...] El coste ambiental en cambio rara vez es cuantificable, al menos en cifras que las autoridades puedan entender. ¿Qué significa perder en un lago 400 gramos de biomasa de insectos cada noche? Para un ecólogo, una auténtica aberración que puede llegar a desequilibrar un ecosistema. Para alguien no versado en el tema, un puñado de mosquitos menos>>. “Impactos de la contaminación lumínica sobre la naturaleza y la biodiversidad”. En *Documento Final del Grupo de Trabajo (GT-LUZ). Contaminación Lumínica*. Manuel Nicolás Barba (coord.) IX Congreso Nacional del Medio Ambiente. Cumbre del Desarrollo Sostenible. Madrid, diciembre 2008, págs. 23-27. Disponible en: [http://www.conama9.conama.org/conama9/download/files/GTs/GT\\_LUZ/LUZ\\_final.pdf](http://www.conama9.conama.org/conama9/download/files/GTs/GT_LUZ/LUZ_final.pdf) (último acceso 12/07/2015). Contando con que un gran número de especies animales desarrollan sus ciclos vitales durante la noche (entre los vertebrados, más de la mitad de los mamíferos, y buena parte de anfibios y aves. Entre los invertebrados, destacan los insectos, que son la fuente de proteínas más importante del planeta y los lepidópteros o mariposas; por tanto, se trata de grupos animales con

vivos modifican su comportamiento y procesos de migración con la luz artificial, lo que repercute seriamente en el ecosistema.<sup>180</sup>

En los seres humanos, si bien no existe consenso científico sobre los daños asociados tanto al exceso de luz como a la carencia de la misma, sobre todo en las pautas y patrones conductuales, sí que se pueden catalogar distintos episodios que repercuten seriamente en el estado psicobiológico. Además, la luz es un estímulo que se suma a otros como el ruido, espacio, temperatura o periodo de la jornada.<sup>181</sup> Tanto la luz generada artificialmente como el paisaje, confluyen con el ruido en gran medida porque, por ejemplo, a través del entorno urbano, con gran luminiscencia cuando cae la noche en la mayor parte de nuestra geografía, la sensación auditiva y la visual se atraen e interactúan.<sup>182</sup>

El estudio de los procesos de codificación de la imagen a través del sonido no es algo que resulte novedoso, pero en la actualidad este factor se asegura científicamente a través de los avances proporcionados por la disciplina de la neurociencia, ya que se

---

centenares de miles de especies diferentes), no resultaría alarmista concluir que esta cuestión puede generar un desequilibrio grave en los sistemas naturales o, como dice el tenor literal del art. 325 CP: <<... que puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales>>.

<sup>180</sup> Vid. NAVARRO-BARRANCO, C. / HUGHES, L. E. El análisis por primera vez se centra en fauna de tamaño muy pequeño, como los anfípodos, una especie de crustáceos que actúan como bio-indicadores de la calidad de las aguas, y que son muy sensibles a los cambios en su hábitat. Su posición es básica en la cadena trófica y sirven de alimento para distintas especies marinas, por ello las modificaciones en su desarrollo se consideran muy importantes para el ecosistema. “Effects of light pollution on the emergent fauna of shallow marine ecosystems: Amphipods as a case study”. En *Marine Pollution Bulletin*, Vol. 94, Issues 1-2, 15 de mayo de 2015, Charles Sheppard (ed.) Ed. Elsevier, 2015, págs. 235-240. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2015.02.023> (último acceso 14/07/2015).

<sup>181</sup> Vid. “Documento Final del Grupo de Trabajo 20. Contaminación Lumínica”. En este sentido, se afirma que altas intensidades de luz, acompañadas de situaciones de deslumbramiento, favorecen la ansiedad y el estrés. Asimismo, la interacción con otros estímulos exteriores, puede causar <<... resultantes biológicas y emocionales no previstas, como cambios en la tasa cardíaca o la aparición de conductas agresivas>>, asegurando la comprobación de que disminuye el número de actos vandálicos cuando se reduce el deslumbramiento. Por el contrario, bajas intensidades favorecen la aparición de cuadros depresivos. José Miguel Peña Pérez (coord.) CONAMA V. Madrid, noviembre-diciembre, 2000. Disponible en: <http://www.conama.es/vconama/gt/20.htm> (último acceso 12/07/2015).

<sup>182</sup> En este sentido, vid. SORIANO GARCÍA, J. E. / BRUFAO CURIEL, P. Mencionan la interferencia que produce en el ciclo vital de diversas especies y de los seres humanos la iluminación nocturna, así como su similitud con la “contaminación por ruidos”, por sus implicaciones en la inviolabilidad del ámbito familiar y en la integridad física. En “Claves de Derecho Ambiental I”, op. cit., pág. 41. Vid. CALVO CHARRO, M. Distingue los diversos perjuicios de la contaminación lumínica, a la que define como <<... el aumento del brillo del cielo nocturno ...>>, de diversa naturaleza: económica (derroche energético), disminución de seguridad nocturna en las redes viales, daños en la salud por la inmisión de luz nocturna en la fase de sueño, contaminación atmosférica (que a su vez repercute en el cambio climático por el efecto invernadero) y daños en el ecosistema (muerte de aves, alteración de biorritmos, desaparición de especies nocturnas). En “El Derecho a ver las estrellas. Análisis de la contaminación lumínica desde una perspectiva jurídica”, op. cit., págs. 136 y 137. Alude a la discusión sobre el mayor o menor índice de seguridad que proporcionan los sistemas de iluminación nocturna ENTRENA RUIZ, D. “La prevención contra la contaminación lumínica mediante la ordenación del territorio y urbanismo”. En *Revista Ecosostenible*, núm. 5 julio 2005, págs. 20-26.



ha constatado que el núcleo de nuestras neuronas y las emociones se encuentran en perfecta sintonía y, por tanto, cohesionan con lo que percibimos a través de la visión, interpretándose lo que “vemos” subjetivamente, influenciado a su vez por el contexto sonoro o ruidoso que exista en el lugar y en el momento en que nos encontremos.<sup>183</sup>

Gran número de actividades de ocio generadoras de ruido a gran escala (con gran afluencia de personas) necesitan y de alguna forma generan o incrementan la asistencia de ciudadanos, así como la publicidad misma del evento con efectos lumínicos de gran potencia e intensidad (ferias, festivales, conciertos al aire libre o en espacios cerrados, fiestas populares de la más diversa naturaleza, etc.), asociándose así al fenómeno de la acústica.<sup>184</sup> En muchas ocasiones, la búsqueda deliberada de cierto grado de deslumbramiento en zonas comerciales y de recreo, se traduce en provocar determinados estados de ánimo (euforia, seguridad, etc.), estimulando la necesidad y demanda de mayores cantidades de luz. A su vez, la invasión de la luz artificial en áreas adyacentes a la de la iluminación directa, ha llevado a acuñar el término “luz intrusa” para denominar tanto las inmisiones de luz en las viviendas como la excesiva iluminación de playas, paseos marítimos y parajes naturales, que consiguen iluminar grandes extensiones de mar, llegando a provocar deslumbramiento por la reflexión del agua, con el consiguiente daño añadido a la flora y fauna marina.<sup>185</sup>

---

<sup>183</sup> Sobre el procesamiento neuronal de las emociones evocadas por la música, *vid.* KOELSCH, S. “Towards a neural basis of music-evoked emotions”. En *Trends in Cognitive Sciences*. Vol. 14, núm. 3. Marzo, 2010, págs. 131-137. Disponible en: [http://www.cell.com/trends/cognitive-sciences/fulltext/S1364-6613\(10\)00003-3](http://www.cell.com/trends/cognitive-sciences/fulltext/S1364-6613(10)00003-3) (último acceso 12/07/2015). El cine, por ejemplo, siempre se ha nutrido de esta técnica para que el espectador interprete una misma escena en la que los personajes no mantienen diálogo, a través de la música; así, la misma puede inspirar terror, miedo, tensión o romanticismo dependiendo de los acordes musicales que se le inserten. El mismo método se utiliza en las técnicas de neuromarketing, con objeto de incentivar transacciones comerciales o también en el campo publicitario, con la finalidad de crear el deseo de obtener el producto de que se trate.

<sup>184</sup> ¿Qué sería por ejemplo de las fiestas valencianas por excelencia, las Fallas, sin la participación de fuegos artificiales, tracas de explosivos y el ruido que provocan, o las tamborradas populares en Aragón y otras localidades del sureste español, o los Sanfermines pamplonicas sin el tradicional chupinazo? Por otra parte, la inclusión de horarios diferenciados de verano e invierno en España desde 1974, lleva a una correlación engañosa entre cambio de horario y ahorro energético, sobre la que se discute hace tiempo, sin resultados que evidencien que dichos cambios repercutan positivamente en una disminución relevante del gasto energético; al contrario, los signos negativos en los biorritmos humanos que, ocasionalmente, pueden derivar en alteraciones hormonales, son cada vez más aceptados por los expertos. Desde la aprobación de la Directiva 2000/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de enero de 2001 relativa a las disposiciones sobre la hora de verano, el cambio de hora es de obligado cumplimiento para todos los países de la Unión Europea y sus fechas están unificadas. En España, es el RD 236/2002, de 1 de marzo [BOE núm. 53, 2 de marzo de 2002] el que incorpora al ordenamiento interno este mandato europeo.

<sup>185</sup> *Vid.* “Documento Final del Grupo de Trabajo 20. Contaminación Lumínica”. CONAMA V, op. cit.

Los diferentes legisladores [en España, CCAA y Ayuntamientos, así como dispersa legislación sectorial] continúan recurriendo al argumento de la seguridad ciudadana para justificar la dotación de luz excesiva en el alumbrado público en diferentes zonas, pero la literatura científica nos muestra que los datos son preocupantes, y que la normativa relativa a las medidas automáticas de iluminación y control de aplicación del Real Decreto 1890/2008 no se aplican correctamente para corregir la ineficiencia económica resultante.<sup>186</sup> En cuanto a la seguridad vial, se ha constatado que un exceso de iluminación de las vías provoca un mayor número de accidentes de tráfico porque se tiende a incrementar la velocidad en zonas sobreiluminadas, precisamente por desencadenar una falsa sensación de seguridad reforzada.<sup>187</sup>

También desde un punto de vista de salubridad pública, se alerta sobre los efectos nocivos de la contaminación lumínica en la salud humana, ya que ésta produce una pérdida del “orden temporal interno”, es decir, los ritmos fisiológicos dejan de estar coordinados entre sí, y esto es una constante en las sociedades modernas, donde el ciclo natural luz-oscuridad se ha visto alterado por el abuso de luz artificial durante la noche.<sup>188</sup>

---

<sup>186</sup> RD 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. Vid. SÁNCHEZ DE MIGUEL, A. / ZAMORANO, J. / PILA-DÍEZ, B. et. al. Un estudio fotométrico diferencial de la evolución del consumo de energía en alumbrado público entre 1992 y 2007 en España indica lo siguiente: El crecimiento medio nacional fue del 54%, siendo mayor en provincias con una densidad de población menor, incidiendo en que los datos de Madrid y Barcelona no son fiables por ser regiones saturadas. Además, el objetivo nacional de consumo en alumbrado público anual no se cumple; éste tendría que ser de 75 Kw/h por habitante, pero, a partir de los datos oficiales la media nacional se estima en 118 Kw/h por habitante en 2007, en crecimiento constante. *Contaminación lumínica en España 2010*. IX Congreso de la Sociedad Española de Astronomía. Madrid, septiembre 2010. [http://eprints.ucm.es/12284/1/SEA2010\\_Luminica\\_ASanchez.pdf](http://eprints.ucm.es/12284/1/SEA2010_Luminica_ASanchez.pdf) (último acceso 12/07/2015).

<sup>187</sup> Vid. LÓPEZ SAKO, M. J. En “Algunos problemas de la regulación de la contaminación lumínica”, op. cit., págs. 603 y 604.

<sup>188</sup> Vid. ROL DE LAMA, M<sup>a</sup> A. / BAÑO OTÁLORA, B. / MARTÍNEZ NICOLÁS, A. et. al. Los autores corroboran la existencia de efectos perjudiciales tras el estudio de la estructura del sistema circadiano, responsable de la síntesis de melatonina. <<La insuficiente exposición a luz diurna y/o la excesiva exposición a luz brillante por la noche perjudican el funcionamiento del NSQ (núcleo supraquiasmático del hipotálamo) afectando a los ritmos de cortisol y melatonina, dos de las señales humorales más importantes que transmiten la señal luminosa a los tejidos periféricos [...] Estudios epidemiológicos muestran una relación estadísticamente significativa entre la cronodisrupción (disfunción circadiana) y el aumento en la incidencia del síndrome metabólico, de las enfermedades cardiovasculares, deterioro cognitivo, trastornos afectivos y envejecimiento acelerado...riesgos de padecer determinados tipos de cáncer como el de mama, próstata y colorrectal>>. “El lado oscuro de la luz: efectos de la contaminación lumínica sobre la salud humana”. En *Física y Sociedad*, núm. 21, (Revista del Colegio Oficial de Físicos. Ejemplar dedicado a Contaminación Lumínica y eficiencia energética), 2011, págs. 20-22. Vid. RODRÍGUEZ SANABRA, F. Además de precisar que la iluminación artificial supone una alteración del sincronizador de los ritmos biológicos circadianos y circanuales, apunta que el efecto del

Por tanto, resulta imprescindible dotar a esta materia de una normativa desarrollada para evitar que la luz nocturna pública se convierta en un intruso del ámbito privado, aplicando el principio de precaución con apoyo en las evidencias científicas, pero en efectiva conjunción con la necesaria seguridad ciudadana que debe amparar a los habitantes de las poblaciones, en la faceta de prevención de actos delictivos, utilizando parámetros arquitectónicos que dificulten la comisión de delitos.<sup>189</sup>

Destacadas iniciativas en torno a la contaminación lumínica se dirigen actualmente a fomentar la protección del cielo nocturno, realizando una valoración tanto cultural como económica y respecto a la biodiversidad, porque se ha demostrado

---

aumento de la iluminación sobre el rendimiento, sigue una ley logarítmica como la de Weber-Fechner; incrementos absolutos similares en iluminación originan modificaciones en el rendimiento, siendo éstas sucesivamente más pequeñas. “La influencia de los factores físicos ambientales en el comportamiento”. En *Introducción a la psicología ambiental*. Florencio Jiménez Burillo / Juan Ignacio Aragonés (comps.) Ed. Alianza Editorial. Madrid, 1986, págs. 115-125, en especial 122 y ss. Se puede observar el paralelismo entre “ruido” e “iluminación” en base a la famosa ley de Weber y Fechner, citada *supra*, nota 95.

<sup>189</sup> Vid. GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. <<Constatando, pues, la significativa incidencia de los factores arquitectónicos, urbanísticos y ambientales en la delincuencia ocasional, surge una nueva concepción prevencionista que pretende intervenir en los escenarios criminógenos, sus edificaciones y anexos, [...] De una parte, se dificulta la comisión del delito (“Target Hardening”) mediante la interposición de barreras reales o simbólicas que incrementan el riesgo para el infractor potencial (v.g. medidas dirigidas a mejorar las vías de acceso a los recintos, los puntos de observación activa y pasiva, iluminación, etc.)>>. No obstante, la opinión del autor es que resulta fragmentaria y deficitaria una prevención que opere solamente sobre el factor geográfico-espacial. En *Tratado de Criminología* (4ª ed.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2009. págs. 964 y ss. Sobre la dimensión cultural de la contaminación lumínica, *vid.*, BARÁ VIÑAS, S. / DOSITEO VEIGA, A., que apuntan la inexistencia de razones objetivas para contaminar lumínicamente el entorno. Se insiste en que la suma de estos factores condiciona muchas de las actuaciones municipales en este ámbito y, por ejemplo, el exceso de iluminación de monumentos y otros elementos singulares del paisaje urbano refuerzan en la conciencia ciudadana el valor positivo de un exceso de luz artificial. En “Contaminación lumínica y concienciación ciudadana”. *Física y Sociedad (ejemplar dedicado a: Contaminación lumínica y eficiencia energética)* núm. 21. Ed. Colegio Oficial de Físicos, 2011, págs. 44 y 45. En este sentido, pero cuestionando la pretendida seguridad a través de la iluminación, PEÑA GARCÍA, A. Cita los dos aspectos con mayor impacto social, como son la seguridad vial y la protección de las personas ante agresiones diversas. Afirma, tras el estudio de diferentes proyectos y estudios realizados en UK y EE. UU., que las conclusiones al respecto son contradictorias, pero un hecho que parece constatado es <<... la sensación de seguridad en los viandantes>>. “Iluminación y seguridad”. En *Documento Final del Grupo de Trabajo GT-LUZ. Contaminación Lumínica*. Manuel Nicolás Barba (coord.) IX Congreso Nacional del Medio Ambiente. Cumbre del Desarrollo Sostenible. Madrid, diciembre, 2008. págs. 38-40. [http://www.conama9.conama.org/conama9/download/files/GTs/GT\\_LUZ//LUZ\\_final.pdf](http://www.conama9.conama.org/conama9/download/files/GTs/GT_LUZ//LUZ_final.pdf) (último acceso 12/07/2015). Digno de mención es el proyecto del CSIC en Andalucía, que bajo el nombre “Small Night Light”, propone la sustitución de las farolas tradicionales urbanas (lámparas de vapor de mercurio y de sodio) por otras con tecnología LED (de bajo consumo), que además de un ahorro energético estimado en torno al 50-70%, pueden cumplir otras funciones adicionales, relacionadas básicamente con la seguridad pública. Cada una de ellas cuenta con un nodo de comunicación con conexión inalámbrica, intercambian información y conocen el ritmo de usuarios de una calle, controlan excesos de velocidad en vehículos y gestión de multas, detectan más fácilmente el punto donde haya ocurrido un incidente, etc. Además, el rendimiento de las mismas se asocia a las necesidades temporales reales. La consulta íntegra del proyecto disponible en: [http://www.coitt.es/index.php?page=noticias\\_sector\\_reg&iereg=400&icod=1673](http://www.coitt.es/index.php?page=noticias_sector_reg&iereg=400&icod=1673) (último acceso 12/07/2015).

que el cielo estrellado también puede ser fuente de beneficios para determinadas economías locales, recuperando un concepto de paisaje que se encontraba en proceso de olvido y deterioro.<sup>190</sup> Destacable fue también la iniciativa de la UNESCO, declarando hace casi dos décadas que el cielo oscuro forma parte de los derechos de las próximas generaciones.<sup>191</sup>

Sin embargo, la cuestión lumínica, frente a otras manifestaciones medioambientales, no posee todavía suficiente entidad normativa como aspecto específico, sino que se relaciona de forma complementaria y, en cierta forma tangencial, a diversos programas de ahorro y eficiencia energética, cuyo epicentro se instala en los recursos de nueva creación que permitan disminuir el consumo, tanto en viviendas privadas como en espacios públicos.<sup>192</sup> También es reseñable el crecimiento exponencial del uso de fuentes de iluminación LED<sup>193</sup> en toda clase de dispositivos de

---

<sup>190</sup> En este sentido MARÍN CABRERA, C. La “Declaración Starlight”, aprobada en el marco de la Conferencia Mundial en Defensa del Cielo Nocturno y del Derecho a Observar las Estrellas, celebrada en 2007 en la isla de La Palma, parte de una idea general formulada en el seno de una Conferencia General de la UNESCO y otros organismos en 2005. El documento propugna en su primer punto que <<el derecho a un cielo nocturno no contaminado que permita disfrutar de la contemplación del firmamento debe considerarse como un derecho inalienable de la Humanidad, equiparable al resto de los derechos ambientales, sociales y culturales, atendiendo a su incidencia en el desarrollo de todos los pueblos y a su repercusión en la conservación de la diversidad biológica>>. Alerta sobre la desaparición progresiva del cielo estrellado, tanto en las ciudades como en el mundo rural, aportando un dato desalentador; una gran parte de las nuevas generaciones en los países desarrollados no han tenido nunca la posibilidad de contemplar la Vía Láctea. Se propone, como medio para paliar los efectos del exceso de iluminación artificial la asunción, por parte de las distintas administraciones, de un cambio y replanteamiento del alumbrado público, para lo cual se requieren tanto normativas y leyes, como casos de referencia que demuestren que dicho cambio es posible y que la recuperación de las estrellas forma parte esencial de la estrategia de sostenibilidad energética. En cuanto al aspecto económico, la experiencia demuestra que en muchos casos es una nueva fuente que enriquece el turismo, reportando beneficios para muchas economías locales (como ejemplos de prácticas de actividades turísticas basadas en este recurso en España, se citan Fuerteventura y La Palma). Respecto a las líneas de actuación abordadas por la iniciativa Starlight, la primera es incluir en el nuevo programa de la UNESCO “Ciudades Futuras” (*Urban Futures Programme*) el modo de combatir la contaminación lumínica, y la segunda es el lanzamiento de un modelo de excelencia en el marco del Pacto de Alcaldes de la Comisión Europea (conjunto de ciudades que se sumarán a la estrategia de una nueva cultura de la iluminación a través de los planes de sostenibilidad energética). En “La iniciativa Starlight: el derecho a observar las estrellas”. *Física y Sociedad (ejemplar dedicado a: Contaminación lumínica y eficiencia energética)*, núm. 21. Ed. Colegio Oficial de Físicos, 2011, págs. 32-34.

<sup>191</sup> Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Generaciones Futuras, aprobada el 26 de febrero de 1994 en la reunión de expertos UNESCO-Equipo Cousteau.

<sup>192</sup> Vid. “Libro verde de medio ambiente urbano Tomo II”. La única alusión a la contaminación lumínica que aparece en el texto se encuentra en una de las directrices planteadas para el desarrollo de un nuevo urbanismo que incorpore la energía en la planificación. <<Líneas de actuación sobre el ahorro de energía en el espacio público: Desarrollar Planes de Iluminación Pública Municipal y extender normativas para la iluminación del espacio público que contemplen el ahorro de energía y la reducción de la contaminación lumínica. La normativa debería regular, también el despilfarro de energía que se produce en los paneles lumínicos. Sustituir las luces de los semáforos que funcionan con lámparas de incandescencia por LEDs>>. Op. cit., pág. 18.

<sup>193</sup> El acrónimo anglosajón LED (*Light-Emitting Diode*), se refiere a diodos emisores de luz.

uso personal, o en el contexto de la iluminación ambiente, ya sea en un entorno laboral o privado, cuya invasión generalizada en la vida cotidiana es ya un hecho irrefutable, y que ha propiciado el interés por determinar la relación entre la exposición a esta fuente de luz y el daño que produce a través de estudios científicos que revelan el detrimento que provoca en el sistema visual.<sup>194</sup>

Es obviamente el Derecho administrativo el que más atención ha prestado a la polución lumínica, regulando aspectos parciales de la misma, ya que el art.325 del Código Penal, tipo básico del delito ecológico, no acoge dentro de su amplísima gama este tipo de contaminación.<sup>195</sup> Como dato correlativo, la jurisdicción administrativa se ha pronunciado al respecto en la última década a través de algunas sentencias, entre las cuales se observan criterios de defensa similares a los que sujetan la protección de los ciudadanos frente al ruido.<sup>196</sup>

No se alude a esta clase de emisiones, ni de forma directa ni indirecta, cuando sin embargo es legendario el ejemplo de la tortura psicológica y física que se puede causar a un sujeto al que se le someta a un foco de luz intensa y directa o, por el contrario, se le prive del disfrute de luz natural. El ejemplo más conocido es la denominada “tortura blanca”, que viene utilizándose de forma histórica: se trata de un método de tortura en la que la víctima es obligada a permanecer despierta en posición vertical. A continuación, en los momentos en que sucumbe al sueño, se le acosa

---

<sup>194</sup> Por ejemplo, el realizado por CHAMORRO, E. / BONNIN C. / LOBATO-RINCÓN, L. et. al. Los experimentos llevados a cabo demuestran que la exposición a la luz aumenta el porcentaje de muerte celular inducida por la luz para todas las fuentes de luz LED, especialmente en las células expuestas a luz azul y blanca. Los LEDs emiten luz blanca, pero con alto contenido de radiaciones de la banda del azul. “Riesgos personales producidos por LEDs utilizados en dispositivos de uso cotidiano”. *Seguridad y Medio Ambiente*. Año 32, núm. 128. Ed. Fundación Mapfre. Madrid, cuarto trimestre 2012, págs. 36-41.

<sup>195</sup> Vid. CALVO CHARRO, M. Manifiesta la necesidad de dotar a la materia de una Ley básica, en consonancia con la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y la oportunidad perdida de introducir medidas al respecto, con ocasión de la aprobación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, que deja fuera de su ámbito de aplicación a la contaminación lumínica. Voz “Contaminación lumínica”. En *Diccionario de Derecho Ambiental*, op. cit.; GÓMEZ LANZ, J. “Relevancia penal de las nuevas formas de contaminación atmosférica”. En AA.VV. *Nuevas formas de contaminación atmosférica. Un análisis jurídico multidisciplinar*. Ed. Dykinson / Universidad Pontificia Comillas. Madrid, 2010, págs. 149-190.

<sup>196</sup> Así, la STSJ de Valencia (Sala 3ª, Sección 1ª) núm. 820/2009, de 19 junio de 2009 [JUR 2009\376975], anulando una licencia de autorización de un cartel publicitario luminoso en un edificio, en relación al derecho a la intimidad familiar y domiciliaria; STSJ de Valencia (Sala 3ª, Sección 3ª) núm. 2089/2006, de 19 diciembre de 2006 [JUR 2007\116791], que anula un Acuerdo de Comisión de Gobierno municipal sobre la modificación de un contrato de alumbrado público por las graves molestias causadas a un vecino. Vid. SORIANO GARCÍA, J. E. / BRUFAO CURIEL, P. “Claves de Derecho Ambiental I”, op. cit., págs. 45 y 46.

físicamente sometién-dole de forma sorpresiva a focos de luz intensa y fuertes sonidos discordantes.<sup>197</sup>

En cuanto al paisaje, es primordial tener en cuenta este olvidado aspecto, así como el derecho de los hombres a disfrutar de él como parte integrante del derecho a un medio ambiente adecuado, aunque históricamente ha sido considerado como un elemento de carácter espiritual que ha ido cediendo su impronta a intereses económicos de países con inquietudes desarrollistas.<sup>198</sup> En sede penal, el aspecto paisajístico por sí mismo tampoco encuentra anclaje normativo; las únicas alusiones indirectas que podemos localizar, las encontramos en el art. 319.1, en relación a los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo<sup>199</sup>, o en el art. 330 del CP, relativo a los

---

<sup>197</sup> Art. 325 CP: <<Será castigado [...] el que [...] provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos en la atmósfera, el suelo, el subsuelo, o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta mar [...], así como las captaciones de aguas que puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales... >>. En relación a este tipo de tortura, vid. “Contra la tortura. Manual de acción”. Incluye en una de las Reglas Mínimas (11) la necesidad de dotar de una correcta iluminación artificial a las celdas, así como que las ventanas deberán ser suficientemente grandes para que el recluso pueda leer y trabajar con luz natural. Ed. Amnistía Internacional. Madrid, 2003, pág. 127; RUILOBA ALVARIÑO, J. *EL Convenio Europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes, de 26 de noviembre de 1987. Su aplicación en España*. Colección Ciencias Jurídicas y Sociales, núm. 23. Ed. Universidad Rey Juan Carlos / Dykinson. Madrid, 2005, pág. 119. Este tipo de tortura ha sido reproducida ampliamente por la literatura y el cine, y utilizada por ejemplo en interrogatorios policiales o en el ámbito carcelario. En relación a la tortura en España desde una visión histórica, vid., el excelente y sugerente ensayo de TOMÁS Y VALIENTE, F. *La tortura en España* (2ª ed.) Ed. Ariel. Barcelona, 1994. Vid. GARCÍA RODRÍGUEZ, A. Anota la capacidad homicida del ruido, empleada por los emperadores mongoles de la dinastía Liao (907-1125) para torturar a prisioneros de guerra de alto rango, obligándoles a permanecer bajo enormes campanas de bronce cuya continua percusión llegaba a producir la muerte. En “La Contaminación Acústica. Fuentes, Evaluación, Efectos y Control”, op. cit., pág. 15. Otro estudio más reciente acerca de la utilización del ruido como método de tortura hacia los prisioneros, concretamente en Guantánamo, al hilo de la guerra contra Irak en HIRSCH, L. E. Se resume en las palabras de uno de los afectados: <<Yo estaba irritado por la música alta, varias marchas, gritos de la gente, sonidos de animales, y todo esto presionando sobre la mente. No sentía mi propio cuerpo, al tocarme me di cuenta de que mi cuerpo estaba entumecido. Esto se llama tortura civilizada. Uno podría soportar los golpes físicos, pero no todo el mundo puede superar la tortura psicológica>>. *Music in American Crime Prevention and Punishment*. Ed. University of Michigan Press, 2012, págs. 110 y ss. Muy reciente es el fallo del TEDH en relación al conocido como Programa “High-Value” de detenidos. Al recurrente se le aplicaron técnicas que incluían, en grado ascendente de intensidad: las medidas estándar, entre las que se encuentran el sometimiento a ruido blanco o música fuerte (a un nivel de decibelios que no daña el oído: no excedía de 79 dB), y privación de sueño (72 horas) durante los interrogatorios. STEDH (Former Fourth Section, Application nº. 7511/13) *Case of Husayn (Abu Zubaydah) v. Poland*. Sentencia de 24 julio de 2014, versión final de 16 de febrero de 2015 [JUR 2014\198189].

<sup>198</sup> En este sentido, vid. LAGO CANDEIRA, A. Aborda las distintas formulaciones a la hora de tratar el paisaje, en relación a las numerosas disciplinas que intervienen en su estudio (historia, geografía, arquitectura, ingeniería, ordenación del territorio, etc.). Voz “Paisaje, Protección”. En *Diccionario de Derecho Ambiental*. Enrique Alonso García / Blanca Lozano Cutanda (dirs.) Ed. Iustel. Madrid, 2006, págs. 907-921.

<sup>199</sup> Art. 319.1: <<Se impondrán las penas de prisión de un año y seis meses a cuatro años [...] a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo obras [...] en lugares que tengan legal

espacios protegidos.<sup>200</sup> La tutela del paisaje en el ámbito del Derecho administrativo en nuestro país también ha sido fragmentaria, si bien desde hace décadas viene predicándose la importancia del componente paisajístico por un sector de la doctrina.<sup>201</sup>

No puede causar extrañeza por tanto, que la relación del ruido con el paisaje, en lugares especialmente protegidos, como Parques Naturales, se doten de normativas protectoras del ruido más restrictivas que las que afectan a las zonas o núcleos urbanos. De aquí se infiere que los hombres siempre han entendido bien la estrecha relación que une a estos tres factores (luz, paisaje y sonido).<sup>202</sup>

---

*o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o por los mismos motivos hayan sido considerados de especial protección>>. Vid. LAVILLA RUBIRA, J. J. / MENÉNDEZ ARIAS, M<sup>a</sup> J. Apuntan la intrínseca relación entre urbanismo y medio ambiente, teniendo en cuenta la importancia competencial de los municipios a la hora de usar los instrumentos de ordenación urbanística, que sin embargo se puede ver invadida por las potestades estatales y autonómicas en la materia. En *Todo sobre el medio ambiente*. Ed. Praxis. Barcelona, 1996, pág. 329; MORENO MOLINA, A. M. “El derecho al medioambiente y su traducción en el ámbito urbanístico”. En *El derecho a un medio ambiente adecuado*. Antonio Embid Irujo (dir.) Ed. Iustel. Madrid, 2008, págs. 87-128, en especial 121.*

<sup>200</sup> Art. 330: <<Quien, en un espacio natural protegido, dañare gravemente alguno de los elementos que hayan servido para calificarlo, incurrirá en la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses>>. Actualmente en España, existen 14 espacios protegidos que están catalogados con la denominación de Parque Nacional, siendo las Islas Canarias la comunidad que más parques nacionales presenta. El art. 27 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad nos ofrece la definición de espacio natural protegido: <<1. Tendrán la consideración de espacios naturales protegidos aquellos espacios del territorio nacional, incluidas las aguas continentales, y las aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción nacional, incluidas la zona económica exclusiva y la plataforma continental, que cumplan al menos uno de los requisitos siguientes y sean declarados como tales: a) Contener sistemas o elementos naturales representativos, singulares, frágiles, amenazados o de especial interés ecológico, científico, paisajístico, geológico o educativo. b) Estar dedicados especialmente a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, de la geodiversidad y de los recursos naturales y culturales asociados. 2. Los espacios naturales protegidos podrán abarcar en su perímetro ámbitos terrestres exclusivamente, simultáneamente terrestres y marinos, o exclusivamente marinos>>. Además, existen otras figuras de protección como las Reservas Naturales, Áreas Marinas Protegidas, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos (art. 29).

<sup>201</sup> Vid. MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, L. En la década de los 70 fue pionero en la creación de esta tendencia. “Problemas jurídicos de la tutela del paisaje”. En *Revista de Administración Pública*, núm. 70-72. Madrid, 1973, págs. 423-442. El Tribunal Constitucional no tuvo dudas en cuanto a la necesidad de incluir al paisaje dentro del complejo sistema ambiental. Así, STC 102/1995, de 26 de junio [RTC 1995\102]. <<Por otra parte, ligado a todo lo ya inventariado está el PAISAJE, noción estética, cuyos ingredientes son naturales -la tierra, la campiña, el valle, la sierra el mar- y culturales, históricos, con una referencia visual, el panorama o la vista, que a finales del pasado siglo obtiene la consideración de recurso, apreciado antes como tal por las aristocracias, generalizado hoy como bien colectivo, democratizado en suma y que, por ello, ha de incorporarse al concepto constitucional del medio ambiente como reflejan muchos de los Estatutos de Autonomía que luego se dirán>> (FJ 6). Vid. JIMÉNEZ SHAW, C. Resalta el impacto medioambiental que produce la instalación de plantas desaladoras de agua en el paisaje costero, que precisamente deben su ubicación en la mayor parte de casos, a la insuficiencia de terrenos no urbanizados en zonas de interior, ocupando espacios naturales dignos de protección. “Agua y desarrollo sostenible. trascendencia ambiental de la desalación”. En *Desarrollo sostenible y protección del medio ambiente* (1<sup>a</sup> ed.) José Luis Piñar Mañas (dir.) Ed. Civitas. Madrid, 2002, págs. 125-156, en especial pág. 137.

<sup>202</sup> Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (BOE núm. 299 de 14/12/2007). Contempla como infracciones <<La alteración de las condiciones de un espacio natural protegido o de los productos propios de él mediante ocupación, roturación, corta, arranque u otras acciones>>, o <<La instalación de carteles de publicidad o la producción de impactos paisajísticos

Sucede que de la protección de determinados entornos paisajísticos especialmente relevantes como bosques, playas, parques naturales y análogos lugares de singular belleza, en la actualidad, el paisaje se considera algo completamente íntegro, constituido no sólo por dichos elementos ambientales, sino por todo lo que el hombre puede captar con su vista, con independencia su ubicación (entorno rural, urbano, costero) y del tiempo cronológico (diurno o nocturno).<sup>203</sup>

El paisaje urbano, por ejemplo, es algo que varía durante el día, tarde, o noche y, por supuesto, a lo largo de generaciones y distintas planificaciones urbanísticas, tanto en conjuntos residenciales como en la remodelación de calles o vías públicas, edificios institucionales, parques y jardines, etc.<sup>204</sup>

---

*sensibles en los espacios naturales protegidos>>* [art. 76. 1. g) y h) respectivamente]. Deroga la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre (vigente hasta el 15 de diciembre de 2007), que en su art. 38.4 aludía directamente al concepto de ruido: <<*Sin perjuicio de lo que disponga al respecto la legislación autonómica que desarrolle estas normas de protección y las leyes reguladoras de determinados recursos naturales, se considerarán infracciones administrativas: 4. La emisión de ruidos que perturben la tranquilidad de las especies en espacios naturales protegidos>>*. Desafortunadamente, se ha optado por excluir esta redacción en la nueva normativa.

<sup>203</sup> Hay que tener en cuenta que la CE no menciona al paisaje dentro de los derechos reconocidos en el art. 45, aunque el Tribunal Constitucional ha ido corrigiendo dicha laguna. *Vid.* CALVO CHARRO, M. “El derecho a un cielo oscuro. Prevención y corrección de la contaminación lumínica”. En *Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid*, núm. 23. diciembre, 2010. Ed. Asamblea de Madrid, 2011, págs. 199-221. Sin embargo, algunos textos constitucionales de países de nuestro entorno, sí lo incluyen, como es el caso de Italia (Constitución de 1947, art. 9: <<*La Republica promoverá el desarrollo de la cultura y la investigación científica y técnica. Salvaguardará el paisaje y el patrimonio histórico y artístico de la Nación>>*), o Alemania (Ley Fundamental de Bonn de 1949, art. 74 sobre la legislación concurrente de la Federación y los Länder, apartado 29: <<*la protección de la naturaleza y el cuidado del paisaje>>*.) Sin embargo, la mayoría de constituciones americanas no mencionan el término, incluso una de las más recientes, la Constitución de Ecuador, de 2008, que instituye unos inusuales derechos propios de la naturaleza en el Capítulo VII, art. 71: <<*La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos>>* o art. 72: <<*La naturaleza tiene derecho a la restauración>>*, elude el término quizá por meras razones terminológicas, si bien podemos entender que se encuentra incluido, debido al alto grado de pormenorización en su redacción. Del mismo modo, la interpretación se puede hacer extensiva a la Constitución de Venezuela, de 1999, que dedica todo un Capítulo a los Derechos Ambientales y que en su art. 127 proclama que: <<*El Estado protegerá [...] los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica>>*.

<sup>204</sup> Es en el mundo anglosajón donde se localizan los antecedentes más lejanos, sobre todo a través de la llamada arqueología del paisaje. *Vid.* FURIÓ, A. “La domesticación del medio natural. Agricultura, ecología y economía en el País Valenciano en la Baja Edad Media”. En *El medio natural en la España medieval*. Actas del I Congreso sobre ecohistoria e historia medieval. Julián Clemente Ramos (ed.) Ed. Universidad de Extremadura. Cáceres, 2001, págs. 57-103; SORIANO GARCÍA, J. E. / BRUFAO CURIEL, P. “Claves de Derecho Ambiental I”, op. cit., pág. 189. *Vid.* CHERULNIK, P. D. Cita aspectos muy interesantes sobre la relación entre los paisajes de parques y plazas en los centros urbanos y la percepción que despiertan en los entrevistados. Revelan por ejemplo, que la integración en el ornato de un parque de una cascada de agua produce en los visitantes un efecto de ruido blanco (*white noise*) respecto del ruido propio que se produce fuera del recinto, en la ciudad, facilitando las conversaciones privadas que la gente desea mantener. La investigación se nutre del examen de diferentes aspectos en



Asimismo, existe un añadido novedoso y de última incorporación, se trata de la inclusión de los denominados “parques eólicos” o “molinos de viento” para la producción de energía eólica, dentro de la política actual de desarrollo energético sostenible. Inundan grandes áreas espaciales de forma discontinua al paso de numerosas comunidades autónomas españolas, y resultan visibles desde un amplísimo campo de espacio.<sup>205</sup> Un gran número de Comunidades Autónomas han llevado a cabo los desarrollos normativos necesarios para la instalación de dichos parques eólicos, con independencia de que algunas de ellas tengan las instalaciones actualmente finalizadas y a pleno rendimiento.<sup>206</sup>

---

diversos parques y plazas, pero en especial se centra en “Greenacre Park”, situado en la isla de Manhattan (New York), incluyendo la localización del sitio, los diferentes niveles o pisos de construcción, los accesos, la ubicación de los asientos, las especies de plantas que forman parte del entorno, la gestión del lugar, etc. En “Applications of environment-behavior. Case studies and analysis”, op. cit., págs. 159-163. No podemos olvidar aquí la trascendencia de la planificación lineal como modelo de ciudad ideada por Arturo Soria y Mata. Vid. SORIA, A. “Arturo Soria y la Ciudad Lineal”. Para el urbanista y filósofo, que fundó la Ciudad Lineal de Madrid en 1890, y que mantuvo correspondencia con el biólogo alemán Ernst Haeckel [creador del término “ecología” (citado en nota 1)], el ideal de ciudad se basaba en líneas geométricas regulares, determinadas por líneas perpendiculares en torno a la vía férrea de la calle principal y la importancia de dotar a las viviendas de jardines: <<... *Es menester que cada familia tenga su hogar completamente separado de los demás; un pedazo de terreno, por pequeño que sea, exclusivamente suyo, su parte de sol y de aire*>>. Respecto a la importancia de la vegetación en los entornos urbanos, dice: <<Póngase en el centro de esta inmensa cinta [...] estanques, jardines, y de trecho en trecho, pequeños edificios para los diferentes servicios municipales, de incendios, de sanidad, seguridad y otros, y quedarán resueltos de una vez casi todos los complejos problemas que engendra la vida urbana de grandes masas de población>> o <<Allí repiten ecos misteriosos los acentos inspirados de “Las Geórgicas” de Virgilio. De allí parte el impulso que engendra los jardines municipales en plazas y paseos y los grandes parques, y que andando el tiempo infundirá en todas las almas el menosprecio de la vida urbana y el deseo de armonizar las dulzuras de la vida del campo con las ventajas innegables de las grandes masas de población>>. Estos textos forman parte de diversos artículos que Arturo Soria publicó entre 1882 y 1883 en el periódico del partido Progresista Democrático “El Progreso”. George R. Collins / Carlos Flores (dirs.) Ed. Revista de Occidente. Madrid, 1968. págs. 159, 190 y 191. Vid. MARTÍN SÁNCHEZ, M<sup>a</sup> J. Igualmente, la literatura se ha nutrido del paisaje como inspiración y como modelo para realizar una crónica de la sociedad en cada época. Así, el novelista Pérez Galdós, contemporáneo de Arturo Soria, alude de forma insistente a lo largo de su obra a distintos tipos de paisaje. Todo ello debido al interés por el cuidado de las zonas verdes que se desarrolló en el siglo XIX. “Paisaje de fondo o paisaje pleno: los paisajes y jardines del Madrid galdosiano”. En *Espacio, Tiempo y Forma* (Serie VII, H<sup>a</sup> del Arte, t. 11) Ed. UNED. Madrid, 1998, págs. 397-425.

<sup>205</sup> Los parques eólicos, tanto terrestres como marinos, se componen de una serie de aerogeneradores que captan la energía cinética del viento para su transformación en energía eléctrica. Actualmente, las Comunidades Autónomas que cuentan con instalaciones de parques eólicos terrestres en funcionamiento en España son: Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Cantabria, Cataluña, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, Murcia, Navarra, País Vasco y Castilla-La Mancha, que cuenta con uno de los más importantes; el más grande de Europa, situado en el término municipal de Higuera (Albacete). Si bien es apropiado destacar que los parques eólicos están diezmado a las grandes aves, especialmente a los buitres, porque no tienen capacidad de reacción cuando divisan los aparatos (los aerogeneradores actúan como una guillotina cuando se aproximan a sus aspas), ya existen patentes de generadores eólicos sin aspas, aunque se prevé que la implantación de los mismos no será efectiva de manera inmediata. Se trata de aerogeneradores piezoeléctricos por verticidad; a partir de la fuerza del viento, consiguen la deformación periódica del material piezoeléctrico, generando así energía eléctrica.

<sup>206</sup> Vid. DELGADO PIQUERAS, F. / GARRIDO CUENCA, N. En relación al Decreto 58/1999, que regula el aprovechamiento de la energía eólica en Castilla-La Mancha, y que se dictó al amparo del art. 31.27 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, éste ha recibido críticas: <<En realidad, esos

En lo referente a la alteración paisajística que provocan, cabe mencionar el *Estudio Estratégico Ambiental del litoral español para la instalación de parques eólicos marinos*, que establece la prohibición de este tipo de instalaciones en una banda de 8 kilómetros paralela a la línea de costa, en base al impacto visual que producen los aerogeneradores desde la línea visual marítimo-costera. Cuestión distinta son los problemas que puede suscitar la explotación de energía eólica marina, desde la perspectiva de la protección del medio ambiente, que se enfrenta a los beneficios que genera en aspectos de producción y rendimiento.<sup>207</sup>

Aquí confluye nítidamente el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un paisaje sin agresiones (ya sean justificadas o injustificadas), así como el deber de protección al medio ambiente, con la necesidad de buscar alternativas viables a la penosa y agotada producción energética tradicional.<sup>208</sup>

Otro aspecto que fusiona esta nueva forma de producción energética con el paisaje y la contaminación lumínica es que las instalaciones de parques eólicos influyen de manera singular en la iluminación de las poblaciones adyacentes; sus estructuras emiten destellos de luz blanca cada tres segundos. Francia intenta mitigar este efecto incorporando a su regulación la obligación de sustituir la luz blanca por luz roja en periodo nocturno, para evitar en la medida de lo posible las molestias generadas a los residentes. El principal obstáculo para la inclusión de dichos efectos en la normativa relativa a la contaminación lumínica en nuestro país y, por consiguiente, su

---

*resultados no obedecen al decreto autonómico, sino a la abundancia natural de recursos eólicos en la Región y al régimen retributivo especial del que gozan las energías renovables en virtud de la normativa estatal (RRDD 2818/1998, 436/2004 y, en la actualidad, RD 661/2007) y comunitaria (Directiva 77/2001/CE, sobre promoción de la “electricidad verde”). Muchos de esos aerogeneradores se instalaron y/o autorizaron antes del Decreto 58/1999, de común acuerdo entre propietarios de terrenos y promotores, sin conflictos>>.* “El régimen de aprovechamiento de la energía eólica en Castilla-La Mancha”. En *Medio Ambiente y Derecho. Revista electrónica de Derecho Ambiental*, núm. 21, junio 2010. Disponible en: <http://huespedes.cica.es/aliens/gimadus/>

<sup>207</sup> Resolución conjunta de 16 de abril de 2009, de la Secretaría General de Energía y de la Secretaría General del Mar, por la que se aprueba el estudio estratégico ambiental del litoral español para la instalación de parques eólicos marinos. BOE núm. 112, viernes 8 de mayo de 2009. Sec. III, pág. 39839. España todavía no cuenta con ningún parque eólico marino en pleno funcionamiento, aunque existen 32 proyectos (mapas estratégicos con las zonificaciones apropiadas que podrían albergarlos, de los que 18 se instalarían en Andalucía). En particular, sobre el desarrollo jurídico de este tipo de instalaciones, *vid.* SATKAUSKAS, R. “Los aspectos jurídico-ambientales de la construcción de las instalaciones eólicas en el mar”. En *Medio Ambiente y Derecho. Revista electrónica de Derecho Ambiental*, núm. 12-13, diciembre 2005. Disponible en: <http://huespedes.cica.es/gimadus/>

<sup>208</sup> Cabe asimismo mencionar las alteraciones paisajísticas provocadas por los invernaderos de producción agrícola que inundan algunas provincias, así como las nuevas plantaciones de producción de alimentos transgénicos (alimentos modificados mediante la adición de genes exógenos para lograr nuevas propiedades), o los centros comerciales y zonas industriales localizados en las inmediaciones de la gran mayoría de poblaciones que cuentan con un nivel intermedio de habitantes.

regulación pormenorizada, es que ésta se encuentra vinculada preceptivamente a la de las servidumbres aeronáuticas, según el Decreto 584/1972, de 24 de febrero.<sup>209</sup>

El urbanismo y la enorme inferencia que éste ha supuesto para el paisaje es otro hecho irrefutable, presente en nuestro país desde hace décadas.<sup>210</sup> También es cierto que en los últimos tiempos se han dictado sentencias que intentan “deshacer” el desequilibrio producido, pero la tarea es ardua y complicada porque no siempre será posible restablecer las cosas al orden existente anterior a la edificación, bien por cuestiones de pura ejecución o porque el ecosistema no cuenta con recursos para ello, con independencia del tiempo que se deje transcurrir, aún con el anhelo más o menos fundado de su regeneración natural o inherente.<sup>211</sup>

---

<sup>209</sup> El art. 8 considera que los obstáculos que superen una altura de 100 metros sobre planicies o partes prominentes del terreno o nivel del mar dentro de las aguas jurisdiccionales (en todo el territorio nacional fuera de la proximidad de aeródromos), deberán ser comunicadas para adoptar las medidas oportunas, que generalmente consisten en su señalamiento e iluminación, para garantizar la seguridad de la navegación aérea, por lo que este aspecto no se refleja convenientemente en las evaluaciones de impacto ambiental previas a la autorización de la instalación de parques eólicos. *Vid.* LÓPEZ SAKO, M. J. En “Algunos problemas de la regulación de la contaminación lumínica”, op. cit., págs. 606-608.

<sup>210</sup> Respecto a la incorporación del aspecto paisajístico en la planificación urbanística, *vid.* JORDANO FRAGA, J., que alude a disposiciones previstas por la Ley del suelo de 12 de mayo de 1956, cuyo art. 60 disponía: <<a) Las construcciones en lugares inmediatos o que formaren parte de un grupo de edificios de carácter artístico, histórico, arqueológico, típico o tradicional, habrán de armonizar con el mismo. c) En las carreteras y caminos de trayecto pintoresco no se permitirá que la situación, masa, altura de los edificios o de sus muros y cierres limiten excesivamente el campo visual para contemplar las bellezas del paisaje natural o rompan su armonía>>. En “La protección del derecho a un medio ambiente adecuado”, op. cit. pág. 50. *Vid.* FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C. Se refiere a la actuación sectorial de la estética del paisaje desde el urbanismo, a su ineficacia y dispersión, que además da lugar a una arbitrariedad administrativa en la afectación de elementos paisajísticos fundamentales: En “Algunas consideraciones sobre el actual panorama del paisaje urbano en nuestro ordenamiento: desde su originaria y exclusiva protección por el ordenamiento urbanístico al incipiente ordenamiento paisajístico”, op. cit., pág. 198.

<sup>211</sup> Así, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª), de 21 de marzo de 2012 [RJ 2012\4458]. Desestima el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) contra la SAN (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª), de 23 de enero de 2008 [JUR\2008\44414]. Versa sobre el hecho de mantener el deslinde de cien metros desde la línea de costa en el paraje denominado “El Algarrobico”, frente a los 50 metros defendidos por el Consistorio. En la práctica, esto supone que declara ilegal el polémico hotel, que desde 2002 se encuentra paralizado, ya que el TS rechaza los cuatro motivos de casación invocados por el Ayuntamiento. Sin embargo, es la sentencia sobre la legalidad o ilegalidad de la licencia de obra la que determinará finalmente si será o no demolido. El seguimiento de dicha actuación urbanística ha enfrentado a distintas Administraciones públicas entre sí (Ayuntamiento de Carboneras y Junta de Andalucía), así como a grupos sociales, desde los contrarios a su edificación (Asociación Salvemos Mojácar y el Levante Almeriense, Greenpeace España) como a la población de Carboneras, que ve en el proyecto una fuerte suma de ingresos y provisión de puestos de trabajo en la localidad. Aunque la cuestión paisajística no se expresa directamente en dichas decisiones judiciales, en la práctica es fundamental, puesto que se ubica en un enclave carente de edificaciones y situado en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, de indudable singularidad y belleza; aún así lo único cierto es que la gran masa de cemento impera en la percepción visual de su entorno desde hace más de una década, sin que se atisbe una solución rápida aunque se ordene su demolición, porque no se ha estudiado con detenimiento el coste ambiental que ocasionaría una demolición total del complejo. Con posterioridad, la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª), de 18 de julio de 2012. [RJ\2012\8660], declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la mercantil promotora del hotel contra la Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo

Lo particular en este campo es cómo emplear los criterios paisajísticos por parte de las distintas Administraciones Públicas implicadas, ya que podemos analizar y estudiar características propias en cada uno de los diferentes paisajes: urbanos, rurales, agrarios, forestales, costeros, arqueológicos, industriales, culturales, de carácter histórico, turísticos, portuarios, acuáticos, fluviales, publicitarios, ferroviarios, etc.<sup>212</sup>

A cada uno de ellos le sigue una clasificación urbanística que incide de forma determinante en la valoración lumínica que se les otorga. De ahí que la iluminación se encuentre en perfecta consonancia con el paraje de que se trate y que la dispersión normativa sea tan acusada, ya que no existe un cuerpo legal unificado ni un régimen básico para esta singular forma de contaminación, al igual que ocurre con el fenómeno paisajístico.<sup>213</sup>

---

Contencioso-Administrativo, Sección 1ª), de 5 de diciembre de 2008 [JUR 2009\8524], que a su vez desestimó el recurso contra la Orden del Ministerio de Medio Ambiente de 8 de noviembre de 2005, que aprobaba el deslinde de los bienes de dominio público marítimo terrestre en el tramo de costa sito en el término municipal de Mojácar. También declara improcedente la indemnización solicitada por la empresa, que alegaba responsabilidad patrimonial del Estado.

<sup>212</sup> Con razón afirma ROGER, A., que <<cada paisaje tiene su lenguaje>>. En *Breve tratado del paisaje*. Maysi Veuthey (tr.) Javier Maderuelo (ed. lit.) Ed. Biblioteca Nueva. Madrid, 2007, pág. 109. Vid. SORIANO GARCÍA, J. E. / BRUFAO CURIEL, P. Se refieren a la profunda indeterminación del concepto jurídico de paisaje que, unido a las distintivas técnicas de actuación pública y privada y las tendencias estéticas, hacen sumamente difícil su ordenación. En “Claves de Derecho Ambiental I”, op. cit., págs. 188-192. Vid. CANO CAMPOS, T., en relación al impacto visual que produce el tráfico urbano, con consecuencias degradantes en la estética de las ciudades, así como al ruido que genera. En “El régimen jurídico-administrativo del tráfico. Bases históricas y constitucionales, técnicas de intervención y sanciones”, op. cit., pág. 391. Vid. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C. Una excelente exposición de la protección paisajística sectorial en *La protección del paisaje. Un estudio de Derecho español y comparado*. Ed. Marcial Pons. Madrid, 2007, págs. 167 y ss. Vid. PEÑA CHACÓN, M. Distingue dos elementos en el paisaje: uno natural y otro cultural, que se pueden encontrar separados, o bien yuxtapuestos en un mismo espacio físico. “La tutela jurídica del paisaje”. En *Medio Ambiente y Derecho. Revista electrónica de derecho ambiental*. núm. 12-13, 2005. Disponible en: <http://huespedes.cica.es/aliens/gimadus/> Vid. FERRER JIMÉNEZ, D. / SANTA CECILIA MATEOS, F. <<La singularidad es el rasgo más característico de cada paisaje [...] su configuración y funcionamiento son el resultado de las relaciones históricas y actuales entre las comunidades locales y el aprovechamiento de los recursos del territorio>>. En *Lectura del Paisaje de la Comarca Alto Guadarrama-Alto Manzanares: Un Legado Histórico*. Ed. Adesgam. Madrid, 2005, pág. 48.

<sup>213</sup> Vid. CALVO CHARRO, M. Opina que, al ser el Derecho ambiental tan polivalente y evolutivo, el paisaje forma parte del concepto de medio ambiente y por tanto <<... deja abierta la puerta a la inclusión en tal concepto del paisaje nocturno: las estrellas, los planetas, los astros>>. Además, considera ocioso el debate relativo a que dentro de los recursos naturales que sean susceptibles de aprovechamiento o de los que se puedan extraer rendimientos o satisfacciones no se deba incluir la observación de los astros. <<Pero, ¿acaso no genera satisfacción –científica y personal– la observación de los cuerpos celestes?>>. En “El Derecho a ver las estrellas. Análisis de la contaminación lumínica desde una perspectiva jurídica”, op. cit., págs. 137 y ss. Vid. ENTRENA RUIZ, D. Alude a las conexiones diversificadas de este tipo de contaminación, que se corresponden con los lugares a los que alcanza; por ello es lógica la dispersión normativa, aunque nada deseable de cara a una efectiva protección, limitada precisamente por la inexistencia de un régimen jurídico básico y unitario. En “La prevención contra la contaminación lumínica mediante la ordenación del territorio y urbanismo”, op. cit., pág. 21. Peligrosa forma de utilización de la luz como foco de deslumbramiento es la que desde hace meses viene sucediendo en las proximidades de las pistas de aterrizaje del aeropuerto barcelonés de El Prat. Los pilotos denuncian el uso de punteros láser desde la playa de la localidad, muy próxima a la

La proliferación de normativa tangencial que recae en distintos sectores dificulta enormemente una protección en términos de igualdad, que debería ser traducida en que los ciudadanos puedan conocer con exactitud las conductas que desembocan en una sanción de carácter administrativo o penal, y, dentro de las primeras, según la competencia sea estatal, autonómica o local, la graduación de las sanciones entorpece que éstas posean la homogeneidad, proporcionalidad y equilibrio que cabría esperar.<sup>214</sup>

Autores como FORMAN, considerado el padre de la ecología del paisaje -*landscape ecology*-<sup>215</sup> y de las carreteras ecológicas -*road ecology*- aseguran que no basta con una visión y actuación parcial, sino que es necesaria una teoría unitaria en la que todas las partes se integren de forma globalizada, puesto que <<Los cambios en los paisajes son tanto un producto de las influencias humanas como de los procesos naturales>>.<sup>216</sup>

---

zona aeroportuaria, con el consiguiente peligro para la navegación aérea cuando se producen aterrizajes nocturnos, ante lo que el Ayuntamiento ha incluido en la Ordenanza del uso de playas una sanción específica de carácter grave de 1.500,01 hasta 3000€ para quienes realicen esta práctica. <<Art. 20. Emisiones lumínicas. Se prohíbe la emisión de cualquier señal lumínica con puntos de luz, punteros láser u objetos análogos que puedan alterar o estorbar la navegación aérea, desde cualquiera de los espacios comprendidos dentro del objeto de esta Ordenanza>> DOGC, núm. 6162, de 3 de julio de 2012, pág. 34392.

<sup>214</sup> Por ejemplo, el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por RDL<sup>eg</sup> 339/90 de 2 de marzo, contempla al menos tres supuestos en los que se podría subsumir la conducta de alterar las condiciones generales de la circulación a través de la luz, considerándose infracciones leves, sancionadas con multa de 100€ arts. 9.1, 10.2 y 58.3. Aunque hay que subrayar que también el Derecho penal actúa, ya que sería de perfecta aplicación la Ley 209/1964, de 24 de diciembre, de Navegación Aérea, dentro de su Título III “De las Faltas”, Capítulo I “Faltas contra la policía y seguridad de la navegación aérea”, art. 66: <<Serán castigados con arresto que no exceda de 30 días y multa hasta 2.500 pesetas: 4º Los que enciendan luces, fuegos, emitan señales radioeléctricas o de cualquier otra clase que puedan inducir a error en la navegación aérea, si de ello no se deriva ningún daño>>. Según la Disposición Transitoria Undécima, apartados i) j), de la LO 10/1995, de 23 de noviembre, se sustituye la pena de arresto menor por la de arresto de uno a seis fines de semana y la pena de multa establecida para hechos definidos como falta, por la multa de uno a sesenta días, respectivamente. El problema se puede desviar a otras formas de deslumbramiento que, bien desde la perspectiva de un simple juego o bien como forma delictiva dolosa son perfectamente viables. Como ejemplo, la misma conducta antes descrita pero proyectada exclusivamente en la circulación por carreteras, se encuentra tipificada en el CP, dentro del Título XVII, Capítulo IV “De los delitos contra la seguridad vial”, cuyo art. 385 prevé la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a veinticuatro meses y trabajos en beneficio de la comunidad de diez a cuarenta días para el que <<originare un grave riesgo para la circulación de alguna de las siguientes formas: 1ª Colocando en la vía obstáculos imprevisibles, derramando sustancias deslizantes o inflamables o mutando, sustrayendo o anulando la señalización o por cualquier otro medio>>.

<sup>215</sup> Cfr. ROGER, A. El término, antes de impregnar el pensamiento de autores de países del Este y del mundo anglosajón, aparece en la obra del biogeógrafo alemán Carl Troll, de 1939 (*Landschaftsökologie*), que posteriormente tradujo por Geoecología. En “Breve tratado del paisaje”, op. cit., pág. 137.

<sup>216</sup> Vid. FORMAN, R. T. / GODRON, M. *Landscape Ecology*. Ed. Woodbine, Inc. New York, 1986, pág. 310; FORMAN, R. T. / SPERLING, D. et al., en relación a la importancia del tráfico rodado en las modificaciones paisajísticas y los retos que se plantean de cara al futuro, apostando por soluciones que puedan disminuir la emisión de gases de efecto invernadero o los costes de mantenimiento de las carreteras, como la utilización de vehículos eléctricos que circulen por redes de raíles elevados sobre el suelo a unos metros y que conecten las ciudades (*netway system*), con lo que se aprovecharían los

Otros como ROGER, sostienen que sería erróneo afirmar que el paisaje forma parte del medio ambiente, aunque parezca sensato a primera vista, ya que éste no es susceptible de tratamiento científico, sino estético; se ha producido una transferencia de valores ecológicos al término que no le conciernen, porque éste nace de una operación perceptiva, cultural si cabe, pero nunca de condiciones naturales.<sup>217</sup>

El paisaje urbano también se coordina e interactúa con los conflictos sociales y los índices de criminalidad en determinados espacios, ya que existe una larga tradición en la búsqueda de relaciones entre la organización del territorio y la intervención que se produce en la conducta ciudadana a través de la morfología de las ciudades, en aspectos concretos como el trazado de calles, sistemas de iluminación, vigilancia, distribución de áreas urbanas, etc., que importa y mucho, a la disciplina de la Criminología desde mediados del siglo XIX.<sup>218</sup>

Por tanto, el paisaje constituye una amalgama de aspectos pluridireccionales que convierten a su protección jurídica en una suerte de derechos sectoriales (distribuidos por materias específicas como el urbanismo, el medio ambiente, las infraestructuras públicas, etc.), en la que intervienen las diferentes competencias legislativas (internacionales, estatales, autonómicas y locales), ya que no existe un derecho al paisaje concebido de manera integral, circunstancia ésta que complica aún más la concreción doctrinal del término “paisaje” y el hallazgo de la fórmula que pueda ofrecer una tutela superior.<sup>219</sup>

---

terrenos que ahora ocupan las carreteras. En *Road Ecology. Science and Solutions*. Ed. Island Press. Washington, 2003.

<sup>217</sup> Vid. ROGER, A. <<Y me plantaré en mi postura en tanto no se haya demostrado que es posible una ciencia de lo bello, que esto último es cuantificable y que existe una unidad de medida estética, o cualquier otro patrón, análoga al decibelio del ruido ambiental>>. En “Breve tratado del paisaje”, op. cit., págs. 142 y 143.

<sup>218</sup> Vid. GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A., que realiza un exhaustivo examen de las denominadas teorías ambientales, herederas de la sociología urbana y la ecología social ideadas por la escuela de Chicago, que resaltó la trascendencia etiológica del factor ambiental en la criminalidad. En *Tratado de Criminología* (5ª ed. actualizada, corregida y aumentada) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2014, págs. 746 y ss. Vid. FRAILE PÉREZ DE MENDIGUREN, P. En relación al proceso histórico del vínculo entre espacio y disciplina, menciona que: <<Ya desde finales del siglo XVII y principios del siguiente, quienes se ocupaban de la administración de las ciudades fueron poniendo en marcha una reflexión específica sobre estos temas, que progresivamente se fue consolidando y dio lugar a un discurso bastante coherente que, en el ámbito del Mediterráneo, se conoció con el nombre de Ciencia de Policía, algo muy próximo a lo que en los países germánicos se denominaba cameralismo, y que alcanzó un grado de institucionalización considerable>>. “El paisaje urbano y el conflicto”. En *Paisaje ciudadano, delito y percepción de la seguridad. Investigación interdisciplinaria del medio urbano*. Pedro Fraile, Quim Bonastra et. al. (eds.) Ed. Dykinson. Madrid, 2006, págs. 19-25.

<sup>219</sup> Vid. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T-R. Considera excesiva la creación de nuevas figuras de planeamiento, por ejemplo las concebidas para adecuar la Ley catalana de 8 de junio de 2005, de

La protección paisajística sectorial, cuya competencia puede recaer tanto en el Estado como en las Comunidades Autónomas, se expande hacia una multiplicidad y disparidad de ámbitos, como el paisaje costero, el de las vías de comunicación, el pecuario, ferroviario, histórico-cultural, minero, portuario, industrial, agrícola, urbanizado, montes, acuático, turístico, publicitario, el referido a infraestructuras y telecomunicaciones, o el protegido.<sup>220</sup>

---

Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje (DOGC 16.06.2005), desarrollada a través del Decreto 343/2006, de 19 de septiembre, en la que se citan algunas como Directrices del paisaje (art. 12), Catálogos del paisaje (art. 10), Cartas del paisaje (art. 14), o los Estudios e Informes de Impacto e Integración paisajística. Además, el autor considera “metafísica” la definición de paisaje que se maneja en dicha ley: <<Art. 3: Se entiende por paisaje, a los efectos de la presente Ley, cualquier parte del territorio, tal y como la colectividad lo percibe, cuyo carácter resulta de la acción de factores naturales o humanos y de sus interrelaciones>>. En *Manual de derecho urbanístico* (22ª ed.) Ed. La Ley. Madrid, 2011, pág. 80. Se adopta en el texto la terminología internacional recogida en el art. 1 a) del Convenio Europeo del Paisaje, aprobado por el Consejo de Europa en Florencia, el 20 de octubre de 2000 y ratificado por España el 26 de noviembre de 2007.

<sup>220</sup> Las referencias son, en la mayor parte de estas normativas estatales, tangenciales e indirectas. Así, la Ley 22/1998, de 28 de julio, de Costas prohíbe, por ejemplo, la publicidad mediante carteles o vallas o por medios acústicos o audiovisuales (art. 38, modificado por el art. 13 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.), pero no se encuentran disposiciones alusivas al paisaje como objeto de protección más allá del objeto y finalidad de la ley, expresada en el art. 2: <<La actuación administrativa sobre el dominio público marítimo-terrestre perseguirá los siguientes fines [...] c) Regular la utilización racional de estos bienes en términos acordes con su naturaleza, sus fines y con el respeto al paisaje, al medio ambiente y al patrimonio histórico>>, aún siendo este tipo de paisaje uno de los más dañados en nuestro país. La Ley 25/1998, de 29 de julio, de Carreteras prevé que los proyectos de autopistas, autovías y carreteras de nuevo trazado deberán contar con la evaluación de impacto ambiental, de acuerdo con la normativa aplicable al efecto (art.9). La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias se refiere de forma explícita al paisaje como elemento a respetar en el mantenimiento y conservación de las mismas, si se destinan a otros fines diferentes pero compatibles con los usos propios (art. 1). En la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, existe una referencia al paisaje en relación al entorno ferroviario, pero no en cuanto a su protección: el art. 15.1, párrafo 2º expresa que: <<Cualesquiera obras que se lleven a cabo en la zona de dominio público y en la zona de protección y que tengan por finalidad salvaguardar paisajes o construcciones o limitar el ruido que provoca el tránsito por las líneas ferroviarias, serán costeadas por los promotores de las mismas>>. La Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español remite a la protección del paisaje como expresión del valor o interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico (art.1). La Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, pese a regular una actividad que entraña una incidencia directa en el paisaje, no contempla previsión alguna al respecto, pero sí se refiere al mismo el RD 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración de espacio natural afectado por actividades mineras, previendo la restauración de lo destruido o deteriorado a través del Plan de Restauración (art.3). Desde un plano estrictamente ambiental, el paisaje protegido ahora se encuentra dentro de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (art. 34), que deroga la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. El paisaje portuario tampoco encuentra consagración en la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, en la que tan solo se exige la declaración de impacto ambiental de acuerdo con la legislación aplicable en cuanto a la construcción de nuevos puertos (art. 20.2). Otro de los vacíos legislativos es el que atañe al paisaje industrial, que no encuentra en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, ningún apoyo normativo. La Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, se refiere al paisaje pero en cuanto a planificación ambiental, de acuerdo con la legislación correspondiente (art. 19). En materia urbanística, el RDLeg 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el TR de la Ley del Suelo contempla el paisaje como un aspecto del desarrollo sostenible a tener en cuenta por las políticas públicas [art. 2.2 a)], como un derecho-deber del ciudadano [arts. 4. a) y 5. a) respectivamente], y como aspecto específico de los criterios básicos de utilización del suelo en el art. 10.2. La Ley

Aunque España ratificó el Convenio Europeo del Paisaje, es el nivel autonómico el dominio donde se han realizado los esfuerzos más notables para adecuar las normativas integrales sobre el paisaje, y respecto a la legislación de ámbito local, también existen algunas Ordenanzas en relación al paisaje urbano de ciudades como Madrid y Barcelona, así como a emisiones sonoras o elementos publicitarios en las playas, con la finalidad de mantener el equilibrio natural en estos espacios.<sup>221</sup>

---

43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, es la que más protege el paisaje en nuestro ordenamiento, entendiéndolo en un sentido amplio y no por motivos de especial protección de carácter natural o histórico. El turismo es otro de los aspectos en los que no existe regulación paisajística a nivel estatal, pero sin embargo, comunidades autónomas como Murcia, Asturias, Canarias o Valencia cuentan con leyes turísticas autonómicas que lo integran en mayor o menor medida. En el caso de la afectación del paisaje por las obras de infraestructuras, el anclaje del paisaje es mínimo, lo habitual es recurrir a la autorregulación. En cuanto al sector de las telecomunicaciones, el RD 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. Aunque no menciona el “paisaje”, al menos limita la instalación de sistemas individuales de servicios de telecomunicaciones. La Ley 34/1988, General de Publicidad de 11 de noviembre, tampoco se refiere al fenómeno paisajístico que puede resultar alterado por la publicidad exterior, sino que su protección la encontramos en legislaciones supletorias, y, sobre todo, en las Ordenanzas Municipales de nueva generación. Vid. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C. “La protección del paisaje. Un estudio de Derecho español y comparado”, op. cit., págs. 167-241; HERVÁS MÁS, J., califica esta regulación normativa de <<aluvión legislativo>> y <<dispersa de forma anárquica>>. En *Ordenación del territorio, urbanismo y protección del paisaje*. Ed. Bosch. Barcelona, 2009, págs. 68 y ss. También hay que citar la reciente Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados; se refiere al paisaje y de forma conjunta al ruido en el art. 7.1, que trata de la protección de la salud humana y el medio ambiente: <<Las autoridades competentes adoptarán las medidas necesarias para asegurar que la gestión de los residuos se realice sin poner en peligro la salud humana y sin dañar al medio ambiente y, en particular: a) No generarán riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna y la flora; b) no causarán incomodidades por el ruido o los olores; y c) no atentarán adversamente a paisajes ni a lugares de especial interés legalmente protegidos>>.

<sup>221</sup> El Convenio Europeo del Paisaje es el primer tratado a nivel europeo especializado en la protección del paisaje, hecho en Florencia el 20 de octubre de 2000. España lo ratificó el 3 de noviembre de 2007, en vigor desde el 1 de marzo de 2008. Un estudio de la protección otorgada por dicho instrumento y sus precedentes internacionales en HERVÁS MÁS, J. “Ordenación del territorio, urbanismo y protección del paisaje”, op. cit., págs. 54-59; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C. En “La protección del paisaje. Un estudio de Derecho español y comparado”, op. cit., págs. 79-87. A nivel autonómico, la Comunidad Valenciana es la pionera del modelo de protección del paisaje a través de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje; le sigue la Comunidad Catalana con la Ley 8/2005, de 8 de junio, de protección, gestión y ordenación del paisaje, que adopta un sistema más simple que la ley valenciana, sin instrumentos específicos de planificación paisajística; la Comunidad Gallega promulgó la Ley 7/2008, de 7 de julio, de protección del paisaje de Galicia; el País Vasco se suma a esta tendencia con el Proyecto de Ley del Paisaje de Euskadi, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno del 24 de enero de 2012. En el ámbito local, bajo el paraguas competencial de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local [art. 25.2 d), e) y f)] cabe resaltar la Ordenanza de Usos del Paisaje Urbano de la ciudad de Barcelona, de 1999 [BOP Barcelona, núm. 146] y la Ordenanza de Protección del Paisaje Urbano de Madrid, de 2001 [BOP Madrid, núm. 164]. En relación a las emisiones sonoras y elementos publicitarios en las playas, arts. 19 y 21 de la Ordenanza de Uso de las Playas del Ayuntamiento de Castelldefels, de 28 de febrero de 2008; arts. 6, 8 y 13 de la Ordenanza de Uso y Aprovechamiento de las Playas de Cartagena [BORM núm. 134 de 13 de junio de 2007, pág. 18037]; art. 8 c) y h) de la Ordenanza de Uso y Aprovechamiento de las Playas de Donostia [BOG núm. 108 de 1 de junio de 2007, pág. 15.365], entre otras.



No obstante, nuestro país se sitúa en una posición asincrónica en comparación a los países europeos de nuestro entorno, en materia de defensa del patrimonio cultural y paisajístico. Es precisamente la normativa europea e internacional la que ha coadyuvado a la salvaguarda de los espacios naturales en nuestro territorio.<sup>222</sup>

Lo expuesto hasta el momento induce claramente a sostener que la visión reduccionista todavía no ha sido abandonada, intentando realizar operaciones de camuflaje en proyectos de infraestructuras o dotaciones de servicios públicos con efectos paisajísticos, como la práctica de crear alineamientos de árboles u otros elementos ornamentales sin criterios definidos para redibujar el paisaje modificado o intervenido por la creación de redes viarias, u otros instrumentos de planificación urbanística (volúmenes, alturas, índices de ocupación, densidades o alteración de usos preestablecidos), por ejemplo.<sup>223</sup> Estas situaciones no necesitan indefectiblemente esta especie de efecto decorativo para expiar culpas ecológicas, porque simplemente se trata de paisajes nuevos, que no siempre y en todo caso han de ser considerados como

---

<sup>222</sup> Vid. ROLDÁN BARBER, J. Efectos de esta intervención son, entre otros, la Orden ARM 3521/2009, de 23 de diciembre, por la que se declaran zonas especiales de conservación los lugares de importancia comunitaria marinos y marítimo terrestres de la región Macaronésica de la Red Natura 2000. La designación de zonas LIC (Lugares de Importancia Comunitaria), obliga a su vez a los Estados miembros a la designación de zonas ZEC (Zonas Especiales de Conservación). *Derogada por la Orden ARM/2417/2011, de 30 de agosto, por la que se declaran zonas especiales de conservación los lugares de importancia comunitaria marinos de la región biogeográfica Macaronésica de la Red Natura 2000 y se aprueban sus correspondientes medidas de conservación. BOE núm. 221, de 14 de septiembre de 2011, págs. 97238-97988* [cursivas mías]. A nivel internacional, hay que destacar el Convenio de Ramsar de 1971, relativo a humedales de importancia internacional. “España y la protección internacional del medioambiente”. En *Derecho, Globalización, Riesgo y Medio Ambiente*. Esteban Pérez Alonso / Estanislao Arana García et. al. (eds.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2012, págs. 143-182, en especial 150, nota 17. Los humedales españoles inscritos en la lista del Convenio Ramsar superan los 70 en todo el territorio nacional. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: <http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-disponible/ramsar.aspx> (último acceso 12/07/2015).

<sup>223</sup> Vid. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C. La cuestión es que dicha integración se ha producido a través de la intervención de arquitectos y urbanistas en el moderno urbanismo, sin que la protección paisajística como tal fuera una obligación normativa. Refiriéndose a Sitte (1887), expresa: <<... la distribución, por ejemplo, de árboles y arbustos no era cuestión de disposición geométrica sino de gusto sensible. Para Sitte estos elementos formaban parte de la estructura arquitectónica de la ciudad y debían diseñarse, por tanto, armónicamente con edificios, monumentos y fachadas más que compitiendo con ellos y ocultándolos>>. En “Algunas consideraciones sobre el actual panorama del paisaje urbano en nuestro ordenamiento: desde su originaria y exclusiva protección por el ordenamiento urbanístico al incipiente ordenamiento paisajístico”, op. cit., págs. 192 y 193. Por otra parte, desde la disciplina de la psicología ambiental, también se acentúa la vertiente subjetiva de los modelos paisajísticos. Al respecto, vid., MACÍA, M. A. / HUCI, C. <<No está de más recalcar, como lo hace algún autor (Perelman, 1977), que es precisamente la percepción por parte del ser humano lo que marca la transición entre medio físico y paisaje>>. “Apreciación subjetiva del paisaje: un ejemplo de utilización de rejilla de Kelly”. En *Introducción a la psicología ambiental*. Florencio Jiménez Burillo / Juan Ignacio Aragonés (comps.) Ed. Alianza Editorial. Madrid, 1986, págs. 387-405.

destructivos o perniciosos.<sup>224</sup> Aunque parezca un sentimiento de carácter intuitivo, sin traslación normativa, determinadas culturas siempre han defendido una visión integradora de tintes holísticos, sin necesidad de matizaciones en cuanto a los distintos corpúsculos de los que se compone algo tan vasto como el ambiente, dentro de una concepción conservacionista de la Naturaleza.<sup>225</sup>

Por tanto, en la tesis que aquí sostenemos, resulta del todo imprescindible, al menos en el marco de las ciudades, conectar la dejación en materia urbanística (acentuando las posibilidades paisajísticas y lumínicas) con la proliferación de espacios que mantienen un alto grado de susceptibilidad en cuanto a su conversión en escenarios profundamente ruidosos.<sup>226</sup> Si bien no es óbice para pretender que el altísimo grado de subjetividad que caracteriza de forma particular a lo “estético” o “visual”, se transforme en la equiparación en términos absolutos con otros tipos de contaminación, cuyo objeto es un derecho subjetivo que debe ser indemnizado si se vulnera.<sup>227</sup>

---

<sup>224</sup> En este sentido, ROGER, A., denomina a éste fenómeno <<el complejo de la cicatriz>>. En “Breve tratado del paisaje”, op. cit., págs. 150 y ss.

<sup>225</sup> Un excelente ejemplo del significado de esta concepción nos lo ofrece el conocido texto de la carta firmada por el célebre indio piel roja Noah Seattle, en respuesta a la oferta efectuada por el presidente de EE.UU., Franklin Pierce, para crear una reserva indígena a cambio de una gran extensión de tierras, que data de 1855. En concreto, en lo que respecta al ruido declara: <<No existe un lugar tranquilo en las ciudades del hombre blanco, ni hay sitio donde escuchar cómo se abren las hojas de los árboles en primavera o cómo aletean los insectos. Pero quizá debe ser esto porque soy un salvaje que no comprende nada. El ruido sólo parece insultar nuestros oídos. Y después de todo, ¿Para qué sirve la vida si el hombre no puede escuchar el grito solitario del pájaro amigo ni las discusiones nocturnas de las ranas al borde de un estanque? Soy un piel roja y nada entiendo. Nosotros preferimos el suave susurro del viento sobre la superficie de un estanque, así como el olor de ese mismo viento purificado por la lluvia del mediodía o perfumado con aromas de pinos>>. El texto completo, considerado uno de los más bellos textos sobre ambiente concebido de forma integral, se puede consultar en JAQUENOD DE ZSÖGÖN, S. “El derecho ambiental y sus principios rectores”, op. cit., págs. 497-507.

<sup>226</sup> En este sentido, considerando la contaminación lumínica como parte del concepto de calidad de vida y del derecho al medio ambiente, y por ende, digna de protección en los mismos términos que otras formas contaminantes, vid. MARTÍ MARTÍ, J. En “La defensa frente a la contaminación acústica y otras inmisiones”, op. cit., pág. 148. Sobre un nuevo modelo urbanístico que no coloque al fenómeno edificatorio en el eje primordial del ambiguo principio de desarrollo sostenible, vid. ALONSO IBÁÑEZ, M. R. Aboga por la integración de otros factores, no sólo y exclusivamente el urbanismo funcional de cara a abandonar una visión reduccionista del concepto de ciudad. “De la política urbanística a la política urbana: los retos actuales del Derecho urbanístico”. En *Revista de Derecho urbanístico y medio ambiente*, núm. 277. Madrid, noviembre 2012, págs.13-27.

<sup>227</sup> Así lo entiende la STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) 589/2007 de 31 mayo [RJ 2007\3431]. <<Cuestión distinta es que, además del nivel de ruidos alcanzado por la circulación diurna y nocturna de trenes y además del riesgo de desprendimientos de partículas de los materiales transportados, elementos valorados en ese otro caso por el tribunal de apelación, sea también computable, para fijar la indemnización por depreciación, lo que en el caso aquí examinado se denomina por el tribunal sentenciador “contaminación estética” o “contaminación visual”>>. Sostiene que <<el paisaje no merece hoy por hoy la consideración de objeto de un derecho subjetivo cuya vulneración deba ser indemnizada, sino la de un bien colectivo o común cuya protección incumbe primordialmente a los poderes públicos y cuya lesión dará lugar a las sanciones que legalmente se establezcan pero no a indemnizaciones a favor de personas naturales o jurídicas determinadas>> (FF JJ 4 y 7).

Ahora bien, el ruido, como hemos tratado de exponer, ostenta la suficiente fuerza y capacidad de transformar cualquier paisaje y, como consecuencia, también modifica las condiciones biotópicas/biológicas de cualquier especie animal o vegetal que sea autóctona del enclave donde se haya producido una variación sustancial del paisaje. Esta circunstancia revela la importancia de su conexión, al igual que ocurre con el factor lumínico. En efecto, la utilización de la expresión *paisaje sonoro* debería cobrar mayor relieve en la temática del ruido, dado que a partir de los sonidos básicos de la Naturaleza, nuestra civilización ha experimentado una extrema complejidad en el entorno sónico.<sup>228</sup>

---

<sup>228</sup> El término fue acuñado en 1976 por SCHAFER, R. M. <<El entorno sonoro. Técnicamente, cualquier porción del medio ambiente sonoro considerado como campo de estudio. El término puede referirse a entornos reales, o construcciones abstractas tales como composiciones musicales y montajes, especialmente cuando se consideran como un entorno>> [tr. pr.] En *Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning of the World*. Ed. Destiny Books. Rochester (Vertmont, USA), 1994, págs. 274 y 275.

## IV.- TRAYECTORIA JURÍDICO-PENAL DEL RUIDO E INFLUENCIA DE OTRAS JURISDICCIONES

### 4.1.- Formulación en los diferentes Códigos Penales de España

Los Códigos Penales de los siglos XIX y principios del XX no cuentan con tipos penales dedicados a la materia ambiental *stricto sensu*, aunque las primeras conexiones se producen por la inclusión de determinados tipos, referidos principalmente a los incendios, envenenamientos, alteración de heredades, etc., debido obviamente a la importancia de la agricultura, la ganadería y todo lo relacionado con la vida rural. Aunque también se tienen en cuenta aspectos relativos a la salubridad pública de los núcleos de población.<sup>229</sup>

---

<sup>229</sup> Cronológicamente, los diferentes preceptos se encuentran en: CP de 1822, de 9 de julio: [Parte Segunda, Título I, Capítulo I <<Del homicidio, envenenamiento, castración y aborto, y de los que incendian para matar>> (arts. 605-641); Título III, Capítulo VIII <<De los incendios y otros daños>> (arts. 787-806) y Capítulo X <<De los que mudan ó alteran los términos de las heredades>> (art. 815). Este Código, de inspiración francesa, fue el único que no contaba con un régimen de faltas. El CP de 1848, de 19 de marzo, (precedido por los nonatos proyectos de 1830, 1831 y 1834) acoge en su articulado los delitos contra la salud pública, principalmente dirigidos a la prohibición de elaborar sustancias nocivas o productos químicos que puedan causar estragos [Libro II, Título V (arts. 246-250)]; el Capítulo VII del Título XIV (arts. 456-462) sobre los incendios y otros estragos y, a continuación el Capítulo VIII versa sobre daños (arts. 463-467), castigando por ejemplo a quienes produjeran por cualquier medio infección o contagio en ganados o daños en puentes, caminos, paseos u otros objetos de uso público o comunal, cuyo importe superara los 500 duros. También contempla un interesante catálogo de faltas en el Libro III, graves y menos graves, referidas principalmente a la quema de montes, rastrojeras u otros productos de la tierra, tala de árboles en heredades ajenas, aprovechamiento o desvío de cursos de agua, caza y pesca en sitio vedado con o sin violencia en la forma de acceso al lugar, utilización de armas de fuego, cohetes, petardos u otros proyectiles dentro de la población, construcción de chimeneas, estufas u hornos, no reparar o demoler edificios ruinosos, causar daños en paseos, parques, arboledas u otros sitios de recreo o esparcimiento de las poblaciones, o en objetos de pública utilidad, arrojar escombros, animales muertos u objetos insalubres o fétidos a las calles y lugares públicos, apertura de pozos o excavaciones, custodia de materiales inflamables o corrosivos, o productos químicos que pudieran causar estragos, etc., de acuerdo a las reglas de seguridad o policía que en cada caso correspondieran. Este Código fue inmediatamente reformado en 1850, sin alteraciones significativas en la materia respecto a su antecesor, con la única salvedad de la eliminación de la división de faltas entre graves y menos graves. El siguiente CP de 1870, de 30 de agosto, incluyó un inédito Título V en el Libro II, que llevaba por rúbrica << De la infracción de las leyes sobre inhumaciones, de la violación de sepulturas y de los delitos contra la salud pública>> (arts. 349-357), continuando en materia de incendios, estragos y daños la sistemática de incluirlos en el Título XIII, relativo a los delitos contra la propiedad. Sucesivamente, el Código de 1928, que fue derogado en 1931 tras el advenimiento de la República (declarándose en vigor el de 1870, tras una reforma por Ley de 27 de octubre de 1932), no supuso ninguna variación en el tema que nos ocupa; tan sólo mencionar que se formó un Título IX, que comprendía los estragos e incendios dentro de la rúbrica <<Delitos contra la salud colectiva>> (arts.

La situación jurídica actual del “ruido”, el lugar que ocupa dentro de la denominación genérica <<protección del medio ambiente>> en Derecho penal español es relativamente reciente, si bien el concepto se encontraba históricamente integrado en el de “vibraciones” o “emisiones contaminantes”; éste último regulado en el art. 347 bis del anterior Texto Refundido del Código Penal de 1973.<sup>230</sup>

Por vez primera se alude al término de forma separada y unitaria en el Código Penal de 1995, posición que no ha variado, apuntando el legislador la relevancia que hoy tiene en Derecho (protección civil, administrativa, laboral, mercantil y penal); por

---

559-597), además del novedoso y último Capítulo sobre los delitos contra los medios de comunicación (vías férreas, puentes, túneles, etc.), manteniendo el delito de daños en el Título XIV, relativo a los delitos contra la propiedad. Respecto a las faltas, se procede a una división por materias, englobando la mayoría de las referidas anteriormente distintos Capítulos en diferentes Títulos del Libro III, como <<De las faltas contra el orden público>>; <<De las faltas contra los intereses generales y régimen de las poblaciones>>; <<De las faltas contra la propiedad>>; o <<De las faltas de daño propiamente dichas>>. El CP de 1944, de 19 de julio, tampoco supuso novedad alguna en materia ambiental, pues el retorno del delito de incendio y otros estragos al Título que comprendía los delitos contra la propiedad ya se había producido con la reforma del CP de 1870. Más extensamente, *vid.* LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, J. / RODRÍGUEZ RAMOS, L. / RUIZ DE GORDEJUELA LÓPEZ, L. *Códigos penales españoles. Recopilación y concordancias*. Ed. Akal. Madrid, 1988.

<sup>230</sup> El art. 347 bis fue introducido por LO 8/1983 de 25 de junio, de Reforma Urgente y Parcial del Código Penal, a consecuencia, entre otros motivos, del mandato constitucional previsto en el art. 45.3 CE: <<Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado>>. *Vid.*, por todos, RODRÍGUEZ RAMOS, L. “Delitos contra el medio ambiente. Artículo 347 bis, a”. En *Comentarios a la Legislación Penal. La reforma del Código Penal de 1983*. Tomo V. Vol. 2º (Libros II y III del Código Penal). Manuel Cobo del Rosal (dir.) Miguel Bajo Fernández (coord.) Ed. Edersa. Madrid, 1985, págs. 827-843. *Vid.* PÉREZ DE GEREGORIO CAPELLA, J. J., que declara la ausencia de pronunciamientos de los Tribunales penales en esta materia (refiriéndose estrictamente al ruido) durante los 13 años que el precepto estuvo vigente (1983-1996). “El delito de contaminación acústica en el Código Penal español, criterios jurisprudenciales y aspectos procesales”. En *Revista jurídica española La Ley*. Vol. 4. Ed. La Ley. Madrid, 2006, págs. 1581-1584. Al menos, se entiende la subsunción del concepto “ruido” en el de “emisiones” porque el ruido como tal es emitido y se propaga de forma más o menos extensa. *Vid.* GARCÍA ÁLVAREZ, G., que se refiere a sentencias penales en las que se absolvía a emisores de ruido por considerar atípica la conducta, según el art. 347 bis. “La evolución del régimen jurídico del ruido”. En *Revista de Administración Pública*, núm. 186 (septiembre-diciembre). Madrid, 2011, págs. 389-424. Sin embargo, la STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª) 1091/2006 de 19 octubre [RJ 2006\8364], en relación a la aplicabilidad en materia de ruidos del art.347 bis expresa: <<... Tanto en el Código de 1973, bajo la denominación emisiones a la atmósfera, como en la actualizada y plenamente aplicable del Código de 1995 (artículo 325) generar o provocar ruidos y vibraciones por encima de lo soportable, alteraba el medio ambiente>> (FJ Tercero, §23). *Vid.* SÁNCHEZ DONATE, Mª P., que considera incluido en el término “emisiones contaminantes” al ruido, con anterioridad al CP de 1995. “La lucha penal: el delito de contaminación acústica”. En *El derecho a una vida sin ruidos insalubres. Protección social, civil, contencioso-administrativa y penal*. Juan Ignacio Marcos González / Cristóbal Molina Navarrete (coords.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2010, págs. 171-212. En el mismo sentido, VERCHER NOGUERA, A. “Responsabilidad penal ambiental”. En *La Responsabilidad Ambiental: Penal, Civil y Administrativa*. Ed. Ecoiuris. Las Rozas (Madrid), 2003, págs. 11-87. *Vid.* la regulación del art. 347 bis extensamente en MATEOS RODRÍGUEZ-ARIAS, A., que también sostiene la insuficiencia del tipo. En *Derecho penal y protección del medio ambiente*. Ed. Colex. Madrid, 1992.

otra parte, no puede sustraerse al aumento de sensibilidad ciudadana al respecto, y por otra, es necesario contar con la normativa internacional, que nos vincula.<sup>231</sup>

En 1980, el Proyecto de Código Penal de 17 de enero introdujo por primera vez una incipiente e inédita protección del ambiente, dirigida únicamente al fenómeno de la contaminación (emisiones y vertidos), en el que las vibraciones y el ruido carecían de virtualidad propia. Fue duramente criticado, tanto por su sistemática (se ubicaba dentro del Capítulo III, dedicado a los delitos contra la salud pública) como por sus lagunas (además de las referidas sobre otras formas contaminantes, se eludía la comisión imprudente), pero ostenta el honor, al menos, de haber iniciado el camino de su consagración en el ordenamiento penal, y de haber inspirado la posterior redacción del art. 347 bis del Código penal de 1973.<sup>232</sup>

---

<sup>231</sup> El Libro Verde sobre política futura de lucha contra el ruido [Bruselas, 04.11.1996 COM (96) 540 final] fue el precursor a nivel europeo de las posteriores medidas sobre la materia. Así, la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. *DOCE L 189, de 18/07/2002*, págs. 12-25, modificada por Reglamento (CE) núm. 1137/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008. *DOCE L 311, de 21/11/2008*, pág. 1. Se establece la obligatoriedad en la elaboración de mapas estratégicos de ruido a los Estados miembros, y planes de acción asociados a los mismos para: 1.-Aglomeraciones urbanas (se trata de zonas que superen los 100.000 habitantes, y cuya consideración por parte del Estado miembro sea la de zona urbanizada). 2.-Grandes ejes viarios (carreteras con un tráfico superior a tres millones de vehículos al año). 3.-Grandes ejes ferroviarios (tráfico superior a 30.000 trenes al año). 4.-Grandes aeropuertos (sólo se consideran los civiles, con más de 50.000 movimientos al año). Los indicadores de ruido homogéneos se expresan en  $L_{den}$  (evaluación de molestias del nivel día-tarde-noche) y  $L_{night}$  (evaluación de alteraciones de sueño en periodo nocturno) en decibelios, como métodos de cálculo provisionales, además de la posible utilización de otros indicadores suplementarios para situaciones especiales de ruido, si bien se deja la opción de emplear indicadores de ruido nacionales ya existentes hasta que no se usen, con carácter obligatorio, métodos comunes de evaluación para la determinación de los mismos (arts. 4, 5 y 6). *Vid.* MORAL SORIANO, L. La anterior dinámica de protección fraccionada, en la que no cabe el impacto que provoca el ruido en los seres humanos, se rompe con la publicación del Libro Verde sobre política futura de lucha contra el ruido por parte de la Comisión. “La Directiva de ruido ambiental: el nuevo marco para la actuación comunitaria”, op. cit., págs. 3-55.

<sup>232</sup> *Vid.* MENDO ESTRELLA, A. Recoge el tenor literal del art. 323 (tipo básico) incluido en el Proyecto: <<... seis meses a cuatro años y suspensión de profesión u oficio hasta tres años a los que en la explotación de una industria o en el ejercicio de otra actividad y con infracción de las normas reglamentarias, provoquen emanaciones en la atmósfera, o viertan en los ríos, aguas interiores o territoriales sustancias que puedan perjudicar gravemente a las personas, a los animales, bosques o plantaciones útiles>>. Además, se establecía en el mismo precepto una agravación específica por funcionamiento clandestino de la actividad o industria o cuando los hechos hubieran acaecido en las cercanías de poblaciones o afectaran a aguas de consumo público. Otros dos preceptos cerraban el círculo, sancionando la conducta del funcionario público que hubiera informado favorablemente la concesión de licencia manifiestamente ilegal o por conducta omisiva sobre irregularidades en la misma (art. 324) y por último, se encargaba del establecimiento de depósitos o vertederos de desechos o residuos sólidos (art. 325). En *El delito ecológico del artículo 325.1 del Código Penal*. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2009, págs. 32-34; En este mismo sentido, *vid.* ALASTUEY DOBÓN, M<sup>a</sup> C. *El delito de contaminación ambiental (Artículo 325.1 del Código penal)*. Ed. Comares. Granada, 2004. pág. 2. Se observa en la redacción del tipo básico condiciones de igualdad en cuanto al perjuicio que se pueda causar tanto a la especie humana como a la flora y fauna, en una tímida concepción ecocéntrica que no tardó en abandonarse definitivamente, fluctuando desde entonces las diferentes redacciones entre el antropocentrismo puro y el ecocentrismo moderado. Es reseñable, aún siendo contradictoria la dicción

Antes de la definitiva inclusión del “delito ecológico” recogido en el art. 347 bis mencionado, procede destacar la Propuesta de Anteproyecto de Código penal de 1983, que sigue básicamente la redacción de los artículos del proyecto de 1980, pero que, sin embargo, introduce la novedad de la comisión por imprudencia.<sup>233</sup> La mayor parte de la doctrina fue muy crítica con el art. 347 bis a lo largo de su vigencia, apostando incluso, en el caso de RODRÍGUEZ RAMOS, por una *posible inconstitucionalidad por omisión*, opinión refrendada por otros autores. Los motivos, bien sistemáticos, bien sustantivo-materiales, o bien por razones político-criminales fueron piezas clave para reprobado la dicción del precepto.<sup>234</sup>

---

del texto con su ubicación sistemática. BOCG, Congreso, Legislatura I, serie A: Proyectos de Ley, 17 de enero de 1980, núm. 108-I; CONDE-PUMPIDO TOURON, C. “Introducción al delito ecológico”. En *El delito ecológico*. Juan Terradillos Basoco (ed. lit.) Ed. Trotta. Madrid, 1992. págs. 13- 39, en especial 30.<sup>233</sup> Vid. CONDE-PUMPIDO TOURON, C. La Propuesta de Anteproyecto de 1983, en lo que concierne a la protección penal del medio ambiente, realiza una nueva estructuración de los tipos delictivos, tratando como bien autónomo al bien jurídico medio ambiente y desgajándolo del mantenimiento de la salud pública, ya que le dedica un capítulo específico [<<De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente>> (arts. 310-314)], junto a otro dedicado a los delitos contra la Ordenación del Territorio (arts. 307-309), formando con ellos un Título único. “Introducción al delito ecológico”, op. cit., págs. 31 y 32. ALASTUEY DOBÓN, Mª C. En “El delito de contaminación ambiental”, op. cit., pág. 3. Vid. MENDO ESTRELLA, A. Carece la propuesta, sin embargo, al igual que el antecedente de 1980 y el posterior art. 347 bis de la inclusión de otras formas de ataque al ambiente, como los “ruidos”, “vibraciones” o los “depósitos”. Tampoco contempla otros elementos que pueden sufrir contaminación por las emanaciones, como el suelo, el subsuelo, las aguas marítimas. En “El delito ecológico del artículo 325.1 del Código Penal”, op. cit., págs. 36 y 37. Para una visión general de los aspectos más significativos del Anteproyecto sobre medio ambiente, vid. DE LA CUESTA ARZAMENDI, J. L. “Protección penal de la ordenación del territorio y del medio ambiente”. *Documentación jurídica. Monográfico dedicado a la Propuesta de Anteproyecto del Nuevo Código Penal*. Vol. 2, (enero-diciembre) Ed. Ministerio de Justicia, Secretaría General Técnica. Madrid, 1983, págs. 877-936.

<sup>234</sup> El tenor literal del art. 347 bis *supra*, nota 40. Posteriormente, por LO 7/1987, de 11 de diciembre de 1987, se incorporan los delitos de incendios forestales (arts. 533 bis a) al 533 bis c) CP, TR 1973) y el CP vigente de 1995 declara derogados los preceptos penales sustantivos de las siguientes leyes especiales: Ley de 19 de septiembre de 1896, para la protección de pájaros e insectívoros; Ley de 20 de febrero de 1942, de pesca fluvial; Ley de 31 de diciembre de 1946, sobre pesca con explosivos y Ley 1/1970 de 4 de abril, de caza. Pero la tendencia inflacionista se inicia a partir de 1995, cuando se otorga a los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente un protagonismo jamás alcanzado, en los arts. 325 a 331 del Capítulo III; protección de la flora, fauna y animales domésticos, en los arts. 332 a 337 del Capítulo IV y tres Disposiciones Comunes: arts. 338, 339 y 340, del capítulo V, todos ellos del Título XVI del Libro II. Además de los delitos contra la ordenación del territorio de los arts. 319 y 320, o de riesgo catastrófico por radiaciones ionizantes de los arts. 341 a 345, e incendios de los arts. 341 a 358. Respecto a las faltas, arts. 631.2 y 632. Vid. RODRÍGUEZ RAMOS, L. Alude a la parcialidad e insuficiencia de la protección penal del ambiente en el art. 347 bis, ya que sólo tiene en cuenta problemas de contaminación (*emisiones o vertidos de cualquier clase*), sin ocuparse de la explotación irracional de los recursos naturales, que cuenta con una protección a través de leyes especiales, pero de carácter preambiental. En “Delitos contra el medio ambiente. Artículo 347 bis, a)”, op. cit., págs. 830 y 831. Vid. MENDO ESTRELLA, A. Otra de las críticas se centra en el orden sistemático de la materia, puesto que aunque su rúbrica responde al título de <<Delitos contra la salud pública y el medio ambiente>>, continúa ubicado junto a los delitos contra la salud pública. En “El delito ecológico del artículo 325.1 del Código Penal”, op. cit., págs. 35 y 36; CANTANERO BANDRÉS, R. “El delito ecológico: análisis del actual tipo penal y sus antecedentes”. *El delito ecológico*. Juan Terradillos Basoco (ed. lit.) Ed. Trotta. Madrid, 1992, págs. 67-78, en especial 75; GONZÁLEZ-RIPOLL GARZÓN, J. J. *Sociología del delito ambiental*. Ed. Servicio de Publicaciones Universidad de Córdoba. Córdoba, 1992, págs. 61 y ss. Vid. DE LA CUESTA AGUADO, P. M. Considera que la contaminación como fenómeno

Las deficiencias observadas llevaron a solicitar su reforma el mismo año de su entrada en vigor, a través de la Propuesta de Anteproyecto en 1983, que fue bien acogida por parte de la doctrina, no en su totalidad, pero sí secundando y respaldando al menos el orden sistemático seguido y la conexión con los delitos relativos a la ordenación del territorio, con los que formaba un Título propio.<sup>235</sup> En todo caso, el factor ruido todavía era despreciado por representar un hecho con insuficiente entidad propia, en relación a un concepto de ambiente mínimamente ampliado, de acuerdo al art. 347 bis. De anecdótica se puede calificar la propuesta de incluir una falta específica sobre “ruido”, que contemplaba también el descanso nocturno, dentro del Libro III, en

---

en sí no sería elemento típico ni en el art.347 bis, ni en el art. 307 del Proyecto de Código Penal de 1994 y tampoco en al art. 325 del Código Penal de 1995, ya que no es resultado de la acción, ni condición objetiva de punibilidad. <<El vertido o la emisión, etc., constituyen diversas modalidades de la acción típica, sin llegar todavía a constituir el resultado. Es decir, el juez no tendrá que comprobar que la emisión a la atmósfera ha producido una alteración perjudicial calificable como contaminación, sino únicamente, que esa emisión es peligrosa y pone en peligro concreto la salud de las personas o puede perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, en éste último caso, sin que tenga que haber provocado, siquiera, un peligro concreto>>. En *Causalidad de los delitos contra el medio ambiente* (2ª ed.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 1999, págs. 239-242, especialmente 241. Vid. DE LA CUESTA ARZAMENDI, J. L. Califica al art. 347 bis como tipo <<mixto-alternativo, lleno de defectos e insuficiencias... >>. Ausencia de aspectos necesarios para la tutela penal ambiental como la faceta internacional (transfronteriza) de la contaminación, la responsabilidad de los funcionarios públicos, un sistema de sanciones innovador y de mayor eficacia que el tradicional contra este tipo de criminalidad (muy próxima según el autor a la criminalidad económica), etc. “La reciente historia del delito ecológico: del artículo 347 bis al proyecto de nuevo Código Penal de 1994”. En *La Protección Jurídica del Medio Ambiente*. José Manuel Valle Muñiz (coord.) Ed. Aranzadi. Pamplona, 1997, págs. 185-224. Por último, vid. por todos, TERRADILLOS BASOCO, J., criticando la errónea fórmula empleada por el legislador en relación a la diferencia entre delito de peligro abstracto (si afecta a las condiciones de vida animal, bosques, espacios naturales o plantaciones útiles) y delito de peligro concreto (referido a la salud de las personas), que otorgaba un mayor rigor y, por tanto, una protección superior a los atentados contra la flora y fauna que a los cometidos contra las personas. “Delitos relativos a la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente”. En *Derecho Penal del Medio Ambiente*. Juan Terradillos Basoco (ed. lit.) Ed. Trotta. Madrid, 1997. págs. 35-57, en especial 48. Sin embargo, considera MARTÍN MATEO, R., que la redacción del precepto es <<... extraordinariamente afortunada en cuanto a la precisión de lo que sea “medio ambiente” y lo que se considere como utilización racional de los recursos naturales que puede implicarle.>>, sin cuestionar, por el contrario, su ineficacia como figura delictiva. “El delito ambiental. Reflexiones desde el derecho administrativo”. En *Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica*, núm. 238 (abril-junio) Ed. INAP. Madrid, 1988, págs. 1033-1054. Vid. VERCHER NOGUERA, A. Cita otros inconvenientes aparte de su limitación terminológica, como la construcción bajo el paraguas de una ley en blanco o la calificación de la norma como de peligro grave, pero considera que el grado de aplicación práctica fue aceptable. Voz “Delito Ecológico”, op. cit. pág. 446. Vid. MARTÍN MORALES, Mª L. La inaplicación del art. 347 bis, en particular en la modalidad de ruidos, se debe a que no se menciona expresamente en el precepto y por tanto, no se puede extraer una interpretación amplia y tampoco quedaría inmerso en el concepto de emisiones, además de tener en cuenta el principio de mínima intervención del Derecho penal. En “Incidencia del ruido”, op. cit., pág. 71. Vid. BOCOS, A. Recoge algunas sentencias de Audiencias Provinciales en las que se rechaza la inclusión del subtipo ruido en el art. 347 bis durante su vigencia. “El ruido de las actividades de ocio”. En *El ruido en las ciudades*. Jorge Pinedo Hay (coord.) Ed. Bosch. Barcelona, 2009, págs. 285-306.

<sup>235</sup> El Título XIII constaba de dos Capítulos: I.-<<De los delitos sobre la ordenación del territorio>> (arts. 307-309) y II.-<<Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente>> (arts. 310-314), tras un Título dedicado a los delitos socioeconómicos y anterior a otro sobre delitos contra la seguridad colectiva. El texto íntegro en “Propuesta de Anteproyecto del nuevo Código Penal”. Ed. Ministerio de Justicia. Secretaría General Técnica. Madrid, 1983. págs. 87 y 88.



el Título IV, dedicado a las faltas en el ejercicio de la libertad de expresión y contra con los intereses colectivos.<sup>236</sup> Pero es sin duda la labor legislativa desarrollada entre 1992 y 1994 la que conduce a que finalmente la categoría “ruido” (como término y concepto con sustantividad propia se introdujera dentro del tipo del <<delito ecológico>>), reflejada en el art. 325 diseñado por el nuevo Código Penal de 1995, que deroga el anterior precepto sin que éste llegara a tener repercusión en la protección penal contra el mismo, ni a nivel normativo ni jurisprudencial.<sup>237</sup>

---

<sup>236</sup> “Propuesta de Anteproyecto del nuevo Código Penal”, op. cit., pág. 148. Dentro del Capítulo II, la proposición del texto en el art. 604 rezaba: <<Serán castigados con la pena de arresto de uno a cuatro fines de semana o multa de quince a sesenta días: 4º. Los que, produciendo por cualquier medio ruidos excesivos, perturbaren maliciosa y desconsideradamente la tranquilidad de los demás o su descanso nocturno>>. Vid. CUADRADO PÉREZ, C., que califica de acertada esta propuesta de tipificación dentro del sistema de las faltas, lamentando que la misma no se llegara a efectuar. En “Ruido, inmisiones y edificación”, op. cit., pág. 16, nota 9.

<sup>237</sup> Es interesante resaltar que ni el Proyecto de Ley Orgánica de modificación del Código Penal, de 23 de septiembre de 1992, ni en el Proyecto de Código Penal de 23 de septiembre de 1994 se menciona el “ruido”, y sin embargo, sí se alude a las “vibraciones de cualquier clase” en los artículos que conforman el tipo básico (arts. 312 y 307 respectivamente). Cfr. MENDO ESTRELLA, A. “El delito ecológico del artículo 325.1 del Código Penal”, op. cit., pág. 38. Vid. SANTA CECILIA GARCÍA, F. Alude a la escasa incidencia y aplicación del art.347 bis en un ámbito generalizado de protección ambiental, y que vio la luz a raíz del mandato constitucional expresado en el art. 45.3 CE de 1978. Se decanta, no obstante, por una interpretación conjunta de los arts. 45, 46 y 47 CE: <<... tienen una estrecha relación sistemática y objeto de protección en términos prácticamente equivalentes>>. En “Medio ambiente y reparación del daño”. *Textos jurídicos y contextos sociales en F. A. Hayek. Ángel Sánchez de la Torre / Isabel Araceli Hoyo Sierra* (eds.) Ed. Dykinson. Madrid, 2011, págs. 331-368, en especial pág. 341 y nota 25. Finalmente, el CP de 1995 no recogió la estructura formal del Título XIII expresada en los textos preparatorios, con el título <<De los delitos relativos a la ordenación del territorio y a la protección de los recursos naturales y de la vida silvestre>>, ocupando el Capítulo III, del Título XVI bajo la rúbrica <<Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente>>, con una formulación un tanto redundante, porque el medio ambiente ya incorpora *per se* a todos los recursos naturales y además, el ambiente se crea y desarrolla necesariamente en un medio, por lo que la expresión “medio ambiente” también resultaría reiterativa; la mayoría de textos de países sudamericanos aluden al ambiente, a la ecología, no al medio ambiente (Derecho Ambiental / Derecho Ecológico), pues se entiende que el uso de la expresión desvirtúa el sentido etimológico del mismo, posición que comparto plenamente, aunque por desgracia la referencia al “medio ambiente” se ha impuesto de forma definitiva tanto en los textos jurídicos como en otras disciplinas conexas. De esta opinión, MARTÍN MATEO, R. *Tratado de Derecho Ambiental*, Vol. I Ed. Trivium. Madrid, 1991, pág. 80; CANOSA USERA, R. *Constitución y Medio Ambiente*. Ed. Dykinson. Madrid, 2000, pág. 63. Vid. “Anteproyecto del Código Penal 1992 e Informe y votos agregados del Consejo General del Poder Judicial”. En *Cuadernos del Consejo General del Poder Judicial*, núm. 11. Madrid, 1992. págs. 81-83; “Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal. Ed. Ministerio de Justicia. Secretaría General Técnica. Madrid, 1992, págs. 150-152; “Anteproyecto de Código Penal 1994, Informe del Consejo General del Poder Judicial y voto concurrente formulado”. En *Cuadernos del Consejo General del Poder Judicial*, núm. 40. Madrid, 1994. págs. 78-81; Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal. Ed. Ministerio de Justicia e Interior. Secretaría General Técnica. Madrid, 1994. págs. 116-121. La inclusión del término se produjo a raíz de una enmienda presentada en el Senado, en el proceso de tramitación del texto que finalmente daría lugar al nuevo Código Penal de 1995; Enmienda núm. 205 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergencia i Unió: <<Redacción que se propone: Art. 317: Será castigado con las penas de prisión de seis meses a cuatro años [...] extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones... >> BOCG. Senado, V Legislatura, Serie II: Proyectos de Ley, 21 de septiembre de 1995, núm. 87 (c)

El Nuevo Código planteaba una serie de tipicidades muy ampliada si lo comparamos con el art.347 bis, ya que el legislador optó por incluir conductas y aspectos que habían sido silenciados anteriormente, desplegando un gran abanico de actividades y modalidades delictivas contra el ambiente.<sup>238</sup> A partir de la entrada en vigor del nuevo texto en 1995, fueron un total de 18 reformas al Código las que se llevaron a cabo hasta 2003, año en el que se promulga la LO 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que introduce un controvertido apartado segundo en el art. 325, relativo a la emisión de radiaciones ionizantes y otras sustancias, y aumenta la pena prevista en el art. 328 en materia de residuos.<sup>239</sup>

Las reformas posteriores no introducen novedades ni variaciones determinantes en materia ambiental, hasta la entrada en vigor de la LO 15/2010, de 22 de Junio de 2010, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, cuyo estudio se desarrolla en el epígrafe 4.3.1. del presente estudio, y la flamante reforma de 2015, a la que dedicamos el consecutivo.<sup>240</sup>

---

<sup>238</sup> Art. 325.1 CP: <<Será castigado con las penas de prisión de seis meses a cuatro años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio de uno a tres años al que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, **ruidos**, **vibraciones**, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, marítimas o subterráneas, con incidencia, incluso, en los espacios transfronterizos, así como las captaciones de aguas que puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. Si el riesgo de grave perjuicio fuese para la salud de las personas, la pena de prisión se impondrá en su mitad superior>>.

<sup>239</sup> Vid. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, I. / OLMEDO CARDENETE, M. “Capítulo III. De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente”. En *Comentarios al Código Penal, Segunda época*, Tomo X, Vol. II. Manuel Cobo del Rosal (dir.) Ed. Centro de Estudios Superiores de Especialidades Jurídicas. Madrid, 2006, págs. 169-282; JAÉN VALLEJO, M. “La reformas del Código Penal (2002/2003)”. En *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, núm. 6, 2004. <http://criminnet.ugr.es/recpc/06/recpc06-r2.pdf>. (último acceso 12/07/2015). Entrada en vigor: 1/10/2004. Apartado 2 del art. 325: <<El que dolosamente libere, emita o introduzca radiaciones ionizantes u otras sustancias en el aire, tierra o aguas marítimas, continentales, superficiales o subterráneas, en cantidad que produzca en alguna persona la muerte o enfermedad que, además de una primera asistencia facultativa, requiera tratamiento médico o quirúrgico o produzca secuelas irreversibles, será castigado, además de con la pena que corresponda por el daño causado a las personas, con la prisión de dos a cuatro años>>. En principio, respondía a la necesidad de adecuar nuestro ordenamiento a la Decisión Marco 2003/80/JAI, del Consejo, de 27 de enero de 2003 relativa a la protección del medio ambiente a través del Derecho penal [art. 2 b)], que posteriormente fue anulada por Sentencia del Tribunal de Luxemburgo de 13 de septiembre de 2005. El art. 328 queda redactado como sigue: <<Serán castigados con la pena de prisión de cinco a siete meses y multa de 10 a 14 meses quienes estableciesen depósitos o vertederos de desechos o residuos sólidos o líquidos que sean tóxicos o peligrosos y puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales o la salud de las personas>>. Se sustituye la pena de arresto de fin de semana por la de prisión y multa. Sobre las modificaciones de 2003, vid. VERCHER NOGUERA, A. Voz “Delito Ecológico”. En “Diccionario de Derecho Ambiental”, op. cit., págs. 452-454.

<sup>240</sup> Los antecedentes de dicha reforma en el Anteproyecto de Ley Orgánica de 14 de noviembre de 2008, de reforma del Código Penal, muestran el interés del legislador por adecuar normativamente la

#### 4.1.1.- Modificación del sistema de faltas y derogación del Libro III.

##### Breve alusión a la serie de faltas aplicables al “ruido”

##### 4.1.1.1.-Antecedentes

Los Códigos Penales preexistentes al de 1995, en sus diferentes redacciones, recogen varios tipos de faltas, mayoritariamente enfocadas hacia un genérico concepto de orden público y seguridad ciudadana que, sin necesidad de aludir al “ruido”, resultaban totalmente aplicables.<sup>241</sup>

---

legislación europea a nuestro ordenamiento penal, endureciendo las penas para el delito de contaminación, modificando la redacción del párrafo segundo del art.325, e introduciendo la trascendental responsabilidad penal de las personas jurídicas en esta materia. Todo ello responde a la Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal (DO L 328 de 6.12.2008), que alude a que los Estados miembros adopten las medidas necesarias para garantizar que los delitos se castiguen con sanciones penales eficaces, proporcionadas y disuasorias (art. 5). La nueva redacción del art. 325.2 se corresponde con la aplicación de la misma Directiva, en cuanto a traslado de residuos [art. 3 c)], pasando a constituir el contenido de dicho apartado un artículo propio, el art. 343, dentro la Sección 1ª, Capítulo I, Título XVII, relativo a los delitos sobre energía nuclear y radiaciones ionizantes. Se corrige así una deficiencia sistemática, por su errónea inclusión en el art.325, tal y como reclamaba la doctrina. Vid. HAVA GARCÍA, E. “La reforma de los delitos contra los recursos naturales, el medio ambiente y la flora y fauna” (arts. 325, 327, 328, 329,333, 334, 336 y 339). En *La reforma penal de 2010: Análisis y Comentarios*. Gonzalo Quintero Olivares (dir.) Ed. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2010, págs. 287-295; MUÑOZ LORENTE, J. / BAUCELLS LLADÓS, J. / FARALDO CABANA, P. “Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente” (arts.325, 327, 328, y 329). En *Comentarios a la Reforma Penal de 2010*. Francisco Álvarez García / José Luis González Cussac (dirs.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2010, págs. 385-398, en especial 387 y 388. Vid. *Anteproyecto de Ley Orgánica de 14 de noviembre de 2008, de reforma del Código Penal. Acompañado de los Informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal*. En el texto presentado por el Informe del Consejo Fiscal se insta a la modificación gramatical de la frase [...] *las captaciones de aguas que puedan perjudicar gravemente al equilibrio de los sistemas naturales*, introduciendo una coma tras las palabras *captaciones de aguas*, puesto que sin ella parece que se refiere solamente a dichas captaciones, lo que no parece correcto puesto que el desequilibrio grave de los sistemas naturales se puede producir por cualquiera de las acciones que recoge el precepto. Mª Rosario Diego Díaz-Santos / Nuria P. Matellanes Rodríguez / Eduardo A. Fabián Caparros (comps.) Ed. Ratio Legis Librería Jurídica. Salamanca, 2009, págs. 204 y 205. Al mismo error se refiere VERCHER NOGUERA, A. En “La evolución del delito contra el medio ambiente a través de la jurisprudencia”, op. cit., pág. 52, nota 30; LASCURAÍN SÁNCHEZ, J. A. “Elogio del artículo 325 del Código Penal”. En *Estudios sobre la protección penal del medio ambiente en el ordenamiento jurídico español*. Agustín Jorge Barreiro (dir.) Ed. Comares. Granada, 2005, págs. 265-294, en especial pág. 288. Sin embargo, esta sencilla modificación no se ha llegado a efectuar.

<sup>241</sup> La mayor parte de conductas ruidosas recogidas en distintos artículos desaparecieron con la entrada en vigor de la LO 3/1989, de 21 de junio, de actualización del Código Penal. Como ejemplos, el art. 568: <<Serán castigados [...] los que, dentro de la población o en sitio público o frecuentado, disparen armas de fuego o lanzaren cohetes, petardos u otro proyectil cualquiera que produzca alarma o peligro>>, que posteriormente reduce su redacción y se refiere a disparar armas de fuego, aire comprimido o gas. También el art. 570 1º, 2º, 3º y 4º recogía una amplia variedad de tipos, desde perturbar el sosiego público por embriaguez, otros esparcimientos nocturnos o usando medios que deban producir alarma, hasta promover o tomar parte activa en <<cencerradas u otras reuniones

#### 4.1.1.2.- Sistema de faltas vigente en relación a conductas ruidosas hasta el Proyecto de Reforma de 2012

Mención particular merece, durante el tiempo que estuvo en vigor el Libro III del CP, la aplicación de determinadas faltas, ya que algunas actividades ruidosas carentes del requisito de gravedad exigido por el art. 325 (perjudicar el equilibrio de los sistemas naturales o la salud de las personas), podían ser constitutivas de faltas contra las personas, en particular faltas de lesiones, o contra los intereses generales si nos atenemos a un contexto más generalizado de medio ambiente.<sup>242</sup> De forma paralela, era posible la comisión de una falta contra el orden público del art. 634 en relación con el delito previsto en el art. 329 para autoridades o funcionarios públicos que informaran favorablemente la concesión de licencias ilegales o que, en su labor inspectora, silenciaban la infracción de Leyes o disposiciones normativas de carácter general.<sup>243</sup>

---

tumultuosas>>. Vid. MARTÍN MATEO, R. “Tratado de Derecho Ambiental” Vol. II, op. cit., pág. 625; TORNOS MAS, J. “Ruidos y vibraciones”. En *Derecho y Medio Ambiente*. Luis Rodríguez Ramos (coord.) Ed. Centro de Estudios y Ordenación del Territorio y Medio Ambiente / Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Madrid, 1981, págs. 565-573, en especial 572.

<sup>242</sup> El texto del art. 617.1 permitía condenar al emisor de ruidos por una falta de lesiones, ya que la lesión se puede producir por cualquier medio o procedimiento: <<El que, por cualquier medio o procedimiento, causara a otro una lesión no definida como delito en este Código será castigado con la pena de localización permanente de seis a 12 días o multa de uno a dos meses>>. Y el art. 632.1, por su parte, tipificaba como falta determinadas acciones sobre la flora, dentro de las faltas contra los intereses generales: <<El que corte, tale, queme, arranque, recolecte alguna especie o subespecie de flora amenazada o de sus propágulos, sin grave perjuicio para el medio ambiente, será castigado con la pena de multa de 10 a 30 días o trabajos en beneficio de la comunidad de 10 a 20 días>>. Así, la Sentencia núm. 51/2006 de 6 de marzo, del Juzgado de lo Penal núm. 3 de Zaragoza [JUR/2006/99140] condena a un hostelero por emisión de ruidos como responsable de un delito contra el medio ambiente, otro de coacciones y una falta de lesiones por imprudencia grave, absolviéndole de otras dos faltas dolosas. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Las Palmas (Sección 1ª), en la Sentencia 90/2011 de 14 de octubre [ARP/2012/120], absuelve de tres faltas de lesiones al propietario de un local con actividad musical por entender que, aunque se demostró la causación de molestias a los vecinos con ocasión de los ruidos, los médicos forenses no lograron concretar lesiones específicas (FJ 6). El Tribunal Supremo, por su parte, anula parcialmente una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, absolviendo al propietario de un discoteca enmascarada por una licencia administrativa de bar, de un delito contra el medio ambiente por emisión de ruidos, condenándole por nueve faltas de lesiones del art. 617.1º, en atención a un informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Barcelona que acredita insomnio, dolores de cabeza, mal humor, sin necesidad de tratamiento médico. STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª) 1112/2009 de 16 de noviembre [RJ\2009\5846]. Comentario a la sentencia en TRABADO ÁLVAREZ, C. “La regulación de las lesiones psíquicas del artículo 147 del Código Penal”. En *Diario La Ley*, núm. 7651, Sección Tribuna, 14. Año XXXII, junio 2011. Disponible en: <http://diariolaley.laley.es/content/Inicio.aspx> (último acceso 12/07/2015). Vid. SILVA SÁNCHEZ, J. Mª / FELIP I SABORIT, D., respecto a la imputación de un sujeto que cause o no evite los ruidos que producen lesiones que menoscaban la salud física o psíquica de otros por un delito o, en su caso, una falta de lesiones. “El derecho penal ante el ruido”. En *Régimen jurídico del ruido. Una perspectiva integral y comparada*. Estanislao Arana García Estanislao / Mª Asunción Torres López (coords.) Ed. Comares. Granada, 2004, págs. 257-286.

<sup>243</sup> Art. 634: <<Los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad o sus agentes, o los que desobedecieren levemente, cuando ejerzan sus funciones, serán castigados con la pena de multa de diez a sesenta días>>. Sentencia Juzgado de lo Penal núm. 1 de Oviedo 109/2012, de 27 de junio de 2012

También era factible apreciar una falta de coacciones del art. 620.2º, aunque para ello se requiriera la concurrencia de dolo y la denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.<sup>244</sup> Abonadas en terreno baldío se pueden considerar las faltas cometidas por personas jurídicas. Nada obstaculizaba, una vez implantada en el ordenamiento penal la responsabilidad penal de las mismas, incorporada por el nuevo art. 31 bis, la aplicación del sistema de faltas a las personas jurídicas, hecho que no se ha producido debido, entre otros factores, al escaso espacio de tiempo en que ambas figuras han pervivido de forma conjunta en nuestro Código Penal. Se puede interpretar que el legislador no quiso que existiera uniformidad entre la conducta prevista por el art. 31 (que se refiere a la responsabilidad del administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, en el que sí se explicitaba que la figura podía ser constitutiva tanto de un delito como de una falta), y la desarrollada por el art. 31 bis, en el que tan sólo se menciona la categoría de delito.<sup>245</sup>

---

[ROJ: SJP 75/2012]. En esta resolución se absuelve al Alcalde de la localidad de Ponga de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente del art. 330, un delito de prevaricación del art. 404 y un delito continuado de desobediencia del art. 556, y a dos empleados del Ayuntamiento de un delito de desobediencia del art. 556. El Alcalde, en cumplimiento del acuerdo adoptado en el Pleno del consistorio (acondicionamiento y limpieza de varias pistas de acceso a Majadas ganaderas del Concejo de Ponga, dentro de una zona catalogada como Parque Natural) y sin esperar la debida autorización de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Principado de Asturias, ordena a los operarios desarrollar dichos trabajos con maquinaria municipal con el objeto de mejorar la accesibilidad a los ganaderos vecinos. En el transcurso de los trabajos, Guardas del Medio Natural, en su condición de Agentes de la Autoridad, adoptan la medida cautelar de paralizar los trabajos, comunicándoselo a los tres acusados; éstos, desoyendo sus indicaciones, continuaron con dichos trabajos. Finalmente, se les condena por una falta continuada de desobediencia leve del art. 634, ya que no se acredita el daño grave causado que exige el tipo penal del art. 330, al ser éste un delito de resultado. Respecto al delito de prevaricación, se argumenta, con buen criterio, la inexistencia de arbitrariedad en tanto que la decisión del Alcalde no se apartó completamente de lo acordado por el Pleno. Si bien es cierto que la resolución no respetó el trámite formal de la autorización, esto supone una ilegalidad administrativa a solventar en todo caso por esta vía, y no la penal.

<sup>244</sup> En relación al tipo penal de coacciones mediante ruidos, que puede dar lugar a un delito o a una falta, *vid.* SÁNCHEZ, J. Mª / FELIP I SABORIT, D. En “El derecho penal ante el ruido”, *op. cit.*, págs. 260 y 261. El art. 620.2º dice que serán castigados con pena de multa de diez a veinte días: <<Los que causen a otro una amenaza, coacción, injuria o vejación injusta de carácter leve, salvo que el hecho sea constitutivo de delito>>. Será posible, por tanto, que la coacción se produzca por el simple hecho de tener que abandonar una vivienda que sea el domicilio particular debido a la violencia “acústica” que se ejerza sobre la misma. Cabe recordar aquí el tenor literal del art. 172.1 CP: <<El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o con multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados. Cuando la coacción ejercida tuviera como objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental se le impondrán las penas en su mitad superior, salvo que el hecho tuviera señalada mayor pena en otro precepto de este Código. También se impondrán las penas en su mitad superior cuando la coacción ejercida tuviera por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda>>. El último párrafo fue añadido por el artículo único de la LO 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

<sup>245</sup> No se discute aquí la lógica del sistema, que desvirtuaría enormemente la actuación del Derecho penal, aún en su vertiente más leve, frente a hechos que poseen una adecuada protección y mayor sanción por la vía administrativa. Aún contando con el efecto de la reiteración de faltas, la pena de multa a

#### **4.1.1.3.- La definitiva supresión del Libro III y su incidencia en la regulación penal del ruido**

La conveniencia de acudir a una descriminalización del sistema de faltas en nuestro ordenamiento es un debate iniciado hace varias décadas, discurso y tendencia nunca abandonado por el sector mayoritario de la doctrina.<sup>246</sup>

Las diferencias de planteamiento en relación al lugar que deben ocupar las faltas penales se centran en determinar qué casos deberían constituir supuestos de infracción administrativa, acompañados de su sanción correspondiente, qué casos deben conformar la categoría de delito leve o menos grave, o en qué supuestos simplemente se apuesta por la conversión en conductas no reguladas ni tuteladas por las disciplinas que integran el Derecho público.

La Exposición de Motivos del Anteproyecto de 2012, por el que se modifica la LO 10/1995, no deja lugar a dudas, ya que alude primordialmente a la necesidad de primar la racionalización del uso público de la justicia frente a la elevada litigiosidad existente, pero lo cierto es que esta postura no deja de presentar una serie de dificultades que obstaculizan la consecución de la finalidad expresada, desde puntos de vista sustantivo-materiales y también procesales. Por ejemplo, en relación a la existencia y cancelación de antecedentes penales, criterios de competencia objetiva - juzgados de instrucción (que venían ocupándose de los juicios de faltas) o juzgados de lo penal-, se prescinde de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad, que en relación a conductas contra el medio ambiente en la modalidad de ruidos pueden dar muy buenos resultados, los problemas que genera el plazo de prescripción de un año respecto a los seis meses contemplados anteriormente para aquellos hechos constitutivos de faltas, etc.

---

alcanzar no es comparable a los cuadros de sanciones previstos para infracciones medioambientales en las que pueda incurrir una empresa o entidad mercantil.

<sup>246</sup> No han faltado voces acreditadas en diferentes momentos del periplo legislativo a que se ha visto sometido el CP, que se decantaban por la definitiva supresión del Libro III. *Vid.*, por todos ZUGALDÍA ESPINAR, J. M. Alude el autor a la experiencia del derecho alemán y a la deseable reubicación de estas conductas tanto en el Derecho Administrativo sancionador como en el propio CP, a través de su conversión en delitos menos graves, planteamiento ya desarrollado en 1980 (Enmienda núm. 420 del Grupo Parlamentario Comunista del Congreso al Proyecto de Código Penal de 1980). “Contrarreforma penal (el annus horribilis de 2003) y el Anteproyecto de reforma del Código penal de 2006”. En *Derecho Penal y Criminología como fundamento de la política criminal. Estudios en homenaje al Profesor Alfonso Serrano Gómez*. Francisco Bueno Arús / Helmut Kury / Luis Rodríguez Ramos, et al. (dirs.) Ed. Dykinson. Madrid, 2006, págs. 1347-1382.

En el apartado que afecta al concepto “ruido”, apostando por su inclusión en el Libro II como tipo atenuado, encontramos una nueva ubicación de un precepto que constituía una falta contra las personas, desde ahora incorporado al delito de lesiones, con idéntica redacción exceptuando la pena de multa, elevada en su umbral mínimo y máximo. Se contempla en el art. 147.3 << *El que golpear o maltratar de obra a otro sin causarle lesión, será castigado con la pena de multa de uno a dos meses*>>, configurándose como un tipo perseguible sólo a instancia de parte.<sup>247</sup>

El único caso estricta y específicamente ambiental al que se despoja de la categoría de falta, convirtiéndose en delito leve, es la conducta descrita hasta ahora en el art. 632.1, que se incluye en la nueva redacción del apartado 2 del art. 332 como tipo atenuado, siempre y cuando no cause un grave perjuicio para el medio ambiente, en el que la pena de multa se incrementa considerablemente, así como la acción típica, que completa la redacción, más extensa, del art.332.<sup>248</sup>

Particularmente creemos que no consigue cumplir con la vertiente fragmentaria del principio de mínima intervención del Derecho penal. Sobre todo, si nos atenemos a la exigua cuantía de la pena de multa y la comparamos con la cantidad que puede alcanzar una sanción administrativa por los mismos hechos, por consiguiente revela la escasa trascendencia penológica de la medida.<sup>249</sup>

---

<sup>247</sup> Por Disposición final segunda de la LO 1/2015, de 30 de marzo se modifican varios artículos de la LECrim en atención a la nueva categoría de delitos leves. El Juez de Instrucción es el encargado del conocimiento y fallo, salvo competencia específica del Juez de violencia de género (art. 14.5.1º); el procedimiento para el juicio ocupa parte del Libro VI, que adopta nueva rúbrica (arts. 962 y ss).

<sup>248</sup> El art. 332 queda redactado como sigue: <<1. *El que con grave perjuicio para el medio ambiente corte, tale, queme, arranque, recolecte o efectúe tráfico ilegal de alguna especie o subespecie de flora amenazada o de sus propágulos, o destruya o altere gravemente su hábitat, será castigado con la pena de prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses. 2. Cuando no se cause un grave perjuicio para el medio ambiente, se impondrá la pena de uno a cuatro meses*>>. La pena de multa contemplada hasta ahora en el art. 632.1 era de 10 a 30 días o trabajos en beneficio de la comunidad de 20 a 30 días.

<sup>249</sup> El art. 29.1 de la Ley 37/2003, del Ruido contempla: a) En el caso de infracciones muy graves: 1º Multas desde 12.001 hasta 300.000 euros. b) En el caso de infracciones graves: 1º Multas desde 601 hasta 12.000 euros. c) En el caso de infracciones leves, multas de hasta 600 euros. Además, estas cuantías pueden verse aumentadas en virtud de la Disposición final tercera en materia de actualización de sanciones, que permite al Gobierno adecuarlas según varíe anualmente el IPC. En el ámbito penal, la cuantía de la pena de multa rara vez superará las cifras mencionadas. No ha variado la inversión del orden valorativo en cuanto a la pena de multa, que despoja así a lo que debiera ser más grave –el delito– de su superior carga afflictiva en relación con la sanción administrativa. En este sentido, *vid.* TERRADILLOS BASOCO, J. “El ilícito ecológico. Sanción penal-sanción administrativa”. En *El delito ecológico*. Juan Terradillos Basoco (ed. lit.) Ed. Trotta. Madrid, 1992, págs. 79-105, en especial 83.

El resto de conductas provocarán, o bien una vía de escape hacia el Derecho administrativo, o bien al Derecho civil, postura que cabalmente resulta siempre más deseable que optar por el eclipse integral que lo reenvíe al Derecho penal, debido en primer lugar, a su carácter de *ultima ratio*.<sup>250</sup>

A ello se debe unir un firme propósito de no revisar a la baja la vertiente fragmentaria del principio de intervención mínima, cuestión paradigmática que tendría que ocupar el primer escalón -entendido como obstáculo insalvable- en las diferentes opciones político-criminales, y no a la inversa.

Por desgracia, el desánimo provocado por diversas causas en torno a la permanencia del principio, provoca que éste se diluya, dejando paso a posturas más próximas a criterios de punición sobredimensionada. Las líneas dibujadas por los espacios protegidos con intensidad es lo que actualmente soporta el Derecho penal, pero al mismo tiempo pierden nitidez, grosor, y produce situaciones coincidentes con la denominada por un sector doctrinal “*administrativización del Derecho penal*”, sobre todo en relación a la irrupción de los bienes jurídicos supraindividuales.<sup>251</sup>

---

<sup>250</sup> Vid. RODRÍGUEZ RAMOS, L. Se muestra contrario a la opción político-criminal de <<*huir hacia el Derecho penal*>>, calificándolo de defecto frecuente, que criminaliza de forma simbólica y no real conductas que revelan soluciones ineficaces. “Protección penal del ambiente”. En *Comentarios a la legislación penal*, Tomo I (Derecho Penal y Constitución) Manuel Cobo del Rosal (dir.) Miguel Bajo Fernández (coord.) Ed. Edersa. Madrid, 1982, págs. 260-279, en especial 266. Dicha evasión en la actualidad se fragua de forma interna, dentro del propio Derecho penal, en lo que se podría denominar “huída al Derecho penal más grave desde los presupuestos del principio de mínima intervención”, en relación al binomio faltas-delitos leves.

<sup>251</sup> Vid. GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. Junto al fenómeno del acceso de bienes jurídicos supraindividuales al tradicional límite individualista de la teoría del bien jurídico, convierten al Derecho penal en una especie de derecho de gestión de problemas de carácter social. En *Introducción al Derecho penal. Instituciones, fundamentos y tendencias del Derecho Penal*, Vol. II (5ª ed.) Ed. Centro de Estudios Ramón Areces. Madrid, 2012, pág. 551. Vid. SILVA SÁNCHEZ, J. Mª. *La expansión del Derecho Penal. Aspectos de la Política criminal en las sociedades postindustriales* (3ª ed.) Ed. B de F. Montevideo / Buenos Aires, 2011.



## 4.2.- Hacia una nueva concepción pluridireccional y multidisciplinar de la materia

### 4.2.1.- La determinante experiencia del “ruido” en el contexto europeo: posicionamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en adelante TEDH, ha conseguido fundar y reforzar una reputada tendencia de protección sobre la cuestión por aplicación del art. 8 del Convenio de Roma<sup>252</sup>, vinculando vida privada –intimidad– y protección del domicilio a una jurisprudencia cada vez más contundente en la materia.<sup>253</sup>

---

<sup>252</sup> Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Públicas de Roma, de 24 de noviembre de 1950 (CEDH). Art. 8: <<1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. 2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto esta injerencia esté prevista por la Ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades de los demás>>. Vid. WARREN, S. / BRANDEIS, L. Alaban la capacidad del *common law* para potenciar la evolución de la protección de la persona y sus bienes, y reflexionan sobre cómo el derecho a la intimidad (aunque la monografía se centra en la libertad de expresión) se vería obligado a imponerse, como evidentemente ha sucedido (su primera edición en inglés data de 1890). Se extrae el siguiente párrafo por su visionaria sutileza en cuanto al estudio del fenómeno [*the right to be let alone*]: <<Así pues, con el reconocimiento del valor legal de las sensaciones, la protección contra los daños físicos se extendió a la prohibición del mero intento de causar tales daños [...] Y, corriendo el tiempo, a la protección cualitativa del individuo contra los ruidos y olores desagradables, contra el polvo y el humo y las vibraciones insoportables: el derecho sobre actividades nocivas y molestas tomaba cuerpo. Esta evolución del derecho era inevitable. La intensa vida intelectual y emocional y el mayor aprecio de las sensaciones que trajeron los avances de la civilización [...] Pensamientos, emociones y sensaciones exigían su reconocimiento legal... >>. En *El Derecho a la intimidad*. Pilar Baselga (tr.) Ed. Civitas. Madrid, 1995, págs. 21-25. Vid. MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, L., que auguraba los éxitos de la doctrina emanada del TEDH en relación al medio ambiente tras la recepción por el mismo del asunto *López Ostra*. En *La Europa de los derechos humanos*. Ed. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 1998, pág. 267. Vid. CARRILLO, M. Otorga a las actividades nocivas y molestas, en concreto al ruido, una vinculación estrecha con el derecho a la intimidad, apoyándose en la jurisprudencia emanada del TEDH. Su inclusión la considera de vital importancia en la evolución de los Derechos Fundamentales: <<La relevancia del planteamiento [...] es la de considerar que el derecho a no ser importunado en el ámbito de la vida privada, no sólo es generado por la intromisión dirigida o protagonizada por otra persona; es decir, no únicamente por la indiscreción o el acto doloso de alguien que con su acción se introduce sin previo consentimiento, en el cenáculo de lo privado>>. En *El Derecho a no ser Molestado. Información y vida privada*. Ed. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2003, págs. 159-162, en especial 161.

<sup>253</sup> De manera silente, a través de la doctrina emanada del TEDH en relación al estado español a partir de 1994, que a su vez se apoya en el CEDH, los distintos órdenes jurisdiccionales de nuestro país han ido construyendo una protección contra el ruido diferente a la considerada por el art. 45 CE, incluyendo como notas dominantes el derecho a la intimidad personal (art.18 CE) y a la protección de la salud (art.43 CE), entre otros. Sin embargo, las llamadas de atención a nuestros Tribunales han sido constantes por parte del TEDH hasta fechas muy recientes. Vid. CANO MURCIA, A. *Código del Ruido*. Ed. Civitas. Madrid, 2005. En nuestro país, es posible no tener que escalar siempre y de forma obligada hasta la cumbre del TC, gracias a que el art. 10.2 CE permite al juez ordinario interpretar las leyes conforme a los tratados internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido ratificados, pero en la

Si tenemos en cuenta que el CEDH no recoge en ninguno de sus instrumentos (Disposiciones y Protocolos) derecho alguno al medio ambiente como tal, ni de forma individual ni colectiva, dicha protección se ha abierto paso jurisprudencialmente y de forma indirecta a través de su estrecha afinidad con algunos de los derechos sí protegidos por el documento, como el derecho a la vida privada y familiar y al domicilio, el derecho a la vida o el derecho a la propiedad privada.<sup>254</sup> La primera llamada de atención a nuestro país por parte del TEDH se produjo con la resolución dictada en la Sentencia del caso *López Ostra vs. España*.<sup>255</sup>

---

práctica se observa la tendencia a no vincularlas demasiado con principios cuya formulación resulta bastante abstracta. *Vid.* FERRERES COMELLA, V. De forma similar ocurre en Francia, pero el autor considera necesario que los tribunales constitucionales de los distintos países conozcan primero del asunto para que <<la mayoría gubernamental tenga una primera oportunidad (quizás la única) de dar a conocer sus razones en defensa de la ley... >>; esto es, aunque tanto la seguridad jurídica como los principios democráticos generen simpatías hacia la adopción de un modelo centralizado de control en consonancia con el CEDH, el escepticismo ante la idea de proteger normas de origen supranacional por un modelo muy descentralizado es grande, sobre todo en países con democracias parlamentarias integradas en la cultura del “civil law”. En *Una defensa del modelo europeo de control de constitucionalidad*. Ed. Marcial Pons. Madrid, 2011, págs. 203 y ss.

<sup>254</sup> *Vid.*, extensamente MORTE, C. “El derecho a un medio ambiente sano en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”. En *El derecho a un medio ambiente adecuado*. Antonio Embid Irujo (dir.) Ed. Iustel. Madrid, 2008, págs. 351-368; MARTÍNEZ VÁZQUEZ, F. / DE MIGUEL PERALES, C. “Protección del medio ambiente a través de la protección de ciertos derechos fundamentales”. En AA.VV. *Nuevas formas de contaminación atmosférica. Un análisis jurídico multidisciplinar*. Ed. Dykinson / Universidad Pontificia Comillas. Madrid, 2010, págs. 85-115; MONESTIER MORALES, J. L. Considera que, tanto la doctrina del TEDH como su recepción por el TC han supuesto una lectura más amplia y flexible respecto a las inmisiones y las relaciones vecinales. En *Defensa frente al Ruido. Jurisprudencia y Formularios* (2ª ed.). Ed. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2014. pág. 42.

<sup>255</sup> *López Ostra contra España*, STEDH de 9 de diciembre de 1994 [TEDH/1994/3]. Ampliamente comentada por ininidad de autores, es una referencia fundamental para el propio Tribunal en asuntos planteados con posterioridad. La demandante vio inadmitida su demanda de amparo por el TC; Providencia de 26 de febrero de 1990 [RTC/1990/215], por lo que consideraba una vulneración de su derecho a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio a causa de las actividades molestas de una planta de residuos de industrias del cuero próxima a su domicilio. *Vid.* DE LA IGLESIA CHAMARRO, A. Resulta perfectamente trasladable a los supuestos de contaminación acústica y, de hecho, el TC alude a dicha sentencia en los pronunciamientos sobre el ruido que tuvieron lugar a continuación. “El ruido y los Derechos Fundamentales. Consideraciones al hilo de la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español”. En *Cuestiones Constitucionales (Revista Mexicana de Derecho Constitucional)*, núm. 12, enero-junio 2005, págs. 233-274. No obstante, la sentencia considerada como la pionera fue dictada en 1990 en relación a los ruidos provocados por el tráfico aéreo del londinense aeropuerto de Heathrow en los domicilios de los demandantes, aunque no desencadenó la condena del Reino Unido, sin duda por la importancia económica que la actividad aeroportuaria tiene para el país. *Powell y Rayner contra Reino Unido*, STEDH de 21 de febrero de 1990 [TEDH 1990/4]. *Vid.* HERRERA DEL REY, J. J. “La defensa jurídica contra la contaminación acústica”, op. cit., págs. 117-119; LOZANO CUTANDA, B. “La evolución de la normativa comunitaria del ruido: hacia un planteamiento común europeo de la lucha contra la contaminación acústica”. En *Revista Interdisciplinar de Gestión Ambiental*, Vol. 62, febrero 2004, págs. 7-25; MONESTIER MORALES, J-L. “Defensa frente al Ruido. Jurisprudencia y Formularios”, op. cit., págs. 100-108. Esta doctrina fue corregida en orden a los mismos hechos en 2001, esta vez con la condena del Reino Unido en *Hatton y otros contra Reino Unido*, STEDH (sección 3ª) de 2 de octubre de 2001 [TEDH 2001\567] y ratificada por la Gran Sala en *Hatton y otros contra Reino Unido*, STEDH de 8 julio 2003 [TEDH 2003\40], tras el recurso presentado por el Gobierno británico, pero lo relevante de la misma es que el Tribunal condena al Estado por vulneración del art. 13 del Convenio (derecho a un recurso efectivo), no por violación del art. 8, apartándose de la primera decisión,

Continúa la ruta marcada otra resolución emitida 10 años después en *Moreno Gómez vs. España*<sup>256</sup>, que definitivamente cristaliza en 2011 con el asunto *Martínez Martínez vs. España*.<sup>257</sup>

---

en la que sí se declaraba vulnerado el art. 8 CEDH. La cuestión no suscitó la sensibilidad necesaria de los miembros del Tribunal en relación a la gravedad de los ruidos que afectaban a la vida privada y familiar de los afectados, excepto la opinión disidente de 5 de sus miembros, los jueces Sr. Costa, Ress, Türmen, Zupancik y Sra. Steinerde, de la que se extrae un párrafo: <<Nuestra opinión disidente común se basa principalmente en nuestra interpretación de la jurisprudencia aplicable, en el estado actual de su evolución. Además, la estrecha relación entre la protección de los derechos humanos y la necesidad urgente de descontaminar el medio ambiente nos lleva a considerar la salud como la necesidad humana fundamental y a considerarla preeminente. Después de todo, ¿qué representan los derechos humanos relativos al respeto del domicilio si, como en este caso, el domicilio de una persona, tanto de día como de noche, resuena constante o intermitentemente con el estruendo de los motores de los aviones?>>.

<sup>256</sup> *Moreno Gómez contra España*, STEDH (Sección 3ª) de 16 de noviembre de 2004 [TEDH/2004/68]. A raíz de la comentadísima STC (Pleno) 119/2001 de 29 de mayo [RTC/2001/119]. La demandante optó por la vía especial de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de Protección de los Derechos Fundamentales de la persona para recurrir la desestimación de una indemnización por silencio administrativo, a causa de los daños sufridos por la inactividad del Ayuntamiento de Valencia. La vivienda se situaba en la zona de San José, con multitud de establecimientos de ocio; en concreto una discoteca ubicada en los bajos del inmueble con horario de cierre en la madrugada. Previamente, nuestro TC había desestimado el recurso presentado por la demandante basándose, entre otros motivos, en la falta de acreditación del nivel de ruido, hecho que parece irónico si se tiene en cuenta que el propio Ayuntamiento de Valencia había declarado la zona como “zona acústicamente saturada” (ZAS), en el más claro ejemplo que se pueda concebir sobre lo que se denomina un “hecho notorio”. Además incumplió la normativa dictada, pues todavía concedió una licencia de apertura a otra discoteca después de su entrada en vigor, con independencia de que con posterioridad fuese anulada en sede judicial. No se apreció la existencia de nexo causal entre la inactividad administrativa y la lesión del derecho fundamental alegado. Pero tampoco razona claramente el Alto Tribunal por qué, tras expresar que no es necesario resaltar el valor de la referencia científica marcada por la OMS sobre el ruido como factor psicopatógeno (FJ 5), no considera suficiente la prueba presentada por la demandante de amparo, en relación al insomnio prolongado en el tiempo (FJ 7). Se emiten dos votos particulares concurrentes por parte de los Magistrados D. Manuel Jiménez de Parga y Cabrera y D. Fernando Garrido Falla, en los que se plantea tanto la necesidad de reivindicar el componente subjetivo del art. 45.1 CE como no negar la separación entre integridad física (art. 15) y salud (art. 43), posición que comparto. Un estudio de dicha sentencia en VIVES ANTÓN, T. S. / ORTS BERENGUER, E. Comentan que la denegación de amparo solicitado por la demandante es correcta, porque el TC lo que hizo fue actuar dentro de la legalidad constitucional, que impide sustituir la apreciación de las pruebas practicadas por la jurisdicción ordinaria, ya que su juicio es tan sólo de razonabilidad. “Comentarios a propósito de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 16 de noviembre de 2004 (caso Moreno Gómez contra España)”. En *Estudios de Derecho Ambiental. Libro Homenaje al profesor Josep Miquel Prats Canut*. Gonzalo Quintero Olivares / Fermín Morales Prats (coords.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2008, págs. 411-424. Vid. CANOSA USERA, R. Concluye que en la resolución del Alto Tribunal no existe un <<rebasamiento>> del ámbito tasado en el art. 53.2 CE, sino más bien un <<solapamiento>> o <<yuxtaposición>> entre los derechos proclamados por el art. 45.1 y ciertos derechos de libertad. “Pretensiones ambientales en amparo constitucional. Comentario a la STC 119/2001, de 24 de mayo”. En *Revista Teoría y realidad constitucional*, núm. 10-11. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, 2002-2003, págs. 697-718. Vid. DE LA IGLESIA CHAMARRO, A. Aplauda la argumentación del TC en relación a la necesidad de conjugar el contenido de los derechos a las nuevas realidades sociales y, de hecho, la avocación al Pleno de la cuestión demuestra una incipiente sensibilidad ante la cuestión planteada. En “El ruido y los Derechos Fundamentales. Consideraciones al hilo de la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español”, op. cit., págs. 244 y ss. Cfr. EGEA FERNÁNDEZ, J. Opina que el TC sigue en esta sentencia una línea interpretativa demasiado forzada respecto al art. 18 CE, si bien admite la vinculación entre las inmisiones por ruido y el derecho a la integridad física (que el TC aproxima al derecho a la salud), no aprecia tal vinculación con los derechos a la intimidad personal y familiar o con la inviolabilidad del domicilio. “Relevancia constitucional de las inmisiones por ruido ambiental procedente de una zona de ocio nocturno. Recepción de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Comentario a la STC 119/2001, de 24 de mayo)”. En *Revista Derecho Privado y Constitución*, núm. 15. Ed. Centro

Otros países europeos también han sido objeto de condena por aplicación del art.8 del CEDH, en relación a la inmisión de ruidos en domicilios de ciudadanos por

---

de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001, págs. 69-106. Vid. MARTÍN MORALES, R. / REQUENA LÓPEZ, T. / GUILLÉN LÓPEZ, E. Consideran que lo relevante en sede de derechos fundamentales es que la respuesta viene dada en clave de intimidad, ya que tanto las SSTC 119/2001 y 16/2004 como la propia Ley del Ruido exponen dicha línea de protección; sin embargo, técnicamente, los efectos del ruido se comprenden mejor en términos de protección de la salud, aún teniendo en cuenta que el art. 43 CE cae fuera del ámbito de protección del recurso de amparo. “Aspectos constitucionales de la Ley del Ruido: derechos, fuentes y competencias”. En *Régimen jurídico del ruido: una perspectiva integral y comparada*. Estanislao Arana García / M<sup>a</sup> Asunción Torres López (coords.) Ed. Comares. Granada, 2004, págs. 159-181. No obstante, el TEDH entiende que la exigencia de prueba en este caso es demasiado formalista: <<En opinión del Tribunal [...] la prueba es demasiado formalista puesto que las autoridades municipales habían calificado la zona [...] de zona acústicamente saturada [...] Por tanto, exigir a alguien [...] la prueba de algo que ya es conocido y oficial para la autoridad municipal no parece necesario>> (§ 59). También que el Ayuntamiento de Valencia toleró un incumplimiento reiterado de la normativa por terceros, condenando a España por violación del art.8 del Convenio: <<Una regulación para proteger los derechos garantizados sería una medida ilusoria si no se cumple de forma constante y el Tribunal debe recordar que el Convenio [...] trata de proteger los derechos efectivos y no ilusorios o teóricos. Los hechos demuestran que la demandante sufrió una vulneración grave de su derecho al respeto del domicilio debida a la pasividad de la Administración frente al ruido nocturno>> (§ 61). Vid. LEZERTÚA RODRÍGUEZ, M. “La protección del medio ambiente en el Consejo de Europa”. En *Derecho europeo medioambiental: La protección del medio ambiente en la Unión Europea. Aspectos críticos*. Antonio Vercher Noguera (dir.) Ed. Consejo general del Poder Judicial. Madrid, 2008, págs. 85-162; HERRERA DEL REY, J. J. “La defensa jurídica contra la contaminación acústica”, op. cit., págs. 117-119; MONESTIER MORALES, J. L. “Defensa frente al Ruido. Jurisprudencia y Formularios”, op. cit., págs. 109-116. En otro asunto planteado por una ciudadana española ante el TEDH en el que se sugiere cierto paralelismo con el asunto *Moreno Gómez vs. España*, el Tribunal considera que no son similares, pues las vibraciones y radiaciones producidas por un transformador de energía eléctrica junto al domicilio de la demandante no alcanzan los criterios de gravedad para la salud que son exigibles, y no considera la injerencia desproporcionada con la finalidad perseguida, ya que el Gobierno justificó sobradamente el beneficio que obtuvo la ciudad de Cáceres al ver ampliada la red de energía eléctrica, por lo que inadmite la demanda. *Ruano Morcuende contra España*, DTEDH (Sección 4<sup>a</sup>), de 6 de septiembre de 2005 [TEDH/2005/87].

<sup>257</sup> *Martínez Martínez contra España*, STEDH (Sección 3<sup>a</sup>) de 18 de octubre de 2011 [TEDH/2011/86]. Se trata de la más reciente en relación a nuestro país y en ella se expresa con suficiente claridad la importancia que puede tener el exceso de ruido para la salud de las personas, observando la relación causal entre el mismo y las afecciones de carácter crónico que padecían el demandante y su familia, en especial su hija, por la actividad que llevaba a cabo una discoteca con terraza junto al domicilio. Según el Tribunal, el caso se asemeja a *Moreno Gómez contra España*, ya que el interesado reside en una zona en la que el ruido nocturno es obvio e innegable, superando los niveles mínimos de gravedad según sendos informes periciales emitidos por el SEPRONA, así como los informes médicos presentados. Se declara que ha habido violación del art. 8 del Convenio puesto que el Ayuntamiento de Cartagena no adoptó las medidas necesarias para que cesaran los ruidos, incluso apeló la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.1 de Cartagena, que había anulado la licencia concedida a la discoteca, mientras el demandante tuvo que soportar durante 10 años la situación denunciada. Vid. GARCÍA URETA, A. Se refiere a la sutil crítica lanzada por el TEDH a nuestro TC, al decir que las jurisdicciones internas tampoco se pronunciaron sobre la vulneración de los derechos fundamentales, aunque había sido alegada por el interesado (§51). “El ruido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Otra llamada de atención a la jurisdicción contencioso-administrativa (y también al Tribunal Constitucional): Comentario a *Martínez Martínez vs. España*, sentencia del TEDH de 18 de octubre de 2011”. En *Actualidad Jurídica Ambiental*, 21 de noviembre de 2011. Disponible en: <http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?m=201111> (último acceso 12/07/2015). Vid. BOUAZZA ARIÑO, O. “Tribunal Europeo de Derechos Humanos: derechos frente a la contaminación, libertad de conciencia ambiental y protección urbanística del suelo”. En *Observatorio de Políticas Ambientales*, 2012. Fernando López Ramón (coord.) Ed. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), junio 2012, págs. 101-120; MONESTIER MORALES, J-L. En “Defensa frente al Ruido. Jurisprudencia y Formularios”, op. cit., págs. 116 y ss.

muy diversos focos de emisión.<sup>258</sup> En estos últimos años, distintos ciudadanos han elevado sus demandas al TEDH por cuestiones relacionadas con el ruido molesto generado por focos dispares que, sin embargo, comparten el mismo punto de partida en cuanto a su restauración, la inactividad de las respectivas administraciones competentes en estos ámbitos, con resultados dispares.<sup>259</sup>

La labor del TEDH ha sido importantísima desde un punto de vista interpretativo, sobre todo a la hora de proclamar la obligación de los Estados -de naturaleza positiva-, de garantizar la vida privada de sus ciudadanos, no sólo absteniéndose de injerencias arbitrarias -vertiente negativa-, sino actuando de manera

---

<sup>258</sup> Una de las más recientes, relativa a los incidentes provocados por los ruidos que emanaban de los altavoces instalados en la mezquita Banya Bashi para llamar a la oración en la ciudad de Sofía (Bulgaria). Estos altavoces funcionan durante cinco minutos cinco veces al día, así como en la oración del viernes. Están apagados desde las 22:00 hasta las 06:00 horas, para cumplir con los reglamentos relativos al nivel de ruido urbano. A raíz de las molestias, se produjo un enfrentamiento entre los miembros y simpatizantes del partido político búlgaro Ataka y los fieles musulmanes que se habían reunido en torno a la mezquita para la oración regular del viernes. Finalmente, se impone el derecho a la libertad religiosa y de culto. STEDH (Fourth Section, Application nº. 30587/13) *Karahmed contra Bulgaria*, de 24 de febrero de 2015. Versión final de 24 de mayo de 2015 [JUR 2015\60020]. Por otra parte, *Dees contra Hungría*, STEDH de 9 de noviembre de 2010 [JUR/2010/367178], acerca de los efectos del ruido por el tráfico rodado, que habían convertido la vivienda, según el demandante, en inhabitable. *Mileva y otros contra Bulgaria*, STEDH (Sección 5ª) de 25 de noviembre de 2010 [JUR/2010/389784], sobre el ruido producido por la actividad de un club informático en un conjunto residencial. *Oluic contra Croacia*, STEDH (Sección 1ª) de 20 de mayo de 2010 [JUR/2010/161026], en un asunto que el propio Tribunal considera semejante a *Moreno Gómez contra España*. Aquí recuerda el Tribunal que <<... los demandantes deben hacer el uso normal de los recursos nacionales que sean efectivos, suficientes y accesibles. También indica que, en el supuesto de que existan varios recursos a disposición de la persona, ésta tendrá derecho a escoger aquel que aborde el fondo de la cuestión>> (§ 35). Por tanto, los Gobiernos no pueden utilizar el argumento del no agotamiento de todos los recursos internos existentes cuando el perjudicado utiliza el que crea más conveniente. En otro caso reciente, relativo a la denominada “crisis de las basuras” en la región de Campania (Italia), los residuos acumulados provocaron la demanda conjunta de varias personas afectadas, pero en este caso el Tribunal consideró que había existido violación del art. 8 tan sólo en su vertiente material, no en su vertiente procesal, porque las autoridades habían difundido la información suficiente a los demandantes sobre los riesgos potenciales que podían sufrir si continuaban residiendo en la zona. *Di Sarno y otros contra Italia*, STEDH (Sección 2ª) de 10 de enero de 2012 [TEDH/2012/2].

<sup>259</sup> Vid. BOUAZZA ARIÑO, O. Por ejemplo, frente al ruido provocado por las fiestas populares, en *Zammit Maempel vs. Malta*, de 22 de noviembre de 2011, el tribunal entiende que no existe violación del art. 8 del Convenio, al haber adquirido los demandantes la propiedad conociendo de antemano la celebración de las fiestas en las proximidades, junto al hecho de que el ruido de los fuegos artificiales tuvo una duración limitada y que, además, era uno de los principales reclamos de las fiestas y generaban ingresos importantes para la localidad. El estrés ambiental provocado por la creación de un centro comercial, con el consiguiente aumento del tráfico rodado en un barrio residencial, es otro de los supuestos estudiados en *Tadeusz Frankowski y otros vs. Polonia*, de 20 de septiembre de 2011. En este caso, se inadmite la demanda por varios motivos, entre los que se citan que las autoridades administrativas habían ponderado los intereses individuales y colectivos en conflicto de forma razonable, habían adoptado medidas racionales para minimizar las molestias, el plan local de urbanismo calificaba el suelo de industrial y los demandantes no aportaron mediciones que corroboraran sus quejas. Por otra parte, no considera suficiente el dato de que no se diera la preceptiva participación a los vecinos durante la tramitación de la autorización de apertura del centro comercial, para poder considerarles víctimas de una violación del Convenio. En “Tribunal Europeo de Derechos Humanos: derechos frente a la contaminación, libertad de conciencia ambiental y protección urbanística del suelo”, op. cit., págs. 105-111.

efectiva, sin olvidar en ningún momento que, si bien se trata de un Tribunal externo a nuestro sistema, nos vincula de forma extraordinaria y por duplicado, cuando resuelve asuntos que nos conciernen como país condenado, o sobre el que se alberguen dudas referidas al cumplimiento de las leyes, pues tanto distorsiona lo primero como lo segundo.<sup>260</sup>

Lo cierto es que esta opción todavía resulta, en muchos casos, una ulterior y onerosa posibilidad de obtener pronunciamientos favorables por parte de aquellos ciudadanos que se atreven a emprender el largo y desafortunado camino judicial para proteger sus derechos en este ámbito, sobre todo cuando se enfrentan a posiciones más o menos desobedientes o insensibles por parte de las distintas administraciones públicas, en concreto las locales, pues a la luz de determinadas resoluciones recientes por parte de nuestros tribunales, el único cauce que no encuentra una limitación extraordinaria es acudir al TEDH.<sup>261</sup>

---

<sup>260</sup> De esta opinión, MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, L. “El ruido: reciente respuesta legal y jurisprudencial”. En *Foro. Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales, Nueva Época*, núm. 1. Universidad Complutense de Madrid, 2005, págs. 11-43.

<sup>261</sup> Tal es el caso de un grupo de 55 vecinos de Zaragoza afectado por los ruidos procedentes de varios establecimientos públicos de ocio nocturno (un total de 86), concentrados en la zona de Moncasí, que vieron, tras un largo periplo anterior a la presentación de la demanda, cómo en principio, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo les daba la razón al menos en cuanto a una de las dos impugnaciones presentadas; frente a la Diputación General de Aragón por desestimación expresa de reclamación de responsabilidad patrimonial (desestimada), y frente al Ayuntamiento de Zaragoza por inactividad en cuanto a las obligaciones de control que le competen, condenando a éste último al abono de 7.000€ a cada uno de los litigantes y al cese de la situación que fundamentaba la demanda. Además, reconoce como situación jurídica individualizada el derecho de cada uno de los vecinos, que previamente habían constituido una Asociación. Así, SJCA núm. 3 de Zaragoza, 56/2007 de 14 de febrero [RJCA\2007\179]. Sin embargo, la entidad local y la compañía de seguros que debía sufragar las indemnizaciones presentaron recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y, transcurridos 4 años, los demandantes se encontraron con la sorpresa de que lo conseguido desaparecía, aún siendo escaso en cuanto a la restauración de un hábitat agradable y sostenible en la zona donde residen, pues se estiman los recursos de apelación interpuestos, exigiéndose la prueba individualizada a cada uno de los 55 demandantes sobre el daño concreto sufrido. Respecto a esta posición, cabe recordar que, si bien se alude tangencialmente a la doctrina del TEDH sobre el asunto *Moreno Gómez contra España*, de 16 de noviembre de 2004, en relación a la necesidad de individualizar el daño, posteriormente el órgano europeo corrige en gran medida esta postura. Por otra parte, se le niega capacidad actora al ente colectivo (Asociación de Vecinos la Huerva) al no haber acreditado el oportuno Acuerdo que legitima la interposición del recurso [art. 45.2 d) LJCA]; tan sólo se aportó un poder por el que el Presidente otorgaba poder general para pleitos a la Procuradora y en esto sustenta la Sala la incapacidad actora. STSJ Aragón (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª) 676/2011 de 17 de octubre [JUR\2011\426907].

#### 4.2.2.- Recepción de la doctrina europea por el Tribunal Constitucional

Situándonos en el derecho interno de nuestro país, la primera ocasión que tuvo el TC de pronunciarse sobre los problemas derivados del ruido fue en 1987, pero lejos de penetrar en el asunto de fondo, se limitó a proclamar la falta de contenido constitucional del recurso, aunque la decisión de inadmisión fuera consecuente en lo sustantivo con la decisión del TS, puesto que las pretensiones del actor chocaban frontalmente con intereses de carácter superior.<sup>262</sup>

En un contexto menos particular, atendiendo a criterios medioambientales generales, el TC ha mantenido una posición antropocéntrica relativa o de corte moderado desde sus primeros pronunciamientos, en consonancia con lo expresado en todos los textos normativos, nacionales e internacionales, desde que se inició la particular singladura proteccionista del medio ambiente, aunque ésta concepción, *a posteriori*, se ha visto matizada tímidamente con la adopción de posturas más acordes al carácter global del ecosistema, es decir, apostando por un modelo ecocéntrico moderado<sup>263</sup>, en el que precisamente el art. 45.1 CE no penetra con profundidad al

---

<sup>262</sup> Resuelve mediante Auto de inadmisión un recurso de amparo interpuesto por el dueño de un bar en Sevilla al que le habían clausurado el local por las molestias causadas al vecindario, al alterar el *status* del local en cuestión, cuyo titular había solicitado una ampliación de la licencia de apertura para dotarlo de música ambiental y dos máquinas recreativas. Trae causa de la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 11 marzo de 1987 [RJ 1987\1471], que revoca una Sentencia dictada por la Sala Quinta de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, ratificando la postura del Ayuntamiento y desestimando las pretensiones del recurrente. *Vid.* MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, L. Admite el autor que la panorámica es bien diversa en relación a las actuaciones que llevan a cabo las diferentes administraciones, algunas de las cuales <<... omiten olímpicamente los cuidados más elementales>>. No obstante, no sería tan difícil sostener que la normativa simple y llanamente, se aplicara de verdad <<desde las previsiones urbanísticas –zonificación, régimen de distancias, control riguroso del número de establecimientos para evitar concentraciones inoportunas–, a las fórmulas normativas... >>. En “La defensa frente al ruido ante el Tribunal Constitucional (Auto de 13 de octubre de 1987, en relación con la clausura de un bar en Sevilla)”, op. cit., págs. 209-211.

<sup>263</sup> STC (Pleno) 102/1995 de 26 de junio [RTC 1995\102] <<El ambiente, por otra parte, es un concepto esencialmente antropocéntrico y relativo. No hay ni puede haber una idea abstracta, intemporal y utópica del medio, fuera del tiempo y del espacio. Es siempre una concepción concreta, perteneciente al hoy y operante aquí>> (FJ 4). *Vid.* CANOSA USERA, R. Califica a la teoría expresada en esta sentencia de <<funcionalista y dinámica>>, porque cada generación se dará una noción de ambiente adecuada a su posición en el tiempo, construyendo armonías o desarmonías más o menos acusadas entre los diferentes factores ambientales. En “Constitución y medio ambiente”, op. cit., págs. 66-69. Ahora bien, hay que matizar que dicha categorización conduce a la desaparición del concepto, porque si el objetivo es mantener un *status* de permanencia de determinados valores ambientales, la complicación de mantener esa idea se multiplica con la permeabilidad propuesta.

proclamar que <<Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo>>.<sup>264</sup>

Con posterioridad, el TC ha corregido lagunas, reconociendo y ratificando la influyente doctrina del TEDH<sup>265</sup>, pero dicho influjo no se traduce en una práctica que haya resultado determinante en la materia, a la luz de las últimas resoluciones dictadas en este ámbito tan específico.<sup>266</sup>

---

<sup>264</sup> El adverbio “todos” bien puede sugerir o interpretarse como “el todo”, por así decirlo, el ecosistema en su conjunto, íntegro, absoluto, pero evidentemente la idea se deshace en el momento en que se asocia de manera indisoluble al desarrollo de la “persona”, desvaneciéndose aún más cuando se alude a la contraposición del mismo derecho, es decir, al deber de conservación, tan sólo se puede pregonar respecto de seres humanos. Planteándose el término <<medio ambiente>> en sede penal, *vid.* QUERALT JIMÉNEZ, J. J. Opina que acotarlo estrictamente a un concepto homocéntrico no excluye tener en cuenta el equilibrio propio de la fauna y flora, pero le sigue pareciendo estrecho, así que, en línea con la más reciente jurisprudencia, se muestra partidario de incluir al hábitat urbano y domiciliario. En *Derecho penal español. Parte especial*. (6ª ed. actualizada) Ed. Atelier. Barcelona, 2010, pág. 926. En el mismo sentido, *vid.* JUANETY DORADO, C. / ANARTE BORRALLA, E. Muestran la relación tan profunda que existe entre la saturación acústica y los arts. 15 y 18 CE, y teniendo en cuenta que se trata de una protección fundamentalmente antropocéntrica, <<... no se puede descartar un perfil más amplio –dado que los ruidos pueden perjudicar el equilibrio de los sistemas naturales, afectando por ejemplo a la fauna existente en la zona afectada por los ruidos–>>. “Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente”. En *Derecho Penal. Parte Especial*, Vol. III. Javier Boix Reig (dir.) Ed. Iustel. Madrid, 2012, págs. 133-167.

<sup>265</sup> STC (Sala Primera) 16/2004, de 23 febrero [RTC 2004\16]. La curiosidad de esta sentencia estriba en que el recurrente es el sancionado, titular de un local ruidoso en Gijón, que estima violado el principio de legalidad (art. 25 CE), por habersele aplicado la Ordenanza Municipal sobre Protección contra la Contaminación Acústica; finalmente el TC concluye que existe suficiente cobertura legal para aplicar la sanción, pero además, al fallo se añaden parte de los argumentos sobre el problema que subyace, el ruido como factor patógeno, ya pregonados en la importante sentencia 119/2001. *Vid.* MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, L. En “El ruido: reciente respuesta legal y jurisprudencial”, *op. cit.*, págs. 36 y ss. *Vid.* DE LA IGLESIA CHAMARRO, A. Anota la disparidad de criterios ante situaciones semejantes, reflejadas en el fallo de las SSTC 16/2004 y 25/2004, ambas de 26 de febrero, sobre el alcance del principio de legalidad en materia sancionadora cuando se aplican normas municipales sobre protección acústica. En “El ruido y los Derechos Fundamentales. Consideraciones al hilo de la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español”, *op. cit.*, págs. 265 y ss. *Vid.* LOZANO CUTANDA, B. Apunta la influencia que tuvo en la jurisprudencia posterior del TS, la incorporación de la doctrina formulada por el TEDH en materia de ruidos, a través de los pronunciamientos del TC desde 1991, pero especialmente consolidada en la STC 16/2004. En “Derecho ambiental administrativo”, *op. cit.*, pág. 116.

<sup>266</sup> STC (Pleno) 150/2011, de 29 de septiembre [JUR\2011\357557]. Desestima el recurso de amparo en un asunto muy similar a *Moreno Gómez contra España*, con un voto particular concurrente formulado por el Magistrado D. Manuel Aragón Reyes, en el que se aboga por la inexistencia de un <<derecho fundamental al silencio>>, instando además a la rectificación de la doctrina constitucional fijada por la STC 119/2001, de 24 de mayo, aunque básicamente se centra en la limitación del contenido de los derechos fundamentales protegidos por nuestra Constitución, en contraposición a la línea del TEDH, que considera el derecho a la intimidad en sentido amplio (connotación por clara influencia del derecho anglosajón). A conclusiones similares llega en relación al derecho a la inviolabilidad del domicilio. No obstante, el voto particular del Magistrado D. Luis Ignacio Ortega Álvarez al que se adhieren D. Eugeni Gay Montalvo y Dª Elisa Pérez Vera subraya (opinión que comparto) la oposición a que la exigencia de prueba del daño en el interior de la vivienda sea requisito constitucional para amparar el derecho fundamental, posición ya reiterada por el propio TEDH (que sólo exige la conexión de la vivienda con un entorno de ruido excesivo) en el asunto *Moreno Gómez vs. España* y ratificada en *Dees vs. Hungría*. También cita la doctrina del Tribunal europeo en relación a la actuación positiva, pero insuficiente o ineficaz para eliminar la vulneración del derecho por parte de las administraciones públicas: <<Es decir,



---

que para la mayoría del Pleno del Tribunal cuando el ruido ambiental –producido por bares y discotecas como en el Barrio de San José de Valencia– supere los máximos autorizados y aunque la zona haya sido declarada por el propio Ayuntamiento como zona acústica saturada, eso no supone la vulneración de un derecho fundamental, sino que el recurrente, además, deberá probar el ruido en el interior de la vivienda y el daño causado>>. En cuanto al fundamento jurídico en el que se concluye que la estimación del recurso sería como crear derechos constitucionales *ex novo* al amparo del art. 10.2 CE parece erróneo, pues el propio contenido esencial de los derechos fundamentales consistiría en incorporar <<en el sentido de no contradecir>> las facultades, garantías o posiciones jurídicas de los Tratados. Se ilustra tal premisa con claros ejemplos, como el derecho a la segunda instancia penal <<que no aparece explícitamente en el art. 24.1 CE, pero que este Tribunal así lo entiende desde la STC 42/1982, de 5 de julio>>. También se considera suficiente el informe clínico laboral que aportó el recurrente para probar el daño causado a su salud, en el que se le diagnosticó un <<síndrome ansioso-depresivo reactivo a exposición a ruido no deseado en el interior de su vivienda habitual, que se manifiesta en forma de ansiedad, merma en el rendimiento intelectual, irritabilidad y somatizaciones. Todo lo anterior guarda relación con el agente contaminante: el ruido en el entorno de su vivienda>>. Vid. MORETÓN SANZ, M<sup>a</sup> F. La autora resalta con buen criterio que, pese a la desestimación del amparo por la insuficiencia de la prueba en la sentencia comentada, el Tribunal Supremo (en el ámbito civil y contencioso-administrativo) sí aplica los argumentos del TEDH de forma constante. “Nuevos perfiles de la responsabilidad patrimonial de los entes locales según el Tribunal Constitucional: prueba individualizada del ruido, adopción de medidas suficientes por el Ayuntamiento y doctrina del TEDH sobre intimidad personal y familiar en el ámbito domiciliario”. En *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, núm. 729, enero 2012, págs. 483-515. Disponible en: <http://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/individualizada-ruido-domiciliario-365340394> (último acceso 12/07/2015). Otro aspecto de la sentencia que resulta particularmente paradójico es una parte del argumento respecto a la prueba individualizada y la repercusión del ruido ambiental en el interior de la vivienda concreta: <<Esa concreta repercusión dependerá de las condiciones identificativas de cada vivienda [...] Además, si se trata, como en este caso, de la incidencia sobre el descanso nocturno habrá que considerar la distribución de la vivienda, pues no es lo mismo una habitación que linde con la pared exterior que una que sea interior. En fin, las viviendas sitas en una zona acústicamente saturada pueden, en función de una serie de condiciones particulares, soportar un nivel sonoro que esté dentro del límite de la Ordenanza, o que lo exceda, o que lo supere de un modo tan cualificado que impida el disfrute pacífico del domicilio lesionando así el derecho a la intimidad domiciliaria, o que lo rebase en términos aún más intensos que suponga una violación al derecho a la integridad física o moral>> (FJ 8). Parece pues que el Alto Tribunal desconecta totalmente los arts. 15 y 18.1 y 2 del derecho a la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 CE), en un ámbito en el que éste presenta especial trascendencia, como es el domicilio particular del recurrente, puesto que éste es libre de querer pernoctar o desarrollar actividades diversas en cualquiera de las estancias de la vivienda. Además, se aparta de la doctrina desarrollada con anterioridad en la STC 16/2004: <<Partiendo de la doctrina expuesta en la STC 119/2001, de 24 de mayo (RTC 2001/119), debemos señalar que los derechos a la integridad física y moral, a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio han adquirido también una dimensión positiva en relación con el libre desarrollo de la personalidad, orientada a la plena efectividad de estos derechos fundamentales. Habida cuenta de que nuestro texto constitucional no consagra derechos meramente ilusorios, sino reales y efectivos (STC 12/1994, de 17 de enero [RTC 1994/12], F.6), se hace imprescindible asegurar su protección no sólo frente a las injerencias tradicionales, sino también frente a los riesgos que pueden surgir en una sociedad tecnológicamente avanzada>> (FJ 3). Vid. VALENCIA MARTÍN, G. Afirma la coherencia de esta sentencia con el resto de pronunciamientos anteriores del TC en relación al derecho a un medio ambiente adecuado, <<reacio a elevarlo por encima de su simple condición de principio rector>>. Subraya, además, la crítica contra una resolución que, tanto por su pretensión económica (moderada) como por la justicia solicitada por el colectivo vecinal, merecía otro desenlace. “Jurisprudencia constitucional: agua, ruido y cautelares”. En *Observatorio de Políticas Ambientales*, 2012. Fernando López Ramón (coord.) Ed. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), junio 2012, págs. 203-232; RUIZ-RICO RUIZ, C. Habla del inicio de un periodo de “desecologización” de los derechos fundamentales a raíz de esta sentencia. “La tutela constitucional y europea ante el ruido (a propósito de la STC 150/2011, de 29 de septiembre)”. En *El Derecho contra el ruido*. José Francisco Alenza García (dir.) Ed. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2013, págs. 239-266, en especial 254 y ss.

No obstante, no es posible obviar ni subestimar la aplicabilidad cada vez más limitada del recurso de amparo<sup>267</sup>. Por otra parte, tampoco parece que este cauce sea el más apropiado, es decir, que sea el Alto Tribunal, por la vía del amparo, el que tenga que realizar una exégesis de un problema que, dicho sea de paso, no llega a cumplir las exigencias formales de un derecho fundamental, es decir, no existe vía directa o de anclaje normativo en el Capítulo II del Título I del texto constitucional; el art. 45 se configura como un principio rector de la política social y económica (con la salvedad de poder acudir tanto al art. 18 por vulneración del derecho a la intimidad o a la inviolabilidad del domicilio, como al art. 19 por vulneración del derecho a elegir libremente la residencia, ambos en íntima conexión con estos supuestos). El despliegue internacional del art. 45 de nuestra Constitución, si bien expresamente no posee ningún potencial, tiene capacidad de proyección tanto a nivel europeo por aplicación del art. 93, como a nivel internacional por el art. 96.1, ambos recogidos en el texto

---

<sup>267</sup> De acuerdo con la reforma de la Ley Orgánica 2/1979 de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional conforme a la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, el recurso de amparo ve limitadas las condiciones de admisión (procedencia del recurso) previstas por el art. 44, puesto que a la alegación de la lesión de un derecho fundamental, ahora se suma la necesaria justificación expresa por parte del recurrente sobre <<... la especial trascendencia constitucional del recurso>> (art. 49.1). Para ello se atiende a los criterios establecidos por el art. 50.1, que proclama que necesariamente han de cumplirse todos y cada uno de los requisitos que se citan en el mismo. De otra parte, la inadmisión deja de ser motivada, pues basta que el TC especifique el requisito que se incumple en la providencia que la declare (art. 50.3). También se prevén sanciones de 600 a 3.000€ para quien lo formule con temeridad o abuso de derecho (art. 95.3). Paradójico es, al menos, que el propio recurrente tenga que reflejar esa trascendencia constitucional, cuando lo que se persigue precisamente es que sea el órgano consultado el que despeje las dudas respecto a la supuesta violación del derecho fundamental. *Vid.* PÉREZ MANZANO, M. “El acceso al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional frente a resoluciones del orden penal”. En *Constitución y sistema penal*. Santiago Mir Puig / Mirentxu Corcoy Bidasolo (dirs.) Juan Carlos Hortal Ibarra (coord.) Ed. Marcial Pons. Madrid, 2012, págs. 123-149. *Vid.* GARRIDO FALLA, F. / PALOMAR OLMEDA, A. / LOSADA GONZÁLEZ, H. Comentan la propuesta de supresión total del recurso de amparo ante la Comisión Constitucional del Senado en 1978, realizada por Martín Retortillo, que defendía la suficiencia de la jurisdicción contencioso-administrativa para hacer efectiva la protección de garantías individuales, y que obviamente no prosperó. *Tratado de Derecho Administrativo. Parte General*, Vol. I. (15ª ed.) Ed. Tecnos. Madrid, 2010, pág. 558. *Vid.* FERNÁNDEZ FARRERES, G. En relación a la inesperada modificación de la LRJPAC, por la vía de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial. En ella se añade un apartado 5º al art.139, norma que engloba la tradicional responsabilidad patrimonial del Estado, incorporando ahora la responsabilidad del mismo por la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo y cuestiones de inconstitucionalidad por parte del TC. El autor no oculta su sorpresa ante la nueva regulación, para la que se aprovechó e interpretó una resolución del Pleno de la Sala Tercera del TS: STS (Sección 1ª) de 26 de noviembre de 2009 [RJ 2009\5692], que anulaba un acuerdo del Ministerio de Justicia en el que se declaraba incompetente para conocer de una reclamación por responsabilidad patrimonial derivada del funcionamiento anormal del TC en la tramitación de un recurso de amparo. De hecho, considera la medida “inconstitucional”: <<Ninguna duda tengo acerca de la manifiesta inconstitucionalidad en la que se ha incurrido. La nueva función que se atribuye al Tribunal Constitucional, [...] vulnera frontalmente la reserva que dispone el art. 165 CE: “Una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional...”>>. “La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal del Tribunal Constitucional”. En REDA, núm. 146, abril-junio 2010, págs. 265-290.

constitucional.<sup>268</sup> La cuestión es que ésta no es, o no debería ser la función primordial del TC, aunque las estadísticas demuestren justamente lo contrario, y no sólo por el largo peregrinaje que para el ciudadano supone conseguir una resolución final y concluyente, sobre todo si la competencia para dictarla es del Pleno, sino porque además resulta desalentador que no exista una doctrina lo suficientemente consolidada y homogénea en cuanto a ciertos principios básicos, pues a la luz de las modificaciones en lo relativo a la admisión de recursos de amparo, éste aspecto pasa a revelarse clave y crucial.<sup>269</sup>

---

<sup>268</sup> Vid. ROLDÁN BARBERO, J. El art. 45 CE puede y debe tener virtualidad en un contexto internacional. En “España y la protección internacional del medioambiente”, op. cit., págs. 143-182.

<sup>269</sup> Téngase en cuenta que el promedio temporal en el dictado de sentencias es de 3 años, y en los demás procesos que debe resolver el Pleno, el plazo se incrementa hasta 6 o 7. Vid. FERNÁNDEZ FARRERES, G. La principal crítica a la reforma se centra en la nueva configuración de la admisión de los recursos de amparo, que no va a solucionar el aluvión desorbitado de demandas producido desde la anterior reforma de 1988. Varias son las razones (insuficiente ampliación del plazo, que pasa de 20 a 30 días, la competencia de las Secciones para dictar sentencias, que hasta ahora sólo recaía en las Salas, o la ampliación del incidente de nulidad de actuaciones), pero en cualquier caso, de las modificaciones planteadas no se espera que las cifras disminuyan ni que los miembros del Tribunal, con independencia de su composición, deban hacer un análisis y una verificación de carácter previo a la admisión del recurso. La situación se complica si a la oscuridad del art. 50.1 b), donde se dibujan las directrices de lo que hay que entender por <<especial trascendencia constitucional>>, sumamos la <<... tutela subjetiva [...], consustancial al recurso de amparo>>, porque existe obligación de corregir las vulneraciones de derechos, esa es su verdadera función, garantista, intrínseca al órgano, porque de otra forma el propio tribunal no podría declarar que el recurso de amparo no protege de un <<exceso de amparo, es decir, que no sea viable el contraamparo [sic] (STC 114/1995, de 6 de junio, FJ. 2)>>. “La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (Comentario a la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo)”. En *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 81 (septiembre-diciembre), 2007, págs. 11-62, en especial 15 y ss. [Editado en 2008 en la obra colectiva *Hacia una nueva jurisdicción constitucional. Estudios sobre la ley 6/2007, de 24 de mayo de reforma de la LOTC*. Marc Carrillo (coord.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2008, págs. 129-213]. En el mismo sentido, FERNÁNDEZ SEGADO, F. Tacha la fórmula del requisito de <<puro formalismo con efectos que pueden llegar a ser contraproducentes>>. La razón es clara, si la demanda carece de la suficiente fundamentación, pero resulta que sí posee una especial relevancia constitucional, el TC no la admitirá desde su inicio, pero esto se contradice con la objetivación del amparo, que es precisamente lo que la reforma persigue. En *La reforma del régimen jurídico-procesal del recurso de amparo*. Ed. Dykinson. Madrid, 2008, págs. 85 y ss. Aún la doctrina que se muestra más partidaria de la objetivación del recurso de amparo, reconoce la necesidad de dejar algún hueco a elementos subjetivos, porque de lo contrario el camino sin retorno es la desnaturalización del propio proceso; la palabra empleada para denominarlo -amparo-, no puede reconducirse a una simple casualidad. En este sentido, vid. CARRILLO, M. “La reforma de la jurisdicción constitucional: La necesaria racionalización de un órgano constitucional en crisis”. En *Estudios sobre la Constitución Española: homenaje al profesor Jordi Solé Tura*, Vol. 3 (Traducción al castellano de los textos en catalán). Ed. Congreso de los Diputados. Madrid, 2008, págs. 65-100; GARRORENA MORALES, A. “La Ley Orgánica 6/2007 y la reforma del Tribunal Constitucional. Notas para una crítica”. En *Hacia una nueva jurisdicción constitucional. Estudios sobre la ley 6/2007, de 24 de mayo de reforma de la LOTC*. Marc Carrillo (coord.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2008, págs. 215-260.

#### 4.2.3.- Pronunciamientos del Tribunal Supremo en el orden penal

En cuanto a la postura del Tribunal Supremo en la jurisdicción penal, ésta ha fluctuado entre una configuración del delito dentro de la modalidad de peligro concreto (con la anterior regulación del art. 347 bis) o de peligro abstracto hipotético (con la regulación actual), sobre todo a raíz de una decisiva sentencia dictada en 2002.<sup>270</sup> En los órganos jurisdiccionales de instancia se observa una clara ampliación de argumentos que tienden a proteger a los ciudadanos contra el ruido, y de esta forma van conformando una doctrina cada vez más aceptada colectivamente; ante este cambio de línea, el TS no se encuentra ante la necesidad de corregir tantas sentencias como en periodos anteriores.<sup>271</sup>

---

<sup>270</sup> STS (Sala de lo Penal) 1828/2002 de 25 de octubre [RJ\2002\10461]. La jurisprudencia anterior a esta resolución todavía no había abandonado la tradicional interpretación consolidada desde el TR de 1973. En la misma, se admite que estos criterios interpretativos (argumento teleológico) son más beneficiosos para la protección medioambiental, pero alerta de que, al perderse la necesidad de establecer en el tipo objetivo la producción de un verdadero resultado de peligro, en cambio <<*sí que resultará imprescindible la rigurosa comprobación de que la conducta desarrollada ha resultado adecuada e idónea para poner en peligro el equilibrio de los sistemas naturales*>> (FJ 1.1). Vid. MARTOS NÚÑEZ, J. A. En “El delito de contaminación acústica”, op. cit., págs. 25-28. Esta posición no ha sido abandonada en resoluciones posteriores del TS sobre la emisión de ruidos, porque hay que subrayar que la sentencia comentada se refiere a los vertidos contaminantes a la red de alcantarillado por parte de una empresa, provocando la muerte de los peces en una piscifactoría. Vid. MESTRE DELGADO, E. “Delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente”. En *Derecho Penal. Parte Especial* (6ª ed.) Carmen Lamarca Pérez (coord.) Ed. Colex. Madrid, 2011, págs. 455-483, en especial 468. Para ALASTUEY DOBÓN, C., el art. 325 es un delito de aptitud para la producción de un daño, por ello estima acertado el cambio de orientación en la jurisprudencia, en el sentido de decantarse plenamente por una interpretación del delito como de peligro abstracto. En “Derecho penal: la emisión de ruidos como delito de contaminación ambiental”. En *Observatorio de Políticas Ambientales 2010*. Fernando López Ramón (coord.) Ed. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2010, págs. 307-331, en especial 317-319.

<sup>271</sup> Sentencia Audiencia Provincial de Zamora (Sección 1ª) 10/2012, de 6 de febrero [ARP/2012/220]. Confirma la resolución dictada por el Juzgado de lo Penal de Zamora, por la que se condena al titular de un bar como autor de un delito contra el medio ambiente a la pena de dos años y tres meses de prisión y multa. No observa el tribunal error en la valoración de la prueba, porque al ser un delito doloso, que exige la prueba de la voluntad y la conciencia del sujeto activo, el conocimiento y la voluntad del riesgo ocasionado por la acción es lo que conforma el elemento subjetivo del delito, y éste tiene que ser necesariamente estudiado de forma independiente en cada caso, sin otorgar demasiado espacio a generalizaciones. Vid. SÁNCHEZ DONATE, Mª P. Recoge recientes sentencias en este sentido, dictadas por Juzgados de lo Penal, Audiencias Provinciales y Tribunal Supremo. En “La lucha penal: el delito de contaminación acústica”, op. cit., págs. 189-212; CANO MURCIA, A. Reproduce jurisprudencia penal, administrativa y civil sobre el ruido. En “Código del ruido”, op. cit., págs. 1053-1110. Como contrapunto y excepción a lo afirmado, me remito a la STS (Sala de lo Penal) 1091/2006 de 19 de octubre [RJ 2006\8364], que casa y anula la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Castellón (Sección 2ª), que absolvió a los acusados de los delitos contra el medio ambiente, prevaricación y denegación de auxilio, condenándolos en la nueva sentencia por delito medioambiental y por prevaricación. También la STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª) 540/2007 de 20 de junio [RJ 2007\4749], que anula la sentencia absolutoria dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 7ª). Este caso resulta especialmente curioso, pues la emisión de ruidos se produce en un contexto particular enmarcado en las relaciones de vecindad, por un vecino que causaba ruidos molestos a los restantes habitantes del edificio

Es decir, se ha pasado de una atención menguada a la aplicación contundente de lo previsto por el Código Penal<sup>272</sup>, no sólo por el seguimiento del Derecho emanado de la Unión Europea, sino por la acusada presión ejercida por la colectividad; la sociedad demanda la aplicación rigurosa de las leyes penales, y la materia medioambiental se ha visto sin duda arrastrada por esta nueva tendencia criminalizadora. No obstante, respecto de la aplicación del art. 325 CP, muy distinto es que los tribunales se vean obligados a realizar una interpretación analógica del concepto de hábitat propio de la ecología, al considerar al domicilio un elemento más del medio ambiente, cuando en todo caso se trata de un hábitat de carácter artificial, no natural.<sup>273</sup>

La primera vez que la Sala de lo Penal del TS tuvo que abordar la emisión de ruidos en particular, confirmó parcialmente una sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Palencia de 2003, y en ella se abordan extensa y exhaustivamente todos los extremos que confluyen en este específico tipo delictivo.<sup>274</sup>

---

a horas intempestivas, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal eximente incompleta de anomalía psíquica.

<sup>272</sup> SSTS (Sala de lo Penal, Sección 1ª) 327/2007, de 27 de abril [RJ\2007\4724] –caso conocido como “El Portet”–; 708/2009 de 16 de junio [RJ\2009\6645] y 1317/2011 de 2 de diciembre [RJ 2012\64]. Confirman penas de cuatro años y un día de prisión y multa, siendo de las más altas dictadas para este tipo de delito, dentro del genérico art.325 CP y teniendo en cuenta en la última de las que se citan el ínterin actualizado del tipo básico –de dos a cinco años–. En la primera se afirma, en relación a los sujetos pasivos, que <<... el medio ambiente protegido es también el hábitat de una o varias personas, es decir, el conjunto local de condiciones geofísicas en las que se desarrolla la vida de una especie o de una comunidad animal o de personas>> (FJ Tercero 2). Cfr. QUERALT JIMÉNEZ, J. J. Considera esta resolución la <<zenit de una corriente antropocéntrica del medio ambiente que, en principio, merece aprobación>>. En “Derecho penal español. Parte especial”, op. cit., pág. 930. El propio tribunal se muestra sorprendido por la actuación del tribunal de instancia, que no ha tenido en cuenta la concreción palmaria del peligro, ya que hubiera sido deseable apreciar un concurso ideal con el delito de lesiones del art. 147 (FJ Tercero 4).

<sup>273</sup> En este mismo sentido, JERICÓ OJER, L. Califica de analogía *in malam partem* prohibida en Derecho penal. “La tutela penal del ruido”. En *El derecho contra el ruido*. José Francisco Alenza García (dir.) Ed. Civitas. Cizur Menor (Navarra), 2013, págs. 365-407, en especial 391.

<sup>274</sup> STS 52/2003 de 24 de febrero [RJ\2003\950]. Confirma parcialmente la sentencia condenatoria dictada por la Audiencia Provincial de Palencia 23/2000 de 9 noviembre [ARP 2000\2659], contra el dueño de una sala de fiestas denominada “Chapó”, constituida en S.L., cuya licencia de apertura en 1994 no permitía emitir más de 30dBA al encontrarse el local integrado en los bajos de un edificio privado de carácter residencial, obligándole también a instalar limitadores de sonido en los equipos musicales. Tras años de quejas por parte de la comunidad de vecinos y varias actas de mediciones que arrojaban resultados superiores a 30dBA en las viviendas afectadas, sobre todo los fines de semana a altas horas de la noche, la consecuencia fue la apertura de varios expedientes sancionadores que finalizaron con la clausura temporal del negocio hasta que se adecuara a la normativa municipal, pero en 1998 reanudó su actividad, causando daños a la salud de varias familias, algunas de las cuales llegaron a cambiar de vivienda. Pues bien, el TS, tras citar normativa internacional, comunitaria, estatal y autonómica, y hacerse eco de la nula atención que se le había prestado tiempos atrás a esta modalidad de delito, realiza una exposición de los graves efectos que el ruido puede producir en la salud de las personas, valorando que la intervención del Derecho penal tiene que ser consecuentemente con el principio de mínima intervención, y que sólo debe actuar frente a los ataques más graves al bien jurídico protegido, al que cataloga ya sin género dudas de “peligro abstracto”, remitiéndose a su propia jurisprudencia, en particular a la STS

No obstante, la Sala II se pronunció por vez primera sobre el delito ecológico y el bien jurídico que se podía inferir del mismo en 1990, por aplicación del art. 347 bis CP, que procede recordar no incluía de forma explícita la emisión de ruidos.<sup>275</sup>

---

1828/2002, de 25 de octubre, comentada *supra*. Todos estos aspectos forman parte del elemento normativo del tipo objetivo, así como la infracción de una disposición de carácter general, que por sí misma no contendría virtualidad penal, pero en el caso enjuiciado resulta que <<la creación de un peligro concreto para los bienes jurídicos protegidos se presenta como evidente y perfectamente definido [...] El recurrente ha creado una situación de grave peligro para la integridad física, psíquica, intimidad personal y familiar, bienestar y calidad de vida... >>. Respecto al tipo subjetivo, tampoco alberga dudas el tribunal al declarar que lo <<reiterado y contumaz>> de la conducta refleja la voluntad decidida de no desistir de la misma, y por tanto concluye que el tribunal de instancia ha aplicado el art. 325 correctamente (FJ Primero 6, 7 y 8). Una cuestión de esta sentencia merece especial atención, es la expresada en los antecedentes de hecho, en la que se otorga al elemento subjetivo de la percepción del sonido un valor probatorio similar a los datos y cifras registrados por el sonómetro, al incluirlo en el acta levantada *in situ* por los agentes de Policía Municipal: <<... hace constar que: “el sonido musical que se escucha, sobre todo en graves, resultaba más molesto de lo que en principio registra el sonómetro, resultando imposible poder dormir según los moradores de la vivienda”>> (FJ Primero, 5). Vid. HERRERA DEL REY, J. J. “La defensa jurídica contra la contaminación acústica”, op. cit., págs. 657-716; MARTOS NÚÑEZ, J. A. “El delito de contaminación acústica”, op. cit., pág. 33; SÁNCHEZ DONATE, M. P. “La lucha penal: el delito de contaminación acústica”, op. cit., págs. 181 y 182; HAVA GARCÍA, E. “Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente”. En *Derecho penal español. Parte Especial*, II. F<sup>co</sup>. Javier Álvarez García (dir.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2011, págs. 1031-1082, en especial 1043. Vid. CUADRADO PÉREZ, C. De forma inmediata al dictado de esta sentencia, el TS propuso al Gobierno el indulto parcial de la pena privativa de libertad impuesta al condenado. En “Ruido, inmisiones y edificación”, op. cit., págs. 16 y 17; SILVA SÁNCHEZ, J. M<sup>a</sup> / FELIP I SABORIT, D. “El Derecho penal ante el ruido”. En *Régimen jurídico del ruido. Una perspectiva integral y comparada*, op. cit., pág. 262. Situación repetida con ocasión de otra condena a dos años y seis meses de prisión impuesta por el Juzgado de lo Penal núm. 5 de Murcia, ratificada por la SAP de Murcia, Sección 3<sup>a</sup> núm. 34/2010, de 15 de febrero [JUR 2010\146718], a los dueños de una discoteca de la localidad de Archena, a los que se les ha concedido un indulto parcial, rebajando la pena a dos años. Vid. MUÑOZ RUIZ, J. “El delito de contaminación acústica (Especial consideración del caso Donegal)”. En *Cuadernos de política criminal segunda época*. Vol. III, núm. 99. Ed. Dykinson. Madrid, 2009, págs. 173-206, en especial 178 y 179.

<sup>275</sup> Tribunal Supremo (Sala de lo Penal), Sentencia de 30 noviembre 1990 [RJ 1990\9269]. Ponente: Excmo. Sr. José Antonio Martín Pallín. En relación a la emisión de gases contaminantes por parte de una central térmica ubicada en un valle de la cuenca del río Llobregat (Cataluña). Se alude al carácter moderadamente antropocéntrico del bien jurídico protegido por el precepto: <<La mayoría de la doctrina considera que el párrafo primero del precepto [...] contiene un típico delito de resultado especialmente cuando las consecuencias de la agresión ecológica afectan a las condiciones de la vida animal, bosques, espacios naturales o plantaciones útiles, originando un perjuicio real y efectivo detectado y cuantificado [...] Esta diferenciación entre males que afectan a la salud de las personas y riesgos que dañan otras especies animales o vegetales y el medio ambiente se debe, en gran medida, a que el hombre no se siente parte de la naturaleza sino como una fuerza externa destinada a dominarla o conquistarla para ponerla a su servicio>> (FJ 17.2). Otra relevancia doctrinal de la resolución es la que atañe a la accesoriedad administrativa y la actitud de tolerancia que la administración demostró en el curso de los acontecimientos, es decir, el elemento contravencional sin el que no sería posible afirmar la tipicidad de la conducta. Vid. VERCHER NOGUERA, A. Deduce de esta resolución la opción que parece mantener el TS, en cuanto a la posibilidad de que sea la propia administración la que se vea envuelta en actividades delictivas contra el medio ambiente. Voz “Delito Ecológico”. En *Diccionario de Derecho Ambiental*, op. cit., pág. 446; SILVA SÁNCHEZ, J. M<sup>a</sup> / MONTANER FERNÁNDEZ, R. En “Los delitos contra el medio ambiente. Reforma legal y aplicación judicial”, op. cit., pág. 227; DE LA MATA BARRANCO, N. J. La opción que acoge el Derecho penal ambiental español es la de accesoriedad de derecho, no de acto. “Caso de la central de Cersc”. En *Casos que hicieron doctrina en Derecho Penal* (2<sup>a</sup> ed.) Pablo Sánchez-Ostiz Gutiérrez (coord.) Ed. La Ley. Madrid, 2011, págs. 319-334.

Una vez abierto y ampliado el camino, se ha producido durante la última década un incremento de resoluciones que definitivamente han consolidado la proyección cada vez más acusada del Derecho penal en este campo de la protección contra el ruido, muchas veces grumoso y altamente normatizado (tanto sustantiva como sectorialmente).

Una de las más recientes muestras de esta tendencia alcista es la STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª) 838/2012 de 23 de octubre [RJ\2012\10172], que confirma la Sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca 158/2011 de 7 de noviembre, por la que se condena al acusado como autor de un delito contra el medio ambiente a la pena de cuatro años y un día de prisión, y de dos delitos de lesiones imprudentes a la pena de tres meses de prisión por cada uno de ellos.<sup>276</sup> En sentido contrario, la STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª) 916/2012, de 28 de noviembre [RJ 2013\936], convalida la absolución dictada previamente por la Audiencia Provincial de Jaén, por hechos similares.<sup>277</sup>

---

<sup>276</sup> Entre otras, STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª) 1307/2009 de 5 de noviembre [RJ\2010\301], confirmando la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Barcelona por delito contra el medio ambiente en la modalidad de ruidos, en concurso real con tres delitos de lesiones a penas de cuatro años y un día con accesorias por el primero, y a seis meses de prisión por cada uno de los restantes, por el ruido provocado por un bar musical. Asimismo, STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª) 1317/2011 de 2 de diciembre [RJ 2012\64], confirma la resolución de la Audiencia Provincial de Murcia, que condena por delito medioambiental en concurso ideal con delito de lesiones a los responsables de una mercantil dedicada a la manipulación de productos hortofrutícolas, por los ruidos que emitían los camiones frigoríficos estacionados en el patio de la empresa, a penas idénticas a la sentencia comentada con anterioridad. Otras resoluciones del TS revelan también una asunción homogénea y sucesiva de los criterios manejados hasta la actualidad, confirmando las decisiones dictadas por diferentes Audiencias Provinciales, en unos casos en sentido absolutorio y en otros condenatorio: AATS (Sala de lo Penal, Sección 1ª) 176/2012 de 2 de febrero [JUR\2012\60385]; 932/2012 de 19 de abril [JUR\2012\202675] y STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª) 152/2012 de 2 de marzo [RJ\2012\3669].

<sup>277</sup> Sentencia Audiencia Provincial de Jaén (Sección 1ª) 41/2012, de 21 de febrero [ARP 2012\1433]. La resolución absuelve a los acusados de los delitos contra el medio ambiente en su modalidad de contaminación acústica, prevaricación ambiental, lesiones y falta de lesiones. Uno de los argumentos del fallo radica en que algunas de las mediciones llevadas a cabo en el local de ocio emisor de los ruidos, se realizaron con sonómetro que no estaba debidamente verificado, y otras fueron esporádicas y sin intensidad suficiente para atentar contra el bien jurídico (FJ 4).

#### 4.2.4.- Posiciones del Tribunal Supremo en el orden de lo contencioso-administrativo<sup>278</sup>

La Sala Tercera, por razones obvias, ya que tradicionalmente ha sido el Derecho administrativo el encargado de legislar sobre la materia, se ha tenido que enfrentar con anterioridad y en muchas más ocasiones que la Sala de lo Penal a cuestiones suscitadas en el ámbito de la protección contra el ruido. Escenarios, además, de muy diversa condición, en muchos casos situaciones de ruido excesivo provocadas o toleradas por las propias administraciones públicas, acciones todas ellas que ni mucho menos carecen de la necesidad de que se cumpla con la posición de garante que éstas ostentan sobre los ciudadanos. A veces, por no exigir adecuadamente el cumplimiento íntegro de la normativa a los operadores privados, otras por ejercer una defectuosa o inadecuada ejecución de las resoluciones dictadas –básicamente, medidas correctoras como la clausura temporal de locales de ocio o industriales hasta su adecuación a la normativa, la previa revisión de las condiciones acústicas en orden al otorgamiento de licencias de apertura, etc.–, o bien por no tramitar escrupulosamente los pertinentes expedientes sancionadores. Por estas circunstancias, entre otras, el ciudadano percibe que dicha inactividad corresponde a esa clase de permisividad que atenta, de manera directa, concreta y profunda, contra sus derechos.<sup>279</sup>

---

<sup>278</sup> Por motivos de extensión y por sobrepasar el ámbito de estudio de este trabajo de investigación, que se centra en el ruido desde un punto de vista de la adecuación de las categorías de derecho público y su actuación, se desestima el estudio de resoluciones dictadas en el orden civil, por pertenecer al derecho privado. No obstante, se alude a la protección civil del ruido cuando resulta procedente en el texto.

<sup>279</sup> Algunas SSTs dictadas en esta jurisdicción se han estudiado *supra*, pero no puedo dejar de referirme aquí a un excepcional Auto de 1989, en el que se condensan de forma especial ciertos interrogantes que rodean a la búsqueda de una verdadera teoría sobre la protección contra el ruido como elemento ambiental. ATS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª) de 11 de mayo de 1989 [RJ\1989\3867]. Se enfrenta aquí el Tribunal a la ponderación de dos derechos particulares, por una parte el derecho al ejercicio de una actividad empresarial (art. 38 CE) por parte del dueño de una discoteca, que ve suspendidas las licencias de obra, apertura y funcionamiento del local; por otra, el derecho al descanso y a un medio ambiente adecuado (art. 45 CE), aludiendo a la superioridad de la planificación medioambiental sobre cualquier otra: <<El sistema jurídico de medio ambiente se integra de diversos subsistemas, entre ellos el de la lucha contra la contaminación de cualquier tipo, incluida la acústica. Esta Sala, que ha de interpretar las normas de conformidad con la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas no puede desconocer esa prevalencia de lo medioambiental sobre lo urbanístico que no nace sino que se reconoce en esa Ley, porque pertenece a la naturaleza misma de las cosas [se refiere a la Ley de 27 de marzo de 1989 de conservación de espacios naturales y de la flora y fauna silvestre] [...] porque la contaminación acústica no sólo es que impide el descanso a los que habitan en las viviendas cercanas sino que perjudica la salud de todos los que se ven sometidos a la incidencia de un número excesivo de decibelios>> (FF JJ 2, 4 y 5).



Distinto es el caso de aquellas conductas delictivas llevadas a cabo por autoridades o funcionarios públicos que silencian o desvirtúan el contenido de las autorizaciones o licencias que habilitan el funcionamiento o la puesta en marcha de la actividad causante de los ruidos, o bien desatienden la obligación de denunciar la infracción de leyes o disposiciones normativas de carácter general que hayan observado al llevar a cabo su labor inspectora, o que simplemente hubieran obviado tal responsabilidad en el ejercicio de sus funciones.<sup>280</sup>

Por ello, el TS ha admitido la base tanto de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos [responsabilidad objetiva y directa que encuentra su anclaje legal en el art. 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común], como la opción de acudir a la vía de la protección jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la persona [art. 2 a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa], con el fin de condenar a la administración pública competente, normalmente la municipal. Esto hecho no obsta el que debamos precisar que, si bien el cauce puede considerarse adecuado, no hay que ignorar que la reversión produce el efecto sancionador en los ciudadanos, se centra y focaliza en la sociedad, que es la que soporta en último término los costes de la indemnización que en un caso u otro se recaude.<sup>281</sup> Así, una solución que puede, aparentemente, pasar por justa y equilibrada, se torna en desproporcionada y desacertada respecto a los destinatarios finales.<sup>282</sup>

---

<sup>280</sup> Pues precisamente a ellos se dirige el art. 329 CP: <<1. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas, hubiere informado favorablemente la concesión de licencias manifiestamente ilegales que autoricen el funcionamiento de las industrias o actividades contaminantes a que se refieren los artículos anteriores, o que con motivo de sus inspecciones hubiere silenciado la infracción de leyes o disposiciones normativas de carácter general que las regulen, o que hubiere omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio, será castigado con la pena establecida en el art. 404 de este Código y, además, con la de prisión de seis meses a tres años y la de multa de ocho a veinticuatro meses. 2. Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado hubiese resuelto o votado a favor de su concesión a sabiendas de su injusticia>>.

<sup>281</sup> STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª) de 26 de noviembre de 2007 [RJ\2007\8552]. En este caso, el ruido proviene de los propios servicios municipales de limpieza en horario nocturno del Ayuntamiento de Bilbao, pero también da lugar a indemnización, confirmando así el TS lo dictado por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

<sup>282</sup> Se sigue aquí la postura de MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, L. Sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración municipal frente a la responsabilidad del autor directo, entiende que, siempre que éste sea identificable, lo propio es proceder contra éste, máxime cuando está generando beneficios por la actividad ruidosa. Califica de *-profundamente injusta y radicalmente antisocial-* la tendencia generalizada de pretensiones de responsabilidad patrimonial contra la Administración. En “El ruido: reciente respuesta legal y jurisprudencial”, op. cit., págs. 27-29. Vid. GALERA RODRIGO, S.

Fruto de esta tendencia es la condena, relativamente reciente, impuesta al Ayuntamiento de Vélez-Málaga, esta vez no sólo por los daños causados a los demandantes durante los años en que se ha sostenido la situación de ruido excesivo, sino también por el tiempo transcurrido a partir de la notificación de la sentencia, sin que se adopten las medidas correctoras pertinentes para poner fin a dicho estado, todo ello por vulneración de los derechos fundamentales a la integridad física y moral, intimidad y a la inviolabilidad del domicilio.<sup>283</sup>

---

Sobre la concurrencia de responsabilidad entre administración y particulares, y la siempre problemática relación de causalidad, se inclina por la opción de imputar al particular y a la administración pública de forma conjunta, siempre y cuando no se convierta en un sistema generalizado de aseguramiento de riesgos. En *La responsabilidad de las administraciones públicas en la prevención de daños ambientales*. Ed. Montecorvo. Madrid, 2001, págs. 145-151.

<sup>283</sup> STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª) de 2 de junio de 2008 [RJ\2008\5470]. Estima el recurso, casando y anulando la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Andalucía, que estimaba parcialmente el recurso contra la desestimación presunta, por silencio administrativo, de las peticiones que se realizaron al Ayuntamiento, para la adopción de las medidas necesarias encaminadas a evitar los ruidos procedentes de los locales de ocio.<<El mantenimiento de este estado de cosas a lo largo de los años atribuye una gravedad añadida a lo sucedido y justifica no sólo el resarcimiento que piden los recurrentes por lo pasado,...sino también el que piden por el periodo que transcurra hasta que se lleven a la práctica las medidas que de manera efectiva hagan desaparecer las molestias derivadas del exceso de ruidos o, si durante la tramitación de este proceso se hubieren adoptado, hasta la fecha de esa adopción.>> (FJ 7). Resulta muy interesante, tanto por el *quantum* indemnizatorio alcanzado en casación respecto a las cantidades acordadas en la sentencia de instancia, así como por estimar que la vía procedimental es la adecuada, pudiendo incluirse en la misma las peticiones respecto a la cuantificación de las indemnizaciones. Vid. GARRIDO BENGOTXEA, L. “La tutela contencioso-administrativa frente a la contaminación acústica: un paseo por la actualidad jurisprudencial”. En *El derecho a una vida sin ruidos insalubres, Protección social, civil, contencioso-administrativa y penal*. Juan Ignacio Marcos González / Cristóbal Molina Navarrete (coords.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2010, págs. 125-169.

### 4.3.- Repercusión de las últimas reformas del Código Penal en materia de medio ambiente

Debido al escaso tiempo transcurrido entre dos de las más significativas reformas que se abordan a continuación, pues no supera el periodo de cinco años en lo que respecta al Derecho penal ambiental, es complicado extraer conclusiones, ya que resulta cada vez más frecuente que los tipos ambientales sufran modificaciones de redacción, sistemáticas y penológicas, al tiempo que exiguo el lapso temporal transcurrido entre ellas. La situación no permite el suministro de conocimientos fehacientes acerca de cómo transcurre su implementación social (en los ciudadanos, en el tejido industrial y empresarial), y en estas condiciones los objetivos de toda norma penal ambiental, por una parte resultan insatisfechos desde un punto de vista práctico, y por otra, abrazan un simbolismo superior al que representan otros tipos penales.<sup>284</sup>

Lo más destacable de la primera reforma es la incorporación de un nuevo estatuto criminal diseñado para las personas jurídicas, desconocido hasta el año 2010 en Derecho penal español, ajustado a un sistema de *numerus clausus* en el que se incluye la responsabilidad penal corporativa por delito ambiental. Este régimen aparece ampliado y mucho más estructurado en la reforma de 2015, debido a las dificultades de interpretación, así como la existencia de espacios diáfanos o discordantes respecto de lo establecido para las personas físicas, que resultaban de la primera redacción y que rápidamente la doctrina científica se encargó de denunciar y analizar para proceder a

---

<sup>284</sup> Una crítica al modelo de reformas recurrentes instaurado en el ordenamiento penal con la ilusa pretensión de conseguir resultados óptimos a coro plazo en QUINTERO OLIVARES, G. <<Introducir un precepto en el Código Penal, no equivale a introducirlo en el derecho penal, pues ese es un proceso más lento y más complicado, que requiere integración práctica en el sistema y experiencia aplicativa, y, lo que es más importante, aprehensión y asunción por parte de la sociedad>>. “Estudio preliminar: cambiar las leyes y cambiar el Derecho Penal. sobre la última reforma del Código Penal”. En *La reforma penal de 2010: análisis y comentarios*. Gonzalo Quintero Olivares (dir.) Ed. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2010, págs. 15-26, en especial 17 y 18. En sentido similar, SILVA SÁNCHEZ, J. M<sup>a</sup>, quien se refiere a la necesidad de reconducir la intervención estatal hacia un Derecho penal mínimo. En “La expansión del Derecho penal. Aspectos de la Política criminal en las sociedades postindustriales”, op. cit., págs. 1 y 2; GIMBERNAT ORDEIG, E. El autor censura lo mencionado en la Exposición de Motivos del Anteproyecto de Reforma del CP de 2010, por los defectos políticocriminales y técnicos de la misma. “La insoportable gravedad del Código Penal”. En *Estado de Derecho y Ley Penal*. Ed. La Ley. Madrid, 2009, págs. 211-216, en especial 214. Por su parte, MÜLLER-TUCKFELD, J. C., considera que el simbolismo que caracteriza al Derecho penal ambiental en la actualidad puede no ser tan cuestionable si se adopta la posición de los defensores de adoptar criterios de prevención general positiva; lo cuestionable en ese caso es el tipo de mensaje que se trasmite, que para el autor comprende políticas ambientales irracionales e inefectivas. “Ensayo para la abolición del derecho penal del medio ambiente”. En *La insostenible situación del Derecho penal*. Instituto de Ciencias Criminales de Frankfurt (ed.) Área de Derecho Penal de la Universidad Pompeu Fabra (ed. española) Ed. Comares. Granada, 2000, págs. 507-530, en especial 524 y 525.

una mejor integración. Aparte del hecho de la armonización jurídica europea, se acude a otros argumentos como la experiencia aplicativa del Código Penal, de la que se desprende que posee carencias y desviaciones precisas de corrección, así como a la cambiante realidad social, que determina el surgimiento de nuevas cuestiones. También aborda asuntos de relevancia técnica, como la figura de la prescripción del delito, atendiendo a las necesidades planteadas, pues su regulación anterior producía efectos indeseables.<sup>285</sup>

En la segunda, se observa una disrupción en la tipicidad del delito ambiental básico (art. 325 CP), que a primera vista parece adecuada. A medida que se profundiza, la solución a la problemática que presentaba un tipo con vocación de aglutinar de forma genérica muy diferentes conductas, resulta más confusa que la anterior, como tendremos ocasión de justificar. Por otra parte, la rotunda supresión del Libro III expulsa a la categoría de las faltas de su catálogo, y supone una transformación cuantitativa y cualitativa del marco sancionador penal español.

Sin lugar a dudas, el Derecho no es algo estático que deba permanecer ajeno a los giros que la sociedad experimenta, todo lo contrario, pero la opción de fundamentar una constante remisión al ordenamiento penal como medio para lograr las pretensiones sociales de cada etapa, tampoco resulta convincente si queremos salvaguardar la enorme trascendencia que comporta la aplicación de tipos penales que llevan aparejadas consecuencias sancionadoras de especial gravedad, como ocurre en el caso del art. 325 CP. En efecto, la tendencia de agravación de la pena fijada no ha hecho sino experimentar un incremento paulatino, de forma paralela a cada reforma de manera sucesiva, irremediable consecuencia es la estandarización de un desconcertante marco penológico que, aplicado a casos concretos, altera el elemental principio de proporcionalidad.

---

<sup>285</sup> La doctrina fijaba su atención en los problemas derivados de la prescripción de determinados delitos con penas no excesivamente graves (estafas, delitos urbanísticos, delitos contra la Administración Pública), debido a que tanto el descubrimiento como su investigación son susceptibles de dilatarse en el tiempo debido a su complejidad, con el consiguiente descrédito del sistema de justicia y el perjuicio de una cantidad indeterminada de víctimas. Este factor es perfectamente trasladable a los accidentes medioambientales con resultados nocivos para la salud de las personas, pues en muchos casos, a los aspectos mencionados, se une la manifestación de sus efectos de forma tardía y dilatada en franjas temporales de tiempo considerables, cuando el delito ha pasado al olvido de la sociedad y del ordenamiento jurídico. *Vid.* MIR PUIG, S. “Contexto internacional y español de la contrarreforma del Derecho penal español”. En *Política criminal y reforma penal*. Santiago Mir Puig / Mirentxu Corcoy Bidasolo (dirs.) Víctor Gómez Martín (coord.) Ed. Edisofer. Madrid, 2007, págs. 15-32, en especial 29.

#### **4.3.1.- Incidencia de la LO 5/2010, de 22 de junio en la regulación de los delitos medioambientales; la esperada apertura a la responsabilidad penal de las personas jurídicas**

El 23 de diciembre de 2010 comenzó su andadura la vigesimoséptima reforma del CP de 1995.<sup>286</sup> El objeto de la reforma era dar cumplimiento al mandato de varias Directivas, así como traslado normativo a lo dispuesto por algunas Decisiones Marco.<sup>287</sup>

El texto promulgado incide de forma notoria en materia medioambiental, pues amplía el catálogo de conductas y la duración de la pena en sus límites mínimo y máximo (de dos a cinco años frente a la franja de seis meses a cuatro años contemplada con anterioridad). Es éste un aspecto controvertido, pues plantea problemas de proporcionalidad por ejemplo, con respecto al art. 345 CP.<sup>288</sup>

---

<sup>286</sup> Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio de 2010. Publicada en el BOE. Núm. 152, miércoles 23 de junio de 2010. Sec. I. Págs. 54.811- 54883. En la Parte General se abordan importantes modificaciones. Así, ampliación y modificación de los catálogos de atenuantes y agravantes (arts. 21 y 22); revisión de las penas privativas de derechos (arts. 39, 49 y 48. 1º) y las accesorias (arts. 55, 56 y 129); examen de las reglas sobre periodos mínimos de cumplimiento obligatorio de las penas privativas de libertad (arts. 83 y 88); nuevas penas o medidas [localización permanente (art. 37), trabajos en beneficio de la comunidad (art. 49), libertad vigilada (arts. 106 y 468), desarrollo de las ya existentes, posibilidad de sustitución de la pena impuesta a extranjeros por su expulsión (art. 89)]; reforma del régimen de prescripción de los delitos (arts. 131, 132 y 133); la figura del comiso (art. 127 y Disposición Final Sexta); novedades en torno a la regulación de la pena de multa (arts. 31 bis 2, 33.7, 50.3, 50.4, 52.4 y 53.5); abono de la prisión preventiva (art. 58.1); o el régimen general de las medidas de seguridad (arts. 96. 3º, 97, 98, 103.3º y 105).

<sup>287</sup> Directiva 2003/06 del Consejo, de 28 de enero de 2003, sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado; Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal; Decisión Marco 2005/212/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa al decomiso de los productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito; Decisión Marco 2003/568/JAI del Consejo, de 22 de diciembre de 2003, relativa a la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil; Decisión Marco 2005/222/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a los ataques contra los sistemas de información (delitos informáticos); Decisión Marco 2003/568/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado; Decisión Marco 2004/757/JAI del Consejo, de 25 de octubre de 2004, relativa al establecimiento de disposiciones mínimas de los elementos constitutivos de delitos y las penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas, entre otras.

<sup>288</sup> Por aplicación del art. 345 CP (apoderamiento, posesión, tráfico, facilitación, tratamiento, transformación, utilización, almacenaje, transporte o eliminación de material nuclear u otras sustancias radioactivas peligrosas que causen o puedan causar la muerte o lesiones graves a personas, o daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo, de las aguas, o animales y plantas), el sujeto activo de este delito se enfrenta a una pena mínima de un año frente a los dos contemplados para las conductas tipificadas en el art. 325 CP. Cabe decir lo mismo en cuanto al art. 348.1 CP, relativo a delitos de riesgo provocados por explosivos y otros agentes, en este caso la desproporción afecta a ambos tramos de la pena, de seis meses a tres años; otro ejemplo es el art. 356 CP, delitos de incendio en zona no forestal que perjudiquen gravemente el medio natural, de seis meses a dos años.

En el Preámbulo de la LO 5/2010, el principal motivo aducido en cuanto al endurecimiento de las penas para delitos medioambientales es el compromiso de España ante la UE, derivado en este caso de la Directiva 2008/99/CE, pero la realidad es que en el texto europeo, la única referencia explícita es la de prever sanciones penales *-eficaces, proporcionadas y disuasorias-* para las conductas previstas. Sin embargo, hay que puntualizar que la emisión de ruidos como delito ecológico no consta en el nomenclátor de materias sustantivas enumeradas en el art. 3.<sup>289</sup>

MUÑOZ LORENTE considera que la protección penal se ha visto mermada con la trasposición de la Directiva de 2008, ya que salvo casos puntuales, las obligaciones de nuestro país en concreto se justificaban suficientemente por la Decisión Marco de 2003, que ya se encontraban recogidas en el CP desde 1995, así como en la posterior enmienda de 2003. Salvo la proclamación definitiva del principio *quien contamina paga*, la reforma de 2010 no supone una protección ampliada, sobre todo si nos detenemos en la nueva redacción del art. 328, al que dicho autor califica de *<<despropósito jurídico>>*.<sup>290</sup>

En sede penal, los delitos enmarcados en el Capítulo III del Título XVI, Libro II del CP *-De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente-* se encuentran estrecha e intrínsecamente relacionados con muchos otros, puesto que los conceptos “medio ambiente”, “entorno natural” y “calidad de vida” son sub-divisibles en múltiples nociones y aspectos; por tanto, la conducta típica puede originarse a través de un amplio espectro de modalidades; un accidente de carácter ambiental, un incendio forestal, una actuación empresarial, una actividad de ocio, etc.<sup>291</sup>

---

<sup>289</sup> Destacan este ataque al principio de proporcionalidad HAVA GARCÍA, E. “La reforma de los delitos contra los recursos naturales, el medio ambiente y la flora y fauna”. En *La Reforma Penal de 2010: Análisis y Comentarios*, op. cit., pág. 290; MUÑOZ LORENTE, J. / BAUCCELLS LLADÓS, J. / FARALDO CABANA, P. “Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente” (arts.325, 327, 328, y 329)”. En *Comentarios a la Reforma Penal de 2010*, op. cit., pág. 387. También adopta una posición crítica frente a la admisión de justificación respecto del aumento de penas que supuestamente proporciona la Directiva GÓRRIZ ROYO, E. M. *Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente*. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2015, pág. 34.

<sup>290</sup> MUÑOZ LORENTE, J. “La (mala) técnica legislativa de recepción de la normativa europea en el ámbito de los delitos medioambientales”. *Actas de las XIII Jornadas de Profesores y Estudiantes de Derecho Penal de las Universidades de Madrid*. Julia Ropero Carrasco (dir.) Ed. Universidad Rey Juan Carlos. Madrid, 2013, págs. 171-192.

<sup>291</sup> Amén de los integrados en el mismo Título XVI [Delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo (nueva rúbrica); Delitos sobre el patrimonio histórico; Delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos], la vinculación se extiende a los Delitos de lesiones (Título III); Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico (Título XIII), en especial en materia de daños, mercado y consumidores; Delitos contra los derechos de los trabajadores (Título XV); Delitos contra la seguridad colectiva (Título XVII), en especial los relativos a la energía nuclear y radiaciones ionizantes, estragos, delitos de riesgo provocados por explosivos y otros agentes e incendios; Delitos contra la Administración Pública (Título XIX), en relación a la prevaricación de funcionarios públicos,

En especial, la técnica legislativa utilizada en el art. 325 CP es tan casuística que paradójicamente produce limitaciones y distorsiones, como las relacionadas con las excavaciones y extracciones, o las captaciones de agua, ya que estas conductas abarcan aquellas que se produzcan en materiales que se encuentren en el suelo y subsuelo, lo que excluiría por ejemplo la tala abusiva de árboles.<sup>292</sup>

La LO 5/2010 modifica el primer apartado del art. 325 y suprime el segundo, que se encargaba de las radiaciones ionizantes u otras sustancias.<sup>293</sup> Por otra parte, la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo propuso añadir un apartado como segundo párrafo, entre los dos que existían en el Proyecto sobre la redacción del tipo, dedicado al vertido de sustancias contaminantes procedente de buques que produjeran un deterioro grave en la calidad del agua, incluso en alta mar, proposición que finalmente no fue admitida, pero que facilitó la inclusión del objeto material *-alta mar-*<sup>294</sup> en la parte dedicada a las aguas terrestres, subterráneas o marítimas.<sup>295</sup>

---

cohecho, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función; y Delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales. A esta conectividad se refieren SILVA SÁNCHEZ, J. M<sup>a</sup> / MONTANER FERNÁNDEZ, R. En “Los delitos contra el medio ambiente. Reforma legal y aplicación judicial”, op. cit., págs. 22-24.

<sup>292</sup> Así, CORCOY BIDASOLO, M. “Art. 325”. En AA.VV. *Comentarios al Código Penal. Reforma LO 5/2010*. Mirentxu Corcoy Bidasolo / Santiago Mir Puig (dirs.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2011, págs. 737-742, en especial 738.

<sup>293</sup> Es el art. 343 el que ahora recoge el apartado suprimido, que se incluye en el Título XVII, Capítulo I Sección 1<sup>a</sup> *-De los delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes-*.

<sup>294</sup> El concepto de alta mar que ofrece el art. 86 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar –UNCLOS–, aprobada en Montego Bay el 10 de diciembre de 1982, documento ratificado por España en 1996, es el siguiente: por exclusión, comprende las partes del mar que no forman parte del mar territorial, de las aguas interiores, de la zona económica exclusiva y las aguas archipelágicas. No hay que olvidar, como apunta GÓRRIZ ROYO, E., que todos estos objetos materiales a los que alude el art. 325 CP se construyen a partir de los términos descriptivos que existen en el precepto, no a través de términos normativos, por lo que no es posible localizar nociones legales tasadas que ayuden a definir cada uno de los lugares donde se puede llevar a cabo una conducta atentatoria hacia el medio ambiente (ni en el Código Penal ni fuera del mismo). En “Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente”, op. cit., pág. 102.

<sup>295</sup> Esta incorporación del espacio de incidencia de los resultados físico-naturales que se derivan de la conducta típica, provoca que el Estado español ejerza competencia en espacios tradicionalmente internacionales de manera concurrente, ya que según la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 30 de abril de 1982, el alta mar se conforma por todas las partes del mar no incluidas en la zona económica exclusiva, en el mar territorial, en las aguas interiores de un Estado o en las aguas archipelágicas de un Estado archipelágico (art. 88). Vid. MONTANER FERNÁNDEZ, R. “Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente”. En *Memento Experto: Reforma Penal 2010*. Ed. Francis Lefebvre. Madrid, 2010, págs. 369-409, en especial 376. Vid. CORCOY BIDASOLO, M. Considera que se pueden producir problemas de competencia jurisdiccional y cita expresamente los Convenios firmados con Francia en 1974, Marruecos en 1975, y Portugal en 1976, para la concreción del mar territorial. En AA.VV. *Comentarios al Código Penal. Reforma LO 5/2010*. Mirentxu Corcoy Bidasolo / Santiago Mir Puig (eds.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2011, págs. 738 y 739. Vid. “Memoria 2009: Anexo II. Informe sobre la Directiva 2005/35/CE, relativa a la contaminación procedente de buques y su relación con la introducción de nuevas conductas delictivas en el proyecto de reforma del Código Penal”. El texto pretendido quedaba del siguiente tenor: <<El que contraviniendo la

La línea de protección específica contra el ruido en el contexto del delito ecológico, inaugurada con el CP de 1995 y refrendada por la jurisprudencia, ha ido fraguando y extendiendo los contornos de esta figura, ya que definitivamente se consagra y amplía en cuanto a la pena, el objeto material, y los sujetos activos del delito con la reforma de 2010.<sup>296</sup>

---

*normativa nacional, comunitaria o internacional efectúe desde un buque vertidos de sustancias contaminantes, incluso en alta mar, que produzcan un deterioro grave en la calidad del agua, será castigado con las penas de dos a seis años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años. La misma pena será aplicable a los que efectuaran vertidos de menor entidad y de manera repetida cuando el efecto de los mismos, por su cantidad y composición, sea susceptible de provocar el mismo impacto>>.* Ed. Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado. Madrid, 2009. pág. 90. Posteriormente, la FGE emitió una Circular en la que se subrayan interesantes aspectos en relación a la expansión jurisdiccional de nuestro sistema interno, que resulta necesaria para no desvirtuar el mandato de la Directiva 2005/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa a la contaminación procedente de buques y la introducción de sanciones para las infracciones. La Fiscalía, con buen criterio, entiende que puesto que la Directiva menciona expresamente el alta mar, el hecho de que el art. 325 CP haga referencia a los vertidos en alta mar, y que éstos puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, no debe ser interpretado exclusivamente en relación a los sistemas naturales del territorio o las aguas españolas. “Circular 7/2011. Sobre criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en materia de medio ambiente y urbanismo”. Ed. Fiscalía General del Estado. Madrid, 2011. págs. 20-23. Una panorámica acerca de la de la legislación internacional, europea y española sobre ecosistemas marinos en SORIANO GARCÍA, J.E. / BRUFAO CURIEL, P. *Claves de Derecho ambiental II. Medio natural, biodiversidad y riesgos tecnológicos*. Iustel. Madrid, 2011, págs. 111-134.

<sup>296</sup> Ampliación en cuanto al aumento de las penas de prisión previstas para el delito tipificado en el art.325, tanto en su franja mínima (2 años) como en la máxima (5 años), amén de la inclusión de nuevos sujetos activos del delito por la novedosa incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la materia, según el art. 327 CP. la redacción anterior, tan sólo mencionaba la potestad del Juez o Tribunal para imponer a las personas jurídicas algunas de las consecuencias accesorias a la pena previstas tradicionalmente en el art. 129 del mismo cuerpo legal. Asimismo, se introduce una nueva modalidad de conducta típica, en relación a la prevaricación específica en materia medioambiental, según art. 329.1, que introduce la omisión de realizar inspecciones de carácter obligatorio al catálogo de conductas previstas para la autoridad o funcionario público. Este tipo no está exento de críticas doctrinales, pues la mayor parte opina que supone un privilegio respecto de conductas no contempladas por el precepto y que pueden castigarse por aplicación del art. 325, que conlleva una pena sustantivamente mayor. *Vid.* SILVA SÁNCHEZ, J. M<sup>a</sup> / MONTANER FERNÁNDEZ, R. “Los delitos contra el medio ambiente. Reforma legal y aplicación judicial”, op. cit., págs. 228 y ss. Con anterioridad, SILVA SÁNCHEZ ya se pronunció sobre los efectos nocivos de una aplicación privilegiada del tipo respecto de otros que confluyen con él, como el art 404 (prevaricación común) o el art. 408 (omisión del deber de promover la persecución de delitos), así como la ya comentada intervención en los delitos medioambientales. SILVA SÁNCHEZ, J. M<sup>a</sup> / FELIP I SABOTIR, D. En “El derecho penal ante el ruido”, op. cit., pág. 283. *Vid.* MARTOS NÚÑEZ, J. A. Alude a la jurisprudencia del TS, que proclama a propósito del art. 329, que en dicha actuación caben tanto las conductas activas como las omisivas. En “El delito de contaminación acústica”, op. cit., págs. 45 y 46. *Vid.* MATELLANES RODRÍGUEZ, N. Analiza la misma resolución, en la que el Tribunal intuye la responsabilidad de la Administración, si bien no procede a examinarla por los postulados propios al principio acusatorio. En *Derecho penal del medio ambiente*. Ed. Iustel. Madrid, 2008, pág. 144. Se trata de la STS (Sala de lo Penal) 449/2003 de 24 mayo [RJ 2003\4387]. En relación a los residuos contaminantes de una granja porcina, que carecía de la preceptiva licencia municipal de actividades clasificadas, corrigiendo a la Audiencia Provincial de Barcelona en cuanto a la aplicación del art. 329 y condenando al acusado (FJ Primero, 7).



El Anteproyecto de Ley Orgánica aprobado el 16 de julio de 2012, que modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, embrión del texto en vigor desde el 1 de julio de 2015, no contemplaba en principio ninguna innovación respecto al texto precedente, y digo tan sólo en principio porque, sin duda, la desaparición del sistema de faltas ya era previsible que afectara a la regulación del ruido, tal y como hemos expuesto *supra* al estudiar las conductas que pueden formar parte de su objeto.

En todo caso, en la submateria que nos ocupa, no se esperaba alteración normativa alguna, al igual que sucede con la versión del texto que aparece en el Proyecto.<sup>297</sup>

No obstante, los delitos de incendio forestal en conexión con los delitos contra el medio ambiente sufren una acertada modificación que afecta, entre otras cuestiones, a los supuestos agravados, pues se eleva la pena hasta los seis años de prisión en el caso de incendios forestales de mayor gravedad, y se ajusta mejor al respeto por el principio de proporcionalidad de penas.

El texto contemplaba nuevas agravantes en los casos especialmente lesivos para el medio ambiente, o generadores de un peligro elevado. Además, cuando los incendios afecten a espacios naturales protegidos se castigarán del mismo modo que los delitos contra el medioambiente, lo que significa que sus autores podrán ser condenados a la pena superior en grado.<sup>298</sup> Por otra parte, deja sin efecto la competencia del Tribunal del Jurado que establece la LO 5/1995, de 22 de mayo [art. 1, en sus apartados 1e) y 2e)], así que la instrucción y enjuiciamiento de los incendios forestales se encomienda a los tribunales profesionales. En suma, la regulación establecida finalmente por la reforma de 2015 en este apartado, no varía de la planteada en el inicial Anteproyecto de 2012.

---

<sup>297</sup> Criterio unánime a la luz del posterior Proyecto de 4 de octubre de 2013. *Vid.* GÓRRIZ ROYO, E. M. “Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente”, op. cit., pág. 21, nota 3.

<sup>298</sup> Dentro de los Delitos contra la Seguridad Colectiva, se mantiene el tipo básico, pero en los supuestos agravados del art. 353 se prevé una sanción autónoma y desvinculada del concepto de pena en su mitad superior, elevándose hasta los seis años de prisión. El nuevo art. 358 bis contiene una remisión a las Disposiciones comunes aplicables al Título XVI para solucionar los problemas de reparación del daño causado por el incendio, y así permitir la imposición de medidas encaminadas a restaurar el ecosistema forestal dañado y la protección de los espacios naturales. Artículo 358 bis: <<Lo dispuesto en los artículos 338 a 340 será también aplicable a los delitos regulados en este Capítulo>>.

#### **4.3.2.- La transformadora reforma de 2015 y su inacción para la equívoca figura del ruido como delito ecológico**

Tanto la Parte General como Especial del Código Penal sufren los importantes efectos del nuevo texto promulgado en 2015.<sup>299</sup> En líneas generales, los Capítulos III – *De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente*– y IV –*De los delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos*– del Título XVI, experimentan algunos cambios, más numerosos los de carácter formal que los de signo sustantivo; no obstante, pueden ser calificados de muy significativos.<sup>300</sup>

A su amparo, el art. 325 CP sufre una mutación extraordinaria y estrafalaria. En efecto, nos encontramos ante un artículo más complejo de interpretar que su predecesor, de carácter acentuadamente desestabilizador, y que además presenta una estructura y gradación de la pena privativa de libertad de signo tricéfalo, pues ahora los diferentes tramos están estructurados en torno a tres posibles lapsos temporales: de seis meses a dos años; de dos a cinco años; por último se contempla la aplicación de la mitad superior de la pena de dos a cinco años con carácter imperativo, o bien la superior en grado con carácter potestativo, ambas adjudicadas en aquellos casos en que se hubiera creado un riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas. La frontera marcada entre los dos apartados del art. 325 crea una suerte de indeterminación bastante potente. La razón es que la diferencia básica estriba no en la conducta del sujeto activo, sino más bien en la potencialidad del riesgo, ya que el precepto indica que en ambos casos la provocación o realización de la actuación pueda causar -daños sustanciales- o -un perjuicio grave-.

---

<sup>299</sup> Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Publicada en el BOE. Núm. 77, martes 31 de marzo de 2015. Sec. I. Págs. 27061-27176. El texto produce cambios de tal importancia, que trascienden los objetivos de este trabajo, por lo que sólo cabe citar, sin ánimo de exhaustividad, algunos de ellos. Así, la nueva pena de prisión permanente revisable, la reforma técnica del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, la revisión de la regulación de la suspensión de la ejecución de la pena, modificaciones a la concesión de la libertad provisional, una nueva regulación del comiso, la inscripción de indicadores de ADN de condenados en bases de datos policiales como consecuencia accesorio (art. 129 bis), la inclusión de la nueva pena privativa de derechos de tenencia de animales, el delito de homicidio y asesinato, amenazas y coacciones de carácter leve, delitos contra la intimidad, y un generoso etcétera.

<sup>300</sup> Interesa mencionar la controvertida LO 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, tramitada casi a la par de la LO 1/2015. En ella, a pesar de que el mantenimiento de la tranquilidad de los vecinos forma parte del objeto mencionado en su art. 1.2, la figura del ruido se encuentra ausente.

Pues bien, el fundamento en que basamos nuestra crítica es el siguiente: si partimos de que el ruido representa un tipo más de ataque medioambiental, autónomamente desligado de sus efectos negativos sobre la salud de los seres humanos, y por contra, estrechamente vinculado a la salud de los ecosistemas, entonces descubrimos que la nueva dicción del primer apartado del art. 325 no soluciona la cuestión debatida, sin que esta modificación difiera sustantivamente del mandato precedente, excepto en aspectos penológicos, por lo que dicho inciso resulta un tanto superfluo. En todo caso, se produce un deterioro normativo si atendemos a la literalidad del precepto, que armoniza bajo un espectro sancionador idéntico, por una parte la creación de un riesgo, y por otra un resultado lesivo, ambos de carácter sustancial (aspecto que será de difícil concreción en asuntos relacionados con emisiones acústicas, sobre todo en cuanto a la producción de un riesgo relevante).<sup>301</sup> Por si no bastara, se detecta una incongruencia semasiológica pues entendemos que la locución *–por sí mismos o conjuntamente por otros–* debería haberse formulado en femenino; en caso contrario, deducimos que el legislador apela de forma exclusiva al comportamiento, bien unilateral o bien plural del sujeto emisor, no a la naturaleza de las conductas que éste lleve a cabo.<sup>302</sup>

Asimismo, sorprende el resultado al que da lugar la promulgación *ex novo* del segundo apartado, en su primer inciso. En este caso, nos encontramos ante un laberinto de conductas de peligro concreto, asociadas a otras *–todas aquellas que de forma conjunta a las previstas por el apartado primero ostenten la potencialidad suficiente para perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales–* sobre las que el legislador no se ha preocupado de realizar una exégesis más precisa, generando con

---

<sup>301</sup> El elemento normativo *–equilibrio de los sistemas naturales–* es sustituido por el de *–daños sustanciales a la calidad del aire, suelo, aguas, animales y plantas–*. Tras la reforma de 2015, el art. 325.1 CP queda como sigue: *<<Será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años el que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta mar, con incidencia incluso en los espacios transfronterizos, así como las captaciones de aguas que, por sí mismos o conjuntamente con otros, cause o pueda causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas>>*. Incluso en la regulación inmediatamente anterior a la reforma de 2015, esta modalidad de conducta relativa a provocar o realizar ruidos plantea varias cuestiones teóricas en su ámbito de aplicación típica. Vid. GÓRRIZ ROYO, E. M. En “Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente”, op. cit., págs. 86-97.

<sup>302</sup> Dado que en el apartado segundo sí se advierte que si las anteriores conductas, por sí mismas o conjuntamente con otras, pudieran perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, entendemos que la dicción de ambos apartados debería ser idéntica.

ello una suerte de inseguridad jurídica más alarmante que la propiciada por la redacción del art. 325 vigente hasta 2015.<sup>303</sup> Este insólito apartado del art. 325 finaliza con un párrafo que ya formaba parte de su precedente, relativo a la creación de un riesgo de perjuicio grave exclusivamente asociado a la salud de las personas; la única disparidad entre ambos es la posibilidad actual de imponer la pena superior en grado, junto a la exigencia imperativa de dictar la pena de prisión prevista en su mitad superior, que se mantiene intacta en el nuevo texto.<sup>304</sup>

A todo ello se añade la inapropiada fórmula utilizada en el primer apartado y comentada con anterioridad, en la que el tratamiento de aquellas conductas que, o bien causen *-delito de resultado-* o bien puedan causar *-delito de peligro-* daños sustanciales a la calidad de los distintos elementos que forman parte del medio, es equiparable en cuanto al reproche de la conducta y equivalente respecto a su sanción.<sup>305</sup>

Además, los elementos mencionados expresamente *-aire, suelo, aguas, animales y plantas-* aparecen enumerados formando parte de un elenco que interrumpe la relación de continuidad que debiera ser singularmente propia de lo que implica un verdadero equilibrio de los sistemas naturales. De lo contrario, ¿a qué nos referimos? Nuestra impresión es que la fórmula seleccionada por el legislador denota cierta predilección por una defensa del equilibrio *inter partes*, que interfiere y neutraliza la

---

<sup>303</sup> Art. 325.2 CP: <<Si las anteriores conductas, por sí mismas o conjuntamente con otras, pudieran perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, se impondrá una pena de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años>>.

<sup>304</sup> Art. 325.2 inciso final: <<Si se hubiera creado un riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas, se impondrá la pena de prisión en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado>>.

<sup>305</sup> Art. 325.1 CP: <<... cause o pueda causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas>>. Vid. HAVA GARCÍA, E. Para la autora, este cambio supone una clara infracción del principio de proporcionalidad y puede tener consecuencias criminógenas negativas, postura que comparto plenamente. ¿Qué motivará al infractor contaminante a tratar de minimizar *ex ante* las consecuencias de un vertido, siendo la pena idéntica? “Modificaciones en delitos ambientales”. En *Comentario a la Reforma Penal de 2015*. Gonzalo Quintero Olivares (dir.) Ed. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2015, págs. 655-665, en especial 658. De tipo atenuado lo califica GÓRRIZ ROYO, E. M. Según su opinión, el precepto contradice cualquier pretensión de taxatividad de las normas penales, por la profusión y dispersión de elementos típicos que reúne. “Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (arts. 325, 326, 326 bis, 327 y 328 CP)”. En *Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015*. José L. González Cussac (dir.) Ángela Matallín Evangelio / Elena Górriz Royo (coords.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2015, págs. 1001-1045, en especial 1009 y ss. Para JAÉN VALLEJO, M. / PERRINO PÉREZ, A., el art. 325.1 es un tipo básico novedoso que no recibe crítica. En *La reforma penal de 2015 (Análisis de las principales reformas introducidas en el Código Penal por las leyes 1 y 2/2015, de 30 de marzo)*. Ed. Dykinson. Madrid, 2015, págs. 148-151.

posibilidad de crear un ámbito de protección *intra partes*, el cual se corresponde mejor con la naturaleza del bien jurídico protegido.

Una eventual interpretación alternativa nos anima a plantear que si damos por bienvenida esta parcelación del bien jurídico en una multiplicidad de bienes dignos de protección de forma singular, lo más acorde sería tipificar cada delito en preceptos autónomos, en relación al bien jurídico que representan, esto es, por quedar supeditados respectivamente a cada uno de los elementos materiales mencionados en el art. 325 CP.

Particularmente, resulta muy ambiguo hablar de -daños sustanciales a la calidad de [...]-, sobre todo en materia de emisión de ruidos, pues dichos daños serán susceptibles de diferentes interpretaciones dependiendo del objeto material al que lo apliquemos; no existe similitud entre los daños que el ruido puede ocasionar a la calidad del aire, del suelo, de las aguas, o a animales y plantas.<sup>306</sup>

Así, aparte de lo expresado acerca del tipo básico del delito ecológico, las circunstancias que determinan los supuestos agravados se contemplan ahora en el art. 327 en lugar del art. 326, cuyo espacio es invadido por el controvertido delito de establecimiento de depósitos, que aglutina el siguiente elenco: recogida, transporte, valorización, transformación, eliminación o aprovechamiento de residuos, así como el traslado de *una cantidad no desdeñable* de residuos, tanto en el caso de uno como en el de varios traslados que aparezcan vinculados, en alguno de los supuestos a que se refiere el Derecho de la Unión Europea relativo a los traslados de residuos –apartado 2–. Asimismo, contamos con la adición *ex novo* del art. 326 bis, relativo a la explotación de instalaciones en las que, bien se realice una actividad peligrosa, o bien se almacenen o utilicen sustancias o preparados peligrosos, el castigo previsto contempla las mismas penas que las del art. 325 en sus respectivos supuestos.<sup>307</sup>

---

<sup>306</sup> Por ejemplo, los estándares establecidos por la Ley del Ruido o por las copiosas Ordenanzas municipales, basados en rangos de decibelios y diferenciados por parámetros temporales –mañana, tarde y noche–, resultan inútiles para comprobar cómo fluctúa el impacto del ruido en la fauna marina, o en la flora autóctona de un determinado espacio natural. La consecuencia inmediata es que no se podrán establecer con claridad las respectivas conductas típicas.

<sup>307</sup> El precedente art. 328 contaba con 7 apartados, el 4º hacía referencia al traslado de *una cantidad importante de residuos*, frente a la cantidad hoy tildada de *no desdeñable*, y no mencionaba expresamente la sujeción a lo recogido por la normativa europea. Art. 326 bis: <<Serán castigados con las penas previstas en el artículo 325, en sus respectivos supuestos, quienes, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, lleven a cabo la explotación de instalaciones en las que se realice una actividad peligrosa o en las que se almacenen o utilicen sustancias o preparados peligrosos de modo que causen o puedan causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas,

La responsabilidad penal de las personas jurídicas también muta su localización del art. 327, pasando a conformar el contenido del actual art.328, en el que la extensión temporal de la pena de multa disminuye de manera considerable. De igual forma, dicha responsabilidad acoge todas las conductas comprendidas en el Capítulo III, ello quiere decir que se produce una mejora de técnica legislativa, pues con antelación quedaba confusamente declarado su ámbito de aplicación a la producción de daños en un espacio natural protegido por el art. 330, si bien era posible acudir a la Disposición común contendida en el art. 338, que obliga a imponer las penas superiores en grado a las respectivamente previstas para las conductas definidas en el Título cuando afecten a dichos espacios.<sup>308</sup>

El resto de circunstancias que afectan al régimen penal de las personas jurídicas responsables de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, son las tratadas genéricamente por el dilatado art. 31 bis, y por la anexión *ex novo* de los arts. 31 ter, quater, y quinquies (enmendando los gravísimos lapsus, por ejemplo, de no haber previsto una regulación que resolviera la cancelación de antecedentes penales, o la exención de la responsabilidad penal bajo determinadas condiciones, o la mención expresa acerca de la condición de persona jurídica de pequeñas dimensiones).<sup>309</sup>

---

*a animales o plantas, muerte o lesiones graves a las personas, o puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales>>.*

<sup>308</sup> Ello porque el artículo que regulaba este tipo de delito ambiental corporativo sólo acogía las conductas previstas por el tipo básico (art. 325), los supuestos agravados (art. 326), y las conductas relacionadas con el establecimiento de depósitos (art. 328). La nueva redacción del art. 328 queda como sigue: *a) Multa de uno a tres años* (frente al rango de dos a cinco años), *o del doble al cuádruple del perjuicio causado cuando la cantidad resultante fuese más elevada, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de más de dos años de privación de libertad* [con anterioridad pena de prisión superior a cinco años]. *b) Multa de seis meses a dos años* [frente al rango de uno a tres años], *o del doble al triple del perjuicio causado si la cantidad resultante fuese más elevada, en el resto de los casos.*

<sup>309</sup> Destaca en la nueva regulación, la relevancia adquirida por la figura del *Corporate Compliance*, en la medida en que estos llamados “programas de cumplimiento corporativo” (basados en modelos de organización, gestión y verificación empresarial para la prevención de delitos) surgen como nueva área de implantación con diseños *ad hoc*, y han adquirido la cualidad de necesarios para aquellas personas jurídicas vinculadas a sectores empresariales susceptibles de sufrir imputaciones penales en el ejercicio de sus actividades. Así, la LO 1/2015 establece una serie de novedades de obligado cumplimiento para la organización interna de las sociedades respecto de la prevención y detección de conductas delictivas en el seno de las mismas (art. 31 bis, apartado 5). Un examen más específico realiza ARTAZA VARELA, O. “Programas de cumplimiento. Breve descripción de las reglas técnicas de gestión del riesgo empresarial y su utilidad jurídico-penal”. En *Responsabilidad de la Empresa y Compliance. Programas de prevención, detección y reacción penal*. Santiago Mir Puig / Mirentxu Corcoy Bidasolo / Víctor Gómez Martín (dirs.) Juan Carlos Hortal Ibarra / Vicente Valiente Ivañez (coords.) Ed. B de F / Edisofer. Madrid, 2014, págs. 231-271.

En el plano procesal, algunas de las múltiples lagunas existentes cuando se produjo la incorporación de los entes jurídicos en 2010, se vieron solventadas por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal.<sup>310</sup>

Por otra parte, en líneas generales, sólo dos de los seis artículos que completan el Capítulo IV, se encuentran exentos de revisión por la reforma de 2015. El art. 332 -tipo básico del delito contra la flora y fauna-, incorpora la estructura típica del delito ecológico, esto es, la remisión de la norma penal a las leyes u otras disposiciones de carácter general cuando se produce la contravención de las mismas -accesoriedad administrativa de la ley penal en blanco-.

Otra modificación reseñable recae sobre el catálogo de conductas, que por una parte se extiende con la incorporación de los actos de posesión y adquisición, así como la inclusión de un último apartado que tipifica la comisión por imprudencia grave, y por otra disminuye con la expulsión de la conducta incendiaria.<sup>311</sup> Uno de los puntos más relevantes es la ampliación material que sufre el delito, consecuencia de la sustitución del término *-especies amenazadas-* por el de *-especies protegidas de flora silvestre-*, pues ello implica una remisión normativa ampliada.<sup>312</sup> Sobre la modificación del art. 334, dedicado a la fauna silvestre, cabe efectuar prácticamente los mismos comentarios.

---

<sup>310</sup> Sobre las que persisten en la actualidad, de manera más acusada en el régimen de la ejecución de penas, *vid.* ROCA DE AGAPITO, L. “Sanciones penales aplicables a las personas jurídicas”. En *La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Fortalezas, debilidades y perspectivas de cara al futuro*. Miguel Ontiveros Alonso (coord.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2014, pág. 371-411, en especial 376 y 377. También GASCÓN INCHAUSTI, F. “Consecuencias procesales del nuevo régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas: la persona jurídica como sujeto pasivo del proceso penal”. En *Repercusiones sobre el proceso penal de la Ley Orgánica 5/2010, de Reforma del Código Penal*. Fernando Gascón Inchausti (coord.) Ed. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2010, págs. 19-104.

<sup>311</sup> En este sentido, consideramos que el criterio seguido no responde a la exigencia de crear un contexto semántico más acorde a la diversidad de conductas posibles, ni descubre el axioma apropiado para que el tipo penal contenga mayor sentido y conexión con el bien jurídico protegido, en este caso la flora y fauna. Con anterioridad, el texto contemplaba tan sólo las siguientes conductas que causaran un grave perjuicio al medio ambiente; cortar, talar, quemar, arrancar, recolectar, o efectuar tráfico ilegal de alguna especie o subespecie de flora amenazada o de sus propágulos, y destrucción o alteración grave de su hábitat, sin acudir a ninguna cláusula de remisión normativa expresa.

<sup>312</sup> El Catálogo Español de Especies Amenazadas ya no será la principal norma de contravención, sino que habrá que remitirse al más extenso Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, desarrollado por el RD 139/2011, de 4 de febrero. *Vid.* MARQUÉS I BANQUÉ, M. “Delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos”. En *Comentario a la Reforma Penal de 2015*. Gonzalo Quintero Olivares (dir.) Ed. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2015, págs. 667-689, en especial 669. En relación al Derecho europeo aplicable *vid.* GARCÍA URETA, A. *Derecho europeo de la biodiversidad. Aves silvestres, hábitats y especies de flora y fauna*. Ed. Iustel. Madrid, 2010.

Innovadoras modalidades de conducta son la pesca y el marisqueo furtivo, así como la figura agravada por actuaciones ilegales en zonas de concesión o autorización marisquera o acuícola (art. 335).<sup>313</sup>

Por último, el delito de maltrato animal ocupa un espacio cualitativo y cuantitativo distinto. Una conducta inédita -la explotación sexual del animal-, otra consecuencia punitiva añadida -la inhabilitación especial para la tenencia de animales durante un plazo mayor al contemplado por la pena principal-, la tipificación del -resultado de muerte del animal-, y el nuevo delito de abandono animal son los cambios más significativos que presenta el art. 337, que anteriormente poseía un carácter casi residual, cerrando el Capítulo a continuación de sus hermanos mayores.

Asimismo, se incorporan algunos supuestos agravados castigados con las penas previstas en su mitad superior –por ejemplo, uso de objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosas para el animal, ensañamiento, resultado de pérdida o inutilidad de un sentido, órgano o miembro principal, o que los hechos se produzcan en presencia de un menor de edad– (art. 337.2), pero no resuelve las principales críticas recibidas en relación a la controvertida interpretación de la expresión *animal doméstico o amansado*, sino todo lo contrario.

La complejidad se prevé de mayor magnitud, pues la reforma reúne una suerte de tipología animal que hubiese sido más consecuente restringir a lo contemplado exclusivamente en su última acepción, esto es, –cualquier animal que no viva en estado salvaje–, y no intentar corregir la interpretación a consta de cuadruplicar el espectro de especies animales damnificadas.<sup>314</sup>

Destaca la asimilación que realiza el legislador en relación al criterio jurisprudencial que, con acierto, no distingue a efectos de responsabilidad penal entre el propietario del animal y aquel que no lo es.<sup>315</sup>

---

<sup>313</sup> Con más detalle, MATA LLÍN EVANGELIO, A. “Protección penal de la biodiversidad (arts. 332, 334 y 335 CP)”. En *Comentario a la Reforma Penal de 2015*. Gonzalo Quintero Olivares (dir.) Ed. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2015, págs. 1047-1071.

<sup>314</sup> El texto promulgado selecciona el siguiente catálogo: a) un animal doméstico o amansado; b) un animal de los que habitualmente están domesticados; c) un animal que temporal o permanentemente vive bajo control humano; o d) cualquier animal que no viva en estado salvaje (art. 337.1). *Vid.* CUERDA ARNAU, M. L. “Maltrato y abandono de animales (art. 337 y 337 bis CP)”. En *Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015*. José L. González Cussac (dir.) Ángela Matallín Evangelio / Elena Górriz Royo (coords.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2015, págs. 1073-1084; MARQUÉS I BANQUÉ, M. Así por ejemplo, el Observatorio Justicia y Defensa Animal propuso seguir la opción de Alemania y Reino Unido, que utilizan el término <<animal vertebrado>>. En “Delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos”, op. cit., pág. 676.

<sup>315</sup> *Vid.* MARQUÉS I BANQUÉ, M. En “Delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos”, op. cit., pág. 675.



Se prevé también la pena de multa para la conducta de abandono de aquellos animales mencionados en el tipo básico del delito de maltrato animal, que básicamente pasa a constituir un tipo atenuado del mismo, y que con anterioridad suponía la comisión de una falta castigada con pena de multa de duración notablemente inferior.<sup>316</sup>

En suma, la carencia de un curso dialéctico previo posiblemente refleja la escasez de reflexión en torno al correcto tratamiento de este tipo de delitos encuadrados en la materia ambiental. Por ejemplo, los incendios forestales son objeto de una profunda revisión, y parte de su fundamento descansa sobre lo expresado en el Preámbulo, desafortunadamente no ocurre así con los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

En nuestra opinión este hecho demuestra, cuanto menos, una laxitud demasiado patente del legislador, porque la interpretación objetiva de ese desierto aclaratorio nos conduce a sospechar que la modificación sufrida se oculta detrás de una oportunista coyuntura, pero no demuestra el ánimo suficiente y responsable que requiere llevar a cabo reestructuraciones del cada vez más significativo y disperso delito ecológico, que de nuevo se convierte así en convidado de piedra de los cambios y correcciones que sufre el Código Penal con tanta asiduidad.<sup>317</sup>

---

<sup>316</sup> Una de las faltas contra los intereses generales del Libro III del CP derogado establecía pena de multa de uno a dos meses (art. 631.2). El nuevo art. 337 bis expresa: <<El que abandone a un animal de los mencionados en el apartado 1 del artículo anterior en condiciones en que pueda peligrar su vida o integridad será castigado con una pena de multa de uno a seis meses. Asimismo, el juez podrá imponer la pena de inhabilitación especial de tres meses a un año para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales>>.

<sup>317</sup> Como por otra parte ya denunciara años atrás BACIGALUPO ZAPATER, E., en un artículo cuyo título fue premonitorio en la historia que acompañaría al delito ecológico, publicado a raíz del fracasado Proyecto del Código Penal de 1980. “La instrumentación técnico-legislativa de la protección penal del medio ambiente”. En *Estudios Penales y Criminológicos*, Vol. V. Cursos e Congresos núm. 22. Ed. Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela, 1982, págs. 192-213. También se tacha de oportunista por la inadecuada justificación de la reforma de 2015 pues los argumentos expuestos en las enmiendas presentadas ante la Comisión de Justicia por el Grupo Parlamentario Popular se produjeron en la última fase de tramitación parlamentaria (de modo que no pudieron ser informados ni por el Consejo Fiscal ni por el Consejo General del Poder Judicial), y tan sólo hacen referencia a la necesidad de adaptar la regulación de los delitos medioambientales a lo dispuesto en las Directivas 2009/123/CE (sobre el art. 325) y 2008/99/CE (sobre el resto del articulado). En este sentido, *vid.* HAVA GARCÍA, E. En “Modificaciones en delitos ambientales”, op. cit., pág. 656; GÓRRIZ ROYO, E. M. Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (arts. 325, 326 bis, 327 y 328 CP)”, op. cit., págs. 1004, 1008 y 1009.

#### 4.3.2.1.- Excurso: el delito ecológico en su modalidad de “ruido” como núcleo de responsabilidad penal en las personas jurídicas

Las reformas que introdujo la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio en materia penal, responden a la necesidad de adecuar nuestro ordenamiento a lo establecido por distintos instrumentos emanados de la UE.<sup>318</sup> A ello se debió, al menos formalmente – según el Preámbulo–, la inclusión de un nuevo título de responsabilidad penal, el de las personas jurídicas, derogando así el viejo aforismo <<*societas delinquere non potest*>>, heredero de las ideas iluministas e incorporado a muy diferentes legislaciones penales tras la Revolución Francesa, ahora sustituido, de manera parcial según un sector doctrinal, por un nuevo principio <<*societas delinquere et puniri potest*>>.<sup>319</sup>

<sup>318</sup> El antecedente europeo sobre la necesidad de introducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas data de 1988, a raíz de la Recomendación 18/88, de 20 de octubre, del Comité de Ministros de los Estados Miembros del Consejo de Europa, así como de diferentes decisiones adoptadas con posterioridad, como el Convenio Europeo de Protección de los Intereses financieros de la UE de 1995 o el Convenio de Cibercriminalidad de Budapest de 2001. También sucesivas Decisiones Marco en la misma dirección político-criminal, como la 2005/222/JAI, del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a los ataques contra los sistemas de información; 2004/757/JAI, del Consejo, de 25 de octubre de 2004, relativa al establecimiento de disposiciones mínimas de los elementos constitutivos de delitos y penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas; 2004/68/JAI, del Consejo, de 22 de diciembre, relativa a la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil; 2000/383/JAI, sobre el fortalecimiento de la protección por medio de las sanciones penales y de otro tipo contra la falsificación de moneda con miras a la introducción del euro; 2001/413/JAI sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de los medios de pago distintos del efectivo; 2002/475/JAI sobre la lucha contra el terrorismo; 2002/629/JAI relativa a la trata de seres humanos; 2003/568/JAI relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado; 2005/667/JAI destinada a reforzar el marco penal para la represión de la contaminación procedente de buques; 2008/841/JAI relativa a la lucha contra la criminalidad organizada y 2008/913/JAI relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal. Vid. MORALES PRATS, F. “La responsabilidad penal de las personas jurídicas (arts. 31 bis, 31.2 supresión, 33.7, 66 bis., 129, 130.2 CP)”. En *La Reforma penal de 2010*. Gonzalo Quintero Olivares (dir.) Ed. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2010, págs. 45-69. En cuanto a las Directivas, cabe mencionar aquí la Directiva 2008/99/CE y 2009/123/CE, así como otros instrumentos entre los que se pueden citar, el Convenio de Derecho penal del Consejo de Europa contra la Corrupción, o el Convenio OCDE de Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales, que obligan a la inclusión de sanciones penales o administrativas dirigidas a las personas jurídicas en relación con ciertos delitos. Así lo recoge DOPICO GÓMEZ-ALLER, J. “Responsabilidad de personas jurídicas”. En *Memento Experto. Reforma Penal 2010*. Iñigo Ortiz de Urbina Gimeno (coord.) Ed. Francis Lefebvre. Madrid, 2010, págs. 12-38, en especial 12. Vid. VELASCO NÚÑEZ, E. Se refiere al mandato de la Unión Europea como “cuestionable”, por contravenir nuestras tradiciones más latinas. “Responsabilidad penal de las personas jurídicas: aspectos sustantivos y procesales”. En *Diario La Ley*, núm. 7883, Año XXXIII, 19 de junio, 2012, págs. 1433-1437; GÓMEZ MARTÍN, V. “Falsa alarma. O sobre por qué la Ley Orgánica 5/2010 no deroga el principio *societas delinquere non potest*”. En *Garantías constitucionales y Derecho penal europeo*. Santiago Mir Puig / Mirentxu Corcoy Bidasolo (dirs.) Víctor Gómez Marín (coord.) Ed. Marcial Pons. Madrid, 2012, págs. 331-383.

<sup>319</sup> Al respecto, BAJO FERNÁNDEZ, M. Advierte cómo V. Liszt vislumbró la necesidad de dar respuesta, a través de la imposición de medidas de seguridad, a las acciones típicas fraudulentas

Uno de los aspectos más polémicos de dicha reforma es, precisamente, la incorporación a nuestro ordenamiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, hecho hasta ahora desconocido en nuestra tradición legislativa. No así en la experiencia de otros países, sobre todo los anglosajones, EE.UU. o Japón, que nunca han mostrado excesivas objeciones al aceptar la inclusión de las empresas y corporaciones como sujetos objeto de sanción en sus respectivos sistemas penales, aunque adoptan, eso sí, diferentes modulaciones y criterios de imputación.<sup>320</sup>

---

cometidas por personas jurídicas (contratos, obligaciones, etc.). “Vigencia de la RPPJ en el derecho sancionador español”. En BAJO FERNÁNDEZ, M. / FEIJÓO SÁNCHEZ, B. / GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. *Tratado de responsabilidad penal de las personas jurídicas*. Ed. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2012, págs. 19-47, en especial 32; BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I. *Viejo y Nuevo Derecho Penal. Principios y desafíos del Derecho Penal de hoy*. Ed. Iustel. Madrid, 2012, págs. 161 y ss; DOPICO GÓMEZ-ALLER, J. “Responsabilidad de personas jurídicas”. En *Memento Experto. Reforma Penal 2010*, op. cit., págs. 12-38; NIETO MARTÍN, A. “La responsabilidad penal de las personas jurídicas tras la LO 5/2010”. En *Revista Xurídica Galega*, núm. 63. Ed. Universidade Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico. Santiago de Compostela, 2009, págs. 47-71. Por su parte, GÓMEZ MARTÍN, V., considera que la LO 5/2010 deroga, en cierto modo, uno de los dos subprincipios en los que se divide el principio *societas delinquere nec puniri potest*; esto es, la máxima *societas puniri non potest*, pero mantiene sin variaciones el que proclama que *societas delinquere non potest*. En “Falsa alarma. O sobre por qué la Ley Orgánica 5/2010 no deroga el principio “societas delinquere non potest”, op. cit., pág. 332. De la misma opinión, MIR PUIG, S. “Las nuevas “penas” para personas jurídicas: una clase de “penas” sin culpabilidad. En *Responsabilidad de la Empresa y Compliance. Programas de prevención, detección y reacción penal*. Santiago Mir Puig / Mirentxu Corcoy Bidasolo / Víctor Gómez Martín (dirs.) Juan Carlos Hortal Ibarra / Vicente Valiente Ivañez (coords.) Ed. B de F / Edisofer. Madrid, 2014, págs. 3- 14, en especial 3 y 4.

<sup>320</sup> En Estados Unidos, hace más de un siglo que contemplan tal responsabilidad, concretamente iniciada con el asunto *New York Central and Hudson River Railroad Company vs. United States*, 212 U.S. 481 (1909), pero en el Reino Unido la experiencia es aún anterior, ya que como primer caso se suele citar *R V Great North of England Rly Co* en 1846, si bien se conocen ejemplos más remotos de procedimientos contra entidades públicas municipales por no cumplir los deberes legales frente a los ciudadanos. Las referencias sobre éstos y otros antecedentes en GÓMEZ TOMILLO, M. Menciona la extensiva aceptación de dicha responsabilidad en derecho comparado, citando la excepción de Alemania e Italia, que consideran que existen razones constitucionales para rechazar tal criterio político-criminal. En *Introducción a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el sistema español*. Ed. Lex Nova. Valladolid, 2010, págs. 15 y 16. Aún así, en Italia han adoptado un modelo intermedio, que consiste en regular la responsabilidad de las personas jurídicas por los ilícitos administrativos derivados del delito, incluso cuando no se pueda individualizar al autor del delito o éste no sea responsable (Ley de 20 de septiembre de 2000, núm. 300); respecto a esta opción existe unanimidad doctrinal sobre su verdadera naturaleza, esto es, se trata de un auténtico modelo de responsabilidad penal. Otros países como Francia, Bélgica, Suiza, Países Bajos, o Chile adoptan el modelo con diferencias en cuanto a la construcción de la responsabilidad; en Francia sólo basta con que los órganos de dirección o los representantes cometan un delito por cuenta de la empresa (art. 121.2 CP); en Bélgica se suma a lo anterior el castigo de las infracciones ligadas intrínsecamente a la realización del objeto de la persona jurídica o a la defensa de sus intereses (art. 5 CP); en Suiza, la responsabilidad empresarial es subsidiaria, es decir, siempre que no se pueda imputar a una persona concreta, por defecto de organización interna y en Chile, al contrario, se sigue un modelo autónomo por defecto de organización, en una de las más recientes legislaciones al respecto (Ley 20393, de 2 de diciembre de 2009), al igual que el elegido por España en 2010. Vid. ORTIZ DE URBINA GIMENO, I. “Responsabilidad penal de las personas jurídicas: the American way”. En *Responsabilidad de la Empresa y Compliance. Programas de prevención, detección y reacción penal*. Santiago Mir Puig / Mirentxu Corcoy Bidasolo / Víctor Gómez Martín (dirs.) Juan Carlos Hortal Ibarra / Vicente Valiente Ivañez (coords.) Ed. B de F / Edisofer. Madrid, 2014, págs. 35-88. Una comparativa de los distintos modelos en relación a sus aspectos procesales en GASCÓN INCHAUSTI, F. “Consecuencias procesales del nuevo régimen de

Tal es el grado de implementación en el sistema estadounidense, por ejemplo, que las Directrices para imponer sentencias a las organizaciones, las llamadas *Organizational sentencing Guidelines* (OSG), y que incluyen tanto circunstancias agravantes como atenuantes de la responsabilidad, sirven de guía para que exista un alto grado de uniformidad en la práctica de todo el país.<sup>321</sup>

La literatura publicada en esta materia es copiosa incluso con anterioridad a la reforma de 2010<sup>322</sup>, pero queremos incidir en que la postura a favor de la inclusión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es defendida, en su gran mayoría, por los que consideran que existe identidad ontológica entre sanciones penales y administrativas y, por tanto, utilizan el criterio de la gravedad de la conducta para su incorporación en unas u otras, a través de un hilo conductor que va de la menor gravedad a la máxima, destacando además que la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas recoge sin fisuras la responsabilidad administrativa de

---

responsabilidad penal de las personas jurídicas: la persona jurídica como sujeto pasivo del proceso penal”, op. cit., págs. 25-27.

<sup>321</sup> Una descripción detallada del contenido y aplicabilidad de las OSG en ARTAZA VARELA, O. *La empresa como sujeto de imputación de responsabilidad penal. Fundamentos y límites*. Ed. Marcial Pons. Madrid, 2013, págs. 113-136. Una visión específica del sistema de EE.UU. en GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. *La responsabilidad penal de las empresas en EE.UU.* Ed. Universitaria Ramón Areces. Madrid, 2006. También ORTIZ DE URBINA GIMENO, I. En “Responsabilidad penal de las personas jurídicas: the American way”, op. cit., págs. 52-63.

<sup>322</sup> Así, entre otros, BACIGALUPO SAGGESE, S. *La responsabilidad penal de las personas jurídicas*. Ed. Bosch. Barcelona, 1998; MIR PUIG, S. *Derecho penal. Parte General* (7ª ed.) Ed. Reppertor. Barcelona, 2010; GÓMEZ-JARA DIEZ, C. “¿Imputabilidad de las personas jurídicas?”. En *Libro Homenaje al Prof. Dr. Gonzalo Rodríguez Mourullo*. Ed. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2005, págs. 425-446; GUARDIOLA LAGO, M. J. *Responsabilidad penal de las personas jurídicas y alcance del art.129 del Código Penal* Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2004; LOZANO CUTANDA, B. “La responsabilidad de la persona jurídica en el ámbito sancionador administrativo (a propósito de la STC 246/1991)”. En *Revista de Administración Pública*, núm. 129, Madrid, 1992, págs. 211-240; NIETO MARTÍN, A. *La responsabilidad penal de las personas jurídicas: un modelo legislativo*. Ed. Iustel. Madrid, 2008; PÉREZ GIL, J. “Cauces para la declaración de responsabilidad penal de las personas jurídicas”. En *Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2010*. Francisco Álvarez García / José Luis González Cussac (dirs.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2010, págs. 583-590; RODRÍGUEZ RAMOS, L. “Societas delinquere potest. Nuevos aspectos dogmáticos y procesales de la cuestión”. *Diario La Ley*, 3 de noviembre. Madrid, 1996; ZUGALDÍA ESPINAR, J. M. *Bases para una teoría de la imputación de la persona jurídica*. Cuadernos de Política Criminal, núm. 81. Ed. Edersa. Madrid, 2003, págs. 537-554; ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L. *Bases para un modelo de imputación de responsabilidad penal a las personas jurídicas* (2ª ed.) Ed. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2009; SILVA SÁNCHEZ, J. Mª. “La responsabilidad penal de las personas jurídicas y las consecuencias accesorias del artículo 129”. *Manuales de formación continuada*, núm. 14. Ed. CGPJ. Madrid, 2001; JAKOBS, G. “¿Punibilidad de las personas jurídicas?”. En *El funcionalismo en Derecho penal. Libro Homenaje al profesor Günter Jakobs*. Eduardo Montealegre Lynett (coord.) Ed. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2003, pág. 329; CARBONELL MATEU, J. C. “Responsabilidad penal de las personas jurídicas: reflexiones en torno a su dogmática y al sistema de la reforma de 2010”. En *Cuadernos de política criminal segunda época*. Vol. II, núm. 101. Ed. Dykinson. Madrid, 2010, págs. 5-33.

las personas jurídicas, en el art.130.1.<sup>323</sup> Al hilo de los problemas que presentan los casos en que se pueda incurrir en *ne bis in idem*, a los que me referiré más adelante, la opción de la prevalencia de la sanción penal sobre la administrativa, no siempre será de mayor rigor punitivo, por lo que de ello no se puede desprender que el Derecho penal suponga un gravamen altamente preventivo en el marco de las corporaciones.<sup>324</sup>

No obstante, y a título ilustrativo, mencionar que Alemania no ha acogido este modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas, y la única sanción que contemplan es la multa (multa asociacional o *Verbandsgeldbusse*).<sup>325</sup> De hecho, parte de la doctrina considera que el Derecho penal ambiental, aplicado a personas jurídicas que dependen de los modelos autorizatorios administrativos propios de actividades que pueden resultar contaminantes, es inoportuno por generar el efecto contrario, por ser inmunes a la conminación penal.<sup>326</sup> Sin embargo, desde una panorámica de derecho comparado, llegan otras interpretaciones como las defendidas en Alemania por HEINE, MEINBERG, o KUBE, en las que se aboga por la necesidad de incluir esta nueva forma de imputación, recurriendo a intervenciones contundentes del Derecho penal, si bien dotándolas de una clara reducción en los obstáculos jurídico-procesales. Como argumento de tales premisas, se recurre a la falta de armonía dogmático-constructiva

---

<sup>323</sup> Art.130.1 LRJPAC: <<Sólo podrán ser sancionadas las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos aun a título de simple inobservancia>>. De esta opinión, GÓMEZ TOMILLO, M. En “Introducción a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el sistema español”, op. cit., pág. 39.

<sup>324</sup> En este sentido, tomando como ejemplos la Ley de Defensa de la Competencia y la Ley del Mercado de Valores, cuyo incumplimiento acarrea una sanción administrativa más elevada que la multa penal, *vid.* NIETO MARTÍN, A. En “La responsabilidad penal de las personas jurídicas: un modelo legislativo”, op. cit., pág. 49.

<sup>325</sup> *Vid.* VELASCO NÚÑEZ, E. En relación a la recaudación dineraria, apunta que Francia obtiene menor cuantía de las personas jurídicas condenadas por lo penal que Alemania por la vía administrativa. En “Responsabilidad penal de las personas jurídicas: aspectos sustantivos y procesales”, op. cit., pág. 1435, nota 3.

<sup>326</sup> *Vid.* MÜLLER-TUCKFELD, J. C. <<A la vista de la actual amenaza ecológica, si algo puede ser tildado de “favorable a la industria” es la confianza en el Derecho penal del medio ambiente como instrumento de control social>>. En “Ensayo para la abolición del derecho penal del medio ambiente”, op. cit., págs. 527 y 528. Por ejemplo, Brasil expresa claramente este tipo de responsabilidad penal en el art. 3º de la Ley Ambiental núm. 9.605, de 12 de febrero de 1998. *Vid.* REGIS PRADO, L. Según el autor, este precepto es de dudosa constitucionalidad frente al subsistema penal de Brasil y los principios constitucionales penales que lo rigen (personalidad de las penas, culpabilidad, intervención mínima). “El nuevo Derecho penal brasileño del ambiente: cuestiones fundamentales”. En *Modernas tendencias en la ciencia del Derecho penal y en la Criminología*. Actas Congreso Internacional Facultad de Derecho de la UNED. Madrid, 6 al 10 de noviembre de 2000. Ed. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Madrid, 2001, págs. 218-235, en especial 222 y 223. También Guatemala o Panamá vienen realizando sus propuestas desde hace años. *Vid.* ALVARADO MARTÍNEZ, I. “La problemática de las personas jurídicas en la tutela penal del ambiente”. En *La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Fortalezas, debilidades y perspectivas de cara al futuro*. Miguel Ontiveros Alonso (coord.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2014, págs. 11-52, en especial 33.

vigente en relación a la materia medioambiental, que habitualmente se corresponde con la falta de conocimientos empíricos, certeros y fehacientes, acerca de los resultados que pueden causar determinadas actuaciones y que, a la postre, también pueden tener efectos contraproducentes.<sup>327</sup>

Afortunada o desafortunadamente, el legislador español no ha optado por dotar a la responsabilidad penal de las personas jurídicas de una cláusula general que acoja todos los delitos presentes o futuros en nuestro Código Penal, sino que ha optado por un catálogo cerrado y tasado de los diferentes delitos que llevan aparejada dicha responsabilidad, un sistema de *numerus clausus* basado en un régimen de incriminación *uti singuli*<sup>328</sup>, entre los que se encuentran los relativos al medio ambiente.<sup>329</sup>

---

<sup>327</sup> Vid. HEINE, G. “Accesoriedad administrativa en el Derecho penal del medio ambiente”. En *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*. P. M. Aguado (tr.) Vol. 46. Madrid, 1993, págs. 289-315, en especial 314. Abiertamente crítico en su examen de la Ley N° 20.393, que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile, se muestra VAN WEEZEL, A. “Contra la responsabilidad penal de las personas jurídicas”. En *La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Fortalezas, debilidades y perspectivas de cara al futuro*. Miguel Ontiveros Alonso (coord.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2014, págs. 599-644.

<sup>328</sup> Conforme a este repertorio, los que siguen atendiendo al orden sistemático de nuestro Código Penal: tráfico de órganos (art.156 bis); trata de seres humanos (art.177 bis. 7°); delitos relativos a la prostitución (art.189 bis); acceso ilícito a datos y programas informáticos (art.197.3); estafa (art. 251 bis); insolvencias y concursos punibles (art. 261 bis); sabotajes y daños informáticos (art. 264.4); delitos relativos al mercado y consumidores y corrupción privada (art. 288); receptación y blanqueo de capitales (art. 302.2); delitos contra la Hacienda Pública y contra la seguridad Social (art. 310 bis); delitos contra los derechos de los trabajadores (art. 318.bis.4); delitos contra la ordenación del territorio (art. 319.4); delitos contra el medio ambiente (arts. 327 y 328.6); delitos relativos a vertidos o emisiones ionizantes (art. 343.3); fabricación, manipulación, transporte, tenencia o comercialización de explosivos (art. 348.3); tráfico o favorecimiento de consumo de drogas tóxicas o estupefacientes (art. 369 bis); falsificación de tarjetas de crédito y cheques de viaje (art. 399 bis); cohecho (art. 427.2); tráfico de influencias (art. 430); corrupción de funcionario público extranjero o de organización internacional (art. 445.2); organizaciones y grupos criminales (art. 570 quater); financiación del terrorismo (art. 576 bis. 3). Promulga parte de la doctrina que debería haberse incorporado un tipo penal nuevo concerniente a los testaferros, lo que denominaríamos delito de “testaferria”. Y ello dado que dentro de los objetivos de la política-criminal que supone el espíritu de la reforma, posee especial relevancia la utilización de “testaferros” por parte de los verdaderos responsables de las personas jurídicas en cuanto a una posible exención de responsabilidad penal. De hecho, la inclusión de este delito sí aparecía en el Proyecto de reforma de 2007.

<sup>329</sup> La duración de las penas es sensiblemente menor, y la cuantía de la pena de multa también sufre variaciones tras la reforma de 2015. Ahora es el art. 328 del CP reformado el que recoge la disposición: <<Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este Capítulo, se le impondrán las siguientes penas: a) Multa de uno a tres años, o del doble al cuádruple del perjuicio causado cuando la cantidad resultante fuese más elevada, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena más de dos años de privación de libertad. b) Multa de seis meses a dos años, o del doble al triple del perjuicio causado si la cantidad resultante fuese más elevada, en el resto de los casos. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33>>.

El criterio tradicional ha sido que las personas jurídicas solo podían cometer delitos *mala prohibita* y no *mala in se*.<sup>330</sup> Por ello, la evolución que han sufrido los sectores regulatorios en los que las personas jurídicas son sancionadas administrativamente, ha desembocado en un trasvase de responsabilidad penal. Ahora bien, la mayor parte de los delitos incluidos son precisamente los que se corresponden con los instrumentos comunitarios que preveían la responsabilidad de las personas jurídicas por la comisión de delitos, y no por razones político-criminales.<sup>331</sup>

Contrario a esta nueva vía de imputación se muestra RODRÍGUEZ MOURULLO, que expresa su disconformidad con el hecho de que se inserte en un sistema legal concebido y establecido para la responsabilidad de las personas físicas, sin que se haya producido a la par ninguna modificación.<sup>332</sup> En el mismo sentido, por cuestiones pragmáticas, BAJO FERNÁNDEZ observaba en esta responsabilidad un cauce adecuado para el traspaso de principios de Derecho privado al ámbito del Derecho penal.<sup>333</sup> En la misma línea, GIMBERNAT opina que la responsabilidad penal de las personas jurídicas vulnera los principios de responsabilidad personal y de culpabilidad.<sup>334</sup>

---

<sup>330</sup> En el caso español se produce una mixtura entre ambos, según GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. *Fundamentos modernos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Bases teóricas, regulación internacional y nueva legislación española*. Julio César Faira (ed.) Ed. B de F. Montevideo /Buenos Aires, 2010, págs. 508 y 509. Del mismo autor, *vid.* “La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la reforma del Código Penal”. En *Diario La Ley*, núm. 7534, Sección Tribuna, 23 de diciembre de 2010. Año XXXI. La Ley. Madrid, 2010, págs. 1-20. También se refiere a la problemática en torno al delito de homicidio, puesto que, en ciertos casos su vinculación con delitos regulatorios clásicos es evidente, aludiendo a los delitos contra la seguridad de los trabajadores o contra los consumidores, si bien el CP excluye los primeros del ámbito de sanción del art. 31 bis.

<sup>331</sup> De hecho, la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley se refiere exclusivamente a que el motivo de regulación pormenorizada de la responsabilidad penal de las personas jurídicas trae causa de los numerosos instrumentos jurídicos internacionales (Convenios, Decisiones Marco, etc.) que demandaban una respuesta penal clara para las personas jurídicas, sobre todo en aquellas figuras delictivas donde la posible intervención de las mismas se revela como más evidente.

<sup>332</sup> *Vid.* RODRÍGUEZ MORULLO, G. En especial alude a la definición legal de delito, al principio de responsabilidad subjetiva, al concepto de imputabilidad, al contenido del dolo y de la imprudencia que se desprende de la regulación del error, a la capacidad de que el condenado conozca el sentido de la pena, conforme a los arts. 10, 5, 20.1º, 2º y 3º, 14 y 60 respectivamente. Considera que todos estos elementos, entre otros, generarán graves distorsiones y que, al imponerse penas sin respetar los principios básicos que presiden el estatuto penal de la persona física, <<*se acabará socavando la vigencia de las garantías previstas para su protección*>>. Asimismo, recogiendo las formulaciones de Morales Prats, Bajo Fernández y Nieto Martín, opina, en el mismo sentido, que el legislador debería haber creado un subsistema, o un Derecho penal accesorio, incluso el empleo de una ley especial en el que se integre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en su vertiente penal y procesal. “La responsabilidad penal de las personas jurídicas desde las perspectivas político-criminal y dogmática”. *Revista Otrosí* núm. 6 abril-junio. Ed. Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Madrid, 2011, págs. 7-14.

<sup>333</sup> *Vid.* BAJO FERNÁNDEZ, M. “De nuevo sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas”. En *Anuario Derecho Penal y Ciencias Penales*. Año 1981, Tomo 34, Núm. 2-3, págs. 371-379.

<sup>334</sup> *Vid.* GIMBERNAT ORDEIG, E. En “La insoportable gravedad del Código Penal”, *op. cit.*, pág. 216.

No obstante, otro amplio sector doctrinal se muestra partidario de la inclusión de las personas jurídicas en el sistema penal, como ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, GÓMEZ-JARA, BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, aludiendo prioritariamente a necesidades político-criminales.<sup>335</sup> No obstante, el principal escollo dogmático al que se enfrentan sigue vigente y sin soluciones específicas en torno a la culpabilidad y a los criterios de imputación subjetiva, más allá del planteamiento de un nuevo concepto de culpabilidad diseñado a medida de las necesidades, que permita incorporar a las empresas como sujetos activos del delito, si bien entienden que el fallo organizativo (que se traduce en una conducta omisiva), se conecta con la comisión del delito por parte de un integrante de la misma (una persona física determinada).<sup>336</sup> Por tanto, no resulta insensato plantear la opción de un Derecho penal accesorio, que integre todas y cada una de las categorías dogmáticas, pero adecuadas a la naturaleza estructural de las personas jurídicas, de lo contrario se exhibe con claridad una especie de maniqueísmo que convierte al Código Penal en un método dicotómico.

En nuestro país, el TC se pronunció en una importante sentencia en relación a la interpretación del principio de culpabilidad en las personas jurídicas cuando éstas son sancionadas administrativamente, reiterando su propia doctrina anterior en cuanto a que los principios inspiradores del orden penal son de aplicación, con matices, al Derecho administrativo sancionador, dado que ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado. Así, el Alto Tribunal entiende que el principio de culpabilidad rige también en materia de infracciones administrativas, pues optar por un régimen de responsabilidad objetiva o sin culpa sería inadmisibles. Ahora bien, el elemento subjetivo de la culpa no se suprime en relación a estas personas jurídicas, sino que

---

<sup>335</sup> Por ejemplo, ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L., no encuentra obstáculo para aplicar las categorías actuales del injusto y la culpabilidad a las personas jurídicas. En “Bases para un Modelo de Imputación de Responsabilidad Penal a las Personas Jurídicas”, op. cit.; GÓMEZ-JARA DIEZ, C. “Aspectos sustantivos relativos a la responsabilidad penal de las personas jurídicas”. En BANACLOCHE PALAO, J. / ZARZALEJOS NIETO, J. / GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. *Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Aspectos sustantivos y procesales*. Ed. La Ley. Madrid, 2011, págs. 19-126; BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I. Considera necesario afirmar la responsabilidad penal empresarial por dos razones: una de ellas es el factor criminógeno que acompaña a la empresa en la sociedad actual, la segunda es la mayor presencia de empresas supranacionales en la economía internacional globalizada. En “Viejo y Nuevo Derecho Penal. Principios y desafíos del Derecho Penal de hoy”, op. cit. págs. 164 y ss.

<sup>336</sup> Vid. ARTAZA VARELA, O. Analiza diferentes teorías de justificación de la culpabilidad de la empresa, como la propuesta por Heine (basado en un tratamiento normativo diferenciado, con un modelo de imputación sustentado bajo el soporte de la responsabilidad originaria de la empresa, debida a su capacidad de autorregulación en sectores determinados), Dannecker (responsabilidad social como criterio central, cuya culpabilidad deriva de las carencias en su estructura organizativa o ética), o Gómez-Jara (concepción constructivista). En “La empresa como sujeto de imputación de responsabilidad penal. Fundamentos y límites”, op. cit., págs. 260-277.



simplemente ha de aplicarse necesariamente de forma distinta a como se hace respecto de las personas físicas y esta construcción nace de la propia naturaleza de ficción jurídica a la que responden estos sujetos: <<*falta en ellos el elemento volitivo en sentido estricto, pero no la capacidad de infringir las normas...*>>.<sup>337</sup>

El ejemplo español es un modelo autónomo de responsabilidad de estos entes, ya que el ordenamiento penal no permite el castigo por hechos ajenos, pero una parte de la doctrina entiende que el nuevo modelo en realidad representa un cambio de etiquetas<sup>338</sup>, porque implícitamente ya se había construido tal responsabilidad a través del art. 129 CP, que también sufrió una importante modificación en la reforma de 2010.<sup>339</sup> No comparto tal interpretación porque la existencia de dicho artículo no proclamaba una responsabilidad plenamente automática de las personas jurídicas, sino que asociaba las consecuencias accesorias a la previa imputación de una persona física como autora del delito –no olvidemos que el nuevo art. 31 ter especifica que la responsabilidad será exigible con independencia de que la concreta persona física responsable haya sido o no individualizada, o sea imposible dirigir el procedimiento contra ella, a pesar de que el delito se entienda cometido por quien ostente determinados cargos o realice señaladas funciones–.<sup>340</sup>

---

<sup>337</sup> STC (Sala Primera) núm. 246/1991, de 19 de diciembre [RTC 1991\246] (FJ 2).

<sup>338</sup> Así, entre otros, RODRÍGUEZ MOURULLO, G. Niega el carácter directo y autónomo, considerando que se trata de una responsabilidad derivada, transferida o trasladada, diferenciándose de otros que sí proponen una responsabilidad directa, como el modelo de responsabilidad por <<*defecto de organización*>>, defendido en la doctrina alemana por Tiedemann. En “La responsabilidad penal de las personas jurídicas desde las perspectivas político-criminal y dogmática”, op. cit., pág. 10.

<sup>339</sup> Con la reforma de 2015, el tenor de los dos primeros apartados del art. 129 tan solo cambia por la supresión del término –falta–, para adaptar el texto a la derogación del Libro III. También desaparece el apartado 3, que preveía la facultad del Juez Instructor para acordar medidas cautelares consistentes en la clausura temporal de los establecimientos, la suspensión de actividades sociales y la intervención judicial.

<sup>340</sup> Vid. GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. No considera que se trate de penas ni de medidas de seguridad, sino de *dispositivos sui generis* y autónomos, dotados de un fundamento político-criminal propio. En *Introducción al Derecho Penal. Instituciones, fundamentos y tendencias del Derecho Penal* Vol. I (5ª ed.) Ed. Centro de Estudios Ramón Areces. Madrid, 2012, págs. 144-152. Por su parte, RODRÍGUEZ RAMOS, L., sostiene que tanto antes de la reforma de 2010 como ahora, se trata de auténticas penas, por lo que la expresión “consecuencias accesorias” es un eufemismo. “¿Cómo puede delinquir una persona jurídica en un sistema penal antropocéntrico? (La participación en el delito de otro por omisión imprudente: pautas para su prevención)”. En *Diario La Ley*. Año XXXII, núm. 7561. Jueves, 3 de febrero de 2011, págs. 1-8, en especial 1; NIETO MARTÍN, A. La diferencia entre penas y consecuencias accesorias no es tan sólo de carácter semántico. El choque entre teoría y praxis dio lugar al curioso resultado de eludir la imposición de penas y optar por la denominación de consecuencias accesorias (medidas de seguridad, según el Anteproyecto de 1983), que escondía una elección político-criminal clara; la oposición del legislador a que las sanciones a empresas se catalogaran como penas. En “La responsabilidad penal de las personas jurídicas tras la LO 5/2010”, op. cit., pág. 49.

Con la nueva redacción del art.129 se produce una primera vía de escape diseñada de forma negativa, es decir, sólo será de aplicación para los entes sin personalidad jurídica que no tengan espacio en el nuevo art. 31 bis, pero no adapta alguna de las remisiones que se hacían al respecto.<sup>341</sup> Además, exceptuando la pena de multa y la disolución de la persona jurídica, tanto las penas del art. 33.7 como las consecuencias accesorias del art. 129 son idénticas.<sup>342</sup> Por otra parte, la mayoría de estas sanciones –en estos momentos, penas-, a excepción de la de inhabilitación, ya se encontraban previstas.<sup>343</sup>

Pese a la gran similitud entre ambas redacciones, existe una brecha no cubierta con la reforma de 2010 ni con la de 2015, pues la consideración de graves a todos los efectos de las penas aplicables a las personas jurídicas, establecida en el art. 33.7 no permite una gradación acorde a la tradicional división en graves, menos graves y leves que recoge el art. 33.1, lo que implica una merma del principio de igualdad en relación

---

<sup>341</sup> En particular, existe un grupo adicional de delitos sobre los que no cabe declarar responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero no obstante, el CP prevé la *facultad* del juez de adoptar algunas de las medidas recogidas en el art. 129. Estos son: alteración de precios en concursos y subastas públicas (art. 262); obstrucción a la actividad inspectora o supervisora (art. 294); delitos contra los derechos de los trabajadores (art. 318); delitos de riesgo producido por explosivos y agentes similares (art. 348); delitos alimentarios y farmacéuticos (art. 366); y falsedad de moneda (art. 386). Dichos delitos se remiten a las medidas aplicables a aquellas entidades que no posean personalidad jurídica, y a su vez, esas disposiciones se definen en alusión a las *penas* aplicables a las personas jurídicas. Se hace eco de este negligente desvío DOPICO GÓMEZ-ALLER, J. En “Responsabilidad de personas jurídicas”, op. cit., pág. 24. Otra de las críticas lanzadas es que conserva el régimen de aplicación potestativa, a diferencia de las responsabilidades previstas en el art. 31 bis, que poseen carácter preceptivo, sin que se haya esgrimido ninguna razón que justifique esa diferencia de intensidad en la actuación de jueces y tribunales. Así, MORALES PRAT, F. En “La responsabilidad penal de las personas jurídicas”, op. cit., págs. 67 y 68.

<sup>342</sup> De acuerdo con la experiencia en derecho comparado, no se entiende que el legislador no haya incorporado alguna de las sanciones que ofrecen, como la pena consistente en la prohibición de realizar publicidad futura de la empresa respecto de actividades o productos relacionados con la comisión del delito. En este sentido, MORALES PRATS, F. En “La responsabilidad penal de las personas jurídicas”, op. cit., pág. 64. En opinión de GÓMEZ TOMILLO, M., desde un punto de vista dogmático, la solución del legislador para imponer las medidas a entidades o agrupaciones sin personalidad jurídica es dudosa, por cuanto se denomina medida accesoria a algo con análogo contenido al de las penas dictadas en el caso de personas jurídicas. En “Introducción a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el sistema español”, op. cit., pág. 38. El retrato de la situación lo dibuja tomando el ejemplo de los supuestos de nulidad previstos en el art. 34 de la Ley de Sociedades Anónimas, entre los cuales se encuentra la no aportación <<en la escritura de constitución o en los estatutos sociales la denominación de la sociedad, las aportaciones de los socios, la cuantía del capital, el objeto social o, finalmente, por no respetarse el desembolso mínimo del capital legalmente previsto>>, lo que no parece suficiente para excluir la pena de multa si concurren los requisitos necesarios para imputar a esa sociedad la comisión de un delito. Al respecto, también GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. Resalta la relevancia en el caso de grupos de sociedades, que, al carecer de personalidad jurídica, no podrían verse sometidos al régimen del art.31 bis, pero sí al del art.129. En “La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la reforma del Código Penal”, op. cit., pág. 3.

<sup>343</sup> Vid. SILVA SÁNCHEZ, J. M<sup>a</sup> / MONTANER FERNÁNDEZ, R. “Los delitos contra el medio ambiente. Reforma legal y aplicación judicial”, op. cit., pág. 171.

al estatuto penal general, además también se aleja del criterio común adoptado por el Derecho administrativo en su clasificación de las sanciones administrativas.<sup>344</sup>

Distorsión a la que se suma otra más, en este caso trae causa de la desaparición del sistema de faltas previsto por la modificación de 2015<sup>345</sup>, ya que algunos comportamientos que anteriormente se tipificaban como faltas, pasan a ser considerados delitos leves, por lo que, en principio, serían subsumibles en la responsabilidad diseñada para las personas jurídicas, si bien las penas que llevan aparejadas continúan calificadas como graves. Para proceder a determinar la pena se deberá acudir a los criterios que proporciona el art.66 bis, que remite a las reglas generales del art.66.1 (1ª a 4ª y 6ª a 8ª), y además habrán de tenerse en cuenta las siguientes circunstancias: a) la necesidad en orden a prevenir la continuidad de la actividad delictiva o de sus efectos; b) las consecuencias económicas y sociales, especialmente los efectos para los trabajadores; c) la posición que ocupa la persona física u órgano que incumplió el deber de control en la estructura de la persona jurídica.

Asimismo, la norma vincula la duración de las penas que se impongan con una duración limitada a la duración máxima de la pena privativa de libertad prevista para el caso de que el delito fuera cometido por una persona física (art.66 bis 2ª).<sup>346</sup> En el caso

---

<sup>344</sup> Según el art. 129. 1 *in fine* de la LRJPAC, las infracciones administrativas se clasificarán por la Ley en leves, graves y muy graves.

<sup>345</sup> La Exposición de Motivos del Anteproyecto de 2012, por el que se modificaba la LO 10/1995, no dejaba lugar a dudas, ya que aludía primordialmente a la necesidad de primar la racionalización del uso público de la justicia frente a la elevada litigiosidad existente, pero lo cierto es que esta postura no deja de presentar una serie de dificultades y obstáculos para conseguir la finalidad expresada, desde puntos de vista sustantivo-materiales y también procesales (por ejemplo, en relación a la existencia y cancelación de antecedentes penales, criterios de competencia objetiva -juzgados de instrucción (que venían ocupándose de los juicios de faltas) o juzgados de lo penal-, se prescinde de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad, que en relación a conductas contra el medio ambiente en la modalidad de ruidos pueden dar muy buenos resultados, o los problemas que genera el plazo de prescripción de un año respecto a los seis meses contemplados anteriormente para hechos constitutivos de faltas, etc.

<sup>346</sup> Artículo que fue introducido por LO 5/2010. A su vez incluye referencias que permiten, al menos, identificar una fundamentación y finalidad de las sanciones que no se preveía en el texto prelegislativo. *Vid.* MORALES PRATS, F. Se inclina por interpretar la 2ª regla específica (duración de penas en relación a las penas privativas de libertad) como salvaguarda del principio de proporcionalidad, si bien aclara que esta limitación casa mal con la finalidad preventiva de este tipo de penas para las personas jurídicas. En “La responsabilidad penal de las personas jurídicas”, op. cit., pág. 65. La modificación llevada a cabo por la LO 1/2015 introduce un párrafo en el tenor de la regla 2ª del art. 66 bis: cuando la responsabilidad de la persona jurídica, en los casos previstos en la letra b) del apartado 1 del artículo 31 bis [esto es, delitos cometidos en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas

de imposición de pena de multa, su regulación se encuentra en los arts.50 y ss., siendo ésta la pena destinada por excelencia a los sistemas de responsabilidad penal de las personas jurídicas.<sup>347</sup>

Con el Código Penal vigente en estos momentos, el estatuto penal de las personas jurídicas ya no se circunscribe al por otra parte desmesurado art.31 bis. El incremento del texto normativo del tipo, así como la incorporación de los nuevos artículos 31 ter, quater y quinquies suple algunas de las múltiples pretensiones normativas que la ciencia jurídica venía reclamando desde su creación.<sup>348</sup> Parte de ellas tratadas por una importante Circular emitida por la Fiscalía General del Estado, que examinaba diferentes aspectos de la nueva regulación con el fin de marcar las pautas de su aplicación por parte del Ministerio Fiscal, en la que se recomendaba que la aprobación de un régimen procesal específico resultaba esencial, y que hasta su promulgación se aplicaran los preceptos de la LECrim y supletoriamente, los de la LEC, conforme a las pautas apuntadas en el texto.<sup>349</sup>

---

circunstancias del caso], derive de un incumplimiento de los deberes de supervisión, vigilancia y control que no tenga carácter grave, estas penas tendrán en todo caso una duración máxima de dos años.

<sup>347</sup> Crítico con el actual modelo de pena de multa aplicable a las personas jurídicas BAUCCELLS LLADÓS, J. “Sistema de penas para la delincuencia económica en Derecho español”. En *La delincuencia económica. Prevenir y sancionar*. Mercedes García Arán (dir.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2014, págs. 393-423, en especial 410 y ss. En sentido contrario lo valora de forma positiva, sin esconder que persisten los problemas a la hora de aplicar el criterio de la gravedad del hecho sobre el sistema de días-multa, y el de multa proporcional, ROCA DE AGAPITO, L. En “Sanciones penales aplicables a las personas jurídicas”, op. cit., págs. 386. Con razón, GÓMEZ-JARA DÍEZ, C., alude a la complejidad de efectuar dicha previsión respecto a otras penas diferentes a la multa, por su sencillez a la hora de modularla porcentualmente. En “Aspectos sustantivos relativos a la responsabilidad penal de las personas jurídicas”, op. cit., pág. 85.

<sup>348</sup> Así, entre otros MORALES PRATS, F. Menciona la solución ofrecida por el sistema estadounidense, en el que, si la persona jurídica ha adoptado un sistema de prevención adecuado y colabora con las autoridades, se contempla la cláusula de exención de responsabilidad. En “La responsabilidad penal de las personas jurídicas”, op. cit., pág. 58. Al mismo tiempo, otras previsiones se revelan cruciales, como la figura del *compliance officer* dentro de ese otro órgano que en la práctica se denomina Comité de cumplimiento, persona encargada del control y vigilancia del cumplimiento del programa, con poderes autónomos de iniciativa y control, que no obstante podría contradecir lo estipulado en el art. 31 bis a), que restringe la vía de imputación a los sujetos con capacidad de decisión, de control, y de organización de la empresa. A esta imperfección en materia competencial aluden CORCOY BIDASOLO, M. / GÓMEZ MARTÍN, V. Prólogo a la obra colectiva *Responsabilidad de la Empresa y Compliance. Programas de prevención, detección y reacción penal*. Santiago Mir Puig / Mirentxu Corcoy Bidasolo / Víctor Gómez Martín (dirs.) Juan Carlos Hortal Ibarra / Vicente Valiente Ivañez (coords.) Ed. B de F / Edisofer. Madrid, 2014, págs. XXI y XXII. De forma específica trata la responsabilidad de estos denominados oficiales de cumplimiento LASCURAÍN SÁNCHEZ, J. A. “Salvar al oficial Ryan. (Sobre la responsabilidad penal del oficial de cumplimiento)”. En *Responsabilidad de la Empresa y Compliance. Programas de prevención, detección y reacción penal*. Santiago Mir Puig / Mirentxu Corcoy Bidasolo / Víctor Gómez Martín (dirs.) Juan Carlos Hortal Ibarra / Vicente Valiente Ivañez (coords.) Ed. B de F / Edisofer. Madrid, 2014, págs. 301-336.

<sup>349</sup> Circular 1/2011 relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica número 5/2010. Sitio web de la FGE:

A un vacío inexplicable se refería la doctrina, básicamente porque el texto legal no efectuaba previsión alguna acerca de las eximentes específicas que permitieran articular un estatuto propio de la exclusión de la responsabilidad penal destinado a las personas jurídicas.<sup>350</sup> Tras la reforma de 2015, esta situación se subsana de forma trivial por la redacción dada al apartado segundo del art. 31 bis, aunque sólo serán aplicables bajo determinadas condiciones, y de forma exclusivamente vinculada a las personas indicadas en la letra a) del apartado primero. Esto es, los representantes legales o aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma. Además, en los casos en que las circunstancias solamente puedan ser objeto de acreditación parcial, la circunstancia será valorada a efectos de atenuación de la pena.

El desarrollo de toda esta amalgama de nuevos instrumentos y áreas económicas conexas al ambientalismo, puede repercutir en un ámbito de competitividad bastante interesante en relación a estos aspectos, pues entonces se podrá considerar un activo de la empresa el cumplimiento voluntario de aquellos programas dirigidos a disminuir el impacto ambiental de su actividad.<sup>351</sup>

---

[https://www.fiscal.es/fiscal/PA\\_WebApp\\_SGNTJ\\_NFIS/descarga/memoria2012\\_vol1\\_circu\\_01.pdf?idFile=7ed535ae-8bf0-4aa5-b219-618b3ac7420f](https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/memoria2012_vol1_circu_01.pdf?idFile=7ed535ae-8bf0-4aa5-b219-618b3ac7420f) (último acceso 12/07/2015).

<sup>350</sup> Obligado es tener en cuenta lo establecido por el art. 130.2 CP, en cuanto a que los efectos de la extinción de la responsabilidad penal en ningún caso alcanzan a las entidades transformadas, fusionadas, absorbidas o escindidas de la persona jurídica penalmente activa, ni tampoco cuando se entienda que existe disolución encubierta o meramente aparente de la misma. El fin se orienta a la evitación del fraude de ley, sin embargo el apartado segundo finaliza con una remisión implícita al principio de proporcionalidad de penas, alude a que se podrá moderar la parte trasladable de pena entre dos entidades escindidas. Este “trasvase de la responsabilidad penal” a una nueva empresa que la adquiere (en los supuestos contemplados) atenta contra el principio del carácter personal de la responsabilidad penal. No se contempla el supuesto de las actuaciones penalmente reprochables llevadas a cabo en el seno de una persona jurídica por un administrador, que a su vez sea otra persona jurídica distinta: ¿serán consideradas ambas responsables penalmente o sólo la primera? En caso de condena doble, ¿no se vulnerará el principio de legalidad penal? Como apunta GÓMEZ-JARA DÍEZ, C., los protocolos de las *Due Diligence* necesariamente deberán incluir un apartado penal a partir de ahora, en el que se valoren los riesgos de encontrarse inmerso en un procedimiento penal (de imputación y de condena), ya que éste se transmite a las sociedades resultantes. En “Fundamentos modernos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Bases teóricas, regulación internacional y nueva legislación española”, op. cit., págs. 509 y 510.

<sup>351</sup> Sobre las diferentes externalidades, unas de carácter positivo y otras negativo, así como la relación de las empresas con la sociedad a través de estos beneficios y perjuicios, *vid.* LORENZETTI, R. Cabe mencionar la *etiqueta verde*, que promueve el diseño, producción, comercialización y utilización de productos que tengan repercusiones leves en el medio ambiente durante todo su ciclo vital, o las *auditorías ambientales*, que permiten otorgar credibilidad a una empresa en relación al cumplimiento de las normas medioambientales. En *Teoría del Derecho Ambiental*. Ed. Porrúa. México, 2008, págs. 21-25.

El art. 31 quater fija una serie de atenuantes específicas, que en todo caso operan *ex post factum* al delito cometido, y se asocian básicamente a las ideas de colaboración procesal y autoinculpación una vez iniciado el proceso.<sup>352</sup> En especial, la condición de aplicabilidad de la atenuante del art. 31 quater b) exige que las pruebas aportadas sean nuevas y decisivas.<sup>353</sup> Resulta de una notable exigencia porque, pese a que se aporten pruebas incriminatorias, si se trata de material probatorio circunstancial o de mera confirmación de responsabilidad, no alcanzará el requisito exigido. Además, como consecuencia de la misma, se pueden producir importantes conflictos de intereses entre persona física y jurídica, incluso vulneración de los derechos fundamentales de la primera.<sup>354</sup> Asimismo, la recogida en la letra d) constituye la génesis de la incorporación del *Corporate Compliance* en la dinámica empresarial. El modelo puede resultar de implementación asequible por parte de grandes corporaciones, u organizaciones dotadas de un mínimo de complejidad o estructura funcional, pero difícilmente será operativo en la dinámica de una empresa de pequeño tamaño o unipersonal, tanto por razones técnicas como económicas.<sup>355</sup>

También es censurable la privación de dos tipos de atenuantes para las personas jurídicas que sin embargo, sí son aplicables a las personas físicas, esto es, la atenuante analógica y la de dilaciones indebidas.

---

<sup>352</sup> Crítico respecto a la ausencia de circunstancias atenuante y agravantes coetáneas a la comisión del delito MORALES PRATS, F. En “La responsabilidad penal de las personas jurídicas (arts. 31 bis, 31.2 supresión, 33.7, 66 bis., 129, 130.2 CP)”, op. cit., pág. 59.

<sup>353</sup> Se trata de la atenuante de colaboración. En relación a la misma, GOENA VIVES, B., concluye que será necesaria una profunda interpretación normativa y jurisprudencial, ya que no se emplea el concepto “atenuante” en sentido unívoco respecto a lo previsto en el art. 21, de aplicación a personas físicas. Apunta también que, debido a que esta atenuante de colaboración se ha importado del modelo estadounidense, en realidad se ha introducido un tipo privilegiado que recuerda al art. 376 (delitos contra la salud pública) o al 305.4 (delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social). “La atenuante de colaboración”. *Criminalidad de empresa y Compliance. Prevención y reacciones corporativas*. Jesús-María Silva Sánchez (dir.) Raquel Montaner Fernández (coord.) Ed. Atelier. Barcelona, 2013, págs. 229-263.

<sup>354</sup> En este sentido, GÓMEZ-JARA, C. En “La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la reforma del Código Penal”, op. cit., págs. 11 y 12.

<sup>355</sup> Vid. MONTANER FERNÁNDEZ, R. Respecto a la incorporación de las técnicas de autorregulación en sentido estricto, y la autorregulación regulada en actividades empresariales relacionadas con sectores de actividad que incidan en el ámbito medioambiental, de acuerdo a remisiones jurídico-penales y su admisión como complemento a las leyes penales en blanco. “La autorregulación normativa en el derecho penal ambiental: problemas desde la perspectiva del principio de legalidad”. En *La crisis del principio de legalidad en el nuevo Derecho penal: ¿decadencia o evolución?* Juan Pablo Montiel (ed.) Ed. Marcial Pons. Madrid, 2012, págs. 289-313.

La materia, objeto de la Parte General del Código, encierra un variado elenco de cuestiones que pertenecen a la teoría del delito y de la pena.<sup>356</sup> La temática traspasa con amplitud el contenido de este trabajo, por lo que me detendré sucintamente en aquellas consideraciones sobre los puntos de mayor influencia en el apartado que nos ocupa, actualmente tipificado en el art. 328 CP, en relación a todas las conductas con las que comparte el Capítulo dedicado a los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

En lo que concierne a la protección medioambiental, no cabe duda que las entidades mercantiles ostentan una proyectada significación, pues casi todos los procesos de mercantilización engloban una multiplicidad de actividades, unas estrechamente concordantes y otras antagónicas (desde el origen de un producto agrario hasta las formas más tecnificadas de elaboración o distribución de productos de toda índole). Este factor revela que las personas jurídicas detentan un plus de intervención en el medio frente a la capacidad de participación de las personas físicas (aún tomando en consideración el efecto acumulativo de sus múltiples comportamientos).<sup>357</sup>

Dicha condición queda suficientemente reflejada por la redacción que ofrece el art. 325 de nuestro Código Penal, así como por la diversidad de subtipos que contempla (contaminación atmosférica, marítima, fluvial, residuos, vertidos, erosión del suelo, captaciones de agua, ruido, vibraciones). Pero este hecho no debería pervertir el significado de la supuesta ineficacia atribuida al Derecho penal de corte individual dentro del Derecho ambiental, que convierte lo que en apariencia parece conveniente (incorporación de los entes corporativos como sujetos activos del delito), en la tesis que sostiene que la naturaleza estructural de la empresa implica que se ignoren determinadas consecuencias que dan lugar a una suerte de continuidad delictiva, siempre que exista una persona física dentro del organigrama que responda de manera individual.<sup>358</sup>

---

<sup>356</sup> Una de las últimas monografías dedicadas al examen del art. 31 bis en GONZÁLEZ SIERRA, P. *La imputación penal de las personas jurídicas. Análisis del art. 31 bis CP*. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2014.

<sup>357</sup> Vid. ALVARADO MARTÍNEZ, I. En “La problemática de las personas jurídicas en la tutela penal del ambiente”, op. cit., pág. 32.

<sup>358</sup> Vid. ARTAZA VARELA, O. Esta aparente insuficiencia de la responsabilidad penal individual es, en la doctrina europea, la que ha impulsado la incorporación de la de las personas jurídicas. En “La empresa como sujeto de imputación de responsabilidad penal. Fundamentos y límites”, op. cit., págs. 45 y ss.

Por otra parte, el legislador no ha establecido un concepto general de persona jurídica que, como sujeto de derechos y deberes, sea sancionable penalmente, por lo que, de nuevo, el Derecho penal se ve condenado a nutrirse de elaboraciones conceptuales y normativas que provienen de otras ramas del Derecho (en este caso, de los ordenamientos civil y mercantil), por cuanto el art. 31 bis puede ser considerado, con las salvedades pertinentes, una norma penal en blanco.<sup>359</sup> Estas razones, entre otras, favorecen la reprobación formulada acerca de la efectividad del sistema penal ambiental en el marco empresarial, pues el catálogo de penas aplicables, sustancialmente se formula en atención al Derecho administrativo sancionador, por lo que resulta sencillo y evidente deducir que la diferencia ontológica es mínima.

Conocemos que el sistema de imputación parte de la heterorresponsabilidad penal empresarial -responsabilidad por el hecho ajeno- y se dirige hacia la autorresponsabilidad -responsabilidad por el hecho propio-, aunque matizada necesariamente por la actuación fáctica de una persona física (no ignoremos que la persona jurídica es una ficción y, por tanto, no puede realizar la conducta), encarnada en la figura de cualquier empleado por ejemplo, siempre y cuando no se haya ejercido el debido control sobre éste, por lo que parece prudente determinar qué se entiende por debido control aplicando los criterios dogmáticos de la omisión.<sup>360</sup> Sobre todo, en relación al importante ámbito de conductas imprudentes que caben en el tipo, ya que no se estima oportuno que el mero incremento del riesgo haga nacer la responsabilidad en la persona jurídica, siendo necesario que entre ambos elementos -el delito cometido por

---

<sup>359</sup> La única referencia mínimamente delimitadora nos la ofrece el art. 31 bis 3: <<En las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, las funciones de supervisión a que se refiere la condición 2.ª del apartado 2 podrán ser asumidas directamente por el órgano de administración. A estos efectos, son personas jurídicas de pequeñas dimensiones aquellas que, según la legislación aplicable, estén autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada>>. Por exclusión, el artículo 31 quinquies niega dicha capacidad al Estado, a las Administraciones públicas territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades públicas Empresariales, a las organizaciones internacionales de derecho público, y aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas. En el mismo sentido, interpreta el art. 31 bis como norma penal en blanco BARONA VILAR, S. Precisamente por la singularidad que presenta la noción de persona jurídica, las respuestas del legislador son heterogéneas. Así, Australia no marca límites a las distintas clases de organizaciones, mientras que Francia considera penalmente responsables solo a aquellas reconocidas jurídicamente. “La persona jurídica como responsable penal, parte pasiva en el proceso penal y parte en la mediación penal en España”. En *La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Fortalezas, debilidades y perspectivas de cara al futuro*. Miguel Ontiveros Alonso (coord.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2014, págs. 53-110, en especial 75 y ss.

<sup>360</sup> Debido control al que se refería el anterior art. 31 bis 1. Con la entrada en vigor de la LO 1/2015, el concepto se acota con el uso de la fórmula –haber incumplido gravemente los deberes de supervisión, vigilancia y control–, con la finalidad de delimitar adecuadamente su contenido, según la interpretación auténtica que sigue la Exposición de Motivos.



el empleado y la errónea supervisión de la persona encargada de ejercer el debido control-, se establezca una relación de imputación objetiva.<sup>361</sup>

Por último, el art. 31 quinquies, recoge lo anteriormente contemplado en el art. 31 bis apartado 5, relativo a las entidades excluidas de responsabilidad penal.<sup>362</sup> Si bien no aparecía en el texto prelegislativo, cierra la regulación una cláusula que intenta mitigar el rigor de las exclusiones del primer párrafo, con la posibilidad de otorgar responsabilidad penal en el caso de que se aprecie que el ente ha sido creado por sus promotores, fundadores, administradores o representantes con el propósito de eludir dicha responsabilidad penal (en una clara alusión a las personas jurídicas de pantalla).<sup>363</sup>

La reforma de 2015, abre de forma más contundente que la anterior el cauce de responsabilidad penal en el caso de aquellas sociedades mercantiles estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general, no obstante limita el repertorio de sanciones aplicables a la multa y la intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores [art. 33.7 a) y g)], restricción nula en los casos en los que el juez o tribunal aprecie que se trata de una forma jurídica creada por sus promotores, fundadores, administradores o representantes con el propósito de eludir una eventual responsabilidad penal.<sup>364</sup>

---

<sup>361</sup> De esta opinión, GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. En “La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la reforma del Código Penal”, op. cit., págs. 6 y 7.

<sup>362</sup> La reforma llevada a cabo por LO 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social suprime la exclusión de los agentes políticos y sindicales (partidos políticos y sindicatos). También redujo a dos grupos diferenciados la exclusión de determinadas entidades: por una parte, las Entidades de Derecho público y asimiladas (Estado, Administraciones Públicas territoriales e institucionales, Organismos Reguladores y Organizaciones Internacionales de Derecho Público); por otra, las Entidades estatales mercantiles y ejercientes privados de funciones públicas (Agencias y Entidades Públicas Empresariales, organizaciones que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas, y sociedades mercantiles estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general), cuyo régimen de organización se encuentra en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE).

<sup>363</sup> La denominada *exclusión de la exclusión*. Vid. BARONA VILAR, S. En “La persona jurídica como responsable penal, parte pasiva en el proceso penal y parte en la mediación penal en España”, op. cit., pág. 85.

<sup>364</sup> En opinión de FEIJÓO SÁNCHEZ, B., estas sociedades debieran ser tratadas como sujetos imputables. “La responsabilidad penal de las personas jurídicas”. En *Estudios sobre las reformas del Código Penal (operadas por las LO 5/2010, de 22 de junio, y 3/2011, de 28 de enero)*. Julio Díaz-Maroto y Villarejo (dir.) Ed. Civitas-Thomson. Cizur Menor (Navarra), 2011, págs. 65-142, en especial 77.

No obstante, el verdadero *quid* de la cuestión es determinar qué se entiende exactamente por políticas públicas o servicios de interés general, pues en los asuntos relacionados con el medio ambiente es donde mayor capacidad de colisión existe, por la posible afectación de derechos –sociales o colectivos–.<sup>365</sup>

En relación al primer grupo, la opinión mayoritaria se decanta por justificar la exclusión aludiendo a lo absurdo que resulta que las administraciones públicas sean objeto de auto-sanción (en cumplimiento del fin de prevención, general y especial, y por la privación de fondos derivados de la pena, que a fin de cuentas revierte en la ciudadanía), aunque algunas voces discrepan de esta interpretación.<sup>366</sup> Más problemática, sin duda, resulta la exención para el segundo conjunto. El empleo de entidades públicas empresariales, tanto estatales como autonómicas y locales, ha constituido el cauce de huida tradicional del régimen administrativo común, por lo que requerirían un control extra respecto de las sociedades mercantiles privadas.<sup>367</sup> En España son cada vez más frecuentes las directrices que las distintas fiscalías destinan a los entes locales con el fin de que cumplan determinados objetivos en materia medioambiental.<sup>368</sup>

---

<sup>365</sup> Exponentes de dicho infra-análisis son los ejemplos de la gestión de un aparcamiento público, o la explotación de una mina, como acertadamente apunta NIETO MARTÍN, A. En “La responsabilidad penal de las personas jurídicas: un modelo legislativo”, op. cit., pág. 12.

<sup>366</sup> Por todos, *vid.* NIETO MARTÍN, A. En “La responsabilidad penal de las personas jurídicas: un modelo legislativo”, op. cit., pág. 30.

<sup>367</sup> Incide en esta idea DOPICO GÓMEZ-ALLER, J. En “Responsabilidad de personas jurídicas”, op. cit., pág. 14. Su regulación se encuentra en el Capítulo III de la LOFAGE.

<sup>368</sup> A título modélico, la Fiscalía de Medio Ambiente emitió en 2011 un oficio por el que instaba al Ayuntamiento de Madrid a reflejar la realidad de la contaminación de esta ciudad y a “aplicar medidas” para los problemas de la calidad del aire, al considerar que la normativa en vigor no se cumplía. Además, el estudio no es exclusivo para la ciudad de Madrid, ya que otro más informa sobre la calidad del aire de Barcelona y en proceso de elaboración diferentes estudios de otras ciudades. El procedimiento es el mismo: petición de datos de contaminación atmosférica y de los programas puestos en marcha para avisar a la población y mejorar la calidad del aire. Así, se señala que de momento se trata de un análisis, y en caso de reiterado incumplimiento, “más adelante” se podrían iniciar acciones judiciales. *Vid.* “Memoria 2011 Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente. Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo”. Ed. Fiscalía General del Estado. Madrid, 2011. págs. 18 y 19. Disponible en: [www.fiscal.es/fiscal/PA\\_WebApp\\_SGNTJ\\_NFIS/descarga/MEMORIA\\_2011\\_FISCALIA\\_MEDIO\\_AMBIENTE.pdf?idFile=b8268202-f95b-4dc2-a364-4fd9ad6f17a8](http://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/MEMORIA_2011_FISCALIA_MEDIO_AMBIENTE.pdf?idFile=b8268202-f95b-4dc2-a364-4fd9ad6f17a8) (último acceso 12/07/2015). Acerca del incumplimiento de las Directivas europeas, por ejemplo en relación a la Directiva de Calidad del Aire, la Comisión Europea envió su último aviso por escrito a España por incumplirla a comienzos de 2010, y le advirtió de que, si continuaba infringiéndose, el siguiente paso sería interponer una denuncia ante el Tribunal de Justicia comunitario. Los avisos por incumplimiento de la Comisión al Gobierno de España, responsable ante la Unión Europea, se han referido, básicamente, a la contaminación por partículas en suspensión menores de 10 micras (PM10). Los valores límite de PM10 —partículas en suspensión emitidas principalmente por las industrias, el tráfico y las calefacciones domésticas— imponen un valor de concentración anual de 40 microgramos por metro cúbico y un valor de concentración diario de 50 microgramos por metro cúbico, que no debe superarse más de 35 veces por año, y que varias ciudades españolas desobedecen sistemáticamente desde que entró en vigor la Directiva.

El modelo francés, por citar un ejemplo cercano, tan sólo excluye de forma completa al Estado, relegando la responsabilidad penal de los entes territoriales a las infracciones cometidas en relación a actividades que sean susceptibles de ser objeto de convenios de delegación de los servicios públicos.<sup>369</sup>

Invocando exclusivamente la diferencia entre persona física y jurídica en la categoría de sujeto activo del delito -identidad subjetiva-, podemos afirmar que no existe vulneración del principio *non bis in idem*, a pesar de que sí conserve identidad de hechos y de fundamento.<sup>370</sup> Cuestión distinta es el supuesto de que el hecho delictivo se cometa en el contexto de una empresa de carácter unipersonal, es decir, una sociedad en la que exista un único administrador, el asunto no parece tan claro, ya que se produce una confusión real entre ambos. Tan sólo acudiendo a una justificación artificial -la ficción que permite constituir una sociedad que ampara la realización material de funciones por parte de un único socio-, sería posible sostener tal argumento, que en todo caso parece demasiado forzado para insistir en la supuesta diferencia entre ambos sujetos.<sup>371</sup> En este caso se trata de sujetos activos del delito a los que la ley simple y llanamente va a tratar con una profunda desigualdad.

En suma, podemos incurrir en la siguiente paradoja: un local de ocio constituido formalmente en empresa -persona jurídica- se enfrentaría a una pena de multa de uno a tres años, o del doble al cuádruple del perjuicio causado cuando la cantidad resultante fuese más elevada, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de más de dos años de privación de libertad, en el caso de cometer un delito contra el medio ambiente en la modalidad de ruido [art. 328 a)]. Sin embargo, si ese mismo establecimiento lo regenta un profesional autónomo -que carece de personalidad

---

<sup>369</sup> Código Penal francés. Artículo 121-2: <<Las personas jurídicas, a excepción del Estado, serán penalmente responsables, conforme a lo dispuesto en los artículos 121-4 a 121-7, de las infracciones cometidas, por su cuenta, por sus órganos o representantes. Sin embargo, los entes territoriales y sus agrupaciones sólo serán responsables penalmente de las infracciones cometidas en el ejercicio de actividades susceptibles de ser objeto de convenios de delegación de servicio público. Sin perjuicio de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 121-3, la responsabilidad penal de las personas jurídicas no excluirá la de las personas físicas autoras o cómplices de los mismos hechos>>.

<sup>370</sup> Cfr. BAJO FERNÁNDEZ, M. El autor entiende que dicha posibilidad se salva por la interpretación de que sí existe una duplicidad de sujetos, precisamente por faltar la identidad del mismo. En “Vigencia de la RPPJ en el derecho sancionador español”, op. cit., págs. 46 y 47.

<sup>371</sup> Por ejemplo, en el caso de una pequeña empresa familiar, su propia naturaleza indicaría la existencia de identidad sustancial entre la persona jurídica y su representante legal, no sólo en el aspecto patrimonial sino también desde el punto de vista de la repercusión de la pena, que en el caso de imposición de multa recaería de forma automática en la persona física. ¿Quién, si no, cumpliría efectivamente con la sanción en el caso de una sociedad unipersonal? En este sentido, pero situando la cuestión en un contexto de doble procedimiento administrativo-penal, vid. PÉREZ MANZANO, M. *La prohibición constitucional de incurrir en bis in idem*. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2002, págs. 128 y 131.

jurídica a efectos penales-, la pena de prisión para su titular será impuesta en su mitad superior, o podrá alcanzar la pena superior en grado, siguiendo el dictado del art. 325.2 CP.

En ambos casos se da una premisa equivalente en cuanto a la creación del riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas y además, la idoneidad para producir o provocar ruido ocurre precisamente en el marco de la actividad llevada a cabo en dicho local. En la mayor parte de estos supuestos, condición indispensable es la existencia de actividad generada por el establecimiento. Si no se ubicara precisamente en el lugar donde despliega el foco ruidoso, no se produciría la aglomeración de personas que son las que cumplen con las condiciones objetivas del tipo, son ellas las emisoras de los ruidos, no la persona jurídica que cumpla rigurosamente con las diferentes normas autorizatorias de su actividad u otras normas administrativas que le sean aplicables en función de horarios, capacidad de aforo, insonorización, etc.; en caso contrario nos encontraríamos ante el supuesto agravado contemplado por el art. 327 a) CP.<sup>372</sup>

Pero la cuestión es que el foco ruidoso inevitablemente sigue las vicisitudes que sufra el local en cuestión, sin que se pueda exigir a éste que ostente formalmente ninguna posición de garante en relación a las personas que ocupan espacios colindantes al mismo, por ejemplo en la misma calle donde esté ubicado, emitiendo ruidos dañinos o molestos de forma continuada durante lapsos temporales más o menos extensos. El problema adquiere otras dimensiones cuando se trata de un conjunto de puntos de reunión nocturna con establecimientos que operan directamente en el espacio público y las administraciones públicas, además de fomentarlas y aprobarlas por la enorme publicidad y ganancias que sin duda ocasionan, también intervienen directamente en su estabilización, como pueden ser las fiestas de interés cultural, nacional, etc.

Evidentemente, la administración local tiene que conjugar (en línea con la reiterada doctrina del TEDH) la libertad de los residentes en cada punto geográfico, con la satisfacción general de miles de ciudadanos que desean celebrar cualquier acontecimiento, pero esto no es óbice para que sea la propia administración la que se

---

<sup>372</sup> Art. 327: <<Los hechos a los que se refieren los tres artículos anteriores serán castigados con la pena superior en grado, sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este Código, cuando en la comisión de cualquiera de los hechos descritos en el artículo anterior concurra alguna de las circunstancias siguientes: a) Que la industria o actividad funcione clandestinamente, sin haber obtenido la preceptiva autorización o aprobación administrativa de sus instalaciones>>.

otorgue poderes que superen la limitación aprobada por las ordenanzas u otro tipo de normativa establecida por ella misma, en aras, precisamente, del no siempre bien entendido interés general o el deber ciudadano de soportar según que situaciones.<sup>373</sup>

El ejemplo es nítido si lo comparamos con una corporación de mediano o gran tamaño, nacional o trasnacional, que cuente con estructuras definidas en torno al control de las acciones que se ejecuten o que se prohíban, pero presenta importantes variaciones al tratarse de pequeñas empresas en las que no es posible que se materialice ese complejo tramado organizativo. En relación a los delitos ecológicos, ambas modalidades se muestran como posibles en porcentajes similares, desde la ejecución de un vertido de crudo al océano por parte de un buque propiedad de una multinacional, como la emisión de ruidos por parte de una sociedad unipersonal –que por otra parte es el tipo de forma societaria que alcanza a un gran porcentaje de establecimientos hosteleros, comerciales o de ocio–. La conducta de provocar ruidos indeseados en el contexto de las ciudades, a menudo se produce a través de pequeñas empresas o sociedades de carácter unipersonal. Otro prototipo es la gestión de residuos en centros comerciales en los que participen diversas personas jurídicas de mayor o menor extensión, o con diferentes sistemas mercantiles (en régimen de franquicia, concesión, etc.). En rigor, la actividad de riesgo que se pretende neutralizar con la incorporación de los programas de cumplimiento nace directa y exclusivamente del propio ámbito de negocio al que se dedique la empresa -sector químico, farmacéutico y sanitario, automoción y transporte, servicios recreativos, culturales, o de ocio, etc.-, no así del tamaño en recursos humanos de su órgano de control, o de gestión.

---

<sup>373</sup> Por ejemplo, en 2011 el Ayuntamiento y los organizadores del Madrid Orgullo -MADO- llegaron a la solución de los “conciertos silenciosos”, con la finalidad de que en la emblemática plaza de Chueca pudiera escucharse música, salvando de esta forma la desautorización de la Concejalía de Medio Ambiente, dado que el escenario está situado a menos de 150 metros de una residencia de ancianos. La Asociación de Vecinos de Chueca había pedido al Ayuntamiento una “reorganización urgente” de las fiestas del Orgullo Gay por el exceso de ruido. Así, para evitar el problema de los decibelios y mantener la plaza de Chueca como el escenario principal durante las fiestas, los organizadores optaron por esta solución, aunque se decidió que en la plaza de Chueca no habría música en directo, sino sesiones lideradas por *Disc Jockeys*. La actuación de grupos en directo exigía otra solución añadida, que era aislar a los músicos con la ayuda de mamparas de metacrilato. Desde la organización explicaron que no era posible conseguir la infraestructura a tiempo. Según la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica de Madrid, de 25 de febrero de 2011, la autorización no se puede salvar como medida excepcional si a 150 m. existen centros asistenciales (art. 19.3, en relación al art. 15). Publicada en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid núm. 6385 de 07/03/2011, págs. 6-46.

Otro de los grandes problemas se plantea en torno a la pobre homogeneización legislativa de carácter penal en el contexto internacional del medio ambiente, donde se pueden encuadrar muchas estructuras empresariales, que pueden estar desarrollando actividades delictivas conforme a la normativa dictada en el país donde se ubique su principal sede social, o en su país de origen, pero trasladan su actividad más intensa o su producción más potente a países carentes de legislación al respecto, o sencillamente menos restrictiva.<sup>374</sup> Los delitos medioambientales transnacionales cada vez adquieren mayor relevancia, y ello denota la necesaria puesta en escena de nuevos recursos de aplicación, que requerirán estrategias de intervención innovadoras para interrumpir los complejos procesos de las transacciones, como en el caso paradigmático del transporte internacional de desechos electrónicos.<sup>375</sup>

La responsabilidad penal de las personas jurídicas en un ámbito estrictamente ambiental, tipificada en el art. 328 CP resulta perfectamente compatible en el seno de corporaciones de cierto tamaño, donde se crean situaciones que desencadenan o pueden causar graves daños, muchas veces irreparables. Además se da la circunstancia de que esos daños o perjuicios pueden sufrir un fuerte desplazamiento en el tiempo -*ad futurum*-, e incluso acaecer en un periodo indeterminado.<sup>376</sup> También conviene destacar

---

<sup>374</sup> Esta problemática la advirtió hace décadas TIEDEMANN, K. <<Los estudios realizados por el ECOSOC y la UNCTAD muestran que la actitud de las grandes empresas en estos países [se refiere a países en vías de desarrollo o con diferencias sustanciales en las legislaciones nacionales respecto a la contaminación] se caracteriza principalmente, no tanto por la criminalidad propiamente tal, sino más bien por el aprovechamiento de las diferencias y de los vacíos en el sistema legal y económico del respectivo país, así como de la falta de normas internacionales uniformes, moviéndose de este modo en esa nebulosa zona entre lo jurídicamente ilícito, lo conforme a Derecho y lo inmoral>>. “Aspectos penales y criminológicos de las actividades de las empresas transnacionales”. En *Revista Estudios Penales y Criminológicos*, núm. 6 (1981-1982). Santiago de Compostela, págs. 292-320, en especial 316 y ss. *Vid.* la decidida opción por una intervención más acusada en el ámbito del Derecho penal internacional de NIETO MARTÍN, A. “Bases para un futuro derecho penal internacional del medio ambiente”. En *La protección de bienes jurídicos globales*. Carlos Espósito / Francisco J. Garcimartín Alférez (eds.) Ed. UAM / Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Madrid, 2012, págs. 137-164.

<sup>375</sup> Por ejemplo, sobre nuevas implementaciones de modelos ya desarrollados, como el llamado ILP - *Intelligence-led policing*- en Reino Unido, basado en la asignación estratégica de recursos organizativos para atacar problemas específicos, *vid* GIBBS, C. / MCGARRELL, E. F. / SULLIVAN, B. Analizan el uso de dicho modelo, específicamente dirigido a los delitos ambientales de carácter transnacional y sus posibilidades como método de intervención viable. “Intelligence-led policing and transnational environmental crime: A process evaluation”. En *European Journal of Criminology*. Paul Knepper (ed.) Vol. 12, Issue 2. Ed. European Society of Criminology / SAGE Publications. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore and Washington DC, 2015, págs. 242–259.

<sup>376</sup> Sobre la problemática que entraña la producción de resultados a largo plazo en la Teoría del delito, *vid.* VÁSQUEZ SHIMAJUKO, S. *La imputación de los resultados tardíos. Acerca de la dimensión temporal de la imputación objetiva*. Ed. B de F. Montevideo / Buenos Aires, 2013.

la opción de comisión por imprudencia grave, al igual que ocurre en el caso de las personas físicas (art. 331 CP).<sup>377</sup>

Las situaciones descritas, a excepción de los daños tardíos [predecibles o impredecibles], son especialmente susceptibles de desarrollo en episodios de contaminación marina, fluvial, atmosférica, del suelo, etc. Sin embargo, resulta más difícil realizar un paralelismo pleno entre los ejemplos enunciados y otros subtipos recogidos por el art. 325 CP, como puede ser la emisión de ruidos o de vibraciones, ya que en estos apartados existe suficiente constatación científica acerca de su capacidad para producir efectos dañinos, que fisiológicamente pueden mostrarse con evidencia tras periodos más o menos largos de exposición.

Otro aspecto objeto de análisis es la repercusión real en el ambiente de un medio geográficamente desplazado del de la nacionalidad de la empresa, ya que los diferentes procedimientos penales y respectivas sanciones (multa, disolución, intervención, etc.), ejecutados con rigor en determinados países que contemplen la figura, tendrán irremediablemente, en muchos casos, el efecto contrario al que se pretende evitar o contrarrestar. No es otro que la desprotección absoluta de determinados sistemas naturales que pertenecen a lugares donde la persona jurídica que tenga capacidad económica y de gestión pueda trasladar sus actividades, es decir, a países o regiones cuya regulación sea menos detallada, desarrollada, o simplemente nula.<sup>378</sup> En tales casos, los desajustes normativos guían al conocido fenómeno de la *deslocalización industrial o empresarial*. En los mismos términos, el interés del carácter ambiental para las multinacionales propicia que la tendencia hacia dicho arquetipo deslocalizador no sólo se vea reforzada por criterios estrictamente económicos (mano de obra barata, costes infravalorados de materias primas, etc.), y ello produce una focalizada *deslocalización de carácter medio-ambiental*.<sup>379</sup>

---

<sup>377</sup> Señala las dificultades que presenta determinar la causación del daño en el ámbito de la delincuencia ambiental, por parte de las empresas de carácter trasnacional, ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L. En “Bases para un Modelo de Imputación de Responsabilidad Penal a las Personas Jurídicas”, op. cit., págs. 95-99.

<sup>378</sup> Los llamados paraísos jurídico-penales. Así, SILVA SÁNCHEZ, J. M<sup>a</sup>. En “La expansión del Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales”, op. cit., pág. 92.

<sup>379</sup> Cabe citar aquí el caso de la compañía petrolera norteamericana Chevron (antes Texaco) y su contencioso con el Estado de Ecuador por la explotación de campos de petróleo desde 1964 a 1992, que generó vertidos y residuos altamente contaminantes en la parte noroeste de la región amazónica del Ecuador. La demanda partió de varias comunidades indígenas, la empresa sufrió una condena por no haber procedido a ejecutar las labores de limpieza idóneas antes de abandonar el país. En 2011, un tribunal de Lago Agrio (Ecuador) condenó a Chevron a pagar 19.000 millones de dólares (una de las

Con anterioridad resaltamos los argumentos clásicos favorables y contrarios a la inclusión de la responsabilidad penal empresarial. Pues bien, concentrándonos ahora en los partidarios, esgrimen dos ideas generales. La primera es que el Derecho penal se difumina si se aplica individualmente en el seno de la empresa, por no poder identificar al autor -persona natural-, es decir, que su aplicación sería difícil. Correlativamente sugieren que se trata de una consecuencia del denominado *-espíritu criminal de grupo-*, que encarna las características perfectas del anonimato. El acento en la segunda reflexión es de signo cuantitativo, por el enorme poder financiero que han adquirido las corporaciones.<sup>380</sup>

Al argumento tradicional de que, bajo la forma empresarial surge ese espíritu delictivo conformado, se añade que el poder de las empresas es intenso y globalizado, la obtención de beneficios su finalidad inicial y primordial, por lo que la elección de establecerse en el medio menos restrictivo para sus intereses será la más lógica.

Pues bien, en un contexto medioambiental al menos, estos dos motivos caen, desgraciadamente, cuando se aplican al estudio de cuestiones más prácticas. Las razones son sencillas y comúnmente aceptadas: en la comisión de delitos ambientales por grandes corporaciones, no es precisamente ese *espíritu criminal de grupo* el que prevalece, debido, entre otras causas, a la enorme multiplicidad de agentes que forman parte de la empresa, bien a título individual (trabajadores nominales), bien a título

---

sanciones más altas jamás alcanzadas por daños medioambientales). La empresa espera una resolución de la Corte de Arbitraje de la Haya, a la que acudió aduciendo que la corte ecuatoriana había incumplido resoluciones de dicho tribunal que impedían la ejecución de la sentencia, y que, en todo caso, la sentencia ecuatoriana debía revertir al propio Estado, por su condición de socio mayoritario del consorcio firmado en su día con Texaco. Otro ejemplo es el mencionado por TIEDEMANN, K., en relación a infracciones contra normas de protección del medio ambiente de los consumidores y de los trabajadores. <<Por ejemplo, en el famoso caso italiano de “Seveso”, existe la sospecha de que la peligrosa técnica de producción que usó la filial italiana de la compañía suiza Hoffman-La Roche, no se podría haber llevado a cabo en la misma forma, ni con los mismos bajos controles de seguridad, en Suiza. En América Latina, muchas ETNs [empresas transnacionales] están también acusadas de importar, producir y vender productos, y especialmente fármacos, que están prohibidos en sus países de origen debido a los posibles daños que podrían causar a la salud (“industrias de desecho”)>>. En “Aspectos penales y criminológicos de las actividades de las empresas transnacionales”, op. cit., pág. 316. Otros casos, como el acaecido en 2010 en el Golfo de México, donde la empresa “British Petroleum” derramó casi cinco millones de barriles de petróleo y mató a 11 trabajadores es tratado por RUGGIERO, V. / SOUTH, N. En el contexto de un sistema económico mundial neoliberal, consideran y critican el impacto distorsionador del modelo de “salud económica” vinculado al PIB y sus consecuencias para el medio ambiente, en relación a la industria petrolera y química. “Toxic State—Corporate Crimes, Neo-liberalism and Green Criminology: The Hazards and Legacies of the Oil, Chemical and Mineral Industries”. En *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, Vol. 2, Issue 2, 2013, págs. 12-26. Disponible en: [www.crimejusticejournal.com/article/view/115/pdf\\_1](http://www.crimejusticejournal.com/article/view/115/pdf_1) (último acceso 12/07/2015).

<sup>380</sup> Se sigue aquí a NIETO MARTÍN, A. En “La responsabilidad penal de las personas jurídicas tras la LO 5/2010”, op. cit., pág. 52.



colegiado (Junta de accionistas, Consejo de Dirección, servicios externalizados, etc.), o bien por la enorme complejidad que a veces comporta el ejercicio de una actividad que requiere de autorizaciones y licencias (de especial trascendencia en materia ambiental por las cambiantes y sectoriales normativas).<sup>381</sup> Al contrario, esta vocación de sentirse integrados en un núcleo compacto en torno a los intereses perseguidos, es más favorable a materializarse en núcleos de pequeño o mediano tamaño, por ejemplo grupos de crimen organizado relacionados con delitos de narcotráfico, extorsión, trata de seres humanos, etc.<sup>382</sup>

El segundo argumento esbozado con antelación exigiría para su consecución una política legislativa en el orden internacional que se tradujera en una representación exacta de tipos y sanciones penales en todos los países, y así impedir la búsqueda de nichos de impunidad. Como ideal es perfectamente imaginable, pero en la práctica es, y seguirá siendo inviable.<sup>383</sup> El Derecho Internacional en un mundo globalizado, que ofreciera una respuesta penal unificada, al mismo tiempo tendría que ser necesariamente de réplica distinta, por acoger modelos con profundas diferencias, tanto jurídicas como culturales, difícilmente eludibles. Todo proceso armonizador debe contar con las pulsiones propias de cada sociedad respecto al Derecho penal y sus respectivas estructuras represivas, de las que les será complejo prescindir.<sup>384</sup> En este punto, resulta obligado mencionar el destacado papel que debería desempeñar la

---

<sup>381</sup> En relación a este aspecto concreto, SAP Lugo (Sección 2ª) 131/2012 de 9 de julio [ARP\2012\777] <<... normativa que conlleva en ocasiones a situaciones ciertamente anómalas en las que se conceden a las empresas ciertas autorizaciones y licencias, pero no otras sin que se observen ni se manifiesten las razones para tal o tales no concesiones, sin ni siquiera, -una vez que se da comienzo a la correspondiente explotación- llevarse a cabo la oportuna sanción administrativa,... >> [años atrás se habían incoado dos expedientes sancionadores que no dieron lugar a imposición de sanción alguna]. Continúa: <<... situaciones que deberían tener su acomodo en el ámbito administrativo, no pudiendo incardinarse en el ámbito penal, máxime en casos, como el presente, en el que constan actuaciones por parte de la empresa denunciada, [...] y que alejan la existencia de una inacción u oscurantismo dirigidas al incumplimiento de las normas reguladoras de la correspondiente actividad... >> (FJ 6).

<sup>382</sup> En este sentido, SILVA SÁNCHEZ, J. Mª. El crecimiento exponencial que viene sufriendo la criminalidad organizada se reconduce a los marginados -*lower class crime*-. En “La expansión del Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales”, op. cit., págs. 53 y 54, nota 124.

<sup>383</sup> Las razones expuestas nos llevan a defender la idea de que, al menos en materia de ruidos, la solución más acertada no es acudir a la responsabilidad penal empresarial. La mayoría de emisores acústicos articulados mediante formas societarias, pertenecen al ámbito de las pequeñas empresas. De hecho, no existe ni jurisprudencia ni literatura científica que trate sobre grandes corporaciones en esta materia.

<sup>384</sup> Vid. SILVA SÁNCHEZ, J. Mª. <<En una respuesta global a la delincuencia mundial, parece asimismo imposible prescindir de los países anglófonos y, por tanto, de su Derecho>>. En “La expansión del Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales”, op. cit., págs. 87 y 88.

contabilidad ambiental en determinados sectores vinculados al ámbito empresarial e industrial. La impronta de esta nueva base de cálculo no es, sin embargo, generosa en cuanto a su aplicación, porque el uso del medio natural no siempre puede ser objeto de una valoración económica; en consecuencia, las cifras que se puedan aportar, finalmente se ven apartadas de las macro-magnitudes de muchos Estados, ya que no representan ningún porcentaje dentro de las mismas.<sup>385</sup>

Todos estos condicionantes aparecen íntimamente ligados a la posición de las administraciones públicas, que ostentan la categoría de “sujetos obligados” a incorporar, mejorar y salvaguardar la protección ambiental que dispensen a sus respectivos territorios bajo sus competencias específicas, proceder que transita por su capacidad normativa, autorizatoria, inspectora y sancionadora. Sin embargo, bajo el paraguas demasiado laso de una gran parte de las definiciones que gobiernan el lenguaje jurídico del medio natural, se producen paradojas y fuertes contradicciones, que llevan a una idea de pensamiento jurídico irreproducible en la práctica.<sup>386</sup>

En otro sentido, el hecho de que se produzca una merma más o menos considerable en la situación de los trabajadores dependerá de la pena que se imponga, por ejemplo pueden experimentar un proceso similar al de una victimización secundaria

---

<sup>385</sup> Vid. YÁBAR STERLING, A. Se trata de conocer la situación de la naturaleza en un territorio determinado, y sus relaciones con las actividades humanas, de manera estática y dinámica, con dos vertientes: una macroeconómica, que refleja la cuantificación para quienes diseñan y adoptan las políticas ambientales, y otra microeconómica, en relación al deterioro del medio atribuible a una entidad o persona natural. “Voz Contabilidad Ambiental”. En *Diccionario de Derecho Ambiental*. Enrique Alonso García / Blanca Lozano Cutanda (dirs.) Ed. Iustel. Madrid, 2006, págs. 367-382; SEJENOVICH, H. Refleja la importante conexión entre economía y ecología (*de hecho comparten un mismo origen etimológico, como ya dejamos apuntado al inicio de este trabajo*) [cursivas mías], recordando que los recursos naturales continúan siendo invisibles para las contabilidades nacionales. “Visión ambiental de la economía y las cuentas del patrimonio natural” En *Informe Anual 2011: Premio de Monografía Adriana Schiffrin* (1ª ed.) Mª Eugenia Di Paola / Federico Sangalli / Silvina Caorsi (eds. lit.) Ed. Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Buenos Aires, 2011, págs. 511-568. Disponible en: <http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2011/09391.pdf> (último acceso 12/07/2015).

<sup>386</sup> Como sucede con los términos empleados en la nueva redacción de la Ley de Costas en España. Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. El denominado uso sostenible del litoral conducirá, en la práctica, a que determinadas empresas susceptibles de producir efectos contaminantes (con independencia de su inclusión o no en procedimientos por delito ecológico), dispongan de un plazo de concesión prorrogado a 75 años, durante los cuales podrán desarrollar su actividad, en la medida en que ésta no se vea suspendida o paralizada por otras causas (tecnológicas, económicas, empresariales, judiciales, etc.) durante 7 décadas más. La nueva ley, aunque trata de paliar la inseguridad jurídica arrastrada desde la Ley de 1988 en relación a las áreas de viviendas históricamente consolidadas, alcanza también a zonas industriales próximas al litoral. Asimismo, otras áreas dedicadas a cultivos marinos (acuicultura) o salinas marítimas pierden su carácter demanial. En estos casos, no sólo se trata de empresas que emiten sustancias contaminantes a la atmósfera, sino que puede afectar, atendiendo al tenor del art. 325 a otros subtipos, como vertidos, residuos, ruidos y vibraciones, ya que reduce de forma muy significativa el dominio público marítimo terrestre en pos de un uso especialmente económico del espacio (por ejemplo, los llamados chiringuitos playeros), o incluso aterramiento de zonas húmedas.

por las acciones u omisiones empresariales surgidas en áreas autónomas de autorresponsabilidad de la persona jurídica.<sup>387</sup> Es cierto que es la única forma de garantizar un castigo acorde con las exigencias penales, como es la responsabilidad por el hecho propio, y no por el hecho ajeno, pero también es evidente que para salvar los enormes escollos dogmáticos en relación a la culpabilidad subjetiva, no se ofrecen soluciones en torno a cómo explicar que el hecho de que sólo la persona jurídica sea la receptora de la pena de forma individualizada, sin afectación de terceros, es algo ficticio. En el mismo supuesto se encontrarían los socios minoritarios que hayan votado en contra de determinados acuerdos o que simplemente, por su cuota de participación en la entidad, no tengan derecho a voto.

Otro ejemplo claro de la desigualdad creada entre ambos sistemas es la figura del indulto penal, medio bastante utilizado en materia de medio ambiente y condenas por delito ecológico en su modalidad de ruido, en relación a las personas físicas. A título ilustrativo, es lo que sucedió con una de las sentencias paradigmáticas y pionera sobre emisión de ruidos en España, SAP Palencia 23/2000 de 9 de noviembre; se solicitó un indulto parcial de quince meses sobre la pena impuesta, que alcanzaba los dos años y tres meses de privación de libertad, y la medida finalmente fue acordada en Consejo de Ministros de 12 de septiembre de 2003.<sup>388</sup> La cuestión que aquí se plantea es si el fundamento de la petición de indulto que extinga la responsabilidad penal de una persona jurídica es viable, con independencia de que la sanción penal impuesta a la misma sea diferente a la prisión, obviamente, y contando con que el art. 130.1.4º CP contempla esta medida como una de las causas de extinción de la responsabilidad criminal.<sup>389</sup>

Todas estas perspectivas alcanzan un nivel relevante, no debemos eludir que buena parte de los delitos contra el medio ambiente son perpetrados a través de

---

<sup>387</sup> Excepto si se impone la pena de intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores [art. 33.7 g) CP].

<sup>388</sup> El dictamen de la Audiencia Provincial fue confirmado por el TS en Sentencia de 24 de febrero de 2003. El indulto es una institución jurídica extraordinaria, regulada por Ley de 18 de junio de 1870, sobre ejercicio de la Gracia de Indulto (modificada en 1988 y 1993), que se otorga por RD, sin necesidad de motivación, y sobre la que tampoco cabe revisión en casación (el Tribunal Supremo así lo entiende y se ha pronunciado de forma reiterada al respecto). *Vid.* DOVAL PAIS, A. / BLANCO CORDERO, I. / FERNÁNDEZ-PACHECO ESTRADA, C. et al. “Las concesiones de indultos en España (2000-2008)”. En *Revista Española de Investigación Criminológica*. Artículo 5, núm 9, octubre de 2012. Disponible en: <http://www.criminologia.net/pdf/reic/ano9-2011/a92011art5.pdf> (último acceso 12/07/2015).

<sup>389</sup> Al respecto, *vid.* MAYORDOMO RODRIGO, V. “El indulto de las personas jurídicas. Fundamento en razones de equidad, justicia o utilidad pública”. En *Responsabilidad penal de las personas jurídicas*. José Luis de la Cuesta Arzamendi (dir.) Norberto de la Mata Barranco (coord.) Ed. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2013, págs. 267-308.

actuaciones societarias, bien por disminuir costes de producción, bien por defectos organizativos, pero en todo caso las personas físicas condenadas sin ningún tipo de relación directa o indirecta con actividades empresariales, representan una porción residual. Sin pretensión de desvirtuar la capacidad que las empresas poseen a la hora de cometer un delito medioambiental, también es cierto que las grandes catástrofes en relación al medio ambiente se suelen desarrollar a partir de un origen natural.<sup>390</sup>

La ONU define *desastre* como una disrupción del sistema ecológico humano que excede la capacidad de respuesta de la comunidad afectada para abordar sus efectos y funcionar con normalidad y que cumpla, al menos, uno de los siguientes criterios: 10 o más personas muertas, 100 o más personas afectadas, declaración de situación de emergencia y petición de ayuda externa.<sup>391</sup> Los últimos episodios de carácter natural acaecidos en España reflejan que las cifras no mienten y que, estadísticamente, no es una paranoia afirmar que los dos patrones de desastres medioambientales que se cumplen en nuestro país lo hacen en porcentajes muy igualados.<sup>392</sup>

---

<sup>390</sup> En lo relativo a desastres medioambientales España presenta un perfil mixto de fenómenos de origen natural y tecnológico, el hecho de que tengamos dos patrones tan distintos como son los episodios climáticos extremos y las fugas de sustancias químicas hace que las estrategias de prevención, reparación y respuesta también deban ser binarias. *Vid.* ARCOS GONZÁLEZ, P. / CASTRO DELGADO, R. / CUARTAS ÁLVAREZ, T. En el estudio realizado, que comprende los episodios de desastre medioambiental ocurridos en España entre 1950 y 2008, se pone de manifiesto que se produjeron 150 episodios que cumplían los criterios de inclusión establecidos para la situación de desastre. En desastres medioambientales de tipo tecnológico se incluyen los siguientes: escape de sustancias químicas, fuga de gas, explosión, incendio industrial, derrumbe e intoxicación; en los de tipo natural: episodio térmico extremo, es decir, olas de calor y frío, sequía, incendio forestal, inundación, tormenta, huracán, seísmo y deslizamiento de tierra. De todos ellos, los episodios climáticos extremos y las fugas de sustancias químicas son los dos patrones de desastre ambiental más relevantes por su impacto en la salud pública en España. Aunque se puede afirmar que, en relación con el segundo patrón (desastres de tipo tecnológico), no siempre existe relación entre la gravedad medioambiental y el impacto en morbilidad humana; como ejemplos, en primer lugar la ruptura de la balsa de residuos de la mina de Aznarcóllar (Sevilla) el 25 de abril de 1998, produjo un vertido tóxico de 6 millones de m<sup>3</sup> al río Guadiamar, el principal afluente del Parque Nacional de Doñana, con la contaminación de 4.600 hectáreas y que precisó de la mayor restauración hidrológica en la historia de Europa. En segundo lugar, el vertido de 40.000 toneladas de fuel que sobrevino al naufragio del petrolero *Prestige* frente a las costas gallegas el 19 de noviembre de 2002. En ambos casos, a pesar del enorme impacto medioambiental producido sobre los ecosistemas, la estela sobre la población humana fue limitada. “Desastres medioambientales en España e impacto sobre la salud pública”. En *Revista Seguridad y Medio Ambiente*. Ed. Fundación Mapfre, año 30, núm.119, tercer trimestre. Madrid, 2010, págs. 46-52.

<sup>391</sup> *Vid.* ARCOS GONZÁLEZ, P. / CASTRO DELGADO, R. / CUARTAS ÁLVAREZ, T. En “Desastres medioambientales en España e impacto sobre la salud pública”, *op.cit.*, pág. 48.

<sup>392</sup> Podemos observar también un ligero incremento del patrón natural, como las recientes inundaciones producidas en el sur de nuestro país, concretamente en Córdoba o el terremoto en Lorca (Murcia), en mayo de 2011. En alusión al carácter transfronterizo y globalizado del medio ambiente, mencionar lo sucedido en Islandia con la nube de cenizas del volcán islandés Grímsvotn, que entró en erupción el sábado 21 de mayo de 2011 en el sur del país y obligó a cerrar el espacio aéreo nacional. [http://www.elpais.com/articulo/internacional/volcan/islandes/amenaza/espacio/aereo/europeo/elpepuint/20110523elpepiint\\_6/Tes](http://www.elpais.com/articulo/internacional/volcan/islandes/amenaza/espacio/aereo/europeo/elpepuint/20110523elpepiint_6/Tes) (último acceso 23/05/2012)

En suma, la capacidad de las empresas desde diferentes sectores para actuar ordenadamente en la consecución de planes y estrategias protectoras del medio ambiente, debería verse incrementada a través de los distintos instrumentos y medidas que las administraciones públicas locales, comunitarias, nacionales o internacionales pongan a su disposición, incentivando de esta manera la preocupación por no menoscabar el ecosistema, a la vez que fomentando la actividad propia empresarial y evitando el recurso al fenómeno de la deslocalización, tan acusado en la actualidad.<sup>393</sup> Debido a la multiplicidad de factores concurrentes en torno a los delitos medioambientales y a las personas jurídicas, nos mostramos de acuerdo con la idea de crear una Ley especial o Derecho penal accesorio, en sintonía con lo propuesto por NIETO MARTÍN o BAJO FERNÁNDEZ. La llamada *-tercera vía-* ofrece un espacio más acorde para interpretar y ajustar las profundas diferencias que existen entre nuestro sistema penal, en principio ideado para su aplicación exclusiva a las personas físicas, y el adaptado a un nuevo sujeto activo del delito, como es la persona jurídica.<sup>394</sup>

Otra posición, defendida por SILVA SÁNCHEZ, opta por el llamado Derecho penal de dos velocidades, que básicamente consiste en una sectorialización de las reglas de la Parte General del Derecho penal, frente a la delincuencia global.<sup>395</sup>

---

<sup>393</sup> Una comisaria griega de Pesca de la Unión Europea lanzó una propuesta para disminuir la tasa del paro y mejorar la calidad de nuestros mares y océanos. Propuso que los pescadores en paro *pescaran* los plásticos que dañan los mares y océanos. La medida presentaba muchos beneficios, y además se aseguraba que habría resultados en términos de descontaminación y los pescadores podrían trabajar en épocas en las que no pueden faenar. La patronal europea de reciclado de plásticos aplaudió la iniciativa. Por otra parte, un estudio franco-belga estimó que las aguas del Mediterráneo escondían 250.000 millones de pequeños objetos plásticos y 500 toneladas de plástico estaban ya disueltas entre las olas. De esta necesidad inmediata de buscar soluciones, nace la nueva propuesta: El Fondo Europeo de la Pesca ofrece al sector pesquero la posibilidad de desarrollar proyectos a favor de la conservación del medio marino. Por ejemplo, la recogida de envases. La Administración pesquera española valora la iniciativa, que permite diversificar la actividad pesquera en determinados periodos, como son las vedas. El sector del reciclado de plásticos de países como Alemania, Francia y Dinamarca aprueban el plan, que ya está movilizado. <http://www.equiposytalento.com/noticias/2011/05/09/la-propuesta-europea-para-pescadores-parados-cazar-los-plasticos-del-mar> (último acceso 24/05/2011)

<sup>394</sup> Como defensor de esta “tercera vía”, BAJO FERNÁNDEZ, M. El autor parte de la idea de que, aunque esta teoría (Derecho penal fronterizo) puede contener posiciones dogmáticas muy distintas en la Teoría general del delito, la más adecuada es la que distingue entre un Derecho penal nuclear y otros accesorios en los que se impongan castigos retributivos o preventivos a personas (como menores, inimputables peligrosos, personas jurídicas), de las que es imposible predicar un obrar culpable, en el sentido de ejercer libremente la libertad de voluntad. En “Vigencia de la RPPJ en el derecho sancionador español”, op. cit., págs. 24-29. En esta línea también se postulan NIETO, MIR PUIG o DE LA CUESTA ARZAMENDI.

<sup>395</sup> Matizando la misma tesis de Tiedemann, *vid.* SILVA SÁNCHEZ, J. M<sup>a</sup>. “La expansión del Derecho penal. Aspectos de la Política criminal en las sociedades postindustriales”, op. cit., págs. 95 y ss.

## SEGUNDA PARTE

**SUMARIO: I.- NATURALEZA DEL BIEN JURÍDICO MEDIO AMBIENTE. 1.- MODERNOS PARADIGMAS AMBIENTALES Y SU IMPLICACIÓN EN LA TEORÍA DEL BIEN JURÍDICO.** 1.1.- Introducción. 1.2.- Los llamados derechos emergentes de carácter colectivo. 1.2.1.- Las ONGs internacionales de ámbito ecológico y su aportación al sistema jurídico ambiental. 1.2.2.- Una sucinta muestra sobre la capacidad de participación pública no organizada relacionada con objetivos ambientales. 1.2.3.- Repercusión de la figura asociativa en el contexto del ruido. 1.3.- Especial consideración del neo-constitucionalismo biocéntrico en Derecho comparado latinoamericano: Ecuador y Bolivia. 1.3.1.- El modelo Ecuatoriano. 1.3.2.- El modelo Boliviano. **II.- SINGULARIDAD DEL BIEN JURÍDICO MEDIO AMBIENTE.** 2.1.- Introducción. 2.2.- Interpretaciones de la justificación del objeto de protección: ¿principios o bien jurídico protegido? 2.3.- Postulados del antropocentrismo radical y moderado frente al progresivo concepto holístico del bien jurídico medio ambiente. 2.4.- Concepción ecocéntrica y biocéntrica del bien jurídico medio ambiente. 2.4.1.- Premisas holísticas de la teoría de Paul Taylor: el valor inherente. 2.4.2.- ¿Aplicación en materia acústica? 2.4.2.1.- Efectos del ruido antropogénico en otras especies animales y vegetales. 2.5.- Alcance penal de la figura de la acumulación en conductas contaminantes genéricas vs. concretas emisiones de ruido. 2.6.- Recapitulación de los apartados I y II. **III.- CONFIGURACIÓN DEL BIEN JURÍDICO MEDIO AMBIENTE EN EL ART. 45 CE.** 3.1.- Introducción. 3.2.- El mandato constitucional: binomio derecho-deber. 3.2.1.- ¿Procede aplicar la cláusula *todos* a una exégesis del sistema holístico natural? 3.3.- Problemática de la distribución de competencias entre Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales. 3.3.1.- El controvertido papel de las corporaciones locales en la protección medioambiental. 3.3.1.1.- Diversidad de policías ambientales y sus limitaciones en la aportación de prueba sobre emisiones ruidosas en el ámbito local. **IV.- MEDIO AMBIENTE Y CRIMINOLOGÍA.** 4.1.- *Green Criminology*: presupuestos de la Teoría criminológica medioambiental. 4.2.- Tratamiento del delito, víctima y procesos de victimización en la Criminología del Medio Ambiente: *Green Victimology*. 4.2.1.- Valoración de los procesos de victimización relacionados con el ruido. 4.3.- Omisión del rol del ruido como materia de estudio específica de la disciplina criminológica. **V.- DERECHO A LA CIUDAD Y DERECHO EN LA CIUDAD.** 5.1.- Impronta del “ruido” como elemento en ambas facetas del mismo derecho. 5.1.1.- Derecho al silencio y Derecho al ruido. Incidencia del turismo y otros factores de carácter cultural, económico y regulatorio. 5.1.2.- El ruido como fundamento de la reordenación urbana en el modelo de ecópolis. 5.2.- Las ciudades europeas y el déficit de uniformidad de los criterios ambientales aplicados al ámbito del ruido. 5.2.1.- *Green Cultural Criminology* y su aplicación al fenómeno del ruido ciudadano: una inexplorada ruta de acción y un fresco enfoque inclusivo. 5.2.2.- Estudio de caso descriptivo: impacto acústico ambiental de la tamborrada durante la Semana Santa en la ciudad de Hellín. 5.2.2.1.- Introducción y genealogía. 5.2.2.2.- Informe preliminar y metodología. 5.2.2.3.- Gráficos y conclusión del caso. **VI.- EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO POR EL ART. 325 CP.** 6.1.- Sistemática de la protección otorgada al medio ambiente: estructura opuesta a una interpretación holística. 6.2.- Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. 6.2.1.- El tipo autónomo y de resultado del art. 330: un caso de *rara avis* en la estructura general de los delitos de peligro abstracto. 6.3.- Evolución de las posiciones en la doctrina penal española en relación a la naturaleza jurídica del medio ambiente. 6.3.1.- Propuestas de avance en la configuración de su protección jurídico-pública conexas a la emisión de ruidos. 6.3.1.1.- Particular atención al ruido en el tipo consagrado al delito ecológico. 6.3.2.- Excurso: el eterno dilema “sanciones administrativas frente a sanciones penales” en materia medioambiental. 6.3.3.- Sobre la cuestión, una muestra en Derecho comparado continental: a) Alemania; b) Italia; c) Francia. 6.3.3.1.- El ruido en el modelo anglosajón del Reino Unido. 6.3.4.- ¿Necesidad o carácter simbólico de la ampliación de delitos y penas medioambientales frente al diseño de infracciones y sanciones administrativas y su efectiva aplicación en materia de ruido? 6.3.5.- El oscuro tránsito de la infracción administrativa muy grave al ilícito penal por emisión de ruidos: el requisito de “gravedad”. 6.3.6.- Excurso: el carácter ambivalente del ruido como circunstancia modificativa o eximente de la responsabilidad criminal. **VII.- TOMA DE POSTURA.**



# **I.- NATURALEZA DEL BIEN JURÍDICO MEDIO AMBIENTE**

## **1.- MODERNOS PARADIGMAS AMBIENTALES Y SU IMPLICACIÓN EN LA TEORÍA DEL BIEN JURÍDICO**

### **1.1.- Introducción**

El hombre, a lo largo de la historia, ha mantenido con su entorno una relación fundamental para su supervivencia, aunque en los distintos periodos se ha visto presidida por mudables formas de descifrarla, desde el respeto más profundo por mantener los ciclos vitales en el orden que la propia Naturaleza marcaba, hasta la utilización indiscriminada de los recursos naturales en los últimos siglos, supeditada a la evolución industrial y tecnológica. Así, ha pasado de un diagnóstico que vaticinaba cotas muy altas sobre la calidad de vida, a los pronósticos más aterradores sobre lo que nos acecha y lo que dejaremos a las futuras generaciones. Vivimos una época de revelaciones acreditadas e irrefutables sobre los límites de la Naturaleza, y nos aproximamos a las líneas divisorias de los modelos que han sustentado nuestro reciente desarrollo.

Esta idea contemporánea se basa en la constatación de que la Naturaleza, entendida como un todo, es un recurso escaso, y es precisamente esta concepción universal, y no sólo en atención aislada a sus partes, lo que representa un espacio conflictual distinto al que conocemos. Esto implica la necesidad de concebir la protección que se le debe otorgar también de una forma global, de modo que cada persona, institución, disciplina, administración u organismo, desde su posición, puede y debe implicarse en la salvaguarda de los recursos naturales, llevando a cabo las conductas eficientes y provechosas que le competan, absteniéndose, por tanto, de realizar las que puedan ser perniciosas. Porque ya no hablamos tan sólo de contaminación, sino de destrucción, y así parece concebirlo también parte de la doctrina, por ello la diferenciación entre estos dos términos en la literatura científica aparece definitivamente consagrada.



El Derecho en Occidente se ha ido tejiendo con el foco de atención dirigido al cuidado y protección de la propiedad y la persona, mas cuando han aparecido en el escenario otros protagonistas, como el medio ambiente, se ha trasladado el modelo de tutela otorgada, pero el resultado es que dicho modelo no es transmutable, básicamente porque estamos ante un hecho completamente diferente, que por lo tanto requiere de una teoría propia.

Los bienes ambientales se integran en un enredado sistema que motiva la existencia de sus propias regulaciones y clasificaciones, que lejos de mantener criterios ortodoxos, se revisan continuamente con el fin de adaptarse a los sucesivos y, a veces, inesperados cambios. El medio ambiente, además, no se ha presentado sólo en la escena jurídica, pues le acompañan sus propios intérpretes; la filosofía, la ética, la sociología, las ciencias experimentales, la economía, etc.

Por otra parte, la asunción global de nuevos riesgos, desafíos e intereses, ha propiciado una imagen del Derecho penal que insiste en aplicar estructuras y criterios de imputación ajenos al mismo, a entidades supraindividuales, con la consiguiente extensión anómala de responsabilidades casi objetivas, y una delimitación de la lesividad basada en riesgos potenciales, difusos, y de carácter genérico.

## 1.2.- Los llamados derechos emergentes de carácter colectivo

Los calificados como Derechos Humanos Emergentes engloban una serie de derechos también denominados de tercera y cuarta generación o colectivos, entre los que se encuentran el Derecho a la Ciudad (cuyo estudio ocupa una parte de lo contenido en el apartado V), el Derecho al Buen Vivir, el Derecho al Agua y al Saneamiento, el Derecho Humano al Medio Ambiente, Derechos relacionados con la bioética o el Derecho a la Renta Básica, entre otros.<sup>396</sup> El llamado Derecho al Buen Vivir -expresión traducida del término quechua *Sumak Kawsay* y del vocablo aymara *Suma Qamaña*- se basa en principios y valores ancestrales heredados de los pueblos indígenas [“vivir bien” o “vivir en plenitud”, en oposición al modelo desarrollista de “vivir mejor”], al que se llega tras el reconocimiento de los derechos colectivos, es decir, los derechos de la Naturaleza se materializan con una envoltura junto el resto de derechos. Presente en la Constitución de la República del Ecuador (2008) y la Constitución Política de Bolivia (2009), ésta última sometida a voto popular.<sup>397</sup>

---

<sup>396</sup> Se pueden distinguir tres clasificaciones: 1.- Derechos nuevos, como el derecho a la renta básica. 2.- Extensión de contenidos de derechos humanos ya reconocidos, como el Derecho a la salud. 3.- Derechos extendidos a colectivos que tradicionalmente no han disfrutado de ellos. Se sigue aquí la distinción que realiza GUILLÉN LANZAROTE, A. “El derecho a la ciudad, un derecho humano emergente”. En *El Derecho a la ciudad*. Serie Derechos Humanos Emergentes, núm. 7. Ed. Institut de Drets Humans de Catalunya. Barcelona, 2011, págs. 16-27, en especial 23 y 24. Otras dimensiones de estos derechos emergentes en la obra colectiva *Derechos Emergentes. Desarrollo y medio ambiente*. Jaume Saura Estapá / M<sup>a</sup> Eugenia Rodríguez Palop (eds.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2014.

<sup>397</sup> Vid. ZAFFARONNI, R. E. En contestación a Hegel y a Spencer, asentados en la superioridad del hombre, bien espiritualmente en el caso del primero, o bien en un sentido biológico organicista el segundo, se refiere al preámbulo de la Constitución del Ecuador, de la que cita un párrafo: <<Celebrando a la naturaleza, la Pacha Mama, de lo que somos parte y que es vital para nuestra existencia”, y después se señala que es preciso construir: Una nueva forma de convivencia humana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay>>. En *La Pachamama y el Humano* (1<sup>a</sup> ed., 4<sup>a</sup> reimp.) Ed. Madres de Plaza de Mayo / Colihue. Buenos Aires, 2012, pág. 108; BOFF, L. *El Planeta Tierra. Crisis. Falsas soluciones. Alternativas*. Ed. Nueva Utopía. Madrid, 2011. Estas nuevas teorías contrastan con parte de las desarrolladas en la Europa del siglo XIX. Vid. SCHOPENHAUER, A. El filósofo alemán, desde su prisma occidental y profundamente pesimista respecto al hombre, dedicó un ensayo al concepto del buen vivir compuesto por una serie de aforismos que a su vez se integraban en una obra mayor, publicada con el nombre de *Paverga y Paralipómena* en 1851. En ellos trata el arte de vivir (lo denomina sobrevivir) en un mundo hostil, envilecido y, por tanto, digno de ser despreciado; el hombre debe aislarse de la sociedad del ocio, abandonar el carácter alienante de la vida moderna. *Arte del buen vivir*. Ed. EDAF. Madrid, 2003. Existen otros textos constitucionales que han reflejado la misma idea del Buen Vivir como sinónimo de felicidad, que el Estado debe amparar y facilitar a sus ciudadanos, como las primeras constituciones de diversos estados norteamericanos de mediados el s. XVIII, la Constitución francesa de 1791 o la de Perú de 1823. Tampoco las sociedades orientales han sido ajenas a este criterio de felicidad, pues al término de la 2<sup>a</sup> Guerra mundial, tanto Japón como Corea del Sur lo incluyeron en sus respectivas cartas de derechos constitucionales. Al respecto, vid. LORCA MARTÍN DE VILLODRES, M<sup>a</sup> I. “Felicidad y Constitucionalismo”. En *Revista*

Por su parte, el Derecho Humano al Medio Ambiente todavía no ha cristalizado en el sistema de Derecho Internacional positivo de carácter universal, si bien este derecho, de forma autónoma y sin sujetarse a un cuerpo normativo expreso, ha logrado crearse la consideración de irrenunciable, sobre todo desde la aprobación del texto definitivo de la Declaración Universal de Derechos Emergentes en 2007.<sup>398</sup>

Los derechos citados son postulados que, o bien todavía no han adquirido la calificación de Derechos Humanos o bien, aún encontrándose normatizados en el sistema internacional de protección de derechos, han sido paulatinamente abandonados, olvidados o, en otros casos, ampliados en su contenido.

En su base ideológica, a primera vista, estos derechos emergentes colisionan con el pensamiento político en el que se situaron los iniciadores del ecologismo a nivel internacional, de marcado carácter conservador-liberal. Si nos adentramos en una investigación sobre los verdaderos patrocinadores de este tipo de iniciativas, sobre todo en ámbitos de protección medioambiental gestionados a través de las denominadas *big green*, se observa que el panorama no ha variado de forma sustancial en cuanto a sus orígenes, que se remontan a finales del s.XIX.<sup>399</sup>

---

*de Derecho Político*, núm. 88 septiembre-diciembre. Ed. UNED. Madrid, 2013, págs. 123-365, en especial 315 y ss.

<sup>398</sup> Aprobado en el marco del Forum de las Culturas celebrado en Monterrey (México) 2007, se configura como un instrumento de la sociedad civil internacional dirigido a múltiples actores y foros para lograr la consagración de estos derechos. No obstante, las alusiones al derecho humano al medio ambiente sólo se han visto refrendadas de forma indirecta por el derecho supranacional. Al menos, así se desprende de varias declaraciones en diferentes ámbitos; en el seno de la Organización de Naciones Unidas, por ejemplo, la Declaración de Estocolmo de 1972 (Principio 1); jurisprudencialmente, gracias a la labor del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación a determinados artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos. *Vid.* HUICI, L. “Cambio climático y derechos humanos: el reconocimiento jurídico internacional del derecho a un medio ambiente sano, equilibrado y seguro”. En *Derechos Humanos y Cambio Climático*. Laura Huici / Miguel Ángel Elizalde. Serie Carta de Derechos Humanos Emergentes, núm. 5. Ed. Institut de Drets Humans de Catalunya. Barcelona, 2008, págs. 6-32.

<sup>399</sup> En este sentido, realiza una contundente crítica ORDUNA, J. Retrata una estrecha vinculación, en sus orígenes, entre los movimientos eugenicistas (que se cuidaron desde siempre de mostrar la existencia de respaldo científico a sus ideas, aún a costa de interpretar oportunistamente, por ejemplo, la obra de Charles Darwin), posteriormente integrados en el nazismo, y las grandes internacionales ecologistas, entre ellas la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) en 1948, financiada por la Fundación Ford; la WWF (*World Wildlife Foundation*) en 1961; la UNEP (*United Nations Environment Program*), promovida por la Conferencia sobre Medioambiente de las Naciones Unidas; o Greenpeace, entre cuyos donantes más activos se encuentra el magnate norteamericano Ted Turner. Según el autor, dichas organizaciones ejercen un poder exacerbado en las políticas ambientales, programas, estudios, proyectos, etc., así en como la creación de espacios transnacionales especialmente protegidos, catálogos de especies protegidas, políticas energéticas, agrarias, pesqueras, en diferentes países del mundo, sin contar con el respaldo y consenso de sus respectivos gobiernos nacionales, que produce impactos negativos tanto en la economía de dichos países como en el desarrollo identitario de sus propias soberanías. El caso del DDT (diclorodifeniltricloroetano) es un claro ejemplo, en el que se ha pasado del rechazo absoluto a la complacencia posterior tras 30 años de prohibición, al haber crecido de

### 1.2.1.- Las ONGs internacionales de ámbito ecológico y su aportación al sistema jurídico ambiental

El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas -ECOSOC- define como ONG internacional a cualquier organización no creada por vía de acuerdos intergubernamentales, incluidas las organizaciones que acepten miembros designados por las autoridades gubernamentales, siempre que tales sujetos no coarten la libertad de acción ni la libre expresión de opiniones de la organización.<sup>400</sup> En su dimensión ambiental, se trata de aquellas personas jurídicas independientes, sin ánimo de lucro y dedicadas principalmente a la protección y mejora del medio ambiente.<sup>401</sup>

Las posturas ideológicas de la mayoría de las grandes ONGs de carácter ambiental se encuentran enmascaradas por su inmersión en las dinámicas de mercado, porque es evidente que los inversores (socios, fundaciones donantes, etc.) se encuentran social y geográficamente muy alejados de los puntos de actuación y, por ende, estos activos condicionan sus estructuras; aunque éstas se empeñen en mantenerse ajenas a marcados idearios, la percepción que de ellas se tiene varía en función del lugar donde se realicen las encuestas de opinión.<sup>402</sup>

---

forma alarmante las muertes por paludismo (malaria) en la población africana; finalmente, tanto WWF como Greenpeace reconocen que el empleo de este insecticida es un mal necesario. En *Ecofascismo. Las internacionales ecologistas y las soberanías nacionales*. Ed. Martínez Roca. Buenos Aires, 2008. Vid. VICENTE GÓMEZ, T. “Economía, democracia y derechos humanos”. En *Jueces para la democracia. Información y debate*, núm. 77. Madrid, julio 2013, págs. 33-48.

<sup>400</sup> Resolución 288 (X) de 27 de febrero de 1950 (B. Parte I, §8) [E/1661] y Resolución 1296 (XLIV), de 25 de junio de 1968 (Parte I, §7) [E/4548], que sustituye a la anterior.

<sup>401</sup> Decisión 466/2002 del Parlamento y del Consejo, de 1 de marzo, relativa al programa de acción comunitario de fomento de las ONGs dedicadas principalmente a la protección del medio ambiente. Vid. PEÑALVER I CABRÉ, A. En nuestro país, la Orden del Ministerio de Medio Ambiente 817/2005, de 21 de marzo, por la cual se establecen las bases reguladoras de ayudas a ONGs para realizar campañas de sensibilización para la prevención de la contaminación y del cambio climático, además de una definición similar, exige que se encuentren inscritas en el registro administrativo correspondiente, y excluye de manera expresa a las entidades de Derecho público, universidades, partidos políticos, colegios profesionales u otras entidades de naturaleza parecida. Voz “ONGs y Protección del Medio Ambiente”. En *Diccionario de Derecho Ambiental*. Enrique Alonso García / Blanca Lozano Cutanda (dirs.) Ed. Iustel. Madrid, 2006, págs. 881-891.

<sup>402</sup> Entre las organizaciones medioambientales [organizaciones gubernamentales, financieras, militares, no gubernamentales y ecologistas] más significativas, se pueden citar: Earth Action (Reino Unido); Centro Internacional de Enlace Ambiental –ELCI– (Nairobi, Kenia); Amigos de la Tierra (Reino Unido); Greenpeace Internacional (Holanda); Federación Internacional de Periodistas Ambientales –FIPA– (Francia); Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático –PICC– (Suiza); Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (Uruguay); Fondo Mundial para la Naturaleza –WWF– (Suiza); Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente –PNUMA– (Nairobi, Kenia). Consultar el amplio listado que

Determinados autores entienden que los países ricos que cuentan con un gran número de organizaciones no gubernamentales nacionales, están dirigiendo el cumplimiento ambiental. Lo consideran preocupante, ya que los estudios de las ONGs más formales sugieren que las organizaciones sin ánimo de lucro pueden estar cada vez más influenciadas por los Estados y las empresas patrocinadoras y, por tanto, pueden tener dificultades a la hora de desafiar las prácticas estatales.<sup>403</sup>

A este factor se une otro que es si cabe más preocupante; la aglomeración de ONGs internacionales en los países de altos ingresos puede conformar la distribución y promoción global de la comunidad encargada del control medioambiental, de manera exclusiva y excluyente.<sup>404</sup>

La réplica a este planteamiento aciago sobre los estándares de éxito de las pretensiones que persiguen dichas organizaciones, fija el acento en una cuestión comparativa interesante; el hecho de que el movimiento pro Derechos Humanos (de incuestionable trayectoria) no haya sido capaz de contener el genocidio en la actualidad, no es óbice para declarar la invalidez absoluta del mismo.<sup>405</sup>

---

recoge la *Encyclopedia of Associations International: 3 Volume Set (Encyclopedia of Associations, International Organizations)* (53<sup>th</sup> ed.) Ed. Gale Research Inc. Detroit (MI). March, 2014.

<sup>403</sup> Vid. STRETESKY, P. B. / KNIGHT, O. "The Uneven Geography of Environmental Enforcement INGO's". En *Emerging Issues in Green Criminology. Exploring Power, Justice and Harm*. Reece Walters / Diane S. Westerhuis / Tanya Wyatt (eds.) Ed. Palgrave Macmillan. Basingstoke (UK), 2013, págs. 173-196. Vid. PEÑALVER I CABRÉ, A. Señala que, a raíz de la importancia que ha ido adquiriendo su intervención en el plano legislativo, ejecutivo y judicial de los EE.UU., se ha creado el llamado movimiento anti-ambiental, financiado en gran medida por el sector industrial -wise use movement-. Voz "ONGs y Protección del Medio Ambiente". En *Diccionario de Derecho Ambiental*, op. cit., pág. 883.

<sup>404</sup> En este sentido, STRETESKY, P. B. / KNIGHT, O. A escala global, algunos países sin sede de ONGs internacionales pueden ser menos propensos a formar organizaciones que participen en la defensa de la justicia ambiental como resultado de la formación de ONGs en países desarrollados, ya que las organizaciones locales tienen que competir con ellas en financiación y recursos. En "The Uneven Geography of Environmental Enforcement INGO's", op. cit., pág. 184.

<sup>405</sup> Realizan una lectura sobre el desánimo que en la actualidad causa el movimiento ambientalista, especialmente en EE.UU., SHELLENBERGER, M. / NORDHAUS, T. A partir de un informe elaborado con más de una veintena de entrevistas a líderes ambientalistas, concretamente sobre el calentamiento global, una de sus observaciones es que tanto la lista de miembros como los ingresos de las grandes organizaciones ambientales han crecido enormemente en los últimos 30 años. Las instituciones que definen lo que significa el ecologismo presumen de contar con grandes equipos de profesionales y reciben decenas de millones de dólares cada año de fundaciones y particulares. Sin embargo, los autores expresan que no han cosechado los éxitos esperados (teniendo en cuenta tan sólo el calentamiento global y la política sobre emisiones de CO<sub>2</sub> a la atmósfera llevada a cabo por Norteamérica), por lo que lanzan la idea de que sus bases deben ser abandonadas para que nazca algo diferente y eficaz, pero sin especificar cuál debe ser ese objeto de nuevo cuño. "The Death of Environmentalism. Global Warming Politics in a Post-Environmental World". En *The Breakthrough Journal*, June 16, 2010. Disponible en: [http://www.thebreakthrough.org/images/Death\\_of\\_Environmentalism.pdf](http://www.thebreakthrough.org/images/Death_of_Environmentalism.pdf) (último acceso 12/07/2015). Una réplica extraordinaria a esta crítica, puntualizando varios extremos de la misma STONE, C. D. De hecho, el movimiento ecológico no escatima en aportar múltiples visiones: desde la muerte de osos

La deducción de este análisis es clara y simple; la circunstancia de que las denominadas *big green* no posean altas cotas de éxito en cuanto a la implementación de sus políticas y, en consecuencia, vean muy mermada su eficacia<sup>406</sup>, no implica *per se* que sus actuaciones no obtengan un refrendo ciudadano más o menos desarrollado en el rol que desempeñan como apoderados ambientales eminentes, ya sea en el papel de consumidores o en la gestión cotidiana de sus formas de vida.<sup>407</sup> Una vez expuesta esta cuestión, el contrapunto de la actuación de muchas ONGs internacionales ha sido definido bajo el espectro de una forma de neo-colonialismo, en el que la ubicación de la sede principal de la organización donde se descentralizan y operan de manera primordial, localizada en países de ingresos altos, puede desmerecer a la sociedad civil de los países de con una renta per cápita menor.<sup>408</sup>

Asimismo, a escala europea, han conseguido abonar el cultivo de nuevas formas de gobierno, por sus estructuras organizativas y las actividades especializadas en sus respectivos ámbitos ambientales, así como por su nada desdeñable función de policía, sobre todo en lo relativo al cumplimiento y aplicación de la normativa ambiental

---

polares por ahogamiento, el deshielo en los polos, costas azotadas por tormentas, etc., porque el movimiento por la protección del medio ambiente no es monolítico y sus límites tampoco están clarificados, es más, aglutina una gran variedad de facciones, desde los conservacionistas (cada uno con sus propios clientes potencialmente conflictivos), defensores de los derechos de los animales, o personas cuya principal preocupación es la sostenibilidad de los recursos o la salud pública. Se pregunta si entonces deberíamos enterrar el movimiento ecologista sólo por el fracaso para contener las emisiones de efecto invernadero y, en ese caso, debería ocurrir algo similar en el movimiento por los derechos humanos, ya que éste tampoco ha conseguido contener el genocidio. “Is Environmentalism Dead?”. En *Environmental Law Review*, Vol. 38, Issue 1. Winter 2008, págs. 19-45. Disponible en: <https://law.lclark.edu/live/files/17288-38-1stone> (último acceso 12/07/2015).

<sup>406</sup> Vid. SCHÜNEMANN, B., que cita la debilidad de las ONGs frente al sistema político de la sociedad globalizada. “La destrucción ambiental como arquetipo del delito”. Mariana Sacher (tr.) En *Derecho, Globalización, Riesgo y Medio Ambiente*. Esteban Pérez Alonso / Estanislao Arana García et. al. (eds.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2012, págs. 429-441, en especial 430.

<sup>407</sup> Además, se une la peculiaridad de que los ciudadanos son, al mismo tiempo, productores y receptores de los impactos medioambientales. Este reconocimiento a los ciudadanos como gestores ambientales ha surgido del desarrollo de vías de gestión ambiental, que se basan fundamentalmente en cambios de actitud respecto a los costes ambientales y el valor que se otorga al medio ambiente (reutilización de residuos urbanos, seguridad alimentaria, consumo de productos farmacéuticos, etc.). Vid. BRÚ, J. *Medio ambiente: poder y espectáculo. Gestión ambiental y vida cotidiana*. Ed. Icaria. Barcelona, 1997, págs. 37 y ss.

<sup>408</sup> Sobre el significado de este llamado neo-colonialismo, generalmente producido en los países del Sur vid., GÓMEZ, G. M. “Field presence of Dutch NGOs: What is the impact on civil societies in the South?” *Final report: ISS Staff Group 3: Human Resources and Local Development*. Ed. International Institute of Social Studies in the Hague. Rotterdam, July 2008. Disponible en: <http://www.search4dev.nl/download/314670/145212.pdf> (último acceso 12/07/2015). Vid. STRETESKY, P. B. / KNIGHT, O. Los países de ingresos bajos estarían en una posición en la que los niveles de control se basan en una financiación dirigida desde fundaciones y gobiernos de los países ricos. La fuerte dependencia de la financiación da lugar a una posición de las organizaciones sin fines lucrativos en general especialmente vulnerable, ya que puede pervertir las prácticas de movimientos que desafían a la autoridad estatal. En “The Uneven Geography of Environmental Enforcement INGO’s”, op. cit., pág. 184.

emanada de la UE, o en el marco europeo de políticas de protección penal ambiental.<sup>409</sup> En general, han sufrido un incremento mundial, acorde y paralelo a la importancia que ha ido adquiriendo el medio ambiente en todas sus facetas, y, por supuesto, a la condición transversal que le es innata.<sup>410</sup>

Este relieve y trascendencia de las ONGs de carácter ambiental, en especial las transnacionales, se debe también a otro factor nada desdeñable, como es la recogida y análisis de datos basados en sus propias investigaciones, ideados como sistemas y métodos innovadores de recuento y registro de los daños ambientales, más allá de las fronteras nacionales. Por tanto, tienen una capacidad más desarrollada frecuentemente, que los propios Estados (sobre todo aquéllos más desfavorecidos económicamente),

---

<sup>409</sup> Vid. “Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se instituye un Programa de acción comunitario de fomento de las organizaciones no gubernamentales dedicadas principalmente a la protección del medio ambiente (presentada por la Comisión)”. *Comisión de las Comunidades Europeas*. Bruselas, 22.6.2011 COM (2001) 337 final 2001/0139 (COD) Vol. II. En la Exposición de Motivos del documento se recogen varios motivos por los que las ONGs europeas en medio ambiente han alcanzado un peso específico en la agenda; el reconocimiento de la importancia que ostenta la participación del ciudadano, su función de colaboración en el diálogo que se establece en comités y reuniones de expertos, su propia experiencia en ámbitos específicos sobre cómo actuar - “knowhow”-, la representatividad que ostentan gracias a su amplia base de asociados, etc. Vid. CUADRADO RUIZ, M<sup>a</sup> A. En el Convenio del Consejo de Europa, de 4 de noviembre de 1998, sobre la protección del medioambiente a través del Derecho penal, se prevé la regulación del derecho de grupos, fundaciones y ONGs a participar en los procedimientos relativos a cuestiones medioambientales (art. 11), pero al ser de carácter potestativo para los Estados, éstos pueden restringir tanto el número como el derecho a participar en el procedimiento. “Protección jurídica del medio ambiente (internacional, europea, constitucional y penal)”. En *Derecho, Globalización, Riesgo y Medio Ambiente*. Esteban Pérez Alonso / Estanislao Arana García et. al. (eds.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2012, págs. 619-642, en especial 630. A propósito de la legitimación de ciudadanos y organizaciones, vid. QUINTERO OLIVARES, G. “Bien jurídico, derecho público subjetivo y legitimación en el Derecho penal ambiental”. En *Estudios de Derecho Ambiental. Libro Homenaje al profesor Josep Miquel Prats Canut*. Gonzalo Quintero Olivares / Fermín Morales Prats (coords.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2008, págs. 207-228, en especial 223 y ss.

<sup>410</sup> Por ejemplo, actualmente España se estima que existen aproximadamente 1.087 asociaciones, cuya actividad se circunscribe a la defensa del medio ambiente. Aparecen inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones –RNA–, de acuerdo a lo que dispone el art. 25 de la LO 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. El incremento es notable si nos fijamos en el número existente en el año 1993, que rondaba las 200. Los datos se pueden consultar en *Anuario Estadístico del Ministerio del Interior 2012*. Ed. Ministerio del Interior. Secretaría General Técnica. Madrid, julio 2013. Disponible [http://www.interior.gob.es/documents/642317/1204854/Anuario\\_estadistico\\_2012\\_okkk.pdf/00ee01c7-\(3122-496a-a023-22829653e6c0](http://www.interior.gob.es/documents/642317/1204854/Anuario_estadistico_2012_okkk.pdf/00ee01c7-(3122-496a-a023-22829653e6c0) (último acceso 12/07/2015). Asimismo, uno de los escasos estudios sobre recuento de ONGs de aplicación ambiental a nivel global en STRETESKY, P. B. / KNIGHT, O. Los investigadores identificaron 190 organizaciones de defensa y presión. En total, 263 organizaciones se identificaron participantes en algún tipo de fiscalización ambiental -operaciones, defensa, o presión-. El listado refleja datos por países, alcanzando las primeras posiciones EE.UU. (67); Reino Unido (39); Bélgica (18); Países Bajos (15); Canadá (14); Alemania (14). España cuenta con 2, al igual que Liechtenstein o México, superando este número países como Zimbabue, que cuenta con 3, o Japón e Italia con 4. En “The Uneven Geography of Environmental Enforcement INGO’s”, op. cit., págs. 186 y 187.

situación les otorga una posición privilegiada en el examen de determinados tipos de criminalidad en torno a los delitos ambientales.<sup>411</sup>

De nuevo encontramos aquí otro contrapeso en la balanza de la noción de *justicia ambiental*, ya que la distribución del cumplimiento ambiental de las ONGs internacionales tiene implicaciones en la justicia ambiental a través del impacto sobre la desorganización ecológica.<sup>412</sup>

Según la teoría de la *Treadmill of Production* formulada por SCHNAIBERG, existen tres conjuntos de actores importantes en el engranaje del sistema de producción, cada uno de ellos con sus propios incentivos que les permiten continuar en la cadena; las empresas, la mano de obra y los Estados.<sup>413</sup> La idea central es que a medida que aumenta la producción y crea más eficiencia, la cadena y los trabajadores se aceleran para mantenerse al día con el aumento de producción pero, al mismo tiempo, el mecanismo los arroja fuera, adoptando la forma de desempleados o bajo

---

<sup>411</sup> Así lo atestiguan HECKENBERG, D. / WHITE, R. Greenpeace, por ejemplo, tiene presencia física en 40 países, y el Fondo Internacional para el Bienestar Animal cuenta con personal en 15 países y proyectos en más de 40. ONGs como estas proporcionan extensos seguimientos y recolección de datos en torno a cuestiones tales como la pesca ilegal, el comercio ilegal de vida silvestre, la deforestación y el comercio ilegal de recursos naturales en regiones específicas, así como a nivel mundial. “Innovative approaches to researching environmental crime”. En *Routledge International Handbook of Green Criminology*. Nigel South / Avi Brisman (eds.) Ed. Routledge. New York, 2013, págs. 85-103, en especial 93.

<sup>412</sup> El problema de la desorganización ecológica se hizo evidente con el ascenso de la revolución química y el creciente uso de productos químicos inorgánicos en los procesos de producción; aumenta la producción pero, al mismo tiempo, también produce un incremento en la liberación de productos químicos tóxicos al medio ambiente que contaminan el aire, la tierra y el agua. Vid. STRETESKY, P. B. / KNIGHT, O. Examinan el tema de la justicia ambiental para determinar si las operaciones de las ONGs internacionales y el activismo son dirigidos desde los países con altos ingresos, potencialmente en detrimento de los países de ingresos bajos. Tal condición indica que existe injusticia ambiental con respecto a los beneficios de la regulación del medio ambiente por parte de las organizaciones internacionales no gubernamentales de la sociedad civil, debido a la falta de fuerza política o económica. Por ejemplo, las ONGs internacionales ubicadas en los países de altos ingresos, que están dirigiendo a los voluntarios que operan en las oficinas exteriores de los países de bajos ingresos, pueden crear problemas porque no entienden la cultura local. Esta falta de comprensión puede repercutir en la eficacia que la ONG internacional correspondiente plasmará en el terreno (Grossman y Rangan, 2000). Por esta razón, las ONGs internacionales encargadas del cumplimiento ambiental pueden provocar problemas en el momento de hacer frente a la desorganización ecológica en un país de ingresos bajos. Por ejemplo, McPeak (2001) sugiere que el desarrollo de las ONGs internacionales ha comenzado por descentralizar sus estructuras de gestión... [y esto] ...acompañado de un aumento de los niveles de conflicto entre el terreno y el personal de la sede, mengua la moral y las propuestas para recentralizar su gestión operativa. En “The Uneven Geography of Environmental Enforcement INGO’s”, op. cit., pág. 183 y ss.

<sup>413</sup> La teoría de cadena de producción fue desarrollada por Schnaiberg para explicar el aumento de los niveles de daño ambiental que observó después de la Segunda Guerra Mundial. Sugiere que la mayoría de las personas creen equivocadamente que la sociedad sólo puede avanzar si la economía crece. Esta fe en la expansión económica significa que los diferentes actores del sistema trabajan con un objetivo común: asegurar el crecimiento económico. Vid. SCHNAIBERG, A. *The Environment: From Surplus to Scarcity*. Ed. Oxford University Press. New York, 1980.



condiciones de precariedad laboral. Finalmente, todo ello se traduce en un aumento exponencial de explotación de los recursos naturales.<sup>414</sup>

Con la aparición de las ONGs internacionales, un cuarto grupo se perfila como integrante de este escenario, por su capacidad de presionar a los Estados para reducir la desorganización ecológica, la asunción de funciones operativas, divulgativas, de fomento, etc.<sup>415</sup> También es apreciable su intensa participación en los trabajos preparatorios de diferentes organismos y convenios internacionales relacionados con el medio ambiente, porque aún en su condición de meros observadores sin derecho a voto, representan fielmente su papel, precisamente gracias a la calidad y especificación de sus estudios e informes.<sup>416</sup>

---

<sup>414</sup> Vid. BRISMAN, A. De acuerdo con el modelo de la *Treadmill of Production* [ToP], los avances en la tecnología, inducida principalmente por los propietarios de los medios de producción que buscan aumentar sus ganancias, impulsar la expansión de la producción y el consumo de forma sinérgica, dicho proceso conduce a un ciclo de producción que requiere más producción, debido a que todos los sectores de la sociedad (Estado, trabajadores organizados, y capital privado) dependen de un crecimiento económico continuo para resolver problemas como el desempleo generado por la mecanización, que son creados por el propio crecimiento. Los teóricos de la ToP argumentan que los problemas ambientales no pueden ser resueltos dentro de este sistema, ya que el crecimiento impulsa demandas cada vez mayores en el medio ambiente mediante la extracción de los recursos naturales y la generación de contaminantes. Por tanto, el logro de la sostenibilidad ambiental requiere de una reestructuración radical de la economía política y el abandono de la dependencia del crecimiento. "Of Theory and Meaning in Green Criminology". En *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*. Vol. 3, núm. 2, 2014, págs. 21-34. Disponible en: [www.crimejusticejournal.com/issue/view/13](http://www.crimejusticejournal.com/issue/view/13) (último acceso 3/07/2015). Asimismo, LYNCH, M. / LONG, M. / STRETESKY, P. "Anthropogenic Development Drives Species to Be Endangered: Capitalism and the Decline of Species". En *Green Harms and Crimes. Critical Criminology in a Changing World*. Series: Critical Criminological Perspectives. Ragnhild Aslaug Sollund (ed.) Ed. Palgrave Macmillan, June 2015, págs. 117-146.

<sup>415</sup> Vid. STRETESKY, P. B. / KNIGHT, O. En muchos casos, las empresas internacionales se localizan en países con salarios mucho más bajos y leyes ambientales más débiles, con el fin de minimizar los costos asociados a la extracción de recursos naturales y a la producción. La mano de obra, a su vez, puede estar motivada en apoyar aumentos en la producción para promover la creación de puestos de trabajo que ayuden a aumentar los salarios y reducir el desempleo. En resumen, la aplicación de tecnología y producción a menudo viene con la promesa de la inversión financiera en áreas que están deprimidas económicamente (Gould et al. 2008). Los sindicatos a menudo apoyan las políticas que aumentan la producción y por lo tanto causan más desorganización ecológica, porque creen que estas políticas son beneficiosas para los trabajadores. En realidad este beneficio para los trabajadores no se materializa, ya que la tecnología generalmente los desplaza (Gould et al. 2008). En tercer lugar, los actores estatales a menudo apoyan la expansión de la producción, ya que conlleva ingresos adicionales en forma de impuestos. Los impuestos legitiman el papel del Estado y pueden ser redistribuidos para lograr políticas acordes a la economía liberal. Las ONGs internacionales tienen poco poder de sanción, sin embargo actúan como si estuvieran autorizadas en los términos más enérgicos posibles. Ellos fabrican las reglas y esperan que sean seguidas; declaran sus puntos de vista a los Estados o a las empresas transnacionales, y expresan una condena moral cuando sus peticiones se desatienden. Por lo tanto, las ONGs internacionales que defienden el Derecho ambiental pueden influir en los Estados, ya que pueden negociar cuestiones de soberanía con mayor facilidad que éstos. En "The Uneven Geography of Environmental Enforcement INGO's", op. cit., pág. 177-180.

<sup>416</sup> Vid. JUSTE RUIZ, J. / CASTILLO DAUDÍ M. Su influencia deriva de esta función investigadora, pues la ausencia de voto, lejos de representar un obstáculo importante, no resulta tan relevante. Generalmente, la adopción de decisiones en los foros internacionales ambientales se consigue a través del consenso, siendo excepcional el recurso a un sistema de votación formal. En *La protección del medio*

A estas atribuciones hay que añadir la capacidad y legitimación procesal que ostentan, cuyo papel activo, ya sea mediante la incoación de procedimientos o bien gracias a la formulación de recursos contra determinados pronunciamientos de los órganos jurisdiccionales, cada vez está más presente. La Directiva 2004/35/CE, que establece un marco común para la prevención y reparación de los daños ambientales, reconoce la legitimación de dichas organizaciones, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por sus correspondientes legislaciones nacionales [destacamos, al objeto de estudio concreto de este trabajo –el ruido–, que la Directiva realiza una serie de definiciones de lo que considera daño a las aguas, al suelo, a un recurso natural, especies y hábitats de especial protección, etc. (art. 2.1); con respecto a la atmósfera, que representaría su genérico espacio de actuación, mantiene un silencio absoluto].<sup>417</sup>

En esta inclinación hacia la apertura de legitimación procesal, el caso de España supera al de otros países de la UE, sobre todo a los anglosajones, que no disponen del instrumento procesal de la acción popular, mecanismo que permite ejercer la legitimación activa ante la jurisdicción penal.<sup>418</sup> Legitimación que sufre una prolongación teniendo en cuenta que los nuevos sujetos activos del delito ambiental pueden ser personas jurídicas, en cuyo caso nada específico o distinto se prevé, por lo que serán de aplicación las reglas generales sobre la acción popular.<sup>419</sup>

Ahora bien, como puntualiza QUINTERO OLIVARES, ello no significa que deba admitirse la subjetivización individual del derecho a través del bien jurídico medio ambiente, que continuará siendo, en todo caso, un bien de carácter difuso, ya

---

*ambiente en el ámbito internacional y en la Unión Europea*. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2014, pág. 39. Vid. DÍEZ RIPOLLÉS, J. L. Los resultados obtenidos en los estudios y análisis elaborados por los grupos de presión de expertos, adquieren una legitimación científico-social que les ayuda a superar el estatus de legitimidad otorgado a la opinión pública. En *La racionalidad de las leyes penales. Práctica y teoría* (2ª ed. ampliada) Ed. Trotta. Madrid, 2013, págs. 30-32.

<sup>417</sup> Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004 sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños ambientales. En *DOCE* 30.04.2004 [L143/56 L143/75]: (25) <<... procede otorgar asimismo a las organizaciones no gubernamentales que fomentan la protección del medio ambiente la posibilidad de contribuir adecuadamente a una aplicación efectiva de la presente Directiva; art. 12.1: se considerará suficiente, a efectos de lo dispuesto en la letra b), el interés de las organizaciones no gubernamentales que trabajen en la protección del medio ambiente y que cumplan los requisitos establecidos por la legislación nacional. Se considerará asimismo que dichas organizaciones tienen derechos que pueden ser vulnerados a efectos de lo dispuesto en la letra c)>>.

<sup>418</sup> Vid. QUINTERO OLIVARES, G. *Derecho Penal Ambiental*. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2013, pág. 111. Es precisamente a través de esta articulación como se han venido resolviendo los problemas de legitimación activa de los grupos ecologistas ante la jurisdicción penal en nuestro país.

<sup>419</sup> Arts. 101 y 270 LECrim; art. 19.1 LOPJ.

que no existe la condición de perjudicado singular en estos casos; lo que se pretende no es el resarcimiento personal, sino la defensa de un interés propio en pos de que las cualidades objetivas medioambientales se mantengan.<sup>420</sup> Lo cierto es que la jurisprudencia del TS les reconoce legitimación activa como titulares de la responsabilidad civil extracontractual por daños al medio ambiente, y el TC acepta el interés legítimo y personal de las asociaciones de defensa del patrimonio natural en la vigilancia del correcto ejercicio de la potestad administrativa sancionadora.<sup>421</sup>

Un ejemplo lo encontramos en nuestro país, donde Greenpeace España (junto a algunas asociaciones de carácter regional y municipal) impulsó uno de los procesos más controvertidos y dilatados en materia ambiental de los últimos años, el conocido asunto del hotel situado en el enclave natural “El Algarrobico” (Cabo de Gata-Níjar, Almería). Tras años de sentencias dictadas de forma cruzada, en las que se mezclan intereses de diferentes administraciones públicas, así como los de la promotora y constructora del hotel respectivamente, todavía no ha llegado a ninguna resolución final que decida sobre el futuro inmediato de la edificación.<sup>422</sup>

Por otra parte, la idiosincrasia y generalidad de propuestas en torno a formular derechos y más derechos irrenunciables (unas veces en función de la economía, otras por la libre circulación comercial o empresarial, la deslocalización industrial, etc.),

---

<sup>420</sup> Vid. QUINTERO OLIVARES, G. <<La apertura de la legitimación a las organizaciones no gubernamentales, tal como solicita la normativa europea, no puede interpretarse como una declaración de reconocimiento de que se les ha de tener como perjudicados, pues si así fuera tendrían que tener también derecho al resarcimiento, lo cual es absurdo>>. En “Derecho Penal Ambiental”, op. cit., pág. 112.

<sup>421</sup> Vid. PEÑALVER I CABRÉ, A. Voz “ONGs y Protección del Medio Ambiente”. En *Diccionario de Derecho Ambiental*, op. cit., pág. 888.

<sup>422</sup> Vid. Primera Parte, nota 210, donde explicamos el *iter* procesal del caso, todavía inconcluso. En este punto, que coincide cronológicamente con el momento de la redacción de este trabajo, es preciso añadir otra sentencia que parece contradecir lo declarado en una resolución anterior dictada por el mismo órgano, en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el que se declara urbanizable el suelo donde se ubica el hotel. La cuestión ya fue tratada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Granada (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª) en la Sentencia 1951/2012, de 11 de junio, que revocaba la calificación otorgada a la sección de suelo en cuestión por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Usos y Gestión del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, aprobado por Decreto 37/08, de 5 de febrero de 2008. Esto dio lugar a la consideración de suelo no urbanizable según la planimetría que contemplaba el anterior PORN, aprobado por Decreto 418/94, de 25 de octubre de 1994, pero la promotora del hotel interpuso un recurso, lo que ha dado lugar a esta nueva resolución: STSJ Andalucía (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª) núm. 803, de 21 de marzo de 2014 [JUR 2014\91904]. En ella, como demandados, aparecen la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Carboneras y la propia Greenpeace. Pues bien, tras este varapalo judicial, la ONG ha presentado un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en el que se solicita un estudio de la sentencia para aclarar si pueden existir indicios de prevaricación, así como la interposición de un recurso ante el TS. La última resolución del TS desestima el recurso de casación. ATS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª) Auto de 8 enero 2015 [JUR\2015\49116].

deforma de forma peligrosa la lógica del verdadero carácter de la protección ambiental, que sin duda se fundamenta mejor desde la óptica de un determinado principio: “partiendo de mi genuina e individual posición en la Tierra, contribuyo a no generar actitudes atentatorias” (en cualquier grado, con cualquier medio o propósito en el entorno, concebido tanto de forma integral como específica); puede resultar ingenuo, si se quiere vacuo, por sí sólo no expresa nada nuevo, aunque realmente condensa todo el argumento. Supone el contrapeso al otro vértice del principio *if everybody does it* (valedor de las teorías de acumulación), que derivaría en *if no one does it*, postura sobre la que también se detiene la doctrina científica más reciente, para observar cómo los “daños ordinarios”, esto es, los producidos por una pluralidad indeterminada de personas se pueden considerar simbióticamente relacionados con las actividades de grupos más extensos, como las empresas o los Estados. Estos actos cotidianos tienen varias características: son amplia y regularmente llevados a cabo por los individuos, como parte de sus actividades rutinarias; por lo general se consideran aceptables, incluso deseables; y cuando se llevan a cabo colectivamente, tienen un impacto sustancial sobre los problemas ambientales.<sup>423</sup>

---

<sup>423</sup> Así AGNEW, R. Explica el fenómeno aplicando los presupuestos de las principales teorías criminológicas y defiende que la causación de daños ordinarios al medio ambiente se puede estudiar a través de la teoría de la tensión [*Strain Theory*], la teoría del control social [*Social control Theory*], la teoría del aprendizaje social/elección racional [*Social learning / rational choice Theory*], y otros factores como la oportunidad o el autocontrol. “The ordinary acts that contribute to ecocide. A criminological analysis”. En *Routledge International Handbook of Green Criminology*. Nigel South / Avi Brisman (eds.) Ed. Routledge. New York, 2013, págs. 58-72.

### **1.2.2.- Una sucinta muestra sobre la capacidad de participación pública no organizada relacionada con objetivos ambientales**

Matizando este último aspecto acerca del impacto de los actos cotidianos en el medio ambiente, resulta paradójico que la conciencia ambiental ciudadana no haya cristalizado decisivamente en la sociedad, si tenemos en cuenta la profusión de medios de acceso a la información existente en materia medioambiental, representada tanto por las organizaciones analizadas en el epígrafe anterior, como por asociaciones de formato más reducido y enfocadas en asuntos medioambientales de un interés concreto, a las nos referimos en el próximo apartado.

En nuestro país, la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, conforma el derecho a buscar y obtener información que se encuentre en poder de las autoridades públicas (se excluye del concepto a las entidades, órganos o instituciones cuando actúen en el ejercicio de funciones legislativas o judiciales), y el derecho a recibir información ambientalmente relevante por parte de las mismas, que deben reunirla y darle publicidad sin necesidad de que medie una petición previa.<sup>424</sup> Se prevé también una suerte de acción popular, cuya legitimación recae en las personas jurídicas sin ánimo de lucro que acrediten ciertos requisitos de los que se pueda deducir, con las debidas garantías, que poseen un

---

<sup>424</sup> Esta Ley incorpora las Directivas 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, sobre el acceso del público a la información ambiental, y 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente. En el plano internacional, este derecho a la información nace al amparo del Convenio de Aarhus, firmado en Dinamarca el 25 de junio de 1998, en vigor para España desde el 31 de marzo de 2005. *Vid.* ESTEVE PARDO, J. En “Derecho del medio ambiente”, op. cit., págs. 84-87; BETANCOR RODRÍGUEZ, A. *Derecho Ambiental*. Ed. La Ley. Madrid, 2014, págs. 359-371; LOZANO CUTANDA, B. Voz “Información: Acceso y Difusión en Materia Ambiental”. En *Diccionario de Derecho Ambiental*, op. cit., págs. 716-732 / “Análisis general de la Ley 27/2006 de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente”. En *Examen de la nueva Ley de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente*. Blanca Lozano Cutanda / Faustino Gutiérrez-Alviz Conradi (dirs.) Ed. Consejo General del Poder Judicial. Centro de Documentación Judicial. Madrid, 2008, págs. 171-206. En esta misma obra, *vid.* JORDANO FRAGA, J. “Análisis de la Ley 27/2006 en cuanto al acceso a la justicia, en especial el principio de legitimación en los contenciosos ambientales”, págs. 115-140.

compromiso con la protección del medio ambiente (arts. 22 y 23), en clara alusión a los grupos ecologistas.<sup>425</sup>

Al ruido, en la Ley 27/2006, se le concede sustantividad propia, al ser tratado como uno de los factores (junto a sustancias, energía, radiaciones o vertidos) susceptibles de que la información existente al momento de la solicitud se facilite en cualquiera de los formatos en los que esté disponible a cualquier persona física o jurídica, así como sus asociaciones, organizaciones y grupos [art. 23 b)]. A ello se suma la participación pública en la elaboración, modificación y revisión de los planes, programas, y disposiciones de carácter general en relación al medio ambiente [art. 18.1 b): dedicado especialmente a la protección contra el ruido].<sup>426</sup>

Por otra parte, la reciente Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno parece que dispersa, y en cierto modo pervierte esta vía de participación pública, ya que prevé la potestad de limitar el derecho de acceso a la información cuando el acceso suponga un perjuicio para la protección del medio ambiente [art. 14. 1 l)], sin ninguna aclaración específica, frente a la excepción adoptada en la Ley 27/2006, que contempla la denegación de la información solicitada cuando ésta suponga una afectación negativa para la protección del medio ambiente al que se refiera la información y, en particular, la relativa a la localización de especies amenazadas o su lugar de reproducción [art. 13.2 h)]. A la contradicción que supone respecto a la Ley 27/2006 en materia medioambiental, se

---

<sup>425</sup> No le falta razón a ESTEVE PARDO, J., cuando delimita el supuesto alcance de esta transposición de la normativa europea a nuestro derecho interno, pues el art.105 CE y el art. 37 de la Ley 30/92 LRJPAC ya preveían con anterioridad el derecho al acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, de forma general. En “Derecho del medio ambiente”, op. cit., pág. 85. Ahora bien, un rasgo suficientemente benigno como para entender que esta Ley también es innovadora por otras causas es, por ejemplo, la obligación impuesta de manera específica a las autoridades públicas, de elaborar y publicar informes (anuales y cuatrienales) sobre el estado del medio ambiente, de ámbito nacional, autonómico y en su caso local, incluyendo los datos sobre la calidad del mismo, las presiones que sufra, así como sumarios no técnicos, que puedan ser comprendidos por el público (art. 8). También hay que tener en cuenta el grado de participación ciudadana en la elaboración, modificación y revisión de los instrumentos incluidos en el ámbito de aplicación de dicha Ley (planes, programas, disposiciones de carácter general), con una salvedad importante, y es la posibilidad de acceder a esa información que pueda ser relevante con la antelación suficiente a la formulación de propuestas [arts. 3. 2º a) y b)]. Cuestión bien distinta, en la que no es posible profundizar ahora, es conocer de manera fidedigna el grado de implementación en el tejido social y legislativo, y cómo se realiza efectivamente ese derecho de participación pública plena en asuntos ambientales.

<sup>426</sup> La legitimación para ejercer la acción popular en esta lista cerrada de materias en la que se incluye al ruido implica cumplir con determinados requisitos, frente al concepto original de acción pública, que permite la legitimación a cualquier ciudadano, sin necesidad de acreditación de un derecho o interés legítimo. Vid. VEGA JURADO, D. J. “La acción pública en materia de medio ambiente”. En *Intereses colectivos y legitimación activa*. Eloísa Carbonell Porras (dir.) Rafael Cabrera Mercado (coord.) Ed. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2014, págs. 371-384, en especial 381.

añade otra más, relacionada con el silencio administrativo, aquí de carácter negativo, frente a lo establecido por el art. 43 de la LRJPAC, que prevé el sentido positivo del silencio, con carácter general, en los casos de procedimientos iniciados a instancia del interesado.<sup>427</sup>

Asimismo, esta reciente norma modifica el art. 37 de la LRJPAC, cuya nueva redacción restringe el ya tradicional derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos con una remisión a lo contemplado por ésta, así como por las demás leyes que resulten de aplicación.<sup>428</sup> En relación al carácter preferente de la Ley 27/2006, será de aplicación al acceso a la información ambiental y a la destinada a reutilización, en lo no previsto por sus respectivas normas reguladoras.

---

<sup>427</sup> Así, el art.20.4 dictamina que, transcurrido el plazo máximo para resolver -2 meses- sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. *Vid.* RAMOS DE MOLINS, A., que critica esta fórmula por entender que se trata de una medida que ralentiza la efectiva puesta en práctica del derecho de acceso a la información pública en nuestro país. “Artículos 18 a 32”. En *Transparencia y Buen Gobierno. Comentarios a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno*. Elisa de la Nuez Sánchez-Casado / Carlota Tarín Quirós (coords.) Ed. La Ley. Madrid, 2014. págs. 380-432; FERNÁNDEZ RAMOS, S. / PÉREZ MONQUIÓ, J. M<sup>a</sup>. *Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Ley 19/2013, de 9 de diciembre*. Ed. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2014, págs. 237-241.

<sup>428</sup> Disposición final primera. Dos: El art. 37 pasa a tener la siguiente redacción: <<Los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información pública, archivos y registros en los términos y con las condiciones establecidas en la Constitución, en la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y demás leyes que resulten de aplicación>>. Disposición adicional primera 3, en lo que respecta a la supletoriedad de la norma. Un análisis más detallado de la Ley en relación al medio ambiente en IBÁÑEZ GARCÍA, I. “Artículos 12 a 17”. *Transparencia y Buen Gobierno. Comentarios a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno*. Elisa de la Nuez Sánchez-Casado / Carlota Tarín Quirós (coords.) Ed. La Ley. Madrid, 2014, págs. 309-315.

### 1.2.3.- Repercusión de la figura asociativa en el contexto del ruido

Estas formas de protección del medio ambiente, amparadas en mecanismos organizativos y de control fuera del contexto público administrativo y de iniciativas privadas de carácter empresarial o similares, encuentra también acomodo en la protección contra el ruido, a través de múltiples asociaciones y plataformas vecinales localizadas a lo largo de nuestra geografía; alejadas obviamente de las propuestas globalizadoras de las típicas y precursoras ONGs internacionales de aplicación ambiental, en cuanto al modo de gestión y el empleo de fórmulas de marketing que han sabido desarrollar e implantar, pero con el mismo componente de ejercicio de derechos de la ciudadanía. No obstante, también existen entidades que se ocupan del ruido a nivel internacional, así como diferentes iniciativas de carácter divulgativo.<sup>429</sup> Igualmente, casi todos los países de la Europa occidental tienen al menos una base de acción y organización de lucha contra el ruido a nivel nacional, así como un amplio rango de naciones geográficamente externas al continente europeo.<sup>430</sup> En Estados

---

<sup>429</sup> Como la *Noise Pollution Claeringhouse* en Estados Unidos: <http://www.nonoise.org/> Otro ejemplo de campañas de este tipo es la llevada a cabo desde hace más de 15 años con el nombre del Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido, que se celebra con carácter anual el último miércoles del mes de abril. Vid. GONZÁLEZ, A. E. Alude a la asociación internacional *International Consortium on Noise Issues in Emerging and Developing Countries*, que colabora con las partes interesadas para formular y aplicar estrategias efectivas de gestión del ruido ambiental; uno de sus últimos proyectos se lleva a cabo en América del Sur. También realiza un estudio sobre las normativas nacionales de protección contra el ruido en algunos países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Panamá, o Paraguay) y asiáticos (Taiwán y Hong Kong). En “Contaminación Sonora y Derechos Humanos”. *Serie Investigaciones: Derechos Humanos en las Políticas Públicas*, núm. 2. Ed. Defensoría del Vecino de Montevideo. Uruguay, 2012, págs. 145-163.

<sup>430</sup> *Ligue Française contre le Bruit* [Liga Francesa de Lucha contra el Ruido]; *Nederlandse Stichting Geluidshinder* [Fundación Holandesa de Molestias por Ruido]; *British Noise Abatement Society* [Sociedad Británica de Reducción del Ruido]; *Deutscher Arbeitsring für Lärmbekämpfung* [Grupo de Trabajo Alemán para la Reducción del Ruido]. Acerca de la ingente cantidad de este tipo de organizaciones, algunas de las cuales se ocupan de específicas fuentes de ruido, como los aeropuertos, o la música ambiental vid. BIJSTERVELD, K. La mayoría de estos organismos se fundaron entre 1950 y 1970, pero muchos de ellos fueron precursores, ya que se remontan a las primeras décadas del siglo XX. Las organizaciones europeas presentes en la actualidad son por lo general, miembros de la *Association Internationale Contre le Bruit* [Asociación Internacional contra el Ruido], establecida en 1959. Fuera de Europa, también encontramos organizaciones de lucha contra el ruido, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Israel y Argentina. A menudo las ciudades e incluso barrios tienen sus propios grupos anti-ruido, como los existentes en Berlín, Washington y Nueva York (incluyendo el Bronx), por mencionar tan sólo algunos ejemplos. En *Technology, Culture, and Public Problems of Noise in the Twentieth Century*. Ed. Massachusetts Institute of Technology Press. Cambridge (USA) & London (England), 2008, págs. 7 y 8.



Unidos, la más representativa es la creada en 2001 con el nombre *Noise Free America*, que aglutina a 25 Estados.<sup>431</sup>

Generalmente nacen en puntos muy específicos, localizados en aquellas ciudades aquejadas de problemas específicos relacionados con actividades ruidosas de diversa naturaleza, que causan grupos de afectados más o menos numerosos, pero en ningún caso dispersos geográficamente. Se encuadran normalmente en perímetros acotados, ya sea en determinados barrios donde las actividades de ocio nocturnas son numerosas y concentradas, áreas residenciales próximas a aeropuertos, zonas con excesiva concentración y exposición al tráfico rodado, centros históricos, o poblaciones con una acusada incidencia del turismo.<sup>432</sup>

---

<sup>431</sup> También numerosos sitios de Internet que contienen información relevante sobre el ruido y los actuales esfuerzos para restaurar la tranquilidad en varias comunidades de los Estados Unidos, como la llamada *League for the Hard of Hearing*. Más información en: <http://lhh.org/noise/> Vid. GOINES, L. / HAGLER, L. "Noise Pollution: A Modern Plague", op. cit., pág. 287. Vid. GONZÁLEZ, A. E. Asimismo, cita una publicación de 2010 de la organización *Noise Free America* en la que se incide sobre la conexión entre el ruido y un aumento de la delincuencia. En "Contaminación Sonora y Derechos Humanos", op. cit., págs. 144 y 145.

<sup>432</sup> Algunas han adquirido carácter nacional, aglutinando de esta manera las quejas y reclamaciones que provienen de ciudadanos residentes en distintas CCAA, integradas en la Plataforma Estatal de Asociaciones Contra el Ruido y las Actividades Molestas –PEACRAM–. En cualquier caso, es significativo el extenso número; baste citar aquí a modo expositivo algunas de ellas, con la salvedad de que su inclusión no significa que estén en activo de manera continuada; en cualquier caso, lo destacable es que en algún momento han ejercido un papel activo. Así, en Andalucía: Asociación de Vecinos "Manuel de Falla-La Laguna" (Cádiz); Plataforma contra el Ruido y el Deterioro (Puerto de Santa María); Asociación de Vecinos "Sierra de Córdoba", Asociación de Vecinos "Sierra de Córdoba" (Córdoba); Asociación de Vecinos del Bajo Albayzín (Granada); Asociación de Vecinos Poetas de la Hispanidad (Baeza, Jaén); Asociación de Vecinos del Centro Antiguo (Málaga); Asociación de Vecinos Arenal-Torre del Oro (Sevilla). En Ceuta y Melilla: Melilla contra el Ruido (Melilla). En Cataluña: Associació Catalana Contra la Contaminació Acústica (Barcelona); Agrupació de Veïns del barri de Gràcia (Sabadell); Plataforma contra el ruido de CELSA & DEMASAB [Defensa Medio Ambiente Sant Andreu de la Barca] (Sant Andreu de la Barca). En Madrid: Asociación de Vecinos del Barrio de las Letras (Madrid); Asociación Contra el Ruido de Tres Cantos (Tres Cantos). En Murcia: Asociación de Vecinos S. Lorenzo – Universidad (Murcia); Asociación Jumillana de Afectados por el Ruido (Jumilla). En Navarra: Asociación de Vecinos "Casco Viejo"; Asociación de Vecinos "San Jorge" (Pamplona). En la Comunidad Valenciana: Asociación de Vecinos Casco Antiguo-La Cruz, Asociación de Vecinos Barrio de la Zapatería (Alicante); Asociación de Vecinos Barrio San José, Asociación de Vecinos La Amistad, Asociación de vecinos y comerciantes Amigos del Barrio del Carmen (Valencia); Asociación de Vecinos Playa de la Patacona-Vera (Alboraya); Asociación de Vecinos de Cullera Playa (Cullera); Asociación de Vecinos de Montecolorado-La Rascanya (La Pobla de Vallbona). En País Vasco: Asociación para la Defensa de la Calidad de Vida (Bilbao); Asociación de Vecinos del Casco Histórico de Durango-Bizkaia (Durango); Asociación de Vecinos de la Parte Vieja, Red Ciudadana contra el Ruido (San Sebastián). En La Rioja: Logroño Sin Ruidos, Asociación de Vecinos del Casco Antiguo (Logroño). En Galicia: Asociación de Vecinos "el Ensanche", Asociación de Vecinos La Marina, Asociación de Vecinos de La Zapateira (A Coruña); Asociación Sigüeiro Residencial, Compostela sin Ruido (Santiago); Asociación de Vecinos Avda. Ramón Ferreiro y Zona Centro (Lugo); Asociación de vecinos O Tesón (Ribadeo); Asociación de Vecinos Cidade Vella (Pontevedra). En Extremadura: Asociación para la Defensa de la Vida Ciudadana "Puerta Pilar" (Badajoz); Asociación Extremeña de Afectados por el Ruido (Mérida); Asociación Cultural "Vecinos Zona Centro", Asociación de Vecinos "La Madril" (Cáceres); Asociación Vecinal Zona Centro "Las Claras" (Plasencia). En Castilla-La Mancha: Albacete Contra el Ruido (Albacete); Asociación de Vecinos Madrigueras (Madrigueras); Asociación de Vecinos

La actividad que llevan a cabo ha resultado en algunos casos incuestionable en relación a los éxitos jurisprudenciales conseguidos, sobre todo en el ámbito jurisdiccional del TEDH, tal y como hemos analizado en la Primera Parte, epígrafe 4.2.1.

En nuestro país, podemos observar algunas de estas influencias en determinadas redacciones de normativa estatal, autonómica y municipal, ya sea de manera estrictamente acotada a la creación de Leyes Generales<sup>433</sup>, Ordenanzas locales contra el ruido<sup>434</sup>, o bien que de forma tangencial, aun no siendo esta materia su objeto específico, influyen significativamente en los grados y condiciones de emisión de los fenómenos acústicos.<sup>435</sup> A través de sus experiencias, muchas veces experimentadas como auténticos procesos de victimización, proponen medidas que en algunos casos, son tomadas en cuenta por el legislador.

---

del Barrio de Santa Teresa (Toledo). En Cantabria: Federación de Vecinos "Ciudad de Cantabria", Asociación de Vecinos "Pombo, Cañadío, Ensanche" (Santander). En Canarias: Tenerife contra el Ruido (Santa Cruz de Tenerife). En Baleares: Asociación de Vecinos del Puig de Sant Pere (Palma de Mallorca). En Aragón: Asociación de Vecinos "San Lorenzo" (Huesca); Asociación de Vecinos "La Zona" (Teruel); Asociación "Casco Histórico", Asociación de Vecinos "La Huerva" (Zaragoza). En Asturias: Asociación de Vecinos "Antiguo Oviedo" (Oviedo). Por último, en Castilla-León: Asociación de Vecinos "Casco Viejo" (Burgos); León Contra el Ruido y Otras Actividades Molestas, Asociación "León Típico" (León); Federación de Asociaciones para el Respeto Social Urbano (Palencia); Federación de Asociaciones de Salamanca y su provincia (Salamanca); Asociación de Vecinos "Rota de Catalañazor" (Soria); Asociación contra el Ruido Urbano (Valladolid); Asociación de Familias Afectadas por Ruidos en Zamora (Zamora).

<sup>433</sup> En España, la Ley 37/2003, de 17 noviembre, de Ruido, cuyo desarrollo reglamentario se encuentra en los Reales Decretos 1513/2005, de 16 de diciembre, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental, y 1367/2007, de 19 de octubre, en relación a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. Como recoge ALONSO MAS, M. J., es importante destacar que éste último ha sufrido una modificación por el RD 1038/2012, provocada por la STS de 20 de julio de 2010, que declaró ilegal la existencia de áreas acústicas sin objetivos determinados de calidad acústica. "Arts. 25 a 28". En *Comentarios a la Ley Básica de Régimen Local* (3ª ed.) Tomo I. Manuel J. Domingo Zaballos (coord.) Ed. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2013, págs. 410-546, en especial 524. STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª) de 20 de julio de 2010 [RJ 2010\6507].

<sup>434</sup> Recientemente, el Ayuntamiento de Murcia y la Concejalía de Medio Ambiente, aceptando la mayor parte de alegaciones propuestas por la organización ciudadana "No más Ruido", han modificado el borrador de la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones de la ciudad, en la que se lleva trabajando más de 3 años para sustituir a la normativa anterior, en vigor desde 2000. Las novedades más destacables son: la reducción del límite sonoro en el interior de locales de ocio, que pasa de 95 a 90 dB, la obligación de instalar "cajas negras" o dispositivos en los que queda grabado en todo momento el nivel de ruido y la alteración de dB en dichos locales. Esta condición se extiende, no sólo a nuevos establecimientos como expresaba el borrador inicial, sino a todos, con independencia de la fecha de apertura, otorgando el plazo de un año para que se proceda a la instalación. Por último, que se establezca una distancia mínima de 65 metros entre locales, en aquellos barrios que se encuentran dentro de zonas especiales de protección, por el elevado número que albergan. "Ordenanza de protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones". BORM núm. 282 de 9/12/2014, págs. 44769-44852.

<sup>435</sup> Por ejemplo, en materia turística, urbanística, regulación del derecho de manifestación, seguridad ciudadana, normativa paisajística, y un largo etcétera, lo que demuestra una vez más la transversalidad característica del medio ambiente.

No obstante, este influjo no tiene que ser necesariamente siempre de signo positivo para los ciudadanos que sufren perturbaciones a causa del ruido, sino todo lo contrario, pues también los gestores de las ciudades toman en consideración intereses distintos, que provienen generalmente de otras instancias y reclaman su parcela de protagonismo, por ejemplo, determinadas corporaciones profesionales dedicadas a actividades de ocio.<sup>436</sup> Por tanto, unos y otros en mayor o menor medida, pueden verse afectados por las posiciones y medidas adoptadas.<sup>437</sup>

---

<sup>436</sup> Determinados fenómenos lúdico-festivos, como el último episodio ocurrido en 2014 entre los organizadores de la fiesta del “Orgullo Gay” en Madrid, que acusan al Ayuntamiento de favoritismo ideológico en relación a determinadas concentraciones de celebraciones deportivas, por ejemplo, en las que no se limitan las condiciones acústicas como ha ocurrido en las conocidas fiestas de Chueca (dado su carácter reivindicador e internacional). Por otra parte, el alegato de la asociación vecinal de Chueca es que el propio Ayuntamiento, de forma sistemática, ha incumplido su normativa durante los últimos años, debido a que la zona está catalogada como Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE), lo que conlleva la adopción necesaria de ciertos mecanismos diferenciados en cuanto a emisores y emisiones acústicas.

<sup>437</sup> Al respecto, merece la pena reflexionar sobre la medida llevada a cabo en la localidad de Calviá (Mallorca), que pretende regular de forma pionera, la actividad del *Pub Crawling*, fenómeno desencadenado durante la última década. Consiste en proporcionar paquetes de excursiones etílicas para jóvenes (normalmente llegados de otros países en grupos numerosos), que ha experimentado un auge exponencial durante las últimas temporadas turísticas. El objetivo de esta peculiar forma de turismo es llegar a situaciones de intoxicación etílica por parte de los integrantes del grupo, que visitan la mayor cantidad de bares en el menor tiempo posible, con un precio cerrado pactado con anterioridad entre el promotor y los locales nocturnos. Con el fin de legalizar esta práctica, se ha aprobado una Ordenanza que obliga a los promotores a solicitar autorización administrativa y tributar por la actividad, de cara a paliar la desventaja económica que representa para los hosteleros de las zonas de ocio que no participan en su desarrollo. Por otra parte, los efectos negativos de esta propuesta, en lo que aquí interesa, se materializan en un aumento de situaciones ruidosas en espacios públicos, especialmente en periodos nocturnos y estivales, así como en una mayor producción de residuos urbanos, y una degradación visual del entorno urbano, que repercuten de forma nociva en los residentes próximos a estas zonas de ocio. *Ordenança reguladora de l'activitat denominada Pub Crawling*. BOIB núm. 90, 3 de julio de 2014. Fascicle 153 - Sec. I. - Págs. 30421/30424.

### **1.3.- Especial consideración del neo-constitucionalismo biocéntrico en Derecho comparado latinoamericano: Ecuador y Bolivia**

El protagonismo que el medio ambiente ha adquirido en las dos últimas décadas alcanza a textos constitucionales que desde posiciones avanzadas, han prescindido definitivamente de cualquier atisbo de antropocentrismo, con la introducción ilustre de nuevos paradigmas, sin parangón en el contexto internacional.

Una novedosa y precursora teoría se está instaurando en las constituciones de algunos países de Latinoamérica, que capturan como presupuesto distinguido el otorgamiento de derechos que de forma histórica han pertenecido al género humano, ahora proclamados en pos de la Naturaleza considerada globalmente. Con ello se abandona, en primer lugar, su vinculación a la especie humana, esto es, desaparece por completo la necesidad de conexión con las generaciones presentes o futuras. En segundo lugar, el criterio misceláneo de las diversas formas de vida presentes en los ecosistemas, que pasa a concebirse de manera unitaria.<sup>438</sup>

No resulta precipitado sugerir que este nuevo enfoque, procedente tanto de la cosmovisión indígena de los países del Sur, como de la peculiar forma en que en ambos textos constitucionales han adaptado su pertenencia a las respectivas nacionalidades estatales, entronca directamente con los presupuestos de corte holístico y de ética por la naturaleza de origen occidental, que se analizarán en los epígrafes 2.3 y 2.4 de esta Segunda Parte, por cuanto la teoría del valor inherente otorgado a cada componente singular del ecosistema en condiciones de igualdad se vierte, de forma implícita, en sustento de lo expresado en estas normas estatutarias, tanto en el caso ecuatoriano como en el boliviano.<sup>439</sup>

---

<sup>438</sup> Un completo estudio de los textos constitucionales de Ecuador y Bolivia en AA.VV. *Pueblos indígenas, diversidad cultural y justicia ambiental. Un estudio de las nuevas constituciones de Ecuador y Bolivia*. Antoni Pigrau Solé (ed. lit.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2013; VICENTE GÓMEZ, T. En “Economía, democracia y derechos humanos”, op. cit., págs. 45 y 46.

<sup>439</sup> De esta opinión, aunque apuntando la conexión directa que establece Mario Melo con la obra de Stone *vid.*, APARICIO WILHELM, M. “El constitucionalismo de la crisis ecológica. Derechos y naturaleza en las constituciones de Ecuador y Bolivia”. En *Pueblos indígenas, diversidad cultural y justicia ambiental. Un estudio de las nuevas constituciones de Ecuador y Bolivia*. Antoni Pigrau Solé (ed. lit.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2013, págs. 459-524, en especial 497, nota 57.

No obstante, es necesario realizar una puntualización. En Europa, y en general en aquellos países con prevalencia o fuerte arraigo de formas de vida occidental, la preocupación por los derechos de la Naturaleza surge tras una profunda reflexión acerca del posible (en su fase inicial) o constatado (en la actualidad) agotamiento de los recursos naturales; sin embargo, en los dos países aquí citados, proviene de la praxis, esto es, surge primordialmente a consecuencia de la indiscriminada y dilatada utilización de los recursos naturales autóctonos, así como de la espiritualización de sus relaciones con la Naturaleza, de enorme raigambre histórica.<sup>440</sup>

### 1.3.1.- El modelo Ecuatoriano

La Constitución de la República del Ecuador de 2008 es la pionera en introducir, por una parte, un Título de los derechos al buen vivir [*sumak kawsay*] como un régimen de múltiples ramificaciones y, por otra, una serie de secciones agrupadas en torno a un Capítulo dedicado a la biodiversidad y a los recursos naturales verdaderamente reformador, ya que trata variables ambientales de carácter específico que no suelen ser enunciadas de forma tan explícita en la generalidad de textos constitucionales.<sup>441</sup> Entre los preceptos que destacan por su elevado grado biocéntrico cabe mencionar, por una parte, los vinculados a sectores estratégicos del desarrollo como la regulación de la biodiversidad<sup>442</sup>, y por otra, el planteamiento de unos

---

<sup>440</sup> Para entender el proceso en toda su dimensión es imprescindible la obra de Alberto Acosta. Vid. ACOSTA, A. Desde el proceso colonizador de América se fue fraguando un esquema extractivista de exportación de naturaleza desde las colonias, en función de las demandas de acumulación del capital de las metrópolis. En *El Buen Vivir en el camino del post-desarrollo. Una lectura desde la Constitución de Montecristi*. Ed. Fundación Friedrich Ebert, FES-ILDIS. Policy Paper 9. Quito, octubre 2010, págs. 17 y ss. La idea general es que la humanidad no está fuera de la Naturaleza, forma parte de ella. Vid. LOZANO ESCRIBANO, T. Voz “Pueblos Indígenas y Medio Ambiente”. En *Diccionario de Derecho Ambiental*, op. cit., págs. 1011-1024. Así, en los derechos de la Naturaleza, ella es el epicentro, el hombre sólo forma parte de la misma como un mero componente.

<sup>441</sup> El preámbulo de la Constitución del Ecuador, 28 de septiembre de 2008 declara: <<*Decidimos construir; Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay*>>. Anticipa lo que da lugar al desarrollo del Título VII, que a su vez se divide en dos Capítulos. En lo que aquí interesa, se analiza el Capítulo segundo, que lleva por título *Biodiversidad y Recursos Naturales* (arts. 395 y ss.). Acerca del significado de la expresión *sumak kawsay* y lo que comporta, vid. *supra*, nota 396. Una consulta íntegra del texto constitucional en [http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion\\_de\\_bolsillo.pdf](http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf) (último acceso 20/12/2013).

<sup>442</sup> Son numerosos los ejemplos porque el contenido que afecta al medio ambiente es prolijo, además de específicamente diferenciado por materias, en secciones tales como Naturaleza y ambiente, Biodiversidad, Patrimonio natural y ecosistemas, Recursos naturales, Suelo, Agua o Biosfera, Ecología

inusuales términos sobre el derecho a la restauración, que implica que la Naturaleza tiene derecho a una recuperación integral del ecosistema, posición que se aleja claramente del concepto tradicional de reparación.<sup>443</sup> En este punto, necesariamente tenemos que aludir a la gran cantidad de tropelías ambientales que se han producido en este país por parte de determinadas corporaciones, que han encontrado una gran oportunidad de incrementar sus dividendos a través de la fórmula de la deslocalización empresarial en algunos casos, incluso apoyados por la estrecha alianza y tolerancia de sus gobiernos respecto a la deforestación tropical amazónica, por citar tan sólo una de sus muchas derivaciones.<sup>444</sup>

No obstante, la verdadera singularidad y originalidad de la Constitución del Ecuador respecto al texto de Bolivia, promulgado un año más tarde, reside en una rotunda afirmación, sin precedente en Derecho comparado, sobre el reconocimiento de derechos de corte específico otorgados a la Naturaleza. En el texto constitucional se citan determinados aspectos, tales como “mantenimiento y regeneración de ciclos vitales”, “estructura”, “funciones”, “procesos evolutivos”, “restauración”, todos ellos estructurados en torno al respeto integral a la Naturaleza y, por ende, a su protección, que por otra parte puede accionar cualquier ciudadano ante la autoridad pública.

---

urbana y energías alternativas. Art. 15: <<... La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional>>. El art. 12 proclama el derecho humano al agua. Con la inclusión de un régimen de derechos especialmente relativos a las comunidades y pueblos indígenas se incorporan determinados aspectos ambientales muy relevantes, como resultado de la fusión que históricamente ha presidido la relación de estos pueblos con la Naturaleza (extensa regulación en el art. 57). Otro ejemplo es la prohibición del uso de semillas transgénicas: <<Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. Excepcionalmente, y sólo en caso de interés nacional debidamente fundamentado por la Presidencia de la República y aprobado por la Asamblea Nacional, se podrán introducir semillas y cultivos genéticamente modificados... >> (art. 401).

<sup>443</sup> Art. 72: <<La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas>>. Vid., el detallado estudio de APARICIO WILHELM, M. En “El constitucionalismo de la crisis ecológica. Derechos y naturaleza en las constituciones de Ecuador y Bolivia”, op. cit.

<sup>444</sup> Con mayor amplitud, vid. BOEKHOUT VAN SOLINGE, T. “Equatorial deforestation as a harmful practice and a criminological issue”. En *Global Environmental Harm. Criminological Perspectives*. Rob White (ed.) Ed. Willan Publishing. Devon (UK), 2010, págs. 20-36.

La Naturaleza atesora derechos, tantos y de tan extraordinaria semejanza a los que ostenta cualquier persona para beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales.<sup>445</sup> Es decir, la persecución por cada especie de su propio bien o finalidad (siguiendo la controvertida teoría ética de TAYLOR) es lo que permanece latente en la redacción de este articulado sobre materia medioambiental.<sup>446</sup> A ello se suman determinadas alusiones al concepto de *armonía* [correlativamente fundado en la cooperación entre especies], de forma expresa en el Preámbulo, e implícita en el art. 74, donde aparece no como vertiente de obligaciones del ser humano sobre [en pos de] la Naturaleza, sino como un título de derecho sobre la misma, en este caso a obtener rentabilidad y riquezas para la consecución del bien del propio ser humano.<sup>447</sup>

Incluso se prevé literalmente que, en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la Naturaleza (art. 395.4). Sin duda guarda una estrecha relación con el giro experimentado por los presupuestos básicos del principio de precaución en la década de los 90, modificando la relación que asociaba hasta entonces capacidad científica y protección del medio ambiente.<sup>448</sup>

---

<sup>445</sup> Se alude a dichos conceptos normativos en el Título II, Capítulo séptimo, que lleva por título “Derechos de la naturaleza”. Por ejemplo, el tenor del art. 71: <<La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza... >>. O el art. 73: <<El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales>>.

<sup>446</sup> La aproximación indicada entre ambas corrientes es necesario realizarla con prevención, pues tenemos que tener en cuenta las distintas realidades de que las parte cada una de estas concepciones en relación a los derechos de la Naturaleza, como ya ha quedado apuntado al inicio de este epígrafe.

<sup>447</sup> Art. 74: <<Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado>>.

<sup>448</sup> Vid. Acerca de dicha relación, *infra*, nota 557. Constitución de la República del Ecuador, art. 396: << [...] En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas>>.

### 1.3.2.- El modelo Boliviano

La Constitución de la República de Bolivia de 2009 expresa, en términos similares, esta creación de la idea de una Naturaleza poseedora de derechos subjetivos, si bien no de forma tan explícita y vanguardista, sí implícitamente.

Una muestra tácita de dicho carácter aparece en la mención de *otros seres vivos* junto a *individuos y colectividades*, que comparten tanto el derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado, como el derecho a desarrollarse de manera normal y permanente.<sup>449</sup> Por otra parte, la noción del *buen vivir* se traduce en verdaderos principios ético-morales enunciados en el art. 8, como *suma qamaña* (vivir bien), *ñandereko* (vida armoniosa), *teko kavi* (vida buena), *ivi maraei* (tierra sin mal) y *qhapaj ñan* (camino o vida noble) entre otros, que claramente inspiran el resto del articulado, en especial cuando trata los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, que adquieren una serie de derechos de especial relevancia en materia ambiental.<sup>450</sup>

El interés y atractivo ambiental de esta Constitución quizá reside, más que en el grado de regulación de los derechos propios de la Naturaleza, que no alcanza el nivel del texto ecuatoriano, en el sistema de competencia extensiva a materias relacionadas con el medioambiente otorgada a jurisdicciones tanto específicas como especiales, como la jurisdicción indígena o la jurisdicción en materia agroambiental, que se suman a la jurisdicción ordinaria.<sup>451</sup>

---

<sup>449</sup> Especialmente en el art. 33. *Vid.* Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Disponible en: <http://www.ncpe.org.bo/> (último acceso 10/02/2015).

<sup>450</sup> Así, el art. 30 II establece que: <<En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos: 5. A que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado. 6. A la titulación colectiva de tierras y territorios. 10. A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas. 14. Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión. 15. A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan. 16. A la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios. 17. A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros>>.

<sup>451</sup> Art. 179 II: <<La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originaria campesina gozarán de igual jerarquía>>. Los arts. 186, 187, 188 y 189 regulan la composición y atribuciones del Tribunal



El estímulo de esta suerte de jurisdicciones, en especial la agroalimentaria, se recoge en lo que dicta la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien de 2012, como base de un nuevo marco regulador sobre el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección de los derechos de la Tierra y la consecución del objetivo “Vivir Bien”, todo ello a través de políticas de desarrollo global.<sup>452</sup>

Por otra parte, en ambas constituciones se prevé la capacidad de cualquier persona para accionar mecanismos de defensa de la Naturaleza como instrumento de protección jurisdiccional de la misma, con independencia de su calidad de perjudicado / damnificado. En el caso del Ecuador, además se proclama la imprescriptibilidad de las acciones legales de persecución y sanción por daños ambientales (art. 396, *in fine*).<sup>453</sup>

Esta conciencia ambiental de tipología tan característica, sin duda amparada en los dogmas espirituales ancestrales de los pueblos americanos nativos, sobre la profunda unidad entre hombre y Naturaleza, también encuentra presencia en las raíces de otros sistemas de creencias, en civilizaciones que se expresan bajo parámetros culturales, sociales y geográficos ajenos a los referidos; por ejemplo el sintoísmo japonés o el taoísmo chino. Resulta utópico afirmar categóricamente que este planteamiento haya supuesto que la conciencia ambiental occidental, centrada en la supremacía del homocentrismo, ocupe la única o principal responsabilidad en la crisis ambiental a la que nos enfrentamos.<sup>454</sup>

---

Agroambiental. Los arts. 30, 31 y 32 establecen el régimen de derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

<sup>452</sup> Ley 300, de 15 de octubre de 2012. Los antecedentes y el seguimiento de su desarrollo normativo en APARICIO WILHELMI, M. Apunta determinadas previsiones contenidas en la Ley de Derechos de la Madre Tierra (Ley 071, de 21 de diciembre de 2010), como antesala de la posterior regulación por la Ley Marco, en la que se observa la extensión de los principios en el desarrollo de este nuevo modelo constitucional ecológico de carácter integral. Así, por ejemplo, el art.3 nos ofrece la noción de Madre Tierra: <<... es el sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y complementarios, que comparten un destino común>>. En “El constitucionalismo de la crisis ecológica. Derechos y naturaleza en las constituciones de Ecuador y Bolivia”, op. cit., págs. 505-509.

<sup>453</sup> La Constitución de Bolivia habilita a cualquier persona (a título individual o en representación de una colectividad) para ejercitar acciones legales en defensa del Derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la obligación de las instituciones públicas de actuar de oficio (art. 34). Asimismo, permite a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. Por otra parte, se opta por la inversión de la carga de la prueba, que recae sobre el gestor de la actividad o demandado a la hora de probar la inexistencia de daño potencial o real (art. 397.1).

<sup>454</sup> No convence del todo que nuestro estado actual se explique únicamente atendiendo a la idea de la Naturaleza como dominio del hombre que ha marcado la tradición en Occidente, como observa STONE,

Particularmente, la complejidad y los desafíos a los que se enfrenta un verdadero desarrollo objetivo de todos estos enunciados son intensos, pero ello no debe obstaculizar el avance de propuestas que, si bien pueden ser blanco de críticas respecto al escaso potencial de su implantación<sup>455</sup>, lo único cierto es que surgen, al igual que ciertos derechos que hoy consideramos irrenunciables, al hilo de la evolución de determinados ámbitos del Derecho internacional público, así como de la irrupción en las políticas nacionales del fenómeno de la autodeterminación de los pueblos indígenas (éste último aspecto propio de los dos casos aquí trazados).<sup>456</sup> Por el amplio interés en otros muchos aspectos que resultan inabarcables en este trabajo, la materia es merecedora de un profundo estudio.

---

C. D. <<Por un lado, en la medida en que las influencias intelectuales son responsables de nuestro estado actual, uno podría citar tanto a Darwin como la Biblia. Fue el punto de vista de Darwin –en parte a través del prisma de Herber Spencer– el que otorgó aprobación moral a la lucha, conquista y dominación; de hecho, a través de enfatizar el desarrollo humano como producto de casualidades, Darwin también tuvo el efecto –intencionado o no– de reducir la conciencia de la interdependencia mutua en la Naturaleza. Y además, como señala el profesor Murphy, las creencias de los chinos y los americanos nativos [...] no tuvieron mayor efecto que las creencias contrarias en Europa en la producción de un equilibrio entre el hombre y su medio ambiente; afirma que en China, a pesar de la doctrina “tao”, la deforestación despiadada ha sido continua>> [tr. pr.]. En *Should trees have standing? Law, Morality, and the Environment* (3<sup>rd</sup> ed.) Ed. Oxford University Press. New York, 2010, págs. 23-31, en especial 26.

<sup>455</sup> En este sentido, pero destacando la plasticidad práctica para la protección del medio ambiente, en especial en la constitución de Bolivia, *vid.* ZAFFARONI, R. E. *En principio [la consecuencia de que cualquiera puede accionar en defensa de la naturaleza, sin que sea menester invocar, y menos probar, la condición de damnificado, provocará que diferentes personas, según sus simpatías con los entes naturales no humanos, ejerzan acciones en su defensa] [Y lo más importante es que, al reconocerle a la naturaleza el carácter de sujeto de derechos, adquiere ésta la condición de tercero agredido cuando se la ataque ilegítimamente y, por ende, habilita el ejercicio de la legítima defensa en su favor (legítima defensa de terceros)]* “La naturaleza como persona: Pachamama y Gaia”. En *Bolivia. Nueva Constitución Política del Estado. Conceptos elementales para su desarrollo normativo*. Ed. Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. La Paz, 2010, págs. 109-132, en especial 124.

<sup>456</sup> Para entender la contigüidad de los pueblos indígenas con el medio ambiente y su ancestral forma de relacionarse con la naturaleza, *vid.*, BORRÁS PENTINAT, S. La autora trata de *binomio indisoluble* a los pueblos indígenas y la protección ambiental. “Pueblos indígenas y medio ambiente”. En *Pueblos indígenas, diversidad cultural y justicia ambiental. Un estudio de las nuevas constituciones de Ecuador y Bolivia*. Antoni Pigrau Solé (ed. lit.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2013, págs. 111-146. *Vid.* PIGRAU SOLÉ, A. Resalta la importancia del Convenio núm. 169 sobre pueblos indígenas y tribales, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo el 27 de junio de 1989, y otros textos como la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas” de 2007, en relación a la formulación de derechos de los pueblos indígenas que recogen las respectivas constituciones de Ecuador y Bolivia. “Los pueblos indígenas ante el derecho internacional”. En *Pueblos indígenas, diversidad cultural y justicia ambiental. Un estudio de las nuevas constituciones de Ecuador y Bolivia*. Antoni Pigrau Solé (ed. lit.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2013, págs. 61-109.



## II.- SINGULARIDAD DEL BIEN JURÍDICO MEDIO AMBIENTE

### 2.1.- Introducción

Es del todo inútil negar que se está produciendo una nueva orientación ecológica del Derecho, que fija lo que anteriormente ha sido recogido por el mundo de la ética, la filosofía, la ciencia, y la sensibilidad de la sociedad ante situaciones medioambientales que hasta ahora le eran ajenas, que no desconocidas.<sup>457</sup> No obstante, el verdadero obstáculo con el que tropieza el Derecho ambiental globalizado es la estructuración en compartimentos independientes, por los numerosos espacios estatales existentes, que impiden trasladar a una perspectiva jurídica general la dimensión universal que sustenta las leyes de la ecología.<sup>458</sup> La responsabilidad inequívoca y única del ser humano en determinados y porcentualmente elevados deterioros medioambientales, como el fenómeno del cambio climático a causa del calentamiento global atmosférico, ha quedado suficientemente documentada en las conclusiones del V Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU.<sup>459</sup>

---

<sup>457</sup> En este mismo sentido se expresa ESTEVE PARDO, J., quien también observa una decidida postura proclive a otorgar sustantividad propia a la Naturaleza y sus recursos, por ejemplo en determinadas legislaciones sectoriales como la forestal, de aguas, fauna silvestre, en las que particularmente se reconocen derechos a especies o elementos para con ello impedir la plena e indiscriminada disposición sobre los mismos. En “Derecho del medio ambiente”, op. cit., págs. 161 y 162. Por otra parte, los efectos de la contaminación oceánica y sus zonas costeras son evidentes desde hace décadas, y el fenómeno del ruido también está cada vez más presente en las investigaciones científicas sobre fauna y flora marina (ruido antropogénico), aunque la atención se concentra de forma más acusada en procesos de contaminación biológica, química y física. Vid. BARNES, R.S.K. / HUGHES, R. N. *An Introduction to Marine Ecology* (3<sup>rd</sup> ed. reprinted) Ed. Wiley-Blackwell, 2004.

<sup>458</sup> Vid. JUSTE RUIZ, J. / CASTILLO DAUDÍ M. Así, la mayor parte de espacios que constituyen el ecosistema mundial se encuentran supeditados a las respectivas soberanías de los aproximadamente 200 países que lo integran. En “La protección del medio ambiente en el ámbito internacional y en la Unión Europea”, op. cit., pág. 13.

<sup>459</sup> Vid. “Climate Change 2013. The Physical Science Basis”. En *Working Group I Contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Ed. Cambridge University Press. New York, 2013. El informe de más de 1.000 páginas, completado y publicado en 2014, se basa en numerosos análisis científicos que evidencian que el planeta sufre calentamiento, el aumento del nivel del mar se ha acelerado, la velocidad de retirada del hielo marino del Ártico se ha duplicado, el derretimiento de los glaciares y capas de hielo sucede con más rapidez, y los océanos se están acidificando. En relación a la intervención humana, se recoge en muchos de los diferentes apartados existentes la siguiente conclusión: <<It is very likely that anthropogenic influence, particularly greenhouse gases and stratospheric ozone depletion, has led to a detectable observed pattern of

De todo ello no puede desatenderse el Derecho penal, una vez reconocido el hecho de que su defunción es utópica.<sup>460</sup> Una razón añadida es la ampliación que el Derecho penal del medio ambiente viene sufriendo, tanto en su faceta dogmática (profusión de publicaciones científicas y académicas), legislativa (Decisiones Marco, Directivas y Reglamentos europeos, leyes estatales acompañadas de sus desarrollos reglamentarios, leyes autonómicas, ordenanzas locales), jurisprudencial (TEDH, TJUE, jurisdicciones internas), y punitiva (aumento de penas, en algunos casos desproporcionadas al realizar un examen comparativo con otros tipos penales).<sup>461</sup>

Bien puede tratarse de un vano intento de resultar convincente y taxativo, sobre todo si nos atenemos a la plaga de conceptos jurídicos indeterminados que se manejan, o a la accesoriedad administrativa adosada, si bien la plasticidad propia de su desarrollo normativo, hace que sea escaso, o cuanto menos desafortunado en relación a su eficacia desde un punto de vista empírico.<sup>462</sup>

---

*tropospheric warming and a corresponding cooling in the lower stratosphere since 1961>>.* [Es muy probable que la influencia antropogénica, en particular los gases de efecto invernadero y el agotamiento del ozono estratosférico, haya liderado un patrón detectable observado de calentamiento de la troposfera y el correspondiente enfriamiento en la estratosfera inferior desde 1961] [tr. pr.]. Consulta íntegra del documento en [http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5\\_ALL\\_FINAL.pdf](http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_ALL_FINAL.pdf) (último acceso 16/04/2014). Vid. BORRÁS PENTINAT, S. “La responsabilidad soberana para fortalecer la seguridad climática”. En *Retos del Derecho ante las nuevas amenazas*. Susana De Tomás Morales (dir.) Ed. Dykinson. Madrid, 2015, págs. 327-349.

<sup>460</sup> Al respecto vid. GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. “Tendencias del actual Derecho penal”. En *Modernas tendencias en la ciencia del Derecho penal y en la Criminología*. Actas Congreso Internacional Facultad de Derecho de la UNED. Ed. Universidad Nacional de Educación a distancia. Madrid, 2001, págs. 39-59.

<sup>461</sup> La evolución seguida por el Derecho alemán del medio ambiente ha dejado una huella indeleble en nuestro ordenamiento penal. Vid. ESER, A. “La Evolución del derecho penal alemán en las últimas décadas del siglo XX”. En *Libro Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos in memoriam*. Ed. Universidad de Castilla-La Mancha / Universidad de Salamanca. Cuenca, 2001. págs. 263-284. El mismo autor utiliza una curiosa alocución para referirse a la protección contra el ruido, a la que denomina “la calma”. En “Derecho ecológico”. En *Revista de Derecho Público*. Vol. 11, núm. 100-101, 1985, págs. 603-652, en especial 606.

<sup>462</sup> En relación al controvertido concepto de “naturaleza humana”, y más concretamente sobre el saber universal y sus limitaciones o herramientas represivas, el famoso debate entre Chomsky y Foucault a principios de la década de los 70, en el que Foucault expone la permeabilidad que adquiere la reescritura de determinados postulados científicos, como por ejemplo la clasificación de animales y plantas es un claro exponente: <<¿Cuántas veces se las rescribió desde la Edad Media de acuerdo con reglas completamente distintas? Según el simbolismo, la historia natural, la anatomía comparada, la teoría de la evolución. Cada reescritura hace que el conocimiento sea completamente distinto en sus funciones, en su economía, en sus relaciones internas. Tenemos allí un principio de divergencia, mucho más que uno de desarrollo. Yo diría más bien que hay muchos modos distintos de posibilitar en forma simultánea pocos tipos de saber. Por lo tanto, desde cierto punto de vista, siempre hay un exceso de información en relación con los sistemas posibles en un período dado. Esto hace que se los experimente dentro de sus límites, incluso en su deficiencia, lo que implica que seamos incapaces de reconocer su creatividad; y, desde otro punto de vista, el del historiador, hay un exceso, una proliferación de sistemas para una cantidad reducida de información, de donde surge la idea extendida de que el descubrimiento de hechos nuevos es el que determina el movimiento en la historia de la ciencia>>. Vid. CHOMSKY, NOAM /

El resultado es pobre en argumentos de *lege lata* así como de *lege ferenda*, al menos desde la eventual sanción penal hacia las conductas individuales que contribuyen al fenómeno del cambio climático.<sup>463</sup>

Por tanto, es obvio que si no partimos de condiciones igualitarias en torno a todos los fenómenos ambientales, los niveles de protección de la Naturaleza tampoco se pueden desarrollar por cauces y principios comunes, puesto que la mayoría de países asentados en posiciones ventajosas no desean encontrarse desfavorecidos por variaciones en cuanto a la “política común” aceptada.<sup>464</sup> Este aspecto refleja el profundo grado de discriminación existente en la normativa ecológica, denunciada con insistencia por los estudiosos de la *green criminology*.<sup>465</sup> No obstante, resulta apropiado y necesario destacar que el fenómeno del ruido no se encuentra presente en los diversos escenarios dogmáticos que ocupan a los especialistas de este arquetipo criminológico, como tendremos ocasión de mostrar en próximos apartados.

---

FOUCAULT, MICHAEL. En *The Chomsky-Foucault debate: On human nature*. Ed. The New Press. New York, 2006, pág. 26.

<sup>463</sup> En este sentido, GÓMEZ LANZ, J. Alude a la falta de idoneidad del sistema climático como objeto de protección penal, pues la exigencia contenida en la tipificación del delito ecológico en España (riesgo de perjuicio grave), y su caracterización como tipo de peligro hipotético favorecen <<... la impunidad de los incumplimientos individuales de las normas de conducta previstas en la Ley 1/2005, Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero- dada su incapacidad material (ni siquiera en el caso de las infracciones más graves) para revestir el grado de aptitud lesiva para el equilibrio de los sistemas naturales requerido por el art. 325 CP>>. “Liberalismo jurídico-penal y punición de los ataques al sistema climático: la razonable impunidad de los ataques al sistema climático en el contexto de un derecho penal liberal”. En *Diario La Ley*, Nº 8498, Sección Tribuna, 11 de Marzo de 2015. Ed. La Ley. Madrid, 2015, págs. 1-22.

<sup>464</sup> Por ejemplo, respecto a las desiguales consecuencias del cambio climático surge una emergente doctrina en el ámbito del Derecho internacional, nacida al albur de la ONU y con un perfil jurídico en desarrollo a través de documentos e informes sucesivos, cuyas principales señas de identidad son prevenir, reaccionar y reconstruir. Si bien este principio se convierte en norma obligatoria a partir del Documento Final de la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York en 2005, con atención exclusiva dirigida hacia situaciones de genocidio, crímenes de guerra, depuración étnica y crímenes de lesa humanidad, actualmente se plantea la necesidad de extender dicho compromiso al ámbito de la seguridad climática que incumbe a los principales emisores de gases de efecto invernadero, en una suerte de responsabilidad compartida y asumida por el conjunto de Estados del mundo, que operaría también en los casos en que exista la necesidad de defender a la población de aquellos países incapaces de otorgar la debida protección a sus ciudadanos, cuando soportan situaciones derivadas del cambio climático. Es la llamada doctrina R2P (*Responsibility to Protect*). Al respecto, *vid.* BORRÁS PENTINAT, S. Sugiere que la posibilidad de aplicar esta doctrina a los efectos de los desastres climáticos parte de una idea de soberanía tradicional, pero entendida como responsabilidad, cuya consecuencia sería que los Estados afectados por un desastre natural concedan a terceros Estados el derecho a tener acceso a su territorio para prestar la asistencia humanitaria necesaria cuando el Estado receptor no pueda cumplir con dicha tarea de atención a sus víctimas. En “La responsabilidad soberana para fortalecer la seguridad climática”, *op. cit.*, págs. 333 y ss.

<sup>465</sup> *Vid.*, la postura de NIETO MARTÍN, A. Vincula los atentados contra el medio ambiente cometidos por empresas multinacionales, con la violación de derechos humanos, por presentar ambos estructuras semejantes. Sin embargo, aunque los segundos determinaron la creación de la Corte Penal Internacional, los primeros no tuvieron cabida en el Estatuto de Roma. En “Bases para un futuro derecho penal internacional del medio ambiente”, *op. cit.*, págs. 139 y ss.

## 2.2.- Interpretaciones de la justificación del objeto de protección: ¿principios o bien jurídico protegido?

Lo que tratamos de exponer no pretende rebatir ni mucho menos la teoría del bien jurídico como función prioritaria del orden penal, la protección de tales bienes.<sup>466</sup> Sin embargo, frente a la teoría del bien jurídico defendida por la doctrina alemana, en el mundo jurídico angloamericano se suele acudir al principio del daño *-harm principle-* como núcleo central de legitimación de las normas penales, junto al efecto ofensivo inherente a determinadas conductas para los demás *-offence to others-*, así como a las formas de legislación paternalista *-legal paternalism-*.<sup>467</sup>

El debate, lejos de agotarse, se centra en dilucidar si la teoría del bien jurídico basta y sobra para legitimar todas y cada una de las actuaciones del Derecho penal, o bien es posible acudir a una hipótesis de justificación basada en principios.<sup>468</sup> Así, como veremos, las diversas interpretaciones soportan un peso específico muy profundo entre la materia medioambiental y las heterogéneas conexiones que mantiene con el Derecho penal.

---

<sup>466</sup> Desde las primeras aportaciones del concepto de bien jurídico de Binding y Von Listz, pasando por las formulaciones posteriores *vid.* por todos, GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. En “Introducción al Derecho penal. Instituciones, fundamentos y tendencias del Derecho Penal” Vol. I, op. cit., págs. 175 y ss.

<sup>467</sup> Cuyo primer postulante fue el filósofo John Stuart Mill en su ensayo *On Liberty*, que vio la luz en 1859. Su concepción del principio era que no pueden castigarse las conductas lesivas para uno mismo, ni siquiera las que se basan en un proceder inmoral. Posteriormente fue el filósofo americano Joel Feinberg el que desarrolló dicho principio, en la década de los ochenta del s.XX. Así lo refleja VON HIRSCH, A. “El concepto de bien jurídico y el principio del daño”. Rafael Alcácer Guirao (tr.) En *La Teoría del bien jurídico, ¿Fundamento de legitimación del Derecho penal o juego de abalorios dogmático?* Roland Hefendehl (ed.) Ed. Marcial Pons. Madrid, 2007, págs. 37-52. Al mismo autor alude LORCA MARTÍN DE VILLODRES, M<sup>a</sup> I., en relación a las reglas de justicia y los derechos reconocidos en sociedad, que contribuyen al mantenimiento de la dignidad humana porque ésta forma parte de la realización de la felicidad del hombre. En “Felicidad y Constitucionalismo”, op. cit., pág. 309.

<sup>468</sup> Así, VON HIRSCH, A. En sus conclusiones, el autor afirma que utilizando tan sólo el bien jurídico no se puede construir una teoría adecuada de la criminalización. Por ejemplo, en la protección de los recursos naturales, los límites del *harm principle* y de la teoría del bien jurídico resultan sobrepasados: aunque se pudiera afirmar la existencia de un deber moral sobre la protección de la diversidad ecológica, no convence declarar que ese deber emane de una pretensión de la especie amenazada o de sus miembros. En “El concepto de bien jurídico y el principio del daño”, op. cit. *Vid.* ROXIN, C. Este concepto, es decir, limitar la sanción penal a aquellas conductas que generen un daño, desarrollado por el Derecho penal anglo-americano, está próximo al principio de protección de los bienes jurídicos. “El concepto de bien jurídico como instrumento de crítica legislativa sometido a examen”. Manuel Cancio Meliá (tr.) En *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, núm. 15-01, 2013, págs. 1-27, en especial 3. Disponible en: <http://criminnet.ugr.es/recpc/15/recpc15-01.pdf> (último acceso 12/07/2015).

Se decanta por una formulación inversa a la tradicional del bien jurídico, SEHER.<sup>469</sup> Formula su estudio en base a la virtualidad potencial del principio del *harm principle* junto a los otros dos concernientes al contexto anglosajón para legitimar las normas penales que protegen bienes colectivos o universales (entre los que se incluye el medio ambiente). Propone una investigación que dirija sus objetivos a despejar las posibilidades que tienen los principios para legitimar esas normas, si bien atiende al hecho de que el asunto requiere una revisión del concepto de bien jurídico tradicional. Porque si partimos de la idea de que un bien jurídico es *algo determinado*, la protección a la que aspire debería establecerse en función de ese *algo*, pero si se procede a la inversa, es decir, si se confirma que un hecho determinado (un interés, un recurso, un valor), a partir de principios éticos de carácter crítico merece protección penal, el punto final del argumento es que esa realidad constituye un bien jurídico. Desde esta óptica, el bien jurídico sería el producto de esos principios, y no un instrumento de legitimación de normas.<sup>470</sup>

La escasa capacidad que posee la noción de bien jurídico protegido en los delitos que nos ocupan: “medio ambiente”, “equilibrio ecológico” etc. a la hora de interpretar los distintos tipos penales que afectan a la materia, es objeto de análisis desde hace tiempo; a pesar de que el legislador ha introducido en las sucesivas reformas penales diversos elementos normativos, lo cierto es que el bien jurídico medio ambiente como tal, continúa siendo uno de los menos precisos del ordenamiento penal.<sup>471</sup>

---

<sup>469</sup> Vid., SEHER, G. “La legitimación de normas penales basada en principios y el concepto de bien jurídico”. Rafael Alcácer Guirao (tr.) En *La Teoría del bien jurídico, ¿Fundamento de legitimación del Derecho penal o juego de abalorios dogmático?*, op. cit., págs. 69-92. Con ello no se pretende incorporar dichos principios de manera acrítica, sino utilizar las posibilidades de argumentación que se manejan en sus estructuras.

<sup>470</sup> Así, SEHER, G. <<Ello no le priva de valor, lo que hace es precisar sus contornos [...] Con ello, el concepto de bien jurídico viene a expresar el estatus jurídico-penal cualificado que obtienen determinadas realidades. Y al mismo tiempo mantiene su contenido crítico, en tanto se conforma en torno a principios críticos asentados>>. En “La legitimación de normas penales basada en principios y el concepto de bien jurídico”, op. cit., págs. 91 y 92.

<sup>471</sup> Esta cuestión es determinante si se advierte que el tipo básico (tanto en la antigua redacción de 1995 como en la actual) tiene una composición básicamente normativista, de forma que resulta casi imposible estudiar el alcance de sus elementos descriptivos, en opinión de SILVA SÁNCHEZ, J. M<sup>a</sup>. En “Delitos contra el medio ambiente”, op. cit., págs. 17 y 18. En este sentido, pero acentuando la inseguridad que genera la indeterminación jurídica del articulado sobre medio ambiente en nuestro Código Penal, vid. RODRÍGUEZ RAMOS, L. “Los riesgos de lo abstracto en el Derecho penal (el delito de contaminación ambiental como ejemplo)”. En *Actualidad Jurídica*. Año XIII, núm. 574. Ed. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2003, págs. 1-6, en especial 5.



Con razón, HEFENDEHL defiende que los interrogantes sobre la legitimación de los bienes jurídicos colectivos son resolubles si somos capaces de materializar lo más selectivamente posible la determinación del bien *en niveles de abstracción lo más inferiores posible*, y así distinguir verdaderamente entre el bien jurídico y el objeto de la acción, que no debe confundirse ni simularse mediante la referencia a los delitos de peligro abstracto.<sup>472</sup> Otra de sus propuestas es la exclusión de bienes jurídicos colectivos, que él considera superficiales o aparentes, aplicando la solución de reconducirlos a bienes jurídicos individuales de protección anticipada, como los delitos de insolvencia, o de falsificación de moneda y documentos. Sin embargo, al abordar el punto sobre la jerarquía que rige entre bienes jurídicos colectivos que merecen serlo y aquellos otros que no, el autor acude a una teoría valorativa; propone que los bienes inferiores sean los que sirvan de sustento y fundamento a los superiores, por ser los primeros más fuertes y por ello, merecedores de mayor protección jurídico-penal. A diferencia de los bienes jurídicos que protegen las condiciones marco del Estado, o la confianza socialmente relevante, o la seguridad del tráfico, el medio ambiente posee un carácter limitado, debido a su capacidad de extinción por el consumo y a la imposible reproducción intencionada de sus elementos.<sup>473</sup>

No obstante, para ROXIN esta indeterminación no anula la adhesión de la teoría del bien jurídico protegido a los bienes jurídicos universales o colectivos. Éstos necesariamente poseen un carácter abstracto, ya que el escaso rendimiento en la función limitadora del Derecho penal se ve refrendado, en cierta medida, por el principio de subsidiariedad, como complemento indispensable; así, la verdadera tarea del Derecho penal se traduce en la *protección subsidiaria de bienes jurídicos*.<sup>474</sup> Para

---

<sup>472</sup> Vid. HEFENDEHL, R. La correcta interpretación de un tipo depende de que el bien jurídico se haya elaborado con precisión y en un grado bajo de abstracción, citando a Tiedemann y Krause, lo que es perfectamente trasladable al ámbito de los bienes jurídicos colectivos, en cuanto que la verdadera abstracción se debe dar en relación al titular del bien (supraindividual / colectivo), y no respecto a su nominación y contenido, donde debe imperar la postura contraria. “El bien jurídico como eje material de la norma penal”. María Martín Lorenzo (tr.) En *La Teoría del bien jurídico, ¿Fundamento de legitimación del Derecho penal o juego de abalorios dogmático?*, op. cit., págs. 179-196, en especial 188, nota 47. En el mismo sentido, MIR PUIG, S. Entiende que un Derecho penal protector de bienes jurídicos no tutela valores, sino realidades concretas, de ahí la necesaria distinción entre bien jurídico y objeto material. *Derecho Penal. Parte General*, op. cit., pág. 168; GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. En “Introducción al Derecho penal. Instituciones, fundamentos y tendencias del Derecho Penal” Vol. I, op. cit., pág. 174.

<sup>473</sup> Vid. HEFENDEHL, R. En “El bien jurídico como eje material de la norma penal”, op. cit., págs. 187, 190 y 191.

<sup>474</sup> Así, ROXIN, C. <<Lo cierto es, sin embargo, que la afectación a un bien jurídico no presupone necesariamente la lesión de derechos subjetivos, como muestran, por ejemplo, los delitos contra el medio ambiente>>. En “El concepto de bien jurídico como instrumento de crítica legislativa sometido a

él, los bienes jurídicos no son una entelequia, un ideal a perseguir, sino que contienen un objeto delimitado, aunque materialmente no sea real, que es legítimamente protegible por la función social del Derecho penal.<sup>475</sup>

Nadie duda de que el medio ambiente siempre ha existido materialmente, que no se trata de un bien jurídico creado para amparar los espacios de riesgos a que ha dado lugar una nueva sociedad compleja, sino que se ha ido expandiendo porque la humanidad, de forma paulatina, ha adquirido conciencia sobre la reducción y la escasez de los bienes colectivos en los que se funda, lo que ha generado una sensación de inseguridad porque, como apunta SILVA SÁNCHEZ, muchas de las amenazas que vive la sociedad actual se originan por las actuaciones que se adoptan en el marco de los avances tecnológicos, impulsados, refrendados y esperados por los propios individuos.<sup>476</sup> No se trata necesariamente de las acciones en el sector productivo, industrial, económico en suma, porque la simple actuación a nivel personal puede producir el mismo resultado, debido al carácter cumulativo que posee la degradación ecológica. Es lo que se conoce con el famoso aforismo “si todo el mundo lo hiciera” -*if everybody does it*-, pero si nos detenemos en esta idea, resulta que incriminar de forma adelantada la creación del riesgo sin sentar otras bases de actuación en torno a la voluntariedad y la consciencia en todos y cada uno de los individuos, no ha sido la panacea, circunstancia que especialmente en la materia que nos ocupa, resulta de fácil comprobación.

---

examen”, op. cit., págs. 14 y 19. Por su parte, BUSTOS RAMÍREZ, J., ofrece la siguiente definición de bienes jurídicos colectivos: <<relación social basada en la satisfacción de necesidades de cada uno de los miembros de la sociedad o de un colectivo y en conformidad al funcionamiento del sistema social>>. “Los bienes jurídicos colectivos. (Repercusiones de la labor legislativa de Jiménez de Asúa en el Código Penal de 1932)”. En *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Estudios de Derecho Penal en homenaje al profesor Luis Jiménez de Asúa*. Monográfico 11. Ed. Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho. Madrid, junio 1986, págs. 147-164, en especial 159.

<sup>475</sup> Vid. ROXIN, C. <<Los bienes jurídicos no tienen por qué tener realidad material. La disponibilidad sobre las cosas que garantiza la propiedad o la libertad de actuación que protege la prohibición de las coacciones no son objetos físicos, pero sin embargo son parte de la realidad empírica. También son bienes jurídicos los derechos humanos y los derechos fundamentales [...] Tal concepto de bien jurídico no puede limitarse a bienes jurídicos individuales, sino que incluye bienes jurídicos de la comunidad>>. No obstante, a continuación aclara que sólo son legítimos si, en última instancia, sirven al individuo, aceptando que su propuesta se decanta por un concepto “personal” del bien jurídico como el elaborado hace más de tres décadas. “¿Es la protección de bienes jurídicos una finalidad del Derecho penal?”. Íñigo Ortiz de Urbina Gimeno (tr.) En *La Teoría del bien jurídico, ¿Fundamento de legitimación del Derecho penal o juego de abalorios dogmático?*, op. cit., págs. 443-458, en especial 447 y ss.

<sup>476</sup> Realiza un estudio detallado de estos fenómenos SILVA SÁNCHEZ, J.M<sup>a</sup>, que se refiere a la institucionalización de la inseguridad como resultado de la sociedad postindustrial –*sociedad del riesgo*– El autor alude a la pionera obra de Ulrich Beck, quien acuñó el término para referirse a una sociedad en la que los riesgos se traducen en daños no delimitables, globales y, con frecuencia irreparables, que afectan a todos y que surgen de decisiones humanas. En “La expansión del Derecho penal. Aspectos de la Política criminal en las sociedades postindustriales”, op. cit., págs. 11 y ss.

La postura más defendida desde que aparecieron los delitos medioambientales es la que aporta un modelo antropocéntrico, desde luego no en fase de abandono, pero sí matizada por enfoques ecocéntricos que se han puesto de relieve a lo largo del periplo en su desarrollo normativo.<sup>477</sup> Un modelo de esta tendencia es la técnica utilizada para su regulación desde 1995, en la que se aprecia que si bien la mayor gravedad y, en consecuencia, mayor pena, continúa asociada a la salud y la vida de las personas, no se desdeña el valor que por sí mismo, de forma autónoma, entraña el ecosistema en sus diferentes manifestaciones, ya que ambos aspectos conforman el tipo básico.<sup>478</sup> Así, ambos modelos, antropocéntrico y ecocéntrico en términos absolutos, dejan paso a posturas de corte moderado, con independencia de la concepción más o menos extensiva de sus elementos.<sup>479</sup>

Quienes no aceptan la viabilidad del enfoque puramente ecocéntrico, se basan en que al ser el medio ambiente algo tan amplio como difícil de concentrar, la consecuencia ideológica sería que *-todo es medio ambiente-*, y esto desembocaría en que las normas penales se multiplicarían hasta llegar a abarcar todos los tipos penales.<sup>480</sup>

Pero lo cierto es que el eclecticismo se plasma en el texto del art. 325 CP, que recoge ambas visiones. El legislador español, en consonancia con el Derecho comparado, no ha obviado la concepción de medio ambiente como fin en sí mismo, sin necesidad de vincularlo de manera unitaria y excluyente a la persona, ni siquiera a otras especies vegetales y animales (flora y fauna), puesto que carecen de derechos

---

<sup>477</sup> Vid., JORGE BARREIRO, A. “El bien jurídico protegido en los delitos contra el medio ambiente en el CP de 1995”. En *Estudios sobre la protección penal del medio ambiente en el ordenamiento jurídico español*. Ed. Comares. Granada, 2005, págs. 39-46.

<sup>478</sup> El art. 325 del Código Penal, en su inciso final menciona exactamente eso, que se agravará la pena cuando el peligro afecte a los seres humanos, pero en todo caso el núcleo de la conducta permanece inalterable, por lo que no se puede sostener que esta referencia constituya ninguna novedad para el tipo básico. De esta opinión, QUINTERO OLIVARES, G. En “Derecho Penal Ambiental”, op. cit., pág. 129.

<sup>479</sup> Así, LORENZETTI, R. L. Menciona, a partir de la definición de paradigma ambiental, de corte “valorista”, que el ambientalismo introdujo nuevos valores que han ido ingresando en textos constitucionales y supranacionales, y que cumplen la función de límite material para la legislación. Además, el ambiente es un macro-bien, y como tal es un sistema, significa que es más que sus partes: es la interacción de todas ellas, aportando como ejemplos la Ley brasileña (6938/81, art.3, I), y la Ley General del Ambiente argentina (25.675, art.27), que establece: <<*se define el daño ambiental como toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos*>>. En “Teoría del Derecho ambiental”, op. cit., págs. 12 y ss.

<sup>480</sup> Por ejemplo SESSANO GOENAGA, J. C. “La protección penal del medio ambiente. Peculiaridades de su tratamiento jurídico”. En *Revista electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, núm. 4, 2002, pág. 19. Disponible en: [http://criminnet.ugr.es/recpc/recpc\\_04-11.pdf](http://criminnet.ugr.es/recpc/recpc_04-11.pdf) (último acceso 12/07/2015).

subjetivos, condición que parece aceptada de forma unánime. Además, si lo asociamos exclusivamente a la persona, individuo físico que vive en un determinado periodo de tiempo, o sujetos que llegarán a ser, es decir, las futuras generaciones, resulta que éstas todavía no están dotadas de personalidad, y por tanto, también carecen de derechos subjetivos, por lo que las dos direcciones nos llevan al mismo punto. Sea como fuere, la consecuencia es que existe una marcada tendencia a la transformación del accidente puro o la desgracia hacia el injusto, lo que deviene por fuerza en una ampliación de los tipos de riesgo en los Códigos Penales de nuestro entorno, amparados por la constitucionalización de bienes jurídicos merecedores de protección.<sup>481</sup>

Uno de los inconvenientes de la categoría del bien jurídico según la óptica criminológica, es la influencia ejercida tanto en la marginación de la víctima individualizada, como en una concepción acusada de la pena a modo de mecanismo de resultado de las exigencias punitivas del Estado, es decir, en el proceso de “neutralización de la víctima”, favorecido por la aparición de nuevos intereses colectivos e incluso universales como en el caso del medioambiente, que agotan el protagonismo que suscitaba la persona individual, portadora y titular de intereses jurídicamente relevantes.<sup>482</sup>

La Escuela de Frankfurt, encabezada por HASSEMER, afirma que debido a la proliferación de nuevos tipos penales en el moderno Derecho penal (protección de bienes jurídicos universales de alta imprecisión y peligro abstracto), el concepto mismo de bien jurídico se diluye por completo.<sup>483</sup> El mismo autor sigue defendiendo que por razones político-criminales, se utilizan bienes jurídicos vagos y generalizadores, dañándose por consiguiente su concepto tradicional, si bien no pone en duda su

---

<sup>481</sup> Vid. SILVA SÁNCHEZ, J.M<sup>a</sup>. En “La expansión del Derecho penal. Aspectos de la Política criminal en las sociedades postindustriales”, op. cit., págs. 38 y 39.

<sup>482</sup> En este sentido, GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. Pese a ello, considera que la categoría del bien jurídico debe estimarse positiva desde un punto de vista político-criminal y dogmático. En “Introducción al Derecho penal. Instituciones, fundamentos y tendencias del Derecho Penal” Vol. I, op. cit., pág. 175. Al bien jurídico medio ambiente como <<esencial para la humanidad>> se refiere también MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C. En *Derecho penal económico y de la empresa. Parte especial*. (2<sup>a</sup> ed.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2005, págs. 820 y ss.

<sup>483</sup> Vid. ESCAJEDO SAN EPIFANIO, L. *El medio ambiente en la crisis del Estado social. Su protección penal simbólica*. Ed. Comares. Granada, 2006, págs. 148 y ss.; BUSTOS RAMÍREZ, J. Plantea una revisión del concepto de bien jurídico para llegar a una consideración material del mismo, dotándolo de contenido, pues si sólo atendemos a lo formal, se produce una confusión con los derechos subjetivos, y con ello se retoma el criterio subjetivo de corte individualista del bien jurídico. En “Los bienes jurídicos colectivos. (Repercusiones de la labor legislativa de Jiménez de Asúa en el Código Penal de 1932)”, op. cit., pág. 155.

existencia e importancia para la dogmática.<sup>484</sup> Precisamente por ello, sin negar ni ignorar el deterioro ecológico global, se decanta por la exclusión de los distintos tipos penales que lo abordan, desgajándolos del núcleo del Derecho penal para incluirlos en una especie de “Derecho de intervención” (en paralelismo al Derecho de policía de FEUERBACH); porque no los puede incluir en su concepto personalista del bien jurídico, basado en el daño individual.<sup>485</sup> En sintonía con parte de estos postulados, SCHÜNEMANN cree que la idea de protección de bienes jurídicos es útil no sólo como instrumento crítico o limitador, sino para legitimar tipos penales polémicos, como ocurre en el caso de los delitos contra el medio ambiente, y con esta postura rechaza lo que sugieren tanto los autores de la Escuela de Frankfurt, como STRATENWERTH.<sup>486</sup>

STRATENWERTH, por su parte, se inclina por la idea de que el concepto de bien jurídico colectivo es prescindible y lo razona de la siguiente manera: como la ley protege los intereses individuales más o menos consolidados de una pluralidad de sujetos, ya sea en número indeterminado o abarcando a todos ellos, no tiene sentido

---

<sup>484</sup> Vid. HASSEMER, W. Manifiesta que también los bienes jurídicos universales son bienes jurídico-penales, pero sin embargo deben funcionalizarse partiendo de la persona y, a partir de su relación con el Derecho constitucional, concluye: -Una amenaza penal que no se pueda reconducir a un bien jurídico sería terror de Estado; -La necesidad de un bien jurídico penal como legitimador de una conminación penal no se puede poner en duda, pero resulta necesario saber cómo y en qué medida; -La noción de bien jurídico se debe adecuar a la realidad, esto exige una integración inteligente en el sistema de bienes jurídicos de las condiciones de vida de la moderna socialización, sobre todo de intereses universales; -El concepto de bien jurídico debería ser nítido y selectivo, por lo que exige diferenciaciones precisas de los objetos y denominaciones cercanas a los hechos; -Y debería ser fácilmente comprensible; esto prohíbe generalizaciones nebulosas, que impidan a todos hacerse una idea. “¿Puede haber delitos que no afecten a un bien jurídico penal?”. Beatriz Spínola Tártalo (tr.) En *La teoría del bien jurídico. ¿Fundamento de legitimación del Derecho penal o juego de abalorios dogmático?*, op. cit., págs. 95-104. En relación a la propuesta de creación de un Derecho de intervención para resolver esta nueva tipología de problemas sociales, vid. CORCOY BIDASOLO, M. Muestra su desconfianza, entre otras razones, por la pérdida de garantías, y el único mérito que le presupone es una menor intromisión en la esfera personal de los autores de este tipo de ilícitos, ya que evitaría la imposición de sanciones penales. En *Delitos de peligro y protección de bienes jurídico-penales supraindividuales. Nuevas formas de delincuencia y reinterpretación de tipos penales clásicos*. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 1999, pág. 188.

<sup>485</sup> Alude al ejemplo SEHER, G. Para el autor, el problema es semántico: el debate gira en torno al concepto de bien jurídico, pero realmente se trata de divergencias de contenido acerca de cuál deba ser el alcance legítimo del Derecho penal. La pretensión de que diferencias de contenido tan acusadas sean abarcadas por un mismo y único concepto está condenada al fracaso. “La legitimación de normas penales basada en principios y el concepto de bien jurídico”, op. cit., pág. 77. Vid., la crítica contra los principales postulados de los autores de Frankfurt de FEIJÓO SÁNCHEZ, B. “Sobre la administrativización del derecho penal en la sociedad del riesgo”. En *Derecho y Justicia Penal en el siglo XXI. Liber Amicorum en homenaje al profesor Antonio González-Cuellar García*. Julio Díaz-Maroto y Villarejo (ed.) Ed. Colex. Madrid, 2006, págs. 137-176.

<sup>486</sup> Vid. SCHÜNEMANN, B. “El principio de protección de bienes jurídicos como punto de fuga de los límites constitucionales de los tipos penales y de su interpretación”. María Martín Lorenzo / Mirja Feldmann (trs.) En *La Teoría del bien jurídico, ¿Fundamento de legitimación del Derecho penal o juego de abalorios dogmático?*, op. cit., págs. 197-226, en especial 224 y 225.

crear ningún bien jurídico universal para justificar la norma penal y además, si una decisión normativa se toma porque atañe a toda la colectividad, la discusión sobre las razones a favor o en contra de esa decisión se debería encuadrar sin el gravamen del dogma del bien jurídico.<sup>487</sup>

VON HIRSCH y WOHLERS proponen una legitimación para las nuevas materias penales independiente y desvinculada del bien jurídico, dado que en el marco de los delitos de peligro abstracto resulta que la lesión a un bien jurídico no es un requisito típico.<sup>488</sup>

Otra conocida teoría, la posición normativista de JAKOBS<sup>489</sup> y su concepción del bien jurídico como confirmación de la vigencia de la norma infringida, finalidad primordial del Derecho penal, colisiona con la tesis aquí propuesta en un aspecto que consideramos importante. Partimos de la siguiente premisa: la diferencia entre infracción administrativa e ilícito penal, y por tanto, entre sanción administrativa y pena, no se ha demostrado de forma contundente e indubitada que sea absolutamente

---

<sup>487</sup> Vid. STRATENWERTH, G. El autor se pregunta cómo pueden legitimarse las normas penales que no son reconducibles a intereses individuales ni a convicciones valorativas generales, sin recurrir al dogma del bien jurídico. Para él, la causa de la incriminación no es la lesión a determinados bienes jurídicos, sino que forma parte del consenso normativo de una sociedad cuando se desatienden las normas de conducta fundamentales. “La criminalización en los delitos contra bienes jurídicos colectivos”. Íñigo Ortiz de Urbina Gimeno / Margarita Valle Mariscal de Gante (trs.) En *La Teoría del bien jurídico...*, op. cit., págs. 365-372. Por su parte, HORMAZÁBAL MALAREÉ, H., considera que la lesión del bien jurídico se concreta con suficiencia en el momento de la puesta en peligro del bien jurídico, es ahí donde se valora el resultado. “El principio de lesividad y el delito ecológico”. En *El Nuevo Derecho Penal Español. Estudios Penales en Memoria del Profesor José Manuel Valle Muñiz*. Gonzalo Quintero Olivares / Fermín Morales Prats (coords.) Ed. Aranzadi. Elcano (Navarra), 2001, págs. 1417-1428.

<sup>488</sup> Vid. VON HIRSCH, A. / WOHLERS, W. Aprueban la idea de que la categoría de los delitos de peligro abstracto aglutina a los delitos que no se pueden calificar de delitos de resultado o delitos de peligro concreto, y que el desinterés por dotar a los primeros de un análisis diferenciado se traduce en la indiferencia por encontrar una legitimación material convincente de dichos tipos. Dado que los delitos de peligro abstracto no constituyen una tipología delictiva homogénea, sino que se caracterizan por su heterodoxia y potenciales de riesgo muy diferentes, es preciso realizar una nueva categorización diferenciada de este tipo de delitos: delitos preparatorios, delitos cumulativos y delitos de peligrosidad concreta. Los primeros se caracterizarían por integrar conductas cuyo potencial de riesgo consiste en que la propia persona que actuó (u otra), pueden apoyarse en el resultado de la misma, por ejemplo el delito de falsificación de moneda; los segundos comprenderían conductas que por sí solas no pueden menoscabar de forma relevante un interés protegido jurídicamente, pero que sumadas a otras de la misma naturaleza pueden conducir al menoscabo, como el caso de los delitos medioambientales, y los terceros comprenderían conductas cuya peligrosidad reside en que conducen a situaciones que no son controlables por el autor, por ejemplo los tipos penales referidos a la seguridad vial. “Teoría del bien jurídico y estructura del delito. Sobre los criterios de una imputación justa”. Beatriz Spínola Tártalo (tr.) En *La Teoría del bien jurídico...*, op. cit., págs. 285-339, en especial 288 y ss.

<sup>489</sup> Cfr. JAKOBS, G. <<de lo que se trata aquí, en los delitos de peligro abstracto, y ello de modo más claro que en el caso de los bienes jurídicos “clásicos” es del mantenimiento de la vigencia de la norma, y no del mantenimiento de determinados objetos... >>. En *Sociedad, norma y persona en una teoría de un Derecho penal funcional*. Manuel Cancio Meliá / Bernardo Feijóo Sánchez (trs.) Ed. Civitas. Madrid, 1996, pág. 46.

cuantitativa y no quepa ningún atisbo de distinción por criterios cualitativos, sobre todo en determinados escenarios jurídico-normativos (en contra de lo expresado por la mayoría de la doctrina, y a pesar de que la cuestión debatida es remota y ha sido reiteradamente estudiada).<sup>490</sup>

En consecuencia, no es posible adoptar esta posición si lo que se sugiere es configurar el bien jurídico medio ambiente como bien jurídico protegido por el Derecho penal, con el único fin de dotar de vigencia a la norma penal, cuyo núcleo es

---

<sup>490</sup> Como ocurre con las sanciones administrativas de carácter disciplinario aplicadas a funcionarios, o las sanciones penitenciarias, sobre todo cuando la sanción administrativa es más expeditiva que la pena aplicable a la misma conducta. Algo en lo que el Derecho ambiental sancionador se muestra cada vez más visible, y que reconduce indefectiblemente a un aumento paulatino de penalidad, como se puede comprobar en el recorrido que viene sufriendo el art. 325 (con anterioridad art. 347 bis). Para QUINTERO OLIVARES, G., si sólo trazamos una frontera cuantitativa entre delito e infracción administrativa, nos encontramos con una manera de intervenir fácil pero incorrecta, pues no se trata de corregir los errores y tolerancias de la Administración. Un delito ambiental requiere además de una configuración propia, coherente con el bien jurídico que pretende defender frente a los ataques más graves, tanto objetiva como subjetivamente, que implica a su vez una conciencia clara acerca de cuál es ese bien jurídico en peligro, y qué parte del mismo pertenece a ese elenco de actividades contaminantes para el medio ambiente que sí están permitidas por el sistema. En *La especialidad del Derecho penal ambiental en relación con la contaminación acústica y la contaminación del agua*. Ponencia en el XVII Seminario para el Estudio y la Práctica Jurídica. Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya, 2007, págs. 1-31, en especial 6. En la doctrina administrativa HUERGO LORA, A., defiende la diferenciación cualitativa entre pena y sanción administrativa tomando como referencia la exclusividad del Derecho penal en dos vertientes: la imposición de penas privativas de libertad, y en cierta medida las penas de inhabilitación, pues en el ámbito administrativo éstas sólo se contemplan en el ejercicio de la potestad disciplinaria (exclusivamente aplicables a funcionarios). En *Las sanciones administrativas*. Ed. Iustel. Madrid, 2007, págs. 157 y ss. Sin embargo, la distinción es puramente cuantitativa para MUÑOZ CONDE, F. / GARCÍA ARÁN, M. En *Derecho Penal. Parte General* (8ª ed.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2010, págs. 73 y ss; TERRADILLOS BASOCO, J. “El ilícito ecológico. Sanción penal-sanción administrativa”, op. cit., pág. 83. La apuesta por la diferenciación en el plano material surge en el Estado liberal, a raíz del sometimiento del *ius puniendi* al principio de legalidad de los delitos y las penas. Al respecto, *vid.* CEREZO MIR, J. La razón esgrimida por Stratenwerth, que trataba de explicar la distinción estructural entre ilícito penal e ilícito civil o administrativo a través de la necesaria concurrencia del desvalor de la acción en el Derecho penal, no le parece que pueda sustentar un criterio delimitador cualitativo, en todo caso continuaría perteneciendo al ámbito cuantitativo. Respecto a la proposición planteada por James Goldschmidt, basada en la segregación del Derecho penal administrativo del Derecho penal criminal, por constituir el ilícito administrativo una infracción del deber de colaboración, o bien un acto meramente contra el orden administrativo, considera que tampoco ofrece una respuesta convincente. “Límites entre el Derecho penal y el Derecho administrativo”. En *Anuario de derecho penal y ciencias penales*. Tomo 28, Fasc./mes 2, 1975, págs. 159-173. Tanto esta dualidad diferenciadora (cualidad-cantidad), como la posición que las aúna en un mismo criterio (cualitativo-cuantitativo) resultan perturbadoras e inútiles en opinión de RANDO CASERMEIRO, P. Una de las razones es que no cabe una relación de oposición entre ambas, sino que hay que contemplar ambas direcciones de manera recíproca. En suma, los problemas que surgen entre Derecho penal y Derecho administrativo sancionador deben ser abordados como un problema de política jurídica. En *La distinción entre el Derecho penal y el Derecho administrativo sancionador. Un análisis de política jurídica*. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2010, págs. 52 y ss. Las Directivas ambientales también inciden de forma indirecta en esta dualidad al estimular la aplicación de sanciones penales para los ataques al medio ambiente. Al respecto, *vid.* JAÉN VALLEJO, M. / PERRINO PÉREZ, A. <<...aplicación de sanciones penales que pongan de manifiesto una desaprobación social de naturaleza cualitativamente diferente a la de las sanciones administrativas...>>. En “La reforma penal de 2015 (Análisis de las principales reformas introducidas en el Código Penal por las leyes 1 y 2/2015, de 30 de marzo)”, op. cit., pág. 149.

inseparable de la norma administrativa, pues entonces la diferencia sólo estribaría en criterios cualitativos, en estrecha relación con la escasa relevancia del principio de lesividad en los delitos de peligro (ya se opte por diferenciarlos en las categorías formuladas hasta ahora –*abstracto, concreto, intermedio, hipotético, presunto*–, o no), que por otra parte y como ya sabemos, representa una de las piedras angulares del delito ambiental.<sup>491</sup> Por ello también descarta la legitimidad de los delitos de peligro abstracto si no es previsible una puesta en peligro concreto, es decir, considera que la mayoría son delitos de mera desobediencia.<sup>492</sup>

---

<sup>491</sup> La mayoría de la doctrina distingue entre delitos de peligro abstracto o concreto. En los primeros, la conducta, entendida de forma indeterminada, se supone que tiene la idoneidad necesaria para hacer peligrar al bien jurídico, aunque concretamente no la posea. Esta presunción se basa en una consideración estadística; por ello la doctrina les exige un plus de legitimación material del que no gozan todavía. En este sentido *vid.* FRISCH, W. “Bien jurídico, derecho, estructura del delito e imputación en el contexto de la legitimación de la pena estatal”. Ricardo Robles Planas (tr.) En *La Teoría del bien jurídico...*, op. colectiva cit., págs. 309-339, en especial 334. En los segundos, la mayoría entiende que se asemejan al núcleo de los delitos de lesión, en cuanto que ambos son delitos de resultado, si bien en los delitos de peligro concreto se exige un resultado de peligro en vez de uno lesivo. *Vid.* KISS, A. Recoge las distintas formulaciones que la doctrina alemana ha realizado en torno a los delitos de peligro concreto y concluye que el adelantamiento de punibilidad que se les suele achacar es erróneo, lo único que se adelanta en el delito de peligro concreto es la consumación, ni siquiera la tentativa acabada entre ambos tipos de delito (lesión / peligro concreto) es distinguible, pues en ambos casos el cúmulo de factores de riesgo, o su representación, es idéntico. “Delito de lesión y delito de peligro concreto: ¿qué es lo adelantado?”. En *Indret: Revista para el Análisis del Derecho*, núm. 1. Ed. Universidad Pompeu Fabra. Barcelona, enero 2015, págs. 1-25. MUÑOZ CONDE añade la categoría de delitos de peligro hipotético, que caracteriza como delitos de peligro abstracto, a los que el legislador incorpora elementos normativos de aptitud en el tipo (con giros tales como *susceptible de, capaz de, que puedan –perjudicar–*), cuya constatación corresponde, en cada caso, al juez. <<La acción típica, en general peligrosa, tiene que ser idónea en el caso concreto para crear una situación de riesgo>>. Como ejemplo de este tipo específico de delitos de peligro, cita el art. 325 CP. En MUÑOZ CONDE, F. / LÓPEZ PEREGRÍN, C. / GARCÍA ÁLVAREZ, P. *Manual de Derecho penal medioambiental*. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2013, págs. 162-165. En el mismo sentido, TORIO LÓPEZ, A. “Los delitos de peligro hipotético. Contribución al estudio de los delitos de peligro abstracto”. En ADPCP, 1981, págs. 825-847. Por su parte MIR PUIG, S., como crítica a la diferenciación que afirma que los delitos de peligro abstracto se castigan porque normalmente suponen un peligro, afirma que es dudoso que los delitos de peligro abstracto sean de verdad delitos de peligro, porque no requieren ningún peligro efectivo, por lo que deberían denominarse delitos de peligro presunto. En “Derecho Penal. Parte General”, op. cit., págs. 233-235. *Vid.* CUELLO CONTRERAS, J. Representa al sector doctrinal que considera a los delitos de peligro abstracto como delitos de mera actividad, porque no requieren la comprobación de la puesta en peligro, sino tan sólo la realización de una acción. *El Derecho penal español. Parte general. Nociones introductorias. Teoría del delito* (3ª ed.) Ed. Dykinson. Madrid, 2002, pág. 533. Otra categoría se basa en estimar que existen bienes jurídicos intermedios, que tutelan simultáneamente intereses sociales y de los particulares. Al respecto, *vid.* MATA Y MARTÍN, R. Esta terminología ya la encuentra en Tiedemann, que utiliza el binomio: intereses del Estado-agentes económicos individuales, y en Schünemann, que los denomina bienes jurídicos intermedios espiritualizados, por carecer de sustrato físico. *Bienes jurídicos intermedios y delitos de peligro. Aproximación a los Presupuestos de la técnica de peligro para los delitos que protegen bienes jurídicos intermedios (-tutela penal del medio ambiente, delitos económicos, seguridad del tráfico-)* Ed. Comares. Granada, 1997.

<sup>492</sup> *Vid.* JAKOBS, G. En “Sociedad, norma y persona en una teoría de un Derecho penal funcional”, op. cit., págs. 43 y ss.



Por su parte, WOLTER identifica los límites de protección del bien jurídico, que considera *infranqueables*, con los Derechos fundamentales protegidos por la Constitución. En virtud de los mismos, la intervención penal legítima tendrá lugar a la hora de proteger derechos tales como la igualdad, la libertad, la dignidad, etc., y se extiende a través de todo el sistema del Derecho penal (en relación a la acción imputable, tipo total de injusto, antijuricidad, responsabilidad, y causas de exclusión o disminución de la punibilidad).<sup>493</sup> Esta explicación, no obstante, deja fuera de consideración la posible incriminación de conductas que no posean esa superioridad de los Derechos fundamentales; en nuestro caso, el art. 45 CE que, no obstante, es representativo de conductas que por su gravedad, generan una puesta en peligro de un bien jurídico *fundamental*.<sup>494</sup> Cabe preguntarse entonces, por qué el apartado 3 del artículo 45 CE es el único que contiene una referencia expresa al binomio de sanciones, *-penales, o en su caso administrativas-* asociadas a su vulneración, y además con carácter imperativo.<sup>495</sup>

Esta perspectiva constitucional también la considera acertada HASSEMER, preocupado por demostrar que el bien jurídico es el fundamento imprescindible y constitucional del deber de protección, y de los límites a la intervención. Para lograrlo propone reconstruir el epicentro de las tradiciones del Derecho penal, -el bien jurídico-, utilizando dos conceptos propios del Derecho constitucional, como son la prohibición de exceso y la prohibición de defecto, que representan los dos extremos que resuelven el derecho de intervención estatal conforme a la Constitución.<sup>496</sup>

---

<sup>493</sup> Vid. WOLTER, J. "Derechos humanos y protección de bienes jurídicos en un sistema europeo del Derecho penal". Francisco Baldó Lavilla (tr.) En *Fundamentos de un sistema europeo del Derecho penal. Libro/Homenaje a Claus Roxin*. J.M. Silva Sánchez (ed. española). B. Schünemann y J. De Figueiredo Dias (coords.) Ed. Bosch. Barcelona, 1995, págs. 37-72.

<sup>494</sup> Con el uso de la misma terminología *-fundamental-* es más fácilmente reconocible la faceta básica, vital, que representa el bien jurídico medio ambiente, que sin duda no coincide con la fundamentalidad constitucional. Por ejemplo, GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A., no encuentra acertado confundir los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución con los bienes jurídicos, porque ello conlleva el desinterés absoluto de otros derechos también reconocidos, que no alcanzan el umbral de protección penal al no tener tal categoría. En "Introducción al Derecho penal. Instituciones, fundamentos y tendencias del Derecho Penal" Vol. II, op. cit., pág. 547.

<sup>495</sup> Nuestra Constitución alude a la obligación de imponer sanciones penales *stricto sensu* en los siguientes supuestos: para quienes atenten contra el patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran (art. 46); utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas por la Ley Orgánica que determine la forma y los casos en los que pueden ser suspendidos ciertos derechos y libertades (art. 55.2 *in fine*).

<sup>496</sup> Vid. HASSEMER, W. En "¿Puede haber delitos que no afecten a un bien jurídico penal?", op. cit. págs. 98 y ss. En esta línea de orientar los límites del Derecho penal a la Constitución, vid. ROXIN, C. "¿Es la protección de bienes jurídicos una finalidad del Derecho penal?" En *La Teoría del bien jurídico*, op. cit., pág. 449; BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I. En "Viejo y Nuevo Derecho Penal. Principios

La polémica suscitada en torno a las posiciones antropocéntrica y ecocéntrica de corte moderado en relación al núcleo principal del bien jurídico protegido, ha propiciado distintas posiciones doctrinales respecto a la legitimidad de la intervención punitiva del Estado y sus fronteras, es decir, si ha de intervenir sólo y exclusivamente cuando los ataques al medio ambiente afecten a bienes personales, o si lo puede hacer sólo en caso de grave atentado, sin necesidad de conexión con determinados bienes jurídicos individuales.<sup>497</sup> Como vemos, el estudio y sistematización del bien jurídico “medio ambiente” todavía no ha superado la controversia que suscita desde los orígenes del Derecho ambiental, y la problemática en torno a sus dos principales corrientes no sólo no ha quedado resuelta, sino que genera una viva discusión doctrinal.<sup>498</sup>

---

y desafíos del derecho penal de hoy”, op. cit., págs. 103 y ss; CUELLO CONTRERAS, J. “El Derecho penal español. Parte general. Nociones introductorias. Teoría del delito”, op. cit., págs. 59 y 60.

<sup>497</sup> Una concepción ecocéntrica moderada de reconocimiento del medio ambiente con esbozo de consideraciones críticas y analizando además el modelo de gestión administrativa medioambiental en JORGE BARREIRO, A. En “El bien jurídico protegido en los delitos contra el medio ambiente en el CP de 1995”, op. cit., págs. 39-46. Por su parte, PALAZZO, F., reitera que el bien jurídico “ambiente” no puede ser ya considerado simplemente como un bien instrumental para tutelar otros bienes (por ejemplo, la salud humana), sino que debe reconocerse su valor intrínseco. “Principios fundamentales y opciones político-criminales en la tutela penal del ambiente en Italia”. En *Revista Penal* (Doctrina), núm. 4. Ed. Praxis. Barcelona, 1999, págs. 68-83, en especial 69. De similar sentido al expresado por ESER, ALBIN. <<Para una agudización de la toma de conciencia respecto de la protección del ambiente, debe descartarse una corta visión antropocéntrica [...] Para que se dé la seguridad en la cualidad humana reivindicando el pasado del hombre, no tienen que existir diferencias entre la conservación del equilibrio ecológico y la diversidad de especies vegetales y animales>>. En “La Nueva Evolución del Derecho Penal Económico”. Andrea Bartos (trad.) *Revista de Derecho Penal*, núm. 2, 2000, págs. 41-56, en especial 56.

<sup>498</sup> Vid. SILVA SÁNCHEZ, J. M<sup>a</sup>. “Consideraciones teóricas generales sobre la reforma de los delitos contra el medio ambiente”. En *La reforma de la justicia penal. (Estudios en homenaje al Prof. Klaus Tiedemann)* Juan Luis Gómez Colomer / José Luis González Cussac (coords.) Ed. Publicacions de la Universitat Jaume I. Castellón de la Plana, 1997, págs. 151-182, en especial 155 y ss. Vid., la posición de HORMAZÁBAL MALAREÉ, H., para quien la protección del bien jurídico colectivo debe estar al servicio del bien jurídico individual, sujeto a una relación teleológica con un bien jurídico individual. En “El principio de lesividad y el delito ecológico”, op. cit., pág. 1420.

### 2.3.-Postulados del antropocentrismo radical y moderado frente al progresivo concepto holístico del bien jurídico medio ambiente <sup>499</sup>

El antropocentrismo en sentido moral se caracteriza por la calificación del ser humano como *sede y medida de todo valor*.<sup>500</sup> El acervo del que procede este pensamiento, mezclando diferentes acentos, son el humanismo griego clásico -concibe al hombre en virtud de sus capacidades racionales-, el dualismo cartesiano -se basa en el valor teleológico del hombre; posee alma y ello le confiere supremacía moral-, y el concepto judeocristiano de la gran cadena del ser (*scala naturae*) -Dios coloca al hombre en primer lugar en la escala jerárquica-.<sup>501</sup> Este antropocentrismo tan afirmado y estable, ha resultado crucial en el trascurso del desarrollo de las ciencias sociales y la realidad natural, ya que se han considerado dos universos distintos y por ello, no ha quedado espacio para un verdadero análisis estimatorio sobre la integración del ser humano en la Naturaleza.<sup>502</sup>

---

<sup>499</sup> Voz “Holismo”. Según el DRAE (23ª ed.): <<Doctrina filosófica que propugna la concepción de cada realidad como un todo distinto de la suma de las partes que lo componen>>. Uno de los más representativos autores en su rama ambiental actual es CALLICOTT, B. J. *Thinking Like a Planet: The Land Ethic and The Earth Ethic*. Ed. Oxford University Press. New York, 2013. Crítico con la elaboración de una ética ambiental que parta de presupuestos holísticos, SINGER, P. En *Practical Ethics* (2ª ed.) Cambridge University Press, 1993, págs. 282 y 283.

<sup>500</sup> Utilizando la definición que ofrece RIECHMANN, J. En “Introducción: Aldo Leopold, los orígenes del ecologismo estadounidense y la ética de la Tierra”. En *Una ética de la Tierra*. Jorge Riechmann (ed.) Ed. Los libros de la catarata. Madrid, 2000, págs. 7-36, en especial 27.

<sup>501</sup> Vid. TAYLOR, P. W. Explica los fundamentos de cada una de estas tradiciones filosóficas, que defienden el mayor valor inherente del hombre y cómo, según su teoría, son expresiones de prejuicios irracionales que favorecen a una especie en particular sobre otros millones de especies. En “The Ethics of Respect for Nature”. *Environmental Ethics*. Vol. 3, Issue 3, Fall 1981, págs. 197-218, en especial 215 y ss.

<sup>502</sup> Vid. VICENTE GIMÉNEZ, T. << Para la antropología jurídica, entendida en el sentido de un antropocentrismo unilateral y acrítico, la responsabilidad ecológica del hombre se define, no frente a la naturaleza, sino como responsabilidad con nosotros mismos y con los demás, responsabilidad ante una dimensión del bien socio-cultural. Se trata de las relaciones de los sujetos organizados en una vida social, un conjunto de factores en sentido amplio o condiciones del medio ambiente, que posibilitan el mantenimiento y desarrollo de la vida humana en su plenitud. Sin embargo, desde nuestro actual planteamiento el antropocentrismo aparece, cuando menos, como falto de fundamento crítico, al adelantar al primer plano la consideración del hombre (su cultura, su civilización, sus proyectos) en el orden de la naturaleza. Por el contrario, una concepción ecocéntrica es capaz de sintetizar la dimensión proporcional, respecto a la naturaleza exterior, de aquellos supuestos antropocéntricos, de esta forma no absolutos, sino articulados en virtud de un valor natural proporcionado al todo ecológico. Se trata de la naturaleza extrahumana concebida en rigor como fin en sí misma, de la unidad armoniosa y diversa de la creación, como presupuesto global, solidario y no fragmentario>>. “Orden ambiental-orden jurídico. Interdependencia, participación y condicionalidad”. En *Justicia ecológica y protección del medio ambiente*. Teresa Vicente Giménez (coord.) Ed. Trotta. Madrid, 2002, págs. 41-58, en especial 41-

Como indica LORENZETTI, la idea de paradigma ambiental se desarrolla desde un punto de partida geocéntrico, como bien colectivo enfrentado a la concentración de su estricta visión en el sujeto y así, ésta es formulada con posterioridad a la noción antropocéntrica del ambiente.<sup>503</sup>

Por otra parte, seguir la teoría ambiental antropocéntrica obliga a conectar única y directamente la materia ambiental con los tradicionales delitos que ocupan al Derecho penal, pues sólo así, considerándolos manifestaciones típicas de estos delitos, es posible mantener su deficiencia.<sup>504</sup> La antropomorfización de la Naturaleza conduce, por citar tan solo un ejemplo, a que en nuestro Código Penal se considere delito el maltrato a animales *domésticos o amansados* (art. 337).<sup>505</sup> Sin embargo, es

---

43 y 58. En otro texto, alude a la crítica realizada por Tiedemann en relación al antropocentrismo que preside la protección jurídica del medio ambiente y a su propuesta defensora de una *ética empática*, en la que se reconoce a todos los seres vivos como portadores de derechos emancipados y específicos (no obstante, al limitar el ámbito a los seres vivos, su postura no es inequívocamente ecocéntrica). “El objeto de la ecología y sus implicaciones en el orden ético”. En *Justicia ecológica y protección del medio ambiente*. Teresa Vicente Giménez (coord.) Ed. Trotta. Madrid, 2002. págs. 13-39.

<sup>503</sup> Vid. LORENZETTI, R. L. Aboga por la inclusión de categorías inmateriales como el paisaje o el patrimonio histórico. En “*Teoría del Derecho Ambiental*”, op. cit., pág. 15.

<sup>504</sup> En este sentido, vid. ALONSO ÁLAMO, M. Considera que, si bien la concepción mixta ecocéntrica-antropocéntrica intenta traspasar la frontera del bien jurídico penal en sí mismo considerado, no lo consigue de forma plena, ya que continúa vinculando el medio ambiente a la persona. “Trama de la vida y protección penal del ambiente”. En *Un Derecho penal comprometido. Libro Homenaje al Prof. Dr. Gerardo Landrove Díaz*. Francisco Muñoz Conde et. al (dirs.) Miguel Ángel Núñez Paz (coord.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2011. págs. 47-92, en especial 52. Por su parte, ESCAJEDO SAN EPIFANIO, L., no encuentra sentido a la crítica al planteamiento antropocéntrico de los delitos ambientales –*de lege lata*–, basándose primordialmente en el mandato del art. 45 CE, y también en las muchas puntualizaciones que requiere la discusión, si bien descarta de forma plena la posibilidad de acudir a posturas extremas. En “El medio ambiente en la crisis del Estado social. Su protección penal simbólica”, op. cit., pág. 395.

<sup>505</sup> El término “amansado” se introdujo, junto a la categoría de “doméstico”, en la reforma del CP por LO 5/2010, a la vez que se eliminó el requisito del ensañamiento. Vid. QUERALT JIMÉNEZ, J. En “Derecho penal español. Parte especial”, op. cit., pág. 958. Comparto la opinión de que, bajo una apariencia de fácil concreción de los términos “doméstico” y “amansado”, no resulta tan sencillo determinar conceptualmente su significado, ya que la ley penal no ofrece una definición y la normativa extrapenal, de carácter autonómico en su gran mayoría, tampoco es homogénea. Vid. MARTÍN LORENZO, M. El art. 337 se aparta conceptualmente del ámbito tradicional del Derecho penal ecológico y lo califica de *cuerpo extraño*, ya que no tutela el medio ambiente. *Memento Práctico. Derecho Penal 2011*. Fernando Molina Fernández (coord.) Ed. Francis Lefebvre. Santiago de Compostela, 2010-2011. págs. 1223-1244, en especial 1224; BLANCO CORDERO, I. “Artículos 334 a 337”. En *Comentarios al Código Penal*. Manuel Gómez Tomillo (dir.) Ed. Lex Nova. Valladolid, 2010, págs. 1313-1316. En el mismo sentido, MATELLANES RODRÍGUEZ, N. Añade que la dispersión de leyes administrativas en la materia no facilita la concreción, de forma especial la recogida por leyes autonómicas, que en términos generales reducen a dos los grupos de animales a los que se les aplicaba la categoría de doméstico [con anterioridad a la reforma de 2010]: los de compañía, con diversos fines (educativos, lúdicos o sociales) y los de renta, que no conviven con el hombre pero que son alimentados o criados por éste para la producción de alimentos u otros beneficios. En “Derecho Penal del Medio Ambiente”, op. cit., págs. 199-204; RAMÓN RIBAS, E. “El maltrato de animales y la custodia de animales (arts. 337 y 631)”. En *La Reforma Penal de 2010: Análisis y Comentarios*. Gonzalo Quintero Olivares (dir.) Ed. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2010, págs. 297-300. La reforma del CP producida por la LO 1/2015, de 30 de marzo modifica la redacción de este artículo, contemplando un catálogo más extenso de los animales que

perfectamente concebible y lícito, según el ordenamiento penal, maltratar a los que no tiene esa categoría, aplicando la teoría general.<sup>506</sup> De hecho, es lugar común a lo largo de nuestra geografía nacional, la existencia de festejos en los que se acosa a determinadas especies animales, en algunos casos hasta dar muerte, cuya justificación se pretende argumentar desde el criterio de la tradiciones festivas, que a veces se remontan al Medievo. Se otorga a este factor un plus de valor asociándolo a la voluntad general, al disfrute de personas que gozan de un denominador común, el arraigo de determinadas expresiones culturales en diferentes poblaciones, como si la tradición tuviera un orden lógico-normativo.<sup>507</sup> Esto soporta una difícil justificación desde una perspectiva ecocéntrica, porque de nuevo nos colocamos ante una división jerárquica entre los propios animales, cuyo papel hegemónico en cuanto a protección aparece ideado y vinculado exclusivamente a unas cuantas especies.<sup>508</sup>

Aquí, si realizamos un seguimiento del hilo histórico de las relaciones jurídicas entre humanos y animales, ZAFFARONI acierta de pleno en el planteamiento de que es extensible a todos los elementos.<sup>509</sup> Como partes sólo integrantes del cosmos, ninguna de ellas ostenta el privilegio de colocarse en la posición central y hegemónica de

---

forman parte de su objeto de protección, si bien no resuelve la controversia, pues las categorías descritas son redundantes respecto a lo que se puede considerar un animal doméstico o amansado.

<sup>506</sup> Vid. MATELLANES RODRÍGUEZ, N. En “Derecho Penal del Medio Ambiente”, op. cit., págs. 202 y 203.

<sup>507</sup> El efecto de la controversia suscitada en España, de carácter reciente aunque paulatinamente *in crescendo*, se refleja en diferentes iniciativas y actuaciones legislativas, que intentan que el fenómeno no sólo no desaparezca en sus elementos de violencia más criticados, sino que en muchos casos sucede todo lo contrario, a través de las leyes protectoras existentes, que permiten la declaración de fiestas de interés turístico nacional, o bien recurren a otras fórmulas legislativas. La supuesta legitimidad de dichos eventos aparece reflejada sutilmente en la nueva redacción del art. 337.4 CP, apartado incorporado por la LO 1/2015, de 30 de marzo, en cuanto que permite el maltrato cruel de animales domésticos o de cualesquiera otros en espectáculos, siempre que los mismos se encuentren autorizados legalmente.

<sup>508</sup> Lo que de nuevo se relaciona con el ser humano, al considerarse que son las especies que posean capacidad de convivir con el hombre por su naturaleza pacífica, las que son objeto de una protección más intensa. Así, la nueva redacción del art. 337.1 CP expresa: <<Será castigado con la pena de tres meses y un día a un año de prisión e inhabilitación especial de un año y un día a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales, el que por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente, causándole lesiones que menoscaben gravemente su salud o sometiéndole a explotación sexual, a: a) un animal doméstico o amansado, b) un animal de los que habitualmente están domesticados, c) un animal que temporal o permanentemente vive bajo control humano, o d) cualquier animal que no viva en estado salvaje>>.

<sup>509</sup> Vid. ZAFFARONI, R. E. En “La Pachamama y el Humano”, op. cit., pág. 54. Sobre las relaciones de Mesopotamia, Egipto y otras culturas con los animales domésticos, vid. RECARTE VICENTE-ARCHE, A. / ALONSO GARCÍA, E. Destacan que fue el s. XVI la época más cruel del hombre contra el animal y ya en el s. XVIII, Bentham afirmó un principio básico fundamental para el movimiento moderno del bienestar animal: que los animales sufren, fundamento sobre el que se ha asentado la progresiva legislación protectora, iniciada por el Parlamento inglés en 1822 con la aprobación de una ley de anticrueldad con el ganado. Voz “Animales, Teoría general y régimen de los domésticos”. En *Diccionario de Derecho Ambiental*, op. cit., págs. 78-91.

supremacía, ni siquiera el humano, lo que es difícil de entender y asimilar por él mismo en cuanto especie. Por tanto, la reacción legislativa del hombre siempre tenderá a repeler los postulados de la *deep ecology*.<sup>510</sup>

No obstante, la doctrina cada vez se inclina más por aceptar la inclusión de la protección de los animales como una de las finalidades del Derecho penal, junto a la referencia a las generaciones futuras, bien extendiendo el principio de protección del

---

<sup>510</sup> La ecología profunda se desarrolló durante el s. XX, fundamentalmente a través de la obra de dos filósofos: el noruego Arne Naess y el estadounidense Paul Taylor. Respecto al primero, *vid.* NAESS, A. La plataforma de articulación de esta perspectiva se centra en ocho puntos: 1.- El bienestar y la prosperidad de la vida humana y no humana en la Tierra tienen valor por sí mismos. Estos valores son independientes de la utilidad del mundo no humano para fines humanos; 2.- La riqueza y diversidad de las formas de vida contribuyen a la realización de estos valores y también son valores en sí mismos; 3.- Los seres humanos no tienen derecho a reducir esta riqueza y diversidad excepto para satisfacer necesidades vitales; 4.- El florecimiento de la vida humana y las culturas es compatible con una disminución sustancial de la población humana. El florecimiento de la vida no humana requiere de tal disminución; 5.- La interferencia humana presente en el mundo no humano es excesiva, y la situación está empeorando rápidamente; 6.- Por lo tanto, las políticas deben cambiar. Estas políticas afectan a las estructuras económicas, tecnológicas e ideológicas básicas. La situación resultante será profundamente diferente de la actual; 7.- El cambio ideológico pasa principalmente por apreciar la calidad de vida en lugar de adherirse a un nivel de vida cada vez más alto. Existirá una profunda conciencia acerca de la diferencia entre lo grande y lo bueno; 8.- Los que suscriban los criterios antes mencionados tienen directa o indirectamente la obligación de tratar de poner en práctica los cambios necesarios. “The Deep Ecological Movement. Some Philosophical Aspects”. En *Deep Ecology for the 21<sup>st</sup> Century. Readings on the Philosophy and Practice of the New Environmentalism*. George Sessions (ed.) Ed. Shambhala. Boston, 1995, págs. 64-84; *The ecology of Wisdom. Writings by Arne Naess*. Alan Drengson and Bill Devall (eds.) Ed. Counterpoint. Berkeley, 2008. La obra de Taylor se estudia específicamente *infra*, epígrafe 2.4.1. Sobre la incomprensión de estos postulados, desenredando diversos obstáculos en los que se centra la desconfianza profunda y meditada de los agentes políticos ante esta tendencia, *vid.* ZAFFARONI, R. E. <<Es muy fácil pervertir el discurso ecológico, en particular profundo, hasta caricaturizarlo y convertirlo en un discurso contrario a las declaraciones de derechos y presentar el geocentrismo o cualquier otra tentativa de reconocer el carácter de sujetos de derechos a la naturaleza, como un discurso antihumanista que, por quitar al humano del lugar de titular del dominio absoluto de la naturaleza lo degrada a microbio eliminable si se opone a su conservación>>. Y continúa denunciando que los detractores se apoyan en algo de sobra conocido: <<... no es más que la reiteración de la primaria reacción que a lo largo de la historia se ha registrado ante cualquier noticia que le advierte al humano que no es tan centro ni tan privilegiado como se ha creído: desde Copérnico hasta Darwin o Freud viene pasando lo mismo. El narcisismo humano tiende a radicalizar las posiciones supuestamente defensoras del humanismo hacia un antropocentrismo que raya en los límites del exabrupto cartesiano [se refiere al pensamiento de Descartes, para el que los animales eran máquinas desposeídas de cualquier traza de alma, equiparables a las cosas; por tanto no existe ninguna obligación del hombre respecto a ellos y no son sujetos de derechos. Así, su teoría es, por lo menos, coherente con los postulados de los que parte]>>. En “La Pachamama y el Humano”, *op. cit.*, págs. 90 y ss. Una breve pero aclaratoria exposición acerca de la ecología profunda en TAYLOR, B. / ZIMMERMAN, M. “Deep Ecology”. *Encyclopedia of Religion and Nature*. Ed. Continuum. London & New York, 2005, págs. 456-460. Tratado extensamente por PEPPER, D. *Modern Environmentalism. An Introduction* (2<sup>nd</sup> ed.) Ed. Routledge. London, 2002, págs. 17 y ss., en especial 28-31. Otra obra interesante por la relación que traza entre los postulados de la democracia y la autorrealización defendida por Spinoza, y la ecología profunda es el trabajo de DE JONGE, E. *Spinoza and Deep Ecology: Challenging Traditional Approaches to Environmentalism*. Ed. Ashgate. Aldershot (England), 2004. Por último, unas de las más tempranas y representativas críticas hacia lo que comporta este movimiento en la obra de LUKE, T. W. *Ecocritique. Contesting the Politics of Nature, Economy, and Culture*. Ed. University of Minnesota Press. Minneapolis, 1997.

bien jurídico, en opinión de ROXIN, bien renunciando totalmente al mismo, como sostiene STRATENWERTH, o bien con un fundamento basado en la protección de sentimientos legítimos de la generalidad, según GIMBERNAT.<sup>511</sup>

Resulta muy complicado distinguir la mayor o menor proximidad de determinadas especies en la vida de los humanos, porque esto supone discriminar necesariamente las categorías en que se basan, emocionales en el caso de animales domésticos que acompañan la vida afectiva del sujeto, biológicas cuando se trata de especies cuyo fin es proveer al hombre de nutrientes, o mercantiles cuando le proporcionan beneficios económicamente cuantificables.<sup>512</sup>

Parte de las críticas vertidas hacia una ideación holística de medio ambiente, es decir, defender, mantener que cualquier elemento que forme parte del medio ambiente es sujeto de derechos y obligaciones, lo que rebaten es que resulta demasiado forzado y carente de lógica, sobre todo en cuanto al aspecto obligacional. En otras palabras, ¿que vía tendría que utilizar un río para comunicarle a un árbol que por estar plantado en un determinado perímetro junto a su cauce, ha desencadenado una lenta pero inexorable desviación de sus aguas, por ejemplo? Escalando un peldaño más en la hipótesis, una vez que el árbol es conocedor de su atentatoria conducta contra el entorno, tras desgranar si existe dolo o culpa, error, o cualquier circunstancia modificativa de su responsabilidad criminal, habrá que materializar el grado de castigo, cómo se ejecuta, etc. Si nos empeñamos en continuar con este hilo argumental, cabría preguntarse si el

---

<sup>511</sup> Vid. ROXIN, C. “¿Es la protección de bienes jurídicos una finalidad del Derecho penal?”. En *La Teoría del bien jurídico...*, op. cit., pág. 456. Vid. STRATENWERTH, G. “La criminalización en los delitos contra bienes jurídicos colectivos”. En *La Teoría del bien jurídico...*, op. cit., pág. 371. Vid. GIMBERNAT ORDEIG, E. Presentación a la obra colectiva *La teoría del bien jurídico. ¿Fundamento de legitimación o juego de abalorios dogmático?*, op. cit., págs. 11-22, en especial 16 y ss.

<sup>512</sup> También es poco probable que podamos determinar con exactitud y a la luz de la misma abstracción, la posesión o no de derechos subjetivos por parte de determinadas especies, e incluso dentro de la misma especie, esto dependerá de la función que cumpla, precisamente porque una mascota con cierto grado de protección jurídica en un determinado lugar, puede ser que en otro sea considerado simplemente un animal destinado a la alimentación del hombre, por ejemplo. En este sentido, aludiendo a los procedimientos agrícolas industrializados, la capacidad de sufrimiento y efectos en los animales *vid.*, FERRATER MORA, J. / COHN, P. Citan estudios de Peter Singer, quien ya en la década de los 70 observó que lo que a nosotros nos pueden parecer débiles perturbaciones ambientales <<como la aparición súbita de focos muy brillantes, o ruidos extraños, pueden producir la muerte en puercos confinados>>. En *Ética aplicada. Del aborto a la violencia* (2ª ed.) Ed. Alianza Universidad. Madrid, 1991. págs. 75 y 76. En otro reciente estudio se sostiene que la mayoría de especies poseen algún grado de susceptibilidad y respuesta a la estimulación acústica, y a menudo sufren consecuencias adversas por el ruido ambiental: discapacidad auditiva, interferencias en la comunicación, estrés y molestias. *Vid.* GONZÁLEZ, A E. “What Does “Noise Pollution” Mean?” En *Journal of Environmental Protection*. Vol. 5, núm. 4, March, 2014, págs. 340-350. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.4236/jep.2014.54037> (último acceso 12/07/2015).

río puede transmitir sus derechos a los arroyos que de él nacen, en calidad de herederos. Y qué decir sobre la posibilidad de que una ballena o una foca del Ártico emprendan (debidamente representadas) acciones legales contra la compañía petrolera que ha vertido toneladas de crudo en el océano.

Sin embargo, no se trata tanto de articular de nuevo las bases de una teoría general del Derecho que específicamente responda a estas cuestiones u otras de índole desconocido, motivadas por los avances tecnológicos o los retrocesos radicales de materias que hoy se piensan renovables, sino de un replanteamiento del uso global del derecho, la economía, la sociología, la ética, y muchas otras disciplinas.<sup>513</sup> Desde esta perspectiva, como afirma JONAS, fue precisamente la ontología el fundamento de la ética en los orígenes de la filosofía, y la separación entre ambas supuso una división entre lo objetivo y lo subjetivo, por lo que la reunificación sólo puede llevarse a cabo desde el plano objetivo, es decir, mediante una revisión de la idea de Naturaleza, que daría lugar a que el hombre, en la determinación de su autocumplimiento del deber, al mismo tiempo lograse un interés en la sustancia original y con ello la instauración de un principio ético.<sup>514</sup>

---

<sup>513</sup> En contra, por las dudas que plantean tales razonamientos en la teoría y en la práctica, FERRATER MORA, J. / COHN, P. <<Si aceptamos la noción propuesta por Aldo Leopold, de “comunidad biótica” y extrapolamos conceptos normalmente usados para describir, o justificar, relaciones interhumanas, hablaremos no sólo de “intereses humanos”, “intereses de los animales”, “derechos humanos”, “derechos de los animales”, etc., sino también de “intereses” y “derechos” de las montañas, las plantas, las rocas, y terminaremos por no saber de qué estamos hablando>>. En “Ética aplicada. Del aborto a la violencia”, op. cit., pág. 91. En realidad, la capacidad de respuesta está preparada y, en muchos casos, consolidada, por los niveles de representación procesal alcanzados actualmente, que permiten a personas intelectualmente asemejables a los animales en sus procesos cognitivos, ser sujetos plenos de derechos, tanto en su vertiente activa como pasiva. De cómo se fraguaron procesos contra los animales por vía penal, y la ambivalencia que ha presidido desde siempre su relación, hasta romper definitivamente en el s. XVIII con el reconocimiento de la condición de responsable [persona] a los animales desde el s. XIII, vid. ZAFFARONI, R. E. En “La Pachamama y el Humano”, op. cit., págs. 24-45. Otros antecedentes muestran limitaciones y prohibiciones con respecto al uso abusivo de animales, aunque los intereses fueran de carácter utilitarista en términos de explotación agraria, u otros. Al respecto, ESER, A. Cita el Código de Hammurabi de Babilonia (s. XVII a.C.), el Derecho Romano y el Derecho Municipal de la Alta Edad Media, que fue el que implantó los denominados periodos de veda para la caza. En “Derecho ecológico”, op. cit., pág. 609. En opinión de ALONSO GARCÍA, E., los valores que se quiere equilibrar son, en la mayor parte de casos, valores en sentido estricto, esto es, que responden a intereses humanos (valores antropocéntricos), y por ello se distingue el Derecho del bienestar animal de los derechos de los animales. “Ética ambiental y Derecho”. En *Diccionario de Derecho Ambiental*, op. cit., págs. 629-640, en especial 635.

<sup>514</sup> Así, JONAS, H. Este principio no se fundaría en la autonomía individual ni en las necesidades de la sociedad, sino en la asignación de por parte de la naturaleza del todo <<... tal que incluso el último miembro de una humanidad moribunda pudiera serle fiel en su última soledad [sic]>>. En *El principio vida. Hacia una biología filosófica*. José Mardomingo (trad.) Ed. Trotta. Madrid, 2000. págs. 325 y ss. Intereses difusos, derechos de tercera generación, responsabilidades compartidas, son trucos intelectuales para eludir las exigencias de la ética, en palabras de OJEDA MESTRE, R. “Las cien caras del Derecho



Llegados a este punto, es preciso detenernos fugazmente en un reciente fallo de la Cámara Federal de Casación Penal en Argentina que ha traspasado fronteras por su enorme trascendencia jurídica. Lo revelador de la resolución es que por primera vez se concede el *habeas corpus* a un animal, en concreto a una orangutana originaria de Sumatra que vive confinada en el zoológico de Buenos Aires desde hace más de 20 años, y cuyo estado de salud físico y psíquico está muy deteriorado, con riesgo evidente de muerte. El tribunal realiza una interpretación jurídica dinámica y reconoce al animal el carácter de sujeto de derechos –sujeto no humano–, citando expresamente la doctrina de Zaffaroni, y en posición manifiestamente contraria a la decisión adoptada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional (Sala VI), que había confirmado la negación de acción de *habeas corpus* intentada por el representante de una asociación ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción núm. 47 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.<sup>515</sup>

Todavía en la actualidad, tanto el planteamiento de ZAFFARONI como en cierta medida la proposición más atemperada de ESER, son objeto de intensas críticas basadas en interpretaciones reduccionistas, poco elaboradas y sumamente elementales, en algún caso escalando hasta la incoherencia.<sup>516</sup>

---

ambiental”. En *Medio Ambiente y Derecho: Revista electrónica de derecho ambiental*, núm. 12-13, diciembre 2005. Disponible en: <http://huespedes.cica.es/gimadus/> (último acceso 12/07/2015).

<sup>515</sup> Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal. Causa núm. CCC 68831/2014/CFC1 “Orangutana Sandra s/recurso de casación S/HABEAS CORPUS”, de 18 de diciembre de 2014. [Id Infojus -Sistema Argentino de Información Jurídica-: FA14261110]. La acción de *habeas corpus* se encuentra prevista por la Ley Nacional 23.098, de 28 de septiembre de 1984. En virtud del recurso de casación formulado por la “Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales”, se solicita la liberación urgente del ejemplar, así como su posterior traslado y reubicación al “Santuario de Sorocaba”, situado en el Estado de Sao Paulo (Brasil). El tribunal reconoce abiertamente que los sujetos no humanos (animales) son titulares de derechos, por lo que se impone su protección en el ámbito competencial correspondiente. Transcurridos unos meses, otra sentencia reconoce a la organización protectora de animales la facultad para intervenir como querellante en representación de la orangutana. La resolución advierte que el concepto de particular ofendido ha cambiado, y que la normativa actual -Ley Nacional de Protección Animal- reconoce la tutela de los animales, por lo que corresponde admitir la legitimación de la accionante para actuar en defensa de los intereses y derechos del animal, máxime cuando acreditó a través de la presentación del Estatuto que su objeto social tiene como fin la asistencia y representación jurídica de los intereses y derechos básicos fundamentales de los Animales No-Humanos, en causas judiciales, entre otros. Sentencia Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 29 de abril de 2015 [Id Infojus: NV11236]. Ambas resoluciones disponibles en: <http://www.infojus.gob.ar/>

<sup>516</sup> Por ejemplo, ESER, A., sostiene que bienes en apariencia inertes o como mínimo marginales para la utilidad del hombre reaccionan a las alteraciones ambientales, como los musgos o los líquenes. En “Derecho ecológico”, op. cit., pág. 613; ZAFFARONI, R. E. A los que pretenden relacionar la protección ambiental con movimientos criminalizadores como el fascismo alemán, les recuerda que Hitler y sus legisladores lo único que hicieron fue desarrollar unos postulados de protección de la Naturaleza que ya habían sido elaborados por sus predecesores, recogidos en el art. 150 de la Constitución de la República de Weimar de 1919. En “La Pachamama y el Humano”, op. cit., págs. 93-96.

Esto es, las objeciones que se citan desde que el Iluminismo rompe definitivamente con los primeros vestigios de la controversia sobre los derechos subjetivos relacionados con los no-humanos, son exactamente las mismas que se pueden utilizar para rechazar los criterios del antropocentrismo, tanto puro o radical, como moderado o intermedio.<sup>517</sup> Es preciso, por tanto, cuestionarse si sería posible un trazado coherente del desarrollo de una teoría sobre el bien ético protegido, no reduciéndolo al concepto de interés jurídico protegido característico de la tradición liberal.<sup>518</sup>

No obstante, el planteamiento desde el ámbito científico, la famosa hipótesis Gaia (nombre de la diosa griega Tierra) de LOVELOCK, cada vez es más visible<sup>519</sup>; se ha desarrollado bajo su cobijo un modelo ético que no excluye satisfacer las necesidades vitales, ni propugna regresar a una especie de vida primitiva o reducida a fenómenos locales, sino que al reinterpretar el evolucionismo de Darwin, declara abiertamente que el equilibrio planetario sólo es posible desde la cooperación y el

<sup>517</sup> La hegemonía del humano puede que sea lo que específicamente empuje a su destrucción como especie, por la no consolidación efectiva de un *status* basado en la colaboración, simbiosis y cooperación con la Naturaleza. La continuada y ampliada manifestación de señales jurídicas de poderío del humano frente a las otras especies es en lo que se fijan tanto las teorías antropocéntricas puras como las de corte utilitarista vinculadas al animalismo.

<sup>518</sup> El sistema clásico de bienes jurídicos también vendría a refrendar la teoría de los derechos de lo “no humano”: puesto que los bienes jurídicos individuales y colectivos inspiran en último término la protección del ser humano, los bienes ambientales pueden asimismo alcanzar esa protección por sí solos, como bienes independientes. De esta opinión, ESER, A. No obstante, al final concluye con una posición ponderadora de bienes jurídicos protegidos, entre los fines tecnológicos/económicos y los ecológicos. En “Derecho ecológico”, op. cit., pág. 617-622. Vid. TIEDEMANN, K. En relación a los delitos patrimoniales expresa: <<Al propio tiempo, tales hechos punibles afectan a bienes jurídicos de la generalidad o de sectores enteros de la economía>>. En *Poder económico y delito*. Amelia Mantilla Villegas (tr.) Ed. Ariel. Barcelona, 1985. pág. 18. Vid. STRATENWERTH, G. Se refiere a la idiosincrasia del medio ambiente en relación a todas las puestas en peligro de las que se ha ocupado hasta ahora el Derecho penal, si bien concluye que la alternativa de aplicar un derecho preventivo de intervención es de poca utilidad. <<El medio ambiente no es un bien de esa clase, ni siquiera en sus elementos particulares, como tierra, aire y agua, y mucho menos lo es en los procesos, en los que él influye, como el clima, la evolución de plantas y animales, etc. En este caso cualquier fundamentación antropocéntrica queda demasiado estrecha y aun si ella fuera posible, no derivaría ningún punto de apoyo para la cuestión decisiva de cuáles son las injerencias en la naturaleza –la cual ha sido explotada desde siempre por el hombre- o cuál es la medida de tales injerencias que deben ser admitidas, o bien, en caso contrario, cuáles son las que deben ser excluidas, y, por ello, bajo ciertas circunstancias, también sancionadas penalmente>>. En *Derecho Penal. Parte General I. El Hecho punible*. Manuel Cancio Meliá / Marcelo A. Sancinetti (tr.) Ed. Aranzadi. Cizur menor (Navarra), 2005, pág. 57.

<sup>519</sup> Vid. LOVELOCK, J. La hipótesis que plantea es la siguiente: los humanos no somos externos ni habitantes o residentes de Gaia, sino que formamos parte de ella, aunque sin embargo, aparecimos en tiempos recientes si nos comparamos a otros entes naturales. Si nos empeñamos en dinamitar su equilibrio, ésta sencillamente prescindirá de nuestra existencia para dar paso a otras formas de vida menos molestas o que encajen mejor en la función cooperadora. En *The revenge of Gaia. Why the Earth is Fighting Back –and How We Can Still Save Humanity*. Ed. Penguin Books. London, 2006. El riesgo de sufrir catástrofes naturales que provocan miles de muertes humanas en diferentes partes del planeta se asociarían a esta teoría.

reconocimiento de deberes éticos hacia todos los tipos de materias vivas, desde plantas a organismos microscópicos o cualquier tipo de estructuras complejas, sin que por ello se dañe la dignidad humana frente a la Naturaleza.<sup>520</sup> Este punto es el que recoge las críticas más feroces, la supuesta y pretendida visión antihumanista que propugna la *deep ecology*.<sup>521</sup>

No extraña por tanto, que exista un sector de la doctrina que se decante decididamente por su abolición, como MÜLLER-TUCKFELD.<sup>522</sup> Para el autor, tanto las posiciones ecocéntricas como las antropocéntricas adolecen de contradicciones en sus fundamentos jurídico penales. Las primeras porque, en definitiva, siempre serán los humanos los que especifiquen qué es concretamente dentro del medio lo que presta un servicio a la protección de la Naturaleza. Las segundas, porque impiden la realización de un Derecho penal del medio ambiente con autonomía propia, ya que los supuestos se agotan reduciéndose su aplicación a casos particulares de formas comisivas de los delitos clásicos, como por ejemplo el delito de lesiones; como es extraño que se produzcan modos de conducta subsumibles en la categoría de los delitos clásicos, el Derecho penal del medio ambiente sería insignificante en su práctica. El corolario a estas posturas es que la discusión sobre el bien jurídico protegido en estos delitos, es irrelevante. No obstante, al explicar que, según su apreciación, el bien jurídico protegido es *la exigencia de que estos recursos sólo se contaminen de forma autorizada* -penalizar la desobediencia administrativa, es decir, nos moveríamos en el

---

<sup>520</sup> Como autor más representativo de lo que comporta el modelo ético Gaia, *vid.* BOFF, L. “El Planeta Tierra. Crisis. Falsas soluciones. Alternativas”, *op. cit.* A título indicativo, la denominada “Lista Roja”, elaborada por la IUCN (*International Union for Conservation of Nature*) en 2013 alerta sobre la desaparición de especies vegetales y animales, de gran calado en la configuración de la multiplicidad de sistemas naturales que nos rodean. Documento disponible en: <http://www.iucn.org/?13243/Worlds-oldest-and-largest-species-in-decline--IUCN-Red-List> (último acceso 4/07/2013).

<sup>521</sup> *Cfr.* SHELLENBERGER, M. / NORDHAUS, T. “The Death of Environmentalism. Global Warming Politics in a Post-Environmental World”, *op. cit.* A favor de que se produzca una transición que posibilite la superación del Derecho ambiental y con ello se persiga un verdadero Derecho ecológico, BETANCOR RODRÍGUEZ, A. En “Derecho Ambiental”, *op. cit.*, págs. 159-165. También ALONSO GARCÍA, E. <<*Es más, estos valores biocéntricos muchas veces son la base misma de gran parte del Derecho ambiental y por ello cuesta mucho entender la lógica de las normas ambientales a muchos juristas y políticos que no se dan cuenta de que los valores que la norma consagra no son antropocéntricos [...] Se cree que siempre hay una solución ambiental compatible con el bienestar humano a corto plazo y para ello se fuerza la interpretación de normas en las que los valores biocéntricos pueden ser su única explicación hasta hacerlos desaparecer*>>. Voz “Ética ambiental y Derecho”. En *Diccionario de Derecho Ambiental*, *op. cit.*, págs. 635 y ss.

<sup>522</sup> *Vid.* MÜLLER-TUCKFELD, J. C. <<*lo que debería preocuparnos no es que el Derecho penal del medio ambiente fracase, sino el hecho de que está funcionando y cómo está funcionando*>>. En “Ensayo para la abolición del derecho penal del medio ambiente”, *op. cit.*, pág. 507. En contra, contestando a esta posición, LASCURAÍN SÁNCHEZ, J. A. “Elogio del art. 325 del CP”, *op. cit.*, págs. 265-294.

campo de las contravenciones típicas del Derecho alemán-, y no los recursos ambientales y su protección, lo cierto es que no es comprensible que la discusión le sea insignificante; precisamente ésta resulta más necesaria que nunca para dotar a las conductas atentatorias del medio ambiente de una significación jurídica plena, ya sea en el orden penal o en el administrativo, e incluso en la jurisdicción civil.<sup>523</sup>

También destaca la escasa eficacia del Derecho penal en la resolución de conflictos producidos en el escenario del riesgo PRITTWITZ, quien centra su reproche en la perversión de un Derecho penal que ya no se caracteriza porque su directriz se dirija al pasado, sino que de él se esperan respuestas orientadas al futuro; además pierde su carácter individual, pues los problemas de la sociedad del riesgo no pueden ser solucionados, por definición, en un ámbito de causalidades difusas, que es precisamente donde se activan los riesgos [permitidos] que pueden causar daños al medio ambiente.<sup>524</sup>

---

<sup>523</sup> Vid. MÜLLER-TUCKFELD, J. C. A las conclusiones propuestas llega aplicando la construcción de Kühlen sobre los delitos cumulativos, según la cual, la verdadera contaminación ambiental se produce por la acumulación de conductas que consideradas aisladamente, serían insignificantes, y que el autor considera errónea. Por tanto, el principio de culpabilidad se infringe por castigar conductas que sólo llegan a ser abstractamente peligrosas, se rompen los criterios de causalidad y el principio de *ultima ratio*, y de ello extrae que deberían desaparecer del Derecho penal. En “Ensayo para la abolición del derecho penal del medio ambiente”, op. cit., págs. 509, 510, 513, 522 y 523. Vid. HUERTA TOCILDO, S. “Principios básicos del Derecho Penal y el art. 325 del Código Penal”. En *Revista Penal*, núm. 8, julio 2001, págs. 39-52. También SILVA SÁNCHEZ, J. M<sup>a</sup>. Se une a la denuncia sobre la poca trascendencia práctica del Derecho penal medioambiental, así como al riesgo que conlleva en relación al deterioro de garantías, tanto de sus principios como de criterios de imputación en el sistema clásico. “¿Protección penal del medio ambiente? Texto y contexto del artículo 325 del Código Penal. En *La Ley*, 1997-Tomo 3, D-132. Ed. La Ley. Madrid, 1997, págs. 1714-1725. Vid. CHO, B-S. Acentúa el carácter limitado de las Convenciones, algo que parece intrínseco a dichos instrumentos, ya que generalmente no son fuente del Derecho, sino fuente de obligación. <<Es probable que el medio ambiente compartido a nivel internacional sea menos protegido por las autoridades nacionales que el medioambiente nacional. Por ello, el argumento para una protección a través de sanciones penales parecería más convincente, incluso, que el aplicable a nivel nacional>>. “¿El surgimiento de un Derecho Penal Internacional del Medioambiente?” Manuela Mora Ruiz (tr.) En *Revista Penal*, núm 8, 2001, págs. 3-23, en especial 6.

<sup>524</sup> Vid. PRITTWITZ, C. Es más, considera que la respuesta del Derecho penal es un fenómeno más dañino que el que pretende corregir porque está buscando soluciones a un problema que es sistémico, no individual. Los buenos principios en lo que se funda el Derecho penal no chocan con el mal uso del que se vale una buena parte de individuos poderosos frente a los que no lo son; no legitima por sí solo la merma de principios y de su carácter original. “La función del Derecho Penal en la sociedad globalizada del riesgo: defensa de un rol necesariamente modesto”. En *Derecho, Globalización, Riesgo y Medio Ambiente*. Esteban Pérez Alonso / Estanislao Arana García et. al. (eds.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2012, págs. 415-427. El Derecho penal del medio ambiente japonés (y coreano) no ha tenido problema en aplicar una nueva dogmática en las relaciones de causalidad, representada por la llamada Teoría de la causalidad epidemiológica, rechazada de plano en Alemania. Al respecto, vid. CHO, B-S. “Cuestiones de causalidad y autoría en el Derecho penal del medio ambiente coreano y japonés desde la perspectiva del derecho comparado”. M<sup>a</sup> del Mar Díaz Pita (traducción del alemán). En *Revista Penal (Doctrina)*, núm. 4, 1999, págs. 42-53, en especial 44 y 45.

Junto a estas fatídicas posturas, la defendida por SCHÜNEMANN es justamente un contrapunto, situándose en un plano teórico de creación del Derecho, con la pretensión de erigir un concepto pre-positivo de delito ambiental; el desenlace normativo sería declarar ilegítima la práctica actual del Derecho ambiental, por la lesión que produce al principio de igualdad, y el siguiente paso, corolario del anterior, la declaración de su inconstitucionalidad.<sup>525</sup> La idea matriz de la que parte cierto sector doctrinal es que el medio ambiente es un bien jurídico autónomo respecto de los bienes jurídicos individuales, y el Derecho penal debe protegerlo sancionando exclusivamente las conductas de agresión más graves.<sup>526</sup> Nuestro juicio es que se trata de una consideración demasiado genérica, escapa de la concreción dogmática estructural y margina valoraciones orgánicas, este rasgo debería tomarse más en cuenta en la multiplicidad de propuestas de corte ecocéntrico radicales o puras. A través de la propuesta de protección de la Naturaleza (como un todo integrado por multitud de elementos –diversidad biológica–), también es posible llegar sin devaneos dogmáticos a los postulados propios del antropocentrismo moderado, esto es, ambas posiciones confluyen en un nexo compartido de manera forzosa.<sup>527</sup>

---

<sup>525</sup> Así, SCHÜNEMANN, B. En “La destrucción ambiental como arquetipo del delito”, op. cit., pág. 441.

<sup>526</sup> En este sentido, *vid.* CONDE-PUMPIDO TOURÓN, C. <<El medio ambiente se protege penalmente por sí mismo, como bien jurídico nuevo, con entidad propia, y no en función del daño que su perturbación ocasione a otros valores como la vida humana, la salud pública o individual, la propiedad de las cosas, animales o plantas, etc., que son bienes jurídicos ya protegidos tradicionalmente por el Derecho penal, y que si se ven afectados dan lugar a otros delitos en concurso con el delito ecológico>>. “Título XVI. De los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente”. En *Código Penal. Doctrina y Jurisprudencia*, Tomo II. Artículos 138 a 385. Cándido Conde-Pumpido Ferreiro (dir.) Ed. Trivium. Madrid, 1997, págs. 3189-3244, en especial 3221 y 3228. Con anterioridad, en los mismos términos, en “Introducción a el delito ecológico”, op. cit., pág. 16. *Vid.* DE LA CUESTA AGUADO, P. M. Concibe al bien jurídico <<medio ambiente>> como *el conjunto de relaciones, de reglas naturales, bióticas, biológicas, ecológicas, etc., [...] que han permitido el desarrollo del hombre y la aparición y mantenimiento de la vida en el planeta tierra>>*. Por tanto, como concepto autónomo, pero a la vez restringido. En “Causalidad de los delitos contra el medio ambiente”, op. cit., pág. 64. *Vid.* CASSOLA PEREZUTTI, G. Sigue la teoría de tipificación de los delitos medioambientales como delitos de peligro abstracto. En *Medio ambiente y derecho penal. Un acercamiento*. Julio César Faira (ed.) Ed. B de F. Buenos Aires, 2005, págs. 15-17, 27.

<sup>527</sup> El argumento es el siguiente: miles de personas, exclusivamente a causa de su localización geográfica, más desfavorecida en algunos casos (países subdesarrollados, en vías de crecimiento, o con riesgos de padecer desastres ecológicos, naturales o tecnológicos; éstos últimos aún contando con autorización administrativa), se enfrentan a una “calidad de vida” mermada, socavada, y sus sistemas naturales de subsistencia sufren profundas alteraciones. Por tanto, si la “porción” de Naturaleza (en paralelismo con la “porción” de Naturaleza dañada por los ofensores ecológicos que se describe en la teoría de los delitos de acumulación) a la que están en condición legítima de acceder, mejora, la existencia de esos humanos se entiende que también sufrirá una mutación positiva en cuanto a sus condiciones de vida, e indiscutiblemente ello presupone, de nuevo, la estrecha vinculación de la propia Naturaleza con el ser humano. *Cfr.* SCHÜNEMANN, B. Si bien encuentra que la discusión es innecesaria porque parte del presupuesto de que la equidad intergeneracional, como norma básica

## 2.4.- Concepción ecocéntrica y biocéntrica del bien jurídico medio ambiente

EE.UU. fue el primer país que a través de varios pensadores desde mediados del s.XIX diseñó lo que hoy se conoce como “ecologismo”, desarrollado a partir de enfoques conservacionistas, inicialmente interesados en la investigación ornitológica y la protección de aves, así como en la caza y pesca deportiva.<sup>528</sup> Actualmente estos movimientos pueden antojarse anacrónicos si nos detenemos a observar los criterios de política ambiental exterior que llevan a cabo sus sucesivos gobiernos, por la tendencia a no ratificar instrumentos internacionales que abordan de manera específica la problemática ambiental, como el Protocolo de Kioto adoptado en 1997.<sup>529</sup>

La extensión del campo propio de la Ética, genuinamente diseñada bajo parámetros de pensamiento humano, especialmente en el estudio de la existencia de valores inherentes en especies no humanas y, por ende, en todo sustrato viviente, se produjo gracias al influjo de la obra de LEOPOLD -al que la mayoría de autores citan como el primer filósofo que planteó la cuestión-, a través de una serie de ensayos cortos, agrupados en torno a la idea central de la ética de la Tierra.<sup>530</sup> Ahora bien, el

---

ecológica, es suficiente para deducir la protección penal directa de los bienes ambientales. En “La destrucción ambiental como arquetipo del delito”, op. cit., pág. 438. En sentido similar al texto, *vid.* ALCÁCER GUIRAO, R. El autor, no obstante, puntualiza que la conexión entre ambas corrientes vendría dada por el interés de protección a las generaciones futuras [de humanos], en la medida en que se proteja el medio ambiente, considerado como condición de supervivencia de la especie humana. “La protección del futuro y los daños cumulativos”. *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*. 13 de mayo de 2002, págs. 1-30, en especial 2. <http://criminnet.ugr.es/recpc> (último acceso 12/07/2015). También en el sentido del texto, *vid.* DE LA CUESTA AGUADO, P. M. En “Causalidad de los delitos contra el medio ambiente”, op. cit., págs. 19 y 65.

<sup>528</sup> *Vid.* RIECHMANN, J. Si bien no se trata de una verdadera voluntad protectora del medio ambiente, lo cierto es que el sentimiento romántico de Naturaleza (fundamentalmente en cuanto a la valoración estética paisajística) se impuso al proceso industrializador y migratorio sufrido por este país. “Introducción: Aldo Leopold, los orígenes del ecologismo estadounidense y la ética de la Tierra”, op. cit.

<sup>529</sup> *Vid.* “Status of Ratification of the Kyoto Protocol”. United Nations. Framework Convention on Climate Change. El documento refleja el listado de los países firmantes. Disponible en: [http://unfccc.int/kyoto\\_protocol/status\\_of\\_ratification/items/2613.php](http://unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_ratification/items/2613.php) EE.UU. firmó dicho Tratado en 1998, no obstante todavía no ha sido ratificado. Su convalidación compromete a los países industrializados a estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero. La adhesión de España se materializó con la publicación del documento en el BOE núm. 33, de 8 de febrero de 2005.

<sup>530</sup> *Vid.* LEOPOLD, A. *Una ética de la Tierra*. Jorge Riechmann (ed.) Isabel Lucio-Villegas/Jorge Riechmann (trads.) Ed. Los Libros de la Catarata. Madrid, 2000. La primera edición data de 1949, con el título *A Sand County Almanac, and Sketches Here and There*. Ed. Oxford University Press. New York, 1949. Representa los orígenes del ecologismo estadounidense. *Vid.* ZAFFARONI, R. E. Cita a Peter Singer como el exponente contemporáneo de la teoría de Leopold. En “La Pachamama y el Humano”, op. cit., pág. 71. Por su parte, ALONSO GARCÍA, E., considera que los norteamericanos son los padres del

carácter profundamente ecocéntrico de dicho pensador se pone en duda, pues si bien se decanta por la afirmación antedicha, no es menos cierto que las prevenciones que apunta le sitúan más próximo a concepciones intermedias, colocándose en una posición biocéntrica moderada o antropocéntrica débil.<sup>531</sup>

Hay que entender que las teorías biocéntricas modernas se encuentran tan emancipadas del ecocentrismo puro como del biocentrismo clásico que representaban los autores escolásticos católicos, sobre todo durante el s. XVI. Al margen de otras subcorrientes actuales que interactúan en ambas escuelas, la diferencia básica entre ecocentrismo y biocentrismo estriba en que los primeros consideran “ser moral” a toda la Naturaleza, integralmente concebida, frente a los biocéntricos, que estiman seres morales a los seres vivos.<sup>532</sup>

La disparidad en este espacio es importante, ya que los ecocentristas basan su criterio de acción en la preservación y conservación de especies y ecosistemas, no en la de seres individuales y concretos que mantienen los segundos. La relevancia de esta distinción trasciende lo teórico cuando nos ocupamos de desarrollar conceptos válidos con los que crear mecanismos de protección de los recursos naturales, porque altera sustancialmente la noción del bien jurídico protegido. La razón es que si abogamos por un concepto de bien jurídico medioambiente entendido de forma ecocéntrica, éste se transforma inmediatamente en un bien de carácter global, mientras que si optamos por defender que el bien jurídico es individual y concretizado, nos movemos en dirección

---

ambientalismo mundial, entre ellos Leopold, Roosevelt, Pinchot, o Thoreau. “Concepto de medio ambiente como objeto del derecho: el ámbito del derecho ambiental”. En *Diccionario de Derecho Ambiental*, op. cit., págs. 329-342, en especial 332. Sobre ética ambiental también se puede consultar una reciente obra que recoge las aportaciones más relevantes de varios autores especializados en la materia. *Environmental Ethics* (2<sup>nd</sup> ed.) Michael Boylan (ed.) Ed. Wiley-Blackwell. Oxford, 2014.

<sup>531</sup> En este sentido, NORTON, B. G. En la interpretación que realiza de la tesis de Leopold observa una integración factible entre biocentrismo y antropocentrismo, apartándose por tanto de una concepción biocéntrica excluyente. En *Toward Unity among Environmentalists*. Ed. Oxford University Press. Oxford / New York, 1991, págs. 39 y ss. Otros autores como CALLICOTT, en sus publicaciones iniciales, defendieron el carácter holístico puro de la teoría de Leopold, comparando su ética de la Tierra con la ética de la liberación animal. Vid. CALLICOTT, B. J. “Animal Liberation: A Triangular Affair”. En *Environmental Ethics*, Vol. 2, Issue 4, Winter 1980, págs. 311-338. Disponible en: [http://www.pdcnet.org/enviroethics/content/enviroethics\\_1980\\_0002\\_0004\\_0311\\_0338](http://www.pdcnet.org/enviroethics/content/enviroethics_1980_0002_0004_0311_0338) (último acceso 12/07/2015).

<sup>532</sup> Como principales exponentes del ecocentrismo, vid., ECKERSLEY, R. *Environmentalism and Political Theory. Toward an Ecocentric Approach*. Ed. State University of New York Press. Albany (NY), 1992; NAEISS, A. “The ecology of Wisdom”, op. cit.; CALLICOTT, B. J. *Beyond the Land Ethic: More Essays in Environmental Philosophy*. Ed. Suny Press. Albany (NY), 1999; WENZ, P. S. *Environmental Ethics Today*. Ed. Oxford University Press. Oxford / New York, 2001.

contraria, y las consecuencias son del todo opuestas a las que se derivan de una consideración ecocéntrica de carácter puro.<sup>533</sup>

Obligada referencia es la original propuesta que realizó STONE en la década de los 70, en defensa del biocentrismo puro a través de acciones civiles, auto-revisada una vez transcurridos 35 años, si bien el examen proyecta la reafirmación de los postulados originales.<sup>534</sup> Estos razonamientos se remontan a la Antigüedad y sobreviven hasta el s. XVIII, con grandes fracturas producidas en distintos periodos históricos, en cuanto a las soluciones aportadas por la Dogmática.

En el contexto europeo, ESER también se ha ocupado de los problemas jurídico-prácticos que plantearían las diferentes y desconocidas demandas de criaturas vegetales, alegando que aunque pueda creerse que carecen de analogía con la experiencia humana del sufrimiento, las opciones presentadas en tiempos recientes sugieren más bien lo contrario.<sup>535</sup> Puesto que el hombre no es el único integrante de la

---

<sup>533</sup> Sobre el análisis de la unidad conceptual que representa la categoría de ecosistema, y sus implicaciones metodológicas, vid. VICENTE GIMÉNEZ, T. <<En esta relación de autonomía / dependencia de que disfruta el hombre, encontramos la paradoja propia de la relación ecológica: la independencia de un ser vivo necesita su dependencia con respecto a su entorno. Y precisamente esta paradoja es la justificación de que los problemas más graves que tiene planteados actualmente la sociedad humana tengan su raíz en problemas ecológicos; de que los problemas de un organismo social no tengan solución sin ser enmarcados en su medio natural o ecosistema>>. También respecto a la conciencia ecológica, que necesita del condicionamiento social, no sólo individual, apunta: <<... en el análisis conceptual de la conciencia ecológica hay que distinguir al menos tres niveles: el nivel racional: se trata de la dimensión espiritual del hombre, su calidad de ente racional, es éste el nivel básico y el que procura la adherencia de los tres niveles; el nivel emocional o sentimiento ecológico, de carácter irracional, donde su eficacia no depende directamente de su interna constitución crítica racional; y el nivel sociológico, las creencias vivas de una comunidad o, el ethos social y jurídico>>. En “El objeto de la ecología y sus implicaciones en el orden ético”, op. cit., págs. 17 y 25.

<sup>534</sup> Vid. STONE, C. D. En “Should trees have standing? Law, Morality, and the Environment”, op. cit. Ha desarrollado un trabajo que justamente es referente exigido para quien se aproxime a estas cuestiones, tras lograr reabrir en la década de los setenta del s.XX el debate sobre la personalidad jurídica de los entes naturales, en concreto el caso de protección de árboles, mediante una acción judicial (en el orden civil) que no logró pronunciamiento, pero en la que se emitieron votos favorables -particulares en nuestra tradición jurídica- (el juez Marshall, presidente de la Corte Suprema de EE.UU. apoyó la teoría), que el autor analiza estudiando la ampliación que se ha ido produciendo en el marco del *Common Law*. Se trata del caso *Sierra Club vs. Morton*, por un proyecto de construcción de una estación hibernal de la compañía *Walt Disney* en un valle de California, que afectaba a gran cantidad de árboles autóctonos. Vid. CASTELLS, M. La organización ambientalista norteamericana *Sierra Club* fue fundada por John Muir en 1891, considerada una de las precursoras a nivel mundial. En *The Power of Identity. The Information Age: Economy, Society, and Culture*, Vol. II (2<sup>nd</sup> ed.) Ed. Wiley-Blackwell. Oxford, 2010, pág. 171.

<sup>535</sup> Vid. ESER, A. <<Pero acaso también deba cambiarse lentamente de orientación a este respecto: los seres humanos comparten con las plantas determinadas “necesidades” básicas, como, por ejemplo, la dependencia del agua, aire y sustancias nutritivas. Si pudiera, además, demostrarse que en las plantas se dan reacciones químicas y eléctricas cuyas funciones fueran bastante análogas a las de las sensaciones humanas [...], en corto tiempo no podría quedar ya completamente fuera de discusión, tampoco para las plantas, la protección inmediata de su bienestar conforme a su especie [...] Los objetos de protección ambiental y la intensidad de protección dependen mucho más del resultado de esfuerzos particulares de tipo técnico jurídico que de consideraciones relativizadoras existenciales,



Naturaleza, surgen entonces las dudas sobre la posible legitimación a los restantes elementos no dotados de categoría humana, que supondría considerarlos sujetos obligados en la misma medida que al hombre, si la pretensión es colocarlos en idénticos términos de igualdad ante la ley. Los defensores de que la Naturaleza se desenvuelve por cauces que, sin la intervención del ser humano, se ajustan como un engranaje en el que no hay opción de fallo, tendrán que partir necesariamente del mismo punto de partida, el hombre es el único causante de los desajustes, por tanto, el único responsable.<sup>536</sup> Es obvio, por cuanto la responsabilidad se adecua a la posibilidad de solicitar la reparación del daño causado, o bien a que el sujeto responda civil, administrativa o penalmente por su conducta.

Ahora bien, tanto la Europa industrializada desde hace décadas como Norteamérica, a través de diversas instituciones y *loobbies* con mayor o menor impulso y capacidad ejecutora<sup>537</sup>, desvían el foco de atención hacia el peligro que suponen los países que se encuentran en vías de desarrollo más o menos adelantado, o incluso países subdesarrollados (desde el África subsahariana, países de América Latina, países asiáticos, etc.), a los que se les alerta desde una cómoda situación, sugiriendo que ellos ya no se pueden unir al festín, que el agotamiento de los recursos naturales es fruto de su pretendido progreso (se suman las teorías acerca de los índices de población y futuras previsiones en ciertos países) y que, por tanto, hay que limitar sus derechos de desarrollo tecnológico-industrial en pos de los ciudadanos del Primer Mundo, para que éstos puedan continuar disfrutando de su elaborada conceptual y materialmente “calidad de vida”<sup>538</sup>; todo ello sin el más mínimo atisbo de auto-reproche ético, aunque

---

*sociales, estéticas e incluso antropocéntricas*>>. En “Derecho ecológico”, op. cit., págs. 603-652, en especial 607 y 608.

<sup>536</sup> Cuando nos referimos al ser humano como el causante de los desastres en el ecosistema, la indeterminación es tal, que nos lleva a discriminar negativamente a seres humanos que, en principio, no participan en el proceso. Vid. BOFF, L. <<*No basta decir que es andrópico, o sea, producido por el ser humano. ¿Qué ser humano? ¿Los indios, los esquimales? Necesitamos decir con todas las letras que el calentamiento ha sido producido por aquella porción de hombres que introdujeron la producción industrial hace ya tres siglos...*>>. En “El Planeta Tierra. Crisis. Falsas soluciones. Alternativas”, op. cit., pág. 33.

<sup>537</sup> Vid. PAREDES CASTAÑÓN, J. M. Estos grupos de presión ejercen un rol determinante que se refleja en tres facetas: en una legislación permisiva con los ataques al bien jurídico medio ambiente, en una cristalización de los niveles de riesgo permitido para actividades peligrosas y lesivas a través de la normativa administrativa, y en una influencia sobre el poder político capaz de aumentar el grado de tolerancia frente a las conductas ilícitas. “El Derecho Penal español del medioambiente: una evaluación crítica”. En *Libro Homenaje al Profesor Rodríguez Ramos*. Francisco Javier Álvarez García / Miguel Ángel Cobos de Linares / Pilar Gómez Pavón (coords.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2013, págs. 751-770, en especial 758 y ss.

<sup>538</sup> Vid. DE ESTEBAN ALONSO, A. / ANTONOVICA, A. El término *calidad de vida* fue acuñado, junto al concepto de *aeronave tierra* por el economista Kenneth Boulding en la década de los 50, que

muchas intervenciones supongan una invasión indiscriminada en sus respectivas soberanías nacionales.

Autores como MARTÍNEZ ALIER defienden que la deuda externa de países del Sur es perfectamente equiparable (en términos de cuantificación y reclamación), e incluso supera la de los países del Norte respecto a la deuda ecológica generada por sistemas de exportación que infravaloran el precio de los productos en el mercado, al no tener en cuenta los servicios ambientales y los costes añadidos.<sup>539</sup> Sin embargo, en el contexto de la UE se fomenta la denominada “convergencia” dentro de los objetivos primordiales, ayudando a países y regiones a alcanzar la media europea (inversión en capital físico y humano, políticas de innovación, medio ambiente, etc.).<sup>540</sup>

A escala de Derecho Internacional, el principio de *responsabilidades comunes pero diferenciadas* incide en este aspecto, ya que reconoce esas diferencias y asigna a los países desarrollados un papel preponderante, al menos cuantitativamente, en la estrategia de cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible.<sup>541</sup>

---

según los autores, supuso el inicio del debate medioambiental. “Los orígenes de la sociología medioambiental y su primera evolución”. En *Observatorio Medioambiental. Instituto de Ciencias Ambientales*, vol. 14. Ed. Servicio de Publicaciones Universidad Complutense de Madrid, 2011, págs. 11-18, en especial 12.

<sup>539</sup> En este sentido, *vid.* MARTÍNEZ ALIER, J. Se decanta por impulsar la discusión, al menos sobre la reclamación de la deuda ecológica, por más difícil que resulte cuantificarla y sin adoptar la perspectiva del simple canje naturaleza-deuda externa (como ya ha ocurrido), sino de sentar las bases de un “ajuste ecológico”. <<No creo que el argumento dependa de una cuantificación exacta, que es por otro lado imposible (por ejemplo, al exportar madera del bosque tropical húmedo, se ha perdido y se pierde biodiversidad que no está tan siquiera inventariada, mucho menos es pues valorable en dinero)>>. “¿Quién debe a quién?” En MARTÍNEZ ALIER, J. / OLIVERES, A. *¿Quién debe a quién?: Deuda ecológica y deuda externa*. Ed. Público. Madrid, 2010, págs. 43-78.

<sup>540</sup> *Cfr.* RAGA GIL, J. T. Se refiere al peligro de exclusión, es decir, quedar al margen del proceso globalizador representaría privar a determinados países de los beneficios que genera dicho proceso. Continuando con este argumento, el desarrollo de los países que se han introducido en la rueda general de las actividades económicas a nivel internacional han sido los que han alcanzado mayores cotas de desarrollo. En *Globalización, sí; pero para quién*. Ed. Servicio de Publicaciones. Facultad de Derecho Universidad Complutense de Madrid. Madrid, 2009, págs. 19-22. Sin embargo, dicho planteamiento no cuenta con el hecho de que no es posible situarse en el mismo punto de partida, pues décadas o centenas de retardo, viajando en el último vagón del ferrocarril, no permiten una comparación en términos de igualdad de opciones para interrelacionarse desde un punto de vista económico a nivel internacional.

<sup>541</sup> Entre los acuerdos ambientales de carácter universal más importantes que vinculan a España, se pueden mencionar: la Convención de Viena para la protección de la capa de ozono de 1985. BOE, núm. 275, de 16 de noviembre de 1988; Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono de 1987. BOE, núm. 65, de 17 de marzo de 1989. BOE, núm. 274, de 15 de noviembre de 1989 y corrección de errores en BOE, núm. 51, de 28 de febrero de 1990; Convención de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación de 1989. BOE, núm. 227, de 22 de septiembre de 1994; Convención Marco de la Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 1992. BOE, núm. 27, de 1 de febrero de 1994; Protocolo de Kyoto de 1997. BOE, núm. 33, de 8 de febrero de 2005; Convención sobre la Diversidad Biológica de 1992. BOE, núm. 27, de 1 de febrero de 1994; Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología de 2000. BOE, núm. 181, de 30 de

En cuanto a la protección medioambiental de carácter internacional relacionada con actividades empresariales transnacionales, es posible articular demandas de carácter civil por daños graves al medio ambiente a través de la *Alien Tort Claims Act* [Ley de reclamación por agravios contra extranjeros], que si bien al principio no acogía esta posibilidad, ha sufrido algún incremento, tanto en la categoría de actores susceptibles de demanda, como en las diferentes modalidades de vulneración del Derecho Internacional que favorece.<sup>542</sup>

---

julio de 2003; Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular, en África de 1994. BOE, núm. 36, de 11 de febrero de 1997; Convención de Rotterdam sobre consentimiento previo informado de 1998. BOE, núm. 73, de 25 de marzo de 2004; Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, hecho en Estocolmo el 22 de mayo de 2001. BOE, núm. 151, de 23 de junio de 2004. *Vid.* CARDESA SALZMANN, A. *El control internacional de la aplicación de los acuerdos ambientales universales*. Ed. Marcial Pons. Madrid, 2011, pág. 17. Como afirma JUSTE RUIZ, J., la nueva generación de convenios ambientales adoptados tras la Conferencia de Río de 1992, caracterizados por mecanismos de “asimetría convencional”, han acogido en mayor o menor medida el postulado de dicho principio. Así, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 1992 y su Protocolo (Kyoto, 2007), establecen obligaciones de limitación y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a los países desarrollados y a aquellos países en vía de incorporación a la economía de mercado. Asimismo, el Convenio sobre la diversidad biológica de 1992 (art.20.4) plantea, al igual que el Protocolo de Kyoto (art. 3,7 de la Convención) un régimen de “condicionalidad inversa”, según el cual: <<La medida en que las Partes que son países en desarrollo lleven a la práctica sus compromisos en virtud del Convenio dependerá de del cumplimiento efectivo por las Partes que sean países desarrollados [...], y se tendrá plenamente en cuenta que el desarrollo económico y social y la erradicación de la pobreza son las prioridades primeras y esenciales de las Partes que son países en desarrollo>>. “El Derecho Internacional frente a los desafíos ambientales globales”. En *Derecho, Globalización, Riesgo y Medio Ambiente*. Esteban Pérez Alonso / Estanislao Arana García et. al. (eds.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2012, págs. 119-141, en especial 132-134.

<sup>542</sup> Se trata de una ley federal adoptada en 1789, que permite la reclamación por vía civil ante los tribunales de Estados Unidos por parte de extranjeros, en supuestos de violación del Derecho Internacional. Dispone que: <<*The district courts shall have original jurisdiction of any civil action by an alien for a tort only, committed in violation of the law of nations or a treaty of the United States*>>. [Los tribunales de distrito tendrán jurisdicción original de cualquier acción civil de un foráneo por un sólo agravio, cometido en violación de la ley de las naciones o un Tratado de los Estados Unidos] [tr. pr.]; (28 U.S. Code: § 1350). Sobre su naturaleza y presupuestos, *vid.* PIGRAU SOLÉ, A. Algunas modalidades de vulneración de derechos no refrendadas por el Derecho Internacional convencional han encontrado obstáculos para su inclusión en el ámbito de la ATCA, como es el caso de los daños al medio ambiente. Aunque la Corte Suprema ha mantenido una cierta sujeción en la admisión de motivos que accionen la jurisdicción de los tribunales estadounidenses, las demandas por daños al medio ambiente existen, respecto a normas ambientales que se consideran consuetudinarias pero que han sido formalizadas en textos convencionales. <<*En la medida en que evoluciona el Derecho Internacional y otras normas básicas en materia ambiental tienden a consolidarse, está más cerca el momento en que algunas de ellas puedan ser consideradas como pertenecientes al “law of nations” y, en consecuencia, constituir causa suficiente para fundamentar demandas*>>. Han sido varios los casos con relevancia medioambiental amparados en la ATCA, con desiguales resultados; *Amlon Metals, Inc. vs. FMC Corporation* (en relación a un cargamento de residuos de cobre procedente de EE.UU.); *Aguinda vs. Texaco y Jota v. Texaco* (sobre operaciones de la petrolera Texaco en territorio ecuatoriano); *Beanal v. Freeport-McMoRan, Inc* (extracción de minerales en la provincia de Irian Jaya, bajo la administración de Indonesia); *Bano vs. Union Carbide Corp* (emisiones de isocianato de metilo por el incendio de la planta de Union Carbide en Bhopal, India), entre otros. “La responsabilidad de las empresas transnacionales por daños graves al medio ambiente: explorando la vía de la Alien Tort Claims Act”. En *El Derecho Internacional ante los retos de nuestro tiempo*, Vol. I (Homenaje a la Profesora Victoria Abellán Honrubia) Anna Mª Badia Martín / Antoni Pigrau Solé / Andreu Olesti Rayo (coords.) Ed. Marcial Pons.

El fenómeno de la globalización, concepto por otra parte ambiguo, indeterminado, pero altamente diversificado en cuanto a disciplinas y causas presentes en su proceso, ha generado que las normas jurídicas nazcan de una realidad en la que dominan las fuerzas globales, frente a los estructurados marcos institucionales nacionales, que han provocado una profunda brecha en la funcionalidad del derecho positivo.<sup>543</sup> Correlato de esta nueva tendencia es la denominada “gobernanza mundial”, que se nutre de un sistema de democracias unificadas y externalizadas del ámbito democrático interno de cada nación, respondiendo a la necesidad de enfrentar retos de nueva planta en un orden económico, productivo, financiero, cultural, tecnológico, sociológico y ambiental globalizado. Así, el concepto de gobernanza ha adquirido el estatus de nuevo paradigma en el Derecho Internacional.<sup>544</sup>

Este hecho se muestra más que evidente en el área de un Derecho medioambiental global, o con pretensiones de alcanzar cierto grado de universalidad, tanto en el ámbito europeo como internacional a gran escala.<sup>545</sup> La hipocresía que rodea a este planteamiento hace que se torne difícil sostener los mismos argumentos que envuelven la política conservacionista en muchos de sus puntos porque, al plantear la disyuntiva entre optar por la desaceleración del progreso en el Primer Mundo o limitar cuantitativa y cualitativamente el acceso del Tercer Mundo a las condiciones de vida

---

Madrid, 2009, págs. 517-569, en especial 538 y ss.; “La jurisdicción extraterritorial como vía para hacer responsables a las empresas por daños al medio ambiente causados en el extranjero: especial referencia al ATCA”. En *Derecho, Globalización, Riesgo y Medio Ambiente*. Esteban Pérez Alonso / Estandislaio Arana García et. al. (eds.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2012, págs. 183-217. Vid. ALONSO GARCÍA, E. Voz “Derechos Humanos y Medio Ambiente”. En *Diccionario de Derecho Ambiental*, op. cit., págs. 483-502, en especial 498.

<sup>543</sup> En este sentido, vid. FARIA, J. E. Atiende a los numerosos focos de la economía globalizada, caracterizada en la actualidad por su policentrismo, y los envites que debe soportar el Derecho. No obstante, para el autor, la desregularización y la deslegalización a nivel estatal, no suponen un déficit de derecho, simplemente se trata de una nueva configuración de la regulación y la legalización en ámbitos no estatales. “La globalización económica y sus consecuencias jurídicas: diez tendencias del Derecho contemporáneo”. En *Derecho, Globalización, Riesgo y Medio Ambiente*. Esteban Pérez Alonso / Estandislaio Arana García et. al. (eds.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2012, págs. 19-40, en especial 22.

<sup>544</sup> Vid. JÁUREGUI, G. “La emergencia de un nuevo orden jurídico-institucional: el Estado y la Constitución en la era de la globalización”. En *Derecho, Globalización, Riesgo y Medio Ambiente*. Esteban Pérez Alonso / Estandislaio Arana García et. al. (eds.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2012, págs. 41-66; MERCADO PACHECO, P. “Desarrollo sostenible y gobernanza: retóricas del derecho global y de la justicia ambiental”. En *Derecho, Globalización, Riesgo y Medio Ambiente*, op. cit., págs. 93-117. Desde un punto de vista crítico, vid. SCHÜNEMANN, B. La ficción de la gobernanza, desde un punto de vista politológico y de Teoría del Estado, representa el dominio del más fuerte y de los intereses particulares más notables, frente a la supuesta cualidad de modernidad positiva y necesaria que aporta. En “La destrucción ambiental como arquetipo del delito”, op. cit., pág. 430.

<sup>545</sup> En sentido similar, vid. CORCOY BIDASOLO, M. “Los delitos relativos a la ordenación del territorio y el medio ambiente: una perspectiva criminológica”. En *Problemas criminológicos en las sociedades complejas*. Mirentxu Corcoy Bidasolo / Carmen Ruidiaz García (coords.) Colección Ciencias Sociales, 6. Ed. Universidad Pública de Navarra. Pamplona, 2000, págs. 55-94, en especial 57.

alcanzadas por el primero, en cualquier caso, la decisión pertenece a los países que ejerzan más poder en un espacio globalizado y, por tanto, las dos soluciones planteadas se encuentran viciadas en su germen.

Conviene añadir que la inclusión de nuevos y distintos paradigmas ambientales por parte de algunos países desarrollados, a pesar de contar con grados legislativos heterodoxos, así como diferentes tipos y porcentajes de apoyo de la masa social, como pueden ser la contaminación acústica, lumínica, gestión de residuos, etc., responde, entre otras cuestiones, a que los grandes problemas ambientales tratados por organizaciones internacionales ecologistas parecen superados en dichos países, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el acceso al agua (uno de los caballos de batalla de los países del Sur) representa un ámbito de trabajo suficientemente cultivado en determinados países desarrollados si los comparamos con otros.<sup>546</sup>

No obstante, se estima que el problema del agua regresará al primer plano a nivel mundial básicamente porque la demanda estimada en 2030 se incrementará en un 30%, mientras que los patrones de precipitación están mutando debido a los cambios climáticos inducidos por el calentamiento global, que son difíciles de predecir. Por otra

---

<sup>546</sup> La problemática del agua resulta engañosa porque en determinados países como España, la mayoría de la población tiene garantizado el acceso al agua potable, a las redes de saneamiento, etc. Sin embargo, en la realidad hídrica de nuestro país también existen incógnitas sobre cómo resolver el asunto de los trasvases de agua entre distintas Comunidades Autónomas. Esta realidad no se asemeja en nada a la que viven otros muchos países, donde la escasez, gestión, acceso y distribución del agua a través de las estrategias de ordenación territorial, sigue siendo uno de los mayores frenos a su desarrollo; como ejemplos, se pueden citar los suburbios en Manila (Filipinas), teniendo en cuenta que el continente asiático es una de las partes más golpeadas por desastres naturales, muchos países del continente africano, o países latinoamericanos como Perú o Argentina. En este último, la Cuenca del río Matanza-Riachuelo es un claro ejemplo de cómo un problema iniciado en el siglo XIX, perdura hasta nuestros días. Al respecto, *vid.* CICCOLELLA, P. / MIGNAQUI, I. Una de las zonas más contaminadas de América Latina y del mundo se localiza en esta región, con una superficie de 2.240 km<sup>2</sup>, longitud de 75 kms y población de 5 millones de personas, de las cuales un 30% carece de servicios de agua potable y el 10% habita en asentamientos precarios (villas). A raíz de la localización espontánea de industrias en los márgenes del río, y el posterior cambio del paradigma productivo en los años 70, se produjo el deterioro socioambiental en la zona y un alto nivel de contaminación en el cauce fluvial. A ello se suma la pluralidad de jurisdicciones con competencias en las cuencas superior, media y baja, ya que comprende territorios de 14 municipios metropolitanos con responsabilidades delegadas para el control de la normativa vigente, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y la Nación. Resultan aplicables más de 50 normas, si bien desde 2006, con la creación de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) como órgano interjurisdiccional, se intenta paliar esta situación. “Conflictos Ambientales, Desarrollo Urbano y Gobernabilidad: El caso de la Cuenca del Río Matanza-Riachuelo en la Región Metropolitana de Buenos Aires”. En *Periurbanización y sustentabilidad en grandes ciudades* (1ª ed.) Adrián G. Aguilar / Irma Escamilla (coords.) Ed. CONACYT, Universidad Autónoma de México / Instituto de Geografía UNAM / Miguel Ángel Porrúa. México, 2011, págs. 27-54; PICCOLOTTI, J. M. / ORLANDO VERA, A. “El acceso a la justicia ambiental en la República Argentina”. En *El acceso a la justicia de las víctimas de daños ambientales. Una perspectiva comparada*. Antoni Pigrau Solé (dir.) Paloma Milenka Villavicencio (coord.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2015, págs. 152-180, en especial 175 y ss.

parte, con las ciudades del mundo desarrollado en expansión en un número de tasas sin precedentes -tres mil millones de consumidores urbanos en 2.050-, las soluciones son vitales y necesarias para aliviar las condiciones de hacinamiento, saneamiento, manejo de residuos y transporte si pretendemos proporcionar espacios cómodos, resistentes y eficientes donde todos puedan coexistir y desarrollar los patrones de vida cotidiana.<sup>547</sup> Más allá de dichos escenarios, la relación actual con el agua también comporta un extraordinario valor en orden a los beneficios económicos que genera su mercantilización, no sólo por los pagos públicos o privados a los organismos encargados de su recogida, purificación y suministro, sino también en las últimas décadas, a través del crecimiento del mercado del agua embotellada.<sup>548</sup>

Existen países que otorgan una supremacía constitucional al desarrollo del medio ambiente como principio rector de sus respectivas políticas, pero sus estructuras comerciales e industriales cobijan actuaciones de agentes externos que no cumplen las expectativas de cumplimiento de dichos mandatos.<sup>549</sup> Se convierten así en países cuya principal función es acoger sin posibilidad de tratamiento, residuos, formas de producción empresarial, explotación de sus propios recursos naturales, o derechos básicos de poblaciones minoritarias que han sido exterminados en los países desarrollados por normativas ecológicas mucho más avanzadas y rigurosas.<sup>550</sup>

---

<sup>547</sup> En este sentido, BRISMAN, A. / SOUTH, N. "A green-cultural criminology: An exploratory outline". En *Crime Media Culture. An International Journal* 9 (2). Ed. Sage Publications. Los Angeles / London / New Delhi / Singapore / Washington D.C., 2012, págs. 115-135, en especial 125-127.

<sup>548</sup> Así, BRISMAN, A. / SOUTH, N. En *Green Cultural Criminology. Constructions of environmental harm, consumerism and resistance to ecocide*. Series: (5) New Directions in Critical Criminology. Ed. Routledge. London & New York, 2014, págs. 72 y ss.

<sup>549</sup> Por ejemplo, la reciente Constitución de Angola, de 21 de enero de 2010. Art. 39: 1.- *Todos tienen derecho a vivir en un ambiente sano y no contaminado, y asimismo el deber de defenderlo y preservarlo. 2.- El Estado adoptará las medidas necesarias para la protección del medio ambiente y de las especies de la flora y de la fauna en todo el territorio nacional, para el mantenimiento del equilibrio ecológico, la correcta localización de las actividades económicas y la explotación y utilización racional de todos los recursos naturales, en el marco de un desarrollo sostenible y de respeto por los derechos de las generaciones futuras y de la preservación de las diferentes especies. 3.- La ley castigará los actos que pongan en peligro o perjudiquen la preservación del medio ambiente.*

<sup>550</sup> En el mismo sentido, vid. CROALL, H. Opina que existen casos en los que las limitaciones legales y reglamentarias permiten florecer los delitos, aunque al mismo tiempo y de forma paradójica, el endurecimiento de las regulaciones en muchos países occidentales ha creado un mercado criminógeno en el que es más barato deshacerse de los peligros tóxicos a través de su envío a países con regulaciones menos estrictas. Algunas de estas actividades son ilegales, e implican crimen organizado, mientras que otras se encuentran en el límite entre lo legal y lo ilegal. En *Understanding white collar crime*. Ed. Open University Press. Buckingham, 2001, págs. 40-42; *White Collar Crime*. Ed. Open University Press. Buckingham, 1992, págs. 69-72; "Victims of White-Collar and Corporate Crime". En *Victims, Crime and Society*. Pamela Davies / Peter Francis / Chris Greer (eds.) Ed. Sage Publications. London, 2007, págs. 78-108, en especial 102. En ésta última publicación el autor aborda las dimensiones globales de este tipo de delincuencia, que se expande hacia otras actividades, como la explotación laboral infantil, salarios

La regresión de los Derechos Humanos se manifiesta a través de la relativización que esos Estados sufren en cuanto a su soberanía.<sup>551</sup> ¿Es posible entonces un desarrollo *sustentable o sostenible*<sup>552</sup>, tal y como predicen las campañas desarrolladas durante los últimos periodos, o se trata más bien de una formulación idílica y utópica, un intento de limitar el objeto del Derecho ambiental a valores antropocéntricos?<sup>553</sup>

---

indignos, producción de productos sin clasificar o falsificados, exposición de trabajadores desinformados y desprotegidos a condiciones de trabajo peligrosas, o la utilización de mano de obra barata y a veces forzada, que incluye el trabajo penitenciario.

<sup>551</sup> En este sentido, NIETO MARTÍN, A. En “Bases para un futuro derecho penal internacional del medio ambiente”, op. cit., pág. 139; FARIA, J. E. En “La globalización económica y sus consecuencias jurídicas: diez tendencias del Derecho contemporáneo”, op. cit., págs. 37 y 38.

<sup>552</sup> El término “desarrollo sostenible” aparece vinculado al Informe Brundtland (publicado en 1987 y presentado por la Ministra noruega Gro Harlem Brundtland en la Comisión convocada por la Asamblea General de las Naciones Unidas): <<El desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades actuales sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades>>. El documento dio lugar a que en la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Conferencia de Río, 1992), se adoptase como uno de los principios a desarrollar por los Estados en la consolidación del Derecho Internacional (Principio 27). El Principio 3 expresa: <<El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras>>. Una pormenorizada visión del inicio y desarrollo del derecho ambiental internacional a partir del citado documento en LOZANO CUTANDA, B. / ALLI TURILLAS, J.-C. *Administración y Legislación Ambiental*. (6ª ed.) Ed. Dykinson. Madrid, 2011, págs. 128 y ss. Vid. JORDANO FRAGA, J. En relación a la postura del TC sobre los criterios que deben regir el desarrollo sostenible, que el autor califica de <<moderada>>, a medio camino entre posiciones ambientalistas y desarrollistas. Voz “Desarrollo sostenible: el equilibrio entre dos valores constitucionales (medio ambiente y economía) en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. En *Diccionario de Derecho Ambiental*. Enrique Alonso García / Blanca Lozano Cutanda (dirs.) Ed. Iustel. Madrid, 2006, págs. 502-512. Vid. LOPERENA ROTA, D. I. “El derecho al desarrollo sostenible”. En *El derecho a un medio ambiente adecuado*. Antonio Embid Irujo (dir.) Ed. Iustel. Madrid, 2008, págs. 63-83; DALY, H. *Population, Technology, and Lifestyle: The Transition to Sustainability*. Co-edited with Robert Goodland and S. El Serafy. Island Press. Washington D.C., 1992; FRACCHIA, F. El principio de desarrollo sostenible aparece asociado de manera intensa al Derecho medioambiental, por cuanto comparten un objetivo final (la protección de las futuras generaciones), y una base teórica (la categoría del deber: solidaridad). Este primigenio principio es la cúspide de otros también aplicables a la parcela medioambiental, como los de precaución, prevención, quien contamina paga, entre otros. A pesar de que esta subordinación es acertada, la opción de desligar al desarrollo sostenible del medio ambiente también es válida, por cuanto aquel se relaciona con otra serie de factores no necesariamente ambientales, como por ejemplo la diversidad de las expresiones culturales. “El estatuto mínimo del derecho de la sostenibilidad en la era de la globalización”. En *Derecho, Globalización, Riesgo y Medio Ambiente*. Esteban Pérez Alonso / Estandislaio Arana García et. al. (eds.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2012, págs. 67-91. Por su parte, PLAZA MARTÍN, C., incide en un aspecto fundamental: si bien la vertiente estrictamente económica del objetivo del desarrollo sostenible fue la que originó el concepto, éste ha traspasado, junto al principio de responsabilidad compartida, el marco económico y ahora preside todos los ámbitos de actuación comunitaria en la protección del medio ambiente. En *Derecho Ambiental de la Unión Europea*. Ed. Tirant Lo Blanch. Valencia, 2005, págs. 59-66. Acerca de la evanescencia de la definición de “desarrollo sostenible”, vid. BRÚ, J. En “Medio ambiente: poder y espectáculo. Gestión ambiental y vida cotidiana”, op. cit., págs. 67 y ss.

<sup>553</sup> En este mismo sentido, vid. ALONSO GARCÍA, E. Voz “Ética ambiental y Derecho”. En *Diccionario de Derecho Ambiental*, op. cit., págs. 635 y ss. Acertadamente, ESTEVE PARDO, J., incide en un factor al que no se suele aludir, y es la brecha que se está produciendo en el consenso social sobre el progreso, que incide de manera notable en los instrumentos utilizados por el Derecho del medio ambiente respecto a los conflictos ambientales. Así, hasta hace unas décadas simplemente no existían espacios de conflicto, porque todo el mundo entendía que el progreso técnico mejoraba las condiciones

A continuación, se abren múltiples interrogantes, entre otros: ¿es el pretendido desarrollo *sostenible* compatible con los dictados de la moderna ciencia ecológica?<sup>554</sup> ¿Acota y sustituye gradualmente al Derecho ambiental?<sup>555</sup>

Es más, ¿ayudan las propias administraciones públicas a que se desarrollen comportamientos ambientales adecuados, o por el contrario obstaculizan dichas prácticas en determinadas ocasiones?<sup>556</sup>

---

de vida. En “Derecho del medio ambiente”, op. cit., pág. 14. Vid. ORDUNA, J. <<No hay herramienta más poderosa y pacífica en la actualidad para frenar, controlar, administrar el crecimiento industrial y demográfico del Sur que la promoción acrítica y anárquica de la temática ambiental>>. Y continua: <<... el antiindustrialismo y el antipoblacionismo que las grandes ecologistas comunican coinciden con elaboraciones históricas dentro de la política exterior de las grandes potencias para el Tercer Mundo>>. En “Ecofascismo. Las internacionales ecologistas y las soberanías nacionales”, op. cit., págs. 173 y 177. Por ejemplo, el mercado de derechos de emisión de CO<sub>2</sub>, creado como instrumento para la lucha contra el cambio climático, ha caído en las redes de la dañada economía europea; recientemente, el Parlamento Europeo ha desestimado una propuesta de la Comisión que paralizaba la salida al mercado de nuevos títulos, si bien falta el pronunciamiento del Consejo. *Diario EL PAÍS*, miércoles 17 de abril de 2013. La evidencia de perjudicar la competitividad de la industria europea en el contexto de la crisis actual con esta medida, ha superado el sistema de acción ideado para paliar el calentamiento atmosférico. No hay duda pues sobre la profunda contradicción existente entre los principios que rigen el “desarrollo sostenible” y las amenazas ecológicas que conllevan. La propia UE lo reconocía de forma explícita, al desglosar algunos aspectos a los que cataloga de amenazas principales al desarrollo sostenible, como el calentamiento global, cepas resistentes a los antibióticos en algunas enfermedades, posibles efectos a largo plazo de productos químicos en uso actual, pobreza, envejecimiento de la población, pérdida de biodiversidad, volúmenes de residuos, etc. Vid. “Desarrollo sostenible en Europa para un mundo mejor: estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible”. *Estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible. Comisión Europea*. Ed. Oficina Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. Luxemburgo, 2002, págs. 22 y 23. Vid., en relación a los difíciles términos de la sostenibilidad entre los países del Norte y del Sur, BRÚ, J. Parte de que no existe actualmente otra alternativa más allá de la pura gestión tecnocológica al despliegue del concepto de desarrollo sostenible, el cual en sí mismo, se ha convertido en un producto ideológico sumamente popular. En “Medio ambiente: poder y espectáculo. Gestión ambiental y vida cotidiana”, op. cit., págs. 93 y ss.

<sup>554</sup> Por ejemplo, a nivel europeo, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada en Niza en 2000, alude al desarrollo sostenible y su relación con la protección medioambiental en el art. 37: <<Las políticas de la Unión integrarán y garantizarán con arreglo al principio de desarrollo sostenible un alto nivel de protección del medio ambiente y la mejora de su calidad>>. En 2009, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Carta adquirió el mismo carácter jurídico vinculante que los Tratados. En este sentido, reflejando que el objetivo que persigue la sostenibilidad resulta incompatible con el desarrollo económico, vid. CORCOY BIDASOLO, M. Pese a las objeciones, se muestra partidaria de que la idea de desarrollo sostenible, en el sentido de *sistema de desarrollo sostenible*, que es el propuesto por las Directivas comunitarias, se encuentre estrechamente ligado a la protección penal medioambiental. En “Los delitos relativos a la ordenación del territorio y el medio ambiente: una perspectiva criminológica”, op. cit., págs. 56-59. Vid. BESTANI, A. Entiende que tanto el principio de precaución como el de fraternidad se vinculan a la sostenibilidad porque son las condiciones culturales, económicas y sociales las que se encuentran en la base de la crisis ecológica actual. “Principio Precautorio, Fraternidad y Generaciones Futuras”. En *DPI Diario Ambiental*, Año 2, núm. 12, jueves 27 de marzo de 2014. Disponible en: <http://www.dpicanuatico.com/ambiental/diario-ambiental-nro-12-27-03-2014/> (último acceso 12/07/2015).

<sup>555</sup> Vid. ALONSO GARCÍA, E. Esta tendencia es clara en el marco nacional, europeo e internacional, pero en ningún caso es acertada por varias razones: el desarrollo sostenible es antropocéntrico por definición, con las limitaciones éticas que ello comporta, y además desde un punto de vista jurídico, pueden existir sectores del Derecho ambiental, normas de Derecho positivo o mecanismos jurídicos de toma de decisiones que no derivan exclusivamente del principio de desarrollo sostenible, sino que responden a criterios diferentes. Voz “Concepto de medio ambiente como objeto del derecho: el ámbito del derecho ambiental”. En *Diccionario de Derecho Ambiental*, op. cit., págs. 340 y 341.



Esta última cuestión choca abiertamente con el fenómeno normativo-globalizador expuesto con anterioridad, pues resulta dificultoso trazar líneas de actuación en determinados segmentos ambientales por parte de las administraciones públicas, en muchas ocasiones con independencia de sus competencias propias y genuinas, que irremediabilmente se difuminan.<sup>557</sup>

En cualquier caso, la idea que subyace sucesivamente, a veces revestida de capas que pretenden ocultar el verdadero presupuesto básico, es que la idea de “Naturaleza” se supedita de forma total y única a la existencia del ser humano.<sup>558</sup> Se

---

<sup>556</sup> Un clarísimo ejemplo lo encontramos en los llamados Planes Graduales de Descontaminación. Vid. CORCOY BIDASOLO, M. A través de los mismos, la administración autoriza temporalmente la superación de los límites de contaminación previstos por las Leyes y Reglamentos para evitar situaciones de cierre inmediato de determinadas empresas, por el coste social que comporta. Lo cierto es que esa autorización carecería de relevancia penal a efectos de eludir la responsabilidad del sujeto o de la empresa, lo que supone, una vez más, que las externalidades económicas de la protección medioambiental actúan como freno a la aplicación de la normativa existente. En “Los delitos relativos a la ordenación del territorio y el medio ambiente: una perspectiva criminológica”, op. cit., págs. 59 y 60.

<sup>557</sup> A continuación se citan dos ejemplos muy significativos acerca de las contradicciones que se producen, incluso en los marcos normativos internos o nacionales: 1.- Campaña de reciclaje de vidrio 2013 en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Se divulga a través de distintos medios de comunicación que se premiará a la provincia andaluza que más vidrio recicle durante el verano de 2013 con la celebración de un concierto totalmente gratuito de un cantante de éxito. Obviamente, es presumible que se produzca un mayor consumo de vidrio al dotar de una motivación (el concierto: premio) a la población, que si bien tiene la finalidad de reciclar, conduce a una actuación ambiental del todo incorrecta. Según los criterios científicos, lo que representaría una mayor protección medioambiental sería reducir la producción y el consumo de vidrio, y no el fomento de un consumo cuyo propósito, al final del presupuesto, es mercantilista. Además, es sólo una muestra más de cómo las administraciones públicas absorben y cobijan actividades que, en el marco del artículo 325 de nuestro Código Penal y en concreto, respecto a la emisión de ruidos, se considerarían alteradoras del sistema sonoro normalizado respecto a las determinadas normativas locales, bien diferenciadas en el territorio nacional; 2.- La reciente Ordenanza del Ayuntamiento de Mojácar (Almería), reguladora del ruido procedente de usuarios de vía pública, actividades domésticas y de vecinos, aprobada el 4 de julio de 2013 [BOP Almería núm. 129, martes 9 de julio de 2013, págs. 7-16] recoge un catálogo de infracciones y sanciones extenso y especialmente estricto en cuanto a comportamientos ruidosos. Por ejemplo, el art. 14 congrega reglas de comportamiento cívico y vecinal susceptibles de sanción, tales como el cierre brusco de puertas, proferir gritos, vociferar, patinar, taconear, hacer funcionar aparatos de música, instrumentos musicales y electrodomésticos ruidosos, arrastrar muebles u objetos, prohibición de dejar solos a los animales, aunque sea temporalmente en viviendas, balcones, ventanas, patios, etc.

<sup>558</sup> En este sentido, por ejemplo, el Derecho Internacional ha sido el primero en validar, aunque de forma velada, la idea contraria, a través del principio de precaución (también conocido como principio de cautela). Este principio se construyó en base a consideraciones científicas, que a su vez inspiraron convenios internacionales, pero a partir de la década de los 90, sufrió un cambio de dirección, en el sentido de otorgar especial interés a la incertidumbre científica y, con ello, se modificó la relación hasta entonces existente entre capacidad científica y protección del medio ambiente. Vid. CONDE ANTEQUERA, J. “Responsabilidad y restauración ambiental por riesgos del desarrollo”. En *Derecho, Globalización, Riesgo y Medio Ambiente*. Esteban Pérez Alonso / Estanislao Arana García et. al. (eds.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2012, págs. 479-503, en especial 486; JUSTE RUIZ, J. Se produce, ante la ausencia de certeza científica, una inversión en la carga de la prueba respecto a actividades o materiales peligrosos, que el autor defiende en cuanto a su interpretación, como <<*in dubio pro natura*>>. En “El Derecho Internacional frente a los desafíos ambientales globales”, op. cit., págs. 129 y 130. Vid. PLAZA MARTÍN, C. El principio de precaución nació en el seno del Derecho ambiental alemán, a principios de la década de los años 70, aunque hasta 1982 no fue mencionado por vez primera en el marco del Derecho Internacional Ambiental, en la Carta Mundial de la Naturaleza por la Asamblea

siguen construyendo argumentos en torno a esta idea, de fuerte calado en las políticas económicas y, por consiguiente, en lo que la sociedad percibe como más útil o rentable, desde un arquetipo de justicia ambiental dominado por el miedo del hombre a perder la hegemonía en el control, sin tener en cuenta, como afirma parte de la doctrina (científica, sociológica y filosófica), que el lugar que ocupamos en la misma es francamente prescindible en su natural desenvolvimiento.<sup>559</sup>

Por otra parte, la interpretación ecocéntrica no impide admitir que ciertos tipos penales puedan integrar acciones contra el medio ambiente que, de forma supletoria, originen una puesta en peligro para la vida u otros bienes jurídicos individuales.<sup>560</sup> Esta cuestión es importante a la hora de reflexionar sobre el riesgo<sup>561</sup>, que es el primer eslabón que sustenta la actual cuestión de la protección ambiental, ya que como afirma

---

General de Naciones Unidas. En “Derecho Ambiental de la Unión Europea”, op. cit., págs. 160 y ss. Aborda el significado jurídico penal del principio de precaución, PÉREZ ALONSO, E. J. El principio de precaución aplicado como fundamento exclusivo al Derecho penal, supondría afirmar la existencia de delitos de precaución, lo que no parece acorde con los postulados del Derecho penal basados en la prevención y el riesgo permitido, a no ser que prescindamos de las categorías dogmáticas utilizadas, como la imputación objetiva; por ello, el autor lo califica de *Derecho Penal de ciencia ficción*. No obstante, lo encuentra aplicable en delitos de peligro y delitos imprudentes fundamentalmente; partiendo de la inexistencia de los delitos de precaución (que supondrían un escalón previo a los delitos de peligro abstracto), en todo caso su incidencia se daría en la caracterización de la conducta peligrosa que fundamenta este tipo de delitos y así, ayudaría en la interpretación del tipo penal abstracto en cuestión. Es precisamente bajo estas coordenadas donde el principio de precaución se torna más visible, en el ámbito del Derecho administrativo, de donde se traslada al Derecho penal por la vía de las leyes penales en blanco, que requieren de una normativa extrapenal (generalmente basada en el principio de precaución) para completar el tipo. “Expansión, riesgo y principio de precaución en el Derecho Penal”. En *Derecho, Globalización, Riesgo y Medio Ambiente*. Esteban Pérez Alonso / Estanislao Arana García et. al. (eds.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2012, págs. 393-413.

<sup>559</sup> Vid., como principales exponentes BOFF, L. Es más, nuestra posición cronológica en el desarrollo de los ecosistemas es muy tardía. <<Nosotros hemos entrado en el proceso de evolución cuando ésta alcanzó un nivel altísimo de complejidad. Entonces, irrumpió la vida, y como subcapítulo de la vida, la vida humana, consciente y libre>>. En “El Planeta Tierra. Crisis. Falsas soluciones. Alternativas”, op. cit., pág. 40; TAYLOR, P. W. En “The Ethics of Respect for Nature”, op. cit. Otro de los elementos que ha imperado hasta hace escasas décadas en la conciencia ambiental, es la total confianza en que el dominio pleno de la Naturaleza por parte del humano es posible, lo que a su vez explicaría el desinterés jurídico existente en la materia. Esta creencia es uno de los componentes de lo que se ha denominado “alta modernidad” o “modernidad tardía”. Al respecto, vid. HARVEY, D. *The condition of postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change*, (reimp.) Ed. Blackwell. Oxford, 2000; GARLAND, D. *The culture of control. Crime and Social Order in Contemporary Society* (1<sup>st</sup> ed. 4<sup>th</sup> reprinted.) Ed. Oxford University Press New York, 2010. Existe una edición anterior traducida al castellano por Máximo Sozzo: *La cultura del control. Crimen y orden social en la sociedad contemporánea*. Ed. Gedisa. Barcelona, 2005. Así, LUHMANN, N., considera que no hay que excluir la posibilidad de que el ser humano desaparezca como ser vivo y que, en todo caso, las sociedades futuras vivirán irremediamente en un mundo distinto al nuestro, basado en otras perspectivas y preferencias. En *Observaciones de la modernidad. Racionalidad y contingencia en la sociedad moderna*. Carlos Fortea Gil (tr.) Ed. Paidós. Barcelona, 1997, págs. 139 y 140.

<sup>560</sup> Vid. ALONSO ÁLAMO, M. <<La contraposición ecocentrismo-antropocentrismo debería ser, desde esta perspectiva, superada>>. En “Trama de la vida y protección penal del ambiente”, op. cit., págs. 53 y 54.

<sup>561</sup> Vid., por todos, la famosa obra de BECK, U. *La sociedad del riesgo global*. Jesús Alborés Rey (tr.) Ed. Siglo XXI de España. Madrid, 2002.

LUHMANN, el arquetipo de riesgo predecible es escaso en cuanto a su precisión, por lo que se inclina a diseñar formulaciones que partan de lo que denomina *ecología de la ignorancia*.<sup>562</sup> Este nuevo paradigma de justicia ecológica debe integrar de forma vinculante la *función heurística*, esto es, la creación de conceptos, normas y regulaciones novedosas a fin de crear un marco de referencia en la protección ambiental.<sup>563</sup>

Con el empleo de este tipo de expectativa, RIECHMANN aboga por un criterio de justicia ambiental basado en la distribución justa de *bienes y males ambientales* entre todos los seres vivos que comparten la biosfera, apartándose del tradicional principio de justicia ambiental, vinculado a la desigualdad social ecológica entre los seres humanos.<sup>564</sup>

Se percibe la viabilidad de este planteamiento especialmente si nos situamos en un escenario de Derecho Internacional, puesto que la mayor parte de cuestiones ambientales se integran a la perfección con las posibilidades que brinda la protección a escala comunitaria e internacional, unas ya existentes, y otras carentes en principio de obstáculos teóricos y prácticos que puedan impedir o dificultar su nacimiento.<sup>565</sup>

---

<sup>562</sup> El grado de especificación funcional alcanzado por la sociedad moderna repercute en la comunicación social sobre el entorno, dando paso a la hipótesis de que la comunicación ecológica es tan intensa, precisamente a causa del desconocimiento real que existe sobre el riesgo. Vid. LUHMANN, N. <<La sociedad moderna vive su futuro en forma del riesgo de las decisiones. Para poder formular esto así, hay que cortar a la medida el concepto de riesgo y darle una precisión que en el amplio ámbito de la actual investigación de riesgos no se alcanza o se alcanza raras veces>>. En “Observaciones de la modernidad. Racionalidad y contingencia en la sociedad moderna”, op. cit., págs. 129 y ss., en especial 132. En la disciplina científica también se denuncia la falta de competencia técnica de los diversos actores que disertan sobre cuestiones de gran trascendencia (la llamada vida artificial de los organismos modificados genéticamente, la clonación, y la ciencia en general), cuyo sustrato mezcla tanto convicciones personales, como prejuicios y creencias varias. Así, REDI, C. A. *Il biólogo furioso. Provocazioni d'autore tra scienza e politica*. Ed. Sironi. Milano, 2011.

<sup>563</sup> Se sigue aquí el planteamiento de VICENTE GIMÉNEZ, T. “Proyección de la justicia ecológica en la ordenación política y jurídica del medio ambiente”. En *Justicia ecológica y protección del medio ambiente*. Teresa Vicente Giménez (coord.) Ed. Trotta. Madrid, 2002, págs. 71-81.

<sup>564</sup> Vid. RIECHMANN, J. “Tres principios básicos de justicia ambiental”. En *Revista Internacional de Filosofía Política*, núm. 21. Ejemplar dedicado a: Naturaleza y sentido de la guerra de hoy, julio 2003, págs. 103-120.

<sup>565</sup> Por ejemplo, es curioso que el primer Tratado Internacional dedicado a un problema de carácter medioambiental fuera un acuerdo para la protección de las aves útiles para la agricultura, firmado en París en 1902. Lo recoge CORCOY BIDASOLO, M. “Los delitos relativos a la ordenación del territorio y el medio ambiente: una perspectiva criminológica”, op. cit., pág. 57, nota 5. La cúspide de dicha protección es el beneficio que se deriva para el hombre a través de la actividad agrícola, no la protección de dichas aves, si no fueran fundamentales para el buen desarrollo de la misma.

Otra cuestión muy diferente es encontrar capacidad y potencial capaces de desplegar la creación de ciertos organismos, con competencias exclusivas en espacios que transcurren entre extensiones económicas, de globalización, y legislativas.<sup>566</sup>

El principal dilema que surge al hilo de adoptar una posición biocéntrica estricta es el siguiente. ¿Son aptos los seres vivos distintos al ser humano para construir un modelo de comportamiento basado en un respeto riguroso por el entorno, sin tener en cuentas sus propios intereses, contando para ello con los criterios de proporcionar una mejor existencia a otras especies extrañas a aquellas a la que pertenecen?<sup>567</sup> Podemos afirmar que esto no ocurre, por lo que la eterna disyuntiva entre optar por una teoría antropocéntrica o por una ecocéntrica se diluye en el sustrato más importante, esto es, proporcionar una protección efectiva del ambiente y así, lo verdaderamente importante es trasladar la discusión al fin teleológico, cuyas premisas son la conservación y tutela del ecosistema, y su concepción como totalidad. A ello se ha de añadir que el ser humano debe colocarse en una posición de garante más enérgica, puesto que su capacidad de raciocinio y voluntad se encuentra en un estadio superior respecto a los demás componentes de la biosfera.<sup>568</sup>

---

<sup>566</sup> Vid., la panorámica de conjunto que ofrece RUBIO FERNÁNDEZ, E. M<sup>a</sup>. “Expansión de la legislación ambiental: su dimensión internacional”. En *Justicia ecológica y protección del medio ambiente*. Teresa Vicente Giménez (coord.) Ed. Trotta. Madrid, 2002, págs. 99-162. Sobre los distintos mecanismos y particularidades del Derecho Internacional, vid. LAGO CANDEIRA, A. En muchos casos es dificultoso catalogar un asunto medioambiental como estrictamente internacional, ya que posiblemente sea más bien global, regional, transfronterizo, nacional, o se trate de combinaciones diversas entre las distintas secciones. Además, el Derecho Internacional medioambiental tiene una serie de características propias que lo alejan del Derecho convencional; por citar tan sólo una de ellas, la existencia de Convenios ambientales que rompen la uniformidad de reglas de obligación de cumplimiento para todas las Partes Contratantes. Voz “Derecho Internacional del medio ambiente”. En *Diccionario de Derecho Ambiental*, op. cit., págs. 467-483.

<sup>567</sup> En otras palabras, otras especies también actúan, con independencia de su trascendencia más o menos directa o cuantitativa (en el sentido de aprovisionamiento, merma y destrucción de recursos naturales), e interactúan con los elementos naturales sin tener en cuenta la existencia de *otras especies u organismos diferentes* [entre los cuales se incluiría el ser humano]. Por lo tanto, podríamos encontrarnos con el contrasentido de criticar el “osocentrismo” de los osos, o el “abietaceatrismo” de abetos y pinos. Todo ello, claro está, en el sentido objetivo del término antropocentrismo, sin valorar la profunda brecha subjetiva que separa los distintos grados de intelecto, es decir, teniendo en cuenta tan sólo la cláusula del “valor inherente” que propugnan los defensores del biocentrismo. Vid. RIECHMANN, J. Lo denomina antropocentrismo en sentido *epistémico* para diferenciarlo del antropocentrismo en sentido *moral*, que soporta el centro de la discusión, por otra parte erróneamente formulada. En “Una ética de la Tierra”, op. cit., pág. 29.

<sup>568</sup> Lo que SINGER denomina “autoconciencia”, si bien el autor lo trata como un supuesto de situación privilegiada de la especie humana, en una visión, en nuestra opinión, antropocéntrica pura. Vid. SINGER, P. *Desacralizar la vida humana. Ensayos sobre ética*. Helga Kuhse (ed.) Carment García Trevijano (trad.) Ed. Cátedra. Madrid, 2003.

Este emplazamiento racional del ser humano es el que le impone una suerte de opciones de comportamiento respecto al medio; puede elegir las más adecuadas para la consecución de su propio bien, o las menos idóneas pero más altruistas para minimizar los efectos negativos en otras especies.<sup>569</sup>

De este modo, es inevitable sumergirse en una reflexión de la que surgen interesantes cuestiones. ¿Debe la ética ecológica fundamentar la existencia de un bien jurídico denominado medio ambiente? ¿Resulta imprescindible para tal fin dotarlo de un contenido material despejado o descubierto, o por el contrario, necesita un objeto conciso y determinado? ¿Existen posibilidades de que el Derecho penal acoja una configuración ecocéntrica y dote de protección a ese bien jurídico previamente enunciado, o bien resulta en el fondo una presencia alegórica?

#### **2.4.1.- Premisas holísticas de la teoría de Paul Taylor: el valor inherente**

La estructura fundacional que propone la teoría ético-biocéntrica de TAYLOR, si se entiende en términos absolutos, es criticable.<sup>570</sup> Formula la adopción de tres elementos interrelacionados: una determinada actitud moral fundamental, que denomina “respeto a la Naturaleza”, un sistema de creencias que constituya una forma de concebir el mundo natural y nuestro lugar en él, y un sistema de reglas morales y patrones que ordenen nuestro tratamiento de los ecosistemas.<sup>571</sup>

---

<sup>569</sup> En este sentido, *vid.* JONAS, H. En todo caso, el filósofo fundamenta la necesidad de elección en base a la prudencia de actuar correctamente porque la Naturaleza es vulnerable y esto entraña un riesgo para la supervivencia de la especie humana. *El principio de responsabilidad: ensayo de una ética para la civilización tecnológica*. Ed. Herder. Barcelona, 1995.

<sup>570</sup> *Vid.* TAYLOR, P. W. Plantea una abismal reordenación de nuestra naturaleza moral, pero al mismo tiempo investiga la posibilidad de llevarla a cabo a través de la liberación de lo que denomina “prejuicio antropocentrismo” en el que nos hemos educado, que impide la consecución real del igualitarismo biocéntrico que propugna. “The Ethics of Respect for Nature”, *op. cit.*; “In Defense of Biocentrism”. En *Environmental Ethics*. Vol. 5, Issue 3, Fall 1983, págs. 237-243.

<sup>571</sup> Así, TAYLOR, P. W. Presenta su teoría de la ética del respeto por la naturaleza como un sistema ético centrado en la vida, cuya simetría estructural con la teoría de la ética humana es equivalente. Sostiene que el equilibrio de la Naturaleza no es una norma moral, sino que es el valor inherente de cada organismo individual el que determina nuestras relaciones morales con los mismos. Para su comprensión, son esenciales dos conceptos; por una parte, el bien propio de cada organismo, que no es extensivo a la capacidad de sentir; por otra, la idea de valor inherente, en la que están implicados dos principios generales: el principio de consideración moral y el de valor intrínseco. El primero se mantiene sin importar a qué especie pertenezca el organismo (no obstante, los agentes morales pueden actuar de forma contraria al bien de ese ser con el fin de promover el bien de los demás, incluido el bien de los seres

No obstante, el perfeccionamiento de su tesis hacia soluciones aplicables a la resolución de conflictos entre humanos y no humanos, se da en la estimación de cinco principios básicos, cuya aplicación debe estar en consonancia con un requisito fundamental, la imparcialidad entre especies. El autor no esconde ni elude que el uso de estos cinco principios vaya a evitar la existencia de casos de difícil solución, pero describe que sucede exactamente lo mismo cuando son los Derechos Humanos dentro de la ética humana los que irrumpen en conflicto.<sup>572</sup>

---

humanos). El segundo afirma que el bien de una entidad es algo digno de ser conservado como un fin en sí mismo, la realización de su bien es algo intrínsecamente valioso. Así, la actitud de respeto a la Naturaleza no deriva de ninguna norma superior, es un compromiso definitivo, es decir, establece el marco de nuestras responsabilidades con el mundo natural y, al igual que nuestro amor hacia una persona individual es distinto a nuestro respeto por todas las personas, el amor a la Naturaleza se diferencia del respeto a la Naturaleza. Dentro de la perspectiva biocéntrica de la Naturaleza, el elemento aglutinador para justificar esa actitud de respeto es la negación de la superioridad humana, en base a que la reclamación se ejerce por parte de los propios humanos y bajo sus premisas, pero se puede pensar en la afirmación de superioridad bajo la premisa de otros estándares, que no son necesariamente valores humanos. Por ejemplo, alude al ejemplo de la superioridad en velocidad del guepardo respecto a la del hombre para negar la valoración basada en juicios de mérito, precisamente porque ese concreto mérito es signo de superioridad cuando es considerado desde el punto de vista del bien de su especie. Esto es lo que distingue los juicios de mérito de los juicios de valor inherente. Sin embargo, todo ello no significa que todos los organismos tengan derechos morales, sino que a través de otorgarles protección legal se reconoce públicamente su valor inherente. En "The Ethics of Respect for Nature", op. cit., págs. 200 y

ss.

<sup>572</sup>

*Vid.* TAYLOR, P. W. El contenido esencial de los mismos sería: 1.-El principio de legítima defensa: establece que los agentes morales pueden protegerse del peligro de los organismos nocivos y, por tanto, destruirlos, pero tan sólo cuando dichos agentes morales no puedan evitar exponerse a ellos ni impedir que dañen gravemente las condiciones ambientales para su existencia y funcionalidad. Aquí, Taylor observa un gran paralelismo con el principio de legítima defensa dominante en la ética humana. 2.-El principio de proporcionalidad: se aplica cuando existe conflicto entre los intereses básicos de animales o plantas e intereses no básicos del ser humano. Nuestros intereses no básicos son los fines particulares que consideramos valiosos de perseguir y los mejores medios que consideremos para lograr nuestro sistema de valores particular; sin embargo, los intereses básicos son comunes, no individuales. Así, existen intereses no básicos que son intrínsecamente incompatibles con una actitud de respeto a la Naturaleza. El paralelismo con la disciplina de la ética humana en este caso lo encuentra en que, dentro de sus límites, las personas tienen el derecho a perseguir sus intereses legítimos sin interferencias, siempre y cuando su búsqueda no implique causar un mal a otra persona. 3.-El principio de mínimo error: se aplica en situaciones en la que existe el conflicto enunciado en el principio de proporcionalidad, pero la diferencia radica en que el interés humano aquí ya no es intrínsecamente incompatible con el respeto a la Naturaleza; no obstante, son necesarias acciones que se saben perjudiciales para los intereses básicos de plantas o animales y aún así, los seres humanos objetivamente informados y que han adoptado una actitud de respeto hacia la Naturaleza, no están dispuestos a renunciar. Pues bien, en este caso, el principio establece que se permite la consecución de esos valores sólo mientras llevarlos a cabo implique un menor número de errores (violación de deberes) que cualquier otra forma alternativa, es decir, elegir la alternativa que implique el menor número de actos que causan daño. Lo característico de este principio es que se suscribe voluntariamente y sigue su propia guía normativa. 4.-El principio de justicia distributiva, que abarca conflictos donde los intereses de todas las partes involucradas son básicos. 5.- Finalmente, el principio de justicia retributiva, que se aplica únicamente cuando antes no se han empleado ni el principio de mínimo error ni el de justicia distributiva. En *Respect for Nature: A Theory of Environmental Ethics* (25<sup>th</sup> Anniversary Edition) Ed. Princeton University Press. New Jersey, 2011, págs. 262-305.

La reprobación más severa que encuentran en estos axiomas autores como SPITLER, parte de dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, no parece concebible que un ser humano pueda ser capaz de entender la Naturaleza (adoptar la actitud moral que Taylor denomina *respeto por la Naturaleza*) desde una perspectiva alejada de su propio yo. La segunda, y no por ello menos trascendental, es la equivalencia de conductas morales, que extrae de una lectura literal de Taylor; entre matar a una persona o a una mosca, o pisotear una flor silvestre, no existiría un acto con mayor susceptibilidad de ser reprobable moralmente que otro.<sup>573</sup> La cuestión es que la concatenación de hechos biológicos que intervienen en los procesos evolutivos del ecosistema, se resuelve finalmente en un perímetro cerrado que gira constantemente sobre sí mismo, con la intervención más o menos activa y gradual de todos los organismos. La conclusión o tercera parte del silogismo propuesto sería que resulta superfluo tomar como punto de partida excluyente alguna de las dos corrientes, ya que ambas nos llevan a un mismo resultado pragmático: somos la única especie que tenemos capacidad consciente de actuar y realizar transformaciones en el ambiente que rodea a la Naturaleza (entendida nuestra pertenencia a la misma como especie), tanto positiva como negativamente. Y es precisamente en ese actuar consciente donde nace la obligación moral que nos compromete con ella, que no tiene por qué diferenciarse tanto, ni desafiar a la obligación moral que nos une a nuestros semejantes. No se trata de argumentar que ambas tengan el mismo valor, sino de que la asunción de responsabilidades que tenemos sobre otra persona (no matar) es perfectamente encuadrable en la misma categoría de responsabilidad respecto a otro ser vivo. Si no fuera así, ¿cómo afirmar que es correcta la actitud moral de matar a otra persona en determinados supuestos, tales como la legítima defensa? La nota diferencial se refleja en la arbitrariedad de la acción, el episodio puro de destrucción es igualmente erróneo en su esencia, pero adquiere mayor grado de censura si se ejecuta injustificadamente, tanto si lo aplicamos a seres humanos como a otros seres vivos, de naturaleza animal o vegetal.

---

<sup>573</sup> Vid. SPITLER, G. Aún tratándose de posiciones que considera inviables por la posición ética que los seres humanos se verían obligados a adoptar en su vida cotidiana, reconoce la rigurosidad y significación del trabajo de Taylor, con el que por otra parte, coincide en determinados puntos, como el que sugiere que aunque seamos la especie dominante en la Tierra, ello por sí solo no nos confiere una superioridad intrínseca. "Justifying a Respect for Nature". En *Environmental Ethics*, Vol. 4, Issue 3, Fall 1982, págs. 255-260.

En todo caso, no implica una desigualdad de valores, es decir, el *valor inherente* de cada organismo permanece indemne, lo que se altera es la jerarquía en la infracción de sus derechos cuando las circunstancias así lo exijan.<sup>574</sup>

#### 2.4.2.- ¿Aplicación en materia acústica?

En un plano teórico, la hipótesis del valor inherente que Taylor propone se puede adecuar a la estructura general de los delitos contra el medio ambiente, que se apoya en la noción de bien jurídico colectivo o macrosocial, si se adopta una postura ecocéntrica, aunque la mayoría de la doctrina penalista rechaza esta opción. Parece irremediable, aún sin integrar en esta reflexión teorías tan discutidas como las mencionadas, que el Derecho penal del medio ambiente tendrá que ser ecocéntrico; es más, en caso contrario, sencillamente no será; su obsolescencia implicará que resulte inaplicable.<sup>575</sup>

Ahora bien, dado que el bien jurídico es de carácter colectivo, algo en lo que sí parece existir consenso doctrinal, y dicho bien jurídico se instituye como paradigma de

---

<sup>574</sup> Se sigue aquí, en parte, el razonamiento de TAYLOR, P. W. En su réplica a la crítica de Spitler, declara: <<Si aceptamos la perspectiva biocéntrica y consideramos a tales criaturas como poseedoras de valor inherente, de hecho siempre será equivocado [-other-things-being-equal-], matar o dañar a cualquiera de ellos. Será tan equivocado como matar o dañar a un ser humano. Pero esto no implica de ninguna manera que los seres humanos nunca deben matar o dañar a un animal o planta salvaje [...] Lo que sí implica es que los seres humanos no deben hacer tal cosa sin una razón moral suficiente que compense la maldad del acto [...] El principio de imparcialidad de especies no se opone a una resolución justa de conflictos entre las especies más que el principio de imparcialidad en la ética humana se opone a una solución justa de conflictos entre las personas>> [tr. pr.]. En “In Defense of Biocentrism”, op. cit., pág. 242. En sentido similar se expresa STONE, C. D. <<... decir que el medio ambiente debe tener derechos no quiere decir que debe tener todos los derechos que podamos imaginar, ni siquiera el mismo cuerpo de derechos que tienen los seres humanos. Ni tampoco que cada cosa en el medio ambiente deba tener los mismos derechos que cualquier otra cosa en el medio ambiente>> [tr. pr.]. En “Should trees have standing? Law, Morality, and the Environment”, op. cit. pág. 3. Vid. VICENTE GIMÉNEZ, T. Según la autora, la atribución de derechos a la Naturaleza se llevaría al plano específicamente jurídico realizando una síntesis entre antropocentrismo y ecocentrismo, que debiera superar las posiciones subjetivas que fundamentan un pacto originario. En “Orden ambiental-orden jurídico. Interdependencia, participación y condicionalidad”, op. cit., pág.48.

<sup>575</sup> Vid., uno de los escasos puntos de vista radicalmente ecocéntricos de la doctrina penal española en PAREDES CASTAÑÓN, J. M. “El Derecho Penal español del medioambiente: una evaluación crítica”, op. cit., pág. 763.



protección de las generaciones futuras<sup>576</sup>, esta idea es perfectamente compatible con una defensa de protección hacia futuras generaciones de otro tipo de especies biológicamente distintas al ser humano.

Así, la aplicación de esta singular teoría al estudio de este trabajo, pasaría necesariamente por catalogar a la materia “ruido” como parte integrante de la noción generalista de medio ambiente, que a su vez requeriría una revisión de los parámetros de creación y aplicación de las diferentes normativas anti-ruido hasta ahora existentes, puesto que no contemplan ningún supuesto de protección que permita inferir que se protege la calidad de vida de otras especies distintas a la humana.<sup>577</sup> La única referencia que podríamos citar *a contrario sensu* la contiene el art. 21 de la Ley del Ruido de 2003, al establecer que las CCAA podrán delimitar como reservas de sonidos de origen natural determinadas zonas en las que la contaminación acústica producida por la actividad humana no perturbe dichos sonidos. Asimismo, dispone que podrán establecerse planes de conservación de las condiciones acústicas de tales zonas o adoptarse medidas dirigidas a posibilitar la percepción de aquellos sonidos.<sup>578</sup>

De la definición de contaminación acústica ofrecida por la Ley del Ruido tampoco podemos extraer una fácil interpretación de la tipicidad penal en caso de que la emisión de ruidos pueda afectar (esto es, si presenta la aptitud requerida) a seres vivos distintos al hombre.<sup>579</sup> El refrendo de esta interpretación es que no existe

---

<sup>576</sup> En contra, por ejemplo, *vid.* ALCÁCER GUIRAO, R., para quien el Derecho penal, en ningún caso está llamado a proteger los intereses de las futuras generaciones. En “La protección del futuro y los daños cumulativos”, *op. cit.*

<sup>577</sup> No obstante, también existen voces que se decantan decididamente por considerar al ruido un agente contaminador más, tanto para la salud humana como para la del ecosistema. Este planteamiento es defendido por GONZÁLEZ, A. E. En “What Does “Noise Pollution” Mean?”, *op. cit.*

<sup>578</sup> A pesar de la literalidad del texto, no se puede considerar que esta norma persiga una protección acústica de la flora y fauna en términos generales; muy al contrario, la finalidad última es preservar las condiciones sonoras en determinadas áreas naturales para que las personas puedan disfrutar de ellas. *Cfr.* RUIZ DE APODACA ESPINOSA, A. “Instrumentos de prevención y corrección de la contaminación acústica”, *op. cit.*, págs. 110 y 111.

<sup>579</sup> El art. 3 d) expresa que la contaminación acústica es <<la presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente>>. En este sentido, QUINTERO OLIVARES, G., incide en que la dimensión de la regulación de las infracciones y sanciones en esta Ley claramente toma en consideración la superación de los valores límite aplicables, siempre y cuando se produzca un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se ponga en peligro grave la seguridad o la salud de las personas, para aplicar la infracción muy grave. En “La especialidad del Derecho penal ambiental en relación con la contaminación acústica y la contaminación del agua”, *op. cit.*, pág. 14. No considera que se trate de un delito de aptitud, sino de peligro abstracto GALLARDO FERNÁNDEZ, L. “El ruido: una moderna forma de criminalidad”. En *Diario La Ley (Estudios Doctrinales)*. Año 2010, núm. 7376, pág. 2.

pronunciamiento judicial alguno acerca de los efectos contaminantes que puede producir el ruido en otras especies, ni en elementos naturales tales como la atmósfera, el suelo, el subsuelo, o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas. No obstante, su antítesis aparece de nuevo avalada por estudios empíricos datados en la década de los años 70, que concluyen que los animales expuestos a niveles elevados de ruido presentan problemas en sus funciones reproductora y sexual, y poseen menor resistencia a enfermedades víricas.<sup>580</sup>

#### **2.4.2.1.- Efectos del ruido antropogénico en otras especies animales y vegetales**

El ruido ostenta la capacidad de transformar la visualización y percepción de cualquier paisaje. Como consecuencia, cuando sufre alteraciones también se modifican las condiciones bióticas / biológicas de subsistencia y desarrollo de cualquier especie autóctona del lugar donde se haya producido esa mutación sustancial del paisaje. Esta circunstancia revela la importancia de su conexión, al igual que ocurre con la contaminación lumínica, u odorífera.

El informe emitido por la EEA -*European Environment Agency*- en 2014 es el primer estudio global sobre ruido existente en Europa, y una de sus principales y novedosas conclusiones resalta la amenaza que supone para la salud de los ecosistemas.<sup>581</sup> Niveles de ruido intermedio (de intensidad aproximada a 55dB<sub>Lden</sub>) consumen en la actualidad zonas territoriales fuera de las áreas urbanas que provocan grandes riesgos para hábitats valiosos, así como para determinadas especies particularmente susceptibles al ruido. El documento incide en la necesidad de ampliar el análisis espacial del medio ambiente que incluya el impacto potencial que despliega el ruido sobre la pérdida de biodiversidad y la fragmentación de los hábitats. A esta necesidad se incorpora el tratamiento del ruido en el medio ambiente marino, ya que

---

<sup>580</sup> Vid. LÓPEZ BARRIO, I. Refleja las conclusiones de Welch y Welch acerca de esta cuestión. En “Efectos sociopsicológicos del ruido”, op. cit., pág. 135.

<sup>581</sup> Vid. “General Union Environment Action Programme to 2020: Living well, within the limits of our planet”. European Commission. Ed. Publications Office of the European Union. Luxembourg, 2014.

muchas especies confían en la comunicación acústica para desarrollar importantes aspectos vitales, como el hallazgo de alimentos o el apareamiento.

En la actualidad, las fuentes más importantes de ruido antropogénico en este medio son el tráfico marítimo, así como la minería y exploración de petróleo en las costas, pero también son destacables la termometría acústica del proyecto del Clima Oceánico (que utilizan sonidos de baja frecuencia para medir la temperatura de los océanos con el fin de monitorear los efectos del cambio climático, y que suelen producir sonidos de hasta 195dB a 75Hz, en las profundidades del océano), o maniobras militares como el reciente desarrollo táctico de la Armada de Estados Unidos en la guerra antisubmarina (a través del sistema sonar de baja frecuencia -*Low Frequency Active Sonar*-, para detectar y localizar submarinos silenciosos a más de 100 kms.).<sup>582</sup>

El éxito reproductivo, tamaño y distribución de la población también sufre alteraciones, así como la función conductual de determinados grupos de fauna marina.<sup>583</sup> En efecto, el ruido, a diferencia de su capacidad de propagación en la

---

<sup>582</sup> Este sistema ha sido probado por la Marina estadounidense en los océanos Atlántico y Pacífico, y los barcos que forman parte del proyecto transmiten impulsos de 215 dB de sonido a 100-500 Hz. Consultar el extenso informe redactado por un Grupo de la Universidad de Maryland, como parte del Programa de Postgrado en Desarrollo Sostenible y Biología de la Conservación, encargado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y el Instituto de Biología de la Conservación Marina de EE.UU. El estudio se desarrolla en dos santuarios, que son atravesados en algunas de sus áreas por las principales rutas de navegación hacia y desde Boston y Los Ángeles, respectivamente. Además, incide en la ausencia de regulación legal que aborde específicamente el ruido antropogénico y su impacto sobre la vida marina. "Anthropogenic Noise in the Marine Environment. Potential Impacts on the Marine Resources of Stellwagen Bank and Channel Islands National Marine Sanctuaries". December 5<sup>th</sup>, 2000. págs. 14-20. Disponible en: [http://sanctuaries.noaa.gov/management/pdfs/anthro\\_noise.pdf](http://sanctuaries.noaa.gov/management/pdfs/anthro_noise.pdf) (último acceso 12/07/2015).

<sup>583</sup> El requisito para la identificación y protección de zonas silenciosas en asociación con la Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, también presenta una sinergia ideal con la necesidad de proteger a las especies vulnerables a la contaminación acústica y hábitats de especial valor identificados por otras evaluaciones europeas, como la Red Natura 2000. *Vid.* NUGENT, C. et. al. *Noise in Europe 2014*. EEA Report/ N° 10/2014. Ed. Publications Office of the European Union. Luxembourg, 2014, pág. 9. Efectos fisiológicos, conductuales, en las estructuras sociales, en el uso de los hábitats, o impactos cumulativos en los mamíferos marinos, y en especies como las tortugas marinas, invertebrados o aves, también han sido examinados. *Vid.* "Anthropogenic Noise in the Marine Environment. Potential Impacts on the Marine Resources of Stellwagen Bank and Channel Islands National Marine Sanctuaries", op. cit., págs. 23-43. Más recientemente, desde 2010, la atención se centra en el examen de los aspectos relacionados con el efecto "enmascaramiento" de sonidos antropogénicos en los cetáceos, especialmente en relación con el ruido de baja frecuencia. Sobre este tema, la Comisión Ballenera Internacional, organismo establecido bajo el Convenio Internacional para la Regulación de la Pesca de la Ballena (–IWC–) firmado en Washington DC, el 2 de diciembre de 1946, facilitó el trabajo de un panel independiente para examinar la mortalidad masiva inusual de ballenas que se había producido en 2008. España forma parte de los países adheridos desde el 6 de julio de 1979. Se puede consultar la variada documentación existente en <https://iwc.int/index.php?cID=2&cType=html&searchString=noise> (último acceso 12/07/2015).

atmósfera (sensiblemente inferior), puede recorrer largas distancias bajo el agua, cubriendo grandes áreas, y potencialmente impide que los animales marinos escuchen a sus presas o depredadores, encuentren su rumbo, o conecten con los miembros de su grupo o sus crías. Alcanza una velocidad de unos 340 m/seg en el aire, mientras que en el agua se desplaza a 1.500 m/seg.<sup>584</sup> Se ha demostrado que numerosas especies marinas (al menos 55) se ven afectadas por la contaminación del ruido oceánico en algún grado. Por lo tanto, la biodiversidad marina está probablemente comprometida por el ruido antropogénico submarino. Los niveles de ruido circulan en constante aumento, por lo que el ruido en los océanos debe gestionarse a nivel nacional e internacional de manera cautelar, ante el daño irreversible que produce a la biodiversidad y al ecosistema marino.<sup>585</sup>

La biología de la conservación y la psicología comparada rara vez se integran en estudios conjuntos, no obstante surgen en la actualidad nuevos marcos conceptuales útiles, que nos permiten aproximarnos a una mejor comprensión de la comunicación animal y de cómo el ruido afecta a la organización biológica.<sup>586</sup>

---

<sup>584</sup> Vid. "Anthropogenic Noise in the Marine Environment. Potential Impacts on the Marine Resources of Stellwagen Bank and Channel Islands National Marine Sanctuaries", op. cit., págs.11 y ss.

<sup>585</sup> Vid. WEILGART, L. S. El sonido a veces puede recorrer cientos o incluso miles de kilómetros bajo el agua, mientras que el sentido de la vista sólo es útil en decenas de metros. Aunque se han realizado estudios sobre los impactos del ruido oceánico en diversas especies marinas, son casi inexistentes los efectuados sobre sus efectos a nivel del ecosistema. Se podría argumentar que puesto que los océanos son ambientes naturalmente ruidosos (ruido de olas, lluvia, rayos sobre el agua, etc.), los animales marinos se adaptarían al ruido. Sin embargo, tales adaptaciones sólo se producen respecto de fuentes de ruido naturales, comúnmente encontradas durante el periodo evolutivo. Este argumento no es aplicable al ruido subacuático antropogénico, de reciente incorporación al medio marino. Especialmente para las especies de larga vida, como las ballenas, y allí donde los niveles de ruido de fondo causados por el hombre están aumentando rápidamente, los animales no son capaces de adaptarse genéticamente a un ritmo similar al que supone cualquier cambio de hábitat. "The Impact of Ocean Noise Pollution on Marine Biodiversity". En *International Ocean Noise Coalition*. March, 2008, págs. 1-6. Disponible en: [https://awionline.org/sites/default/files/uploads/legacy-uploads/documents/Weilgart\\_Biodiversity\\_2008-1238105851-10133.pdf](https://awionline.org/sites/default/files/uploads/legacy-uploads/documents/Weilgart_Biodiversity_2008-1238105851-10133.pdf) (último acceso 12/07/2015). Otra investigación interesante y reciente, cuyo centro de atención son los mamíferos marinos del Ártico en MOORE, S. E. / REEVES, R. R. / SOUTHALL, B. L. et. al. "A New Framework for Assessing the Effects of Anthropogenic Sound on Marine Mammals in a Rapidly Changing Arctic". *BioScience*. Tim Beardsley (ed.) Vol. 62, Issue 3. Ed. American Institute of Biological Sciences. March, 2012, págs. 289-295. Disponible en: <http://bioscience.oxfordjournals.org/content/62/3/289.full> (último acceso 12/07/2015).

<sup>586</sup> Por ejemplo, el enmascaramiento de señales acústicas por el ruido antropogénico aumenta tanto con la proximidad de la señal y ruido en el espectro de frecuencia, como con la amplitud del ruido en relación a la señal. A medida que aumenta la señal de enmascaramiento, las señales se vuelven cada vez más difíciles de detectar. La sociedad humana moderna ha generado en su totalidad nuevos patrones de ruido que pueden modificar tanto las presiones de selección y desarrollo, como las influencias en estos sistemas comunicativos. Aunque no se conoce hasta qué punto el ruido antropogénico impacta en la vida silvestre, diversos estudios científicos se aproximan a esta cuestión. Así, RABIN, L. / McCOWAN, B. / HOOPER, S. L. / OWINGS, D. H. El ruido provocado por los hombres afecta a los animales en una gama amplia que discurre desde la molestia al estrés crónico, o la pérdida de audición. El ruido puede afectar directamente a la fisiología reproductiva o al consumo energético. Aunque los efectos directos del ruido

El efecto del ruido antropogénico sobre la fauna terrestre es relativamente una novedosa área de estudio con implicaciones de gran alcance en su gestión. El ruido ha sido identificado como una perturbación que posee el potencial de inducir respuestas de comportamiento en los animales similares a las asociadas al riesgo de la depredación.<sup>587</sup>

La prevalencia y características de los sonidos extraños no han sido ampliamente estudiadas, aunque su papel en las interacciones entre los depredadores y sus presas es incuestionable. En los sistemas de comunicación de los animales, tanto el emisor como el receptor pueden adaptarse para enmascarar el ruido, pero en el caso de los sonidos accidentales la carga recae sobre los receptores. Sin embargo, las respuestas de los animales probablemente dependen de la intensidad de las amenazas percibidas, en lugar de la intensidad de ruido. Las respuestas fisiológicas perjudiciales de la exposición al ruido en los seres humanos y otros animales incluyen pérdida de audición, niveles de hormonas de estrés elevados e hipertensión. Estas respuestas comienzan a aparecer a niveles de exposición que fluctúan entre 55 y 60 dBA.<sup>588</sup>

---

sobre la fauna silvestre pueden ser los más obvios, el ruido también puede tener efectos indirectos sobre la dinámica de la población a través de los cambios en el uso del hábitat, el cortejo y el apareamiento, la reproducción, el cuidado de sus ascendientes, y posiblemente los patrones de migración. El ruido excesivo también puede afectar a las tasas de mortalidad de los adultos al causar pérdida de la audición, un grave peligro en las interacciones depredador-presa. Otros efectos del ruido sobre la fauna son más sutiles, como los que afectan a la frecuencia cardíaca o la comunicación. En las especies que dependen de la comunicación acústica, el ruido antropogénico puede afectar negativamente al comportamiento individual, por lo que la detección de la señal es difícil y así altera la interacción dinámica entre los productores y los perceptores de las señales comunicativas. Por ejemplo, el ruido antropogénico parece interferir con la comunicación y la interacción entre los individuos de las especies de mamíferos marinos, un efecto que podría perturbar procesos fundamentales, como la coordinación de la actividad dentro de los grupos sociales. Esta nueva línea de investigación sobre la comunicación animal tendrá aplicaciones para el campo de la biología de la conservación y la gestión de los ecosistemas. “Anthropogenic Noise and its Effect on Animal Communication: An Interface Between Comparative Psychology and Conservation Biology”. En *International Journal of Comparative Psychology*. Josep Call (ed.) Vol.16, Issue 2. Ed. American Psychological Association, 2003, págs.172-192. Disponible en: <https://escholarship.org/uc/item/3z41n20n#page-1> (último acceso 12/07/2015).

<sup>587</sup> Vid. FRANCIS, C. D. / BARBER, J. R. “A framework for understanding noise impacts on wildlife: an urgent conservation priority”. En *Frontiers in Ecology and the Environment*. Vol. 11, Issue 6. Ed. Ecological Society of America. August, 2013, págs. 305-313. Vid. BROWN, C. L. / HARDY, A. R. / BARBER, J. R. et. al. “The Effect of Human Activities and Their Associated Noise on Ungulate Behavior”. En *PlosOne*, Vol. 7, Issue 7. Matt Hayward (ed.) Australian Wildlife Conservancy. Australia, July 2012. <http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0040505> (último acceso 12/07/2015).

<sup>588</sup> Un estudio empírico sobre la biología de la conservación asociada al fenómeno del ruido en BARBER, J. R. / CROOKS, K. R. / FRISTRUP, K. M. Los mensajes reproductivos y territoriales no son las únicas formas de comunicación acústica que operan en una red. Los grupos sociales se benefician mediante la producción de las llamadas de alarma para advertir la presencia de depredadores que se acercan y el contacto llama a mantener la cohesión del grupo. Una reducción en la transmisión de la señal de distancia creada por el ruido antropogénico puede disminuir la eficacia de estas redes. “The costs of chronic noise exposure for terrestrial organisms”. En *Journal Trends in Ecology and Evolution*.

Para las especies que dependen del sonido para comunicarse o ejecutar estrategias de apareamiento, la materia de las emisiones acústicas también presenta un problema, aunque algunas de ellas se adaptan a los entornos urbanos. Por ejemplo, en el caso del canto de los pájaros, la adaptación es fenotípica, y refleja su necesidad de hacer frente a una amplia variedad de sonidos en su ambiente natural.<sup>589</sup>

Por otra parte, niveles de ruido considerados destacados o elevados, igualmente afectan de manera indirecta a concretas especies vegetales, en especial a los árboles, al producir desórdenes en el comportamiento de aquellos animales que detentan un cometido esencial en la polinización y la dispersión de las semillas.<sup>590</sup> No obstante, en el medio marino, dado que las plantas no poseen sistema sensorial alguno y sus cavidades de gas son mínimas, existen escasas probabilidades de que el ruido antropogénico cause daños.<sup>591</sup> Esta nueva perspectiva de estudio y experimentación sufre, en la actualidad, un alentador interés para el ámbito científico, indiscutiblemente necesario para ejercer una posterior labor responsable de adaptación sobre la multiplicidad de normativa ambiental que incide indirectamente en la materia, o bien en la regulación eminente de los aspectos que resulten directamente originales.<sup>592</sup>

---

Vol. 25, Issue 3. Ed. Cell Press. Cambridge, 2010, págs. 180-189. Disponible en: [http://www.cfc.umd.edu/CESU/Reports/NPS/CSU/2008/08\\_10Crooks\\_NSP\\_wildlife%20acoustics\\_09rpt.pdf](http://www.cfc.umd.edu/CESU/Reports/NPS/CSU/2008/08_10Crooks_NSP_wildlife%20acoustics_09rpt.pdf) (último acceso 12/07/2015).

<sup>589</sup> Vid. HUNTER, P. Existen mayores evidencias de adaptación genética en los pájaros, por ejemplo una mayor tolerancia al estrés por ruido, contaminación, y mayor densidad de población, por lo que el examen de la influencia de los seres humanos sobre la flora y la fauna crea también un potencial de mitigación de los efectos negativos, así como la elaboración de aspectos creativos de nuestro impacto en los animales. "The human impact on biological diversity. How species adapt to urban challenges sheds light on evolution and provides clues about conservation". En *Embo Reports*. Vol. 8, Issue 4. April, 2007, págs. 316-318. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1852758/> (último acceso 12/07/2015). Asimismo, se emiten informes de organismos públicos, como el elaborado bajo el patrocinio del Departamento de Transporte de la Administración Federal de Carreteras de EE.UU., que incluye un apéndice de especies de aves afectadas por el ruido de las carreteras más o menos próximas, o limítrofes a sus respectivos hábitats. Vid. KASELOO, P. *Synthesis of Noise Effects on Wildlife Population*. Publication núm. FHWA-HEP-06-016. U.S. Department of Transportation. Federal Highway Administration. September, 2004, págs. 1-75. <http://ntl.bts.gov/lib/30000/30600/30671/FHWA-HEP-06-016.pdf> (último acceso 12/07/2015).

<sup>590</sup> Vid. GONZÁLEZ, A. E. En "Contaminación Sonora y Derechos Humanos", op. cit., págs. 32-34.

<sup>591</sup> Vid. "Anthropogenic Noise in the Marine Environment. Potential Impacts on the Marine Resources of Stellwagen Bank and Channel Islands National Marine Sanctuaries", op. cit., pág. 41.

<sup>592</sup> Así, como parte del Programa Europeo *–Listening to the Deep Ocean Environment–* (LIDO), el Laboratorio de Aplicaciones Bioacústicas de la Universidad Politécnica de Catalunya llevará a cabo un mapa de ruido marino, que concluirá tras 4 años recorriendo el mar oceánico desde que partió de Sevilla (España) el 13 de abril de 2015. El proyecto *–The Ocean Mapping Expedition–*, liderado por el biólogo Michel André, se lleva a cabo a través de la misma ruta que fue utilizada por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano entre 1519 y 1522. Tiene por objeto completar el estudio de otras zonas amplias que permitan recopilar los datos aportados por los sensores distribuidos en distintas partes del planeta. Disponible en formato multimedia durante su curso, en el que se aporta información detallada y actualizada <http://www.omexpedition.ch/> (último acceso 12/07/2015). La consulta del Programa Europeo

Conviene recordar que la modalidad “ruido”, dentro de nuestro tipo penal ambiental básico, comprende la afectación de las aguas subterráneas o marítimas, incluso el alta mar. Pero, ¿qué ocurre con las aguas submarinas, debemos entender que implícitamente forman parte de las primeras? Según se desprende de la nueva dicción del art. 325 por efecto de la LO 1/2015 de 30 de marzo, de reforma del Código penal, nada cambia en este aspecto, pues la contravención de normas exigida por el tipo, desde su originaria tipificación no se puede extender a los supuestos estudiados, al no existir una legislación específica sobre ruido aplicable a los espacios marítimos que comprenden las aguas internacionales en la Unión Europea, menos aún a escala de Derecho internacional público ni privado. Cuestión ésta que no sólo merece una reflexión en el ámbito legislativo europeo e internacional, pues la reciente Ley de Navegación Marítima promulgada en 2014, a pesar de afrontar una reforma profunda del Derecho marítimo español (la dispersa normativa que regulaba esta materia todavía estaba constituida en su base y referencia principal por el Libro III del Código de Comercio de 1885), no cuenta entre sus previsiones ni siquiera con una somera mención al ruido como factor de adecuación a la práctica actual del transporte marítimo.<sup>593</sup>

---

LIDO puede efectuarse en: <http://www.listentothedeep.com/acoustics/index.html> (último acceso 12/07/2015). La normativa más relevante en la materia, además de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar y otros Convenios como el relativo a la protección del medio ambiente marino del Nordeste Atlántico, hecho en París el 22 de septiembre de 1992, o el de la protección del medio marino del mar Báltico, hecho en Helsinki en 1974, en nuestro país proviene de la Directiva 2005/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa a la contaminación procedente de buques y la introducción de sanciones para las infracciones, la Directiva 2009/17/CE, de 23 de abril de 2009, por la que se modifica la Directiva 2002/59/CE relativa al establecimiento de un sistema comunitario de seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo, la Directiva 92/43/CEE, del Consejo de 21 de mayo de 1992, de Hábitats, o la Directiva 2008/56/CE, de 17 de junio de 2008, por la que se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino, entre otras. En derecho interno, las normas de cabecera son la Ley 41/2010, de 29 de noviembre, de Protección del Medio Marino, y la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

<sup>593</sup> La industria del transporte marítimo, por ejemplo, regulada por un complejo cuerpo de costumbres, leyes, tratados internacionales y decisiones judiciales, no cuenta con previsiones relativas al ruido. Consultar *Shipping Law Handbook* (5<sup>th</sup> ed.) Michael Bundock (ed.) Ed. LLP. London, 2011. Vid. NÚÑEZ LOZANO M<sup>a</sup> C. et al. *Hacia una política marítima integrada de la Unión Europea. Estudios de política marítima*. M<sup>a</sup> Carmen Núñez Lozano (dir.) Ed. Iustel. Madrid, 2010. Tampoco incluye al ruido en su catálogo de materias relacionadas con el medioambiente marino la *International Maritime Organization* (IMO), organismo especializado de las Naciones Unidas responsable de la seguridad y la seguridad de la navegación y la prevención de la contaminación del mar por los buques. Disponible en: <http://www.imo.org/es/Paginas/Default.aspx> (último acceso 12/07/2015). En nuestro ordenamiento interno, Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima, con eficacia frente a buques nacionales y extranjeros que naveguen o se detengan en alguna de nuestras aguas. Las escasas alusiones a la protección del medio ambiente marino se efectúan en el art. 38: <<Cumplimiento de leyes y reglamentos. Los buques que ejerzan el derecho de paso inocente por el mar territorial vendrán obligados a respetar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, así como las disposiciones de esta ley y las demás leyes y reglamentos sobre navegación, extranjería e inmigración, aduanas, sanidad y demás



## 2.5.- Alcance penal de la figura de la acumulación en conductas contaminantes genéricas vs. concretas emisiones de ruido

Los delitos de acumulación son básicos en el nacimiento y desarrollo del Derecho penal ambiental, y su aparición se desencadena en el marco de dos presupuestos fundamentales dentro de la sociedad contemporánea: el curso expansivo del Derecho penal, al incorporar sucesivamente la protección de bienes jurídicos de naturaleza colectiva o supraindividual, y su progresiva administrativización.<sup>594</sup>

Obedecen a una técnica de tipificación totalmente opuesta a los tradicionales delitos de lesión, así que no ha quedado otra opción que adjudicarles el criterio de lesividad global derivado de las acumulaciones o repeticiones, representativo del Derecho administrativo sancionador.<sup>595</sup> Por ello, suscita críticas el hecho de que

---

*de seguridad pública, los relativos a la protección del medio ambiente marino y del patrimonio cultural subacuático>>*; art. 104, en relación a la inspección de buques sospechosos de navegar incumpliendo las condiciones de navegabilidad o las relativas a la protección del medio ambiente marino; y el art. 186.1, que obliga a comunicar los accidentes y cualquier otra novedad extraordinaria y de importancia que afecte a la seguridad de la navegación o del medio ambiente marino.

<sup>594</sup> Fue Kuhlen quien utilizó la referencia a la acumulación para legitimar el controvertido delito de contaminación de aguas del Código Penal alemán (§ 324). *Vid.* FEIJÓO SÁNCHEZ, B. Aclara que el verdadero precursor de la idea de acumulación fue Loos, con la denominación de “delitos de peligro en masa”, en su trabajo sobre el delito de cohecho en la década de los 70. En “Sobre la administrativización del derecho penal en la sociedad del riesgo”, op. cit., pág. 158. HEFENDEHL, R. En línea con lo expresado por la doctrina alemana, el delito de contaminación de aguas se estructura conforme a un modelo en el que la autorización actúa excepcionalmente de forma justificante, no alcanza al tipo – *prohibición represiva con reserva de liberación*–. “Derecho Penal Medioambiental: ¿por qué o cómo?”. Gonzalo Medina (revisión de la traducción) En *Estudios Públicos. Revista de Políticas Públicas*, núm. 110. Ed. Centro de Estudios Públicos. Chile, otoño 2008, págs. 1- 27, en especial 16.

<sup>595</sup> *Vid.*, la monografía de CORCOY BIDASOLO, M. “Delitos de peligro y protección de bienes jurídico-penales supraindividuales. Nuevas formas de delincuencia y reinterpretación de tipos penales clásicos”, op. cit. Por su parte SILVA SÁNCHEZ, J. M<sup>a</sup>, explica la fundamentación de los delitos de acumulación de Kuhlen, así como las objeciones críticas en relación a la posible vulneración de los principios de culpabilidad, proporcionalidad y lesividad. El autor incide en que resulta coherente la profusión de este tipo de delitos, que por otra parte no son tan desconocidos para el Derecho penal como aparentan (por ejemplo, gran parte de los delitos de tenencia se basan en la repetición), siempre que no lleven aparejada la imposición de una pena privativa de libertad. En “La expansión del Derecho Penal. Aspectos de la Política criminal en las sociedades postindustriales” op. cit., págs. 143-150. *Vid.* ALCÁCER GUIRAO, R. Sostiene que el apoyo para dotar de legitimidad al presupuesto del daño cumulativo en el medio ambiente, pasa por aceptar que el fundamento de la imputación penal es el principio de solidaridad, frente al de autonomía personal. En “La protección del futuro y los daños cumulativos”, op. cit., pág. 158 y ss. Por otra parte, BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I., defiende que la figura de la acumulación se debería traspasar al Derecho administrativo, ya que éste protege funciones y no bienes jurídicos, a la vez que esto no exime al Derecho penal de seguir ocupándose de la protección de bienes jurídicos colectivos, pero sin esa carencia del principio de lesividad y culpabilidad propia del delito de acumulación. En “Viejo y Nuevo Derecho Penal. Principios y desafíos del derecho penal de hoy”, op. cit., págs. 222-229. En sentido similar, FEIJÓO SÁNCHEZ, B. En “Sobre la administrativización del derecho penal en la sociedad del riesgo”, op. cit., págs. 157 y ss.



alguien –determinado– pueda responder penalmente por la conducta de otros –indeterminados–, debido a una valoración sumatoria en la que los efectos cumulativos esperables son de imposible concreción material y espacial.<sup>596</sup> Por otra parte, la presunción de que con su utilización se fundamenta el ilícito *ex iniuria terti*, no es del todo correcta, pues no se remite al injusto de terceros para establecer la responsabilidad.<sup>597</sup> Como en el caso de un río biológica o ecológicamente destruido;

---

<sup>596</sup> Discute este argumento CORCOY BIDASOLO, M., pues la afirmación de que las conductas acumulativas sólo representan un peligro relevante cuando se repiten es cuestionable. Así, para que se produzca la destrucción del bien jurídico casi siempre será necesaria la repetición de la conducta, excepto en el caso del homicidio. Por tanto, en los delitos en los que se protegen bienes jurídico-penales individuales y supraindividuales la lesión no implica su entera destrucción, sino su afectación. “Protección de bienes jurídico-penales supraindividuales y derecho penal mínimo”. En *Derecho penal del siglo XXI*. Cuadernos de Derecho Judicial VIII-2007. Ed. Centro de Documentación Judicial. Consejo General del Poder Judicial. Madrid, 2008, págs. 365-402, en especial 376 y ss.

<sup>597</sup> En relación a la legitimación de este tipo de penalización, *vid.* VON HIRSCH, A. / WOHLERS, W. Consideran legítimo penalizar las aportaciones cumulativas, lo problemático es llevar a cabo una selección entre las mismas. En “Teoría del bien jurídico y estructura del delito. Sobre los criterios de una imputación justa”, *op. cit.*, págs. 299 y ss; HEFENDEHL, R. En “El bien jurídico como eje material de la norma penal”, *op. cit.*, pág. 195. Por su parte, GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A., considera que lo preocupante son las técnicas, contenidos y principios de los movimientos neocriminalizadores, el especial protagonismo de determinadas figuras delictivas, más que la adopción de nuevos bienes jurídicos de naturaleza supraindividual. En “Introducción al Derecho penal. Instituciones, fundamentos y tendencias del Derecho Penal” Vol. II, *op. cit.*, págs. 552 y 553. Para DE LA CUESTA AGUADO, P. M., el Derecho penal medioambiental se debe amparar en su finalidad preventiva. Así, por la trascendencia de la materia, la mejor prevención es evitar que se produzca la lesión, y en este marco, el recurso a los delitos de peligro abstracto está doblemente justificado; por lo apuntado, y por el efecto simbólico positivo que ejerce el Derecho penal. En “Causalidad de los delitos contra el medio ambiente”, *op. cit.*, pág. 112. En opinión de CONDE-PUMPIDO TOURÓN, C., la utilización de tipos de peligro es la más adecuada para proteger el bien jurídico medio ambiente, debido a su especial naturaleza, que conlleva la necesidad de adelantarse a la lesión, pues de lo contrario no se protegerá el medio ambiente, a lo sumo otros valores distintos. En “Título XVI. De los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente”. *Código Penal. Doctrina y Jurisprudencia*, *op. cit.*, pág. 3223. En contra, FEIJÓO SÁNCHEZ, B., para quien es errónea la interpretación de que no se remite al injusto a terceros, porque no se tiene en cuenta el fundamento material que se le quiere otorgar, es decir, no existe nada que proteger ni que castigar si no se cuenta con el hipotético comportamiento de terceros. En “Sobre la administrativización del derecho penal en la sociedad del riesgo”, *op. cit.*, pág. 160. En la misma línea, SILVA DÍAS, A., concluye que el discurso jurídico-penal aplicado a las figuras cumulativas, es prácticamente nulo. “¿Y si todos lo hiciéramos? Consideraciones acerca de la (in)capacidad de resonancia del Derecho penal con la figura de la acumulación”. Rafael Alcácer Guirao (tr.) En *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*, núm. LVI, enero 2003, págs. 433-469. *Vid.* PRATS CANUT, J. M. / MARQUÉS I BANQUÉ, M. Apuestan por recurrir a tipos de lesión, junto a una configuración precisa del resultado, que estaría integrado por un acto de contaminación relevante, en lugar de lo que califican como confusas estructuras de peligro que introducen cotas de inseguridad en la aplicación del precepto, en relación al apartado 1 del art. 325, que constituía hasta la reforma de 2010 lo que hoy es el tipo básico. “Libro II: Título XVI (Art. 325)”. En *Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal* (5ª ed.) Gonzalo Quintero Olivares (dir.) Fermín Morales Prats (coord.) Ed. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2005, pág. 1192. En cualquier caso, la nueva redacción no aporta novedad en este sentido, ya que la estructura de peligro del tipo continúa intacta; lo que ha variado es la interpretación de su naturaleza, la jurisprudencia respalda el fundamento de peligro abstracto excepto en contadas resoluciones, lo que no quiere decir que estos delitos de aptitud merezcan menor actividad probatoria que los de peligro concreto. En consonancia con esta argumentación se muestra MORALES PRATS, F., para quien el coste en términos de garantías de este modelo de tipificación (en cuanto al agotamiento de la seguridad jurídica y de lesividad material) no resulta tan gravoso al ser más operativo frente a fenómenos como los relativos a la causalidad cumulativa, o al

imaginemos un río tan degradado por el efecto cumulativo de emisiones contaminantes, que genere la inexistencia de sistema natural alguno. Si se produce un vertido posterior de carácter singular, que atenta de forma grave contra la normativa administrativa, en ningún caso podrá provocar perjuicio grave a unos sistemas naturales que, sencillamente no existen, pero la conducta seguirá constituyendo un ilícito.<sup>598</sup>

Los daños ambientales producidos por sucesos cumulativos se caracterizan por ser supuestos en los que es imposible o extremadamente dificultoso delimitar la responsabilidad individual. Siguiendo a HUTCHINSON, pueden darse varias situaciones: que exista un autor indeterminado dentro de un grupo determinado, o bien dentro de un grupo indeterminado. Asimismo, el daño también se puede producir de manera colectiva, es decir, se ignora quién es el autor efectivo del mismo, se trata de una actuación de carácter grupal o de responsabilidad colectiva, lo que posee especial relevancia en relación a los nexos causales.<sup>599</sup>

En este apartado de la causalidad es extremadamente dificultoso, en primer lugar, diferenciar entre lo que es un acto sumatorio, uno acumulativo, o una combinación de efectos.<sup>600</sup> El primero correspondería a una suma de acciones individuales, pero sin un resultado de afectación del bien jurídico; el segundo simboliza el mismo supuesto anterior, pero con un resultado unitario (la afectación del bien jurídico); el tercero representa el supuesto de la producción de efectos sinérgicos por

---

elevado transcurso de tiempo que suele transcurrir hasta que puede ser verificado el resultado de peligro. “El delito de contaminación ambiental: análisis del artículo 325.1 CP. La relación entre Derecho penal y Derecho administrativo medioambiental”. En *Estudios de Derecho Ambiental. Libro Homenaje al profesor Josep Miquel Prats Canut*. Gonzalo Quintero Olivares / Fermín Morales Prats (coords.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2008, págs. 1033-1066, en especial 1049 y ss.

<sup>598</sup> Se refiere a las ventajas y disfunciones del sistema de accesoriedad administrativa en materia medioambiental, ESTEVE PARDO, J. “Protección penal y accesoriedad administrativa en la nueva regulación para la protección del medio ambiente”. En *Incidencia medioambiental y derecho sancionador*. Dimitri Berberoff Ayuda (dir.) Cuadernos de Derecho Judicial. Ed. Consejo General del Poder Judicial. Madrid, 2007, págs. 121-138, en especial 128.

<sup>599</sup> Así, la definición teórica de daño ambiental resulta superflua, pues excepto contadas ocasiones, el daño se manifiesta en coordenadas espaciales y temporales distintas, que dificultan su comprobación en el momento en que se produce la acción contaminante. En este mismo sentido, *vid.* HUTCHINSON, T. Distingue entre *causalidad conjunta o común* (supuestos en los que el daño se produce por la cooperación de varios agentes), *causalidad acumulativa* (actuación conjunta de varios agentes, cuya actuación independiente hubiera ocasionado el mismo daño), y *causalidad disyuntiva o alternativa* (el resultado dañoso se atribuye a un agente u otro de forma excluyente). En MOSSET ITURRASPE, J. / HUTCHINSON, T. / DONNA, E. A. *Daño Ambiental* (2ª ed.) Tomo II. Ed. Rubinzal-Culzoni. Buenos Aires, 2011, págs. 50 y ss., 133 y 134.

<sup>600</sup> Que también puede causar problemas a la hora de entender aplicable la categoría de delito continuado a la emisión de ruidos por parte de un mismo sujeto. Al respecto, en relación a la dimensión temporal de la imputación objetiva por resultados tardíos, *vid.* VÁSQUEZ SHIMAJUKO, S. En “La imputación de los resultados tardíos. Acerca de la dimensión temporal de la imputación objetiva”, *op. cit.*, págs. 201 y ss.

combinación o interacción, que encierra un resultado lesivo, pero que procede de efectos inocuos si son considerados de manera aislada.<sup>601</sup>

Autores como HEFENDEHL sostienen que la idea de acumulación sirve de equivalente material a la relación que ha de darse entre acción y bien jurídico en el seno de la causalidad lesiva. En estos casos, se exige una equivalencia material entre el bien jurídico y la acción, que suple la falta de causalidad lesiva real. Esta concepción puede, a su vez, aplicarse fácilmente al ámbito de los delitos medioambientales, porque los bienes ecológicos o recursos naturales representan finalmente bienes jurídicos, y no resulta problemático concebir la existencia de un riesgo por la acumulación de conductas, con independencia del plazo de tiempo que transcurra entre ellas.<sup>602</sup>

La especificidad e idiosincrasia del ruido posibilita que una única acción tenga un significado más directo, palpable y reconocible que el que se puede extraer de otras manifestaciones invasoras del medio ambiente. En efecto, cualquiera es capaz de generar ruidos molestos sin necesidad de utilizar ningún instrumento externo al propio yo (pensemos en una persona que grita), o con ínfima ayuda (cualquier reproductor de sonido), en una acción exclusiva y aislada. A la característica enunciada, podemos añadir otra, que se coteja con facilidad si realizamos una comparativa entre la inmediatez del efecto contaminante del ruido y el de las emisiones de partículas a la atmósfera. Pues bien, en este caso, dada la profusión de conocimientos actuales en torno a la tremenda situación que se vive en muchas ciudades de diferentes países por las altas cotas de contaminación atmosférica de efecto acumulativo alcanzadas, no es menos cierto que, a nivel sensorial e inminente es imperceptible, algo que no ocurre

---

<sup>601</sup> Al respecto, *vid.* DE LA CUESTA AGUADO, P. M. Recoge varios supuestos en los que, al tratar la causalidad, se plantean dudas de atribución e imputación al autor de la conducta, y en los que la dosificación o cuota de emisión o sustancia, cobra singular importancia a afectos de tipicidad. En “Causalidad de los delitos contra el medio ambiente”, *op. cit.*, págs. 102 y ss.

<sup>602</sup> Así, HEFENDEHL, R. “¿Debe ocuparse el derecho penal de riesgos futuros? Bienes jurídicos colectivos y delitos de peligro abstracto”. Eduardo Salazar Ortuño (tr.) En *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 14 de abril de 2002, págs. 1-13, en especial 11. <http://criminet.ugr.es/recpc> (último acceso 12/07/2015); “El bien jurídico como eje material de la norma penal”, *op. cit.*, págs. 193-196. *Vid.* ALONSO ÁLAMO, M. Opina que la postura de Hefendehl, quien considera independientes a los delitos de peligro abstracto de los delitos por acumulación, es errónea. Para ella, los delitos de acumulación han de reconducirse a los delitos de peligro abstracto, si bien éstos alcanzan mayor nivel de abstracción. Desde la perspectiva del bien jurídico (antijuricidad material), la crítica a la técnica de los delitos por acumulación no debe situarse en los delitos contra el medio ambiente. <<No sería una hipótesis realista incriminar la conducta de pasear por la calle silbando o cantando, con el argumento de que se produciría una contaminación acústica si miles de ciudadanos salieran a la calle haciéndolo. En “Trama de la vida y protección penal del ambiente”, *op. cit.*, pág. 72.

con el ruido, pues si existe alguna característica sobre la que no podemos dudar, ésta es su capacidad de percepción inmediata por parte del sujeto sometido al foco emisor.<sup>603</sup>

No obstante, el hipotético factor cumulativo asociado al ruido en el ambiente, es a la vez otro aspecto diferencial respecto de otras formas de contaminación: atmosférica, marítima, por residuos, etc., puesto que será extremadamente difícil acreditar que una aislada manifestación de ruido comporte catalogar la conducta como delictiva, en base a entender que se han sobrepasado con la intensidad requerida las normas reguladoras correspondientes.<sup>604</sup>

---

<sup>603</sup> De hecho, cuando la contaminación atmosférica es perceptible a través de la denominada “nube de contaminación” que cubre el cielo de grandes ciudades como Madrid, Londres, París, Singapur, Pekín, y un largo etcétera, es cuando se alcanzan determinados niveles (episodios de contaminación grave), que empujan a las administraciones a adoptar medidas de coche, como restricciones en el tráfico rodado, recomendaciones a grupos vulnerables de población para que limiten en lo posible su exposición al aire libre, etc. Los efectos que despliega hacen que, junto a la contaminación química, se considere una epidemia invisible. Según la OMS, la polución del aire es, en la actualidad, el mayor riesgo de corte ambiental para la salud (alrededor de 7 millones de muertes en 2012 en el mundo). Consultar: [http://www.who.int/phe/health\\_topics/outdoorair/databases/FINAL\\_HAP\\_AAP\\_BoD\\_24March2014.pdf?ua=1](http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/FINAL_HAP_AAP_BoD_24March2014.pdf?ua=1) (último acceso 12/07/2015). A nivel europeo, *vid.* “Air quality in Europe, 2013 report”. Alerta sobre los múltiples efectos perniciosos de la contaminación de la atmósfera en la salud de los seres humanos, el clima, los ecosistemas, así como las fuentes de emisión y los diferentes datos entre países. El informe abarca el periodo comprendido entre 2002 y 2011. *European Environment Agency*. Ed. Publications Office of the European Union. Luxembourg, 2013.

<sup>604</sup> En este sentido, *vid.*, MUÑOZ CUESTA, F. J. <<... que la conducta sea reiterada, la sola extralimitación esporádica o aislada de emisión de ruidos a un volumen más elevado del permitido por las normas que regulan el medio ambiente, no dará lugar a la comisión del delito, el límite para llegar al ilícito penal estará en la reiteración de conductas que puedan afectar a la salud de las personas>>. En “Ruido procedente de lugares de ocio: una conducta habitual con escasa respuesta penal”. *Revista Aranzadi Doctrinal*, núm. 5, 2012, parte Tribuna. Ed. Aranzadi. Pamplona, 2012, págs. 11-18. Al respecto, STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª) 840/2013 de 11 noviembre [RJ 2013\7344] Recurso núm. 264/2013. Ponente: Excmo. Sr. Julián Artemio Sánchez Melgar. <<... hemos dicho que la simple conculcación de la norma extrapenal, no ha de conllevar necesariamente la sanción delictiva, sino que se requiere el elemento de la relevancia en la infracción administrativa, que suele traducirse en un concepto diferenciador basado en la gravedad de la conducta, junto al resto de elementos que conforman el tipo penal. El principio de subsidiariedad del derecho penal impediría una interpretación de semejante naturaleza. Únicamente las conductas más intolerables socialmente están sancionadas penalmente, al punto que la Constitución española encomienda a la jurisdicción penal la protección del medio ambiente, en el art. 45.3>> (FJ 2). De hecho, como apunta SILVA SÁNCHEZ, J. Mª. <<el Derecho administrativo sancionador es esencialmente el Derecho del daño cumulativo, o también, del daño derivado de la repetición, que exige de una valoración del hecho específico...>>. En “La expansión del Derecho Penal. Aspectos de la Política criminal en las sociedades postindustriales”, op. cit., págs. 138 y ss. En la misma línea, PEÑALVER I CABRÉ, A., cataloga al Derecho administrativo sancionador como un derecho de riesgo (de peligro abstracto) por el mero incumplimiento, mientras que el Derecho penal es un derecho de peligro concreto o de resultado. “Nuevas tendencias sobre la inactividad administrativa en la aplicación de las sanciones ambientales”. En *Cuadernos de Derecho Local*, núm. 7. Ed. Fundación Democracia y Gobierno Local. Febrero, 2005, págs. 173-185, en especial 174. Para QUINTERO OLIVARES, G., por fuerte que sea un ruido, si es de corta duración y no se repite, es imposible que llegue a componer infracción penal, tampoco administrativa, pues la acción contaminante no puede darse como un acto aislado. En “La especialidad del Derecho penal ambiental en relación con la contaminación acústica y la contaminación del agua”, op. cit., pág. 16.

La jurisprudencia, por su parte, rechaza de plano la aplicación del delito continuado a este tipo delictivo, pues el tipo configura la conducta como un concepto global y precisamente es la repetición acumulativa la que produce el riesgo grave exigido por éste.<sup>605</sup>

Cuestión distinta es la esencial diferenciación entre este obvio e inexistente *factor cumulativo por una única emisión* “en el medio” del que se produce “en los organismos”, esto es, una emisión de ruido aislada, asociada o no a otras circunstancias, desencadena en los sujetos un cúmulo de interferencias perturbadoras de la salud, entendida ésta tanto en su faceta física como psíquica. Detallando este punto, es complicado prescindir del siguiente apunte: una emisión de ruido intempestiva puede resultar molesta, irritante, desagradable, o por el contrario, estimulante, agradable, placentera, pero es evidente que no alcanza el umbral característico de *acción contaminante*, en el sentido en que los teóricos aluden al término.<sup>606</sup>

Diferente por tanto, de lo que podríamos denominar *acumulación espacio-temporal*, que se produce cuando la situación ruidosa se mantiene más o menos estable (durante determinados días, horas, o periodos) en lapsos de tiempo prolongados, o bien aquellos casos de conductas ruidosas emitidas al unísono por diferentes emisores que, en nuestra opinión, deben ser considerados simplemente como repeticiones sucesivas e individualizadas de una acción singular.<sup>607</sup> A su vez, los impactos sonoros son acumulativos, por lo que otras fuentes de ruido se sumarán a los niveles generales. El análisis del sonido puede ser complicado adicionalmente cuando los niveles varían, a

---

<sup>605</sup> STS (Sala de lo Penal) 833/2002 de 2 de junio. Ponente: Excmo. Sr. José Aparicio Calvo-Rubio [RJ/2003/6235] <<Los atentados ecológicos se producen, por regla general, por actos u omisiones repetidas, que la doctrina incluye en los denominados delitos de acumulación. Cuando se trata de uno de los supuestos más frecuentes y característicos, como son los vertidos contaminantes del medio ambiente (o la emisión de humos y ruidos), no suelen producirse por un único vertido sino por la acumulación de varias conductas que, por su repetición acumulativa producen el riesgo grave exigido por el tipo>> (FJ 5. 3). En este mismo sentido, respecto a la modalidad de ruido, STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª) 89/2013 de 11 de febrero. Ponente: Excmo. Sr. Cándido Conde-Pumpido Tourón [RJ/2013/3174] (FJ 13).

<sup>606</sup> En relación a este concreto aspecto, nos remitimos a lo formulado en el epígrafe 2.4.2.1 sobre los efectos del ruido en otras especies.

<sup>607</sup> Nos referimos a lo que BOMBILLAR SÁENZ, F. M., denomina *contaminación múltiple*, en el marco de situaciones ruidosas de carácter grupal, caracterizada por la concentración de personas, que se desplazan por diferentes espacios. “Contaminación acústica”. En *Derecho Ambiental*. Mª Asunción Torres López / Estanislao Arana García (dirs.) Ed. Tecnos. Madrid, 2012, págs. 227-243, en especial 232. Coincidimos con le tesis de JERICÓ OJER, L. La imputación del peligro debe ser individualizada para cada uno de los emisores de ruido, y aquellas conductas que consideradas aisladamente no generen dicho riesgo, serían exclusivamente objeto de sanción administrativa. En “La tutela penal del ruido”, op. cit., pág. 396.

pesar de su continuidad. Por ejemplo, algo tan sencillo y repentino como un cambio en la dirección del viento provocará que una misma filtración de sonido varíe en cuanto a los niveles que percibe el receptor. Esto ocurre con frecuencia en eventos públicos celebrados al aire libre.<sup>608</sup>

De este modo, encontramos que la idea de peligro, riesgo o potencialidad de la amenaza típicamente relevante, se encuentra mermada respecto a otros subtipos previstos por el art. 325 CP, bien sea a causa de una única emisión o varias de carácter cumulativo. La razón fundamental estriba en que la mayoría de supuestos van a someterse a un dictamen supeditado a criterios y normas de dominio administrativo o penal, cuando efectivamente ya se ha producido un resultado en la víctima, por mínimo que éste sea; si no fuera así, la posibilidad de que la actuación ruidosa sea perseguida de oficio, va a resultar tan remota como incalificable. Además, casi siempre prevalecerá la aplicación del supuesto agravado previsto en el inciso final del precepto frente al tipo básico, pues hay que recordar la rareza que supone que la provocación o emisión de ruido colme de contenido lo previsto por el tipo básico, esto es, el perjuicio grave del equilibrio de los sistemas naturales, sumamente incierto y muy complejo en relación a la actividad probatoria si se prescinde de toda relación causal.

Renovamos en este punto el supuesto de hecho de los denominados daños ordinarios apuntado sucintamente en el epígrafe 1.2.1., ya que el paradigma contextual de las figuras cumulativas tendría que ser revisado, al menos en materia ambiental, y en directa relación a dichos actos. El motivo es que son tan generales y variadas las posibilidades de actuación cotidiana, todas ellas incursas en los parámetros de la conformidad social, que dificulta enormemente la labor de continuar apostando por los mismos criterios sostenidos en la protección del medio ambiente a través del Derecho penal.<sup>609</sup>

---

<sup>608</sup> Vid. STOOKES, P. Existen numerosos factores que influyen en los niveles de sonido, incluyendo la forma, tamaño, diseño y contenido de una habitación; la humedad, el viento y las interferencias de fondo. Además, el ruido viaja a través de objetos tales como paredes y agua, así como a través del aire, y en ocasiones, las condiciones naturales pueden amplificar el sonido. Por tanto, es vital que cuando confiemos en las mediciones de sonidos o vibraciones obtengamos evidencias objetivas y fidedignas. En *A Practical Approach to Environmental Law* (2<sup>nd</sup> ed.) Ed. Oxford University Press. New York, 2009, págs. 240 y 241.

<sup>609</sup> Como indica AGNEW, R., es importante reconocer que la mayoría de las personas se han convertido en entusiastas practicantes de daños ordinarios, lo que no quiere decir que haya que culpabilizarlos penalmente, porque también hay que tener en cuenta que su participación se debe a múltiples factores, así como que en un número muy elevado son desconocedores del daño que están causando. En “The ordinary acts that contribute to ecocide. A criminological analysis”, op. cit., págs. 69 y 70. En sentido

Respecto al sendero particular que sigue el ruido en el ambientalismo, la valoración de estos actos cotidianos quizás es lo que adquiere mayor similitud con aquellos otros que se repiten en el resto de arquetipos contaminantes.<sup>610</sup> Con independencia de los factores que inciden en los grandes vectores del ruido ambiental, como el tráfico rodado, infraestructuras, actividad pública, etc., la posibilidad de reducir las emisiones de ruido no se encuentra tan mediatizada por la actividad de los Estados o de las corporaciones como la emisión de CO<sub>2</sub> a la atmósfera, por citar un ejemplo; lo que incrementa son las oportunidades de producirlo sin el suficiente reproche social, que en términos de conformidad corresponderá, en diferentes grados y escalas a cada sociedad.<sup>611</sup> Valiéndonos de la misma comparación, desconocemos si los efectos del ruido ambiental generalizado permanecerían inalterables en el ambiente, en el hipotético caso de su eliminación total; por contraposición, la contaminación atmosférica ha causado ya daños irreparables, incluso situándonos en el mismo

---

similar, *vid.* VON HIRSCH, A. / WOHLERS, W. En “Teoría del bien jurídico y estructura del delito. Sobre los criterios de una imputación justa”, *op. cit.*, pág. 301; QUINTERO OLIVARES, G. Si la función del Derecho penal fuera la persecución y el castigo de acciones contaminantes (sonoras o del agua) se cometerían dos errores: ignorar que la propia actividad humana en términos globales es contaminante, y un vacío de funciones del Derecho administrativo, cuya principal misión debe ser prevenir tales conductas de manera prioritaria. En “La especialidad del Derecho penal ambiental en relación con la contaminación acústica y la contaminación del agua”, *op. cit.*, págs. 2 y 3.

<sup>610</sup> Prototipos de lo que consideraríamos daños ordinarios en este preciso ámbito son: accionar el claxon del vehículo particular a la menor eventualidad, el uso de vehículos que emitan ruido del motor elevado o sonido musical del habitáculo interior hacia el exterior (en el ámbito del tráfico rodado). En otros contextos, el uso indiscriminado de telefonía móvil en sus posibles aplicaciones en diversos escenarios públicos, conversaciones elevadas de tono, cierre brusco de puertas, descuidar el cuidado de animales de compañía, etc. Por ello, es hasta cierto punto normal que la redacción de ordenanzas municipales sobre el ruido en la actualidad, incluyan minuciosamente catálogos extensos y variopintos de actos ruidosos considerados perturbadores. Como ejemplo, la Ordenanza del Ayuntamiento de Mojácar (Almería), reguladora del ruido procedente de usuarios de vía pública, actividades domésticas y de vecinos, aprobada el 4 de julio de 2013, recoge acciones susceptibles de sanción en relación a los veladores anejos a los establecimientos de restauración en general (bar, cafetería, bar-restaurante y similares). Así, según el art. 6.3, en estas zonas quedará prohibido: c) elaborar o preparar alimentos o bebidas que pueden producir ruido, operaciones que deberán siempre realizarse en el interior del establecimiento principal; f) cualquier tipo de juego o actividad susceptible de generar ruido de impacto, por ejemplo dados, dominó y similares, cuando molesten a los vecinos y especialmente en horario nocturno; g) comportamientos del público tales como cantar, hacer sonar instrumentos musicales o gritar especialmente en horario nocturno, cuando molesten a los vecinos. El apartado 7 otorga la responsabilidad directa al titular de la actividad en relación a las conductas previstas en el apartado anterior, en caso de incumplimiento. Particularmente, dedica dos secciones al tratamiento de actos, celebraciones y comportamientos en la vía pública y espacios al aire libre, así como usos vecinales en edificios destinados a vivienda.

<sup>611</sup> Se sigue aquí la tipología de daño ordinario y su vinculación con la oportunidad de consumación que perfila AGNEW, R., para quien las sociedades no sólo posibilitan participar en los daños ordinarios, sino que a menudo logran que lo difícil sea no hacerlo. Por ejemplo, el diseño de las ciudades, la carencia de transporte público idóneo, y la ausencia de carriles bici significa que muchas personas no tienen más remedio que desplazarse en coche. En “The ordinary acts that contribute to ecocide. A criminological analysis”, *op. cit.*, pág. 68.

supuesto de la paralización inmediata, simultánea y total de emisiones contaminantes.<sup>612</sup>

Las posibilidades efectivas de que este tipo de acciones se traten como casos de provocación o realización singular de actos que dan lugar a situaciones de desequilibrio de los sistemas naturales, siguiendo el tenor literal del art. 325 CP, se reducen de forma considerable, ya sea que adopten la forma de emisiones dirigidas a la atmósfera, suelo, subsuelo, aguas terrestres, alta mar, espacios transfronterizos, etc. Sin embargo, el impacto lesivo de una concreta conducta es más acusado en el caso de los delitos relativos a la energía nuclear o radiaciones ionizantes, que por la peligrosidad que entrañan, evidentemente de magnitud superior (situaciones catastróficas) y, hasta cierto punto desconocida, llevan aparejadas penas de prisión muy elevadas.<sup>613</sup>

Por todo lo expuesto, defendemos lo siguiente: la posibilidad de que varias acciones individuales e inoñas por sí solas se transformen en riesgo, que representa la antesala inmediata del peligro<sup>614</sup>, presupuesto básico de los daños cumulativos, es irrealizable en el marco de estudio del ruido, ya que aquí no se trata de catalogar una

---

<sup>612</sup> Una reciente investigación científica evidencia el fenómeno de la transferencia remota, resultado exclusivo de la contaminación atmosférica. El estudio demuestra el cambio de sexo de los peces que habitan en lagos de alta montaña pirenaicos y eslovacos, a causa de las sustancias químicas que viajan a través del aire y que se acumulan en los peces. Se acumulan a lo largo de las cadenas tróficas y, por tanto, también pueden producir una disrupción endocrina en los humanos. Lo destacable es que dichas sustancias se originan en núcleos urbanos, industriales y agrarios alejados miles de kilómetros del foco de emisión. Vid. JARQUE, S. / QUIRÓS, L. / GRIMALT, J. O. et al. "Background fish feminization effects in European remote sites". En *Nature Scientific Reports* 5, Article number: 11292, 10 June 2015. Disponible en: <http://www.nature.com/srep/2015/150610/srep11292/pdf/srep11292.pdf> (último acceso 12/07/2015).

<sup>613</sup> Según el art. 341 CP, de 15 a 20 años para quien libere energía nuclear o elementos radioactivos que pongan en peligro la vida o salud de las personas o sus bienes, aunque no se produzca explosión. Es clara la limitación en cuanto a la figura del sujeto activo del delito que se da en este caso con respecto al resto de conductas previstas por el art. 325 CP, ya que no es sencillo que un gran número de personas tengan acceso a estos componentes. Vid. RUIZ DE APODACA ESPINOSA, A. Además del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 1961 (RAMINP), las exigencias ambientales que deben reunir las centrales nucleares son, en principio, escasas, ya que con carácter general se excluyen de la regulación ambiental. Así, la Ley 2/2011 de 4 de marzo, de Economía Sostenible [cuyo art. 79.3 c) fija determinados objetivos para 2020, entre los que se encuentra determinar los niveles de participación de la energía nuclear en la cesta de generación energética], y la Ley 12/2011 de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radioactivos. "El marco jurídico actual de la energía nuclear en España". En *El futuro de la energía nuclear en España. Perspectivas (no sólo) jurídicas*. Gabriel Doménech Pascual (coord.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2013, págs. 111-216.

<sup>614</sup> Es mayoritaria la doctrina que afirma que la moderna, a la vez que extendida categoría de los delitos de peligro abstracto, como son los relacionados con el medio ambiente, responden a una opción de técnica legislativa adecuada, que se corresponde con la relevancia del bien jurídico que se trata de proteger. No obstante, siguiendo a QUINTERO OLIVARES, G., es muy fácil comprobar que, aunque el CP de 1995 realizó una dilatada tipificación de los delitos denominados de riesgo, la idea de tipificar el peligro no se traduce en su persecución, precisamente se van a perseguir, en la mayor parte de los casos, sólo cuando el resultado es perceptible. En "Derecho Penal Ambiental", op. cit., pág. 77.



conducta en base a su riesgo potencial si *todos actuáramos de la misma manera*, sino que la molestia, contrariedad o daño que sufra el sujeto pasivo (esto habrá que valorarlo *a posteriori*) se manifiesta ya con suficiencia desde la primera emisión, porque es inherente al fenómeno a la vez que intrínseco a la acción; por ello será indiferente que la situación sea provocada por un sujeto activo o por varios. En todo caso, el grado de virulencia dependerá de la particularidad o de las condiciones en que se produzca la emisión del ruido, pero la distinción entre peligro y lesión pierde toda justificación.<sup>615</sup>

## 2.6.- Recapitulación de los apartados I y II

A lo largo de estos dos apartados que inician la Segunda Parte, hemos pretendido ofrecer una panorámica singular pero de vocación universal, con el objeto de recopilar algunas de las claves de la protección del medio ambiente en la actualidad, que sin duda creemos proveerán de variedad y variaciones al futuro del Derecho ambiental. De alguna forma que no podemos augurar, la especialidad del Derecho penal ambiental se verá afectada, bien positiva o negativamente, de manera irremediable, por estos nuevos paradigmas. Por ello, nos parece oportuno recapitular el contenido tratado, ya que los temas desarrollados pueden dar lugar a una interpretación inconexa, cuando en puridad lo que se persigue es clarificar y relacionar distintos aspectos, con la intención de plasmar el carácter multidisciplinar que debe regir cualquier aproximación a un análisis del Derecho ambiental, pues se incorporan otras necesidades de estudio, dentro y fuera del derecho (principalmente de carácter social y científico); la justificación obedece a la multiplicidad de propuestas, arquetipos, propósitos y doctrina existentes, sin olvidar que estos elementos coexisten con otros de similar repercusión, en los que no podemos detenernos por cuestión de espacio.

---

<sup>615</sup> Vid. MONGE FERNÁNDEZ, A. Abandona la tesis que sostenía con anterioridad, y afirma que los bienes jurídicos colectivos claramente se protegen a través de tipos de lesión, nunca de peligro, pues es precisamente la lesión el único estado imaginable para ellos cuando se ven afectados negativamente. “Excurso sobre los delitos de incendios forestales”. En *Derecho Penal Ambiental*. Grupo Andaluz de Investigación Jurídica. Juan Antonio Martos Núñez (dir.) Ed. Exlibris. Madrid, 2006, págs. 197-218, en especial 209.

La conjugación de estas reflexiones nos conduce por un espacio diáfano de normas, leyes y principios programáticos, en cuyo eje central se encuentra el propio individuo. Se daría paso entonces a segundas y posteriores etapas de compromisos y garantías, con suficiente capacidad para proteger los diversos modelos normativos, diseñados con un fin supremo, la mejor salvaguarda del medio natural. Con independencia de que se produzcan fallos, como la asunción de conductas erróneas por parte de los sujetos garantes de su cuidado y defensa (individuales y colectivos), éste objetivo último y primordial validará posibles actuaciones que hoy se conciben como una reducción de servicios, prestaciones, derechos adquiridos, todo ello en torno a un prototipo de “calidad de vida” creado bajo condiciones absolutamente diferentes (técnicas, económicas, de consumo, de mercado, medio ambientales, etc.).

De este modo, tanto la configuración de un sistema integrado como el estudio de los índices de fracaso o éxito, pasarían por un estado previo de “alfabetización ambiental”, que se concretaría a través de:

- 1.- Acciones individuales de sensibilización ambiental.
- 2.- Análisis de la influencia de este indicador en los poderes legislativos.<sup>616</sup>
- 3.- Medidas de financiación del sector público.
- 4.- Alcance de la litigiosidad.
- 5.- Indicadores de salud ambiental.
- 6.- Homogeneización y consolidación de los valores con los que se evalúe el impacto en diferentes terrenos.

---

<sup>616</sup> La confluencia de determinados factores en la fase prelegislativa influye notablemente en el control posterior de todo el proceso legislativo penal. Al respecto, DÍEZ RIPOLLÉS, J. L. Observa la impronta de las *disfunciones sociales aparentes* (éstas corresponden a representaciones de la realidad social que quedan desacreditadas por los datos empírico sociales) en el ámbito político criminal. En “La racionalidad de las leyes penales. Práctica y teoría”, op. cit., pág. 21.

Por ejemplo, en relación a los afectados por la sequía que habitan al otro lado del mundo, las futuras generaciones, o los demás seres vivos con los que compartimos el planeta, todo ello con independencia de los índices de actitudes y preferencias diagnosticados en la sociedad en cada situación cronológica.<sup>617</sup>

Por otra parte, los desafíos a los que se enfrenta el Derecho penal ambiental, entre ellos la ineficacia preventiva demostrada por los hechos empíricos, necesitan una nueva orientación que permita dirigir la aplicación efectiva de las normas ambientales.<sup>618</sup>

Las palabras de HEFENDHEL describen a la perfección el significado de su ambivalencia y la necesidad de una regulación que desborde la estricta operatividad nacional, aún asimilando que probablemente ello requiera un sacrificio de algunos principios jurídico-penales básicos. <<*Llevamos décadas hablando del derecho penal medioambiental y aún así el asunto se nos va escurriendo de manera inexorable*>>.<sup>619</sup>

---

<sup>617</sup> Se sigue aquí la postura de STONE, C. D. El autor comparte la siguiente reflexión: <<*I consider myself an environmentalist, but am not sure I would include the environment among the three most urgent problems we face*>> [Me considero un ecologista, pero no estoy seguro si incluiría el medio ambiente entre los tres problemas más urgentes a los que nos enfrentamos] [tr. pr.], rebatiendo las posiciones que descartan la validez del movimiento ecológico basadas en la recopilación y difusión informativa sobre gustos y prioridades públicas. En “Is Environmentalism Dead?”, op. cit., págs. 26 y ss., en especial 29.

<sup>618</sup> Retos inmediatos que según JORDANO FRAGA, J., pasan por la asunción de los siguientes puntos: La entrada del derecho a disfrutar a un medio ambiente adecuado en el núcleo duro de los derechos fundamentales. La admisión de la protección jurisdiccional especial de este derecho. Una regulación de la especialidad de la tutela cautelar ambiental en los contenciosos ambientales. Redefinición de los roles. Necesidad de poderes federales ambientales no sólo limitados a la normación básica y comprensivos de poderes de ejecución. “Federalización” en la escala autonómica. Redefinición de la gobernanza ambiental incluyendo mecanismos reales y efectivos. Calidad total (Integración y verificación. Codificación y simplificación procedimental, evaluación normativa retrospectiva). Redefinición del *soft-law* en relación con el desarrollo sostenible. Educación y devolución de poderes a la ciudadanía mediante la información veraz en los actos de consumo no sólo en términos de excelencia. “El futuro del Derecho ambiental”. *Medio Ambiente y Derecho: Revista electrónica de derecho ambiental*, núm. 24, febrero 2013. Disponible en: <http://huespedes.cica.es/gimadus/> (último acceso 12/07/2015).

<sup>619</sup> Vid. HEFENDEHL, R. En “Derecho Penal Medioambiental: ¿por qué o cómo?”, op. cit., pág. 2.

### III.- CONFIGURACIÓN DEL BIEN JURÍDICO MEDIO AMBIENTE EN EL ART. 45 CE

#### 3.1.- Introducción

La protección otorgada al medio ambiente por distintos países en sus respectivas constituciones, inicia su andadura tras los conflictos bélicos provocados por la Segunda Guerra Mundial, creando dos bloques que evolucionaron por separado. Por una parte, los países que establecieron gobiernos democráticos y consiguieron aumentar espectacularmente sus cotas de producción y consumo; por otra, los regidos por sistemas socialistas con economías centralizadas y con índices de crecimiento igualmente sólidos, pero diferentes a los de la Europa occidental. Del citado esquema cabe resaltar la idiosincrasia española y portuguesa, con sistemas autárquicos prolongados hasta los años 70. Las Constituciones que se fueron promulgando en los países de nuestro entorno se inclinaron por favorecer la inclusión de determinados valores sociales en distintos apartados; economía, trabajo, cultura, educación, familia, así como el movimiento ambientalista de los años 70, que incorporó el medio ambiente como ámbito específico de intervención del Estado social, sobre todo tras la cumbre de Estocolmo.<sup>620</sup>

Los nuevos movimientos sociales (pacifistas, ecologistas y feministas) demandaban con insistencia el reconocimiento jurídico de una serie de pretensiones que hasta ese momento no aparecían en las declaraciones: el derecho al medio ambiente, a la paz, al patrimonio común de la humanidad, al desarrollo y a la autodeterminación de los pueblos.<sup>621</sup> Los derechos mencionados se vinculan entre sí de forma estrecha, pero uno de los que más protagonismo suscita es el derecho al medio

---

<sup>620</sup> Conferencia de la ONU sobre el Medio Humano, celebrada en 1972, más conocida como Conferencia de Estocolmo.

<sup>621</sup> Se sigue aquí la enumeración que realiza RODRÍGUEZ PALOP, M<sup>a</sup> E. *La nueva generación de derechos humanos: origen y justificación*. Ed. Universidad Carlos III / Dykinson. Madrid, 2002, págs. 20 y ss.

ambiente, que ya no se considera una pretensión puramente moral, sino una realidad jurídica de inusitada proyección internacional.<sup>622</sup>

Si bien la mayor parte de Constituciones europeas no citaban expresamente en su articulado la protección al medio ambiente cuando fueron promulgadas, con posterioridad algunas sufrieron reformas con el objeto de modificar esta circunstancia.<sup>623</sup> Sin embargo, las Constituciones más recientes sí han acogido la preocupación por el medio ambiente en sus textos, ya sea en forma de garantía del derecho de los ciudadanos a un medio ambiente seguro y saludable, o bien instando a los poderes públicos a que cumplan de forma obligatoria con la protección mencionada.<sup>624</sup>

Subsiste la opinión de que en su gran mayoría se trata de declaraciones programáticas dirigidas a los diferentes gobiernos de los Estados, quedando así en manos de los gobernantes la realización efectiva y consecuente de las directrices que marquen los diferentes países, pero lo verdaderamente trascendente no es la mayor o menor voluntad de los gobiernos de llevar a cabo dichas políticas de actuación, sino la naturaleza que posee dicha obligación; así se determinan dos posturas divergentes y contrapuestas. Los que refrendan, siguiendo a Kelsen<sup>625</sup>, que la obligación no es tal, esto es, no ven en la ausencia una violación grave a la Norma Fundamental, y los que se colocan en el extremo opuesto, que reiteran la necesaria vinculación obligacional

---

<sup>622</sup> Vid. REY PÉREZ, J. L. "Introducción: el derecho al medio ambiente". En AA.VV. *Nuevas formas de contaminación atmosférica. Un análisis jurídico multidisciplinar*. Ed. Dykinson. Madrid, 2010, págs. 13-32, en especial 17.

<sup>623</sup> El art.20 a) de la Ley Fundamental de Bonn fue introducido por la Ley de 27 de octubre de 1994, la Constitución italiana de 1948 no se refiere expresamente al medio ambiente, si bien posee algunas normas a las que la doctrina asocia dicha protección, como el art. 9.2, en el que se lee que se asigna a la República la <<tutela del paisaje y del patrimonio histórico y artístico de la Nación>>. Y los textos constitucionales franceses de 1946 y 1958 tampoco lo mencionan, lo cual no ha obstaculizado que posean una extensa protección de sus principales aspectos en forma de reglamentos, además de la Carta francesa del medio ambiente, promulgada en 2005. Vid. JARIA I MANZANO, J., que considera a la Carta francesa el documento constitucional más sintético y panorámico de los Estados del Norte. "El medio ambiente como bien jurídico reconocido en la Constitución española y su significación para el Derecho penal". En QUINTERO OLIVARES, G. *Derecho Penal Ambiental*, op. cit., págs. 21-45, en especial 23.

<sup>624</sup> A modo de ejemplo: art. 66 de la Constitución portuguesa de 1976 (de gran influencia en la redacción de nuestro art. 45); art. 97 de la Constitución de Guatemala de 1985; arts.67 y 68 de la Constitución de Perú, arts. 7 y 8 de la Constitución de Paraguay de 1996; art. 47 de la Constitución de Uruguay de 1967; art. 79 de la Constitución de Colombia de 1991; art. 225 de la Constitución de Brasil de 1988; arts. 73 y ss. de la Constitución de Suiza de 1999; art. 42 de la Constitución de Rusia de 1993, con un curioso texto: <<Todo ciudadano tiene derecho a un medio ambiente favorable, información fidedigna sobre su estado e indemnización por el daño ocasionado a su salud o propiedad por infracciones de la ley ecológica>>.

<sup>625</sup> Vid. Kelsen, H. *Teoría pura del derecho* (16ª ed.) Ed. Porrúa. México, 2009, págs. 201 y ss.

existente y, en consecuencia, solicitan la intervención de los tribunales constitucionales para paliar dichas omisiones, calificadas por la doctrina como *omisiones inconstitucionales*.<sup>626</sup> Si los Estados se limitan a mantener el *status quo* preexistente, la realización completa del Estado social se presenta mermada, se incumple claramente el mandato constitucional. La idea de Constitución como suprema norma jurídica en nuestro país ha seguido el modelo norteamericano de la supremacía, apartándose del modelo kelseniano de justicia constitucional, configurándose como la “norma suprema”, según GARCÍA DE ENTERRÍA.<sup>627</sup>

Los avances científico-técnicos a los que se enfrenta la sociedad de consumo actual son tan inciertos que la protección del medio ambiente se enfrenta a unos riesgos difíciles de pronosticar; quizás el amplio contenido del art. 45 CE represente esta idea, sobre todo en el apartado 1. <<...medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona...>>, con una construcción claramente antropocéntrica, olvidando que el desarrollo de la persona está vinculado al desarrollo científico mundial y que de hecho se producen desajustes altamente peligrosos, dependiendo del país donde se desarrolle la vida de cada individuo.<sup>628</sup>

---

<sup>626</sup> Vid. ESCAJEDO SAN EPIFANIO, L. “El medio ambiente en la crisis del Estado social. Su protección penal simbólica”, op. cit., pág. 32.

<sup>627</sup> Vid. GARCÍA DE ENTERRÍA, E. *La Constitución española de 1978 como pacto social y como norma jurídica* (ed. Conmemorativa del 25 aniversario de la Constitución española 1978-2003) Ed. INAP. Madrid, 2003, pág. 35 y 45.

<sup>628</sup> Me refiero en este punto a la enorme hipocresía de los países ricos en relación a los que se encuentran en vía de desarrollo, citando a modo ejemplificativo el caso de Ghana, convertido en un auténtico vertedero ilegal gracias al envío por parte de muchos países occidentales de productos informáticos y electrodomésticos de toda índole, catalogados como reutilizables cuando en realidad son inservibles y sólo generan la proliferación de focos contaminantes, contrarrestando de esta manera la supuesta ayuda a dichos países, contando de antemano con la incapacidad para tratar dichos residuos y la ausencia de legislación al respecto. Resulta un negocio tan rentable que se estima que ya genera más beneficios que el narcotráfico y que el 75% no llega a las plantas de reciclaje, por la existencia de redes mafiosas que se encargan de la recogida de residuos y su posterior traslado, principalmente a países africanos y asiáticos. La exportación de residuos peligrosos está prohibida desde 1989 por la Convención de Basilea, tratado internacional firmado por 190 países excepto EE.UU. y Haití (la UE también la ha incorporado a su legislación). Los efectos en toda su dimensión ambiental y en términos de salud todavía no se conocen con exactitud, aunque se analizan los estragos que causan los elementos que contienen, como mercurio, plomo, cobre, hierro, oro, plata, estaño o plástico, así como la liberación a la atmósfera de gases con alto nivel de toxicidad. Vid. FELDT, T. / FOBIL, J. N. / WITTSIEPE, J. et. al. “High levels of PAH-metabolites in urine of e-waste recycling workers from Agbogbloshie, Ghana”. En *Science of the Total Environment*, Vol. 466-467, Issue 1 January. Ed. Elsevier B.V, 2014, págs. 369-376. En líneas generales, para entender lo que representa vid. BISSCHOP, L. / VANDE WALLE, G. “Environmental Victimisation and Conflict Resolution: A Case Study of e-Waste”. *Emerging Issues in Green Criminology. Exploring Power, Justice and Harm*. Reece Walters / Diane S. Westerhuis / Tanya Wyatt (eds.) Ed. Palgrave Macmillan. Basingstoke (UK), 2013. págs. 34-54. En España, la llamada operación Fragmento, dirigida por la Fiscalía de Medio Ambiente durante 2010-2011, descubrió una red encargada de realizar labores de recogida y reciclado de electrodomésticos de refrigeración de forma irregular, sin garantizar un adecuado tratamiento de sus gases refrigerantes, que poseen efectos altamente

Durante milenios, el hombre ha acudido a su relación con la Naturaleza con el propósito de encontrar respuestas a su dimensión social.<sup>629</sup> En este contexto, resulta del todo razonable la enorme preocupación *in crescendo* que la mayor parte de las sociedades a lo largo de la historia ha venido mostrando por la tutela del medio ambiente, sobre todo desde el Renacimiento, ya que a partir de esa época se produjo una vuelta a la dialéctica que trataba de armonizar Naturaleza y cultura. Gracias a la obra de ROUSSEAU, por vez primera se entiende que el progreso de la civilización, si no se conjuga con un restablecimiento de los medios de la Naturaleza, provoca el envilecimiento de los hombres. La tensión finalmente se resolverá de manera contradictoria cuando la revolución industrial y la concepción positivista del progreso dejen de lado el interés por la continua destrucción del medio natural.<sup>630</sup>

La inquietud ecológica por parte del mundo jurídico aparece cuando la sociedad percibe la realidad y la enorme trascendencia de las actuaciones de consumo, industriales, en suma, del esfuerzo que supone otorgar a las crecientes generaciones *calidad de vida*, término por otra parte tan subjetivo como inabarcable, difuso e impreciso, aunque ésta se vea determinada por la actividad pública promotora de los bienes sociales constitucionalizados, y que siempre será mejorable en función de los medios financieros que utilice el Estado para su promoción, la ponderación que se realice entre los distintos bienes y el surgimiento de nuevos bienes merecedores de protección jurídica.<sup>631</sup>

---

contaminantes; sin embargo, sí llevaban a cabo el cobro de la tasa correspondiente, que ascendía a casi 20 euros por cada operación de desguace. Los resultados de la investigación dieron lugar a la incoación de cuatro procedimientos por actuaciones de reciclaje ilegal de electrodomésticos y otras muchas irregularidades conexas. En la actualidad, el asunto se encuentra ya calificado, a la espera de la celebración de juicio oral. Vid. “Memoria 2013. Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo”. Ed. Fiscalía General del Estado. Madrid, 2013. pág.49. Disponible en: [https://www.fiscal.es/fiscal/PA\\_WebApp\\_SGNTJ\\_NFIS/descarga/MEMORIA\\_2013\\_FISCALIA%20MEDIO\\_AMBIENTE.pdf?idFile=5c9a7572-2a27-4e5b-ac2d-d3ab8c1b036f](https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/MEMORIA_2013_FISCALIA%20MEDIO_AMBIENTE.pdf?idFile=5c9a7572-2a27-4e5b-ac2d-d3ab8c1b036f) (último acceso 12/07/2015).

<sup>629</sup> Vid. PÉREZ LUÑO, A. E. “Comentarios al art.45. Medio ambiente”. En *Comentarios a la Constitución española de 1978*, Vol. IV. Oscar Alzaga Villaamil (dir.) Ed. Edersa. Madrid, 1996, págs. 237-276, en especial 238.

<sup>630</sup> Cfr. PÉREZ LUÑO, A. E. En “Comentarios al art.45. Medio ambiente”, op. cit., pág. 239. Vid. JARÍA I MANZANO, J. / VERNET I LLOBET, J. “El Derecho ambiental en un contexto de cambio de paradigma del discurso jurídico”. En *Estudios de Derecho Ambiental. Libro Homenaje al profesor Josep Miquel Prats Canut*. Gonzalo Quintero Olivares / Fermín Morales Prats (coords.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2008, págs. 395-409.

<sup>631</sup> En estos términos lo entiende CANOSA USERA, R. “Constitución y medio ambiente”, op. cit., pág. 34.

### 3.2.- El mandato constitucional: binomio derecho-deber

La Constitución española de 1978, al igual que la mayoría de Constituciones promulgadas en países que asistían al nacimiento de su senda democrática, se preocupó de incluir en su articulado las demandas ya internacionalizadas por varias declaraciones. El Título I, Capítulo III <<*De los principios rectores de la política social y económica*>> incluye la tutela medioambiental, la salud, el progreso social y económico, la cultura, el patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y la defensa de consumidores y usuarios.<sup>632</sup>

Es el art.45 el que se ocupa expresamente del medio ambiente, con una estructura binomial “derecho-deber”, en concreto por la redacción otorgada a su apartado primero.<sup>633</sup> Resulta evidente que al art.45 no le ampara la previsión del art.53.2 CE en cuanto que no estamos ante un Derecho Fundamental incluido en el Capítulo II, Sección 1ª, y por tanto no se le otorga el trato de un verdadero derecho subjetivo, pero parte de la doctrina más cualificada no se muestra del todo de acuerdo con esta postura, instando a entender el carácter normativo de primer orden de la Constitución y su eficacia jurídica plena.<sup>634</sup> Sin embargo, por su ubicación sistemática, sí le es de aplicación el art. 53.3.<sup>635</sup>

---

<sup>632</sup> En nuestro país, el único antecedente constitucional referido a la preocupación por la Naturaleza lo encontramos en la Constitución de la II República de 1931, que proclamaba en su art.45.2: <<*El Estado protegerá también los lugares notables por su belleza natural o por su reconocido valor artístico o histórico*>>, que según la doctrina pudo inspirar el art.9.2 de la Constitución italiana de 1947. Vid. PÉREZ LUÑO, A. E. En “Comentarios al art.45. Medio ambiente”, op. cit., pág. 250; VEGA JURADO, D. J. *La disciplina ambiental de las actividades industriales*. Ed. Tecnos. Madrid, 1994, pág. 28. No obstante, podemos encontrar antecedentes internacionales más remotos antes de las primeras proclamaciones constitucionales en alguna norma iberoamericana y en EE.UU., que en la década de los 60 promulga una normativa federal general compuesta por dos leyes: la National Environmental Policy Act (NEPA) de 1969, y la Endangered Species Act (ESA) de 1973. La primera introduce el mejor instrumento de protección específica, la evaluación de impacto ambiental, como indica CANOSA USERA, R. En “Constitución y medio ambiente”, op. cit., págs. 30 y 31.

<sup>633</sup> Art. 45 CE: <<1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. 2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. 3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije, se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado>>.

<sup>634</sup> En este sentido, GARCÍA DE ENTERRÍA, E. “La Constitución española de 1978 como pacto social y como norma jurídica”, op. cit., pág. 37; DOMPER FERRANDO, J. *El medio ambiente y la intervención administrativa en las actividades clasificadas* Vol. I. Ed. Civitas. Madrid, 1992, págs. 105 y ss; PÉREZ LUÑO, A. “Comentarios al art. 45. Medio ambiente”, op. cit., pág. 256; DOMÉNECH PASCUAL, G. *Derechos fundamentales y riesgos tecnológicos. El derecho del ciudadano a ser*



Por tanto, existe una gradación en relación a la protección otorgada, ya que en la cúspide del despliegue efectivo de consecuencias se encuentran los derechos fundamentales y libertades públicas; en un escalón intermedio, las disposiciones organizativas, y en la base los principios rectores de la política social y económica, si bien conviene no olvidar que el artículo que nos ocupa vincula a los tres poderes.<sup>636</sup>

Al legislativo porque es el encargado de desarrollar el mandato constitucional de regular mediante ley estos derechos, al judicial porque los jueces son los que deben interpretar y aplicar las leyes conforme a la Constitución, a toda ella, sin particiones; y al ejecutivo porque debe perseguir los fines y objetivos constitucionales, convirtiendo en ilegítima toda actuación que no sea conforme a tales propósitos.<sup>637</sup> Además, el medio ambiente, al adoptar una configuración antropocéntrica, forma parte de otros valores como los económicos, estéticos y éticos, y la extensión del propio concepto hace que resulten obligatoriamente objeto de tutela jurídica; en relación directa todos

---

*protegido por los poderes públicos*. Ed. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 2006. No se muestran tan partidarios de esta interpretación CANOSA USERA, R. <<La minuciosidad constituyente no evita las muchas dudas que surgen del texto. Porque si, por un lado, parece claro que se consagra un interés objetivo de rango constitucional, del cual se deducen obligaciones para los poderes públicos (art. 45.2 CE), por otro lado, es problemático, y hay dudas sobre la posibilidad de que los ciudadanos puedan reclamarlo con la sola apoyatura constitucional>>. En “Constitución y medio ambiente”, op. cit., pág. 44; MARTÍN MORALES, R., entiende que aunque las normas programáticas, como el caso del art. 45 CE, no contienen derechos subjetivos, sí que despliegan funciones de dirección política, así como de guía de fundamentos para delimitar otros derechos. “Constitución y medio ambiente”. En *Derecho, Globalización, Riesgo y Medio Ambiente*. Esteban Pérez Alonso / Estandislaio Arana García et. al. (eds.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2012, págs. 549-560; ESTEVE PARDO, J. “Derecho del medio ambiente”, op. cit., pág. 18; ORTEGA ÁLVAREZ, L. “Concepto de medio ambiente”. En *Tratado de Derecho Ambiental*. Luis Ortega Álvarez / Consuelo Alonso García (dirs.) Rosario de Vicente Martínez (coord.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2013, págs. 31-54, en especial 44 y ss.

<sup>635</sup> Art 53.3 CE: <<El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo III informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen>>. Al respecto, vid. JARIA I MANZANO, J. De acuerdo con el tenor literal del art. 53.3, el art. 45.1 posee un valor hermenéutico para los operadores jurídicos, sin que podamos obviar que, en relación a la interpretación de las normas infraconstitucionales, éste puede colisionar con otros bienes jurídicos como el progreso social y económico (art. 40.1) o el derecho a una vivienda digna (art. 47). Por esta razón, el acto interpretativo se llevará a cabo tomando en consideración el equilibrio entre ellos. En “El medio ambiente como bien jurídico reconocido en la Constitución española y su significación para el Derecho penal”, op. cit., págs. 25 y ss.

<sup>636</sup> Vid. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T-R. “Derecho, Medio Ambiente y desarrollo”. En REDA, núm. 24. Ed. Civitas. Madrid, 1980, págs. 5-16, en especial 8; LOPERENA ROTA, D. I. En “La protección de la salud y el medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona en la Constitución”, op. cit., págs. 1455-1484.

<sup>637</sup> Por ejemplo, el contenido procedimental del art. 45.1, según JARIA I MANZANO, J., no ha sido suficientemente tratado, puesto que tanto la posibilidad de participar como la de solicitar el control de las decisiones que se tomen, han sufrido una interpretación demasiado rigurosa del art. 53.3 por parte de la jurisprudencia y la doctrina. En “El medio ambiente como bien jurídico reconocido en la Constitución española y su significación para el Derecho penal”, op. cit., págs. 27.

los elementos naturales de titularidad común y más, si cabe, la propiedad privada, una vez reconocida su función social.<sup>638</sup>

De este modo, el art.45 puede y debe vincularse con otros artículos de la Constitución, formando parte de un todo unitario, ya que guardan directa relación con la calidad de vida y el medio ambiente.<sup>639</sup> No se entendería que tratáramos de salvaguardar la calidad de vida de un sujeto sin prestar la misma atención a su dignidad y libre desarrollo de su personalidad (art.10.1), a su derecho fundamental a la vida e integridad física y moral (art.15), a su intimidad personal y familiar (art. 18.1), a la inviolabilidad de su domicilio (art. 18.2), a la libre elección de residencia (art. 19), a la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado (art.38), a la protección de la salud (art.41), o al derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (art.47), obligando éste positivamente a los poderes públicos a regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación, o al derecho al trabajo (art.35.1), por citar tan sólo unos ejemplos, en los que no hace falta precisar más los términos para entender que todos ellos tienden al equilibrio necesario para que la persona pueda desarrollarse biológica, psíquica y funcionalmente.<sup>640</sup> En términos similares se expresa gran parte de la doctrina, al reflejar que nos encontramos ante un *asunto* multidisciplinar, y que, por tanto, las imbricaciones y entramados que se pueden generar tanto legislativa como sectorialmente, son abundantes a la vez que determinantes si el propósito obedece a dotarlo de una protección adecuada.<sup>641</sup>

---

<sup>638</sup> Vid. MATELLANES RODRÍGUEZ, N. En “Derecho Penal del Medio Ambiente”, op. cit., págs. 20-28. LOPERENA ROTA, D. I. Entiende por ambiente los elementos naturales de titularidad común y de características dinámicas, añadiéndose el suelo, dado que la función social de la propiedad se ha convertido ya en el soporte ambiental de intereses generales irrenunciables, como es el caso de la salud humana. En “La protección de la salud y el medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona en la Constitución”, op. cit., pág. 1458. Pensemos, por ejemplo, en las enormes catástrofes causadas por los afanes constructivos en zonas de riesgo elevado, alterando el curso normal de los ríos, con el visto bueno de las administraciones autonómicas (que aprueban los Planes Generales), o locales (que aprueban los Planes Parciales) encargadas de otorgar las correspondientes licencias de edificación. Todo ello indiscutiblemente presidido por el Derecho comunitario.

<sup>639</sup> La misma conectividad que se produce en el ámbito penal de protección al medio ambiente, ya que los arts. 325 y ss. del CP aparecen estrechamente ligados a otros tipos penales.

<sup>640</sup> Acerca de la carga que pesa sobre los Derechos constitucionales a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio, vid. LORCA NAVARRETE, J. F. / LORCA MARTÍN DE VILLODRES, M<sup>a</sup> I., que acentúan el reconocimiento global que ha de otorgarse a los mismos, pues las intromisiones pueden sucederse por cualquier medio. Esta interpretación es acorde a los avances tecnológicos de nuestras sociedades. En *Derechos fundamentales y jurisprudencia* (4<sup>a</sup> ed.) Ed. Pirámide. Madrid, 2010, págs. 159 y ss.

<sup>641</sup> Vid. LOZANO CUTANDA, B. Considera la problemática de armonizar el bien jurídico medio ambiente con otros valores y derechos también reconocidos en la Constitución, como el desarrollo económico y la libertad de empresa (arts. 130 y 38 respectivamente), y la función de la jurisprudencia y doctrina del Tribunal Constitucional en el cometido de encontrar un *punto de equilibrio* entre ambos,

No es objeto de este trabajo realizar un análisis de la hermenéutica del precepto, pero no podemos dejar de referirnos a la desacertada redacción, en nuestra opinión, del apartado 3: <<...se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado>>, en el que se otorga preferencia al orden penal a la hora de defender los ataques más graves, olvidando el constituyente el carácter de *ultima ratio* que debe presidir el uso de Derecho penal, dejando a cargo del legislador ordinario la facultad de elección entre éste y el orden administrativo. De sobra conocido es el enorme influjo que provoca en la sociedad las continuas reformas del CP, resultando muchas veces demagógico el discurso que las precede, así como la escasa eficacia que producen tanto en el orden práctico como desde una perspectiva político criminal.<sup>642</sup>

---

encontrándose éste, en caso de incompatibilidad, en una ponderación caso a caso de los intereses en juego, aplicando el principio de proporcionalidad, según la definición que ofrece la STC (Sala Pleno) 66/1991, de 22 de marzo [RTC 1991\66]: <<No siendo los derechos que la Constitución reconoce garantías absolutas, las restricciones a que pueden quedar sometidos son tolerables siempre que sean proporcionadas, de modo que, por adecuadas, contribuyan a la consecución del fin constitucionalmente legítimo al que propendan y, por indispensables, hayan de ser inevitablemente preferidas a otras que pudieran suponer, para la esfera de la libertad protegida, un sacrificio menor>> (FJ 2). En “Introducción al Derecho Ambiental y a la intervención administrativa para la protección del Medio Ambiente”, op. cit., págs. 124 y 125. Vid. MIR PUIG, S. La proporcionalidad en sentido estricto debe reflejar la comparativa entre los costes y beneficios, representados por la gravedad de los derechos individuales afectados por la pena y la importancia de los bienes jurídico-penales afectados por el delito, y es por esta vía constitucional por la que adquiere legitimación la función preventiva del Derecho penal. “Límites del normativismo en Derecho penal”. En *Derecho penal del siglo XXI*. Cuadernos de Derecho Judicial VIII-2007. Ed. Centro de Documentación Judicial. Consejo General del Poder Judicial. Madrid, 2008, págs. 41-81, en especial 63. Vid. MARTÍN MORALES, R. / REQUENA LÓPEZ, T. / GUILLÉN LÓPEZ, E. “Aspectos constitucionales de la Ley del Ruido: derechos, fuentes y competencias”. En *Régimen jurídico del ruido. Una perspectiva integral y comparada*. Estanislao Arana García / M<sup>a</sup> Asunción Torres López (coords.) Ed. Comares. Granada, 2014, págs. 159-181; MOLINA NAVARRETE, C. Añade al haz de derechos sociales o de segunda generación afectados por el ruido, la protección de consumidores y usuarios a la que se refiere el art. 51 CE. “Fundamentos constitucionales de la tutela frente al ruido indeseado: el derecho fundamental a vivir en ambientes libres de violencia acústica”. En *El derecho a una vida sin ruidos insalubres. Protección social, civil, contencioso-administrativa y penal*. Juan Ignacio Marcos González / Cristóbal Molina Navarrete (coords.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2010, págs. 19-39.

<sup>642</sup> De esta opinión, GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. En palabras del autor, se infiere << un creciente protagonismo de la intervención del Derecho Penal que poco tiene que ver con la proclamada “intervención mínima” de éste. Me refiero al inequívoco proceso neocriminalizador que se observa en el ámbito de lo que la Criminología denomina “delincuencia expresiva”: medio ambiente, calidad de vida, ordenación del territorio, patrimonio artístico, histórico y cultural, salud pública, actividad socioeconómica y empresarial, mercado y consumidores, etc.>>. En “Introducción al Derecho Penal. Instituciones, fundamentos y tendencias del Derecho Penal. Instituciones, fundamentos y tendencias del Derecho Penal”, Vol. I, op. cit., págs. 47, 209 y 210; GIMBERNAT ORDEIG, E. En “La insoportable gravedad del Código Penal”, op. cit., págs. 211-216; SILVA SÁNCHEZ, J. M<sup>a</sup>. “La Expansión del Derecho penal, Aspectos de la Política criminal en las sociedades postindustriales”, op. cit., págs. 4-10; SANTA CECILIA GARCÍA, F. En “Medio ambiente y reparación del daño”, op. cit.; QUINTERO OLIVARES, G. “Estudio preliminar: cambiar las leyes y cambiar el Derecho Penal. Sobre la última reforma del Código Penal”, op. cit., págs. 17 y 18.

Además, tan sólo de la lectura del precepto, se desprende que la primera posición en el esquema sancionador la ocupa el Derecho penal, relegando al Derecho administrativo sancionador a una posición subordinada y de *ultima ratio*, cuando en verdad las posiciones resultarían más acordes a los principios generales del Derecho si se intercambiaran.<sup>643</sup> Es necesario insistir, y se harán las precisiones necesarias a lo largo de esta exposición, en un aspecto: en España, las continuas reformas a las que se ha visto sometido el CP que afectan a los delitos medioambientales, no han provocado que los procedimientos abiertos hayan desembocado en demasiadas condenas que conlleven ingreso en prisión, al menos eso es lo que se desprende de las estadísticas.<sup>644</sup>

Por tanto, no es descabellado intentar descifrar si el Derecho penal puro cumple las expectativas de reducir los actos y omisiones que dejan al medio ambiente en una situación de desamparo, y si no sería más eficaz y progresista atender a las figuras de prevención (con programas de educación interdisciplinar en los que las distintas Administraciones públicas se involucren de manera objetiva y garantista), que agravar desproporcionadamente las penas, si las comparamos con las previstas en otros delitos, dado que la criminalidad que representa este tipo de delitos no suele ser reiterativa, a no ser que hablemos de figuras encubiertas por factores medioambientales que en realidad se traducen en delitos contra el orden socioeconómico u otras formas delictuales. Asimismo, el principio de legalidad que expresa el mandato del art.25.1 CE corre el riesgo de encontrarse seriamente mermado gracias a la intervención de una mayoría parlamentaria que acude de forma abusiva al instrumento penal y a la carga coactiva de la pena, persiguiendo ciertos objetivos no siempre explicados.<sup>645</sup>

---

<sup>643</sup> Esta orientación ya se puso de manifiesto a través de la Recomendación 3ª del Congreso Internacional de Derecho Penal celebrado en Hamburgo en 1979: <<En la preservación del medio ambiente corresponde el papel esencial a las disciplinas no penales. El Derecho penal debe intervenir, sin embargo, para asegurar la eficacia de la normativa de carácter no penal, principalmente de Derecho administrativo y Derecho civil. En este ámbito, el Derecho penal cumple ante todo una función auxiliar. Es preciso, no obstante, que el Derecho penal intervenga de forma autónoma en supuestos de atentado grave al medio ambiente>>.

<sup>644</sup> En abril de 2015, cinco penados por el art. 325 CP cumpliendo condena. Fuente: Sistema de Información Penitenciaria (SIP), de la Subdirección General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. En el transcurso de 2013, se dictaron un total de 38 sentencias condenatorias por delitos contra el medio ambiente, y el TS emitió 3, frente a las sentencias absolutorias, que alcanzaron las cifras de 24 y 6, respectivamente. Vid. “Memoria 2013. Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo”, op. cit., págs. 21 y 22.

<sup>645</sup> En este sentido, vid. HUERTA TOCILDO, S. Muestra gráficamente la confusión de conceptos si el principio de legalidad queda acotado por la adopción del siguiente cuadro de garantías: 1.- Exigencia de reserva absoluta de ley en sentido formal (*nullum crimen, nulla poena sine lege*). 2.- Prohibición de retroactividad de las normas penales desfavorables (*nullum crimen, nulla poena sine praevia lege*). 3.- Exigencia de tipicidad y prohibición de analogía y de aplicación extensiva *in malam partem* (*nullum*

El apartado 3 del art. 45CE también ha recibido críticas por innecesario y superfluo, debido a que su inclusión como reforzamiento del castigo del infractor del anterior no resulta convincente, como apunta de forma expresiva ALZAGA VILLAAMIL en su célebre frase <<...los tipos penales no precisan de clavo o escarpia alguna en la Constitución de la que ser colgados...>>.<sup>646</sup> Esta reserva expresa de Ley se encuentra garantizada por el art. 25.1 (subrayado respecto a lo sancionador por el art. 53.1, y en cuanto a la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas por el art. 106); no es muy comprensible por qué esta previsión se refiere únicamente al apartado 2º, cuando quizás debió extenderse también al primero. Así se le dotaría de mayor claridad y se evitarían interpretaciones contradictorias<sup>647</sup>, a la vez que la referencia al deber de reparar el daño es un principio general del Derecho penal reflejado en el Capítulo I del Título V <<De la responsabilidad civil y su extensión>> del CP, resultando su localización en el texto constitucional inidónea<sup>648</sup>, aunque algunos autores consideran que de lo que se trata realmente es de reforzar la eficacia de la protección medioambiental<sup>649</sup>, pero este argumento no se sostiene si tan sólo se intenta abordar la problemática del medio ambiente, porque entonces debemos preguntarnos qué diferencia -cualitativa y cuantitativamente- la protección que se debe otorgar al medio ambiente, en términos constitucionales, a la que se debiera conceder a otras materias.<sup>650</sup>

---

*crimen, nulla poena sine praevia lege scripta et stricta*). 4.- Mandato de taxatividad en la descripción de los tipos penales (*nullum crimen, nulla poena sine praevia lege scripta, stricta et certa*), añadiéndose las derivadas garantías jurisdiccionales y de ejecución. Por tanto, debería comprender también los principios de fragmentariedad o exclusiva protección de bienes jurídicos, de proporcionalidad y de subsidiariedad, dotándose de una cobertura penal adecuada y proporcionada a la gravedad de las conductas. “Principio de legalidad y normas sancionadoras”. En *El principio de legalidad. Actas de las V Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional*. Ed. Tribunal Constitucional-Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 2000, págs. 11-76, en especial 16 y 17.

<sup>646</sup> Vid. ALZAGA VILLAAMIL, O. *Comentario sistemático a la CE de 1978* (1ª ed.) Del Foro Madrid, 1978, págs. 325-326.

<sup>647</sup> Vid. DOMPER FERRANDO, J. “El medio ambiente y la intervención administrativa en las actividades clasificadas”, op. cit., págs. 119, 123 y 124.

<sup>648</sup> Según PÉREZ LUÑO, A. En “Comentarios al art.45. Medio ambiente”, op. cit., pág. 270.

<sup>649</sup> Por ejemplo, PEÑALVER I CABRÉ, A., para quien se destaca la importancia de la sanción administrativa en el Derecho ambiental. De hecho, éste es el único espacio material en el que la CE recoge la figura de la sanción administrativa de manera expresa. En “Nuevas tendencias sobre la inactividad administrativa en la aplicación de las sanciones ambientales”, op. cit., pág. 175.

<sup>650</sup> Como evoca DE VICENTE MARTÍNEZ, R., la CE no obliga de forma expresa al legislador a penalizar los atentados contra bienes jurídicos fundamentales como la vida o la integridad física. Sin embargo, sí lo hace en el art. 45.3 en relación al medio ambiente. “Derecho Penal del Medio Ambiente”. En *Tratado de Derecho Ambiental*. Luis Ortega Álvarez / Consuelo Alonso García (dirs.) Rosario de Vicente Martínez (coord.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2013, págs. 287-320, en especial 288. A juicio de QUINTERO OLIVARES, G. / NOGUERA FERNÁNDEZ, A., debe existir una intervención equilibrada del Derecho penal, en ningún caso despreciando su carácter secundario en relación con el

En términos económicos, la reparación del daño en materia medioambiental puede resultar incalculable en muchos casos, y en otros de imposible materialización en un periodo más o menos acotado.<sup>651</sup> Esto no significa que no se tenga que responder exactamente en los mismos términos que si se produce otro tipo de actuación civil, en cuyo caso serán de aplicación los arts. 1.902 y ss. del Código Civil (responsabilidad por culpa o negligencia), o administrativa, en cuyo caso se responderá por el art. 130.2 y 3 en el caso de personas físicas y jurídicas<sup>652</sup>, y los arts. 139, 140 y 145 para las Administraciones Públicas y personal a su servicio<sup>653</sup>, todos ellos de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, salvo casos de fuerza mayor.

La Directiva comunitaria de 2004 sobre responsabilidad medioambiental también se ha ocupado de establecer el carácter objetivo e ilimitado de la misma.<sup>654</sup> De concepción romana, sustentado en los principios 16 y 13 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que establecen que los sujetos que contaminan deberían, en principio, cargar con los costos de la contaminación, al tiempo que instituye la obligación de los Estados de desarrollar las legislaciones nacionales en materia de responsabilidad por daño ambiental e indemnización respecto de las víctimas de la contaminación y degradación ambiental. Se extiende a los daños

---

Derecho administrativo sancionador. “El Derecho penal y los principios rectores de la política social y económica”. En *Derecho penal constitucional* Capítulo 9. Gonzalo Quintero Olivares (dir.) Jordi Jaria I Manzano (coord.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2015, págs. 455-492, en especial 466 y ss.

<sup>651</sup> Pensemos en una zona que se declare catastrófica tras un accidente nuclear como el sucedido en la central de Fukushima (Japón) en 2011, o en un incendio de dimensiones devastadoras de flora y fauna específicas, un vertido de sustancias altamente contaminantes al mar, a un río, etc.

<sup>652</sup> Art.130.2: <<Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario, así como con la indemnización por los daños y perjuicios causados que podrán ser determinados por el órgano competente, debiendo, en este caso, comunicarse al infractor para su satisfacción en el plazo que al efecto se determine, y quedando, de no hacerse así, expedita la vía judicial correspondiente>>.

<sup>653</sup> El enunciado del art. 139.2 parece que se aleja del criterio que debiera regir cuando concreta que <<En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas>>. Más si cabe cuando muchas de las actuaciones que dan lugar a daños en materia de medio ambiente se cometen por parte de las propias Administraciones públicas, bien de forma directa (por sus propios actos) o indirecta (vía autorizaciones, contratos de concesión, etc.), sumado a la dificultad que puede entrañar la evaluación en sí en determinadas ocasiones, como se puso de manifiesto *supra*. El art. 140 habla de la responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas, distingue la responsabilidad derivada de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación y otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la producción del daño; responderán en ambos supuestos de forma solidaria (apartados 1 y 2 respectivamente). Por su parte, el art. 145 se ocupa de la exigencia de responsabilidad patrimonial a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.

<sup>654</sup> Directiva 2004/35/CE de 21 de abril, del Parlamento Europeo y del Consejo sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños ambientales.

ambientales ocasionados por operadores que realicen actividades riesgosas, sean éstas de riesgo potencial o real para el ser humano y el medio ambiente, y se encuentren contempladas en los supuestos del Anexo I de la Directiva. Se institucionaliza así el conocido principio <<*quien contamina paga* -polluter pays->><sup>655</sup>, por otra parte también recogido en nuestro texto constitucional, pero con una diferencia conceptual, y es que la CE lo prevé como una obligación reparadora que se suma a la actuación propiamente sancionatoria y, sin embargo, el planteamiento del principio representa una hipotética facultad para actuar libremente, siempre y cuando se desembolse la cantidad a satisfacer.<sup>656</sup>

Esta importante Directiva ha dado lugar a la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, a la que nos debemos referir por ser la primera que se preocupa de mencionar en su Preámbulo a las sanciones administrativas en orden cronológico anterior a las penales.<sup>657</sup> La posición inversa de los términos *administrativas* / *penales* en contraposición a la mantenida por el propio art.45.3 CE, resulta mucho más acorde con la naturaleza sancionatoria, aunque aparentemente pueda parecer intrascendente, porque refleja con mayor aproximación la idea del principio de subsidiariedad que rige el ordenamiento penal.<sup>658</sup>

---

<sup>655</sup> Principio consagrado dos años antes en Alemania por una ley marco que regula la protección de la naturaleza y el paisaje, desarrollada en algunos Länder. *Bundesnaturschutzgesetz vom. 25. März 2002 (BNatSchG)*. Vid. AGUILERA RULL, A. / AZAGRA MALO, A. “Transposición de la Directiva 2004/35/CE, de 21 de abril, sobre responsabilidad medioambiental en Alemania y en España”. En *Indret: Revista para el Análisis del Derecho*, núm. 3. Ed. Universidad Pompeu Fabra. Barcelona, julio 2007. págs. 1-15, en especial 5.

<sup>656</sup> El desarrollo normativo de este conocido principio, acuñado en 1972, en PLAZA MARTÍN, C. “Medio ambiente en la Unión Europea”. *Tratado de Derecho Ambiental*. Luis Ortega Álvarez / Consuelo Alonso García (dirs.) Rosario de Vicente Martínez (coord.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2013, págs. 79-143, en especial 116 y ss.

<sup>657</sup> <<El artículo 45 de la Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado como condición indispensable para el desarrollo de la persona, al tiempo que establece que quienes incumplan la obligación de utilizar racionalmente los recursos naturales y la de conservar la naturaleza estarán obligados a reparar el daño causado con independencia de las sanciones administrativas o penales que también correspondan>>. El Reglamento de su desarrollo parcial se aprobó por RD 2090/2008, de 22 de diciembre. Vid. JARIA I MANZANO, J., para quien, según el tenor del art. 45.3, la sanción penal se impone como una necesidad, al tiempo que la respuesta administrativa sancionadora tan sólo se permite. En “El medio ambiente como bien jurídico reconocido en la Constitución española y su significación para el Derecho penal”, op. cit., págs. 44 y 45.

<sup>658</sup> La relevancia de esta norma reside en que protege al medio ambiente tanto de los daños *producidos* como de los *todavía no producidos y sin perjudicado*, a diferencia de lo que ocurre con los sistemas de responsabilidad extracontractual o de responsabilidad patrimonial, convirtiéndolo asimismo en una peculiaridad del propio sistema de responsabilidad específica medioambiental, a la vez que concede fuerza de ley a los principios de *prevención* y *quien contamina paga*. Esto sucede porque la aplicabilidad de la norma reside en que el daño cumpla tres requisitos: 1.- Que cause un *cambio adverso y mensurable de un recurso natural o el perjuicio de un servicio de recursos naturales, tanto si se produce directa como indirectamente*. 2.- Que los efectos sean significativos. 3.- Que afecten a unos recursos naturales

Así, algunos opinan que la dogmática constitucionalista se enfrenta a una serie de limitaciones relacionadas, por una parte con la eficacia directa del art. 45 CE, por lo que cada vez más la labor jurisprudencial se desplaza hacia una interpretación del medio ambiente como derecho fundamental; por otra, frente a categorías como el riesgo, cuya extraordinaria presencia en la regulación medioambiental determina las soluciones aportadas para estudiar el umbral lesivo en cada caso.<sup>659</sup>

---

determinados (art. 2). Los objetivos de la Ley son, tanto reforzar los mecanismos de prevención, como asegurar la reparación de los daños medioambientales derivados de actividades económicas, aún cuando éstas se ajusten plenamente a la legalidad y hayan adoptado todas las medidas preventivas disponibles, así como garantizar que la prevención y la reparación de los daños medioambientales sea sufragada por el sujeto responsable y no por las administraciones públicas. No posee naturaleza sancionadora, así que es perfectamente compatible con penas y sanciones. Esta Ley, sin embargo, no es aplicable a los daños que no tengan un efecto adverso significativo, los daños sufridos por el medioambiente atmosférico y marítimo, así como los que se derivan de la contaminación acústica y lumínica, que mantienen por tanto su régimen jurídico tradicional. También representa una novedad la introducción de un sistema de garantías financieras obligatorias, regulándose así un sistema con aseguramiento de la responsabilidad del que se desconocen las consecuencias, y del que desde diversos sectores se proclama su enorme dificultad técnica. Los operadores de las actividades relacionadas en el Anexo III deberán disponer de una garantía financiera que les permita hacer frente a la responsabilidad medioambiental, cuyas modalidades son: a) Póliza de seguros ajustada a la Ley 50/1980; b) Aval obtenido por alguna entidad financiera; c) Constitución de una reserva técnica mediante la dotación de un fondo *ad hoc*. Se prevén exenciones para riesgos estimados inferiores a 300.000€, o actividades que impliquen sólo la utilización de biocidas y fitosanitarios para usos agropecuarios y forestales. La garantía exigida no podrá superar los 20.000.000€. Por varios motivos, como la extensa relación de obligaciones para los operadores, lo que implica costes excesivos, o la posibilidad de que las empresas que ya tengan contratados seguros que incluyan responsabilidades ambientales puedan unificarlos con los análisis de riesgos, según la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB): “Responsabilidad medioambiental. Implicaciones en la Industria Alimentaria” Madrid, febrero de 2010. Disponible en [www.fiab.es](http://www.fiab.es) (último acceso 12/07/2015). Con el fin de conocer y estudiar el recorrido de este sistema, se establece a la vez un sistema de informaciones periódicas dirigido a las Administraciones Públicas, previsto en la propia Directiva 2004/35/CE (art. 14). Los daños medioambientales excluidos se regirán por el Derecho civil, penal, laboral o administrativo que en cada caso resulte aplicable. Así, esta Ley, de acuerdo con el principio *quien contamina paga* y el reconocimiento de la acción pública, no aporta nada nuevo en relación a la LRJPAC para los daños producidos por las Administraciones Públicas que no sean estrictamente daños ambientales. Rige además el régimen de responsabilidad objetiva, siempre que la actividad que produce el daño sea una de las que figuran en el Anexo III (consideradas las más peligrosas); en caso contrario se seguirá un sistema de responsabilidad por culpa, negligencia o dolo en relación al coste de las medidas de reparación. Especialmente acusada se muestra esta disfunción en materia de ruidos, donde las dimensiones de los perjuicios causados hacen a veces muy dificultosa la tarea de probar la relación de causalidad y la evaluación económica del menoscabo o daño. Un amplio estudio de la Ley en BETANCOR RODRÍGUEZ, A. “Derecho Ambiental”, op. cit., págs. 1737 y ss; GUERRERO ZAPLANA, J. *La responsabilidad medioambiental en España*. Ed. La Ley. Madrid, 2010, págs. 45 y ss; ESTEVE PARDO, J. “Derecho del Medio Ambiente”, op. cit., págs. 96 y ss; GONZÁLEZ PÉREZ, J. *Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas* (5ª ed.) Ed. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2010, págs. 247 y ss., 395 y ss. Sobre la enorme dificultad de la responsabilidad extracontractual para *reparar lo irreparable*, vid., LÓPEZ JACOISTE, J. J. El autor muestra gran escepticismo sobre la capacidad de la responsabilidad extracontractual para reparar los daños ambientales. Estas consideraciones, pese a las distintas normativas promulgadas a partir de 1994, continúan plenamente vigentes. En *Transformaciones y paradojas de la Responsabilidad extracontractual* (Discurso leído el día 10 de enero de 1994, en su recepción pública como académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y legislación). Ed. Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Madrid, 1994, págs. 85-91.

<sup>659</sup> De esta manera MARTÍN MORALES, R., declara contundentemente: <<... el Derecho constitucional se ha quedado sin recursos, sin lenguaje, sin dogmática, lo que no deja de ser una



Para otros, la situación jurídica sobre la que asentar el Derecho ambiental, una vez frustrada su consideración de derecho subjetivo, será el deber de *conservar* al menos una ideación de Naturaleza, a través de la utilización racional del recurso natural de que se trate, correlato indisoluble del derecho a disfrutar de la Naturaleza.<sup>660</sup>

### 3.2.1.- ¿Procede aplicar la cláusula *todos* a una exégesis del sistema holístico natural?

Apartándonos momentáneamente del significado y repercusión que tiene la expresión *todos* como paraguas de un derecho público subjetivo ejercitable ante los tribunales, superado el hecho de considerar procesalmente viable la legitimación de interés universal<sup>661</sup>, nos centramos ahora en una lectura más amplia del mismo. La pregunta sobre la que planteamos la hipótesis es la siguiente: ¿somos capaces de interpretar el binomio derecho-deber al que alude el art. 45 CE en sentido biocéntrico, o como mínimo restringiéndolo al primer componente de este tándem?<sup>662</sup>

---

*dificultad añadida si algunos de los contenidos del artículo 45 CE echan a volar por su cuenta y terminan recalando en el ámbito de la fundamentalidad>>.* En “Constitución y medio ambiente”, op. cit., pág. 552. Por su parte, QUINTERO OLIVARES, G., entiende que si el contenido de la norma no produce derechos y deberes concretos, <<... su salud social será más difícil de alcanzar>>. En “Bien jurídico, derecho público subjetivo y legitimación en el Derecho penal ambiental”, op. cit., pág. 209. A una cierta marginación doctrinal y jurisprudencial del art. 45 se refiere JARÍA I MANZANO, J. En “El medio ambiente como bien jurídico reconocido en la Constitución española y su significación para el Derecho penal”, op. cit., pág. 24.

<sup>660</sup> Sigue este criterio BETANCOR RODRÍGUEZ, A., para quien este deber de conservación resulta más acorde con los objetivos del Derecho ambiental, ya que este deber es la fuente de otros deberes, como el de prevención, utilización racional de los recursos, o el de reparación. En “Derecho Ambiental”, op. cit., págs. 509 y ss.

<sup>661</sup> En este sentido, *vid.* ORTEGA ÁLVAREZ, L. Tampoco es esencial que se trate de una situación individual y personal la que legitime la actuación jurídica, sino que basta con que la situación que se pretende restablecer pueda ser individualizada. En “Concepto de medio ambiente”, op. cit., pág. 51. Ahora bien, aún si se comparte esta interpretación, los nuevos retos del Derecho ambiental quedarían inoculados por la defectuosa aplicación de criterios jurídicos; tomando el mismo ejemplo que el autor, la pretensión de recuperar la capa de ozono será imposible.

<sup>662</sup> Desde la doctrina italiana, apartándose de la tradición jurídica en ese país, lanza una propuesta teórica de signo diferente FRACCHIA, F. Considera, a través de una valoración progresiva ampliada del deber ético de la persona que atribuye relevancia moral a los elementos no humanos de la Naturaleza, que tanto derecho como deber conforman la categoría jurídica utilizable. “La disciplina pública de la contaminación acústica en el ordenamiento italiano”. Leonardo J. Sánchez-Mesa Martínez (trad.) En *Régimen jurídico del ruido. Una perspectiva integral y comparada*. Estanislao Arana García / M<sup>a</sup> Asunción Torres López (coords.) Ed. Comares. Granada, 2004, págs. 433-462, en especial 437 y 438.

Dado que los seres humanos poseen capacidad procesal suficiente para tutelar los derechos de otras especies, al igual que ocurre cuando se convierten en garantes de otros humanos privados de dicha aptitud y actúan en favor de la protección de sus intereses, resulta que todas las formas de vida natural ostentan, *prima facie*, idéntico derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado. La problemática de esta interpretación surge al hilo de lo expresado a continuación por el tenor literal del art. 45.1, es decir, la finalidad de ese derecho, que según el precepto constitucional, es el desarrollo de la persona; es justamente aquí donde los términos se volatilizan y contaminan.<sup>663</sup>

Por otra parte, el deber de conservación aparece doblemente fraccionado, en primer lugar como contrapeso al derecho a disfrutar del medio ambiente, seguidamente como inspirador de la actuación de los poderes públicos. En segundo lugar, vinculado sistemática, sustantiva y formalmente con carácter exclusivo a las personas; no obstante, en el apartado segundo, esta obligación se expande a los poderes públicos, con una particularidad añadida: el mandato no sólo se traduce en posibilitar el desarrollo de la persona, sino que se apoya tanto en la *indispensable solidaridad colectiva* (en clara alusión a las generaciones presentes y futuras) como en la *defensa y restauración del medio ambiente*.

Si la cláusula “todos”, expresamente utilizada por el art. 45 CE, fuera aplicable a cualquier ser vivo (animal o vegetal, siguiendo la teoría ecocéntrica pura), ésta sólo podría materializarse en su expresión de derecho, no en la vertiente de compromiso obligacional (deber), puesto que ningún comportamiento se puede exigir a formas de vida que interactúan de forma natural, siguiendo el hilo de su propia evolución y desarrollo. En definitiva, del texto del art. 45 CE no se puede concluir que proteja de forma directa a otras especies naturales, ni siquiera a los elementos que hacen posible su supervivencia.<sup>664</sup>

---

<sup>663</sup> Vid., la postura de BETANCOR RODRÍGUEZ, A. En “Derecho Ambiental”, op. cit., págs. 489 y ss; ORTEGA ÁLVAREZ, L. “Concepto de medio ambiente”, op. cit. Ambos comparten una visión funcional, finalista, como propuesta para delimitar el Derecho del medio ambiente.

<sup>664</sup> A lo sumo, se considera ampliado el catálogo de recursos que se entienden indispensables para la supervivencia del hombre; por ello, en el ordenamiento penal se incluyen todos los elementos naturales que intervengan en ella. Vid. CARMONA SALGADO, C. Si fuera al contrario, es decir, si la concepción penal fuera más restringida, sería <<*incompatible con las directrices, mucho más amplias, que le proporciona la propia Ley Fundamental*>>. “Incidencias de la reforma penal de 2010 en los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente”. En *Libro Homenaje al Profesor Rodríguez Ramos*. Francisco Javier Álvarez García / Miguel Ángel Cobos de Linares / Pilar Gómez Pavón (coords.) Ed.

No obstante, esta interpretación no estaría vacía de contenido material, pues la alusión a la “calidad de vida” necesariamente coloca a los seres humanos en el ciclo de la vida biológica, y en su propio periodo vital éste se encuentra totalmente mediatizado por el resto de organismos naturales, que a su vez sólo podrán mantener sus respectivos ciclos, funciones y características esenciales si cada una de las mismas se mantienen adecuadamente.

Así, el antropocentrismo que se desprende de una lectura literal del precepto, cede sustancialmente a la idea de la interconexión de especies, presupuesto base de las posturas tanto biocéntricas como holísticas, que propugnan la concepción de cada realidad como un todo distinto a la suma de las partes que lo constituyen.

---

Tirant lo Blanch. Valencia, 2013, págs. 417-445. Por su parte, SANTA CECILIA GARCÍA, F., considera que se debe mantener una interpretación conjunta de los artículos 45, 46 y 47 de la CE. “Delitos contra los recursos naturales y medioambiente”. En *Libro Homenaje al Profesor Rodríguez Ramos*. Francisco Javier Álvarez García / Miguel Ángel Cobos de Linares / Pilar Gómez Pavón (coords.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2013, págs. 899-932.

### **3.3.- Problemática de la distribución de competencias entre Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales**

En materia medioambiental, el verdadero escollo en nuestra legislación es la distribución competencial creada por la existencia de las Comunidades Autónomas, que da lugar a una diversidad y un amplio espectro de reparto de competencias -entre ellas y también en relación a las estatales-. Este aspecto genera una complejidad añadida pues, como reseña el Tribunal Constitucional, un ámbito físico determinado no impide necesariamente que se ejerzan otras competencias en el espacio, pudiendo por tanto coexistir títulos competenciales distintos o diversos [SSTC 77/1982 y 103/1989].<sup>665</sup>

En numerosos casos pueden verse gravemente afectados los principios de solidaridad colectiva e igualdad, en función de la zona geográfica donde se lleve a cabo la actuación medioambiental, ya que una misma conducta o acción puede que devenga antijurídica o no, o con una mayor o menor carga susceptible de sanción, exclusivamente por el espacio del país en que se encuentre el presunto infractor, teniendo en cuenta además la capacidad normativa de los entes locales, protagonista principal en materia de ruidos. Esto resulta de gran interés en aras de una interpretación correcta y objetiva del precepto constitucional, puesto que el art. 45.2 destaca: <<Los poderes públicos velarán por la utilización racional [...], apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva>>, mandato que resulta de difícil aplicación en la actualidad, si nos atenemos a la heterogénea y divergente legislación aplicable en las distintas Comunidades Autónomas.

A falta de una ley especial sobre medio ambiente, el esquema punitivo que utiliza el legislador español ha adoptado la estructura típica de las normas penales en blanco. Sin embargo, la abundante y dispersa normativa administrativa sobre medio ambiente hace que tanto las personas físicas como jurídicas encuentren difícil una concreción y conocimiento detallado sobre las conductas antijurídicas relacionadas con la protección de los diferentes segmentos (flora y fauna, vertidos y residuos, costas,

---

<sup>665</sup> SSTC (Sala 1ª) 77/1982, de 20 de diciembre [RTC 1982\77], y 103/1989 (Pleno), de 8 de junio [RTC 1989\103]. En STC (Pleno) 102/1995, de 26 de junio de 1995 [RTC 1995\102], se reiteran estas afirmaciones, calificándose el reparto de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas de <<transversal>>, ya que incide claramente en otras materias incluidas, a su vez, en el esquema constitucional de competencias -art. 148.1., 3ª., 6ª., 7ª., 8ª., 10ª., y 11ª. CE- (FJ 3).

aguas terrestres, suelo y subsuelo, atmósfera, parques naturales, ordenación del territorio, masas forestales, radiaciones ionizantes, etc.). Por tanto, es sencillo incurrir en un ilícito penal o administrativo con excesiva facilidad y escasa seguridad jurídica. Además, el bien jurídicamente protegido no se construye únicamente en función del daño o riesgo grave para la salud de las personas, sino que se extiende a cualquier agresión que afecte a todos los seres vivos, ya que éstos no existen independientemente entre sí, sino que se correlacionan y permanecen íntimamente unidos a la vida vegetal y al estado de la atmósfera y la troposfera.<sup>666</sup> Esto es al menos lo que el TS dictaminó ya en 1990 a través de la conocida sentencia contra la central térmica de Cersc.<sup>667</sup>

El carácter generalizador en cuanto a la titularidad de competencias atribuidas a los poderes públicos en el apartado 2º del art. 45 CE, interviene también en relación al objeto, a las técnicas operativas y a la finalidad perseguida. Por ello, el Estado se reserva las competencias sobre legislación básica<sup>668</sup>, dejando a las Comunidades Autónomas, a través de sus respectivos Estatutos de Autonomía el desarrollo legislativo y la gestión. Las que surgieron al amparo del art. 151 CE se reservaron competencias de desarrollo legislativo y ejecución de la legislación básica estatal en materia de medio ambiente.<sup>669</sup> Las reguladas conforme al art. 143, de forma inicial se

---

<sup>666</sup> La troposfera es la zona inferior de la atmósfera; alcanza la altura de doce kilómetros, donde se desarrollan los meteoros aéreos, acuosos y algunos eléctricos. *Vid.* MATELLANES RODRÍGUEZ, N. En “Derecho Penal del Medio Ambiente”, op. cit., pág. 173; BENSUSAN MARTÍN, M. P. *Regulación jurídico-administrativa de la contaminación atmosférica*. Ed. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2014, págs. 128 y ss.

<sup>667</sup> Tribunal Supremo (Sala de lo Penal), Sentencia de 30 noviembre 1990 [RJ 1990\9269], a la que nos referimos en la Primera Parte, nota 274: << El bien jurídico protegido no se construye únicamente en función del daño o riesgo grave para la salud de las personas sino que se extiende a cualquier agresión que afecte a todos los seres vivos. Los seres vivos no existen independientemente entre sí sino que se correlacionan y permanecen íntimamente unidos a la vida vegetal y el estado de la troposfera, es decir el espacio donde el aire es capaz de renovarse, disminuyendo esta capacidad en función de los elementos contaminantes que se expelen hacia la atmósfera >> (FJ 17.1).

<sup>668</sup> Según el art. 149.1. 23ª: <<El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias>>.

<sup>669</sup> Estatutos de las Autonomías. Andalucía (art.57): Medio ambiente, espacios protegidos y sostenibilidad. 1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.23ª de la Constitución, en materia de: a) Montes, explotaciones, aprovechamientos y servicios forestales. b) Vías pecuarias. c) Marismas y lagunas, y ecosistemas acuáticos. d) Pastos y tratamiento especial de zonas de montaña. e) Delimitación, regulación, ordenación y gestión integral de los espacios naturales protegidos, incluyendo los que afecten a las aguas marítimas de su jurisdicción, corredores biológicos, y hábitats en el territorio de Andalucía, así como la declaración de cualquier figura de protección y establecimiento de normas adicionales de protección ambiental. f) Fauna y flora silvestres. g) Prevención ambiental. 2. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de caza y pesca fluvial y lacustre que incluye en todo caso la

atribuyeron competencias dispares, de distinto alcance (normas adicionales de carácter ejecutivo y de gestión), si bien posteriormente se intentó dotar de una cierta uniformidad a este sistema con la promulgación de la LO 9/1992, de 23 de diciembre, que transfirió a las Comunidades Autónomas el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de normas adicionales de protección del medio ambiente.

En cualquier caso todas las Comunidades Autónomas, en diferentes periodos, han ido asumiendo estas competencias a distintos niveles en todas las materias, superando en muchos casos sus textos el rigor legislativo del ofrecido por la legislación básica del Estado, estableciendo a su vez, estamentos de protección más elevados, ya que lo contrario (nivel más restringido o disminuido), resultaría inconstitucional. Así lo ha reiterado nuestro Tribunal Constitucional en numerosas resoluciones, entre ellas SSTC 102/1995; 156/1995; 196/1996; y 166/2002.<sup>670</sup>

---

planificación y la regulación de estas materias; y la regulación del régimen de intervención administrativa de la caza y la pesca, de la vigilancia y de los aprovechamientos cinegéticos y piscícolas. 3. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia compartida en relación con el establecimiento y la regulación de los instrumentos de planificación ambiental y del procedimiento de tramitación y aprobación de estos instrumentos; el establecimiento y regulación de medidas de sostenibilidad e investigación ambientales; la regulación de los recursos naturales; la regulación sobre prevención en la producción de envases y embalajes; la regulación del ambiente atmosférico y de las distintas clases de contaminación del mismo; la regulación y la gestión de los vertidos efectuados en las aguas interiores de la Comunidad Autónoma, así como de los efectuados a las aguas superficiales y subterráneas que no transcurren por otra Comunidad Autónoma; la regulación de la prevención, el control, la corrección, la recuperación y la compensación de la contaminación del suelo y del subsuelo; la regulación sobre prevención y corrección de la generación de residuos con origen o destino en Andalucía; la regulación del régimen de autorizaciones y seguimiento de 31 ANDALUCÍA emisión de gases de efecto invernadero; el establecimiento y la regulación de medidas de fiscalidad ecológica; y la prevención, restauración y reparación de daños al medio ambiente, así como el correspondiente régimen sancionador. Asimismo, tiene competencias para el establecimiento de normas adicionales de protección. Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía (BOE núm. 68 de 20 de marzo de 2007); Cataluña (art.144) Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña (BOE núm.172, de 20 de julio de 2006); Galicia (art.27.30) Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, de Estatuto de Autonomía para Galicia (BOE núm. 101, de 28 de abril de 1981) y País Vasco (art.11.1. a) Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco (BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 1979), todos ellos en términos similares.

<sup>670</sup> SSTC 156/1995 (Pleno), de 26 de octubre [RTC 1995\156]; 196/1996 (Pleno), de 28 de noviembre [RTC 1996\196]; 166/2002 (Pleno), de 18 de septiembre [RTC 2002\166]. Como muestra del amplísimo catálogo legislativo producido por las Cortes autonómicas, se pueden citar: Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia; Ley 5/2002, de 8 de octubre, de Protección del Medio Ambiente de La Rioja; Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla-León, modificada por Ley 3/2005, de 23 de mayo, por Ley 8/2007, de 24 de octubre y por Ley 1/2009, de 26 de febrero; Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección Ambiental de la Comunidad de Navarra; Ley 5/2005, de 26 de mayo, de la Comunidad Autónoma de Illes Balears, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental; Ley 2/2006, de 5 de mayo, de la Comunidad Valenciana, de prevención de la contaminación y calidad ambiental; Ley 5/2006, de la Comunidad Autónoma de Galicia, para la protección, la conservación y la mejora de los ríos gallegos; Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de control medioambiental integrado; Ley 8/2002, de 18 de diciembre, de la Comunidad Autónoma de Galicia, de Protección del Ambiente Atmosférico; Ley 6/2002, de 18 de junio, de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, sobre

Al respecto, el Estado ha ido dictando normas sectoriales muy precisas, lo que ha generado numerosa jurisprudencia constitucional en el elevado número de litigios Estado *versus* Comunidades Autónomas.

En el plano organizativo, los niveles de colaboración y coordinación que deben presidir las relaciones entre Estado y Comunidades Autónomas para conseguir la adecuada eficacia de las competencias ambientales, se materializa a través de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, instrumento con el que cuentan dichas administraciones con el fin de asegurar estas premisas. Se trata de un órgano colegiado previsto con carácter general en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (art.5), en el que se recogen las diversas funciones (definición de criterios, objetivos y prioridades a alcanzar a través de los planes, programas y actuaciones), versiones (de composición bilateral o multilateral, incluyendo la posibilidad de intervención de las Entidades Locales cuando la materia se refiera a sus competencias), participación de las Comunidades Autónomas en los asuntos de la Comunidad Europea, etc. Todo ello dirigido a la defensa y conservación del medio ambiente. En cuanto a la organización estatal, el grueso de las competencias pertenece al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que dispone de un órgano superior, la Secretaría de

---

Protección de los Ecosistemas Acuáticos y de regulación de la Pesca en Aguas Continentales; Ley 5/2002, de 3 de junio, de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, sobre vertidos de aguas residuales industriales a los sistemas públicos de saneamiento; Ley 5/2003, de 20 de mayo, de la Comunidad de Madrid, de residuos; Ley 6/1993, de 15 de julio, modificada por Ley 15/2003, de 13 de junio y por Ley 9/2008, de 10 de julio, de la Generalitat de Cataluña, de residuos; Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de la Comunidad Autónoma de Galicia, de residuos; Ley 5/1991, de 5 de abril, modificada por Ley 9/2006, de 22 de diciembre, de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, de Protección de los Espacios Naturales; Ley 4/2003, de 26 de marzo, de La Rioja, de Conservación de Espacios Naturales; Ley 4/2006, de 19 de mayo, de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de conservación de la Naturaleza; Ley 6/2001, de 31 de mayo, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, de Ordenación Ambiental del Alumbrado para la Protección del Medio Nocturno, (cuyo decreto de desarrollo fue declarado nulo); Ley 6/2006, de 9 de junio, de Cantabria, de prevención de la Contaminación Lumínica; Ley 1/2007, de 16 de marzo, de la Comunidad Autónoma de Illes Balears, contra la Contaminación Acústica; Ley 5/2009, de 4 de junio, de Castilla-León, del ruido; Ley 19/2003, de 14 de abril, de Canarias, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y Ordenación del Turismo; Ley 7/2007, de Andalucía, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental; Ley 12/2006, de 17 de julio, de Cantabria, de Caza; Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de la Región de Murcia, de Caza y Pesca fluvial; Ley 7/1998, de 6 de julio, de Canarias, de Caza; Ley 2/1993, de 15 de julio, de la Comunidad de Castilla-La Mancha, de Caza; Ley 8/1990, de 21 de diciembre, de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de Caza; Ley 8/2003, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de Flora y Fauna Silvestres; Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Comunidad Autónoma de Valencia, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje; Ley 3/2008, de 12 de junio, de Castilla-La Mancha, de Montes y Gestión Forestal Sostenible; Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Aragón, de Montes.

Estado de Medio Ambiente.<sup>671</sup> Asimismo, al Ministerio se adscriben una serie de administraciones especializadas, entre las que se pueden destacar: el organismo autónomo Confederaciones Hidrográficas, o el organismo autónomo Parques Nacionales. Se suman órganos consultivos o de planificación en materia ambiental, así como entidades privadas que colaboran con las administraciones en funciones de inspección y control.<sup>672</sup>

No se agotan aquí los diferentes títulos competenciales, ya que precisamente por el carácter multidisciplinar y multidireccional del medio ambiente, existen otros órganos estrechamente vinculados a la protección medioambiental.<sup>673</sup> La impregnación ambiental de todas las políticas públicas, principio presente en el Derecho comunitario y ausente en nuestro ordenamiento, a excepción de algunas leyes autonómicas, favorece la adopción de políticas en las que la orientación ambiental no tiene el protagonismo deseable para que el criterio ambiental se expanda y se superponga a casi cualquier actividad pública.<sup>674</sup> Determinados Estatutos de Autonomía han contemplado cómo recientemente el TC ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad de alguno de sus artículos, especialmente en materia de aguas.<sup>675</sup>

---

<sup>671</sup> Frente a los tres órganos superiores y directivos existentes en 2010: Secretaría de Estado de Cambio Climático, Secretaría de Estado de Medio Rural y Marino, y Secretaría General del Mar.

<sup>672</sup> Como el Consejo Asesor de Medio Ambiente, el Consejo Nacional del Clima, el Consejo Nacional del Agua, el Consejo Rector del Plan Nacional de Residuos Industriales, el Consejo Nacional de Bosques, y el Patronato Nacional para la Protección de Animales y Plantas. Respecto a los ámbitos de colaboración público-privada en materia ambiental, *vid.* PUERTA SEGUIDO, F. “Las entidades colaboradoras en materia de protección ambiental”. En *Tratado de Derecho Ambiental*. Luis Ortega Álvarez / Consuelo Alonso García (dirs.) Rosario de Vicente Martínez (coord.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2013, págs. 401-441.

<sup>673</sup> Consejo de Seguridad Nuclear; Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; Ministerio de Ciencia e Innovación, que cuenta con tres organismos públicos con competencias en la investigación y difusión del conocimiento de carácter ambiental: el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT); el Instituto Geológico y Minero de España (IGME); y el Instituto Español de Oceanografía (IEO). Para una visión más detallada de la organización medioambiental en España, *vid.* LOZANO CUTANDA, B. En “Introducción al Derecho Ambiental y a la intervención administrativa para la protección del Medio Ambiente”, *op. cit.*, págs.133 y ss; ORTEGA ÁLVAREZ, L. “La organización administrativa del medio ambiente”. En *Tratado de Derecho Ambiental*. Luis Ortega Álvarez / Consuelo Alonso García (dirs.) Rosario de Vicente Martínez (coord.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2013, págs. 55-77; BETANCOR RODRÍGUEZ, A. En “Derecho Ambiental”, *op. cit.*, págs. 380-392.

<sup>674</sup> *Vid.* CANOSA USERA, R., que aboga por una mayor adopción de principios y objetivos ambientales con los que se podría condicionar con más fuerza la legislación sectorial. En “Constitución y medio ambiente”, *op. cit.*, pág. 81.

<sup>675</sup> SSTC (Pleno) 30/2011, de 16 de marzo [RTC 2011\30] y 32/2011 (Pleno), de 17 de marzo [RTC 2011\32]. Declaran la inconstitucionalidad y nulidad de los arts.51 y 75.1 respectivamente, de los Estatutos de Autonomía de Andalucía y Castilla y León. El citado art.51, dedicado a la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir dice: <<La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta competencias exclusivas sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio y no afectan a otra Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la planificación general del ciclo hidrológico, de las



Por ello, las Comunidades Autónomas legislan en la medida que los huecos o lagunas existentes en la legislación estatal les permiten *-ex novo-*, o bien reforzando la protección primaria y en muchos casos imprecisa que las leyes ordinarias o Reales Decretos prescriben. Del entramado descrito, no resulta desatinado acercarse al imposible cometido del ciudadano normal, que será conocer con la suficiente seguridad jurídica, si a lo que se enfrenta es a un hecho no tipificado, o si por el contrario, le puede sobrevenir una sanción administrativa grave, o un procedimiento penal<sup>676</sup>, so

---

*normas básicas sobre protección del medio ambiente, de las obras públicas hidráulicas de interés general y de lo previsto en el artículo 149.1.22ª CE>>.* Por su parte, el art.75.1 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León: *<<Dada la relevancia que la Cuenca del Duero tiene como elemento configurador del territorio de Castilla y León, la Comunidad Autónoma asumirá competencias de desarrollo legislativo y de ejecución en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos de las aguas de la cuenca del Duero que tengan su nacimiento en Castilla y León y deriven a Portugal sin atravesar ninguna otra Comunidad Autónoma>>.*

<sup>676</sup> La principal normativa nacional por materias se desglosa como sigue. En materia de contaminación atmosférica: Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (deroga el importante Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, aunque sigue vigente en aquellas Comunidades Autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia); Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases invernadero; RD 1796/2003, de 26 de diciembre, relativo al ozono en el aire ambiente; RD 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono; RD 812/2007, de 22 de junio, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el arsénico, cadmio, mercurio, níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos. En materia de contaminación lumínica la regulación es escasa, contrastando con la prolífica normativa autonómica, pero se puede citar al respecto el RD 1890/2008, de 14 de noviembre, del Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior. En materia de ruidos y vibraciones, la principal norma es la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, que transpone la Directiva 2002/49/CE, de ruido ambiental; RD 1367/2007, de 19 de octubre, que la desarrolla en cuanto a la zonificación acústica, los objetivos de calidad y las emisiones acústicas y existen muchos otros decretos atendiendo a normativa específica en aeropuertos, carreteras, domicilios, obras, aglomeraciones humanas, etc. En materia de residuos; Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (excluye de su ámbito de aplicación las emisiones atmosféricas, los residuos nucleares, y los vertidos a aguas continentales y marítimas, a la vez que se trata de la norma supletoria sobre residuos mineros, agroganaderos, veterinarios y explosivos). *Anteproyecto de una nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados (2011)*; Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases; RD 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados; RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición; RD 1304/2009 (modifica el RD 1481/2001, de 27 de diciembre), por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero; RD 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos; RD 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos. En materia cinegética la principal norma que informa el derecho de caza es la Ley 47/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de Biodiversidad (deroga la Ley 4/1989 y el RD 1997/1995, así como varias disposiciones de la Ley de Caza de 1970). En materia de pesca; Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado; RD 681/1980, de 28 de marzo, sobre ordenación de la actividad pesquera nacional; Ley 20/1967, de 8 de abril, sobre extensión de las aguas jurisdiccionales españolas a 12 millas, a efectos de pesca. Protección paisajística; Ley 16/1985, de 16 de junio, del Patrimonio Histórico Español, Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad; Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural; el RDLeg 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el TR de la Ley del Suelo incluye diversos principios para la protección del paisaje; RDLeg 1/2008, de 11 de enero, sobre protección del paisaje de valores notorios frente a los proyectos que han de someterse a una declaración de impacto ambiental. En materia de desertificación y erosión; Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, reformada por Ley 10/2006, de 28 de abril, por lo que respecta esencialmente a incendios forestales.

pena de vaciar de contenido un principio general del Derecho: <<*La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento*>>, recogido en el art. 6.1 del CC, en relación a una persona medianamente diligente. Si a este hecho sumamos que el sector medioambiental se define en su gran mayoría, a propósito de la técnica legislativa de las leyes penales en blanco, y los problemas que acarrea la dispersión normativa producida por el nacimiento de las CCAA en este círculo, encontramos que esta competencia legislativa se ve fragmentada por la tradicional tensión que desde siempre se ha generado entre poder legislativo y ejecutivo (de hecho, en los últimos tiempos, las CCAA recurren de forma periódica la promulgación de diferentes leyes nacionales), vulnerando así el principio de uniformidad de la legislación penal e igualdad, a efectos de tutela judicial efectiva (art. 24 CE).<sup>677</sup>

Estas consideraciones deberían liderar la restricción del uso desmesurado e indiscriminado de las leyes penales en blanco, tratando de armonizar su utilización con el carácter excepcional que ostentan, tarea sumamente dificultosa en materia medioambiental, tan susceptible de delimitaciones precisas y cada vez más técnicas que, evidentemente, no se pueden expresar de forma rigurosa en los respectivos preceptos penales, lo cual no implica que se deba obviar que cuando el reenvío normativo se dirige a normas de procedencia reglamentaria, se otorga al poder ejecutivo un destacado papel a la hora de configurar las conductas prohibidas. Parte de la doctrina opina que esta técnica resulta ventajosa porque permite la adaptación de la respuesta penal a la hora de sancionar las conductas más graves y, puesto que éstas pueden variar sustancialmente, las normas administrativas las asimilan con mayor celeridad y superior adaptación.<sup>678</sup>

Se trata de supuestos especiales que se apartan de lo que tradicionalmente ha conformado la estructura lógica de las normas, también denominadas leyes incompletas cuando las razones son funcionales, o leyes en blanco cuando su dictado obedece a

---

<sup>677</sup> Aluden a supuestos conflictivos de constitucionalidad, GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. En “Introducción al Derecho penal. Instituciones, fundamentos y tendencias del Derecho Penal” Vol. I, op. cit., pág. 262; SANTA CECILIA GARCÍA, F. En “Medio ambiente y reparación del daño”, op.cit., pág. 13. Por su parte, ORTEGA BERNARDO, J., enumera los recursos que las CCAA han presentado a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, admitidos por el TC sin que todavía exista pronunciamiento, en base al nuevo orden competencial que prevé la medida legislativa. Así, Andalucía, Cataluña, Canarias, Asturias, entre otras. En *Derechos fundamentales y ordenanzas locales*. Colección Administración Pública y Derecho. Ed. Marcial Pons. Madrid, 2014, pág. 334, nota 3.

<sup>678</sup> Tesis defendida por CANOSA USERA, R. En “Constitución y medio ambiente”, op. cit., págs. 157 y 158.

motivos de pura técnica legislativa.<sup>679</sup> En la materia que aquí tratamos, resulta obvio que la tecnificación propia que requiere la emisión de ruidos, haga inviable su plena concreción en el tipo penal, pero la matización crítica del empleo de esta técnica normativa, por otra parte cada vez más indiscriminada, se focaliza en los riesgos que ello supone en términos de certeza y seguridad jurídica.<sup>680</sup>

Si bien el Tribunal Constitucional ha zanjado la hipotética inconstitucionalidad de las leyes penales en blanco en relación al art. 25.1 CE cuando concurren tres requisitos: 1.- *Reenvío normativo expreso y justificado en atención al bien jurídico protegido*; 2.- *Que la ley penal contenga el núcleo esencial de la prohibición*; 3.- *Que se dé la suficiente concreción en la norma a la que la ley penal remite*, en SSTC 127/1990 y 62/1994, lo cierto es que en los supuestos de delitos medioambientales la remisión se realiza en bloque a una normativa administrativa, tan extensa como diversa en cuanto al órgano del que emana, lo que no resulta coherente con la supuesta marginalidad que representa la norma reglamentaria remitida, si se quiere respetar escrupulosamente la reserva de ley, tanto en sentido formal como material.<sup>681</sup>

---

<sup>679</sup> Vid. GARCÍA-PABLOS, A. Tomando como argumento orientaciones del realismo sociológico y de la Hermenéutica moderna, lo cierto es que, desde un punto de vista dinámico, todas las normas son incompletas, no finalizan hasta que son aplicadas a la realidad, es decir, hasta que los jueces no se han pronunciado sobre las mismas. En “Introducción al Derecho penal. Instituciones, fundamentos y tendencias del Derecho Penal” Vol. I, op. cit., pág. 405, nota 58.

<sup>680</sup> Vid. GARCÍA-PABLOS, A. En relación al conflicto que supone acudir de forma sistemática a normas jerárquicamente inferiores, como las disposiciones reglamentarias. En “Introducción al Derecho penal. Instituciones, fundamentos y tendencias del Derecho Penal” Vol. I, op. cit., págs. 412 y ss.

<sup>681</sup> SSTC 127/1990 (Sala 1ª), de 5 de julio [RTC 1990\127]; 62/1994 (Sala 2ª), de 28 de febrero [RTC 1994\62]. Vid. HUERTA TOCILDO, S. En “Principio de legalidad y normas sancionadoras”, op. cit., págs. 21-25, donde realiza ciertas objeciones a esta técnica indiscriminada en torno al delito ecológico, que aún con las sucesivas reformas del Código Penal, sigue irremediabilmente condenado a beber de las leyes penales en blanco. En la misma línea, TERRADILLOS BASOCO, J. M. Añade que las continuas modificaciones que requieren las normas, junto a otros factores, provocan tal dispersión normativa que suscita dudas de compatibilidad con el principio de legalidad, circunstancia que sufre un incremento en materia medioambiental. “Protección penal del medio ambiente. Jurisprudencia e intuición”. En *Estudios de Derecho Ambiental. Libro Homenaje al profesor Josep Miquel Prats Canut*. Gonzalo Quintero Olivares / Fermín Morales Prats (coords.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2008, págs. 365-393, en especial 373.

### 3.3.1.- El controvertido papel de las corporaciones locales en la protección medioambiental

Resulta innegable que las Entidades Locales (Municipios y Provincias), por su inmediación y contacto directo con los miles de grupos de población que integran el Estado español (más de 8.100 municipios censados en 2014), representan el primer eslabón en el dominio fáctico de reprimir por un lado, y concienciar por otro, sobre la necesidad de cumplir con los objetivos, principios y condiciones de la acción ambiental en todos sus parámetros.

Para ello, los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales (éstas últimas en menor medida)<sup>682</sup> cuentan con una serie de competencias *delegadas* y otras *propias*; muchas de ellas sin la suficiente capacidad para concretar un grado óptimo de eficacia en su ejecución, por la dependencia funcional y normativa que poseen, tanto de la Comunidad Autónoma a la que pertenecen, como del Estado. Si a ello se une el enorme gasto que generan determinadas actuaciones ambientales y la insolvencia financiera en un elevado porcentaje de Ayuntamientos, resulta que en la actualidad, los centros de población pequeños (por no mencionar los núcleos rurales) no gozan del suficiente potencial para detener la actuación desmesurada (urbanística, industrial, etc.) que les rodea y les afecta, con independencia de donde germine el foco de contaminación; no olvidemos que el medio ambiente por definición, es “transfronterizo” en sentido literal.<sup>683</sup>

---

<sup>682</sup> La Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) introduce una nueva interpretación de la Provincia como verdadera entidad local, aunque no se traduce en el diseño de ningún marco competencial distinto al proclamado por la LRBRL para la figura de la Diputación Provincial con carácter general. *Vid.* GARCÍA RUBIO, F. La principal novedad que se apuntaba en el Anteproyecto respecto al régimen anterior, era otorgar la función de gestoras directas de servicios públicos en municipios inferiores a 20.000 habitantes que no superaran la evaluación por los costes estándar de los servicios públicos que prestaban. Finalmente, tras el dictamen del Consejo de Estado 567/2013, la cuestión regresó al ámbito de la coordinación y así a la nueva redacción del art. 26.2 LRBRL: <<En los municipios con población inferior a 20.000 habitantes será la Diputación provincial o entidad equivalente la que coordinará la prestación de los siguientes servicios: a) Recogida y tratamiento de residuos; b) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales; c) Limpieza viaria; d) Acceso a los núcleos de población; e) Pavimentación de vías urbanas; f) Alumbrado público. “La provincia como entidad local. Un análisis tras la Ley de Racionalización”. En *La Reforma de 2013 del Régimen Local Español*. Juan Alfonso Santamaría Pastor (coord.) Ed. Fundación Democracia y Gobierno Local. Madrid, 2014, págs. 195-303, en especial 263 y ss.

<sup>683</sup> De este modo, es frecuente que ciertas actuaciones alejadas geográficamente de las ciudades, tanto como permita la legislación administrativa que las regule, resulten altamente perniciosas para los

Actualmente, las competencias atribuidas por la Constitución y la Carta Europea de Autonomía Local a las entidades locales<sup>684</sup>, se articulan alrededor de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local (LRBRL).<sup>685</sup> Este texto enmarca los postulados constitucionales del Título VIII, Capítulo II (arts. 140, 141 y 142)<sup>686</sup>, así como lo estipulado con carácter general en el art.137, en el que se constitucionaliza la autonomía de Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas para la gestión de sus respectivos intereses. Además, al tratarse de poderes públicos, reciben igualmente el mandato del art.45.2 CE.

El distinto tratamiento constitucional ha servido a la doctrina para asignar a la provincia un carácter instrumental frente a la idiosincrasia básica del municipio, pero respetando el carácter indisponible de ambos subrayan el hecho de que en las entidades

---

habitantes próximos, que soportan las externalidades porque en muchos casos representan un alto porcentaje en la renta municipal. Por ello hay quien piensa que la autonomía local debería ser más amplia, dirigiendo la mirada hacia tiempos históricos recientes, sobre todo en materia de salubridad, pero está claro que la materia se debe contextualizar histórica y administrativamente. Para obtener una visión cronológica de los textos legislativos sobre las competencias de los Ayuntamientos a partir de 1800, *vid.* LOPERENA ROTA, D. I. En “La protección de la salud y el medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona en la Constitución”, op. cit., págs. 1459-1462.

<sup>684</sup> Carta Europea de Autonomía Local, de 15 de octubre de 1985, ratificada por España por Instrumento 20 de enero de 1988: Tratado propiciado por el Consejo de Europa en el que España formula una reserva, limitando el sistema de elección directa a <<las colectividades contempladas en la legislación española de régimen local y previstas en los arts. 140 y 141 de la Constitución>> (municipios, provincias e islas) y no a la totalidad, como expresa el art.3.2 de la Carta. Se entiende que por tanto, quedarían excluidas las Diputaciones Provinciales. Sobre la base del art. 11, se reformó la LOTC para hacer posible el acceso de los entes locales en defensa de su autonomía y en relación al art.10, en el que se alude al derecho de asociación, hay que tener en cuenta la existencia de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y otras similares de corte autonómico.

<sup>685</sup> La reforma llevada a cabo por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local pretende clarificar las competencias municipales, evitar duplicidades y racionalizar la estructura organizativa de la Administración local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso, así como favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas, según su Exposición de Motivos. Claridad competencial obviamente no conseguida, como denuncia parte de la doctrina. *Vid.* SANTAMARÍA PASTOR, J. A. “El régimen de competencias locales y el dilema de la esfinge”. En *La Reforma de 2013 del Régimen Local Español*. Juan Alfonso Santamaría Pastor (coord.) Ed. Fundación Democracia y Gobierno Local. Madrid, 2014, págs. 139-156.

<sup>686</sup> Sobre el Derecho constitucional a la autonomía de los municipios, se pronunció el TC en SSTC 32/1981 (Pleno), de 28 de julio [RTC 1981\32]; 27/1987 (Pleno), de 27 de febrero [RTC 1987\27]; y 40/1998 (Pleno), de 19 de febrero [RTC 1998\40] entre otras, otorgándole la categoría de <<garantía institucional>>, sin que dicha garantía se traduzca en un elenco preciso de derechos concretos en asuntos locales, sino en el derecho a intervenir en todos los asuntos que les afecten, con independencia del dato de la relevancia local o supralocal, por lo que el nivel de intensidad en la intervención será distinto según los casos, y fijando tan sólo el límite del núcleo esencial que la institución asegura para el legislador ordinario. Esta importante sentencia 32/1981, rectificó la doctrina de la STC (Pleno) 4/1981, de 2 de febrero [RTC 1981\4], en la que el TC se expresó de forma vacilante respecto a la autonomía de las entidades locales con gran influencia de la doctrina alemana, en concreto por la interpretación de Burmeister. A esta particularidad alude DOMPER FERRANDO, J. En “El medio ambiente y la intervención administrativa en las actividades clasificadas”, op. cit., págs. 255-256.

locales <<*todo es Administración*>>; es decir, tanto sus servidores profesionales como sus órganos superiores de carácter representativo (Pleno, Alcalde, Presidente de la Diputación) se rigen por el Derecho administrativo, a diferencia de los órganos de nivel superior del Estado y de las Comunidades Autónomas (Parlamento, Gobierno, etc.), bajo la órbita del Derecho constitucional. De ahí que también se denomine a las entidades locales Administraciones locales, y, si bien la tendencia actual de los grandes Ayuntamientos es apropiarse del modelo organizativo de los entes territoriales superiores, lo cierto es que la gran mayoría no suelen estructurarse en departamentos con un nivel similar de formalización y división de sus servicios en distintas áreas, como ocurre con los del Estado y Comunidades Autónomas, sino que éste descansa y corresponde en todo caso a Concejales o Diputados Provinciales que pertenecen al equipo de gobierno del Alcalde o Presidente, respectivamente.<sup>687</sup>

El medio ambiente se contempla en la LRBRL como una competencia propia dentro del art 25.2, esto es, una materia dentro de un listado en el que las leyes sectoriales, estatales o autonómicas deben necesariamente atribuir “algún tipo de competencia” a los municipios, con las cautelas mínimas que establece el art. 26 en relación a los servicios mínimos exigidos, y sobre la base del marco garantista que representa el propio art.25.<sup>688</sup>

---

<sup>687</sup> Vid. SANTAMARÍA PASTOR, J. A. En *Principios de Derecho Administrativo General* Vol. II, (2ª ed.) Ed. Iustel. Madrid, 2009, págs. 66 y 67.

<sup>688</sup> Vid. ALONSO MAS, M. J. “Arts. 25 a 28”. En *Comentarios a la Ley Básica de Régimen Local*, op. cit. Hemos insistido suficientemente en las conexiones que, por razón de la materia, existen en el macro concepto “medio ambiente”; pues bien, la LRBRL no podía ser una excepción. Así, dentro del citado art. 25.2, se mencionan otras competencias que con mayor o menor precisión inciden directamente en esta temática, como: a) Seguridad en lugares públicos. *Nueva redacción: Policía local*; b) Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas. *Nueva redacción: tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad*; c) Protección civil, prevención y extinción de incendios; d) Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; promoción y gestión de viviendas; parques y jardines, pavimentación de las vías públicas urbanas y conservación de caminos y vías rurales. *Nueva redacción: Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación. Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad*; g) Abastos, mataderos, ferias, mercados y defensa de usuarios y consumidores. *Nueva redacción: Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante*; l) Suministro de agua y alumbrado público. Servicios de limpieza viaria, de recogida y tratamiento de residuos. *Nueva redacción: Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales. Gestión de los residuos sólidos urbanos*; ll) Transporte público de viajeros. *Nueva redacción: Transporte colectivo urbano*; m) Actividades o instalaciones culturales y deportivas; ocupación del tiempo libre; turismo. *Nueva redacción: Promoción de la cultura y equipamientos culturales. Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre; Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local*. Vid. SANTAMARÍA PASTOR, J. A. El autor afirma que si se realiza una comparativa entre el marco de competencias del art. 25.2 contemplado por la Ley 7/1985 y el formulado por la nueva LRSAL, no se observan prácticamente diferencias sustantivas, en todo caso se

Ahora bien, la reforma de 2013 incide de forma directa en la capacidad de los Ayuntamientos para poder llevar a cabo esas actuaciones dentro de sus competencias propias, pues se añaden 3 apartados que delimitan esta función con carácter previo.<sup>689</sup>

La cláusula genérica de competencia sobre protección del medio ambiente anterior a la reforma de 2013 [art. 25.2 f) LRBRL] se circunscribe ahora al “Medio Ambiente Urbano”, desglosando apartados del mismo que anteriormente no se mencionaban, entre los que se incluyen la protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas [art. 25.2 b) LRBRL], cuya pionera regulación se inició a nivel municipal.<sup>690</sup> El establecimiento de servicios mínimos medioambientales en municipios de más de 50.000 habitantes exigidos por el art. 26, también acoge esta nueva nomenclatura urbana.<sup>691</sup> La exégesis exacta del art. 25.2 no ha dejado de ser objeto de controversia a pesar de su nueva redacción, ya que su significado no es estrictamente de carácter competencial.<sup>692</sup>

---

trata de <<actualización del lenguaje o precisiones de escaso alcance>>. En “El régimen de competencias locales y el dilema de la esfinge”, op. cit., pág. 143. No obstante ORTEGA BERNARDO, J., considera que se ha producido una pérdida de competencias locales, así como restricciones en la lista de materias en las que se conservan competencias, cuya impronta alcanza también a los servicios mínimos obligatorios que marca el art. 26 de la LRBRL. En “Derechos fundamentales y ordenanzas locales”, op. cit., pág. 333 y ss.

<sup>689</sup> El art. 25.3 obliga a una evaluación previa sobre la conveniencia de implantación de los servicios locales, conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera. El apartado 4 indica que se requiere una memoria financiera que refleje el impacto (económico, y en relación al cumplimiento de los principios citados en el apartado anterior), así como la previsión de los recursos necesarios que aseguren la suficiencia económica del ente local sin que ello suponga un mayor gasto administrativo. Por último, el apartado 5 garantiza que no se produzca una duplicidad en la atribución de competencia con otra Administración pública.

<sup>690</sup> El 30 de abril de 1969, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó la Ordenanza Municipal sobre la Protección del Medio Ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones, convirtiéndose así en la primera Administración pública en España que adoptó un documento legal destinado a tal fin. Asimismo, hay que recordar que en esta materia, al menos hasta que se promulgó la Ley del Ruido de 2003 (art. 6), las corporaciones locales legislaban sin un título específico, exclusivamente sobre la base de su competencia genérica en cuestiones medioambientales [art. 25.2 f) LRBRL]. Esta última cuestión es abordada por ORTEGA BERNARDO, J., en relación al alcance de estas normas en el derecho a la propiedad privada y la imposición de restricciones justificadas en el interés general medioambiental a tutelar. En “Derechos fundamentales y ordenanzas locales”, op. cit., pág. 123.

<sup>691</sup> Art. 26.1 d): <<En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano>>.

<sup>692</sup> Por ejemplo, en relación a la regulación sobre protección contra la contaminación acústica y su dimensión en las relaciones de vecindad a través de la remisión que efectúa la Ley del Ruido de 2003. Vid. ORTEGA BERNARDO, J. En suma, las competencias locales se ejercen en determinados ámbitos materiales en los que también el Estado, las CCAA, o incluso ambos poseen competencias. En “Derechos fundamentales y ordenanzas locales”, op. cit., págs. 242 y 243. Dentro de este análisis, ORTEGA ÁLVAREZ, L., entiende que entre los distintos apartados del art. 25.2 no existe homogeneidad, ya que en algunos casos nos encontramos ante verdaderas materias (medio ambiente) y en otros, ante supuestos específicos de competencias (ordenación del tráfico y personas en las vías urbanas, suministro de agua y alumbrado público, pavimentación de caminos y vías rurales, etc.). En *El Régimen Constitucional de las Competencias Locales*. Colección Estudios. Serie Administración Local. Ed. INAP. Madrid, 1988, pág.

Es más, existe una interpretación doctrinal que extiende la discutida cláusula general de competencia municipal (art. 25.1), pues en base al nuevo art.7.4 los entes locales pueden asumir otras competencias distintas, que no son propias (al no figurar en el art. 25.2), tampoco complementarias (pues el art. 28 que las regulaba ha sido suprimido), ni asignadas por delegación (tratadas por el art. 27)<sup>693</sup>, sino una especie de competencia residual sometida a determinadas condiciones jurídico-materiales y formales, que un sector de la doctrina estima como sustitutiva de las anteriormente denominadas competencias impropias o complementarias.<sup>694</sup> Por esta vía cabe la asunción voluntaria de facultades que afecten a otros ámbitos materiales de acuerdo a los intereses de cada ente local, cuya capacidad real y concreta combate con fuertes restricciones.<sup>695</sup>

Por otra parte, a la figura de la participación pública ciudadana se le concede un plus de importancia a través de recientes instrumentos, como las denominadas Agendas 21 locales, en las que el proceso se abre a la participación pública, pudiendo servirse para ello de consultas a la población, o a través de un órgano de participación vecinal, pero en todo caso debe tener carácter de permanencia, con el fin de que las necesarias

---

59. Vid. ALONSO MAS, M. J. “Arts. 25 a 28”. En *Comentarios a la Ley Básica de Régimen Local*, op. cit., pág. 435; LÓPEZ CANDELA, J. “Las competencias en materia de medio ambiente de las corporaciones locales”. En *Cuadernos de Derecho Local*, núm. 4. Ed. Fundación Democracia y Gobierno Local. Febrero, 2004, págs. 71-87.

<sup>693</sup> El art. 27 indica que el Estado y las CCAA podrán delegar competencias en materia medioambiental: a) *Vigilancia y control de la contaminación ambiental*. b) *Protección del medio natural* (apartado 3), contando con la aceptación del municipio interesado como requisito de efectividad de dicha delegación (apartado 5). Sobre el desarrollo de la delegación, vid. MORILLO-VELARDE PÉREZ, J. I. “Competencias municipales: competencias delegadas e impropias”. En *Cuadernos de Derecho Local*, núm. 34. Monográfico: La revisión del Gobierno y la Administración local en la Ley 27/2013. Ed. Fundación Democracia y Gobierno Local. Febrero, 2014, págs. 71-79.

<sup>694</sup> Así, MORILLO-VELARDE PÉREZ, J. I. En “Competencias municipales: competencias delegadas e impropias”, op. cit., pág. 79; SOUVIRÓN MORENILLA, J. M. “Competencias propias y servicios mínimos obligatorios de los municipios en la reciente reforma del régimen local básico”. En *Cuadernos de Derecho Local*, núm. 34. Monográfico: La revisión del Gobierno y la Administración local en la Ley 27/2013. Ed. Fundación Democracia y Gobierno Local. Febrero, 2014, págs. 80-97, en especial 83.

<sup>695</sup> Art. 7.4: <<Las Entidades Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública. A estos efectos, serán necesarios y vinculantes los informes previos de la Administración competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias. En todo caso, el ejercicio de estas competencias deberá realizarse en los términos previstos en la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas>>. Vid. BASSOLS COMA, M. “La racionalización de la Administración local en el marco de la sostenibilidad financiera: panorama general”. En *Cuadernos de Derecho Local*, núm. 34. Monográfico: La revisión del Gobierno y la Administración local en la Ley 27/2013. Ed. Fundación Democracia y Gobierno Local. Febrero, 2014, págs. 21-48, en especial 27 y ss; ORTEGA BERNARDO, J. “Derechos fundamentales y ordenanzas locales”, op. cit., págs. 338-341.



revisiones y actualizaciones de los objetivos que se hayan presentado puedan ser más adaptables, y por ende, eficaces.<sup>696</sup>

La modificación más importante que ha sufrido la LRBRL con anterioridad a la reforma de 2013 se produjo por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local. En lo que aquí interesa, se introdujeron dos nuevos Títulos: el X, relativo al régimen de organización de los municipios de gran población (arts. 121 y ss.), y el XI, sobre la tipificación de las infracciones y sanciones por las entidades locales en determinadas materias (arts. 139 y ss.), entre las que se incluyen un gran número que directa o indirectamente aparecen conectadas con el medio ambiente.<sup>697</sup>

El citado art. 139 dice así: *<<Para la adecuada ordenación de las relaciones de convivencia de interés local y del uso de sus servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos, los entes locales podrán, en defecto de normativa*

---

<sup>696</sup> Consiste en un Plan o Programa de actuación que tiene su origen en la Agenda 21 aprobada en la Cumbre de Río de Janeiro de 1992, y con el que se pretende conseguir que todas las áreas de competencia municipal enlacen con el desarrollo económico y el respeto hacia el entorno natural. Han sufrido un fuerte impulso por parte de la Comunidad Europea, como resalta LOZANO CUTANDA, B. En “Introducción al Derecho Ambiental y a la intervención administrativa para la protección del Medio Ambiente”, op. cit., págs. 132 y 133.

<sup>697</sup> El Título X será de aplicación como regla general, a los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes y a los que sean capitales de provincia con más de 175.000, pero también a otros: capitales de provincia, capitales autonómicas, municipios sedes de instituciones autonómicas, así como municipios cuya población supere los 75.000 habitantes, siempre que presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales. En estos supuestos, la aplicación del régimen de gran población queda condicionada a que así lo decidan los Parlamentos de las Comunidades Autónomas a iniciativa de los respectivos Ayuntamientos. Este régimen posee un amplio espectro de actuación en todo el territorio nacional, ya que el número de poblaciones que reúnen estos requisitos es notable. Y respecto a la potestad sancionatoria que se incluye en el Título XI, si bien el art. 139 otorga a los entes locales la facultad de establecer infracciones e imponer sanciones en defecto de normativa sectorial específica, a través de las ordenanzas locales, se imponen límites a la cuantía de las sanciones, que en ningún caso podrán superar los 3.000€ en el caso de infracciones muy graves. Pero lo cierto es que una pretendida flexibilidad en cuanto a la precisión del alcance de la reserva de ley sancionadora respecto de las ordenanzas municipales no alcanza para excluir de forma tajante dicha exigencia; el Tribunal Constitucional, en Sentencia 233/1999 (Pleno), de 13 de diciembre [RTC 1999\233], sobre la Ley de Haciendas Locales, otorgó mayor ámbito de regulación para las ordenanzas dictadas por los Ayuntamientos en relación con los tributos locales (FJ 10 y 18), pero a pesar de que en la misma se posibilitan líneas de flexibilización en materia sancionatoria local cuando no exista la cobertura de una Ley sectorial, esta ductilidad consigue que no sea exigible una definición de cada tipo de ilícito y sanción en la ley, pero no permite la inhibición del legislador en relación a otras materias. Otra importante sentencia es la STC (Sala Primera) 132/2001, de 8 junio [RTC 2001\132], sobre la suspensión temporal de licencia de auto-taxi impuesta por el Ayuntamiento de Madrid. La flexibilización de las ordenanzas locales establecida en la jurisprudencia constitucional sobre la Ley de Haciendas Locales no puede proyectarse sobre el principio de legalidad sancionadora: la reserva del art. 25.1 CE es más estricta que la del art. 133.1 CE, y por ello se entiende vulnerado el principio de legalidad sancionadora. Acerca del alcance de las ordenanzas en materia sancionadora y el derecho fundamental plasmado en el art. 25 CE, *vid.* ORTEGA BERNARDO, J. “Derechos fundamentales y ordenanzas locales”, op. cit., págs. 97 y ss; LOZANO CUTANDA, B. Voz “Infracciones y sanciones administrativas para la protección del medio ambiente”. En *Diccionario de Derecho Ambiental*, op. cit., págs. 734 y 735.

*sectorial específica, establecer los tipos de las infracciones e imponer sanciones por el incumplimiento de deberes, prohibiciones o limitaciones contenidos en las correspondientes ordenanzas>>.* De todas formas, aunque el municipio fue en el pasado la Administración por excelencia encargada de la función protectora del medio ambiente (sanidad e higiene), en la actualidad además de potestad para regular sanciones previa habilitación legal, la realidad demuestra que existen numerosas ordenanzas municipales en ausencia de habilitación legal o sin una ley medioambiental que les sirva de apoyo y les marque las pautas a seguir. Estas ordenanzas, al compararse con la legislación medioambiental vigente, poseen tanto una distinta tipificación de las infracciones y sanciones, como una diferente clasificación y gradación de las mismas.<sup>698</sup>

El TC ofrece dos respuestas distintas a sendos supuestos de sanción por infracciones contra las Ordenanzas de los Ayuntamientos de Santander y Gijón, frente a perturbaciones causadas por ruidos y vibraciones.<sup>699</sup>

---

<sup>698</sup> Vid. VILLANUEVA LATORRE, A. C. “El régimen sancionador administrativo en la legislación acústica”. En *El derecho contra el ruido*. José Francisco Alenza García (dir.) Ed. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2013, págs. 191-235; ESTEVE PARDO, J. “Derecho del medio ambiente”, op. cit., págs. 47 y ss; CALVO CHARRO, M. *Sanciones Medioambientales*. Ed. Marcial Pons. Madrid, 1999, págs. 31-45; HUERGO LORA, A. “Las sanciones administrativas”, op. cit., págs. 129-133, 153 y ss; CANO CAMPOS, T. *Las Sanciones de Tráfico* (2ª ed.) Ed. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2014, págs. 41 y ss.

<sup>699</sup> SSTC 25/2004 (Sala 2ª), de 26 de febrero [RTC 2004\25] y 16/2004 (Sala 1ª), de 23 de febrero [RTC 2004\16]. En la primera se otorga el amparo al recurrente y se anula una sanción de cierre de una discoteca durante un mes impuesta por el Ayuntamiento de Santander, al declarar que se había vulnerado el derecho fundamental de la entidad mercantil titular del local a la legalidad sancionadora (art.25.1 CE), aunque lo relevante de la misma es que recordando la doctrina de la STC (Sala 1ª) 132/2001, de 8 de junio [RTC 2001\132], se reconoce una cierta elasticidad en el alcance de la reserva de ley en relación con las ordenanzas municipales sancionadoras, si bien concluye que el art.23 de la LO 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana, no ofrece la cobertura legal suficiente a una sanción de policía administrativa como la impuesta por el Ayuntamiento de Santander. En la segunda, el TC considera, aún recordando de nuevo lo formulado en la STC 132/2001, que la ordenanza municipal del Ayuntamiento de Gijón de protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones encuentra cobertura en el art.12 de la Ley preconstitucional 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico. *La cuestión se encuentra actualmente resuelta por la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, que establece una relación simple entre la cobertura legal sectorial y el desarrollo mediante ordenanzas municipales.* Vid. RODRÍGUEZ-ZAPATA PÉREZ, J. “La doctrina del Tribunal Constitucional en materia de sanciones medioambientales”, en *Incidencia medioambiental y derecho sancionador*. D. Berberoff Ayuda (dir.) Cuadernos de Derecho Judicial. Ed. Consejo General del Poder Judicial. Madrid, 2007, págs. 299-304.

### 3.3.1.1.- Diversidad de policías ambientales y sus limitaciones en la aportación de prueba sobre emisiones ruidosas en el ámbito local

Que una Ordenanza municipal es un Reglamento es un hecho ya consolidado en nuestra cultura jurídica, y lo cierto es que representa hasta cierto punto, el único instrumento normativo válido para comprobar la existencia o inexistencia de un ilícito en materia de ruidos, por ser una conducta prototípica del modelo de gestión local ambiental. De ahí su extraordinaria trascendencia en la especialidad que nos ocupa.<sup>700</sup>

Se añade la circunstancia de que las Ordenanzas Reguladoras del Ruido pueden adoptan al menos tres arquetipos normativos: norma que regula en exclusiva la materia, norma especial que actúa conforme a la legislación estatal o autonómica, o norma adicional de protección.<sup>701</sup>

Si analizamos en profundidad esta cuestión, deducimos una cierta distorsión en el principio de seguridad jurídica que debe regir el sistema penal, pues si bien los parámetros iniciales de los que parte se encuentran más o menos estandarizados a nivel general en la Ley del Ruido de 2003 y en uno de los dos Reglamentos que la desarrollan (básicamente en relación a valores límites de emisión, zonas de especial protección por la saturación existente, o zonas de servidumbre acústica, entre otras cuestiones)<sup>702</sup>, también existen diferencias que entorpecen una regulación de la materia con la suficiente garantía de seguridad jurídica. Una persona puede cometer una infracción leve, grave, muy grave, o un delito, en el caso de encontrarse en una zona bajo una determinada clasificación acústica, sin que la situación de hecho sea

---

<sup>700</sup> Al respecto, *vid.* SIBINA TOMÁS, D. “Las ordenanzas municipales de protección frente al ruido. I. El marco jurídico y la perspectiva jurídica interdisciplinar”. En *Cuadernos de Derecho Local*, núm. 4. Ed. Fundación Democracia y Gobierno Local. Febrero, 2004, págs. 207-231; ESTEVE PARDO, J. “Derecho del medio ambiente”, *op. cit.*, pág. 231; BETANCOR RODRÍGUEZ, A. “Derecho Ambiental”, *op. cit.*, págs. 335-348; GARCÍA MACHO, R. “El principio rector medio ambiente y la protección del ciudadano frente a los ruidos”. En *El Derecho Administrativo en el umbral del siglo XXI. Homenaje al Profesor Dr. D. Ramón Martín Mateo*, Tomo III. Francisco Sosa Wagner (coord.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2000, págs. 3543-3552. La jurisprudencia también es homogénea a la hora de atribuir a las Ordenanzas municipales sobre medio ambiente la naturaleza de disposición de carácter general. Entre otras, STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª) núm. 1307/2009 de 5 de noviembre. Ponente: Excmo. Sr. Siro Francisco García Pérez [RJ/2010/301].

<sup>701</sup> *Vid.* ORTEGA BERNARDO, J. “Derechos fundamentales y ordenanzas locales”, *op. cit.*, págs. 239 y ss.

<sup>702</sup> RD 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

fácilmente detectable y verificable por parte del propio emisor o sujeto activo.<sup>703</sup> Por si ello no fuera suficiente para lograr la deformación de los límites que debe guardar el mandato de determinación *-lex certa-*, derivado del principio de legalidad, los entes locales legislan de forma contradictoria en materia de ruido, empujados por la necesidad de conjugar la regulación de diferentes sectores que conciernen tanto al tejido empresarial o los servicios públicos, como a la convivencia ciudadana.<sup>704</sup>

Por otra parte, la Ley del Ruido, primero se cuida de excluir de su ámbito de aplicación a las actividades domésticas y relaciones vecinales, posteriormente alude a las mismas otorgando a las ordenanzas locales la potestad de tipificar infracciones, con la cláusula añadida *<<de conformidad con los usos locales>>*, con la inclusión de los usuarios de la vía pública, lo que viene a corroborar la trascendencia de la sociología propia, adquirida, o autóctona de cada ciudad o núcleo de población.<sup>705</sup> A ello hay que añadir la naturaleza compartida en las competencias sobre conservación y medio ambiente, que da lugar a una pluralidad de estamentos policiales encargados de la salvaguarda de los elementos naturales.

Las competencias de investigación y enjuiciamiento de los delitos medioambientales corresponden al SEPRONA, a los agentes forestales o medioambientales, a la policía autonómica, al Cuerpo Nacional de Policía y a la Policía Local, en absoluto a los agentes de policía judicial en sentido estricto.<sup>706</sup> En todo caso,

---

<sup>703</sup> Vid. ALONSO GARCÍA, E. / LOPERENA ROTA, D. Voz “Medio Ambiente Local”. En *Diccionario de Derecho Ambiental*, op. cit., págs. 803-826, en especial 819.

<sup>704</sup> Este tipo de contradicción en la filosofía de las normas lo atestigua con fina ironía BLANCO ESTEVE, A., cuando compara dos ordenanzas sobre contaminación acústica dictadas por el Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Mientras que una permite ampliar el horario de ruido nocturno en terrazas y bares autorizados, la otra permite la declaración de Zona Acústicamente Contaminada para ciertas zonas de la ciudad en las que la densidad de establecimientos de ocio y la afluencia de público provocan un nivel de ruidos considerable. “Idas y venidas en la lucha contra el ruido”. En *Revista de Administración Pública*, núm. 53, septiembre-diciembre 2000, págs. 267-300. En relación a la importancia que de manera primordial se otorga al decibelio en las normas reguladoras, vid. MARTÍ MARTÍ, J. Se pregunta si una exposición continuada a 60dB en zona recreativa en periodo nocturno, con el objetivo de 63dB según la Ley del Ruido, o una de 29dB con el objetivo de 30dB en un dormitorio de un particular, pueden no ser calificadas de inmisión o perturbación. En “La defensa frente a la contaminación acústica y otras inmisiones”, op. cit., pág. 89.

<sup>705</sup> Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. El art. 2.2 a) excluye de su aplicación a estos emisores, pero el art. 28.5 declara que las ordenanzas locales podrán tipificar infracciones relacionadas con: a) *El ruido procedente de usuarios de la vía pública en determinadas circunstancias*; b) *El ruido producido por las actividades domésticas o los vecinos, cuando exceda de los límites tolerables de conformidad con los usos locales*.

<sup>706</sup> La LO 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (última modificación 21 de diciembre de 2013), establece que en esta materia ejercen sus funciones el Cuerpo de la Guardia Civil, a través del Servicio especializado de Protección de la Naturaleza -SEPRONA-, así como los Cuerpos de Policía autonómicos del País Vasco, Cataluña y Navarra, y los Cuerpos de Policía dependientes de las

la posibilidad de que se produzcan situaciones insólitas en relación al ruido, es una realidad. Me refiero a la indeterminación existente en términos de competencia, puesto que no existe un criterio nítido, claro y expreso acerca de quién la ostenta válidamente en la obtención de un principio de prueba que permita a los afectados incoar un procedimiento (casi en su totalidad de carácter administrativo en su fase inicial), por lo que en ciertas ocasiones se abandonan los derechos de determinados ciudadanos v.g., de aquellos que residan en zonas de ámbito territorial inferior al municipio. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando un ciudadano requiere una medición de ruido y su vivienda se encuentra ubicada en una zona urbanizada en diseminado fuera del municipio, a pesar de hallarse en el mismo término municipal? Si profundizamos un poco más en el supuesto planteado, y damos por legítima la competencia de otras figuras de carácter privado que puedan tener espacio en el ámbito ambiental, por ejemplo un guarda particular de campo, éste quedará incapacitado para ofrecer una prueba eficaz y válida procedimentalmente, pues no dispone de los instrumentos técnicos apropiados e indispensables empleados en aquellas materias que, por su complejidad, requieren la utilización de parámetros numéricos y análisis técnicos (en el caso del ruido, sonómetro dotado de rigurosas características técnicas y normativas). Lo único que podrá hacer constar es su testimonio. Pero no sólo cabe esta categoría, ya que no encontramos obstáculo alguno para que un detective privado o una empresa de seguridad puedan aportar pruebas a instancia de parte, al igual que empresas y entidades homologadas, de forma especial en aquellas materias como la emisión de ruidos, que exige el empleo de análisis técnicos, pero que también puede nutrirse de pruebas y evidencias obtenidas a través de distintas fuentes.<sup>707</sup>

---

entidades locales. Vid. GONZÁLEZ i JIMÉNEZ, A. Respecto a los agentes forestales o medioambientales, el autor destaca su condición de policía, aunque tal categoría es cuestionada por diversas administraciones. Por otra parte, también critica la falta de formación de este colectivo, su desconocimiento de la mecánica judicial y su excesiva dependencia de la administración. En *Las diligencias policiales y su valor probatorio*. Ed. Bosch. Barcelona, 2014, págs. 172 y ss; CÁMARA DEL PORTILLO, D. Voz “Policía Ambiental, Organización”. En *Diccionario de Derecho Ambiental*, op. cit., págs. 961-975. Vid. GÓMEZ PÉREZ, F. “El papel de las policías locales en la sociedad urbana y en la calidad de vida”. En *Seguridad Urbana, Urbanismo y Entornos Urbanos*. Cuadernos de Seguridad y Policía, núm. 6. Ed. Dykinson. Madrid, 2011, págs. 15-42. Respecto a la recogida de muestras o vestigios y la intervención inicial de la policía vid. GRANADOS PÉREZ, C. “La contaminación acústica”. En *Problemas derivados de la delincuencia medioambiental*. Estudios de Derecho Judicial, núm. 52. Ed. Consejo General del Poder Judicial. Centro de Documentación Judicial. Madrid, 2004, págs. 13-41.

<sup>707</sup> Al respecto, la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, regula las funciones de los guardas rurales y sus especialidades, así como la figura del detective privado y empresas de seguridad. En sentido similar, pero desde el análisis de la normativa anterior a 2014, Ley 23/1992 de 30 de julio, de Seguridad Privada, vid. CÁMARA DEL PORTILLO, D. Voz “Policía Ambiental, Organización”. En *Diccionario de*

Al hilo de la dicotomía existente entre la prueba obtenida por el sector público o el privado, la reciente Ordenanza de Protección contra el Ruido de Sevilla se decanta por otorgar prevalencia al principio de prevención frente al principio de seguridad jurídica, ya que dispensa potestades a la Policía Local para clausurar o sancionar a un establecimiento si el agente estima que supera los límites de emisión marcados por la normativa, sin necesidad de contar con prueba de sonómetro ni de ir acompañado por un funcionario de Medio Ambiente, como sucedía hasta ahora, siempre y cuando la infracción se califique como leve.<sup>708</sup>

En este supuesto, la indeterminación del hecho punible puede alcanzar cotas verdaderamente alarmantes, pues es muy probable que los ruidos generados al amparo de actividades al aire libre, o bajo el paraguas autorizatorio en locales de ocio con veladores ubicados en la vía pública, aglutinen aportaciones individuales de cada sujeto, que terminan de conformar el marco ruidoso que realmente es el sancionable, adjudicándole el hecho a la persona jurídica, o física responsable del establecimiento. Otra de las razones que ayudan a esta relatividad es que la contaminación sonora, en este contexto, puede ser tan sencilla como compleja en su grado de ejecución, dado su carácter de cesación y reanudación instantánea, y esta particularidad lo transforma en un problema de policía, cuyo papel es más acusado que el desempeñado en otras formas de contaminación, en este caso atmosférica al compartir con ella el mismo medio de inferencia.

---

*Derecho Ambiental*, op. cit., págs. 971 y 972. La reforma de 2014 apenas altera esta cuestión. Al respecto, *vid.* ÁLVAREZ MORENO, A. / GALLEGO RODRÍGUEZ, P. / GARCÍA CABA, M. et. al. *Comentario a la Ley de Seguridad Privada*. Alberto Palomar Olmeda (dir.) Ed. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2014.

<sup>708</sup> Ordenanza contra la Contaminación Acústica, Ruidos y Vibraciones de Sevilla, de 25 de julio de 2014. BOP Sevilla núm. 251, miércoles 29 de octubre de 2014, págs. 21-73. Según esta norma, en relación a las condiciones acústicas para actividades en establecimientos al aire libre o con zonas al aire libre, y actividades con música en directo, cuando a juicio de los agentes se perciban unos niveles inaceptables, estos actuarán proporcionalmente sobre el emisor pudiendo intervenir, suspender o clausurar el local de ocio (arts. 11.4 y 12.4).



## IV.- MEDIO AMBIENTE Y CRIMINOLOGÍA

### 4.1.- *Green Criminology*: presupuestos de la Teoría criminológica medioambiental

La reciente línea doctrinal impulsada por el nacimiento de la *Green Criminology* en la década de los 90, a través de autores como LYNCH en la doctrina norteamericana<sup>709</sup> y SOUTH en la británica<sup>710</sup>, analiza los daños al medio ambiente desde una perspectiva criminológica, por lo que incluye el estudio del delincuente (mostrando especial consideración hacia las organizaciones, grupos empresariales y Estados, o la delincuencia transnacional provocada por el fenómeno de la globalización)<sup>711</sup>, las víctimas (conjunto de personas afectadas por los usos ambientales, así como poblaciones discriminadas y desplazadas), y el delito, sin relegar las posibles respuestas aplicables (desde el punto de vista policial, legislativo, punitivo y de prevención del delito).<sup>712</sup>

---

<sup>709</sup> Vid. LYNCH, M. J. "The greening of criminology: A perspective on the 1990s". En *The Critical Criminologist*. Vol. 2. Issue 3, 1990. págs.1-4 y 11-12. Algunos de sus más recientes trabajos en LYNCH, M. J. / STRETESKY, P. B. *Exploring Green Criminology. Toward a Green Criminological Revolution*. Ed. Ashgate. Aldershot (UK), 2014; LYNCH, M. J. "Reflections on Green Criminology and its Boundaries. Comparing Environmental and Criminal Victimization and Considering Crime from an Eco-city Perspective". En *Routledge International Handbook of Green Criminology*. Nigel South / Avi Brisman (eds.) Ed. Routledge. New York, 2013, págs. 43-57.

<sup>710</sup> Vid. SOUTH, N. "A Green Field for Criminology?: A Proposal for a Perspective". En *Theoretical Criminology. An International Journal*. Vol. 2. Issue 2, May 1998. (Special Issue: The Green Field of Study for Criminology). Mary Bosworth / Simon A. Cole (eds.) Ed. Sage Publications. London, 1998, págs. 211-233; "Green Criminology: Reflections, Connections, Horizons". En *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*. Vol. 3, Issue 2, 2014, págs. 5-20. Disponible en: [www.crimejusticejournal.com/issue/view/13](http://www.crimejusticejournal.com/issue/view/13) Vid. BRISMAN, A. / SOUTH, N. "Green Cultural Criminology: Constructions of Environmental Harm, Consumerism and Resistance to Ecocide", op. cit.

<sup>711</sup> Vid. WHITE, R. Se refiere a este fenómeno utilizando el concepto de *ecoglobal criminology*, anotando que existen al menos tres formas diferentes de aproximación a la investigación transnacional: global (daños transnacionales de efecto universal, procesos y agencias; comparativa (diferencias entre los Estados-nación, incluyendo los Estados fallidos); e histórica (diferencias de época en los modos de producción, y tendencias mundiales). En *Globalisation and environmental harm*, op. cit., pág. 7.

<sup>712</sup> Según la definición general de Criminología proporcionada por GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A., se trata de una <<ciencia empírica e interdisciplinaria, que se ocupa del estudio del crimen, de la persona del infractor, la víctima y el control social del comportamiento delictivo, y trata de suministrar una información válida, contrastada, sobre la génesis, dinámica y variables principales del crimen – contemplado éste como problema individual y como problema social–, así como sobre los programas de prevención eficaz del mismo, las técnicas de intervención positiva en el hombre delincuente –y en su víctima– y los diversos modelos o sistemas de respuestas al delito. En *Criminología. Una introducción a sus fundamentos teóricos* (7ª ed.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2013, pág. 35.



Desde un plano más teórico, se interesa por las condiciones sociales, económicas y políticas que conducen a los delitos ambientales, y a nivel filosófico, considera que el daño ambiental debe ser tratado como un verdadero “crimen”. Otra de las perspectivas de este enfoque se dedica a establecer una estrecha conexión entre los Derechos Humanos y el medio ambiente, en un escenario propicio desde la década de los 70, en la que se generalizó el uso del neologismo *ecocidio* por parte de la doctrina<sup>713</sup>, en un intento de aproximación a los presupuestos materiales del *genocidio*, como puede ser la destrucción de un territorio, o el debilitamiento de una forma de vida ecológica y cultural.<sup>714</sup>

<sup>713</sup> El término ecocidio es utilizado como expresión de cualquier daño extenso o destrucción del paisaje natural, y la alteración o pérdida de ecosistemas de un territorio determinado, hasta el punto de hacer peligrar la supervivencia de los habitantes de ese territorio, aunque no se encuentra legalmente definido. Vid. GRAY, M. A. “The International Crime of Ecocide”. *California Western International Law Journal*, Volume 26, Spring, 1996, págs. 215-271. Vid. SOUTH, N. <<El sustantivo “ecocidio” se define en el Random House Webster Unabridged Dictionary (2006) como -La destrucción del medio ambiente natural por actividades tales como la guerra nuclear, la sobreexplotación de los recursos, o el vertido de productos químicos-. Más concisamente, el Penguin English Dictionary (2007) ofrece la siguiente definición: -La destrucción del medio ambiente natural en la medida en que es incapaz de soportar la vida-. Con el uso de esta palabra no estoy afirmando que nos encontremos colectiva y globalmente al borde de la catástrofe ecocida, pero el término es cierta (y literalmente) una palabra de advertencia y su origen, que data de finales de 1960 (de acuerdo con el Random House Dictionary), es una señal de la conciencia posmoderna de las tendencias ecocidas de desarrollo de las naciones avanzadas. [tr. pr.] “Ecocide, Conflict and Climate Change: Challenges for Criminology and the Research Agenda in the 21<sup>st</sup> Century”. En *Eco-Crime and Justice. Essays on Environmental Crime*. Kristiina Kangaspunta / Ineke Haen Marshall (eds.) Ed. Unicri. Turin (Italy), 2009, págs. 37-53, en especial 41. También realiza un estudio del significado de esta terminología y su trascendencia en relación a dos materias medioambientales especialmente influenciadas por este concepto, como son el tráfico de especies y la eliminación de residuos a nivel internacional. “The ecocidal tendencies of late modernity: transnational crime, social exclusion, victims and rights”. En *Global Environmental Harm. Criminological Perspectives*. Rob White (ed.) Ed. Willan Publishing. Devon (UK), 2010, págs. 228-247.

<sup>714</sup> Para entender el proceso y el contexto en que se desarrolló esta teoría, vid. GAUGER, A. / RABATEL-FERNEL, M. P. / KULBICKI, L. et. al. “Ecocide is the missing 5<sup>th</sup> Crime Against Peace”. *The Ecocide Project*. Human Rights Consortium, School of Advanced Study. University of London, 2013. Disponible en: [http://sas-space.sas.ac.uk/4830/1/Ecocide\\_research\\_report\\_19\\_July\\_13.pdf](http://sas-space.sas.ac.uk/4830/1/Ecocide_research_report_19_July_13.pdf) (último acceso 12/07/2015). Respecto a las últimas contribuciones a favor de la creación de una Ley sobre Ecocidio, y el establecimiento de un Tribunal Ambiental Internacional, vid. HIGGINS, P. / SHORT, D. / SOUTH, N. Después de que el elemento intencional fuera añadido al texto del art. 26 del documento precursor del Estatuto de Roma, los gobiernos de Australia, Bélgica, Austria y Uruguay pasaron a la historia criticando la nueva redacción, en reconocimiento de que el ecocidio en tiempos de paz es a menudo un crimen sin intención, pero en 1996 este artículo fue eliminado. “Protecting the planet: a proposal for a law of ecocide”. *Crime, Law and Social Change*, Vol. 59, Issue 3, 2013, págs. 251-266; BRISMAN, A. / SOUTH, N. “State-Corporate Environmental Harms and Paradoxical Interventions: Thoughts in Honour of Stanley Cohen”. En *Green Harms and Crimes. Critical Criminology in a Changing World*. Series: Critical Criminological Perspectives. Ragnhild Aslaug Sollund (ed.) Ed. Palgrave Macmillan, June 2015, págs. 27-42, en especial 38. El art. 8.2 (b) (iv) del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional dispone que a los efectos del presente Estatuto, se consideran crímenes de guerra: <<Intentionally launching an attack in the knowledge that such attack will cause incidental loss of life or injury to civilians or damage to civilian objects or widespread, long-term and severe damage to the natural environment which would be clearly excessive in relation to the concrete and direct overall military advantage anticipated>> [Lanzar un ataque intencionalmente a sabiendas de que dicho ataque causará pérdida de vidas fortuitas, lesiones a civiles o daños a bienes de carácter civil, o daños

Los teóricos de la *Green Criminology* remiten parte de sus presupuestos a los del *white-collar crime*<sup>715</sup>, básicamente porque en ambas tipologías delictivas se produce una heterodoxa mixtura entre persona jurídica y persona física, tanto en la esfera del sujeto activo como del pasivo, es decir, delincuentes y víctimas; por tanto, ninguna persona o grupo sería inmune al ataque. Además, en esta relación de superposición entre delito ambiental y daño, los textos sobre *Green Criminology* (a diferencia de lo que sucede en los tratados sobre criminología ambiental tradicional) examinan dicha concordancia a través del prisma de la delincuencia organizada, el delito ambiental estatal corporativo y la delincuencia transnacional.

Describen, avanzando un paso más en el concepto de la delincuencia de cuello blanco, una nueva terminología [*dirty collar crime*]<sup>716</sup> en respuesta a los servicios ilegales constatables a través de estudios que demuestran la participación de la delincuencia organizada cuyos filamentos alcanzan a todos los aspectos del ámbito empresarial relacionado con los bienes ambientales; por ello, reclaman un mayor control de las empresas involucradas, primordialmente de aquellas que ofrecen servicios de eliminación de residuos domésticos e industriales.<sup>717</sup> No obstante, también se interesan por explorar otros estamentos, utilizando la misma perspectiva ambiental, por ejemplo en relación a los actos cotidianos, universales o globales cometidos por sujetos indeterminados, a los que hemos aludido anteriormente, tomando la definición otorgada por AGNEW, que los califica de “daños ordinarios”.<sup>718</sup>

---

generalizados, duraderos y graves al medio ambiente natural que serían manifiestamente excesivos en relación a la concreta y directa ventaja militar en conjunto anticipada] [tr. pr.].

<sup>715</sup> El término fue acuñado por el criminólogo norteamericano SUTHERLAND, E. H. *White Collar Crime*. Ed. Holt, Reinhart and Winston. New York, 1949.

<sup>716</sup> En desarrollo del contraconcepto *-dirty collar crime-*, a través del estudio del caso de los daños a la salud pública relacionados con el negocio corporativo de la eliminación de residuos en Nápoles (Italia), conocidos internacionalmente, *vid.* RUGGIERO, V. / SOUTH, N. “Green Criminology and Dirty Collar Crime”. En *Critical Criminology. An International Journal*, Vol. 18, Issue 4. Ed. Springer Netherlands, 2010, págs. 251-262.

<sup>717</sup> Los bienes básicos ambientales implicados incluirían la pesca ilegal, el sector maderero (tala ilegal), tráfico de especies o de partes de animales (marfil, órganos usados en determinados medicamentos), así como los residuos. *Vid.* SOUTH, N. En un mundo sobreproductor e hiperconsumista, los residuos plantean el problema de cómo deshacerse de ellos. La evitación de licencias, el pago de sobornos a los propietarios de los vertederos o la propiedad directa de tales enclaves son formas de acelerar la eliminación de manera muy barata, pero también en extremo peligrosa. “Green Criminology and Organised Environmental Crimes”. *European Review of Organised Crime Newsletter*. September, 2014, Volume 11, Issue 3. ECPR Standing Group on Organised Crime, págs. 2-4. Disponible en [http://sgocnet.org/site/wp-content/uploads/2014/05/Sept-2014\\_Final2.pdf](http://sgocnet.org/site/wp-content/uploads/2014/05/Sept-2014_Final2.pdf) (último acceso 12/07/2015). Una panorámica general acerca de los nuevos usos delictivos ambientales en WYATT, T. / WESTERHUIS, D. / WALTERS, R. et. al. *Emerging Issues in Green Criminology. Exploring Power, Justice and Harm*. Reece Walters et. al. (eds.) Ed. Palgrave Macmillan. Basingstoke (UK), 2013.

<sup>718</sup> *Vid.* AGNEW, R. *The ordinary acts that contribute to ecocide. A criminological analysis*, op. cit.

Asimismo, partiendo de una perspectiva “cultural”, surgen nuevos proyectos interdisciplinarios, enfoques que buscan incorporar la preocupación por el significado cultural del medio ambiente, los delitos ambientales, y el daño ambiental en la empresa. Todo ello a través de la impugnación del espacio, la transgresión, y la resistencia; las formas en que se construye la delincuencia, cómo la representan los medios de comunicación; y los patrones de construcción del consumismo.<sup>719</sup>

Las premisas básicas de la *Green Criminology*, con independencia de las particularidades que conlleva la adopción de los diferentes enfoques y orientaciones teóricas existentes, se ilustra con una amplia gama de cuestiones sustantivas.<sup>720</sup> Entre otras, incluye: daños causados por el calentamiento global y cambio climático<sup>721</sup>; delitos de contaminación; criminalidad corporativa y su impacto en el medio ambiente, la salud y la seguridad en el trabajo en supuestos de incumplimientos con consecuencias dañinas para el medio ambiente; participación de la delincuencia sindicada y corrupción oficial en la eliminación ilegal de residuos tóxicos; el impacto y legado de la aplicación de la ley y operaciones militares en los paisajes; suministro de agua, calidad del aire y organismos vivos que pueblan estas zonas (humanos, no humanos, animales y vegetales); formas de aplicación de la ley y regulación de la norma pertinente para tales actos; delitos alimentarios, deforestación ilegal, abuso animal y derechos de los animales, así como el comercio ilegal de especies en peligro de extinción que figuran en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES).<sup>722</sup>

---

<sup>719</sup> Vid. BRISMAN, A. / SOUTH, N. Concluyen mostrando cómo una fertilización cruzada entre la Criminología Verde y la Criminología Cultural sería mutuamente beneficiosa. En “A green-cultural criminology: An exploratory outline”, op. cit., págs. 129 y 130.

<sup>720</sup> Por ejemplo, SOUTH se inclina hacia una interpretación de la *Green Criminology* como una perspectiva que acoja una diversidad de marcos de estudio, y no tanto como una posición meramente teórica, que en su opinión resulta menos provechosa. Vid. SOUTH, N. En “A Green field for Criminology?: A Proposal for a Perspective”, op. cit., págs. 212 y 213; SOUTH, N. / WHITE, R. En “The Antecedents and Emergence of a “Green” Criminology”, op. cit., págs. 9 y ss.

<sup>721</sup> Sobre este factor en concreto, vid. LYNCH, M. J. / STRETESKY, P. “Global warming, global crime: a green criminological perspective”. En *Global Environmental Harm. Criminological Perspectives*. Rob White (ed.) Ed. Willan Publishing. Devon (UK), 2010. págs. 62-84.

<sup>722</sup> Vid. SOUTH, N. / BRISMAN, A. / BEIRNE, P. “A guide to a green criminology”. En *Routledge International Handbook of Green Criminology*. Nigel South / Avi Brisman (eds.) Ed. Routledge. New York, 2013, págs. 27-42. Acerca de la eficiencia e implementación del CITES en Noruega, vid. SOLLUND, R. “The Illegal Wildlife Trade from a Norwegian Outlook: Tendencies in Practices and Law Enforcement”. En *Green Harms and Crimes. Critical Criminology in a Changing World*. Series: Critical Criminological Perspectives. Ragnhild Aslaug Sollund (ed.) Ed. Palgrave Macmillan, June 2015, págs. 147-169, en especial 38.

Esta disciplina, que ha logrado superar un indiscutible grado de autonomía respecto a la Criminología tradicional<sup>723</sup>, se ha desarrollado en la última década gracias al trabajo de autores que han extendido, diversificado y clasificado su campo de actuación, como WHITE o CARRABINE, entre otros muchos.

WHITE propone una triple tipología sustantiva: las cuestiones denominadas <<*brown*>>, que tienden a definirse en el contexto de la vida urbana y la contaminación [contaminación del aire, gestión de residuos tóxicos / peligrosos, pesticidas, contaminación de playas y captación de agua, contaminación de aguas pluviales]; <<*green*>>, orientadas a materias de conservación y áreas silvestres [lluvia ácida, pérdida de biodiversidad, destrucción de hábitats, especies invasoras introducidas a través del transporte humano, prácticas de explotación, el agotamiento de la capa de ozono, las algas tóxicas y la contaminación del agua]; por último, las cuestiones <<*white*>> ocupan el espacio creado por el impacto de las nuevas tecnologías y diversas prácticas de laboratorio [ensayos y experimentación con animales, clonación de tejidos humanos, relaciones medio ambientales con enfermedades transmisibles, irradiación de alimentos, organismos modificados genéticamente, procesos *in vitro*, así como los ambientes interiores patológicos].<sup>724</sup>

CARRABINE plantea la distinción entre crímenes verdes “primarios” y “secundarios”. Los primeros engloban hechos que son resultado directo de la destrucción y degradación de los recursos de la Tierra; los segundos son delitos o daños simbióticos o dependientes de esa destrucción y de los esfuerzos realizados para regularla o prevenirla.<sup>725</sup>

---

<sup>723</sup> Cfr. LYNCH, M. Percibe, repasando los 20 años transcurridos desde su primer estudio sobre criminología verde, que esta especialidad se encuentra marginada respecto a la estructura de la Criminología como disciplina, y que según su opinión, refleja la falta de flexibilidad e imaginación de los criminólogos, que tienden a centrar su investigación casi singularmente en las causas, consecuencias y control de los delitos callejeros. En “Reflections on Green Criminology and its Boundaries. Comparing Environmental and Criminal Victimization and Considering Crime from an Eco-city Perspective”, op. cit., pág. 45.

<sup>724</sup> Vid. WHITE, R. *Crimes against Nature: Environmental Criminology and Ecological Justice*. Ed. Willan Publishing. Devon, 2008; “The Conceptual Contours of Green Criminology”. En *Emerging Issues in Green Criminology. Exploring Power, Justice and Harm*. Reece Walters / Diane S. Westerhuis / Tanya Wyatt (eds.) Ed. Palgrave Macmillan. Basingstoke (UK), 2013, págs. 17-33. También SOUTH, N. / BRISMAN, A. / BEIRNE, P. “A guide to a green criminology”, op. cit.

<sup>725</sup> Vid. CARRABINE, E. En CARRABINE, E. / COX, P. / LEE, M. / PLUMMER, K. / SOUTH, N. *Criminology: A Sociological Introduction* (3<sup>th</sup> ed.) Ed. Routledge. London, 2014, págs. 383 y ss.

La doctrina también se esfuerza por ofrecer una definición más apropiada y ajustada, huyendo del empleo del término secular “medio ambiente”, recurrente en el debate diario de los medios de comunicación contemporáneos, o con ánimo de diferenciarlo y no confundirlo con el uso ya establecido en la Criminología tradicional, esto es, describir las relaciones entre la incidencia de la delincuencia y las características espaciales del entorno construido y urbano.<sup>726</sup>

Más allá de la creación de espacios delimitadores, evaluadores, teóricos y filosóficos, la puesta en práctica de todos estos axiomas requiere una positiva y corpórea trasposición legal, superando determinados límites para poder alcanzar una mejor comprensión de los requisitos legales precisos, ya sea a través de la utilización de leyes civiles, administrativas, o penales, pues la mejor doctrina es partidaria de un cruce de jurisdicciones que alcance una flexibilización capaz de solventar los problemas ambientales a los que nos enfrentamos, dada la complejidad e interconexión de factores que integran los daños al medio ambiente.<sup>727</sup>

Quizás la escasa atención prestada en España a esta temática, se deba a un problema tanto conceptual como semántico, pues en todo caso, son las teorías ambientalistas de reducción y prevención de la criminalidad, entendidas como criminología ambiental, las que se han apropiado del término; por lo tanto, cuando la *Green Criminology* aparece como rama diferenciada y mucho más global, es cuando se presenta el problema conceptual, que por ende, invade al semántico.<sup>728</sup>

---

<sup>726</sup> Vid. SOUTH, N. / BRISMAN, A. / BEIRNE, P. White (2008) sugiere rescatar el término “criminología ambiental” de lo que correctamente se considera “criminología basada en el lugar”, para cubrir el estudio de daños y amenazas ambientales, la legislación ambiental y la actividad relacionada con la investigación. Por su parte, Walters prefiere el término “eco-crímen” por su utilidad y su capacidad de encapsular “actuales definiciones legales de los delitos ambientales, así como los análisis sociológicos de los daños ambientales no necesariamente previstos por la ley”. Otras formulaciones se inclinan por el término “criminología de la conservación”. En “A guide to a green criminology”, op. cit., pág. 29. Sobre las originarias teorías ambientales en la Criminología, con los trabajos de la Escuela de Chicago y la obra de Newman a la cabeza, vid. por todos, GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. En “Criminología. Una introducción a sus fundamentos teóricos”, op. cit., págs. 469 y ss.

<sup>727</sup> Así, HALL, M. En suma, la creciente evidencia de que las sanciones penales por sí solas son incapaces de abordar de manera adecuada los problemas de la sociedad con las actividades destructivas del medio ambiente, es bastante convincente. De hecho, dada la complejidad de los vínculos entre el cambio ambiental, la transformación de la sociedad, los cambios en el delito y los daños sociales, sería sorprendente si éste fuera el caso. “The Roles and Use of Law in Green Criminology”. En *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, Vol. 3, núm. 2, 2014, págs. 96-109. Disponible en: [www.crimejusticejournal.com/issue/view/13](http://www.crimejusticejournal.com/issue/view/13) (último acceso 12/07/2015).

<sup>728</sup> Una de las contadas alusiones en la doctrina española la realiza PAREDES CASTAÑÓN, J. M. Utiliza la denominación “Criminología de la delincuencia medioambiental”. En “El Derecho Penal español del medioambiente: una evaluación crítica”, op. cit., pág. 755. A los graves problemas interpretativos que surgen a partir del uso de determinados vocablos y términos en las ciencias jurídicas

## 4.2.- Tratamiento del delito, víctima y procesos de victimización en la criminología del Medio Ambiente: *Green Victimology*

La influencia de los controles informales del delito en los intentos de guiar las políticas públicas de lucha contra lo delictivo, en el contexto anglosajón del término *penal-welfare complex* acuñado por GARLAND, bajo el paradigma del control social del delito<sup>729</sup>, adquiere además una importancia vital en el proceso sociológico inherente a la configuración normativa en gran parte de los modelos europeos, con independencia de que la impronta de dichos modelos de intervención haya perdido su predominio en el discurso.<sup>730</sup> Todo ello se ha visto favorecido por el llamado temor al delito, que desembocó tanto en la necesidad [adquirida en base a muchos más elementos de los que conforman una crítica estrictamente sociológica] como en la exigencia de la sociedad civil, en relación a que el Estado debe proveer la suficiente seguridad, ampliar las fronteras del catálogo de delitos, y por consiguiente el aumento de penas.<sup>731</sup>

Este fenómeno ha sido descifrado por diversos autores como una regresión en el sistema de garantías previamente alcanzadas por el delincuente (de carácter estacionario en tiempos históricos determinados), que ha desviado el foco de atención casi de forma exclusiva hacia el delito, así como hacia nuevos estatutos de presencia en el escenario del control, por ejemplo las víctimas, junto a un desconcertante incremento

---

y extrajurídicas se refieren con acierto VIVES-REGO, J. J. / CORCOY BIDASOLO, M. / NIEVA FENOLL, J. “Delito medioambiental y delito contra la salud pública: problemas terminológicos jurídicos y científicos de la legislación actual y propuestas de *lege ferenda*”. En *Medio Ambiente y Derecho: Revista electrónica de derecho ambiental*, núm. 16, septiembre 2007. Disponible en: [http://huespedes.cica.es/gimadus/16/02\\_del\\_medio\\_salud\\_pub.htm](http://huespedes.cica.es/gimadus/16/02_del_medio_salud_pub.htm) (último acceso 12/07/2015).

<sup>729</sup> Vid. GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. En “Criminología. Una introducción a sus fundamentos teóricos”, op. cit., págs. 226 y ss.

<sup>730</sup> El término *penal-welfare complex* [complejo penal-bienestar] alude a los mecanismos y estrategias diseñados para controlar el delito en el Estado del bienestar, que se fue desarrollando desde finales del s.XIX en el contexto británico y norteamericano Vid. GARLAND, D. Así, los cambios que se han producido desde la década de los 70 en relación a la demografía y la ecología social, tales como la difusión del automóvil privado y el desarrollo de nuevos modelos de viviendas han generado una multiplicidad de rasgos visibles en muchos países, entre los que se han expandido una suerte de dinámicas de vida cotidiana hasta entonces desconocidas; entre otras, la pérdida de importancia de la interacción cara a cara y la lealtad o solidaridad local, así como un incremento de la privatización de la vida individual y familiar. “The culture of control. Crime and Social Order in Contemporary Society”, op. cit., págs. 84 y ss.

<sup>731</sup> En este sentido, GARLAND, D., se refiere a las nuevas coordenadas culturales del control del delito. En “The culture of control. Crime and Social Order in Contemporary Society”, op. cit., págs. 174 y 175. Resulta innegable la influencia de las premisas enunciadas por Garland, visualización que, no obstante, no se traduce en la recepción completa de estos sistemas penales en España. También es un referente la obra de CHRISTIE, N. *Crime control as Industry. Towards Gulags, Western Style* (3<sup>rd</sup> ed.) Ed. Routledge. New York, 2000.

de los proveedores de seguridad privada, que por otra parte interrelaciona a la perfección con los estándares actuales de la sociedad de mercado. Estas presencias son tanto reales como simbólicas.<sup>732</sup> Como explica GARLAND, la transformación de los ejes liberales que presidían la aplicación del sistema penal no sólo se deben a un cambio político estructural; hay que sumar el hecho de que las fuerzas sociales intermedias, que no presentan rasgos diferenciados en cuanto a clase social o raza, que nunca han tenido esa familiaridad con el delito, de repente se han convertido en los mayores representantes de las iniciativas que propugnan mayor “ley y orden”, precisamente por el grado de igualdad alcanzado en cuanto a su victimización, que ha apartado esa desigualdad. Y es precisamente el abuso de imputación en la sociedad del riesgo lo que se acaba provocando disfunciones; lo que la sociología del Derecho denomina *vis atractiva del derecho penal*.<sup>733</sup>

Así, GARCÍA-PABLOS define con el término <<contrailustración>> a las tendencias político-criminales adoptadas en la actualidad, basadas en modelos de intervención penal con fuerte predominio de la seguridad ciudadana. No obstante, duda sobre la definitiva implantación de este modelo, si bien apunta que existen ciertos segmentos sobre cuya existencia e interiorización cultural y social es innecesario debatir.<sup>734</sup> En nuestra opinión, las fronteras tanto divergentes como convergentes entre la Criminología convencional y la Criminología del medio ambiente, cada vez tropiezan más con una especie de confusión terminológica que ralentiza la efectiva implantación de esta última sub-disciplina.

---

<sup>732</sup> Sobre la evolución en España y Europa de los distintos servicios de seguridad privada y su controvertida eficacia preventivo-general, *vid.* GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. En “Criminología. Una introducción a sus fundamentos teóricos”, op. cit., págs. 610-617.

<sup>733</sup> *Vid.* GARLAND, D. En “The culture of control. Crime and Social Order in Contemporary Society”, op. cit., págs. 147 y 148; SERRANO MORENO, J. L. “La sociedad del riesgo y el derecho de la sociedad”. En *Derecho, Globalización, Riesgo y Medio Ambiente*. Esteban Pérez Alonso / Estanislao Arana García et. al. (eds.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2012, págs. 355-373.

<sup>734</sup> *Vid.* GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. Sus rasgos más expresivos serían: protagonismo de la delincuencia convencional y desatención de la criminalidad de los poderosos; sentimientos colectivos de inseguridad ciudadana y miedo al delito, con una clara influencia negativa en la política criminal; la inversión de papeles entre delincuente y víctima, cuyos intereses han escalado posiciones ventajosas; el partidismo ideológico y las dinámicas populistas; el recrudescimiento del rigor penal y resurgimiento del componente aflictivo del castigo; una confianza inusitada en los órganos estatales encargados del <<*ius puniendi*>>, acompañada al mismo tiempo de una relajación respecto del sistema de garantías que los controla; la implicación de la sociedad de forma directa en la lucha contra el delito, y por último, un nuevo paradigma de control que sustituye al predecesor modelo etiológico criminológico. En “Criminología. Una introducción a sus fundamentos teóricos”, op. cit., págs. 726-735.

BRISMAN y SOUTH, por ejemplo, muestran un talante contrario a aplicar esta exégesis de la Criminología que GARLAND describe como única vía de solución para el desarrollo teórico, inclinándose porque la Criminología del medio ambiente camine acompañada, bien del esfuerzo de mejorar y fortalecerse con el aval de la teoría dominante existente, y mediante reformulaciones o exploración de nuevas rutas.<sup>735</sup> Uno de los argumentos utilizado por BRISMAN y SOUTH es que se pueden aprovechar las ventajas que ofrecen ciertos espacios desarrollados con amplitud en torno a la criminología tradicional, como la fascinante atención que siempre causa el crimen en la producción de información en los medios.<sup>736</sup>

Por su parte, WHITE considera que el ámbito de la Criminología es suficientemente elástico para acoger la inclusión de los dos fenómenos simultáneos que presiden actualmente el estudio crítico de los delitos y el daño ambiental. Se trata del desarrollo explícito de este nuevo ámbito como marco diferenciado dentro de la disciplina criminológica, que comparte con la dimensión y transformación ecológica más generalizada de la propia Criminología, por la impronta académica e investigadora desarrollada en torno a esta materia.<sup>737</sup> Efectivamente, la arrolladora e incesante actividad científica internacional en torno a la *Green Criminology*, convierte en inabarcable una enumeración exacta de la multiplicidad de aspectos tratados, así como de sus respectivos estudiosos.

---

<sup>735</sup> Al igual que aplicamos las categorías “continuas con la interacción social normal”, o “conducta desviada o aberrante” a determinadas prácticas, actividades o comportamientos, desde una perspectiva ambiental más extensa pueden tener exactamente la misma significación. En este sentido, BRISMAN, A. / SOUTH, N. “The planned obsolescence of planet Earth? How green criminology can help us learn from experience and contribute to our future”. En *Routledge International Handbook of Green Criminology*. Nigel South / Avi Brisman (eds.) Ed. Routledge. New York, 2013, págs. 409-417.

<sup>736</sup> Vid. BRISMAN, A. / SOUTH, N. Un enfoque al que nos referimos como “criminología cultural verde”, que implica el trabajo de alterar los temas predominantes de las noticias que ayuden a reproducir las concepciones populares del delito y la justicia, para que esos daños ambientales que ya están criminalizados y reciben atención de los medios, reciban más [...] Si es cierto que la sangre vende, entonces la sangre del planeta también debería vender. En “The planned obsolescence of planet Earth? How green criminology can help us learn from experience and contribute to our future”. op. cit., pág. 414. También explica de forma sutil la dinámica utilizada por el mundo de la comunicación durante periodos en los que prima el oscurantismo, u otros en los que se genera gran expectación mediática en torno a los problemas ambientales CASTELLS, M. Por ejemplo, en relación al calentamiento global, el proceso por el cual un asunto que hasta la década de 1980 fue ignorado, a pesar de que el conocimiento científico se remontara a la década de los 50, fue largo y complejo. El camino fue guiado entre las prácticas de los científicos, activistas ambientales, y las de los grandes medios de comunicación; más tarde, se unieron las redes globales de Internet. En “The Power of Identity. The Information Age: Economy, Society, and Culture” Vol. II, op. cit., págs. xxvii y xxviii (prefacio a la edición de 2010).

<sup>737</sup> Vid. WHITE, R. En “The Conceptual Contours of Green Criminology”, op. cit., pág. 32.



La Victimología del medio ambiente -*Green Victimology*- también ocupa un espacio incipiente dentro de esta escuela, con una progresiva incidencia en las nuevas corrientes asociadas al daño ambiental.<sup>738</sup> Una vez sentadas las bases para que esta moderna corriente -*Green Criminology*- se desarrolle con independencia suficiente, hecho obvio y comprobable a partir de las numerosas investigaciones, seminarios y publicaciones dedicadas a la materia, comienza a surgir como área autónoma en la investigación criminológica, el estudio y representación del fenómeno victimológico que produce esta concreta tipología delictiva.<sup>739</sup> En sintonía con lo descrito acerca de la Criminología, corresponde subrayar que la equivalencia es similar, es decir, existen ciertas notas que diferencian el tratamiento de esta categoría de víctimas respecto a las tratadas por la Victimología tradicional.

En primer lugar, el desinterés que ha mostrado históricamente la ciencia criminológica por esclarecer y datar el gran número de víctimas que provocan los crímenes de Estado, la delincuencia de cuello blanco, o la corporativa, en contraposición al destacado nivel y atención prestado a las víctimas que producen otros tipos de delitos violentos, aunque el correlato numérico de sujetos victimizados no se corresponda en modo alguno con esta asimetría. El factor numérico es extremadamente superior en el primer grupo mencionado, no obstante nunca ha sido objeto de un estudio sistemático por parte de la Criminología tradicional, por ende tampoco en su rama victimológica.<sup>740</sup>

---

<sup>738</sup> Por ejemplo, en los siguientes trabajos. LYNCH, M. J. "Reflections on Green Criminology and its Boundaries. Comparing Environmental and Criminal Victimization and Considering Crime from an Eco-city Perspective", op. cit.; BISSCHOP, L. / VANDE WALLE, G. "Environmental Victimisation and Conflict Resolution: A Case Study of e-Waste", op. cit., págs. 34-54; HALL, M. "Victims of Environmental Harms and Their Role in National and International Justice". En *Emerging Issues in Green Criminology. Exploring Power, Justice and Harm*. Reece Walters / Diane S. Westerhuis / Tanya Wyatt (eds.) Ed. Palgrave Macmillan. Basingstoke (UK), 2013, págs. 218-241.

<sup>739</sup> Uno de los más recientes e interesantes, sobre un escenario ambiental español localizado en la ciudad de Huelva, que cuenta con índices de contaminación elevados y perpetuados a lo largo de décadas por las plantas industriales y químicas establecidas en los años sesenta del siglo XX, es el publicado por NATALI, L. "Green Criminology, Victimización Medioambiental y Social Harm. El caso de Huelva (España)". En *Revista Crítica Penal y Poder*, núm. 7 (Número especial: daño social, sus causas y sus víctimas). Ed. Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos. Universidad de Barcelona, septiembre, 2014, págs. 5-34.

<sup>740</sup> Vid. LYNCH, M. J. / STRETESKY, P. B. Tan sólo tomando en cuenta los índices de victimización de los seres humanos, en relación a la exposición al aire, al agua, y a los residuos tóxicos, las cifras presentadas son exponencialmente superiores a las que producen los delitos violentos tradicionales. En "Exploring Green Criminology. Toward a Green Criminological Revolution", op. cit., págs. 84-94. Sobre las bases de la victimología ambiental, vid. WILLIAMS, C. "An Environmental Victimology". *Environmental Victims: New Risks, New Injustice*. Christopher Williams (ed.) Ed. Earthscan. London, 1998, págs. 3-26; LYNCH, M. Según los datos que refleja en otro de sus estudios, se estima que los incidentes de victimización violenta producidos por la contaminación del aire son diez veces más

En segundo lugar, esta estela se visualiza perfectamente en el tratamiento que las víctimas ambientales reciben por parte de la literatura científica, que engloba numerosos contenidos. Se ocupa tanto del estudio de las víctimas relacionadas con el transporte ilegal y el vertido de desechos electrónicos por ejemplo, cuestión íntimamente relacionada con la rentabilidad de los costos financieros para determinados sectores corporativos (atendiendo a uno de los principios funcionales del Derecho ambiental: la integración de costes ambientales)<sup>741</sup>, o de la relación entre las víctimas ambientales y los sistemas nacionales e internacionales de justicia<sup>742</sup>, así como del vínculo entre las minorías, principalmente de países subdesarrollados o en vías de desarrollo, y la eliminación de residuos en general y residuos tóxicos en particular,

---

probables que los provocados por la contaminación del agua. Por otra parte, la probabilidad de exposición a puntos de residuos peligrosos es mucho mayor que la probabilidad de victimización penal por delitos violentos. En síntesis, el autor apunta que la probabilidad de incidentes de victimización considerando todos los apartados ambientales de forma conjunta, supera en un 30% a los sufridos por delitos violentos, al menos en EE.UU. En “Reflections on Green Criminology and its Boundaries. Comparing Environmental and Criminal Victimization and Considering Crime from an Eco-city Perspective”, op. cit., págs. 50 y ss. Específicamente centrado en la investigación toxicológica de los fenómenos ambientales y sus efectos, se suma a las posiciones que sostienen que la supervivencia del hombre es interdependiente de la supervivencia de otras especies ZAKRZEWSKI, S. F. La ciencia de la toxicología, cuyo nacimiento se debe al científico menorquín Mateo Orfila [Mattieu Joseph Bonaventura Orfila (1787-1853)] ha sufrido un desarrollo paralelo al del uso y presencia de diferentes agentes tóxicos, cuya permanencia a largo plazo (acumulativa y de carácter grave) en los seres vivos se estudia de forma específica desde que los efectos del desarrollo industrial y económico tras la Segunda Guerra Mundial, extendieron su impacto en las nuevas sociedades. Así, se ha demostrado que a través de las vías percutánea, respiratoria u oral, la captación celular de determinadas clases de toxinas provoca mutaciones que desembocan en enfermedades de tipo cancerígeno en aparato digestivo, sistema linfático, riñones, vejiga, enfermedades cardíacas, pulmonares, cerebrales, reacciones alérgicas, etc. También señala el importante dato relativo a la escasa cantidad de sustancia química necesaria en muchos casos para generar un proceso de enfermedad, así como que la exposición química suele ser acumulativa y de larga duración. Por ejemplo, en los pesticidas, a pesar de los picos de vida media de los agentes contaminantes, éstos pueden permanecer indelebles en el cuerpo durante una década, y si la fuente de exposición se mantiene, la acumulación de la toxina se eleva a lo largo del tiempo. *Environmental Toxicology* (3<sup>rd</sup> ed.) Ed. Oxford University Press. New York, 2002. Los datos mencionados son ratificados en una reciente publicación revisada sobre la relación entre el medio ambiente y la química toxicológica, por MANAHAN, S. E. *Fundamentals of Environmental and Toxicological Chemistry: sustainable science* (4<sup>th</sup> ed.) Ed. CRC Press. Boca Raton (Florida), 2013.

<sup>741</sup> Acerca de los principios funcionales y estructurales del Derecho ambiental, vid. ORTEGA ÁLVAREZ, L. *Este principio introduce la economía ambiental en el circuito de la economía productiva tradicional [...] con cuatro manifestaciones principales. La más conocida es la del principio “quien contamina paga”, [...] la técnica de la ecoauditoría [...] pero también son interesantes respecto a los principios de sostenibilidad y solidaridad, los procesos de traslación de los costes ambientales a precios, el establecimiento de cánones o impuestos ambientales y el de la reventa de cupos autorizados de emisiones contaminantes.* En “Concepto de medio ambiente”, op. cit., pág. 41.

<sup>742</sup> Existe una obra colectiva reciente en la que el estudio de la temática remite a países como Brasil, Chile, Costa Rica, Argentina, Panamá, México, Ecuador, así como al contexto jurídico transnacional. Vid. *El acceso a la justicia de las víctimas de daños ambientales. Una perspectiva comparada.* Antoni Pigrau Solé (dir.) Paola Milenka Villavicencio Calzadilla (coord.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2015.

dada la ubicación de la controvertida “autopista” que permite su exportación a dichos países.<sup>743</sup>

La división del análisis se asigna a una frontera preliminar que centrada en tres amplios grupos: 1.- Víctimas humanas. 2.- Seres vivos –flora, fauna, insectos y microbios– 3.- Ecosistemas y sus componentes.<sup>744</sup>

A efectos de un análisis ontológico, surge el siguiente ¿cuál es el sustrato teórico y filosófico que otorga validez a esta propuesta victimológica? Pues bien, el foco central de atención para la mayoría de estudiosos de *Green Criminology* es la aceptación de que la protección medioambiental debe traspasar la barrera hasta ahora infranqueable que la une de forma indisoluble al ser humano (tesis defendida por los representantes del postulado antropocéntrico), para dejar paso a una verdadera concepción unitaria, global y alejada de esa estrecha vinculación al hombre, pasando así del llamado ecocentrismo moderado a las teorías biocéntricas puras, que defienden el valor inherente de cada organismo en sí mismo considerado.

Partiendo de estos postulados, la *Green Victimology* intenta proporcionar una visión más pragmática a las necesidades de reparación del daño producido por los ataques al medio ambiente. Otra diferenciación destacable respecto a la Victimología tradicional es la percepción que las víctimas experimentan acerca de su estado victimario cuando se producen daños medioambientales que no se manifiestan en un momento concreto, sino que se extienden a lo largo de una franja temporal más o menos prolongada. Para ilustrar tal circunstancia no es necesario que nos alejemos demasiado. En nuestro país, la ciudad de Huelva representa un escenario propicio para explicar este fenómeno. En la década de los 60 del s. XX se estableció una extensa planta química e industrial en las afueras del núcleo urbano, que generó índices de contaminación muy elevados en el transcurso del medio siglo posterior, no sólo en sus habitantes sino también en las aguas de los ríos Tinto y Odiel, básicamente por la descarga de residuos procedentes de las empresas de dicho polígono. NATALI lleva a cabo una investigación empírica a través de entrevistas realizadas sobre un grupo de encuestados de perfil heterogéneo, que reflejan una disparidad de opiniones y

---

<sup>743</sup> Vid. SOUTH, N. En “Ecocide, Conflict and Climate Change: Challenges for Criminology and the Research Agenda in the 21<sup>st</sup> Century”, op. cit., págs. 48-50.

<sup>744</sup> Vid. LYNCH, M. J. / STRETESKY, P. B. En “Exploring Green Criminology. Toward a Green Criminological Revolution”, op. cit., pág. 101.

sentimientos; desde la indignación por lo sucedido, hasta la negación, la batalla entre la creación de puestos de trabajos y los riesgos para la salud, o percepciones acerca de la dimensión que cobra el concepto de injusticia ambiental.<sup>745</sup>

La cuestión es: ¿poseen los habitantes de zonas contaminadas un conocimiento suficiente y verídico acerca de la existencia de los delitos ambientales producidos en sus núcleos de residencia, son capaces de percibir la trascendencia de los mismos para su comunidad, cuáles son las pistas, el eco que a través de sus relatos posibilita a los observadores captar esa realidad trágicamente esquiva?

Al hilo del discurso, todavía parece más remota la idea de una consciencia clara sobre todo lo que ello comporta en otros sujetos que, o simplemente viven alejados de la zona de influencia del foco de contaminación, o ni siquiera conocen la potencial transferencia de efectos que pueden sufrir.

---

<sup>745</sup> Vid NATALI, L. <<Las fuentes de la percepción social acerca de la transformación destructiva del medioambiente siguen siendo insuficientemente exploradas>>. En “Green Criminology, Victimización Medioambiental y Social Harm. El caso de Huelva (España)”, op. cit. pág. 7. El estudio del caso fue publicado anteriormente en una obra internacional de varios autores; utiliza una ingeniosa metáfora en el título del artículo para explicar la investigación llevada a cabo *in situ*. “The big grey elephants in the backyard of Huelva, Spain”. En *Global Environmental Harm. Criminological Perspectives*. Rob White (ed.) Ed. Willan Publishing. Devon (UK), 2010. págs. 193-209; “A Critical Gaze on Environmental Victimization”. En *Green Harms and Crimes. Critical Criminology in a Changing World*. Series: Critical Criminological Perspectives. Ragnhild Aslaug Sollund (ed.) Ed. Palgrave Macmillan, June 2015, págs. 63-78, en especial 65- 67.

#### 4.2.1.- Valoración de los procesos de victimización relacionados con el ruido

Lo expuesto hasta ahora goza de un acento pronunciado que debemos puntualizar, puesto que muchas de las conductas ruidosas que desembocan en procesos de victimización primaria<sup>746</sup> (ya sean individuales o colectivos), provienen de una sociedad que ha modificado sus filtros de actuación, por una parte alcanzando grandes dosis de libertad y derechos, por otra fuertes restricciones relativas a una adecuada coherencia de estas libertades en relación con ciertas materias altamente intervenidas por los respectivos órganos encargados de su gestión y control, pero al mismo tiempo cada vez más extensas y pluridireccionales. La nueva LO 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, considera que es un derecho básico de las víctimas *entender y ser entendidas en cualquier actuación que deba llevarse a cabo desde la interposición de una denuncia y durante el proceso penal, incluida la información previa a la interposición de una denuncia* (art. 4).

En estos términos, la vida cotidiana urbanizada y concentrada de las ciudades quizás es el sustrato más significativo de las actividades relacionadas con la emisión de ruidos que caben en el tipo penal que describe el art. 325.<sup>747</sup> Pero no sólo el ruido, si seguimos el dictado medioambiental íntegro del tipo penal, produce efectos victimógenos en este contexto, sino que cualquier manifestación de las enunciadas es susceptible de provocarlos. Es más, la Criminología del medio ambiente –*Green Criminology*– denuncia abiertamente este tipo de victimización, con el apoyo de datos empíricos proporcionados por las ciencias experimentales, segmentado para su estudio específico en secciones tales como la victimización por contaminación del aire, agua, exposición a puntos de residuos peligrosos, etc.

---

<sup>746</sup> Vid. GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. Victimización primaria es: <<... el proceso por el que una persona sufre, de modo directo o indirecto, los efectos nocivos derivados del delito o hecho traumático, sean éstos materiales o psíquicos>>. En “Criminología. Una introducción a sus fundamentos teóricos”, op. cit., pág. 135.

<sup>747</sup> Como se describe en el presente trabajo, casi la totalidad de pronunciamientos judiciales en torno al ruido por parte del TEDH, así como de la jurisdicción interna española, se ocupan de los tres focos de ruido que se consideran predominantes en las grandes ciudades: 1.- La actividad industrial; 2.- Tráfico aéreo; 3.- Zonas con alta concentración de ocio nocturno. En el mismo sentido, vid. BOMBILLAR SÁENZ, F. M. En “Contaminación acústica”, op. cit., pág. 232.

Regresamos al escenario concreto de la emisión de ruidos. Pues bien, justamente en el momento cronológico subsiguiente, es decir, cuando la víctima decide denunciar la situación ruidosa, es cuando comienza el proceso de la denominada victimización secundaria.<sup>748</sup> En algunos de estos supuestos, podemos hablar de una victimización de carácter específico, es decir, ya no sólo se trata de la intervención de la víctima en el proceso, con todo lo que ello comporta (revivir el suceso, el reencuentro con el victimario u otras variables), sino que la incoación del procedimiento por parte de la víctima, por sí solo no suele traducirse en el cese de la situación ruidosa; es más, el propio sujeto pasivo encuentra un cúmulo de obstáculos procedimentales añadidos a los propios de cualquier procedimiento penal típico; en primer lugar, hay que determinar si la conducta que se pretende enjuiciar constituye un ilícito administrativo o penal, lo que suele suceder cuando las emisiones alcanzan un carácter continuado y prolongado en el tiempo.<sup>749</sup> En segundo lugar, suele transcurrir un tiempo hasta que se adoptan las medidas cautelares apropiadas con anterioridad al desarrollo del procedimiento.<sup>750</sup> En tercer lugar, la precaución propia con la que hay que atender estos supuestos, principalmente para que no propicien la vulneración del principio *ne bis idem*, determina la admisión de ciertas disposiciones.

Por tanto, la percepción subjetiva de la víctima acerca del proceso de victimización que le involucra, tanto en fase primaria como secundaria, no varía, básicamente porque la situación permanece intacta hasta que la intervención del sistema legal ha recorrido un largo trayecto.

---

<sup>748</sup> Según GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A., ésta se produce por los costes personales que desencadena la intervención del sistema legal. En “Criminología. Una introducción a sus fundamentos teóricos”, op. cit., pág. 136.

<sup>749</sup> El TS se pronuncia afirmando que nos encontramos ante una figura delictiva de peligro hipotético o potencial, en la que el riesgo típico es tributario, entre otros parámetros, de la intensidad y duración del ruido. STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª) núm. 713/2014 de 22 de octubre. Ponente: Excmo. Sr. Luciano Varela Castro [RJ 2014\5089]. Confirma parcialmente la sentencia condenatoria dictada por la Audiencia Provincial de Granada al responsable de un local de hostelería por los ruidos emanados de la terraza de verano por un delito medioambiental y cuatro faltas de lesiones, rebajando la pena de seis años impuesta a la de cuatro años y un día.

<sup>750</sup> Esta situación se entiende perfectamente si lo ilustramos gráficamente a través de un suceso reciente acaecido en la localidad de El Rincón de la Victoria (Málaga). La Fiscalía imputa al encargado de una gasolinera por los ruidos provocados durante años por un túnel de lavado de vehículos, cuyos sufridores denunciantes son vecinos de una urbanización próxima a dicha estación de servicio, a consecuencia de la actividad diaria del túnel de lavado desarrollada entre abril de 2004 y octubre de 2012. En el escrito de acusación el fiscal solicita 6 años de prisión por un delito de contaminación acústica con aplicación de riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas y dos delitos de lesiones. Lo destacable de este ejemplo no es la petición de condena en sí, sino los ocho años transcurridos.

El estudio de una temática tan específica [el ruido] implica una profunda y a la vez ramificada reflexión acerca de su verdadera naturaleza en un contexto penal; cómo y por qué el ruido ha traspasado ampliamente la frontera administrativa y civil tan sumamente implantada y refrendada, en tan breve espacio de tiempo históricamente considerado si lo comparamos con el rápido proceso de recepción que han suscitado las cuestiones medioambientales en general. A una materia en principio ajena a la noción de delito, se le ha otorgado una protección del más alto nivel jerárquico en el ordenamiento, elevándolo a la categoría de conducta sancionable por la fuerza y contundencia del Derecho penal, que llega finalmente a la sociedad revestida de esa sobrecarga simbólica y comunicativa, propia y característica de la sanción penal.<sup>751</sup> La conjunción entre la experiencia colectiva del delito y el amplio espectro colectivo de sujetos pasivos, en contraposición a otros tipos delictivos, es relativamente intensa. En el primer caso, cualquiera puede empatizar con la condición de víctima del delito sin un conocimiento añadido al normal de la vida en sociedad y su cotidianeidad. En el segundo, la mayor esfera de profusión de ruidos en diferentes escenas en las últimas décadas es un caldo de cultivo extraordinario.<sup>752</sup>

Por otra parte, la antelación, premonición o sospecha acerca de la situación ruidosa puede causar un aumento de estrés y ansiedad en el sujeto, factor que debe ser considerado en el tratamiento de la minimización del impacto que provoca la llamada “contaminación acústica”; aún sin poseer una esencia contaminante *per se*, goza de efectos directos, inmediatos, en un sustrato mayoritario de base humana. La sugerencia sobre su naturaleza contaminante reversible se diluye, sobre todo cuando el receptor conoce que el ruido va a ser recurrente por la conducta reincidente del sujeto emisor.<sup>753</sup>

---

<sup>751</sup> A una intención político-criminal ejemplarizante se refiere GÓMEZ INIESTA, D. J., en la aplicación del art. 325 por emisión de ruidos y vibraciones, perfectamente evitable si no se produjera la tolerancia administrativa frente a la mayoría de estas conductas. Por contra, las consecuencias del recurso al Derecho penal se traducen en la búsqueda de finalidades distintas a la protección de bienes jurídicos. “Contaminación acústica y delito ecológico”. En *Estudios de Derecho Ambiental. Libro Homenaje al profesor Josep Miquel Prats Canut*. Gonzalo Quintero Olivares / Fermín Morales Prats (coords.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2008, págs. 915-957, en especial 957. De la misma opinión SILVA SÁNCHEZ, J. M<sup>a</sup> / FELIP I SABORIT, D. En “El Derecho penal ante el ruido”, op. cit., pág. 258.

<sup>752</sup> Como afirma Díez Ripollés, J. L., existen ciertas cualidades inherentes al fenómeno del debate colectivo, de las que los agentes sociales se benefician; uno de ellos es que la experiencia directa de la mayoría de ciudadanos acelera el grado de atención hacia los asuntos sociales, intensificándolos. En “La racionalidad de las leyes penales. Práctica y teoría”, op. cit. pág. 22.

<sup>753</sup> Vid. STOOKES, P. Considera que tratar al ruido como un contaminante totalmente reversible es un error. En “A Practical Approach to Environmental Law”, op. cit., págs. 241 y 242.

Este estrato de relaciones con la experiencia colectiva del delito permite la visualización de una paradoja bastante interesante: algunas de las más recientes sentencias penales condenatorias por aplicación del art. 325 CP en la modalidad de ruido, con imposición de penas privativas de libertad elevadas, han generado fuertes sentimientos de repulsa en la sociedad ante el inminente ingreso en prisión de sus protagonistas para cumplir con la pena impuesta, así como ante la incoación de procedimientos en los que tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular solicitaban penas desorbitadas, situación ésta última que corrige jurídicamente el tribunal sentenciador y con posterioridad confirma el Tribunal Supremo.<sup>754</sup>

Asimismo, se han concedido varios indultos gubernamentales parciales, conmutando las penas impuestas por otras que no superan los dos años, a fin de evitar el ingreso en centro penitenciario.<sup>755</sup> Una lectura fácilmente comprensible de este fenómeno, desde un punto de vista sociológico, es el intento de racionalizar situaciones que, si bien en apariencia pueden ser salvadas por la vía administrativa, dan lugar a que se produzcan enormes discordancias entre el carácter simbólico del Derecho penal y su efectiva puesta en escena, amén del reproche formulado por la desproporción que se produce respecto de otros tipos delictivos.

Pensemos, por ejemplo, que una condena por emisión de ruidos que lleve aparejada la aplicación del tipo agravado, puede alcanzar cinco, seis o incluso algunos años más de pena privativa de libertad; comparable a una condena por homicidio imprudente. No obstante, el principal deseo y pretensión de las víctimas que sufren ruidos invasivos, es la efectiva y rápida desaparición del foco/os emisor/es de ruido, lo que sin duda tiene mayor probabilidad de éxito si se aplicaran correctamente las medidas cautelares apropiadas, bien con anterioridad al inicio del correspondiente

---

<sup>754</sup> Por ejemplo, el caso de la pianista de la localidad de Puigcerdá en el que se solicitaron 7 años de pena privativa de libertad al inicio del procedimiento para cada uno de los tres acusados (la pianista y sus progenitores), sobre el que se dictó sentencia absolutoria [SAP Girona (Sección 4ª) núm. 723/2013 de 26 de noviembre. Rollo núm. 11-2013, procedimiento abreviado núm. 40-2010. Juzgado de Instrucción núm.1 de Puigcerdá]. Al respecto, *vid.* GARCÍA RUIZ, A. “Dos caras de un mismo tipo. A propósito del delito ecológico en dos supuestos: caso Prestige y caso de la pianista ruidosa (desproporción en cuanto al resultado fáctico, víctimas y bien jurídico protegido)”. En *Revista La Ley Penal*, núm. 109, año 11 julio-agosto. Ed. La Ley. Las Rozas (Madrid), 2014, págs. 82-89. El TS (Sala de lo Penal, Sección 1ª) desestimó el recurso de casación presentado por la acusación particular en Sentencia núm. 566/2014 de 16 de junio. Ponente: Excmo. Sr. Julián Sánchez Melgar [RJ/2014/3955].

<sup>755</sup> Reales Decretos 847/2013 y 851/2013, de 31 de octubre. BOE núm. 279, jueves 21 de noviembre de 2013. Sec. III. Págs. 92805 y 92809 respectivamente. La Ley de Indulto data de 18 de junio de 1870, y ha sufrido varias modificaciones. *Vid.* SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES, J. “Una lectura crítica de la Ley de Indulto”. En *Indret: Revista para el Análisis del Derecho*, núm. 2. Ed. Universidad Pompeu Fabra. Barcelona, abril 2008, págs. 1-32.



procedimiento administrativo o bien durante su desarrollo, por otra parte necesario y previo al penal en muchos casos, al tratarse el art. 325 del CP de una norma penal en blanco. Ahora bien, cuando la vía administrativa no interviene con la eficacia solicitada y esperada, y la víctima se encuentra sometida a esa situación tan perturbadora durante mucho tiempo, necesariamente aparece en escena la demanda de una justicia penal contundente.<sup>756</sup>

---

<sup>756</sup> De gran interés, las conclusiones que presentan VÁZQUEZ GONZÁLEZ, C. / LUACES GUTIÉRREZ, A. I. / SERRANO TÁRRAGA, M. D. en *La protección penal del medioambiente. Un estudio sobre su eficacia*. Póster presentado en el X Congreso Español de Criminología. Granada, 2014. En el estudio abordan una serie de factores como la lentitud de la justicia, las dificultades probatorias y la eficacia de la actividad sancionadora de la Administración en la lucha contra la delincuencia medioambiental, amparándose en diversas fuentes (jurisprudencia, datos estadísticos, policiales, de la Fiscalía General del Estado). Gráfica y cronológicamente detallado se observa cómo dos de los mayores desastres medioambientales acaecidos en España (Prestige y Minas de Aznalcollar), prácticamente continúan en el mismo punto de partida por lo que a respuesta penal se refiere, tras haber transcurrido más de 10 años desde ambos sucesos.

### **4.3.- Omisión del rol del ruido como materia de estudio específica en la disciplina criminológica**

La errónea pero generalizada expresión “contaminación acústica” viaja de forma paralela al desinterés que la literatura criminológica ambiental demuestra por su estudio sistemático. La materia no posee carácter inclusivo, a pesar del desarrollo normativo alcanzado en diferentes órdenes jurisdiccionales, especialmente en el penal, así como en la doctrina administrativa y penal. Igualmente, los índices de victimización por ruido en varias ciudades, asociado éste a conductas consideradas lesivas contra determinados derechos humanos consagrados, como el derecho a la salud, a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio, entre otros, son particularmente intensos.

El fenómeno del ruido, tratado como parte integrante del concepto “medio ambiente” es defendible, y así parece definitivamente consagrado por la mecánica que sigue la normativa de su protección en muchos países. Sin embargo, entendemos que existe al menos una razón por la cual el desinterés de su estudio en el ámbito de los teóricos medioambientalistas, se hace patente.

No es otra que su atributo de localización puntual, que de forma natural e incondicional lo acompaña. El carácter global alcanzado por el término “medio ambiente” y el concepto actual de “delito ambiental” desafían la noción tradicional de víctima.<sup>757</sup> El reto también se evidencia en el exiguo papel que las víctimas representan ante determinadas jurisdicciones, desde una perspectiva de justicia trasnacional.<sup>758</sup>

---

<sup>757</sup> Por ejemplo, gracias a la incorporación al ámbito de la victimología ambiental del análisis de nuevas formas de victimización, como la relacionada con el transporte ilegal y el vertido de desechos electrónicos. *Vid.* BISSCHOP, L. / VANDE WALLE, G. Aunque el transporte de desechos electrónicos a países en desarrollo ha sido tipificado como delito, el transporte legal de electrónica de segunda mano puede tener igualmente efectos perjudiciales, debido a que estos países no cuentan con las instalaciones de reciclaje necesarias. “Environmental Victimisation and Conflict Resolution: A case of e-Waste”, op. cit., págs. 34-54.

<sup>758</sup> *Vid.* HALL, M. “Victims of Environmental Harms and Their Role in National and International Justice”, op. cit., págs. 218-241; HISKES, R. P. *The Human Right to a Green Future. Environmental Rights and Intergenerational Justice*. Ed. Cambridge University Press. New York, 2009.

Debido a esta característica de índole espacial, suficientemente tratada en este trabajo, la victimización del ruido se aparta de estas coordenadas. No obstante, el número de víctimas puede alcanzar importancia, pero esto es una cuestión diferente porque aunque existan grupos más o menos extensos de afectados por el ruido, ni varía ni altera la delimitación de sus efectos contaminantes desde un punto de vista científico.

De hecho, la atención jurídica prestada durante la última década al ruido, al menos en España, se ha visto potenciada por la presencia de asociaciones vecinales involucradas directamente en la gestión de este fenómeno, sobre todo en zonas especialmente vulnerables de núcleos urbanizados. Pero no sólo se observa este fenómeno en espacios con índices de población considerable, ya que, al ser el ruido un factor patógeno, éste se hace presente cualquiera que sea el grado de existencia humana en el lugar afectado, ya sea grupal o individualizada, cada vez más asociado a otro tipo de perturbaciones que se alejan de acciones consideradas como virtualmente agresoras del ambiente.<sup>759</sup>

---

<sup>759</sup> Al respecto, en relación al fenómeno de las sombras [y ruido] provocado por la actividad en un parque eólico en la vivienda de los actores, la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª) de 21 febrero 2011 [RJ 2011\1241], reproduce lo expresado en el Auto dictado por la Sala de instancia: <<Estamos ante un tipo de molestia más sutil, como son las sombras intermitentes provocadas por los aerogeneradores,...>> (FJ 1). No obstante, es conocido en qué consiste el efecto sombra: las sombras que proyectan las alargadas estructuras de los aerogeneradores se producen de forma intermitente cuando las palas del rotor cortan la luz solar, por lo que se genera un fenómeno conocido como *shadow flicker* [sombra parpadeante]. El impacto visual que produce se asemeja, por ejemplo, a otros desencadenantes de ataques epilépticos en personas aquejadas de esta enfermedad. Por su parte, la STSJ de Valencia (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª) 752/2013 de 27 junio [JUR\2013\281169] en un caso similar, afirma: <<El nexo causal entre los referidos trastornos padecidos por aquéllos y el funcionamiento de los aerogeneradores queda justificado tomando en consideración que dicho perito manifestó que existía un correlato temporal entre el inicio de los estímulos ruidosos referidos por aquéllos y la aparición de las alteraciones psíquicas indicadas, así como que existía un correlato de mejoría de los síntomas psiquiátricos padecidos por los mismos en relación con el alejamiento de la fuente de estrés (fundamentalmente estímulo ruidoso)>> (FJ 6).

## V.- DERECHO A LA CIUDAD Y DERECHO EN LA CIUDAD

El concepto de ciudad se trata aquí en sentido estricto de “entidad local básica”, es decir, diversos espacios, no necesariamente “metrópolis” o “grandes ciudades”, para lo cual tomamos como punto de referencia lo expresado por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (art. 3), cuyo nomenclátor de entidades locales territoriales incluye, en primer lugar al Municipio, la Provincia, y la isla de los archipiélagos balear y canario; en segundo lugar, gozan de la condición de entidad local, las Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios, las Áreas Metropolitanas, y las Mancomunidades de Municipios.<sup>760</sup>

No obstante, esta ideación originaria del derecho a la ciudad no puede olvidar los espacios rurales dispersos pero habitados, en los que además se pueden producir situaciones de desprotección frente a emisiones de ruido, por tratarse de espacios en los que las respectivas competencias entre Policía Local, Policía Nacional o Guardia Civil no son ostensibles, como hemos tenido ocasión de exponer *supra*, epígrafe 3.3.1.1.

En nuestra opinión, la definición más acertada del Derecho a la ciudad la formula el geógrafo y sociólogo HARVEY: <<*El derecho a la ciudad es mucho más que la libertad individual de acceder a los recursos urbanos: se trata del derecho a cambiarnos a nosotros mismos cambiando la ciudad*>>. Y continúa: <<*Es, además, un derecho común antes que individual, ya que esta transformación depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo para remodelar los procesos de urbanización*>>.<sup>761</sup>

---

<sup>760</sup> Según el nuevo art. 24 bis 1 de la LRBRL: <<*Las leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local regularán los entes de ámbito territorial inferior al Municipio, que carecerán de personalidad jurídica, como forma de organización desconcentrada del mismo para la administración de núcleos de población separados, bajo su denominación tradicional de caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías, lugares anejos y otros análogos, o aquella que establezcan las leyes*>>.

<sup>761</sup> Vid. HARVEY, D. “The right of the city”. New Left Review 53, September-October, 2008, págs. 23-40. Disponible en: <http://newleftreview.org/II/53/david-harvey-the-right-to-the-city> (último acceso 12/07/2015).

## 5.1.- Impronta del “ruido” como elemento en ambas facetas del mismo derecho

La ciudad, como exponente básico de convivencia humana, desde el albor de la civilización, supuso que de forma muy temprana se abordaran una multiplicidad de factores de dicha coexistencia esencialmente insertados en materia de salud pública, cuya transcripción se despliega en lo que hoy podríamos denominar aspectos o secciones medioambientales, que abarcan a la gran mayoría de sus apartados.<sup>762</sup>

Tener en cuenta este hecho posee una importancia vital, sobre todo en relación al objeto específico de este trabajo, pues el ruido actual en las ciudades se contempla prioritariamente por la mayoría de la doctrina jurídica y científica como un factor de salud, relegándose a un segundo y tercer plano su potencial de causar perjuicio al equilibrio de los sistemas naturales, incluso realizando una interpretación teórico-

---

<sup>762</sup> En realidad, la idea surge en 1968, a través de la obra de Henri Lefebvre, que estudia el impacto (de connotaciones negativas) que la instauración definitiva del capitalismo había provocado en las ciudades que adoptaron este sistema, tales como privatización de servicios urbanos, uso mercantil de la ciudad, preponderancia de espacios industriales y mercantiles, etc. Critica, además del funcionalismo desarrollado en el urbanismo del siglo XX, que reduce a unas cuantas necesidades simplistas el concepto de ciudad, la propia ideología urbanística, enfrentada en muchas ocasiones a la igualdad de clases; su aportación está claramente influenciada por su ideología marxista revisionista. Vid. LEFEBVRE, H. *El Derecho a la ciudad* (4ª ed.) J. González-Pueyo (tr.) Ed. Península. Barcelona, 1978. Posteriormente, sucesivos textos han consagrado este derecho, inspirándose en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Así, en el Forum Universal de las Culturas, cuya última edición se celebró en Monterrey (México) en 2007, se aprobó el texto definitivo de la Declaración Universal de Derechos Emergentes, que acoge el mencionado derecho a la ciudad en el documento *Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad*. Con anterioridad, Foro Social de las Américas (Quito, julio 2004); Foro Mundial Urbano (Barcelona, octubre 2004); Foro Social Mundial (Porto Alegre, enero 2005 y enero 2001). En lo que aquí interesa, la Carta, en su art. XVI proclama: <<1. Las ciudades deben adoptar medidas de prevención frente a la contaminación y ocupación desordenada del territorio y de las áreas de protección ambiental, incluyendo ahorro energético, gestión y reutilización de residuos, reciclaje, recuperación de vertientes, y ampliación y protección de los espacios verdes. 2. Las ciudades deben respetar el patrimonio natural, histórico, arquitectónico, cultural y artístico y promover la recuperación y revitalización de las áreas degradadas y de los equipamientos urbanos>>. En relación a la ciudad como espacio de inversión económica en el contexto de la economía mundial, así como la competitividad entre una red de ciudades globales, resulta imprescindible la obra de SASSEN, S. La autora concibe la categoría de ciudad global como un único mercado en el que coexisten distintas ciudades con diferentes culturas e historia, analizando las dinámicas que han transformado la organización económica, social y espacial de las mismas. <<Estas ciudades tiene hoy cuatro funciones completamente nuevas: primero, como puntos de comando altamente concentrados desde los que se organiza la economía mundial; segundo, como localizaciones claves para las finanzas y las empresas de servicios especializados o del terciario avanzado, que han reemplazado a la industria como sector económico dominante; tercero, como lugares de producción y de generación de innovaciones vinculadas a esas mismas actividades; y cuarto, como mercados para los productos y las innovaciones producidas>>. En *La ciudad global: Nueva York, Londres, Tokio*. Silvina Quintero (tr.) Ed. Eudeba. Buenos Aires, 1999. pág. 30.

extensiva de la categoría de “sistema natural”.<sup>763</sup> Por otra parte, se prevé que en el año 2050 el 66% de la población mundial residirá en ciudades.<sup>764</sup> En la Primera Parte tratamos extensamente los antecedentes históricos del ruido, por lo que en este momento sólo cabe dejar apuntado, en relación a lo allí expuesto, que la interpretación del problema no ha variado sustancialmente a lo largo de los siglos.<sup>765</sup>

Diversas formulaciones de organismos o agentes, integrados por grupos sociales, asociaciones, ONGs, etc., parten en la actualidad de una idea central del citado derecho a la ciudad, que mayoritariamente se centra en los distintos sistemas y grados de acceso al proceso urbanizador por parte de la población<sup>766</sup>; sin duda, en un amplio número de grandes ciudades de países desarrollados este derecho se desdobra, en pos de otorgar a los residentes un plus de protección, como sería el derecho no a la ciudad, sino en la ciudad, que implica la consecución de ciertos objetivos por parte de ciudadanos que, con independencia de su posición más o menos consolidada dentro del tejido urbano, reclaman una serie de actuaciones que propicien una utilización pacífica y homogénea de los parámetros urbanos considerados de forma global; entender la ciudad como espacio colectivo e integrado por todos y cada uno de los sectores que conforman el ámbito urbano.<sup>767</sup>

---

<sup>763</sup> Vid. DE ESTEBAN ALONSO, A. “Contaminación acústica y salud”. En *Observatorio medioambiental*. Instituto de Ciencias Ambientales, núm. 6. Ed. Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense de Madrid, 2003, págs. 73-95, en especial 86.

<sup>764</sup> En 1950, tan sólo el 30% de la población mundial era urbana. África y Asia se encuentran en un proceso de urbanización más rápido que otras regiones, y las previsiones apuntan a que entre un 56 y un 64% de su población vivirá en núcleos urbanos en 2050. Vid. “World Urbanization Prospects: The 2014 Revision, Highlights” (ST/ESA/SER.A/352) United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2014. <http://esa.un.org/unpd/wup/Highlights/WUP2014-Highlights.pdf> (último acceso 12/07/2015).

<sup>765</sup> Al respecto, vid. BIJSTERVELD, K. Recoge numerosos conflictos acaecidos desde las primeras décadas del s. XX en ciudades de diversos países, en relación al ruido sufrido por sus habitantes, así como campañas de toda índole, o la creación de asociaciones con la finalidad de mitigarlo. En “Technology, Culture, and Public Problems of Noise in the Twentieth Century”, op. cit.

<sup>766</sup> Los principios sobre los que se edifica este derecho son: el ejercicio pleno de la ciudadanía y gestión democrática de la ciudad, la función social de la ciudad y de la propiedad urbana, la igualdad y la no-discriminación, la protección especial de grupos y personas en situación de vulnerabilidad, el compromiso social del sector privado, o el impulso de la economía solidaria y políticas impositivas progresivas.

<sup>767</sup> Se estima que dentro de 3 o 4 décadas, tres cuartas partes de la población global del planeta vivirá en ciudades. Vid. ZÁRATE, M. L. “El derecho a la ciudad: luchas urbanas por el buen vivir”. En *El Derecho a la ciudad*. Serie Derechos Humanos Emergentes 7. Ed. Institut de Drets Humans de Catalunya. Barcelona, 2011, págs. 53-70. Al hilo de lo relatado nos podemos cuestionar si también existe el derecho a disfrutar de la ciudad tal y como es concebida en condiciones de normalidad o si, por el contrario, existe el deber de soportar determinadas actuaciones de grupos que literalmente toman la ciudad representando a colectivos de toda clase. Por ejemplo, cortes de circulación en calles, concentración masiva de personas para celebrar victorias deportivas, proclamación de días en honor a la bicicleta, al niño, al cáncer, etc., que por muy loables que sean en sus propósitos, distorsionan la

El desarrollo pragmático de estas aspiraciones choca con determinados factores. En principio, con el carácter dinámico y elástico de la vida ciudadana, escoltado por la falta de concreción respecto a sus múltiples aspectos en ciertos supuestos, así como por una sobrecarga regulatoria en otros, puesto que la utilización del espacio público como parte esencial del derecho a la ciudad es primordial; a priori, las grandes transformaciones del diseño en las ciudades del s. XX no tuvieron en cuenta a la población especialmente vulnerable respecto a su autonomía, como pueden ser los niños o ancianos.<sup>768</sup>

Con posterioridad, el alcance del ecologismo en los planeamientos urbanísticos se ha desarrollado, condicionando materialmente el florecimiento de un régimen jurídico especializado en el urbanismo que, con mayor o menor fortuna, actúa en un conjunto de aspectos diferenciados y específicos, como la protección del paisaje, la gestión del ruido ambiental, la contaminación atmosférica, los residuos, etc.<sup>769</sup> En este contexto también se ha considerado más acorde recurrir a las teorías que cobijan el efecto de los comportamientos cumulativos, cuyo principio básico se tradujo y revisó en 2001, durante el Primer Foro Social Mundial; es precisamente en este entorno donde surge el denominado derecho a la ciudad.<sup>770</sup>

El *derecho a la ciudad*, por tanto, puede ser objeto de redefinición desde la perspectiva del acceso y disfrute de la ciudad como espacio público, sin restricciones en cuanto a las personas que deseen ejercitarlo en el marco del libre desarrollo de la personalidad, la libertad de empresa, la libertad de movimientos, el derecho de reunión, la protección de los fenómenos culturales, etc. Es el caso de manifestaciones (espontáneas o autorizadas), agentes formales e informales, tradiciones festivas, que ocasionan ruidos, o bien desde la perspectiva de los ciudadanos que deben soportar sus externalidades negativas, provocadas fundamentalmente por el ruido ambiental de

---

normalidad de los transeúntes y residentes de las zonas donde se producen, en la mayor parte de casos sin la publicidad necesaria y, por supuesto, sin consentimiento ni procedimiento informativo previo a los afectados.

<sup>768</sup> Vid. MONTANER, J. M. “El derecho al espacio público: principios y ejemplos”. En *El Derecho a la ciudad*. Serie Derechos Humanos Emergentes 7. Ed. Institut de Drets Humans de Catalunya. Barcelona, 2011, págs. 87-101.

<sup>769</sup> Vid. MORENO MOLINA, A. M. “El derecho al medioambiente y su traducción en el ámbito urbanístico”, op. cit., págs. 90 y ss.

<sup>770</sup> <<Piensa globalmente y actúa localmente>>. Este es el lema escogido por el Foro Social Mundial, celebrado en Porto Alegre (Brasil), en enero de 2001. Ulteriormente cristalizó en la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, a la que me he referido *supra*. La Carta de Principios del Foro se encuentra disponible en: [http://www2.portoalegre.rs.gov.br/fsm2013\\_esp/default.php?p\\_secao=12](http://www2.portoalegre.rs.gov.br/fsm2013_esp/default.php?p_secao=12) (último acceso 12/07/2015).

autoría indeterminada en el contexto cotidiano de la vida urbana (tráfico rodado, aéreo, obras públicas, servicio de recogida de residuos, zonas de ocio, etc.).<sup>771</sup>

En la actualidad, otro factor añadido de potencial de crecimiento desconocido, pese a que su ascenso es imparable, es la llamada *economía colaborativa* o *consumo colaborativo*, expresión referida a un reciente sistema económico asociado al uso de las nuevas tecnologías (el sistema conocido históricamente como trueque), con la finalidad de compartir bienes (humanos y físicos), y que incluye la creación, producción, distribución, comercio y consumo de bienes y servicios por parte de diferentes personas y organizaciones, pero que no dispone de una regulación detallada que informe y regularice la heterogénea gama de externalidades de índole negativo que puede suscitar en múltiples ocasiones (en términos competenciales, tributarios, ambientales, de salud pública, laborales, etc.). Sectorialmente, existen serias dudas en cuanto a la legislación aplicable, dado el flujo resultante de la diversidad de actividades.<sup>772</sup>

Este derecho a la ciudad sufre también un inusitado interés desde el punto de vista de la reordenación y regeneración integral de Centros Históricos, sobre todo en aquellos municipios en los que se contempla necesaria una mayor intervención en términos de mejora económica, potenciando enclaves turísticos, ofertas culturales y de ocio, pero que al mismo tiempo generan una contracción de los derechos de la población residente autóctona, al recibir una afluencia de visitantes de forma sistemática que de manera irremediable altera la sonoridad de su entorno.

---

<sup>771</sup> Por ejemplo, la Constitución del Ecuador, dentro del Capítulo II “Derechos del Buen Vivir”, desarrolla en la Sección sexta (dedicada al hábitat y la vivienda), el derecho a la ciudad: <<Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía>> (art. 31).

<sup>772</sup> Plataformas digitales como *Airbnb*, *Uber*, *Amovens*, *Comunitae*, *Helpx*, dedicadas a facilitar el uso de vehículos compartidos, gestión de préstamos entre particulares, intercambio de productos, distintos tipos de espacios compartidos (trabajo, vivienda, aparcamiento, entre otros) etc., generan cifras económicas espectaculares. La referencia más relevante sobre este modelo es la obra de BOSTMAN, R. / ROGERS, R. *What's Mine is Yours: The rise of Collaborative Consumption*. Ed. HarperCollins Publishers. New York, 2010. Por ejemplo, *Airbnb* pone a disposición de consumidores y usuarios alojamientos en casas particulares: la mayor externalidad negativa en este caso, sería la profusión de ruidos que generen visitantes eventuales, personas que no son ni propietarios ni arrendatarios, y que sufrirían los sujetos ajenos a la actividad (el vecindario próximo), tal como revela el porcentaje de quejas formuladas últimamente en España sobre este asunto. Por el contrario, la fracción que se ocupa de incentivar el uso del vehículo compartido, produce externalidades ambientales positivas, como la reducción de tráfico y de emisiones de CO<sub>2</sub> a la atmósfera; las que representan variables de consumo local, o el aprovechamiento de bienes y servicios infrautilizados, también inciden favorablemente en la estructura y red ecológica.



El mismo fenómeno es trasladable a otras manifestaciones del desarrollo del turismo en ciudades costeras o del litoral, donde además de la intervención del ruido, se propician otras formas de ataques medioambientales, dependiendo del tipo de planificación urbanística de que se trate; por ejemplo, el incremento de ruido en determinados enclaves de la ciudad por el simple hecho de una mayor concentración de personas, con pautas horarias probablemente muy diferentes a las que suelen guiar la actividad cotidiana de los residentes habituales.<sup>773</sup>

Con el objeto de definir el *derecho en la ciudad*, en el otro extremo del vector, adoptamos una interpretación integradora del derecho de los habitantes (permanentes o temporales) en un determinado espacio urbano a proteger su paz interior, el derecho a determinados estándares de silencio<sup>774</sup>, a reclamar las medidas correctoras ante la Administración Pública competente para paliar o, al menos, disminuir los focos y situaciones ruidosas (concentraciones de ocio, edificaciones de viviendas que cumplan requisitos acústicos más exigentes, planeamientos urbanísticos, etc.), así como la inviolabilidad de su domicilio o hábitat, entre otros factores relacionados con la salud física y psíquica.

---

<sup>773</sup> Sobre este concreto aspecto vinculado al fenómeno de la recuperación de zonas degradadas, con el propósito de convertirlas en áreas de alto rendimiento turístico, *vid.* REDONDO RUBIO DE LA TORRE, L. <<El crecimiento poblacional y empresarial no ha ido en paralelo y el incremento de actividades ha generado un efecto negativo para la población residente: la contaminación acústica en las principales calles del Centro Histórico de la ciudad>>. “La revitalización del centro histórico de Málaga y el ruido”. *Revista Actualidad Jurídica Ambiental*, 9 de diciembre de 2013. págs. 1-15, en especial 15. [http://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2013/12/2013\\_11\\_07\\_Rubio-de-la-Torre\\_Malaga-ruido.pdf](http://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2013/12/2013_11_07_Rubio-de-la-Torre_Malaga-ruido.pdf) (último acceso 12/07/2015). En relación a la planificación territorial de las zonas turísticas en España, *vid.* BLANCO ESTEVE, A. Aboga por la fórmula de integrar la ordenación de los espacios turísticos en los planes territoriales de carácter integral, como ha sucedido en las Islas Baleares y Canarias. Por otra parte, observa que una competencia estrictamente municipal en relación a la aprobación de los Planes sería perjudicial e insuficiente para dotar de coherencia, homogeneización y coordinación en los espacios turísticos. Asimismo, la falta de regulación supramunicipal homogénea ha ocasionado un tipo de planeamiento denominado *planeamiento mosaico*, en el que cada municipio ha desarrollado su plan al margen de municipios próximos o vecinos, incluso en contradicción con los planes desarrollados en éstos. Además, señala que el criterio más importante que debe regir el contenido esencial de estos planes es el de *respetar la capacidad de carga* o capacidad de acogida del territorio sobre el cual se planifica (capacidad física o número de usuarios que pueden ser acogidos, capacidad ecológica, capacidad de asimilación de recursos y capacidad de gestión), afirmando que esta capacidad suele ser inferior en los espacios litorales si se desea mantener las características típicas de sus recursos naturales, como playas, paisajes, flora, etc. “La planificación territorial de las zonas turísticas en España”. En *Revista Derecho Urbanístico y Medio Ambiente*. Año 44, núm. 262, diciembre 2010, págs. 17-70.

<sup>774</sup> A pesar de que, como apuntaba a finales de los años 70 del s. XX el musicólogo MACLEOD, B., nuestra sociedad parece sentir un miedo mortal al silencio, no obstante rara vez lo experimentamos, incluso de forma aproximadamente pura. “Facing the Muzak”. En *Popular Music & Society*. Vol. 7, Issue 1. Ed. Routledge, 1979, págs. 18-31, en especial 28.

Sin embargo, uno de los obstáculos con los que se encuentran los defensores de este particular derecho es que, al ser el “silencio absoluto” objetivamente un propósito inalcanzable, incluso metafórico, el supuesto “derecho a gozar de él”, en términos absolutos, resulta impracticable.<sup>775</sup> No obstante, si lo relacionamos con el resurgimiento de centros históricos, como veíamos anteriormente, sus habitantes pueden verse favorecidos por ejemplo, por la peatonalización de determinadas zonas en relación al ruido por tráfico rodado, porque al restringirse o prohibirse totalmente el tráfico de vehículos, desaparece una de las fuentes de ruido más virulentas y comunes en las ciudades.<sup>776</sup>

Surge con relativa sencillez la idea de extraer el carácter antropocéntrico de la materia si nos ceñimos al contexto urbano, puesto que éste ha sido siempre el que ha facilitado el desarrollo de la personalidad en los hombres.<sup>777</sup> Ahora bien, no sólo este aspecto es relevante; forzosamente hay que añadir y estudiar conjuntamente otros factores, como la contaminación lumínica, odorífera, la propia armonía estética o factor paisajístico particular de cada ciudad, o la contaminación electromagnética.<sup>778</sup>

---

<sup>775</sup> El “derecho al silencio” en sentido estricto carecería de valor normativo, pues en realidad se trata de la utilización de un lenguaje meramente alegórico, capaz de representar de manera más sintética el derecho a una vida pacífica, en entornos de calidad, al descanso, etc., y cuyo principio articulador sería el de solidaridad. *Vid.* MOLINA NAVARRETE, C. En “Fundamentos constitucionales de la tutela frente al ruido indeseado: el derecho fundamental a vivir en ambientes libres de violencia acústica”, op. cit., pág. 30. Por su parte, BIJSTERVELD, K., considera que el derecho al silencio es extremadamente difícil de proteger, pues a diferencia de la creación de espacios libres de humo de tabaco, por ejemplo, el reconocimiento del derecho a la quietud requeriría un cambio fundamental en la estructura social. En “Technology, Culture, and Public Problems of Noise in the Twentieth Century”, op. cit., pág. 11.

<sup>776</sup> Es más, desde un punto de vista sociológico, las nuevas escuelas arquitectónicas se están planteando un retroceso al pasado, hacia cómo eran las ciudades antes de la gran transformación urbanística de los años 60 del s. XX, con áreas urbanas diseñadas para el absoluto aislamiento y la incorporación definitiva del automóvil a la vida ciudadana como protagonista privilegiado. A propósito, el trabajo de Gehl ha inspirado proyectos de remodelación urbana en diferentes ciudades, como Copenhague, Nueva York, Melbourne o Christchurch (Nueva Zelanda), en la versión totalmente opuesta al modelo del movimiento Moderno capitaneado por Le Corbusier, que propugnaba un modelo urbanístico de bloques de edificios altos, desconectados entre sí por autopistas. Su trabajo se centra medir los parámetros conductuales de las personas en las ciudades, a continuación modificar el espacio del que disponen, aumentándolo; esto ha resultado determinante en la transformación de la vida pública, cumpliéndose así la misma predicción que ya se conoce respecto a los vehículos de motor: cuantas más carreteras se construyen, más tráfico existe. Una de sus más recientes publicaciones en GEHL, J. / SVARRE, B. *How to study public life*. Ed. Island Press. Washington, 2013.

<sup>777</sup> También contempla la acción de contaminación acústica con un criterio antropocéntrico, QUINTERO OLIVARES, G. Máxime si tenemos en cuenta que el legislador afirma la conexión entre la protección constitucional frente a esta forma de contaminación y los derechos fundamentales reconocidos, como el derecho a la intimidad personal y familiar. En “La especialidad del Derecho penal ambiental en relación con la contaminación acústica y la contaminación del agua”, op. cit., pág. 17.

<sup>778</sup> *Vid.* BLANQUER CRIADO, D. “Contaminación acústica y calidad de vida. Un entorno de calidad para el turismo urbano”, op. cit., págs. 30 y ss.; ESTEVE PARDO, J. Este nuevo tipo de contaminación electromagnética cada vez está más presente en la geografía urbana. En “Derecho del medio ambiente”,

Tampoco adolece de simplicidad conjugar todas las variables en las que se desglosan los dos derechos enunciados aquí, en orden a la efectiva protección de ambos conjuntos de derechos, que pertenecen por igual a unos y a otros, en un marco urbano cada vez más dimensionado en cuanto a estructuras, índices de población y por supuesto, junto a otros fenómenos ambientales de incidencia muy acusada en la salud, como la contaminación atmosférica.<sup>779</sup>

Pero es precisamente este ámbito metropolitano el que produce con más acrimonia la invasión acústica en los sujetos, no tan sólo en su ámbito domiciliario o laboral, sino también en los canales de ocio que han sido concebidos contando con una situación sonora distinta, pero a los que a su vez se anexionan otros focos sonoros.<sup>780</sup> Como escribe de manera tan descriptiva BIJSTERVELD, *a diferencia de nuestros ojos, [...] no podemos cerrar nuestros oídos.*<sup>781</sup>

---

op. cit., págs. 237-239. Respecto a la conjunción existente entre algunos de estos elementos, me remito a lo expresado en la Primera Parte, epígrafe 3.4.

<sup>779</sup> Como señala BEATO ESPEJO, M., en relación a la indeterminación del órgano competente y los instrumentos de corrección de la agresión acústica, cuando se producen fenómenos más o menos cotidianos de la vida ciudadana (aglomeraciones infantiles, juveniles, establecimientos que deben contar con la preceptiva autorización, tráfico rodado, maquinaria de obras públicas, etc.). “El Medio Ambiente como bien jurídico colectivo. El ruido callejero como actividad molesta. Derecho a un ambiente silencioso y pacificador”. En *Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente*. Año 30, núm. 148, mayo 1996, págs. 155-200.

<sup>780</sup> Por ejemplo, el generalizado “sonido ambiente musical” o “mercantilización del ruido” en establecimientos de toda índole, en toda su superficie interior e incluso emitiendo sonido al exterior, como zonas de aparcamiento, ascensores, etc.

<sup>781</sup> Vid. BIJSTERVELD, K. En “Technology, Culture, and Public Problems of Noise in the Twentieth Century”, op. cit., pág. 2.

### 5.1.1.- Derecho al silencio y Derecho al ruido. Incidencia del turismo y otros factores de carácter cultural, económico y regulatorio

Si tomamos como referencia conectiva entre estos dos derechos un ejemplo gráfico de nuestro país, esto es, el aumento exponencial que ha sufrido en la última década la proliferación de espacios de establecimientos hosteleros en la vía pública, así como su repercusión en los niveles de ruido y en el uso del espacio público por parte de los ciudadanos, tanto la ejecución del derecho al ruido como la vulneración del derecho al silencio se reflejan como hechos notorios, cada vez con mayor impronta en la vida ciudadana.<sup>782</sup> Asimismo, otras representaciones ambivalentes de estos pretendidos derechos absolutos son las diferentes celebraciones nacionales, regionales o locales, religiosas, manifestaciones (espontáneas o permitidas), celebraciones de índole deportivo, y, por supuesto, la idiosincrasia propia de un país como el nuestro, acostumbrado a vivir la calle plenamente, debido entre otras circunstancias, al factor climatológico. A su vez, representarían, a escala diferenciada, el núcleo esencial de lo que aquí denominamos, respectivamente, el derecho en la ciudad y el derecho a la ciudad.

Realizando un desglose del derecho al silencio, éste se podría reconducir básicamente a dos planteamientos generales que recogen múltiples facetas y derechos. En primer lugar, no soportar lo que MARTÍN-RETORTILLO caracterizó en su día en la literatura científica, de *ruidos evitables*.<sup>783</sup> Estos ruidos eludibles, muy a menudo vinculados a la actividad de las administraciones públicas (ya sea en su función de policía de tranquilidad, o por designación original de competencias), también incumben a la actividad singular e individualizada de cada ciudadano. En segundo lugar, el derecho al descanso es difuso de configurar. En nuestra opinión, se basa y asocia

---

<sup>782</sup> Esta clasificación bicéfala de los derechos que engloba la materia (silencio-ruido), la tomo prestada de BLANQUER CRIADO, D., por su utilidad sistemática a la hora de explicar algo no siempre bien entendido: la interconexión entre ambos en la vida de un mismo sujeto. En “Contaminación acústica y calidad de vida. Un entorno de calidad para el turismo urbano”, op. cit., págs. 126 y 135.

<sup>783</sup> Vid. MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, L. El autor observa una estrecha conexión entre la utilización de la técnica de la policía de tranquilidad por parte de la administración (ratificada por el TS en 1976), y el derecho a la intimidad personal y familiar expresado por el art. 18.1 CE. “Los ruidos evitables” (Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Zaragoza, de 10 de octubre de 1988). En *Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica*, núm. 238. Ed. INAP. Madrid, 1988, págs. 1275-1282. También “El ruido: una pesadilla del Justicia”. En *Revista Interdisciplinar de Gestión Ambiental*. Año 5, núm. 58. Ed. La Ley-Actualidad, 2003, págs. 161-172.

erróneamente, a determinados periodos en los que la mera clasificación entre matutino, vespertino y nocturno, no alcanza sin más a la realidad que hoy en día se vive en gran número de ciudades respecto al ruido y sus heterogéneas fuentes.<sup>784</sup>

Ahora bien, el verdadero obstáculo es determinar dónde franquear el límite entre lo evitable y lo inevitable<sup>785</sup>, pues dichas categorías conceptuales no son dissociables de sociedades avanzadas de las que no se espera, a corto plazo, que modifiquen de manera innata sus patrones de conducta, asociados tanto a la actividad cotidiana como al ámbito estructural y urbanístico propio de cada ciudad.<sup>786</sup> Así, la andradogía (educación orientada a los adultos) practicada ya por distintas escuelas, como la de Platón, Sócrates o Confucio, junto a la pedagogía, sin duda cooperan en igualdad de condiciones con la norma al desarrollo de la protección contra el ruido, al menos en cuanto a utilidad se refiere. El crecimiento y diversificación de nuevos sonidos, así como el proceso de apilamiento de diversas formas de legislación sobre ruido una sobre otra, con el tiempo han ido creado una *paradoja del control*.<sup>787</sup>

Desde el punto de vista del extremo antagónico, el derecho al ruido se materializa, ya en propuestas de ocio diseñadas al amparo de la técnica autorizatoria por parte de las múltiples administraciones públicas competentes, o en fiestas históricamente institucionalizadas<sup>788</sup>, así como en el derecho a la libre circulación de personas, bienes y servicios, la libertad de empresa, el derecho de reunión, de

---

<sup>784</sup> Sobre la naturaleza y alcance de este derecho, *vid.* LAFUENTE BENACHES, M. *Fiestas locales y derecho al descanso*. Colección Biblioteca de Derecho Municipal. Santiago Muñoz Machado (dir.) Ed. Iustel. Madrid, 2010, págs. 61 y ss.

<sup>785</sup> Podríamos considerar ruidos *inevitables* los sonidos generados por la diversificación de servicios públicos en las ciudades, como recogida de residuos, abastecimiento de superficies, servicios de limpieza viaria, etc., o pautas de comportamiento del público en general, como el tráfico viario, pero dicha inevitabilidad funcional no debería ser incompatible con una reducción o aminoramiento de sus efectos.

<sup>786</sup> Por ejemplo, obras públicas, servicios de transporte público, uso privado del dominio público, así como actos extensamente generalizados en las sociedades actuales: mantener una simple conversación telefónica en espacios públicos, reunirse en grupo en espacios especialmente vulnerables en horarios nocturnos, realizar maniobras bruscas de aceleración y conducción de vehículos o presionar con virulencia el claxon, etc.

<sup>787</sup> Así, BIJSTERVELD, K. El carácter espacial de muchas de las intervenciones ha contribuido de manera similar a la persistencia adquirida por los problemas públicos de ruido. Es notable que el sonido cruce fronteras entre vecinos, ciudades y naciones tan fácilmente, a menudo manejado espacialmente, por ejemplo mediante la imposición de zonas, canalización del tráfico, y elaboración de mapas de ruido. Hemos estado tratando de crear islas de silencio, y todavía queda un mar de sonido sobre el que discutir ferozmente. En “Technology, Culture, and Public Problems of Noise in the Twentieth Century”, *op. cit.*, págs. 3 y 4.

<sup>788</sup> Así, el art. 46 CE expresa que los poderes públicos tienen que garantizar tanto la conservación como la promoción del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y titularidad. En el mismo sentido, *vid.* LAFUENTE BENACHES, M. En “Fiestas locales y derecho al descanso”, *op. cit.*, pág. 46. Tengamos en cuenta a nivel nacional, la gran variedad de festejos que ostentan el título de bien de interés turístico.

manifestación, el libre desarrollo de la personalidad, el propio derecho a una adecuada utilización del ocio (art. 43.3 CE), e incluso en ciertos aspectos relativos a la seguridad ciudadana, como ya analizamos en la Primera Parte.<sup>789</sup>

Desde otro plano, el sector turístico representa una manifestación más de esta ambivalencia de derechos en las ciudades, en su vertiente de protección de la cultura tradicional asociada a fenómenos festivos, o bien a través de la adopción de nuevas vías turísticas que suponen una mejora económica para la ciudad. Las entidades locales, lejos de poseer competencias específicas en esta materia tan vinculada a su territorio, se encuentran con un déficit de títulos habilitantes con los que aplicar determinados instrumentos. Aparte de las actividades de fomento y promoción turística, las CCAA apenas han dotado de facultades a los Ayuntamientos.<sup>790</sup> Entre las leyes autonómicas que han regulado la declaración de municipios turísticos es el criterio de población turística o visitantes el que predomina, a pesar del establecimiento de otros requisitos cualitativos, como el nivel de prestación de servicios públicos o la ponderación entre las medidas más eficaces de protección y recuperación del entorno natural, el paisaje y el medio ambiente en general.<sup>791</sup>

---

<sup>789</sup> En este sentido, *vid.* LAFUENTE BENACHES, M. Considera que, dentro de la clasificación de los Derechos fundamentales, el derecho al ocio se incluiría en los de tercera generación; por lo tanto, cedería ante otros de primera o segunda generación, ya que existe una prioridad establecida a la hora de tutelarlos y otorgarles una protección efectiva. En “Fiestas locales y derecho al descanso”, *op. cit.*, pág. 78. Por su parte, MOLINA NAVARRETE, C., opina que estos derechos de tercera generación se enfrentan al reto de incrementar el deber de lo público, que los poderes públicos tengan que actuar en un doble sentido (deber de actividad por una parte, y cierta cota de deber de resultado), habida cuenta del vertiginoso desarrollo de las nuevas tecnologías. Todo ello exige un replanteamiento de las relaciones entre poderes públicos, sociedad y personas. En “Fundamentos constitucionales de la tutela frente al ruido indeseado: el derecho fundamental a vivir en ambientes libres de violencia acústica”, *op. cit.*, págs. 33 y 34.

<sup>790</sup> *Vid.* VILLANUEVA CUEVAS, A. <<...las Comunidades Autónomas, a través de su legislación específica en esta materia, apenas han atribuido facultades a aquéllas, más cuando esta materia es una de las enumeradas en el art. 25 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, y por tanto, a través de la cual se debe reflejar la autonomía local constitucionalmente garantizada [...] son escasas las normas autonómicas que atribuyen a dichas Entidades facultades de autorización (por ejemplo, Baleares), y todavía menos las que aluden a facultades de control, inspección o sanción>>. “Turismo y medio ambiente”. *Tratado de Derecho Ambiental*. Luis Ortega Álvarez / Consuelo Alonso García (dirs.) Rosario de Vicente Martínez (coord.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2013, págs. 789-817, en especial 800 y ss. Por su parte, BOUAZZA ARIÑO, O., opina que esta dependencia de la ley municipal a la coordinación que ejerce la Comunidad Autónoma obedece a la necesaria coherencia de los instrumentos de planificación, para dotar de uniformidad a la planificación sectorial del turismo. En *Ordenación del territorio y turismo (Un modelo de desarrollo sostenible desde la ordenación del territorio)* Ed. Atelier. Barcelona, 2006, pág. 227.

<sup>791</sup> Entre las más recientes destacan Cataluña, Canarias, Galicia, Murcia, Cantabria, Andalucía y Valencia. Con más detalle, *vid.* MOROTE SARRIÓN, J. V. “Art. 30”. En *Comentarios a la Ley Básica de Régimen Local*, Tomo I (3ª ed.) Manuel J. Domingo Zaballos (coord.) Ed. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2013, págs. 556-589, en especial 564 y ss.

La proyección del ruido en el turismo es un indicador perfecto para la dotación y formulación de criterios específicos de sostenibilidad frente al fomento y desarrollo.<sup>792</sup> Además, el desplazamiento de los criterios habituales del entorno (paisajístico, ruidoso, visual, lumínico) al que están habituados los residentes, en muchos casos se enfrenta abiertamente con los criterios que manejan, esperan y desean los visitantes turísticos cuando acuden a determinadas celebraciones estandarizadas.<sup>793</sup>

Asimismo, encontramos otra confusión competencial en las ciudades que cuentan con zonas costeras, pues en este caso no está nada clara la asunción de competencias por parte de las entidades locales, por ser de carácter potestativo, no obligatorio (cuyas ordenanzas no serían operativas en determinados supuestos de emisión de ruido, por ejemplo en las playas de la localidad en cuestión, o en la zona de dominio marítimo-terrestre). Las modificaciones efectuadas a la Ley de Costas, así como la realizada sobre la LRBRL no entrañan ninguna variación respecto a la etapa anterior.<sup>794</sup>

---

<sup>792</sup> Así, BLANQUER CRIADO, D., entiende que el protagonismo de la relación entre el factor turístico de una ciudad y el ruido, pertenece a las medidas de prevención y control. Uno de los ejemplos a los que alude es la Ordenanza tipo de ruido y vibraciones para los Ayuntamientos situados dentro del ámbito territorial de la Generalitat de Cataluña, de 10 de noviembre de 1995. Establece, respecto a las manifestaciones populares en la vía pública o en espacios abiertos de carácter comunal o vecinal derivadas de la tradición, y las que tengan un carácter parecido, que deben disponer de autorización municipal expresa. El incumplimiento puede dar lugar a la paralización inmediata del acto por personal del Ayuntamiento, sin perjuicio de la sanción correspondiente. *Derecho del Turismo*. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 1999, págs. 168 y ss. Sobre el turismo y su interrelación con otros sectores, *vid.* ALONSO MILLÁN, J. / CASSINELO LORENTE, J. Se refieren al ruido como uno de los contaminadores más directamente relacionados con el ocio y el turismo. “Turismo y sostenibilidad. Hacia un turismo más sostenible”. En *Turismo: Una visión global*. A. W. Aranda Hipólito / L. M. Delgado Estirado / J. M<sup>a</sup> de Juan Alonso (coords.) Ed. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2010, págs. 1247-1357, en especial 1278.

<sup>793</sup> *Vid.* LAFUENTE BENACHES, M. Cita algunos ejemplos acerca de los decibelios alcanzados en festejos de España. Así, en la Semana Grande de Bilbao el máximo permitido son 95 dB, las Fallas de Valencia soportan una media de 110dB con picos de 120. No obstante, en la mayoría de casos, no se han realizado mediciones. En “Fiestas locales y derecho al descanso”, *op. cit.*, pág. 69, nota 42.

<sup>794</sup> La Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, dispone que las competencias municipales, en los términos previstos por la legislación que dicten las Comunidades Autónomas, podrán abarcar los siguientes extremos: art. 115 d) Mantener las playas y lugares públicos de baño en las debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad, así como vigilar la observancia de las normas e instrucciones dictadas por la Administración del Estado sobre salvamento y seguridad de las vidas humanas. A dicho artículo no le afecta la modificación a la Ley de Costas por Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral. Sin embargo, el Reglamento General de Costas [aprobado por el RD 876/2014, de 10 de octubre] alude al ruido y vibraciones exclusivamente en relación a los medios publicitarios: <<Los medios publicitarios utilizados no podrán implicar una reducción adicional del campo visual, producir ruido ni vibraciones ni romper la armonía del paisaje>> (art. 81.4, párrafo final). Por su parte, el art. 25.2 de la LRBRL no incluye dentro de las competencias municipales ninguna materia específica sobre vigilancia y limpieza de playas, en todo caso ésta sería reconducible a la materia genérica de medio ambiente.

No obstante, gran número de Ayuntamientos han promulgado ordenanzas específicas sobre playas y calas, aunque ello no supone que las emisiones de ruido aparezcan como materia con sustantividad propia, pues la figura del ruido aparece vinculada o bien al ámbito de la publicidad en las playas o bien al sector servicios.<sup>795</sup>

Aparece una perspectiva dispar si analizamos estas dos figuras [ruido / silencio] situándonos en el enclave del emisor de ruidos (sujeto activo), o del que los soporta (sujeto pasivo), ya que un mismo individuo se va a encontrar, tanto en su recorrido vital como en periodos temporales muy concretos, en posiciones contrapuestas ante un suceso sonoro de similares características. Su derecho al ocio, en el que las administraciones públicas juegan un papel vehicular en el logro de su efectiva materialización, también se ha consagrado como un derecho humano en varias declaraciones internacionales.<sup>796</sup> La historiografía y la antropología del sonido son contundentes al afirmar que tanto el ruido como el silencio describen narraciones en estrecha conexión con jerarquías culturales profundamente arraigadas.

El derecho a hacer ruido, así como el derecho a decidir qué sonidos se permitían a determinadas clases sociales (mujeres, niños, sirvientes) que se suponía debían guardar silencio, se encontraban bajo sospecha del orden social establecido, intencionalmente inquietante si emitían ruidos. Los sonidos fuertes y rítmicos, positivamente evaluados, mostraban las connotaciones de fuerza, importancia, y posesión del control, mientras que el ruido como sonido no deseado a menudo se ha asociado con los trastornos sociales. No obstante, entre los siglos XVI y XIX, la élite social se mostró cada vez más obsesionada con ejercer el dominio de sus propios sonidos.<sup>797</sup>

---

<sup>795</sup> El art. 15 del Reglamento Municipal de Costas y Playas del término Municipal de Las Palmas de Gran Canaria prohíbe instalar cualquier sistema de sonido o música en zona ocupada por terrazas o limítrofes, salvo autorización expresa [BOP de las Palmas núm. 131, de 25 de octubre de 2004]. Otro ejemplo de regulación específica es la Ordenanza municipal de playas y calas del término municipal de Alicante [BOP de Alicante núm. 209, de 30 de octubre de 2008].

<sup>796</sup> Vid. LAFUENTE BENACHES, M. Entre otras, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, o la Carta de Atenas (1931), manifiesto urbanístico que reconoce la función recreativa como una de las cuatro funciones básicas del urbanismo moderno. En “Fiestas locales y derecho al descanso”, op. cit., págs. 76 y 77.

<sup>797</sup> En este sentido, realizando una revisión de los diferentes vínculos culturales y sociológicos al respecto vid. BIJSTERVELD, K. En “Technology, Culture, and Public Problems of Noise in the Twentieth Century”, op. cit., págs. 31-41.



Necesariamente, hay que tomar en cuenta la confluencia de toda esta combinación de intereses públicos y privados, en la misma medida que los factores sociológicos y culturales, puesto que a la regulación de esta materia le afecta especialmente un factor preciso, esto es, la libre aceptación de cada estándar de sonoridad por parte de determinados individuos y la ausencia, al mismo tiempo, de la obligación de aceptación por parte de otros.<sup>798</sup>

### **5.1.2.- El ruido como fundamento de la reordenación urbana en el modelo de ecópolis**

Antes de esbozar una visión integradora del factor del ruido en los procesos de remodelación urbana, es necesario recordar uno de los ejes principales de los que parte el actual modelo de eco-ciudad, que no es otro que el propugnado, en cierto sentido, por la Escuela Sociológica de Chicago en la Norteamérica de finales del s. XIX. Consideran a la gran ciudad un organismo vivo, dinámico, diferenciado en cada una de sus fracciones.<sup>799</sup> Esta simetría se observa, sobre todo, entre la primera aportación nacida en el seno de esta escuela, la llamada teoría *ecológica*, si bien cabe realizar un par de precisiones. En primer lugar, el enfoque de esta teoría se centra en el concepto de *desorganización social* contemplada como foco de criminalidad, al carecer [supuestamente] de vínculos organizativos; por ello, fue objeto de duras críticas, a pesar del empirismo del que hacía gala su construcción teórica.<sup>800</sup> En segundo lugar, la aplicación del estudio sólo en determinadas áreas, y en un contexto urbano explosivo,

---

<sup>798</sup> Vid. BIJSTERVELD, K. Una de sus conclusiones es que tanto el surgimiento de un clima político en particular, los nuevos conocimientos de expertos sobre la subjetividad de la percepción del sonido, como el aclamado derecho científico y político a hacer ruido en la casa de uno, contribuyeron a la evasión del problema público del ruido vecinal. En “Technology, Culture, and Public Problems of Noise in the Twentieth Century”, op. cit., págs. 178-191.

<sup>799</sup> Sobre la Escuela de Chicago y las teorías ambientales desarrolladas en su ámbito, *vid.*, por todos, GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. En “Criminología. Una introducción a sus fundamentos teóricos”, op. cit., págs. 469-477.

<sup>800</sup> Así, GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A., citando a White y Sampson, apunta la errónea premisa de la que parten. No es que determinadas áreas carezcan de organización, sino que las finalidades de dicha organización son otras; o no se insertan en el modelo de ciudad, o bien no se organizan con objeto de auto-protegerse del delito. En “Criminología. Una introducción a sus fundamentos teóricos”, op. cit., pág. 472.

propio de esa época, le resta aplicabilidad universal. A pesar de todo, este enfoque ecológico del factor urbano impregnó rápidamente a la Criminología tradicional, en su búsqueda de explicaciones acerca del impacto que el desarrollo de las ciudades generaba en determinados patrones de delincuencia.

Asimismo, retomando el hilo de lo expuesto en el apartado dedicado a la Criminología del Medio Ambiente –*Green Criminology*–, aún recordando que el ruido, explícita y unitariamente, no es objeto de estudio de esta disciplina<sup>801</sup>, es posible reconducir el discurso acerca de los derechos antitéticos que se aúnan en el denominado derecho a la ciudad, con el fin de conectarlo a las perspectivas del diseño de eco-ciudades, como objeto de estudio del apartado ambiental en la ciencia criminológica.<sup>802</sup>

De acuerdo con LYNCH y sus reflexiones acerca de las fronteras de la *green criminology*, nos mostramos partidarios de realizar una conjunción entre los aspectos indicados por ROSELAND, como parte del ideario de las teorías sobre eco-ciudades, y la implicación de los daños y molestias causadas por el ruido, porque al fin y al cabo, simbolizan una visión alternativa de la vida urbana.<sup>803</sup> Si analizamos algunos de los

---

<sup>801</sup> Otro indicio más del alejamiento teórico y conceptual de la submateria “ruido” en el esquema patriarcal del Derecho medioambiental.

<sup>802</sup> La idea de eco-ciudad aparece en la década de los 70, gracias al trabajo de un grupo universitario en Berkeley (California), que cristalizaría en 1990 con la celebración de la *First International Eco-city Conference*. Vid. ROSELAND, M. “Dimensions of the eco-city”. En *Cities: The International Journal of Urban Policy and Planning*, Vol. 14, Issue 4, August 1997, págs. 197-202. LYNCH, M., se refiere a Richard Register como el creador del enfoque de ecociudad para describir y establecer una visión alternativa de la vida urbana. En “Reflections on Green Criminology and its Boundaries. Comparing Environmental and Criminal Victimization and Considering Crime from an Eco-city Perspective”, op. cit. pág. 49.

<sup>803</sup> Vid. LYNCH, M. Realiza un interesante estudio comparativo entre los daños ambientales y los delitos comunes –*street crimes*– en EE.UU., reflejando una gran diferencia entre sus respectivos niveles de victimización, excluyendo por otra parte, las comparativas económicas por el alto grado de dificultad que existe en la cuantificación de los daños ambientales. Todo ello tras la necesaria división estructural entre los daños ambientales con consecuencias económicas y aquellos con consecuencias violentas, al igual que ocurre en los delitos comunes. Los apartados que se abordan son: victimización a causa de la contaminación del aire, del agua, exposición a puntos de residuos peligrosos y victimización de proximidad, incidentes de victimización ambiental y penal, así como la descripción de una serie de elementos de diseños de eco-ciudad, que concluye con la formulación de una estrategia de reducción de la delincuencia. En “Reflections on Green Criminology and its Boundaries. Comparing Environmental and Criminal Victimization and Considering Crime from an Eco-city Perspective”, op. cit. págs. 45-49. Respecto a las dimensiones conceptuales de la eco-ciudad, vid. ROSELAND, M. Entre ellas, la utilización de tecnología apropiada, desarrollo económico de la comunidad, ecología social, biorregionalismo y desarrollo sostenible. En “Dimensions of the eco-city”, op. cit., págs. 198-200.

principios enunciados en los que se basa este patrón de eco-ciudad, la interacción que hemos apuntado con anterioridad, es más que evidente.<sup>804</sup>

Por ejemplo, en cuanto a las prioridades de uso del suelo, transportes, edificación de viviendas, zonas de ocio y, sobre todo, un aumento de conciencia social acerca de los numerosos problemas que comporta el uso indiscriminado de los recursos naturales y los malos usos en la convivencia ciudadana. Este nuevo tipo de lenguaje lo podemos encontrar plasmado en algún texto constitucional.<sup>805</sup>

El modelo de eco-ciudad se asocia a la teoría de la desorganización social, que sugiere que el delito tiene más probabilidades de llevarse a cabo en sociedades desorganizadas, esencialmente porque carecen del sentido de comunidad, control social informal de acceso efectivo a los recursos, y de mecanismos eficaces para la movilización de capital humano.<sup>806</sup>

---

<sup>804</sup> Los 10 principios para la creación de ciudades ecológicas enumerados por ROSELAND, M., serían: 1) Revisar las prioridades de uso del suelo para crear comunidades de uso compartido compactas, verdes, seguras, agradables y vitales, cerca de los nudos de tránsito y otras facilidades de transporte; 2) Revisar las prioridades del transporte, para favorecer el uso de otros medios como caminar, las bicicletas, enfatizando el acceso a la proximidad; 3) Rehabilitar los entornos urbanos deteriorados, especialmente arroyos, líneas costeras, cordilleras y humedales; 4) Crear viviendas dignas, asequibles, seguras, adecuadas y racial y económicamente mezcladas; 5) Fomentar la justicia social y crear mayores oportunidades para mujeres, personas de color y discapacitados; 6) Apoyar la agricultura local, los proyectos de áreas verdes urbanas y la jardinería comunitaria; 7) Promover el reciclaje, la tecnología innovadora apropiada y la conservación de los recursos, a la vez que una reducción de la contaminación y de los residuos peligrosos; 8) Trabajar con las empresas para apoyar la actividad económica ecológicamente racional, desalentando al mismo tiempo la contaminación, los residuos y el uso y producción de materiales peligrosos; 9) Fomentar la sencillez voluntaria y disuadir del consumo excesivo de bienes materiales; 10) Aumentar la conciencia sobre el medio ambiente local y regional a través de proyectos educativos que incrementen la conciencia pública sobre los problemas de la sostenibilidad ecológica. En "Dimensions of the eco-city", op. cit., págs. 197 y 198.

<sup>805</sup> Por ejemplo, el art. 415 de la Constitución de Ecuador: <<El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes. Los gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán programas de uso racional del agua, y de reducción reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos. Se incentivará y facilitará el transporte terrestre no motorizado, en especial mediante el establecimiento de ciclo vías>>.

<sup>806</sup> En este sentido, como explicábamos con anterioridad, se diferencia poco de lo reflejado muchos años atrás por la Escuela de Chicago y, en cierta medida, es reflejo de un mismo hecho; la proliferación de grandes núcleos de población, que inicialmente se encarnaban en el concepto de gran ciudad nacida al albur de la civilización industrial, y que ahora se corresponden con zonas anexas a las ciudades, pero que igualmente cuentan con índices elevados de población. Vid. GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. <<La teoría ecológica explica este efecto criminógeno de la gran ciudad acudiendo a los conceptos de desorganización y contagio inherentes a los modernos núcleos urbanos, y, sobre todo, invocando el debilitamiento del control social que en éstos tiene lugar>>. En "Criminología. Una introducción a sus fundamentos teóricos", op. cit., pág. 471. Vid., la obra clásica de SHAW, C. R. & MCKAY, H. D. Su extenso estudio marca que estas situaciones característicamente humanas, que parecen estar directamente relacionadas con la conducta delictiva son, a su vez, producto de los procesos económicos y sociales más grandes que caracterizan la historia y el crecimiento de la ciudad y de las comunidades locales que la

Por tanto, el acento se marca en la reordenación de los espacios humanos dentro de las ciudades para mejorar la calidad de vida de los mismos, que incluye no sólo espacios de ingeniería (por ejemplo, viviendas ecológicamente sensibles), sino emplazamientos, diseño, o la integración del transporte público en los entornos urbanos. El aspecto local cobra una importancia vital puesto que todas las intervenciones tienden a beneficiar a la población circunscrita a ese espacio, pero a la vez promueve una forma de desarrollo urbano en el que la ciudad no se contempla como unidad aislada de análisis, sino que trata de interconectar espacios habitables reorganizados entre sí (unidades vecinales), con el menor entorpecimiento posible de las condiciones naturales ambientales. Se puede caer muy fácilmente en la categorización de esta teoría como antropocéntrica, ya que en muchos aspectos, se dirige a la producción de resultados ambientales positivos para las generaciones humanas, actuales y futuras, pero lo cierto es que esta orientación impone a los humanos una realidad distinta; su propia consideración de especie integrada en un macrosistema, y lo que es más importante, correlato a la vez que consecuencia de la misma, beneficiar a las restantes especies y subsistemas.<sup>807</sup>

LYNCH considera que el arquetipo de ecópolis debe cumplir una serie de objetivos que superen la barrera de los desarrollados en el ámbito de la política ambiental, en concreto sugiere que el modelo de eco-ciudad es adaptable como estrategia en la reducción de la delincuencia. Aparte del apunte sobre la teoría de la desorganización social, los rediseños de eco-ciudades también pueden promover la descentralización del control social formal, mediante la promoción de cohesión comunitaria y localización espacial, en consonancia con las estrategias de lucha contra la delincuencia, como las comunidades policiales. Asimismo, puede ayudar a la descentralización de las funciones del sistema judicial, mediante la institución de tribunales vecinales, caracterizando el enfoque de la justicia restaurativa (arbitraje, mediación). En suma, la perspectiva de eco-ciudad puede ser empleada en la Criminología verde no sólo para producir entornos urbanos saludables que causen

---

componen. En *Juvenile Delinquency and Urban Areas. A Study of Rates of Delinquency in Relation to Differential Characteristics of Local Communities in American Cities* (Revised Edition) Ed. University of Chicago Press. Chicago & London. 1969. Vid. ANDRESEN, M. A. *Environmental Criminology. Evolution, theory, and practice*. Ed. Routledge. London & New York, 2014, págs. 11-26.

<sup>807</sup> En el mismo sentido, pero enfatizando el discurso en cuestiones de producción localizada, empleo y justicia social, vid. LYNCH, M. En "Reflections on Green Criminology and its Boundaries. Comparing Environmental and Criminal Victimization and Considering Crime from an Eco-city Perspective", op. cit., pág. 52.

menor daño ambiental (y, en consecuencia, reduzcan los efectos de reacción sobre las especies), sino también para situar el examen de los delitos ambientales en un plano de medio ambiente urbano.<sup>808</sup>

Por otra parte, al no existir un único modelo conceptual de ecociudad, pues existen distintos enfoques y escalas de valoración (unos prestan mayor atención a la gestión energética, otros al tráfico y movilidad, etc.), la posibilidad de adecuar características comunes u otras de corte específico a cada núcleo de población, potencia su capacidad de implantación.<sup>809</sup>

Insistimos una vez más en que la ordenación de cualquier tipo de ciudad en torno a determinados límites urbanos se origina por factores culturales, sociales, demográficos, y geográficos. Posteriormente se desarrolla a través de la aproximación que dichos patrones urbanos tengan fijados en su forma de relacionarse con las características naturales existentes, su conservación, mejora, protección, beneficio, destrucción, invasión, etc. Se perfila así la fisonomía propia de cada ciudad y todo ello determina, en última instancia, los usos ciudadanos de sus habitantes (tanto ambientales como de otro tipo).

---

<sup>808</sup> Vid. LYNCH, M. En “Reflections on Green Criminology and its Boundaries. Comparing Environmental and Criminal Victimization and Considering Crime from an Eco-city Perspective”, op. cit., págs. 53 y ss.

<sup>809</sup> China parece ser uno de los pocos países del mundo con varios proyectos simultáneos de construcción de ecociudades, dato destacable si tenemos en cuenta que es uno de los países que se enfrenta a mayores retos, por los graves problemas ambientales que padece, derivados en parte del proceso urbanizador que han sufrido sus ciudades desde la gran migración urbana sufrida a partir de 1978. El problema es que han importado el modelo urbanizador moderno occidental de forma muy rápida y, si bien ha propiciado la desaparición de los estilos de vida tradicionales, las grandes ciudades modernas del país son un éxito como motores del crecimiento económico. Vid. XIAOYING, S. *Una experiencia piloto de ecociudad en China: Dongtan. El desarrollo urbano sostenible en China*. Trabajo Fin de Máster inédito. Instituto Universitario de Ciencias Ambientales. Facultad de Derecho UCM. Madrid, 2012. De manera antagónica, sobre el penoso estado ambiental del país en relación a su tejido industrial, vid. SHUQIN, Y. Contaminación atmosférica, polución en el agua potable, ríos, vertederos de residuos. La consecuencia directa de la exportación masiva de productos industriales baratos es el consumo masivo de energía, y el aumento de la contaminación del medio ambiente. “The polluting behaviour of the multinational corporations in China”. En *Global Environmental Harm. Criminological Perspectives*. Rob White (ed.) Ed. Willan Publishing. Devon (UK), 2010, págs. 150-158.

## 5.2.- Las ciudades europeas y el déficit de uniformidad de los criterios ambientales aplicados al ámbito del ruido

El modelo de ciudad europea, con un tejido consolidado y compacto, es un referente a la hora de adoptar los criterios de aplicación de este prototipo porque las sucesivas transformaciones que han sufrido a lo largo de los siglos XX y XXI (migraciones de los centros históricos, nacimiento de áreas metropolitanas adyacentes a los perímetros de las ciudades), han generado pautas de sobreutilización de recursos energéticos, suelo, aumento del consumo de combustible fósiles, etc. A este nuevo y desconocido escenario ha dedicado la UE especial interés en su faceta de organismo supranacional<sup>810</sup>, teniendo en cuenta que la tarea es ardua y complicada, por cuanto conlleva valoraciones de índole estructural muy complejas que dificultan un mínimo de homogeneización.<sup>811</sup> En cualquier caso, el término *sostenibilidad* alcanza también a la ciudad, dotado de una indeterminación conceptual aún superior a la que acompaña al propio concepto de *desarrollo sostenible*.<sup>812</sup>

Contando pues con este factor relevante, existen datos proporcionados por una reciente encuesta realizada en 2013 en el ámbito de la UE, sobre la calidad de vida en las ciudades, así como un informe específico del fenómeno del ruido publicado en 2014, con los que se pueden configurar, al menos aproximadamente, una serie de elementos de carácter general.<sup>813</sup>

---

<sup>810</sup> Por ejemplo, con el *Marco de actuación para el desarrollo urbano sostenible en la Unión Europea*, que ya a finales de los años 90 proclama políticas de actuación en torno a cuatro objetivos de actuación interdependientes, como son: acrecentar la prosperidad económica y el empleo en las pequeñas y grandes ciudades; fomentar la igualdad, la integración social y la regeneración en las zonas urbanas; proteger y mejorar el medio ambiente urbano: hacia una sostenibilidad local y mundial; contribuir a un buen gobierno urbano y a la participación ciudadana. Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones. Bruselas, 28.10.98 COM (1998) 605.

<sup>811</sup> Programa integral de investigación sobre la sostenibilidad urbana en Europa, que comenzó su desarrollo en 2002 con la elaboración simultánea de siete planes piloto en diferentes ciudades europeas, entre ellas Barcelona. Vid. "Proyecto Ecocity. Manual para el diseño de ecociudades en Europa", Libro I. En *La ecociudad: un lugar mejor para vivir*. Philine Gaffron, Gé Huismans y Franz Skala (coords.) M<sup>a</sup> Jesús Uzquiano Barbas (tr.) Ed. Bakeaz. Bilbao, 2008.

<sup>812</sup> Vid. BRÚ, J. "Medio ambiente: poder y espectáculo. Gestión ambiental y vida cotidiana", op. cit., págs. 79-93.

<sup>813</sup> Vid. "Quality of life in cities. Perception survey in 79 European cities. Flash Eurobarometer 366". Ed. Publications Office of the European Union. Luxembourg, 2013; NUGENT, C. et. al. "Noise in Europe 2014, EEA Report/ N° 10/2014", op. cit.

Respecto a la calidad de vida, la estrecha relación que preside la percepción del ruido molesto en las ciudades y el tráfico rodado; por otra, el hecho de que aunque el nivel de ruido varía en importancia como problema, a menudo de acuerdo al tamaño de las ciudades, la satisfacción respecto a los niveles de ruido no se da necesariamente sólo en ciudades pequeñas; un tercer elemento destacable es que el ruido no aparece entre los tres principales problemas para los encuestados en ninguna de las ciudades, ocupando este apartado, en la mayor parte de las mismas: servicios sanitarios, desempleo, y educación. No obstante, materias como el transporte público, infraestructuras viarias, contaminación atmosférica y seguridad alcanzan un especial valor en varias ciudades, sobre todo en capitales europeas como Roma, Estocolmo, Oslo o Praga.<sup>814</sup> Por último, el documento refleja que todavía existen grandes disparidades entre ciudades e incluso países en la percepción que sus habitantes tienen de la calidad de vida en ciertas áreas.

En particular, cuatro son las ciudades españolas sobre las que la encuesta registra datos; Barcelona, Madrid, Málaga y Oviedo, compartiendo las dos primeras un porcentaje de inconformidad con sus niveles de ruido del 67%, sólo superado por Estambul y Bucarest, con índices del 68% y 72% respectivamente. En cambio, las seis ciudades británicas reflejadas obtienen una clasificación más alta que la media, incluyendo una ciudad global como Londres, que se sitúa entre las 25 más satisfechas con sus niveles de ruido. Dublín es la capital europea que aparece en el primer puesto del ranking.<sup>815</sup>

---

<sup>814</sup> Otro estudio muestra que París sería la ciudad más ruidosa, el segundo puesto en el ranking lo ocuparía Madrid, con más del 20% de la población expuesta a niveles de ruido que superan el valor límite de 55 dB nocturno. Vid. MARTÍNEZ LLORENTE, J. / PETERS, J. "Contaminación acústica y ruido". En *Cuadernos de ecologistas en acción*, núm. 21. Ed. Ecologistas en Acción. Madrid, febrero 2013, págs. 20 y 21.

<sup>815</sup> Vid. "Quality of life in cities. Perception survey in 79 European cities. Flash Eurobarometer 366". El muestreo se realiza sobre 41.000 ciudadanos mayores de 15 años, 79 ciudades europeas y 4 áreas circundantes de Atenas, Lisboa, Manchester y París, con índices de población que oscilan entre 50.000 y más de 5 millones de habitantes. El capítulo III de la encuesta se dedica a la opinión que los ciudadanos tienen del medio ambiente en sus ciudades, con la inclusión de diferentes apartados: calidad del aire, nivel de ruido, limpieza, espacios verdes, y lucha contra el cambio climático. Op. cit., págs. 12, 13, 107-111 y 140. Por ejemplo, Londres ha llevado a cabo políticas muy concentradas en la reducción del tráfico, que se dirigen de forma específica al control y reducción del ruido (al igual que ciudades como Estocolmo o Milán). Vid. "City of London". *Noise Strategy 2012-2016 Summary Version*. Disponible en: [www.cityoflondon.gov.uk/business/environmental-health/environmental-protection/Documents/Summary\\_Col\\_Noise\\_Strategy\\_2012-2016.pdf](http://www.cityoflondon.gov.uk/business/environmental-health/environmental-protection/Documents/Summary_Col_Noise_Strategy_2012-2016.pdf) (último acceso 12/07/2015).

Por su parte, el informe de la EEA de 2014 revela gráficamente cómo los niveles de ruido incluso considerados medios o moderados [en torno a 55 dB<sub>Lden</sub>]<sup>816</sup> desencadenan impactos arriesgados.<sup>817</sup> Según este estudio el ruido del tráfico y el ruido industrial son las dos fuentes predominantes en la actualidad.<sup>818</sup> Respecto a la salud de los seres humanos, afirma que 10.000 casos de muerte prematura cada año son provocados por exposición al ruido, aunque debido a la insuficiencia de los datos aportados por los distintos países, las cifras estimadas podrían ser considerablemente mayores. Además, ello comporta la dificultad de elaborar estrategias comunes y comparativas de evaluación, que causan incoherencias en la estimación entre países, al igual que entre zonas de un mismo país. Por ejemplo, España está presente por la evaluación de 21 ciudades (con la inexplicable excepción de Madrid, Barcelona y otras), sobre el porcentaje de personas expuestas al ruido provocado por el tráfico rodado [ $> 55$  dB<sub>Lden</sub>] en áreas urbanas que superan los 100.000 habitantes. Móstoles alcanza un porcentaje muy próximo al 100% y en el extremo contrario Leganés se sitúa cercano al 10%.<sup>819</sup>

Sin apartarnos de este contexto europeo, el marco de implantación de la Agenda 21 Local, cuyo plan o programa de actuación tiene su origen en la Agenda 21 aprobada en la Cumbre de Río de Janeiro de 1992, con el objeto de conseguir que todas las áreas

---

<sup>816</sup> Lden (day-evening-night level) es el indicador diseñado para evaluar molestias. Se considera nivel alto de ruido aquel que supera los valores de 50 dB<sub>Lnight</sub> (nocturnos) y 55 dB<sub>Lden</sub>. Uno de los objetivos a lograr en 2020 es la reducción de los niveles de ruido en Europa, aproximándose más a los valores recomendados por la OMS, como por ejemplo 40 dB<sub>Lnight</sub> al aire libre. Al respecto, *vid. Burden of disease from Environmental noise. Quantification of healthy life years lost in Europe*. World Health Organization. Ed. Publications WHO Regional Office for Europe. Copenhagen, 2011. Disponible en: [www.who.int/quantifying\\_ehimpacts/publications/e94888.pdf?ua=1](http://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/e94888.pdf?ua=1) (último acceso 12/07/2015).

<sup>817</sup> Actualmente, el 65% de los europeos viven expuestos a niveles altos de ruido en las áreas urbanas, según el Séptimo Programa de Acción Medioambiental de 2020, en vigor desde enero de 2014. *Vid. "Living well, within the limits of our planet". General Union Environment Action Programme to 2020*, op. cit., págs. 48 y 51.

<sup>818</sup> Una nueva norma comunitaria sustituye el antiguo método de examen por uno nuevo, reconocido internacionalmente y que refleja mejor el comportamiento de la conducción actual. Los valores límites se reducirán en dos fases de 2dBA para turismos, autobuses y camiones ligeros; para vehículos pesados la reducción será de 1dBA en la primera fase y de 2dB(A) en la segunda. Reglamento (UE) núm. 540/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, del nivel sonoro de los vehículos de motor y de la sustitución de los sistemas de silenciamiento. [Modifica la Directiva 2007/46/CE y deroga la Directiva 70/157/CEE].

<sup>819</sup> Tanto la evaluación completa como las perspectivas de futuro se ven obstaculizadas por el hecho de que las estimaciones de exposición al ruido comunicadas por los países no son totales, con un mínimo de 44% de la cantidad de datos esperados, dependiendo de la fuente, que se entregaron en la última ronda de informes. El cómputo integra 90.000 episodios de hipertensión, 43.000 ingresos hospitalarios, 20 millones de afectados por molestias y 8 millones por interrupción del sueño. También toma en consideración la incidencia del ruido como factor que afecta a la salud mental, aspecto sobre el que la OMS sugiere que intensifica el desarrollo de trastornos mentales latentes. *Vid. NUGENT, C. et. al. "Noise in Europe 2014, EEA Report/ N° 10/2014"*, op. cit.



de competencia municipal enlacen con el desarrollo económico y el respeto hacia el entorno natural, los Ayuntamientos están obligados a elaborar programas de diferente contenido, entre los que se incluyen actividades dirigidas a concienciar e informar a los vecinos de los respectivos municipios respecto de algunos de los apartados previstos en la Agenda. En concreto, sobre contaminación acústica, una vanguardista propuesta del Ayuntamiento de Almudévar (Huesca) trata de afrontar el problema del ruido situándose en un plano pre-legislativo, ya que la implantación de los denominados *semáforos sonoros* se adelanta a la redacción de una futura Ordenanza Reguladora en materia de contaminación acústica. Este sistema es destacable, además de por su notable imaginación y bajo coste (algunos países nórdicos lo han implantado con anterioridad), porque su interés se multiplica en varias facetas, al facilitar tanto la educación, como la interiorización y adaptación de los habitantes a nuevos criterios sonoros en determinados ambientes. Así, los datos que recoja el estudio sobre este modelo, sin duda servirán de base a la elaboración de la correspondiente normativa, cuyo desarrollo se prevé con posterioridad.<sup>820</sup>

Otras exploraciones que se pueden adaptar al concepto de eco-ciudad en el específico ámbito del ruido son las dedicadas al diseño e implantación de nuevas técnicas de construcción y de alumbrado, al menos en las infraestructuras públicas, que puedan ir dejando espacio también a su adaptación en viviendas y edificios privados.<sup>821</sup>

---

<sup>820</sup> Almudévar posee una superficie total de 200 kms<sup>2</sup> y un censo aproximado de 2.500 habitantes. La propuesta se basa en la instalación de indicadores de nivel de presión sonora (actividad que se complementa con otras, como jornadas educativas, difusión de documentación, elaboración de un mapa sonoro del municipio, etc.) en espacios donde se espera influir en el mayor número de habitantes, por ello los emplazamientos elegidos son Ayuntamiento, Biblioteca municipal, Centro de Salud, tres centros escolares de diferentes ciclos educativos, y Tanatorio. Valiéndose de semáforos sonoros instalados en las paredes, éstos emiten una luz verde, ámbar o roja dependiendo del nivel sonoro que se alcanza en cada momento. Vid. Documento “Memoria Proyecto Educación y Difusión Medioambiental 2013” [http://www.almudevar.es/pub/documentos/documentos\\_MEMORIA\\_17b20eb7.pdf](http://www.almudevar.es/pub/documentos/documentos_MEMORIA_17b20eb7.pdf) (último acceso 12/07/2015). Se trata de una de las medidas de implantación de políticas en el marco de la Agenda 21 Local. La utilización de semáforos convencionales cumple también otra función adicional en el ámbito de la acústica; actúan como avisadores acústicos, es decir, emiten sonidos para que los invidentes obtengan una señal informativa suficiente en materia de seguridad vial. El sistema está implantado en numerosas ciudades españolas como Madrid, Pamplona, Zaragoza, León, Santa Cruz de Tenerife, Gijón, Bilbao, Melilla, entre otras, con sistemas cada vez más desarrollados para evitar molestias por ruido al resto de población, ya que la señal acústica sólo se activa cuando un invidente se sitúa junto al semáforo, y previamente ha enviado su señal a través de telefonía móvil. No obstante, la estimación es que un 67,7% de los semáforos a nivel nacional carecen en la actualidad de dicho sistema.

<sup>821</sup> La inclusión de nuevas técnicas en la elaboración de materiales de construcción, aislamiento e iluminación a partir de sistemas orgánicos y su hibridación con materiales inorgánicos. Se utilizan residuos agrícolas y micelio de hongo para generar componentes arquitectónicos orgánicos, así como microorganismos bioluminiscentes para obtener dispositivos que emiten luz sin consumo eléctrico. GONZÁLEZ DÍEZ, I. / MAYORAL GONZÁLEZ, E. / VÁZQUEZ GONZÁLEZ, M.A. et. al. “Diseño de

Ciertos aspectos dentro del concepto de eco-ciudad deben traspasar una idea de tintes fronterizos: que sólo serán aplicables a poblaciones que requieran un número determinado de residentes más o menos extenso, pues la incidencia es si cabe mayor en los núcleos aislados habitados, ya que suelen ubicarse geográficamente en espacios de connotaciones naturales y ambientales más prolíficas (desde un punto de vista cuantitativo), y vitales (desde un punto de vista cualitativo).

En este contexto, existen ciertos pronunciamientos reveladores que surgen desde la jurisdicción contencioso-administrativa: en concreto, por parte del TS, acerca de la vulneración de derechos sufrida por los residentes de una urbanización perteneciente a una pequeña población en la provincia de Madrid, afectada por el sobrevuelo de aviones a baja altura durante operaciones de despegue y aterrizaje en el aeropuerto de Barajas.<sup>822</sup>

También es sobresaliente lo conseguido por un exiguo número de vecinos en relación a un Parque Eólico, en concreto la suspensión del funcionamiento de dos aerogeneradores ubicados a distancia igual o inferior a 500 metros de edificaciones

---

prototipos de materiales biosintéticos para su uso como materiales de construcción”. *Revista Seguridad y Medio Ambiente*. Año 33, núm. 132, 4º trimestre, 2013, págs. 50-66.

<sup>822</sup> STS Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 7ª), de 13 de octubre de 2008. Ponente: Excmo. Sr. Pablo Lucas Murillo de la Cueva. [RJ 2008/7142] Estima en parte el recurso contra la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Los actores, 346 vecinos de la urbanización “Ciudad Santo Domingo” en la población de Algete (Madrid), consideraban vulnerados sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad física y moral, y a la intimidad domiciliaria a causa del sobrevuelo de aviones a baja altura durante las maniobras de aterrizaje en una de las pistas del aeropuerto de Barajas, pero el TSJ lo desestimó. El Alto Tribunal, en su fallo, estima al menos un ataque al derecho a la intimidad domiciliaria (art.18.2 CE), y condena a la administración por la situación de vía de hecho producida por el Ministerio de Fomento, Dirección General de Aviación Civil y Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea. En relación al derecho a la integridad física y moral (art. 15 CE), adopta el criterio ya establecido por el Tribunal Constitucional sobre la necesaria acreditación del riesgo relevante de que la lesión pueda llegar a producirse. <<...para atribuir a la acción u omisión de las Administraciones Públicas la vulneración [...] hace falta que los niveles de ruido a los que esté expuesto su titular causen daños graves e inmediatos en su salud o le coloquen en una situación en la que, sin llegar a producirse efectivamente ese daño, exista un riesgo constatado de producción cierta, o potencial pero justificado ad casum, de la causación de un perjuicio para la salud>> (FJ 7). Las operaciones de aviación civil impactan significativamente en el medio ambiente a través de dos variables fundamentalmente: las emisiones contaminantes de gases de efecto invernadero a la atmósfera, y la contaminación acústica producida por las operaciones de despegue y aterrizaje. *Vid.*, el estudio de FORTES MARTÍN, A. La STSJ de Madrid parte de que no considera evitable la operatividad de la pista en cuestión, dado que las alternativas sólo son viables si las condiciones meteorológicas y de seguridad lo permiten. Sin embargo, el TS entiende que la situación padecida por los recurrentes no era del todo inevitable, puesto que existen otras rutas de aproximación al aeropuerto en configuración sur, sin necesidad de sobrevolar la urbanización. La importancia del fallo se extiende a un interrogante de difícil respuesta, como es el de conjugar la protección de la salud y la intimidad de las personas con el desarrollo legítimo de una actividad económica como la aeroportuaria, y con las ventajas a nivel económico y turístico para la ciudadanía. *La ordenación y el control administrativo del tráfico aéreo*. Ed. Civitas. Cizur Menor (Navarra), 2012, págs. 348-405.

situadas en la Partida de la Cerrada y en Barracas (Castellón), que provocaban emisiones de ruido y sombras, proyectando sus efectos sobre las casas de los demandantes, así como la declaración de vulneración de los derechos recogidos por los arts. 15, 18.1 y 18.2 CE, por otra parte.<sup>823</sup>

Lo expuesto nos induce a sostener lo que sigue. El escenario de mayor producción de ruido es, en la actualidad, la mera “actividad cotidiana”, ya sea dentro de la escenografía urbana, en sus múltiples modalidades y expresiones (tráfico rodado, aéreo, ferroviario, entorno laboral, domiciliario, ocupacional, turístico, etc.)<sup>824</sup>, o bien incurso en los diferentes parámetros de lo que habitualmente entendemos como *ciudad*. No obstante, una especialidad se alía con ambos extremos: no es otro que la fuerte virulencia con la que el hombre percibe los efectos del ruido, amén de las consecuencias económicas en costes sanitarios que provoca. Ahora bien, los enunciados que engloban los apartados en los que habitualmente se describen, enumeran y estudian las múltiples fuentes productoras de ruido por parte de la doctrina suelen ser, en su gran mayoría, los mencionados con anterioridad.<sup>825</sup>

---

<sup>823</sup> STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª) de 21 febrero de 2011 [RJ\2011\1241]. Desestima el recurso de casación interpuesto por la Generalitat Valenciana contra dos Autos dictados por el TSJ de la Comunidad Valenciana, que acordaron la medida cautelar de la suspensión del funcionamiento de los aerogeneradores en cuestión; STSJ de Valencia (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª) 752/2013 de 27 junio [JUR\2013\281169], en la que, tras seguirse el cauce procedimental especial para la protección de los Derechos fundamentales de la persona, se declaró la vulneración del derecho a la integridad física y moral, a la intimidad personal y familiar, y a la inviolabilidad del domicilio de los demandantes (arts. 15, 18.1 y 2 CE respectivamente).

<sup>824</sup> Por ejemplo, el ruido es el impacto ambiental más relevante del tráfico aéreo según se desprende de la Comunicación de la Comisión: “Airport policy in the European Union –addressing capacity and quality to promote growth, connectivity and sustainable mobility–”. COM (2011) 823 final, de 1 de diciembre, pág. 7. Por otra parte, la jurisprudencia cada vez se aleja más de esta consideración del ruido como agente contaminante al uso, tal y como se desprende por ejemplo de las sentencias citadas en las dos notas anteriores.

<sup>825</sup> Cfr. ALONSO GARCÍA, Mª C. Incluye en su estudio el ruido procedente de máquinas de construcción, de aparatos electrodomésticos y máquinas cortadoras de césped. “La contaminación acústica”. *Tratado de Derecho Ambiental*. Luis Ortega Álvarez / Consuelo Alonso García (dirs.) Rosario de Vicente Martínez (coord.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2013, págs. 695-729. Vid. DE ESTEBAN ALONSO, A. Con anterioridad a las *fuentes* se sitúan las *causas*, como la falta de ordenación o planeamiento urbanístico adecuado, defectuosa ordenación del planeamiento en el trazado de viales que han de absorber el tráfico rodado, ausencia de aislamiento acústico en muros de cerramiento, tabiques, forjados, etc. de edificios, deficiente aislamiento acústico en locales donde se desarrollen actividades o se ubiquen instalaciones, proximidad de aeropuertos a zonas o núcleos urbanos, etc. En “Contaminación acústica y salud”, op. cit. Excepción reseñable merece la normativa básica sobre edificación, que actualmente se regula en el RD 1371 / 2007, de 19 de octubre (modificado por RD 1675 / 2008, de 17 de octubre), por el que se aprueba el documento <<DB-HR Protección frente al ruido>> del Código Técnico de la Edificación.

Esta peculiaridad no sólo se presenta a nivel doctrinal, sino que el propio Consejo de Europa, al tratar sistemáticamente los fenómenos ambientales en sus repertorios de legislación, no otorga al ruido [al que titula “molestias sonoras”; en nuestra opinión la fórmula denota un alto grado eufemístico] una sustantividad singular en el desarrollo de propuestas, puesto que las referencias se conectan de forma tangencial con otras materias, como la contaminación atmosférica producida por el tráfico rodado, aéreo y marítimo.<sup>826</sup>

Consecuentemente, apoyamos la idea de que esta materia debería cosechar una atención muy superior a la que demuestran la mayor parte de propuestas contempladas en el contexto medioambiental genérico, si se adopta, como así parece ser, una postura de absoluta pertenencia al núcleo básico del Derecho medioambiental.

---

<sup>826</sup> Tras un tratamiento más acorde a la importancia que tiene el ruido en el diseño del marco general, a través del Libro Verde de 1996 sobre política futura en la lucha contra el ruido y la Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, lo cierto es que la totalidad de la actividad legislativa se ha centrado en el ruido emitido por fuentes específicas, tales como los vehículos de motor y remolques, máquinas de uso al aire libre, y gestión del ruido en los aeropuertos de la Unión Europea, intentando una aproximación homogénea en los Estados miembros.

### **5.2.1.- *Green Cultural Criminology* y su aplicación al fenómeno del ruido ciudadano: una inexplorada ruta de acción y un fresco enfoque inclusivo**

La vanguardista adaptación del arquetipo de la *Green Criminology* al escenario de la *Cultural Criminology*<sup>827</sup>, condensada en la expresión *Green Cultural Criminology*, encarna una novedosa vía de investigación aportada recientemente por BRISMAN y SOUTH, entre otros.<sup>828</sup>

De este modo, suman dos de los desarrollos más innovadores de la Criminología Crítica en los últimos años: la Criminología Verde, con su foco prioritario de interés dirigido a los daños perpetrados contra el medio ambiente, y la Criminología Cultural, que se ajusta al examen del papel ejercido, tanto por los medios de comunicación<sup>829</sup> como por el consumo en la sociedad moderna tardía o la vida social contemporánea en el fenómeno criminal (delincuencia, desviación, y control social).<sup>830</sup>

Básicamente formulan diversos flujos de análisis criminológicos en torno a cuestiones conectadas con el consumo, el daño ambiental, el derroche, y el activismo ambiental, todo ello envuelto en la exploración del rol que cumplen las emociones en la comisión del delito, una de las originarias y más representativas premisas de la

---

<sup>827</sup> La Criminología Cultural, desarrollada en Estados Unidos y Reino Unido a partir de la década de los 90 del s. XX es un enfoque teórico, metodológico e intervencionista del estudio de la delincuencia, que busca comprender el fenómeno del delito dentro del contexto cultural. Sus argumentos tienen como punto de partida a los teóricos de la Escuela Sociológica de Chicago.

<sup>828</sup> Vid. BRISMAN, A. / SOUTH, N. "Green Cultural Criminology. Constructions of environmental harm, consumerism and resistance to ecocide", op. cit., Una parte del contenido del Capítulo 7 se encuentra publicado previamente en BRISMAN, A. / SOUTH, N. "A green-cultural criminology: An exploratory outline", op. cit.

<sup>829</sup> Sobre el importante rol ejercido por la comunicación, la sociedad de la información y la globalización, imprescindible la obra de uno de los sociólogos internacionales (de origen español) más importantes y reconocidos por su investigación en este campo. Vid. CASTELLS, M. "The Power of Identity. The Information Age: Economy, Society, and Culture" Vol. II, op. cit., págs. 168-191. En otro de sus artículos, sostiene que la teoría tradicional de la influencia política de la comunicación política a través de los medios de comunicación, está determinada en gran medida por la interacción entre las élites políticas (en su pluralidad) y los periodistas profesionales. Los medios de comunicación actúan como guardianes de los flujos de información que llegan a la opinión pública; citando a Katz (1997) que ya recalcó la transformación del entorno de los medios a través de la fragmentación de la audiencia, y el creciente control que las nuevas tecnologías de la comunicación otorgan a los consumidores de los medios. "Communication, Power and Counter-power in the Network Society". En *International Journal of Communication*, Vol. 1, February 2007, págs. 238-266, en especial 254. Disponible en: <http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/46/35> (último acceso 12/07/2015).

<sup>830</sup> Vid. BRISMAN, A. / SOUTH, N. "Green Cultural Criminology. Constructions of environmental harm, consumerism and resistance to ecocide", op. cit., págs. 9-15.

Criminología Cultural.<sup>831</sup> La vertiente de la Criminología Cultural, como afirma FERRELL, uno de sus principales precursores, explora el terreno común entre las prácticas culturales y penales en la vida social contemporánea, es decir, entre la conducta colectiva organizada en torno a las imágenes, el estilo, y el significado simbólico que tales conductas ostentan, a las que las autoridades legales y políticas otorgan una clasificación criminal.<sup>832</sup>

Por su parte, los partidarios de ampliar este espacio a través de la *Green Cultural Criminology* se preguntan, por ejemplo, si acaso la calidad ambiental no se encuentra afectada, por lo general de manera adversa, por la construcción y el desarrollo de algunos espacios urbanos, o por la transformación de espacios verdes y abiertos (a menudo públicos) en otros de carácter comercial (a menudo privados). De hecho, entienden que aún de forma involuntaria o inconsciente, los criminólogos “verdes” se encuentran, en suma, en una posición similar a la defendida por los postulados de la *Green Cultural Criminology*, es decir, que su base de acción puede ser equivalente o análoga, aunque no sea idéntica.<sup>833</sup>

En efecto, los criminólogos “verdes” prestan especial atención a la victimización ambiental sufrida por las comunidades pobres, las minorías que soportan los efectos de las plantas químicas, vertederos, incineradoras, vertederos de residuos peligrosos, fábricas de papel, plantas de tratamiento de residuos, y otras industrias contaminantes. En esos supuestos, ¿no es acertado relacionar el hecho de que dichas comunidades, con frecuencia carentes del poder político suficiente o necesario para oponerse a las decisiones sobre los emplazamientos de instalaciones peligrosas para el medio

---

<sup>831</sup> El principal exponente de esta categorización secundaria es KATZ, J. Referencia obligada su obra *Seductions of Crime: Moral and Sensual Attractions in Doing Evil*. Ed. Basic Books. New York, 1988.

<sup>832</sup> Vid. FERRELL, J. <<Para tener en cuenta la cultura y subculturas de la delincuencia, la criminalización de las actividades culturales y subculturales, y la política de estos procesos, entonces, debemos avanzar hacia una integración del análisis cultural y criminológico, es decir, hacia una criminología cultural [...] Para entender la realidad de la delincuencia y la criminalización, la criminología cultural debe tener en cuenta no sólo la dinámica de las subculturas criminales, sino también la dinámica de los medios de comunicación>>. [tr. pr.] “Culture, Crime, and Cultural Criminology”. En *Journal of Criminal Justice and Popular Culture*, Vol. 3, Issue 2, 1995, págs. 25-42, en especial 25 y 28.

<sup>833</sup> Así, BRISMAN, A. / SOUTH, N. <<... mientras que los criminólogos culturales tienden a centrarse en la privatización del espacio público, la exclusión de la gente de las ciudades del interior, y los esfuerzos cada vez más draconianos para regular el comportamiento en las zonas urbanas, los criminólogos verdes con frecuencia se concentran en asuntos relacionados con el poder, la desigualdad y la justicia distributiva, la falta de medidas adecuadas para prevenir o reducir el daño ambiental, la falta de aplicación de las leyes ambientales existentes, y la explotación de los espacios “negociados-regulados”. Pero existe superposición suficiente, por lo que sostenemos que la criminología cultural está, de hecho, haciendo criminología verde>>. [tr. pr.] En “Green Cultural Criminology. Constructions of environmental harm, consumerism and resistance to ecocide”, op. cit., pág. 21.

ambiente, se encuentran en evidente conexión con el ejercicio de la política del espacio urbano y su gestión?<sup>834</sup>

Esta nueva propuesta de interacción entre ambas teorías criminológicas barajada por este sector doctrinal, se adecúa a la perfección con el objeto de estudio de este trabajo en un contexto urbano, como tratamos de razonar a continuación.<sup>835</sup>

En primer lugar, tomemos como ejemplo dos variables: el desenfrenado consumo de plástico, papel o productos orgánicos de toda índole por parte de la población, y el servicio de recogida de residuos urbanos y limpieza viaria de los núcleos urbanos. Efectivamente, una desaceleración de esta clase de consumo provocaría pautas diferentes en el funcionamiento de los servicios que prestan las administraciones públicas (en consorcio con entidades privadas, o de forma autónoma), asociados a esta materia. La consecuencia práctica de este supuesto sería una reducción en la profusión de ruidos que provocan estas fuentes emisoras en las calles de numerosas ciudades españolas, o al menos una variación de los usos horarios que se manejan en la actualidad, pues no sería necesaria su intervención de forma tan reiterada.

Otro paradigma sería el representado por el fenómeno del *botellón*, foco habitual de ruidos, contaminación odorífera, suciedad y degradación visual del paisaje, principalmente durante los fines de semana, tormento para una gran mayoría de los habitantes de las zonas afectadas, que precisamente en esa franja semanal comúnmente asociada al descanso sienten cómo la agresión a su derecho a la quietud y a disfrutar de las zonas verdes o urbanizadas de su entorno es constante. Una adecuada intervención, en la que el Derecho penal ocupa un espacio francamente despreciable, reportaría la sensibilización de los grupos que atentan contra dichos derechos, incentivaría la modificación de sus patrones de conducta, sin que ello sea irreconciliable con la

---

<sup>834</sup> En este sentido, BRISMAN, A. / SOUTH, N. “Green Cultural Criminology. Constructions of environmental harm, consumerism and resistance to ecocide”, op. cit., págs. 20-22.

<sup>835</sup> Vid. FERRELL, J. “Tangled up in green: cultural Criminology and green Criminology”. En *Routledge International Handbook of Green Criminology*. Nigel South / Avi Brisman (eds.) Ed. Routledge. New York, 2013, págs. 349-364. Vid. BRISMAN, A. / SOUTH, N. Citando a Ferrell, mencionan cómo las instituciones del control del delito y las entidades comprometidas en aplicar la ley combaten con esfuerzos (creativos) para crear o rediseñar las ciudades en lugares urbanos antisépticos que creen serán atractivos para los intereses de las empresas y ciertos grupos demográficos. En “Green Cultural Criminology. Constructions of environmental harm, consumerism and resistance to ecocide”, op. cit., pág. 20; SOUTH, N. “The ecocidal tendencies of late modernity: transnational crime, social exclusion, victims and rights”, op. cit.

posibilidad de que continúen ejerciendo su derecho de reunión pacífica y ocio compartido en la vía pública.<sup>836</sup>

Un tercer arquetipo de este ranking es la tendencia *-in crescendo-* de la peatonalización de determinadas calles de centros históricos o con alta densidad de población en las ciudades. Con el loable objetivo de restringir o paliar la contaminación atmosférica y sonora que produce el tráfico, al mismo tiempo sobreviene una potente contradicción: la laxitud de las administraciones públicas respecto al cumplimiento de los horarios establecidos por la normativa correspondiente, así como el incremento del otorgamiento de licencias de apertura de terrazas de bares y restaurantes, estimulan la ocupación literal del espacio público por entes privados, que en cierto modo colapsan el tránsito peatonal para el que inicialmente se diseñó tal intervención urbana. Además, la profusión de ruidos en estos espacios se encuentra tan diseminada en relación al sujeto/os emisor/es que resultará extremadamente dificultoso ejercer las labores de inspección, control y sanción establecidas en las respectivas normativas municipales. En muchos casos, la persona jurídica por cuya actividad se desarrolla el foco de ruido, adoptará, en aquellos supuestos incardinables en un proceso penal, una figura de garante en pos de una pluralidad indeterminada de individuos, que se puede calificar de exorbitante.<sup>837</sup>

Otro factor de novedosa impronta es la influencia ejercida por los medios de comunicación globalizados en manos de particulares (principalmente a través de Internet) y cómo esos flujos de información facilitan el llamado turismo de ocio nocturno hacia destinos *low-cost* (económico). Representa una faceta como mínimo

---

<sup>836</sup> Este patrón conductual juvenil evidentemente no está reducido a nuestro país, sino que se muestra con diferencias mínimas en muchos otros. Concretamente respecto al Reino Unido, *vid.* HAYWARD, K. J. Ofrece algunas reflexiones sobre la naturaleza, el papel del espacio y el análisis espacial en la Criminología. Recientemente, ha surgido en ese país una nueva solución de prevención del delito con el problema de los jóvenes. Así, ciertas autoridades locales utilizan un aparato electrónico que emite un ruido de alta frecuencia audible sólo para los jóvenes, con el objetivo de ahuyentar a la “juventud rebelde” de ciertos espacios públicos. El autor desafía a los criminólogos contemporáneos a pensar de manera diferente sobre el papel y la naturaleza del espacio dentro de la disciplina. <<El paisaje sonoro, aunque aparentemente etéreo, requiere un mapa criminológico para que el nexo entre el espacio y el delito pueda ser totalmente entendido>> [tr. pr.]. “Five Spaces of Cultural Criminology”. En *The British Journal of Criminology*. Vol. 52, Issue 3. Ed. Oxford University Press, 2012, págs. 441-462, en especial 447 y ss.

<sup>837</sup> En efecto, si la empresa ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión, tal y como expresa el actual art. 31 bis 4, procederá la exención de responsabilidad penal. No obstante, en el caso analizado, el empleado encargado de proceder al cierre diario del establecimiento por ejemplo [art. 31 bis 1 b)], no puede modificar el comportamiento del público que permanezca concentrado en el lugar o se traslade a pocos metros.



curiosa: ciudadanos de otros países viajan a otros lugares bajo la creencia de que les es permitido adoptar patrones de conducta que perturban la convivencia vecinal, hacer el ruido que en sus lugares de residencia y de origen les es censurado desde un punto de vista social, a la vez que restringido desde un punto de vista normativo.<sup>838</sup>

Estos ejemplos no agotan el escenario en el que pretendemos profundizar para avalar la inclusión del fenómeno del ruido como forma de polución, y con ello llamar la atención sobre el descuido en el que incurre la panorámica general de la especialidad de la *Green Criminology*, pues al no tomarlo en consideración dentro de su extenso catálogo de materias objeto de estudio, está perdiendo una gran oportunidad de adecuar las numerosas propuestas y opiniones (doctrinales y científicas), que se inclinan por considerarlo un medio contaminante.

Como hemos reflejado en diversas partes de este trabajo, el ruido despliega un amplio y variado rango de actuación que impregna tanto el sector privado como las políticas públicas; ello conduce a que determinadas normativas lo sacralicen bajo el paraguas autorizatorio aplicable a otros sectores como el del ocio, entre otros, o bien a que suceda exactamente lo contrario, es decir, se penalizan de forma grave determinadas conductas bajo argumentos en muchas ocasiones desproporcionados, cuando no descabellados. Por lo tanto, encontramos en esta nueva corriente una inmejorable vía investigadora que permitirá rebajar la intensidad con la que, al menos en España y en relación a la materia de este trabajo, se aplica el Derecho penal. No son razones espurias las que lideran esta interpretación, sino estrictamente prácticas y basadas en la observación de lo que viene sucediendo en los últimos años (tanto desde un punto de vista jurídico como sociológico).

---

<sup>838</sup> Este fenómeno sucede sobre todo en zonas costeras y periodos estivales, pero se observa un incremento también en aquellas ciudades que ofrecen otro tipo de incentivos atrayentes, como porcentajes amplios de población juvenil residente, zonas con alta concentración de establecimientos nocturnos, etc. Respecto a la interacción de los *mass media* con otros segmentos, *vid.*, por todos CASTELL, M. Las relaciones de poder, en nuestro contexto social y tecnológico, dependen en gran medida del proceso de comunicación socializada, por ejemplo con el aumento de la auto-comunicación masiva. La difusión de Internet, la comunicación móvil, los medios de comunicación digital, y una variedad de herramientas de la vida social han impulsado el desarrollo de redes horizontales de comunicación interactiva que conectan lo local y global en el tiempo elegido. En “Communication, Power and Counter-power in the Network Society”, *op. cit.*, págs. 240 y ss.

### **5.2.2.- Estudio de caso descriptivo: impacto acústico ambiental de la tamborrada en la ciudad de Hellín<sup>839</sup>**

El presente estudio está encuadrado desde un punto de vista descriptivo, integrando parte de lo que en líneas generales suele contener un mapa de ruido por muestreo clásico, es decir, la representación gráfica de aquellos niveles de presión sonora –ruido– existentes en una zona concreta, y en un período determinado.

Contiene diferentes rangos de mediciones en decibelios ponderados, realizadas sobre el ruido exterior producido por fuentes emisoras dispares. Posee un carácter inédito, pues no tenemos constancia de ningún estudio similar en relación a este tipo de fenómeno de naturaleza lúdico-festiva, que por otra parte se celebran tradicionalmente en diversas zonas geográficas y núcleos urbanos de distintos tamaños territoriales y con diferentes censos de población en España.

La festividad sobre la que se funda este trabajo de investigación conlleva una gran afluencia de visitantes, así como una fuente de ingresos de adicionales de capital que repercute en distintos sectores económicos de la ciudad, concentrada principalmente durante los días de celebración, si bien la actividad financiera también sufre un ligero incremento en el periodo inmediatamente anterior, por cuestiones obvias relativas a los preparativos. La investigación fue realizada en la Semana Santa de 2013, en el periodo comprendido entre los días 26 y 31 de marzo, ambos inclusive.<sup>840</sup>

---

<sup>839</sup> La investigación se llevó a cabo con la colaboración de los siguientes organismos oficiales: Excmo. Ayuntamiento de Hellín, Concejalía de Medio Ambiente, y Jefatura de la Policía Municipal de Hellín.

<sup>840</sup> La Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, establece que un mapa estratégico de ruido es un mapa diseñado para poder evaluar globalmente la exposición al ruido en una zona determinada, debido a la existencia de distintas fuentes de ruido, o para poder realizar predicciones globales para dicha zona.

### 5.2.2.1.- Introducción y genealogía

La Semana Santa es la fiesta más conocida y popular de la ciudad de Hellín, provincia de Albacete, declarada “Fiesta de Interés Turístico Internacional” en 2007.<sup>841</sup> Se desarrolla, como sucede en otras localidades españolas, a través de actividades procesionales de carácter religioso por una parte, y gran concentración popular por otra, en la que se utilizan sonidos musicales o ruidosos, que en el caso de Hellín se materializan en la salida a la vía pública de varios miles de personas tocando tambores.

Este evento, que comparte con otras regiones su carácter popular (por ejemplo, Calanda e Híjar en Teruel, Baena en Córdoba, Mula y Moratalla en Murcia, Alcira en Valencia, Tobarra en Albacete, entre otras provincias y Comunidades Autónomas), y la totalidad de manifestaciones sonoras con el resto de ciudades, tiene una serie de características muy especiales, a saber: un cierto sentido individualista y algo anárquico, su innegable tradición pues se remonta a mediados del siglo XIX, celebrándose de forma ininterrumpida anualmente<sup>842</sup>, así como el hecho de convocar a la casi totalidad de los habitantes de la ciudad, número que sufre un incremento relevante durante la semana de celebración, ya que acoge gran multitud de visitantes.

Otra de sus singularidades es que su desarrollo se produce en espacios abiertos y con alta movilidad de sus integrantes, que se desplazan por diferentes calles y

---

<sup>841</sup> Esta distinción honorífica la concede la Secretaría General de Turismo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a <<aquellas fiestas o acontecimientos que supongan manifestaciones de valores culturales y de tradición popular, con especial consideración a sus características etnológicas y que tengan una especial importancia como atractivo turístico>>. Cuenta, entre los requisitos de concesión, con haber obtenido previamente la declaración de Interés Turístico Nacional, su continuidad en el tiempo, el arraigo en la ciudadanía, etc. No obstante, el texto subraya que se desestimarán las solicitudes <<referidas a fiestas con concurrencia de actos en los que directa o indirectamente se maltraten animales o personas>>, y que <<habrá de cuidarse especialmente el entorno urbano, monumental y paisajístico del lugar de celebración de la Fiesta y a tal efecto deberán aportarse los correspondientes permisos e informes de las actuaciones encaminadas al cumplimiento de estos fines>>. Orden ITC/1763/2006, de 3 de mayo, por la que se regula la declaración de Fiestas de Interés Turístico Nacional e Internacional [BOE núm. 135, de 7 de junio de 2006, págs. 21642-21643].

<sup>842</sup> Así lo atestiguan los escritos cruzados datados en 1877 entre el párroco D. Diego Ibáñez y el Alcalde de la ciudad, D. José Maroni Patiño, sobre la consideración sacrílega de los tamborileros. Estos son, sin duda, los documentos más antiguos conservados sobre esta tradición, aunque existe una amplia literatura local que los sitúa con anterioridad, pero sin base documental conocida. Véase además la consideración de *ruido infernal* en el periódico *El Amigo del Pueblo* de 21-4-1889, op. cit., así como la crónica de Felipe Picatoste (1834-1892) en *El Herald de Madrid*. Año III, núm. 532, sábado 16 de abril de 1892, en la cual se puede leer: <<...este ruido atronador [...] en la tarde del Miércoles Santo, y en la noche del Viernes, horas en que nadie puede descansar ni dormir en Hellín, [...] El rumor de sus redobles se oye en Tobarra, a siete kilómetros, y en el Rincón [del Moro], a quince kilómetros>>. Archivo Municipal de Hellín [copia sin sign.].

espacios de la población sin sujeción formal o protocolaria a emplazamientos puntuales, por lo que las diferentes intensidades del ruido de los tambores también sufren alteraciones espaciales y horarias de muy difícil concreción.

Los instrumentos que se utilizan son los membranófonos, conocidos también como cajas de guerra o prusianas.<sup>843</sup> Se trata de tambores que se golpean con dos baquetas de madera, elaborados con dos parches de entre 30 y 45 centímetros de diámetro (antes de pergamino, actualmente de plástico), engarzados entre dos aros de madera, con caja metálica o también de madera y sujetos con tornillos, además de contar con “bordones” o diferentes cuerdas dispuestas transversalmente sobre los parches, cuyo número y material se ha incrementado a lo largo del tiempo.<sup>844</sup> En la actualidad se utilizan varios órdenes de cuerdas de material sintético, entorchadas como las de una guitarra, por lo que el sonido gana mucha intensidad y pierde bastante del oscuro sonido “ronco” de los ejemplares más antiguos.

---

<sup>843</sup> Vid. “El Heraldo de Madrid” <<*Todo es notable en esta fiesta, hasta la riqueza de los tambores, que son magníficas cajas de guerra...>>, Año III, núm. 532, op. cit.*

<sup>844</sup> Antiguamente se trataba de tres o cuatro cuerdas de yute impregnadas con cera.

### 5.2.2.2.- Informe preliminar y metodología

CENSO DE POBLACIÓN: Actualización 1 de enero de 2013 –31.029 habitantes-													
SUPERFICIE DEL TÉRMINO MUNICIPAL: 779,5 kms <sup>2</sup>													
<p style="text-align: center;"><u>CUADRO DE MEDICIONES</u></p> <p>DURACIÓN: 1 minuto SERIES: Cada serie consta de 3 mediciones en cada uno de los puntos establecidos INTERVALOS: 5 minutos por medición RANGOS: Mañana / Tarde / Noche VALOR DE LA MEDICIÓN: Máximo PONDERACIÓN: A</p>													
<p style="text-align: center;"><u>LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRAS</u></p> <table><tr><td>PUNTO 1: Plza. Iglesia</td><td>1.782 m<sup>2</sup></td></tr><tr><td>PUNTO 2: Plza. Santa Ana</td><td>2.692 m<sup>2</sup></td></tr><tr><td>PUNTO 3: c/ Gran Vía / c/ Obispo Luis Amigo</td><td>22 ml</td></tr><tr><td>PUNTO 4: c/ El Rabal núm. 24</td><td>8,30 ml</td></tr><tr><td>PUNTO 5: Plza. Europa</td><td>295 m<sup>2</sup></td></tr><tr><td>PUNTO 6: c/ Benito Toboso núm. 5</td><td>3,70 ml</td></tr></table> <p>CENTRO HISTÓRICO: Se realizaron 2 series de 3 mediciones cada una durante la franja horaria comprendida entre las 13:10 y las 14:45 p.m. del día 29 de marzo, por el interés específico que la tamborrada adquiere en la jornada del Viernes Santo.<sup>845</sup></p>		PUNTO 1: Plza. Iglesia	1.782 m <sup>2</sup>	PUNTO 2: Plza. Santa Ana	2.692 m <sup>2</sup>	PUNTO 3: c/ Gran Vía / c/ Obispo Luis Amigo	22 ml	PUNTO 4: c/ El Rabal núm. 24	8,30 ml	PUNTO 5: Plza. Europa	295 m <sup>2</sup>	PUNTO 6: c/ Benito Toboso núm. 5	3,70 ml
PUNTO 1: Plza. Iglesia	1.782 m <sup>2</sup>												
PUNTO 2: Plza. Santa Ana	2.692 m <sup>2</sup>												
PUNTO 3: c/ Gran Vía / c/ Obispo Luis Amigo	22 ml												
PUNTO 4: c/ El Rabal núm. 24	8,30 ml												
PUNTO 5: Plza. Europa	295 m <sup>2</sup>												
PUNTO 6: c/ Benito Toboso núm. 5	3,70 ml												

<sup>845</sup> Todos los puntos de medición excepto el situado en la calle Gran Vía se integran en la catalogación urbanística de Casco Antiguo (en adelante CA).

## METODOLOGÍA

Equipo de medición facilitado por la Jefatura de Policía Local. Se trata del utilizado por el cuerpo policial en la medición de ruidos interiores. Los resultados que se obtienen tras la solicitud de mediciones por parte de los ciudadanos dan lugar a las oportunas emisiones de actas, formalizando los procedimientos administrativos sancionadores correspondientes, en base a los datos obtenidos.

## EQUIPO

SONÓMETRO: SC-20c integrador-promediador de clase 1

RANGO: Único 23-140dB

VERIFICACIÓN: 13/10/2011, realizada por LACAINAC

CALIBRADOR: CB-5. Nivel de presión acústica 94 dB (1 Pa)

METODOLOGÍA DE MEDICIÓN: Todas las mediciones se llevaron a cabo a mano alzada. Equipo sonométrico calibrado a 94 dB y 104 dB antes de cada serie

POSICIÓN DEL SONÓMETRO EN ALTURA: 1,70 m. desde el nivel del suelo

DISTANCIA EDIFICACIONES: Superior a 1,50 m. de fachadas

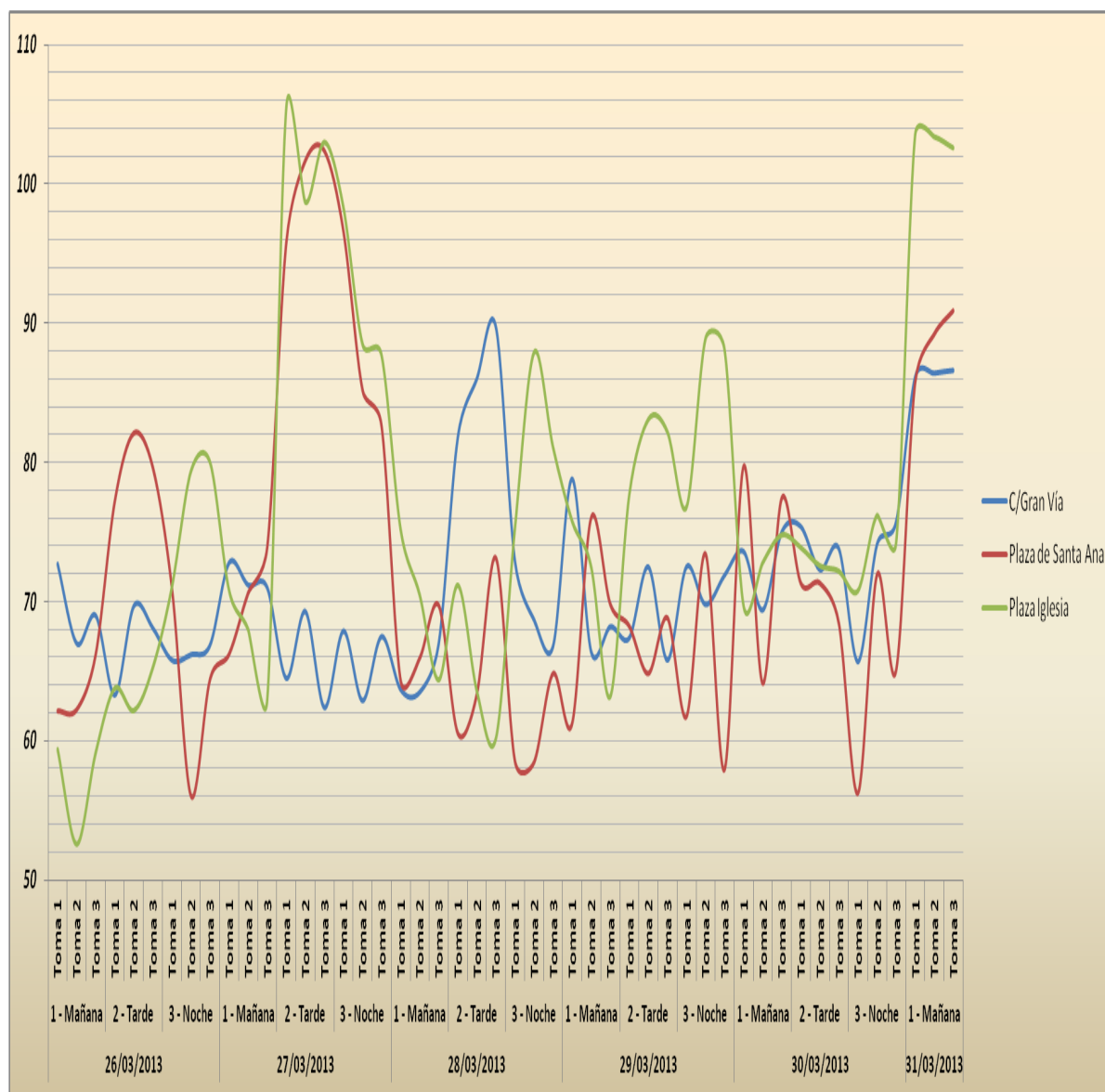
## CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

Homogéneas, ausencia de ráfagas de viento

TEMPERATURA °C: Oscilante 10° mínima - 18° máxima

### 5.2.2.3.- Gráficos y conclusión del caso

Gráfico 1.- Representación dinámica de los valores de medición reflejados en el Anexo 5. El pico máximo de intensidad de ruido obtiene un resultado de 105,5 dB en el turno de tarde, y el mínimo se sitúa en 56 dB en el turno de mañana.<sup>846</sup>



<sup>846</sup> Los valores 50-60-70-80-90-100-110 corresponden a la intensidad en decibelios -nivel de presión sonora-. El gráfico no muestra los valores lineales máximos del rango de mediciones realizadas en el CA, al no poder ser representados en igualdad de condiciones respecto del resto de valores, pues no existe ponderación de los mismos, al ser objeto de una medición singular y aislada en una franja horaria diferente del resto. Incluso fuera del gráfico representado, es digno de mención el valor máximo alcanzado, que corresponde a 113,7 dB.

Gráfico 2.- Niveles de frecuencia.

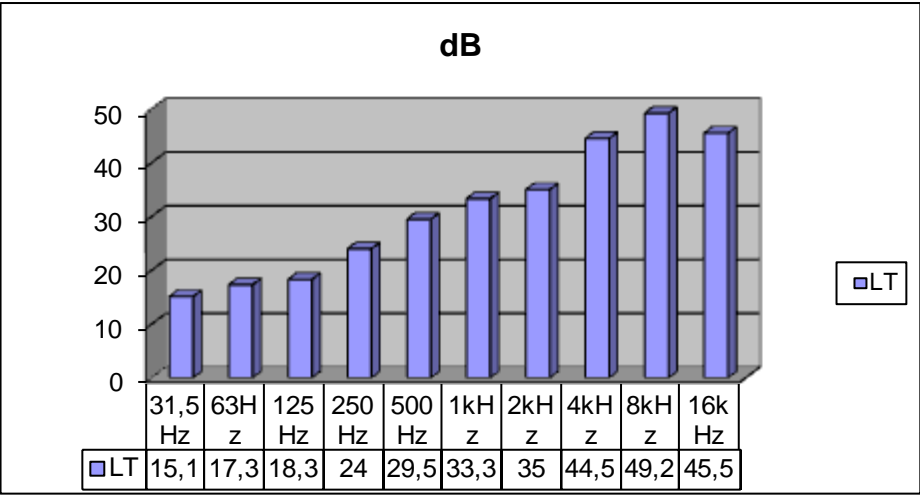


Gráfico 3.- Niveles de frecuencia.

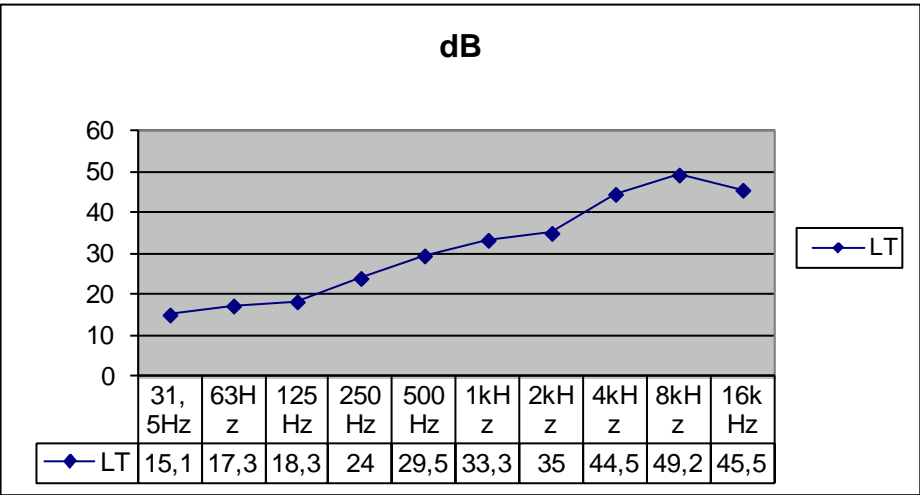


Gráfico 4.- Niveles de frecuencia.

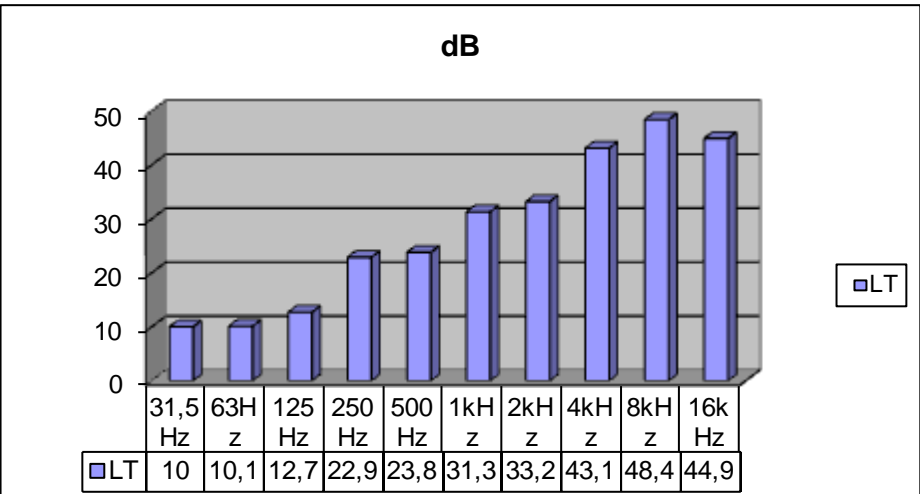




Gráfico 5.- Niveles de frecuencia.

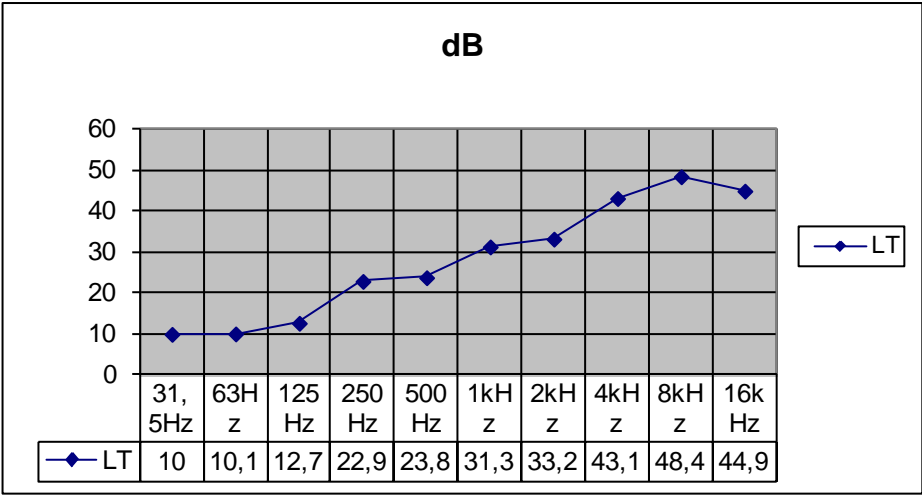


Gráfico 6.- Niveles de frecuencia.

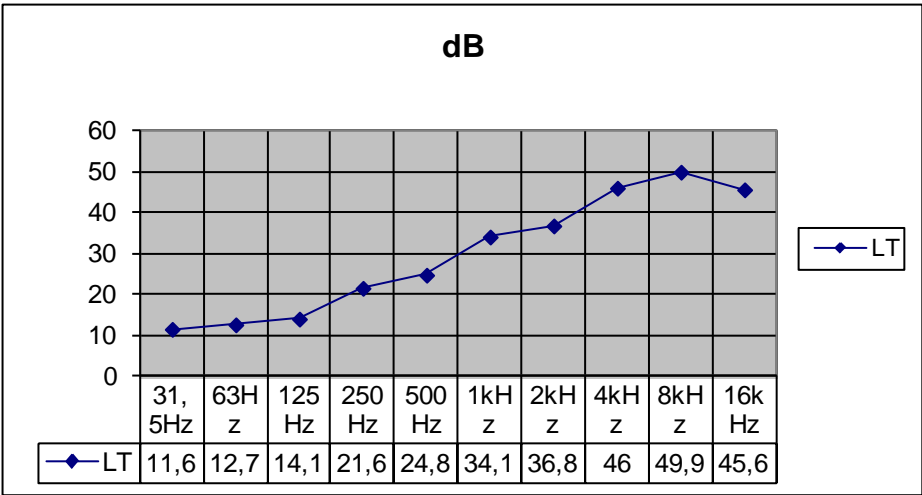


Gráfico 7.- Niveles de frecuencia.

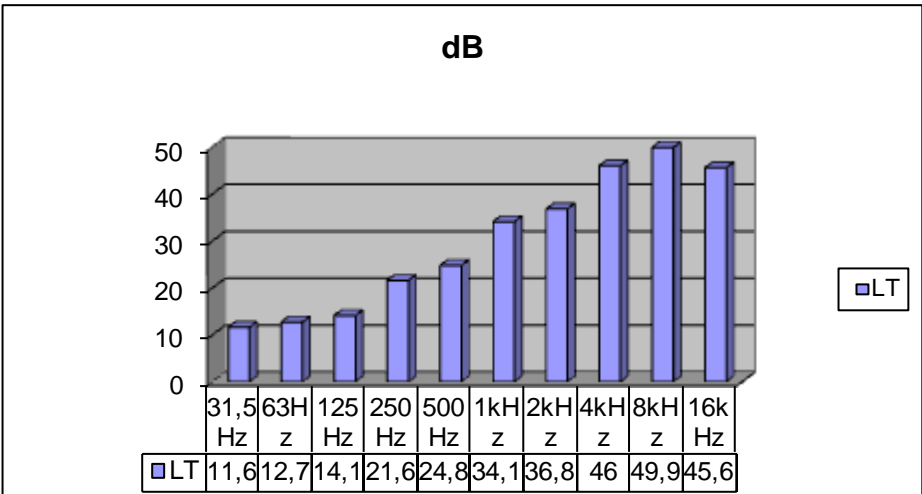


Gráfico 8.- Niveles de frecuencia.

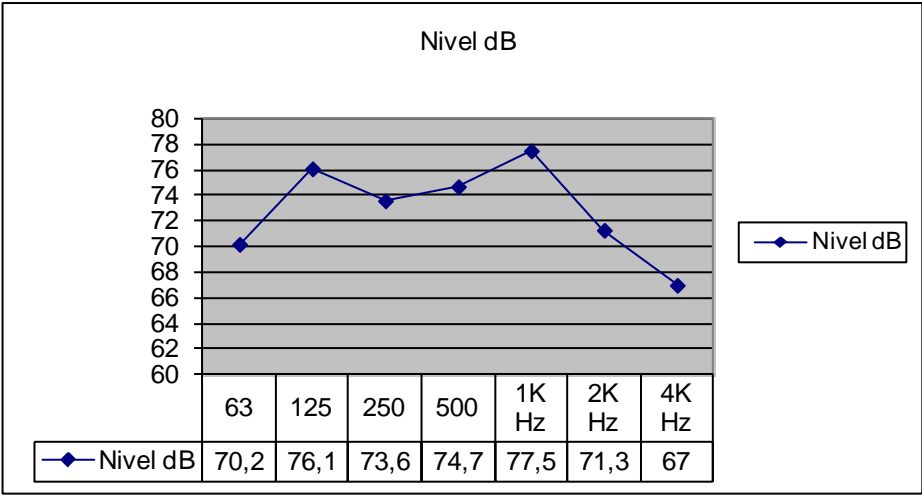
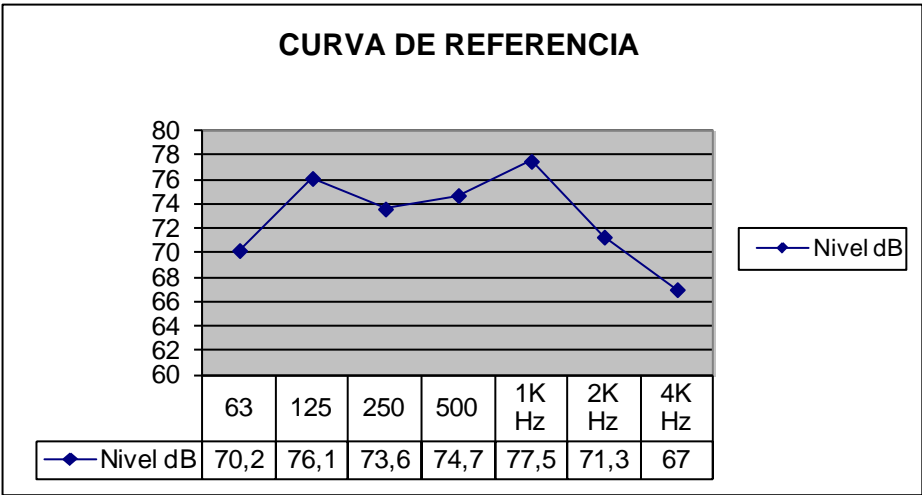


Gráfico 9.- Curva de referencia.



## CONCLUSIÓN DEL CASO

La Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente de la ciudad de Hellín recoge en su art. 17.1 diferentes niveles permitidos de ruido en el exterior.<sup>847</sup> En contraste con lo revelado por esta investigación rebasan con amplitud los límites establecidos en los tres tramos horarios para zonas residenciales, incluso en aquellos días en los que la tamborrada no interfiere en las condiciones calificadas como normales, que incluye el ruido provocado por el tráfico rodado.

Los valores se sitúan más próximos a los establecidos para zonas de tolerancia industrial, y zonas industriales, definidas como tales en el Plan General de Ordenación Urbana.<sup>848</sup>

Por otra parte, dicha norma no realiza ninguna alusión a posibles exenciones que doten de justificación legal al ruido provocado durante estas fiestas populares. Entendemos que se trata de una laguna injustificable, pues en caso contrario no se entiende la existencia de la cláusula contenida en el art. 17.2, en la que se especifica que por razón de la organización de actos con especial proyección oficial, cultural, religiosa u otros de naturaleza análoga, el Ayuntamiento podrá adoptar las medidas necesarias, para reducir con carácter temporal en determinadas vías o sectores del casco urbano, los niveles señalados en el apartado anterior. De igual forma, se podría añadir que dichos niveles podrán ser ampliados por razón de dichos festejos, si tenemos en cuenta su histórica proyección y su general conocimiento por parte de los residentes.

En suma, en condiciones de normalidad, sin tener en cuenta la especial incidencia de esta festividad en la que el “ruido” es el protagonista por excelencia, los valores de ruido soportados por los residentes superan los recomendados por los diferentes organismos nacionales, europeos e internacionales.

---

<sup>847</sup> Publicada en el BOP Albacete núm. 57, de 13 de Mayo de 1.991.

<sup>848</sup> Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente, Sección 3ª. *Niveles de perturbación por ruidos y vibraciones*. Art. 17.1: <<En el medio ambiente exterior no se podrá producir ningún ruido que sobrepase los niveles que se indican a continuación; b) Zonas residenciales: entre las 8 y las 22 horas, 55 dBA; entre las 22 y las 8 horas, 45 dBA. c) Zonas de tolerancia industrial: entre las 8 y las 22 horas, 60 dBA; entre las 22 y las 8 horas, 45 dBA. d) Zonas industriales: entre las 8 y las 22 horas, 70 dBA; entre las 22 y las 8 horas, 55 dBA>>.

## VI.- EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO POR EL ART. 325 CP

### 6.1.- Sistemática de la protección otorgada al medio ambiente: estructura opuesta a una interpretación holística

Resulta conveniente precisar que el alcance del que goza el derecho emanado de la Unión Europea, implica que el Derecho penal ha dejado de ser una realidad estrictamente nacional. Dicho factor ha sido propulsado de manera progresiva por los diferentes instrumentos derivados de la Unión<sup>849</sup>, que cristalizaron con el Tratado de Lisboa de 2007.<sup>850</sup>

---

<sup>849</sup> Como la Sentencia del TJCE de 13 de septiembre de 2005 (C-176/03) *Comisión v. Consejo* publicada en el DOUE, núm. C 315, de 10 de diciembre de 2005. *Vid.* CARNEVALI RODRÍGUEZ, R. Alude a dicha sentencia como germen de lo que posteriormente dicta el Tratado de Lisboa (en vigor desde el 1 de diciembre de 2009), en lo relativo a la no distinción entre las áreas de integración o cooperación, que ya se perfila en la resolución comentada. Con el nuevo Tratado, al desaparecer la división entre los tres pilares, tanto el Parlamento como el Consejo pueden establecer normas mínimas (a través de Directivas adoptadas por procedimientos legislativos ordinarios), relativas a la definición de infracciones penales y sanciones en ámbitos que posean especial gravedad y dimensión transfronteriza. “Caso del medio ambiente europeo”. En *Casos que hicieron doctrina en Derecho Penal* (2ª ed.) Pablo Sánchez-Ostiz Gutiérrez (coord.) Ed. La Ley. Madrid, 2011, págs. 841-854. A dicha sentencia se le adjudica más proyección de la que realmente encarna, ya que en puridad, tan sólo se ocupa de aspectos distributivos de competencias entre los diferentes órganos de la Unión Europea. En este sentido, *vid.* DE LA MATA BARRANCO, N. J. / HERNÁNDEZ DÍAZ, L. “La normativa de la Unión Europea y su aplicación en el Derecho penal ambiental e informático”. En *Garantías constitucionales y Derecho penal europeo*. Santiago Mir Puig / Mirentxu Corcoy Bidasolo (dirs.) Víctor Gómez Martín (coord.) Ed. Marcial Pons. Madrid, 2012, págs. 495-531, en especial 496.

<sup>850</sup> El Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007 entró en vigor en 2009, y modifica el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. Sobre la progresiva política europea de medio ambiente, *vid.* JUSTE RUIZ, J. / CASTILLO DAUDÍ, M. Los autores sitúan el punto de inflexión en el Acta Única Europea de 17 de febrero de 1986, que incorporó al Tratado CEE un nuevo Título (VII) sobre Medio Ambiente. En “La protección del medio ambiente en el ámbito internacional y en la Unión Europea”, *op. cit.*, págs. 157 y ss. *Vid.* ARROYO ZAPATERO, L. Tres posibles fricciones, con origen en la relación de ordenamientos autónomos: en primer lugar porque la norma penal de origen europeo, al ser transpuesta, se juzga con el canon de legitimidad que establecen los Derechos fundamentales en la configuración y contenido que poseen en un sistema nacional concreto; en segundo lugar, la UE puede pretender aplicar su propio estándar de legitimidad a las normas de transposición (dado que tiene su catálogo de Derechos fundamentales y un Tribunal de Justicia competente para fijar sus contenidos); y en tercer lugar el conflicto que se puede generar entre los Estados miembros en el marco de la cooperación judicial impulsada por la UE. A estos tres factores se une el que la armonización ha alterado el significado de uno de los pilares sobre los que se sustenta el Derecho penal nacional: la conformación de la reserva de ley penal unida a la noción de soberanía estatal. Prólogo a la obra colectiva *Los Derechos Fundamentales en el Derecho Penal Europeo*. Luis María Díez-Picazo / Adán Nieto Martín (dirs.) Ed. Civitas. Cizur Menor (Navarra), 2010, págs. 17 y 18. *Vid.* RODRÍGUEZ MEDINA, Mª M. *Tutela jurídico-penal del medio ambiente en el Derecho de la Unión Europea*. Ed. Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho UCM. Madrid, 2014, págs. 41-43.

Aunque se le pueden exigir mayores esfuerzos, lo cierto es que su impulso a favor de un acuerdo internacional más avanzado que el Protocolo de Kyoto ha resultado notorio, no obstante su capacidad para arrastrar al conjunto de la sociedad internacional no acaba de ser determinante.<sup>851</sup>

Esta dependencia es incluso más acusada en la especialidad propia del Derecho penal medioambiental, pues son múltiples a la vez que dispersas las figuras medioambientales que se ven impregnadas por la política criminal de origen comunitario. Una interpretación de acuerdo con esta tendencia de inspiración globalizadora sincroniza a la perfección con el carácter asimétrico, transversal y global de los fenómenos medioambientales, al menos en sus bases teóricas y prácticas, porque se busca y persigue una protección lo más homogénea posible, una vez conocidos suficientemente los efectos extensivos e indiscriminados de las distintas formas de contaminación, respecto de la parte de territorio en la que se producen. Ahora bien, la asincronía continúa siendo muy potente en el contexto internacional y la efectividad de las medidas penales internas adoptadas por los países europeos, escasa.<sup>852</sup> Este déficit de políticas ambientales globales eficientes es mayor si atendemos de forma aislada a lo referente al ruido, pues si bien existen denominadores comunes entre países, al mismo tiempo hay que conjugar una serie de factores condicionantes y diferenciados [económicos, evolutivos (en los modelos de vida social, en nuevas fuentes de ruido), energéticos, demográficos, etc.], que inciden no sólo a escala interestatal, sino entre regiones, grandes ciudades o municipios de un mismo país, obstaculizando la asunción de bases estratégicas, tanto en el diseño como en el avance de las políticas de futuro.<sup>853</sup>

---

<sup>851</sup> Si en la Conferencia de Bali parecía lograrse un avance importante de cara de la de Copenhague, la Conferencia sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas celebrada en la capital danesa, dejó mucho que desear. La UE debe seguir liderando la actividad internacional que pretende lograr la implicación de las economías más desarrolladas en la lucha contra el cambio climático. Durante 2010 –Conferencia sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas celebrada en México D.F.– su capacidad de influencia debió ser reforzada al objeto de conseguir adoptar un texto jurídicamente vinculante que sustituyera al Protocolo de Kyoto, circunstancia no lograda por los contrapesos de países que no asumen sin reservas la asunción de un texto integrador capaz de ajustar posturas desiguales. *Vid.* GARCÍA LUPIOLA, A. “La Unión Europea en la Conferencia sobre Cambio Climático de Copenhague: lucha frustrada a favor de un texto jurídicamente vinculante”. *Revista electrónica de Derecho Ambiental*, núm. 21., junio 2010. Disponible en: <http://huespedes.cica.es/aliens/gimadus/> (último acceso 18/04/2015).

<sup>852</sup> Este fenómeno no sólo se produce a escala internacional. En España no se han adoptado protocolos de actuación a raíz del desastre ambiental ocasionado por el petrolero *Prestige*. Transcurridos más de diez años, la situación se repite en 2015 con los accidentes sufridos en nuestras costas por el pesquero ruso Oleg Naydonov y el ferry Sorrento; la menor incidencia ambiental en estos casos se debe, casi exclusivamente, a que la cantidad de fuel transportado es mucho menor.

<sup>853</sup> Al respecto, MONESTIER MORALES, J-L. En “Defensa frente al ruido. Jurisprudencia y Formularios”, op. cit., págs. 61 y ss.

Particularmente respecto al ruido y a nivel europeo, la propia Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, adopta una posición explícitamente antropocéntrica: <<La presente Directiva se aplicará al ruido ambiental al que estén expuestos los [seres humanos] en particular en zonas urbanizadas, en parques públicos u otras zonas tranquilas en una aglomeración...>> (art. 2.1).

Es de sobra conocido el fenómeno expansivo que sufre el Derecho penal en la actualidad, al que acompaña un enorme desarrollo de los instrumentos jurídico-administrativos para la protección de las bases vitales naturales.<sup>854</sup> Determinante para esta ola de criminalización en el área del medio ambiente es, por una parte, la experiencia del Derecho penal clásico, que no es capaz de encontrar respuestas idóneas a las nuevas formas de amenaza producidas por la civilización tecnológica, y por otra, el impacto del efecto propagandístico cuando se producen destrucciones del medio ambiente, que generan en la opinión pública una inusitada necesidad de que se apliquen castigos penales intensos y contundentes, sin una merecida reflexión acerca del impacto de la pena o la tan pregonada función resocializadora en determinados tipos de delincuentes como los ocasionales, que representan un alto porcentaje de penados por esta materia, sobre todo en relación a la emisión de ruidos.<sup>855</sup>

Por el contrario, también se observa un acentuado escepticismo en torno a la ampliación del Derecho penal del medio ambiente, fomentado por las investigaciones empíricas, que constatan que el ordenamiento penal nuclear o básico no cumple las expectativas para las que fue creado en su origen (atentados ecológicos graves), mientras que puede dar a lugar a reacciones desproporcionadas ante supuestos de conductas de bagatela.<sup>856</sup>

---

<sup>854</sup> La importancia de esta deformación, característica de una nueva criminalización creciente, la explica con claridad y con obligadas referencias a las obras ya clásicas de Beck, Silva Sánchez, y los integrantes de la Escuela de Frankfurt, FEIJÓO SÁNCHEZ, B. “Sobre la administrativización del derecho penal en la sociedad del riesgo”, op. cit., págs. 137-176.

<sup>855</sup> Vid. GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. *Sobre la función resocializadora o rehabilitadora de la pena*. En Cuadernos de política criminal. Segunda Época, núm. 100, abril 2010. Ed. Dykinson. Madrid, págs. 77-91.

<sup>856</sup> Un ejemplo muy expresivo en relación a los delitos contra la flora y fauna lo encontramos en la Sentencia (absolutoria) del Juzgado de lo Penal núm. 3 de Granada, núm. 510/2001, de 16 de noviembre, en el asunto conocido como “caso de la manzanilla real”. El Ministerio Fiscal solicitaba una pena de 2 años y 3 meses de prisión por aplicación del art. 332 CP, tras la denuncia por parte de los agentes del servicio de vigilancia de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía contra un pastor que mientras transitaba por un paraje del Parque Nacional de Sierra Nevada, recogió 190 gramos de la planta <<*Artemisia granatensis* Boiss>> (manzanilla real), catalogada en un Decreto de la Consejería como especie en peligro de extinción, con el fin de aprovechar para su familia los efectos medicinales que

Esto refleja el conflicto existente entre los intereses particulares y colectivos en la conservación de un medio ambiente puro, el derecho a la libertad de empresa del hipotético contaminador, junto a los intereses públicos de desarrollo tecnológico e industrial, entre otros. Es precisamente esta colisión la que sucumbe a las formulaciones legislativas por las que se optan en determinadas épocas o condiciones, ya que manifiestan, a primera vista, una potencia desorbitada y engañosa, lo que les permite posicionarse en igualdad de condiciones desde el inicio; así, el legislador considera el punto de partida, tomando como referencia las dos variables de forma complementaria, pero de manera inversamente proporcional a la que determinados supuestos de ataques ambientales requieren en su tratamiento.<sup>857</sup>

La irrupción de los delitos de peligro (abstracto o concreto) ha servido de acomodo para diseñar una técnica jurídica que acoja esta categoría de protección hacia determinados bienes jurídicos, por otra parte ni tan novedosa ni tan reducida, ya que se remonta a la aparición de los bienes jurídicos no individuales de los Códigos decimonónicos y, por otra parte, acoge a grupos de tipicidad heterogénea; delitos contra la Hacienda pública, seguridad del tráfico, o contra la administración de justicia, entre otros.<sup>858</sup> Este nuevo paradigma de bien jurídico colectivo y su amparo en la

---

posee, en la más absoluta ignorancia de que su recolección supusiera algún tipo de ilicitud (error de prohibición). Los fundamentos de derecho de la resolución no pueden ser más acertados, por obvios y por las dificultades que entraña la apreciación de error vencible o invencible. En un extracto dice: <<Como resulta evidente, el principio de legalidad es por completo contrario al arbitrio judicial [...] Pero también lo es, y aún en mayor medida, al legalismo obtuso y mecánico que se aplica sin atención alguna a las reglas de la equidad y de la lógica [...] cabe seguidamente preguntarse si una persona [...] puede estimar ilícito arrancar unas plantas que él mismo manifiesta no diferenciar de cualquier manzanilla común [...] y, sobre todo, y aquí radica la verdadera paradoja de la cuestión con reenvío al párrafo que ya antes destacamos en negrita, que sin la menor limitación puede comerse, no ya por las cabras monteses que en número extraordinariamente alto campan por el parque nacional de Sierra Nevada, sino por sus propios animales domesticados cuando en aquella, como en otras zonas de similares características, son llevados a pastar sin limitación de tipo alguna y que, como es obvio, se comen la manzanilla real y cuanta planta les plazca, se hallen en peligro de extinción, sean plantas vulnerables a la alteración de su hábitat, o queden comprendidas en cuanto catálogo se confeccione por el hombre>> (FJ 1).

<sup>857</sup> Dejando apartadas las posiciones estrictamente abolicionistas en la línea de la Escuela de Frankfurt, se suman a la desconfianza sobre la efectividad de las medidas penales en la protección del medio ambiente en la doctrina alemana, PRITTWITZ, C. “La función del Derecho Penal en la sociedad globalizada del riesgo: defensa de un rol necesariamente modesto”, op. cit. En nuestro país SILVA SÁNCHEZ, J. M<sup>a</sup>. “¿Protección penal del medio ambiente? Texto y contexto del artículo 325 del Código Penal”, op. cit.; ALONSO ÁLAMO, M. “La aporía del Derecho penal del medio ambiente”. En *Estudios de Derecho Ambiental. Libro Homenaje al profesor Josep Miquel Prats Canut*. Gonzalo Quintero Olivares / Fermín Morales Prats (coords.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2008. págs. 21-40.

<sup>858</sup> Vid. BUSTOS RAMÍREZ, J. “Los bienes jurídicos colectivos. (Repercusiones de la labor legislativa de Jiménez de Asúa en el Código Penal de 1932)”, op. cit., pág. 153; BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I. “Viejo y Nuevo Derecho Penal. Principios y desafíos del Derecho Penal de hoy”, op. cit., págs. 205 y ss.; SOTO NAVARRO, S. *La protección penal de los bienes colectivos en la sociedad moderna*. Ed. Comares. Granada, 2003.

técnica de los delitos de peligro abstracto, resulta acertado para algunos y criticado por otros.<sup>859</sup> Ahora bien, respecto a fundamentar adecuadamente un adelantamiento de barreras punitivas basado en la idea de peligro, el sistema se queda corto.<sup>860</sup> De hecho, en la legislación de otros países como Argentina, se inclinan por mantener en el ámbito del Derecho administrativo los comportamientos considerados de peligro abstracto, reservando la actuación penal a conductas que impliquen un peligro concreto o una lesión al bien jurídico.<sup>861</sup> En todo caso, es incuestionable que la criminalización de conductas atentatorias contra el medio ambiente es necesaria a pesar de las reiteradas críticas recibidas por su carácter simbólico, que algunos identifican más con la reticencia del juzgador a la hora de dictar resoluciones sobre la base de conductas de peligro, que con el debate dogmático.<sup>862</sup>

---

<sup>859</sup> Se muestra partidaria, porque concibe viable la existencia de estos delitos al diferenciarlos de los delitos formales de infracción de deber, CORCOY BIDASOLO, M. Según la autora, caben los delitos de peligro abstracto cuando se requiere la afectación de un bien jurídico, que se probaría *ex ante* a través de la prueba de la idoneidad de la conducta, y *ex post* a través de la lesión al bien jurídico imputable al peligro típico. En “Delitos de peligro y protección de bienes jurídico-penales supraindividuales Nuevas formas de delincuencia y reinterpretación de tipos penales clásicos”, op. cit., págs. 53 y ss. En el mismo sentido, TERRADILLOS BASOCO, J. “Delitos relativos a la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente”. En *Derecho penal del medio ambiente*, op. cit., págs. 48 y ss. En sentido favorable a la técnica de los delitos de peligro abstracto, SCHÜNEMANN, B. “La destrucción ambiental como arquetipo del delito”, op. cit. En contra, aunque lo consideran inevitable por la extensión en la protección de bienes jurídicos colectivos, MUÑOZ CONDE, F. / LÓPEZ PEREGRÍN, C. / GARCÍA ÁLVAREZ, P. “Manual de Derecho penal medioambiental”, op. cit., págs. 164 y 165; BUSTOS RAMÍREZ, J. Opina que no existe ninguna necesidad de acudir a los delitos de peligro abstracto, en consonancia con su formulación de los bienes jurídicos colectivos, pues si es posible caracterizar debidamente al bien jurídico colectivo, se pueden construir delitos de lesión o de peligro concreto. La mala caracterización del bien jurídico da lugar a que se relacione al tipo con el bien jurídico que complementa al bien jurídico individual, en vez de asociarlo al bien jurídico colectivo. En “Los bienes jurídicos colectivos. (Repercusiones de la labor legislativa de Jiménez de Asúa en el Código Penal de 1932)”, op. cit., pág. 160. En sentido aproximado, BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I. “Viejo y Nuevo Derecho Penal. Principios y desafíos del Derecho Penal de hoy”, op. cit., págs. 226-228. Por su parte, HEFENDEHL, R., sostiene que si nos atenemos a la tríada estructural del delito –delito de lesión, delito de peligro concreto, delito de peligro abstracto–, es precisamente en la esfera de los delitos contra el medio ambiente donde encuentran mayor acomodo los llamados delitos de acumulación. En “Derecho Penal Medioambiental: ¿por qué o cómo?”, op. cit., pág. 7.

<sup>860</sup> Me adhiero en este punto a lo comentado por QUINTERO OLIVARES, G., pues al hablar de delitos de peligro, la principal premisa de la que partir sería definir qué es un peligro, lo que encierra varios interrogantes, pero aún prescindiendo del peligro característico de los delitos de carácter colectivo, también existe el criterio de peligro en el fundamento del castigo de la tentativa. Además, la naturaleza del peligro no puede recaer en principios subjetivos porque sería contrario a la seguridad jurídica. En “Derecho Penal Ambiental”, op. cit., pág. 79.

<sup>861</sup> Anteproyecto de Código Penal de la Nación Argentina. Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización e Integración del Código Penal de la Nación (Decreto P.E.N. 678/12) Presidente: E. Raúl Zaffaroni. Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013. Título XI. “Delitos contra el medio ambiente, la fauna y la flora”. Consta de cinco artículos dedicados al delito de contaminación (art. 204), responsabilidad de funcionarios públicos (art. 205), delitos contra la fauna silvestre, acuática u otros animales (art. 206), maltrato animal (art. 207) y delitos contra la flora (art. 208). Se incluye la responsabilidad de personas jurídicas en el delito de contaminación (art. 204.6).

<sup>862</sup> *Vid.* TERRADILLOS BASOCO, J. M. Esta realidad se manifiesta cuando los delitos de peligro sólo se persiguen si se produce un resultado lesivo. No obstante, esto tiene más que ver con las dificultades



La discusión, no obstante, sigue vigente, y resulta necesaria en la consecución de ciertos objetivos: por ejemplo, a través de la delimitación de una terminología adecuada, consensuada de forma unitaria entre científicos y juristas, la sistemática de los tipos penales se puede adecuar con más acierto al objeto real que la norma jurídica pretender proteger.<sup>863</sup> En puridad, ni medio ambiente es exactamente lo mismo que ecología, ni los ecosistemas se pueden confundir con la biocenosis o biota<sup>864</sup>, de la misma forma que algunos problemas de salud pública concretos tampoco pertenecen a dicha nomenclatura, por más que el ambiente influya en gran medida en su incremento, y por más que la locución salud pública genere serias dificultades de conceptualización.<sup>865</sup>

---

que plantea la prueba en las fases previas a la sentencia, entre otros factores. “Protección penal del medio ambiente. Jurisprudencia e intuición”. En *Estudios de Derecho Ambiental. Libro Homenaje al profesor Josep Miquel Prats Canut*, op. cit., pág. 367. En este sentido, aunque insistiendo más en la importancia de otros factores, como la falta de Tribunales especializados o la técnica legislativa utilizada, vid. CORCOY BIDASOLO, M. “Protección de bienes jurídico-penales supraindividuales y derecho penal mínimo”. En *Derecho penal del siglo XXI*, op. cit., págs. 400 y 401.

<sup>863</sup> La realidad metajurídica del jurista que se aproxima al Derecho ambiental también requiere de un mínimo de conocimientos científicos y tecnológicos, pues de lo contrario difícilmente podrá interpretar los contenidos técnicos del articulado de las normas o de sus anexos. Vid. ALONSO GARCÍA, E. Además, surge la necesidad metodológica de incluir a la economía, la política y la ética. “Ética ambiental y Derecho”. En *Diccionario de Derecho Ambiental*, op. cit., págs. 630-633.

<sup>864</sup> Desde el punto de vista de la biología existe la ecología vegetal, animal, humana, microbiana, terrestre, acuática, etc. Por otra parte, la biocenosis (conjunto de la flora y fauna de un ecosistema) no incluye bacterias y virus, que los científicos consideran dos grupos de seres vivos no pertenecientes al mundo vegetal ni animal, pero que ejercen una labor fundamental en la preservación y equilibrio de los sistemas naturales. En este sentido VIVES-REGO, J. J. / CORCOY BIDASOLO, M. / NIEVA FENOLL, J. Los autores dan un paso más, avanzando propuestas como la posibilidad de aplicar los delitos medioambientales por afectación de virus y bacterias, dado que durante siglos han formado parte del reino vegetal y, por tanto, dentro del término *flora*. En “Delito medioambiental y delito contra la salud pública: problemas terminológicos jurídicos y científicos de la legislación actual y propuestas de *lege ferenda*”, op. cit.

<sup>865</sup> Algunos de los apartados en materia de seguridad pública estrechamente relacionados con el medio ambiente serían el tráfico de vehículos (emisión de ruidos, anhídrido y monóxido de carbono a la atmósfera), las actividades industriales (emisión de partículas sólidas de diferente naturaleza, tóxicos, contaminación odorífera), la producción agropecuaria (transmisión de bacterias patógenas a través de la cadena alimenticia), entre otras. Por otra parte, la CE adjudica a los poderes públicos la organización y tutela de la salud pública a través de medidas preventivas, prestaciones y servicios necesarios (art. 43.2), mientras el CP asocia las conductas contra la salud pública a ciertos tipos delictivos problemáticos, como el tráfico de estupefacientes. Otros son los fraudes alimenticios, alteración de sustancias farmacéuticas, elaboración, suministro o comercio de sustancias nocivas para la salud o productos químicos que puedan causar estragos, etc. (arts. 359 a 378). Vid. VIVES-REGO, J. J. / CORCOY BIDASOLO, M. / NIEVA FENOLL, J. Cuestionan si salud pública es la suma del estado de salud de cada individuo, y desde una óptica jurídico-penal sería entonces merecedora de protección autónoma respecto a la individual. En “Delito medioambiental y delito contra la salud pública: problemas terminológicos jurídicos y científicos de la legislación actual y propuestas de *lege ferenda*”, op. cit. Sin embargo, otro sector doctrinal sí sostiene que la emisión de ruidos en zonas urbanas puede fundamentar una tipificación externa en otro precepto distinto al ambiental, en este caso en los delitos contra la salud pública. En este sentido, ALASTUEY DOBÓN, M. C. “El delito de contaminación ambiental (art. 325.1 del Código Penal)”, op. cit., pág. 73, nota 251.

## 6.2.- Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente

El Capítulo III del Título XVI dedica su atención a los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, con este mismo rótulo, anticipando una diferenciación conceptual encasillada en una dicotomía que resulta caprichosa y gratuita, pues nos preguntamos qué sentido tendría proteger los recursos naturales sin vincularlos al medio ambiente y viceversa.<sup>866</sup>

No obstante, no es ésta la única delimitación exclusiva respecto a otros preceptos del Código Penal ubicados en otros apartados, pues encontramos distintos tipos penales distribuidos sistemáticamente sin vinculación al medio natural, aunque a través de una simple mirada de cualquier lego en ciencias ambientales y jurídicas, resulte obvia la estrecha conexión que preside la hipotética protección que persigue su tipificación, a través del medio ambiente concebido de forma general. Entonces, el sustrato teórico que intenta al menos una interpretación unitaria del bien jurídico protegido se diluye, porque dicho interés jurídico se asocia a la tutela de otros valores diferenciados, tanto económicos como de seguridad colectiva, para las personas o sus bienes.<sup>867</sup> Así pues, se intuye que la vacilación en torno a declarar la concepción holística del medio ambiente que traspase los tabúes a que nos vemos enfrentados en el momento de entender que la protección debe ser global, unitaria y clasificada, coherentemente con los preceptos de las ciencias biológicas, no va a desaparecer por ahora. Y esta concepción compromete a las normas jurídicas penales a cumplir un papel de parche a medida que los problemas (previamente anticipados por la investigación empírica, ética y filosófica) se suceden. Esta circunstancia se revela, por

---

<sup>866</sup> De la misma opinión, OLMEDO CARDENETE, M. El autor va más allá, planteando la misma cuestión ante la opción legislativa de dedicar al Capítulo IV los delitos contra la flora y fauna, como si fueran elementos extraños al medio ambiente o a lo que entendemos por recursos naturales. “Capítulo 34. Delitos sobre la ordenación del territorio, urbanismo, patrimonio histórico y medio ambiente (III). Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente”. En *Sistema de Derecho Penal Español. Parte Especial*. Lorenzo Morillas Cuevas (coord.) Ed. Dykinson. Madrid, 2011, págs. 729-764. Alude también al problema conceptual señalado dentro del Código Penal, LOPERENA ROTA, D., para quien en el plano organizativo es donde con más acento se manifiesta el desconcierto sobre el objeto de protección pública que representa el medio ambiente. “La perplejidad del iusambientalista”. En *El Derecho Administrativo en el umbral del siglo XXI. Homenaje al Profesor Dr. D. Ramón Martín Mateo*, Tomo III. Francisco Sosa Wagner (coord.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2000, págs. 3567-3588.

<sup>867</sup> Como exponentes de esta tendencia, cito varios ejemplos. Por una parte, dentro del mismo Título XVI, el Capítulo I: “De los delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo”. Por otra, preceptos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes (arts. 341 y ss.), estragos (art. 346), incendios forestales (arts. 352 y ss.), o incendios en zonas no forestales (art. 356).

ejemplo, en la tipificación sobre depósitos y vertederos ilegales de residuos recogida en el art. 328 CP, que se ha visto sucesivamente ampliada con la incorporación de conductas hasta ahora inexistentes, sobre todo a raíz de la reforma de 2010 (por ejemplo, el transporte, recogida, valorización, eliminación, aprovechamiento, o traslado de cantidad importante de residuos, así como la explotación de instalaciones peligrosas o almacenamientos peligrosos).<sup>868</sup> Muy criticado por su extrema indeterminación aunque presentara una apariencia avanzada porque recogía una vasta gama de conductas superpuestas<sup>869</sup>, sufre otra profunda transformación a raíz de la LO 1/2015 de 30 de marzo, con una dicción más razonable desde un punto de vista sistemático y punitivo.<sup>870</sup>

Actualmente pues, el nuevo art. 326 bis se encarga exclusivamente de uno de los supuestos que ocupaba parte del misceláneo art. 328, en concreto su apartado 2, acerca de la explotación de instalaciones en las que se lleven a cabo actividades,

---

<sup>868</sup> El art.328 mantiene el tipo delictivo del texto anterior a la reforma de 2010, pero introduce nuevas figuras relacionadas con la explotación de instalaciones peligrosas y con el tratamiento de residuos, aumenta considerablemente la pena de prisión, de cinco a siete meses ahora pasa a la de prisión de seis meses a dos años (y de uno a dos años), así como la inhabilitación especial para profesión u oficio de uno a dos años. Contempla la responsabilidad penal de personas jurídicas, y remite a algunas de las circunstancias del art. 326 para llegar al tipo agravado. La redacción de este artículo es sumamente farragosa, sobre todo en su apartado 2, puesto que hubiese sido suficiente con disponer en el apartado 1 que a la conducta prevista de establecer depósitos o vertederos..., se suman las de explotación, almacenaje o utilización y la inclusión de los términos “sustancias o preparados peligrosos”. *Vid.* MONTANER FERNÁNDEZ, R. “Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente”, op. cit., pág. 402. *Vid.* QUINTERO OLIVARES, G. Recoge las interpretaciones doctrinales acerca de la mixtura de tipos dentro de este art. 328, pues el apartado 2 claramente constituye un tipo de peligro abstracto, el apartado 3 uno de peligro concreto, y también se observa algún supuesto de infracción administrativa criminalizada. En “Derecho Penal Ambiental”, op. cit., págs. 185 y ss. El eje normativo central en la aplicación de los apartados 2 (explotación de instalaciones de actividad peligrosa y almacenamiento o uso de sustancias y preparados peligrosos) y 4 (traslado de residuos) es la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, pues éstos son los únicos de todo el articulado en los que se necesita la contravención de leyes u otras disposiciones de carácter general. Más extensamente sobre el régimen jurídico administrativo de residuos, *vid.* BETANCOR RODRÍGUEZ, A. En “Derecho Ambiental”, op. cit., págs. 1028 y ss.

<sup>869</sup> Por ejemplo, los apartados 2 y 4 seguían un dictado de norma penal en blanco para conductas consistentes en la explotación de instalaciones de actividades peligrosas, almacenamiento o utilización de sustancias o preparados peligrosos, así como el traslado de una cantidad importante de residuos. Frente a los apartados 1 y 3, por ejemplo, en los que no se requería contravenir ninguna norma administrativa para incurrir en ilícito penal por el establecimiento de depósitos o vertederos de desechos o residuos sólidos o líquidos, tóxicos o peligrosos, o la conducta omisiva en relación al cumplimiento de los deberes de vigilancia sobre los respectivos procesos de recogida, transporte, valorización, etc.

<sup>870</sup> Actualmente, el art. 326.1 CP castiga con las mismas penas previstas por el tipo básico, junto a la contravención de normas dictada por éste, a quienes recojan, transporten, valoricen, transformen, eliminen, o aprovechen residuos, o no controlen o vigilen adecuadamente dichas actividades, que causen o puedan causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo, de las aguas, o a animales o plantas, muerte o lesiones graves a personas, o puedan perjudicar de forma grave el equilibrio de los sistemas naturales. Fuera del supuesto anterior, el apartado 2 tipifica el traslado de una cantidad no desdeñable de residuos en una sola acción, o varias que aparezcan vinculadas, en los supuestos a que se refiere el Derecho de la Unión Europea, con un ajuste de pena de prisión que se extiende desde 3 meses a 1 año.

almacenamiento o utilización de sustancias peligrosas. Los delitos tipificados ahora en los arts. 326 y 326 bis, junto al art. 325, que continúa representando al tipo básico del denominado delito ecológico, y el delito de prevaricación ambiental del art. 329, conforman la estructura básica de imputación de este Capítulo<sup>871</sup>.

---

<sup>871</sup> El delito del art. 329 se encuentra conectado al art. 404, que tipifica el delito de prevaricación de funcionario público de forma genérica, castigado con penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público de siete a diez años, penas que se suman a las de prisión y multa establecidas por el art. 329. En general, la doctrina valora positivamente la existencia de este tipo de prevaricación específica ambiental, con el objeto de que los funcionarios cumplan sus deberes de inspección y control en un ámbito tan vastamente sujeto al control administrativo. Así, ROMEO CASABONA, C. M. / SOLA RECHE, E. / HERNÁNDEZ PLASENCIA, J. U. et. al. *La Adaptación del Derecho penal al desarrollo social y tecnológico*. Carlos María Romeo Casabona / Fernando Gaunarteme Sánchez-Lázaro (eds.) Emilio José Armaza (coord.) Grupo de Trabajo Derecho, Ciencia, Tecnología e Innovación. Ed. Comares. Granada, 2010, págs. 531-533. Otros autores, como OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, E., critican el agravio comparativo que supone respecto a la no tipificación de esas mismas conductas cuando afectan a otros bienes jurídicos, como la salud pública. “Un ejemplo de norma jeroglífica, el artículo 329 CP: Algunas cuestiones (y ciertas respuestas) sobre consumación, tentativa, autoría, participación y pena referidas al artículo 329 CP (y figuras afines)”. En *Revista de derecho y proceso penal*, núm. 3, año 2000, págs. 13-44, en especial 17. Este art. 329 se refiere al delito cometido por autoridad o funcionario público de forma dolosa, y se añade como conducta típica la omisión de inspecciones obligatorias (*esta modalidad típica también se ha introducido en la redacción actual del art.320.1, otorgándose así un tratamiento similar a estos comportamientos cuando favorecen la comisión de delitos urbanísticos*), y se suprime la alternatividad entre la pena de prisión y la multa, en una específica intervención en la prevaricación medioambiental. Por otra parte, es cierto que la expresión “a sabiendas” restringe la aplicación del art. 331 (comisión imprudente), concebido como cláusula general que sí será aplicable al resto. En este mismo sentido, QUINTERO OLIVARES, G. “Derecho Penal Ambiental”, op. cit., págs. 204-206. La conducta omisiva ya fue admitida por el Tribunal Supremo en STS (Sala de lo Penal) 449/2003, de 24 mayo. Ponente: Excmo. Sr. José Antonio Martín Pallín [RJ 2003\4387] <<La modalidad de prevaricación omisiva ha sido aceptada por la jurisprudencia de esta Sala y adquiere todavía una mayor justificación y razonabilidad en los casos de actuaciones de los funcionarios responsables en actuaciones medioambientales. Así, la omisión del preceptivo informe de impacto ambiental, de cualquier industria que se instale en el territorio sobre el que tiene competencia en esta materia constituye, por inactividad dolosa, una decisión o actitud que equivale a la concesión de autorización o licencia, por vía de la tolerancia y permisividad y con manifiesta infracción de la normativa medioambiental>> (FJ Primero, 8). En este caso se imputaba al miembro de la Corporación Local en su calidad de Director del órgano que debía realizar la inspección de las instalaciones de una granja que utilizaba purines, y que con su inactividad ocasionó resultados dañosos por la filtración de los mismos. Cabe citar otro pronunciamiento reciente en el que se observa que esta práctica de inactividad notoria por parte de los servidores públicos del régimen local, aparece como causa cooperadora de la conducta delictiva de los particulares o de las personas jurídicas representadas por éstos, en la modalidad comisiva de emisión de ruidos. Así, la Sentencia del TSJ de Murcia (Sala de lo Civil y Penal, Sección 1ª), núm. 2/2014, de 15 de mayo. Ponente: Excmo. Sr. Manuel Abadía Vicente [ARP 2014\672], condena tanto a los dueños de un pub por un delito contra el medio ambiente, en su modalidad de contaminación acústica, en concurso ideal con un delito de lesiones, como a los Alcaldes de la localidad imputados por un delito de prevaricación por omisión. Los querellantes padecieron durante más de 11 años, de forma reiterada y continuada contaminación acústica grave y peligrosa, de cuya situación eran conocedores indiscutibles los Alcaldes, omitiendo cumplir las obligaciones que sus cargos exigen, <<siendo la omisión de los deberes específicos de Alcaldes lo que constituye a los dos omitentes en garantes de que el resultado de contaminación acústica no se produjera, siendo por tanto autores del delito de comisión por omisión del que les acusa el Ministerio Público y acusación particular>> (FJ 15). Ahora bien, a propósito de esta figura no sólo podrán ser sujetos activos los funcionarios de los órganos administrativos directamente relacionados con la concesión de la autorización ambiental, sino también aquellos otros competentes en materia medioambiental con obligaciones de inspección, al tratarse la concesión de autorización ambiental, en muchos casos, de un procedimiento administrativo complejo. Vid. MONTANER FERNÁNDEZ, R. “Los delitos contra el medio ambiente”. En *El nuevo Código Penal*.

Este delito especial de prevaricación administrativa también ha sufrido modificaciones por la reforma de 2010, con la incorporación de una nueva modalidad de conducta típica (omisión del deber de realizar inspecciones), y el endurecimiento de penas, pues se sustituye el anterior sistema alternativo (imposición de pena de prisión, o multa) por uno acumulativo (imposición de pena de prisión, y multa). Esta variación se contempla además en relación a los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo (art. 320.1), y sobre patrimonio histórico (art. 322.1), no así en los delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos, hecho que se debe percibir como una ausencia injustificada, dado que las conductas que recoge el Capítulo IV son susceptibles de caer bajo las distintas modalidades prevaricadoras (concesión de licencia ilegal, informar favorablemente una concesión de licencia, o la omisión de inspecciones o denuncias de las irregularidades apreciadas en la inspección reglamentaria), en la misma medida que los restantes supuestos.<sup>872</sup> El germen de la fundamentación básica de la aplicación de este tipo delictivo en la modalidad de ruido en la jurisprudencia penal lo inauguró el TS en 2006.<sup>873</sup>

---

*Comentarios a la reforma.* Jesús-María Silva Sánchez (dir.) Nuria Pastor Muñoz (coord.) Ed. La Ley. Madrid, 2012, págs. 509-558, en especial 538; GÓMEZ RIVERO, M<sup>a</sup> C. “El delito ecológico”. En *Derecho Penal Ambiental*. Grupo Andaluz de Investigación Jurídica. Juan Antonio Martos Núñez (dir.) Ed. Exlibris. Madrid, 2006, págs. 55-114, en especial 106 y ss. Un pormenorizado examen del tipo en GÓMEZ TOMILLO, M. “Art. 329”. *Comentarios al Código Penal* (1<sup>a</sup> ed.) Manuel Gómez Tomillo (dir.) Ed. Lex Nova. Valladolid, 2010, págs. 1283-1290; HAVA GARCÍA, E., “La reforma de los delitos contra los recursos naturales, el medio ambiente y la flora y fauna” (arts. 325, 327, 328, 329, 333, 334, 336 y 339), op. cit., pág. 293. Por su parte, ALASTUEY DOBÓN, M<sup>a</sup> C., se inclina por la solución del concurso de delitos en los casos en que la conducta del funcionario acoja alguno de los tipos del art. 329 a la vez que constituya una forma de participación en el delito previsto por el art. 325. “El ámbito de aplicación del artículo 329 CP: examen de sus conductas típicas”. En *Revista de Derecho Penal y Criminología*, 2<sup>a</sup> Época, núm. 9, año 2002, págs. 11-37.

<sup>872</sup> En el ámbito de la *Green Criminology*, la doctrina más eminente aborda las consecuencias del impacto y la expansión del tráfico y del comercio ilegal de especies. Al respecto, *vid.* SOLLUND, R. “Animal Trafficking and Trade: Abuse and Species Injustice”; NURSE, A. “Perspectives on Criminality in Wildlife”. En *Emerging Issues in Green Criminology. Exploring Power, Justice and Harm*. Reece Walters / Diane S. Westerhuis / Tanya Wyatt (eds.) Ed. Palgrave Macmillan. Basingstoke (UK), 2013, págs. 72-92 y 127-144 respectivamente.

<sup>873</sup> STS (Sala de lo Penal, Sección 1<sup>a</sup>) núm. 1091/2006 de 19 de octubre de 2006. Ponente: Excmo. Sr. José Antonio Martín Pallín [RJ 2006\8364]. En ella, se condena a uno de los acusados a la pena de un año y seis meses de prisión, más ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, como autor de un delito continuado de prevaricación medioambiental. Conducta omisiva del Alcalde que a sabiendas desprecia la normativa y sin tener en cuenta sus obligaciones deja en funcionamiento a una fábrica de azulejos que causa ruidos superiores a los permitidos, conociendo que la policía municipal había llevado a cabo inspecciones con aparatos inservibles, y que conscientemente no realiza acto alguno para solventar el problema ante las numerosas quejas. La sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón (Sección 2<sup>a</sup>) de 9 de septiembre de 2005 absolvió a los acusados (Alcalde y representante de la empresa) basándose en la no fiabilidad de las mediciones sismométricas practicadas porque se llevaron a cabo con aparatos cuyas características no constan. Por su parte, el TS dictó nueva sentencia casando la de la Audiencia y argumenta lo siguiente: <<En esta clase de asuntos no se puede descartar, de forma tajante, las pruebas indiciarias [...] Nos encontramos, no ante un solo indicio, sino ante una

Ahora bien, transcurrido poco más de un lustro de este dictamen, el TEDH condena a España por violación del art. 6.1 del CEDH (derecho a un proceso equitativo), pues esta resolución del TS anulaba una sentencia de carácter absolutorio dictada por la Audiencia Provincial de Castellón, efectuando una nueva valoración de las pruebas de carácter no documental sin que tuviera lugar una vista pública, por lo que el Tribunal considera que los demandantes fueron privados de su derecho a defenderse en el marco de un debate contradictorio.<sup>874</sup>

No se contemplan más conductas que de manera autónoma supongan un atentado contra el medio ambiente, pues el resto del articulado se ocupa de los diferentes supuestos agravados –art. 326–, la responsabilidad penal de personas jurídicas –art. 327–, y la comisión por imprudencia grave –art. 331–, a excepción del art. 330, del que pasamos a ocuparnos en el siguiente epígrafe.

Las tres Disposiciones Comunes que contiene el Capítulo V se refieren, en primer lugar, a las conductas definidas en el Título XVI cuando se llevan a cabo en un entorno natural protegido –art. 338–, que serán castigadas con las penas superiores en grado a las respectivamente previstas.<sup>875</sup> La última de ellas responde al arquetipo de circunstancia atenuante específica que desplaza a la circunstancia atenuante genérica prevista por el art. 21.5. Se ocupa de la situación del sujeto culpable cuando ha procedido voluntariamente a reparar el daño causado (conducta positiva que implica la eliminación, o por lo menos la reducción de los efectos causalmente derivados de la

---

*acumulación reiterada de tantos indicios que resultaría temerario prescindir de ellos refugiándose en un dato negativo y evasivo que se limita a desvalorizar los aparatos medidores del ruido. Los juzgadores tenían datos técnicos imprescindibles para afirmar de manera positiva, que estaban inutilizados o eran inservibles. Ello nos lleva a la necesidad de conjugar los datos científicos con los elementos reales o irrefutables que surgen de la propia existencia del ruido como elemento perennemente presente a lo largo de este interminable conflicto>> (FJ Tercero, 17). Otras referencias judiciales de aplicación del art. 329 en la modalidad de ruido en ALASTUEY DOBÓN, C. “Derecho penal: la emisión de ruidos como delito de contaminación ambiental”, op. cit., pág. 325.*

<sup>874</sup> *Vilanova Goterris y Llop García contra España*. STEDH (Sección 3ª) de 27 de noviembre de 2012 [TEDH 2012/111]. Art. 6 CEDH: <<Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa [...] por un Tribunal [...] que decidirá [...] sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella>>.

<sup>875</sup> Art.338. <<Cuando las conductas definidas en este Título afecten a algún espacio natural protegido, se impondrán las penas superiores en grado a las respectivamente previstas>>. El obstáculo principal de esta disposición es su incompatibilidad por *bis in idem* tanto con el art. 330 (que se analiza *infra*) como con el art. 335.2, relativo a la caza y pesca de especies no amenazadas en terrenos públicos o privados ajenos sometidos a régimen cinegético especial sin la debida autorización del titular, en la medida en que coincidan con lo que la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad considera espacios naturales protegidos, como sucede con los Parques Nacionales. Al respecto, *vid.* MUÑOZ CONDE, F. / LÓPEZ PEREGRÍN, C. / GARCÍA ÁLVAREZ, P. En “Manual de Derecho penal medioambiental”, op. cit., pág. 344.

conducta típica)<sup>876</sup>, en cuyo caso se verá beneficiado con penas inferiores en grado, ya que necesariamente los jueces y tribunales deben apreciar tal circunstancia por aplicación del art. 340.<sup>877</sup> A ninguno de los dos les afecta las reformas de 2010 y 2015.

Sin embargo el art. 339 ha sufrido una modificación que, aunque en apariencia parezca trivial, encierra la vocación de instar forzosamente al cumplimiento del principio *–quien contamina paga–* y a su definitiva consagración normativa en el ordenamiento penal, a pesar de que la medida posee un carácter civil, no penal. Las consecuencias de su aplicación son igualmente alcanzables por la vía de la responsabilidad civil derivada del delito y los presupuestos que la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé en relación a las medidas cautelares.<sup>878</sup> Con su nueva redacción, los jueces y tribunales deben ordenar forzosamente al autor del hecho que se encargue de adoptar las medidas necesarias para restaurar el equilibrio ecológico perturbado, o cualquier otra medida cautelar que persiga el mismo fin, a diferencia del texto antecesor, que lo configuraba de manera potestativa. A pesar de ello no delimita a quién hay que considerar autor del hecho, es decir, si habría que incluir a la persona jurídica (aunque materialmente sea imposible considerarla autor). No obstante, la propia lógica del precepto, más próximo a la responsabilidad civil que a la penal, y las pretensiones del legislador, parecen revelar que su inclusión resulta necesaria, porque si no carecerían de sentido los criterios de imputación acerca de las personas jurídicas,

---

<sup>876</sup> En palabras de CONDE-PUMPIDO TOURÓN, C., se establece un supuesto especial de arrepentimiento: el arrepentimiento ecológico. “Art. 340”. En *Código Penal. Doctrina y Jurisprudencia*. Tomo II, op. cit., pág. 3297.

<sup>877</sup> Art.340: <<Si el culpable de cualquiera de los hechos tipificados en este Título hubiera procedido voluntariamente a reparar el daño causado, los Jueces y Tribunales le impondrán la pena inferior en grado a las respectivamente previstas>>. En caso de aplicar solamente la circunstancia atenuante genérica del art. 21.5, conforme a la regla del art. 66.1. 1ª, la pena se vería reducida en su mitad inferior. En este concurso de leyes, el principio de especialidad determinaría la aplicación preferente del tipo privilegiado del art. 340, pero esta solución entraña otro interrogante. La cuestión es que si la atenuante del art. 21.5 se aprecia como muy cualificada, la regla a seguir sería la prevista por el art. 66.1.2ª, que permite rebajar la pena en uno o dos grados, por lo que el efecto del art. 340 sería desplazado. Vid. GÓMEZ TOMILLO, M. “Art. 340”. En *Comentarios al Código Penal*, op. cit., pág. 1319. SILVA SÁNCHEZ, J. M. / MONTANER FERNÁNDEZ, R. “Los delitos contra el medio ambiente. Reforma legal y aplicación judicial”, op. cit., págs. 209 y ss; MUÑOZ CONDE, F. / LÓPEZ PEREGRÍN, C. / GARCÍA ÁLVAREZ, P. En “Manual de Derecho penal medioambiental”, op. cit., pág. 346; CUADRADO RUIZ, Mª A. “Consecuencias jurídicas en los delitos contra el medio ambiente”. En *Derecho Penal Ambiental*. Grupo Andaluz de Investigación Jurídica. Juan Antonio Martos Núñez (dir.) Ed. Exlibris. Madrid, 2006, págs. 221-240, en especial 226 y ss.

<sup>878</sup> En este mismo sentido GÓMEZ TOMILLO, M., para quien esta Disposición Común es superflua y distorsionadora por los motivos citados. “Art. 339”. En *Comentarios al Código Penal*, op. cit., págs. 1318 y 1319. A juicio de SILVA SÁNCHEZ, J. Mª / MONTANER FERNÁNDEZ, R., su naturaleza jurídica es de medida cautelar que a su vez el propio juez o tribunal puede imponer a terceros no necesariamente coincidentes con el autor del hecho. En “Los delitos contra el medio ambiente. Reforma legal y aplicación judicial”, op. cit., pág. 261.

ya que éstas se verían fuera de la obligación de restaurar lo perturbado. Así parece entenderlo también parte de la doctrina.<sup>879</sup>

Otro sector doctrinal opina que esta cláusula de responsabilidad representa en realidad un modelo de consecuencias accesorias específicas en materia de medio ambiente, que permiten adoptar las medidas tanto cautelarmente como a modo de reparación, cuando se adoptan con posterioridad al juicio.<sup>880</sup> Se ha perdido una gran oportunidad para que esta consideración imperativa se hubiera trasladado, aprovechando la coyuntura, a otros preceptos del Título XVI en los que también resultaría apropiada y necesaria, como son el art.319.3, que dentro de los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo sigue conservando la expresión <<*motivadamente, podrán ordenar...*>>, o los arts.321 y 323, en relación a los delitos sobre el patrimonio histórico.<sup>881</sup>

Máxime cuando las medidas restaurativas son de consecución más sencilla en materia de urbanismo que en materia medioambiental en muchos casos. Pensemos por ejemplo en la dificultad que puede entrañar la depuración y limpieza del cauce de un río al que se han vertido sustancias contaminantes, o el vertido de una cantidad importante de crudo al mar, frente a la demolición de un inmueble edificado ilegalmente o la reconstrucción o restauración de una obra protegida por su interés artístico, histórico o cultural.<sup>882</sup>

---

<sup>879</sup> Con la nueva redacción, el art.339 queda como sigue: <<*Los jueces o tribunales ordenarán la adopción, a cargo del autor del hecho, de las medidas necesarias encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado, así como de cualquier otra medida cautelar necesaria para la protección de los bienes tutelados en este Título*>>. El problema respecto a la interpretación de a quién se puede considerar autor se hubiera solventado fácilmente sustituyendo el término *autor* por el de *responsable*. Se decantan por una interpretación extensiva MUÑOZ LORENTE, J. / BAUCCELLS LLADÓS, J. / FARALDO CABANA, P. “Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente” (arts.325, 327, 328, y 329). En *Comentarios a la Reforma Penal de 2010*, op. cit., págs. 396 y 397; GÓMEZ TOMILLO, M. “Art. 339”. En *Comentarios al Código Penal*, op. cit., pág. 1318; MATELLANES RODRIGUEZ, N. “Derecho penal del medio ambiente”, op. cit., pág. 209; MARTOS NÚÑEZ, J. A. “El delito de contaminación acústica”, op. cit., pág. 79.

<sup>880</sup> Por ejemplo, CORCOY BIDASOLO, M. En “Comentarios al Código Penal, Reforma LO 5/2010”, op. cit., pág. 761.

<sup>881</sup> En este mismo sentido, MUÑOZ LORENTE, J. / BAUCCELLS LLADÓS, J. / FARALDO CABANA, P. En “Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente” (arts.325, 327, 328, y 329), op. cit., pág. 397.

<sup>882</sup> Al respecto, los arts. 319.3, 321 y 323 *in fine* expresan respectivamente que <<*los jueces y tribunales, motivadamente, podrán ordenar, a cargo del autor del hecho*>> la demolición de la obra y la reposición a su estado originario de la realidad física alterada; la reconstrucción o restauración de la obra y la adopción de medidas a restaurar el bien dañado en el caso de archivos, registros, museos, bibliotecas, centros docentes, gabinetes científicos, instituciones análogas o bienes de valor artístico, histórico, cultural o monumental, así como en yacimientos arqueológicos.



Si realmente se persiguen de forma más gravosa y contundente los daños que se pueden producir por la comisión de un delito ecológico (recordemos que las penas previstas en los arts. 319.1 y 2, 321 y 323 no alcanzan el límite máximo de los cinco años del art.325), entonces resulta incongruente que el legislador obligue al juez a ordenar la restauración en unos casos y resulte una mera facultad en otros.

### **6.2.1.- El tipo autónomo y de resultado del art. 330: un caso de *rara avis* en la estructura general de los delitos de peligro abstracto**

Mención diferenciada merece este artículo, calificado por la doctrina mayoritaria de *cuerpo extraño* dentro de los delitos contra el medio ambiente por varias razones.<sup>883</sup> En primer lugar, por ser el único en todo el Capítulo que se aparta de la concepción clásica de delito de peligro que acompaña a los delitos contra el medio ambiente.<sup>884</sup> Se trata de un delito de resultado, su aplicación requiere que se produzca un daño grave sobre alguno de los elementos que hayan servido de base a la calificación del espacio natural protegido y además no se encuentra sometido a las modalidades comisivas de los arts. 325 y 326.<sup>885</sup> La magnitud del daño funciona como elemento normativo-valorativo, cuya misión evaluadora en cada caso concreto corresponde al juez, y ello produce una disminución en la seguridad jurídica.<sup>886</sup>

<sup>883</sup> Por ejemplo CARMONA SALGADO, C. En “Incidencias de la reforma penal de 2010 en los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente” op. cit., pág. 441.

<sup>884</sup> Art. 330: <<Quien, en un espacio natural protegido, dañare gravemente alguno de los elementos que hayan servido para calificarlo, incurrirá en la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses>>.

<sup>885</sup> En el supuesto previsto por el art. 330, subrayan la inexistencia de accesoriedad administrativa característica de los arts. 325 y 326, otorgándole la calificación de delito de resultado de lesión, SILVA SÁNCHEZ, J. M<sup>a</sup> / MONTANER FERNÁNDEZ, R. En “Los delitos contra el medio ambiente. Reforma legal y aplicación judicial”, op. cit., pág. 212.

<sup>886</sup> Como ya revelaba hace tiempo CONDE-PUMPIDO TOURÓN, C., el sentido del término “grave” hay que juzgarlo de manera cualitativa, no cuantitativa. “Art. 330”. En *Código Penal. Doctrina y Jurisprudencia*. Tomo II, op. cit., pág. 3265. Por tanto, la gravedad del daño se entenderá siempre que la conducta haya producido un deterioro de tal entidad que repercuta seriamente en las características que hayan dado lugar a la denominación de ese espacio protegido, pese a la imprecisión del término “grave”. Vid. HAVA GARCÍA, E. *Protección jurídica de la fauna y flora en España*. Ed. Trotta. Madrid, 2000, págs. 260 y ss; CARMONA SALGADO, C. En “Incidencias de la reforma penal de 2010 en los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente”, op. cit., pág. 442. En opinión de SANTA CECILIA GARCÍA, F., el daño puede alcanzar la destrucción, inutilización, deterioro o menoscabo de los

Segundo, por el laberinto legislativo en el que hay que sumergirse con detenimiento para lograr una concreción de los elementos dañados que den lugar a la aplicación del tipo, contando con la abundante normativa de naturaleza sectorial, autonómica, estatal y supranacional, dado que también se entienden incluidos los espacios naturales protegidos transfronterizos.<sup>887</sup>

Tercero, por la superposición o colisión con otras figuras delictivas, especialmente las relativas a la protección de la flora y fauna, y patrimonio histórico; en estos casos, el criterio de la alternatividad en base a la gravedad de la pena impone la aplicación del art. 330, al ser ésta mayor.<sup>888</sup>

Cuarto, por la fricción que ofrece este ilícito respecto al tipo básico del art. 325 con el que comparte Capítulo, pues en el caso de que la emisión de ruidos dañara

---

elementos del espacio natural. En “Delitos contra los recursos naturales y medioambiente”, op. cit., pág. 928. En términos similares, MATELLANES RODRÍGUEZ, N. En “Derecho Penal del Medio Ambiente”, op. cit., pág. 168; MUÑOZ CONDE, F. / LÓPEZ PEREGRÍN, C. / GARCÍA ÁLVAREZ, P. En “Manual de Derecho penal medioambiental”, op. cit., pág. 296.

<sup>887</sup> Para desarrollar este concepto normativo hay que partir de la definición de “espacio natural protegido” que hasta 2007 recogía la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, que incluía Parques, Reservas Naturales, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos (art. 12). En la actualidad, esta protección se ha desarrollado a través de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en cuya clasificación se añaden las Áreas Marinas Protegidas (art. 27). Esta norma introdujo en España el Derecho de conservación de la naturaleza internacionalmente homologable, mediante la ratificación de convenios multilaterales en diferentes materias como los humedales, el tráfico internacional de especies amenazadas o migratorias, y sobre el patrimonio natural europeo. Respecto a la Red de Parques Naturales, la Ley 5/2007, de 3 de abril. Con más detalle JAVATO MARTÍN, A. M<sup>a</sup>. “Artículo 330”. *Comentarios al Código Penal* (1<sup>a</sup> ed.) Manuel Gómez Tomillo (dir.) Ed. Lex Nova. Valladolid, 2010, pág. 1291; MUÑOZ CONDE, F. / LÓPEZ PEREGRÍN, C. / GARCÍA ÁLVAREZ, P. “Manual de Derecho penal medioambiental”, op. cit., págs. 297 y 298. La nueva Ley de Parques Naturales se encuentra todavía en fase legislativa, pero la Disposición adicional primera del Proyecto de Ley incluye los siguientes Parques Nacionales integrados en la Red: el conjunto de parques nacionales ya declarados, compuesto por el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany Sant Maurici, el Parque Nacional de los Picos de Europa, el Parque Nacional marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, el Parque Nacional marítimo-terrestre del Archipiélago de Cabrera, el Parque Nacional de Cabañeros, el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, el Parque Nacional de Monfragüe, el Parque Nacional de Sierra Nevada, el Parque Nacional de Doñana, el Parque Nacional de Timanfaya, el Parque Nacional del Teide, el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, el Parque Nacional de Garajonay, y el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Por otra parte, cualquier nueva catalogación de Parque Nacional por las Cortes Generales supondrá su automática integración en la Red de Parques Nacionales. Proyecto de Ley de Parques Nacionales (121/000078).

<sup>888</sup> Según el art. 8. 4<sup>a</sup> CP, la solución a este concurso de leyes es que el precepto penal más grave excluye los que castigan el hecho con una pena menor. *Vid.* QUINTERO OLIVARES, G. Por ejemplo, este art. 330, en relación a los supuestos de agresión a espacios naturales protegidos que comporten la destrucción o alteración del hábitat de alguna especie (art. 332), no dará lugar a un concurso de delitos, sino que será de aplicación el delito medioambiental. En “Derecho Penal Ambiental”, op. cit., pág. 208. Los delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos del Capítulo IV, en sus respectivos tipos básicos, prevén penas que no superan los dos años, frente a los cuatro contemplados por el art. 330. Para una consulta general sobre la legislación penal de la flora y fauna y su recorrido histórico, *vid.* HAVA GARCÍA, E. “Protección jurídica de la fauna y flora en España”, op. cit., págs. 229 y ss.

gravemente algún elemento del espacio natural protegido (daño innegable desde un punto de vista científico)<sup>889</sup>, la intervención penal será prácticamente nula.<sup>890</sup>

Quinto, por los conflictos que produce respecto al delito de incendio forestal cualificado del art. 353.1. 3º *-que altere significativamente las condiciones de vida animal o vegetal o afecte a algún espacio natural protegido-*, así como por la contradicción con lo estipulado por la Disposición Común del art. 338, que agrava la pena en grado a las respectivamente previstas cuando las conductas afecten a algún espacio natural protegido, aunque dicha Disposición no alcanza al art. 330, porque supondría una vulneración del principio *ne bis in idem*.<sup>891</sup>

---

<sup>889</sup> Por ello, existen ciertas medidas preventivas en espacios naturales con independencia de su inclusión como espacio natural protegido. Por ejemplo, el art. 21 de la Ley del Ruido de 2003. *Vid.* RUIZ DE APODACA ESPINOSA, A. “Instrumentos de prevención y corrección de la contaminación acústica”, op. cit., págs. 110 y 111.

<sup>890</sup> Tres son las soluciones aportadas por la doctrina a esta problemática concursal. *Vid.* MATELLANES RODRÍGUEZ, N. Apunta que la relación entre el art. 325 y el 330 es un concurso ideal de delitos del art. 77.1 porque la situación de riesgo no se contempla en el art. 330. Así, alude a la interpretación que ofrece el tribunal juzgador del caso Prestige, en cuya resolución se imputan por ambos delitos a los responsables. En “Derecho Penal del Medio Ambiente”, op. cit., págs. 168 y 169. La misma opinión comparten SILVA SÁNCHEZ, J. Mª / MONTANER FERNÁNDEZ, R. En “Los delitos contra el medio ambiente. Reforma legal y aplicación judicial”, op. cit., pág. 213. Sin duda, respecto al resto de modalidades de las conductas que prohíbe el art. 325 (sin considerar el supuesto agravado previsto en el último párrafo), como son vertidos, emisiones, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, inyecciones o depósitos, convenimos en que ésta es la solución más apropiada. Sin embargo, entendemos que tanto ruidos como vibraciones tienen, en esta hipótesis, un escaso recorrido material y procesal. Otro sector de la doctrina entiende que es más correcto aplicar el art. 325 con la agravante contenida en el art. 338, pues en caso contrario éste último precepto perdería toda virtualidad práctica. Así, CARMONA SALGADO, C. En “Incidencias de la reforma penal de 2010 en los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente”, op. cit., pág. 443. Por último, hay quien se inclina por apreciar un concurso aparente de normas a resolver por la regla de la consunción; el art. 330 absorbe lo contenido en el art. 325 al ser éste concebido como un delito de peligro. Sigue tal línea interpretativa SUÁREZ GONZÁLEZ, C. “Artículo 330”. En *Comentarios al Código Penal*. Gonzalo Rodríguez Mourullo (dir.) Agustín Jorge Barreiro (coord.) Ed. Civitas. Madrid, 1997, pág. 938. Cuando excepcionalmente el daño causado absorba todo el peligro creado, ésta será también la solución para MUÑOZ CONDE, F. / LÓPEZ PEREGRÍN, C. / GARCÍA ÁLVAREZ, P. No obstante, en el resto de supuestos sería apreciable un concurso de delitos. En “Manual de Derecho penal medioambiental”, op. cit., pág. 299.

<sup>891</sup> Respecto a la circunstancia 3ª del art. 353.1, cuando surja un problema de subsunción respecto al art. 330, será de aplicación el primero, por el principio de especialidad y por llevar aparejada la pena del tipo básico de incendio forestal (de uno a cinco años) en su mitad superior. En el supuesto del art. 338, su diferencia con el art. 330 estriba en que en éste se protegen específicamente los “elementos” que configuran la catalogación del espacio en “espacio natural protegido” y en el primero la protección se extiende al conjunto. *Vid.* QUINTERO OLIVARES, G. En “Derecho Penal Ambiental”, op. cit., pág. 209; HAVA GARCÍA, E. “Protección jurídica de la fauna y flora en España”, op. cit., pág. 262; MATELLANES RODRÍGUEZ, N. En “Derecho Penal del Medio Ambiente”, op. cit., pág. 169. En opinión de JAVATO MARTÍN, A. Mª, la calificación que contiene el art. 338 queda excluida de aplicación respecto al art. 330 por la regla de la inherencia (art. 67). “Artículo 330”. *Comentarios al Código Penal*, op. cit., pág. 1292. *Vid.* GÓMEZ TOMILLO, M. Aboga por el concurso aparente de normas porque la combinación entre los arts. 325 y 338 desplaza al art. 330 sobre la base del principio de consunción del art. 8. 3. “Art. 338”. En *Comentarios al Código Penal*, op. cit., pág. 1317. Según CONDE-PUMPIDO TOURÓN, C., la circunstancia agravante del art. 338 excluye su aplicación al art. 330, pues supondría una violación del principio *non bis in eadem* [sic]. “Art. 338”. En *Código Penal*.

En sexto lugar, es preciso resaltar la problemática que suscita la aplicación de la forma comisiva imprudente grave, prevista con carácter general en el art.331, aunque existen autores que defienden su aplicabilidad a través del error de tipo vencible.<sup>892</sup>

Este título de imputación se cuestiona igualmente en relación al resto de tipos previstos en este Capítulo<sup>893</sup>, al tratarse como ya hemos visto de delitos de peligro, lo que dificulta más si cabe esta modalidad comisiva.<sup>894</sup> En concreto, la relación que vincula al art. 330 con el art. 325 en su modalidad de emisión de ruidos o vibraciones resulta poco fructífera. Por ejemplo, ¿en qué supuestos se podrá apreciar la existencia de ruidos que provoquen daños a un espacio natural protegido, si tenemos en cuenta que la disposición del art. 338 ya prevé ese mismo comportamiento adelantado a la protección de la situación de fase de peligro, y no de resultado? Los supuestos son restringidos en la misma medida en que resultan prácticamente inaplicables, al menos por dos motivos: 1.- La posibilidad de promover acciones legales, a pesar de contar con un rango de legitimidad suficiente. 2.- La dificultad de aportar una prueba válida y

---

*Doctrina y Jurisprudencia*. Tomo II, op. cit., pág. 3295; MUÑOZ CONDE, F. / LÓPEZ PEREGRÍN, C. / GARCÍA ÁLVAREZ, P. En “Manual de Derecho penal medioambiental”, op. cit., págs. 299 y 344.

<sup>892</sup> Vid. SILVA SÁNCHEZ, J. M<sup>a</sup> / MONTANER FERNÁNDEZ, R. En “Los delitos contra el medio ambiente. Reforma legal y aplicación judicial”, op. cit., pág. 217; MUÑOZ CONDE, F. / LÓPEZ PEREGRÍN, C. / GARCÍA ÁLVAREZ, P. En “Manual de Derecho penal medioambiental”, op. cit., pág. 298.

<sup>893</sup> Un estudio de lo que ha supuesto la desaparición de la cláusula general prevista por el antiguo art. 565 y la adopción de la nueva fórmula de *numerus clausus* prevista por el art. 12 en relación al concepto de autor y a la conducta en los delitos imprudentes, en PÉREZ MANZANO, M. *Autoría y participación imprudente en el Código penal de 1995*. Civitas. Madrid, 1999. También PÉREZ DEL VALLE, C. *La imprudencia en el Derecho penal. El tipo subjetivo del delito imprudente*. Ed. Atelier. Barcelona, 2012.

<sup>894</sup> En este mismo sentido QUINTERO OLIVARES, G. En particular, denuncia la falta de claridad acerca de la imputación de una persona jurídica por imprudencia en delitos contra el medio ambiente. También la escasa aplicabilidad del art. 331 a la conducta tipificada en el art. 329, pues la expresión <<a sabiendas>> utilizada por el Código, descarta la posibilidad de apreciar imprudencia, al denotar el término la exigencia de dolo directo, de acuerdo a la interpretación más extendida de dicha expresión. En “Derecho Penal Ambiental”, op. cit., págs. 204, 211 y 212. En la misma línea, SILVA SÁNCHEZ, J. M<sup>a</sup> / MONTANER FERNÁNDEZ, R. Opinan que la cláusula general del art. 331 supone una declaración de relatividad, inclinándose por una interpretación restrictiva respecto al supuesto de prevaricación ambiental previsto por el art. 329. En “Los delitos contra el medio ambiente. Reforma legal y aplicación judicial”, op. cit., págs. 252 y 253. Esta misma interpretación la sigue MATELLANES RODRÍGUEZ, N. En todo caso, el art. 331 incorpora la cláusula <<en su caso>>, lo que despeja las dudas, pues sólo será aplicable cuando efectivamente sea posible. En “Derecho Penal del Medio Ambiente”, op. cit., págs. 170 y 171. Por su parte, GÓMEZ TOMILLO, M., defiende la posibilidad de conjugar el art. 338 con los tipos imprudentes en aquellos supuestos en los que el sujeto abarque con su dolo la condición de espacio natural protegido y aún así, lleve a cabo la conducta típica de forma imprudente. En “Art. 338”. *Comentarios al Código Penal*, op. cit., pág. 1318. Rechazan la aplicabilidad de la cláusula de imprudencia a los supuestos de prevaricación ambiental (art. 329), así como a algunos de los supuestos cualificados del art. 326, MUÑOZ CONDE, F. / LÓPEZ PEREGRÍN, C. / GARCÍA ÁLVAREZ, P. En “Manual de Derecho penal medioambiental”, op. cit., pág. 299.

suficiente, capaz de acreditar la afectación producida a un elemento del sistema natural a causa del ruido emitido.<sup>895</sup>

Por último, al hilo de la dicotomía apuntada al comienzo del epígrafe anterior, que preside la redacción de este Capítulo III dedicado a los delitos contra el medio ambiente, el art. 330 presenta una localización sistemática insólita, ajena a los artículos que le acompañan por su estructura típica, y más próxima por afinidad a los delitos contra la flora y la fauna, en los que la protección a elementos singulares prima sobre la protección del medio natural observada como un conjunto orgánico.

Sin embargo, ninguna de estas interpretaciones penetra en la reciente propuesta gubernamental por la que se pretende prorrogar la caza, la pesca, la extracción maderera y otros usos incompatibles con la actual regulación sobre espacios naturales, en la nueva Ley de Parques Naturales, que extiende a 6 años el plazo prorrogable desde su aprobación definitiva, para contrarrestar el efecto que produciría tener que afrontar el pago de las indemnizaciones a los propietarios privados del suelo en el que se ubican.

---

<sup>895</sup> Sobre la incertidumbre general que plantea probar el nexo causal en los daños al medio ambiente, *vid.* LLORENTE SÁNCHEZ-ARJONA, M. Los factores principales que dificultan esta tarea serían: la distancia, las fuentes de inmisión, el tiempo y la duda científica. “La prueba de la relación de causalidad en los daños ambientales”. En *Derecho Penal Ambiental*. Grupo Andaluz de Investigación Jurídica. Juan Antonio Martos Núñez (dir.) Ed. Exlibris. Madrid, 2006, págs. 315-329.

### **6.3.- Evolución de las posiciones en la doctrina penal española en relación a la naturaleza jurídica del medio ambiente**

La mayor parte de penalistas que se han interesado por estudiar los delitos de la esfera medioambiental desde que por primera vez nuestro Código Penal acogiera esta figura punible, a raíz de la incorporación del derogado art. 347 bis del Código Penal por la reforma de 1983, mostraban una perfecta sintonía con la idea de profunda y exclusiva vinculación con la protección de los intereses vitales del hombre, por tanto, el antropocentrismo fue la única opción elegida e implantada.

Este soporte argumentativo fue ciertamente provechoso para que las incipientes conductas de riesgo hacia al bien jurídico medioambiente asentaran sus posiciones en el esquema inveterado del Derecho penal. Ahora bien, transcurrido el tiempo oportuno para que podamos abordar este aspecto sin las ataduras estructurales y dogmáticas sobre las que se originó, es el momento de postularse en otras direcciones más próximas a considerar que este bien jurídico es lo suficientemente poderoso como para recibir una atención acorde a todo aquello que ya conocemos, es decir, a la extraordinaria comunión que existe entre los distintos elementos que conforman lo que denominamos medioambiente, concepto por otra parte realmente arduo de definir bajo contornos bien delimitados.

De hecho, la inclusión del fenómeno del ruido se debió a una expansión en los términos de protección que aglutinaba el tipo básico del delito, acorde con la *vis expansiva* que el objeto material ambiental desataba, tanto en la comunidad científica encargada de divulgar nuevas y contrastadas investigaciones, como en la jurídica, que aprehendía cada vez con mayor soltura la necesaria intervención del Derecho penal, fomentada por el reclamo de una sociedad cada vez más sensibilizada ante la degradación del medio ambiente.<sup>896</sup>

---

<sup>896</sup> La cantidad de procesos incoados no ha dejado de crecer, también en la modalidad de comisión por imprudencia. Al respecto, *vid.* MESTRE DELGADO, E. “Delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente”. En *Delitos y faltas. La parte especial del Derecho penal*. Carmen Lamarca Pérez (coord.) Ed. Colex. Madrid, 2012, págs. 521-552, en especial 522. Respecto al papel adquirido por el medio ambiente en la sociedad actual, *vid.* MATELLANES RODRÍGUEZ, N. En “Derecho penal del medio ambiente”, *op. cit.*, págs. 33-35.

La mayor parte de los postulados homocéntricos radicales han sido paulatinamente abandonados, dejando paso a consideraciones de carácter mixto o corte moderado, en los que se dota de protección anticipada tanto a los sistemas naturales como a las personas.<sup>897</sup> El ejemplo paradigmático de esta tendencia lo encontramos en la redacción vigente del art. 325, cuya línea divisoria entre los dos postulados se encuentra representada en la redacción de su inciso final, por cuanto la pena se agrava en función de si el riesgo de grave perjuicio alcanza o no a la salud de las personas.<sup>898</sup> La fórmula final del tipo no se puede considerar como un precepto autónomo, sino como agravante del delito ecológico, puesto que tal previsión deriva de que el riesgo provenga de alguna de las modalidades de acción enunciadas.<sup>899</sup> Sin embargo, esta situación se invierte de manera total en lo referente al ruido, y a ello nos referimos en el epígrafe 6.3.1.1.

### **6.3.1.- Propuestas en la configuración de su protección jurídico-pública conexas a la emisión de ruidos**

El verdadero reto en el futuro será determinar si las estructuras y condiciones de imputación que permiten incriminar a alguien (incluida la persona jurídica) por llevar a cabo determinadas conductas que atentan contra el medio natural, pueden continuar coexistiendo con las formuladas respecto a la protección de otros bienes jurídicos distintos en condiciones de igualdad, o si sería preferible una configuración especial, específica, regulada por entero fuera del Código Penal, en la que el Derecho

---

<sup>897</sup> A favor de una interpretación vinculada a la afectación directa o indirecta en el desarrollo (presente o futuro) de las personas SILVA SÁNCHEZ, J. M<sup>a</sup> / MONTANER FERNÁNDEZ, R. En “Los delitos contra el medio ambiente. Reforma legal y aplicación judicial”, op. cit., pág. 27. En contra, ALASTUEY DOBÓN, M<sup>a</sup> C. En “El delito de contaminación ambiental (art. 325.1 del Código Penal)”, op. cit., págs. 50 y ss.

<sup>898</sup> Vid. CARMONA SALGADO, C. En “Incidencias de la reforma penal de 2010 en los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente”, op. cit., pág. 433; SANTA CECILIA GARCÍA, F. En “Delitos contra los recursos naturales y medioambiente”, op. cit., pág. 920; GÓRRIZ ROYO, E. M. En “Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente”, op. cit., pág. 213; MESTRE DELGADO, E. En “Delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente”, op. cit., pág. 536.

<sup>899</sup> Vid. SUÁREZ GONZÁLEZ, C. “Artículo 325”. En *Comentarios al Código Penal*. Gonzalo Rodríguez Mourullo (dir.), op. cit., pág. 926.

administrativo sancionador actuase como verdadera franja de contención a través de su incorporación taxativa como elemento objetivo de tipicidad.<sup>900</sup>

La superación a la que nos referimos comporta la extralimitación de un término cuantitativo de infracciones (que no proscribe la frontera cualitativa, pues la propia gradación establecida conservaría esa opción); dicho rebasamiento intervendría entonces como fundamento más que acreditado para dar inicio a un proceso penal, creemos que con mayor respeto al principio de mínima intervención que el que se profesa con la metodología utilizada en la actualidad.

Esta frontera cuantitativa tiene que ver con la reiteración de la conducta de riesgo por parte del sujeto activo, no con los límites reflejados en las leyes o disposiciones generales a las que se refiere el art. 325, aunque necesariamente éstos precisarían una revisión profunda de lo ya articulado, o una reformulación para lograr que no se produjeran supuestos desproporcionados en relación al criterio de lesividad.

En el caso de ciertas intervenciones en el medio natural, es razonable sostener que una acción aislada puede generar un perjuicio grave del equilibrio del sistema natural del que se trate, siempre que éste no se encuentre ya en una fase de desequilibrio previo en la que esa precisa actuación no produzca la alteración suficiente que reclama el tipo básico. Sin embargo, en la variedad objeto de este trabajo, se debe cuestionar seriamente esta premisa.

Precisamente, la única modalidad comisiva que integra el delito ecológico sometida a intensas críticas respecto de su ubicación sistemática, es la emisión de ruidos, ello desde que no pasa inadvertido el incremento de condenas penales

---

<sup>900</sup> Que no presupone una reducción del contenido del injusto. Por ejemplo, en Japón (cuya Ley sobre delitos contra el medio ambiente fue muy estudiada en la década de los 70 del s. XX: Ley 142/1970, de 25 de diciembre, que regula sólo la contaminación causada por actividades empresariales susceptible de afectar a la vida o integridad física de las personas) y Corea, la amenaza de la pena aparece en forma de anexo a los preceptos administrativos medioambientales correspondientes a la protección del agua, aire y suelo, que alcanzan un alto grado de dispersión, lo que no impide que la contravención del Derecho administrativo sea castigada con una sanción penal. CHO, B-S. “Cuestiones de causalidad y autoría en el Derecho penal del medio ambiente coreano y japonés desde la perspectiva del derecho comparado”, op. cit., pág. 50; BARBERÁN PELEGRÍN, F. “El delito de contaminación en Japón. Análisis de la Ley japonesa 142/1970, de 25 de diciembre, para la sanción penal de los delitos de contaminación que afectan a la salud de las personas”. En *Revista Aranzadi de Derecho Ambiental*, núm. 13. Ed. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2008, págs. 241-264; “La sanción penal de los actos de contaminación en Japón”. En *Japón y el mundo actual*. Elena Barlés / David Almazán (coords.) (Colección Federico Torralba de Estudios de Asia Oriental: 4). Ed. Prensas Universitarias de Zaragoza. Zaragoza, 2010, págs. 369-392.



producidas en los últimos tiempos.<sup>901</sup> Por la singularidad que representa, una parte de la doctrina se inclina, bien por mantener la emisión de ruidos dentro del abanico de modalidades de los delitos medioambientales como precepto autónomo que vincule la conducta exclusivamente a su potencialidad lesiva para la salud de las personas, o bien por su tipificación externa, ya sea como delito de lesiones, coacciones, contra la intimidad, o incluso contra la integridad moral.<sup>902</sup>

Entre dicha selección, alguna resolución penal aislada aplica el delito de coacciones a conductas relacionadas con la emisión de ruidos, desestimando la aplicación del delito ecológico en la modalidad de ruido, como ocurrió en 2013 en un extraño caso de provocación masiva de ruidos en un contexto domiciliario, con un fin determinado: doblegar la capacidad de soportar ruidos intempestivos con el objeto de que las víctimas abandonaran su lugar de residencia.<sup>903</sup> Con anterioridad, otra sentencia

---

<sup>901</sup> Vid. JERICÓ OJER, L. Incide en la excepción que suponen las sentencias absolutorias existentes en la materia, y apunta varios motivos jurisprudenciales: inexistencia del tipo básico de probabilidad de peligro para el equilibrio de los sistemas naturales *-hay que tener en cuenta que el análisis parte de resoluciones en las que se aplica la redacción del art. 325 anterior a la reforma de 2015 (cursivas mías)-*, no vigencia de la normativa municipal aplicable al caso, falta de acreditación de la entidad del ruido y su riesgo para la salud de las personas, o sobre los daños producidos, ausencia de dolo por haberse establecido medidas correctoras para evitar molestias, etc. En “La tutela penal del ruido”, op. cit., pág. 389.

<sup>902</sup> La primera posibilidad la defiende ALASTUEY DOBÓN, C. En “Derecho penal: la emisión de ruidos como delito de contaminación ambiental”, op. cit., pág. 328. Desde una óptica que separa el hábitat domiciliario del concepto de medio ambiente, apostando por los medios de que dispone el Derecho administrativo sancionador para abordar esta materia, JERICÓ OJER, L. En “La tutela penal del ruido”, op. cit., págs. 397 y ss. Sigue el criterio de ataque a la intimidad domiciliaria, SÁNCHEZ DONATE, M<sup>a</sup> P. En “La lucha penal: el delito de contaminación acústica”, op. cit., pág. 175. En relación al supuesto de atentado a la dignidad de la persona que representaría considerar al ruido como vejación, la opción fue rechazada por la jurisdicción penal en Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas (Sección 1<sup>a</sup>) núm. 255/1999 de 16 octubre [ARP 1999\4627], sobre molestias causadas a los vecinos por la música y los ruidos; lo considera más propio de una infracción administrativa que de una falta de vejaciones del art. 620. 2<sup>a</sup>. Alude a esta resolución QUINTERO OLIVARES, G. En “La especialidad del Derecho penal ambiental en relación con la contaminación acústica y la contaminación del agua”, op. cit., pág. 22.

<sup>903</sup> Sentencia Juzgado de lo Penal núm. 28 de Barcelona. Procedimiento abreviado núm. 538/2012-C. Sentencia núm. 157/2013, de 8 de abril. En el asunto conocido como los “Marqueses del ruido” se absuelve a los acusados, un matrimonio de aristócratas que reside en la primera planta de un edificio en la ciudad de Barcelona, de un delito medioambiental en la modalidad de contaminación acústica y de un delito de daños, y se les condena por un delito continuado de coacciones a sendas penas de 2 años y 1 mes de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de los querellantes o sus hijos, su domicilio, lugar de trabajo o frecuentado conocido, por el tiempo de 3 años. El relato de los hechos es el siguiente: los condenados colocaron diferentes emisores de sonido (radios y mini-cadenas musicales conectadas a altavoces de gran potencia, sirenas piezoeléctricas con salidas de audio proyectadas hacia el piso superior, una de ellas empotrada en el falso techo, todo ello con mecanismos de acción a través de un sistema de cableado) en varias estancias de su domicilio, con el fin de perturbar específicamente a la familia que residía en la planta superior. Se dotaron de los aparatos suficientes, que proyectaron de forma dolosa hacia el piso objeto de su instigación, así como de una sistemática situacional y temporal durante la cual hacían sonar los artilugios de forma intempestiva (especialmente durante las horas de descanso nocturno o de madrugada), con el objeto de molestar a sus vecinos y llevarlos a una

también aprecia la existencia de un delito de coacciones en el escenario de las relaciones de vecindad, otorgándole la misma calificación jurídica.<sup>904</sup>

En un contexto domiciliario, por mucho que los ruidos sean habituales, persistentes, de gran intensidad y de muy diferente tipología (por lo que en muchos casos no se toma en cuenta el rebasamiento de los límites en decibelios fijados por la correspondiente normativa contra la contaminación acústica), los tribunales penales tienden a desplazar la aplicación del art. 325 por la opción de calificar la conducta en base a otros preceptos penales, e incluso se contempla la preferencia de inclusión de una falta contra las personas o contra el orden público para dirimir las controversias suscitadas entre residentes de un mismo inmueble, o de uno adyacente al foco emisor

---

desesperación tal que les obligara a abandonar el inmueble. Esta situación se prolongó durante 4 años y resultó acreditado el síndrome ansioso-depresivo padecido por los demandantes. Las pruebas sonométricas aportadas, constatadas en acta notarial, arrojaron datos que sobrepasaban con amplitud los decibelios permitidos por la norma reglamentaria. Tanto la acusación particular como el Ministerio Fiscal calificaron los hechos como constitutivos de un delito medioambiental en su modalidad de grave riesgo para la salud de las personas (art. 325.1º in fine), en concurso “ideal medial” con un delito de coacciones (art. 172.1), solicitando penas de entre tres y cuatro años de prisión. Sin embargo, se acoge la tesis de la ausencia de elemento normativo del tipo previsto por el art. 325.1 bajo el siguiente argumento: se deniega valor probatorio a las diferentes mediciones realizadas y aportadas (bajo acta notarial), no en cuanto a su contenido, sino en relación al supuesto origen del ruido, lo que choca profundamente con la lógica más elemental, puesto que se efectuó entrada y registro judicial durante la instrucción en el domicilio de los querellados, pudiéndose constatar en esa diligencia la existencia del engranaje acústico del que se habían provisto, que obviamente accionaban a su libre antojo y que, por tanto, limitaba sobremanera la posibilidad de obtener una prueba cierta en el sentido en que se interpreta por el órgano juzgador. Se produce, a mi juicio, una peligrosa atomización de la prueba. A lo anterior se suma el contenido de las actas de las juntas de vecinos, así como el testimonio de otro vecino del inmueble. No obstante, se alude a que la ausencia de procedimiento administrativo sancionador en ningún caso significa que no existiera prueba suficiente para activar un expediente administrativo, que requiere tres mediciones, y que en este caso, las había. Destacable el párrafo que alude a la constatación de un delito de coacciones, el cual se invierte, *a contrario sensu*, a la hora de determinar la existencia de un delito medioambiental en la modalidad de ruido: <<*Se constata, por consiguiente y a la vista de lo ya expuesto respecto del delito de coacciones, una provocación o realización directa o indirecta de emisiones de sonido y vibraciones, sin que pueda dudarse del nocivo efecto en la salud, y que en el caso de autos superó el mero riesgo grave al transformarse en una nocividad psíquica constatada documentalmente y a través del médico forense, lo que es perfectamente ajustable a la visión pericial ofrecida por la experta [...] y se ajusta a los parámetros de la jurisprudencia constitucional y europea. Ha de recordarse, asimismo, que este delito tiene a los querellados como autores determinados [...], sin que pueda dudarse de que eran conscientes del grave peligro generado por el continuado ruido, máxime conocedores como eran de la afectación psicofísica que el ruido y otras molestias les causaba, según afirma, a ellos mismos [...], sin olvidar que el domicilio de las personas es un lugar en el que se desarrolla una parte importante de la vida humana y también forma parte del medio ambiente (por todas, STS 27-4-2007)>>. Con posterioridad, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 6ª), en Sentencia núm. 94/2014 de 20 de diciembre [JUR/2014/50738], rebajó la pena de prisión a un año y dos meses para ambos y desestimó íntegramente el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal, que invocaba la infracción del art. 325.1.*

<sup>904</sup> Así, SAP Zaragoza (Sección 6ª) 388/2011 de 10 de noviembre [JUR/2011/429963], por impedir el legítimo disfrute de la vivienda al poner música o la televisión a un volumen muy alto, hacer ruidos fuertes a horas intempestivas, provocando conscientemente perjuicios a los vecinos de la vivienda colindante.

de los ruidos.<sup>905</sup> (Con la derogación del Libro III del CP por LO 1/2015, ésta última posibilidad queda suprimida).

En nuestra opinión, la primera opción –precepto autónomo de exclusiva aplicación en caso de potencial lesión para la salud de las personas– impide que el ruido continúe formando parte del concepto de “medio ambiente” en igualdad de condiciones con otras modalidades comisivas. La segunda elección –calificación foránea– excepto en el ámbito de las lesiones, presenta más problemas que soluciones, así como claroscuros.<sup>906</sup>

La enmienda por la que nos inclinamos en el caso de una calificación extramuros del delito ecológico es la siguiente: en supuestos de emisiones ruidosas aisladas, la respuesta la debe proporcionar el Derecho administrativo sancionador, conforme a su cuadro de gradación de infracciones. En cuestión de emisiones de carácter continuado o con un carácter más o menos persistente, siempre y cuando superen los límites establecidos y sean objetivamente imputables a sujetos físicos, el tipo básico del delito de lesiones cubre perfectamente las exigencias de tipicidad, sin necesidad de articular ningún precepto nuevo con referencia explícita al ruido.<sup>907</sup> De

---

<sup>905</sup> De este modo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 3ª) núm. 229/2014 de 7 de abril [JUR/2014/162469] confirma parcialmente la dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 9 de Valencia (Sentencia núm. 378, de 20 de septiembre de 2013), en relación a una denuncia por los ruidos procedentes de la celebración de una fiesta privada en el domicilio del acusado.

<sup>906</sup> Por ejemplo, en relación al concepto de violencia propio del delito de coacciones, o lo previsto por el último párrafo del tipo básico de los delitos contra la integridad moral: <<*Se impondrá también la misma pena al que de forma reiterada lleve a cabo actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, tengan por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda*>> (art. 173. 1). En primer lugar, la finalidad de impedir el disfrute de la vivienda es un elemento indispensable. Por otra parte, restringe exageradamente el campo de actuación, reduciéndolo al espacio domiciliario. Todavía con un espectro más limitado resulta la aplicación de un delito contra la intimidad del art. 197; el tenor literal de su apartado 1 expresa: <<*El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes...*>>. Además, no olvidemos que para proceder por este delito es necesaria la denuncia de la persona agraviada o de su representante legal en un porcentaje muy elevado de casos, pues sólo cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas no será necesaria denuncia (art. 201.1 y 2).

<sup>907</sup> Al fin y al cabo, son los tres elementos que manejan los tribunales para atribuir responsabilidad penal a las conductas enjuiciadas por aplicación del llamado delito ecológico (art. 325), en su modalidad de ruido. *Vid.* CORCOY BIDASOLO, M. Se decanta por castigar penalmente la conducta como delito de lesiones en grado de tentativa cuando no existen resultados lesivos, y en el caso de que se produzcan lesiones psíquicas imputando al autor de las emisiones a título de dolo eventual. “Contaminación acústica. ¿Delito de lesiones o contra el medio ambiente?”. En *Estudios de Derecho Ambiental. Libro Homenaje al profesor Josep Miquel Prats Canut*. Gonzalo Quintero Olivares / Fermín Morales Prats (coords.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2008, págs. 861-879, en especial 875 y ss. No comparte dicha opinión JERICÓ OJER, L., por entender que los problemas de prueba en el delito de lesiones prevalecen, si comparamos éste con el delito medioambiental, pues el primero está configurado como delito de resultado, lo que significa que el órgano juzgador que contemple la conducta como un delito contra el medio ambiente, solamente tendrá que valorar si las emisiones de ruido, *ex ante*, poseían entidad suficiente para poner en peligro el equilibrio de los sistemas naturales y la salud de las personas.

hecho, a partir del giro jurisprudencial causado por la STS 1307/2009, de 5 de noviembre –caso *Donegal*–, se subraya que los daños psíquicos producidos por ruido, causados a los vecinos del inmueble colindante a un bar musical situado en el casco antiguo de Barcelona, son penalmente sancionables, junto a la aplicación del delito medioambiental, a través de tres delitos de lesiones, abandonando la trayectoria mantenida hasta entonces, tendente a calificar la conducta como falta de lesiones.<sup>908</sup>

El único obstáculo, que no insalvable, sería la laguna que representa la responsabilidad penal de las personas jurídicas; en cualquier caso, no es insuperable porque nada detiene al legislador en el caso de querer someter el delito de lesiones a las mismas previsiones que contienen otros tipos delictivos respecto de las personas jurídicas, una vez abierta la brecha que rompe definitivamente con su impunidad en nuestro ordenamiento penal desde la reforma de 2010.<sup>909</sup> En todo caso, la regulación vigente desde la reforma de 2015 contempla tal categoría de responsabilidad penal para los delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio (art. 197 quinquies, en relación a los arts. 197, 197 bis y 197 ter).

---

Tampoco opta por el delito de coacciones por el concepto de violencia psíquica que comporta. En “La tutela penal del ruido”, op. cit., págs. 398 y 399.

<sup>908</sup> Vid. MUÑOZ RUIZ, J. “Nueva doctrina del Tribunal Supremo sobre daños psíquicos en supuestos de contaminación acústica”. En *Cuadernos de política criminal segunda época*, Vol. II, núm. 101. Ed. Dykinson. Madrid, 2010, págs. 175-197, en especial 180 y ss.

<sup>909</sup> Un sector de la doctrina augura que, una vez instaurada la responsabilidad penal de estas personas para determinados delitos, nada obsta a que se plantee también en relación a delitos como el homicidio o las lesiones graves. En palabras de GÓMEZ TOMILLO, M., <<habría sido perfectamente concebible construir una responsabilidad penal [...] por tal clase de ilícitos. Seguramente, una vez abierta la espita, acabe planteándose esa opción político-criminal en el futuro>>. El autor basa su argumento en que, una vez aceptado que el fundamento de la responsabilidad penal de las personas colectivas radica en razones preventivas, no resulta incoherente pensar que también es posible sancionarlas por otros delitos, como homicidio, lesiones graves, o, en el caso de delitos de peligro, por los relativos a la seguridad alimentaria, llegando incluso a sostener que se trata de ámbitos en los que la función preventiva de la sanción a personas jurídicas operaría de manera intensa. Lo ejemplifica con los casos de la discoteca Alcalá 20 o del síndrome tóxico, ambos acaecidos en España, pero también se refiere a la experiencia internacional, citando el caso del transbordador británico accidentado en el puerto belga de Zeebrugge en 1987 -*Herald of Free Enterprise*-, que causó la muerte a casi doscientas personas al navegar con las escotillas de proa abiertas, y por el que se dictó sentencia penal condenatoria. En “Introducción a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el sistema español”, op. cit., págs. 19 y 20. También plantea que se debería generalizar la aplicación a todos los delitos, aún en régimen de participación imprudente en comisión por omisión, ya que esto permitiría superar el antropocentrismo vigente en la Parte General, RODRÍGUEZ RAMOS, L. En “¿Cómo puede delinquir una persona jurídica en un sistema penal antropocéntrico? (La participación en el delito de otro por omisión imprudente: pautas para su prevención)”, op. cit., nota 3.

### 6.3.1.1.- Particular atención al ruido en el tipo consagrado al delito ecológico

En cuanto a la emisión de sonidos que puedan considerarse *ruidosos*, una de las razones que sustentan lo expresado con anterioridad proviene de la sujeción dictada por el art. 325 CP: el reenvío normativo a la contravención de las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, así como la utilización de la forma plural en las conductas enunciadas (provocación o realización directa o indirecta de emisiones, vertidos, radiaciones, [...] ruidos); por lo tanto, será defendible que una actuación singular y única no puede, en modo alguno, servir de base a la imputación penal.<sup>910</sup>

Esta hipótesis genera serias dudas acerca de si una exclusiva emisión de ruidos, sin interrupción temporal determinada, pero con amplia superación de los límites de decibelios dictados por la normativa correspondiente, puede desencadenar la intervención penal en un sustrato medioambiental. Creemos conveniente cuestionar la implicación de la jurisdicción penal en estos supuestos, cuya sanción debe dictarse por los órganos administrativos competentes, y en el caso de que éstos no realicen las actuaciones a las que están obligados (inspección, sanción, o ejecución de las medidas o resoluciones dictadas), la responsabilidad debería recaer en la representación de la autoridad personal o colegiada que detentan. En todo caso, la conducta se debería calificar como constitutiva de un delito de lesiones si el sujeto pasivo ha necesitado de

---

<sup>910</sup> Así lo entienden también los tribunales penales, que dictan sentencias condenatorias por emisión de ruidos cuando éstos adquieren un carácter más o menos persistente o reiterado. Recientemente, Sentencia TSJ de Murcia (Sala de Civil y Penal, Sección 1ª) núm. 2/2014 de 15 de mayo [ARP\2014\672] Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 8ª) Sentencia núm. 212/2014, de 3 marzo [ARP\2014\323], en términos similares a otros pronunciamientos por situaciones análogas: <<El sometimiento a los elevados niveles de inmisión de ruidos que los vecinos padecieron durante el período temporal en el que el Bar musical X estuvo en pleno funcionamiento, ocasionó, al menos a los residentes en los pisos...del mismo inmueble, trastornos de sueño importantes, insomnio, estrés, cansancio crónico, ansiedad, irritabilidad, depresión, enfermedades cardiovasculares y cambios conductuales con comportamientos antisociales>>. Respecto a la idoneidad de la conducta, la STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª), núm. 838/2012 de 23 de octubre. Ponente: Excmo. Sr. Miguel Colmenero Menéndez de Lurca [RJ/2012/10172], confirma la dictada por la Audiencia Provincial de Huesca (Sección 1ª) de 7 de noviembre de 2011, que condenó al acusado a la pena de cuatro años y un día de prisión como autor responsable de un delito contra el medio ambiente y tres meses de prisión por cada uno de los dos delitos de lesiones imprudentes, así como la clausura definitiva del pub del que el acusado era representante legal en la localidad de Fraga, por transmisión continuada de ruidos a la vivienda colindante desde la apertura del mismo en el año 2002. El TS estima que no es necesaria la prueba de un efectivo perjuicio para la salud de las personas, que, de producirse, llevaría al concurso (ideal) del delito contra el medio ambiente con otro de lesiones.

una primera asistencia facultativa, o bien tratamiento médico quirúrgico (art. 147.1 CP).<sup>911</sup>

Ahora bien, si la reiteración de conductas ruidosas contrarias a lo dispuesto por las leyes u otras disposiciones de carácter general representan la base jurídica para la aplicación del art. 325, apartamos *de facto* la protección penal del bien jurídico cuando no se pueda probar la continuidad de la conducta típica. Si bien es cierto que con este argumento se disiparían parte de las objeciones planteadas en este estudio en sentido contrario a la interpretación mayoritaria, que afirma que las diferencias entre ilícitos penales y administrativos poseen únicamente carácter cuantitativo, aún así esta interpretación no nos convence.

Otra cuestión de gran trascendencia es la que se deriva de considerar el dictado del inciso segundo del art. 325 bien como tipo agravado, cualificado, o autónomo. Dado que el precepto es claro al agravar la pena si el riesgo de grave perjuicio es para la salud de las personas, sería imposible aplicar la norma en los supuestos en los que no se pueda probar el grave riesgo para los sistemas naturales. La paradoja resulta obvia en la materia que nos ocupa, porque la jurisprudencia expresa justamente lo contrario a lo que interpreta la doctrina de forma mayoritaria en el ámbito general de los delitos contra el medio ambiente. En el caso de apartarse de tal exégesis, no podrían sostener que la emisión de ruidos es una modalidad comisiva más del delito contra el medio ambiente, y aplicarlo así a supuestos en los que prima la protección del derecho a la salud de las personas, pues precisamente éste es el ámbito exclusivo de intervención de la categoría acústica como delito. El límite excluye la operatividad del primer párrafo del art. 325.<sup>912</sup>

---

<sup>911</sup> Se decantan por esta misma interpretación, en el caso de lesiones producidas por un ruido intenso e instantáneo SILVA SÁNCHEZ, J. M<sup>a</sup> / FELIP I SABORIT, D., refrendando lo sostenido en diversas sentencias dictadas por Audiencias Provinciales. En “El Derecho penal ante el ruido”, op. cit., págs. 259 y 260. Para SÁNCHEZ DONATE, M<sup>a</sup> P., la solución de contemplar un delito de lesiones doloso no es clara, al no ser compatible con la figura de peligro abstracto del art. 325. En “La lucha penal: el delito de contaminación acústica”, op. cit., pág. 184. Por otra parte, llama la atención la reticencia para aplicar el delito de lesiones del art. 147 CP aún cuando resulta probada la producción del resultado típico del mismo, teniendo en cuenta que el inciso final del art. 325 no puede alcanzar ese desvalor. Al respecto, *vid.* ALASTUEY DOBÓN, C. En “Derecho penal: la emisión de ruidos como delito de contaminación ambiental”, op. cit., págs. 316 y 317. También JERICÓ OJER, L. “La tutela penal del ruido”, op. cit., pág. 404.

<sup>912</sup> *Vid.* SILVA SÁNCHEZ, J. M<sup>a</sup> / MONTANER FERNÁNDEZ, R. “Los delitos contra el medio ambiente. Reforma legal y aplicación judicial”, op. cit., págs. 129 y ss; ALASTUEY DOBÓN, C. “Derecho penal: la emisión de ruidos como delito de contaminación ambiental”, op. cit., págs. 313-316.

No menos importante es determinar si la imputación penal por imprudencia grave -según el art. 331-, tiene cabida en los supuestos de conducta negligente, pues dicha apreciación sólo será posible si la perspectiva adoptada acerca del inciso segundo es considerarlo un tipo autónomo. Efectivamente, el Código penal no permite calificar la imprudencia sobre una agravante genérica o cualificada (art. 14.2), así que la previsión del art. 331 se muestra vacía de contenido en esta hipótesis (de hecho, no existen hasta la fecha sentencias condenatorias por conductas imprudentes en esta modalidad de ruido).<sup>913</sup>

### **6.3.2.- Excurso: el eterno dilema “sanciones administrativas frente a sanciones penales” en materia medioambiental**

El debate formulado en torno a la función promocional o simbólica del Derecho penal con creces renombrado, en materia medioambiental resulta especialmente notable.<sup>914</sup> Desde el ámbito administrativista, determinadas voces defienden el carácter preferente que posee el ordenamiento penal para influir y provocar una disminución o inoculación de conductas en principio prohibidas, en detrimento del orden administrativo; los argumentos se dirigen al poder conminatorio de la pena, a las nefastas consecuencias en relación al reproche social que sigue a un procedimiento penal en la persona enjuiciada, a la publicidad del procedimiento, etc., extremos que en

---

<sup>913</sup> La posición crítica de QUINTERO OLIVARES, G., acerca de los delitos imprudentes ambientales descansa en la idea de que es muy difícil establecer una frontera nítida entre delitos dolosos de peligro y delitos culposos de peligro, al menos desde un punto de vista dogmático, con independencia de que el legislador posibilite su castigo. En “Derecho Penal Ambiental”, op. cit., págs. 211 y 212. *Vid.* GÓMEZ RIVERO, M<sup>a</sup> C. “El delito ecológico”, op. cit., pág. 89; MARTOS NÚÑEZ, J. A. “El delito de contaminación acústica”, op. cit., pág. 52.

<sup>914</sup> Se suele distinguir entre la *función simbólica* y la *función instrumental*; es ésta última la que verdaderamente legitima a la norma jurídico-penal a través de la protección efectiva de los bienes jurídicos seleccionados, que se consigue con el efecto disuasorio que provoca la conminación penal. La función simbólica, sin embargo, es el efecto psicológico que genera en el conjunto de la sociedad, y su punto más criticable proviene de que en momentos de crisis económica, política, o social, esta función pasa a ocupar el primer plano, desdeñando el papel que cumple la función instrumental. De esta opinión, GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. “Introducción al Derecho penal. Instituciones, fundamentos y tendencias del Derecho Penal” Vol. I, op. cit., págs. 186-195.

materia medioambiental presentan una apariencia verídica, pero que descansan en presupuestos más próximos a la teoría que al empirismo.<sup>915</sup>

El temor que suscitan los avances en la evolución tecnológica y científica, o simplemente la propia cotidianeidad vital en relación con las nuevas formas de peligro nacidas durante el s. XX, ha provocado una sensación generalizada de desasosiego en la sociedad, que percibe las nuevas agresiones (hipotéticas y reales) como hechos ante los cuales se debe reaccionar punitivamente, relegando al olvido pautas de comportamiento, instrumentos formativos, filosóficos, científicos, o de otra índole.<sup>916</sup> El posicionamiento de la doctrina administrativa sobre la inclusión de ilícitos en el ordenamiento penal, históricamente integrantes del dominio sancionador de la Administración, al que de manera paulatina se incorporan nuevos tipos en diferentes apartados (seguridad vial, contrabando, medio ambiente, urbanismo, etc.), no es pacífico. Sobre todo en cuanto a uno de los principales problemas, esto es, la necesidad de aplicar al estrato sancionador los mismos principios que a la categoría penal, pues

---

<sup>915</sup> En materia medioambiental, el importe que puede alcanzar una multa en la correspondiente sanción administrativa frente a la penal roza niveles de desproporción llamativos. El art. 50 CP, siguiendo el sistema escandinavo de días-multa (que en puridad proviene del sistema portugués), también ha sido modificado en sus apartados 3 y 4 por la LO 5/2010, de 22 de junio. Así, la extensión mínima será de diez días y la máxima de dos años, con la extensión máxima de cinco años para las personas jurídicas. La cuota diaria se establece en un mínimo de 2 y un máximo de 400€ y en el caso de imposición a personas jurídicas ésta asciende a un mínimo de 30 y un máximo de 5.000€. Teniendo en cuenta que en el ámbito ambiental estatal, la sanción de multa suele ser de cuantía fija o determinada, dentro de unos límites mínimos y máximos en función de la gravedad de la infracción (muy graves: de 200.001 a 2.000.000€, graves: de 20.001 a 200.000€, y leves: hasta 20.000€), que inclusive exceden ligeramente en su cuantía máxima algunas leyes autonómicas (2.500.000€ previstos por el art. 56.1 de la Ley 5/2002, de Protección del Medio Ambiente de La Rioja o los 2.404.000€ del art. 131.2 de la ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía), no es necesario abundar en una abstracción de las diferencias. En relación a las distintas infracciones y sanciones ambientales en la legislación estatal y autonómica *vid.* CANO CAMPOS, T. Voz “Medio ambiente, potestad sancionadora”. En *Diccionario de Sanciones Administrativas*. Blanca Lozano Cutanda (dir.) Ed. Iustel. Madrid, 2010, págs. 556-578.

<sup>916</sup> A la etiología del miedo colectivo se refiere el filósofo MARINA, J. A. *Anatomía del miedo. Un tratado sobre la valentía*. Ed. Anagrama. Barcelona, 2006, págs. 21 y 72. Sobre la sensación social de inseguridad y su conexión con el Derecho penal, *vid.* SILVA SÁNCHEZ, J. M<sup>a</sup>, que denuncia la búsqueda de soluciones a esa inseguridad en el orden penal. En “La expansión del Derecho penal. Aspectos de la Política criminal en las sociedades postindustriales”, *op. cit.*, págs. 20 y ss; “¿Quién debe responder de los ilícitos medioambientales? Sujetos y criterios de imputación de responsabilidad por ilícitos medioambientales”. En *Incidencia medioambiental y derecho sancionador*. Cuadernos de Derecho Judicial VIII. Ed. Consejo General del Poder Judicial. Madrid, 2007, págs. 141-172. En la misma línea *vid.* GIMBERNAT ORDEIG, E., para quien la creación de nuevos delitos e incremento de penas responde a dos clases de factores. En primer lugar, a los postulados de los *nuevos gestores de la moral colectiva* (grupos ecologistas, feministas, antixenófobos), que aproximándose a lo que propugnaba el movimiento *ley y orden*, atribuyen carácter penal a conductas que hasta hace poco constituían ilícitos administrativos. En segundo lugar, la presión de las víctimas por delitos más o menos graves o de sus familiares, que rápidamente encuentran un lugar preferente en los medios de comunicación. En “La insoportable gravedad del Código Penal”, *op. cit.*, págs. 212 y 213.



en ese caso las diferencias serían prácticamente nulas.<sup>917</sup> Algunos autores se quejan de la omisión sistemática de otro pilar importante, derivado de la supuesta identidad ontológica entre sanciones administrativas y penas; la consecuencia de afirmar tal equivalencia tacha y anula cualquier límite material entre ambas especialidades, a excepción de lo establecido en el art. 25.3 CE en alusión a la pena de privación de libertad.<sup>918</sup>

El TC se ha pronunciado en varias ocasiones acerca de la traslación a la esfera de las sanciones administrativas de las reglas aplicables al ordenamiento penal, concluyendo que la recepción de los principios constitucionales del orden penal por el Derecho administrativo sancionador no se puede efectuar de forma simplista y mecánica, en todo caso debe ejecutarse de manera matizada.<sup>919</sup>

También en la doctrina penal, algunos autores consideran de vital importancia el estudio de la distinción basada en criterios materiales, puesto que las diferencias puramente formales no contentan las expectativas teórico-doctrinales.<sup>920</sup>

---

<sup>917</sup> Una visión histórica de la evolución de la potestad sancionadora de la Administración en España en SANTAMARÍA PASTOR, J.A. También ofrece un concepto jurídico-técnico de sanción caracterizado inicialmente por su capacidad de reacción ante una conducta ilícita, frente a los restantes actos de contenido desfavorable. Así, se excluye del concepto de sanción por ejemplo, a las multas coercitivas que cabe imponer a un contratista, salvo que conlleven privación de bienes jurídicos que sobrepasen el ámbito contractual (art. 127.3 LRJPAC). En “Principios de Derecho Administrativo General” Vol. II, op. cit., págs. 380-387.

<sup>918</sup> En este sentido HUERGO LORA, A., para el que se agotan los argumentos dirigidos a que el legislador respete unos determinados límites en el reparto entre ambos mecanismos sancionadores. *Menos nítido todavía cuando nos referimos a conductas de peligro abstracto* (cursivas mías). En “Las sanciones administrativas”, op. cit., págs. 30 y ss. Para otros, aunque las diferencias sólo se fijaran en términos cuantitativos (mayor gravedad de las penas), pueden resultar de tal entidad que paradójicamente se transforman en cualitativas. Además, como correlato a lo anterior, existen múltiples diferencias de derecho positivo. *Vid.* REBOLLO PUIG, M. Voz “Derecho Penal y Derecho Administrativo Sancionador (Principios comunes y aspectos diferenciadores)”. En *Diccionario de Sanciones Administrativas*. Blanca Lozano Cutanda (dir.) Ed. Iustel. Madrid, 2010, págs. 323-325; RANDO CASERMEIRO, P. “La distinción entre el Derecho penal y el Derecho administrativo sancionador. Un análisis de política jurídica”, op. cit., págs. 60 y ss.

<sup>919</sup> Pionera fue la STC (Sala 1ª) 18/1981, de 8 de junio [RTC 1981/18]: <<los principios inspiradores del orden penal son de aplicación, con ciertos matices, al derecho administrativo sancionador, dado que ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado, tal y como refleja la propia Constitución (artículo 25, principio de legalidad)>> (FJ 2). Posteriormente reitera dicha doctrina en STC (Pleno) 76/1990, de 26 de abril [RTC 1990/76]: <<la recepción de los principios constitucionales del orden penal por el Derecho administrativo sancionador no puede hacerse mecánicamente y sin matices, esto es, sin ponderar los aspectos que diferencian a uno y a otro sector del ordenamiento>>, llamando a la <<prudencia frente a intentos apresurados de trasladar mecánicamente garantías y conceptos del orden penal>> (FF JJ 4 y 10).

<sup>920</sup> Por todos, *vid.* GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A, que realiza una exposición de las teorías desarrolladas a partir de la Ilustración. En “Introducción al Derecho penal. Instituciones, fundamentos y tendencias del Derecho Penal” Vol. I, op. cit., págs. 95 y ss.

Es habitual que la defensa del aspecto diferencial se marque desde un punto de vista meramente cuantitativo, relacionando la discrepancia tanto con la mayor gravedad del acto causante de la infracción como con el resultado punitivo o sancionador del mismo. Si se sigue la teoría de NIETO, que considera que el legislador debe acudir a una u otra técnica en base al valor social en juego, a la gravedad de los daños o su amenaza, y a la naturaleza y grado de la culpa, afirmando que la identidad ontológica entre los distintos ilícitos (normativa o real) no resulta trascendente<sup>921</sup>, los procesos de despenalización de conductas dependerán de cómo varíen los usos sociales y las situaciones necesitadas de protección, pero en cualquier caso sí parecería razonable que se produjera una consideración más meditada del estado previo al otorgamiento de uno u otro carácter a la norma. Afirmar lo contrario sería atribuir al legislador las virtudes que, según los estoicos, conforman al hombre bueno (justicia, fortaleza, prudencia y templanza), postura ingenua y temeraria situándonos en un contexto actual, donde el Código Penal se utiliza como uno de los primeros eslabones en la cadena de confianza de los votantes, que demandan el recrudecimiento de penas y la tipificación de nuevas conductas hasta ahora pertenecientes a la legislación administrativa. Numerosos son los ejemplos, como en materia de seguridad vial, los ilícitos contenidos en la LO 12/1995 de Contrabando<sup>922</sup>, el fraude de subvenciones, o el tan discutido delito contra la Hacienda Pública.

---

<sup>921</sup> Vid. NIETO, A. *Derecho Administrativo Sancionador* (4ª ed.) Ed. Tecnos. Madrid, 2005, págs. 152 y ss.

<sup>922</sup> Al respecto existe un caso de doble incriminación entre el delito previsto por la LO 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando (que incorpora lo que contempla el Convenio de Washington, de 3 de marzo de 1973, sobre el comercio internacional de especies amenazadas de la fauna y flora silvestres –CITES–), y el art. 334 de CP, pues éste exige la contravención de leyes o disposiciones de carácter general protectoras de las especies de fauna silvestre. En relación a los problemas concursales que puede ocasionar la aplicación del art. 2.2. b) de la LO 12/1995 y el art. 334 del CP, vid. HAVA GARCÍA, E. “Delitos relativos a la protección de la flora y fauna”. En *Derecho penal del medio ambiente*. Juan Terradillos Basoco (ed.) Ed. Trotta. Madrid, 1997, págs. 59-81, en especial 77 y ss; “La reforma de los delitos contra los recursos naturales, el medio ambiente y la flora y fauna (arts. 325, 327, 328, 329, 333, 334, 336 y 339)”, op. cit., pág. 294; ARANGUREN SÁNCHEZ, C. “Artículo 334”. En *Comentarios al Código Penal. Segunda época*. Manuel Cobo del Rosal (dir.) Tomo X, Vol. II, Libro II, Título XVI, de los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente (Artículos del 319 al 340). Ed. Centro de Estudios Superiores de Especialidades Jurídicas. Madrid, 2006, pág. 365. Como apunta la doctrina citada, este concurso de leyes se resolverá bien por el criterio de especialidad, bien por el de gravedad, pero en ningún caso el legislador ha salvado el obstáculo en las reformas posteriores al CP de 1995, aunque ha tenido ocasión, como refleja el que haya añadido una nueva modalidad comisiva, y la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio con carácter obligatorio, en la reforma de 2010. Esta nueva modalidad de pena responde a criterios de prevención especial, pues lo que pretende es evitar que, tras el cumplimiento de la condena, el sujeto pueda continuar desarrollando actividades profesionales relacionadas con el comercio de especies, gestión de actividades de caza o pesca, etc.

Otra consecuencia de la distinción ontológica entre sanción administrativa y pena es la diferente expectativa en cuanto a la persecución de conductas. En Derecho penal rige el principio de persecución pública y en el ámbito administrativo el de oportunidad; así, como las infracciones no poseen la misma entidad que los delitos, la Administración puede decidir si son susceptibles de persecución en un caso concreto dando inicio a la apertura de un procedimiento de manera discrecional, algo inadmisibles respecto a los ilícitos penales, a excepción de los delitos semipúblicos. La aplicación de los principios de legalidad y culpabilidad en toda su extensión, sin las matizaciones que se producen en España, es otro factor a tener en cuenta.<sup>923</sup>

Del argumento histórico, el mismo fin de tutela de bienes jurídicos que persiguen ambos y la inexistencia de un criterio diferenciador claro y límpido entre las dos potestades, se desprende lo que sostiene la teoría unificadora, como suscriben GÓMEZ TOMILLO y SANZ RUBIALES.<sup>924</sup> Dicho postulado es criticable en la medida en que el legislador, al optar entre un castigo u otro para el infractor, contribuye a resaltar el carácter punitivo asociado a una conducta determinada, en ocasiones desvirtuando el sentido del principio de mínima intervención que debe regir el ámbito penal, hoy paulatinamente en fase de abandono. Lo mismo cabe comentar acerca del principio de subsidiariedad y qué decir del carácter de *ultima ratio*.

Si se admite que delito e infracción administrativa comparten una unidad de hecho, la consecuencia lógica sería que ambas modalidades de injusto se trataran y sancionaran homogéneamente, respondiendo a idénticos principios regulatorios (dolo o culpa, error de prohibición, tentativa, participación, autoría, concursos, prescripción, etc.). Cuando se habla de la doble composición del ordenamiento jurídico-penal, fijado por un componente normativo o de justicia y por un criterio de utilidad (éste último influenciado por las corrientes criminológicas), se da por hecho que el legislador configura las normas penales de forma que en su contenido y extensión sean tanto eficaces como adaptables al tiempo y para ello, o bien se aumenta la intensidad de la conminación penal o bien se descriminalizan determinados comportamientos, de

---

<sup>923</sup> Vid. HUERGO LORA, A. Considera que nuestro ordenamiento acentúa demasiado la unidad del *ius puniendi* y tiende a desdeñar las diferencias entre lo penal y lo administrativo sancionador, que si bien era justificable al inicio, en el seno de un Estado gobernado por un sistema autoritario, hoy resulta improcedente. En “Las sanciones administrativas”, op. cit., pág. 53.

<sup>924</sup> Así, GÓMEZ TOMILLO, M. / SANZ RUBIALES, I. *Derecho Administrativo Sancionador. Parte General: teoría general y práctica del Derecho penal administrativo* (2ª ed.) Ed. Thomson-Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2010, págs. 87 y ss.

conformidad con la vinculación a los criterios constitucionales.<sup>925</sup> Ahora bien, la causa de la ampliación de bienes jurídico-penales, entre ellos los socioeconómicos o los medioambientales, hay que buscarla en las nuevas realidades sociales, nuevos riesgos, o la inseguridad institucionalizada por la sociedad, que crea a su vez sujetos pasivos que evalúan como víctimas a la mayoría del tejido social. Como refleja HUERGO LORA, lo habitual es que la Ley atribuya la potestad sancionadora a la Administración respecto de conductas que requieren intervención *per se*, lo que en ningún caso significa que se prohíba, al menos desde la vertiente constitucional, tipificar infracciones administrativas y sancionarlas *ex novo*, esto es, con anterioridad a la actuación meramente administrativa. Sustenta tal argumento con el clarificador ejemplo de la legislación antitabaco.<sup>926</sup>

Según REBOLLO PUIG, se parte de la postura conjunta que ofrece la jurisprudencia y la doctrina al afirmar que tanto en las penas como en las sanciones administrativas se ejerce y manifiesta el *ius puniendi* del Estado y, por tanto, el concepto estricto de sanción administrativa sería el de un mal impuesto por la Administración.<sup>927</sup> Precisamente por ese carácter punitivo, se aproximan a las penas impuestas por la jurisdicción penal y a su vez se distinguen de otras medidas administrativas. Las sanciones poseen un evidente contenido aflictivo, un castigo para el infractor, que ve así alterada *ex novo* su situación, sin que podamos olvidar el fin preventivo de las normas que las habilitan, lo que fundamenta su carácter disuasorio en orden a perseguir que el hecho que da cobertura a la sanción no se llegue a producir.<sup>928</sup>

---

<sup>925</sup> Vid. HASSEMER, W. / MUÑOZ CONDE, F. *Introducción a la Criminología*. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2001. Las consecuencias de la autonomía limitada del Derecho penal son dos: en primer lugar, la libertad de acción del legislador, que decide los términos de la intervención penal. En segundo lugar, es necesario que se interpreten los conceptos y elementos valorativos que provengan de otras ramas del derecho, sin que se sienta vinculado por las acepciones que utilice la rama original. De esta forma lo trata GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A., pues el ordenamiento jurídico no se compone de compartimentos cerrados sin comunicación entre sí. Muy al contrario, existe una relación de interdependencia, sin que ello implique la subsidiariedad de ninguno. En “Introducción al Derecho penal. Instituciones, fundamentos y tendencias del Derecho Penal” Vol. I, op. cit., pág. 93.

<sup>926</sup> Vid. HUERGO LORA, A. “Las sanciones administrativas”, op. cit., págs. 139-141.

<sup>927</sup> Tal definición pertenece a GARCÍA DE ENTERRÍA, E. / FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T-R. <<Por sanción entendemos aquí un mal infligido por la Administración a un administrado como consecuencia de una conducta ilegal>>. En *Curso de Derecho Administrativo II* (12ª ed.) Ed. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2011, pág. 169.

<sup>928</sup> Vid. REBOLLO PUIG, M. “El contenido de las sanciones”. En *Revista Jurídica Administrativa* (Núm. Extraordinario) Ed. Lex Nova. Madrid, 2001. págs. 151-206, en especial 155-157.

El contrasentido es que sin el primer elemento no se puede inferir el segundo, pero sí a la inversa; por ejemplo, a una multinacional a la que se le imponga una sanción (multa de 100.000€ que correspondería en la mayor parte de la legislación ambiental a una infracción grave) le puede resultar más lucrativo reiterar la conducta infractora que abonar la multa impuesta, por lo que el efecto disuasorio queda absolutamente inoperante. Esto conduce al planteamiento de que otros actos de gravamen distintos a la sanción, como las medidas generales de policía, cumplen con mayor rigor con la función teleológica de la norma en su vertiente disuasoria en determinados ámbitos.<sup>929</sup> Esta circunstancia es particularmente activa en materia de medio ambiente, a pesar de contar con una prolija legislación administrativa. La mayor parte de las sanciones administrativas responden a infracciones de peligro abstracto<sup>930</sup>, que no requieren ni la efectiva lesión a un bien jurídico ni que se haya producido una situación de riesgo concreto, por lo que la determinación de incluir *supuestos* en el orden administrativo o en el penal se limita al criterio de la gravedad del comportamiento que genera el ilícito. Con ello, el Estado establece una primera contención del hipotético delito, interviniendo en el proceso la actividad administrativa en general, con la inclusión de la potestad sancionadora cuando proceda, pero el incesante y progresivo miedo social hacia los riesgos que la Administración debe evitar, minimizar y gestionar se traduce en la moderna tendencia de acudir a la administrativización del Derecho penal, a una utilización del castigo penal para reforzar la posición del Derecho administrativo.<sup>931</sup>

---

<sup>929</sup> Por ejemplo, en materia de residuos, las distintas administraciones (Estado, CCAA y corporaciones locales) ejercen competencias en la recogida, tratamiento y aprovechamiento, traslado, valorización y eliminación de los mismos a través de distintos planes (nacionales, autonómicos y locales), que incentivan los objetivos que pretende la legislación, y que son revisados normalmente cada cuatro años con el fin de adecuarse a los cambios. Esto sucede en la mayoría de legislación administrativa medioambiental. Específicamente en cuanto a residuos *vid.* PIZARRO NEVADO, R. “La recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos”. En *Lecciones y materiales para el estudio del Derecho Administrativo* Tomo VII: Servicios Públicos. Tomás Cano Campos (coord.) Ed. Iustel. Madrid, 2009. págs. 385-407.

<sup>930</sup> A *contrario sensu*, las infracciones administrativas de resultado como las tributarias. Resulta que además, en materia ambiental, éstas son muy frecuentes. Por ejemplo, en el art. 116.3 a) de la Ley de Aguas, TR aprobado por RDLeg 1/2001, de 20 de julio, se considera infracción a <<Las acciones que causen daños a los bienes de dominio público hidráulico y a las obras hidráulicas>>.

<sup>931</sup> *Vid.* HUERGO LORA, A. En “Las sanciones administrativas”, op. cit., pág. 155. También RODRÍGUEZ RAMOS, L., para quien la duplicidad sancionadora relativiza los límites entre infracciones y delitos cuando no se acude a la distinción básicamente cuantitativa, como ocurre con los delitos contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social o la utilización de información privilegiada en mercados intervenidos. “Los riesgos de lo abstracto en el Derecho penal (el delito de contaminación ambiental como ejemplo)”, op. cit., pág. 4.

En el ámbito penal, esta incorporación de los delitos de peligro abstracto puede llevar aparejada una quiebra de los principios de seguridad jurídica y de lesividad, sobre todo cuando se trata de meras infracciones administrativas que por sí solas no implican un peligro tangible para el bien jurídico protegido, por pertenecer a un tiempo cronológico anterior y previo a la lesión, por lo que no tendría sentido adelantar la tutela otorgada hacia algo tan indeterminado que impide conocer con exactitud el qué y hasta dónde se quiere proteger.

La interpretación ofrecida por las posturas más adheridas a la tutela penal de bienes jurídicos colectivos es que se trata de garantizar la protección de bienes jurídicos individuales en ámbitos especiales, considerados un riesgo para una pluralidad indeterminada de personas (delitos contra la seguridad colectiva entre los que se pueden citar los relativos a la energía nuclear, provocación de incendios, mercado alimentario, tráfico de estupefacientes, seguridad vial, etc., pero en estos casos en realidad se tipifican nuevos modelos de agresión a bienes jurídicos tradicionales).<sup>932</sup>

En este sentido, si finalmente colegimos que el bien jurídico protegido regresa a una visión individualista, a una teoría del bien jurídico personalista, nada impide concluir que algunos tipos abordados por el Derecho penal medioambiental no deberían pertenecer a su órbita, sino regresar a la categoría de infracción administrativa.<sup>933</sup> Cuando los daños ambientales no son fácilmente delimitables, afectan a una franja amplia de población, surgen de la voluntad humana, y la amenaza del deterioro arranca de comportamientos asociados a nuevas formas de negocios o servicios, a su vez adheridos a las nuevas tecnologías, la percepción se transforma en una fuente inagotable de riesgos personales y patrimoniales.<sup>934</sup>

---

<sup>932</sup> Vid. SOTO NAVARRO, S. Ataca el recurso a estructuras de peligro abstracto sobre la base de que no se puede determinar la lesión de bienes jurídicos colectivos, por tratarse de objetos ideales; el peligro es anterior a la lesión y adelantar la tutela sólo cobra sentido si se evita la posible lesión del bien jurídico, por lo que si ésta es indeterminable, también lo es la efectiva puesta en peligro del bien jurídico (peligro concreto) o la peligrosidad general de una acción (peligro abstracto). En “La protección penal de los bienes colectivos en la sociedad moderna”, op. cit., págs. 177 y ss.

<sup>933</sup> En este sentido vid. GIMBERNAT ORDEIG, E., refiriéndose a la creación de nuevos delitos y al aumento de penas a pesar de los bajos índices de criminalidad en España. En “La insoportable gravedad del Código Penal”, op. cit., págs. 212 y 213.

<sup>934</sup> Subraya esta tesis SILVA SÁNCHEZ, J. M<sup>a</sup>. En “La expansión del Derecho penal. Aspectos de la Política criminal en las sociedades postindustriales”, op. cit., pág. 13.

A esta interpretación se une el hecho de que las sanciones administrativas ambientales, en especial la de multa, responden en su cuantía a lo que determina genéricamente el art. 131.2 LRJPAC: <<el establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas>> (principio de proporcionalidad). Esta referencia, junto a una adecuada labor de inspección cualificada por parte de las Administraciones Públicas, indica que el régimen administrativo sancionador posee suficiente capacidad para cumplir con los fines de prevención general y especial pretendidos.

A diferencia de lo sostenido por algunos autores, que interpretan que la sanción penal comporta siempre consecuencias más graves en relación con los antecedentes, esta premisa no se cumple de forma invariable.<sup>935</sup> Por ejemplo, en relación a las personas jurídicas, el art. 136 CP que regula la cancelación de antecedentes delictivos es inoperante hasta la fecha, tampoco está previsto un Registro Central de Penados y Rebeldes adaptable a las empresas. Por otra parte, en los delitos contra el medioambiente cabe la comisión imprudente, que lleva aparejada la pena inferior en grado a los respectivos supuestos.<sup>936</sup> Como aval de la premisa apuntada, tomemos como ejemplo una pena privativa de libertad de 15 meses de duración (en relación a la franja establecida por el art. 325 –de dos a cinco años–); ésta permitirá cancelar los antecedentes penales del condenado que haya extinguido su responsabilidad penal y no haya delinquido de nuevo transcurridos dos años.

Por otra parte, la tutela administrativa del medio ambiente, antes de acudir al castigo del infractor, cuenta con una serie de prerrogativas vetadas al Derecho penal. Así, junto a la evaluación de impacto ambiental, la técnica de la planificación, que se configura a través de los Planes de Ordenación de los recursos naturales, cuyos objetivos son definir y señalar el estado de conservación de los recursos y ecosistemas en el ámbito de territorio de su competencia, determinar las limitaciones que se deban establecer, guiar los regímenes de protección que procedan, promover la aplicación de

---

<sup>935</sup> Opta por esta interpretación CANO CAMPOS, T. “La disciplina ambiental: inspección, restablecimiento de la legalidad y sanciones”. En *Lecciones y materiales para el estudio del Derecho Administrativo*. Tomo VI: Ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente. Tomás Cano Campos (coord.) Ed. Iustel. Madrid, 2009, págs. 405-445, en especial 419.

<sup>936</sup> Conforme al nuevo sistema de incriminación de conductas culposas del art. 12 CP, el art. 331 tipifica la comisión de delitos contra el medio ambiente por imprudencia grave.

medidas de conservación, restauración y mejora, así como formular los criterios orientadores de las políticas a seguir.<sup>937</sup>

Desde otro vértice, la concesión de autorizaciones, teniendo en cuenta que la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, en determinados sectores del ámbito de los entes locales escapa a los controles previos y refuerza las comprobaciones posteriores a través de las comunicaciones previas y las declaraciones responsables.<sup>938</sup> Ello hace pensar en la necesaria aportación a la LRJPAC de un Título completo dedicado a la labor de inspección. A esta idea se refiere NIETO cuando declara que *<<regular y conminar con sanciones actividades que pueden ser incumplidas pero no controladas, es una arbitrariedad y convertir al Derecho en una lotería>>*.<sup>939</sup>

---

<sup>937</sup> Realiza un amplio estudio LESMES SERRANO, C. “Los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente”. En LESMES SERRANO, C. et. al. *Derecho Penal Administrativo (Ordenación del Territorio, Patrimonio Histórico y Medio Ambiente)*. Ed. Comares. Granada, 1997, págs. 292-391.

<sup>938</sup> Es la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio la que incorpora al ordenamiento español dicha Directiva. Vid. CANO MURCIA, A. *El nuevo régimen jurídico de las licencias de apertura. Adaptado a la Ley 17/2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio*. Ed. La Ley. Madrid, 2010. También DE LA QUADRA-SALCEDO Y FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, T. / PALOMAR OLMEDA, A. / VIDA FERNÁNDEZ, J. *La ordenación de las actividades de servicios: comentarios a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre*. Tomás de la Quadra-Salcedo y Fernández del Castillo (dirs.) Ed. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2010.

<sup>939</sup> Vid. NIETO, A. En “Derecho Administrativo Sancionador”, op. cit., pág. 34.



### 6.3.3.- Sobre la cuestión, una muestra en Derecho comparado continental

Resulta clarificador que otros países de nuestro entorno sí delimiten espacios fronterizos en relación a las diferencias cualitativas entre infracción y delito y, por tanto entre sanción y pena. Por otra parte, en lo que respecta al ruido, los objetivos de calidad tanto en Alemania como en Italia son más restrictivos que en nuestro país, con valores sensiblemente más aproximados a los recomendados por la OMS.<sup>940</sup>

#### a) Alemania

En Alemania, una ley sectorial relativa al Derecho penal económico condujo a una Ley general de infracciones administrativas en 1952, precedente de la actual y aprobada en 1968.<sup>941</sup> Un año después, en 1969, se produce la reforma del Código Penal<sup>942</sup>, con el objeto de hacer desaparecer del todo la figura de las contravenciones –

---

<sup>940</sup> En España, los valores límites se fijan en 65 dB (diurno) y 55 dB (nocturno en zonas residenciales). No obstante, la OMS recomienda 50 y 45 dB respectivamente. *Vid.* OMS 2010: *Summary of Night noise guidelines for Europe*. Disponible en: [www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20472950](http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20472950) (último acceso 12/07/2015). Los valores en Italia corresponden a 55 y 45 dB y en Alemania se fijan entre 59 y 49 dB. *Vid.* MARTÍNEZ LLORENTE, J. / PETERS, J. “Contaminación acústica y ruido”. *Cuadernos de ecologistas en acción*, núm. 21, op. cit., pág. 20. Una singularidad de la normativa alemana es la referida a valores límites de emisión nocturno por el ruido derivado de las actividades deportivas causadas por un sólo ruido breve (por ejemplo, la celebración de un punto, o de un gol) que no puede superar los 20 dB, según el art. 2 párrafo. 4 de la Ordenanza sobre la protección contra el ruido (18.<sup>a</sup> BImSchV). Al respecto, *vid.* MANN, T. / WEDEMEYER, H. “La regulación de la contaminación acústica en Alemania”. Francisco Javier Durán Ruiz (trad.) En *Régimen jurídico del ruido. Una perspectiva integral y comparada*. Estanislao Arana García / M<sup>a</sup> Asunción Torres López (coords.) Ed. Comares. Granada, 2014, págs. 341-366, en especial 350. Un estudio comparativo general sobre derecho administrativo medioambiental realiza LOZANO CUTANDA, B. “Environmental law”. En *Comparative view of administrative law issues*. Spanish Agency for International Development Cooperation. Madrid, 2010, págs. 352-384.

<sup>941</sup> *Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)*: Ley General de Infracciones Administrativas.

<sup>942</sup> *Strafgesetzbuch (StGB)*: Código Penal alemán. El § 325a tipifica la emisión de ruidos como delito contra el medio ambiente, en relación al funcionamiento de instalaciones; el párrafo 1 se refiere a aquellos ruidos que sean aptos para dañar la salud de otros (se prevé una pena de privación de libertad de hasta tres años, o multa); el párrafo 2 se dedica a los que pongan en peligro la salud de otros, de animales o de cosas ajenas de importante valor (pena de privación de libertad de hasta cinco años, o multa). El párrafo 3 se ocupa de la conducta imprudente (se rebaja la pena hasta dos años o multa, y hasta tres años o multa respectivamente). Por último, el párrafo 4 exime de aplicación de los anteriores a los vehículos automotores, de rieles, aéreos o marítimos. *Vid.* MENDOZA CALDERÓN, S. “La protección penal del medio ambiente en Alemania, Italia, Francia y España: Estudio de Derecho Penal comparado”. En *Derecho Penal Ambiental*. Grupo Andaluz de Investigación Jurídica. Juan Antonio Martos Núñez (dir.) Ed. Exlibris. Madrid, 2006. págs. 243-311, en especial 269-282. También el Código Penal de Austria, en los §§ 180 y 181, tipifica el envenenamiento doloso y culposo de la atmósfera desde hace décadas. *Vid.* ZAFFARONI, R. E. “Una experiencia notable: El nuevo Derecho penal austriaco”. En *Anuario de derecho penal y ciencias penales*. Tomo 33, Fasc./Mes 3, 1980, págs. 707-729, en especial 727.

algunas escalaron un nivel superior y pasaron a ser faltas y otras se transformaron en infracciones administrativas—. <sup>943</sup> En Derecho alemán, la única figura considerada sanción (con el correlativo tratamiento *cuasi* penal) es la multa, y la potestad sancionadora de la Administración se entiende como una especialidad del ámbito penal, no como una potestad administrativa cualquiera. Así, las restantes medidas que en España se tipifican como sanciones (revocación de actos favorables, prohibición de realizar ciertas actividades) no tienen carácter sancionador y, por tanto, no se les aplican los principios rectores del sistema penal. Es interesante la aplicación de la técnica británica del *cautioning*, implantada experimentalmente en algunos Länder alemanes. <sup>944</sup>

En este país estiman que si se asume una identidad sustancial entre ambas figuras (penas y sanciones administrativas), el legislador goza de un gran arbitrio a la hora de establecer un régimen distinto y menos garantista en el perímetro administrativo, además de que el supuesto plus de gravedad de las penas cada vez es más discutido, pues no se trata de un criterio general. <sup>945</sup> En todo caso, el Tribunal

---

<sup>943</sup> El marco normativo alemán en materia de medio ambiente se suele dividir en dos bloques. La Parte General -no codificada- conduce a la relación entre diversos textos legales no siempre coordinados entre sí, como la Ley reguladora de la Evaluación de Impacto Ambiental -*Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung*-; la Ley Federal de Inmisiones -*Bundes-Immissionsschutzgesetz*-; la Ley del Suelo -*Raumordnungsgesetz*-; la Ley de Información Ambiental -*Umweltinformationsgesetz*-; la Ley de Estadística Ambiental -*Umweltstatistikgesetz*-; la Ley reguladora de la Eco-Auditoría -*Umweltaußsichtgesetz*-; la Ley de Responsabilidad Ambiental -*Umwelthaftungsgesetz*-, así como las disposiciones del Código Penal sobre delitos medioambientales, introducidas por Ley en 1980 y 1994 -*Gesetz zur Bekämpfung der Umweltkriminalität*-. La Parte Especial se refiere a los sectores específicos de intervención y se traduce en una serie de textos legales sobre sustancias peligrosas, residuos, protección de la contaminación atmosférica y espacios naturales. Vid. SARMIENTO RAMÍREZ-ESCUADERO, D. También realiza una comparación con los modelos anglosajones, especialmente el modelo reparador ambiental en EE.UU. “La responsabilidad ambiental en perspectiva comparada”. En *Incidencia medioambiental y derecho sancionador*, op. cit., pág. 243. Vid. MENDOZA CALDERÓN, S. “La protección penal del medio ambiente en Alemania, Italia, Francia y España: Estudio de Derecho Penal comparado”, op. cit., págs. 269 y ss; AGUILERA RULL, A. / AZAGRA MALO, A. “Transposición de la Directiva 2004/35/CE, de 21 de abril, sobre responsabilidad medioambiental en Alemania y en España”, op. cit., págs. 4-8.

<sup>944</sup> Este sistema consiste en prescindir de abrir un procedimiento penal en determinados supuestos, formulándose por parte de la policía una especie de amonestación que se puede considerar como un antecedente del verdadero proceso penal, que se incoará en el caso de que el sujeto reincida. Analiza dicha técnica HUERGO LORA, A. En “Las sanciones administrativas”, op. cit., pág. 51.

<sup>945</sup> Al contrario de lo que sucede en España, donde la doctrina sostiene de forma sistemática la extrema gravedad y estigmatización que produce ser objeto de un procedimiento penal frente a uno administrativo sancionador, es probable que no siempre sea así. Se deberían considerar los aspectos concretos tanto de la pena o multa impuesta, como de la influencia real y objetiva que puede tener en el sujeto imputado. Sigue el criterio de la mayor gravedad de la sanción penal, CANO CAMPOS, T. “Medio ambiente, potestad sancionadora”. En *Diccionario de Sanciones Administrativas*, op. cit., pág. 557. Contrario al criterio de la mayor gravedad, pero manteniéndose a favor de la teoría unitaria entre sanciones administrativas y penas, GÓMEZ TOMILLO, M. / SANZ RUBIALES, I. En “Derecho Administrativo

Constitucional Federal Alemán considera que si se tratase de la misma figura y se admitiese que sanciones administrativas y penales comparten una entidad homogénea, los únicos órganos competentes para ejercer esa potestad serían los penales. Si dicha función la asumiera la propia Administración, sería claramente inconstitucional.

Por otra parte, los reiterados intentos de elaboración de un Código de Derecho ambiental para refundir el disperso y casi inabarcable Derecho ambiental alemán no han prosperado. A pesar de las opiniones a favor de dicha codificación por razones de técnica legislativa, otros factores dificultan que se lleve a cabo, como la competencia atribuida a los *Länder* para aprobar su propia legislación medioambiental a raíz de la reforma constitucional de 2006, así como la constante actualización técnica que requiere la disciplina ecológica.<sup>946</sup>

En materia de ruido, hay que distinguir entre lo formulado por la Ley Federal sobre el control de las emisiones –*Bundesimmissionsschutzgesetz*– como norma de referencia [pues su finalidad es proteger del ruido con independencia de la fuente que lo produzca (art. 47)], el Código Federal de la Edificación –*BauGB*–, y las distintas Ordenanzas (actos legislativos del ejecutivo) de carácter específico, por ejemplo en la regulación de instalaciones que a pesar de no requerir autorización, deben satisfacer ciertos estándares de respeto a la protección del público en general, y a los vecinos en particular.<sup>947</sup>

El trasvase del grueso y diseminado cuerpo normativo protector del medio ambiente al Código Penal se llevó a cabo en 1980, mediante la primera Ley para combatir la Criminalidad Medioambiental –1. UKG–, que en opinión de un sector de la doctrina se produjo al amparo de la importancia que en ese momento tenía el medio

---

Sancionador. Parte General: teoría general y práctica del Derecho penal administrativo”, op. cit., págs. 61 y ss.

<sup>946</sup> Vid. ORTEGA BERNARDO, J. / REIMER, F. “Alemania: Rasgos y evolución general del derecho ambiental alemán y de sus proyectos de codificación”. En *Observatorio de Políticas Ambientales 2011*. Fernando López Ramón (coord.) Ed. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2011, págs. 117-134, en especial 125 y ss. El área de regulación independiente de los *Länder*, comprende tanto contaminación atmosférica como molestias por ruido que provienen de acciones de las personas, pero en ningún caso es uniforme en los 16 *Länder* de la República Federal de Alemania. Vid. MANN, T. / WEDEMEYER, H. En “La regulación de la contaminación acústica en Alemania”, op. cit., págs. 362 y ss.

<sup>947</sup> Otra Ley Federal relativa a las horas de cierre de los pubs autoriza a los *Länder* a concretar a través de instrumentos legales los horarios de cierre de pubs y restaurantes; todos ellos han hecho uso de la misma. Vid. MANN, T. / WEDEMEYER, H. Art. 18 de la Ley Federal sobre autorizaciones para el establecimiento de restaurantes, mesones y hoteles –*Gaststaettengesetz*–, de 20 de noviembre de 1998. En “La regulación de la contaminación acústica en Alemania”, op. cit., pág. 364.

ambiente para la opinión pública; uno de los fines de esta incorporación era enfatizar esa notoria significación.<sup>948</sup>

En la actualidad, los delitos contra el medio ambiente ocupan un Título propio en el que aparecen unificados los delitos relacionados con la contaminación de las aguas<sup>949</sup> y el aire, eliminación de residuos peligrosos, manipulación no autorizada de combustible nuclear, o la puesta en peligro del medio ambiente a través de la emisión de venenos, entre otros [Sección 28: §§324-330d –StGB–].

La protección contra el ruido aparece expresamente reflejada en el §325a, en los casos en que éste se origine por el funcionamiento de instalaciones permanentes o maquinaria con infracción de deberes jurídico-administrativos, que sea apta para lesionar la salud de las personas, con penas que oscilan entre los tres y cinco años de privación de libertad, o multa. También es punible la imprudencia, en cuyo caso la pena se reduce a dos años o multa, y tres años o multa, respectivamente. Como se puede apreciar, las diferencias más significativas respecto al sistema previsto en España son: la diferencia cuantitativa de pena y su carácter alternativo, pues la pena de prisión prevista por nuestro Código penal, además de ser más elevada, lleva aparejada la de multa y la de inhabilitación especial para profesión u oficio; la limitación de fuentes emisoras de ruido, que excluye la posibilidad de sancionar penalmente a un particular; y por último, que el bien jurídico queda restringido a la esfera de la salud humana.<sup>950</sup>

---

<sup>948</sup> La transformación instada por la 18ª Ley de reforma penal para la República Federal de Alemania, posteriormente dio lugar a una 2ª Ley para combatir la Criminalidad Medioambiental, de 1 de noviembre de 1994 –2. UKG–, con la misma orientación dirigida a intensificar el efecto preventivo. *Vid.* HEFENDEHL, R. “Derecho Penal Medioambiental: ¿por qué o cómo?”, op. cit., págs. 2-5 y 8; WOHLERS, W. “Derecho Penal como *ultima ratio*. ¿Principio fundamental del Derecho Penal de un Estado de Derecho o principio sin un contenido expresivo propio?”. Nuria Pastor Muñoz (trad.) En *Límites al Derecho Penal: principios operativos en la fundamentación del castigo*. Andrew von Hirsch et. al. (ed. alemana); Ricardo Robles Planas (ed. española). Ed. Atelier. Barcelona, 2012, págs. 109-128, en especial 113 y 114; ESER, A. “La Evolución del derecho penal alemán en las últimas décadas del siglo XX”, op. cit., pág. 269; “La Nueva Evolución del Derecho Penal Económico”, op. cit., págs. 50 y ss; ESCAJEDO SAN EPIFANIO, L. “El medio ambiente en la crisis del estado social. Su protección penal simbólica”, op. cit., págs. 37-41.

<sup>949</sup> La doctrina mayoritaria entiende que el delito de contaminación de aguas previsto en el §324a responde al gran despliegue dogmático que se ha practicado para demostrar la relación entre lo que describe dicho tipo y el bien jurídico, pues se rechaza el dogma de reconducir el bien jurídico a la persona humana. El hecho es que se penalizan acciones aptas para dañar plantas de gran valor o animales, por lo que la aptitud sólo sería relevante si se declarara bien jurídico a los elementos del medioambiente como tales. Por todos, *vid.* HEFENDEHL, R. En “Derecho Penal Medioambiental: ¿por qué o cómo?”, op. cit., págs. 7 y 8.

<sup>950</sup> *Vid.* ALASTUEY DOBÓN, C. “Derecho penal: la emisión de ruidos como delito de contaminación ambiental”, op. cit., pág. 328.

Como peculiaridad adicional en la especialidad de ruido, cabe destacar la enmienda llevada a cabo en 2011 a la Ley Federal de Protección contra los efectos ambientales nocivos debidos a la contaminación del aire, ruido, vibraciones y operaciones similares de 1974, por la que en estos momentos dicha norma se considera inaplicable al ruido infantil producido en el marco de las relaciones vecinales. La X Ley de Reforma de la –BImSchG–, en vigor desde el 28 de julio de 2011, introduce al § 22 un nuevo apartado 1 a), que establece que no existe como regla ningún efecto ambiental perjudicial en el ruido causado por guarderías, parques infantiles e instalaciones similares.<sup>951</sup>

## **b) Italia**

En Italia se sigue un modelo similar al alemán, tras haber efectuado una labor despenalizadora con la aprobación de la Ley 689/1981, que contiene una regulación general de las infracciones y sanciones basada en el modelo penal, pero con importantes diferencias. Por ejemplo, no se aplica a todas las sanciones administrativas, sino exclusivamente a aquellas materias que eran constitutivas de delito y que cruzaron la barrera despenalizadora, aunque el art.12 prevé la inclusión de todas las demás, siempre y cuando se castiguen únicamente con una sanción pecuniaria. También se excluye la retroactividad *in bonus* y otras cuestiones referidas al principio de culpabilidad, ya que la Administración no necesita probar la negligencia del infractor, basta con acreditar la comisión de la conducta típica.

Una particularidad del ordenamiento italiano en comparación al nuestro es la no responsabilidad de las personas jurídicas, pero el resultado en la práctica no difiere de los ordenamientos que sí lo contemplan, porque finalmente la persona jurídica en cuyo nombre o para la cual ha actuado el infractor, responde solidariamente con éste del

---

<sup>951</sup> En Alemania, los usos y normas que regulan el contenido del concepto denominado –*Meine Ruhe*– (mi tranquilidad) son estrictas, pero la jurisprudencia ya había corregido la aplicación de la *Bundes-Immissionsschutzgesetz* –BImSchG– al ámbito del ruido producido por los niños –*Kinderlärm*–, pues la norma equiparaba el bullicio infantil a otros impactos ambientales adversos. Sobre la legislación que aborda la protección contra el ruido con anterioridad, *vid.* COBOS GÓMEZ DE LINARES, M. A. “La protección penal del medio ambiente en Alemania (R.F.), Francia e Italia”. *Separata del libro Derecho y Medio Ambiente*. Ed. Servicio de Publicaciones CEOTMA. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Madrid, 1981, págs. 282 y 290. Apuntes concretos a la Ley federal sobre el control de las emisiones y otras Ordenanzas sobre ruido en MANN, T. / WEDEMEYER, H. “La regulación de la contaminación acústica en Alemania”, *op. cit.*

importe de la sanción (multa).<sup>952</sup> El régimen general sigue el modelo de un juicio civil, ya que la resolución administrativa (a la que se llega tras la negativa del infractor a zanjar el asunto con el pago de una cantidad que siempre es menor a la que pueda alcanzar la sanción), es recurrible ante un juez ordinario; en realidad es un proceso dirigido a la impugnación del acto administrativo sancionador, en el que el sancionado ocupa la posición de demandante. Sin embargo, si el Tribunal considera que no existen pruebas suficientes de la responsabilidad, anulará la sanción.<sup>953</sup>

Por su parte, la regulación penal del medio ambiente es bastante dispersa, pues la mayor parte de las sanciones penales se incorporan a la normativa penal especial relacionada con cada uno de los elementos naturales –agua, residuos, contaminación electromagnética, flora y fauna, alteración del ecosistema–. Frente al ruido en particular, la Corte de Casación italiana despenalizó la conducta prevista por el art. 659 del Código Penal –contravención en relación a las molestias de ocupaciones o del reposo de las personas–<sup>954</sup> a favor de la sanción administrativa que contempla el art. 10

---

<sup>952</sup> Vid. PALAZZO, F. El autor critica la disfuncionalidad del sistema para corregir la ineficaz respuesta a los índices de criminalidad ambiental empresarial. En “Principios fundamentales y opciones político-criminales en la tutela penal del ambiente en Italia”, op. cit., pág. 81. Al respecto, la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 4 de marzo de 2015, núm ECLI:EU:C:2015:140, asunto C-534/13. Tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) con arreglo al artículo 267 TFUE, acerca de la interpretación de los principios del Derecho de la Unión en materia medioambiental, en particular, los de quien contamina paga, de cautela, de acción preventiva y de corrección de los atentados al medio ambiente. La resolución declara que la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal que, cuando es imposible identificar al responsable de la contaminación de un terreno u obtener de éste las medidas reparadoras, no permite a la autoridad competente imponer la ejecución de las medidas preventivas y reparadoras al propietario de dicho terreno no responsable de la contaminación, al que se exige únicamente reembolsar los gastos relativos a las actuaciones realizadas por la autoridad competente, por un importe no superior al valor de mercado del paraje, que se determina una vez ejecutadas dichas actuaciones.

<sup>953</sup> Lo que hace pensar en la inversión de los lugares ocupados por el particular y la Administración en el proceso, ya que en este caso la Administración ocuparía la posición de demandante, no de demandada. Sobre estos aspectos, vid. HUERGO LORA, A. Considera que el sistema italiano es muy inferior al alemán, pero más garantista y desarrollado técnicamente que el previsto por nuestra LRJPAC. Voz “Derecho comparado europeo: la potestad sancionadora de la Administración en Alemania, Francia e Italia”. En *Diccionario de Sanciones Administrativas*. Blanca Lozano Cutanda (dir.) Ed. Iustel. Madrid, 2010, págs. 310-316.

<sup>954</sup> Código Penal italiano: Libro terzo “Delle Contravvenzioni in Particolare”. Art. 659. <<Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone: Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impediendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire seicentomila. Si applica l'ammenda da lire duecentomila a un milione a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità>>. [Libro tercero. “De las contravenciones en particular”. Art. 659. Molestia de las ocupaciones o del descanso de las personas: Quien, mediante gritos o ruidos, o mediante el abuso de instrumentos sonoros o de señales acústicas, o

de la Ley marco sobre contaminación acústica, de 26 de octubre de 1995, n. 447.<sup>955</sup> Dicho precepto vincula la conducta al art. 650 CP, pues éste último prevé penas de hasta tres meses de prisión o multa por incumplimiento de las disposiciones de la Autoridad.<sup>956</sup> Otra norma de referencia es el Decreto Legislativo n. 19 de agosto de 2005, núm. 194, que incorpora al derecho interno la Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.

### c) Francia

Más complejo que los anteriores resulta el Derecho administrativo sancionador francés, que contempla al menos cuatro clases diferentes de sanciones. Por una parte, la figura de las contravenciones –categoría de infracciones penales que se castigan con penas más leves que las que se aplican a delitos y faltas–, tipificadas por Reglamentos a través de los cuales se decide la pena aplicable, conforme a los principios generales enunciados en los arts.111-1 a 111-5 del Código Penal. En segundo lugar, otra categoría de contravenciones relativas a las infracciones en materia de dominio público <<*contraventions de grande voirie*>>; su principal característica es que son impuestas por los órganos contencioso-administrativos, no por los Tribunales penales ni por la Administración.<sup>957</sup> En tercer lugar, también se regulan de forma autónoma las

---

suscitando o no impidiendo sonidos de los animales, disturbe las ocupaciones o el descanso de las personas, o mediante los espectáculos, reuniones o entretenimientos públicos, está penado con arresto hasta tres meses o multa hasta seiscientos mil liras. Se aplica la multa desde doscientas mil a un millón de liras a quien ejercita un trabajo u ocupación ruidosa contra las disposiciones de la ley o las prescripciones de las Autoridades (tr. pr.)]

<sup>955</sup> Vid. MENDOZA CALDERÓN, S. Se refiere a la Sentencia de la Corte de Casación italiana de 3 de diciembre de 1997. En “La protección penal del medio ambiente en Alemania, Italia, Francia y España: Estudio de Derecho Penal comparado”, op. cit., pág. 284, nota 607. Realiza un detallado examen de la ley n. 447/1995, FRACCHIA, F. En “La disciplina pública de la contaminación acústica en el ordenamiento italiano”, op. cit., págs. 443 y ss. Vid. PALAZZO, F. El ámbito de aplicación de este artículo 10 de la Ley marco sobre la contaminación acústica requiere de una tarea interpretativa de la noción de ambiente que en el ámbito penal resulta demasiado general y por tanto, la indeterminación alcanza cotas elevadas. En “Principios fundamentales y opciones político-criminales en la tutela penal del ambiente en Italia”, op. cit., pág. 73.

<sup>956</sup> El art. 650 fue salvado expresamente, y el régimen sancionatorio previsto por la ley n. 447/1995, de tipo pecuniario (arts. 10 y 11) se basa precisamente en el modelo de dicho precepto penal, como recuerda FRACCHIA, F. En “La disciplina pública de la contaminación acústica en el ordenamiento italiano”, op. cit., pág. 460.

<sup>957</sup> La razón es que con ellas se persigue la protección de estos bienes, y no sólo el castigo del infractor, por lo que deben atribuirse a órganos que, como los Tribunales administrativos en Francia, pertenecen a la propia Administración y tienen en cuenta los intereses públicos y no sólo la justicia en sentido estricto. Vid. HUERGO LORA, A. En “Derecho comparado europeo: la potestad sancionadora de la Administración en Alemania, Francia e Italia”, op. cit., pág. 312; “Las sanciones administrativas”, op. cit., págs. 88 y ss.

infracciones y sanciones en materia disciplinaria con el empleo de una interpretación ampliada, que ha permitido incluir en el régimen disciplinario a las sanciones tributarias (se imponen directamente por órganos de la Administración y son recurribles en la vía contencioso-administrativa), pasando a denominarse en general “sanciones de autoprotección”. Por último, aparece una novedosa potestad sancionadora a través de Leyes especiales, que en unos casos controlan los Tribunales administrativos y en otros los penales (fundamentalmente se refieren a sectores como las telecomunicaciones, el mercado de valores, los seguros y en general aquellos susceptibles de imposición de sanciones revocatorias de títulos habilitantes, con un amplio contenido rescisorio de actos favorables). Parece congruente que sea la propia Administración la que revoque los títulos que previamente ha otorgado, sobre todo en sectores en los que esos títulos se configuran como los principales mecanismos de intervención, a diferencia de lo que ocurre en el Derecho alemán, en el que éstas medidas no se consideran en ningún caso sanciones.<sup>958</sup>

La tutela penal que se otorga al medio ambiente, de forma similar a lo que ocurre en Italia, se encuentra fraccionada en orden a la distinción entre la variedad de elementos naturales protegidos. En este país, el Código de Medio Ambiente (año 2000) es el texto legal que contiene los principios generales de la protección medioambiental (arts. L110-1 y L110-2).<sup>959</sup> El Libro V recoge las normas relativas a la prevención de la polución, los riesgos y las actividades molestas, dedicando dos Títulos consecutivos a la contaminación acústica y visual (Títulos VII y VIII respectivamente) casi de forma homogénea, acorde parcialmente a la conjunción planteada en este trabajo.<sup>960</sup>

---

<sup>958</sup> Como de nuevo apunta HUERGO LORA, A., si bien parece que el sistema alemán adolece de garantías suficientes frente al modelo francés, por el hecho de no otorgar la categoría de sanción a otras medidas, lo cierto es que precisamente por estar en juego intereses generales y de terceros y no sólo del infractor, mientras las multas suponen un mal para el que las recibe, pero no influyen en la tutela de los intereses públicos directamente, las medidas rescisorias cumplen ambas funciones. <<su causa consiste en impedir que siga perjudicando a los mismos un sujeto que ha demostrado poco respeto a las reglas>>. En “Derecho comparado europeo: la potestad sancionadora de la Administración en Alemania, Francia e Italia”, op. cit., págs. 313 y 314; “Las sanciones administrativas”, op. cit., págs. 99 y 100.

<sup>959</sup> Se declara que forman parte del patrimonio común de la nación los espacios, recursos y medios naturales, los sitios y paisajes, calidad del aire, las especies animales y vegetales, la diversidad y el equilibrio biológico en el que participan. Al respecto, MENDOZA CALDERÓN, S. En “La protección penal del medio ambiente en Alemania, Italia, Francia y España: Estudio de Derecho Penal comparado”, op. cit., págs. 293-296. Por otra parte, Francia es el primer país europeo que ha prohibido taxativamente la extracción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica, por Ley 2011-835, de 13 de julio de 2011, iniciativa imitada en Bulgaria. Un estudio jurídico de esta técnica conocida como *fracking* en MOREU CARBONELL, E. “Marco jurídico de la extracción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica (*fracking*)”. En *Revista Catalana de Dret Ambiental*, Vol. III, núm. 2, 2012, págs. 1-43.

<sup>960</sup> Consultar Primera Parte, epígrafe 3.4. Así, el art. L571-1 del Código de Medio Ambiente configura el objeto de la lucha contra el ruido en relación a prevenir, eliminar o limitar la emisión o propagación de



Asimismo, reúne tanto los controles y sanciones administrativas, como las sanciones penales correspondientes, de las cuales ninguna supera los dos años de pena privativa de libertad; por ejemplo, el art. L514-11 I., prevé que el incumplimiento de la orden de requerimiento emitida en virtud del artículo L512-19 será castigado con dos años de prisión y multa de 150.000 euros.<sup>961</sup>

Por otra parte, el ruido nunca ha sido definido conceptualmente en el Derecho francés, lo que no ha impedido que se asocie al mismo la categoría de daño, interpretación bien remota para el Derecho penal en este país, en especial adjudicada al ruido nocturno vinculado a las relaciones de vecindad.<sup>962</sup> Pese a la existencia de multiplicidad de textos normativos en vigor, una competencia bicéfala de policía administrativa entre el Prefecto (representante del Estado en el departamento) y el Alcalde (que encarna el interés local), nuevos intérpretes públicos o privados (Ministerio de Medio Ambiente, el Consejo Nacional del ruido, la Autoridad de control de la contaminación sonora aeroportuaria, el Centro de información y documentación sobre el ruido, o diversas asociaciones de lucha contra el ruido), la ley núm. 92-1444 de 31 de diciembre de 1992 relativa a la lucha contra el ruido supuso un destacado esfuerzo de armonización, sobre todo proporcionando principios generales adaptables a la miscelánea de textos normativos.<sup>963</sup>

---

ruidos y vibraciones que perturben en exceso a las personas, causen daño a su salud o dañen el medio ambiente. Aunque ambos fenómenos (ruido/paisaje) se tratan en diferentes Títulos del Código, aglutinan una serie de conductas dispares pero con idéntica finalidad. Por ejemplo, las emisiones acústicas procedentes de objetos, actividades ruidosas, acondicionamientos e infraestructuras de transportes terrestres, contaminación acústica causada por los trasportes aéreos, contribución financiera de los explotadores de aeródromos en los gastos de aplicación de las disposiciones necesarias para mitigar el ruido de los residentes, evaluación, prevención y reducción del ruido ambiental, normas relativas a la publicidad, letreros y señalización, o prevención de la contaminación visual. Título VII. “Prevención de la contaminación acústica”.

<sup>961</sup> En relación a décadas precedentes, *vid.* COBOS GÓMEZ DE LINARES, M. A. Refiere la escasa atención que se prestaba al ruido, así como la prevalencia de la protección contra la contaminación atmosférica de los vehículos de motor por emisión de gases, que llevaba aparejada una multa de mayor cuantía. Por otra parte, el art. R. 34 del Código Penal castigaba con multa de 80 a 160 francos a: 8º <<Los autores o cómplices de ruidos, alborotos o reuniones molestas que perturben la tranquilidad de los habitantes>>. En “La protección penal del medio ambiente en Alemania (R.F.), Francia e Italia”, *op. cit.*, pág. 295.

<sup>962</sup> La ausencia de una definición de “ruido”, en opinión de MIALOT, C., encarna su verdadera naturaleza subjetiva, se trata de un *asunto de percepción*, objeto de tratamiento jurídico antiguo. El Código Penal contempla <<los ruidos abusivos o nocturnos que perturban la paz de otros>>. “La lucha contra el ruido en Derecho francés”. Camille Mialot / Enrique Guillén López (trads.) En *Régimen jurídico del ruido. Una perspectiva integral y comparada*. Estanislao Arana García / Mª Asunción Torres López (coords.) Ed. Comares. Granada, 2004, págs. 367-379.

<sup>963</sup> *Vid.* MIALOT, C. Especialmente el concepto de daño permite dar un enfoque integral del fenómeno del ruido. En “La lucha contra el ruido en Derecho francés”, *op. cit.*, págs. 374 y 375.

### 6.3.3.1.- El ruido en el modelo anglosajón del Reino Unido

La diferencia básica entre el Derecho anglosajón –*Common Law*– y el sistema empleado por el Derecho continental europeo, estriba en que el primero utiliza un método jurisprudencial vinculante. Esto significa que las decisiones expresadas en las sentencias judiciales poseen carácter obligatorio para los jueces que diriman cuestiones enjuiciadas previamente por otro tribunal de su misma jerarquía o superior; la base es el precedente judicial, aunque no exclusivamente, pues el Derecho estatutario –*Statutory Law*– ocupa un papel cada vez más destacado y de ostensible presencia en la materia que nos ocupa, como veremos a continuación.<sup>964</sup>

En el Reino Unido, la primera norma que se ocupó del fenómeno del ruido fue la Ley de Reducción del Ruido –*Noise Abatement Act*–, que el Parlamento adoptó en 1960, estableciendo por primera vez en este país que el ruido representaba una molestia legal [*Statutory Nuisance*]. La propuesta partió del fundador de la *Noise Abatement Society*, que presionó de manera considerable para conseguir su promulgación.<sup>965</sup>

Posteriormente, la Ley del Ruido –*The Noise Act*– (1996), modificada por la –*Anti-social Behaviour Act*– (2003), y la –*Clean Neighbourhoods and Environment Act*– (2005) conforman el cuadro general de protección contra el ruido.<sup>966</sup>

---

<sup>964</sup> Sobre las múltiples diferencias en cuanto a la nomenclatura de “delito” entre ambos sistemas, vid. BERNAL DEL CASTILLO, J. *Derecho penal comparado: la definición del delito en los sistemas anglosajón y continental*. Ed. Atelier. Barcelona, 2011, págs. 130 y ss.

<sup>965</sup> Sociedad fundada en 1959 por John Conell, quien se percató de que no existía autoridad alguna que solventara las quejas por ruido; el ruido era, en sus palabras <<el contaminante olvidado>>. Utilizó todos los formatos de medios de comunicación existentes, librando una campaña incesante en la que señalaba que el exceso de ruido era destructivo y perjudicial para la sociedad. La respuesta del público fue enorme. Recibió una gran cantidad de correo de personas cuyas vidas estaban arruinadas por una forma o de otra de ruido, y que se sentían abandonados. El enfoque práctico de su propuesta se tradujo en la introducción de las tapas de cubo de basura de goma y las cajas de leche de plástico. Convenció a los fabricantes de que se esforzaran por reducir los niveles de ruido en sus productos para que el factor “tranquilad” se convirtiera en un suplemento de cara a las ventas. A lo largo de sus más de 50 de historia, ha diversificado y ampliado sus objetivos, incluyendo el tratamiento de otros contaminantes relacionados con la solución de los problemas del ruido, por ejemplo la perturbación lumínica y la contaminación del aire. <http://noiseabatementociety.com/> (último acceso 12/07/2015).

<sup>966</sup> Una panorámica general de la implementación del ruido en el *Common Law* del Reino Unido en WOLF, S. / STANLEY, N. El Capítulo dedicado al ruido reúne algunas decisiones judiciales en relación al ruido. Una de las más recientes sobre el ruido provocado por la organización de una fiesta al aire libre con música en directo alimentada por un generador y la afluencia de 200 personas. [*R v. Conrad Ryder-Large & John Castrillion* (2008) *EWCA Crim* 2966]. La policía recibió cerca de 39 quejas y la música se escuchaba a 4 millas de distancia (6,44 kms). Los dos acusados apelaron sus condenas, pero el Tribunal de apelación confirmó ambas: condena de tres meses de privación de libertad suspendida por dos años de prohibición de actividad, y multa de 2.000 libras con 28 días de prisión en caso de no hacerla efectiva,

Las facultades previstas en la Ley del Ruido de 1996 se suman a las que poseen las autoridades locales bajo la *–Environmental Protection Act–* (1990) y la *–Noise and Statutory Nuisance Act–* (1993).<sup>967</sup>

Ahora bien, uno de los problemas fundamentales es la reclamada reforma de la Ley del Ruido, pues la emisión de ruidos en este país es básicamente un asunto de vecindario, generado principalmente por los habitantes de las respectivas ciudades en sus propios hogares, en contraste con la contaminación del agua, por ejemplo, cuya autoría recae primordialmente en organizaciones comerciales. Este factor, sin duda, ha actuado de freno para el desarrollo de una legislación más draconiana en relación con el ruido. En virtud de la naturaleza de la polución por sonidos, el público en general es probablemente incapaz de relacionar el ruido que emite con el originado por aquellos que ya han sido procesados con éxito por delitos relacionados con el ruido. Por lo tanto, el procesamiento desarrolla un papel bastante limitado en el propósito general de persuadir a los ciudadanos de no burlar la ley.<sup>968</sup>

Así, la dispersión que caracteriza en general a la regulación de las emisiones acústicas tampoco escapa al sistema anglosajón. Cuenta con normas que se ocupan de la declaración de zonas de reducción del ruido *–Noise abatement zones–*, ruido de la calle y altavoces, ruido en la construcción de obras [secciones 63-67, 62, y 60-61 respectivamente, todas en la *–Control of Pollution Act–* de 1974], así como numerosos controles sobre el diseño y construcción de determinados equipos para limitar las

---

respectivamente. No obstante, en [*R (London Borough of Hackney) v. Moshe Rottenberg* (2007) *EWHC 166 (Admin)*; (2007) *Env LR 24*; (2008) *JPL 177*], la condena a un Rabino en relación con el ruido generado por una vivienda que era utilizada como escuela y sinagoga, la Corte consideró que no había pruebas suficientes de que la intrusión del ruido fuera suficiente para causar molestia en vez de irritación. El ruido consistía en gritos, cánticos, saltos y aplausos en los pisos interiores. La autoridad local argumentó, sin embargo, que sus oficiales eran profesionales, experimentados e independientes, y que escucharon el ruido con ocasión de sus visitas, por lo que el tribunal debía aceptar sus evidencias o dar razón suficiente para rechazarlas. El Tribunal Divisional (cuyos asuntos incluyen algunos casos criminales, y que normalmente está compuesto por dos jueces) sostuvo que la Corte tenía derecho a rechazar la opinión de los oficiales. *Wolf and Stanley on Environmental Law* (6<sup>th</sup> ed. revised) Ed. Routledge. London & New York, 2014, págs. 443-502. Otro manual de referencia con una extensa lista de casos es la obra de HUGHES, D. “Environmental Law”, op. cit., págs. 582-621.

<sup>967</sup> *Environmental Protection Act*. Disponible en: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/43/contents>  
*Noise and Statutory Nuisance Act*. Disponible en: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1993/40/contents>  
(último acceso 12/07/2015).

<sup>968</sup> Así, McMANUS, F. El ruido de vecindad, a diferencia de otros contaminantes del medio ambiente, es concomitante inevitablemente a la vida humana y, por supuesto, ligado a ella íntimamente. Las principales señas de identidad de la regulación del ruido son la ambigüedad y la falta general de coherencia, que constituyen un profundo obstáculo para la eficacia de la ley. “Noise law in the United Kingdom -a very British solution?”. En *Legal Studies*, Vol. 20, Issue 2. Imelda Maher et. al. (eds.) Ed. Society of Legal Scholars. June, 2000, págs. 264-290.

emisiones de ruido, en particular, los vehículos de motor, aeronaves, plantas y equipos de construcción, maquinaria industrial, electrodomésticos y cortadoras de césped para el hogar, todos basados en normas de la UE. En particular, *–The Noise Emission in the Environment by Equipment for Use Outdoors Regulations–* (2001) aplica la Directiva 2000/14/CE.

Por ejemplo, una autoridad local puede solicitar una medida cautelar para impedir o restringir las molestias causadas por el ruido, ya sea antes o, si es probable que se repita, después de su producción, bajo los amplios poderes que proporciona la sección 222 de la Ley de Gobierno Local *–Local Government Act–* (1972). Estas autoridades locales ostentan facultades para actuar en la promoción y protección de los intereses de los habitantes de sus áreas, incluyendo, entre otras medidas, el procesamiento por cualquier cauce legal. Asimismo, bajo la sección 235 pueden crear *Bye-laws* (similares a nuestras ordenanzas locales) para suprimir las molestias por ruidos, cuya violación se convierte en delito de inmediato.<sup>969</sup>

Todas estas previsiones contenidas en algunos ordenamientos de nuestro entorno más próximo, tanto geográfico como normativo, al menos desde un punto de vista constitucional (excepto Reino Unido), ya que la mayoría de países en nuestra geografía más próxima han plasmado en sus respectivos textos constitucionales el Derecho al medio ambiente<sup>970</sup> bien merecen una reflexión sobre las distintas soluciones y la

---

<sup>969</sup> Vid. LAMBERT, S. “Statutory Nuisance and Controls over Noise” Chapter 16. En *Burnett-Hall on Environmental Law* (3<sup>th</sup> ed.) Richard Burnett-Hall / Brian Jones (eds.) Ed. Sweet & Maxwell. London, 2012, págs. 619-658; GARBUTT, J. *Environmental Law. A Practical Handbook* (3<sup>th</sup> ed.) Ed. Palladian Law Publishing. Bembridge (UK), 2000, págs. 87-91; HUGHES, D. “Environmental Law”, op. cit.; McELDOWNEY, J. & S. *Environmental Law*. Ed. Pearson Education Limited. Essex (UK), 2010, págs. 340-352; BELL, S. & MCGILLIVRAY, D. *Environmental Law* (6<sup>th</sup> ed.) Ed. Oxford University Press. New York, 2006, págs. 403-430.

<sup>970</sup> A excepción de Italia y Alemania, cuyas Constituciones no cuentan con un artículo expresamente referido al concepto medio ambiente. En Italia, ello no ha impedido considerar al bien jurídico digno de protección, así como un principio fundamental a través de la reconstrucción jurisprudencial y legislativa del Derecho al medio ambiente. La reforma constitucional de 2001 introduce una referencia al mismo en el art. 117: <<El Estado tendrá facultad exclusiva de legislar sobre las materias siguientes: s) protección del medio ambiente, del ecosistema y de los bienes culturales>>. Al respecto, vid. MILIONE FUGALI, C. “El medio ambiente como valor jurídico en el marco de la Constitución italiana”. En *Nuevas Políticas Públicas: Anuario multidisciplinar para la modernización de las Administraciones Públicas*, núm. 4. Ed. Instituto Andaluz de Administración Pública, 2008, págs. 233-249; FRACCHIA, F. En “La disciplina pública de la contaminación acústica en el ordenamiento italiano”, op. cit., pág. 435. Respecto a Alemania, el art. 20 a) de la Ley Fundamental (en vigor desde el 15 de noviembre de 1994) declara que el Estado protegerá <<... los fundamentos naturales de la vida>>. Por su parte, MACÍAS CASTILLO, A., considera que este factor no sólo no ha frenado la protección al medio ambiente, sino más bien lo contrario, llegando a ejercer niveles elevados. En “El daño causado por el ruido y otras inmisiones”, op. cit., pág. 188, nota 536. Vid. AECHERLI, W. “Judicial and Legal Aspects of Noise Control”. En *Noise Pollution: Effects and Control*. A. Lara Saenz / R.W.B. Stephens (eds.) Ed. John

adopción de medidas tan dispares dentro del actual y predominante sistema de accesoriadad relativa administrativa asociado a los delitos medioambientales en general, y por ende a la emisión de ruidos.<sup>971</sup>

Ello no implica que tengamos que considerar la validez plena de alguno de ellos en particular, ni una traducción mimética de sus postulados, pero al menos puede servir de base para la adopción de cualquiera de sus soluciones y sus diversos enfoques pueden otorgar apoyo en la consecución de los objetivos perseguidos, en suma, que la finalidad de la norma encuentre el cauce más apropiado.

#### **6.3.4.- ¿Necesidad o carácter simbólico de la ampliación de delitos y penas medioambientales frente al diseño de infracciones y sanciones administrativas y su efectiva aplicación en materia de ruido?**

El interés de la función preventiva que ejercen las sanciones administrativas en lo que atañe al Derecho ambiental encuentra su razonamiento en ese cometido de evitación de los daños ambientales, que no es comparable a la función restauradora, pues ya conocemos las dificultades que entraña la reparación en cuestiones medioambientales.<sup>972</sup> Dicho esto, en la sub-tipología del ruido el discurso se canaliza a través de dos ideas principales.

---

Wiley & Sons. Scientific Committee on Problems of the Environment (Scope 24). Great Britain, 1986, págs. 419-429.

<sup>971</sup> El sistema de accesoriadad relativa se resume en la adopción de tres modelos: la accesoriadad conceptual (a través de elementos normativos típicos); la accesoriadad de derecho (el precepto se configura como tipo penal en blanco remitiéndose a la normativa administrativa de forma explícita o implícita); y accesoriadad de acto (dependencia respecto a los actos de la autoridad administrativa, mediante la remisión de un tipo que realmente también es una norma penal en blanco). *Vid.* DE LA MATA BARRANCO, N J. “Derecho comunitario y Derecho estatal en la tutela penal del ambiente”. En *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, núm. 2, 2 de abril de 2000, págs. 1-37, en especial 22 a 28. Disponible en: [www.criminet.ugr.es/recpc/index.html](http://www.criminet.ugr.es/recpc/index.html) (último acceso 12/07/2015). *Vid.* BRANDARIZ GARCÍA, J. A. “Relaciones entre el Derecho penal y el Derecho administrativo” Cap. VI, Parte general. En *Ordenación del territorio, patrimonio histórico y medio ambiente en el Código penal y la legislación especial*. Patricia Faraldo Cabana (dir.) Luz María Puente Alba (coord.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2011, págs. 91-119.

<sup>972</sup> *Vid.* LOZANO CUTANDA, B. Subraya el auge experimentado y generalizado de la admisión de este tipo de medida represiva como eje de la potestad sancionadora de la Administración en el sistema jurídico occidental, que incluye a numerosos países de nuestra órbita. “Infracciones y sanciones

La primera discurre a través de los requisitos que debe cumplir el ilícito administrativo, que por otra parte serán de categoría similar a los que desencadenen la intervención del ordenamiento penal en última instancia (dejando momentáneamente apartado el criterio de la gravedad), por la configuración normativa de esta tipología delictiva, esto es, una ley penal en blanco que remite a las leyes y normas de carácter general que regulan la protección del medio ambiente.<sup>973</sup> En este punto no sería descartable, sino más bien deseable, el empleo de determinados instrumentos técnicos como las *cláusulas de remisión inversa*, sobre todo en sectores tan trepidantes y cambiantes como el medio ambiente, cuestión que ya fue abordada en el contexto general de las leyes penales en blanco y sus problemas de interpretación por BACIGALUPO y CEREZO MIR, de acuerdo con los criterios manejados por la jurisprudencia constitucional alemana, así como en algún asunto esporádico por la jurisprudencia constitucional española.<sup>974</sup>

La segunda se caracteriza por la correcta, eficaz, y sobre todo garantizada aplicación de la sanción administrativa ambiental<sup>975</sup> por la administración pública que

---

administrativas para la protección del medio ambiente”. En *Diccionario de Derecho Ambiental*, op. cit., págs. 732-746, en especial 733. También PEÑALVER I CABRÉ, A., resalta la capacidad preventiva y no meramente retributiva de la sanción administrativa. En “Nuevas tendencias sobre la inactividad administrativa en la aplicación de las sanciones ambientales”, op. cit., pág. 174.

<sup>973</sup> Vid. DOVAL PAIS, A. *Posibilidades y límites para la formulación de las normas penales. El caso de las leyes en blanco*. Ed. Tirant lo Blanch / Universidad de Valencia. Valencia, 1999.

<sup>974</sup> Vid. BACIGALUPO ZAPATER, E. *Las sanciones administrativas: (derecho español y comunitario)*. Ed. Colex. Madrid, 1991; CEREZO MIR, J. En nuestro país, se refiere al *obiter dicta* de la STC (Pleno) 341/1993, de 18 de noviembre [RTC 1993\341], que resolvió varios recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra ciertos artículos de la llamada “Ley Corcuera”: LO 1/1992 de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana. En *Curso de Derecho penal español. Parte general*. Vol. I. Introducción (6ª ed.) Ed. Tecnos. Madrid, 2004, pág. 58. Sobre las ventajas de la implantación de éstas cláusulas de remisión inversa, vid. DOVAL PAIS, A. Entre otras, cumplir una importante función informadora para el destinatario de la norma complementaria extrapenal, y con ello reforzar el mandato o prohibición contenido en dicha norma; otorgar un plus de certeza para determinar el ámbito de la remisión que efectúe la ley penal, y dotar de coherencia sistemática al Derecho administrativo sancionador, pues obligaría al órgano emisor de la norma, en el momento de su redacción, a tener en cuenta las posibles sanciones de las conductas y la relación entre los fines y los medios de cada sector del ordenamiento. En “Posibilidades y límites para la formulación de las normas penales. El caso de las leyes en blanco”, op. cit., págs. 205-208.

<sup>975</sup> Las más comunes o estandarizadas en el marco del ruido son la multa y las sanciones rescisorias como la suspensión o clausura del establecimiento. Ésta última a su vez, puede actuar como sanción principal o accesoria, según lo prevea el legislador, y también como medida provisional antes o durante la tramitación del procedimiento, pero en cualquier caso se trata de una sanción muy grave. Otras medidas complementarias de las sanciones impuestas por infracciones graves son la publicidad en los diarios oficiales o en los medios de comunicación, las sanciones que consisten en privación de derechos como la prohibición de obtener ayudas públicas o la pérdida de la condición de entidad colaboradora de la Administración, o la exigencia de reposición de la situación ambiental alterada a su estado originario, que cuando no sea posible dará lugar a la indemnización de daños y perjuicios causados. Vid. LOZANO CUTANDA, B. “Infracciones y sanciones administrativas para la protección del medio ambiente”. En *Diccionario de Derecho Ambiental*. op. cit., págs. 742 y ss. A propósito de la diversidad de entes

ostente la capacidad de ejecución, ya sea por su competencia territorial o material, en orden a paliar la desventaja y contrapeso que supone la obtención de determinados estándares de legalidad por parte del sujeto contaminante, bajo el refugio del poderoso espacio que ocupa la figura del silencio administrativo, en algunos casos, o simplemente la inaplicación del Derecho administrativo sancionador ambiental comentada.<sup>976</sup>

Cuando la situación deseada e ideal no se produce, es decir, la inactividad de la administración cobija aquellas conductas que vulneran la legislación ambiental, deberían existir mecanismos más exhaustivos que proporcionen una respuesta adecuada, como las acciones ciudadanas *-citizen suits-* características del Derecho ambiental norteamericano, presentes en la mayoría de leyes ambientales aprobadas a partir de los años 70 del siglo XX. Con ellas no se pretende sustituir la labor de la administración, sino perfeccionarla reforzando la posición jurídica de los ciudadanos (de forma individualizada o a través de grupos de defensa ambientales).<sup>977</sup> El Código

---

instrumentales de la Administración en toda su extensión, *vid.* BOTO ÁLVAREZ, A. *La Administración instrumental en el proceso*. Ed. Reus. Madrid, 2011.

<sup>976</sup> *Vid.* PEÑALVER I CABRÉ, A. Las causas son diversas, pero coincidentes con las que actúan en la inaplicación de la legislación en general. Entre ellas, la pasividad, tolerancia y complicidad de la Administración; que ella misma también es infractora en muchas ocasiones; la deficiente técnica legislativa, que disminuye la capacidad de conocimiento de los destinatarios y los convierte en infractores por cualquier conducta; la aprobación de infracciones y sanciones sin tomar en cuenta los factores técnicos y económicos que dificultan su cumplimiento; la falta de recursos (personales y materiales); o la mala organización administrativa. En “Nuevas tendencias sobre la inactividad administrativa en la aplicación de las sanciones ambientales”, *op. cit.*, págs. 175-179.

<sup>977</sup> Estas acciones cumplen un papel vertebrador en el aseguramiento de la aplicación de la legislación ambiental, en particular del régimen sancionador, ante el elevado nivel de incumplimiento por la inexistente o escasa reacción administrativa. Todo ello a través del oportuno cauce procesal y de determinados requisitos, como la notificación previa al infractor y a la agencia competente de la ejecución de las leyes, o el establecimiento de un régimen que permite penalizar las *citizen suits* arbitrarias y no legítimas, y fomentar las que sí lo son. Las pretensiones consisten en una condena pecuniaria para el infractor, cuyo importe generalmente se destina a proyectos de mejora ambiental, y los acuerdos que alcancen las partes tienen los mismos efectos que una sentencia. *Vid.* JORDANO FRAGA, J. En “La protección del derecho a un medio ambiente adecuado”, *op. cit.*, págs. 349 y ss; PEÑALVER I CABRÉ, A. “Nuevas tendencias sobre la inactividad administrativa en la aplicación de las sanciones ambientales”, *op. cit.*, pág. 180; “Novedades en el acceso a la justicia y a la tutela administrativa en asuntos medioambientales”. En *Acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente: diez años del Convenio de Aarhus*. Antoni Pigrau Solé (dir.) Ed. Atelier. Barcelona, 2008, págs. 349-402, en especial 368 y ss. *Vid.* SMITH, J. L. Analiza el factor estratégico que ha venido ejerciendo el papel de las *citizen suits* en los tribunales federales desde 1970 a 1994, del cual el Congreso de EE.UU. se nutre para incrementar su rol en las políticas regulatorias. Se ofrecen varios ejemplos dentro de las 284 analizadas en relación al medio ambiente, entre las que cabe destacar las menciones a la *Clean Water Act*, la *Toxic Substances Control Act*, o a las tres mayores revisiones de la *Clean Air Act*. “Judicial Procedures as Instruments of Political Control: Congress’s Strategic Use of Citizen Suits”. En *Legislative Studies Quarterly*, Vol. 31, núm. 2. Ed. Comparative Legislative Research Center. University of Iowa. May, 2006, págs. 283-305.

de los Estados Unidos (compilación de legislación federal general) prevé el régimen de estas acciones específicamente vinculadas al ruido.<sup>978</sup>

De forma excepcional, en nuestra legislación existen previsiones respecto a la responsabilidad de autoridades y funcionarios por incumplimiento de alguna de las prescripciones legales previstas, en determinadas normativas ambientales de carácter sectorial, más allá de la tradicional responsabilidad disciplinaria.<sup>979</sup> Un sector doctrinal reconoce la imperiosa necesidad de ampliación de los criterios manejados tanto en el procedimiento administrativo como en el contencioso-administrativo, para garantizar la aplicación de las sanciones administrativas ante la inactividad administrativa, que pasa por un aumento de la legitimación, capacidad superior de las pretensiones constitutivas y de condena en el contencioso-administrativo sancionador para la tutela de los intereses colectivos ambientales, la reformulación de la calificación de oficio del procedimiento administrativo sancionador, o la capacidad de otros sujetos titulares de derechos o intereses legítimos ambientales, e incluso de la acción popular ambiental para interrumpir la prescripción y la caducidad.<sup>980</sup> Interpelaciones ante las que la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo dirige también otras expectativas y puntos de vista coetáneamente inviables, como una mayor intervención del Ministerio fiscal en el orden contencioso-administrativo, cuya legitimación actual sólo está conferida por la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad

---

<sup>978</sup> La primera edición del Código data de 1926, y las sucesivas ediciones desde 1934 se actualizan cada seis años. 42 U.S. Code § 4911 (a): Citizens suits. From Title 42 –The public health and welfare. Chapter 65 –Noise Control–. Cualquier persona (que no sea Estados Unidos) puede iniciar una acción civil en su propio nombre: 1.- En contra de cualquier persona (incluyendo Estados Unidos y cualquier otra instrumentalidad gubernativa o agencia, en la medida que permite la undécima enmienda a la Constitución) que se encuentre violando cualquier requisito de control del ruido. 2.- Contra el administrador de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de allí donde se alegue la falta de realización de cualquier acto u obligación al respecto. Los tribunales de distrito de los Estados Unidos tendrán jurisdicción, sin tener en cuenta la cantidad en controversia, para contener a dicha persona en la violación del requisito de control del ruido, o para ordenar a dicho Administrador llevar a cabo el acto o deber, según el caso. Acceso digital United States Code en: <http://uscode.house.gov> (último acceso 12/07/2015). Consultar la detallada exposición de la regulación sobre contaminación acústica en EE.UU. realizada por GARDNER, R. C. En “Regulación de la contaminación acústica en los Estados Unidos”, op. cit.

<sup>979</sup> Vid. LOZANO CUTANDA, B. A nivel estatal, la contemplada en la legislación de Costas; a escala autonómica, la Ley 9/2001 de 9 de agosto, de Espacios Naturales Protegidos, Animales y Plantas de Galicia (art. 67). “Infracciones y sanciones administrativas para la protección del medio ambiente”. En *Diccionario de Derecho Ambiental*. op. cit., págs. 739 y 740. La disposición apuntada en materia de costas, se encuentra actualmente en el art. 195.1 c) del Reglamento General de Costas [RD 876/2014, de 10 de octubre], que desarrolla la nueva Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

<sup>980</sup> Vid. PEÑALVER I CABRÉ, A. “Nuevas tendencias sobre la inactividad administrativa en la aplicación de las sanciones ambientales”, op. cit., págs. 181-185.



Medioambiental (Disposición adicional 8ª) a los fiscales especialistas en determinadas materias.<sup>981</sup>

Una vez presentadas las variadas alternativas con que cuenta el orden administrativo, más allá inclusive de la sanción administrativa tradicional, es razonable plantear que un uso indiscriminado del Derecho penal para mitigar la plaga del ruido ambiental no parece razonable; por ello, creemos firmemente que los poderes públicos no pueden postergar por más tiempo la efectiva aplicación de todos los mecanismos con que cuenta a su favor, así como abordar una vanguardista puesta en escena de otras medidas, ni tan gravosas para el debilitamiento de los principios de *ultima ratio* e intervención mínima, ni tan onerosas para sujetos que, en la gran mayoría de casos, carecen de la impronta característica que comporta el hecho delictivo.

### **6.3.5.- El oscuro tránsito de la infracción administrativa muy grave al ilícito penal por emisión de ruidos: el requisito de “gravedad”**

La frontera de la gravedad, fijada para delimitar el espacio que ocupa el ilícito penal y el que se reserva al ilícito administrativo, es un requisito que constituye un elemento típico. De ahí que su interpretación resulte tan importante, al tiempo que sorprende la insuficiente reflexión prestada por la jurisprudencia, debido quizás a la estructura de ley penal en blanco que sigue el art. 325 (modelo de accesoriedad administrativa de los tipos penales), que ha permitido dulcificar la necesidad de dotar

---

<sup>981</sup> Vid. “Conclusiones VII Reunión Anual de la Red de Fiscales de Medio Ambiente y Urbanismo”. Madrid, 3 y 4 de Febrero de 2014. <<La necesidad de esta legitimación, deriva de la existencia de ciertos ámbitos del actuar administrativo en los que, siendo posible la interposición de recurso, el mismo no se lleva a cabo por ninguna parte legitimada, lo que desvela la existencia de una zona “oscura”, al control jurisdiccional de los mismos. En cualquier caso, ese planteamiento debe de ser entendido como un “desideratum”, pues actualmente no resulta viable fuera del campo de la ley 26/2007. Sin embargo, de conferirse ello implicaría: [...] c) En delitos contra el medio ambiente y la flora y fauna, evitaría posibles acciones potencialmente perjudiciales para el bien jurídico protegido, al tiempo que permitiría combatir supuestos de inactividad administrativa>>. Ed. Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo. Fiscalía General del Estado. Madrid, 2014, pág. 3 y 4. Disponible en: [https://www.fiscal.es/fiscal/PA\\_WebApp\\_SGNTJ\\_NFIS/descarga/CONCLUSIONES\\_VII\\_REUNION\\_A\\_NUAL\\_%20RED\\_FISCALES\\_MEDIO%20\\_AMBIENTE.pdf?idFile=48c5fca1-b7a7-41e3-8e7a-e3e13452add2](https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/CONCLUSIONES_VII_REUNION_A_NUAL_%20RED_FISCALES_MEDIO%20_AMBIENTE.pdf?idFile=48c5fca1-b7a7-41e3-8e7a-e3e13452add2) (último acceso 12/07/2015).

de rigor a este concepto jurídico indeterminado, en cuyo eje principal se sitúa un juicio de valor de excesiva ambigüedad.<sup>982</sup> El TS confirma esta apreciación en varias sentencias, las pruebas periciales son importantes para determinar el extremo de la gravedad, pero la decisión final corresponde razonadamente al Tribunal.<sup>983</sup> En efecto, según el DRAE “grave” en sus principales acepciones significa *que pesa, grande, de mucha entidad o importancia, arduo, difícil*, lo que comporta acudir a un juicio de valor para su determinación.<sup>984</sup> Por tanto, en todo caso queda en manos de jueces y tribunales, que de forma razonada y apoyándose en las pruebas periciales, como una recogida de muestras efectuada por los agentes encargados de la investigación por ejemplo, determinarán el grado de nocividad y, a continuación, resolverán la inclusión del hecho en un procedimiento administrativo o penal.<sup>985</sup>

---

<sup>982</sup> Vid. ALASTUEY DOBÓN, C. El análisis jurisprudencial de la materia permite sintetizar los criterios utilizados por nuestros tribunales: exposición continuada, y niveles intensos de ruido. Éstos parten de una generalización de los argumentos aportados por la STS de 11 de marzo de 1992. En “Derecho penal: la emisión de ruidos como delito de contaminación ambiental”, op. cit., págs. 318 y 319; JERICÓ OJER, L. “La tutela penal del ruido”, op. cit., págs. 393-396; MARTOS NÚÑEZ, J. A. “El delito de contaminación acústica”, op. cit., pág. 34; SÁNCHEZ DONATE, M<sup>a</sup> P. “La lucha penal: el delito de contaminación acústica”, op. cit., págs. 178-182; MUÑOZ RUIZ, J. “El delito de contaminación acústica. (Especial consideración del caso Donegal)”, op. cit., págs. 189 y 190. Sobre los distintos modelos de accesoriadad administrativa, vid. DE LA MATA BARRANCO, N. “Derecho comunitario y Derecho estatal en la tutela penal del ambiente”, op. cit., págs. 16 y ss.

<sup>983</sup> Por ejemplo, STS (Sala de lo Penal, Sección 1<sup>a</sup>), núm. 141/2008 de 8 de abril [RJ 2008\1852]: <<Y, en tercer lugar, del riesgo debe predicarse la gravedad. No basta, pues, cualquier clase de riesgo, pues los no graves podrán dar lugar, en su caso, a respuestas de tipo administrativo. La decisión sobre este extremo corresponde razonadamente al Tribunal, aunque sean importantes a estos efectos las pruebas periciales>> (FJ 4). Con anterioridad, STS (Sala de lo Penal), núm. 1252/2004 de 2 de noviembre [RJ 2004\7220].

<sup>984</sup> Curiosamente, la octava acepción del adjetivo en la semántica de la acústica significa todo lo contrario: <<Cuya frecuencia de vibraciones es pequeña, por oposición al sonido agudo>>. Vid. DRAE (23<sup>a</sup> ed.).

<sup>985</sup> Una muestra de la diversidad de criterios en nuestros órganos jurisdiccionales al respecto la podemos encontrar en un Auto de inadmisión de un recurso de amparo formulado ante el Tribunal Constitucional contra una Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz por la que se estima el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra la Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 1 de Cádiz, al entender este órgano que procedía absolver al acusado de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente del art. 328 CP porque los hechos no eran incardinables en el tipo, <<por cuanto tal tipo constituye un delito de peligro concreto, que exige que perjudique gravemente el equilibrio de los sistemas naturales o la salud de las personas>>. Considera el juez que en el caso existe un vacío probatorio sobre ese extremo y concluye afirmando que lo que se ha producido es un ilícito administrativo, pero sin trascendencia penal porque la gravedad que se exige en el ordenamiento penal no puede ser determinada por el solo hecho de la práctica de la actividad (almacenamiento sin licencia, dentro del Parque Natural Bahía de Cádiz de aceites de motor usados y neumáticos). Frente a dicha Sentencia, la Audiencia Provincial expresa que sí concurre el segundo elemento del tipo <<que dichos depósitos o vertederos establecidos pueden perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales o la salud de las personas>>, y que no existe tal ausencia de actividad probatoria, pues este elemento no requiere prueba del grave peligro ocasionado, sino sólo de la potencialidad de que se produzca, condenando al sujeto como autor de un delito contra el medio ambiente, estimando que la instalación de depósitos de sustancias efectuada a 10m de la carretera y en riesgo de explosión o ignición, demuestra con evidencia la potencialidad del mismo. ATC (Sala Primera) núm. 120/2004, de 19 de abril [JUR 2004\148677].

Sin embargo, la dificultad que entraña fijar la frontera del *riesgo penalmente relevante*, deriva en que la tipicidad de las conductas se enfrenta al examen y fallo de instancias distintas de la legislativa, dejando en manos de la jurisprudencia la solución.<sup>986</sup> El art. 325 CP es un delito de los denominados de peligro concreto, en los que no resulta necesaria la producción de un resultado lesivo para su consumación, basta con la creación del riesgo o su potencialidad, aunque dicho riesgo sea momentáneo, en cuyo caso nos encontraríamos con un problema de prueba pericial, en ningún caso afectaría al tipo objetivo.<sup>987</sup> Ahora bien, es la gravedad que comporta ese riesgo lo que separa al ilícito penal del administrativo, así como la necesaria contravención de las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente. Difícil parece no incurrir en esa desobediencia, si nos atenemos a la cuantiosa legislación que afecta a la materia, por otra parte objeto de revisiones de forma incesante. Si partimos del confuso y parcial soporte básico que prevé la legislación sancionadora en la actual Ley del Ruido, desarrollada sobre todo por el Reglamento de 2007 en cuanto a la tipificación de las infracciones que hacen posible imponer la sanción, encontramos difícil que prevalezca la infracción calificada de muy grave respecto de la noción de gravedad prevista por el art. 325 CP en su inciso final.<sup>988</sup>

---

<sup>986</sup> Vid. SILVA SÁNCHEZ, J. M<sup>a</sup>. <<En la Administración (en tanto que productora de normas; que no de actos administrativos) ha delegado la determinación de la primera parte de la medida cualitativa del riesgo penalmente relevante [...] En los Jueces y Tribunales [...] la determinación del resto de elementos cualitativos y, desde luego, de los aspectos cuantitativos. En “Delitos contra el medio ambiente”, op. cit., págs. 20 y 21.

<sup>987</sup> STS (Sala de lo Penal, Sección 1<sup>a</sup>) núm. 1182/2006, de 29 de noviembre [RJ 2007\250]. Mantiene que el tipo delictivo se consuma con la mera creación del riesgo, sin necesidad de la efectiva realización del mismo, pues se trata de un delito de peligro concreto que no precisa para su consumación la producción de un perjuicio determinado y específico (FJ 9). La diversidad de criterio la encontramos en el *iter* judicial del caso de los neumáticos al que hemos aludido en la nota inmediatamente anterior a la que precede. La Sentencia del Juzgado de lo Penal núm.1 de Cádiz de 30 de junio de 2001, que absuelve al acusado de un delito del art. 328 CP porque los hechos no eran incardinables en el tipo, <<por cuanto tal tipo constituye un delito de peligro concreto, que exige que perjudique gravemente el equilibrio de los sistemas naturales o la salud de las personas>>. Afirma que en este caso no existe trascendencia penal porque la gravedad exigida por el ordenamiento penal no puede determinarse por el solo hecho de la práctica de la actividad (almacenamiento sin licencia de aceites de motor usados y neumáticos dentro del Parque Natural Bahía de Cádiz). La AP corrige condenando, y expresa que sí concurre el segundo elemento del tipo –que dichos depósitos o vertederos establecidos pueden perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales o la salud de las personas–, así como que no existe ausencia de actividad probatoria, pues este elemento no requiere prueba del grave peligro ocasionado, sino sólo de la potencialidad de que se produzca; en este caso, entiende que la instalación de depósitos de sustancias efectuada a 10 metros de la carretera y en riesgo de explosión o ignición, demuestra con evidencia su potencialidad. SAP Cádiz (Sección 4<sup>a</sup>), de 16 de octubre de 2001 [JUR 2001\330839].

<sup>988</sup> RD 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. En este mismo sentido, pero analizando la defectuosa graduación y poca precisión entre los tipos sancionadores dentro

En el caso de la imputación penal, la gravedad de la conducta tiene carácter binario, o bien se asocia a la contravención de leyes o reglamentos medioambientales, o bien al riesgo de perjudicar la salud de las personas. A ello se añade que mientras la Ley del Ruido requiere la efectiva producción de un daño o deterioro grave para el medio ambiente, el Código Penal tan sólo exige que la potencialidad de ese daño sea lo suficientemente grave como para perjudicar el equilibrio de los sistemas naturales o la salud del ser humano.<sup>989</sup> Teniendo en cuenta lo problemático que resulta aplicar la sanción administrativa muy grave en estos casos, por la necesidad de probar que se ha producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o una puesta en peligro grave de la seguridad o la salud de las personas, el recurso a la sanción penal sufre un incremento considerable, entre otros factores, porque las condiciones de su aplicación requieren menos esfuerzo, y nos atrevemos a interpretar que este hecho puede convertirse en la incongruencia jurídico-práctica de intercambiar los presupuestos básicos de la imputación penal con los del orden administrativo.<sup>990</sup>

Dos cuestiones surgen casi instintivamente al realizar un estudio sobre la interpretación de este concepto jurídico indeterminado: ¿La gravedad que formula el Código penal se identifica sólo y exclusivamente por ser un *quantum* (de valor ignoto), en todo caso superior al que maneja la legislación administrativa en el momento de decidir qué conducta va a obtener la calificación de infracción grave, y cuál va a ser considerada como muy grave?<sup>991</sup> ¿Siguen la misma senda sus respectivos intereses de

---

de la Ley estatal, así como el vacío legal respecto al resarcimiento por el mal causado a la persona, MARTÍ MARTÍ, J. Por paradójico que parezca, normativas autonómicas muy anteriores, como la Ley de Protección contra la Contaminación Acústica de Galicia, de 11 de agosto de 1997, o la de la Comunidad Autónoma de Cataluña, 16/2002, de 28 de junio, entre otras, sí lo incluyen y lo convierten en una exigencia legal. En “La defensa frente a la contaminación acústica y otras inmisiones”, op. cit., págs. 42-44.

<sup>989</sup> El art. 28 de la Ley del Ruido se ocupa de las infracciones: muy graves, graves y leves. Esta fragmentación se realiza tomando como referencia elementos normativos poco definidos (*la producción de contaminación acústica por encima de los valores límite establecidos, la superación de los valores límite que sean aplicables*), sin mencionar un solo criterio delimitador de naturaleza técnica, teniendo en cuenta que el desarrollo de la normativa anti-ruidos por parte de numerosos Ayuntamientos y Comunidades Autónomas ya había previsto una regulación más acorde al fenómeno del ruido, con carácter previo a la promulgación de la ley estatal.

<sup>990</sup> En determinados supuestos, los efectos de una acción que contravenga lo dispuesto por la normativa pueden oscilar en función de una serie de factores externos, en muchos casos de origen natural, por lo que a veces, resultará imposible definir una conducta como delictiva. En este sentido, *vid.* ESTEVE PARDO, J. En “Derecho del medio ambiente”, op. cit., págs. 113 y 114; JERICÓ OJER, L. En “La tutela penal del ruido”, op. cit., págs. 394 y 395.

<sup>991</sup> Más inquietante todavía en términos de seguridad jurídica, es la extensa facultad que posee la Administración para constatar la existencia del ilícito. A ello se refiere LOZANO CUTANDA, B., pues salvo actuación de oficio del Ministerio Fiscal o querrela de los ciudadanos, la persecución de infracciones a la normativa ambiental corresponde a los órganos administrativos, encargados de

protección a un bien jurídico específico y común, o por el contrario se desvía en el caso del Derecho administrativo hasta alcanzar cierto margen de contención o freno en determinados comportamientos personales porque se consideran inadecuados, circunstancialmente adosados a otros bienes jurídicos distintos a los amparados por la propia normativa anti-ruido?<sup>992</sup> El hecho es que tanto jurisprudencia como doctrina admiten que la transgresión de normas administrativas de interés ambiental por sí solas, aún representando un grado de contaminación penalmente relevante, no realizan el tipo previsto en el art. 325, sino que en sede judicial, necesariamente hay que acudir a diferentes supuestos de afectación a otros bienes jurídicos, como la salud, la intimidad personal y familiar en el ámbito domiciliario, o la integridad física y moral de las personas.<sup>993</sup> Este mapa de bienes, por otra parte, aparece en clara conexión con una acepción más acotada del término medio ambiente, esto es, el medio ambiente urbano. Ahora bien, tampoco compartimos que la aplicación del art. 325 CP a supuestos de contaminación acústica prescindiera de la concisión del bien jurídico, aún por abstracto que pueda llegar a ser el bien –medio ambiente–, que debe aspirar a ser su objeto de protección específico.<sup>994</sup> Entonces, bajo este prisma, el ciudadano medio [interpretado como el hombre medianamente cauto -concepto empleado en la categoría de los delitos imprudentes-], raramente será consciente de que incurre en un ilícito penal medioambiental al uso.<sup>995</sup>

La huída al Derecho penal se convierte así en una evasión bien recompensada por el propio sistema penal, que acoge por defecto, al mismo tiempo que sufre por

---

comprobar si existen las circunstancias de grave daño o grave riesgo de daño que exige el tipo del injusto penal. “Infracciones y sanciones administrativas para la protección del medio ambiente”. En *Diccionario de Derecho Ambiental*, op. cit., pág. 736.

<sup>992</sup> El ejemplo más claro lo encontramos en el control administrativo del fenómeno del *botellón*, en el que se alude a una finalidad de protección medioambiental en su faceta de contaminación acústica, cuando en el fondo lo que prima es la no tolerancia de los mismos comportamientos que, emplazados en lugar distinto a la vía pública, causan el mismo impacto acústico negativo en la salud de los vecinos. Otro tanto ocurre en relación a la normativa antitabaco. Al respecto, *vid.* RANDO CASERMEIRO, P. En su opinión, son casos de legislación moralizante, decisiones jurídico-administrativas que persiguen modificar costumbres sociales, más que conductas lesivas. En “La distinción entre el Derecho penal y el Derecho administrativo sancionador. Un análisis de política jurídica”, op. cit., págs. 165-169.

<sup>993</sup> En este sentido, GÓRRIZ ROYO, E. M. En “Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente”, op. cit., págs. 93 y ss; JERICÓ OJER, L. En “La tutela penal del ruido”, op. cit., págs. 380-382.

<sup>994</sup> Al igual que JERICÓ OJER, L. En “La tutela penal del ruido”, op. cit., pág. 391.

<sup>995</sup> También JERICÓ OJER, L. A pesar de que la sociedad cuenta con un conocimiento más extendido, a consecuencia de la profusión de condenas elevadas, la autora sigue observando un ataque injustificado al principio de lesividad si se mantiene el argumento de que existe una mayor intimidación desde una perspectiva de prevención general, originada por la lucha que el medio ambiente mantiene en los tribunales penales en la actualidad. En “La tutela penal del ruido”, op. cit., pág. 390.

exceso, la carga de una malograda aplicación de la facultad sancionadora de la Administración, interviniendo en supuestos que no serían de su incumbencia si se produjera la adaptación y sistematización necesaria en la norma administrativa.<sup>996</sup> Una mayor concreción de lo que comporta la validez de determinados actos administrativos (por ejemplo, las licencias urbanísticas), que más tarde son anulados por los jueces penales sin intervención de la Administración ni de su jurisdicción propia, dan lugar a una hipertrofia de especial incidencia en los delitos de prevaricación administrativa ambiental.<sup>997</sup> También llama la atención el hecho de que en alguna que otra resolución con imposición de penas de prisión elevadas, inmediatamente el propio Tribunal sentenciador propone la concesión de indulto parcial sobre la pena impuesta para rebajarla hasta los dos años, con el fin de que no se produzca el ingreso del condenado en centro penitenciario, habida cuenta del rigor legislativo de la condena prevista para los hechos enjuiciados, y las condiciones personales de los condenados.<sup>998</sup> De hecho,

---

<sup>996</sup> Algunos pronunciamientos recientes sobre la materia: ATS (Sala de lo Penal, Sección 1ª), núm. 369/2014 de 20 de febrero. Ponente: Excmo. Sr. José Ramón Soriano Soriano [JUR/2014/96631]. Inadmite el recurso de casación contra la Sentencia Audiencia Provincial de Granada de 11 de junio de 2013, que condenaba al responsable de un local a dos años y tres meses de prisión; STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª) núm. 410/2013 de 13 de mayo. Ponente: Excmo. Sr. Andrés Martínez Arrieta [RJ/2013/3511]: Confirma la dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla (Sección 7ª) núm. 9/2012 de 9 de marzo 9/2012, de 9 de marzo de 2012 [ARP 2012\1141], que condena a cuatro años y un día por aplicación de los arts. 325 y 326 a); STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª) núm. 463/2013 de 16 de mayo [RJ/2013/3989]: confirma la condena de dos años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 2ª); SAP de Sevilla (Sección 3ª) núm. 626/2013 de 24 de octubre [ARP/2014/131]: condena a los acusados a dos años de prisión. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Las Palmas (Sección 6ª), en Sentencia núm. 1/2014 de 10 de enero [ARP/2014/307], revoca la Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 3 de Arrecife de 18 de febrero de 2013, que imponía la pena de tres años de prisión a otro responsable de explotación de un local de hostelería. También absuelve la Audiencia Provincial de Palencia (Sección 1ª) en Sentencia núm. 6/2014 de 20 de Febrero [JUR/2014/91405]. La Audiencia Provincial de Málaga (Sección 3ª), Sentencia núm. 466/2013 de 31 de julio [JUR/2013/379644], confirma la de absolución dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 11 de Málaga. Por su parte, la Audiencia Provincial de Burgos (Sección 1ª), en Sentencia núm. 384/2013 de 19 de septiembre [ARP/2013/1178], absuelve tanto a los integrantes de una sociedad gastronómica como a su persona jurídica de naturaleza asociativa en relación a los arts. 325 y 327 a). <<Por todo ello entendemos inicialmente que la actuación de la administración no fue eficaz, y debiendo haber exigido a la asociación la correspondiente licencia de actividad no lo hizo, conformándose con una mera licencia de obras [...] Por ello si las autoridades administrativas no apreciaron en su momento la existencia de una infracción contra las leyes protectoras de medio ambiente por parte de la asociación, resulta altamente difícil pensar que los miembros de su junta directiva, acusados, pudieran ser conscientes de dicha infracción, lo cual resulta un impedimento para sostener la existencia de una actuación dolosa por su parte>> (FJ 3).

<sup>997</sup> Sobre este particular aspecto en el marco de la prevaricación urbanística vid. BAUZÁ MARTORELL, F. “El acto administrativo: entre la validez y el delito”. En *Revista española de Derecho Administrativo*, núm. 163, abril-junio. Ed. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2014, págs. 217-251.

<sup>998</sup> Vid. GARCÍA SAN MARTÍN, J. *El indulto. Tratamiento y control jurisdiccional. Adaptado a la reforma del Código Penal de 2015*. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2015; DOVAL PAIS, A. / BLANCO CORDERO, I. / FERNÁNDEZ-PACHECO ESTRADA, C. et al. Contando con las dificultades de estudio sobre una cuestión que no cuenta con un aparato estadístico público, los autores obtienen resultados sobre algunos de sus aspectos, como por ejemplo, que la mayoría de las condenas indultadas fueron las que alcanzaron firmeza en las Audiencias Provinciales. En “Las concesiones de indultos en España

parece que nos encontramos con un criterio consolidado si tomamos en cuenta el dato de que la pionera sentencia del conocido como -caso *Chapó*- de 2003, precursora del giro jurisprudencial respecto a la aplicación del delito ecológico en materia de emisión de ruidos, ya contempló la petición de indulto parcial sobre la pena impuesta.<sup>999</sup>

En términos de prevención, la conminación penal no es lo suficientemente expresiva, el infractor no intuye la certeza e inmediatez de ser castigado criminalmente, sino todo lo contrario, porque probar el riesgo de grave perjuicio a la salud de la persona que sufre inmisiones ruidosas en su domicilio, requiere medios, paciencia, y un sinnúmero de denuncias previas basadas principalmente en pruebas sonométricas, por lo que todo ese calvario tiende a dilatarse en el tiempo. Sin embargo, la propia Ley del Ruido contempla medidas mucho más efectivas (de naturaleza preventiva a la par que constitutiva de la sanción que corresponda), que si se adoptaran de forma rigurosa y efectiva serían más ventajosas, por la cantidad de supuestos a los que se podrían aplicar.<sup>1000</sup> Por una parte, la proliferación de causas penales contra establecimientos de ocio revela, al menos en la actualidad, que es una de las actividades consideradas como foco emisor de ruidos con una sólida presencia, pero también es una actividad que debe

---

(2000-2008)”, op. cit. El indulto total tiene naturaleza de excepción, por lo que será de aplicación restringida; es el dictamen del Tribunal sentenciador el que permite su concesión, según el art. 11 de la Ley de Indulto. Al respecto, *vid.* SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES, J., quien acertadamente objeta: *puesto que el Tribunal sentenciador ha condenado –de otra forma, no sería necesaria petición alguna de indulto–, ¿por qué habría entonces de entender ese mismo Tribunal que hay razones suficientes para que no se cumpla lo que él dispuso?* En “Una lectura crítica de la Ley de Indulto”, op. cit., pág. 12. Por ejemplo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 8ª) núm. 212/2014 de 3 de marzo. Ponente: Excm. Sra. María Mercedes Armas Galve [ARP/2014/323], condena a los propietarios de un local de hostelería a penas de cuatro años y un día de prisión por aplicación del art. 325 en la modalidad de ruidos; no obstante, al amparo de lo establecido por el art. 4.3 CP, propone la concesión de indulto parcial sobre la pena impuesta. Idéntico criterio al seguido por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla (Sección 7ª) núm. 9/2012 de 9 de marzo [ARP/2012/1141].

<sup>999</sup> STS 52/2003 de 24 de febrero, comentada en la Primera Parte, notas 99, 104 y 273. No obstante, CUADRADO RUIZ, Mª A., recuerda que este tipo de medidas de gracia aplicadas a los delitos medioambientales están proscritas en virtud de acuerdos internacionales; en concreto cita la Resolución núm. (77) 28 del Consejo de Europa, sobre la Contribución del Derecho Penal a la protección del Medio Ambiente, de 1978. En “Consecuencias jurídicas en los delitos contra el medio ambiente”, op. cit., pág. 224.

<sup>1000</sup> Por ejemplo, el art. 19 recoge la figura denominada “Autocontrol de las emisiones acústicas”. <<Sin perjuicio de las potestades administrativas de inspección y sanción, la Administración competente podrá establecer, en los términos previstos en la correspondiente autorización, licencia u otra figura de intervención que sea aplicable, un sistema de autocontrol de las emisiones acústicas, debiendo los titulares de los correspondientes emisores acústicos informar acerca de aquél y de los resultados de su aplicación a la Administración competente>>. Acerca de los complejos controles de los ruidos vecinales, *vid.* CÁMARA DEL PORTILLO, D. “Los ruidos vecinales: análisis de su especial problemática”. En *Comentarios a la Ley del Ruido: Ley 37/2003, de 17 de noviembre*. Blanca Lozano Cutanda (coord.) Ed. Civitas. Cizur Menor (Navarra), 2004, págs. 245-292.

ser habilitada por la correspondiente licencia administrativa.<sup>1001</sup> Es éste uno de los sectores en los que confluyen una gama de derechos, libertades, segmentos regulatorios implicados y competencias (libertad de empresa, derecho al ocio, derecho a la salud pública, planificación urbanística, medio ambiente, etc.), que pueden ser sutilmente redireccionados en un sentido más o menos restrictivo o liberal, dependiendo de la política legislativa que siga la regulación de los aspectos que alcanzan a dicha actividad.<sup>1002</sup>

Por otra, la jurisprudencia reciente destaca las particularidades que presenta el ruido como delito contra el medio ambiente, al tiempo que sugiere al legislador la inclusión de un tipo específico que aborde esta materia y que lo aleje de su ubicación actual como delito ecológico. Todo ello sin negar que el ruido sea un factor patógeno y que la técnica de norma penal en blanco que sigue el art. 325 haya sido declarada constitucionalmente admisible. No obstante, el contexto jurídico de los ruidos molestos que no perjudiquen gravemente el equilibrio de los sistemas naturales (ecosistema), o resulten un riesgo grave de perjuicio a la salud de las personas, se adaptan mejor al ámbito del Derecho administrativo sancionador.<sup>1003</sup> Ciertas medidas preventivas de

---

<sup>1001</sup> El sector hostelero, de enorme raigambre en nuestra cultura, comprende una variada tipología con husos horarios diversos que dependen de cada actividad específica: sector hotelero, restaurantes, cafeterías, establecimientos de bebidas, colectividades. Consultar el estudio acerca de la expansión del sector y su dimensión en España en FIGUEROLA PALOMO, M. *Los sectores de la hostelería en 2012*. Serie Estudios. Ed. Fundación Hostelería de España. Madrid, 2012.

<sup>1002</sup> Por ejemplo, la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado tiene por objeto establecer las disposiciones necesarias para hacer efectivo el principio de unidad de mercado en el territorio nacional. Bajo las premisas de “licencia única” y “prevalencia de la legislación de origen”, se consideran motivos que habilitan para poder exigir autorización administrativa, respecto a los operadores económicos, la existencia de razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente en el lugar concreto donde se realiza la actividad. Respecto a las instalaciones o infraestructuras físicas necesarias para el ejercicio de actividades económicas, cuando sean susceptibles de generar daños sobre el medio ambiente y el entorno urbano, la seguridad o la salud pública y el patrimonio histórico artístico, siempre que dichas razones no puedan salvaguardarse mediante la presentación de una declaración responsable o de una comunicación [art. 17.1 a) y b)]. *Vid.* REBOLLO PUIG, M. Opina que la trascendencia de esta Ley es limitada en cuanto a las ordenanzas locales, pues éstas no pueden imponer límites a la libertad de empresa (art. 38 CE) y de profesión (art. 35 CE) más que con un específico fundamento legal, o bien por razones de orden público. En “La libertad de empresa tras la Ley de Garantía de Unidad de Mercado”; FERNÁNDEZ FARRERES, G. Lo que provoca realmente esta Ley, más allá de lo razonable que parece determinar unas condiciones para la unidad de mercado, es la alteración de la distribución competencial entre Estado y Comunidades Autónomas. En “Unidad de mercado y libertades de empresa y circulación en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre”. Ambos artículos en *Revista española de Derecho Administrativo*, núm. 163, abril-junio. Ed. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2014, págs. 23-33, en especial 32, y 109-144 respectivamente.

<sup>1003</sup> En idéntico sentido, la STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª) núm 916/2012 de 28 de noviembre. Ponente: Excmo. Sr. Julián Sánchez Melgar [RJ/2013/936]. Aborda la emisión de ruidos de un local de ocio sin intensidad suficiente para atentar contra el bien jurídico. La resolución rompe con el silencio existente y realiza una declaración abierta a aceptar los postulados de aquella parte de la doctrina que se muestra cada vez más homogénea, en torno a la idea de su incorrecta inclusión en el tipo penal del delito ecológico. <<La contaminación acústica, cuando ésta se produce por la emisión de ruidos molestos en



carácter administrativo pueden constituir un soporte jurídico suficiente si se incluyen expresamente en los términos que determinen la concesión de la autorización o licencia, tal y como permite, por ejemplo, el art. 19 de la Ley del Ruido antes citado.<sup>1004</sup> Estos modelos de intervención permitirían a los sujetos que pueden llevar a cabo materialmente la actividad inspectora<sup>1005</sup>, comprobar si se han respetado los límites sonoros (intensidad, franja horaria, tiempo de exposición a la inmisión ruidosa), con la simple instalación de dispositivos fijos en los establecimientos que lo requieran, dependiendo del modelo de negocio para el que se solicite la licencia de actividad, sin necesidad de personarse *in situ* en el domicilio de las personas afectadas, por ejemplo en horario nocturno, para llevar a cabo las preceptivas mediciones, sin las que será extraordinariamente complejo iniciar un procedimiento administrativo sancionador o en su caso, penal.<sup>1006</sup>

---

*el centro de una ciudad, [...] aunque haya sido aceptado por esta Sala Casacional como una más de las modalidades constitutivas de tales consecuencias para el medio ambiente, participa de rasgos diferentes en cuanto a su estructura típica que las demás conductas descritas, a la sazón, en el art. 325 del Código Penal>> (F 4). Vid. ALASTUEY DOBÓN, C. “Derecho penal: la emisión de ruidos como delito de contaminación ambiental”, op. cit., pág. 318.*

<sup>1004</sup> También existe normativa local que incorpora medidas de este tipo, incluso con efectos retroactivos, con el fin de que los locales abiertos con anterioridad a la promulgación de la norma se adecúen a la misma. Así, la Ordenanza de protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones de Murcia.

<sup>1005</sup> Según el art. 27.1 de la Ley del Ruido, ostentan en todo caso el carácter de agentes de la autoridad, a los efectos previstos en la LRJPAC. Sobre el régimen jurídico de la inspección, *vid.* ARANA GARCÍA, E. / TORRES LÓPEZ, M<sup>a</sup> A. “Inspección y régimen sancionador”. En *Régimen jurídico del ruido. Una perspectiva integral y comparada*. Estanislao Arana García / M<sup>a</sup> Asunción Torres López (coords.) Ed. Comares. Granada, 2004, págs. 125-155.

<sup>1006</sup> *Vid.* NIEVA FENOLL, J. / VIVES REGO, J. / CORCOY BIDASOLO, M. La investigación de los delitos medioambientales generalmente va a requerir la práctica de varias pruebas de diversa naturaleza. En el ámbito del ruido, pueden intervenir técnicos de sonido, e incluso otorrinolaringólogos. En “Eficacia y admisibilidad de la prueba pericial en el enjuiciamiento de delitos contra el medio ambiente”, op. cit., pág. 2. La STS núm 916/2012 de 28 de noviembre confirma lo expresado por la Audiencia Provincial de Jaén sobre esta cuestión [*vid.* nota 1001]. Acerca de los problemas que genera la entrada en domicilio para la realización de las labores de inspección, *vid.* ARANA GARCÍA, E. / TORRES LÓPEZ, M<sup>a</sup> A. “Inspección y régimen sancionador”, op. cit., págs. 130-132.

### **6.3.6.- Excurso: el carácter ambivalente del ruido como circunstancia modificativa o eximente de la responsabilidad criminal**

El elevado número de ciudadanos que actualmente sufren una exposición a niveles nocturnos de ruido pueden calificarse de verdadera *violencia acústico-ambiental*.<sup>1007</sup> Basta mencionar como ejemplos las abundantes zonas saturadas de locales de ocio, los copiosos emplazamientos urbanos que acogen reuniones de jóvenes en jornadas del fenómeno denominado “botellón”, las actividades industriales, el tráfico rodado, heterogéneas celebraciones de toda índole en espacios públicos, concentraciones, manifestaciones, etc.

Esta realidad simboliza que dicha amalgama de conductas pueda ser bautizada de auténtica tortura psicológica sin paliativos para quien desee conciliar el sueño, disfrutar del silencio, o simplemente sentir que su intimidad y su salud no son atacadas (de manera inicial e inmediata por carencia de descanso nocturno, y de forma larvada y mediata por otra sintomatología de naturaleza física y psíquica).<sup>1008</sup>

Las interferencias del ruido en las fases del sueño no sólo estigmatizan a las personas en su entorno nocturno, su interrelación directa con el incremento de accidentes de tráfico, laborales, mayor consumo de medicamentos específicos, cambios fisiológicos, en suma, con un descenso extraordinario de la calidad de vida de los afectados es una realidad perfectamente contrastada.<sup>1009</sup> Conviene insistir en que no se

---

<sup>1007</sup> Una exhaustiva exposición sobre lo que comporta este tipo de agresión “violenta” en SÁNCHEZ SAHORÍ, F. “Apuntes para una filosofía del ruido”. *El ruido en las ciudades. Análisis jurídico-práctico*, op. cit., págs. 17-50.

<sup>1008</sup> Algo tan obvio como que la llamada *tortura blanca*, a la que ya nos referimos en la Primera Parte de este trabajo, se encuentra presente en la historia de la Criminología. Buen conocedor del factor de injerencia del ruido en el ámbito privado de las personas es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se ha pronunciado con reiteración sobre las consecuencias jurídicas de soportar determinados niveles de ruido, con independencia de su procedencia (privada o pública), considerando que se vulnera el art. 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Públicas de Roma, de 24 de noviembre de 1950.

<sup>1009</sup> Vid. GARCÍA RODRÍGUEZ, A. “La Contaminación Acústica. Fuentes, Evaluación y Control”, op. cit., págs. 128 y ss; FLAMME, G. A / STEPHENSON, M. R. / DEITERS, K. et. al. “Typical noise exposure in daily life”. En *International Journal of Audiology*, Vol. 51, Suppl1 (S1): S3-11 February, 2012; SWINBURN, T. K. / HAMMER, M. S. / NEITZEL, R. L. “Valuing Quiet. An Economic

trata de una escenografía regional, nacional, o europea, sino que el patrón se ha estandarizado de tal manera que lo complicado es localizar países en los que sus ciudadanos no sufran esta situación, eso sí, los grados son diferenciales en cuanto a la sensibilización, la pura resignación frente al enérgico combate ante sus expresiones, así como acerca del conocimiento detallado de sus efectos, lo que dificulta más si cabe una apreciación fidedigna de sus secuelas.

En muchas ocasiones, ante la llegada del momento en que de forma cotidiana o con un alto índice de habitualidad comienzan los ruidos, se ha demostrado que la víctima anticipa la susceptibilidad ante el sonido perturbador de forma casi automática, porque ya ha interiorizado lo que le depararán las próximas horas.<sup>1010</sup> En cualquier caso, aquí interesa cuestionar el potencial carácter criminógeno del ruido, la capacidad que éste ostenta para infundir ánimos agresivos a un sujeto, con independencia de su normalidad, o su labilidad psicológica.

Si aceptamos como base de imputación la alteración cerebral que produce el ruido, que se traduce a su vez en múltiples consecuencias biológicas (trastornos directos e indirectos), y trasladamos dicha condición a un sujeto que cometa un delito de lesiones, amenazas, o coacciones sobre el responsable primario de la emisión de ruidos (conducta precisamente derivada del alto nivel de inmisiones ruidosas que viene sufriendo), o incluso un delito de daños<sup>1011</sup>, el resultado es que el elemento debería ser operativo como una circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal (eximente incompleta o atenuante) en el infractor secundario. Otra variable calificativa de la emisión de ruidos sería considerarla como forma de *agresión*, y entonces habría que plantearse si se puede admitir la legítima defensa frente al emisor sonoro. Ello nos lleva al estudio de las dos vertientes de este elemento; por una parte, el ataque y su

---

Assessment of U.S. Environmental Noise as a Cardiovascular Health Hazard”, op. cit.; GOINES, L. / HAGLER, L. “Noise Pollution: A Modern Plague”, op. cit.

<sup>1010</sup> Vid. HERRERA DEL REY, J. J. En “La defensa jurídica contra la contaminación acústica”, op. cit., pág. 25. Una visión integral sobre muy distintos aspectos del ruido en los núcleos de población, vid. BOCOS, A. “El ruido de las actividades de ocio”. En *El ruido en las ciudades. Análisis jurídico-práctico*, op. cit., págs. 285-306.

<sup>1011</sup> Así, la SAP Madrid (Sección 3ª) 336/2010 de 17 de septiembre [JUR\2010\362475] confirma la Sentencia del tribunal de instancia, que había condenado al acusado como autor de un delito de daños, quien, ofuscado por los ruidos causados por un vecino, destrozó la puerta de su vivienda. No tiene en cuenta el órgano la provocación que previamente sufrió el acusado; el alegato de la defensa en el recurso destaca la existencia de error en la prueba, precisamente por la falta de intencionalidad en producir el daño.

ilicitud, pues la agresión tiene que ser ilegítima; por otra, la admisión de la legítima defensa frente a dicha agresión.

Así las cosas, QUINTERO OLIVARES entiende inaceptable tal posibilidad por la naturaleza jurídica de la eximente, que no acepta otro acometimiento distinto al físico, o al llevado a cabo con armas.<sup>1012</sup>

En 2007, el TS aplicó la eximente incompleta por trastorno psíquico (art. 21.1º CP)<sup>1013</sup>, en este caso al sujeto activo emisor de ruidos en su vivienda a horas intempestivas que se prolongaron cuatro años, causando graves molestias a sus vecinos, por lo que condena, en aplicación del art. 325.1 y 326 b) -delito ecológico y supuesto agravado por haber desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa-, a una pena inferior en un grado a la correspondiente, de acuerdo con el art. 68 CP.<sup>1014</sup> Anula y casa la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, por la que se absolvió al acusado en base a la no aportación de pruebas sobre el elemento que distingue la infracción administrativa del delito tipificado en el art. 325. Dicha resolución subraya que el riesgo grave, como elemento del tipo, debe quedar debidamente probado y en este caso la prueba del informe pericial es esencial.<sup>1015</sup>

Pues bien, lo que en este contexto criminológico corresponde apuntar, es el carácter ambivalente que puede adquirir el basamento ontológico que da soporte a dicha circunstancia modificativa, ya que podríamos aplicar dicho fundamento a la víctima de los ruidos si ésta, en determinadas circunstancias, se convierte en agresor, siempre y cuando se pueda demostrar que existe relación de causalidad entre un súbito

---

<sup>1012</sup> Vid. QUINTERO OLIVARES, G. En “La especialidad del Derecho penal ambiental en relación con la contaminación acústica y la contaminación del agua”, op. cit., pág. 21.

<sup>1013</sup> En relación a las eximentes completas del art. 20 CP. <<Están exentos de responsabilidad criminal: 1º El que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. El trastorno mental transitorio no eximirá de pena cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o hubiera previsto o debido prever su comisión>>.

<sup>1014</sup> STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª) 540/2007 de 20 de junio. <<La Resolución de instancia nos dice que S <<... padece un trastorno de la personalidad mixto y de grave entidad... >>, aunque sin afirmar que semejante alteración supusiera una efectiva y completa anulación de sus facultades psíquicas>>. (FJ 1.3). [citada *supra*, nota 270].

<sup>1015</sup> Las actas de mediciones confirmaron la emisión de ruidos que sobrepasaban los permitidos por la legislación local y general; en concreto entre 33 y 66 dB, con una media de 45-50 dB. La administración local había incoado diferentes expedientes al acusado, sancionándole en cinco ocasiones. No obstante, el informe emitido por el Instituto Nacional de Toxicología era de carácter general, no valoraba específicamente los efectos que el ruido producido por el acusado habían generado sobre la salud física y psíquica de los vecinos. Sentencia Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 7ª) núm. 185/2006 de 3 de febrero [JUR/2006/134794].

ataque y los ruidos soportados con anterioridad inmediata.<sup>1016</sup> Nuestros tribunales penales se han pronunciado al respecto, aplicando normalmente la atenuante de arrebató u obcecación del art. 21.3ª CP.<sup>1017</sup>

El fundamento de aplicación de la circunstancia 3ª del art. 21, según el TS, se centra en la esencia de los poderosos estímulos que hayan producido arrebató, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante.<sup>1018</sup> Sin embargo, la eximente incompleta de trastorno psíquico, situada en un peldaño superior al estado de arrebató, no encuentra aplicación en esta materia; tampoco la circunstancia atenuante por analogía a la eximente incompleta de cualquier anomalía o alteración psíquica, ya sea simple o muy cualificada.<sup>1019</sup>

Dado que los científicos admiten no conocer cómo funciona exactamente el transcurso del sueño, cómo procesa nuestro cerebro ese estado misterioso de la más

---

<sup>1016</sup> Vid. DE LA CUESTA AGUADO, P. Plantea la autora que la distinción entre juicio intuitivo (rápido, espontáneo, emocional, automático, asociativo y debido a un aprendizaje) y racional (lento, consecutivo, que requiere esfuerzo, motivado) es básica para afirmar que se actuó con conocimiento de la antijuricidad del hecho y así <<Si el juicio intuitivo fue erróneo y el error no fue detectado por el sujeto y no hubo otra razón que pusiera en marcha un proceso racional de control del juicio habrá que concluir que el sujeto actuó con error de prohibición, vencible o invencible en función de las circunstancias>>. En *Conocimiento de la ilicitud. Aproximación al conocimiento de la antijuricidad del hecho desde las teorías psicológicas del pensamiento intuitivo*. Ed. Dykinson. Madrid, 2007, págs. 151 y ss.

<sup>1017</sup> Sobre su fundamento, naturaleza, elementos y ámbito de aplicación, vid. BORJA JIMÉNEZ, E. En *Las circunstancias atenuantes en el ordenamiento jurídico español*. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2002, págs. 141-156. Como ejemplos de su aplicación en materia de ruidos, vid. SAP Tarragona (Sección 3ª), de 9 de abril de 1996 [ARP\1996\217], que aplica la atenuante de arrebató u obcecación en un delito de asesinato frustrado, desencadenado por los ruidos emitidos por el vecino del acusado que, según éste, era <<el causante de la pérdida de su tranquilidad vital, hasta el punto de considerar que con sus ruidos no respetaba sus necesidades básicas de paz y equilibrio mental, e incluso llegaba a pensar que en algunas ocasiones su vecino hacía ruidos intencionadamente para fastidiarlo o burlarse de él>> (FJ 3). En el mismo sentido, SAP Tarragona (Sección 4ª) 213/2011 de 16 de mayo. [ARP\2012\548]. De nuevo se opta por aplicar la atenuante de arrebató u obcecación. Esta vez se trata de un homicidio en grado de tentativa dentro de las relaciones de convivencia entre dos hermanos, en el que la víctima fue el causante de los ruidos e interrupciones del sueño en el agresor, situación que se había repetido numerosas veces con anterioridad al suceso.

<sup>1018</sup> STS (Sala de lo Penal) 582/1996 de 24 de septiembre [RJ 1996\6753]. Según el Tribunal radica <<... en una sensible alteración de la personalidad del sujeto cuya reacción de tipo temperamental ante estímulos externos incide sobre su inteligencia y voluntad, mermándolas en relación de causa a efecto y en conexión temporal razonable, presentándose como una respuesta que puede ser entendida dentro de parámetros comprensibles en un entorno normal de convivencia>> (FJ 2). Un completo estudio sobre las circunstancias modificativas en nuestro Código Penal en ARIAS EIBE, M. J. *Responsabilidad criminal. Circunstancias modificativas y su fundamento en el Código penal. Una visión desde la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Supremo*. Ed. Bosch. Barcelona, 2007.

<sup>1019</sup> Con carácter general, la aplicación de la atenuante por analogía del art. 21.7ª: <<Cualquier otra circunstancia de análoga significación que las anteriores>> a un estado de alteración psíquica, estimada como muy calificada, encuentra en nuestro Tribunal Supremo posiciones de aceptación y de rechazo. Vid. MATEO AYALA, E. Recoge jurisprudencia y las distintas posturas doctrinales en cuanto a la significación de la misma. En *La imputabilidad del enfermo psíquico: un estudio de la eximente de anomalía o alteración psíquica en el Código Penal español*. Ed. Edersa / Instituto de Criminología de la Universidad Complutense de Madrid. Madrid, 2003, págs. 154 y ss.

absoluta individualidad, si se puede llegar a demostrar a través de la neurociencia, que tal disfunción se ha incrementado por la falta de sueño prolongada en el tiempo a consecuencia del ruido soportado, o bien que algún episodio de parasomnia se ha desencadenado por algún ruido (como elemento único o conjugado con otros agentes como el estrés)<sup>1020</sup>, esto puede arrojar más datos que nos permitan un estudio profundo sobre los efectos y consecuencias reales que el ruido provoca en las patologías del sueño. No podemos obviar que una generalización en este aspecto resultaría una mengua en el estudio analítico de este faceta específica; las personas expuestas a niveles de ruido elevados en el transcurso del sueño, durante periodos dilatados, presentarán diferencias significativas entre ellas; únicamente tomando como referencia el factor de la edad, diferentes estudios confirman las variaciones de los patrones de sueño. Además, la repercusión sobre el grado de tolerancia del ruido ambiental diurno hace que las respuestas relativas a las molestias producidas sean diferentes en estos casos.<sup>1021</sup>

Ciertamente, resulta muy interesante el estudio de aquellos fenómenos criminales que suceden en fase de parasomnia (la más grave de las alteraciones del sueño), desde violaciones (sexomnia) hasta asesinatos. Los afectados por parasomnia cometen acciones impredecibles mientras duermen, por tanto, sin conciencia ni voluntad. Son capaces de comer, mantener relaciones sexuales, caminar, hablar, etc. Ello supone que, aun existiendo determinados movimientos corporales del sujeto, a veces complejos de entender, pues aparecen como fenómenos inconscientes y faltos de la mínima manifestación volitiva, éstos carecen de “acción” en el sentido categórico y técnico que requiere su inclusión en el Derecho penal, ya que para este ordenamiento, la característica más representativa de la acción es precisamente el “acto humano libre”.

Ahora bien, no sólo el sonambulismo (prototipo de las parasomnias) produce este tipo de movimientos involuntarios durante la fase de sueño, existen otros trastornos del sueño carentes de acción penal pero interesantes desde el punto de vista del Derecho penal, en este caso encuadrados en las disomnias, en los que la respuesta motora del

---

<sup>1020</sup> Las parasomnias son eventos involuntarios, anormales y molestos, que ocurren durante el sueño. No son propiamente enfermedades sino hechos, fenómenos, que aparecen durante el sueño y disminuyen su calidad. Suelen acompañarse de cambios fisiológicos como la activación cardiovascular o muscular. *Vid.* IRIARTE, J. / URRESTARAZU, E. / ALEGRE, M. et al. “Parasomnias: episodios anormales durante el sueño”. En *Revista de medicina de la Universidad de Navarra*, Vol. 49, núm. 1. Pamplona, (enero-marzo) 2005, págs. 46-52.

<sup>1021</sup> *Vid.* GARCÍA RODRÍGUEZ, A. En “La Contaminación Acústica. Fuentes, Evaluación y Control”, op. cit., pág. 130.

sujeto está estrechamente relacionada con la falta total de sueño (insomnio) o la insuficiencia y precariedad del mismo.<sup>1022</sup> Desde un punto de vista estrictamente psiquiátrico, es sobradamente conocido el efecto del ruido interior de la esquizofrenia, alucinaciones auditivas en las que el enfermo escucha voces, es decir, no solo las oye, sino que las escucha con tal intensidad que sigue sus mandatos; el *mátale, mátalos* típico que relatan los sujetos afectados. Estos casos constituyen la gran mayoría de asesinatos racionalmente incomprensibles; consecuentemente se atribuyen muy a menudo a la esquizofrenia.

La distorsión se puede generar si se aplican los criterios del DSM-5 o del CIE-10, que no encuentran acomodo en estos fenómenos, básicamente porque la parasomnia en fase REM no es un trastorno mental.<sup>1023</sup>

Por ejemplo, en el insólito caso de un ciudadano estadounidense, ocurrido en la ciudad de Charleston (Illinois) en 2006, a la acusación le asombraba que éste recordara algunos momentos del episodio, algo que normalmente no sucede, ya que lo habitual es que se produzca una amnesia total respecto del suceso.<sup>1024</sup> Sin embargo, en el caso del doble parricidio ocurrido en Lebetain (Francia) en septiembre de 2000, el veredicto de

---

<sup>1022</sup> Vid. JIMÉNEZ DÍAZ, M<sup>a</sup> J. La clasificación de las parasomnias se desglosa en la siguiente tipología: terror nocturno, pesadilla, somniloquia y sonambulismo. Dentro de las disomnias (trastornos en el inicio y mantenimiento del sueño), se pueden distinguir: el insomnio, la narcolepsia o la apnea. “Los trastornos del sueño como causa de ausencia de acción penal”. En *Revista la Ley*. Año XIX, núm. 4631. Madrid, 18 de septiembre de 1998, págs. 1-6.

<sup>1023</sup> El DSM, cuya quinta y última versión se publicó el 18 de mayo de 2013, es el estándar de clasificación de los trastornos mentales elaborado por la Asociación Americana de Psiquiatría: *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (5<sup>th</sup> ed.) American Psychiatric Association. Disponible en: <http://www.psychiatry.org/practice/dsm> (último acceso 12/07/2015). El CIE-10 es la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, 10<sup>a</sup> revisión. En ésta última, la parasomnia se incluye en la categoría de otros trastornos del sueño. Disponible en: <http://www.who.int/classifications/icd/en/> (último acceso 12/07/2015). Vid. IRIARTE, J. / URRESTARAZU, E. / ALEGRE, M. et al. <<Es frecuentemente idiopático (60% de casos) [enfermedad de etiología desconocida] pero también se asocia a enfermedades neurológicas [...], con la supresión de fármacos (hipnóticos, sedantes) o alcohol, o por la toma de otros fármacos... >>. En “Parasomnias: episodios anormales durante el sueño”, op. cit., págs. 48 y 49.

<sup>1024</sup> Caso Bonnstetter. Este hombre, de intachable trayectoria profesional y familiar, se enfrentó a una acusación por intento de abuso sexual (entre otros cargos) sobre una vecina que residía en una casa próxima, con la misma distribución que la suya, cuya pena oscilaba entre 4 y 15 años de prisión. En plena madrugada, vislumbró una luz fuera de su casa y, ante la posibilidad de que estuviera ocurriendo algo en el vecindario (era el encargado de velar por la tranquilidad de sus vecinos esa noche), al escuchar un ruido, plenamente dormido salió de su casa, accedió a la habitación de la víctima, donde ésta lo descubrió mientras dormía. A continuación lo invitó a salir de la estancia, a lo que el sujeto no opuso resistencia, tras lo cual regresó a su casa y continuó durmiendo. Finalmente fue absuelto por el jurado, Vid. CARTWRIGHT, R. “Sleepwalking Violence: A Sleep Disorder, a Legal Dilemma, and a Psychological Challenge”. En *The American Journal of Psychiatry*, Vol. 161, July 2004, págs. 1149-1158. Disponible en: <http://ajp.psychiatryonline.org/doi/full/10.1176/appi.ajp.161.7.1149> (último acceso 12/07/2015). Un trabajo colectivo que trata este asunto en profundidad en *Sleep and Mental Illness* Pandi-Perumal. S. R. / Kramer, Milton (eds.). Ed. Cambridge University Press. New York, 2010.

la corte dictó que se retiraran los cargos, con el consiguiente escándalo de la opinión pública, por ser este tipo de crimen uno de los más enfáticamente condenados por la sociedad, pero lo cierto es que todos los médicos que intervinieron en la causa descartaron la enfermedad mental, por lo que finalmente se dictó la absolución, en base al texto de ley que otorga el beneficio de la duda a favor del acusado, equivalente al principio *in dubio pro reo* de nuestro ordenamiento.<sup>1025</sup>

En España, existen algunos casos de episodios parasómnicos, de resultados criminales desiguales; analizamos dos casos con idéntico desenlace, la absolución del sujeto activo, si bien por cauces distintos en relación a la culpabilidad. El primero de ellos trata de un guardia civil que disparó a un compañero mientras ambos prestaban servicio de retén nocturno, ocasionándole lesiones.<sup>1026</sup> El procesado fue absuelto de un delito de imprudencia grave profesional porque el órgano juzgador entendió que, al no existir acción (el *prius* básico de la Teoría del Delito), no existía delito.<sup>1027</sup> Asimismo,

---

<sup>1025</sup> El joven de 15 años, autor material de los hechos, mostró durante todo el proceso, que duró 2 años, una desconexión total con el suceso, no era capaz de recordar nada, tan sólo que se despertó en la madrugada, volvió a quedarse dormido sobre las 6, y media hora después una voz le dijo que tenía que matar a sus padres porque si no el que moriría era él. Asestó 50 puñaladas al padre y un centenar a la madre, cuando ésta intentó pararle al percatarse de lo que sucedía. La Corte de Apelación de Besançon (Doubs) confirmó la puesta en libertad del acusado dictada por el Tribunal de instancia de Belfort en julio de 2004 [Sentencia de 3 de noviembre de 2004. *No se encuentra publicada en base de datos, probablemente por tratarse de un menor*]. El Código Penal francés de 1993 recoge el término *neuropsíquico*, aglutinando de esta manera una gran variedad de estados en su art. 122-1: <<No será penalmente responsable quien, en el momento de la comisión de los hechos, padezca un trastorno psíquico o neuropsíquico que haya anulado su discernimiento o el control de sus actos. Quien esté aquejado, en el momento de los hechos, de un trastorno psíquico o neuropsíquico que haya alterado su discernimiento o dificultado el control de sus actos seguirá siendo punible; sin embargo, el órgano jurisdiccional tendrá en cuenta esta circunstancia cuando determine la pena y fije el régimen de la misma>>. Vid. MATEO AYALA, E. En relación a las causas de irresponsabilidad o de atenuación de la responsabilidad en el ordenamiento penal francés, en las que, según algunos autores, se podrían incluir los estados de sonambulismo como estados cercanos a la demencia. En *La exigente de anomalía o alteración psíquica en el Derecho penal comparado*. Ed. Dykinson. Madrid, 2007, págs. 83-128. Un trabajo colectivo que trata en concreto de las disfunciones mentales asociadas con el sueño en profundidad en *Sleep and Mental Illness*. Pandi-Perumal. S. R. / Kramer, Milton (eds.). Ed. Cambridge University Press. New York, 2010.

<sup>1026</sup> El suceso se produjo en el interior del recinto en el que se encontraban descansando, en torno a las 4 de la madrugada, al sufrir el acusado un terror nocturno, momento en el que montó el arma y disparó a su compañero, causándole lesiones en un muslo y en la región abdominal. Sentencia Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 3ª), 140/1999 de 7 de julio [ARP\1999\2816]: <<El informe de evaluación psicológica [...] dictamina que los hechos se llevaron a cabo en estado de sonambulismo durante las fases 3 y 4 NO-REM del sueño, donde no hay pérdida de atonía muscular y se aceleran las fases anabólicas del organismo aumentando la producción de hormonas, proteínas y neurotransmisores. Asimismo los terrores nocturnos aparecen en la primera fase de la noche que coincide con las fases precipitadas; y se concluye con que la conducta del acusado está inserta dentro de lo que clínicamente se denomina trastorno mental transitorio... >>. Un aspecto interesante de la Sentencia es la discrepancia semántica entre el informe de evaluación psicológica y la Sala respecto al término “trastorno mental transitorio”.

<sup>1027</sup> Tras la oportuna diferenciación de lo que se considera un hecho natural y un acto humano, en éste último, para que se considere acción, se deben dar dos elementos: uno interno (causación voluntaria para



el Tribunal llega a la conclusión de que tampoco se da una <<*actio libera in causa*>>.<sup>1028</sup> Es decir, el sujeto no se coloca conscientemente en ese estado de sonambulismo con objeto de alegar después la supuesta ausencia de acción, ya que si bien sufrió en la infancia dos episodios aislados de parasomnia, no se repitieron en la edad adulta; por tanto, desconocía el trastorno que le afectaba.<sup>1029</sup> En esta sentencia, la Sala explica por qué ha optado por la ausencia de acción y no por aplicar una causa de inimputabilidad (eximente completa) o de no culpabilidad (eximente incompleta). El razonamiento seguido <<*obiter dicta*>>, es claro. Respecto a la culpabilidad, si se entiende que existe una causa que la excluye (art. 20.1 CP), esto supone admitir que ha existido voluntariedad en la acción penal, tipicidad, antijuricidad e imputabilidad en el sujeto, que no se corresponde con lo determinado por las periciales médicas. Por otra parte, recurrir a la inimputabilidad implica admitir que el sujeto padece un trastorno mental transitorio, procedente de una reacción patológica frente a un estímulo externo, pero en el caso estudiado obviamente el estímulo es de carácter endógeno (ensoñación onírica o terror nocturno).

El segundo caso, cronológicamente posterior, constituye legalmente cuatro delitos de asesinato, dos consumados y dos en grado de tentativa.<sup>1030</sup> En la Sentencia que resuelve el caso, por primera vez se alude al término –parasomnia–, definida como <<*despertar confuso o trastorno comportamental del sueño REM*>>.<sup>1031</sup> La

---

la teoría causalista, o conducta humana regida por la voluntad para la teoría finalista) y otro externo (modificación del mundo exterior para la teoría causalista, o un resultado para la teoría finalista); lo cierto es que al faltar alguno de ellos, el concepto de acción permanece vacío de contenido. Una resumida comparación de los postulados de ambas escuelas en torno a la cuestión en BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I. En “Viejo y nuevo Derecho Penal. Principios y desafíos del Derecho Penal de hoy”, op. cit., págs. 84-91.

<sup>1028</sup> La mayor parte de sucesos delictivos relacionados con el sueño se resuelven por aplicación de la fórmula de la *actio libera in causa* imprudente. Vid. JIMÉNEZ DÍAZ, M<sup>a</sup> J. En “Los trastornos del sueño como causa de ausencia de acción penal”, op. cit., pág. 5.

<sup>1029</sup> Un sector doctrinal entiende que cabe aplicar la *actio libera in causa* tanto a delitos dolosos como imprudentes, ya que si no, carecería de sentido el inciso final del art. 20. 1º: <<... cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o hubiera previsto o debido prever su comisión>>. En este sentido, BLANCO LOZANO, C. *La eximente de anomalía o alteración psíquica*. Ed. Dykinson. Madrid, 2000, págs. 115-119.

<sup>1030</sup> En este suceso, el hombre aquejado de parasomnia atacó a diferentes familiares con un hacha y un martillo, durante un terror nocturno en el que vivió la experiencia de ser brutalmente agredido por avestruces. La consecuencia fue la muerte de su esposa y la madre de ésta, mientras que los dos hijos sufrieron lesiones. El inmediato comportamiento del sujeto, una vez agotada la fase de parasomnia, fue intento de suicidio.

<sup>1031</sup> Sentencia Audiencia Provincial de Málaga 100/2007, de 5 de febrero de 2007 [Sumario núm. 3/01, Diligencias Previas 286/01. Rollo núm. 7 de 2012. Juzgado de Instrucción núm. 1 de Málaga]. *No se encuentra publicada en la base de datos del Consejo Judicial del Poder Judicial*. El acusado es absuelto por aplicación del art. 20.1 (circunstancia eximente de la responsabilidad criminal de enajenación

interpretación del Tribunal es declarar la inimputabilidad del sujeto por considerar que concurre en el mismo la circunstancia eximente prevista por el art. 20.1 CP (enajenación mental), si bien se puede objetar que precisamente es un estado endógeno (sueño) el que produce la realización de la conducta típica, en cualquier caso de carácter transitorio, en ningún caso permanente, sin constancia de que hubiera sufrido procesos anteriores (teniendo en cuenta que el sujeto, al cometer los hechos, contaba más de 55 años), por lo que cabría poner en duda la existencia de algún grado de voluntariedad en la acción.

En relación a la solución sancionadora, la medida de seguridad de internamiento psiquiátrico impuesta en la resolución obedece, según nuestro punto de vista, más que a criterios de prevención especial en relación a la posible comisión de delitos, a la configuración mental del sujeto para poder superar lo sucedido, extremo que, aún siendo plausible, excede los cometidos del Derecho penal, por otra parte cada vez más desdibujados. Quizás a ello se deba que la sentencia sea parca en cuanto a la interpretación de varias coordenadas que resultan altamente trascendentes; no se explica suficientemente en los fundamentos de derecho por qué se acoge la teoría de la enajenación mental formulada por el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación. A pesar de reflejar explícitamente el término y curso del episodio parasómnico en la resolución, no se tiene en cuenta que esta enfermedad no figura en el catálogo de enfermedad mental o trastorno de la personalidad, según el DSM-5.<sup>1032</sup>

Los parámetros fijados para obtener un diagnóstico de sonambulismo y comportamientos inusuales relacionados con el sueño son, según CARTWRIGHT: un cuadro de sonambulismo en la infancia, terrores nocturnos o episodios de enuresis a partir de los 5 años [el testimonio debe ser apoyado por testigos creíbles: padres, compañeros de cama, amigos]; un historial familiar de cualquiera de las conductas anteriores; momento del incidente [se producen cerca del comienzo del ciclo del sueño, generalmente entre la primera hora de sueño y el primer tercio del sueño de la noche]; un periodo de carencia de sueño previo al incidente [presencia de cortas interrupciones

---

mental), acordándose la medida de seguridad de internamiento en centro psiquiátrico, por tiempo no superior a 10 años.

<sup>1032</sup> <<... ha concurrido en su autor la circunstancia eximente del núm. 1 del art. 20 del CP de enajenación mental, por trastorno de la personalidad, que le hace inimputable del hecho conforme a los informes médicos [...], y que implica conforme acuerdan las partes en sus conclusiones definitivas, la necesidad de un tratamiento médico con internamiento del procesado-acusado para su rehabilitación>> (FJ 3).

o trastornos del sueño]<sup>1033</sup>; fallos de memoria [no existe memoria acerca del suceso o ésta es escasa, no es posible proporcionar razón alguna que explique el comportamiento]; remordimiento [incluye perplejidad y posterior disculpa]; pueden existir antecedentes de ronquidos y sucesos respiratorios [pausas en la respiración / apnea durante el sueño]; inexistencia de ocultación o negación de las conductas implicadas [éstas pueden incorporar: *agresión* -daño a los demás, a sí mismo, animales o cosas-<sup>1034</sup>, *conductas alimenticias* -cocinar alimentos o combinaciones inusuales de alimentos-, *conductas sexuales* -con intentos de involucrar a otras personas o niños-, *exploración* -conducir, escalar, correr-<sup>1035</sup>, *protección* -intentos inadecuados para rescatar a otros-<sup>1036</sup>]. Por último, al realizar un estudio del sueño, el protocolo debe incluir 2 noches bajo polisomnografía, separadas por un intervalo de 25 horas de vigilia.<sup>1037</sup>

Resulta indispensable diferenciar entre enfermedad psiquiátrica y otros estados de sonambulismo con comportamientos “aberrantes”, ya que el sueño no constituye un estado único ni uniforme. El problema en estos casos de comportamientos agresivos es cómo determinar fielmente qué ocurrió con exactitud en el momento de los hechos,

---

<sup>1033</sup> Donde se podría encuadrar la presencia de ruidos que avocan al paréntesis momentáneo del sueño.

<sup>1034</sup> Por ejemplo, en el parricidio de Lebetain. En contra de la aparente insignificancia cuantitativa de sucesos con resultados trágicos, se puede citar varios. Así, el caso Kennet Parks (1987), en el que la Corte Suprema de Canadá absolvió al acusado, que fue capaz de conducir unos 20 kilómetros en su vehículo hasta la casa de sus suegros, asesinando a la mujer a base de golpes con una barra metálica y estrangulando al hombre, que sobrevivió al ataque. Otros dos ejemplos con distintos pronunciamientos los encontramos en Arizona; en 1981 Steven Steinberg fue absuelto de la muerte de su esposa, a la que mató con un cuchillo de cocina y en 1997 Scott Falater fue condenado por el asesinato de su cónyuge, a la que tras asestar múltiples puñaladas, sumergió en la piscina de la residencia, mientras un vecino observaba el suceso. En el Reino Unido, Nick Walter (2007), un mecánico de las fuerzas aéreas fue absuelto de un delito de violación. Vid. CARTWRIGHT, R. Realiza una comparación de los efectos judiciales entre dos de los casos de homicidio citados, concretamente la absolución canadiense y la condena de Scott Falater. Propone una investigación que defina más a fondo el funcionamiento de la mente en este tipo de trastorno para llegar a la pregunta fundamental sobre la responsabilidad por los actos realizados en este estado. <<Se debe alentar a continuar la investigación de este trastorno desde todos los ámbitos: genético, hormonal, psicológico, neuropsicológico, imágenes cerebrales, así como los estados del sueño>>. “Sleepwalking Violence: A Sleep Disorder, a Legal Dilemma, and a Psychological Challenge”, op. cit.

<sup>1035</sup> Obsérvese el caso español comentado anteriormente, en el que el sujeto es capaz de montar el arma, o el caso canadiense, en el que el sujeto condujo su vehículo hasta el lugar del crimen y posteriormente realizó el trayecto de vuelta hasta el punto de origen. En ambos supuestos, se trata de acciones ejecutadas en multitud de ocasiones; por la profesión del sujeto en el caso del guardia civil y por la repetición del trayecto recorrido, de sobra conocido por el sujeto en el caso del conductor.

<sup>1036</sup> Motivación que, en el caso Bonnstetter, pudo impulsar a éste a visitar la casa de sus vecinos.

<sup>1037</sup> En los datos del sueño se deben anotar la presencia de ronquidos y sucesos respiratorios, mediante el transductor de presión. Los datos del EEG (electroencefalografía) deben anotarse tanto mediante el estándar de puntuación, como por el análisis espectral de frecuencia de la actividad delta en el primer ciclo del sueño. Vid. CARTWRIGHT, R. *Criteria for the Diagnosis of Sleepwalking and Inusual Sleep-related Behaviors*. Disponible en: <http://rosalindcartwright.com/sleep-walking-criteria/> (último acceso 12/07/2015).

dado que no podemos retrotraernos al estado situacional y emocional del sujeto en el momento de cometer la agresión. El protocolo que permita establecer la distancia requerida entre un episodio de parasomnia y otras alteraciones de carácter psiquiátrico, en orden a establecer la responsabilidad criminal de forma individualizada, en principio se puede establecer estudiando diferentes criterios, obviamente con posterioridad al suceso.<sup>1038</sup>

El ruido como productor de conductas con relevancia penal, de incidencia cada vez más acusada en la sociedad actual, nos debe llevar a un estudio lo más sistemático posible (estructura, jerarquía y método), encarando definitivamente el alcance de la neurociencia en la materia, cuanto menos para descubrir en que coordenadas el ruido provoca daños objetivables (respecto de un sujeto determinado, dependiendo de su edad, condición física, psíquica, etc.) y qué papel juega el componente subjetivo propio en el contexto de la sonoridad. En este extremo, necesariamente aparece el factor de la “susceptibilidad” ante el estímulo (que puede ser positivo o negativo), pero que en definitiva, complica la realización de un estudio en el que se pretenda proponer bases desapasionadas y ecuánimes.

---

<sup>1038</sup> Vid. CARTWRIGHT, R. *The Twenty-four Hour Mind: The Role of Sleep and Dreaming in Our Emotional Lives*. Oxford University Press, 2010; “Sleepwalking Violence: A Sleep Disorder, a Legal Dilemma, and a Psychological Challenge”, op. cit.



## VII.- TOMA DE POSTURA

¿Cuál es el principal cometido que estamos confiando al Derecho penal como pieza instrumental en la defensa, salvaguarda y tutela del medio ambiente? ¿Debe imperar la labor preventiva o la de retribución? A primera vista, lo que está consiguiendo desde su corta existencia, responde más bien a la idea de pura retribución por la conducta llevada a cabo, pues resulta difícil conciliar al actual Derecho penal del medio ambiente con los criterios de prevención que debiera cumplir el Derecho ambiental.<sup>1039</sup> Este hecho se muestra de forma más acusada, si cabe, en relación a la criminalidad ambiental, que paulatinamente camina con mayor autonomía y segregación en relación a los grandes principios estructurales que conforman el Derecho penal (culpabilidad, lesividad, *ultima ratio*, subsidiariedad, mínima intervención, etc.). De lo contrario, simplemente sería inoperante e inalcanzable en sociedades que no aceptan que el Derecho penal se vea reducido a su núcleo tradicional, ya que los intereses de sus individuos se han diversificado y, al mismo tiempo, las escalas de prioridades en cuanto a la protección exigida para los mismos, han evolucionado.<sup>1040</sup>

Retomando el contenido específico de este trabajo, si tenemos que adoptar el factor determinante ambiental que se presupone al “ruido”, nos decantamos por una concepción ecocéntrica del mismo. En primer lugar, por razón del emplazamiento sistemático que sigue nuestro Código Penal, incurso en el delito medioambiental, teniendo en cuenta las tendencias que se avecinan en relación a un cambio sustancial de pensamiento, hecho que se podrá traducir a su vez en interpretaciones normativas de

---

<sup>1039</sup> Acerca del escaso efecto preventivo de las disposiciones sobre el medio ambiente, *vid.* BACIGALUPO ZAPATER, E. En “La instrumentación técnico-legislativa de la protección penal del medio ambiente”, *op. cit.*, pág. 197.

<sup>1040</sup> Un alegato contra la aniquilación del principio de culpabilidad en el Derecho penal por sus consecuencias nefastas para la persecución de fines preventivos por parte del Estado de Derecho, así como para una política criminal racional en la ya clásica obra de ROXIN, C. *Política criminal y estructura del delito. Elementos del delito en base a la política criminal*. Juan Bustos Ramírez / Hernán Hormazábal Malarée (trads.) Colección IURA-3. Serie: Derecho y Estado. Ed. Promociones y Publicaciones Universitarias. Barcelona, 1992, págs. 115 y ss. Respecto a las dificultades que plantea adoptar un verdadero carácter de *ultima ratio* en los presupuestos penales aplicados al Derecho ambiental, *vid.* ESCAJEDO SAN EPIFANIO, L. “El medio ambiente en la crisis del Estado social. Su protección penal simbólica”, *op. cit.*, págs. 108-112.

distinto orden al ensayo monista-personal o de corte antropocéntrico moderado, que no ha cosechado los éxitos esperados.

El rodamiento de estas teorías no parece tan lejano si nos fijamos en la impronta que ha ido dejando el concepto de “generaciones futuras”, consolidado en la mayor parte de las legislaciones ambientales.<sup>1041</sup> Pues bien, realizando un paralelismo entre generaciones próximas de humanos y generaciones subsiguientes del mundo animal y vegetal, el término “generaciones futuras” se aparta de su lectura tradicional.

En este sentido, entendemos necesario que el sistema jurídico penal que regula lo ambiental no debe perder un ápice de coherencia y unidad (formal y material). En este sentido, descartar la vinculación de la emisión de ruidos a nivel constitucional, a determinados derechos fundamentales individuales, como son el derecho a la intimidad personal y familiar, a la salud, a la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de residencia, a la inviolabilidad del domicilio, y reducirlo al enunciado del relativo al derecho a un medio ambiente adecuado (art.45 CE), parece muy forzado a la vez que poco realista.

Por otra parte, nos parece acertado coordinarlo en determinados supuestos con la protección de bienes jurídicos distintos al medio ambiente, al menos hasta que las evidencias científicas ejerzan el poder de transformar la actual construcción regulatoria del ruido en otro sistema con proyección de universalidad, tanto sustantiva (inclusión de todos los seres vivos) como formal. A escala penal, actualmente el ruido conecta con mayor cohesión con algunos de los delitos denominados clásicos, como lesiones, libertad en su modalidad de coacciones<sup>1042</sup>, intimidad e inviolabilidad del domicilio<sup>1043</sup>,

---

<sup>1041</sup> La referencia e importancia del valor “generaciones futuras”, lo que persigue es un fin, no la búsqueda de protección de un bien jurídico que resulta, *a priori*, descartable. El fin perseguido, por tanto, sería el mero mantenimiento (no una mejora sustancial) de unas supuestas y desconocidas condiciones de vida de esas futuras generaciones, sin que se puedan abstraer de las condiciones previamente creadas por las generaciones predecesoras. *Vid.* REY PÉREZ, J L. Se refiere a un tipo de solidaridad diacrónica, en contraposición a la solidaridad sincrónica o entre sujetos que son contemporáneos, lo que se traduce en el protagonismo de la titularidad de derechos, otorgada desde este punto de vista a las próximas generaciones, y no sólo a las personas que viven aquí y ahora. “Introducción: El derecho al medio ambiente”. En *Nuevas formas de Contaminación Atmosférica. Un análisis jurídico multidisciplinar*, op. cit., págs. 20 y ss.

<sup>1042</sup> Tanto el delito de lesiones como el de coacciones sufren modificaciones con la LO 1/2015. Respecto del primero, el art. 147 cambia la acción reiterativa de faltas por la tipificación del delito leve en su apartado 2, añade el maltrato de obra que no llegue a causar lesión en el apartado 3, y cierra el tipo básico con una cláusula de perseguibilidad a instancia de parte respecto de las conductas de sus dos apartados precedentes (art. 147.4). Con más detalle, *vid.* CASTRO CORREDOIRA, M. / GUINARTE CABADA, G. “La reforma de los delitos de lesiones (arts. 147, 152 y 156 CP)”. En *Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015*. José L. González Cussac (dir.) Ángela Matallín Evangelio / Elena

que con una configuración autónoma del medio ambiente, aún en los supuestos en que sea capaz de desplegar la fuerza y efectos de una materia contaminante al uso.<sup>1044</sup>

En todo caso, si así fuera, no encontramos obstáculo para incluirlo en el concepto general de contaminación atmosférica, cuya definición nos ofrece con absoluta claridad tanto la Ley de Protección del Ambiente Atmosférico, como la Directiva de 1996, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación, pues ambos textos reparan en la inclusión del ruido.<sup>1045</sup> En este sentido, si se avanza un paso más, incluso la inmisión de ruidos (concepto acuñado por el Derecho civil) en un

---

Górriz Royo (coords.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2015, págs. 487-500; TAMARIT SUMALLA, J. M. “Lesiones”. En *Comentario a la Reforma Penal de 2015*. Gonzalo Quintero Olivares (dir.) Ed. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2015, págs. 347-350. En el caso de las coacciones, se añade un apartado 3 al tipo básico el art. 172 para acoger la categoría del delito leve. Asimismo, se tipifica el matrimonio por coacción (art. 172 bis) y una serie de comportamientos de acoso en torno a la figura denominada delito de *stalking*, por la acepción anglófila del sustantivo acechar (art. 172 ter). Al respecto vid. MATALLÍN EVANGELIO, A. “Delito de acoso (artículo 172 ter)”. En *Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015*. José L. González Cussac (dir.) Ángela Matallín Evangelio / Elena Górriz Royo (coords.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2015, págs. 575-591. Sobre el delito de matrimonio forzado DE LA CUESTA AGUADO, P. M. “El delito de matrimonio forzado”. En *Comentario a la Reforma Penal de 2015*. Gonzalo Quintero Olivares (dir.) Ed. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2015, págs. 365-378.

<sup>1043</sup> Los delitos contra la intimidad también experimentan cambios. La reforma lleva a cabo la transposición de la Directiva 2013/40/UE, de 12 de agosto, relativa a los ataques contra los sistemas de información y la interceptación de datos electrónicos cuando no se trata de una comunicación personal. Asimismo, se incorpora la responsabilidad penal de las personas jurídicas (arts. 197, 197 bis, ter, quater, y quinquies). Valoración muy negativa de la reforma en este marco delictivo, en opinión de MORALES PRATS, F. “La reforma de los delitos contra la intimidad artículo 197 CP”. En *Comentario a la Reforma Penal de 2015*. Gonzalo Quintero Olivares (dir.) Ed. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2015, págs. 459-467. Positivamente en líneas generales COLÁS TURÉGANO, A. “Nuevas conductas delictivas contra la intimidad (arts. 197; 197 bis; 197 ter)”. En *Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015*. José L. González Cussac (dir.) Ángela Matallín Evangelio / Elena Górriz Royo (coords.) Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2015, págs. 663-683.

<sup>1044</sup> La tesis de otorgar al ruido la categoría de ataque a la intimidad también presenta claroscuros, porque si adoptamos este enfoque utilitarista, dejamos fuera supuestos que la ciencia ya ha probado sobradamente, como los daños que se ocasionan a diversas especies de la fauna marina por la multiplicidad de actividades que se llevan a cabo en el mar, temática abordada en este trabajo. De hecho, existen ruidos que no pertenecen a ningún catálogo de prohibiciones, aun provocando graves daños en animales marinos. Vid. QUINTERO OLIVARES, G. En “La especialidad del Derecho penal ambiental en relación con la contaminación acústica y la contaminación del agua”, op. cit., pág. 15. Otro hipotético ejemplo es la relación entre la presencia de ruido continuado y los daños estructurales en la edificación, en cuyo caso se produciría una conexión sustantiva con algunos tipos de los delitos contra la ordenación del territorio (arts. 319.1 y 320). Vid. CORCOY BIDASOLO, M., que plantea la disyuntiva entre optar por considerar los efectos del ruido como delito de lesiones, delito contra la salud pública en un ámbito urbano, o delito medioambiental. En “Contaminación acústica. ¿Delito de lesiones o contra el medio ambiente?”, op. cit. También como medio comisivo del delito de coacciones SILVA SÁNCHEZ, J. M<sup>a</sup> / FELIP I SABORIT, D. En “El Derecho penal ante el ruido”, op. cit., págs. 260 y 261.

<sup>1045</sup> La Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico dispone que se entiende por contaminación atmosférica <<la presencia en el aire de materias o formas de energía que impliquen riesgo, daño o molestia grave para las personas y bienes de cualquier naturaleza>>. Este concepto amplio exhibe un carácter más restringido en la Directiva del Consejo 96/61/CE, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación, pero aún así recoge de forma expresa que el calor y el ruido son focos emisores de contaminación a la atmósfera (art. 2.2). Uno de los más recientes estudios sobre la materia lo aborda BENSUSAN MARTÍN, M<sup>a</sup> P. En “Regulación jurídico-administrativa de la contaminación atmosférica”, op. cit.



contexto domiciliario o de hábitat, ya sea laboral, de ocio o cualquier otro tipo, en relación a personas naturales, no excluye científicamente su vinculación con la atmósfera, ya que no se puede sostener que tan sólo existan condiciones atmosféricas en lugares abiertos y no en los acotados o contruidos, pues nos conduciría a un planteamiento absurdo.<sup>1046</sup> Por sorprendente que parezca, incluso espacios cerrados en los que no interfieren sonidos añadidos a los resultantes de una congregación más o menos numerosa de personas, como restaurantes o salas de reuniones, por sus características arquitectónicas, decorativas, o la utilización de determinados materiales como el hormigón en suelos y techos descubiertos, pueden provocar un sonido medio superior a 88 dB.<sup>1047</sup>

Esto nos lleva a sostener que, si el sistema normativo se entrena para dotar de protección a las condiciones ambientales *per se*, la mayoría de autorizaciones u otros formatos de colaboración entre entidades públicas, principalmente municipalidades (en un contexto lúdico de concentraciones grupales de ciudadanos) serían ilícitas y nulas de pleno derecho, puesto que incumplen su propia normativa, con independencia de que el ruido que provocan sea de carácter temporal (semana de fiestas de cualquier población) o puntual (determinados eventos celebrados en espacios públicos).

En otro orden de cosas, la subjetividad que preside cualquier aproximación a esta categoría de emisión [ruido] para las víctimas, pierde presencia, al no poderse tratar “lo subjetivo” como algo suficientemente contrastado y refrendado en otros organismos terrestres. La postura contraria desemboca inexcusablemente en probar tan sólo los datos objetivables, tanto en seres humanos como en los no humanos.

---

<sup>1046</sup> No podemos obviar que pueden aparecer nuevas fuentes de sonido desconocidas, así como parámetros de utilización de las mismas o de las ya existentes con diversos fines; una de las últimas novedades, todavía en fase de implantación en España, aunque ya utilizada por cuerpos policiales en otros países, es el uso de cañones de sonido para disolver manifestaciones en la vía pública, en sustitución de las pelotas de goma habituales. Este Dispositivo Acústico de Largo Alcance [*Long Range Acoustic Device* –LRAD], creado en EE.UU. y utilizado por primera vez en el año 2000, se define como <<arma no letal>> y consiste en un dispositivo circular, capaz de emitir sonidos de tono agudo que alcanzan 129 dB a 1 metro de distancia; la posibilidad de apilarlos de diez en diez, permite superar los 150 dB. También en el Reino Unido parece que la medida se está implantando por parte de las autoridades locales como medida preventiva delincuencia. Al respecto, *vid.* HAYWARD, K. J. La finalidad específica de este dispositivo denominado “Mosquito” [sic] es <<... ahuyentar a la juventud rebelde de determinados espacios públicos [...] Tales medidas son inquietantes, pero no sorprendentes. Como el filósofo Peter Sloterdijk (1998) señala, desde los inicios de las congregaciones humanas, los grupos han demarcado y protegido su territorio mediante la emisión de sonidos>>. En “Five Spaces of Cultural Criminology”, op. cit., págs. 457 y 458.

<sup>1047</sup> Es decir, que el derecho de los consumidores en estos emplazamientos también se presta a una invocación de protección frente a la contaminación acústica. En este sentido *vid.* MOLINA NAVARRETE, C. En “Fundamentos constitucionales de la tutela frente al ruido indeseado: el derecho fundamental a vivir en ambientes libres de violencia acústica”, op. cit., pág. 29.

Las posibilidades de subsunción de las conductas ruidosas en distintos ámbitos de la Parte Especial del Código Penal, que protegen bienes jurídicos distintos al medio ambiente, merecen una propuesta de *lege ferenda*. Una opción alternativa que nos parece acertada, por tanto, es desgajarlo del delito ambiental e incorporarlo a otros artículos del Libro II, o crear un tipo autónomo de nuevo cuño que se podría insertar en otros Capítulos, si no se quiere caer en el despropósito de considerar como un bien ambiental algo que la jurisprudencia vincula subjetivamente a las personas naturales.<sup>1048</sup> Por ejemplo, en el país nórdico de Finlandia el ruido se incluye tanto en los delitos contra el orden público como en delitos contra la intimidad, en ningún caso en el Capítulo dedicado a los delitos contra el medio ambiente. No obstante, a este país no se le puede catalogar de tibio en sus propuestas medioambientales.<sup>1049</sup>

El ruido no pertenece a las esferas globales relatadas. En primer lugar, por motivos sociológicos y culturales evidentes; en segundo lugar (no por ello menos desdeñable), por sus características físicas, que frenan su potencial contaminador respecto a otras formas de polución ambiental. Pensemos que una emisión de ruidos que dure una noche no completa lo exigido por el tipo del art. 325, ni cubre el contenido de los delitos contra la salud pública o contra la integridad moral. Ahora bien, la misma conducta es perfectamente compatible con un ataque a la intimidad de los sujetos que se hallen bajo esas inmisiones, o incluso con la acción de impedir a los sujetos pasivos el legítimo disfrute de la vivienda, tal y como recoge el art. 172.1 *in fine*.

En todo caso, si consideramos que la producción de ruidos que se hallan vinculados a la profusión de sonidos de gama variada en el marco de la vida en sociedad, cuyo principal eje de protección y salvaguarda es la Administración en sus diferentes segmentos (urbanismo, viales, transporte público, infraestructuras, etc.), es

---

<sup>1048</sup> Me remito en este punto a lo comentado y desarrollado en anteriores epígrafes sobre la posición jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que lo considera un ataque al art. 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

<sup>1049</sup> Más bien todo lo contrario, ya que como Estado en el marco del Círculo Polar, es precursor del diseño de políticas de protección del medio ambiente a través de la creación de Áreas Marinas Protegidas en el Ártico. Al respecto, *vid.* Nota de prensa del Gobierno de Finlandia, de 23 de agosto de 2013. Disponible en: <http://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/sv.jsp?oid=392379> (último acceso 12/07/2015). La figura del ruido aparece en diferentes secciones del Capítulo 17: *Offences against public order* (563/1998), así como en el Capítulo 24: *Offences against privacy, public peace and personal reputation* (531/2000), con penas que oscilan entre multa y seis meses de prisión. Código Penal de Finlandia, versión en inglés: <http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1889/en18890039.pdf> (último acceso 10/07/2015).

una categoría autónoma dentro del concepto de contaminación medioambiental, la parcela que ocupa el Derecho penal para frenar tal tendencia es francamente irrelevante a nivel práctico, al tiempo que genera problemas de imputación, por lo que resulta más preciso reconducir este tipo de emisiones al ámbito del Derecho administrativo, tanto en su faceta preventiva (inspección, control) como sancionadora. El ruido que más afecta a las personas se puede entender como un problema sistémico, pues las fuentes más invasoras no provienen de acciones individuales; el ejemplo más obvio es el tráfico. De nuevo, coexisten contradicciones patentes respecto a la aplicación general del Derecho penal, pues en el ámbito de la protección otorgada al medio natural, se produce la *peculiar imputación de problemas sistémicos a sujetos individuales*.<sup>1050</sup>

De manera contraria, si adoptamos una postura conciliadora con los presupuestos de carácter antropocéntrico que requieren las agresiones a derechos personales tales como la salud, la intimidad personal, la libertad de acción, entre otros, el Derecho penal actuaría con mayor rigor dogmático, sin necesidad de recurrir a la cada vez más acusada prestidigitación jurídica que permite el ingreso de determinadas acciones u omisiones en un marco de tipicidad extraño y extemporáneo a la propia naturaleza del fenómeno. La exigencia de que lo abordado por el art. 325 se aproxime a características de formulación primordialmente ecocéntricas, cuyo devenir se manifestará a través del empirismo y la observación, obliga a la reflexión respecto de aquellas conductas con dificultad de adaptación a dichos postulados, entre las que destaca la emisión de ruidos.

Dicho esto, no nos queda más remedio que puntualizar una última idea que no contrarresta ni contradice lo defendido con anterioridad. Si otorgamos validez a la formulación medioambiental del ruido, es decir, si aceptamos que la expresión “contaminación acústica” es válida y fehaciente, debemos tomarla en serio y valorarla en toda su extensión. La legislación internacional, europea y nacional, la jurisprudencia y la doctrina científica tendrán que aunar sus esfuerzos para proclamar de una vez por todas que el ruido contamina, y si esto es así, que sus efectos son globales, no meramente asociados a los seres humanos.

---

<sup>1050</sup> Así, MÜLLER-TUCKFELD, J. C. En “Ensayo para la abolición del derecho penal del medio ambiente”, op. cit., pág. 526.

## CONCLUSIONES

**PRIMERA.** La relación del hombre con su medio ha sido de vital importancia de forma ininterrumpida, incluso en etapas anteriores a los primeros estadios de lo que conocemos como vida urbana de las civilizaciones, indiscutiblemente por razones exclusivas de supervivencia –fenómenos climatológicos extremos, amenazas por parte de las numerosas y peligrosas especies que formaban parte del reino animal, la consciencia acerca de la envergadura que implicaba el aprovechamiento de las distintas fases y temporadas para la cosecha de frutos cuando descubrió la agricultura, la caza y pesca, y un generoso etcétera.– Con posterioridad, el factor mitológico interfirió en esta relación previa de carácter secular, y sucesivamente fue integrando la ética, el derecho, la ciencia y el empirismo. De este modo, la materia medioambiental en la actualidad, ha cosechado un protagonismo de carácter global, así como la implicación de la mayoría de sectores que conforman la sociedad contemporánea –económicos, culturales, sociales, fiscales, normativos, científicos, filosóficos, entre otros–. A pesar de todos estos extremos, el ruido no ha formado parte de la materia medioambiental y de la protección frente a sus agresiones hasta que los índices de ruido presentes en la vida cotidiana de los sujetos no han superado niveles que han propiciado alteraciones masivas del estado fisiológico –físico y psíquico– de los habitantes de las principales ciudades en diferentes países, si bien de forma sustancial este factor no supone una variación desorbitada respecto a lo que ya experimentaban nuestros más remotos antepasados, tal y como refleja el contenido de los apartados preliminares de este trabajo. Por otra parte, el ruido incluso se puede considerar prestigioso, virtualmente integrado en el proceso evolutivo, pues desde el punto de vista de la antropología y la biología, cumplió un papel destacado en el entramado del sistema de señales de alerta, necesario para elaborar rápidas conductas de respuesta ante inminentes peligros, como ataques súbitos de otras especies o la huida ante un hecho sorpresivo, y se sitúa en el origen del perfeccionamiento progresivo del órgano auditivo humano.

**SEGUNDA.** El ruido presenta condiciones espaciales acotadas, que comprenden un radio de acción relativamente restringido. Así, fácilmente se deduce que no posee la capacidad de propagación que caracteriza a otras formas de contaminación, como la atmosférica, hídrica, acuífera, o la contaminación del suelo por residuos sólidos y químicos –entre otros arquetipos, en atención a según qué nomenclátor de entre los muchos existentes–. Esta faceta dota a la emisión de ruidos de una particularidad lo suficientemente reconocible, le aporta un estatus antitético a las restantes fuentes de polución. No obstante, no resulta contradictorio afirmar que la propuesta de aproximación hacia una normativa más homogénea a escala nacional, europea e internacional es favorable, creíble, ejecutable, y necesaria. El argumento principal se basa en la naturaleza integral que ha logrado, nos referimos a su carácter global desde una perspectiva genérica en relación al extenso, a la vez que geográficamente disperso número de afectados, y no desde la vertiente de la capacidad de transmisión de la fuente emisora de sonido, considerablemente mermada en comparación al resto. En suma, de ahí procede que juzguemos la expresión *contaminación acústica* como un término definitorio de marcado acento eufemístico, y que optemos por la locución *emisión de ruidos* para referirnos a aquellos ruidos que alcancen el umbral de molestia, perturbación, o daño. Ello sin desmerecer la correcta delimitación de lo que se entiende por fenómeno contaminante, esto es, cualquier manifestación que altere nocivamente la pureza o las condiciones normales de una cosa o un medio por agentes químicos o físicos, según la primera acepción del verbo contaminar, señalada por la 23ª edición del Diccionario de la Real Academia Española, publicada en octubre de 2014.

**TERCERA.** Otra disparidad que caracteriza al ruido como una peculiar forma de polución medioambiental es su naturaleza preeminentemente subjetiva, sin desestimar ciertos componentes objetivos, ya que al fin y al cabo representa una forma de energía, correlativamente se trata de un fenómeno físico y por ende, sus coordenadas de espacio y tiempo pueden ser fijadas con rigurosa exactitud -magnitud sonora, resonancia, espacio, altura del sonido, intensidad sonora, fisiología del oído, o transmisión del sonido al cerebro-. Ahora bien, la percepción del sonido es selectiva y además se procesa de forma simultánea a la sensación visual, factores que alejan definitivamente a esta materia de otras estructuras y modelos contaminantes. Es decir, la concentración de partículas de SO<sub>2</sub> –dióxido de azufre–; NO<sub>2</sub> –dióxido de

nitrógeno–; H<sub>2</sub>S –sulfuro de hidrógeno–; CO –monóxido de carbono–; Pb –plomo–, por citar algunos de los más significativos contaminantes presentes en la atmósfera, al ser ésta el medio natural análogo al que sufre la emisión de ruidos, alcanza una determinada dosis diaria, mensual, porcentual, etc. Sin embargo, la finitud innata del ruido suscita que se agote en el preciso momento en que la emisión concluye, al tiempo que no implica necesariamente una disminución o agotamiento de recursos naturales que puedan derivar en su completa desaparición, o un deterioro de las condiciones de calidad necesarias para la subsistencia de los seres vivos. Tampoco produce alteraciones a medio o largo plazo en el medio; al contrario que incendios forestales, inundaciones, gases emanados a la atmósfera, erosión del suelo, o modificaciones de color, olor y sabor de los cauces acuíferos, por mencionar tan sólo algunos arquetipos.

**CUARTA.** Deducción de lo expresado con anterioridad es la estrecha relación que la emisión de ruidos mantiene, en cambio, con las denominadas figuras de *contaminación* odorífera, lumínica y paisajística. Por ello, manifestamos que su regulación preside, de alguna manera, esta tríada de agentes ambientales, cuya regulación y control no pertenecen en ningún caso al extenso ámbito actual del Derecho penal ecológico. Efectivamente, para el derecho público dichas especialidades exclusivamente constituyen apartados asignados al Derecho administrativo, mas la gran paradoja se detecta con facilidad. En el curso de la vida urbana, en toda su extensión, apartados y entornos imaginables –laborales, lúdicos, uso y disfrute de los diferentes servicios públicos, turismo, coexistencia ciudadana–, la luz artificial y el paisaje, pues también hay que considerar paisaje al escenario urbano, confluyen con el propio contexto sonoro. Todo ello nos lleva a cuestionarnos por qué se estima necesaria la sanción penal –tan extremadamente rigurosa y severa, pues no es baladí que el tramo de prisión que contempla el tipo básico del art. 325 CP sea comparable al establecido para el delito de homicidio por imprudencia grave del art. 142.1 CP–, destinada a las conductas relacionadas con el ruido y no así a las restantes, aún con la constatación científica, al menos en el caso del exceso de luminiscencia, de los daños que ésta produce en diferentes segmentos ambientales. Por otra parte, en términos estrictos de salubridad, la proliferación de malos olores por la inadecuada o deficiente limpieza viaria, o bien por la acumulación de residuos urbanos asociados a las actividades de ocio, guarda una considerable relación de proporcionalidad con los focos ruidosos más potentes, por ejemplo en aquellas zonas con alta densidad de visitantes, o que cuentan

con un tejido empresarial consolidado, dedicado principalmente a funciones de esparcimiento o recreo.

**QUINTA.** La vinculación del ruido con el derecho a la intimidad es de una evidencia que raya lo indiscutible, como por otra parte demuestra la consolidada jurisprudencia emanada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En efecto, el art. 8 del CEDH proclama que toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar. De forma casi inadvertida, a través de su doctrina en relación al Estado español iniciada en 1994, los distintos órdenes jurisdiccionales de nuestro país han conseguido fundar una novedosa y heterodoxa protección contra el ruido, apartándose lentamente de la idea de que sólo el derecho constitucional a un medio ambiente adecuado proclamado por el art.45 CE es determinante. Incluye como notas dominantes, el derecho a la intimidad personal y a la protección de la salud (arts. 18.1 y 43 respectivamente). También, aunque con menor presencia, entre otros, el derecho a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1), a la vida e integridad física y moral (art.15), a la inviolabilidad domiciliaria (art. 18.2), a la libre elección de residencia (art. 19), al derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (art.47), todos ellos de nuestro texto constitucional. Sin embargo, las llamadas de atención por parte del TEDH a nuestro país y nuestros tribunales han sido reiteradas hasta fechas muy recientes. Presumimos que esta circunstancia todavía no se encuentra en fase de extinción, por cuanto la dejación de las múltiples administraciones públicas en esta materia continúa siendo muy acusada y, dado que éstas se encuentran fuera del ámbito de aplicación por exclusión expresa del art. 31 bis quinquies, apartado 1, del Código Penal *—no serán aplicables al Estado, a las administraciones públicas territoriales e institucionales—*, así como que la consecución plena de la admisión de su responsabilidad patrimonial en la vía contencioso-administrativa provincial y nacional aún resulta bastante compleja, el recurso a los dictámenes de esta Corte europea mantiene absoluta vigencia; es más, nos atrevemos a afirmar que disfrutarán de mayor vigor en el horizonte próximo; tan sólo a través de una somera observación sociológica, podemos concluir que la fiereza de los ruidos invasivos en gran parte de las ciudades españolas, propiciarán un incremento de quejas y un furor litigante estimulado por el nutrido número de asociaciones civiles existentes, cuyo principal objeto de sindicación es lograr una reducción de emisiones ruidosas en los espacios públicos que desencadenan inmisiones e invasiones de ruido en ámbitos privados.

**SEXTA.** La trascendental importancia que la noción de bien jurídico posee para el Derecho penal nuclear origina una necesaria reflexión que favorezca la superación del concepto de bien jurídico asociado a catálogos de rango ampliado o restringido, por su dependencia en torno a la mayor o menor incorporación de los distintos elementos naturales, así como de la genérica o específica proyección de las conductas que interfieren en su salvaguarda. Por ello, se propone la adopción de un modelo de bien jurídico exclusivo de cada categoría contaminante, que acompaña a la moción de articular tipos diferenciados en concordancia con el bien jurídico que cada uno de ellos representa, y que precisamente por dicho motivo será objeto de interés para el Derecho penal del medio ambiente. La congruencia que necesita el cada vez más fragmentado Derecho ambiental no sólo consiste en denunciar que la regulación existente en materia de ruidos no funciona, ni parcial ni globalmente. Es esencial pues, adjuntar nuevas propuestas que permitan un encaje sin interrupciones demasiado temerarias entre las distintas piezas que componen su armazón. Teniendo en cuenta la relativamente moderna incorporación de la temática de la emisión de ruidos al sistema de la protección penal medioambiental, optamos por abandonar esta desmesura en la aplicación del art. 325 CP. Esta práctica ha provocado una pluralidad de condenas penales que nos conduce a la creencia de que resulta conveniente un replanteamiento de esta concreta materia en su especificidad global, dado que se ha convertido en una de las modalidades del delito ecológico con más protagonismo en España, si bien la desproporción entre los vectores implicados es todavía considerable (contaminación, víctimas, y rigor de la pena), al tiempo que experimenta un aumento muy significativo, que podríamos calificar de pernicioso. En efecto, el vigente art. 325 CP en sus dos apartados presenta una estructura inidónea para la calificación penal de las conductas relacionadas con el ruido en el ecosistema, pues vincula el comportamiento al riesgo de grave perjuicio para las personas, al menos en la práctica. No es menos cierto que el primer apartado del art. 325 CP tampoco distingue entre los comportamientos que consistan en provocar o realizar directa o indirectamente ruidos en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta mar, con incidencia incluso en los espacios transfronterizos que, por sí mismos o conjuntamente con otros, causen o puedan causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas, excepto en la pena, que es inferior. Dado esto por sentado, será materialmente irrealizable en la mayor parte de



supuestos, tanto por razones procesales como sustantivas. En consecuencia, opinamos que un recurso alternativo es el proporcionado por el Derecho administrativo sancionador, pues su escenario y sus herramientas son más acordes a la imposición de sanciones que, aún sin apelar a la pena privativa de libertad, como la pena de multa u otras sanciones restrictivas de derechos, por vía penal resultan más abruptas, además desvirtúan la idiosincrasia de esta rama del Derecho, así como el abandono paulatino de los principios de mínima intervención y *ultima ratio*.

**SÉPTIMA.** La doctrina ecocéntrica de protección medioambiental, frente a la representada tradicionalmente por el antropocentrismo, experimenta un nuevo giro hacia consideraciones del medio ambiente de corte biocéntrico y holístico. Así, recientes textos constitucionales, como los promulgados por las Repúblicas del Ecuador y Bolivia sostienen que la Naturaleza, como ente unitario, posee similares derechos a los que la especie humana se auto-adjudicó en su vínculo con los recursos naturales y el resto de seres vivos. Su fundamento ontológico enlaza con otros presupuestos de corte holístico y de ética por la naturaleza de origen occidental, que con anterioridad al dictado de dichas normas constitucionales, fueron proclamados por ejemplo, a través de la filosofía ambiental de Paul Taylor, quien formuló la cuestionada teoría del valor inherente. Su aspiración es otorgar a cada componente singular del ecosistema protección legal, con el soporte argumental de la ética del respeto por la Naturaleza. Simboliza un sistema ético centrado en la vida, cuya simetría estructural con la teoría de la ética humana es equivalente. Sostiene que el equilibrio de la Naturaleza no es una norma moral, sino que es el valor inherente de cada organismo individual el que determina nuestras relaciones morales con los mismos. Trasladar dichas premisas a un plano fáctico puede resultar engañoso, o profundamente ingenuo, pero no por ello debemos eludir el relieve filosófico-normativo que encierran para la específica teoría del bien jurídico medioambiental, dada la dificultad añadida que la doctrina científica encuentra para su correcta y concreta determinación.

**OCTAVA.** Acerca de la especificidad de las fuentes antropogénicas de ruido. Los fenómenos naturales también producen ruidos, aunque se les denominan sonidos naturales, que pueden resultar iguales o más perturbadores, impactantes y virulentos que los artificiales –ventiscas, huracanes, tormentas eléctricas, volcanes en erupción, cataratas, marejadas, entre otros–. Si utilizáramos para su evaluación técnica el sistema

estandarizado de escalas logarítmicas de decibelios, llegaríamos a un desenlace contradictorio, pues todos ellos rebasan con amplitud los umbrales fijados por las diferentes normas correctoras de ruido, aunque obviamente tan sólo serán censurables aquellos provocados o producidos directa o indirectamente por el hombre. Aparte de confirmar la prevalencia de la especie humana en esta temática, nos ayuda a comprender por qué la subjetividad de su percepción supera de manera exponencial a la del resto de prototipos de contaminación medioambiental. Ahora bien, justamente por la naturaleza antropogénica de los múltiples focos de ruido que dañan los diversos elementos del ecosistema, los seres humanos detentan un deber superior hacia otros seres vivos, no sólo por compartir un sistema interconectado de forma circular y cíclica, sino por su supremacía intelectual, que les obliga a desarrollar una ética comprometida con el respeto hacia otras formas de vida. Por lo tanto, no podemos defender la mera existencia de derechos, sino que debemos apostar por la inclusión de la otra parte de este binomio indisoluble, es decir, por la asunción de deberes que van más allá de la propia satisfacción a título personal, o la complacencia que engloba a la especie humana a título universal.

**NOVENA.** El impacto y las secuelas que el ruido antropogénico ocasiona en la flora y fauna y por tanto en la biodiversidad es, en la actualidad, una de las asignaturas pendientes del Derecho ambiental internacional, tanto público como privado. De forma deliberada omitimos referencia alguna al derecho interno, la razón es el escaso potencial que supondría la creación de normas regidas por los respectivos ordenamientos estatales, que están abocadas a su permeabilidad, sencillamente por los acuerdos y convenios entre los distintos países que comparten espacios fronterizos. Tampoco las ONGs ambientales transnacionales se ocupan extensamente del propósito de legislar sobre esta disciplina. Conocemos que los índices elevados de ruido distorsionan la visualización y percepción de cualquier paisaje, por lo que también se modifican las condiciones bióticas / biológicas de subsistencia y desarrollo de cualquier especie autóctona de la zona donde se produzca esa mutación sustancial, es decir, la pérdida de biodiversidad y fragmentación de los hábitats. Así, esta circunstancia revela la importancia de su concatenación. Otro de los aspectos interesantes es el relacionado con el tráfico marítimo y las diferentes actividades que se llevan a cabo en los océanos, que a pesar de la evidencia científica exteriorizada por numerosos estudios llevados a cabo por la ciencia de la Biología, y cuyos resultados

son esclarecedores e irrefutables, tampoco encuentra acomodo normativo en el plano internacional. En este punto, es oportuno matizar que el ruido invierte sus características físicas en relación a lo descrito cuando actúa en el medio terrestre y atmosférico, esto es, el argumento de su incapacidad de propagación es suprimido. La causa es que el sonido puede recorrer cientos e incluso miles de kilómetros a través del medio acuático, mientras que el sentido de la vista únicamente valida su alcance algunas decenas de metros. El ruido antropogénico daña al ecosistema -animales y plantas-, aunque los estándares en la ponderación de decibelios no se adecúan a la correcta delimitación de los daños producidos en la flora y fauna marina, debido a que existen infrasonidos y ultrasonidos (cuya frecuencia de vibraciones es inferior y superior respectivamente a los límites perceptibles por el oído humano), lo que no quiere decir que sus efectos no sean altamente perniciosos. Aunque se han realizado estudios sobre el estigma del ruido acuático y subacuático en diversas especies marinas, son casi inexistentes los efectuados sobre el ecosistema oceánico. Asimismo, la tesis de que los océanos son ambientes naturalmente ruidosos (olas, lluvia, rayos sobre el agua, etc.), y por ello la fauna marina se encuentra evolutivamente adaptada al ruido no es correcta, pues la adaptación tan sólo se produce respecto de aquellas fuentes de ruido naturales, lo que excluye aquellas de carácter artificial.

**DÉCIMA.** Uno de los pilares básicos de las conductas que implican atentado, agresión, o daño al bien jurídico medio ambiente es la figura de la acumulación. Sin duda, ésta supone el núcleo del fundamento en el que se sustenta el castigo de las acciones contaminantes, tanto en el ámbito del Derecho administrativo sancionador como en Derecho penal, pues si todo el mundo, de forma individual, se comporta de la misma forma, la conducta singular que en principio no sería perjudicial, adquiere un carácter global o universal. La doctrina y la jurisprudencia son unánimes al respecto. No obstante, el ruido no comparte éstas características intrínsecas, aún teniendo en cuenta la extensa acogida que la utilización del término “contaminación acústica” mantiene en la actualidad. En nuestra opinión, no deja de ser una perífrasis que no resuelve la necesidad de dotar a la materia de una definición clara, precisa y contundente, pues si bien se entiende que el “ruido” es todo sonido no deseado, ello no es óbice para que afirmemos que sus efectos son contaminantes para el medio natural, entendido éste en su más precisa terminología ambientalista. Por otra parte, como apuntamos con anterioridad, la faceta transfronteriza de muchos de los problemas

medioambientales en la actualidad sufre un vacío que no puede colmarse cuando analizamos la singularidad que acompaña a esta materia tan excepcional. Además, la abstracción que se presupone al peligro que entrañan en general los delitos ecológicos, que por otra parte es la antesala del daño, no es representativa en el tema del ruido, pues en el preciso instante en que algún ser vivo sufre sus efectos, inmediata e indefectiblemente nos encontraremos ante un resultado –que sólo *a posteriori* juzgaremos típico o atípico–. Por tanto, la conducta de riesgo indebida generará, en todo caso, bien una infracción administrativa o bien un delito, pero en este último caso siempre será de resultado y no de peligro abstracto, ni siquiera de peligro concreto, si seguimos la división doctrinal común y actualmente aceptada.

**UNDÉCIMA.** De igual modo, descubrimos la dificultad añadida en torno a la aportación de prueba por parte del sujeto pasivo en el anclaje actual de la emisión de ruidos, tanto en el caso de una hipotética calificación como infracción administrativa, o bien como delito. La exigencia del empleo de análisis técnicos complejos, así como de pruebas y evidencias obtenidas a través de distintas fuentes, junto a la demanda de una cierta asiduidad o perseverancia de las emisiones de ruido en cuestión, colisionan con el derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos proclamado por el art. 24.1 CE. Verdaderamente, la diversidad de policías ambientales en nuestro país no ayuda a la homogeneización de patrones bien estructurados, y ello coadyuva al proceso de victimización del paciente sufridor, pues el lapso temporal que transcurre entre el inicio de las actuaciones pertinentes y la finalización del procedimiento se prolonga de manera excesiva. Esta circunstancia se debe, fundamentalmente, a los siguientes motivos: los diferentes arquetipos normativos que presentan las ordenanzas reguladoras de ruido; la desigualdad geográfica de los valores límites de emisión; la heterogénea distribución de la competencia jurisdiccional en unos casos, o su indeterminación en otros; la disparidad de criterios acerca de cómo ejercer la función legislativa municipal –debida principalmente a la mayor o menor influencia que ejercen los sectores turístico y empresarial, así como a la capacidad de presión por parte de las instituciones civiles y las asociaciones vecinales en los distintos núcleos de población–; o los términos físico-matemáticos que, por las características y circunstancias físicas del sonido, colman de incomprensibilidad el correcto empleo de las normas formuladas.

**DUODÉCIMA.** La disciplina de la *Green Criminology* está logrando, a pesar de su corta existencia, un cierto grado de soberanía y emancipación respecto de la Criminología tradicional. La oferta que presenta en torno al crimen medioambiental es de índole amplio y variado; se extiende desde aquellas cuestiones conectadas a la vida urbana, conservación de áreas silvestres, nuevas tecnologías, destrucción y degradación de los recursos naturales, daños causados por el calentamiento global y el cambio climático, criminalidad corporativa y su impacto en el medio ambiente, delitos alimentarios, deforestación ilegal, abuso animal y derechos de los animales, comercio ilegal de especies en peligro de extinción, vulneración de los Derechos Humanos a través de su conexión con el medio ambiente, pasando por el análisis de las formas de aplicación de la ley y regulación de las normas pertinentes de prevención y sanción por incumplimiento. Por otra parte, al igual que para su hermana mayor, el interés por las víctimas que producen todo este elenco de cuestiones enunciadas, forma parte de su repertorio, con la denominación específica de *Green Victimology*. Su incipiente trayectoria descuida, sin embargo, el tratamiento de la emisión de ruidos. Este es el motivo fundamental que nos anima a abordar la necesidad de su inclusión. Nos sirven de apoyo, con esta finalidad, dos razonamientos. Por una parte, el importante rol que ejercen las personas jurídicas, actualmente desarrollado por la nueva regulación de su responsabilidad criminal en nuestro ordenamiento penal. Por otra, los índices de victimización *in crescendo* por emisión de ruidos, que generalmente viajan asociados a aquellas conductas consideradas lesivas contra determinados derechos humanos consagrados, como el derecho a la salud, a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio, y por supuesto el derecho a un medio ambiente adecuado.

**DECIMOTERCERA.** Tanto el logro de una determinada proporción de silencio como de ruido representan derechos cívicos que deben articularse en el espacio de la ciudad, intentando al menos una aproximación que permita establecer una igualdad de condiciones, capaz de establecer pautas de comportamiento por parte de los ciudadanos para el libre ejercicio y disfrute de los mismos. Por otra parte, no debemos desestimar ni subestimar que la búsqueda inevitable de “ruido” por determinados grupos sociales, como los jóvenes –y no tan jóvenes–, persigue experimentar la catarsis que éste produce, pues sin duda es uno de los mecanismos que facilita el proceso de socialización. De ahí que asignemos al ruido un espacio común y a la vez ambivalente en la interpretación del Derecho a la ciudad y el Derecho en la ciudad. Destacamos la

problemática que rodea al establecimiento de determinados patrones normativos / legislativos, que sean aptos y admisibles para el concepto global de ciudad, al tiempo que sugerimos la magnífica propuesta que brinda el fundamento de la reordenación urbana en el modelo de eco-ciudad para la admisión y difusión de la convivencia ciudadana, en torno a la teoría de los actos cotidianos y su repercusión en los daños “ordinarios” medioambientales, pues juzgamos que, de manera acentuada, posee una proyección muy marcada en las conductas asociadas a la emisión de ruidos –por ejemplo, en cuanto a las prioridades de uso del suelo, mejor integración del transporte público y privado, edificación de viviendas, zonas de ocio, etc.–. Ésta es una de las dimensiones que debe quedar, en principio, fuera del Derecho penal más tradicional; por ello, la teoría de la *Green Cultural Criminology* puede cumplir una función determinante en el estudio del fenómeno del ruido urbano provocado por las pautas de comportamiento humano, así como su transformación. La criminología crítica de los últimos años se interesa por la criminología verde, cuyo epicentro tiende al análisis de los daños perpetrados contra el medio ambiente; la criminología cultural, por su parte se ajusta al examen del rol que ejercen tanto los medios de comunicación como el consumo en la sociedad moderna tardía o la vida social contemporánea, así como en el fenómeno criminal (delincuencia, desviación, y control social). Básicamente formulan diversos flujos de análisis criminológico en torno a cuestiones conectadas con el consumo, el daño ambiental, el derroche, y el activismo ambiental, y todo ello acoge la multiplicidad de conexiones que ostentan las emociones en la comisión del delito. La vertiente de la *Cultural Criminology* explora el terreno común entre las prácticas culturales y penales en la vida social contemporánea, es decir, entre la conducta colectiva organizada en torno a las imágenes, el estilo, y el significado simbólico que tales conductas ostentan, a las que las autoridades legales y políticas otorgan una concreta clasificación criminal. En suma, una oportuna intervención por parte de otros mecanismos diferentes al Derecho penal y su sistema sancionador, por ejemplo a través de la incorporación de medidas innovadoras de carácter social o, en todo caso, filtradas a través del Derecho administrativo sancionador, proyectaría un grado mayor de sensibilización de aquellos grupos o ciudadanos individuales que atentan contra los derechos de sus congéneres, incentivaría la modificación de sus patrones de conducta, sin que ello sea incompatible con la posibilidad de que continúen ejerciendo su derecho de reunión pacífica y ocio compartido en la vía pública.

**DECIMOCUARTA.** Las actividades y flujos comerciales en los que la multiplicidad de administraciones públicas resultan implicadas, bien por su exclusiva competencia material, o bien por la atribución de poderes que detentan en fases diferenciadas; autorización previa, procesos de control, fiscalización y legalidad, constituyen la parte más relevante y controvertida de la emisión de ruidos considerados no deseados, perturbadores, o dañinos -tráfico rodado y marítimo, servicios públicos, fomento de actividades lúdico/recreativas, o culturales-. Así, resultó de gran interés comprobar, a través del estudio de caso realizado en la ciudad de Hellín (Albacete), a través de múltiples mediciones que siguen una morfología similar a la diseñada para la elaboración de mapas de ruido que, incluso en una semana de festejos cuya motivación de convocatoria primordial es el ruido de los tambores, éste interfiere tan sólo transitoria y moderadamente en los valores alcanzados en condiciones de normalidad, es decir, el panorama de sonoridad que sufren sus ciudadanos de manera habitual supera los estándares señalados como máximos en la correspondiente normativa aplicable –la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente, de 13 de mayo de 1991–, en las respectivas franjas temporales diurna, vespertina y nocturna, por ejemplo a causa del tráfico rodado, o el toque de campanas del reloj de la parroquia principal.

**DECIMOQUINTA.** Localizamos otra luxación manifiesta en la inseguridad jurídica que origina la multiplicación de normativa, caracterizada por su marcada heterogeneidad, en relación a las Ordenanzas de ruido existentes en la mayoría de núcleos de población que ostentan suficiente capacidad normativa. Desde el punto de vista del Derecho penal, este haz de leyes municipales, aptas para desplegar la incoación de procedimientos penales no toma en consideración el concepto de “gravedad”, que en todo caso queda al prudente arbitrio de jueces y tribunales. Los criterios para dilucidar si una emisión/es de ruido concreta/as es de carácter leve, grave o muy grave, no se adaptan a la susceptibilidad propia de la materia, pues los rangos límite máximos y mínimos de decibelios no soportan de forma adecuada la consideración de molestia o daño que experimenta el sujeto receptor. Por si ello no bastara, los órganos judiciales suelen exigir un modelo probatorio que no sólo se basa en la prueba física del nivel de ruidos reflejada en la correspondiente acta policial, sino que también relaciona la emisión de ruidos con su carácter más o menos habitual o reiterado. Significa, ni más ni menos, que un ruido aislado que supere de manera desmesurada los índices establecidos en la normativa, nunca podrá ser objeto de

calificación como sub-tipo de los comprendidos en el art. 325 CP; en todo caso, dará lugar a un delito de lesiones, siempre y cuando exista un daño físico o psíquico constatable.

**DECIMOSEXTA.** La calificación de este tipo de conductas como delito de lesiones, o de coacciones *-lege lata-* ha encontrado acomodo en algunas resoluciones judiciales españolas. No descartamos el beneficio que estas interpretaciones pueden reportar en razón de la aportación de prueba suficiente y válida, así como en la simplificación y minoración temporal del procedimiento penal y su fallo. Ahora bien, ello comporta la desvinculación íntegra de la materia con la protección del medio ambiente, por lo que desestimamos de plano una aplicación generalizada de este criterio jurisprudencial. Quizás debido a las imperfecciones del sistema normativo en el que se sitúa la emisión de ruidos, así como a su naturaleza técnica, que obstaculiza una valoración precisa por parte de los profesionales del Derecho que intervienen en el trámite, se ha producido el dictado de varias sentencias penales en este sentido. Si bien es cierto que hasta la fecha han resuelto las controversias suscitadas, sobre todo en contextos domiciliarios y de vecindad, este giro jurisprudencial aísla definitivamente lo proclamado por el primer apartado del tipo básico del delito ecológico, apartando por completo el objetivo y la finalidad que cimienta su originalidad e implantación en el Derecho penal español.

**DECIMOSÉPTIMA.** Consideramos inaplazable tratar de eludir el recurso al indulto penal, que como intenta demostrar este trabajo de investigación, ha resultado una vía utilizada por los jueces y tribunales de forma reiterada, con el encomiable propósito de evitar una férrea imposición de penas privativas de libertad cuando superan los dos años de duración, labor a la que por otra parte, están obligados por el sometimiento expreso en cuanto a la aplicación de las leyes vigentes. Manifiestamente simbólica pues, resulta la solución de acudir a penas de prisión tan contundentes si son personas físicas los sujetos activos de un delito de emisión de ruidos.

**DECIMOCTAVA.** La irrupción en 2010 de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro ordenamiento penal, designa una nueva categoría de sujeto activo en los delitos relativos al medio ambiente, desconocida en nuestra tradición jurídica. En principio, la decisión merece una valoración positiva por razones político-criminales, pues el universo empresarial es mayoritariamente dinámico en la



producción de daños ambientales a través de la multiplicidad de sectores implicados; industriales o productivos, de explotación, de gestión, de administración, etc. La única salvedad que apuntamos aquí, aparte de algunas otras mencionadas con carácter general en el epígrafe correspondiente, es la inapropiada repercusión en destinatarios de la norma específicos. En efecto, las empresas de carácter unipersonal, en este caso debido a la fácil vulneración del principio *ne bis in idem* y a la diferencia penológica entre persona física y jurídica, o aquellas entidades mercantiles de tamaño reducido, en cuyo caso la implantación de un modelo de cumplimiento normativo -*Corporate Compliance*-, única posibilidad de acogerse al sistema de atenuantes específicas, será inasequible por razones técnicas y financieras –no olvidemos que ambas categorías alcanzan un porcentaje elevado en el sector hostelero y turístico, que por otra parte aglutina la mayor proporción de comisión del delito ecológico en la modalidad de ruido—. De igual modo, la figura del indulto como causa de extinción de la responsabilidad criminal representa otra desigualdad entre persona física y jurídica, en relación a los efectos que produce una sentencia penal de signo condenatorio.

**DECIMONOVENA.** La Criminología y el Derecho Penal deben caminar por sendas adyacentes, se necesitan recíprocamente. A lo que añadimos que la primera de dichas disciplinas requiere del empirismo propio de la ciencias en toda su extensión (aplicando todos los avances y conocimientos contrastados) para poder así ofrecer, si no una respuesta absoluta, al menos ciertas aproximaciones que nos permitan entender de la manera más integral posible el crimen, y con ello interactuar en los procesos delincuenciales. La doctrina penal ha prestado una especial dedicación al estudio de la figura del “ruido” como delito contra el medio ambiente desde su inclusión en el Código Penal de 1995. No obstante, la perspectiva criminológica de la materia no ha cosechado el mismo interés, sobre todo desde el punto de vista del magnífico elenco de comportamientos inusuales que determinados niveles o reiteración de ruidos son capaces de desencadenar en sujetos que, o bien padecen algún tipo de trastorno psiquiátrico previo, o bien sufren alteraciones en sus ciclos de sueño y vigilia. A ello responde el análisis de las estructuras de comportamientos criminales desencadenados por este tipo de perturbaciones. Así, desde el plano de la neurociencia se ha constatado que existen determinadas conductas “aberrantes o anómalas” asociadas a las inmisiones ruidosas. Por lo tanto, cabe plantear la cuestión de una eventual modificación de la culpabilidad en aquellos sujetos activos que cometan un ilícito penal, precisamente

como réplica -consciente o inconsciente- al influjo producido por el ruido. Este factor podría operar a la perfección como una circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal (eximente incompleta o atenuante), o bien exonerar de manera total al infractor secundario (eximente completa), esto es, a la víctima primaria convertida en agresor, en aquellos casos en que se demuestre la existencia de una relación de causalidad entre el ataque súbito o imprevisto, y los ruidos sufridos previamente, que a su vez dará sustento a una prueba que cumpla todos los requisitos de validez.

**VIGÉSIMA.** Planteamos, de *lege ferenda*, la adopción de un modelo normativo sustitutivo que se basa en una serie de preceptos diferenciados por razón de la materia, debido a la profunda diversidad de conductas, medios, efectos y evidencias en cuanto a la detección de riesgos y los resultados lesivos para el medio ambiente. Es sintomático, por ejemplo, que el vigente artículo 326 CP dedique su extensa redacción a la temática de los residuos de forma autónoma, coyuntura simultánea con la creación del tipo a pesar de las reformas del texto llevadas a cabo, que si bien pronosticaba una tendencia de ramificación en relación a las distintas clases de contaminación medioambiental, finalmente no se materializó. Así, la tipificación *ex novo* de un articulado específicamente dedicado al ruido, pero integrado en el Capítulo dedicado a los delitos medioambientales, proporcionaría la independencia necesaria para abordar las siguientes cuestiones: una reducción de pena del tipo básico, con la finalidad de no menoscabar el principio de proporcionalidad; una moderna articulación de la emisión de ruidos que permita una efectiva aplicación a otras esferas materiales –flora y fauna–, con la consiguiente remisión normativa a la desarrollada a través de otros parámetros físicos con capacidad real y praxis técnica; la independencia del precepto que regula la afectación a la salud humana, que abandonaría el carácter actual de agravante del tipo básico vigente (art. 325.2 CP) y adoptaría la fórmula de precepto autónomo. En suma, este modelo de tipificación sería viable tanto por su inserción en el Código Penal, como a través de una Ley General de Medio Ambiente o un Código medioambiental, tal y como se prevé en otros ordenamientos jurídicos como el francés o el italiano.



## CONCLUSIONS

**FIRST.** The relationship between man and the environment has been of continuous vital importance throughout history, even in times preceding the early stages of what we consider the urban life of civilizations. Indisputably this was exclusively for survival reasons –extreme weather phenomena, threats from the numerous dangerous species that form part of the animal kingdom, awareness of the vast implications in taking advantage of different phases and seasons to harvest crops when agriculture was discovered, hunting and fishing, and numerous other examples. Subsequently, mythological factors of a secular nature interfered in this previous relationship, and in turn, ethics, law, science and empiricism became integrated. Thus, environmental issues today have risen to global prominence with the involvement of the majority of sectors that make up contemporary society –economic, cultural, social, fiscal, legal, scientific, and philosophical, *inter alia*. Despite all these areas, noise and protection from its impacts have not been considered part of environmental issues. Noise levels present in daily life, have not exceeded the necessary levels that lead to massive changes in the physiological state, physical or mental, of the inhabitants of major cities in various countries. Although, substantially, this factor does not imply an exorbitant variation with respects to what our most distant ancestors experienced, as is reflected in the contents of the preliminary sections of this paper. Moreover, noise can even be considered prestigious, virtually integrated into the evolutionary process. From an anthropological and biological point of view it has played a prominent role in the framework of warning systems. It is necessary in developing fast responses in behaviour towards imminent dangers, such as sudden attacks by other species or escaping from an unforeseen event. It stands at the origin of the progressive development and perfecting of the human auditory organ.

**SECOND.** Noise has limited spatial conditions encompassing a relatively narrow radius. Therefore, it can be clearly deduced that it does not possess the same ability to spread that characterizes other forms of pollution, such as air, water, aquifer, or soil pollution caused by solid and chemical waste, among other archetypes, depending on which nomenclature is considered from the many that exist. This aspect gives noise emission a notably distinctive feature, it provides it with an antithetical

status when compared to other sources of pollution. However, it is not contradictory to claim that the proposal for a more uniform approach to regulation at a national, European and international level is favourable, credible, enforceable, and necessary. The main argument is based on the holistic nature that has been achieved, we refer to its global character from a generic perspective regarding the extensive, while geographically dispersed, number of those affected, and not from the angle of the transmission capacity of the sound emitting source, which is considerably diminished by comparison. In short, from this we can regard the expression ‘noise pollution’ as a decidedly euphemistic defining term, and we opt instead for the locution ‘noise emission’ to refer to noises that reach the threshold of irritation, disturbance or harm. This is without devaluing the correct definition of what is meant by a ‘pollutant phenomenon’, that is, any event that detrimentally alters the purity or the normal condition of any object or medium by chemical or physical agents, included under the primary meaning of the verb ‘pollute’<sup>1051</sup>, stated by the 23<sup>rd</sup> edition of the Dictionary of the Royal Spanish Academy, published in October 2014.

**THIRD.** Another disparity that characterizes noise as an unusual form of environmental pollution is its pre-eminently subjective nature, without underestimating certain objective components, since all things considered it is a form of energy. Correspondingly, sound is a physical phenomenon and therefore its space and time coordinates can be measured with rigorous accuracy, including the magnitude, resonance, space, pitch, intensity, the physiology of hearing, and the transmission of sound to the brain. However, the perception of sound is selective and furthermore it is processed simultaneously with visual sensations, factors that definitively separate this subject from other structures and models of pollution. That is, the concentration of particles of sulphur dioxide (SO<sub>2</sub>); nitrogen dioxide (NO<sub>2</sub>); hydrogen sulphide (H<sub>2</sub>S); carbon monoxide (CO); lead (Pb), to name some of the most significant contaminants in the atmosphere, as this is the natural environment equivalent to the enduring of noise emission, that may reach a certain level on a daily, monthly, percentage, etc. basis. However, the finite nature of noise runs out at the precise moment the emission is terminated. That does not necessarily imply a reduction or depletion of natural resources that can lead to their complete disappearance or a deterioration of quality

---

<sup>1051</sup> ‘Contaminar’ in the original Spanish.

conditions necessary for the survival of living beings. Nor does it produce medium or long term alterations to the environment; unlike forest fires, floods, gases released into the atmosphere, soil erosion or changes in colour, smell and taste to aquifer channels, to mention just a few examples.

**FOURTH.** In spite of what has been mentioned previously, noise emission does maintain a close relationship with what is known as odour, light and landscape *pollution*. Therefore, we believe that its regulation must predominate, in some form, this trio of environmental agents, whose regulation and control is currently entirely outside the extensive remit of ecological criminal Law. Indeed, in public law these specialties exclusively constitute allocated subsections of administrative Law, but the major paradox is easily detected. In the course of urban life, in all scopes, sections and contexts conceivable: work, leisure, the use of various public services, tourism, coexistence of citizens, artificial light and landscape; we must also consider the landscape of urban settings, there is a convergence with the context of sound itself. All this leads us to question why such strict and severe criminal punishment is considered necessary for noise related conduct and not any of the others. Scientific findings show that at least in the case of excess luminescence, damages can be caused to various environmental sectors. The length of prison sentence for noise related offenses that is included as basic article 325 CP is not a trivial matter, it is comparable to that established for crimes such as manslaughter by gross negligence of article 142.1 CP. On the other hand, in strict terms of health, the proliferation of bad odours by inadequate or poor street cleaning or by the accumulation of urban waste associated with leisure activities, maintains a considerable relation of proportionality with the most extreme focal points of noise, for example in areas which have a high density of visitors or which have an established commercial network dedicated mainly to leisure and recreational functions.

**FIFTH.** The link between noise and the right to privacy is practically indisputable, indeed this is evidenced by the consolidated jurisprudence issued by the European Court of Human Rights. In effect, article 8 of the ECHR proclaims that everyone has rights regarding their private and family life. The various court systems of our country have managed to establish a new and unorthodox protection against noise. This has gone by almost unnoticed due to its 1994 doctrine in relation to the

Spanish State. It has slowly moved away from the idea that the only determinant right to a suitable environment is that which is proclaimed by article 45 CE of the Constitution. It includes as key sections, the right to personal privacy and the right to the protection of health (article 18.1 and 43, respectively). Also, although of less importance, among others, the right to dignity and free development of personality (article 10.1), the right to life and to physical and moral integrity (article 15), the right to inviolability of the home (article 18.2), the right to freely choose place of residence (article 19), the right to enjoy decent and adequate housing (article 47), all of which appear in our constitutional text. However, until very recently, the ECHR has repeatedly called our country and our courts to attention. We presume that this circumstance is yet to come to an end because it remains perfectly clear that many public administrations have dropped this matter. Furthermore, these institutions are outside the scope of application due to their stated exclusion in article 31 *bis quinquies*, paragraph 1 of the Penal Code: *they shall not apply to the State, or to territorial and institutional public administrations*. Therefore the full implementation of acknowledgment of pecuniary responsibility in the contested-administrative provincial and national sphere is still highly complex. Appeals against the rulings of the European Court remain absolutely valid. Indeed, we could go as far to say that they will be of even greater legal significance in the near future. From only a brief sociological observation, we can conclude that the fierceness of invasive noise from cities in Spain, will lead to an increase in complaints and litigation furore spurred on further by the number of existing civil associations, whose principal collective goal is to achieve a reduction of noise emissions in public spaces that lead to noise disruptions and invasions in private settings.

**SIXTH.** The transcendental importance that the notion of protected legal right possesses from central criminal Law creates a necessary reflection that favours the overcoming of the concept of protected legal rights associated to expanded or restricted range categories, due to their dependency to the varying degree of incorporation of natural forces, as well as the generic or specific projection of behaviour that interferes with their safeguarding. Therefore, the adoption of a protected legal right model exclusive to each pollutant category is proposed, which accompanies the motion to articulate different types in accordance with the protected legal right that each one represents. Precisely for this reason it shall be subject to the interests of environmental

criminal Law. The consistency that is needed by increasingly fragmented environmental law does not only correspond to reporting that existing regulations on noise do not work, whether in part or in whole. It is also essential to attach new proposals that are able to seamlessly fit between different areas that make up the framework as a whole, without causing rash interruptions. Given the relatively recent addition of noise emission to the system of environmental criminal protection, we choose to abandon its over application in article 325 CP. This practice has brought about a number of criminal convictions which lead us to the belief that it is appropriate to rethink this particular matter in its overall specificity, particularly given that it has become one of the most prominent types of environmental crime in Spain. Depending on whether the disparity between the vectors involved is still significant (in terms of pollution, victims, and severity of penalty), while experiencing a very significant increase, which could be described as harmful. Indeed, the current article 325 CP, in both its sections, presents an inadequate structure for the grading of criminal behaviour related to noise in the ecosystem, which links behaviour to the risk of serious harm to people, at least in practice. It is no less true that the first paragraph of article 325 CP fails to distinguish between behaviours which directly or indirectly cause or make noises in the atmosphere, ground, underground or waters (ground, underground or maritime, including the sea), even having an impact on cross-border areas that, by themselves or jointly with other factors, cause or may cause substantial damage to the quality of the air, soil, water, animals or plants, except by way of penalty. Taking this for granted, it will be materially impossible in most cases, for both procedural and substantive reasons. Consequently, we believe that an alternative method is provided by administrative Law sanctioning, due to its context and capabilities which are more suited to the imposition of sanctions, even without resorting to the deprivation of liberty, such as a fine or other penalties that restrict rights. Criminal proceedings are more abrupt and also undermine the idiosyncrasies of this branch of Law, along with the gradual abandonment of the principles of minimum intervention and *ultima ratio*.

**SEVENTH.** The eco-centric doctrine of environmental protection, compared to that which is traditionally represented by anthropocentrism, adds a new twist to both bio-centric and holistic environmental considerations. Thus, recent constitutions, such as those promulgated by the Republics of Ecuador and Bolivia, argue that Nature, as a unitary entity, has similar rights to those which the human species has awarded to



itself, given its link to natural resources and other living beings. Its ontological foundation links to other ethical and holistic premises for nature, originating in the West. Prior to the issuance of these constitutional provisions, they were proclaimed through environmental philosophies, such as that of Paul Taylor who shaped a controversial theory into one of inherent value. His aspiration is to give legal protection to every single component of the ecosystem, supporting this with the ethical argument for respecting Nature. It symbolizes an ethical life-centred system with an equivalent structural symmetry to the theory of human ethics. It maintains that the balance of Nature is not a moral norm, but it is rather the inherent value of each individual organism that determines our moral relations with them. Moving these premises to a factual level can be misleading, or deeply naive, but we must not overlook the importance of philosophical regulation, as it holds specific theory of protected legal rights for the environment, given the added difficulty that is inherent with the correct and concrete establishment of scientific doctrine.

**EIGHTH.** Concerning the specificity of anthropogenic sources of noise, natural phenomena also produce noise, although they are known as natural sounds, which may be equally or more disturbing, powerful and virulent than artificial noise. For example: snow storms, hurricanes, thunderstorms, volcanoes, waterfalls, and waves, among others. If we carry out a technical evaluation using the standardized system for the logarithmic scale of decibels, we would achieve a contradictory outcome, because all of the aforementioned phenomena widely exceed the thresholds set by various different corrective noise standards, but obviously only those caused or produced directly or indirectly by man will be considered as objectionable. Apart from confirming the prevalence of the human species in this subject area, it helps us understand why the subjectivity of perception exponentially exceeds that of other environmental pollution prototypes. However, because of the anthropogenic nature of multiple noise sources that damage the various elements of the ecosystem, humans bear a higher duty towards other living beings, not only because they share a circular and cyclical interconnected system, but also due to their intellectual supremacy, which requires them to develop ethics that are committed to respecting other life forms. Therefore, we cannot defend the mere existence of rights, we must also aim for the inclusion of the other part of this inseparable pair. By this, we mean the assumption of

duties that go beyond self-satisfaction in a personal capacity, or complacency which encompasses mankind in a universal capacity.

**NINTH.** The impact and consequences that anthropogenic noise causes on the flora and fauna, and thus on biodiversity, is currently a pending issue in both public and private international environmental Law. Any reference to municipal law has been deliberately omitted due to the weak potential of such standards if governed by the respective state legal systems. Such entities are limited by their permeability, simply due to the agreements and pacts between countries that share cross-border areas. Transnational environmental NGOs do not deal extensively with the intention to legislate on this subject either. We know that high levels of noise distort the visualization and perception of any landscape, as such they also alter the biotic / biological conditions of the subsistence and development of any species native to the area in which this substantial mutation occurs, i.e. the loss of biodiversity and the fragmentation of habitats. This therefore shows the important link between them. It is also interesting to note that there exists no agreed regulation on an international level relating to maritime traffic and the various activities that take place in the oceans. This is in spite of insightful and irrefutable scientific evidence collected via numerous biological studies. Hereupon, it should be clarified that noise, in relation to what has been described, conveys its physical characteristics on to the terrestrial and atmospheric environment, in other words, the argument of its inability to propagate is suppressed. This is because sound can travel hundreds and even thousands of kilometres in an aquatic environment, while the sense of sight only reaches several tens of meters. Anthropogenic noise damages the ecosystem (animals and plants), but the standards in assessing the amount of decibels that cause damage to the flora and fauna is not adequately defined. This is due to infrasound and ultrasound (which have a frequency of vibrations that is lower or higher, respectively, to the perceptible limits of the human ear). This is not to say that their effects cannot be highly pernicious. Although there have been some studies into the impact of aquatic and sub-aquatic noise on various marine species, those carried out on oceanic ecosystems are almost non-existent. Similarly, the argument that the oceans are naturally noisy environments (waves, rain, lightning over water, etc.), and therefore that marine wildlife is evolutionarily adapted to noise is not correct. This is because their adaptations only

occur in response to natural sources of noise, which excludes those of an artificial nature.

**TENTH.** One of the key features of acts involving assault, attack, or damage to the protected legal right of the environment is the figure of accumulation. Undoubtedly, this represents the core foundation upon which the punishment of polluting actions is based, both in the field of administrative Law sanctions and criminal Law. If, on an individually level, everyone behaves the same way, in principle no singular behaviour would be harmful, but rather would acquire a global or universal nature. Doctrine and jurisprudence are unanimous in this regard. However, noise does not share these characteristics, even taking into account the extensive acceptance the term ‘noise pollution’ continues to receive to this day. In our opinion, this remains a paraphrase that does not resolve the necessity to give this matter a clear, precise and determining definition. Although it is understood that ‘noise’ is any unwanted sound, it does not prevent us from asserting that its effects pollute the natural environment, understood in the most precise environmental meaning of the term. Moreover, as noted above, the cross-border aspect of many current environmental problems creates a void that cannot be filled when we analyse the unique factors accompanying this exceptional matter. In addition, the abstraction that considers the danger which is generally entailed in environmental crime, which otherwise is the threshold of damage, is not representative on the issue of noise, as the moment in which a living being suffers its effects, immediately and inevitably, we will reach a result, which will only be judged as punishable or not punishable *a posteriori*. Therefore, conduct resulting in undue risk will generate, in any case, either an administrative offense or a crime. In the latter case, however, it will always be as a result from real danger rather than potential danger, if we follow the currently accepted common doctrinal divergence.

**ELEVENTH.** Similarly, we find further difficulty regarding the provision of evidence by liable subjects in the current understanding of noise emission, both in the case of hypothetical qualification and administrative violation or offense. There is a requirement to use complex technical analysis as proof and evidence obtained through various sources, along with the demand for a certain assiduity or perseverance of the noise emissions in question. This contradicts the right to obtain the effective tutelage of judges and courts in exercising their legitimate rights and interests proclaimed by

article 24.1 CE. Indeed, the diversity of environmental policy in our country does not help the homogenization of well-structured standards. It contributes to further suffering of the victims, because the time period from the beginning of the relevant proceedings and their completion can become excessively prolonged. This situation is fundamentally down to the following reasons: the different regulatory archetypes that form regulation on noise orders; the geographical inequality of emission limit values; the heterogeneous distribution of jurisdiction in some cases, or the indetermination in others; the difference of opinion on how to exercise municipal legislative functions (due mainly to a greater or lesser influence of tourism and business sectors, as well as the capabilities of civil institutions and neighbourhood associations in different populated zones); or the physical-mathematical terms, regarding the nature and circumstances of physical sound, completing the incomprehensibility of the correct use of the developed standards.

**TWELFTH.** Despite its short existence, the discipline of Green Criminology has achieved a degree of sovereignty and liberty from traditional Criminology. Environmental crime covers offenses of a wide and varied nature. It extends from issues related to urban life, preservation of rural areas, new technologies, destruction and degradation of natural resources, damage caused by global warming and climate change, corporate crime and its impact on the environment, food crime, illegal deforestation, animal abuse and animal rights, illegal trade of endangered species, violation of human rights through their connection with the environment, through to an analysis of the forms of law enforcement and regulation of the relevant rules of prevention and punishment for noncompliance. Moreover, as is the case for its older relation, the interest for the victims produces the series of questions previously set out. It forms part of a wider repertoire, known more specifically as Green Victimology. However, the fledgling trajectory of this discipline has so far disregarded the treatment of noise emission. This is the main reason that encourages us to address the need for its inclusion. To this end, we are supported by two rationales. Firstly, the important roll held by legal entities currently developed by the new regulation of their responsibility to criminal matters in our penal system. Secondly, the rate of victimization as a result of noise emission is *in crescendo*. This is generally associated with behaviour considered harmful to certain recognized human rights, such as the right to health, to

privacy, to the inviolability of the home, and of course, to the right to an adequate environment.

**THIRTEENTH.** Achieving a certain proportion of silence, or equally of noise, represents civil rights that must be articulated in the urban zones of cities. Thus attempting at least one approach to establish an equal footing, one that is able to establish behaviour patterns on behalf of citizens so as they can freely exercise and enjoy those rights. Moreover, we should not dismiss or underestimate the inevitable pursuit of ‘noise’ by certain social groups, such as young people (and even not so young people), or examining the catharsis produced by this, it is certainly one mechanism that facilitates the socialization process. Hence, noise can be assigned a common space whilst also ambivalent in the interpretation of city Law and Law within the city (according to the right to the city and the right in the city respectively). We highlight the issues surrounding the establishment of certain regulatory / legislative standards that are suitable and acceptable to the overall concept of the city. We also suggest wide ranging proposal that provides the foundation for urban renewal in the eco-city model for the admission and dissemination of civic coexistence. In turn, we strongly consider the theory of everyday actions and their impact on the ‘ordinary’ damage to the environment is firmly linked to noise emissions, for example in terms of priorities for the use of land, better integration of public and private transportation, housing construction, leisure areas, etc. This is one dimension that, in principle, should remain outside more traditional criminal Law. Therefore, the theory of Green Cultural Criminology can play a decisive role in the study and alteration of the phenomenon of urban noise caused by human behaviour patterns. In recent years, Critical Criminology has become increasingly interested in Green Criminology, whose epicentre focuses mainly on damage against the environment. Cultural Criminology, meanwhile, examines the role of both the media and consumption in recent modern society and contemporary social life, as well as in the criminal phenomenon (crime, delinquency and social control). Essentially, they formulated various branches of criminological analysis on issues connected with consumption, environmental damage, waste, and environmental activism. All of this brings with it a multiplicity of connections that display the emotions of committing crime. Cultural Criminology explores the common ground between cultural and criminal practices in contemporary social life, in other words, the collective behaviour organized around the image, style, and symbolic

meaning that such behaviours convey, those to which legal and political authorities assign specific criminal classification. In short, a timely intervention by mechanisms other than criminal Law and its penal system would project a greater degree of awareness onto those groups or individuals who violate the rights of their fellow citizens. These mechanisms could include the introduction of innovative social measures or sanctions filtered through administrative Law. This would also encourage the modification of behaviour patterns, whilst also being compatible with allowing citizens to continue exercising their right to peaceful gatherings and public leisure activities.

**FOURTEENTH.** The multitude of activities and trade flows involving public authorities are also included, be it due to their exclusive jurisdiction, or due to attributing powers they hold in different phases. The most important and controversial issues regarding unwanted, disturbing and damaging noise include: prior authorization, and processes of control, inspection and legality; such as: road and maritime traffic, public utilities, development of leisure, recreational or cultural activities. With this in mind, the case study of Hellín (a town in Albacete province) is of great interest. The study used various measurements with a morphology similar to those designed for mapping noise. Even during a week of traditional festivities, which primarily involved noises from processions of drums, the noise levels were only considered to interfere on a transient and moderate level, akin to the level reached under normal conditions, caused by traffic congestion or the ringing of the bells in the main parish, for example. This means that the noise routinely endured by citizens exceeds the highest level identified by the relevant applicable legislation, the General Environmental Protection Order of 13<sup>th</sup> May 1991, in the respective daytime, evening and night time categories.

**FIFTEENTH.** A further dislocation manifested in legal uncertainty that has resulted in the proliferation of regulation is characterized by its marked heterogeneity in relation to existing noise orders in most urban settlements that hold sufficient regulatory capacity. From the criminal Law perspective, this bundle of municipal laws, suitable for initiating criminal proceedings, does not consider the concept of ‘severity’, which is left to the discretion of the judges and the courts. The criteria for determining whether specific noise emission(s) is/are minor, serious or very serious, are not adapted to the susceptibility of the material itself, since the maximum and minimum decibel

limit ranges do not adequately support the consideration of disturbance or damage experienced by the recipient subject. In addition to this, the legal institutions usually require an evidentiary model that is not only based on physical evidence of noise reflected in corresponding police reports, but also on noise emissions associated with their habitual or repeated nature. This means, in no uncertain terms, that an isolated noise that disproportionately exceeds the rates set by the regulations can never be subject to sub-classification under article 325 CP. Such a situation will lead to the infliction of injury, as long as there is demonstrable physical or mental damage.

**SIXTEENTH.** The grading of this type of behaviour as infliction of injuries, or coercion, *lege lata*, can be found in some Spanish judicial decisions. We cannot ignore the benefit that these interpretations may bring in terms of the provision of adequate and valid evidence, as well as simplifying and speeding-up the criminal proceedings and adjudications. However, it entails an integral separation from environmental protection, for this reason we flatly reject the general application of this legal criterion. Several criminal convictions have been issued in this regard. Perhaps due to imperfections in the regulatory system in which noise emission is categorized. In addition, its technical nature hampers accurate evaluation by legal professionals involved in the procedure. It is true that to date some disagreements have been resolved after being raised, especially in the context of individual homes and neighbourhoods. Nonetheless, this jurisprudential shift definitively isolates what is proclaimed in the first paragraph of the basic article of ecological crime. This completely removes the objective and purpose that underlies its originality and implementation in Spanish criminal Law.

**SEVENTEENTH.** We believe that it is crucial to avoid resorting to criminal pardons which, as this research aims to demonstrate, have been repeatedly employed by judges and courts with the commendable objective of avoiding a strict enforcement of custodial sentences when they exceed a duration of two-years, a task that would otherwise be obliged by the express submission as to the application of existing laws. So the solution of handing out such harsh prison sentences to individuals who are active subjects of noise emission offenses is clearly symbolic.

**EIGHTEENTH.** The emergence in 2010 of criminal liability of legal entities in our penal system, specifies a new active subject category in crimes relating to the environment, previously unknown to our legal tradition. Primarily, this decision should be welcomed as a positive step for political-criminal reasons. The business sphere is the most active in production of environmental damage through its numerous sectors, such as: industry or production, operations, management, administration, etc. The only caveat that we highlight here, apart from some of the more general terms mentioned in corresponding sections, is the inappropriate repercussions on recipients of specific rules. In effect, the principle *ne bis in idem* is easily breached due to the penological difference between real and legal entities. Sole traders and small businesses are subject in this case to the implementation of a model of normative compliance, known as Corporate Compliance. The only possibility for joining this specific extenuating system, is largely unavailable for technical and financial reasons. It is worth noting that both categories reach their highest percentage in the hospitality and tourism sectors, which are responsible for committing the largest proportion of environmental crime relating to noise. Similarly, the use of pardons to remove criminal responsibility represents a further inequality between real and legal entities, in relation to the effects of a criminal conviction.

**NINETEENTH.** Criminology and Criminal Law must run parallel to one another as they are mutually dependent. Furthermore, the former of these disciplines requires its own scientific empiricism in its entirety (applying relevant progress and knowledge). With this it may offer, if not an absolute answer, at least certain approximations that allow us the most comprehensive understanding of crime possible, and thus allowing for amendments to criminal proceedings. Penal doctrine has paid close attention to the study of the concept of ‘noise’ as a crime against the environment since its inclusion in the Penal Code of 1995. However, the criminological perspective of the subject has not garnered as much interest, especially given the wide array of unusual behaviour that certain levels of noise or repeated noises are capable of triggering in subjects who either suffer from some type of prior psychiatric disorder or suffer alterations in their sleep-wake cycles. This is consistent with the analysis of criminal behaviour structures triggered by this type of disturbance. Neuroscience has found that there are certain ‘aberrant or abnormal’ behaviours associated with noise emission/absorption. Therefore, the question of an eventual modification of culpability



(conscious or unconscious) must be posed in response to the influx of noise endured by active subjects who have committed criminal offenses. This factor could operate perfectly as a modifying circumstance of criminal responsibility (in incomplete or mitigating defences) or to completely exonerate secondary offenders (in complete defences). By this we mean when the primary victim becomes the aggressor, in cases that prove the existence of a cause and effect link between sudden or unexpected attacks and the noise previously suffered, given that the evidence complies with validity requirements.

**TWENTIETH.** We propose, *de lege ferenda*, the adoption of a replacement normative model based on a number of different provisions in respect of this matter. This is because of the large variety of behaviour, means, effects and evidence regarding risk detection and the harmful effects on the environment. The current article 326 CP dedicated extensive sections addressing the issue of waste independently, simultaneously forming the creation of this issue in spite of the reforms undertaken by the text, which predicted ramifications in relation to the different types of environmental pollution. Ultimately, however, this section did not materialize, which is symptomatic of the problem. Thus, the classification of an *ex novo* article specifically dedicated to noise, but integrated into the Chapter on environmental crimes, would provide the necessary independence to address the following issues: a reduction of basic article penalties, so as not to undermine the principle of proportionality; a modern definition of noise emission to allow for the effective implementation of other material fields (fauna and flora), with the ensuing regulatory reference developed through other physical parameters with real capacity and technical praxis; the independence of the prescript that regulates the effect on human health, which would scrap the basic article currently in force (article 325.2 CP) which is of an aggravating nature and adopt the formula of autonomous provision. In sum, it would be viable to insert this classification model into the Penal Code, either as a General Law of the Environment or an Environmental Code, as is the case in other legal systems such as in France and Italy.

## EPÍLOGO

Es un buen motivo con el que cerrar este trabajo doctoral mencionar la bella y exquisita proclama que el Papa Francisco ha emitido en su Encíclica *Laudato si'* muy recientemente –con absoluta independencia respecto al dogma que encarna–.<sup>1052</sup> Se trata del último documento a nivel global sobre medio ambiente, sin consecuencias jurídicas, no obstante su trascendencia mundial es incuestionable. La profundidad de su reflexión, en el seno de una institución como la Iglesia católica, abanderada del estandarte del antropocentrismo puro desde su creación, es por tanto comparable al postulado que desde el ámbito científico, afirma con absoluta rotundidad la capital obra del hombre en la destrucción ecológica planetaria. Tanto el agotamiento de los recursos naturales como la devastación de los hábitats suceden a través de comportamientos singulares, grupales, organizados, o por último y no por ello menos desdeñable, por una enorme variedad de actuaciones empresariales. En suma, la categoría de la persona jurídica integra en un gran puzle al conjunto de personas individuales, pues la mayoría de los habitantes de la civilización contemporánea no contemplan el abandono o renuncia, si quiera una reducción de las comodidades diarias adquiridas en el transcurso de la evolución social y el desarrollo tecnológico postindustrial. Ventajas de las que disfrutamos, sin detenernos a replantearnos la obviedad que representa nuestra participación singular directa e indirecta en este flujo de actividades, para la efectiva y plena consecución de bienes y servicios, que además deseamos satisfacer en espacios temporales cada vez más cortos. Todas ellas son aspiraciones y metas que ejercen una presión desorbitante en términos de competitividad en una multiplicidad de sectores –agropecuario, transportes, turístico, económico, y un inabarcable etcétera–. Apenas en el intento de sintetizar con una consigna la enigmática situación a la que nos enfrentamos, en demasiadas ocasiones el progreso que perseguimos colisiona frontalmente con el complejo entramado biótico y ambiental que sustenta las leyes de la Naturaleza.

---

<sup>1052</sup> Carta Encíclica *Laudato si'*, del Santo Padre Francisco sobre el cuidado de la casa común, de 24 de mayo de 2015. Disponible en: [http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco\\_20150524\\_enciclica-laudato-si.html](http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html) (último acceso 12/07/2015).



## BIBLIOGRAFÍA

AA.VV. *Comentarios a la Ley del Ruido: Ley 37/2003, de 17 de noviembre*. Blanca Lozano Cutanda (coord.) Civitas. Cizur Menor (Navarra), 2004.

AA.VV. *Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015*. José L. González Cussac (dir.) Ángela Matallín Evangelio / Elena Górriz Royo (coords.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2015.

AA.VV. *Comentarios al Código Penal. Reforma LO 5/2010*. Mirentxu Corcoy Bidasolo / Santiago Mir Puig (dirs.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2011.

AA.VV. *Derecho, Globalización, Riesgo y Medio Ambiente*. Esteban Pérez Alonso / Estanislao Arana García et. al. (eds.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2012.

AA.VV. *Derechos Emergentes. Desarrollo y medio ambiente*. Jaume Saura Estapá / M<sup>a</sup> Eugenia Rodríguez Palop (eds.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2014.

AA.VV. *Diccionario de Derecho Ambiental*. Enrique Alonso García / Blanca Lozano Cutanda (dirs.) Iustel. Madrid, 2006.

AA.VV. *Diccionario de Sanciones Administrativas*. Blanca Lozano Cutanda (dir.) Iustel. Madrid, 2010.

AA.VV. *El acceso a la justicia de las víctimas de daños ambientales. Una perspectiva comparada*. Antoni Pigrau Solé (dir.) Paola Milenka Villavicencio Calzadilla (coord.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2015.

AA.VV. *Environmental Ethics* (2<sup>nd</sup> ed.) Michael Boylan (ed.) Wiley-Blackwell. Oxford, 2014.

AA.VV. *Estudios de Derecho ambiental. Libro Homenaje al profesor Josep Miquel Prats Canut*. Gonzalo Quintero Olivares / Fermín Morales Prats (coords.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2008.

AA.VV. *La Teoría del bien jurídico, ¿Fundamento de legitimación del Derecho penal o juego de abalorios dogmático?* Roland Hefendehl (ed.) Marcial Pons. Madrid, 2007.

AA.VV. *Libro Homenaje al profesor Luis Rodríguez Ramos*. Francisco Javier Álvarez García / Miguel Ángel Cobos de Linares / Pilar Gómez Pavón et. al. (coords.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2013.

AA.VV. *Los Derechos Fundamentales en el Derecho Penal Europeo*. Luis María Díez-Picazo / Adán Nieto Martín (dirs.) Civitas. Cizur Menor (Navarra), 2010.

AA.VV. *Pueblos indígenas, diversidad cultural y justicia ambiental. Un estudio de las nuevas constituciones de Ecuador y Bolivia*. Antoni Pigrau Solé (ed. lit.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2013.

AA.VV. *Routledge International Handbook of Green Criminology*. Nigel South / Avi Brisman (eds.) Routledge. London & New York, 2013.

AA.VV. *Tratado de Derecho ambiental*. Luis Ortega Álvarez / Consuelo Alonso García (dirs.) Rosario de Vicente Martínez (coord.). Tirant lo Blanch. Valencia, 2013.

AECHERLI, W. "Judicial and Legal Aspects of Noise Control". En *Noise Pollution: Effects and Control*. A. Lara Saenz / R.W.B. Stephens (eds.) John Wiley & Sons. Scientific Committee on Problems of the Environment (Scope 24) Great Britain, 1986, págs. 419-429.

ACIÉN ALMANSA, MANUEL. "La formación del tejido urbano en al-Andalus". En *La ciudad medieval: de la casa al tejido urbano*. Actas del primer Curso de Historia y Urbanismo Medieval. Jean Passini (coord.) Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenca, 2001, págs. 11-32.

ACOSTA, ALBERTO. *El Buen Vivir en el camino del post-desarrollo. Una lectura desde la Constitución de Montecristi*. Fundación Friedrich Ebert, FES-ILDIS. Policy Paper 9. Quito, octubre 2010.

ADAMS, MELVILLE S. / MCMANUS, FRANCIS. *Noise and noise law. A Practical Approach*. Chancery Law, Publishing Ltd. Chichester, 1994.

AGNEW, ROBERT. "The ordinary acts that contribute to ecocide. A criminological analysis". En *Routledge International Handbook of Green Criminology*. Nigel South / Avi Brisman (eds.) Routledge. New York, 2013, págs. 58-72.

AGUILERA RULL, ARIADNA / AZAGRA MALO, ALBERT. "Transposición de la Directiva 2004/35/CE, de 21 de abril, sobre responsabilidad medioambiental en Alemania y en España". En *Indret: Revista para el Análisis del Derecho*, núm. 3. Universidad Pompeu Fabra. Barcelona, julio 2007, págs. 1-15.

ALASTUEY DOBÓN, M<sup>a</sup> CARMEN. “Derecho penal: la emisión de ruidos como delito de contaminación ambiental”. En *Observatorio de Políticas Ambientales 2010*. Fernando López Ramón (coord.) Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2010, págs. 307-331.

- *El delito de contaminación ambiental (Artículo 325.1 del Código penal)*. Comares. Granada, 2004.
- “El ámbito de aplicación del artículo 329 CP: examen de sus conductas típicas”. En *Revista de Derecho Penal y Criminología*, 2<sup>a</sup> Época, núm. 9, año 2002, págs. 11-37.

ALCÁCER GUIRAO, RAFAEL. “La protección del futuro y los daños cumulativos”. *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 13 de mayo de 2002, págs. 1-30.

ALENZA GARCÍA, JOSÉ FRANCISCO. “Las estrategias jurídicas contra el ruido”. En *El derecho contra el ruido*. José Francisco Alenza García (dir.) Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2013, págs. 51-106.

ALGARRA PRATS, ESTHER. “Contaminación lumínica, intrusión lumínica y Derecho civil”. En *La responsabilidad civil y su problemática actual*. Juan Antonio Moreno Martínez (coord.) Dykinson. Madrid, 2007, págs. 1109-1123.

ALONSO ÁLAMO, MERCEDES. “Trama de la vida y protección penal del ambiente”. En *Un Derecho penal comprometido. Libro Homenaje al Prof. Dr. Gerardo Landrove Díaz*. Francisco Muñoz Conde et. al (dirs.) Miguel Ángel Núñez Paz (coord.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2011, págs. 47-92.

- “La aporía del Derecho penal del medio ambiente”. En *Estudios de Derecho Ambiental. Libro Homenaje al profesor Josep Miquel Prats Canut*. Gonzalo Quintero Olivares / Fermín Morales Prats (coords.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2008, págs. 21-40.

ALONSO GARCÍA, ENRIQUE. Voz “Concepto de medio ambiente como objeto del derecho: el ámbito del derecho ambiental”. *Diccionario de Derecho Ambiental*. Enrique Alonso García / Blanca Lozano Cutanda (dirs.) Iustel. Madrid, 2006, págs. 329-342.

- Voz “Derechos Humanos y Medio Ambiente”. En *Diccionario de Derecho Ambiental*. Enrique Alonso García / Blanca Lozano Cutanda (dirs.) Iustel. Madrid, 2006, págs. 483-502.
- Voz “Ética ambiental y Derecho”. En *Diccionario de Derecho Ambiental*. Enrique Alonso García / Blanca Lozano Cutanda (dirs.) Iustel. Madrid, 2006, págs. 629-640.

ALONSO GARCÍA, ENRIQUE / LOPERENA ROTA, DEMETRIO. Voz “Medio Ambiente Local”. En *Diccionario de Derecho Ambiental*. Enrique Alonso García / Blanca Lozano Cutanda (dirs.) Iustel. Madrid, 2006, págs. 803-826.

ALONSO GARCÍA, M<sup>a</sup> CONSUELO. “La contaminación acústica”. En *Tratado de Derecho Ambiental*. Luis Ortega Álvarez / Consuelo Alonso García (dirs.) Rosario de Vicente Martínez (coord.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2013, págs. 695-729.

- *El régimen jurídico de la contaminación atmosférica y acústica*. Marcial Pons. Madrid, 1995.

ALONSO IBÁÑEZ, M<sup>a</sup> ROSARIO. “De la política urbanística a la política urbana: los retos actuales del Derecho urbanístico”. En *Revista de Derecho urbanístico y medio ambiente*, núm. 277. Madrid, noviembre 2012, págs.13-27.

ALONSO MAS, MARÍA JOSÉ. “Arts. 25 a 28”. En *Comentarios a la Ley Básica de Régimen Local* (3<sup>a</sup> ed.) Tomo I. Manuel J. Domingo Zaballos (coord.) Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2013, págs. 410-546.

ALONSO MILLÁN, JESÚS / CASSINELO LORENTE, JOAQUÍN. “Turismo y sostenibilidad. Hacia un turismo más sostenible”. En *Turismo: Una visión global*. A. W. Aranda Hipólito / L. M. Delgado Estirado / J. M<sup>a</sup> de Juan Alonso (coords.) Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2010, págs. 1247-1357.

ALVARADO MARTÍNEZ, ISRAEL. “La problemática de las personas jurídicas en la tutela penal del ambiente”. En *La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Fortalezas, debilidades y perspectivas de cara al futuro*. Miguel Ontiveros Alonso (coord.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2014, págs. 11-52.

ÁLVAREZ MORENO, ANA / GALLEGO RODRÍGUEZ, PABLO / GARCÍA CABA, MIGUEL ET. AL. *Comentario a la Ley de Seguridad Privada*. Alberto Palomar Olmeda (dir.) Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2014.

ALZAGA VILLAAMIL, ÓSCAR. *Comentario sistemático a la CE de 1978* (1<sup>a</sup> ed.) Del Foro. Madrid, 1978.

ANDRESEN, MARTIN A. *Environmental Criminology. Evolution, Theory, and Practice*. Routledge. London & New York, 2014.

APARICIO WILHELM, MARCO. “El constitucionalismo de la crisis ecológica. Derechos y naturaleza en las constituciones de Ecuador y Bolivia”. En *Pueblos indígenas, diversidad cultural y justicia ambiental. Un estudio de las nuevas constituciones de Ecuador y Bolivia*. Antoni Pigrau Solé (ed. lit.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2013, págs. 459-524.

ARANA GARCÍA, ESTANISLAO / TORRES LÓPEZ, M<sup>a</sup> ASUNCIÓN. “Inspección y régimen sancionador”. En *Régimen jurídico del ruido. Una perspectiva integral y comparada*. Estanislao Arana García / M<sup>a</sup> Asunción Torres López (coords.) Comares. Granada, 2004, págs. 125-155.

ARANGUREN SÁNCHEZ, CARLOS. “Artículo 334”. En *Comentarios al Código Penal. Segunda época*. Manuel Cobo del Rosal (dir.) Tomo X, Vol. II, Libro II, Título XVI, de los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente (Artículos del 319 al 340). Centro de Estudios Superiores de Especialidades Jurídicas. Madrid, 2006, págs. 351-365.

ARCOS GONZÁLEZ, PEDRO / CASTRO DELGADO, RAFAEL / CUARTAS ÁLVAREZ, TATIANA. “Desastres medioambientales en España e impacto sobre la salud pública”. En *Revista Seguridad y Medio Ambiente*. Fundación Mapfre, año 30, núm.119 tercer trimestre. Madrid, 2010, págs. 46-52.

ARIAS EIBE, MANUEL JOSÉ. *Responsabilidad criminal. Circunstancias modificativas y su fundamento en el Código penal. Una visión desde la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Supremo*. Bosch. Barcelona, 2007.

ARROYO ZAPATERO, LUIS. Prólogo a la obra colectiva *Los Derechos Fundamentales en el Derecho Penal Europeo*. Luis María Díez-Picazo / Adán Nieto Martín (dirs.) Civitas. Cizur Menor (Navarra), 2010, págs. 17 y 18.

ARTAZA VARELA, OSVALDO. “Programas de cumplimiento. Breve descripción de las reglas técnicas de gestión del riesgo empresarial y su utilidad jurídico-penal”. En *Responsabilidad de la Empresa y Compliance. Programas de prevención, detección y reacción penal*. Santiago Mir Puig / Mirentxu Corcoy Bidasolo / Víctor Gómez Martín (dirs.) Juan Carlos Hortal Ibarra / Vicente Valiente Ivañez (coords.) B de F / Edisofer. Madrid, 2014, págs. 231-271.

- *La empresa como sujeto de imputación de responsabilidad penal. Fundamentos y límites*. Marcial Pons. Madrid, 2013.



ARZOZ SANTIESTEBAN, XABIER. *Videovigilancia, Seguridad Ciudadana y Derechos Fundamentales*. Civitas. Cizur Menor (Navarra), 2014.

ASENJO GONZÁLEZ, MARÍA. *Las ciudades en el occidente medieval*. Cuadernos de Historia, Vol. 14 Arco Libros. Madrid, 1996.

BACIGALUPO SAGGESE, SILVINA. *La responsabilidad penal de las personas jurídicas*. Bosch. Barcelona, 1998.

BACIGALUPO ZAPATER, ENRIQUE. *Compliance y Derecho Penal*. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2011.

- *Las sanciones administrativas: (derecho español y comunitario)* Colex. Madrid, 1991.
- “La instrumentación técnico-legislativa de la protección penal del medio ambiente”. En *Estudios Penales y Criminológicos*, Vol. V. Cursos e Congresos núm. 22. Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela, 1982, págs. 192-213.

BAJO FERNÁNDEZ, MIGUEL. “Vigencia de la RPPJ en el derecho sancionador español”. En BAJO FERNÁNDEZ, M. / FEIJÓO SÁNCHEZ, B. / GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. *Tratado de responsabilidad penal de las personas jurídicas*. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2012, págs. 19-47.

- “De nuevo sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas”. En *Anuario Derecho Penal y Ciencias Penales*. Año 1981, Tomo 34, Núm. 2-3, págs. 371-379.

BANACLOCHE PALAO, JULIO / ZARZALEJOS NIETO, JESÚS. *Aspectos fundamentales del derecho procesal penal* (2ª ed.) La Ley. Madrid, 2011.

BARÁ VIÑAS, SALVADOR / DOSITEO VEIGA, ALONSO. “Contaminación lumínica y concienciación ciudadana”. *Física y Sociedad (ejemplar dedicado a: Contaminación lumínica y eficiencia energética)* núm. 21. Colegio Oficial de Físicos, 2011, págs. 44 y 45.

BARBER, JESSE R. / CROOKS, KEVIN R. / FRISTRUP, KURT M. “The costs of chronic noise exposure for terrestrial organisms”. En *Journal Trends in Ecology and Evolution*, Vol. 25, Issue 3. Cell Press. Cambridge, 2010, págs. 180-189.

BARBERÁN PELEGRÍN, FRANCISCO. “La sanción penal de los actos de contaminación en Japón”. En *Japón y el mundo actual*. Elena Barlés / David Almazán (coords.) (Colección Federico Torralba de Estudios de Asia Oriental: 4) Prensas Universitarias de Zaragoza. Zaragoza, 2010, págs. 369-392.

- “El delito de contaminación en Japón. Análisis de la Ley japonesa 142/1970, de 25 de diciembre, para la sanción penal de los delitos de contaminación que afecten a la salud de las personas”. En *Revista Aranzadi de Derecho Ambiental*, núm. 13. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2008, págs. 241-264.

BARNES, R.S.K. / HUGHES, R. N. *An Introduction to Marine Ecology* (3<sup>rd</sup> ed. reprinted) Wiley-Blackwell. Oxford, 2004.

BARONA VILAR, SILVIA. “La persona jurídica como responsable penal, parte pasiva en el proceso penal y parte en la mediación penal en España”. En *La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Fortalezas, debilidades y perspectivas de cara al futuro*. Miguel Ontiveros Alonso (coord.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2014, págs. 53-110.

BARRIGÓN MORILLAS, JUAN MIGUEL / VÍLCHEZ GÓMEZ, ROSENDO / GÓMEZ ESCOBAR, VALENTÍN ET. AL. “Presentación de una encuesta para la realización de estudios sociales sobre el impacto del ruido urbano”. En *Revista de Acústica*, vol. 33, núm. 1-2 (abril) Sociedad Acústica Española. Madrid, 2002, págs. 27-33.

BASSOLS COMA, MARTÍN. “La racionalización de la Administración local en el marco de la sostenibilidad financiera: panorama general”. En *Cuadernos de Derecho Local*, núm. 34. Monográfico: La revisión del Gobierno y la Administración local en la Ley 27/2013. Fundación Democracia y Gobierno Local. Febrero, 2014, págs. 21-48.

BAUCELLS LLADÓS, JOAN. “Sistema de penas para la delincuencia económica en Derecho español”. En *La delincuencia económica. Prevenir y sancionar*. Mercedes García Arán (dir.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2014, págs. 393-423.

- *Nuevas perspectivas de la política criminal europea en materia ambiental*. Atelier. Barcelona, 2007.

BAUZÁ MARTORELL, FELIO JOSÉ. “El acto administrativo: entre la validez y el delito”. En *Revista española de Derecho Administrativo*, núm. 163, abril-junio. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2014, págs. 217-251.

BEATO ESPEJO, MANUEL. “El Medio Ambiente como bien jurídico colectivo. El ruido callejero como actividad molesta. Derecho a un ambiente silencioso y pacificador”. En *Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente*. Año 30, núm. 148, mayo 1996, págs. 155-200.

BECHEL, ROBERT. B. *Environment and Behavior. An Introduction*. Sage Publications. Thousand Oaks (California), 1997.

BECK, ULRICH. *La sociedad del riesgo global*. Jesús Alborés Rey (tr.) Siglo XXI de España. Madrid, 2002.

BELL, ALAN. *Noise. An Occupational Hazard and Public Nuisance*. Public Health Papers, núm. 30. World Health Organization. Geneva, 1966.

BELL, STUART & MCGILLIVRAY, DONALD. *Environmental Law* (6<sup>th</sup> ed.) Oxford University Press. New York, 2006.

BENSUSAN MARTÍN, M<sup>a</sup> DEL PILAR. *Regulación jurídico-administrativa de la contaminación atmosférica*. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2014.

BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, IGNACIO. *Viejo y Nuevo Derecho Penal. Principios y desafíos del Derecho Penal de hoy*. Iustel. Madrid, 2012.

BERNAL DEL CASTILLO, JESÚS. *Derecho penal comparado: la definición del delito en los sistemas anglosajón y continental*. Atelier. Barcelona, 2011.

BESTANI, ADRIANA. “Principio Precautorio, Fraternidad y Generaciones Futuras”. En *DPI Diario Ambiental*, Año 2, núm. 12, jueves 27 de marzo de 2014.

BETANCOR RODRÍGUEZ, ANDRÉS. *Derecho Ambiental*. La Ley. Madrid, 2014.

BIJSTERVELD, KARIN. *Technology, Culture, and Public Problems of Noise in the Twentieth Century*. Massachusetts Institute of Technology Press. Cambridge & London, 2008.

BISSCHOP, LIESELOT / VANDE WALLE, GUDRUN. “Environmental Victimisation and Conflict Resolution: A Case Study of e-Waste”. *Emerging Issues in Green Criminology. Exploring Power, Justice and Harm*. Reece Walters / Diane S. Westerhuis / Tanya Wyatt (eds.) Palgrave Macmillan. Basingstoke (UK), 2013, págs. 34-54.

BLANCO CORDERO, ISIDORO. “Artículos 334 a 337”. En *Comentarios al Código Penal* (1<sup>a</sup> ed.) Manuel Gómez Tomillo (dir.) Lex Nova. Valladolid, 2010, págs. 1313-1316.

BLANCO ESTEVE, AVELINO. “La planificación territorial de las zonas turísticas en España”. En *Revista Derecho Urbanístico y Medio Ambiente*. Año 44, núm. 262, diciembre 2010, págs. 17-70.

- “Idas y venidas en la lucha contra el ruido”. En *Revista de Administración Pública*, núm 53, septiembre-diciembre 2000, págs. 267-300.

BLANCO LOZANO, CARLOS. *La eximente de anomalía o alteración psíquica*. Dykinson. Madrid, 2000.

BLANQUER CRIADO, DAVID. *Contaminación acústica y calidad de vida. Un entorno de calidad para el turismo urbano*. Tirant lo Blanch. Valencia, 2005.

- *Derecho del Turismo*. Tirant lo Blanch. Valencia, 1999.

BOCOS, AGUSTÍN. “El ruido de las actividades de ocio”. En *El ruido en las ciudades*. Jorge Pinedo Hay (coord.) Bosch. Barcelona, 2009, págs. 285-306.

BOEKHOUT VAN SOLINGE, TIM. “Equatorial deforestation as a harmful practice and a criminological issue”. En *Global Environmental Harm. Criminological Perspectives*. Rob White (ed.) Willan Publishing. Devon (UK), 2010, págs. 20-36.

BOFF, LEONARDO. *El Planeta Tierra. Crisis. Falsas soluciones. Alternativas*. Nueva Utopía. Madrid, 2011.

BOMBILLAR SÁENZ, FRANCISCO MIGUEL. “Contaminación acústica”. En *Derecho Ambiental*. M<sup>a</sup> Asunción Torres López / Estanislao Arana García (dirs.) Tecnos. Madrid, 2012, págs. 227-243.

BONET NAVARRO, JOSÉ. “Algunos problemas concretos sobre aspectos generales de la prueba en el proceso civil”. En *Diario La Ley*. Año XXX, núm. 7256. Martes, 6 de octubre de 2009, págs. 1-10.

BORJA JIMÉNEZ, EMILIANO. *Las circunstancias atenuantes en el ordenamiento jurídico español*. Tirant lo Blanch. Valencia, 2002.

BORRÁS PENTINAT, SUSANA. “La responsabilidad soberana para fortalecer la seguridad climática”. En *Retos del Derecho ante las nuevas amenazas*. Susana De Tomás Morales (dir.) Dykinson. Madrid, 2015, págs. 327-349.

- “Pueblos indígenas y medio ambiente”. En *Pueblos indígenas, diversidad cultural y justicia ambiental. Un estudio de las nuevas constituciones de Ecuador y Bolivia*. Antoni Pigrau Solé (ed. lit.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2013, págs. 111-146.

BOSTMAN, RACHEL / ROGERS, ROO. *What's Mine is Yours: The rise of Collaborative Consumption*. HarperCollins Publishers. New York, 2010.

BOTO ÁLVAREZ, ALEJANDRA. *La Administración instrumental en el proceso*. Reus. Madrid, 2011.

BOUAZZA ARIÑO, OMAR. “Tribunal Europeo de Derechos Humanos: derechos frente a la contaminación, libertad de conciencia ambiental y protección urbanística del suelo”. En *Observatorio de Políticas Ambientales, 2012*. Fernando López Ramón (coord.) Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), junio 2012, págs. 101-120.

- *Ordenación del territorio y turismo (Un modelo de desarrollo sostenible desde la ordenación del territorio)* Atelier. Barcelona, 2006.

BRANDARIZ GARCÍA, JOSÉ ÁNGEL. “Relaciones entre el Derecho penal y el Derecho administrativo” Cap. VI, Parte general. En *Ordenación del territorio, patrimonio histórico y medio ambiente en el Código penal y la legislación especial*. Patricia Faraldo Cabana (dir.) Luz María Puente Alba (coord.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2011, págs. 91-119.

BRAÑES, RAÚL. *Manual de Derecho Ambiental Mexicano* (2ª ed., 2ª reimp.) Fondo de Cultura Económica. México D.F., 2010.

BRISMAN, AVI. “Of Theory and Meaning in Green Criminology”. En *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, Vol. 3, núm. 2, 2014, págs. 21-34.

BRISMAN, AVI / SOUTH, NIGEL. “State-Corporate Environmental Harms and Paradoxical Interventions: Thoughts in Honour of Stanley Cohen”. En *Green Harms and Crimes. Critical Criminology in a Changing World*. Series: Critical Criminological Perspectives. Ragnhild Aslaug Sollund (ed.) Ed. Palgrave Macmillan, June 2015, págs. 27-42.

- *Green Cultural Criminology. Constructions of environmental harm, consumerism and resistance to ecocide*. Series: (5) New Directions in Critical Criminology. Routledge. London & New York, 2014.
- “The planned obsolescence of planet Earth? How green criminology can help us learn from experience and contribute to our future”. En *Routledge International Handbook of Green Criminology*. Nigel South / Avi Brisman (eds.) Routledge. New York, 2013, págs. 409-417.

- “A green-cultural criminology: An exploratory outline”. En *Crime Media Culture. An International Journal* 9 (2) Sage Publications. Los Angeles / London / New Delhi / Singapore / Washington D.C., 2012, págs. 115-135.

BROWN, CASEY L. / HARDY, AMANDA R. / BARBER, JESSE R. et. al. “The Effect of Human Activities and Their Associated Noise on Ungulate Behavior”. En *PlosOne* Vol. 7, Issue 7. Matt Hayward (ed.) Australian Wildlife Conservancy. Australia, July 2012.

BRÚ, JOSEPA. *Medio ambiente: poder y espectáculo. Gestión ambiental y vida cotidiana*. Icaria. Barcelona, 1997.

BURROWS, PAUL / RICHARDSON, GENEVRA / OGUS, ANTHONY. *Policing Pollution. A Study of Regulation and Enforcement*. Oxford University Press. New York, 1982.

BUSTOS RAMÍREZ, JUAN. “Los bienes jurídicos colectivos. (Repercusiones de la labor legislativa de Jiménez de Asúa en el Código Penal de 1932)”. En *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Estudios de Derecho Penal en homenaje al profesor Luis Jiménez de Asúa*. Monográfico 11. Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho. Madrid, junio 1986, págs. 147-164.

CALLICOTT, BAIRD J. *Thinking Like a Planet: The Land Ethic and The Earth Ethic*. Oxford University Press. New York, 2013.

- *Beyond the Land Ethic: More Essays in Environmental Philosophy*. Suny Press. Albany (NY), 1999.
- “Animal Liberation: A Triangular Affair”. En *Environmental Ethics*, Vol. 2, Issue 4, Winter 1980, págs. 311-338.

CALVO CHARRO, MARÍA. “El derecho a un cielo oscuro. Prevención y corrección de la contaminación lumínica”. En *Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid*, núm. 23, diciembre, 2010. Asamblea de Madrid, 2011, págs. 199-221.

- Voz “Contaminación Lumínica”. En *Diccionario de Derecho Ambiental*. Enrique Alonso García / Blanca Lozano Cutanda (dirs.) Iustel. Madrid, 2006. págs. 382-393.
- “La contaminación lumínica. La protección del cielo oscuro”. En *Escritos de Derecho Ambiental*. Tirant lo Blanch. Valencia, 2003.
- “El Derecho a ver las estrellas. Análisis de la contaminación lumínica desde una perspectiva jurídica”. En *Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente*, núm. 187 (julio-agosto) Madrid, 2001, págs. 131-181.
- *Sanciones Medioambientales*. Marcial Pons. Madrid, 1999.

CÁMARA DEL PORTILLO, DIEGO. Voz “Policía Ambiental, Organización”. En *Diccionario de Derecho Ambiental*. Enrique Alonso García / Blanca Lozano Cutanda (dirs.) Iustel. Madrid, 2006, págs. 961-975.

- “Los ruidos vecinales: análisis de su especial problemática”. En *Comentarios a la Ley del Ruido: Ley 37/2003, de 17 de noviembre*. Blanca Lozano Cutanda (coord.) Ed. Civitas. Cizur Menor (Navarra), 2004, págs. 245-292.

CANO CAMPOS, TOMÁS. *Las Sanciones de Tráfico* (2ª ed.) Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2014.

- Voz “Medio ambiente, potestad sancionadora”. En *Diccionario de Sanciones Administrativas*. Blanca Lozano Cutanda (dir.) Iustel. Madrid, 2010, págs. 556-578.
- “La disciplina ambiental: inspección, restablecimiento de la legalidad y sanciones”. En *Lecciones y materiales para el estudio del Derecho Administrativo*. Tomo VI: Ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente. Tomás Cano Campos (coord.) Iustel. Madrid, 2009, págs. 405-445.
- *El régimen jurídico-administrativo del tráfico. Bases históricas y constitucionales, técnicas de intervención y sanciones* (1ª ed.) Civitas. Madrid, 1999.

CANO MURCIA, ANTONIO. *El nuevo régimen jurídico de las licencias de apertura. Adaptado a la Ley 17/2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio*. La Ley. Madrid, 2010.

- *Código del Ruido*. Civitas. Madrid, 2005.

CANO MURCIA, ANTONIO / CANO MUÑOZ, ANTONIO. “Medio Ambiente 2009-2010”. *Memento Práctico Francis Lefebvre*. Francis Lefebvre. Madrid, 2010.

CANOSA USERA, RAÚL. “Pretensiones ambientales en amparo constitucional. Comentario a la STC 119/2001, de 24 de mayo”. En *Revista Teoría y realidad constitucional*, núm. 10-11. Centro de Estudios Ramón Areces, 2002-2003, págs. 697-718.

- *Constitución y Medio Ambiente*. Dykinson. Madrid, 2000.

CANTANERO BANDRÉS, ROCÍO. “El delito ecológico: análisis del actual tipo penal y sus antecedentes”. En *El delito ecológico*. Juan Terradillos Basoco (ed. lit.) Trotta. Madrid, 1992, págs. 67-78.

CARBONELL MATEU, JUAN CARLOS. “Responsabilidad penal de las personas jurídicas: reflexiones en torno a su dogmática y al sistema de la reforma de 2010”. En

*Cuadernos de política criminal segunda época*. Vol. II, núm. 101. Dykinson. Madrid, 2010, págs. 5-33.

CARCOPINO, JÉRÔME. *La vida cotidiana en Roma en el apogeo del Imperio*. Mercedes Fernández Cuesta (tr.) Temas de Hoy. Madrid, 1989.

CARDESA SALZMANN, ANTONIO. *El control internacional de la aplicación de los acuerdos ambientales universales*. Marcial Pons. Madrid, 2011.

CARMONA SALGADO, CONCEPCIÓN. “Incidencias de la reforma penal de 2010 en los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente”. En *Libro Homenaje al Profesor Rodríguez Ramos*. Francisco Javier Álvarez García / Miguel Ángel Cobos de Linares / Pilar Gómez Pavón (coords.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2013, págs. 417-445.

CARNEVALI RODRÍGUEZ, RAÚL. “Caso del medio ambiente europeo”. En *Casos que hicieron doctrina en Derecho Penal* (2ª ed.) Pablo Sánchez-Ostiz Gutiérrez (coord.) La Ley. Madrid, 2011, págs. 841-854.

CARRABINE, EAMONN / COX, PAM / LEE, MAGGY / PLUMMER, KEN / SOUTH, NIGEL. *Criminology: A Sociological Introduction* (3<sup>th</sup> ed.) Routledge. London, 2014.

CARRILLO, MARC. “La reforma de la jurisdicción constitucional: La necesaria racionalización de un órgano constitucional en crisis”. En *Estudios sobre la Constitución Española: homenaje al profesor Jordi Solé Tura*, Vol. 3 (Traducción al castellano de los textos en catalán). Congreso de los Diputados. Madrid, 2008, págs. 65-100.

- *El Derecho a no ser Molestado. Información y vida privada*. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2003.

CARTWRIGHT, Rosalind. *The Twenty-four Hour Mind: The Role of Sleep and Dreaming in Our Emotional Lives*. Oxford University Press, 2010.

- “Sleepwalking Violence: A Sleep Disorder, a Legal Dilemma, and a Psychological Challenge”. En *The American Journal of Psychiatry*, Vol. 161, July 2004, págs. 1149-1158.
- *Criteria for the Diagnosis of Sleepwalking and Inusual Sleep-related Behaviors* (online).

CASSOLA PEREZUTTI, GUSTAVO. *Medio ambiente y derecho penal. Un acercamiento*. Julio César Faira (ed.) B de F. Buenos Aires, 2005.



CASTÁN TOBEÑAS, JOSÉ. *Derecho civil español común y foral*. Tomo 2, Vol. I (14ª ed.) Reus. Madrid, 1992.

CASTELLS, MANUEL. *The Power of Identity. The Information Age: Economy, Society, and Culture*, Vol. II (2<sup>nd</sup> ed.) Wiley-Blackwell. Oxford, 2010.

- “Communication, Power and Counter-power in the Network Society”. En *International Journal of Communication*, Vol. 1, February 2007, págs. 238-266.

CASTRO CORREDOIRA, MARÍA / GUINARTE CABADA, GUMERSINDO. “La reforma de los delitos de lesiones (arts. 147, 152 y 156 CP)”. En *Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015*. José L. González Cussac (dir.) Ángela Matallín Evangelio / Elena Górriz Royo (coords.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2015, págs. 487-500.

CÁTEDRA, PEDRO M. / CHERCHI, PAOLO. *Los doce trabajos de Hércules*. (Zamora, por Antón de Centenera, 1483). Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria. Santander, 2007.

CENJOR ESPAÑOL, CARLOS / VILLACAMPA AUBA, JOSÉ MIGUEL. “Efectos patológicos del ruido”. *Revista Ambienta*, núm. 59 (octubre) Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Madrid, 2006, págs. 30-36.

CEREZO DOMÍNGUEZ, ANA ISABEL / DÍEZ RIPOLLÉS, JOSÉ LUIS. *Videocámaras y prevención de la delincuencia en lugares públicos. Análisis jurídico y criminológico*. Tirant lo Blanch. Valencia, 2011.

CEREZO MIR, JOSÉ. *Curso de Derecho penal español. Parte general*. Vol. I. Introducción (6ª ed.) Tecnos. Madrid, 2004.

- “Límites entre el Derecho penal y el Derecho administrativo”. En *Anuario de Derecho penal y Ciencias penales*. Tomo 28, Fasc. / mes 2, 1975, págs. 159-173.

CHAMORRO, EVA / BONNIN CRISTINA / LOBATO-RINCÓN, LUIS ET. AL. “Riesgos personales producidos por LEDs utilizados en dispositivos de uso cotidiano”. *Seguridad y Medio Ambiente*, Año 32, núm. 128. Fundación Mapfre. Madrid, cuarto trimestre 2012, págs. 36-41.

CHERULNIK, PAUL D. *Applications of environment-behavior research. Case studies and analisis*. Environment and behavior series. Cambridge University Press. Cambridge, 1993.

CHO, BYUNG-SUN. “¿El surgimiento de un Derecho Penal Internacional del Medioambiente?” Manuela Mora Ruiz (tr.) En *Revista Penal*, núm 8, 2001, págs. 3-23.

- “Cuestiones de causalidad y autoría en el Derecho penal del medio ambiente coreano y japonés desde la perspectiva del derecho comparado”. M<sup>a</sup> del Mar Díaz Pita (traducción del alemán) *Revista Penal (Doctrina)*, núm. 4, 1999, págs. 42-53.

CHOMSKY, NOAM / FOUCAULT, MICHAEL. *The Chomsky-Foucault debate: On human nature*. The New Press. New York, 2006.

CHRISTIE, NEILS. *Crime control as Industry. Towards Gulags, Western Style* (3<sup>rd</sup> ed.) Routledge. New York, 2000.

CICCOLELLA, PABLO / MIGNAQUI, ILIANA. “Conflictos Ambientales, Desarrollo Urbano y Gobernabilidad: El caso de la Cuenca del Río Matanza-Riachuelo en la Región Metropolitana de Buenos Aires”. En *Periurbanización y sustentibilidad en grandes ciudades*. Adrián G. Aguilar / Irma Escamilla (coords.) CONACYT, Universidad Autónoma de México / Instituto de Geografía UNAM / Miguel Ángel Porrúa. México, 2011, págs. 27-54.

CIPRIOTTI, PIO. “Contributo allo studio della disciplina della circolazione stradale nell’antichità: Roma e Pompei”. En *Revista Giuridica della circolazione e dei trasporti*, Vol. XV L’Editrice dell’Automobile. Roma, 1961, págs. 262-277.

CLEMENTE RAMOS, JULIÁN. “La evolución del medio natural en Extremadura (c. 1142-c.1525)”. En *El medio natural en la España medieval*. Actas del I Congreso sobre ecohistoria e historia medieval. Julián Clemente Ramos (ed. lit.) Universidad de Extremadura. Cáceres, 2001, págs. 15-56.

COBOS GÓMEZ DE LINARES, MIGUEL A. “La protección penal del medio ambiente en Alemania (R.F.), Francia e Italia”. *Separata del libro Derecho y Medio Ambiente*. Servicio de Publicaciones CEOTMA. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, Madrid, 1981.

COLÁS TURÉGANO, ASUNCIÓN. “Nuevas conductas delictivas contra la intimidad (arts. 197; 197 bis; 197 ter)”. En *Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015*. José L. González Cussac (dir.) Ángela Matallín Evangelio / Elena Górriz Royo (coords.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2015, págs. 663-683.

CONDE ANTEQUERA, JESÚS. “Responsabilidad y restauración ambiental por riesgos del desarrollo”. En *Derecho, Globalización, Riesgo y Medio Ambiente*. Esteban Pérez Alonso / Estanislao Arana García et. al. (eds.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2012, págs. 479-503.

CONDE-PUMPIDO TOURON, CÁNDIDO. “Título XVI. De los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente”. En *Código Penal. Doctrina y Jurisprudencia*, Tomo II. Artículos 138 a 385. Cándido Conde-Pumpido Ferreiro (dir.) Trivium. Madrid, 1997, págs. 3189-3244.

- “Introducción al delito ecológico”. En *El delito ecológico*. Juan Terradillos Basoco (ed. lit.) Trotta. Madrid, 1992, págs. 13-39.

CORCOY BIDASOLO, MIRENTXU. “Art. 325”. En *Comentarios al Código Penal. Reforma LO 5/2010*. Mirentxu Corcoy Bidasolo / Santiago Mir Puig (dirs.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2011, págs. 737-742.

- “Contaminación acústica. ¿Delito de lesiones o contra el medio ambiente?”. En *Estudios de Derecho Ambiental. Libro Homenaje al profesor Josep Miquel Prats Canut*. Gonzalo Quintero Olivares / Fermín Morales Prats (coords.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2008, págs. 861-879.
- “Protección de bienes jurídico-penales supraindividuales y derecho penal mínimo”. En *Derecho penal del siglo XXI*. Cuadernos de Derecho Judicial VIII-2007. Centro de Documentación Judicial. Consejo General del Poder Judicial. Madrid, 2008, págs. 365-402.
- “Los delitos relativos a la ordenación del territorio y el medio ambiente: una perspectiva criminológica”. En *Problemas criminológicos en las sociedades complejas*. Mirentxu Corcoy Bidasolo / Carmen Ruidiaz García (coords.) Colección Ciencias Sociales, 6. Universidad Pública de Navarra. Pamplona, 2000, págs. 55-94.
- *Delitos de peligro y protección de bienes jurídico-penales supraindividuales. Nuevas formas de delincuencia y reinterpretación de tipos penales clásicos*. Tirant lo Blanch. Valencia, 1999.

CORCOY BIDASOLO, MIRENTXU / GÓMEZ MARTÍN, VÍCTOR. Prólogo a la obra colectiva *Responsabilidad de la Empresa y Compliance. Programas de prevención, detección y reacción penal*. Santiago Mir Puig / Mirentxu Corcoy Bidasolo / Víctor Gómez Martín (dirs.) Juan Carlos Hortal Ibarra / Vicente Valiente Ivañez (coords.) B de F / Edisofer. Madrid, 2014, págs. XXI y XXII.

CROALL, HAZEL. “Victims of White-Collar and Corporate Crime”. En *Victims, Crime and Society*. Pamela Davies / Peter Francis / Chris Greer (eds.) Sage Publications. London, 2007, págs. 78-108.

- *Understanding white collar crime*. Open University Press. Buckingham, 2001.
- *White Collar Crime*. Open University Press. Buckingham, 1992.

CRUZ SÁNCHEZ, TERESA / GALADÍ-ENRÍQUEZ, DAVID. “Observatorio de Calar Alto. Urbanismo y protección del paisaje celeste nocturno”. En *Uciencia. Revista de divulgación científica de la Universidad de Málaga*, núm. 8 noviembre, 2011, págs. 54-56.

CUADRADO PÉREZ, CARLOS. *Ruido, inmisiones y edificación*. Colección Urbanismo y Derecho. Carlos Rigel Vide / Martín Bassols Coma (dirs.) Reus. Madrid, 2002.

CUADRADO RUIZ, M<sup>a</sup> ÁNGELES. “Protección jurídica del medio ambiente (internacional, europea, constitucional y penal)”. En *Derecho, Globalización, Riesgo y Medio Ambiente*. Esteban Pérez Alonso / Estanislao Arana García et. al. (eds.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2012, págs. 619-642.

- “Consecuencias jurídicas en los delitos contra el medio ambiente”. En *Derecho Penal Ambiental*. Grupo Andaluz de Investigación Jurídica. Juan Antonio Martos Núñez (dir.) Exlibris. Madrid, 2006, págs. 221-240.

CUELLO CONTRERAS, JOAQUÍN. *El Derecho penal español. Parte general. Nociones introductorias. Teoría del delito* (3<sup>a</sup> ed.) Dykinson. Madrid, 2002.

CUERDA ARNAU, MARÍA LUISA. “Maltrato y abandono de animales (art. 337 y 337 bis CP)”. En *Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015*. José L. González Cussac (dir.) Ángela Matallín Evangelio / Elena Górriz Royo (coords.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2015, págs. 1073-1084.

DALY, HERMAN. *Population, Technology, and Lifestyle: The Transition to Sustainability*. Co-edited with Robert Goodland and S. El Serafy. Island Press. Washington D.C., 1992.

DE AZCÁRATE, PATRICIO. *Obras completas de Platón*, Tomo VI. Medina y Navarro. Madrid, 1872.

DE ESTEBAN ALONSO, ALFONSO. “Contaminación acústica y salud”. En *Observatorio medioambiental*. Instituto de Ciencias Ambientales, núm. 6. Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense de Madrid, 2003, págs. 73-95.

DE ESTEBAN ALONSO, ALFONSO / ANTONOVICA, ARTA. “Los orígenes de la sociología medioambiental y su primera evolución”. En *Observatorio Medioambiental. Instituto de Ciencias Ambientales*, Vol. 14. Servicio de Publicaciones Universidad Complutense de Madrid, 2011, págs. 11-18.

DE JONGE, ECCY. *Spinoza and Deep Ecology: Challenging Traditional Approaches to Environmentalism*. Ashgate. Aldershot (England), 2004.

DE LA QUADRA-SALCEDO Y FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, TOMÁS / PALOMAR OLMEDA, ALBERTO / VIDA FERNÁNDEZ, JOSÉ. *La ordenación de las actividades de servicios: comentarios a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre*. Tomás de la Quadra-Salcedo y Fernández del Castillo (dirs.) Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2010.

DE LA CUESTA AGUADO, PAZ M. “El delito de matrimonio forzado”. En *Comentario a la Reforma Penal de 2015*. Gonzalo Quintero Olivares (dir.) Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2015, págs. 365-378.

- *Conocimiento de la ilicitud. Aproximación al conocimiento de la antijuricidad del hecho desde las teorías psicológicas del pensamiento intuitivo*. Dykinson. Madrid, 2007.
- *Causalidad de los delitos contra el medio ambiente* (2ª ed.) Tirant lo Blanch. Valencia, 1999.

DE LA CUESTA ARZAMENDI, JOSÉ LUIS. “La reciente historia del delito ecológico: del artículo 347 bis al proyecto de nuevo Código Penal de 1994”. En *La Protección Jurídica del Medio Ambiente*. José Manuel Valle Muñiz (coord.) Aranzadi. Pamplona, 1997, págs. 185-224.

- “Protección penal de la ordenación del territorio y del medio ambiente”. *Documentación jurídica. Monográfico dedicado a la Propuesta de Anteproyecto del Nuevo Código Penal*, Vol. 2, (enero-diciembre). Ministerio de Justicia, Secretaría General Técnica. Madrid, 1983, págs. 877-936.

DE LA IGLESIA CHAMARRO, ASUNCIÓN. “El ruido y los Derechos Fundamentales. Consideraciones al hilo de la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español”. En *Cuestiones Constitucionales (Revista Mexicana de Derecho Constitucional)*, núm. 12, enero-junio 2005, págs. 233-274.

DE LA MATA BARRANCO, NORBERTO J. “Caso de la central de Cersc”. En *Casos que hicieron doctrina en Derecho Penal* (2ª ed.) Pablo Sánchez-Ostiz Gutiérrez (coord.) La Ley. Madrid, 2011, págs. 319-334.

- “Derecho comunitario y Derecho estatal en la tutela penal del ambiente”. En *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, núm 2, 2 de abril de 2000.

- *Protección Penal del Ambiente y Accesoriedad Administrativa. Tratamiento penal de comportamientos perjudiciales para el ambiente amparados en una autorización administrativa ilícita*. Cedecs. Barcelona, 1996.

DE LA MATA BARRANCO, NORBERTO J. / HERNÁNDEZ DÍAZ, LEYRE. “La normativa de la Unión Europea y su aplicación en el Derecho penal ambiental e informático”. En *Garantías constitucionales y Derecho penal europeo*. Santiago Mir Puig / Mirentxu Corcoy Bidasolo (dirs.) Víctor Gómez Martín (coord.) Marcial Pons. Madrid, 2012, págs. 495-531.

DE LA OLIVA SANTOS, ANDRÉS / ARAGONESES MARTÍNEZ, SARA. ET. AL. *Derecho Procesal Penal* (8ª ed.) Centro de Estudios Ramón Areces. Madrid, 2007.

DE VICENTE MARTÍNEZ, ROSARIO. “Derecho Penal del Medio Ambiente”. En *Tratado de Derecho Ambiental*. Luis Ortega Álvarez / Consuelo Alonso García (dirs.) Rosario de Vicente Martínez (coord.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2013, págs. 287-320.

DEL SAZ SALAZAR, SALVADOR. “Tráfico rodado y efectos externos: valoración económica del ruido”. En *Ekonomiaz (Revista Vasca de Economía)*, núm. 57, cuatrimestre 3º. Gobierno Vasco, 2004, págs. 46-67.

DELGADO PIQUERAS, FRANCISCO / GARRIDO CUENCA, NURIA. “El régimen de aprovechamiento de la energía eólica en Castilla-La Mancha”. En *Medio Ambiente y Derecho. Revista electrónica de Derecho Ambiental*, núm. 21, junio 2010.

DE SOROA, RAÚL. *Manual del auténtico Fen Shui*. CBCM. México, 2002.

DÍAZ-ROMERAL GÓMEZ, ALBERTO. “La protección del medio ambiente urbano: la contaminación por el ruido en las ciudades y la sostenibilidad en el desarrollo urbano”. En *Desarrollo sostenible y protección del medio ambiente*. José Luis Piñar Mañas (dir.) Civitas. Madrid, 2002, págs. 255-309.

DÍEZ-PICAZO, LUIS / GULLÓN, ANTONIO. *Sistema de Derecho civil*. Vol. I (11ª ed.) Tecnos. Madrid, 2005.

DICCIONARIO OXFORD DE LA MÚSICA. Percy A. Scholes (ed. lit.) Oxford University Press. Oxford, 1938. Edhasa (ed. en castellano) Barcelona, 1984.

DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA (23ª ed. del Tricentenario) Real Academia Española. Madrid, 2014.

DÍEZ RIPOLLÉS, JOSÉ LUIS. *La racionalidad de las leyes penales. Práctica y teoría* (2ª ed. ampliada) Trotta. Madrid, 2013.

DOLZ LAGO, MANUEL J. ET AL. *La prueba pericial científica*. Manuel Jesús Dolz Lago (dir.) Carmen Figueroa Navarro (coord.) Edisofer. Madrid, 2012. págs. 110-125.

DOMÉNECH PASCUAL, GABRIEL. *Derechos fundamentales y riesgos tecnológicos. El derecho del ciudadano a ser protegido por los poderes públicos*. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 2006.

DOMINGO CALABUIG, JORDI / BAIXERAS ALMELA, JOAQUÍN. “Impactos de la contaminación lumínica sobre la naturaleza y la biodiversidad”. En *Documento Final del Grupo de Trabajo (GT-LUZ). Contaminación Lumínica*. Manuel Nicolás Barba (coord.) IX Congreso Nacional del Medio Ambiente. Cumbre del Desarrollo Sostenible. Madrid, diciembre 2008, págs. 23-27.

DOMPER FERRANDO, JAVIER. *El medio ambiente y la intervención administrativa en las actividades clasificadas* Vol. I. Civitas. Madrid, 1992.

DOPICO GÓMEZ-ALLER, JACOBO. “Responsabilidad de personas jurídicas”. En *Memento Experto. Reforma Penal 2010*. Iñigo Ortiz de Urbina Gimeno (coord.) Francis Lefebvre. Madrid, 2010, págs. 12-38.

DOVAL PAIS, ANTONIO. *Posibilidades y límites para la formulación de las normas penales. El caso de las leyes en blanco*. Tirant lo Blanch / Universidad de Valencia. Valencia, 1999.

DOVAL PAIS, ANTONIO / BLANCO CORDERO, ISIDORO / FERNÁNDEZ-PACHECO ESTRADA, CRISTINA ET AL. “Las concesiones de indultos en España (2000-2008)”. En *Revista Española de Investigación Criminológica*. Artículo 5, núm 9, 2011.

ECKERSLEY, ROBYN. *Environmentalism and Political Theory. Toward an Ecocentric Approach*. State University of New York Press. Albany (NY), 1992.

EGEA FERNÁNDEZ, JOAN. “Relevancia constitucional de las inmisiones por ruido ambiental procedente de una zona de ocio nocturno. Recepción de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Comentario a la STC 119/2001, de 24 de mayo)”. En *Revista Derecho Privado y Constitución*, núm. 15. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001, págs. 69-106.

ENCYCLOPEDIA OF ASSOCIATIONS INTERNATIONAL: 3 Volume Set (*Encyclopedia of Associations, International Organizations*) (53<sup>th</sup> ed.) Gale Research Inc. Detroit (MI) March, 2014.

ENTRENA RUIZ, DANIEL. “La prevención contra la contaminación lumínica mediante la ordenación del territorio y urbanismo”. En *Revista Ecosostenible*, núm. 5 julio 2005, págs. 20-26.

ESCAJEDO SAN EPIFANIO, LEIRE. *El medio ambiente en la crisis del Estado social. Su protección penal simbólica*. Comares. Granada, 2006.

ESER, ALBIN. “La Evolución del derecho penal alemán en las últimas décadas del siglo XX”. En *Libro Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos in memoriam*. Universidad de Castilla-La Mancha / Universidad de Salamanca. Cuenca, 2001, págs. 263-284.

- “La Nueva Evolución del Derecho Penal Económico”. Andrea Bartos (trad.) *Revista de Derecho Penal*, núm. 2, 2000, págs. 41-56.
- “Derecho ecológico”. En *Revista de Derecho Público*. Vol. 11, núm. 100-101, 1985, págs. 603-652.

ESTEVE PARDO, JOSÉ. *Derecho del medio ambiente* (3ª ed.) Marcial Pons. Madrid, 2014.

- “Protección penal y accesoriedad administrativa en la nueva regulación para la protección del medio ambiente”. En *Incidencia medioambiental y derecho sancionador*. Dimitri Berberoff Ayuda (dir.) Cuadernos de Derecho Judicial. Consejo General del Poder Judicial. Madrid, 2007, págs. 121-138.

ESTIVILL SANCHO, EDUARDO. “Los trastornos del sueño” (parte I). En *Revista Clínica Rural*, núm. 426, 1994, págs. 52-54.

FARIA, JOSÉ EDUARDO. “La globalización económica y sus consecuencias jurídicas: diez tendencias del Derecho contemporáneo”. En *Derecho, Globalización, Riesgo y Medio Ambiente*. Esteban Pérez Alonso / Estanislao Arana García et. al (eds.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2012, págs. 19-40.

FEDELI, PAOLO. *La Natura Violata. Ecologia e mondo romano*. Sellerio. Palermo, 1990.

FEIJÓO SÁNCHEZ, BERNARDO. “La responsabilidad penal de las personas jurídicas”. En *Estudios sobre las reformas del Código Penal (operadas por las LO 5/2010, de 22 de junio, y 3/2011, de 28 de enero)*. Julio Díaz-Maroto y Villarejo (dir.) Civitas-Thomson. Cizur Menor (Navarra), 2011, págs. 65-142.



- “Sobre la administrativización del derecho penal en la sociedad del riesgo”. En *Derecho y Justicia Penal en el siglo XXI. Liber Amicorum en homenaje al profesor Antonio González-Cuellar García*. Julio Díaz-Maroto y Villarejo (ed.) Colex. Madrid, 2006, págs. 137-176.

FELDT, TORSTEN / FOBIL, JULIUS N. / WITTSIEPE, JÜRGEN ET. AL. “High levels of PAH-metabolites in urine of e-waste recycling workers from Agbogbloshie, Ghana”. En *Science of the Total Environment*, Vol. 466-467, Issue 1 January. Elsevier B.V, 2014, págs. 369-376.

FERNÁNDEZ AVILÉS, JOSÉ ANTONIO. “La tutela jurídica del trabajador frente al ruido”. En *Régimen jurídico del ruido: una perspectiva integral y comparada*. Estanislao Arana García / M<sup>a</sup> Asunción Torres López (coords.) Comares. Granada, 2004, págs. 287-337.

FERNÁNDEZ DE GATTA SÁNCHEZ, DIONISIO. *Sistema jurídico-administrativo de protección del medio ambiente*. Ratio Legis. Salamanca, 2012.

FERNÁNDEZ FARRERES, GERMÁN. “Unidad de mercado y libertades de empresa y circulación en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre”. En *Revista española de Derecho Administrativo*, núm. 163, abril-junio. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2014, págs. 109-144.

- “La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal del Tribunal Constitucional”. En REDA, núm. 146, abril-junio 2010, págs. 265-290.
- “La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (Comentario a la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo)”. *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 81, septiembre-diciembre 2007, págs. 11-62, en especial 15 y ss. [Editado en 2008 en la obra colectiva *Hacia una nueva jurisdicción constitucional. Estudios sobre la ley 6/2007, de 24 de mayo de reforma de la LOTC*. Marc Carrillo (coord.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2008, págs. 129-213].

FERNÁNDEZ RAMOS, SEVERIANO / PÉREZ MONQUIÓ, JOSÉ M<sup>a</sup>. *Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Ley 19/2013, de 9 de diciembre*. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2014.

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, CARMEN. “Algunas consideraciones sobre el actual panorama del paisaje urbano en nuestro ordenamiento: desde su originaria y exclusiva protección por el ordenamiento urbanístico al incipiente ordenamiento paisajístico”. En *Revista de Derecho urbanístico y medio ambiente*, núm. 277. Madrid, noviembre 2012, págs. 187-215.

- *La protección del paisaje. Un estudio de Derecho español y comparado*. Marcial Pons. Madrid, 2007.

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, TOMÁS-RAMÓN. *Manual de derecho urbanístico* (22ª ed.) La Ley. Madrid, 2011.

- “Derecho, Medio Ambiente y desarrollo”. En REDA, núm. 24. Civitas. Madrid, 1980, págs. 5-16.

FERNÁNDEZ SEGADO, FRANCISCO. *La reforma del régimen jurídico-procesal del recurso de amparo*. Dykinson. Madrid, 2008.

FERRATER MORA, JOSÉ / COHN, PRISCILLA. *Ética aplicada. Del aborto a la violencia* (2ª ed.) Alianza Universidad. Madrid, 1991.

FERRELL, JEFF. “Tangled up in green: cultural Criminology and green Criminology”. En *Routledge International Handbook of Green Criminology*. Nigel South / Avi Brisman (eds.) Routledge. New York, 2013, págs. 349-364.

- “Culture, Crime, and Cultural Criminology”. En *Journal of Criminal Justice and Popular Culture*, Vol. 3, Issue 2, 1995, págs. 25-42.

FERRER JIMÉNEZ, DANIEL / SANTA CECILIA MATEOS, FERNANDO. *Lectura del Paisaje de la Comarca Alto Guadarrama-Alto Manzanares: Un Legado Histórico*. Adesgam. Madrid, 2005.

FERRERES COMELLA, VÍCTOR. *Una defensa del modelo europeo de control de constitucionalidad*. Marcial Pons. Madrid, 2011.

FIGUEROLA PALOMO, MANUEL. *Los sectores de la hostelería en 2012*. Serie Estudios. Fundación Hostelería de España. Madrid, 2012.

FLAMME, GREGORY A / STEPHENSON, MARK. R / DEITERS, KRISTY ET. AL. “Typical noise exposure in daily life”. En *International Journal of Audiology*, Vol. 51, Suppl1 (S1) February, 2012.

FONTES IURIS ROMANI ANTIQUI. *Pars Prior Leges et Negocia* (7ª ed.) Karl Georg Bruns (ed. lit.) Scientia. Aalen, 1969.

FORMAN, RICHARD T.T. / GODRON, MICHEL. *Landscape Ecology*. Woodbine, Inc. New York, 1986.

FORMAN, RICHARD T.T. / SPERLING, DANIEL ET AL. *Road Ecology. Science and Solutions*. Island Press. Washington, 2003.

FORTES MARTÍN, ANTONIO. *La ordenación y el control administrativo del tráfico aéreo*. Civitas. Cizur Menor (Navarra), 2012.

FRACCHIA, FABRIZIO. “El estatuto mínimo del derecho de la sostenibilidad en la era de la globalización”. En *Derecho, Globalización, Riesgo y Medio Ambiente*. Esteban Pérez Alonso / Estanislao Arana García et. al. (eds.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2012, págs. 67-91.

- “La disciplina pública de la contaminación acústica en el ordenamiento italiano”. Leonardo J. Sánchez-Mesa Martínez (trad.) En *Régimen jurídico del ruido. Una perspectiva integral y comparada*. Estanislao Arana García / M<sup>a</sup> Asunción Torres López (coords.) Comares. Granada, 2004, págs. 433-462.

FRAILE PÉREZ DE MENDIGUREN, PEDRO. “El paisaje urbano y el conflicto”. En *Paisaje ciudadano, delito y percepción de la seguridad. Investigación interdisciplinaria del medio urbano*. Pedro Fraile, Quim Bonastra et. al. (eds.) Dykinson. Madrid, 2006, págs. 19-25.

FRANCIS, CLINTON D. / BARBER, JESSE R. “A framework for understanding noise impacts on wildlife: an urgent conservation priority”. En *Frontiers in Ecology and the Environment*, Vol. 11, Issue 6. Ecological Society of America. August, 2013, págs. 305-313.

FRISCH, WOLFGANG. “Bien jurídico, derecho, estructura del delito e imputación en el contexto de la legitimación de la pena estatal”. Ricardo Robles Planas (tr.) En *La Teoría del bien jurídico, ¿Fundamento de legitimación del Derecho penal o juego de abalorios dogmático?* Roland Hefendehl (ed.) Marcial Pons. Madrid, 2007, págs. 309-339.

FUMAGALLI, VITO. *Las piedras vivas. Ciudad y naturaleza en la Edad Media*. Carlos Alonso (tr.) Nerea. Madrid, 1989.

FURIÓ, ANTONI. “La domesticación del medio natural. Agricultura, ecología y economía en el País Valenciano en la Baja Edad Media”. En *El medio natural en la España medieval*. Actas del I Congreso sobre ecohistoria e historia medieval. Julián Clemente Ramos (ed.) Universidad de Extremadura. Cáceres, 2001, págs. 57-103.

GALERA RODRIGO, SUSANA. *La responsabilidad de las administraciones públicas en la prevención de daños ambientales*. Montecorvo. Madrid, 2001.

GALLARDO FERNÁNDEZ, LLUÍS. “El ruido: una moderna forma de criminalidad”. En *Diario La Ley (Estudios Doctrinales)*, Año 2010, núm. 7376.

GARBUTT, JOHN. *Environmental Law. A Practical Handbook* (3<sup>th</sup> ed.) Palladian Law Publishing. Bembridge (UK), 2000.

GARCÍA ÁLVAREZ, GERARDO. “La evolución del régimen jurídico del ruido”. En *Revista de Administración Pública*, núm. 186 (septiembre-diciembre) Madrid, 2011, págs. 389-424.

GARCÍA DE ENTERRÍA, EDUARDO. *La Constitución española de 1978 como pacto social y como norma jurídica* (ed. Conmemorativa del 25 aniversario de la Constitución española 1978-2003) INAP. Madrid, 2003.

GARCÍA DE ENTERRÍA, EDUARDO / FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, TOMÁS-RAMÓN. *Curso de Derecho Administrativo II* (12<sup>a</sup> ed.) Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2011.

GARCÍA LUPIOLA, ASIER. “La Unión Europea en la Conferencia sobre Cambio Climático de Copenhague: lucha frustrada a favor de un texto jurídicamente vinculante”. *Revista electrónica de Derecho Ambiental*, núm. 21, junio 2010.

GARCÍA MACHO, RICARDO. “El principio rector medio ambiente y la protección del ciudadano frente a los ruidos”. En *El Derecho Administrativo en el umbral del siglo XXI. Homenaje al Profesor Dr. D. Ramón Martín Mateo*, Tomo III. Francisco Sosa Wagner (coord.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2000, págs. 3543-3552.

GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, ANTONIO. *Tratado de Criminología* (5<sup>a</sup> ed. actualizada, corregida y aumentada) Tirant lo Blanch. Valencia, 2014.

- *Criminología. Una introducción a sus fundamentos teóricos* (7<sup>a</sup> ed.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2013.
- *Introducción al Derecho penal. Instituciones, fundamentos y tendencias del Derecho Penal*, Vol. I (5<sup>a</sup> ed.) Centro de Estudios Ramón Areces. Madrid, 2012.
- *Introducción al Derecho penal. Instituciones, fundamentos y tendencias del Derecho Penal*, Vol. II (5<sup>a</sup> ed.) Centro de Estudios Ramón Areces. Madrid, 2012.
- “Sobre la función resocializadora o rehabilitadora de la pena”. En *Cuadernos de política criminal Segunda Época*, núm. 100, abril 2010. Dykinson. Madrid, 2010, págs. 77-91.
- *Tratado de Criminología* (4<sup>a</sup> ed.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2009.
- “Tendencias del actual Derecho penal”. En *Modernas tendencias en la ciencia del Derecho penal y en la Criminología*. Actas Congreso Internacional Facultad de Derecho de la UNED. Universidad Nacional de Educación a distancia. Madrid, 2001, págs. 39-59.

GARCÍA RODRÍGUEZ, AMANDO. *La contaminación acústica. Fuentes, Evaluación, Efectos y Control*. Sociedad Española de Acústica. Madrid, 2006.

GARCÍA RUBIO, FERNANDO. “La provincia como entidad local. Un análisis tras la Ley de Racionalización”. En *La Reforma de 2013 del Régimen Local Español*. Juan Alfonso Santamaría Pastor (coord.) Fundación Democracia y Gobierno Local. Madrid, 2014, págs. 195-303.

GARCÍA RUIZ, ASCENSIÓN. “Dos caras de un mismo tipo. A propósito del delito ecológico en dos supuestos: caso Prestige y caso de la pianista ruidosa (desproporción en cuanto al resultado fáctico, víctimas y bien jurídico protegido)”. En *Revista La Ley Penal*, núm. 109, año 11 julio-agosto. La Ley. Las Rozas (Madrid), 2014, págs. 82-89.

GARCÍA SAN MARTÍN, JERÓNIMO. *El indulto. Tratamiento y control jurisdiccional. Adaptado a la reforma del Código Penal de 2015*. Tirant lo Blanch. Valencia, 2015.

GARCÍA SANZ, BENJAMÍN / GARRIDO, FRANCISCO JAVIER. *La contaminación acústica en nuestras ciudades*. Colección Estudios Sociales, núm. 12 Fundación La Caixa. Barcelona, 2003.

GARCÍA URETA, AGUSTÍN. “El ruido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Otra llamada de atención a la jurisdicción contencioso-administrativa (y también al Tribunal Constitucional): Comentario a *Martínez Martínez vs. España*, sentencia del TEDH de 18 de octubre de 2011”. En *Actualidad Jurídica Ambiental*, 21 de noviembre de 2011.

- *Derecho europeo de la biodiversidad. Aves silvestres, hábitats y especies de flora y fauna*. Iustel. Madrid, 2010.

GARCÍA Y BELLIDO, ANTONIO. *Urbanística en las Grandes Ciudades del Mundo Antiguo*. CSIC. Madrid, 2009.

GARDNER, ROYAL. C. “Regulación de la contaminación acústica en los Estados Unidos”. Juan Gutiérrez Alonso (trad.) En *Régimen jurídico del ruido. Una perspectiva integral y comparada*. Estanislao Arana García / M<sup>a</sup> Asunción Torres López (coords.) Comares. Granada, 2004, págs. 463-479.

GARLAND, DAVID. *The culture of control. Crime and Social Order in Contemporary Society* (1<sup>st</sup> ed. 4<sup>th</sup> reprinted.) Oxford University Press. New York, 2010.

GARRIDO BENGOTXEA, LUIS. “La tutela contencioso-administrativa frente a la contaminación acústica: un paseo por la actualidad jurisprudencial”. En *El derecho a una vida sin ruidos insalubres, Protección social, civil, contencioso-administrativa y penal*. Juan Ignacio Marcos González / Cristóbal Molina Navarrete (coords.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2010, págs. 125-169.

GARRIDO FALLA, FERNANDO / PALOMAR OLMEDA, ALBERTO / LOSADA GONZÁLEZ, HERMINIO. *Tratado de Derecho Administrativo. Parte General*, Vol. I. (15ª ed.) Tecnos. Madrid, 2010.

GARRORENA MORALES, ÁNGEL. “La Ley Orgánica 6/2007 y la reforma del Tribunal Constitucional. Notas para una crítica”. En *Hacia una nueva jurisdicción constitucional. Estudios sobre la ley 6/2007, de 24 de mayo de reforma de la LOTC*. Marc Carrillo (coord.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2008, págs. 215-260.

GASCÓN INCHAUSTI, FERNANDO. “Consecuencias procesales del nuevo régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas: la persona jurídica como sujeto pasivo del proceso penal”. En *Repercusiones sobre el proceso penal de la Ley Orgánica 5/2010, de Reforma del Código Penal*. Fernando Gascón Inchausti (coord.) Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2010, págs. 19-104.

GAUGER, ANJA / RABATEL-FERNEL, MAI P / KULBICKI, LOUISE ET. AL. “Ecocide is the missing 5<sup>th</sup> Crime Against Peace”. *The Ecocide Project*. Human Rights Consortium, School of Advanced Study. University of London, 2013.

GEHL, JAN / SVARRE, BIRGITTE. *How to study public life*. Island Press. Washington, 2013.

GIANNINI, M. S. “Ambiente: Saggio suoi diversi aspetti giuridici”. En *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico*, Fasc. 1, 1973, págs. 15-53.

GIBBS, CAROLE / MCGARRELL, EDMUND F. / SULLIVAN, BRANDON. “Intelligence-led policing and transnational environmental crime: A process evaluation”. En *European Journal of Criminology*. Paul Knepper (ed.) Vol. 12, Issue 2. European Society of Criminology / SAGE Publications. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore and Washington DC, 2015, págs. 242–259.

GIMBERNAT ORDEIG, ENRIQUE. *Estado de Derecho y Ley Penal*. La Ley. Madrid, 2009.

- Presentación a la obra colectiva *La teoría del bien jurídico. ¿Fundamento de legitimación o juego de abalorios dogmático?* Roland Hefendehl (ed.) Marcial Pons. Madrid, 2007, págs. 11-22.

GIMENO SENDRA, VICENTE. *Derecho Procesal Penal*. Aranzadi. Pamplona, 2012.

GLASS, DAVID. C. / SINGER, JEROME E. *Urban Stress. Experiments on Noise and Social Stressors*. Academia Press. New York / London, 1972.

GOENA VIVES, BEATRIZ. “La atenuante de colaboración”. *Criminalidad de empresa y Compliance. Prevención y reacciones corporativas*. Jesús-María Silva Sánchez (dir.) Raquel Montaner Fernández (coord.) Atelier. Barcelona, 2013, págs. 229-263.

GOINES, LISA / HAGLER, LOUIS. “Noise Pollution: A Modern Plague”. En *Southern Medical Journal*, Vol. 100, Issue 3. March, 2007, págs. 287-294.

GÓMEZ, GEORGINA M. “Field presence of Dutch NGOs: What is the impact on civil societies in the South?” *Final report: ISS Staff Group 3: Human Resources and Local Development*. International Institute of Social Studies in the Hague. Rotterdam, July 2008.

GÓMEZ INIESTA, DIEGO J. “Contaminación acústica y delito ecológico”. En *Estudios de Derecho Ambiental. Libro Homenaje al profesor Josep Miquel Prats Canut*. Gonzalo Quintero Olivares / Fermín Morales Prats (coords.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2008, págs. 915-957.

GÓMEZ-JARA DÍEZ, CARLOS. “Aspectos sustantivos relativos a la responsabilidad penal de las personas jurídicas”. En BANACLOCHE PALAO, J. / ZARZALEJOS NIETO, J. / GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. *Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Aspectos sustantivos y procesales*. La Ley. Madrid, 2011, págs. 19-126.

- *Fundamentos modernos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Bases teóricas, regulación internacional y nueva legislación española*. Julio César Faira (ed.) B de F. Montevideo /Buenos Aires, 2010.
- “La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la reforma del Código Penal”. En *Diario La Ley*, núm. 7534, Sección Tribuna, 23 de diciembre de 2010. Año XXXI. La Ley. Madrid, 2010, págs. 1-20.
- *La responsabilidad penal de las empresas en EE.UU.* Universitaria Ramón Areces. Madrid, 2006.

- “¿Imputabilidad de las personas jurídicas?”. En *Libro Homenaje al Prof. Dr. Gonzalo Rodríguez Mourullo*. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2005, págs. 425-446.

GÓMEZ LANZ, JAVIER. “Liberalismo jurídico-penal y punición de los ataques al sistema climático: la razonable impunidad de los ataques al sistema climático en el contexto de un derecho penal liberal”. En *Diario La Ley*, Nº 8498, Sección Tribuna, 11 de Marzo de 2015. La Ley. Madrid, 2015, págs. 1-22.

- “Relevancia penal de las nuevas formas de contaminación atmosférica”. En *Nuevas formas de contaminación atmosférica. Un análisis jurídico multidisciplinar*. Dykinson / Universidad Pontificia Comillas. Madrid, 2010, págs. 149-190.

GÓMEZ MARTÍN, VÍCTOR. “Falsa alarma. O sobre por qué la Ley Orgánica 5/2010 no deroga el principio *societas delinquere non potest*”. En *Garantías constitucionales y Derecho penal europeo*. Santiago Mir Puig / Mirentxu Corcoy Bidasolo (dirs.) Víctor Gómez Marín (coord.) Marcial Pons. Madrid, 2012, págs. 331-383.

GÓMEZ ORBANEJA, EMILIO / HERCE QUEMADA, VICENTE. *Derecho Procesal Penal* (10ª ed.) Artes Gráficas y Ediciones. Madrid, 1986.

GÓMEZ PÉREZ, FRANCISCO. “El papel de las policías locales en la sociedad urbana y en la calidad de vida”. En *Seguridad Urbana, Urbanismo y Entornos Urbanos*. Cuadernos de Seguridad y Policía, núm. 6. Dykinson. Madrid, 2011, págs. 15-42.

GÓMEZ RIVERO, Mª CARMEN. “El delito ecológico”. En *Derecho Penal Ambiental*. Grupo Andaluz de Investigación Jurídica. Juan Antonio Martos Núñez (dir.) Exlibris. Madrid, 2006, págs. 55-114.

GÓMEZ TOMILLO, MANUEL. “Art. 329”. “Art. 338”. En *Comentarios al Código Penal* (1ª ed.) Manuel Gómez Tomillo (dir.) Lex Nova. Valladolid, 2010, págs. 1283-1290 y 1317-1318.

- *Introducción a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el sistema español*. Lex Nova. Valladolid, 2010.

GÓMEZ TOMILLO, MANUEL / SANZ RUBIALES, ÍÑIGO. *Derecho Administrativo Sancionador. Parte General: teoría general y práctica del Derecho penal administrativo* (2ª ed.) Thomson-Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2010.



GONZÁLEZ, ALICE ELIZABETH. "What Does "Noise Pollution" Mean?" En *Journal of Environmental Protection*. Vol. 5, núm. 4, March, 2014, págs. 340-350.

- "Contaminación Sonora y Derechos Humanos". *Serie Investigaciones: Derechos Humanos en las Políticas Públicas*, núm. 2. Defensoría del Vecino de Montevideo. Uruguay, 2012, págs. 145-163.

GONZÁLEZ DÍEZ, I. / MAYORAL GONZÁLEZ, E. / VÁZQUEZ GONZÁLEZ, M.A. ET. AL. "Diseño de prototipos de materiales biosintéticos para su uso como materiales de construcción". En *Revista Seguridad y Medio Ambiente*. Año 33, núm. 132, 4º trimestre, 2013, págs. 50-66.

GONZÁLEZ I JIMÉNEZ, ALBERT. *Las diligencias policiales y su valor probatorio*. Bosch. Barcelona, 2014.

GONZÁLEZ PÉREZ, JESÚS. *Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas* (5ª ed.) Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2010.

GONZÁLEZ RÍOS, ISABEL. "La contaminación lumínica: implicaciones urbanísticas, demaniales y de eficiencia energética". En *Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica*, núm. 307 (mayo-agosto), 2008, págs. 27-66.

GONZÁLEZ-RIPOLL GARZÓN, JOSÉ JOAQUÍN. *Sociología del delito ambiental*. Servicio de Publicaciones Universidad de Córdoba. Córdoba, 1992.

GONZÁLEZ SIERRA, PABLO. *La imputación penal de las personas jurídicas. Análisis del art. 31 bis CP*. Tirant lo Blanch. Valencia, 2014.

GÓRRIZ ROYO, ELENA M. *Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente*. Tirant lo Blanch. Valencia, 2015.

- "Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (arts. 325, 326, 326 bis, 327 y 328 CP)". En *Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015*. José L. González Cussac (dir.) Ángela Matallín Evangelio / Elena Górriz Royo (coords.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2015, págs. 1001-1045.

GRANADOS PÉREZ, CARLOS. "La contaminación acústica". En *Problemas derivados de la delincuencia medioambiental*. Estudios de Derecho Judicial, núm. 52. Consejo General del Poder Judicial. Centro de Documentación Judicial. Madrid, 2004, págs. 13-41.

- “La contaminación acústica como modalidad de delito contra el medio ambiente”. En *Dogmática y Ley Penal. Libro Homenaje a Enrique Bacigalupo*, Tomo II. Jacobo López Barja de Quiroga / José Miguel Zugaldía Espinar (coords.) Marcial Pons. Madrid, 2004, págs. 969-991.

GRAY, MARK ALLAN. “The International Crime of Ecocide”. *California Western International Law Journal*, Volume 26, Spring, 1996, págs. 215-271.

GRIEFAHN, BARBARA. “Noise Pollution during the Night -A Possible Risk Factor for Health”. En *Noise Pollution: Effects and Control*. A. Lara Saenz / R.W.B. Stephens (eds.) John Wiley & Sons, Scientific Committee on Problems of the Environment, Scope 24. Great Britain, 1986, págs. 265-282.

GUARDIOLA LAGO, MARÍA JOSÉ. *Responsabilidad penal de las personas jurídicas y alcance del art.129 del Código Penal*. Tirant lo Blanch. Valencia, 2004.

GUERRERO ZAPLANA, JOSÉ. *La responsabilidad medioambiental en España*. La Ley. Madrid, 2010.

GUILLÉN LANZAROTE, AÍDA. “El derecho a la ciudad, un derecho humano emergente”. En *El Derecho a la ciudad*. Serie Derechos Humanos Emergentes, núm. 7. Institut de Drets Humans de Catalunya. Barcelona, 2011, págs. 16-27.

HAECKEL, ERNST HEINRICH. *Generelle Morphologie der Organismen: allgemeine Grundzüge der organischen Formen-Wissenschaft, mechanisch begründet durch die von Charles Darwin reformirte Descendenz-Theorie*, Vol. II. Walter de Gruyter. Berlín, 1866.

HALL, MATTHEW. “The Roles and Use of Law in Green Criminology”. En *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, Vol. 3, núm. 2, 2014, págs. 96-109.

- “Victims of Environmental Harms and Their Role in National and International Justice”. En *Emerging Issues in Green Criminology. Exploring Power, Justice and Harm*. Reece Walters / Diane S. Westerhuis / Tanya Wyatt (eds.) Palgrave Macmillan. Basingstoke (UK), 2013, págs. 218-241.

HARDIN, GARRET. “The Tragedy of the Commons”. En *Science Journal*. Vol. 162. December, 1968, págs. 1243-1248.

HARVEY, DAVID. "The right of the city". *New Left Review* 53, September-October, 2008, págs. 23-40.

- *The condition of postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change*, (reimp.) Blackwell. Oxford, 2000.

HASSEMER, WINFRIED. "¿Puede haber delitos que no afecten a un bien jurídico penal?". Beatriz Spínola Tártalo (tr.) En *La teoría del bien jurídico. ¿Fundamento de legitimación del Derecho penal o juego de abalorios dogmático?* Roland Hefendehl (ed.) Marcial Pons. Madrid, 2007, págs. 95-104.

HASSEMER, WINFRIED / MUÑOZ CONDE, FRANCISCO. *Introducción a la Criminología*. Tirant lo Blanch. Valencia, 2001.

HAVA GARCÍA, ESTHER. "Modificaciones en delitos ambientales". En *Comentario a la Reforma Penal de 2015*. Gonzalo Quintero Olivares (dir.) Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2015, págs. 655-665.

- "Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente". En *Derecho penal español. Parte Especial*, II. F<sup>co</sup> Javier Álvarez García (dir.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2011, págs. 1031-1082.
- "La reforma de los delitos contra los recursos naturales, el medio ambiente y la flora y fauna" (arts. 325, 327, 328, 329, 333, 334, 336 y 339). En *La reforma penal de 2010: Análisis y Comentarios*. Gonzalo Quintero Olivares (dir.) Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2010, págs. 287-295.
- *Protección jurídica de la fauna y flora en España*. Trotta. Madrid, 2000.
- "Delitos relativos a la protección de la flora y fauna". En *Derecho penal del medio ambiente*. Juan Terradillos Basoco (ed.) Trotta. Madrid, 1997, págs. 59-81.

HAYEK, FRIEDRICH A. *Los Fundamentos de la Libertad* (6ª ed.) José Vicente Torrente (tr.) Unión Editorial. Madrid, 1998.

HAYWARD, KEITH J. "Five Spaces of Cultural Criminology". En *The British Journal of Criminology*. Vol. 52, Issue 3. Oxford University Press, 2012, págs. 441-462.

HECKENBERG, DIANE. "The global transference of toxic harms". En *Global Environmental Harm. Criminological Perspectives*. Rob White (ed.) Willan Publishing. Devon (UK), 2010, págs. 37-61.

HECKENBERG, DIANE / WHITE, ROB. “Innovative approaches to researching environmental crime”. En *Routledge International Handbook of Green Criminology*. Nigel South / Avi Brisman (eds.) Routledge. New York, 2013, págs. 85-103.

HEINE, GÜNTER. “Accesoriedad administrativa en el Derecho penal del medio ambiente”. En *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*. P. M. Aguado (tr.), Vol. 46. Madrid, 1993, págs. 289-315.

HEFENDEHL, ROLAND. “Derecho Penal Medioambiental: ¿por qué o cómo?”. Gonzalo Medina (revisión de la traducción) En *Estudios Públicos. Revista de Políticas Públicas*, núm. 110. Centro de Estudios Públicos. Chile, otoño 2008, págs. 1- 27.

- “El bien jurídico como eje material de la norma penal”. María Martín Lorenzo (tr.) En *La Teoría del bien jurídico, ¿Fundamento de legitimación del Derecho penal o juego de abalorios dogmático?* Roland Hefendehl (ed.) Marcial Pons. Madrid, 2007, págs. 179-196.
- “¿Debe ocuparse el derecho penal de riesgos futuros? Bienes jurídicos colectivos y delitos de peligro abstracto”. Eduardo Salazar Ortuño (tr.) En *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 14 de abril de 2002, págs. 1-13.

HENDY, DAVID. *Noise. A Human History of Sound & Listening*. Profile Books Ltd. London, 2014.

HERNÁNDEZ PAIZ, ELENA. “Contaminación acústica y Registro de la Propiedad”. En *La Información territorial en el Registro de la Propiedad*. Actas / Comunicaciones Congreso Internacional. Tenerife, diciembre, 2011, págs. 86-94.

HERRERA DEL REY, JOAQUÍN JOSÉ. *La defensa jurídica contra la contaminación acústica*. La Ley. Madrid, 2008.

HERVÁS MÁS, JORGE. *Ordenación del territorio, urbanismo y protección del paisaje*. Bosch. Barcelona, 2009.

HIGGINS, POLLY / SHORT, DAMIEN / SOUTH, NIGEL. “Protecting the planet: a proposal for a law of ecocide”. *Crime, Law and Social Change*, Vol. 59, Issue 3, 2013, págs. 251-266.

HIRSCH, LILY E. *Music in American Crime Prevention and Punishment*. University of Michigan Press, 2012.

HISKES, RICHARD P. *The Human Right to a Green Future. Environmental Rights and Intergenerational Justice*. Cambridge University Press. New York, 2009.

HOMO, LEON. *La Roma Imperial y el urbanismo en la antigüedad*. La evolución de la humanidad. José Almoína (tr.) UTEHA (Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana) Tomo XX. México D.F., 1956.

HORMAZÁBAL MALAREÉ, HERNÁN. “El principio de lesividad y el delito ecológico”. En *El Nuevo Derecho Penal Español. Estudios Penales en Memoria del Profesor José Manuel Valle Muñiz*. Gonzalo Quintero Olivares / Fermín Morales Prats (coords.) Aranzadi. Elcano (Navarra), 2001, págs. 1417-1428.

HUERGO LORA, ALEJANDRO. Voz “Derecho comparado europeo: la potestad sancionadora de la Administración en Alemania, Francia e Italia”. En *Diccionario de Sanciones Administrativas*. Blanca Lozano Cutanda (dir.) Iustel. Madrid, 2010, págs. 310-316.

- *Las sanciones administrativas*. Iustel. Madrid, 2007.

HUERTA TOCILDO, SUSANA. “Principios básicos del Derecho Penal y el art. 325 del Código Penal”. En *Revista Penal*, núm. 8, julio 2001, págs. 39-52.

- “Principio de legalidad y normas sancionadoras”. En *El principio de legalidad*. Actas de las V Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional / Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 2000, págs. 11-76.

HUGHES, DAVID. *Environmental Law* (4<sup>th</sup> ed.) Butterworths LexisNexis. London, 2002.

HUGHES, DONALD J. *Ecology in Ancient Civilations*. University of New México Press. Albuquerque, 1975.

HUICI, LAURA. “Cambio climático y derechos humanos: el reconocimiento jurídico internacional del derecho a un medio ambiente sano, equilibrado y seguro”. En *Derechos Humanos y Cambio Climático*. Laura Huici / Miguel Ángel Elizalde. Serie Carta de Derechos Humanos Emergentes, núm. 5. Institut de Drets Humans de Catalunya. Barcelona, 2008, págs. 6-32.

HUNTER, PHILIP. “The human impact on biological diversity. How species adapt to urban challenges sheds light on evolution and provides clues about conservation”. En *Embo Reports*, Vol. 8, Issue 4, April, 2007, págs. 316-318.

IBÁÑEZ GARCÍA, ISAAC. “Artículos 12 a 17”. *Transparencia y Buen Gobierno. Comentarios a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno*. Elisa de la Nuez Sánchez-Casado / Carlota Tarín Quirós (coords.) La Ley. Madrid, 2014, págs. 309-315.

IGLESIAS MACHADO, SALVADOR. “La seguridad en las ciudades y los entornos urbanos”. En *Seguridad Urbana, Urbanismo y Entornos Urbanos*. Cuadernos de Seguridad y Policía, núm. 6. Dykinson. Madrid, 2011, págs. 43-69.

IRIARTE, J. / URRESTARAZU, E. / ALEGRE, M. ET AL. “Parasomnias: episodios anormales durante el sueño”. En *Revista de medicina de la Universidad de Navarra*, Vol. 49, núm. 1. Pamplona, (enero-marzo) 2005, págs. 46-52.

JAÉN VALLEJO, MANUEL. “La reformas del Código Penal (2002/2003)”. En *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, núm. 6, 2004.

JAÉN VALLEJO, MANUEL / PERRINO PÉREZ, ÁNGEL. *La reforma penal de 2015 (Análisis de las principales reformas introducidas en el Código Penal por las leyes 1 y 2/2015, de 30 de marzo)*. Dykinson. Madrid, 2015.

JAKOBS, GÜNTER. “¿Punibilidad de las personas jurídicas?”. En *El funcionalismo en Derecho penal. Libro Homenaje al profesor Günter Jakobs*. Eduardo Montealegre Lynett (coord.) Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2003, págs. 325-348.

- *Sociedad, norma y persona en una teoría de un Derecho penal funcional*. Manuel Cancio Meliá / Bernardo Feijóo Sánchez (trs.) Civitas. Madrid, 1996.

JAQUENOD DE ZSÖGÖN, SILVIA. *Derecho Ambiental. Sistemas naturales y jurídicos*. Dykinson. Madrid, 2008.

- *El derecho ambiental y sus principios rectores* (3ª ed.) Dykinson. Madrid, 1991.

JARIA I MANZANO, JORDI. “El medio ambiente como bien jurídico reconocido en la Constitución española y su significación para el Derecho penal”. En QUINTERO OLIVARES, GONZALO. *Derecho Penal Ambiental*. Tirant lo Blanch. Valencia, 2013, págs. 21-45.

JARIA I MANZANO, JORDI / VERNET I LLOBET, JAUME. “El Derecho ambiental en un contexto de cambio de paradigma del discurso jurídico”. En *Estudios de Derecho Ambiental. Libro Homenaje al profesor Josep Miquel Prats Canut*. Gonzalo Quintero Olivares / Fermín Morales Prats (coords.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2008. págs. 395-409.

JARQUE, SERGIO / QUIRÓS, LAIA / GRIMALT, JOAN O. et al. “Background fish feminization effects in European remote sites”. En *Nature Scientific Reports* 5, Article number: 11292, 10 June 2015.

JÁUREGUI, GURUTZ. “La emergencia de un nuevo orden jurídico-institucional: el Estado y la Constitución en la era de la globalización”. En *Derecho, Globalización, Riesgo y Medio Ambiente*. Esteban Pérez Alonso / Estanislao Arana García et. al. (eds.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2012, págs. 41-66.

JAVATO MARTÍN, ANTONIO M<sup>a</sup>. “Artículo 330”. *Comentarios al Código Penal* (1<sup>a</sup> ed.) Manuel Gómez Tomillo (dir.) Lex Nova. Valladolid, 2010, págs. 1290-1292.

JERICÓ OJER, LETICIA. “La tutela penal del ruido”. En *El derecho contra el ruido*. José Francisco Alenza García (dir.) Civitas. Cizur Menor (Navarra), 2013, págs. 365-407.

JIMÉNEZ DÍAZ, M<sup>a</sup> JOSÉ. “Los trastornos del sueño como causa de ausencia de acción penal”. En *Revista la Ley*. Año XIX, núm. 4631. Madrid, 18 de septiembre de 1998, págs. 1-6.

JIMÉNEZ SHAW, CONCEPCIÓN. “Agua y desarrollo sostenible. Trascendencia ambiental de la desalación”. En *Desarrollo sostenible y protección del medio ambiente*. José Luis Piñar Mañas (dir.) Civitas. Madrid, 2002, págs. 125-156.

JONAS, HANS. *El principio vida. Hacia una biología filosófica*. José Mardomingo (trad.) Trotta. Madrid, 2000.

- *El principio de responsabilidad: ensayo de una ética para la civilización tecnológica*. Herder. Barcelona, 1995.

JORDANO FRAGA, JESÚS. “El futuro del Derecho ambiental”. *Medio Ambiente y Derecho: Revista electrónica de derecho ambiental*, núm. 24, febrero 2013.

- “Análisis de la Ley 27/2006 en cuanto al acceso a la justicia, en especial el principio de legitimación en los contenciosos ambientales”. *Examen de la nueva Ley de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia de medioambiente*. Blanca Lozano Cutanda / Faustino Gutiérrez-Alviz Conradi (dirs.) Consejo General del Poder Judicial. Centro de Documentación Judicial. Madrid, 2008.
- Voz “Desarrollo sostenible: el equilibrio entre dos valores constitucionales (medio ambiente y economía) en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. En *Diccionario de Derecho Ambiental*. Enrique Alonso García / Blanca Lozano Cutanda (dirs.) Iustel. Madrid, 2006, págs. 502-512.

- *La protección del derecho a un medio ambiente adecuado*. Bosch. Barcelona, 1995.

JORGE BARREIRO, AGUSTÍN. “El bien jurídico protegido en los delitos contra el medio ambiente en el CP de 1995”. En *Estudios sobre la protección penal del medio ambiente en el ordenamiento jurídico español*. Comares. Granada, 2005, págs. 39-46.

JUANETY DORADO, CARMEN / ANARTE BORRALLA, ENRIQUE. “Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente”. En *Derecho Penal. Parte Especial*, Vol. III. Javier Boix Reig (dir.) Iustel. Madrid, 2012, págs. 133-167.

JUSTE RUIZ, JOSÉ. “El Derecho Internacional frente a los desafíos ambientales globales”. En *Derecho, Globalización, Riesgo y Medio Ambiente*. Esteban Pérez Alonso / Estanislao Arana García et. al. (eds.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2012, págs. 119-141.

JUSTE RUIZ, JOSÉ / CASTILLO DAUDÍ MIREYA. *La protección del medio ambiente en el ámbito internacional y en la Unión Europea*. Tirant lo Blanch. Valencia, 2014.

KASELOO, PAUL. *Synthesis of Noise Effects on Wildlife Population*. Publication núm. FHWA-HEP-06-016. U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration. September, 2004, págs. 1-75.

KATZ, JACK. *Seductions of Crime: Moral and Sensual Attractions in Doing Evil*. Basic Books. New York, 1988.

KAVALER, LUCY. *Ruido. La nueva amenaza*. Luis Coco (tr.) Tres Tiempos. Buenos Aires, 1977.

KEIZER, GARRET. *The Unwanted Sound of Everything We Want: A Book about Noise*. Public Affairs. New York, 2010.

KELSEN, HANS. *Teoría pura del derecho* (16ª ed.) Porrúa. México, 2009.

KINGSLEY, PETER. *Filosofía antigua, misterios y magia. Empédocles y la tradición pitagórica*. Alejandro Coroleu (tr.) Atalanta. Girona, 2008.

KISS, ALEJANDRO. “Delito de lesión y delito de peligro concreto: ¿qué es lo adelantado?”. En *Indret: Revista para el Análisis del Derecho*, núm. 1. Universidad Pompeu Fabra. Barcelona, enero 2015, págs. 1-25.

KOELSCH, STEFAN. “Towards a neural basis of music-evoked emotions”. En *Trends in Cognitive Sciences*, Vol. 14, núm. 3. Marzo, 2010, págs. 131-137.

KOLB, FRANK. *La ciudad en la Antigüedad*. Elena Bombín (tr.) Gredos. Madrid, 1992.



KYBA, CHRISTOPHER C. M. / RUHTZ, THOMAS / FISCHER, J ET. AL. “Lunar skylight polarization signal polluted by urban lighting”. En *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, Vol. 116, D24106, 2011, págs. 1-7.

LAFUENTE BENACHES, MERCEDES. *Fiestas locales y derecho al descanso*. Colección Biblioteca de Derecho Municipal. Santiago Muñoz Machado (dir.) Iustel. Madrid, 2010.

LAGO CANDEIRA, ALEJANDRO. Voz “Derecho Internacional del medio ambiente”. En *Diccionario de Derecho Ambiental*. Enrique Alonso García / Blanca Lozano Cutanda (dirs.) Iustel. Madrid, 2006, págs. 467-483.

- Voz “Paisaje, Protección”. En *Diccionario de Derecho Ambiental*. Enrique Alonso García / Blanca Lozano Cutanda (dirs.) Iustel. Madrid, 2006, págs. 907-921.

LAMARQUE, JEAN. *Le droit contre le bruit*. L.G.D.J. París, 1975.

LAMBERT, SUZANNE. “Statutory Nuisance and Controls over Noise” Chapter 16. En *Burnett-Hall on Environmental Law* (3<sup>th</sup> ed.) Richard Burnett-Hall / Brian Jones (eds.) Sweet & Maxwell. London, 2012.

LASCURAÍN SÁNCHEZ, JUAN ANTONIO. “Salvar al oficial Ryan. (Sobre la responsabilidad penal del oficial de cumplimiento)”. En *Responsabilidad de la Empresa y Compliance. Programas de prevención, detección y reacción penal*. Santiago Mir Puig / Mirentxu Corcoy Bidasolo / Víctor Gómez Martín (dirs.) Juan Carlos Hortal Ibarra / Vicente Valiente Ivañez (coords.) B de F / Edisofer. Madrid, 2014, págs. 301-336.

- “Elogio del artículo 325 del Código Penal”. En *Estudios sobre la protección penal del medio ambiente en el ordenamiento jurídico español*. Agustín Jorge Barreiro (dir.) Comares. Granada, 2005, págs. 265-294.

LAVILLA RUBIRA, JUAN JOSÉ / MENÉNDEZ ARIAS, M<sup>a</sup> JOSÉ. *Todo sobre el medio ambiente*. Praxis. Barcelona, 1996.

LEFEBVRE, HENRI. *El Derecho a la ciudad* (4<sup>a</sup> ed.) J. González-Pueyo (tr.) Península. Barcelona, 1978.

LEOPOLD, ALDO. *A Sand County Almanac, and Sketches Here and There*. Oxford University Press. New York, 1949.

- *Una ética de la Tierra*. Jorge Riechmann (ed.) Isabel Lucio-Villegas / Jorge Riechmann (trads.) Los Libros de la Catarata. Madrid, 2000.

LESMESS SERRANO, CARLOS. “Los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente”. En LESMESS SERRANO, CARLOS et. al. *Derecho Penal Administrativo (Ordenación del Territorio, Patrimonio Histórico y Medio Ambiente)*. Comares. Granada, 1997, págs. 292-391.

LEZERTÚA RODRÍGUEZ, MANUEL. “La protección del medio ambiente en el Consejo de Europa”. En *Derecho europeo medioambiental: La protección del medio ambiente en la Unión Europea. Aspectos críticos*. Antonio Vercher Noguera (dir.) Consejo general del Poder Judicial. Madrid, 2008, págs. 85-162.

LLORENTE SÁNCHEZ-ARJONA, MERCEDES. “La prueba de la relación de causalidad en los daños ambientales”. En *Derecho Penal Ambiental*. Grupo Andaluz de Investigación Jurídica. Juan Antonio Martos Núñez (dir.) Exlibris. Madrid, 2006, págs. 315-329.

LOPERENA ROTA, DEMETRIO I. “El derecho al desarrollo sostenible”. En *El derecho a un medio ambiente adecuado*. Antonio Embid Irujo (dir.) Iustel. Madrid, 2008, págs. 63-83.

- “La perplejidad del iusambientalista”. En *El Derecho Administrativo en el umbral del siglo XXI. Homenaje al Profesor Dr. D. Ramón Martín Mateo*, Tomo III. Francisco Sosa Wagner (coord.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2000, págs. 3567-3588.
- “La protección de la salud y el medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona en la Constitución”. En *Estudios sobre la Constitución Española. Homenaje al profesor Eduardo García de Enterría*, Vol. II. Civitas. Madrid, 1991, págs. 1458-1484.

LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, JACOBO. *Tratado de Derecho Procesal Penal* (4ª ed.) Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2010.

LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, JACOBO / RODRÍGUEZ RAMOS, LUIS / RUIZ DE GORDEJUELA LÓPEZ, LOURDES. *Códigos penales españoles. Recopilación y concordancias*. Akal. Madrid, 1988.

LÓPEZ BARRIO, ISABEL. “Efectos sociopsicológicos del ruido”. En *Introducción a la psicología ambiental*. Florencio Jiménez Burillo / Juan Ignacio Aragonés (comps.) Alianza Editorial. Madrid, 1986, págs. 127-146.

LÓPEZ CANDELA, JAVIER. “Las competencias en materia de medio ambiente de las corporaciones locales”. En *Cuadernos de Derecho Local*, núm. 4. Fundación Democracia y Gobierno Local. Febrero, 2004, págs. 71-87.

LÓPEZ JACOISTE, JOSÉ JAVIER. *Transformaciones y paradojas de la Responsabilidad extracontractual* (Discurso leído el día 10 de enero de 1994, en su recepción pública como académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y legislación). Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Madrid, 1994, págs. 85-91.

LÓPEZ SAKO, MASAO J. “Algunos problemas de la regulación de la contaminación lumínica”. En *Derecho, Globalización, Riesgo y Medio Ambiente*. Esteban Pérez Alonso / Estanislao Arana García et. al. (eds.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2012, págs. 599-617.

LORCA NAVARRETE, JOSÉ F. / LORCA MARTÍN DE VILLODRES, M<sup>a</sup> ISABEL. *Derechos fundamentales y jurisprudencia* (4<sup>a</sup> ed.) Pirámide. Madrid, 2010.

LORCA MARTÍN DE VILLODRES, M<sup>a</sup> ISABEL. “Felicidad y Constitucionalismo”. En *Revista de Derecho Político*, núm. 88 septiembre-diciembre. UNED. Madrid, 2013, págs. 123-365.

LORENZETTI, RICARDO. *Teoría del Derecho Ambiental*. Porrúa. México, 2008.

LOVELOCK, JAMES. *The revenge of Gaia. Why the Earth is Fighting Back –and How We Can Still Save Humanity*. Penguin Books. London, 2006.

LOZANO CUTANDA, BLANCA. “Introducción al Derecho Ambiental y a la intervención administrativa para la protección del Medio Ambiente”. En LOZANO CUTANDA, BLANCA / ALLI TURRILLAS, JUAN-CRUZ. *Administración y legislación Ambiental* (6<sup>a</sup> ed.) Dykinson. Madrid, 2011, págs. 107-144.

- *Derecho ambiental administrativo* (11<sup>a</sup> ed.) La Ley. Madrid, 2010.
- “Environmental law”. En *Comparative view of administrative law issues*. Spanish Agency for International Development Cooperation. Madrid, 2010, págs. 352-384.
- “Análisis general de la Ley 27/2006 de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente”. En *Examen de la nueva Ley de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia de medioambiente*. Blanca Lozano Cutanda / Faustino Gutiérrez-Alviz Conradi (dirs.) Consejo General del Poder Judicial. Centro de Documentación Judicial. Madrid, 2008, págs. 171-206.
- Voz “Información: Acceso y Difusión en Materia Ambiental”. En *Diccionario de Derecho Ambiental*. Enrique Alonso García / Blanca Lozano Cutanda (dirs.) Iustel. Madrid, 2006, págs. 716-732.

- Voz “Infracciones y sanciones administrativas para la protección del medio ambiente”. En *Diccionario de Derecho Ambiental*. Enrique Alonso García / Blanca Lozano Cutanda (dirs.) Iustel. Madrid, 2006, págs. 734 y 735.
- “La evolución de la normativa comunitaria del ruido: hacia un planteamiento común europeo de la lucha contra la contaminación acústica”. En *Revista Interdisciplinar de Gestión Ambiental*, Vol. 62, febrero 2004, págs. 7-25.
- “La responsabilidad de la persona jurídica en el ámbito sancionador administrativo (a propósito de la STC 246/1991)”. En *Revista de Administración Pública*, núm. 129. Madrid, 1992, págs. 211-240.

LOZANO CUTANDA, BLANCA/ ALLI TURILLAS, JUAN-CRUZ. *Administración y Legislación Ambiental*. (6ª ed.) Dykinson. Madrid, 2011.

LOZANO ESCRIBANO, TOMÁS. Voz “Pueblos Indígenas y Medio Ambiente”. En *Diccionario de Derecho Ambiental*. Enrique Alonso García / Blanca Lozano Cutanda (dirs.) Iustel. Madrid, 2006, págs. 1011-1024.

LUHMANN, NIKLAS. *Observaciones de la modernidad. Racionalidad y contingencia en la sociedad moderna*. Carlos Fortea Gil (tr.) Paidós. Barcelona, 1997.

LUKE, TIMOTHY W. *Ecocritique. Contesting the Politics of Nature, Economy, and Culture*. University of Minnesota Press. Minneapolis, 1997.

LYNCH, MICHAEL J. “Reflections on Green Criminology and its Boundaries. Comparing Environmental and Criminal Victimization and Considering Crime from an Eco-city Perspective”. En *Routledge International Handbook of Green Criminology*. Nigel South / Avi Brisman (eds.) Routledge. New York, 2013, págs. 43-57.

- “The greening of criminology: A perspective on the 1990s”. En *The Critical Criminologist*, Vol. 2. Issue 3, 1990, págs. 1-4, 11-12.

LYNCH, MICHAEL J. / LONG, MICHAEL A. / STRETESKY, PAUL B. “Anthropogenic Development Drives Species to Be Endangered: Capitalism and the Decline of Species”. En *Green Harms and Crimes. Critical Criminology in a Changing World*. Series: Critical Criminological Perspectives. Ragnhild Aslaug Sollund (ed.) Ed. Palgrave Macmillan, June 2015, págs. 117-146.

LYNCH, MICHAEL J. / STRETESKY, PAUL B. *Exploring Green Criminology. Toward a Green Criminological Revolution*. Ashgate. Aldershot (UK), 2014.

- “Global warming, global crime: a green criminological perspective”. En *Global Environmental Harm. Criminological Perspectives*. Rob White (ed.) Willan Publishing. Devon (UK), 2010, págs. 62-84.

MACÉ, FEDERICO. *La sabiduría pitagórica. Más de 200 sentencias pitagóricas escogidas, con dos hermosas versiones de los celeberrimos versos de oro precedidas de comentarios sobre la vida de Pitágoras y su escuela filosófica*. Marsay. Sevilla, 2001.

MACÍA, MARÍA A. / HUCI, CARMEN. “Apreciación subjetiva del paisaje: un ejemplo de utilización de rejilla de Kelly”. En *Introducción a la psicología ambiental*. Florencio Jiménez Burillo / Juan Ignacio Aragonés (comps.) Alianza Editorial. Madrid, 1986, págs. 387-405.

MACÍAS CASTILLO, AGUSTÍN. *El daño causado por el ruido y otras inmisiones*. La Ley. Madrid, 2004.

MCELDOWNEY, JOHN & SHARRON. *Environmental Law*. Pearson Education. Essex (UK), 2010.

MACLEOD, BRUCE. “Facing the Muzak”. En *Popular Music & Society*. Vol. 7, Issue 1. Routledge, 1979, págs. 18-31.

MCMANUS, FRANCIS. “Noise law in the United Kingdom -a very British solution?” En *Legal Studies*, Vol. 20, Issue 2. Imelda Maher et. al. (eds) Society of Legal Scholars. June, 2000, págs. 264-290.

MALAVÉ OSUNA, BELÉN. *Legislación urbanística en la Roma Imperial. A propósito de una Constitución de Zenón*. Servicio de Publicaciones, Universidad de Málaga. Málaga, 2000.

MANAHAN, STANLEY E. *Fundamentals of Environmental and Toxicological Chemistry: sustainable science* (4<sup>th</sup> ed.) CRC Press. Boca Raton (Florida), 2013.

MANGAS MAJARRÉS, JULIO. *Leyes coloniales y municipales de la Hispania romana*. Cuadernos de Historia, Vol. 86 Arco Libros. Madrid, 2001.

- *Aldea y ciudad en la Antigüedad urbana*. Cuadernos de Historia, Vol. 7. Arco Libros. Madrid, 1996.

MANN, THOMAS / WEDEMEYER, HEIDE. “La regulación de la contaminación acústica en Alemania”. Francisco Javier Durán Ruiz (trad.) En *Régimen jurídico del ruido. Una perspectiva integral y comparada*. Estanislao Arana García / M<sup>a</sup> Asunción Torres López (coords.) Comares. Granada, 2014, págs. 341-366.

MARCOS GONZÁLEZ, JUAN IGNACIO / GONZÁLEZ PÉREZ, BEGOÑA. “Un emergente ámbito de protección medioambiental: la responsabilidad del empresario como causante del ruido en los lugares de trabajo”. En *El derecho a una vida sin ruidos insalubres. Protección social, civil, contencioso-administrativa y penal*. Juan Ignacio Marcos González / Cristóbal Molina Navarrete (coords.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2010. págs. 49-94.

MARGALEF LÓPEZ, RAFAEL. *Ecología* (8ª ed.) Omega. Barcelona, 1998.

MARÍN CABRERA, CIPRIANO. “La iniciativa Starlight: el derecho a observar las estrellas”. *Física y Sociedad (ejemplar dedicado a: Contaminación lumínica y eficiencia energética)*, núm. 21. Colegio Oficial de Físicos, 2011, págs. 32-34.

MARÍN ROYO, LUIS MARÍA. *El Fuero de Tudela. Unas normas de convivencia en la Tudela Medieval para cristianos, musulmanes y judíos*. Luis María Marín Royo (ed.) Tudela, 2006.

MARINA, JOSÉ ANTONIO. *Anatomía del miedo. Un tratado sobre la valentía*. Anagrama. Barcelona, 2006.

MARQUÉS I BANQUÉ, MARÍA. “Delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos”. En *Comentario a la Reforma Penal de 2015*. Gonzalo Quintero Olivares (dir.) Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2015, págs. 667-689.

MARRERO MELÉNDEZ, MADELYN / FREIRE GUERRERO, ANTONIO / SOLÍS-GUZMAN, JAIME ET. AL. “Estudio de la huella ecológica de la transformación del uso del suelo”. En *Seguridad y Medio Ambiente*. Año 34, núm. 136. Fundación Mapfre. Madrid, cuarto trimestre 2014, págs. 6-14.

MARTÍ MARTÍ, JOAQUIM. *La defensa frente a la contaminación acústica y otras inmisiones*. Bosch. Barcelona, 2008.

MARTÍN LORENZO, MARÍA. *Memento Práctico. Derecho Penal 2011*. Fernando Molina Fernández (coord.) Francis Lefebvre. Santiago de Compostela, 2010-2011, págs. 1223-1244.

MARTÍN MATEO, RAMÓN. “El ruido una problemática social básicamente interdisciplinar”. En *La responsabilidad civil y su problemática actual*. Juan Antonio Moreno Martínez (coord.) Dykinson. Madrid, 2007, págs. 519-535.

- *Tratado de Derecho Ambiental*. Tomo IV (Actualización) Edisofer. Madrid, 2003.

- Prólogo a la obra colectiva *Régimen jurídico del ruido. Una perspectiva integral y comparada*. Arana García, Estanislao / Torres López, M<sup>a</sup> Asunción (coords.) Comares. Granada, 1994, págs. XIX-XXI.
- *Tratado de Derecho Ambiental*, Vols. II y IV. Trivium. Madrid, 1992.
- *Tratado de Derecho Ambiental*, Vol. I. Trivium. Madrid, 1991.
- “El delito ambiental. Reflexiones desde el derecho administrativo”. En *Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica*, núm. 238 (abril-junio) INAP. Madrid, 1988, págs. 1033-1054.
- *Derecho Ambiental*. Instituto de Estudios de Administración Local. Madrid, 1977.

MARTÍN MONROY, MANUEL. *Manual del Ruido*. Manuales de diseño ICARO de Calidad Ambiental en la Edificación, Vol. IV. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 2006.

MARTÍN MORALES, M<sup>a</sup> LUISA. “Incidencia del ruido”. En *Medioambiente urbano*. Faustino Gutiérrez-Alviz Conradi (dir.) Estudios de Derecho Judicial 82-2005. Consejo General del Poder Judicial. Madrid, 2006, págs. 49-71.

MARTÍN MORALES, RICARDO. “Constitución y medio ambiente”. En *Derecho, Globalización, Riesgo y Medio Ambiente*. Esteban Pérez Alonso / Estanislao Arana García et. al. (eds.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2012, págs. 549-560.

MARTÍN MORALES, RICARDO / REQUENA LÓPEZ, TOMÁS / GUILLÉN LÓPEZ, ENRIQUE. “Aspectos constitucionales de la Ley del Ruido: derechos, fuentes y competencias”. En *Régimen jurídico del ruido. Una perspectiva integral y comparada*. Estanislao Arana García / M<sup>a</sup> Asunción Torres López (coords.) Comares. Granada, 2014, págs. 159-181.

- “Aspectos constitucionales de la Ley del Ruido: derechos, fuentes y competencias”. En *Régimen jurídico del ruido: una perspectiva integral y comparada*. Estanislao Arana García / M<sup>a</sup> Asunción Torres López (coords.) Comares. Granada, 2004, págs. 159-181.

MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, LORENZO. “El ruido: reciente respuesta legal y jurisprudencial”. En *Foro. Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales, Nueva Época*, núm. 1. Universidad Complutense de Madrid, 2005, págs. 11-43.

- “El ruido: una pesadilla del Justicia”. En *Revista Interdisciplinar de Gestión Ambiental*. Año 5, núm. 58. La Ley-Actualidad, 2003, págs. 161-172.
- *La Europa de los derechos humanos*. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 1998.

- “Tres Sentencias interesantes sobre el ruido”. En *Revista Vasca de Administración Pública*, núm.41 (enero-abril) IVAP. Bilbao, 1995, págs. 661-677.
- “La defensa frente al ruido ante el Tribunal Constitucional (Auto de 13 de octubre de 1987, en relación con la clausura de un bar en Sevilla)”. En *Revista de Administración Pública*, núm. 115 (enero-abril) Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1988, págs. 205-231.
- “Los ruidos evitables” (Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Zaragoza, de 10 de octubre de 1988). En *Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica*, núm. 238. INAP. Madrid, 1988, págs. 1275-1282.
- “Problemas jurídicos de la tutela del paisaje”. En *Revista de Administración Pública*, núm. 70-72. Madrid, 1973, págs. 423-442.

MARTÍN SÁNCHEZ, M<sup>a</sup> JESÚS. “Paisaje de fondo o paisaje pleno: los paisajes y jardines del Madrid galdosiano”. En *Espacio, Tiempo y Forma* (Serie VII, H<sup>a</sup> del Arte, t. 11) UNED. Madrid, 1998, págs. 397-425.

MARTÍNEZ ALIER, JOAN. “¿Quién debe a quién?” En MARTÍNEZ ALIER, JOAN / OLIVERES, ARCADÍ. *¿Quién debe a quién?: Deuda ecológica y deuda externa*. Público. Madrid, 2010, págs. 43-78.

MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, CARLOS. *Derecho penal económico y de la empresa. Parte especial*. (2<sup>a</sup> ed.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2005.

MARTÍNEZ LLORENTE, JIMENA / PETERS, JENS. “Contaminación acústica y ruido”. En *Cuadernos de ecologistas en acción*, núm. 21. Ecologistas en Acción. Madrid, febrero 2013.

MARTÍNEZ VÁZQUEZ, FRANCISCO. “La intervención administrativa frente a las nuevas formas de contaminación atmosférica”. En *Nuevas formas de contaminación atmosférica. Un análisis jurídico multidisciplinar*. Dykinson / Universidad Pontificia Comillas. Madrid, 2010, págs. 117-147.

MARTÍNEZ VÁZQUEZ, FRANCISCO / DE MIGUEL PERALES, CARLOS. “Leyes administrativas generales sobre contaminación atmosférica”. En *Nuevas formas de contaminación atmosférica. Un análisis jurídico multidisciplinar*. Dykinson / Universidad Pontificia Comillas. Madrid, 2010, págs. 33-83.



- “Protección del medio ambiente a través de la protección de ciertos derechos fundamentales”. En *Nuevas formas de contaminación atmosférica. Un análisis jurídico multidisciplinar*. Dykinson / Universidad Pontificia Comillas. Madrid, 2010, págs. 85-115.

MARTOS NÚÑEZ, JUAN ANTONIO. *El delito de contaminación acústica*. Iustel. Madrid, 2010.

MATA Y MARTÍN, RICARDO. *Bienes jurídicos intermedios y delitos de peligro. Aproximación a los Presupuestos de la técnica de peligro para los delitos que protegen bienes jurídicos intermedios (-tutela penal del medio ambiente, delitos económicos, seguridad del tráfico-)*. Comares. Granada, 1997.

MATALLÍN EVANGELIO, ÁNGELA. “Delito de acoso (artículo 172 ter)”. En *Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015*. José L. González Cussac (dir.) Ángela Matallín Evangelio / Elena Górriz Royo (coords.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2015, págs. 575-591.

- “Protección penal de la biodiversidad (arts. 332, 334 y 335 CP)”. En *Comentario a la Reforma Penal de 2015*. Gonzalo Quintero Olivares (dir.) Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2015, págs. 1047-1071.

MATELLANES MERCHÁN, JOSÉ VICENTE. *El medio natural en la España medieval*. Actas del I Congreso sobre ecohistoria e historia medieval. Julián Clemente Ramos (ed. lit.) Universidad de Extremadura. Cáceres, 2001, págs. 335-356.

MATELLANES RODRÍGUEZ, NURIA. *Derecho penal del medio ambiente*. Iustel. Madrid, 2008.

MATEO AYALA, ELADIO. *La eximente de anomalía o alteración psíquica en el Derecho penal comparado*. Dykinson. Madrid, 2007.

- *La imputabilidad del enfermo psíquico: un estudio de la eximente de anomalía o alteración psíquica en el Código Penal español*. Edersa / Instituto de Criminología de la Universidad Complutense de Madrid. Madrid, 2003.

MATEO FLORÍA, PEDRO. *La prevención del ruido en la empresa*. Fundación Confermetal. Madrid, 1999.

MATEOS RODRÍGUEZ-ARIAS, ANTONIO. *Derecho penal y protección del medio ambiente*. Colex. Madrid, 1992.

MAYORDOMO RODRIGO, VIRGINIA. “El indulto de las personas jurídicas. Fundamento en razones de equidad, justicia o utilidad pública”. En *Responsabilidad penal de las personas jurídicas*. José Luis de la Cuesta Arzamendi (dir.) Norberto de la Mata Barranco (coord.) Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2013, págs. 267-308.

MERCADO PACHECO, PEDRO. “Desarrollo sostenible y gobernanza: retóricas del derecho global y de la justicia ambiental”. En *Derecho, Globalización, Riesgo y Medio Ambiente*. Esteban Pérez Alonso / Estanislao Arana García et. al. (eds.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2012, págs. 93-117.

MENDO ESTRELLA, ÁLVARO. *El delito ecológico del artículo 325.1 del Código Penal*. Tirant lo Blanch. Valencia, 2009.

MENDOZA CALDERÓN, SILVIA. “La protección penal del medio ambiente en Alemania, Italia, Francia y España: Estudio de Derecho Penal comparado”. En *Derecho Penal Ambiental*. Grupo Andaluz de Investigación Jurídica. Juan Antonio Martos Núñez (dir.) Exlibris. Madrid, 2006, págs. 243-311.

MESTRE DELGADO, ESTEBAN. “Delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente”. En *Delitos y faltas. La parte especial del Derecho penal*. Carmen Lamarca Pérez (coord.) Colex. Madrid, 2012, págs. 521-552.

- “Delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente”. En *Derecho Penal. Parte Especial* (6ª ed.) Carmen Lamarca Pérez (coord.) Colex. Madrid, 2011, págs. 455-483.

MIALOT, CAMILLE. “La lucha contra el ruido en Derecho francés”. Camille Mialot / Enrique Guillén López (trads.) En *Régimen jurídico del ruido. Una perspectiva integral y comparada*. Estanislao Arana García / Mª Asunción Torres López (coords.) Comares. Granada, 2004, págs. 367-379.

MICHELS, ULRICH. *Atlas de Música*, Vol. I. León Mames (tr.) Alianza Atlas. Madrid, 1982.

MILIONE FUGALI, CIRO. “El medio ambiente como valor jurídico en el marco de la Constitución italiana”. En *Nuevas Políticas Públicas: Anuario multidisciplinar para la modernización de las Administraciones Públicas*, núm. 4. Instituto Andaluz de Administración Pública, 2008, págs. 233-249.

MIR PUIG, SANTIAGO. “Las nuevas “penas” para personas jurídicas: una clase de “penas” sin culpabilidad. En *Responsabilidad de la Empresa y Compliance. Programas de prevención, detección y reacción penal*. Santiago Mir Puig / Mirentxu Corcoy Bidasolo / Víctor Gómez Martín (dirs.) Juan Carlos Hortal Ibarra / Vicente Valiente Ivañez (coords.) B de F / Edisofer. Madrid, 2014, págs. 3- 14.

- *Derecho penal. Parte General* (7ª ed.) Reppertor. Barcelona, 2010.
- “Límites del normativismo en Derecho penal”. En *Derecho penal del siglo XXI*. Cuadernos de Derecho Judicial VIII-2007. Centro de Documentación Judicial. Consejo General del Poder Judicial. Madrid, 2008, págs. 41-81.
- “Contexto internacional y español de la contrarreforma del Derecho penal español”. En *Política criminal y reforma penal*. Santiago Mir Puig / Mirentxu Corcoy Bidasolo (dirs.) Víctor Gómez Martín (coord.) Edisofer. Madrid, 2007, págs. 15-32.

MOLINA NAVARRETE, CRISTÓBAL. “Fundamentos constitucionales de la tutela frente al ruido indeseado: el derecho fundamental a vivir en ambientes libres de violencia acústica”. En *El derecho a una vida sin ruidos insalubres. Protección social, civil, contencioso-administrativa y penal*. Juan Ignacio Marcos González / Cristóbal Molina Navarrete (coords.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2010, págs. 19-39.

MONESTER MORALES, JUAN-LUIS. *Defensa frente al Ruido. Jurisprudencia y Formularios* (2ª ed.) Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2014.

MONGE FERNÁNDEZ, ANTONIA. “Excurso sobre los delitos de incendios forestales”. En *Derecho Penal Ambiental*. Grupo Andaluz de Investigación Jurídica. Juan Antonio Martos Núñez (dir.) Exlibris. Madrid, 2006, págs. 197-218.

MONTANER FERNÁNDEZ, RAQUEL. “La autorregulación normativa en el derecho penal ambiental: problemas desde la perspectiva del principio de legalidad”. En *La crisis del principio de legalidad en el nuevo Derecho penal: ¿decadencia o evolución?* Juan Pablo Montiel (ed.) Marcial Pons. Madrid, 2012, págs. 289-313.

- “Los delitos contra el medio ambiente”. En *El nuevo Código Penal. Comentarios a la reforma*. Jesús-María Silva Sánchez (dir.) Nuria Pastor Muñoz (coord.) La Ley. Madrid, 2012, págs. 509-558.
- “Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente”. En *Memento Experto: Reforma Penal 2010*. Francis Lefebvre. Madrid, 2010, págs. 369-409.

MONTANER, JOSEP MARÍA. “El derecho al espacio público: principios y ejemplos”. En *El Derecho a la ciudad*. Serie Derechos Humanos Emergentes 7. Institut de Drets Humans de Catalunya. Barcelona, 2011, págs. 87-101.

MOORE, SUE E. / REEVES, RANDALL R. / SOUTHALL, BRANDON L. ET. AL. “A New Framework for Assessing the Effects of Anthropogenic Sound on Marine Mammals in a Rapidly Changing Arctic”. *BioScience*. Tim Beardsley (ed.) Vol. 62, Issue 3. American Institute of Biological Sciences. March, 2012, págs. 289-295.

MORAL SORIANO, LEONOR. “La Directiva de ruido ambiental: el nuevo marco para la actuación comunitaria”. En *Régimen jurídico del ruido. Una perspectiva integral y comparada*. Estanislao Arana García / M<sup>a</sup> Asunción Torres López (coords.) Comares. Granada, 2004, págs. 1-51.

MORALES DELGADO, FRANCISCO. “Sobre la cuantificación del ruido”. En *El ruido en las ciudades. Análisis jurídico-práctico*. Jorge Pinedo Hay (coord.) Bosch. Barcelona, 2009, págs. 465-484.

MORALES MUÑIZ, ARTURO / MORALES MUÑIZ, DOLORES. *El medio natural en la España medieval*. Actas del I Congreso sobre ecohistoria e historia medieval. Julián Clemente Ramos (ed.) Universidad de Extremadura. Cáceres, 2001, págs. 383-406.

MORALES PRATS, FERMÍN. “La reforma de los delitos contra la intimidad artículo 197 CP”. En *Comentario a la Reforma Penal de 2015*. Gonzalo Quintero Olivares (dir.) Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2015, págs. 459-467.

- “La responsabilidad penal de las personas jurídicas (arts. 31 bis, 31.2 supresión, 33.7, 66 bis., 129, 130.2 CP)”. En *La Reforma penal de 2010*. Gonzalo Quintero Olivares (dir.) Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2010, págs. 45-69.
- “El delito de contaminación ambiental: análisis del artículo 325.1 CP. La relación entre Derecho penal y Derecho administrativo medioambiental”. En *Estudios de Derecho Ambiental. Libro Homenaje al profesor Josep Miquel Prats Canut*. Gonzalo Quintero Olivares / Fermín Morales Prats (coords.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2008, págs. 1033-1066.

MOREIRA NETO, DIOGO DE FIGUEIREDO. “De la ecología a la ecoideología. De la prevención a la precaución”. En *Revista de Administración Pública*, núm. 186 (septiembre-diciembre) Madrid, 2011, págs. 481-490.

MORENO MOLINA, ÁNGEL MANUEL. “El derecho al medioambiente y su traducción en el ámbito urbanístico”. En *El derecho a un medio ambiente adecuado*. Antonio Embid Irujo (dir.) Iustel. Madrid, 2008, págs. 87-128.

MORETÓN SANZ, M<sup>a</sup> FERNANDA. “Nuevos perfiles de la responsabilidad patrimonial de los entes locales según el Tribunal Constitucional: prueba individualizada del ruido, adopción de medidas suficientes por el Ayuntamiento y doctrina del TEDH sobre intimidad personal y familiar en el ámbito domiciliario”. En *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, núm. 729, enero 2012, págs. 483-515.

MOREU CARBONELL, ELISA. “Marco jurídico de la extracción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica (*fracking*)”. En *Revista Catalana de Dret Ambiental*, Vol. III, núm. 2, 2012, págs. 1-43.

MORILLO-VELARDE PÉREZ, JOSÉ IGNACIO. “Competencias municipales: competencias delegadas e impropias”. En *Cuadernos de Derecho Local*, núm. 34. Monográfico: La revisión del Gobierno y la Administración local en la Ley 27/2013. Fundación Democracia y Gobierno Local. Febrero, 2014, págs. 71-79.

MOROTE SARRIÓN, JOSÉ VICENTE. “Art. 30”. En *Comentarios a la Ley Básica de Régimen Local*, Tomo I (3<sup>a</sup> ed.) Manuel J. Domingo Zaballos (coord.) Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2013, págs. 556-589.

MORTE, CARMEN. “El derecho a un medio ambiente sano en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”. En *El derecho a un medio ambiente adecuado*. Antonio Embid Irujo (dir.) Iustel. Madrid, 2008, págs. 351-368.

MOSSET ITURRASPE, JORGE / HUTCHINSON, TOMÁS / DONNA, EDGARDO ALBERTO. *Daño Ambiental* (2<sup>a</sup> ed.) Tomo II. Rubinzal-Culzoni. Buenos Aires, 2011.

MULERO MENDIGORRI, ALFONSO. *Introducción al medio ambiente en España*. Ariel. Barcelona, 1999.

MÜLLER-TUCKFELD, JENS CHRISTIAN. “Ensayo para la abolición del derecho penal del medio ambiente”. En *La insostenible situación del Derecho penal*. Instituto de Ciencias Criminales de Frankfurt (ed.) Área de Derecho Penal de la Universidad Pompeu Fabra (ed. española) Comares. Granada, 2000, págs. 507-530.

MUNTAÑOLA THORNBERG, JOSEP. *Introducción a la psicología ambiental*. Florencio Jiménez Burillo / Juan Ignacio Aragonés (comps.) Alianza Editorial. Madrid, 1986.

MUÑOZ CONDE, FRANCISCO / GARCÍA ARÁN, MERCEDES. *Derecho Penal. Parte General* (8ª ed.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2010.

MUÑOZ CONDE, FRANCISCO / LÓPEZ PEREGRÍN, CARMEN / GARCÍA ÁLVAREZ, PASTORA. *Manual de Derecho penal medioambiental*. Tirant lo Blanch. Valencia, 2013.

MUÑOZ CUESTA, FRANCISCO JAVIER. “Ruido procedente de lugares de ocio: una conducta habitual con escasa respuesta penal”. *Revista Aranzadi Doctrinal*, núm. 5, 2012, parte Tribuna. Aranzadi. Pamplona, 2012, págs. 11-18.

MUÑOZ LORENTE, JOSÉ. “La (mala) técnica legislativa de recepción de la normativa europea en el ámbito de los delitos medioambientales”. *Actas de las XIII Jornadas de Profesores y Estudiantes de Derecho Penal de las Universidades de Madrid*. Julia Ropero Carrasco (dir.) Universidad Rey Juan Carlos. Madrid, 2013, págs. 171-192.

MUÑOZ LORENTE, JOSÉ / BAUCCELLS LLADÓS, JOAN / FARALDO CABANA, PATRICIA. “Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente” (arts.325, 327, 328, y 329). En *Comentarios a la Reforma Penal de 2010*. Francisco Álvarez García / José Luis González Cussac (dirs.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2010, págs. 385-398.

MUÑOZ RUIZ, JOSEFA. “Nueva doctrina del Tribunal Supremo sobre daños psíquicos en supuestos de contaminación acústica”. En *Cuadernos de política criminal segunda época*, Vol. II, núm. 101. Dykinson. Madrid, 2010, págs. 175-197.

- “El delito de contaminación acústica (Especial consideración del caso Donegal)”. En *Cuadernos de política criminal segunda época*. Vol. III, núm. 99. Dykinson. Madrid, 2009, págs. 173-206.

NAESS, ARNE. *The ecology of Wisdom. Writings by Arne Naess*. Alan Drengson and Bill Devall (eds.) Counterpoint. Berkeley, 2008.

- “The Deep Ecological Movement. Some Philosophical Aspects”. En *Deep Ecology for the 21<sup>st</sup> Century. Readings on the Philosophy and Practice of the New Environmentalism*. George Sessions (ed.) Shambhala. Boston, 1995.

NATALI, LORENZO. “A Critical Gaze on Environmental Victimization”. En *Green Harms and Crimes. Critical Criminology in a Changing World*. Series: Critical Criminological Perspectives. Ragnhild Aslaug Sollund (ed.) Ed. Palgrave Macmillan, June 2015, págs. 63-78.

- “Green Criminology, Victimización Medioambiental y Social Harm. El caso de Huelva (España)”. En *Revista Crítica Penal y Poder*, núm. 7 (Número especial: daño social, sus causas y sus víctimas). Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos. Universidad de Barcelona, septiembre, 2014, págs. 5-34.
- “The big grey elephants in the backyard of Huelva, Spain”. En *Global Environmental Harm. Criminological Perspectives*. Rob White (ed.) Willan Publishing. Devon (UK), 2010, págs. 193-209.

NAVARRO-BARRANCO, CARLOS / HUGHES, LAUREN ELIZABETH. “Effects of light pollution on the emergent fauna of shallow marine ecosystems: Amphipods as a case study”. En *Marine Pollution Bulletin*, Vol. 94, Issues 1-2, 15 de mayo de 2015. Charles Sheppard (ed.) Elsevier, 2015, págs. 235-240.

NIETO, ALEJANDRO. *Derecho Administrativo Sancionador* (4ª ed.) Tecnos. Madrid, 2005.

- *Balada de la justicia y la ley*. Trotta. Madrid, 2002.

NIETO MARTÍN, ADÁN. “Bases para un futuro derecho penal internacional del medio ambiente”. En *La protección de bienes jurídicos globales*. Carlos Espósito / Francisco J. Garcimartín Alférez (eds.) UAM / Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Madrid, 2012, págs. 137-164.

- “La responsabilidad penal de las personas jurídicas tras la LO 5/2010”. En *Revista Xurídica Galega*, núm. 63. Universidade Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico. Santiago de Compostela, 2009, págs. 47-71.
- *La responsabilidad penal de las personas jurídicas: un modelo legislativo*. Iustel. Madrid, 2008.

NIEVA FENOLL, JORDI / VIVES REGO, JOSEP / CORCOY BIDASOLO. MIRENTXU. “Eficacia y admisibilidad de la prueba pericial en el enjuiciamiento de delitos contra el medio ambiente”. En *Diario La Ley*. Año XXVII, núm. 6551. Lunes, 18 de septiembre de 2006, págs. 1-5.

NORTON, BRYAN G. *Toward Unity among Environmentalists*. Oxford University Press. Oxford / New York, 1991.

NUGENT, COLIN et. al. *Noise in Europe 2014*. EEA Report/ N° 10/2014. Publications Office of the European Union. Luxembourg, 2014.

NÚÑEZ LOZANO M<sup>a</sup> CARMEN et al. *Hacia una política marítima integrada de la Unión Europea. Estudios de política marítima*. M<sup>a</sup> Carmen Núñez Lozano (dir.) Iustel. Madrid, 2010.

NURSE, ANGUS. “Perspectives on Criminality in Wildlife”. En *Emerging Issues in Green Criminology. Exploring Power, Justice and Harm*. Reece Walters / Diane S. Westerhuis / Tanya Wyatt (eds.) Palgrave Macmillan. Basingstoke (UK), 2013, págs. 127-144.

OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, EMILIO. “Un ejemplo de norma jeroglífica, el artículo 329 CP: Algunas cuestiones (y ciertas respuestas) sobre consumación, tentativa, autoría, participación y pena referidas al artículo 329 CP (y figuras afines)”. En *Revista de derecho y proceso penal*, núm. 3, año 2000, págs. 13-44.

OJEDA MESTRE, RAMÓN. “Las cien caras del Derecho ambiental”. En *Medio Ambiente y Derecho: Revista electrónica de derecho ambiental*, núm. 12-13, diciembre 2005.

OLCINA CANTOS, JORGE / MARTÍN VIDE, JAVIER. *La influencia del clima en la historia*. Cuadernos de Historia, Vol. 68, Arco Libros. Madrid, 1999.

OLMEDO CARDENETE, MIGUEL. “Capítulo 34. Delitos sobre la ordenación del territorio, urbanismo, patrimonio histórico y medio ambiente (III). Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente”. En *Sistema de Derecho Penal Español. Parte Especial*. Lorenzo Morillas Cuevas (coord.) Dykinson. Madrid, 2011, págs. 729-764.

ORDUNA, JORGE. *Ecofascismo. Las internacionales ecologistas y las soberanías nacionales*. Martínez Roca. Buenos Aires, 2008.

ORTEGA ÁLVAREZ, LUIS. “Concepto de medio ambiente”. En *Tratado de Derecho Ambiental*. Luis Ortega Álvarez / Consuelo Alonso García (dirs.) Rosario de Vicente Martínez (coord.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2013, págs. 31-54.

- “La organización administrativa del medio ambiente”. En *Tratado de Derecho Ambiental*. Luis Ortega Álvarez / Consuelo Alonso García (dirs.) Rosario de Vicente Martínez (coord.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2013, págs. 55-77.
- *El Régimen Constitucional de las Competencias Locales*. Colección Estudios, Serie Administración Local. INAP. Madrid, 1988.

ORTEGA BERNARDO, JULIA. *Derechos fundamentales y ordenanzas locales*. Colección Administración Pública y Derecho. Marcial Pons. Madrid, 2014.



ORTEGA BERNARDO, JULIA / REIMER, FRANZ. “Alemania: Rasgos y evolución general del derecho ambiental alemán y de sus proyectos de codificación”. En *Observatorio de Políticas Ambientales 2011*. Fernando López Ramón (coord.) Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2011, págs. 117-134.

ORTIZ DE URBINA GIMENO, ÍÑIGO. “Responsabilidad penal de las personas jurídicas: the American way”. En *Responsabilidad de la Empresa y Compliance. Programas de prevención, detección y reacción penal*. Santiago Mir Puig / Mirentxu Corcoy Bidasolo / Víctor Gómez Martín (dirs.) Juan Carlos Hortal Ibarra / Vicente Valiente Ivañez (coords.) B de F / Edisofer. Madrid, 2014, págs. 35-88.

OSTOLAZA ELIZONDO, ISABEL. “El Fuero Reducido de Navarra: Edición crítica”. En *El Fuero Reducido de Navarra*, Vol. II. Ismael Sánchez Bella (ed. lit.) Gobierno de Navarra. Departamento de Presidencia e Interior. Pamplona, 1989, págs. 109-520.

PALAZZO, FRANCESCO. “Principios fundamentales y opciones político-criminales en la tutela penal del ambiente en Italia”. En *Revista Penal (Doctrina)*, núm. 4. Praxis. Barcelona, 1999, págs. 68-83.

PAREDES CASTAÑÓN, JOSÉ MANUEL. “El Derecho Penal español del medioambiente: una evaluación crítica”. En *Libro Homenaje al Profesor Rodríguez Ramos*. Francisco Javier Álvarez García / Miguel Ángel Cobos de Linares / Pilar Gómez Pavón (coords.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2013, págs. 751-770.

PAU, ANTONIO. *El ruido y su publicación registral*. Comunicación presentada al Pleno de Académicos de Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación el día 28 de febrero de 2011. Real Academia de Jurisprudencia y Legislación / Dykinson. Madrid, 2011, págs. 331-354.

PEÑA CHACÓN, MARIO. “La tutela jurídica del paisaje”. En *Medio Ambiente y Derecho. Revista electrónica de derecho ambiental*, núm. 12-13, 2005.

PEÑA GARCÍA, ANTONIO. “Iluminación y seguridad”. En *Documento Final del Grupo de Trabajo GT-LUZ. Contaminación Lumínica*. Manuel Nicolás Barba (coord.) IX Congreso Nacional del Medio Ambiente. Cumbre del Desarrollo Sostenible. Madrid, diciembre, 2008, págs. 38-40.

PEÑALVER I CABRÉ, ALEXANDRE. “Novedades en el acceso a la justicia y a la tutela administrativa en asuntos medioambientales”. En *Acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente: diez años del Convenio de Aarhus*. Antoni Pigrau Solé (dir.) Atelier. Barcelona, 2008, págs. 349-402.

- Voz “ONGs y Protección del Medio Ambiente”. En *Diccionario de Derecho Ambiental*. Enrique Alonso García / Blanca Lozano Cutanda (dirs.) Iustel. Madrid, 2006, págs. 881-891.
- “Nuevas tendencias sobre la inactividad administrativa en la aplicación de las sanciones ambientales”. En *Cuadernos de Derecho Local*, núm. 7. Fundación Democracia y Gobierno Local. Febrero, 2005, págs. 173-185.

PEPPER, DAVID. *Modern Environmentalism. An Introduction* (2<sup>nd</sup> ed.) Routledge. London, 2002.

PÉREZ ALONSO, ESTEBAN JUAN. “Expansión, riesgo y principio de precaución en el Derecho Penal”. En *Derecho, Globalización, Riesgo y Medio Ambiente*. Esteban Pérez Alonso / Estanislao Arana García et. al. (eds.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2012, págs. 393-413.

PÉREZ DE GREGORIO CAPELLA, JOSÉ JOAQUÍN. “El delito de contaminación acústica en el Código Penal español, criterios jurisprudenciales y aspectos procesales”. En *Revista jurídica española La Ley*, Vol. 4 La Ley. Madrid, 2006, págs. 1581-1584.

- *El proceso penal medioambiental*. Centro de Estudios Ramón Areces. Madrid, 1999.
- “La prueba en el proceso penal por delitos contra el medio ambiente”. En *Revista Jurídica Española La Ley*, Tomo III. La Ley. Madrid, 1994, págs. 937-943.

PÉREZ DEL VALLE, CARLOS. *La imprudencia en el Derecho penal. El tipo subjetivo del delito imprudente*. Atelier. Barcelona, 2012.

PÉREZ GIL, JULIO. “Cauces para la declaración de responsabilidad penal de las personas jurídicas”. En *Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2010*. Francisco Álvarez García / José Luis González Cussac (dirs.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2010, págs. 583-590.

PÉREZ LUÑO, ANTONIO E. “Comentarios al art.45. Medio ambiente”. En *Comentarios a la Constitución española de 1978*, Vol. IV. Oscar Alzaga Villaamil (dir.) Edersa. Madrid, 1996, págs. 237-276.

PÉREZ MANZANO, MERCEDES. “El acceso al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional frente a resoluciones del orden penal”. En *Constitución y sistema penal*. Santiago Mir Puig / Mirentxu Corcoy Bidasolo (dirs.) Juan Carlos Hortal Ibarra (coord.) Marcial Pons. Madrid, 2012, págs. 123-149.

- *La prohibición constitucional de incurrir en bis in idem*. Tirant lo Blanch. Valencia, 2002.

- *Autoría y participación imprudente en el Código penal de 1995*. Civitas. Madrid, 1999.

PICOLOTTI, JUAN MIGUEL / ORLANDO VERA, ALEJANDRO. “El acceso a la justicia ambiental en la República Argentina”. En *El acceso a la justicia de las víctimas de daños ambientales. Una perspectiva comparada*. Antoni Pigrau Solé (dir.) Paloma Milenka Villavicencio (coord.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2015, págs. 152-180.

PIERCY, J.E. / EMBLETON, T.F.W. / SUTHERLAND, L.C. “Review of Noise Propagation in the Atmosphere”. En *Noise Pollution: Effects and Control*. A. Lara Saenz / R.W.B. Stephens (eds.) John Wiley & Sons, Scientific Committee on Problems of the Environment (Scope 24) Great Britain, 1986, págs. 95- 132.

PIGRAU SOLÉ, ANTONI. “Los pueblos indígenas ante el derecho internacional”. En *Pueblos indígenas, diversidad cultural y justicia ambiental. Un estudio de las nuevas constituciones de Ecuador y Bolivia*. Antoni Pigrau Solé (ed. lit.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2013, págs. 61-109.

- “La jurisdicción extraterritorial como vía para hacer responsables a las empresas por daños al medio ambiente causados en el extranjero: especial referencia al ATCA”. En *Derecho, Globalización, Riesgo y Medio Ambiente*. Esteban Pérez Alonso / Estanislao Arana García et. al. (eds.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2012, págs. 183-217.
- “La responsabilidad de las empresas transnacionales por daños graves al medio ambiente: explorando la vía de la Alien Tort Claims Act”. En *El Derecho Internacional ante los retos de nuestro tiempo*, Vol. I (Homenaje a la Profesora Victoria Abellán Honrubia) Anna M<sup>a</sup> Badia Martín / Antoni Pigrau Solé / Andreu Olesti Rayo (coords.) Marcial Pons. Madrid, 2009, págs. 517-569.

PINON, PIERRE. *La ciudad medieval: de la casa al tejido urbano*. Actas del primer Curso de Historia y Urbanismo Medieval organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha. Jean Passini (coord.) Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenca, 2001, págs. 179-213.

PIZARRO NEVADO, RAFAEL. “La recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos”. En *Lecciones y materiales para el estudio del Derecho Administrativo* Tomo VII: Servicios Públicos. Tomás Cano Campos (coord.) Iustel. Madrid, 2009, págs. 385-407.

PLAZA MARTÍN, CARMEN. “Medio ambiente en la Unión Europea”. *Tratado de Derecho Ambiental*. Luis Ortega Álvarez / Consuelo Alonso García (dirs.) Rosario de Vicente Martínez (coord.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2013, págs. 79-143.

- *Derecho Ambiental de la Unión Europea*. Tirant Lo Blanch. Valencia, 2005.

PONTE ARREBOLA, VANESSA. “La búsqueda de la seguridad y el orden en las calles de Roma”. En *Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña*, Vol. 9. Universidade da Coruña / Servicio de Publicacións. La Coruña, 2005.

PRATS CANUT, JOSEP MIQUEL / MARQUÉS I BANQUÉ, MARÍA. “Libro II: Título XVI (Art. 325)”. En *Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal* (5ª ed.) Gonzalo Quintero Olivares (dir.) Fermín Morales Prats (coord.) Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2005, pág. 1192.

PRITTWITZ, CORNELIUS. “La función del Derecho Penal en la sociedad globalizada del riesgo: defensa de un rol necesariamente modesto”. En *Derecho, Globalización, Riesgo y Medio Ambiente*. Esteban Pérez Alonso / Estanislao Arana García et. al. (eds.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2012, págs. 415-427.

PUERTA SEGUIDO, FRANCISCO. “Las entidades colaboradoras en materia de protección ambiental”. En *Tratado de Derecho Ambiental*. Luis Ortega Álvarez / Consuelo Alonso García (dirs.) Rosario de Vicente Martínez (coord.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2013.

PYKO, ANDREI / ERIKSSON, CHARLOTTA / OFTEDAL, BENTE ET. AL. “Exposure to traffic noise and markers of obesity”. En *Occupational and Environmental Medicine –BMJ–*. British Medical Association. Published Online First 25 May 2015.

QUERALT JIMÉNEZ, JOAN JOSEP. *Derecho penal español. Parte especial*. (6ª ed. actualizada) Atelier. Barcelona, 2010.

QUINTERO OLIVARES, GONZALO. *Derecho Penal Ambiental*. Tirant lo Blanch. Valencia, 2013.

- “Estudio preliminar: cambiar las leyes y cambiar el Derecho Penal. Sobre la última reforma del Código Penal”. En *La reforma penal de 2010: análisis y comentarios* Gonzalo Quintero Olivares (dir.) Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2010, págs. 15-26.

- “Bien jurídico, derecho público subjetivo y legitimación en el Derecho penal ambiental”. En *Estudios de Derecho Ambiental. Libro Homenaje al profesor Josep Miquel Prats Canut*. Gonzalo Quintero Olivares / Fermín Morales Prats (coords.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2008, págs. 207-228.
- *La especialidad del Derecho penal ambiental en relación con la contaminación acústica y la contaminación del agua*. XVII Seminario para el Estudio y la Práctica Jurídica. Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya, 2007, págs. 1-31.

QUINTERO OLIVARES, GONZALO / NOGUERA FERNÁNDEZ, ALBERT. “El Derecho penal y los principios rectores de la política social y económica”. En *Derecho penal constitucional* Capítulo 9. Gonzalo Quintero Olivares (dir.) Jordi Jaria I Manzano (coord.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2015, págs. 455-492.

RABIN, LAWRENCE / MCCOWAN, BRENDA / HOOPER, STACIE L / OWINGS, DONALD H. “Anthropogenic Noise and its Effect on Animal Communication: An Interface Between Comparative Psychology and Conservation Biology”. En *International Journal of Comparative Psychology*. Josep Call (ed.) Vol. 16, Issue 2. American Psychological Association, 2003, págs. 172-192.

RAGA GIL, JOSÉ TOMÁS. *Globalización, sí; pero para quién*. Servicio de Publicaciones. Facultad de Derecho Universidad Complutense de Madrid. Madrid, 2009.

RAMÓN RIBAS, EDUARDO. “El maltrato de animales y la custodia de animales (arts. 337 y 631)”. En *La Reforma Penal de 2010: Análisis y Comentarios*. Gonzalo Quintero Olivares (dir.) Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2010, págs. 297-300.

RAMOS DE MOLINS, ALFONSO. “Artículos 18 a 32”. En *Transparencia y Buen Gobierno. Comentarios a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno*. Elisa de la Nuez Sánchez-Casado / Carlota Tarín Quirós (coords.) La Ley. Madrid, 2014, págs. 380-432.

RAMS ALBESA, JOAQUÍN. Prólogo a la obra de CARLOS CUADRADO PÉREZ. *Ruido, inmisiones y edificación*. Colección Urbanismo y Derecho. Carlos Rigel Vide / Martín Bassols Coma (dirs.) Reus. Madrid, 2002, págs. 9-12.

RANDO CASERMEIRO, PABLO. *La distinción entre el Derecho penal y el Derecho administrativo sancionador. Un análisis de política jurídica*. Tirant lo Blanch. Valencia, 2010.

REBOLLO PUIG, MANUEL. “La libertad de empresa tras la Ley de Garantía de Unidad de Mercado”. En *Revista española de Derecho Administrativo*, núm. 163, abril-junio. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2014, págs. 23-33.

- Voz “Derecho Penal y Derecho Administrativo Sancionador (Principios comunes y aspectos diferenciadores)”. En *Diccionario de Sanciones Administrativas*. Blanca Lozano Cutanda (dir.) Iustel. Madrid, 2010, págs. 323-325.
- “El contenido de las sanciones”. En *Revista Jurídica Administrativa* (Núm. Extraordinario) Lex Nova. Madrid, 2001, págs. 151-206.

RECARTE VICENTE-ARCHE, ANA / ALONSO GARCÍA, ENRIQUE. Voz “Animales, Teoría general y régimen de los domésticos”. En *Diccionario de Derecho Ambiental*. Enrique Alonso García / Blanca Lozano Cutanda (dirs.) Iustel. Madrid, 2006, págs. 78-91.

REDI, CARLO ALBERTO. *Il biólogo furioso. Provocazioni d'autore tra scienza e politica*. Sironi. Milano, 2011.

REDONDO RUBIO DE LA TORRE, LAURA. “La revitalización del centro histórico de Málaga y el ruido”. *Revista Actualidad Jurídica Ambiental*, 9 de diciembre de 2013, págs. 1-15.

REGIS PRADO, LUIZ. “El nuevo Derecho penal brasileño del ambiente: cuestiones fundamentales”. En *Modernas tendencias en la ciencia del Derecho penal y en la Criminología*. Actas Congreso Internacional Facultad de Derecho de la UNED. Madrid, 6 al 10 de noviembre de 2000. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Madrid, 2001, págs. 218-235.

REY PÉREZ, JOSÉ LUIS. “Introducción: el derecho al medio ambiente”. En *Nuevas formas de contaminación atmosférica. Un análisis jurídico multidisciplinar*. Dykinson. Madrid, 2010, págs. 13-32.

RIECHMANN, JORGE. “Tres principios básicos de justicia ambiental”. En *Revista Internacional de Filosofía Política*, núm. 21. Ejemplar dedicado a: Naturaleza y sentido de la guerra de hoy, julio 2003, págs. 103-120.

- “Introducción: Aldo Leopold, los orígenes del ecologismo estadounidense y la ética de la Tierra”. En *Una ética de la Tierra*. Jorge Riechmann (ed.) Los libros de la catarata. Madrid, 2000, págs. 7-36.

RIVERA MORALES, RODRIGO. *La prueba: Un análisis racional y práctico*. Marcial Pons. Madrid, 2011.

ROCA DE AGAPITO, LUIS. “Sanciones penales aplicables a las personas jurídicas”. En *La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Fortalezas, debilidades y perspectivas de cara al futuro*. Miguel Ontiveros Alonso (coord.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2014, pág. 371-411.

RODRÍGUEZ DEVESA, JOSÉ MARÍA / SERRANO GÓMEZ, ALFONSO. *Derecho Penal español. Parte General* (18ª ed.) Dykinson. Madrid, 1995.

RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, IGNACIO / OLMEDO CARDENETE, MIGUEL. “Capítulo III. De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente”. En *Comentarios al Código Penal, Segunda época*, Tomo X, Vol. II. Manuel Cobo del Rosal (dir.) Centro de Estudios Superiores de Especialidades Jurídicas. Madrid, 2006, págs. 169-282.

RODRÍGUEZ MEDINA, Mª DEL MAR. *Tutela jurídico-penal del medio ambiente en el Derecho de la Unión Europea*. Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho UCM. Madrid, 2014.

RODRÍGUEZ MORULLO, GONZALO. “La responsabilidad penal de las personas jurídicas desde las perspectivas político-criminal y dogmática”. *Revista Otrosí*, núm. 6 abril-junio. Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, 2011, págs. 7-14.

RODRÍGUEZ NEILA, JUAN FRANCISCO. *Ecología en la Antigüedad clásica*. Cuadernos de Historia, Vol. 25, Arco Libros. Madrid, 1996.

RODRÍGUEZ PALOP, Mª EUGENIA. *La nueva generación de derechos humanos: origen y justificación*. Universidad Carlos III / Dykinson. Madrid, 2002.

RODRÍGUEZ RAMOS, LUIS. “¿Cómo puede delinquir una persona jurídica en un sistema penal antropocéntrico? (La participación en el delito de otro por omisión imprudente: pautas para su prevención)”. En *Diario La Ley*. Año XXXII, núm. 7561. Jueves, 3 de febrero de 2011, págs. 1-8.

- “Los riesgos de lo abstracto en el Derecho penal (el delito de contaminación ambiental como ejemplo)”. En *Actualidad Jurídica*. Año XIII, núm. 574. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2003, págs. 1-6.
- “Societas delinquere potest. Nuevos aspectos dogmáticos y procesales de la cuestión”. *Diario La Ley*, 3 de noviembre. Madrid, 1996.
- “Delitos contra el medio ambiente. Artículo 347 bis, a)”. En *Comentarios a la Legislación Penal. La reforma del Código Penal de 1983*, Tomo V, Vol. 2º (Libros II y III del Código Penal). Manuel Cobo del Rosal (dir.) Miguel Bajo Fernández (coord.) Edersa. Madrid, 1985, págs. 827-843.
- “Protección penal del ambiente”. En *Comentarios a la legislación penal*, Tomo I (Derecho Penal y Constitución) Manuel Cobo del Rosal (dir.) Miguel Bajo Fernández (coord.) Edersa. Madrid, 1982, págs. 260-279.

RODRÍGUEZ SANABRA, FRANCISCO. “La influencia de los factores físicos ambientales en el comportamiento”. En *Introducción a la psicología ambiental*. Florencio Jiménez Burillo / Juan Ignacio Aragonés (comps.) Alianza Editorial. Madrid, 1986, págs. 115-125.

RODRÍGUEZ-ZAPATA PÉREZ, JORGE. “La doctrina del Tribunal Constitucional en materia de sanciones medioambientales”, en *Incidencia medioambiental y derecho sancionador*. D. Berberoff Ayuda (dir.) Cuadernos de Derecho Judicial. Consejo General del Poder Judicial. Madrid, 2007, págs. 299-304.

ROGER, ALAIN. *Breve tratado del paisaje*. Maysi Veuthey (tr.) Javier Maderuelo (ed. lit.) Biblioteca Nueva. Madrid, 2007.

ROHRMEIER, MARTIN A. / KOELSCH, STEFAN. “Predictive information processing in music cognition. A critical review”. En *Internacional Journal of Psychophysiology*, núm. 83, 2012, págs. 164-175.

ROL DE LAMA, M<sup>a</sup> ÁNGELES / BAÑO OTÁLORA, BEATRIZ / MARTÍNEZ NICOLÁS, ANTONIO ET. AL. “El lado oscuro de la luz: efectos de la contaminación lumínica sobre la salud humana”. En *Física y Sociedad*, núm. 21, (*Revista del Colegio Oficial de Físicos. Ejemplar dedicado a Contaminación Lumínica y eficiencia energética*), 2011, págs. 20-22.

ROLDÁN BARBERO, JAVIER. “España y la protección internacional del medioambiente”. En *Derecho, Globalización, Riesgo y Medio Ambiente*. Esteban Pérez Alonso / Estanislao Arana García et. al. (eds.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2012, págs. 143-182.

ROMEO CASABONA, CARLOS MARÍA / SOLA RECHE, ESTEBAN / HERNÁNDEZ PLASENCIA, JOSÉ ULISES ET. AL. *La Adaptación del Derecho penal al desarrollo social y tecnológico*. Carlos María Romeo Casabona / Fernando Gaunarteme Sánchez-Lázaro (eds.) Emilio José Armaza (coord.). Grupo de Trabajo Derecho, Ciencia, Tecnología e Innovación. Comares. Granada, 2010.

ROSELAND, MARK. “Dimensions of the eco-city”. En *Cities: The International Journal of Urban Policy and Planning*, Vol. 14, Issue 4, August 1997, págs. 197-202.

ROTONDI, GIOVANNI. *Leges Publicae populi Romani*. Societá Editrice Libreria. Milano, 1912.

ROXIN, CLAUS. “El concepto de bien jurídico como instrumento de crítica legislativa sometido a examen”. Manuel Cancio Meliá (tr.) En *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, núm. 15-01, 2013, págs. 1-27.



- “¿Es la protección de bienes jurídicos una finalidad del Derecho penal?”. Íñigo Ortiz de Urbina Gimeno (tr.) En *La Teoría del bien jurídico, ¿Fundamento de legitimación del Derecho penal o juego de abalorios dogmático?* Roland Hefendehl (ed.) Marcial Pons. Madrid, 2007, págs. 443-458.
- *Política criminal y estructura del delito. Elementos del delito en base a la política criminal*. Juan Bustos Ramírez / Hernán Hormazábal Malarée (trads.) Colección IURA-3. Serie: Derecho y Estado. Promociones y Publicaciones Universitarias. Barcelona, 1992.

RUBIO FERNÁNDEZ, EVA M<sup>a</sup>. “Expansión de la legislación ambiental: su dimensión internacional”. En *Justicia ecológica y protección del medio ambiente*. Teresa Vicente Giménez (coord.) Trotta. Madrid, 2002, págs. 99-162.

RUGGIERO, VINCENZO / SOUTH, NIGEL. “Toxic State–Corporate Crimes, Neo-liberalism and Green Criminology: The Hazards and Legacies of the Oil, Chemical and Mineral Industries”. En *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, Vol. 2, Issue 2, 2013, págs. 12-26.

- “Green Criminology and Dirty Collar Crime”. En *Critical Criminology. An International Journal*, Vol. 18, Issue 4. Springer Netherlands, 2010, págs. 251-262.

RUILOBA ALVARIÑO, JULIA. *EL Convenio Europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes, de 26 de noviembre de 1987. Su aplicación en España*. Colección Ciencias Jurídicas y Sociales, núm. 23. Universidad Rey Juan Carlos / Dykinson. Madrid, 2005.

RUIZ DE APODACA ESPINOSA, ÁNGEL. “El marco jurídico actual de la energía nuclear en España”. En *El futuro de la energía nuclear en España. Perspectivas (no sólo) jurídicas*. Gabriel Doménech Pascual (coord.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2013, págs. 111-216.

- “Instrumentos de prevención y corrección de la contaminación acústica”. En *Régimen jurídico del ruido: una perspectiva integral y comparada*. Estanislao Arana García / M<sup>a</sup> Asunción Torres López (coords.) Comares. Granada, 2004, págs. 85-123.

RUIZ-RICO RUIZ, CATALINA. “La tutela constitucional y europea ante el ruido (a propósito de la STC 150/2011, de 29 de septiembre)”. En *El Derecho contra el ruido*. José Francisco Alenza García (dir.) Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2013, págs. 239-266.

SAENZ, A. LARA. "Physics of Noise". En *Noise Pollution: Effects and Control*. A. Lara Sáenz / R.W.B. Stephens (eds.) John Wiley & Sons. Scientific Committee on Problems of the Environment (Scope 24) Great Britain, 1986, págs. 45-94.

SÁINZ ROMERO, FERNANDO. "Sobre el ruido y la policía de la tranquilidad. (STS, de 5 de julio de 1976. Ponente: Excmo. Sr. José Gabaldón)". En *Revista Española de Derecho Administrativo*, núm. 15 (octubre-diciembre), 1997, págs. 664-668.

SÁNCHEZ DE MIGUEL, ALEJANDRO / ZAMORANO, JAIME / PILA-DÍEZ, BERENICE ET. AL. *Contaminación lumínica en España 2010*. IX Congreso Sociedad Española de Astronomía. Madrid, septiembre 2010.

SÁNCHEZ DONATE, M<sup>a</sup> PILAR. "La lucha penal: el delito de contaminación acústica". En *El derecho a una vida sin ruidos insalubres. Protección social, civil, contencioso-administrativa y penal*. Juan Ignacio Marcos González / Cristóbal Molina Navarrete (coords.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2010, págs. 171-212.

SÁNCHEZ SAHORÍ, FRANCISCO. "Apuntes para una filosofía del ruido". En *El ruido en las ciudades. Análisis jurídico-práctico*. Jorge Pinedo Hay (coord.) Bosch. Barcelona, 2009, págs. 17-50.

SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES, JAVIER. "Una lectura crítica de la Ley de Indulto". En *Indret: Revista para el Análisis del Derecho*, núm. 2. Universidad Pompeu Fabra. Barcelona, abril 2008, págs. 1-32.

SANTA-CECILIA GARCÍA, FERNANDO. "Accesoriedad y bien jurídico en delitos medioambientales". En *Religión, Matrimonio y Derecho ante el siglo XXI. Estudios en homenaje al Profesor Rafael Navarro-Valls*, Vol. II. Javier Martínez-Torrón et al. (coords.) Iustel. Madrid, 2013, págs. 3675-3703.

- "Delitos contra los recursos naturales y medioambiente". En *Libro Homenaje al Profesor Rodríguez Ramos*. Francisco Javier Álvarez García / Miguel Ángel Cobos de Linares / Pilar Gómez Pavón (coords.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2013, págs. 899-932.
- "Medio ambiente y reparación del daño". En *Textos jurídicos y contextos sociales en F. A. Hayek*. Ángel Sánchez de la Torre / Isabel Araceli Hoyo Sierra (eds.) Dykinson. Madrid, 2011, págs. 331-368.

SANTAMARÍA PASTOR, JUAN ALFONSO. “El régimen de competencias locales y el dilema de la esfinge”. En *La Reforma de 2013 del Régimen Local Español*. Juan Alfonso Santamaría Pastor (coord.) Fundación Democracia y Gobierno Local. Madrid, 2014, págs. 139-156.

- *Principios de Derecho Administrativo General*, Vol. II (2ª ed.) Iustel. Madrid, 2009.

SANZ LÓPEZ, CARMEN / SÁNCHEZ ALHAMA, JOSÉ. *Medio ambiente y sociedad. De la metáfora organicista a la preservación ecológica* (2ª ed.) Comares. Granada, 1998.

SARMIENTO RAMÍREZ-ESCUDERO, DANIEL. “La responsabilidad ambiental en perspectiva comparada”. En *Incidencia medioambiental y derecho sancionador*. Dimitry Berberoff Ayuda (dir.) Cuadernos de Derecho Judicial (VIII-2006) CGPJ. Madrid, 2007, págs. 231-263.

SASSEN, SASKIA. *La ciudad global: Nueva York, Londres, Tokio*. Silvina Quintero (tr.) Eudeba. Buenos Aires, 1999.

SATKAUSKAS, RYTIS. “Los aspectos jurídico-ambientales de la construcción de las instalaciones eólicas en el mar”. En *Medio Ambiente y Derecho. Revista electrónica de Derecho Ambiental*, núm. 12-13, diciembre 2005.

SCHAFER, R. MURRAY. *Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning of the World*. Destiny Books. Rochester (Vermont, USA), 1994.

SHAW, CLIFFORD R. & MCKAY, HENRY D. *Juvenile Delinquency and Urban Areas. A Study of Rates of Delinquency in Relation to Differential Characteristics of Local Communities in American Cities* (Revised Edition) University of Chicago Press. Chicago & London. 1969.

SCHNAIBERG, ALLAN. *The Environment: From Surplus to Scarcity*. Oxford University Press. New York, 1980.

SCHOPENHAUER, ARTHUR. *Arte del buen vivir*. EDAF. Madrid, 2003.

SCHÜNEMANN, BERND. “La destrucción ambiental como arquetipo del delito”. Mariana Sacher (tr.) En *Derecho, Globalización, Riesgo y Medio Ambiente*. Esteban Pérez Alonso / Estanislao Arana García et. al. (eds.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2012, págs. 429-441.

- “El principio de protección de bienes jurídicos como punto de fuga de los límites constitucionales de los tipos penales y de su interpretación”. María Martín Lorenzo / Mirja Feldmann (trs.) En *La Teoría del bien jurídico, ¿Fundamento de legitimación del Derecho penal o juego de abalorios dogmático?* Roland Hefendehl (ed.) Marcial Pons. Madrid, 2007, págs. 197-226.

SEHER, GERHARD. “La legitimación de normas penales basada en principios y el concepto de bien jurídico”. Rafael Alcácer Guirao (tr.) En *La Teoría del bien jurídico, ¿Fundamento de legitimación del Derecho penal o juego de abalorios dogmático?* Roland Hefendehl (ed.) Marcial Pons. Madrid, 2007, págs. 69-92.

SEJENOVICH, HÉCTOR. “Visión ambiental de la economía y las cuentas del patrimonio natural” En *Informe Anual 2011: Premio de Monografía Adriana Schiffrin* (1ª ed.) Mª Eugenia Di Paola / Federico Sangalli / Silvina Caorsi (eds. lit.). Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Buenos Aires, 2011, págs. 511-568.

SEOANEZ CALVO, MARIANO / RODRÍGUEZ RAMOS, LUIS. *La contaminación ambiental. Nuevos planteamientos técnicos y jurídicos*. Publicaciones del Instituto de Criminología de la Universidad Complutense de Madrid. Madrid, 1978.

SERRANO MORENO, JOSÉ LUIS. “La sociedad del riesgo y el derecho de la sociedad”. En *Derecho, Globalización, Riesgo y Medio Ambiente*. Esteban Pérez Alonso / Estandislaio Arana García et. al. (eds.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2012, págs. 355-373.

SESSANO GOENAGA, JAVIER CAMILO. “La protección penal del medio ambiente. Peculiaridades de su tratamiento jurídico”. En *Revista electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, núm. 4, 2002.

SHAW, E.A.G. “Aural Reception”. En *Noise Pollution: Effects and Control*. A. Lara Saenz / R.W.B. Stephens (eds.) John Wiley & Sons. Scientific Committee on Problems of the Environment, Scope 24. Great Britain, 1986, págs. 169-182.

SHELLENBERGER, MICHAEL / NORDHAUS, TED. “The Death of Environmentalism. Global Warming Politics in a Post-Environmental World” En *The Breakthrough Journal*, June 16, 2010.

SHIPPING LAW HANDBOOK (5<sup>th</sup> ed.) Michael Bundock (ed.) LLP. London, 2011.

SHUQIN, YANG. “The polluting behaviour of the multinational corporations in China”. En *Global Environmental Harm. Criminological Perspectives*. Rob White (ed.) Willan Publishing. Devon (UK), 2010, págs. 150-158.

SIBINA TOMÁS, DOMÉNEC. “Las ordenanzas municipales de protección frente al ruido, I. El marco jurídico y la perspectiva jurídica interdisciplinar”. En *Cuadernos de Derecho Local*, núm. 4. Fundación Democracia y Gobierno Local. Febrero, 2004, págs. 207-231.

SILVA DÍAS, AUGUSTO. “¿Y si todos lo hiciéramos? Consideraciones acerca de la (in)capacidad de resonancia del Derecho penal con la figura de la acumulación”. Rafael Alcácer Guirao (tr.) En *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*, núm. LVI, enero 2003, págs. 433-469.

SILVA SÁNCHEZ, JESÚS M<sup>a</sup>. *La expansión del Derecho Penal. Aspectos de la Política criminal en las sociedades postindustriales* (3<sup>a</sup> ed.) B de F. Montevideo / Buenos Aires, 2011.

- “¿Quién debe responder de los ilícitos medioambientales? Sujetos y criterios de imputación de responsabilidad por ilícitos medioambientales”. En *Incidencia medioambiental y derecho sancionador*. Cuadernos de Derecho Judicial VIII. Consejo General del Poder Judicial. Madrid, 2007, págs. 141-172.
- “La responsabilidad penal de las personas jurídicas y las consecuencias accesorias del artículo 129”. *Manuales de formación continuada*, núm. 14. CGPJ. Madrid, 2001.
- “Consideraciones teóricas generales sobre la reforma de los delitos contra el medio ambiente”. En *La reforma de la justicia penal. (Estudios en homenaje al Prof. Klaus Tiedemann)* Juan Luis Gómez Colomer / José Luis González Cussac (coords.) Publicacions de la Universitat Jaume I. Castellón de la Plana, 1997, págs. 151-182.
- “¿Protección penal del medio ambiente? Texto y contexto del artículo 325 del Código Penal. En *La Ley*, 1997-Tomo 3, D-132. La Ley. Madrid, 1997, págs. 1714-1725.

SILVA SÁNCHEZ, JESÚS M<sup>a</sup> / FELIP I SABORIT, DAVID. “El derecho penal ante el ruido”. En *Régimen jurídico del ruido. Una perspectiva integral y comparada*. Estanislao Arana García Estanislao / M<sup>a</sup> Asunción Torres López (coords.) Comares. Granada, 2004, págs. 257-286.

SILVA SÁNCHEZ, JESÚS M<sup>a</sup> / MONTANER FERNÁNDEZ, RAQUEL. *Los delitos contra el medio ambiente. Reforma legal y aplicación judicial*. Atelier. Barcelona, 2012.

SINGER, PETER. *Desacralizar la vida humana. Ensayos sobre ética*. Helga Kuhse (ed.) Carment García Trevijano (trad.) Cátedra. Madrid, 2003.

- *Practical Ethics* (2<sup>nd</sup> ed.) Cambridge University Press, 1993.

SLEEP AND MENTAL ILLNESS. Pandi-Perumal. S. R. / Kramer, Milton (eds.) Cambridge University Press. New York, 2010.

SMITH, JOSEPH L. "Judicial Procedures as Instruments of Political Control: Congress's Strategic Use of Citizen Suits". En *Legislative Studies Quarterly*, Vol. 31, núm. 2. Comparative Legislative Research Center. University of Iowa. May, 2006, págs. 283-305.

SOKOL CHANG, ROSEMARIE / THOMPSON, NICHOLAS S. "Whines, cries and motherese: their relative power to distract". En *Journal of Social, Evolutionary, and Cultural Psychology*. Vol. 5, Issue 2:131, May 2011. NorthEastern Evolutionary Psychology Society. United States of America, págs. 10-20.

SOLLUND, RAGNHILD ASLAUG. "The Illegal Wildlife Trade from a Norwegian Outlook: Tendencies in Practices and Law Enforcement". En *Green Harms and Crimes. Critical Criminology in a Changing World*. Series: Critical Criminological Perspectives. Ragnhild Aslaug Sollund (ed.) Ed. Palgrave Macmillan, June 2015, págs. 147-169.

- "Animal Trafficking and Trade: Abuse and Species Injustice". En *Emerging Issues in Green Criminology. Exploring Power, Justice and Harm*. Reece Walters / Diane S. Westerhuis / Tanya Wyatt (eds.) Palgrave Macmillan. Basingstoke (UK), 2013, págs. 72-92.

SORIA, ARTURO. "Selección de artículos Arturo Soria y la Ciudad Lineal". En *El Progreso*. George R. Collins / Carlos Flores (dirs.) Revista de Occidente. Madrid, 1968.

SORIANO GARCÍA, JOSÉ EUGENIO / BRUFAO CURIEL, PEDRO. *Claves de Derecho Ambiental II. Medio natural biodiversidad y riesgos tecnológicos*. Iustel. Madrid, 2011.

- *Claves de Derecho Ambiental I*. Iustel. Madrid, 2010.

SOSA WAGNER, FRANCISCO. "La lucha contra el ruido". En *Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica*, núm. 249 (enero-marzo) INAP Madrid, 1991, págs. 11-31.

SOTELO NAVALPOTRO, JOSÉ ANTONIO / OLCINA CANTOS, JORGE / GARCÍA QUIROGA, FERNANDO / SOTELO PÉREZ, MARÍA. "Huella hídrica de España y su diversidad territorial". En *Estudios Geográficos*, Vol. LXXIII, 272, enero-junio 2012, págs. 239-272.

SOTELO NAVALPOTRO, JOSÉ ANTONIO / SOTELO PÉREZ, MARÍA / GARCÍA QUIROGA, FERNANDO. "Water Supply and Water Footprint in the Urban Region of Madrid (Spain)". En *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 4, nº 11, September 2013, págs. 23-28.

SOTO NAVARRO, SUSANA. *La protección penal de los bienes colectivos en la sociedad moderna*. Comares. Granada, 2003.

SOUTH, NIGEL. "Green Criminology: Reflections, Connections, Horizons". En *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, Vol. 3, Issue 2, 2014, págs. 5-20.

- "Green Criminology and Organised Environmental Crimes". *European Review of Organised Crime Newsletter*. September, 2014, Vol. 11, Issue 3. ECPR Standing Group on Organised Crime, págs. 2-4.
- "The ecocidal tendencies of late modernity: transnational crime, social exclusion, victims and rights". En *Global Environmental Harm. Criminological Perspectives*. Rob White (ed.) Willan Publishing. Devon (UK), 2010, págs. 228-247.
- "Ecocide, Conflict and Climate Change: Challenges for Criminology and the Research Agenda in the 21<sup>st</sup> Century". En *Eco-Crime and Justice. Essays on Environmental Crime*. Kristiina Kangaspunta / Ineke Haen Marshall (eds.) Unicri. Turin (Italy), 2009, págs. 37-53.
- "A Green Field for Criminology?: A Proposal for a Perspective". En *Theoretical Criminology. An International Journal*, Vol. 2, Issue 2, May 1998. (Special Issue: The Green Field of Study for Criminology). Mary Bosworth / Simon A. Cole (eds.) Sage Publications. London, 1998, págs. 211-233.

SOUTH, NIGEL / BRISMAN, AVI / BEIRNE, PIERS. "A guide to a green criminology". En *Routledge International Handbook of Green Criminology*. Nigel South / Avi Brisman (eds.) Routledge. New York, 2013, págs. 27-42.

SOUTH, NIGEL / WHITE, ROB. "The Antecedents and Emergence of a "Green" Criminology". Conference Paper: American Society of Criminology. En *Annual Meeting Presidential Papers. Selected Papers from the Presidential Panels: Expanding the Core – Neglected Crimes, Groups, Causes and Policy Approaches–*. Atlanta (USA), November 2013.

SOUVIRÓN MORENILLA, JOSÉ MARÍA. "Competencias propias y servicios mínimos obligatorios de los municipios en la reciente reforma del régimen local básico". En *Cuadernos de Derecho Local*, núm. 34. Monográfico: La revisión del Gobierno y la Administración local en la Ley 27/2013. Fundación Democracia y Gobierno Local. Febrero, 2014, págs. 80-97.

SPITLER, GENE. "Justifying a Respect for Nature". En *Environmental Ethics*, Vol. 4, Issue 3, Fall 1982, págs. 255-260.

STEINBEIS, NIKOLAUS / KOELSCH, STEFAN. "Affective Priming Effects of Musical Sounds on the Processing of Word Meaning". En *Journal of Cognitive Neuroscience*, Vol. 23, núm. 3, marzo, 2011, págs. 604-621.

STEPHENS, RAYMOND. W. B. "Noise Pollution-Basic Introductory Survey". En *Noise Pollution: Effects and Control*. A. Lara Saenz / R.W.B. Stephens (eds.) John Wiley & Sons, Scientific Committee on Problems of the Environment, Scope 24. Great Britain, 1986, págs. 1-42.

STONE, CHRISTOPHER D. *Should trees have standing? Law, Morality, and the Environment* (3<sup>rd</sup> ed.) Oxford University Press. New York, 2010.

- "Is Environmentalism Dead?". En *Environmental Law Review*, Vol. 38, Issue 1. Winter 2008, págs. 19-45.

STOOKES, PAUL. *A Practical Approach to Environmental Law* (2<sup>nd</sup> ed.) Oxford University Press. New York, 2009.

STRATENWERTH, GÜNTHER. "La criminalización en los delitos contra bienes jurídicos colectivos". Íñigo Ortiz de Urbina Gimeno / Margarita Valle Mariscal de Gante (trs.) En *La Teoría del bien jurídico, ¿Fundamento de legitimación del Derecho penal o juego de abalorios dogmático?* Roland Hefendehl (ed.) Marcial Pons. Madrid, 2007, págs. 365-372.

- *Derecho Penal. Parte General I. El Hecho punible*. Manuel Cancio Meliá / Marcelo A. Sancinetti (tr.) Aranzadi. Cizur menor (Navarra), 2005.

STRETESKY, PAUL B. / KNIGHT, OLGA. "The Uneven Geography of Environmental Enforcement INGO's". En *Emerging Issues in Green Criminology. Exploring Power, Justice and Harm*. Reece Walters / Diane S. Westerhuis / Tanya Wyatt (eds.) Palgrave Macmillan. Basingstoke (UK), 2013, págs. 173-196.

SUÁREZ GONZÁLEZ, CARLOS. "Artículo 330". En *Comentarios al Código Penal*. Gonzalo Rodríguez Mourullo (dir.) Agustín Jorge Barreiro (coord.) Civitas. Madrid, 1997, págs. 937-938.

SUBIJANA ZUNZUNEGUI, IGNACIO JOSÉ. "La prueba video-gráfica en el proceso penal". En *Videovigilancia. Ámbito de aplicación y derechos fundamentales afectados. En particular la protección de los datos personales*. José Ignacio Etxeberría Guridi / Ixusko Ordeñana Gezuraga (coords.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2011, págs. 17-43.



SUTHERLAND, EDWIN HARDIN. *White Collar Crime*. Holt, Reinhart and Winston. New York, 1949.

SWINBURN, TRACY K. / HAMMER, MONICA S. / NEITZEL, RICHARD L. “Valuing Quiet. An Economic Assessment of U.S. Environmental Noise as a Cardiovascular Health Hazard”. En *American Journal of Preventive Medicine*. Elsevier (In Press) (Available online 26 May 2015), págs. 1-9.

TAMARIT SUMALLA, JOSEP MARÍA. “Lesiones”. En *Comentario a la Reforma Penal de 2015*. Gonzalo Quintero Olivares (dir.) Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2015, págs. 347-350.

TAYLOR, BRON / ZIMMERMAN, MICHAEL. “Deep Ecology”. *Encyclopedia of Religion and Nature*. Continuum. London & New York, 2005, págs. 456-460.

TAYLOR, PAUL W. *Respect for Nature: A Theory of Environmental Ethics* (25<sup>th</sup> Anniversary Edition) Princeton University Press, New Jersey, 2011.

- “In Defense of Biocentrism”. En *Environmental Ethics*. Vol. 5, Issue 3, Fall 1983, págs. 237-243.
- “The Ethics of Respect for Nature”. En *Environmental Ethics*. Vol. 3, Issue 3, Fall 1981, págs. 197-218.

TERRADILLOS BASOCO, JUAN. “Protección penal del medio ambiente. Jurisprudencia e intuición”. En *Estudios de Derecho Ambiental. Libro Homenaje al profesor Josep Miquel Prats Canut*. Gonzalo Quintero Olivares / Fermín Morales Prats (coords.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2008, págs. 365-393.

- “Delitos relativos a la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente”. En *Derecho Penal del Medio Ambiente*. Juan Terradillos Basoco (ed. lit.) Trotta. Madrid, 1997, págs. 35-57.
- Prólogo a la obra colectiva *El delito ecológico*. Juan Terradillos Basoco (ed. lit.) Trotta. Madrid, 1992, págs. 9-11.
- “El ilícito ecológico. Sanción penal-sanción administrativa”. En *El delito ecológico*. Juan Terradillos Basoco (ed. lit.) Trotta. Madrid, 1992, págs. 79-105.

TIEDEMANN, KLAUS. *Poder económico y delito*. Amelia Mantilla Villegas (tr.) Ariel. Barcelona, 1985.

- “Aspectos penales y criminológicos de las actividades de las empresas transnacionales”. En *Revista Estudios Penales y Criminológicos*, núm. 6 (1981-1982). Santiago de Compostela, págs. 292-320.

TOMÁS Y VALIENTE, FRANCISCO. *La tortura en España* (2ª ed.) Ariel. Barcelona, 1994.

TOMATIS, ALFRED. *El oído y el lenguaje*. Juan Godo (tr.) Martínez Roca. Barcelona, 1969.

TORÍO LÓPEZ, ÁNGEL. “Los delitos de peligro hipotético. Contribución al estudio de los delitos de peligro abstracto”. En ADPCP, 1981, págs. 825-847.

TORQUEMADA SÁNCHEZ, Mª JESÚS. *Derecho y medio ambiente en la Baja Edad Media castellana*. Dykinson. Madrid, 2009.

TORNOS MAS, JOAQUÍN. “Ruidos y vibraciones”. En *Derecho y Medio Ambiente*. Luis Rodríguez Ramos (coord.) Centro de Estudios y Ordenación del Territorio y Medio Ambiente / Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Madrid, 1981, págs. 565-573.

TRABADO ÁLVAREZ, CONCEPCIÓN. “La regulación de las lesiones psíquicas del artículo 147 del Código Penal”. En *Diario La Ley*, núm. 7651, Sección Tribuna, 14. Año XXXII, junio 2011.

URIARTE RICOTE, MAITE. Voz “Ruido y vibraciones”. En *Diccionario de Derecho Ambiental*. Enrique Alonso García / Blanca Lozano Cutanda (dirs.) Iustel. Madrid, 2006, págs. 1157-1173.

VALCÁRCEL FERNÁNDEZ, PATRICIA. “Contaminación acústica y desarrollo sostenible en el marco de la actividad aeroportuaria. Algunas soluciones. En particular: ¿Servidumbres acústicas en la lucha contra el ruido?”. En *Desarrollo sostenible y protección del medio ambiente*. José Luis Piñar Mañas (dir.) Civitas. Madrid, 2002, págs. 207-254.

VALENCIA MARTÍN, GERMÁN. “Jurisprudencia constitucional: agua, ruido y cautelares”. En *Observatorio de Políticas Ambientales, 2012*. Fernando López Ramón (coord.) Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), junio 2012, págs. 203-232.

VAN STAËVEL, Jean-Pierre. *La ciudad medieval: de la casa al tejido urbano*. Actas del primer Curso de Historia y Urbanismo Medieval, Universidad de Castilla-La Mancha. Jean Passini (coord.) Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenca, 2001, págs. 215-239.

VAN WEEZEL, ALEX. “Contra la responsabilidad penal de las personas jurídicas”. En *La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Fortalezas, debilidades y perspectivas de cara al futuro*. Miguel Ontiveros Alonso (coord.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2014, págs. 599-644.

VÁSQUEZ SHIMAJUKO, SHIKARA. *La imputación de los resultados tardíos. Acerca de la dimensión temporal de la imputación objetiva*. B de F. Montevideo / Buenos Aires, 2013.

VEGA JURADO, DIEGO J. “La acción pública en materia de medio ambiente”. En *Intereses colectivos y legitimación activa*. Eloísa Carbonell Porras (dir.) Rafael Cabrera Mercado (coord.) Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2014, págs. 371-384.

- *La disciplina ambiental de las actividades industriales*. Tecnos. Madrid, 1994.

VELASCO NÚÑEZ, ELOY. “Responsabilidad penal de las personas jurídicas: aspectos sustantivos y procesales”. En *Diario La Ley*, núm. 7883, Año XXXIII, 19 de junio, 2012, págs. 1433-1437.

VERCHER NOGUERA, ANTONIO. Voz “Delito Ecológico”. En *Diccionario de Derecho Ambiental*. Enrique Alonso García / Blanca Lozano Cutanda (dirs.) Iustel. Madrid, 2006, págs. 443-454.

- “Responsabilidad penal ambiental”. En *La Responsabilidad Ambiental: Penal, Civil y Administrativa*. Ecoiuris. Las Rozas (Madrid), 2003, págs. 11-87.
- “La evolución del delito contra el medio ambiente a través de la jurisprudencia”. En *Derecho y Medio Ambiente: Revista jurídica para el desarrollo sostenible*, Vol. II, núm. 8 (octubre-diciembre) 2001, págs. 37-70.
- *Comentarios al delito ecológico. Breve estudio de Derecho comparado entre España y los Estados Unidos*. Centro de Publicaciones del Ministerio de Justicia. Madrid, 1986.

VICENTE GIMÉNEZ, TERESA. “El objeto de la ecología y sus implicaciones en el orden ético”. En *Justicia ecológica y protección del medio ambiente*. Teresa Vicente Giménez (coord.) Trotta. Madrid, 2002, págs. 13-39.

- “Orden ambiental-orden jurídico. Interdependencia, participación y condicionalidad”. En *Justicia ecológica y protección del medio ambiente*. Teresa Vicente Giménez (coord.) Trotta. Madrid, 2002, págs. 41-58.
- “Proyección de la justicia ecológica en la ordenación política y jurídica del medio ambiente”. En *Justicia ecológica y protección del medio ambiente*. Teresa Vicente Giménez (coord.) Trotta. Madrid, 2002, págs. 71-81.

VICENTE GÓMEZ, TERESA. “Economía, democracia y derechos humanos”. En *Jueces para la democracia. Información y debate*, núm. 77. Madrid, julio 2013, págs. 33-48.

VILLANUEVA CUEVAS, ANTONIO. “Turismo y medio ambiente”. *Tratado de Derecho Ambiental*. Luis Ortega Álvarez / Consuelo Alonso García (dirs.) Rosario de Vicente Martínez (coord.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2013, págs. 789-817.

VILLANUEVA LATORRE, ANA CLARA. “El régimen sancionador administrativo en la legislación acústica”. En *El derecho contra el ruido*. José Francisco Alenza García (dir.) Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2013, págs. 191-235.

VIVES ANTÓN, TOMÁS S. / ORTS BERENGUER, ENRIQUE. “Comentarios a propósito de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 16 de noviembre de 2004 (caso Moreno Gómez contra España)”. En *Estudios de Derecho Ambiental. Libro Homenaje al profesor Josep Miquel Prats Canut*. Gonzalo Quintero Olivares / Fermín Morales Prats (coords.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2008, págs. 411-424.

VIVES-REGO, JOSEP J. / CORCOY BIDASOLO, MIRENTXU / NIEVA FENOLL, JORDI. “Delito medioambiental y delito contra la salud pública: problemas terminológicos jurídicos y científicos de la legislación actual y propuestas de *lege ferenda*”. En *Medio Ambiente y Derecho: Revista electrónica de derecho ambiental*, núm. 16, septiembre 2007.

VON HIRSCH, ANDREW. “El concepto de bien jurídico y el principio del daño”. Rafael Alcácer Guirao (tr.) En *La Teoría del bien jurídico, ¿Fundamento de legitimación del Derecho penal o juego de abalorios dogmático?* Roland Hefendehl (ed.) Marcial Pons. Madrid, 2007, págs. 37-52.

VON HIRSCH, ANDREW / WOHLERS, WOLFGANG. “Teoría del bien jurídico y estructura del delito. Sobre los criterios de una imputación justa”. Beatriz Spínola Tártalo (tr.) En *La Teoría del bien jurídico, ¿Fundamento de legitimación del Derecho penal o juego de abalorios dogmático?* Roland Hefendehl (ed.) Marcial Pons. Madrid, 2007, págs. 285-339.

WARREN, SAMUEL / BRANDEIS, LOUIS. *El Derecho a la intimidad*. Pilar Baselga (tr.) Civitas. Madrid, 1995.

WENZ, PETER S. *Environmental Ethics Today*. Oxford University Press. Oxford / New York, 2001.

WEILGART, LINDA S. “The Impact of Ocean Noise Pollution on Marine Biodiversity”. En *International Ocean Noise Coalition*, March, 2008, págs. 1-6.

WHITE, LYNN JR. "The historical Roots of Our Ecological Crisis". José Tomás Ibarra, Francisca Massardo y Ricardo Rozzi (trads.) En *Revista Ambiente y Desarrollo de CIPMA*, núm. 23 (I) Santiago de Chile, 2007. págs. 78-86.

WHITE, ROB. "The Conceptual Contours of Green Criminology". En *Emerging Issues in Green Criminology. Exploring Power, Justice and Harm*. Reece Walters / Diane S. Westerhuis / Tanya Wyatt (eds.) Palgrave Macmillan. Basingstoke (UK), 2013, págs. 17-33.

- "Globalisation and environmental harm". En *Global Environmental Harm. Criminological Perspectives*. Rob White (ed.) Willan Publishing. Devon (UK), 2010, págs. 3-19.
- *Crimes against Nature: Environmental Criminology and Ecological Justice*. Willan Publishing. Devon, 2008.

WILLIAMS, CHRISTOPHER. "An Environmental Victimology". *Environmental Victims: New Risks, New Injustice*. Christopher Williams (ed.) Earthscan. London, 1998, págs. 3-26.

WOHLERS, WOLFGANG. "Derecho Penal como *ultima ratio*. ¿Principio fundamental del Derecho Penal de un Estado de Derecho o principio sin un contenido expresivo propio?" Nuria Pastor Muñoz (trad.) En *Límites al Derecho Penal: principios operativos en la fundamentación del castigo*. Andrew von Hirsch et. al. (ed. alemana) Ricardo Robles Planas (ed. española) Atelier. Barcelona, 2012, págs. 109-128.

WOLF, SUSAN / STANLEY, NEIL. *Wolf and Stanley on Environmental Law* (6<sup>th</sup> ed. revised) Routledge. London & New York, 2014.

WOLTER, JÜRGEN. "Derechos humanos y protección de bienes jurídicos en un sistema europeo del Derecho penal". Francisco Baldó Lavilla (tr.) En *Fundamentos de un sistema europeo del Derecho penal. Libro/Homenaje a Claus Roxin*. J.M. Silva Sánchez (ed. española) B. Schünemann / J. De Figueiredo Dias (coords.) Bosch. Barcelona, 1995, págs. 37-72.

WYATT, TANYA / WESTERHUIS, DIANE / WALTERS, REECE ET. AL. *Emerging Issues in Green Criminology. Exploring Power, Justice and Harm*. Reece Walters et. al. (eds.) Palgrave Macmillan. Basingstoke (UK), 2013.

XIAOYING, SUO. *Una experiencia piloto de ecociudad en China: Dongtan. El desarrollo urbano sostenible en China*. Trabajo Fin de Máster inédito. Instituto Universitario de Ciencias Ambientales (IUCA) Facultad de Derecho UCM. Madrid, 2012.

YÁBAR STERLING, ANA. Voz “Contabilidad Ambiental”. En *Diccionario de Derecho Ambiental*. Enrique Alonso García / Blanca Lozano Cutanda (dirs.) Iustel. Madrid, 2006, págs. 367-382.

ZAFFARONNI, RAÚL E. *La Pachamama y el Humano* (1ª ed., 4ª reimp.) Madres de Plaza de Mayo / Colihue. Buenos Aires, 2012.

- “La naturaleza como persona: Pachamama y Gaia”. En *Bolivia. Nueva Constitución Política del Estado. Conceptos elementales para su desarrollo normativo*. Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. La Paz, 2010, págs. 109-132.
- “Una experiencia notable: El nuevo Derecho penal austriaco”. En *Anuario de Derecho penal y Ciencias penales*. Tomo 33, Fasc. / Mes 3, 1980, págs. 707-729.

ZAKRZEWSKI, SIGMUND F. *Environmental Toxicology* (3<sup>rd</sup> ed.) Oxford University Press. New York, 2002.

ZÁRATE, MARÍA LORENA. “El derecho a la ciudad: luchas urbanas por el buen vivir”. En *El Derecho a la ciudad*. Serie Derechos Humanos Emergentes 7. Institut de Drets Humans de Catalunya. Barcelona, 2011, págs. 53-70.

ZUGALDÍA ESPINAR, JOSÉ MIGUEL. “Contrarreforma penal (el annus horribilis de 2003) y el Anteproyecto de reforma del Código penal de 2006”. En *Derecho Penal y Criminología como fundamento de la política criminal. Estudios en homenaje al Profesor Alfonso Serrano Gómez*. Francisco Bueno Arús / Helmut Kury / Luis Rodríguez Ramos, et al. (dirs.) Dykinson. Madrid, 2006, págs. 1347-1382.

- *Bases para una teoría de la imputación de la persona jurídica*. Cuadernos de Política Criminal, núm. 81. Edersa. Madrid, 2003, págs. 537-554.

ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, LAURA. *Bases para un modelo de imputación de responsabilidad penal a las personas jurídicas* (2ª ed.) Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2009.

ZWICKER, EBERHARD. “Psychophysics of Hearing”. En *Noise Pollution: Effects and Control*. A. Lara Saenz / R.W.B. Stephens (eds.) John Wiley & Sons, Scientific Committee on Problems of the Environment, scope 24. Great Britain, 1986, págs. 147-167.



## **ANEXO 1**

### **LEGISLACIÓN ABREVIADA**

#### **DIRECTIVAS**

- ✓ Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, de Hábitats.
- ✓ Directiva 2000/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de enero de 2001, relativa a las disposiciones sobre la hora de verano.
- ✓ Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002 sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.
- ✓ Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, sobre el acceso del público a la información ambiental.
- ✓ Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente.
- ✓ Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales.
- ✓ Directiva 2005/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa a la contaminación procedente de buques y la introducción de sanciones para las infracciones.
- ✓ Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal.
- ✓ Directiva 2009/17/CE, de 23 de abril de 2009, por la que se modifica la Directiva 2002/59/CE relativa al establecimiento de un sistema comunitario de seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo.



## LEYES ORGÁNICAS

- ✓ LO 2/1979 de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
- ✓ LO 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa.
- ✓ LO 8/1983, de 25 de junio, de Reforma Parcial y Urgente del CP.
- ✓ LO 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
- ✓ LO 3/1989, de 21 de junio, de actualización del Código Penal.
- ✓ LO 9/1992, de 23 de diciembre, de transferencia de competencias a Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del art. 143 de la Constitución.
- ✓ LO 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado.
- ✓ LO 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando.
- ✓ LO 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos [desarrollada por RD 596/1999, de 16 de abril].
- ✓ LO 6/2007, de 24 de mayo por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
- ✓ LO 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
- ✓ LO 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social.
- ✓ LO 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
- ✓ LO 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.
- ✓ LO 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.

## LEYES ESTATALES

- ✓ Ley de 18 de junio de 1870, sobre ejercicio de la Gracia de Indulto.
- ✓ Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado.
- ✓ Ley 209/1964, de 24 de diciembre, de Navegación Aérea.
- ✓ Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico.
- ✓ Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.
- ✓ Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- ✓ Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.
- ✓ Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
- ✓ Ley 31/1988, de 31 de octubre, de Protección de la Calidad Astronómica de los Observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias.
- ✓ Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.
- ✓ Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
- ✓ Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
- ✓ Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
- ✓ Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
- ✓ Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
- ✓ Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.
- ✓ Ley 25/1998, de 29 de julio, de Carreteras.
- ✓ Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
- ✓ Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado.
- ✓ Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- ✓ Ley 37/2003, de 17 de noviembre, Ley del Ruido.
- ✓ Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.
- ✓ Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
- ✓ Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases invernadero.
- ✓ Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

- ✓ Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales.
- ✓ Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera.
- ✓ Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
- ✓ Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.
- ✓ Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
- ✓ Ley 41/2010, de 29 de noviembre, de Protección del Medio Marino.
- ✓ Ley 2/2011 de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
- ✓ Ley 12/2011 de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radioactivos.
- ✓ Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.
- ✓ Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
- ✓ Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
- ✓ Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.
- ✓ La Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
- ✓ Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.
- ✓ Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima.

## **REGLAMENTOS**

- ✓ Reglamento de actividades clasificadas de 1961 [Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre], por el que se aprueba el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
- ✓ RD 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.
- ✓ RD 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

- ✓ RD 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior.
- ✓ RD 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

## **ORDENANZAS LOCALES**

- ✓ Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente de la ciudad de Hellín [BOP Albacete núm. 57, de 13 de Mayo de 1.991].
- ✓ Ordenanza municipal de Playas y Calas del término municipal de Alicante [BOP de Alicante núm. 209, de 30 de octubre de 2008].
- ✓ Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica de Madrid, de 25 de febrero de 2011 [Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid núm. 6385 de 7 de marzo de 2011].
- ✓ Ordenanza municipal sobre la protección, la tenencia responsable y la venta de animales de Zaragoza [BOPZ núm. 290 de 19 de diciembre de 2013].
- ✓ Ordenanza del Ayuntamiento de Mojácar, reguladora del ruido procedente de usuarios de vía pública, actividades domésticas y de vecinos, de 4 de julio de 2013 [BOP Almería núm. 129, martes 9 de julio de 2013].
- ✓ Ordenanza de protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones de Murcia [BORM núm. 282 de 9 de diciembre de 2014].
- ✓ Ordenança reguladora de l'activitat denominada Pub Crawling de Calvià [BOIB núm. 90, 3 de julio de 2014].
- ✓ Ordenanza contra la Contaminación Acústica, Ruidos y Vibraciones de Sevilla [BOP Sevilla núm. 251, miércoles 29 de octubre de 2014].
- ✓ Ordenanza municipal para la protección contra ruidos y vibraciones de Zaragoza [Borrador de 14 de abril de 2015]



## **ANEXO 2**

### **JURISPRUDENCIA**

#### **INTERNACIONAL**

##### **–ARGENTINA–**

##### **CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL**

- Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal. Causa núm. CCC 68831/2014/CFC1 “Orangutana Sandra s/recurso de casación S/HABEAS CORPUS”, de 18 de diciembre de 2014 [Id Infojus: FA14261110]

##### **JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS**

- Sentencia Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 29 de abril de 2015 [Id Infojus: NV11236]

##### **–REINO UNIDO–**

##### **TRIBUNAL DE APELACIONES**

- Sala de lo Penal. R v. Conrad Ryder-Large & John Castrillion (2008) [EWCA Crim: 2966]

##### **TRIBUNAL SUPERIOR**

- Tribunal Administrativo. R (London Borough of Hackney) v. Moshe Rottenberg (2007) [EWHC 166 (Admin); (2007) Env LR 24; (2008) JPL 177]

## EUROPEA

### TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

- STEDH *Powell y Rayner v. Reino Unido*, de 21 de febrero de 1990 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: TEDH 1990/4]
- STEDH (Application nº. 16798/90) *López Ostra v. España*, de 9 de diciembre de 1994 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: TEDH/1994/3]
- STEDH (Sección 3ª) *Hatton y otros v. Reino Unido*, de 2 de octubre de 2001 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: TEDH 2001\567]
- STEDH (Gran Sala) *Hatton y otros v. Reino Unido*, de 8 julio 2003 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: TEDH 2003\40]
- STEDH (Sección 3ª) *Moreno Gómez v. España*, de 16 de noviembre de 2004 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: TEDH/2004/68]
- DTEDH (Sección 4ª) *Ruano Morcuende v. España*, de 6 de septiembre de 2005 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: TEDH/2005/87]
- STEDH (Sección 1ª) *Oluic v. Croacia*, de 20 de mayo de 2010 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: JUR/2010/161026]
- STEDH (Sección 2ª, Application nº 2345/06) *Dees v. Hungría*, de 9 de noviembre de 2010 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: JUR/2010/367178]
- STEDH (Sección 5ª) *Mileva y otros v. Bulgaria*, de 25 de noviembre de 2010 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: JUR/2010/389784]
- STEDH (Sección 3ª) *Martínez Martínez v. España*, de 18 de octubre de 2011 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: TEDH/2011/86]
- STEDH (Sección 4ª) *Zammit Maempel v. Malta*, de 22 de noviembre de 2011 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: JUR 2011\395756]
- STEDH (Sección 2ª) *Di Sarno y otros v. Italia*, de 10 de enero de 2012 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: TEDH/2012/2]
- STEDH (Sección 3ª) *Vilanova Goterris y Llop García v. España*, de 27 de noviembre de 2012 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: TEDH 2012/111]

- STEDH (Former Fourth Section, Application nº. 7511/13) *Case of Husayn (Abu Zubaydah) v. Poland* Sentencia de 24 julio de 2014, versión final de 16 de febrero de 2015 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: JUR 2014\198189]
- STEDH (Fourth Section, Application nº. 30587/13) *Karaahmed vs. Bulgaria*, de 24 de febrero de 2015. Versión final de 24 de mayo de 2015 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: JUR 2015\60020]

## **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA**

- Sentencia de 13 de septiembre de 2005 (C-176/03) *Comisión v. Consejo* [DOUE: C 315, de 10 de diciembre de 2005]

## **NACIONAL**

### **TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

#### **SALA PLENO**

- STC 4/1981, de 2 de febrero de 1981 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RTC 1981\4]
- STC 32/1981, de 28 de julio de 1981 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RTC 1981\32]
- STC 27/1987, de 27 de febrero de 1987 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RTC 1987\27]
- STC 103/1989, de 8 de junio de 1989 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RTC 1989\103]
- STC 76/1990, de 26 de abril de 1990 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RTC 1990/76]
- STC 66/1991, de 22 de marzo de 1991 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RTC 1991\66]
- STC 341/1993, de 18 de noviembre de 1993 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RTC 1993\341]



- STC 102/1995, de 26 de junio de 1995 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RTC 1995\102]
- STC 156/1995, de 26 de octubre de 1995 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RTC 1995\156]
- STC 196/1996, de 28 de noviembre de 1996 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RTC 1996\196]
- STC 40/1998, de 19 de febrero de 1998 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RTC 1998\40]
- STC 233/1999, de 13 de diciembre de 1999 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RTC 1999\233]
- STC 119/2001, de 24 de mayo de 2001 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RTC 2001\119]
- STC 166/2002, de 18 de septiembre de 2002 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RTC 2002\166]
- STC 30/2011, de 16 de marzo de 2011 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RTC 2011\30]
- STC 32/2011, de 17 de marzo de 2011 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RTC 2011\32]
- STC 150/2011, de 29 de septiembre de 2011 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: JUR\2011\357557]

### **SALA PRIMERA**

- STC (Sala 1ª) 18/1981, de 8 de junio de 1981 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RTC 1981\18]
- STC (Sala 1ª) 77/1982, de 20 de diciembre de 1982 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RTC 1982\77]
- STC (Sala 1ª) 127/1990, de 5 de julio de 1990 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RTC 1990\127]
- STC (Sala 1ª) 246/1991, de 19 de diciembre de 1991 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RTC 1991\246]
- STC (Sala 1ª) 303/1993, de 25 de octubre de 1993 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RTC 1993\303]
- STC (Sala 1ª) 132/2001, de 8 junio de 2001 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RTC 2001\132]

- STC (Sala 1ª) 16/2004, de 23 febrero de 2004 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RTC 2004\16]

## **SALA SEGUNDA**

- STC (Sala 2ª) 62/1994, de 28 de febrero de 1994 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RTC 1994\62]
- STC (Sala 2ª) 25/2004, de 26 de febrero de 2004 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RTC 2004\25]

## **AUTOS**

- ATC (Sala 1ª) 120/2004, de 19 de abril de 2004 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: JUR 2004\148677]

## **TRIBUNAL SUPREMO**

### **SALA DE LO PENAL**

- STS de 30 noviembre de 1990. Ponente: Excmo. Sr. José Antonio Martín Pallín [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RJ 1990\9269]
- STS 2201/1994, de 15 de diciembre de 1994 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RJ 1994\10575]
- STS 582/1996, de 24 de septiembre de 1996. Ponente: Excmo. Sr. Roberto García-Calvo y Montiel [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RJ 1996\6753]
- STS 833/2002, de 2 de junio de 2002. Ponente: Excmo. Sr. José Aparicio Calvo-Rubio [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RJ/2003/6235]
- STS 1828/2002, de 25 de octubre de 2002. Ponente: Excmo. Sr. Julián Sánchez Melgar [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RJ\2002\10461]
- STS (Sala de lo Penal) 449/2003, de 24 mayo de 2003. Ponente: Excmo. Sr. José Antonio Martín Pallín [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RJ 2003\4387]
- STS 52/2003, de 24 de febrero de 2003. Ponente: Excmo. Sr. Carlos Granados Pérez [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RJ 2003\950]
- STS 1252/2004, de 2 de noviembre de 2004. Ponente: Excmo. Sr. Andrés Martínez Arrieta [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RJ 2004\7220]

- STS (Sección 1ª) 1091/2006, de 19 octubre de 2006. Ponente: Excmo. Sr. José Antonio Martín Pallín [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RJ 2006\8364]
- STS (Sección 1ª) 1182/2006, de 29 de noviembre de 2006. Ponente: Excmo. Sr. Diego Antonio Ramos Gancedo [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RJ 2007\250]
- STS (Sección 1ª) 327/2007, de 27 de abril de 2007 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RJ\2007\4724]
- STS (Sección 1ª) 540/2007, de 20 de junio de 2007. Ponente: Excmo. Sr. Luis Román Puerta Luis [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RJ 2007\4749]
- STS (Sección 1ª) 141/2008, de 8 de abril de 2008 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RJ 2008\1852]
- STS (Sección 1ª) 708/2009, de 16 de junio de 2009 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RJ\2009\6645]
- STS (Sección 1ª) 1307/2009, de 5 de noviembre de 2009. Ponente: Excmo. Sr. Siro Francisco García Pérez [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RJ\2010\301]
- STS (Sección 1ª) 1112/2009, de 16 de noviembre de 2009 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RJ\2009\5846]
- STS (Sección 1ª) 1317/2011, de 2 de diciembre de 2011. Ponente: Excmo. Sr. José Manuel Maza Martín [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RJ 2012\64]
- STS (Sección 1ª) 152/2012, de 2 de marzo de 2012 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RJ\2012\3669]
- STS (Sección 1ª) 838/2012, de 23 de octubre de 2012. Ponente: Excmo. Sr. Miguel Colmenero Menéndez de Lúcar [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RJ\2012\10172]
- STS (Sección 1ª) 916/2012, de 28 de noviembre de 2012 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RJ 2013\936]
- STS (Sección 1ª) 89/2013, de 11 de febrero de 2013. Ponente: Excmo. Sr. Cándido Conde-Pumpido Tourón [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RJ/2013/3174]
- STS (Sección 1ª) 410/2013, de 13 de mayo de 2013. Ponente: Excmo. Sr. Andrés Martínez Arrieta [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RJ/2013/3511]
- STS (Sección 1ª) 463/2013, de 16 de mayo de 2013. Ponente: Excmo. Sr. Carlos Granados Pérez [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RJ/2013/3989]
- STS (Sección 1ª) 840/2013, de 11 noviembre de 2013. Ponente: Excmo. Sr. Julián Artemio Sánchez Melgar [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RJ 2013\7344]

- STS (Sección 1ª) 566/2014, de 16 de junio de 2014. Ponente: Excmo. Sr. Julián Sánchez Melgar [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RJ/2014/3955]
- STS (Sección 1ª) 713/2014, de 22 de octubre de 2014. Ponente: Luciano Varela Castro [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RJ 2014\5089]

## **AUTOS**

- ATS (Sección 1ª) 176/2012, de 2 de febrero de 2012 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: JUR\2012\60385]
- ATS (Sección 1ª) 932/2012, de 19 de abril de 2012 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: JUR\2012\202675]
- ATS (Sección 1ª) 369/2014, de 20 de febrero de 2014. Ponente: Excmo. Sr. José Ramón Soriano Soriano [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: JUR/2014/96631]

## **SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO**

- STS de 11 marzo de 1987. Ponente: Excmo. Sr. Juan Ventura Fuentes Lojo [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RJ 1987\1471]
- STS (Sección 6ª), de 8 de octubre de 1999. Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco González Navarro [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RJ 1999\8665]
- STS (Sección 7ª), de 26 de noviembre de 2007. Ponente: Excmo. Sr. José Díaz Delgado [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RJ/2007/8552]
- STS (Sección 7ª), de 2 de junio de 2008. Ponente: Excmo. Sr. Pablo Lucas Murillo de la Cueva [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RJ\2008\5470]
- STS (Sección 7ª), de 13 de octubre de 2008. Ponente: Excmo. Sr. Pablo Lucas Murillo de la Cueva [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RJ 2008\7142]
- STS (Sección 1ª), de 26 de noviembre de 2009. Ponente: Sr. Ricardo Enríquez Sancho [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RJ 2009\5692]
- STS (Sección 5ª), de 20 de julio de 2010 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RJ 2010\6507]
- STS (Sección 3ª), de 21 febrero 2011. Ponente: Excmo. Sr. Eduardo Espín Templado [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RJ 2011\1241]
- STS (Sección 5ª), de 21 de marzo de 2012. Ponente: Excmo. Sr. Jesús Ernesto Peces Morate [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RJ\2012\4458]

- STS (Sección 5ª), de 18 de julio de 2012. Ponente: Excmo. Sr. Jesús Ernesto Peces Morate [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RJ\2012\8660]

## **AUTOS**

- ATS (Sección 1ª), de 11 de mayo de 1989 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RJ\1989\3867]
- ATS (Sección 1ª), de 8 enero 2015 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: JUR\2015\49116]

## **SALA DE LO CIVIL**

- STS (Sección 1ª), 589/2007 de 31 mayo [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RJ 2007\3431].

## **AUDIENCIA NACIONAL**

- SAN (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª), de 23 de enero de 2008 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: JUR\2008\44414].
- SAN (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª), de 5 de diciembre de 2008 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: JUR 2009\8524].

## **TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA**

- STSJ Valencia (Sala 3ª, Sección 3ª) 2089/2006, de 19 diciembre de 2006 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: JUR 2007\116791].
- STSJ Valencia (Sala 3ª, Sección 1ª) 820/2009, de 19 junio de 2009 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: JUR 2009\376975].
- STSJ Andalucía, Granada (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª) Sentencia 634/2007, de 1 de octubre de 2007 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: JUR 2008\59631].
- STSJ Aragón (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª) 676/2011, de 17 de octubre de 2011 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: JUR\2011\426907].

- STSJ Andalucía, Granada (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª) Sentencia 1951/2012, de 11 de junio de 2012 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RJCA 2012\431].
- STSJ Valencia (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª) 752/2013, de 27 junio de 2013 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: JUR\2013\281169].
- STSJ Andalucía (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª) 803/2014, de 21 de marzo de 2014 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: JUR 2014\91904].
- STSJ Murcia (Sala de lo Civil y Penal, Sección 1ª) 2/2014, de 15 de mayo de 2014. Ponente: Excmo. Sr. Manuel Abadia Vicente [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: ARP 2014\672].

## **AUDIENCIAS PROVINCIALES**

- SAP Zaragoza (Sección 3ª) 140/1999, de 7 de julio de 1999 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: ARP\1999\2816].
- SAP Las Palmas (Sección 1ª) 255/1999, de 16 octubre de 1999 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: ARP 1999\4627].
- SAP Palencia 23/2000, de 9 noviembre de 2000 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: ARP 2000\2659].
- SAP Málaga 100/2007, de 5 de febrero de 2007. Sumario núm. 3/01, Diligencias Previas 286/01. Rollo núm. 7 de 2012. Juzgado de Instrucción núm. 1 de Málaga: [Archivo].
- SAP Murcia (Sección 3ª) 34/2010, de 15 de febrero de 2010 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: JUR 2010\146718].
- SAP Las Palmas (Sección 1ª) 90/2011, de 14 de octubre de 2011 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: ARP/2012/120].
- SAP Zaragoza (Sección 6ª) 388/2011, de 10 de noviembre de 2011 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: JUR\2011\429963].
- SAP Zamora (Sección 1ª) 10/2012, de 6 de febrero de 2012 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: ARP/2012/220].
- SAP Jaén (Sección 1ª) 41/2012, de 21 de febrero de 2012 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: ARP 2012\1433].

- SAP Lugo (Sección 2ª) 131/2012, de 9 de julio de 2012 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: ARP\2012\777].
- SAP Sevilla (Sección 7ª) 9/2012, de 9 de marzo de 2012 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: ARP 2012\1141].
- SAP Málaga (Sección 3ª) 466/2013, de 31 de julio de 2013 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: JUR/2013/379644].
- SAP Burgos (Sección 1ª) 384/2013, de 19 de septiembre de 2013 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: ARP/2013/1178].
- SAP Sevilla (Sección 3ª) 626/2013, de 24 de octubre de 2013 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: ARP/2014/131].
- SAP Girona (Sección 4ª) 723/2013, de 26 de noviembre de 2013. Rollo núm. 11-2013, procedimiento abreviado núm. 40-2010. Juzgado de Instrucción núm.1 de Puigcerdá: [Archivo].
- SAP Las Palmas (Sección 6ª) 1/2014, de 10 de enero de 2014 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: ARP/2014/307].
- SAP Palencia (Sección 1ª) 6/2014, de 20 de Febrero de 2014 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: JUR/2014/91405].
- SAP Valencia (Sección 3ª) 229/2014, de 7 de abril de 2014 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: JUR/2014/162469].
- SAP Barcelona (Sección 6ª) 94/2014, de 20 de diciembre de 2014 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: JUR/2014/50738].

## **AUTOS**

- AAP de Girona (Sección 3ª) 434/2000, de 10 de noviembre de 2000 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: JUR 2001\61278].

## **JUZGADOS DE LO PENAL**

- Juzgado de lo Penal núm. 3 de Granada. Sentencia núm. 510/2001, de 16 de noviembre de 2001: [Archivo].
- Juzgado de lo Penal núm. 3 de Zaragoza. Sentencia 51/2006, de 6 de marzo de 2006 [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: JUR/2006/99140].
- Juzgado de lo Penal núm. 1 de Oviedo. Sentencia 109/2012, de 27 de junio de 2012 [CENDOJ / CGPJ: ROJ: SJP 75/2012].
- Juzgado de lo Penal núm. 28 de Barcelona. Procedimiento abreviado núm. 538/2012-C. Sentencia núm. 157/2013, de 8 de abril de 2013: [Archivo].
- Juzgado de lo Penal núm. 9 de Valencia. Sentencia núm. 378/2013, de 20 de septiembre de 2013: [Archivo].

## **JUZGADOS DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO**

- SJCA núm. 3 de Zaragoza, 56/2007 de 14 de febrero [Aranzadi / Rec. Electr. Westlaw: RJCA\2007\179].





### **ANEXO 3**

#### **DOCUMENTACIÓN ADICIONAL**

- Actas de Plenos Municipales del año 1.933 (Sign. A 323 / 5) 12-1-1933. Archivo Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Hellín.
- “Air quality in Europe, 2013 report”. European Environment Agency. Publications Office of the European Union. Luxembourg, 2013.
- “Airport policy in the European Union –addressing capacity and quality to promote growth, connectivity and sustainable mobility–“. Comunicación de la Comisión: COM (2011) 823 final, de 1 de diciembre.
- Análisis de la huella ecológica de España. Centro de Publicaciones. Secretaría General Técnica. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Madrid, 2008.
- Anuario Estadístico del Ministerio del Interior 2012. Ministerio del Interior, Secretaría General Técnica. Madrid, julio 2013.
- Boletín de difusión de la educación ambiental en Castilla y León. Núm. Extraordinario. Junta de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente. Valladolid, 2010.
- Burden of disease from Environmental noise. Quantification of healthy life years lost in Europe. Publications WHO Regional Office for Europe. Copenhagen, 2011.
- Carta Encíclica Laudato si’, del Santo Padre Francisco sobre el cuidado de la casa común, de 24 de mayo de 2015.
- Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad. Declaración Universal de Derechos Emergentes. Forum Universal de las Culturas. Monterrey (México), 2007.

- CIE-10 Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS (10ª revisión).
- Circular 1/2011 relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica número 5/2010. Fiscalía general del Estado. Madrid, 2011.
- Circular 7/2011. Sobre criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en materia de medio ambiente y urbanismo. Fiscalía General del Estado. Madrid, 2011.
- “City of London”. Noise Strategy 2012-2016 Summary Version.
- Climate Change 2013. The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press. New York, 2013.
- Conclusiones VII Reunión Anual de la Red de Fiscales de Medio Ambiente y Urbanismo. Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo. Fiscalía General del Estado. Madrid, 2014.
- Contaminación Lumínica. Documento Final del Grupo de Trabajo 20. José Miguel Peña Pérez (coord.) CONAMA V. Madrid, noviembre-diciembre, 2000.
- Consejo Económico y Social de las naciones Unidas:
  - Resolución 288 (X) de 27 de febrero de 1950 (B. Parte I, §8) [E/1661]
  - Resolución 1296 (XLIV), de 25 de junio de 1968 (Parte I, §7) [E/4548]
- Contra la tortura. Manual de acción. Amnistía Internacional. Madrid, 2003.
- Decisión 466/2002 del Parlamento y del Consejo, de 1 de marzo, relativa al programa de acción comunitario de fomento de las ONGs dedicadas principalmente a la protección del medio ambiente.

- Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Generaciones Futuras, UNESCO-Equipo Cousteau, 26 de febrero de 1994.
- Defensor del pueblo. Informes, Estudios y Documentos. Contaminación acústica. Ed. Defensor del pueblo. Madrid, 2005.
- Defensor del pueblo de Navarra. Resolución 141/2011, de 30 de agosto.
- “Desarrollo sostenible en Europa para un mundo mejor: estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible”. Estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible. Comisión Europea. Oficina Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. Luxemburgo, 2002.
- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5<sup>th</sup> ed.) American Psychiatric Association.
- El Amigo del Pueblo, año II, núm. 60. Hellín (Albacete), 21-4-1889. Publicación dominical de carácter semanal editada entre los años 1888-1895. [Fondos Archivo privado D. Mariano Andújar Tomás].
- El Heraldo de Madrid. Año III, núm. 532, sábado 16 de abril de 1892. [Fondos Archivo Municipal de Hellín: copia sin sign].
- Fighting Noise. Strengthening Noise Abatement Policies. Ed. Organisation for Economic Co-Operation and Development. París, 1986.
- General Union Environment Action Programme to 2020: Living well, within the limits of our planet. European Commission. Publications Office of the European Union. Luxembourg, 2014.
- Guías para el ruido urbano. Birgitta Berghund / Thomas Lindvall / Dietrich H.Schwela (eds. lit.) Londres, abril 1999. Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (tr.), basado en el documento Community Noise. Ed. Stockholm University / Karolinska Institute. Ginebra, 1995.

- Guidelines for Minimizing Sky Glow. Directriz núm.126 sobre Directrices para minimizar el resplandor del cielo. International Commission on Illumination, 1997.
- La protección penal del medioambiente. Un estudio sobre su eficacia. VÁZQUEZ GONZÁLEZ, Carlos / LUACES GUTIÉRREZ, Ana Isabel / SERRANO TÁRRAGA, M<sup>a</sup> Dolores. Póster presentado en el X Congreso Español de Criminología. Granada, 2014.
- Libro verde de medio ambiente urbano. Tomo II. Salvador Rueda Palenzuela (dir.) Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Madrid, junio 2009.
- Libro Verde sobre política futura de lucha contra el ruido. Bruselas, 04.11.1996 COM (96) 540 final.
- Memoria 2009: Anexo II. Informe sobre la Directiva 2005/35/CE, relativa a la contaminación procedente de buques y su relación con la introducción de nuevas conductas delictivas en el proyecto de reforma del Código Penal. Fiscalía General del Estado. Madrid, 2009.
- Memoria 2011. Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo. Fiscalía General del Estado. Madrid, 2011.
- Memoria 2013. Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo. Fiscalía General del Estado. Madrid, 2013.
- Night Noise Guidelines for Europe. World Health Organization. Regional Office for Europe, 2009.

- Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se instituye un Programa de acción comunitario de fomento de las organizaciones no gubernamentales dedicadas principalmente a la protección del medio ambiente (presentada por la Comisión). Comisión de las Comunidades Europeas. Bruselas, 22.6.2011 COM (2001) 337 final 2001/0139 (COD), Vol. II.
- Protocolo de vigilancia sanitaria específica para los/as trabajadores/as expuestos a ruido. Ministerio de Sanidad y Consumo. Secretaría General Técnica, Centro de Publicaciones. Madrid, 2000.
- “Proyecto Ecocity. Manual para el diseño de ecociudades en Europa” Libro I. En La ecociudad: un lugar mejor para vivir. Philine Gaffron, Gé Huismans y Franz Skala (coords.) M<sup>a</sup> Jesús Uzquiano Barbas (tr.) Bakeaz. Bilbao, 2008.
- Quality of life in cities. Perception survey in 79 European cities. Flash Eurobarometer 366. Publications Office of the European Union. Luxembourg, 2013.
- Recomendación 18/88, de 20 de octubre, del Comité de Ministros de los Estados Miembros del Consejo de Europa.
- Resolución conjunta de 16 de abril de 2009, de la Secretaría General de Energía y de la Secretaría General del Mar, por la que se aprueba el estudio estratégico ambiental del litoral español para la instalación de parques eólicos marinos. BOE núm. 112, viernes 8 de mayo de 2009. Sec. III, pág. 39839.
- Ruido y Salud. Informe Observatorio de Salud y Medio Ambiente de Andalucía, 2010.
- Ruido y Salud. Observatorio DKV de Salud y Medio Ambiente en España, 2011-2012.

- 25 ciudades sostenibles. Instituto Análisis e Investigación, 2012.
- Semanario Gente nueva. Periódico independiente de publicación dominical. Redacción y administración: calle General Cassola 4, 22 de diciembre de 1907 (II-89), Hellín (Albacete). [Fondos Archivo privado D. Mariano Andújar Tomás].
- Sostenibilidad en España 2009; Sostenibilidad en España 2006. Observatorio de la Sostenibilidad en España.
- Status of Ratification of the Kyoto Protocol. United Nations. Framework Convention on Climate Change.
- World Urbanization Prospects: The 2014 Revision, Highlights. (ST/ESA/SER.A/352) United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2014.

## **ANEXO 4**

### **RECURSOS ELECTRÓNICOS DESTACADOS**

- Actualidad Jurídica Ambiental:  
<http://www.actualidadjuridicaambiental.com/>
- American Institute of Biological Sciences:  
<http://www.aibs.org/home/index.html>
- American Journal of Preventive Medicine:  
<http://www.ajpmonline.org/>
- BioScience:  
<http://bioscience.oxfordjournals.org/>
- British Medical Journal:  
<http://www.bmj.com/>
- Código Penal de Finlandia:  
<http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1889/en18890039.pdf>
- Constitución Estado de Bolivia:  
<http://www.ncpe.org.bo/>
- Constitución República del Ecuador:  
[http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion\\_de\\_bolsillo.pdf](http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf)
- Diario La Ley:  
<http://diariolaley.laley.es/content/Inicio.aspx>
- DPI Cuántico Diario Ambiental:  
<http://dpicuantico.com/diario-dpi/>



- England and Wales Court of Appeal (Criminal Division) Decisions  
<http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Crim/>
- England and Wales High Court (Administrative Court) Decisions  
<http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/>
- Environmental Ethics:  
<https://pdcnet.org/enviroethics>
- Environmental Law Review:  
[https://law.lclark.edu/law\\_reviews/environmental\\_law/](https://law.lclark.edu/law_reviews/environmental_law/)
- European Court of Human Rights:  
<http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home>
- European Review of Organised Crime:  
<http://sgocnet.org/site/newsletter/>
- Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo:  
[http://www.mjusticia.gob.es/BUSCADIR/ServletControlador?apartado=buscarDetalleEnteG&ente=0000070011000&lang=es\\_es&origen=&tipo=](http://www.mjusticia.gob.es/BUSCADIR/ServletControlador?apartado=buscarDetalleEnteG&ente=0000070011000&lang=es_es&origen=&tipo=)
- Fundación Conama:  
<http://www.conama.org/web/index.php>
- Indret: Revista para el Análisis del Derecho  
<http://www.indret.com/es/>
- International Environmental Communication Association:  
<https://theieca.org/>
- International Institute of Social Studies in The Hague:  
<http://www.iss.nl/>

- International Journal for Crime, Justice and Social Democracy:  
<https://www.crimejusticejournal.com/>
  
- International Journal of Audiology:  
<http://www.internationaljournalofaudiology.com/>
  
- International Journal of Comparative Psychology:  
[https://escholarship.org/uc/uclapsych\\_ijcp](https://escholarship.org/uc/uclapsych_ijcp)
  
- International Ocean Noise Coalition:  
<https://awionline.org/content/international-ocean-noise-coalition>
  
- Journal of Cognitive Neuroscience:  
<http://www.mitpressjournals.org/loi/jocn>
  
- Journal of Environmental Protection:  
<http://www.SciRP.org/journal/jep>
  
- Journal of Geophysical Research Atmospheres:  
[http://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/agu/jgr/journal/10.1002/\(ISSN\)2169-8996/](http://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/agu/jgr/journal/10.1002/(ISSN)2169-8996/)
  
- Journal Trends in Ecology and Evolution:  
<http://www.cell.com/trends/ecology-evolution/home>
  
- Marine Pollution Bulletin:  
<http://www.journals.elsevier.com/marine-pollution-bulletin/>
  
- Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente:  
<http://www.magrama.gob.es/es/>
  
- Nature Scientific Reports:  
<http://www.nature.com/srep/>

- New Left Review Journal:  
<http://newleftreview.org/>
- Observatorio de la Sostenibilidad en España:  
<http://www.fgua.es/es/investigacion/centros-de-investigacion/ose>
- Organización marítima Internacional:  
<http://www.imo.org/es/Paginas/Default.aspx>
- PlosOne:  
<http://www.plosone.org/>
- Revista Actualidad Jurídica Ambiental:  
<http://www.actualidadjuridicaambiental.com/>
- Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología:  
<http://criminnet.ugr.es/recpc/>
- Revista Electrónica de Derecho Ambiental:  
<http://huespedes.cica.es/gimadus/>
- Revista Española de Investigación Criminológica:  
<http://reic.criminologia.net/>
- Revista Crítica de Derecho Inmobiliario:  
[www.revistacritica.es/](http://www.revistacritica.es/)
- Revista Oficial del Consejo General de Colegios Médicos de España:  
<http://www.cgcom.es/revista/archivo>
- Sistema Argentino de Información Jurídica:  
<http://www.infojus.gob.ar/>

- Southern Medical Journal:  
<http://sma.org/southern-medical-journal/>
- The American Journal of Psychiatry:  
<http://ajp.psychiatryonline.org/>
- The American Society of Criminology:  
<https://www.asc41.com/>
- The Breakthrough Journal:  
<http://thebreakthrough.org/journal>
- United States Environmental Protection Agency:  
<http://www2.epa.gov/aboutepa>
- World Health Organization:  
<http://www.who.int/en/>



## **ANEXO 5**

### **DETALLE DE VALORES DE LAS MEDICIONES**

**FECHA: 26/03/2013 martes. Día anterior al inicio de la tamborrada. Condiciones de normalidad -en adelante (CN)-**

---

26/03/2013 MAÑANA

Punto 1.- Plaza Iglesia (CN)

11:00h: 59,4 dB    11:05h: 52,6 dB    11:10h: 59, 2 dB

Punto 2.- Plaza de Santa Ana (CN)

11:17h: 62,1 dB    11:22h: 62,2 dB    11:27h: 66,2 dB

Punto 3.- C/Gran Vía (CN)

11:35h: 72,7 dB    11:40h: 67 dB    11:45h: 69 dB

---

26/03/2013 TARDE

Punto 1.- Plaza Iglesia (CN)

18:30h: 63,8 dB    18:35h: 62,2 dB    18:40h: 65, 3 dB

Punto 2.- Plaza de Santa Ana (CN)

18:45h: 77,2 dB    18:50h: 82,1 dB    18:55h: 79,6 dB

Punto 3.- C/Gran Vía (CN)

19:00h: 63,3 dB    19:05h: 69,7 dB    19:10h: 68,1 dB

---

26/03/2013 NOCHE

Punto 1.- Plaza Iglesia (CN)

23:10h: 71,1 dB    23:15h: 79,4 dB    23:20h: 80 dB

Punto 2.- Plaza de Santa Ana (CN)

23:25h: 70,9 dB    23:30h: 56 dB    23:35h: 64,6 dB

Punto 3.- C/Gran Vía (CN)

23:40h: 65,8 dB    23:45h: 66,2 dB    23:50h: 66,9 dB

**FECHA: 27/03/2013 miércoles. Apertura de la tamborrada, inicio estimado a partir de las 15:00 horas.**

---

27/03/2013 MAÑANA

Punto 1.- Plaza Iglesia (CN)

11:15h: 70,8 dB    11:20h: 68 dB    11:25h: 63 dB

Punto 2.- Plaza de Santa Ana (CN)

11:30h: 66,2 dB    11:35h: 70,6 dB    11:40h: 73,9 dB

Punto 3.- C/ Gran Vía (CN)

11:45h: 72,8 dB    11:50h: 71,2 dB    11:55h: 71 dB

---

27/03/2013 TARDE (Tamborrada)

Punto 1.- Plaza Iglesia (sin tráfico rodado)

18:45h: 105,5 dB    18:50h: 98,7 dB    18:55h: 103 dB

Punto 2.- Plaza de Santa Ana (sin tráfico rodado)

19:05h: 95,8 dB    19:10h: 101,7 dB    19:15h: 102,4 dB

Punto 3.- C/ Gran Vía (CN)

19:25h: 64,5 dB    19:30h: 69,3 dB    19:35h: 62,4 dB

---

27/03/2013 NOCHE (final de la jornada de Tamborrada)

Punto 1.- Plaza Iglesia (sin tráfico rodado)

23:00h: 98,3 dB    23:05h: 88,5 dB    23:10h: 87,7dB

Punto 2.- Plaza de Santa Ana (sin tráfico rodado)

23:15h: 96,6 dB    23:20h: 85,2 dB    23:25h: 82,6 dB

Punto 3.- C/ Gran Vía (CN)

23:30h: 67,9 dB    23:35h: 62,9 dB    23:40h: 67,5 dB

**FECHA: 28/03/2013 jueves. Tamborrada nocturna que transcurre entre las 24:00h y las 15:00h del día siguiente.**

---

28/03/2013 MAÑANA

Punto 1.- Plaza Iglesia (CN)

11:00h: 75,2 dB    11:05h: 70,5 dB    11:10h: 64,6dB

Punto 2.- Plaza de Santa Ana (CN)

11:15h: 64,3 dB    11:20h: 65,9 dB    11:25h: 69,7 dB

Punto 3.- C/ Gran Vía (CN)

11:35h: 63,7 dB    11:40h: 63,5 dB    11:45h: 67 dB

---

28/03/2013 TARDE

Punto 1.- Plaza Iglesia (CN)

19:00h: 71,2 dB    19:05h: 63,6 dB    19:10h: 60,2dB

Punto 2.- Plaza de Santa Ana (CN)

19:15h: 60,5 dB    19:20h: 63,3 dB    19:25h: 73,1 dB

Punto 3.- C/ Gran Vía (sin tráfico rodado, Cofradías)

19:30h: 81,8 dB    19:35h: 86 dB    19:40h: 89,7 dB

---

28/03/2013 NOCHE

Punto 1.- Plaza Iglesia (sin tráfico rodado, Cofradías)

23:00h: 75,3 dB    23:05h: 87,9 dB    23:10h: 81,1dB

Punto 2.- Plaza de Santa Ana (CN)

23:15h: 58,5 dB    23:20h: 58,4 dB    23:25h: 64,8 dB

Punto 3.- C/ Gran Vía (CN)

23:30h: 72,9 dB    23:35h: 68,7 dB    23:40h: 66,8 dB



**FECHA: 29/03/2013 viernes. Continuación de la Tamborrada iniciada la noche anterior, cuya duración se extiende hasta la finalización de la procesión de Viernes Santo, aproximadamente a las 16:00 horas.**

---

29/03/2013 MAÑANA

Punto 1.- Plaza Iglesia (sin tráfico rodado)

11:02h: 75,8 dB      11:07h: 72,5 dB      11:12h: 63,2dB

Punto 2.- Plaza de Santa Ana (CN)

11:18h: 61,2 dB      11:23h: 76 dB      11:28h: 69,8 dB

Punto 3.- C/ Gran Vía (CN)

11:33h: 78,8 dB      11:38h: 66,4 dB      11:43h: 68,2 dB

---

29/03/2013 TARDE

Punto 1.- Plaza Iglesia (CN)

19:02h: 77,7 dB      19:07h: 83,1 dB      19:12h: 82,2dB

Punto 2.- Plaza de Santa Ana (CN)

19:17h: 68,2 dB      19:22h: 64,8 dB      19:28h: 68,8 dB

Punto 3.- C/ Gran Vía (CN)

19:33h: 67,4 dB      19:38h: 72,5 dB      19:43h: 65,8 dB

---

29/03/2013 NOCHE

Punto 1.- Plaza Iglesia (sin tráfico rodado, Cofradías)

23:05h: 76,8 dB      23:10h: 88,9 dB      23:20h: 88,1dB

Punto 2.- Plaza de Santa Ana (CN)

23:25h: 61,7 dB      23:30h: 73,4 dB      23:35h: 57,9 dB

Punto 3.- C/ Gran Vía (CN)

23:40h: 72,5 dB      23:45h: 69,8 dB      23:50h: 71,9 dB

## **RANGO DE MEDICIONES REALIZADAS EN EL CASCO HISTÓRICO:**

FECHA: 29/03/2013 viernes

Plaza Iglesia 13:10h: 95,1 dB ➡ c/El Rabal 13:30h: 102,7 dB ➡ Plaza Europa  
13:35h: 100,7 dB

c/ Benito Toboso 13:40h: 113,7 dB ← c/El Rabal 14:40h: 110,5 dB ➡ c/ Benito  
Toboso 14:45h: 112,3 dB

**FECHA: 30/03/2013 sábado**

---

30/03/2013 MAÑANA

Punto 1.- Plaza Iglesia (CN)

11:05h: 69,7 dB      11:10h: 72,8 dB      11:15h: 74,8dB

Punto 2.- Plaza de Santa Ana (CN)

11:20h: 79,7 dB      11:20h: 64,1 dB      11:25h: 77,4 dB

Punto 3.- C/ Gran Vía (CN)

11:30h: 73,6 dB      11:35h: 69,4 dB      11:40h: 75 dB

---

30/03/2013 TARDE

Punto 1.- Plaza Iglesia (CN)

19:02h: 73,9 dB      19:07h: 72,6 dB      19:12h: 72,2dB

Punto 2.- Plaza de Santa Ana (CN)

19:17h: 71,3 dB      19:22h: 71,3 dB      19:27h: 68,4 dB

Punto 3.- C/ Gran Vía (CN)

19:33h: 75,4 dB      19:38h: 72,3 dB      19:43h: 73,8 dB

---

30/03/2013 NOCHE

Punto 1.- Plaza Iglesia (CN)

23:02h: 70,8 dB      23:07h: 76,2 dB      23:12h: 74,2dB

Punto 2.- Plaza de Santa Ana (CN)

23:17h: 56,2 dB      23:22h: 71,9 dB      23:27h: 65 dB

Punto 3.- C/ Gran Vía (CN)

23:32h: 65,7 dB      23:37h: 74,1 dB      23:42h: 75,7 dB

**FECHA: 31/03/2013 domingo. Jornada de tamborrada que comienza en horario nocturno de sábado, y continúa durante la mañana del domingo, coincidente con la procesión de Domingo de Resurrección.**

---

30/03/2013 MAÑANA

Punto 1.- Plaza Iglesia (sin tráfico rodado)

11:02h: 103,5 dB      11:07h: 103,4 dB      11:12h: 102,6 dB

Punto 2.- Plaza de Santa Ana (sin tráfico rodado)

11:18h: 85,7 dB      11:23h: 89,2 dB      11:28h: 90,9 dB

Punto 3.- C/ Gran Vía (CN)

11:33h: 86,1 dB      11:38h: 86,4 dB      11:43h: 86,6 dB